



**TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA.**

PRIMERA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR.

JUICIO DE ATRACCIÓN.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

AUTORIDAD DEMANDADA:
ADMINISTRADORA DE LO CONTENCIOSO DE
GRANDES CONTRIBUYENTES "5" DEL SERVICIO
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

MAGISTRADO PONENTE:
LIC. RAFAEL ANZURES URIBE.

SECRETARIO:
LIC. JAVIER ARMANDO ABREU CRUZ.

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

V I S T O S los autos para resolver el juicio contencioso
administrativo al rubro citado y;

R E S U L T A N D O S:

1º.- Mediante escrito presentado el día **13 de mayo de 2015**, en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, compareció el **C. ******* en representación legal de la empresa ***** a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 900 04 05-2015-17797 de 19 de febrero de 2015, mediante la cual la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5" del Servicio de Administración Tributaria, resolvió el recurso de revocación y confirmó la diversa contenida en el oficio número 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, a través de la cual, la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente del Servicio de Administración Tributaria, le determinó un crédito fiscal por la cantidad de \$2,636'428,880.12 por concepto de Impuesto sobre la Renta, actualización, recargos y multas, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006.

El presente asunto quedó radicado con el número de expediente 12140/15-17-11-5, en la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México.

2°.- Por proveído de fecha **1° de julio de 2015**, la entonces Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda; así como, las pruebas ofrecidas en el capítulo correspondiente de la demanda, por lo que ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación a la demanda dentro del término de ley; asimismo, le requirió para que una vez que contestara la demanda, exhibiera copia certificada debidamente foliada del expediente administrativo del cual derivó la resolución impugnada, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrían por ciertos los hechos que la demandante pretendiera probar, salvo que por hechos notorios o por las pruebas rendidas éstos quedaran desvirtuados.

En cuanto a la prueba marcada con el numeral II ofrecida en el capítulo correspondiente de la demanda, consistente en la pericial en materia de contabilidad, requirió a la autoridad demandada para que a más tardar al momento de producir su contestación a la demanda, señalara perito de su parte en materia contable y en su caso adicionara el cuestionario ofrecido por la actora, bajo el apercibimiento que en caso de no designarlo, sólo se consideraría el dictamen que en su caso presentara el perito de la accionante.

3°.- Mediante acuerdo de fecha **2 de julio de 2015**, las Magistradas integrantes de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, atendiendo a lo previsto por el artículo 48, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, advirtieron que el presente asunto tiene un valor controvertido superior a cinco mil veces el salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal (hoy Ciudad de México), elevado al año, vigente al momento de la resolución impugnada; por lo que, ordenaron girar atento oficio al Magistrado Presidente de este Tribunal, para solicitarle se ejerciera la facultad de atracción del juicio al rubro citado, y para tal efecto, remitieron copia de la demanda, de la resolución impugnada y del acuerdo de admisión de demanda de fecha 1° de julio de 2015.

4°.- Por auto de fecha **2 de septiembre de 2015**, el entonces Magistrado Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, dio cuenta del oficio número 17-11-2-42536/15 de fecha 2 de julio de 2015 a través del cual la entonces Magistrada Presidenta de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, solicitó se ejerciera la facultad de atracción respecto del juicio 12140/15-17-11-5; sin embargo, en virtud de que la Sala Regional de referencia fue omisa en acompañar a su oficio los documentos indispensables para el estudio de la solicitud de atracción, ordenó girar atento oficio a la Sala Regional en cuestión, solicitando remitiera a la brevedad copia certificada de la resolución impugnada contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797 y la diversa contenida en el oficio 900-05-2013-48229, asimismo, que informara el estado procesal del juicio y precisara cuál fue la última actuación dictada en el mismo y una vez que fueran remitidas las documentales antes referidas, se estaría en posibilidad de entrar al estudio del posible ejercicio de la facultad de atracción.

5°.- A través de acuerdo de fecha **9 de octubre de 2015**, la entonces Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, tuvo por recibido el oficio ATR-1aS-132/15 de fecha 2 de septiembre de 2015, por medio del cual la Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, solicitó copia certificada de: la resolución impugnada contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797, así como la diversa contenida en el oficio número 900-05-2013-48229, y solicitó se le informara el estado procesal del juicio, así como la última actuación dictada en el mismo.

Por lo que, remitió las documentales antes referidas e indicó que con relación al estado procesal del presente juicio, la Sala Regional en cita, se encontraba a la espera de la contestación a la demanda, pues el acuerdo admisorio correspondiente, fue notificado a la autoridad demandada el 11 de agosto de 2015, además, informó que la última actuación dictada en el presente asunto fue el acuerdo de admisión de demanda de fecha 7 de julio de 2015.

6°.- Mediante acuerdo de fecha **13 de octubre de 2015**, el entonces Magistrado Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, advirtió que la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Órgano Jurisdiccional, con sede en la Ciudad de México, no había dado respuesta a lo solicitado en el oficio ATR-1aS-132/15; por lo que, ordenó girar atento oficio a la Sala Regional de referencia, solicitando por segunda ocasión remitiera urgentemente a esta Primera Sección de referencia, la resolución impugnada contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797 y la diversa contenida en el oficio 900-05-2013-48229, asimismo, que informara el estado procesal del juicio y precisara cuál fue la última actuación dictada en el mismo, y una vez que fueran remitidas las documentales antes referidas, se estaría en posibilidad de entrar al estudio del posible ejercicio de la facultad de atracción, o bien, informara el impedimento legal que tuviera para ello.

7°.- Por auto de fecha **28 de octubre de 2015**, el entonces Magistrado Presidente de la Primera Sección de este Órgano Jurisdiccional, dio cuenta del oficio número 17-11-2-58619/15 de fecha 9 de octubre de 2015, mediante el cual la entonces Presidenta de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, comunicó el acuerdo dictado en el juicio 12140/15-17-11-5 por el que remitió las constancias solicitadas mediante el oficio ATR-1aS-132/15; por lo que, tuvo por cumplida la remisión solicitada en el requerimiento mencionado (Resultando 4°).

Al respecto, ejerció la facultad de atracción del juicio al rubro citado, por tratarse de un asunto con características especiales, en virtud de que la cuantía total del asunto asciende a \$2,636'428,880.12; en consecuencia, ordenó girar atento oficio a la Sala Regional de referencia enviando copia del acuerdo de mérito a fin de que procediera a su notificación personal a las partes, y una vez cerrada la instrucción, remitiera el expediente principal debidamente integrado y foliado, para su resolución por la Sección que en turno correspondiera.

8°.- A través de acuerdo de fecha **4 de noviembre de 2015**, la entonces Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, tuvo por recibido el oficio SGA-1aS-4247/15 de fecha 28 de octubre de 2015, por medio de la cual la Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal informó que se ejerció la facultad de atracción del

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 5 -

juicio 12140/15-17-11-5 por tratarse de un asunto con características especiales; al respecto, comunicó a las partes la facultad de atracción ejercida por la Sala Superior de este Tribunal, por lo que les requirió para que en el término de 5 días señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en el entonces Distrito Federal, así como para que designaran personas autorizadas para recibir las, y en el caso de la demandada, para que señalara a su representante en el mismo, bajo el apercibimiento que en caso de omisión, la resolución y las actuaciones diversas que dictara la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, serían notificadas en el domicilio que obrara en autos, teniendo como autorizadas y delegadas a las personas ahí indicadas.

9°.- Por diverso auto de fecha **4 de noviembre de 2015**, la entonces Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, tuvo por recibido el oficio SGA-1aS-3883/15 de fecha 13 de octubre de 2015, por medio del cual la Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, solicitó por segunda ocasión copia certificada de la resolución impugnada contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797 y la diversa contenida en el oficio 900-05-2013-48229, asimismo, se informara el estado procesal del juicio y precisara cuál fue la última actuación dictada en el mismo; por lo que, ordenó girar atento oficio a la Primera Sección de referencia, informando que la Sala Regional en cita mediante oficio número 17-11-2-58619/15 de fecha 9 de octubre de 2015, remitió la documentación e información solicitada, sin que considerara necesario volver a remitir lo peticionado o informar lo requerido, toda vez que por diverso oficio SGA-1aS-4247/15, dicha Sección comunicó el ejercicio de la facultad de atracción del presente asunto, de lo que se dio cuenta en la instrucción.

10°.- Mediante proveído de fecha **5 de noviembre de 2015**, la entonces Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del oficio número 900 04 05-2015-58541 de fecha 14 de octubre de 2015, a través del cual la autoridad demandada en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, formuló su contestación a la demanda,

exhibiendo copias certificadas de los expedientes administrativos que dieron origen a la resolución impugnada, así como designando perito en materia contable de su parte, anexando cuestionario para desahogar la prueba pericial, objetando el alcance y valor probatorio de dicha probanza; por lo que se tuvo por contestada la demanda en términos del citado oficio y por ofrecidas y admitidas las pruebas que se indican en el capítulo correspondiente; en consecuencia se le corrió traslado a la parte actora para los efectos legales correspondientes.

Asimismo, se tuvieron por cumplimentados los requerimientos formulados a la autoridad demandada en auto de fecha 1° de julio de 2015 (Resultando 2°), en virtud de que exhibió el expediente administrativo del cual derivó el acto impugnado y designó perito contable de su parte, por lo que se dejaron sin efectos los apercibimientos decretados en dicho auto, asimismo, se requirió a las partes para que en el término de diez días hábiles presentaran a sus peritos, a fin de que acreditaran que reunían los requisitos correspondientes, aceptaran el cargo y protestaran su legal desempeño, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento sólo se consideraría el peritaje de quien cumplimentara el requerimiento.

Finalmente, por lo que hace a las manifestaciones de la autoridad respecto al alcance y valor probatorio de la prueba pericial en materia contable, estimó infundadas las mismas, considerando que la objeción, no es la vía idónea para impugnar la admisión de la prueba pericial en cita.

11°.- A través de acuerdo de fecha **17 de noviembre de 2015**, el entonces Magistrado Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, dio cuenta del oficio número 900 04 05-2015-62344 de fecha 29 de octubre de 2015, a través del cual la autoridad demandada solicitó se ejerciera la facultad de atracción del presente juicio; por lo que, indicó a la autoridad promovente que se estuviera a lo acordado en el diverso proveído de fecha 28 de octubre de 2015 (Resultando 7°), mediante el cual se ejerció la facultad de atracción del presente juicio, lo cual se hizo del conocimiento a la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, por tanto una vez cerrada la instrucción, dicha Sala Regional debería remitir el mismo para su resolución por la Sección que en turno correspondiera.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 7 -

Por otra parte, respecto al domicilio y autorizados precisados en el oficio de referencia, señaló no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, toda vez que no habían sido recibidos los autos del juicio de origen, y se reservó acordar lo solicitado para el momento procesal oportuno.

12°.- Mediante Acta de comparecencia de fecha **25 de noviembre de 2015**, la entonces Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, hizo constar la comparecencia del perito en materia contable designado por la actora, aceptando el cargo conferido y protestando su legal desempeño.

En consecuencia, requirió al perito de la parte actora para que en el plazo de 15 días rindiera y ratificara su dictamen, con el apercibimiento de que de no hacerlo, se consideraría únicamente el dictamen que en su caso rindiera el perito de la autoridad.

13°.- Mediante diversa Acta de comparecencia de fecha **3 de diciembre de 2015**, la entonces Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, hizo constar la comparecencia de la perito en materia contable designada por la autoridad demandada, aceptando el cargo conferido y protestando su legal desempeño.

En consecuencia, requirió a la perito de la autoridad para que en el plazo de 15 días rindiera y ratificara su dictamen, con el apercibimiento de que de no hacerlo, se consideraría únicamente el dictamen que en su caso rindiera el perito de la actora.

14°.- Por auto de fecha **13 de enero de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del oficio número 900 09 05-2015-67242 de fecha 30 de noviembre de 2015, así como del escrito de fecha 2 de diciembre de 2015, a través de los cuales la autoridad demandada y la actora respectivamente, cumplieron en tiempo y forma el requerimiento

formulado mediante proveído de fecha 4 de noviembre de 2015 (Resultando 8°), señalando para tal efecto domicilio para oír y recibir notificaciones y designando autorizados y delegados, según corresponde, por lo tanto, dejó sin efectos el apercibimiento decretado en el auto de referencia y tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de las partes el señalado por éstas en el escrito y en el oficio de cuenta, según corresponde, y por autorizados a las personas en ellos indicados, para los efectos legales a que hubiera lugar.

15°.- A través de proveído de fecha **14 de enero de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del escrito de fecha 5 de enero de 2016, por medio del cual la actora formuló su ampliación a la demanda; al respecto, tuvo por ampliada la demanda de la accionante y ordenó correr traslado a la autoridad demandada del escrito de ampliación, para que en el término de ley formulara su contestación a la ampliación a la demanda.

16°.- Por diverso acuerdo de fecha **14 de enero de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta de los escritos de fecha 5 de enero de 2016, a través de los cuales la actora así como su perito, solicitaron prórroga a fin de estar en condiciones de rendir y ratificar el dictamen correspondiente, en virtud de que el asunto de que se trata se estima complejo y voluminoso, lo cual imposibilita al perito a rendir el dictamen de mérito en el tiempo concedido.

Por lo que, por única ocasión, concedió al perito de la parte actora un término adicional de 10 días hábiles para la rendición de su dictamen.

17°.- Mediante auto de fecha **15 de enero de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del oficio número 900 09 05-2016-929 de fecha 6 de enero de 2016, por medio del cual la autoridad demandada revocó a los delegados autorizados con anterioridad y designó a otros; por lo tanto, tuvo por revocada la autorización de los delegados designados por la demandada con anterioridad y por autorizados a los nuevos delegados señalados en el oficio de mérito, en términos del artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

18°.- Por acuerdo de fecha **22 de febrero de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del escrito de fecha 3 de febrero de 2016, a través del cual la parte actora solicitó copia del dictamen pericial rendido por la perito de la autoridad demandada, así como la autorización de medios electrónicos para tomar fotografías del expediente al rubro citado; al respecto, expidió a costa del promovente la copia solicitada, previo pago de derechos que debió efectuar.

Y respecto a la autorización de medios electrónicos señaló que debería estarse al contenido de los lineamientos para el uso de instrumentos electrónicos portátiles en la consulta de expedientes de juicios contenciosos administrativos que se tramitan en el Tribunal, contenidos en el Acuerdo G/JGA/6/2015 de la Junta de Gobierno y Administración.

19°.- A través de diverso proveído de fecha **22 de febrero de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Órgano Jurisdiccional, dio cuenta de los escritos presentados los días 13 y 29 de enero de 2016 en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, por medio de los cuales la perito de la actora así como el de la autoridad demandada, respectivamente, rindieron su dictamen pericial en materia contable; por lo que, tuvo por rendidos los dictámenes de los peritos de las partes.

Asimismo, advirtió que los dictámenes rendidos por los peritos de las partes son discordantes entre sí, por lo tanto, propuso perito tercero en discordia. Al respecto, turnó los autos del expediente en que se actúa a dicha Sala Regional Metropolitana, a efecto de que en su calidad de Órgano Colegiado, de considerarlo conducente, designara a la perito tercero en discordia.

20°.- Mediante auto de fecha **1° de marzo de 2016**, los Magistrados integrantes de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana

de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, advirtieron que mediante proveído de fecha 3 (sic) de febrero de 2016 (Resultando 19°), la Magistrada Instructora propuso perito tercero en discordia en materia de contabilidad; por lo que, aceptaron la propuesta realizada y en consecuencia, designaron como perito tercero en discordia a la C. Rosa María Rivera Ortiz, ordenando notificar en el domicilio que tuviera registrado ante la Unidad de Peritos de este Tribunal.

En tal virtud, ordenaron devolver a la instrucción los autos del expediente en que se actúa, para que proveyera lo conducente acerca de la aceptación, la protesta del cargo y la formulación del dictamen correspondiente.

21°.- Por diverso proveído de fecha **1° de marzo de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, ordenó notificar personalmente a la C. Rosa María Rivera Ortiz el auto de mérito, así como el diverso de fecha 1° de marzo de 2016 (Resultando 20°), a efecto de informarle que había sido designada como perito tercero en el presente asunto, en relación con la prueba pericial en materia contable ofrecida por la actora en su demanda, asimismo, le requirió para que dentro del plazo de 10 días hábiles, aceptara el cargo que le fue conferido y protestara su legal desempeño, bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se comunicaría lo anterior a la Junta de Gobierno y Administración, por conducto de la Unidad de Peritos de éste Órgano Jurisdiccional.

22°.- A través de diverso acuerdo de fecha **1° de marzo de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del oficio número 900 09 05-2016-2132 de fecha 15 de febrero de 2016, mediante el cual la autoridad formuló su contestación a la ampliación de la demanda y designó delegados; al respecto, tuvo por contestada la ampliación de demanda en los términos planteados en el oficio de referencia y por otra parte, tuvo por autorizados a los delegados designados en el oficio de cuenta.

Finalmente, se reservó conceder a las partes el término de ley para que formularan alegatos, hasta en tanto la perito tercero rindiera el dictamen que le fuera requerido.

23°.- Mediante Acta de comparecencia de fecha **29 de marzo de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, hizo constar que la perito tercero en discordia en materia contable, aceptó el cargo conferido y protestó su legal desempeño.

En consecuencia, requirió a la perito tercero para que en el plazo de 15 días rindiera y ratificara su dictamen, con el apercibimiento de que de no hacerlo, se comunicaría lo anterior a la Junta de Gobierno y Administración, por conducto de la Unidad de Peritos de éste Órgano Jurisdiccional.

24°.- Por auto de fecha **13 de abril de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del oficio número 900 09 05-2016-4716 de fecha 6 de abril de 2016, por medio del cual la autoridad demandada revocó a los delegados autorizados con anterioridad y designó otros; por lo que, tuvo por revocada la autorización de los delegados designados por la autoridad con anterioridad y por autorizados a los nuevos delegados señalados en el oficio de mérito.

25°.- A través de proveído de fecha **2 de mayo de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta de los escritos de fechas 19 y 27 de abril de 2016, mediante los cuales la perito tercero en discordia en materia contable, en el primero de los escritos manifestó su imposibilidad para rendir el dictamen correspondiente, solicitando una prórroga para tales y efectos, y en el segundo, rindió su dictamen pericial en materia contable.

Por lo que, respecto al escrito de fecha 19 de abril de 2016, indicó a la perito que de conformidad con el artículo 43, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se acordó de conformidad con su solicitud; en cuanto al escrito de fecha 27 de abril de 2016,

tuvo por rendido el dictamen de referencia, el cual indicó, sería tomado en cuenta en el momento procesal oportuno.

Finalmente, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, ni recursos o incidentes por resolver, concedió a las partes el plazo de 5 días para que formularan sus alegatos por escrito.

26°.- Mediante acuerdo de fecha **11 de mayo de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del escrito de fecha 9 de mayo de 2016, por medio del cual la parte actora por conducto de su autorizado, solicitó copias simples del dictamen pericial rendido por la autoridad demandada así como por la perito tercero en discordia y autorizó a diversas personas.

Por lo tanto, en relación a la solicitud de copias del dictamen pericial rendido por el perito de la autoridad, indicó al promovente que debería estarse a lo acordado por proveído de 22 de febrero de 2016 (Resultando 18°), a través del cual se acordó de conformidad la expedición de dicha copia.

Finalmente, en relación a la petición de la copia simple del dictamen rendido por la perito tercero en discordia, ordenó expedir a costa de la promovente las copias simples solicitadas, previo pago efectuado.

27°.- Por auto de fecha **13 de mayo de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del oficio número 900 09 05-2016-6740 de fecha 11 de mayo de 2016, a través del cual la autoridad demandada solicitó copia simple de los dictámenes periciales rendidos por el perito de la actora y por la perito tercero, ambos en materia de contabilidad; por lo que, informó a la promovente que las documentales solicitadas obran dentro del expediente citado al rubro, el cual quedó a su disposición previa toma de razón que dejara asentada en autos.

28°.- A través de diverso proveído de fecha **13 de mayo de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del oficio número 900 09 05-2016-6739 de fecha 11 de mayo de 2016, por

medio del cual la autoridad demandada formuló sus alegatos, por lo que se tuvo por formulados los mismos para los efectos legales conducentes.

29°.- Mediante acuerdo de fecha **23 de mayo de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del escrito de 20 de mayo de 2016, por medio del cual la perito tercero en discordia manifestó que el 27 de abril de 2016 cumplimentó el requerimiento que le fue formulado mediante proveído de 29 de marzo de 2016 (Resultando 23°).

Por lo tanto, toda vez que mediante auto de fecha 2 de mayo de 2016 (Resultando 25°) tuvo por rendido el dictamen de la perito tercero en discordia, ordenó enviar atento oficio al Titular de la Unidad de Peritos de este Tribunal, haciendo de su conocimiento que el dictamen pericial en materia contable rendido y ratificado por la promovente fue presentado oportunamente, para lo cual, acompañó copia simple del acta de protesta de cargo y del dictamen en comento, a efecto de que se realizaran las gestiones necesarias a fin de cubrir el pago de honorarios correspondiente.

30°.- Por auto de fecha **27 de mayo de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, dio cuenta del escrito de fecha 26 de mayo de 2016, por medio del cual la parte actora formuló sus alegatos, por lo que se tuvieron por formulados los mismos para los efectos legales conducentes.

31°.- A través de acuerdo de fecha **30 de mayo de 2016**, la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, declaró cerrada la instrucción en el presente juicio.

32°.- Mediante proveído de fecha **31 de mayo de 2016**, los Magistrados integrantes de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 23, fracción II de la Ley Orgánica del entonces Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa y 48, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, remitieron mediante atento oficio a la Secretaría Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, los autos del juicio de nulidad 12140/15-17-11-5, para que se sirviera turnar los autos del expediente en que se actúa al Magistrado ponente que por turno corresponda conocer, solicitando acuse de recibo respectivo.

33°.- Por auto de fecha **15 de junio de 2016**, la Magistrada Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, tuvo por recibido el oficio número 17-11-2-31223/16 de fecha 31 de mayo de 2016, a través del cual la Presidenta de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Órgano Jurisdiccional, comunicó el acuerdo por el que remite a esta Sala Superior los autos del juicio 12140/15-17-11-5 para que se dicte la resolución correspondiente; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenó turnar los autos al Magistrado **Rafael Anzures Uribe**, a quien designó como Ponente para que formule el proyecto de sentencia respectivo ante la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, en consecuencia mediante atento oficio que se giró a la referida Sala Regional Metropolitana se acusó el recibo de estilo.

Asimismo, toda vez que dicha Sala fue omisa en remitir los 12 legajos del expediente administrativo exhibido por la autoridad demandada al dar contestación a la demanda, según consta en el sello de recepción estampado en el oficio 900 04 05-2015-58541, mismo que se tuvo por exhibido mediante proveído de 5 de noviembre de 2015, solicitando se enviara dicha actuación a la brevedad, para la resolución del juicio contencioso administrativo al rubro citado, o bien, informara el impedimento legal que tuviera para ello.

34°.- Mediante acuerdo de fecha **5 de agosto de 2016**, la Magistrada Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, dio cuenta del oficio 900 09 05-2016-9024 de fecha 5 de julio de 2016, a través del cual la autoridad demandada revocó a todos los delegados designados con antelación al presente oficio y designó nuevos delegados; por lo que, tuvo por revocados a los delegados señalados con antelación a la presentación del oficio de cuenta, y por otra parte, tuvo como delegados a las personas que menciona para tal efecto.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 15 -

35°.- A través de proveído de fecha **16 de agosto de 2016**, la Magistrada Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, dio cuenta del oficio número 17-11-2-42716/16 de fecha 1° de agosto de 2016, por medio del cual la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento al acuerdo de 15 de junio de 2016 (Resultando 33°), remitió los 12 legajos del expediente administrativo exhibido por la autoridad demanda al dar la contestación a la demanda; al respecto, ordenó girar atento oficio a la Sala Regional de referencia acusando de recibido las actuaciones enviadas.

Asimismo, toda vez que mediante acuerdo de 17 de noviembre de 2015 (Resultando 11°) se reservó acordar lo conducente respecto de la designación de delegados y domicilio señalados por la autoridad demandada en su oficio 900 04 05-2015-62344 de fecha 29 de octubre de 2015, hasta en tanto se tuviesen los autos originales del juicio que nos ocupa; tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el señalado en el oficio de referencia. Por otra parte, señaló que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado respecto a la designación de delegados, ya que mediante auto de 5 de agosto de 2016 (Resultando 34°) tuvo por revocados a los delegados señalados con antelación al oficio de cuenta.

Finalmente, en razón de que no existe cuestión pendiente que acordar y al encontrarse debidamente integrado el juicio en que se actúa, turnó los autos a la ponencia respectiva, para que formule el proyecto de resolución que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con los artículos 14, fracciones I y XII y

23, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007; **en términos de lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2016; y sexto párrafo del artículo quinto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016, dichos preceptos legales a la letra establecen lo siguiente:**

“ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. Las dictadas por las autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

(...)

XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

(...)”

““ARTÍCULO 23.- Son facultades de las Secciones, las siguientes:
(...)”

II. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables;...”

(...)”

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

(PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JULIO DE 2016).

TRANSITORIOS

“(...)”

Quinto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 17 -

presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en los párrafos siguientes.
(...)

Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
(...)"

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2016)

TRANSITORIOS

"(...)

Segundo. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente Ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.

(...)"

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada así como de la originalmente recurrida, han quedado debidamente acreditadas en autos, en virtud de la exhibición que de las mismas realiza la parte actora y por el reconocimiento expreso que de ellas, hace la autoridad al producir su contestación a la demanda, de conformidad con los artículos 15, fracción III y 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y los diversos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

TERCERO.- Esta Juzgadora procede al análisis y resolución en conjunto de los conceptos de impugnación **sexto, séptimo y octavo** de la demanda, en relación con el **único** concepto de impugnación de la ampliación de demanda, en los cuales la actora argumenta lo siguiente:

DEMANDA

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN RELACIÓN A QUE LAS
RESOLUCIONES IMPUGNADAS SON FRUTO DE UN PROCEDIMIENTO DE
FISCALIZACIÓN VICIADO DE ORIGEN

SEXTO. VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 48, 134 Y 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En el presente concepto de impugnación se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, al haber sido fruto de un procedimiento de fiscalización viciado de origen, por lo que deberá declararse su nulidad al actualizarse la causal de nulidad prevista en las fracciones I, II y III del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

A. En primer lugar, es necesario recordar que el procedimiento administrativo de fiscalización a nivel federal, previsto en los artículos 42 y siguientes del



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 19 -

139

Código Fiscal de la Federación, constituye el conjunto de actos a través de los cuales el fisco federal ejerce sus facultades de comprobación y verifica el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, los obligados solidarios y los terceros con ellos relacionados y, en su caso, determina las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, a través de una liquidación y en general cualquier inobservancia o incumplimiento de las obligaciones fiscales a que estén compelidos.

Cabe destacar que dicho procedimiento se compone generalmente de dos fases, la primera de las cuales consiste en el ejercicio de cualquiera de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, cuyo objetivo es arribar al conocimiento de hechos u omisiones que constituyan incumplimiento a las disposiciones fiscales; mientras que la segunda etapa consiste en la calificación jurídica de tales hechos u omisiones por parte de la autoridad hacendaria:

"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate.

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en

140

materia del registro federal de contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal propiedad o posesión de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contengan dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código.

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.

VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.

VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.

VIII. Allogarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querrela o declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la Ley relativa concede a las actas de la policía judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III y IV de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.

La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión."

Así, conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades cuentan con facultades discrecionales para comprobar que los

contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados, cumplan con sus obligaciones tributarias mediante la práctica, entre otras acciones, de visitas domiciliarias, revisiones de dictámenes fiscales y revisiones de gabinete o de escritorio.

Sin embargo, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalar que tales actuaciones están sujetas a la garantía de inviolabilidad del domicilio y demás formalidades que consagra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución prevé que la actuación de la autoridad hacendaria en la práctica de las visitas domiciliarias debe ajustarse a las formalidades prescritas para los cateos, así como a lo establecido por las leyes fiscales respectivas, tal como se desprende de su transcripción:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(...)

"En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

(...)

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos."

(...)

De lo anterior, tenemos que los principios que rigen la actuación de la autoridad administrativa en la práctica de las visitas domiciliarias, y en general a cualquier procedimiento de fiscalización, son los siguientes:

a) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito.

b) El mandamiento debe ser emitido por autoridad competente, fundar y motivar la causa legal del procedimiento, expresar el lugar que ha de inspeccionarse, señalar la persona o personas a las cuales se dirige y precisar el objeto de la visita.

142

c) Debe levantarse un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos, los cuales serán designados por el visitado y únicamente en su ausencia o ante su negativa, la autoridad que practique la diligencia podrá designarlos.

d) Que la autoridad se sujete a lo dispuesto por las leyes respectivas.

En relación al último requisito citado, en los artículos 38, 43, 44, 45, 46, 46-A, 47, 48, 49 y 52-A del Código Fiscal de la Federación se prevén los requisitos y formalidades que las autoridades hacendarias deben de acatar al momento de ejercer sus facultades de comprobación, exigencias cuyo incumplimiento evidentemente tendría como consecuencia que el procedimiento de fiscalización se encuentre viciado y por ende su resultado sea ilegal.

En este contexto, por lo que respecta a la revisión de dictamen fiscal, el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 48 del mismo ordenamiento, prevé los requisitos y formalidades para el inicio y desarrollo del procedimiento de fiscalización ejercido directamente con el contribuyente que dictamina sus estados financieros mediante contador público registrado.

Así, por lo que respecta a la notificación correspondiente a la solicitud de información y documentación formulada al contribuyente así como a la correspondiente al oficio de observaciones, la autoridad debe de acatar las reglas previstas en los artículos 48, fracciones I y VI, 134, fracción I, y 137 del Código Fiscal de la Federación, mismos que a la letra disponen:

"Artículo 48.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del presente ordenamiento, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en el lugar donde éstas se encuentren.

...

VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

(...)

ACTORA:

- 21 -

143

"Artículo 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán:

I. Personalmente o por correo certificado o electrónico, con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.
(...)

"Artículo 137.- Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.

Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este Código."

Del contenido de los artículos transcritos con antelación, se advierte con claridad que la notificación de la solicitud de información y documentación formulada al contribuyente así como al del oficio de observaciones necesariamente deben hacerse personalmente, siguiéndose todas y cada una de las formalidades previstas en el Código Fiscal de la Federación, de cuya lectura se desprenden las siguientes formalidades que deben de seguirse por el notificador:

a) El notificador deberá de presentarse en el domicilio del contribuyente en el domicilio que se encuentre señalado en el oficio a notificar, el cual de conformidad, en lo dispuesto en el artículo 136, segundo párrafo del Código Tributario Federal, debe ser el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de dicho Código.

b) Al presentarse en el domicilio debe de cerciorarse que se encuentra efectivamente en el lugar en que debe de practicar la notificación, debiendo de circunstanciar la manera o elementos que le permitieron arribar a la conclusión de que se encontraba en el domicilio correcto;

c) Debe requerir la prosencia de la persona con la que se debe entender la notificación o con su representante legal, lo que implica, desde luego, que debe de circunstanciar cómo fue que requirió la presencia de la persona a

144

notificar o de su representante legal, cómo fue que llegó a la conclusión de que no se encontraban ninguna de las dos personas con las que se podía practicar la notificación y si tal situación devino del dicho de una tercera persona, debe de asentar los datos identificatorios de dicha persona, con la finalidad de que el particular con el que se debe de practicar la notificación tenga plena seguridad jurídica de la manera en la que se practicó el acto de autoridad consistente en la notificación de diversos actos.

d) Si el notificador no encontrase a la persona con la que se deba de practicar la notificación personal o a su representante legal, dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio.

e) Al actuar como autoridad, al momento de iniciar la diligencia respectiva en la que deje el citatorio, el notificador debe circunstanciar que se identificó como funcionario de la dependencia que ordenó la práctica de la notificación personal, ante la persona con la que se deja el citatorio, así como también, debe de circunstanciar en el propio citatorio los datos de la identificación y la autoridad que emitió tal identificación a su favor;

f) Además de circunstanciar los datos relativos a su identificación, el notificador debe asentar en el citatorio mismo, que mostró la identificación a la persona en poder de quien se deja el citatorio y de qué ésta, se cercioró de que los datos y fotografía que se contenían en dicha identificación, efectivamente correspondían a la persona que practicaba en ese momento la diligencia;

g) Al dejarse citatorio, se deberá de circunstanciar la hora y la fecha en la que se deja dicho citatorio;

h) En el citatorio debe hacerse constar también, una hora fija en la que la persona con la que se deba de practicar la notificación personal o su representante legal en el día hábil siguiente, debe esperar al notificador;

i) Debe circunstanciarse los datos identificatorios de la persona con la que se deja el citatorio y la calidad con la que se ostenta y sólo en caso de que esta persona se negase a proporcionar alguna identificación, el notificador debe de asentar dicha situación, bajo so pena de que la diligencia se entienda ilegalmente practicada;

j) El citatorio, atendiendo a la garantía de legalidad y de seguridad jurídica, debe contener las firmas tanto del notificador como de la persona en poder de quien se deja el citatorio, salvo que esta última se negase a firmar, lo que invariablemente también debe de ser circunstanciado por el notificador en el propio citatorio.

k) El notificador debe de presentarse a la hora y día señalados en el citatorio para la práctica de la diligencia correspondiente;

l) El notificador de nueva cuenta, debe circunstanciar en el acta respectiva los elementos mediante los cuales se cercioró que estaba en el lugar

indicado, en el lugar donde debía de practicar la diligencia de notificación personal;

m) El notificador, tiene la obligación de requerir la presencia de la persona con la que se debe de atender la diligencia o con su representante legal y dejar asentada dicha situación en el acta respectiva;

n) En caso de que no se encontrarse la persona con la que deba de practicarse la diligencia o su representante legal, debe de circunstanciar cómo es que se cercioró de que ninguna de las personas indicadas se encontraba;

o) En caso de que el notificador se haya cerciorado de la ausencia de las personas indicadas para atender la diligencia de notificación personal por el dicho de un tercero, deberá de circunstanciar en el acta respectiva tal situación y proceder a solicitar la identificación de dicha persona, debiendo asentar en el acta los datos identificatorios de la misma, así como la calidad con la que se ostente;

p) Acto seguido, el notificador debe precisar con qué persona se practicará la notificación y el carácter con el que se ostenta, ya que la persona que le informa la ausencia de la persona que debía de atender al citatorio o de su representante puede ser distinta a la persona con quien se entienda la diligencia respectiva.

q) Una vez identificada la persona con la que se practicará la diligencia de notificación y la calidad con la que se ostenta, cuyos datos deben aparecer circunstanciados en el acta, entre ellos la identificación con la que se identifica, el número de folio, la precisión de que los rasgos físicos corresponden a los de la persona que el notificador tiene frente de él, si se trata de una identificación oficial o de tipo privado, de ser oficial el nombre de la dependencia que la expidió y el año en que fue expedida, así como todos aquellos datos que permitan su identificación plena y sólo en caso de que no tuviese identificación o se negase a proporcionarla, el notificador quedará relevado de dicha obligación, teniendo en todo caso la obligación de asentar en el acta respectiva tal situación.

r) Acto seguido el notificador deberá de identificarse con la persona con la que se practica la diligencia con la identificación oficial que lo acredite como funcionario de la dependencia que ordenó la práctica de la notificación debiendo circunstanciar tal situación, debiendo a su vez, asentar en el acta misma, el número de identificación su vigencia, el año en el que fue expedida y la autoridad que la expidió.

s) El notificador, debe asentar en el acta de notificación que proporcionó su identificación a la persona con la que se entendió la notificación y que esa se cercioró de que los datos establecidos y los rasgos fisonómicos del notificador coincidían plenamente.

t) Procederá a notificar los actos que deban de notificarse, señalando pormenorizadamente cada uno de los documentos en los que tales actos consten;

u) Una vez hecho lo anterior y satisfaciendo los requisitos propios del desarrollo de la notificación, debe dar por terminada la diligencia de notificación, procediendo a firmar el acta de notificación, debiendo constar las firmas tanto del notificador como de la persona con la que entendió la diligencia, a menos que esta última se negase a firmar, situación que debe en todo caso, quedar debidamente circunstanciada en el acta respectiva;

Así las cosas, si la diligencia de notificación no se realizó conforme a las formalidades anteriormente descritas, tenemos que la misma es ilegal, y por lo tanto, la resolución determinante que se dicte con motivo del procedimiento de fiscalización es ilegal al ser producto de actos viciados.

Al respecto, el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece las causales de nulidad de un acto administrativo, como se desprende de su transcripción:

"Artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trascendan al sentido de la resolución impugnada.

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.

V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades."

Por último, en caso de que un acto o diligencia de autoridad esté viciado, todos los actos que deriven de él o que de alguna forma se apoyen o estén condicionados en él, sufrirán del mismo vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad. Lo anterior, de conformidad con la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 23 -

147

"ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 504/75. Montacargas de México, S. A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de México, S. A. de C. V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja California, S. A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S. A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos."

Una vez expuesto lo anterior, a continuación se harán argumentos tendientes a evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, al derivar de un procedimiento de fiscalización viciado de origen, como lo es la ilegal notificación del citatorio y acta de notificación del inicio de facultades de comprobación, así como de la resolución determinante del crédito fiscal impugnado, además de diversas violaciones procesales a lo largo del procedimiento de fiscalización.

B. Ilegalidad de la notificación del citatorio de fecha 27 de junio de 2011 y acta de notificación del 28 de junio de 2011 correspondientes al oficio número 900 05-2011-385 mediante el cual se dio inicio a las facultades de comprobación, en virtud de que la diligencia de notificación no se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación.

En el presente apartado, se demostrará que tanto el citatorio de fecha 27 de junio de 2011 como el acta de notificación del 28 de junio de 2011, fueron efectuados en clara violación a lo dispuesto en los artículos 48, 134 y 136 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 16 de la Constitución, al no acatarse los requisitos y formalidades en dicho preceptos legales se prevén para las notificaciones personales.

B.1. El citatorio y acta de notificación se elaboraron sin haberse circunstanciado debidamente cómo fue que el notificador conoció que el representante legal de la contribuyente no se encontraba presente en el momento en que supuestamente se constituyó en el domicilio, a qué persona se requirió la presencia del representante legal, o bien quién o qué persona indicó al notificador que el representante legal no se encontraba presente.

Del análisis que esa H. Sala se sirva efectuar a las actuaciones que nos ocupan, se podrá percatar que éstas son ilegales pues no existe

148

circunstanciación alguna en relación con la manera en la que el notificador se cercioró de la no presencia del representante legal en el domicilio en el que debía de practicarse la diligencia de notificación y entrega de la solicitud de informes, datos y documentos.

Esto es, el notificador omitió señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, conforme a las cuales de manera indubitable llegó a la conclusión de que el representante legal de Grupo Elektra, S.A. de C.V. efectivamente no se encontraba en el domicilio.

Lo anterior, en la medida en la que en ni en el citatorio ni en el acta de notificación se señala a qué persona se le requirió o se le solicitó llamara al representante legal de la empresa destinataria de la solicitud, ni tampoco circunstanció quién fue la persona que le informó que el representante legal no se encontraba en domicilio, ello en virtud de que si bien es cierto pueden concurrir en un momento dado, la misma persona a la que se le solicitó la información sobre la presencia de la persona buscada puede ser la misma que en efecto haya informado sobre la no presencia, también lo es que tales circunstancias pueden haber recaído en diversas personas, situación que desde luego no se hace evidente dentro de las actuaciones que se impugnan, en perjuicio de mi representada.

No es obstáculo para llegar a la anterior conclusión, el hecho de que dentro del citatorio se haya señalado que se entregaron a la C. Aurelia Cleofas Ríos López en su carácter de "...tercero..." (hecho que en ningún momento se demostró), ya que de lo asentado, no se desprende que esa misma persona haya sido la persona a quien se le solicitó informara de la presencia o no del representante legal de la hoy empresa recurrente o que haya sido la persona que efectivamente le haya informado dicha situación, pues si bien tales circunstancias pueden concurrir en la misma persona que finalmente recibe materialmente los documentos, lo cierto es que tales circunstancias no pueden de manera alguna entrar dentro del campo de la suposición o inferencia, máxime cuando precisamente tales situaciones deben encontrarse debidamente circunstanciadas en el propio citatorio y acta de notificación a efecto de dotar al contribuyente de la mínima seguridad jurídica, con respecto a los pormenores suscitados durante la diligencia.

En relación con lo anterior, debe señalarse que el hecho de que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación permita que el citatorio se deje con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, no implica que dicha persona no deba guardar cierta relación con el contribuyente a efecto de que la misma se encuentre en plena aptitud de poder hacer entrega del mismo al propio contribuyente o a su representante legal, situación que desde luego corre a cargo del notificador que realice la diligencia respectiva, encontrándose obligado a asentar los datos o pormenores mediante los cuales se haya cerciorado de la existencia de tal vínculo en el propio documento en el que conste el citatorio, de manera circunstanciada.

Al respecto, cabe cuestionarse lo siguiente:

1. ¿Cómo fue que le supuesto notificador se cercioró de que el representante legal no se encontraba en el domicilio en el que debía de practicarse la notificación y entrega del oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011?

2. ¿Cómo fue que le supuesto notificador requirió la presencia del representante legal de la empresa contribuyente?

3. ¿A qué persona le solicitó la información sobre la presencia o no del representante legal o qué persona fue la que finalmente le informó que éste no se encontraba presente en ese momento en el domicilio?

Al respecto, resultaba trascendental la calidad del tercero que atendió la diligencia y la manera en que comprobó la relación con el contribuyente, pues de lo contrario entonces cómo se cercioró el notificador de la presencia o no del representante legal, y de encontrarse en el domicilio correcto?

Al no constar la respuesta a estas interrogantes en el citatorio y acta de notificación del oficio por el cual se dio inicio a las facultades de comprobación, es claro que los mismos no se encuentran debidamente circunstanciados en contravención a los artículos 48, 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación.

B.2. El citatorio de fecha 27 de junio de 2011 fue emitido para el efecto de que se esperara el día 28 del mismo mes y año al notificador y no para el efecto de que la persona citada acudiera a notificarse dentro del plazo de seis días a las oficinas de la autoridad fiscalizadora.

Si bien el artículo 137, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece una facultad discrecional, pues el notificador tiene la posibilidad de elegir entre citar a la persona para que aguarde en su domicilio el día siguiente a una hora fija o bien, para que acuda el contribuyente o su representante legal a notificarse dentro de los seis días siguientes a las oficinas de las autoridades fiscales, ello no permite a la autoridad a que actúe arbitrariamente, pues sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con relación a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tal y como podrá apreciar esa H. Sala de la lectura del citatorio de mérito, en ningún momento quedó motivado debidamente que el notificador hubiera razonado de forma alguna, los hechos y motivos que lo orillaron a considerar la conveniencia o inconveniencia de citar al contribuyente al día siguiente a una hora determinada y no citarlo para que acudiera a notificarse dentro de los seis días siguientes a la oficina de las autoridades fiscales, con lo cual se materializa la violación invocada al artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional.

B.3. En el citatorio de fecha 27 de junio de 2011 no se señaló expresamente la hora en que el mismo fue entregado al tercero con el cual se entendió la diligencia.

Del citatorio de fecha 27 de junio de 2011, se advierte que se hizo constar que quien efectuó la diligencia se apersonó en el domicilio a las 13:00 horas del día 27 de junio de 2011, sin embargo, no se asentó expresa y específicamente la hora en que se hizo entrega del citatorio al compareciente en dicha diligencia, situación que denota la ilegalidad del citatorio.

Lo anterior, ya que en acatamiento a la jurisprudencia número 2a./J. 75/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro **"NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE DEBE CONTENER LA HORA EN QUE SE ENTREGUE"**,¹⁷ es necesario que en el citatorio se asiente la hora en que se practicó la diligencia para determinarse si se cumplió con lo dispuesto en el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, pues de no efectuarse en los términos señalados, esa diligencia debe reputarse ilegal.

Tal omisión evidencia la total y rotunda violación a los artículos 48, fracción I, 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, y que trasciende en la esfera jurídica de mi representada, dado que se desconoce si el notificador al momento en que entregó el citatorio estaba actuando dentro del horario que expresamente señala el mencionado artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual se niega lisa y llanamente que el supuesto notificador que realizó la diligencia de citatorio de fecha 27 de junio de 2011 haya actuado en las horas hábiles.

B.4. No se circunstanció cómo es que el supuesto notificador se cercioró que el domicilio en que se apersonaba realmente correspondía al señalado en el oficio de requerimiento de informes, datos y documentos.

¹⁷ "NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE DEBE CONTENER LA HORA EN QUE SE ENTREGUE. Si bien el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, no exige terminantemente que en los citatorios se asiente la hora en que se entreguen, tal disposición no puede analizarse en forma aislada, sino en concordancia con los preceptos aplicables a las diligencias de notificación que contiene tal ordenamiento y debe observarse obligatoriamente para que los actos de autoridad puedan reputarse legales, por lo que al señalar el artículo 13 del propio ordenamiento que las diligencias que practiquen las autoridades fiscales deben efectuarse entre las 07:30 y las 18:00 horas por concepto de éstas como hábiles, es necesario que en el citatorio se asiente la hora en que se practicó la diligencia para determinarse si se cumplió con esta disposición, pues de no efectuarse en los términos señalados, esa diligencia debe reputarse ilegal.

SEGUNDO. TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 289/97. Constructora Gastélum, S.A. de C.V. 15 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Silvia Marinella Covian Ramírez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 502, tesis por contradicción 2a./J. 75/98 de rubro **"NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE DEBE CONTENER LA HORA EN QUE SE ENTREGUE"**.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 25 -

151

Tal y como esa H. Sala podrá advertir de la lectura de los documentos de mérito, el notificador sí bien hace constar que se apersonó en el domicilio ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] no menos cierto es que en dichos documentos no precisó la forma en la cual se cercióró que ese domicilio era el que realmente correspondía al domicilio señalado en el oficio de requerimiento, siendo por ende inadmisibles lo asentado en los mismos, dado que no es lógica ni jurídicamente factible que el notificador circunstancie el hecho de que se encontraba en un domicilio cuando antes no se cercióró que efectivamente el mismo correspondiera al fiscal de mi representada y al señalado en el requerimiento.

En este contexto, es clara la ilegalidad del citatorio de fecha 27 de junio de 2011 y el acta de notificación del 28 de junio de 2011, pues los mismos se encuentran indebidamente circunstanciados, dado que el supuesto notificador hace constar una afirmación (consistente en que se constituyó en un domicilio) sin indicar cómo es que conoció que el domicilio en el que se apersonaba era el que realmente se señalaba en el requerimiento o bien era el fiscal de mi representada, lo que se traduce en una afectación a la esfera jurídica de mi mandante ya que tal falta de circunstanciación da lugar a que mi representada desconozca con toda certeza si efectivamente el notificador actuó en su domicilio.

Esto es, el cercioramiento que debe de realizar el notificador de encontrarse precisamente en el domicilio en el que debe de practicarse la notificación respectiva, debe circunstanciarse justo al momento de la diligencia misma, pues es el momento en el que estando presente frente a dicho domicilio, puede constatar las características físicas del inmueble en el que debe de practicarse la diligencia, las circunstancias especiales de la misma, la manera en la que se cercióró de que efectivamente se encontraba en el domicilio correcto, es decir, los elementos físicos o materiales por los que llegó a esa convicción o incluso la persona de quien recibió la información de que efectivamente ese era el domicilio correcto.

Por lo tanto, resulta ilegal que el citatorio previo contenga la leyenda "...y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar...", ya que en tal caso, el notificador previamente dio por hecho que efectivamente encontraría el domicilio en el que debía realizar la notificación y más aún, que se cercioraría de que efectivamente fuese el correcto, lo que indudablemente vulnera la garantía de seguridad jurídica en perjuicio de mi representada, ya que precisamente tales circunstancias únicamente pueden ser del conocimiento del notificador en el momento mismo en el que se presenta en el domicilio en que debe practicar la diligencia de notificación que le haya sido encomendada y no antes, pues de ser así sólo se trataría de presunciones carentes de sustento legal alguno por parte del notificador.

Derivado de lo anterior, resultan ilegales las actuaciones impugnadas, ya que las mismas se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, al no encontrarse debidamente circunstanciado lo relativo a la manera en la que el notificador se cercióró de que efectivamente se encontraba en el domicilio

152

correcto, sin señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que crearon en él esa convicción, lo que genera un perjuicio en la esfera jurídica de mi representada al desconocer a ciencia cierta los pormenores de las diligencias.

B.5. En el citatorio y en el acta de notificación no se circunstanció plenamente que el supuesto notificador se haya identificado plenamente ante la persona con la que llevó a cabo la diligencia de mérito.

Además, el notificador al proceder a realizar la elaboración y entrega del citatorio y del acta de notificación, incurrió en varias ilegalidades, entre ellas omitir circunstanciar si se identificó ante la persona que supuestamente atendió la diligencia, pormenorizando los datos de identificación del cargo con el que se ostentaba y la dependencia a la que pertenecía.

Lo anterior, pues si bien se identificó con una constancia de identificación supuestamente emitida por el Administrador General de Grandes Contribuyentes, lo cierto es que esta situación no denota la legalidad de su actuación ni debe entenderse satisfecha o realizada plenamente dicha identificación, ya que en ningún momento señaló el cargo con el que actuaba ante la persona con quien practicó la diligencia y, mucho menos quedó circunstanciado el hecho de que se haya identificado como funcionario, ni los elementos de identificación del documento con el que se identificó y mucho menos circunstanció que el documento en que constaban todos sus elementos identificativos haya sido mostrada a la persona con la que se practicaba la diligencia y que esta última al tenerla en sus manos se haya percatado de que efectivamente los datos y rasgos fisonómicos del notificador correspondieran plenamente con los asentados en el documento identificativo.

En este sentido, suponiendo sin conceder que las diligencias efectivamente hayan sido realizadas en un mismo momento y en el domicilio en el que debía de practicarse la diligencia de notificación, lo cierto es que existe una violación en su expedición, que transgrede los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 fracciones I y IV, 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, interpretados de manera administrada.

La anterior ilegalidad genera un grave perjuicio a mi representada al dejarle en inseguridad jurídica, ya que se desconoce si en efecto el notificador era funcionario de alguna Administración perteneciente al Servicio de Administración Tributaria o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de ser así a cuál de ellas, y sobre todo si tal situación la hizo efectivamente del conocimiento de la supuesta persona que supuestamente atendió la diligencia, al resultar ésta una persona totalmente ajena a la hoy empresa actora.

En este contexto, para que se entienda debidamente identificado el notificador, deben asentarse de manera circunstanciada los siguientes aspectos en el propio citatorio:

- El número de identificación o credencial con la que se identifica.
- El nombre del funcionario de quien la expidió, citando los fundamentos legales con los que realizó dicha expedición.
- Su vigencia.
- La circunstanciación de que la misma le fue mostrada a la persona con la que se entendió la diligencia.
- La circunstanciación de que la persona mencionada, tuvo en sus manos la identificación y que tuvo oportunidad de constatar que los rasgos fisonómicos del notificador coincidían plenamente con los de la fotografía que se encontraba inserta en la identificación.
- El oficio de asignación de cargo o de nombramiento, así como el número de folio del mismo.

Ahora bien, de la simple lectura que se realice al texto de los referidos documentos, esa H. Sala podrá apreciar que el notificador omite por completo señalar los datos de su identificación como funcionario de alguna dependencia u administración adscrita al Servicio de Administración Tributaria o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin importar el hecho, que haya señalado que la constancia de notificación había sido emitida por el Administrador General de Grandes Contribuyentes, ya que la citación de este dato no puede significar una plena identificación, sino una deficiente, ya que con ello no se logra dar una certeza y seguridad jurídicas al contribuyente respecto de la identidad de la persona que actúa en la diligencia, lo cual desde luego repercute en la seguridad jurídica que pueda tener mi representada en relación a dichas actuaciones.

Por ende, mi representada niega lisa y llanamente en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, que el notificador, efectivamente sea funcionario de la Administración General de Grandes Contribuyentes y que haya sido expedido documento alguno en el que conste cargo que le autorice a llevar a cabo actos de notificación.

Así también cabe señalar que si bien el notificador citó el cargo del funcionario que expidió la constancia de notificación con la que supuestamente se identificó el notificador, lo cierto es que dejó de señalar el nombre de dicho funcionario y los preceptos legales conforme a los cuales dicho funcionario se encontraba facultado para expedir dicha constancia de notificación, lo que resulta de trascendental importancia, ya que es a través de la citación de los preceptos que facultan al funcionario emisor precisamente a expedir tales constancias de identificación, como el particular puede conocer de manera cierta si se trata en efecto de un funcionario de la entidad respecto de la cual se ostenta y si fue legalmente habilitado para llevar a cabo las diligencias de que se traten por el funcionario que en orden

de jerarquías era competente para facultarlo y para expedir su identificación que lo ampare como tal.

Máxime que la ley le impone la obligación de circunstanciar pormenorizadamente su actuación, dentro de lo que se encuentra, el circunstanciar que la identificación le fue mostrada a la persona con la que se entendió la diligencia respectiva, y que ésta se cercioró de que efectivamente los rasgos fisonómicos y datos contenidos en la identificación coincidían plenamente con los rasgos fisonómicos del notificador y con los datos por el mencionados, situación que contrario a lo dispuesto por la ley, no aconteció, ya que el supuesto notificador únicamente se limitó a señalar su nombre, lo que desde luego, genera la ilegalidad de la diligencias respectivas, ya que aunado a las ilegalidades anteriormente citadas, el perjuicio causado al hoy recurrente es real y concreto, en virtud de que se dejó en estado de indefensión toda vez que mi mandante se vio imposibilitada de atender la diligencia de notificación.

Cabe señalar, que las ilegalidades referidas no deben entenderse convalidadas por ninguna actuación ulterior, pues como es del conocimiento de esa H. Sala en el ámbito administrativo todo procedimiento se entiende como una secuencia de actos concatenados unos con otros, que conllevan hacia un resultado final, por lo que la ilegalidad de uno de esos actos condiciona invariablemente la legalidad de todo el procedimiento y obviamente del resultado final, razón por la cual decimos que las resoluciones que se impugnan, son ilegales en virtud de que las mismas devienen de actos viciados de origen, como es el supuesto citatorio del 27 de junio de 2011 y el acta de notificación del 28 de junio de 2011, los cuales de ninguna manera pueden generar actos válidos.

C. Ilegalidad del oficio 900 05-2011-385 por el cual se dio inicio a las facultades de comprobación, al omitir la autoridad fiscal informar al contribuyente en la solicitud de datos y documentos, el derecho que tenía mi mandante para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho, en contravención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

En el presente apartado se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al derivar de un procedimiento de fiscalización viciado de origen, pues la autoridad fiscal fue omisa en informarle a mi mandante del derecho que tenía para corregir su situación fiscal, en contravención al artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en relación con su Artículo Segundo Transitorio, es una obligación para todas las autoridades fiscales al momento de iniciar sus facultades de comprobación, informar al contribuyente del derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer tal derecho.

A efecto de dar mayor claridad a lo anterior, a continuación se transcriben dichas disposiciones:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 27 -

155

"Artículo 13.- Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado."

"Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades fiscales realizarán una campaña masiva para difundir las nuevas disposiciones contenidas en la misma.

"Artículo Segundo.- Las disposiciones previstas en la presente Ley, sólo serán aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento."

Tal y como podrá advertir esa H. Sala, el Artículo Segundo Transitorio del referido ordenamiento instituye que las disposiciones establecidas en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente serán aplicadas en el ejercicio de facultades de comprobación de todas las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, lo cual ocurrió un mes después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005.

En este sentido, resultaba obligatorio para el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente estar a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en la cual de manera expresa se exige que en la primera solicitud de información (primer acto con que inicia las facultades de revisión de gabinete) se informe al contribuyente del derecho que le asiste de corregir su situación fiscal.

En consecuencia, el incumplimiento de dicho requisito ocasiona una violación directa e inmediata a los derechos de mi mandante como gobernado y como contribuyente.

En este sentido, es el caso que en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, indebidamente funda y motiva el acto de molestia de referencia, ya que la autoridad fiscal omitió señalar el derecho que tenía mi mandante para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho consagrado a su favor en el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Tal y como esa H. Sala Fiscal podrá observar de la solicitud de datos y documentos, en momento alguno el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente informó del derecho establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, no obstante,

156

que esta es una obligación para toda autoridad fiscal al momento de iniciar sus facultades de comprobación y constituye un derecho a favor de mi representada.

De tal manera que, el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, al no haber precisado o señalado en la misma el derecho que le otorga a mi mandante como contribuyente el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, siendo este "el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado", violó con ello lo establecido por el artículo 16 constitucional y por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto las tesis jurisprudenciales emitidas por los Órganos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyos rubros y textos se citan a continuación:

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU ILEGALIDAD, SI NO SE SEÑALA EN LA MISMA EL DERECHO QUE LE OTORGA AL CONTRIBUYENTE EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE.- De conformidad con lo establecido por el artículo 16 constitucional y por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas, así como expresar el objeto o propósito de que se trate. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que entró en vigor el 23 de julio de 2005, cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, DEBERÁN INFORMAR AL CONTRIBUYENTE CON EL PRIMER ACTO QUE IMPLIQUE EL INICIO DE SUS FACULTADES, EL DERECHO QUE TIENE PARA CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL Y LOS BENEFICIOS DE EJERCER DICHO DERECHO; entonces es de concluirse que si en la orden de visita como la que se impugnó en el presente juicio, la autoridad omitió señalar el derecho a que alude el citado numeral, entonces resulta que la orden de visita es ilegal, ya que no se cumplió con lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el numeral 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. (2a)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 105/07-16-01-2.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de mayo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda, - Secretario: Lic. Luis Fernando Berzunza Ojeda."

"Quinta Época. Instancia: Primera Sala Regional de Oriente (Puebla, Pue.) R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año II. No. 13. Enero 2002. Tesis: V-TASR-XIII-133

Página: 282

PRESUNCIÓN DE VALIDEZ.- CONFORME AL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA CONSIDERAR QUE EN LOS ACTOS DE AUTORIDAD SUBSISTE LA PRESUNCIÓN QUE CONTRAE ESTE DISPOSITIVO LEGAL, ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD DEMUESTRE QUE SU ACTUACIÓN SE APEGÓ A ERICTO DERECHO.- Conforme a la tesis III-TASS-2074, que ha sustentado el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, visible en la página 29, de su órgano informativo, Tercera Época. Año IV. No. 38. Febrero 1991; bajo el rubro: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA O ALLANAMIENTO TÁCITO A LA PRETENSION DE LA PARTE DEMANDANTE.- Cuando la parte demandada omite producir en su escrito de contestación de demanda, controvertir o responder alguno de los hechos aducidos por la parte demandante, hay un allanamiento o aceptación tácita del mismo, generando la presunción de certeza respecto de las aseveraciones de la parte demandantes autoridades no den respuesta." De ahí que, aun y cuando de conformidad con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos de la autoridad se presumirán legales, también lo es, que éste mismo dispositivo legal, dispone que cuando el afectado los niegue lisa y llanamente la carga de la prueba se revierte a la autoridad de probar que su actuación se ajustó a derecho; por ende, no resulta válido, que la autoridad al contestar la demanda sólo solicite, que el juicio se resuelva de conformidad con el contenido de dicho dispositivo legal, si no exhibe las pruebas pertinentes con que se acredite la legalidad de su actuación, ya que con ello no se desvirtúa la negativa del actor, y que por ende el enjuiciante tiene a su favor el silencio de la autoridad, que implica una aceptación tácita de los hechos negados por el demandante toda vez que resulta inconcuso que se está ante la presencia de un allanamiento tácito a las pretensiones del demandante; dado que no se aportó ningún elemento probatorio del que se pudiera desprender que le fue notificado el requerimiento que dio origen a la emisión de la resolución impugnada, y que fue el motivo que tuvo la autoridad para imponer la sanción. De ahí que esta Sala Juzgadora concluya que le asiste la razón al actor, al aludir que no se le puede sancionar por el incumplimiento de un requerimiento que nunca le fue dado a conocer. (27)

Juicio No. 86/01-07-01-2, Sentencia de la Primera Sala Regional de Oriente, de 27 de marzo del 2001, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Francisco Xavier Melo Melo.- Secretaria: Lic. Blanca Lidia Madrid González.-
54

"Quinta Época.
Instancia: Sala Regional del Noroeste I (Tijuana, B.C.)
R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año I. No. 2. Febrero 2001.
Tesis: V-TASR-XXV-19 Página: 179

Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente la ilegalidad de la solicitud de datos y documentación contenida en el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, pues la misma omitió al momento de ejercer sus facultades de comprobación, prevista en la

158

fracción II, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, informar al contribuyente con el primer acto (solicitud de datos y documentación) que implica el inicio de sus facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho, lo cual resulta contrario en perjuicio de mi mandante de lo dispuesto en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 38, fracciones IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, quedando debidamente acreditada la violación sus garantías de seguridad jurídica y legalidad.

En consecuencia, se deberá declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, al ser fruto de un acto que se encuentra revestido de ilegalidad, como lo es el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, pues contraviene lo dispuesto en los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, toda vez que no está debidamente fundado y motivado, al omitir la autoridad fiscal informar al contribuyente en la solicitud de datos y documentos el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho, obligación establecida en el numeral 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

D. Ilegalidad de las resoluciones impugnadas pues el oficio número 900-05-2011-385 de solicitud de documentación e información no se señaló el periodo o ejercicio fiscal a revisar de las contribuciones sujetas a revisión.

Por otra parte, en el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, como en ningún acto de la revisión de gabinete en materia fiscal, se actuó conforme lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.

De la lectura que esa H. Sala se sirva efectuar del oficio, en comento se podrá percatar de que efectivamente el acto de molestia, origen del procedimiento de fiscalización que culminó con la resolución determinante de un crédito fiscal aquí impugnada, fue emitido de manera ilegal, ya que no satisface en lo más mínimo la garantía de legalidad que prevé el artículo 16 Constitucional, así como los artículos 38, fracción IV, 42, fracción II y 48 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que en el oficio de cuenta NO SE SEÑALÓ EL PERÍODO SUJETO A REVISIÓN.

Con este proceder, la autoridad incumple con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional, en relación con los artículos 38, fracción IV, 42, fracción II y 48 del Código Fiscal de la Federación, **pues debió especificar el periodo o periodos sujetos a revisión por los impuestos que serían materia de verificación.**



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 29 -

159

Toda vez que la determinación de obligaciones fiscales exige un procedimiento preparatorio del acto administrativo definitivo, el objeto de dicho procedimiento es verificar si los sujetos pasivos y terceros vinculados a la relación jurídico-fiscal principal, han cumplido con las obligaciones que imponen las normas tributarias correspondientes, en un periodo de tiempo determinado.

Esta práctica de fiscalización o inspección del cumplimiento de los deberes tributarios, puede hacerse conforme a las diversas formas de manifestación o ejercicio de las facultades de comprobación atribuidas a las autoridades fiscales; respecto de las cuales, dentro de las de mayor importancia tenemos las revisiones de gabinete, que tienen como propósito la comprobación del cumplimiento en el pago oportuno de contribuciones específicas, así como la comprobación integral del cumplimiento de obligaciones tributarias, indistintamente.

En este sentido, la solicitud de documentos que para efectos de efectuar estas revisiones emita la autoridad, a fin de satisfacer la garantía de legalidad del artículo 16 constitucional, acogida por el diverso 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, debe estar debidamente fundada y motivada, para lo cual se hace imprescindible expresar su objeto o propósito de una manera precisa, enunciando en forma detallada el carácter bajo el cual se revisa al gobernado, ya que de no ser así, su objeto resulta vago e impreciso, violando todo principio de lógica y seguridad jurídica; en razón de que impide al contribuyente conocer puntualmente las obligaciones a su cargo que serán fiscalizadas y alrededor de las cuales deberán efectuarse las actuaciones de la autoridad correspondiente.

Cabe agregar, que el objeto de los actos administrativos de esta índole, no sólo debe concebirse como el propósito, intención o fin, que marca la pauta a ejercer la facultad comprobatoria que tienen las autoridades fiscales, sino también debe entenderse como la cosa, elemento, tema o materia de que se trata; pues esto es lo que produce certidumbre al gobernado respecto de la intromisión en su domicilio y papeles.

Por lo tanto, el objeto de este tipo de actos de autoridad no debe ser enunciado en forma general, sino determinado, para así dar seguridad al particular.

En consecuencia, se deberá declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, al ser fruto de un acto que se encuentra revestido de tal vicio, como lo es el oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, mediante el cual se requirió a mi mandante informes, datos y documentación, en virtud de que en el oficio de cuenta NO SE SEÑALÓ EL PERIODO O EJERCICIO FISCAL A REVISAR DE LAS CONTRIBUCIONES SUJETAS A REVISIÓN, tal y como se corrobora del contenido del original del acto administrativo en comento.

160

E. Ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues el oficio número 900-05-2011-385 fue dirigido a [REDACTED] no a su representante legal, en contravención a lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

Por otra parte, las resoluciones impugnadas son ilegales al derivar de un procedimiento de fiscalización que no se ajustó a las formalidades exigidas para su desarrollo, al no encontrarse dirigido el requerimiento de información con que se iniciaron las facultades de comprobación a persona alguna en específico.

En primer lugar, debe recordarse que de acuerdo al derecho positivo mexicano, se reconoce la existencia de las personas morales para aquellas entidades formadas con sujeción al derecho para la realización de los fines colectivos y permanentes, a las que el derecho objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones.

No obstante ello, es el caso que la capacidad de cualesquiera de las personas morales que el Código Civil señala de forma enunciativa en el artículo 25, se encuentra regida por las normas legales generales o especiales, que le confieren a personas determinadas (comúnmente denominadas representantes legales), las facultades necesarias para "representar" a la persona moral.

Del contenido del oficio referido, claramente puede apreciarse que el mismo se encuentra dirigido a la persona moral denominada [REDACTED] y no así, a su representante legal, con lo cual se desconoce evidentemente que las personas morales actúan por conducto de sus representantes legales, razón suficiente para demostrar que el oficio de mérito adolece de la fundamentación y motivación debida, conforme al artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación a lo dispuesto por el artículo 48, fracción I del mismo ordenamiento en el cual se establece las formalidades propias de las notificaciones como la que nos ocupa.

En este sentido, se aprecia del segundo párrafo del citatorio de mérito, que el notificador encargado de efectuar dicha diligencia, afirma haber requerido la presencia de mi mandante, circunstancia que jurídica y fácticamente resulta inadmisibles puesto que la persona moral no puede tener una presencia física, ya que obviamente es una persona jurídica únicamente.

Desgraciadamente, lo anterior obedece a que la autoridad fiscal, al momento de realizar los citatorios como el que nos ocupa, se constriñen a llenar formatos generales que no necesariamente se adecúan a las circunstancias específicas del contribuyente citado; lo cual, desde luego no es imputable a mi mandante y evidentemente le causa un perjuicio, ya que al haber sido citada la persona moral, jamás tuvo la oportunidad de presentar debidamente la información solicitada, impidiendo con ello necesariamente la oportunidad de que se notificara en ese mismo acto.

Toda vez que la ilegalidad planteada en el presente concepto de impugnación, también se presenta con relación al oficio con número de folio 900 05 03-2012-54438 de fecha 13 de septiembre de 2012, emitido —presuntamente— por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente “3” del Servicio de Administración Tributaria, solicitó se tengan por reproducidos los argumentos vertidos en el presente concepto de impugnación con relación al oficio antes mencionado como si a la letra se insertasen.

En consecuencia, se deberá declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, al ser fruto de un acto que se encuentra revestido de tal, vicio, como lo es el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, el cual de acuerdo a su contenido, tenía por objeto solicitar a mi mandante informes, datos y documentos acerca de contribuciones, en virtud de que el mismo fue dirigido a [REDACTED] y no a su representante legal, en contravención a lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

F. Ilegalidad de las resoluciones impugnadas pues el oficio número 900-05-2011-385 no establece el plazo para concluir la revisión de dictamen, violando con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación en relación con las garantías de seguridad jurídica, debido procedimiento legal y legalidad, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el presente apartado, se evidenciará la ilegalidad del oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, en virtud de que la autoridad fiscalizadora en ningún momento estableció el plazo de duración de la revisión de gabinete de que fue objeto mi mandante, dejando en estado de indefensión a mi representada, al desconocer si la revisión era por un plazo indefinido o no.

En efecto, el oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, deja en estado de indefensión a mi representada al violar lo dispuesto por el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación al no señalar el plazo que durara la revisión de gabinete.

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos primero, octavo y undécimo, establece como un derecho subjetivo público de los gobernados el que no puedan ser molestados en su persona, papeles o domicilio y la inviolabilidad de éste; también lo es que el propio precepto permite a las autoridades practicar tales actos de molestia, a fin de que cumplan con el propósito que dio origen a dichos actos, cubriendo desde luego los requisitos que debe contener todo acto de molestia como es la orden de visita o la revisión de gabinete.

Por consiguiente, debe entenderse que esos actos están delimitados temporalmente, esto es, que deben estar acotados por un tiempo prudente para lograr el objetivo que con ellos se pretende, pues de no ser así se volverían en una molestia constante o en una permanente intromisión al domicilio, lo que es contrario a la protección que otorga el citado precepto constitucional.

Por ende si la autoridad fiscal en momento alguno dentro del oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, mediante el cual inicia sus facultades de comprobación, señaló el plazo que duraría la revisión de gabinete, ello viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional y 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

Máxime, que en términos del artículo 12 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se establece que al inicio de las facultades de comprobación mi representada tenía el derecho a ser informada de sus derechos y obligaciones.

Así mi representada tenía derecho a ser informada respecto a cuál era el plazo que tenía la autoridad fiscal para concluir la revisión de gabinete, o en su caso citar dentro del contenido del oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, el artículo 46-A y su párrafo aplicable del Código Fiscal de la Federación a efecto de que mi mandante tenga la seguridad que revisión a la cual está sujeta no es indefinida y por ende no se deje en estado de indefensión.

Por consiguiente, se entendería que se está cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, toda vez que estos actos estarían delimitados temporalmente, esto es, que están acotados por un tiempo prudente para lograr el objetivo que con ellos se pretende sin considerar que puedan ser indefinidos.

En este orden de ideas, al haberse evidenciado la ilegalidad de la solicitud de datos y documentos en el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, por resultar contraria a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación al no señalar el plazo que durara la revisión de gabinete, lo procedente conforme a derecho es que esa H. Sala, declare la nulidad del oficio de mérito, así como de la resolución determinante del crédito fiscal impugnado.

Toda vez que la ilegalidad planteada en el presente concepto de impugnación, también se presenta con relación al oficio con número de folio 900 05 03-2012-54438 de fecha 13 de septiembre de 2012, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente “3” del Servicio de Administración Tributaria, solicitó se tengan por reproducidos los argumentos vertidos en el



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 31 -

163

presente concepto de impugnación con relación al oficio antes mencionado como si a la letra se insertasen.

En consecuencia, se deberá declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, al ser fruto de un acto que se encuentra revestido de tal vicio, como lo es el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, el cual de acuerdo a su contenido, tenía por objeto solicitar a mi mandante informes, datos y documentos acerca de contribuciones, al no establecer el plazo para concluir la revisión de gabinete.

G. Ilegalidad del citatorio de fecha 27 de junio de 2011 por medio de la cual se iniciaron las facultades de comprobación, pues no se funda y motiva debidamente la competencia en la constancias de identificación de los notificadores, en violación a lo dispuesto por los artículos 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 Constitucional.

Asimismo, son ilegales las resoluciones impugnadas al derivar de un procedimiento de fiscalización violado de origen, pues la constancia de identificación de los notificadores que llevaron la diligencia del oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el Lic. Edgar López Hicks en su carácter de Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, no está debidamente fundada y motivada.

Lo anterior, al no citar el precepto legal que faculta a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para nombrar, remover o comisionar, a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores a su cargo, lo cual viola lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación en relación al artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tal como esa H. Sala podrá advertir del análisis que efectúe del expediente administrativo que desde este momento se ofrece como prueba, se advierte que las constancias de identificación de los notificadores, no están debidamente fundadas y motivadas violando con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

Se dice lo anterior, toda vez que la autoridad demandada al momento de fundar y motivar la constancia de identificación, lo hizo de conformidad con los artículos 10, primer párrafo fracción I, en relación al artículo 9 primer párrafo fracción VII y XXXVII y último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que señalan:

"Artículo 9.- Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:
(...)

164

VII.- Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo, a fin de habilitarlos para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de sus facultades y autorizar la emisión de gafetes de identificación
(...)

XXXVII.- Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas.
(...)

Las unidades administrativas regionales tendrán la sede que se establece en el artículo 37 de este Reglamento y ejercerán su competencia dentro de la circunscripción territorial que al efecto se determine en el acuerdo correspondiente, con excepción de la facultad de notificar y la de verificación en materia de Registro Federal de Contribuyentes y de cualquier padrón contemplado en la legislación fiscal y aduanera, las cuales podrán ejercerse en todo el territorio nacional. Asimismo, dichas unidades podrán solicitar a otras unidades con circunscripción territorial distinta, iniciar, continuar o concluir cualquier procedimiento y, en su caso, realizar los actos jurídicos correspondientes.

"Artículo 10.- Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas; los Coordinadores y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I.- Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este Reglamento.
(...)"

No obstante lo anterior, en momento alguno la ahora autoridad demandada en las constancias de identificación establece su facultad para nombrar, remover o comisionar conforme a los ordenamientos aplicables, a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo, hecho que demuestra la violación al artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual las constancias de identificación y las actuaciones de los supuestos notificadores son ilegales.

En este sentido, para fundar y motivar debidamente sus actuaciones, la autoridad fiscal debía señalar el numeral que faculta a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para nombrar, remover o comisionar, conforme a los ordenamientos aplicables, a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo, y al no haberlo hecho así violaron en perjuicio de mi mandante el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación en relación al artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A este respecto, resulta necesario mencionar que dicha facultad está inmersa en el artículo 10 fracción IV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, del cual se desprende lo siguiente:

"Artículo 10.- Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas; los Coordinadores y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas

Centrales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

(...)

IV.- Nombrar, remover o comisionar, conforme a los ordenamientos aplicables, a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo.

(...)"

En el artículo antes transcrito, se otorga la facultad para los Administradores Centrales para para nombrar, remover o comisionar, conforme a los ordenamientos aplicables, a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo, razón por la cual, era necesario que al momento de emitir las constancias de identificación, la autoridad demandada señalara el artículo 10 fracción IV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria para efecto de dar cabal cumplimiento al artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

En este tenor, no obstante que la autoridad demandada haya citado los artículos 10, primer párrafo fracción I, en relación al artículo 9 primer párrafo fracción VII y XXXVII y último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no citó la fracción IV del artículo 10 del ordenamiento en cita; lo cual demuestra la indebida fundamentación de la misma, violando con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV y V del Código Fiscal de la Federación.

Por lo anterior, si la autoridad ahora demandada en las constancias de identificación, no citó la fracción IV del artículo 10 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, demuestra una indebida fundamentación por lo que hace a su competencia material y territorial, en razón de que en tal fracción se prevé la facultad para para nombrar, remover o comisionar, conforme a los ordenamientos aplicables a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, dejando a mi representada en estado de indefensión pues la misma desconoce si está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos violando con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV y V del Código Fiscal de la Federación en relación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante resaltar que el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha corroborado las mencionadas condiciones, según se advierte de las distintas ejecutorias que su Segunda Sala ha dictado y cuya parte conducente se transcribe a continuación:

"FUNDAMENTACION DE ACTOS DE AUTORIDAD. Cuando el artículo 16 de nuestra Ley Suprema previene que nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a las autoridades, no que simplemente se apeguen, según su criterio personal íntimo, a una ley, sin que se conozca de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo de las propias

166

autoridades, pues esto ni remotamente constituiría garantía para el particular; por lo contrario, lo que dicho artículo les está exigiendo es que citen la ley y los preceptos de ella en que se apoyen, ya que se trata de que justifiquen legalmente sus proveídos, haciendo ver que no son arbitrarios. Forma de justificación tanto más necesaria, cuanto que, dentro de nuestro régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley.

Revisión fiscal 45/74. Inmobiliaria Sonorense, S.A. y otro. 7 de agosto de 1975. 5 votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Sexta Época, Tercera Parte.

Volumen XXVI, pág. 13. Amparo en revisión 1259/59. Octavio Ramos E. y coags. 10 de agosto de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente: C. JOSÉ Rivera Pérez Campos.

NOTA:

En la publicación original la tesis del asunto 1259/59 aparece bajo el rubro: "AUTORIDADES. FUNDAMENTACION DE SUS ACTOS".

"FUNDAMENTACION. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE AUTORIDAD CORRECTAMENTE FUNDADO. FORMALIDAD ESENCIAL DEL ACTO ES EL CARACTER CON QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA LO SUSCRIBE Y EL DISPOSITIVO, ACUERDO O DECRETO QUE LE OTORQUE TAL LEGITIMACION. Para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: A) Los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso concreto, es decir los supuestos normativos en que encuadra la conducta del gobernado, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos y fracciones. B) Los cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades, para emitir el acto en agravio del gobernado. Ahora bien, siguiendo una secuencia lógica, este Tribunal considera que la citación de los artículos que otorgan competencia, debe realizarse también con toda exactitud, señalándose el inciso, subinciso y fracción o fracciones que establezcan las facultades que en el caso concreto, la autoridad está ejercitando al emitir el acto de poder en perjuicio del gobernado. En efecto, la garantía de fundamentación, consagrada en el artículo 16 constitucional lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la citación de los cuerpos legales, preceptos, incisos, subincisos y fracciones, de los mismos que se están aplicando al particular en el caso concreto, y no es posible abrigar en la garantía individual comentada, ninguna clase de ambigüedad, o imprecisión, puesto que el objetivo de la misma primordialmente se constituye por una exacta individualización del acto autoritario, de acuerdo a la conducta realizada por el particular, la aplicación de las leyes a la misma y desde luego, la exacta citación de los preceptos competenciales, que permiten a las autoridades la emisión del acto de poder.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 16/83. Jorge León Rodal Flores. 12 de julio de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

"FUNDAMENTACION DE ACTOS DE AUTORIDAD. CITAR CUERPOS LEGALES NO LA SATISFACE. El requisito constitucional de legal fundamentación de los actos de autoridad no estriba en la invocación global de un código o de un cuerpo de disposiciones legales, pues de ser esto así, bastaría que los mandamientos civiles se fundamentaran diciendo "con apoyo en las disposiciones del Código Civil", las procesales penales "con apoyo en las disposiciones del Código de Procedimientos Penales", etc., lo cual evidentemente dejaría al particular en igual



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 33 -

167

desamparo que si la garantía de fundamentación no existiera, así como expuesto a los desmanes de la potestad pública, al no sujetarse ésta al cauce institucional de dicha garantía.

En la publicación original la tesis del asunto 6097/58 aparece bajo el rubro: "AUTORIDADES. FUNDAMENTACION DE SUS ACTOS."

"ACTO RECLAMADO. REQUISITO DE FUNDAMENTACION. El requisito de fundamentación que exige el artículo 16 Constitucional, no se satisface con la citación de la Ley de la materia, en que se haya apoyado la autoridad responsable, sino que es indispensable, para que el acto pueda reputarse fundado, que precise, en concreto, el precepto legal en que pretenda sustentarse.

Amparo en revisión 1645/60. Humberto Avilés Rocha. 16 de noviembre de 1960. 5 votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez."

"AUTORIDADES. DEBEN FUNDAR SUS ACTOS. Es un contrasentido considerar que no es necesario que las resoluciones de las autoridades estén expresamente fundadas y motivadas, sino que es suficiente con que realicen sus actos de gobierno dentro de la marca de la legalidad que tienen señalada, ya que si la autoridad no indica cuáles son los dispositivos legales que a su juicio le conceden la facultad para obrar en la forma que lo hace, se coloca a los particulares en la situación de adivinar en que preceptos legales pretendió fundarse, lo que de ninguna manera es el espíritu que informa el artículo 16 constitucional, el cual exige expresamente que las autoridades responsables funden y motiven sus resoluciones.

Amparo en revisión 3929/58. Gustavo Lésieur L. y coags. 27 de octubre de 1958. 5 votos. Ponente: C. JOSÉ Rivera Pérez Campos."

"ACTO RECLAMADO. FUNDAMENTACION DEL CITA DE UNA LEY.

El artículo 16 constitucional impone la obligación a las autoridades de fundar y motivar expresamente su resolución, por lo que no es bastante para cumplir con esa obligación el que las autoridades citen globalmente un cuerpo de Ley; ya que esta forma de proceder obligaría a los interesados a adivinar cuál fue el precepto expreso de esa Ley en que pretendieron fundarse las autoridades, lo que traería como consecuencia la deficiencia en la defensa del interesado.

Todo lo anterior permite afirmar que las constancias de identificación de los supuestos notificadores, para cumplir con el requisito de fundamentación legal previsto en las normas jurídicas anteriormente mencionadas, estaba obligado a indicar cuáles eran los dispositivos legales contenidos en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y citar correctamente los párrafos y fracciones que acreditan su competencia material en la ley en comento, además disposiciones aplicables, que a su juicio le otorgaban facultades suficientes para emitir el acto de molestia en perjuicio de mi mandante, de tal forma que le permitiera a mi representada cerciorarse de que efectivamente cuenta con las facultades que dice poseer, pues al no hacerlo así, dejó a mi mandante en total estado de indefensión e inseguridad jurídica violando de esta manera flagrantemente sus garantías individuales.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, al haber quedado plenamente demostrado que las constancias de identificación de los supuestos notificadores no acreditaron ello, resulta evidente que tampoco puede

168

considerarse cumplido el requisito de que exista un acto de autoridad competente que motive la causa legal del procedimiento.

La anterior obligación se encuentra de igual forma sustentada por la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 67/2001, emitida por la Segunda Sala de nuestra H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 31 del Tomo XIV del mes de Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que resulta de aplicación obligatoria para ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en términos de la Ley de Amparo, y que al respecto señala:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGA LA ATRIBUCIÓN EJERCICIO Y SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, de mayo de 1994, página 12, de rubro "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN. ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD," así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trata, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afectan o lesionen su interés jurídico, y por tanto, asegurarle la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, la fracción o fracciones, inciso y subinciso, en que apoya su actuación, pues de no ser así, se declara al gobernado en estado de indefensión toda vez que se traduce en que éste ignorará si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, el acto o no ajustado al derecho. Esto es así, porque no es permisible obrar en la garantía individual en cuestión, ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de gobierno en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

Contradicción de tesis 94/2000-S5. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito, 26 de octubre de 2001. Unanimitad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Resulta aplicable el siguiente precedente sustentado por ese H. Tribunal, que a la letra dice:

"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello está facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.

Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González.

"COMPETENCIA. FUNDAMENTACIÓN DE LA. Haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica; lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación. pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1932/89. Sistemas Hidráulicos Almont, S.A. 29 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos García José.

Amparo directo 842/90. Autoseat, S.A. de C.V. 7 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Gamaliel Olivares Juárez.

Amparo en revisión 2422/90. Centro de Estudios de las Ciencias de la Comunicación, S.C. 7 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.

Amparo directo 2182/93. Leopoldo Alejandro Gutiérrez Arroyo. 20 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores García.

Amparo directo 1102/95. Sofia Adela Guadarrama Zamora. 13 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores García.

Resulta necesario mencionar que, adolecen de los mismos vicios el citatorio de fecha 25 de julio de 2013 previo al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 y el citatorio de fecha 17 de diciembre de 2012 previo al oficio de observaciones 900-05-03-2012-69836 de fecha 17 de diciembre de 2012, razón por la cual se solicita se tengan por reproducidas como si a la letra se insertasen.

En consecuencia, se deberá declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, al ser fruto de un acto que se encuentra revestido de tal vicio, como lo es el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, el cual de acuerdo a su contenido, tenía por objeto solicitar a mi mandante informes, datos y documentos acerca de contribuciones, al no fundar debidamente la competencia de los notificadores.

H. Ilegalidad de las resoluciones impugnadas al ser fruto de un acto que se encuentra revestido de ilegalidad, como lo es el oficio 900-05-2011-385, por medio del cual la autoridad demandada inició sus facultades de comprobación, al no fundar y motivar debidamente su competencia material en contravención al artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el presente apartado, se demostrará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al ser fruto de un acto que se encuentra revestido de ilegalidad, como lo es el oficio 900-05-2011-385, por medio del cual la autoridad demandada inició sus facultades de comprobación, pues la autoridad demandada no funda y motiva debidamente su competencia material en dicho oficio, contraviniendo de éste modo lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el oficio 900-05-2011-385 no cumple con las citadas garantías y derechos humanos previstos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, toda vez que el mismo no fue emitido por una autoridad competente, como se demuestra con los dispositivos citados por la autoridad demandada con los cuales pretende fundar su competencia.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 35 -

171

Al respecto, la autoridad demandada señaló los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7 primer párrafo, fracciones VII, XII y XVIII, 8, primer párrafo, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 1, 2, primer párrafo, apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, apartado A, fracciones IX y X, y Apartado B, fracción II; quinto párrafo y sexto párrafo, numeral 5 y 21 primer párrafo, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, artículos 33, último párrafo, 38, 42, primer párrafo fracción II, antepenúltimo, penúltimo y último párrafos, 48, primer párrafo, fracciones I, II y III y último párrafo, y 52-A del Código Fiscal de la Federación, mismos que establecen lo siguiente:

Ley del Servicio de Administración Tributaria:

“Artículo 1. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta Ley.”

“Artículo 2. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria implantará programas y proyectos para reducir su costo de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a contribuciones, se entenderán comprendidos los aprovechamientos federales.”

“Artículo 3. El Servicio de Administración Tributaria gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones.”

“Artículo 4. El domicilio del Servicio de Administración Tributaria será la Ciudad de México, donde se ubicarán sus oficinas centrales. Asimismo, contará con oficinas en todas las entidades federativas y sus plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de garantizar una adecuada desconcentración geográfica, operativa y de decisión en asuntos de su competencia conforme a esta Ley, al reglamento interior que expida el Presidente de la República y a las demás disposiciones jurídicas que emanen de ellos.”

172

“Artículo 7. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

(...)

VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;

(...)

XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.

(...)

XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.”

“Artículo 8. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Servicio de Administración Tributaria contará con los órganos siguientes:

(...)

III. Las unidades administrativas que establezca su reglamento interior.

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria

“Artículo 1. El Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República y los programas especiales y asuntos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar y coordinar en las materias de su competencia.

“Artículo 2. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria contará con las siguientes unidades administrativas:

(...)

B. Unidades Administrativas Centrales:

(...)

IV.- Administración General de Grandes Contribuyentes:

(...)

e) Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

(...)

Las Administraciones Generales estarán integradas por sus titulares y por Administradores Centrales, Coordinadores, Administradores, Subadministradores, Jefes de Departamento, Enlaces, Supervisores, Auditores, Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados, Tributarios, Ejecutores, Notificadores, Verificadores, Oficiales de Comercio Exterior, personal al servicio de la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera y por los demás servidores públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

"Artículo 9. Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

(...)

XXXVII. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas.

(...)

Las Administraciones Generales y las Administraciones Centrales que de ellas dependan, así como las Coordinaciones, las Administraciones y las Subadministraciones que dependan de éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, excepto la Administración Central de Capacitación Fiscal, la Administración Central de Operación y Servicios Tecnológicos, las Administraciones para el Destino de Bienes, así como las Administraciones de Operación de Recursos y Servicios y las Subadministraciones de Recursos y Servicios, cuyas sedes podrán ubicarse fuera de la Ciudad de México."

"Artículo 10. Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas, así como los Coordinadores, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I. Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLVII y XLVIII del artículo anterior.

[...]"

"Artículo 20. Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se

trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

A. Competencia:

(...)

IX. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaraciones para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen, la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales.

(...)

X. Revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo, de dictamen o declaración que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos.

(...)

B. Sujetos y entidades.

(...)

II. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, como controladoras, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

(...)



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 37 -

175

La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan.

(...)

Las unidades administrativas de las que sean titulares los servidores públicos que a continuación se indican estarán adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes:

5. Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

a) Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1":

i) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1".

ii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "2".

iii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3".

iv) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "4".

b) Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "2":

i) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "5".

ii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "6".

iii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "7".

iv) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "8".

c) Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3":

i) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "9".

ii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "10".

iii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "11".

iv) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "12".

d) Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "4":

176

i) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "13".

ii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "14".

iii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "15".

iv) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "16".

e) Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "5":

i) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "17".

ii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "18".

iii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "19".

iv) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "20".

"Artículo 21. Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las facultades que a continuación se precisan:

(...)

E. A la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y a las unidades administrativas adscritas a la misma:

I.- Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

Las señaladas en el apartado A, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII y XLVIII del artículo anterior de este Reglamento.

I...J".

Código Fiscal de la Federación:

"Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

(...)

Quando las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales hagan referencia u otorguen atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus Unidades

Administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria, cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, su Reglamento Interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos."

"Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:

I. Constar por escrito en documento impreso o digital. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios.

II. Señalar la autoridad que lo emite.

III. Señalar lugar y fecha de emisión.

IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

V. Ostar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los funcionarios pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Segundo, del Título I denominado "De los Medios Electrónicos" de este ordenamiento.

En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el funcionario competente podrá expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el documento impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución.

Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el sello resultado del acto de firmar con la firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, que se encuentre contenida en el documento impreso, producirá los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.

Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que contenga la impresión del sello resultado de la firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, será

verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del autor.

El Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios a través de los cuales se podrá comprobar la integridad y autoría del documento señalado en el párrafo anterior.

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria, se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad."

Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

(...)

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

(...)

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III y IV de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación probatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión."

"Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliar, se estará a lo siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 39 -

179

I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del presente ordenamiento, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en el lugar donde éstas se encuentren.

II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos.

III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante.

(...)

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente."

"Artículo 52-A. Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el Reglamento de este Código, estarán a lo siguiente:

(...)

II. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 53-A de este Código, o dicha información y documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación.

(...)"

Como esa H. Sala podrá apreciar, la autoridad demandada omitió citar el artículo los artículos 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual es necesario para señalar la competencia material de la autoridad demandada, ya que en los mismos se establece lo siguiente:

"Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables."

"Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

180

(...)

XI. Cobrar los impuestos, contribuciones, de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;

(...)

XXV.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

[...]"

De los artículos transcritos se desprende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, asimismo se establece que dentro de sus facultades están la de cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

En este sentido, era obligatorio para la autoridad demandada el señalar en el oficio número 900-05-2011-385, los artículos 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues es en los citados numerales se estableció la facultad de la autoridad demandada para despachar, realizar y ejercer facultades que les corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior es así, en virtud de que en los artículos 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece la facultad de la autoridad demandada para despachar, realizar y ejercer facultades que les corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá contar con órganos administrativos desconcentrados que estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, asimismo se establece que dentro de sus facultades están la de cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales, en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, pues el mismo regula una cuestión de competencia por materia.

Por ende, si la autoridad demandada hubiera fundado su actuación también en los artículos 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mi representada tendría certeza de que la autoridad estaba actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley, y al no ser así, resulta evidente que se dejó a mi representada en estado de indefensión.

En ese sentido si la autoridad demandada en el oficio número 900-05-2011-385, no citó los artículos 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal demuestra una indebida fundamentación por lo que hace a la competencia material, en razón de que en tal fracción no se prevé la facultad para cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, dejando a mi representada en estado de indefensión, pues la misma desconoce si está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos, violando con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV y V del Código Fiscal de la Federación en relación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A todo lo anterior debe agregarse que evidentemente no puede considerarse que en el presente caso la autoridad demandada haya fundado y motivado debidamente la competencia material con la cual actuó al emitir el oficio mediante el cual requiere información y documentación, ya que para que pueda tenerse por satisfecho el requisito de fundamentación legal, previsto tanto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, es estrictamente necesario que dicho acto dirigido a la hoy actora, esté basado en una disposición normativa general, es decir, que la misma prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que lo autorice y que la autoridad la cite correctamente.

Esto es así porque la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado un acto de molestia, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad, que consiste como ya se dijo, en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

Asimismo, como también ya fue mencionado en apartados anteriores, las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, o sea, que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia no debe derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución clara y precisa.

Todo lo anterior nos permite afirmar que la autoridad demandada, al emitir el oficio mediante el cual se requiere documentación e información, para cumplir con el requisito de fundamentación legal previsto en las normas jurídicas anteriormente mencionadas, estaba obligado a indicar cuáles eran los dispositivos legales contenidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y citar correctamente los párrafos y fracciones que acrediten su competencia material de la ley en comento, además disposiciones aplicables, que a su juicio le otorgaban facultades suficientes para emitir el acto de molestia en perjuicio de mi mandante, de tal forma que le permitiera a mi representada, cerciorarse de que efectivamente cuenta con las facultades que dice poseer, pues al no hacerlo así, dejó a mi mandante en

total estado de indefensión e inseguridad jurídica, violando de esta manera flagrantemente sus garantías y derechos humanos.

En el caso que nos ocupa, al haber quedado plenamente demostrado que la autoridad demandada no citó norma jurídica alguna mediante la cual acreditará que posee facultades suficientes para emitir la resolución contenida en el oficio 900-05-2011-385, resulta evidente que tampoco puede considerarse cumplido el requisito de que exista un acto de autoridad competente que motive la causa legal del procedimiento.

Se afirma lo anterior, pues según se desprende de los dispositivos legales en los que pretende apoyarse la autoridad demandada para emitir la resolución impugnada, resultan por demás insuficientes e inaplicables para acreditar que dicha autoridad cuenta con facultad alguna para actuar como lo hizo, pues no señaló con precisión los artículos, párrafos, incisos, subincisos, fracciones o apartados contenidos en Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de los cuales se pudiera desprender con claridad y sin lugar a dudas, lo antes señalado.

En efecto, la autoridad demandada debió ser más específica y señalar debidamente y con toda precisión la parte de dichos artículos de la que supuestamente se desprenden sus facultades para emitir el oficio 900-05-2011-385, ya que de la forma como los cita, deja a mi mandante en completo estado de incertidumbre jurídica, ya que se encuentra imposibilitada para saber con precisión el fundamento legal de su actuar, puesto que no cita el párrafo correspondiente de los artículos de referencia.

Lo anterior, con base en la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al respecto señala lo siguiente:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y EN SU CASO LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA, SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 41 -

183

los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcusos que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno.

(Énfasis añadido)

Así las cosas, atendiendo a la Jurisprudencia transcrita, se puede apreciar que para cumplir con los requisitos de debida fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 38 fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación, es estrictamente necesario, que la autoridad fiscal, al emitir los actos de molestia dirigidos a los contribuyentes, invoque las disposiciones legales, acuerdo o decreto, que otorgan facultades a la autoridad y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio.

184

Lo cual significa que de ninguna manera puedan considerarse dichos requisitos como innecesarios y excesivos, pues de lo contrario se permitiría que la autoridad fiscal fundara sus actuaciones en total desapego a la Ley, pues es requisito constitucional que todo acto de autoridad se emita debidamente fundado y motivado.

Asimismo, resultan aplicables las siguientes tesis sustentadas por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señalan:

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello está facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.

Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Miguel Ángel García Domínguez, Carlos Sempé, Mirvillie, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoza Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Gutiérrez, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez aprobó, con el número 10/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede. El señor Ministro Miguel Ángel García Domínguez integró el Pleno en

términos de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud del Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. Ausentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, José Antonio Llanos Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro."

"COMPETENCIA. FUNDAMENTACIÓN DE LA. Haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por **autoridad competente** y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica; lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1932/89. Sistemas Hidráulicos Almont, S.A. 29 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos García José.

Amparo directo 842/90. Autoseat, S.A. de C.V. 7 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Gamaliel Olivares Juárez.

Amparo en revisión 2422/90. Centro de Estudios de las Ciencias de la Comunicación, S.C. 7 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.

Amparo directo 2182/93. Leopoldo Alejandro Gutiérrez Arroyo. 20 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores García.

Amparo directo 1102/95. Sofía Adela Guadarrama Zamora. 13 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores García."

Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad demandada dejó de aplicar debidamente lo dispuesto por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que resulta claro que los actos impugnados carecen de fundamentación y motivación, razón por la cual lo procedente será que esa Sala Fiscal con fundamento en los artículos 51, fracciones II y III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declare su nulidad.

I. Ilegalidad de las resoluciones impugnadas al ser fruto de un acto ilegal, como lo es el oficio 900-05-2011-385, por medio del cual la autoridad demandada inició sus facultades de comprobación, pues la autoridad demandada no funda y motiva debidamente su competencia en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

Como se demostrará en el presente apartado, las resoluciones impugnadas resultan ilegales al ser fruto de un acto que se encuentra revestido de ilegalidad, como lo es el oficio 900-05-2011-385, por medio del cual la autoridad demandada inició sus facultades de comprobación, pues la autoridad demandada no funda y motiva debidamente su competencia en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, contraviniendo de este modo lo dispuesto por el artículo 38, fracciones IV y V del Código Fiscal de la Federación, en relación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como se ha expuesto con anterioridad, el fundar un acto impone a la autoridad administrativa la obligación de que al emitir dicho acto ésta cite con precisión, los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir los supuestos normativos en los que encuadra, además de citar con precisión los cuerpos legales y preceptos que la legitimen a actuar.

Para efectos de que se entienda cumplida dicha obligación es necesario que los supuestos normativos a que se hace referencia sean citados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos y fracciones que resulten aplicables y no de manera general.

Ahora bien, la autoridad demanda citó como fundamento para su competencia material los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7 primer párrafo, fracciones VII, XII y XVIII, 8, primer párrafo, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 1, 2, primer párrafo, apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, 10 primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, apartado A, fracciones IX y X, y Apartado B, fracción II; quinto párrafo y sexto párrafo, numeral 5 y 21 primer párrafo, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, artículos 33, último párrafo, 38, 42, primer párrafo fracción II, antepenúltimo, penúltimo y último párrafos, 48, primer párrafo,



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 43 -

187

fracciones I, II y III y último párrafo, y 52-A del Código Fiscal de la Federación, mismos que se transcribieron en el apartado anterior y que se solicitan a esa H. Sala los tenga por reproducidos en el presente apartado como si a la letra se insertasen.

De los artículos transcritos se advierte que de manera por demás ilegal la autoridad demandada cita el artículo 20, primer párrafo, apartado A, fracciones IX y X, y Apartado B, fracción II; quinto párrafo en la parte que establece: *"La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan y sexto párrafo, numeral 5 correspondiente al Administrador Central de Fiscalización a Empresas que consolidan Fiscalmente"* del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, sin especificar que fracción, párrafo o inciso del mismo numeral es en el que funda su competencia material.

Si bien es cierto, la autoridad demandada señaló *"numeral 5 correspondiente al Administrador Central de Fiscalización a Empresas que consolidan Fiscalmente"*, también lo es que dicho numeral no es una norma compleja, razón por la cual no era necesario mencionar o transcribir la parte que supuestamente le era aplicable, pero si era obligatorio señalar correctamente en que parte del numeral 5 del sexto párrafo del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria establecía su competencia material, al existir diversas autoridades.

Es el caso que el hecho que la autoridad demandada hubiera señalado que del numeral 5 del sexto párrafo del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria le corresponde la parte del Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente no basta, pues como ya se mencionó, no es una norma compleja, razón por la cual era obligatorio en términos del artículo 38 fracción IV y V del Código Fiscal de la Federación señalar con precisión la parte que le era aplicable.

En este tenor, para que un acto se encuentre debidamente fundado, los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, deberán ser señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones, párrafos, renglones y preceptos aplicables.

Sin embargo, la autoridad demandada al momento de fundar su competencia material en el numeral 5 del sexto párrafo del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria de manera general, omitió precisar los párrafos, fracciones o incisos que le resulten aplicables al caso concreto y al no haberlo hecho, viola con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, si la autoridad fiscal funda su competencia material en el primer párrafo del numeral 5 del sexto párrafo del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el contribuyente tiene

188

certeza de que la autoridad está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley; puesto que en ese párrafo se especifica que la autoridad demandada es una unidad adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, toda vez que los demás incisos y fracciones se refieren a otras autoridades; pues de no haber señalado lo anterior se dejaría al gobernado en estado de indefensión.

En ese sentido, si la autoridad demandada en el oficio número 900-05-2011-385, no citó el primer párrafo del numeral 5 del sexto párrafo del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y únicamente invoca el numeral 5 de manera general, demuestra una deficiente fundamentación por lo que hace a la competencia material, en razón de que en primer párrafo únicamente se especifica que la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente es unidad administrativa adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, dejando a mi representada en estado de indefensión pues la misma desconoce si está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos, violando con ello lo dispuesto en el artículo 38, fracciones IV y V del Código Fiscal de la Federación, en relación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación, tal y como se desprende de las Jurisprudencias que a continuación se transcriben:

NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, con el rubro: **"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS: EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO"**, se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia y de indefensión, al desconocer si aquella tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquella, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una

nueva en la que se subsane la insuficiente fundamentación legal.

Contradicción de tesis 34/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 28 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete."

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente:

190

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.

Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73, pág. 52, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 35, tesis por contradicción 2a./J. 58/2001 de rubro "JUICIO DE NULIDAD AL DICTAR LA SENTENCIA RESPECTIVA LA SALA FISCAL NO PUEDE CITAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACION DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE DICTO LA RESOLUCION IMPUGNADA."

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 31, tesis por contradicción 2a./J. 57/2001 de rubro "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCION EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCION, INCISO Y SUBINCISO."

No. Registro: 252,103. Jurisprudencia, Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 121-126 Sexta Parte, Tesis: Página: 280. Genealogía: Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, pág. 47. Informe 1979, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 39.

Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad demandada dejó de aplicar debidamente lo dispuesto por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que resulta claro que los actos impugnados carecen de fundamentación y motivación, razón por la cual lo procedente será que esa Sala Fiscal con fundamento en los artículos 51, fracciones II y III y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declare su nulidad lisa y llana.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 45 -

191

FEDERACIÓN, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En el presente concepto de impugnación se evidenciará que las resoluciones impugnadas son ilegales al ser fruto de un acto que se encuentra revestido de ilegalidad, como lo es el oficio de observaciones 900-05-03-2012-69836, pues no se encuentra debidamente fundado y motivado, contraviniendo de este modo lo dispuesto por el artículo 38, fracciones IV y V del Código Fiscal de la Federación, en relación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A. Al respecto, los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna establecen lo siguiente:

"Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

[...]"

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(...)

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

[...]"

Los artículos constitucionales antes transcritos, consagran la garantía y derecho humano de seguridad jurídica, misma que consiste básicamente en el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas, determinadas en la ley, a que debe sujetarse todo acto de autoridad, para poder generar una afectación válida en la esfera del gobernado, esfera que se integra por la suma de los derechos subjetivos.

Ello implica que todo acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo como gobernado, sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no puede ser válido a la luz del Derecho.

192

Asimismo, dentro de las garantías y derechos humanos de seguridad jurídica a que todo individuo tiene derecho, tiene singular relevancia, la garantía y derecho humano del debido proceso legal, contenida en el artículo 14 constitucional, la cual consiste, como se dijo en apartados anteriores, en que nadie podrá ser privado de la vida, libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Por lo que se refiere a la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 constitucional, para cumplir con ella es necesario que cualquier acto de molestia provocado por el Poder Público tenga como origen un mandamiento escrito, que el mismo sea emitido por autoridad competente, la cual tiene la obligación de fundar y motivar la causa legal del procedimiento.

Dicha garantía de legalidad, en relación con las fracciones IV y V del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, implica que el acto se emita por autoridad competente, es decir, expresamente facultada para ello por la ley, así como la obligación para dicha autoridad de apoyar sus actos de molestia en una ley exactamente aplicable al caso concreto, lo cual constituye un requisito estrictamente indispensable para respetar la garantía de legalidad y que se hace consistir en que el acto de molestia esté debidamente fundado y motivado.

En este sentido, la garantía de legalidad, obliga a las autoridades administrativas a fundar y motivar sus actos, citando las disposiciones legales aplicables al caso y las razones de su aplicabilidad, a efecto de que el gobernado pueda formular adecuadamente sus defensas.

La fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad, que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley de manera expresa les confiere, principio que ha sido acogido por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es más, conforme también lo ha establecido nuestro Máximo Tribunal, las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, o sea, que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia no debe derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución clara y precisa.

Ahora bien, en materia fiscal, la obligación consistente en fundar y motivar los actos de autoridad y que los mismos ostenten la firma de funcionario competente, se encuentran previstas en las fracciones IV y V del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, mismo que a la letra dispone lo siguiente:

"Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:

(...)

IV. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

V. Ostentar la firma de funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos que permitan su identificación.

[...]

En este orden de ideas, el fundar un acto impone a la autoridad administrativa la obligación de que al emitir dicho acto ésta cite con precisión, los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir los supuestos normativos en los que encuadra, además de citar con precisión los cuerpos legales y preceptos que lo legitimen a actuar.

Para efectos de que se entienda cumplida dicha obligación, es necesario que los supuestos normativos a que se hace referencia sean citados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos y fracciones que resulten aplicables al caso concreto.

B. Ahora bien, la autoridad demandada en el oficio de observaciones 900-05-03- 2012-69836, al momento de fundar sus actos establece en su parte conducente lo siguiente:

"(...)

Artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, vigente en 1985 y en relación con los artículos 64 y Segundo Transitorio primer párrafo, fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero de 2002 vigente a partir del mismo día de su publicación respecto a los estados financieros por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, cuya exhibición y revisión de papeles de trabajo se efectuó el día 16 de julio de 2010, con el L.C. José Luis Villalobos Zuazua, en su carácter de Representante Legal del C.P. Gustavo Gabriel Llamas Monjardín y con relación a las contribuciones de la que es sujeto directo consistente en el Impuesto sobre la Renta; con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 4, 7, fracciones I, VII, XII y XVIII, 8 fracción II y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1° de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del siguiente al de su publicación; 1, 2, primer párrafo,

apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo fracción XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20 primer párrafo, Apartado A, fracciones IX, X y XIII, Apartado B, fracción II, párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 5 y 21, primer párrafo Apartado E, fracción II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto, por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y el 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el artículo Primero Transitorio de los citados Decretos; así como en los artículos 6, primer párrafo, 33 último párrafo, 38, 42, primer párrafo, fracciones II, y IV y antepenúltimo párrafo, 52 y 52-A, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente y, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 primer párrafo, fracción IV y 63 del propio Código Fiscal de la Federación.

[...]

De la anterior transcripción se desprende que el oficio de observaciones 900-05-03-2012-69836 no se encuentra debidamente fundado, toda vez que la autoridad demandada únicamente citó la fracción IV del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, omitiendo citar la fracción I, mismo que a la letra señala lo siguiente:

"Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliar, se estará a lo siguiente:

(...)

VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 47 -

195

plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código.

[...]"

Del numeral antes transcrito se desprende que el oficio de observaciones se notificara en términos del artículo 48 fracción I del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual era necesario señalar la fracción I del numeral en cita, pues en él está prevista la facultad de la autoridad demandada para notificar el oficio de observaciones, por lo tanto, el no haberlo citado viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV del ordenamiento en cita:

Lo anterior es así, en virtud de que en la fracción I del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, se encuentra la facultad de notificar el oficio de observaciones (hecho que denota también la ilegalidad de las constancias de notificación de fecha 17 y 18 de diciembre de 2012 al no señalar dicho dispositivo legal) violando con ello el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

En consecuencia, si la autoridad demandada hubiera fundado su actuación en la fracción I del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, mi representada hubiera tenido certeza de que la autoridad estaba actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley, entre los cuales se encuentra la facultad de notificar el oficio de observaciones, sin perjuicio de que se invoquen otras disposiciones legales, acuerdos o decretos que a su vez le otorgan facultades a la autoridad para realizar ese tipo de actos, pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión.

Bajo esa tesitura, si la autoridad demandada en el oficio de observaciones 900-05-03-2012-69836, fue omisa en citar la fracción I del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, dicha omisión demuestra una indebida fundamentación, en razón de que en tal fracción se prevé la facultad que tiene la autoridad para notificar el oficio de observaciones, con lo que se deja a mi representada en estado de indefensión, pues la misma desconoce si la autoridad demandada está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos, violando con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV y V del Código Fiscal de la Federación, en relación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

196

Lo anterior tiene sustento con las siguientes tesis emitidas por este H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

"COMPETENCIA MATERIAL.- LA AUTORIDAD PARA FUNDAR EN LA CIDEF DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE, DEBE CITAR EL ARTÍCULO 42 PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- En el primer párrafo del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, se encuentra la facultad de ejercicio de la autoridad de iniciar un procedimiento de fiscalización sin la venia del gobernado, esto es, es una atribución de imperio en la que a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para proporcionar información a otras autoridades fiscales estarán facultadas para hacerlo por cualquiera de los medios que dicho numeral prevé, pues el mismo regula una cuestión de competencia por materia. De esta forma, si la autoridad funda su actuación en el artículo 42, párrafo primero, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente tiene certeza de que la autoridad está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley, puesto que en ese numeral se otorga a la autoridad la facultad material para ejercer sus facultades de comprobación, sin perjuicio de que se invoquen otras disposiciones legales, acuerdos o decretos que a su vez le otorgan facultades a la autoridad para realizar ese tipo de actos; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión. En ese sentido, si en la resolución que ordena el inicio del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal, no cita el primer párrafo y la fracción respectiva del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es incorrecto que únicamente invoque la fracción II, en razón de que en tal fracción no se prevé la facultad para emitir ese tipo de actos, sino en su primer párrafo y, por ende, sólo así otorgará al particular plena certeza de que está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos. Por tanto, conforme a los criterios reiterados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cita con precisión, el artículo, párrafo, apartado, fracción, inciso o el subinciso correspondiente, o en su caso, no transcribe el fragmento de la norma relativa si ésta resulta compleja, que le concede la facultad de emitir el acto de molestia, el particular queda en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, ya que desconoce si la autoridad que originó aquél, tiene atribuciones para actuar en el sentido que lo hizo, por lo que en estos supuestos, debe declararse la nulidad lisa y llana de las liquidaciones impugnadas al ser fruto de actos viciados desde su origen. (4)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1399/07-03-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Teresa de Jesús Islas Acosta.- Secretario: Lic. Ernesto Rodríguez Anaya."

"COMPETENCIA POR MATERIA.- PARA FUNDARLA DEBIDAMENTE EN LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE CULIACÁN, DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEBE CITAR EL ARTÍCULO 42, PRIMER PÁRRAFO, Y LA FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- En el primer párrafo del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, se encuentra la facultad de ejercicio de la autoridad de iniciar un procedimiento de fiscalización sin la venia del gobernado, esto es, de la atribución e imperio en la que a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para solicitar información a otras autoridades, por cualquiera de los medios que dicho numeral prevé, pues el mismo regula una cuestión de competencia por materia. De esta forma, si la autoridad fiscal funda su actuación en el artículo 42, párrafo primero, tracción III, del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente tiene certeza de que la autoridad está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley, puesto que en ese numeral se otorga a la autoridad la facultad material para ejercer sus facultades de comprobación, sin perjuicio de que se invoquen otras disposiciones legales, acuerdos o decretos que a su vez le otorgan facultades a la autoridad para realizar ese tipo de actos; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión. En ese sentido, si en la resolución que ordena el inicio del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal, no cita el primer párrafo y la tracción respectiva del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es incorrecto que únicamente invoque la tracción III, en razón de que en tal tracción no se prevé la facultad para emitir ese tipo de actos, sino en su primer párrafo y, por ende, sólo así otorgara al particular plena certeza de que está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos. Por tanto, conforme a los criterios reiterados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cita con precisión, el artículo, párrafo, apartado, tracción, inciso o el subinciso correspondiente, o en su caso, no transcribe el fragmento de la norma relativa si esta resulta compleja, que le concede la facultad de emitir el acto de molestia, el particular queda en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, ya que desconoce si la autoridad que originó aquel, tiene

198

atribuciones para actuar en el sentido que lo hizo, por lo que en estos supuestos, debe declararse la nulidad lisa y llana de la liquidación impugnada al ser fruto de actos viciados desde su origen.-(6)-

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2344/07-03-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de marzo de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Teresa de Jesús Islas Acosta.- Secretario: Lic. Ernesto Rodríguez Anaya."

(Énfasis añadido)

En virtud de las tesis transcritas anteriormente, resulta inconcuso que de ninguna manera puede considerarse que en el presente caso que el oficio de observaciones 900-05-03-2012-69836 se encuentra fundado y motivado debidamente, ya que para que pueda tenerse por satisfecho el requisito de fundamentación legal, previsto tanto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, es estrictamente necesario que dicho acto dirigido a la hoy actora, esté basado en una disposición normativa general, es decir, que la misma prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, en otras palabras, que exista una ley que lo autorice y por ende, que la autoridad la cite correctamente.

Esto es así porque la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad.

Lo que es más, conforme también lo ha establecido nuestro Máximo Tribunal, las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, o sea, que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia no debe derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución clara y precisa.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, al haber quedado plenamente demostrado que en el oficio de observaciones 900-05-03-2012-69836, la autoridad demandada no acreditó en norma jurídica alguna el poseer facultades suficientes para notificar el oficio de observaciones, resulta evidente que tampoco puede considerarse cumplido el requisito de que exista un acto de autoridad competente que motive la causa legal del procedimiento.

La anterior obligación se encuentra sustentada por la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 57/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al respecto señala lo siguiente:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA,



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 49 -

199

DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimitad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

200

Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno.

(Énfasis añadido)

Así las cosas, atendiendo a la Jurisprudencia antes transcrita, se puede apreciar que para cumplir con los requisitos de debida fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 38 fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación, es estrictamente necesario que la autoridad fiscal, al emitir los actos de molestia dirigidos a los contribuyentes, invoque las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio, lo cual significa que de ninguna manera puedan considerarse dichos requisitos como innecesarios y excesivos, pues considerar que es innecesario y excesivo que la autoridad fiscal señale con precisión, los preceptos contenidos en Ley, párrafo, fracciones, incisos o subincisos de los mismos, sería permitir que la autoridad fiscal fundara sus actuaciones en total desapego a la Ley, pues se trata de un requisito constitucional.

Asimismo, resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial de la Federación, misma que a la letra establece lo siguiente:

"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma acuerdo o decreto que invoque o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.

Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Tercer Circuito, 17 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el martes diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Miguel Ángel García Domínguez, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 10/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede. El señor Ministro Miguel Ángel García Domínguez integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud del Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. Ausentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, José Antonio Llanos Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro."

(Énfasis añadido)

Por lo anterior, en el caso que nos ocupa, al haber quedado plenamente demostrado que en el oficio de observaciones 900-05-03-2012-69836, la autoridad demandada no acreditó en norma jurídica alguna el poseer facultades suficientes para notificar el oficio de observaciones, resulta evidente que tampoco puede considerarse cumplido el requisito de que exista un acto de autoridad competente que motive la causa legal del procedimiento.

Derivado de lo anterior, es claro que la autoridad demandada dejó de aplicar debidamente lo dispuesto por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo que lo procedente será que esa H. Sala Fiscal declare su nulidad.

OCTAVO. ILEGALIDAD DE LA RESOLUCION IMPUGNADA AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, EN CONTRAVENCIÓN CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38, FRACCIONES IV Y V DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Por último, en el presente concepto de impugnación, se demostrará la ilegalidad de la resolución impugnada contenida en el oficio 900 05-2013-48229 pues la autoridad demandada no fundó debidamente su competencia en el Código Fiscal de la Federación, contraviniendo de éste modo lo dispuesto por el artículo 38, fracciones IV y V del Código Fiscal de la



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 51 -

202

Federación, en relación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A. En primer lugar, solicito tener por reproducido como si a la letra se insertase lo expuesto en el apartado A. del Concepto de Impugnación inmediato anterior respecto a la fundamentación y motivación de la competencia de los actos de autoridad.

B. Ahora bien, en la resolución impugnada contenida en el oficio 900 05-2013-48229, la autoridad demanda cita como fundamento para sus actuaciones los artículos 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, fracciones I, VII, XII y XVIII, 6°, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracciones XXXI y XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20 primer párrafo, apartado A, fracciones IX, X y XIV, Apartado B, fracción II; párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 5 y 21, primer párrafo Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; así como en los artículos 6, primer párrafo, 17-A, 20 Bis, 21, 33 último párrafo, 38, 42, primer párrafo, fracciones II, y IV y antepenúltimo párrafo, 48 primer párrafo, fracciones I, II, III, y IX, 50, 51, 52, 52-A, 63, 70, 76 del Código Fiscal de la Federación, que establece:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

"Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables."

"Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

(...)

XI.- Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;

XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos."

Ley del Servicio de Administración Tributaria:

"Artículo 1. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta Ley."

203

"Artículo 2. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria."

El Servicio de Administración Tributaria implantará programas y proyectos para reducir su costo de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes."

Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a contribuciones, se entenderán comprendidos los aprovechamientos federales."

"Artículo 3. El Servicio de Administración Tributaria gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones."

"Artículo 4. El domicilio del Servicio de Administración Tributaria será la Ciudad de México, donde se ubicarán sus oficinas centrales. Asimismo, contará con oficinas en todas las entidades federativas y sus plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de garantizar una adecuada desconcentración geográfica, operativa y de decisión en asuntos de su competencia conforme a esta Ley, al reglamento interior que expida el Presidente de la República y a las demás disposiciones jurídicas que emanen de ellos."

"Artículo 7. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

I. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable;

(...)

VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;

(...)

XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales."

(...)

XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.”

“Artículo 3. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Servicio de Administración Tributaria contará con los órganos siguientes:

(...)

III. Las unidades administrativas que establezca su reglamento interior.

[...]

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria:

“Artículo 1. El Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República y los programas especiales y asuntos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar y coordinar en las materias de su competencia.”

“Artículo 2. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria contará con las siguientes unidades administrativas:

(...)

B. Unidades Administrativas Centrales:

(...)

IV. Administración General de Grandes Contribuyentes:

(...)

e) Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

(...)

Las Administraciones Generales estarán integradas por sus titulares y por Administradores Centrales, Coordinadores, Administradores, Subadministradores, Jefes de Departamento, Enlaces, Supervisores, Auditores, Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados Tributarios, Ejecutores, Notificadores, Verificadores, Oficiales de Comercio Exterior, personal al servicio de la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera y por los demás servidores públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.”

“Artículo 9. Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

(...)

XXXI. Imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia.

(...)

XXXVII.- Notificar los actos que emiten relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas.

(...)

Las Administraciones Generales y las Administraciones Centrales que de ellas dependan, así como las Coordinaciones, las Administraciones y las Subadministraciones que dependan de éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, excepto la Administración Central de Operación y Servicios Tecnológicos, las Administraciones para el Destino de Bienes, así como las Administraciones de Operación de Recursos y Servicios y las Subadministraciones de Recursos y Servicios, cuyas sedes podrán ubicarse fuera de la Ciudad de México.”

“Artículo 10. Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas; los Coordinadores, y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I. Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este Reglamento.”

“Artículo 20. Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

A. Competencia:

(...)

IX. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 53 -

206

trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales.

(...)

X. Revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos.

(...)

XIV. Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar los derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo.

B. Sujetos y entidades:

(...)

II. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado como controladoras, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan.

Las unidades administrativas de las que sean titulares los servidores públicos que a continuación se indican estarán adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes:

207

5. Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

I...I

"Artículo 21. Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las facultades que a continuación se precisan:

(...)

E. A la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y a las unidades administrativas adscritas a la misma:

(...)

I. Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

Las señaladas en el apartado A, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, L, LII, LIII, LIV, LV, LXVI y LXVII del artículo anterior de este Reglamento.

I...I

Código Fiscal de la Federación:

"Artículo 6. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurren."

"Artículo 17-A. El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes.

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.

Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este Artículo, cuando las

leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el período de que se trate.

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de éstas, determinado en los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible ni acreditable.

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, serán las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este Código, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio, a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada, se considerará el período comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización.

Tratándose de cantidades que se establezcan en este Código que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que hayan entrado en vigor.

Para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior.

El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación.

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo."

"Artículo 20-Bis. El Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de este Código, que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se sujeta a lo siguiente:

I. Se cotizarán cuando menos los precios en 30 ciudades, las cuales estarán ubicadas en por lo menos 20 entidades federativas. Las ciudades seleccionadas deberán en todo caso tener una población de 20,000 o más habitantes, y siempre habrán de incluirse las 10 zonas conurbadas o ciudades más pobladas de la República.

II. Deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando menos 1000 productos y servicios específicos agrupados en 250 conceptos de consumo, los cuales abarcarán al menos 35 ramas de los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios, conforme al catálogo de actividades económicas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

III. Tratándose de alimentos las cotizaciones de precios se harán como mínimo tres veces durante cada mes. El resto de las cotizaciones se obtendrán una o más veces mensuales.

IV. Las cotizaciones de precios con las que se calcule el Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes, deberán corresponder al período de que se trate.

V. El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calculará utilizando la fórmula de Laspeyres. Se aplicarán ponderadores para cada rubro del consumo familiar considerando los conceptos siguientes: Alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y enseres domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento; otros servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicará en el Diario Oficial de la Federación las entidades federativas, zonas conurbadas, ciudades, artículos, servicios, conceptos de consumo y ramas a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, así como las cotizaciones utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor."

"Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno.

Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el período a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el período de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 55 -

210

para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5, se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.

Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere el artículo 67 de este Código, supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se refiere el párrafo séptimo de este artículo, los gastos de ejecución y las multas por infracción a disposiciones fiscales.

En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal.

Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia.

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.

Cuando los recargos determinados por el contribuyente (sic) sean inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente.

El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá independientemente de los demás conceptos a que se refiere este artículo. Para tal efecto, la autoridad requerirá al librador del cheque para que, dentro de un plazo de tres días, efectúe el pago junto con la mencionada indemnización del 20%, o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas documentales procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la institución de crédito. Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los demás accesorios que correspondan, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere.

Se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, se causarán además

211

los recargos que establece el artículo 66 de este Código, por la parte diferida.

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere este artículo.

No causarán recargos las multas no fiscales.

Las autoridades fiscales podrán condonar total o parcialmente los recargos derivados de un ajuste a los precios o montos de contraprestaciones en operaciones entre partes relacionadas, siempre que dicha condonación derive de un acuerdo de autoridad competente sobre las bases de reciprocidad, con las autoridades de un país con el que se tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación, y dichas autoridades hayan devuelto el impuesto correspondiente sin el pago de cantidades a título de intereses.

En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de la actualización de las contribuciones o condonar total o parcialmente los recargos correspondientes."

"Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

(...)

Cuando las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales hagan referencia u otorguen atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria, cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, su Reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos."

"Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:

I. Constar por escrito en documento impreso o digital.

Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios.

II. Señalar la autoridad que lo emite.

III. Señalar lugar y fecha de emisión.

IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

V. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas, que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los funcionarios pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Segundo del Título I denominado "De los Medios Electrónicos" de este ordenamiento.

En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el funcionario competente podrá expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el documento impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución.

Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el sello resultado del acto de firmar con la firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, que se encuentre contenida en el documento impreso, producirá los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.

Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que contenga la impresión del sello resultado de la firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, será verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del autor.

El Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios a través de los cuales se podrá comprobar la integridad y autoría del documento señalado en el párrafo anterior.

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad."

"Artículo 42. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

(...)

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que

exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

(...)

IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente."

"Artículo 52. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I.- Que el contador público que dictamine esté registrado ante las autoridades fiscales para estos efectos, en los términos del Reglamento de este Código. Este registro lo podrán obtener únicamente:

a) Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador público registrado ante la Secretaría de Educación Pública y que sean miembros de un colegio profesional reconocido por la misma Secretaría, cuando menos en los tres años previos a la presentación de la solicitud de registro correspondiente.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior, adicionalmente deberán contar con certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos, registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública y sólo serán válidas las certificaciones que le sean expedidas a los contadores públicos por los organismos certificadores que obtengan el Reconocimiento de Idoneidad que otorgue la Secretaría de Educación Pública; además, deberán contar con experiencia mínima de tres años participando en la elaboración de dictámenes fiscales.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 57 -

214

b) Las personas extranjeras con derecho a dictaminar conforme a los tratados internacionales de que México sea parte.

El registro otorgado a los contadores públicos que formulen dictámenes para efectos fiscales, será dado de baja del padrón de contadores públicos registrados que llevan las autoridades fiscales, en aquellos casos en los que dichos contadores no formulen dictamen sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice o no formulen declaratoria con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, en un periodo de cinco años.

El periodo de cinco años a que se refiere el párrafo anterior, se computará a partir del día siguiente a aquél en que se presentó el último dictamen o declaratoria que haya formulado el contador público.

En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al contador público, al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión. El contador público podrá solicitar que quede sin efectos la baja del padrón antes citado, siempre que lo solicite por escrito en un plazo 30 días hábiles posteriores a la fecha en que reciba el aviso a que se refiere el presente párrafo.

II. Que el dictamen o la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado, se formulen de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de este Código y las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del contador público, el trabajo que desempeña y la información que rinda como resultado de los mismos.

III. Que el contador público emita, conjuntamente con su dictamen, un informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente, en el que consigne, bajo protesta de decir verdad, los datos que señale el Reglamento de este Código.

Adicionalmente, en dicho informe el contador público deberá señalar si el contribuyente incorporó en el dictamen la información relacionada con la aplicación de algunos de los criterios diversos a los que en su caso hubiera dado a conocer la autoridad fiscal conforme al inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código.

IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos

215

relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios.

Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión; para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento:

a) Determinada la irregularidad, ésta será notificada al contador público registrado en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir de la terminación de la revisión del dictamen, a efecto de que en un plazo de quince días siguientes a que surta efectos dicha notificación manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes.

La autoridad fiscal admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Las pruebas se valorarán en los términos del artículo 130 de este Código.

b) Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fracción anterior, con vista en los elementos que obren en el expediente, la autoridad fiscal emitirá la resolución que proceda.

c) La resolución del procedimiento se notificará en un plazo que no excederá de doce meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que se agote el plazo señalado en la fracción I que antecede.

Las sociedades o asociaciones civiles conformadas por los despachos de contadores públicos registrados, cuyos integrantes obtengan autorización para formular los dictámenes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán registrarse ante la autoridad fiscal competente, en los términos del Reglamento de este Código.

Quando la formulación de un dictamen o declaratoria se efectúe sin que se cumplan los requisitos de independencia por parte del contador público o por la persona moral de la que sea socio o integrante, se procederá a la cancelación del registro del contador público, previa audiencia, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de este Código.

Último párrafo. (Se deroga)"

"Artículo 52-A.- Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el Reglamento de este Código, estarán a lo siguiente:

(...)

II. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 53-A de este Código, o dicha información y documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación.

[...]"

De los artículos transcritos se advierte que de manera por demás ilegal la autoridad demandada cita el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, sin especificar qué parte en específico le era aplicable al caso concreto de mi representada.

En efecto, el hecho de que la autoridad demandada haya señalado el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación de manera general, demuestra una indebida fundamentación y motivación, pues existen diversas facultades en el mismo, razón por la cual era obligatorio en términos del artículo 38 fracción IV y V del Código Fiscal de la Federación, señalarla con precisión la parte que le era aplicable al caso concreto.

En este tenor, resulta inconcuso para que un acto se encuentre debidamente fundado, los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, deberán ser señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones, párrafos, renglones y preceptos aplicables, pues lo contrario significaría que esta indebida fundado el oficio emitido y por ende se transgrede lo dispuesto por el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 Constitucional.

Por ende, si al momento de fundar su competencia para determinar el crédito fiscal, la autoridad fiscal lo hace de manera general citando el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, esto demuestra una clara violación al artículo 38 fracción IV y V del mismo ordenamiento, pues es necesario precisar que párrafo, fracciones o inciso le resulten aplicables al caso concreto.

Por ende, si la autoridad demandada hubiera fundado su competencia material en el primer párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, mi representada hubiera tenido certeza de que la autoridad estaba actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley, puesto que en ese párrafo se especifica la facultad de la autoridad fiscal para notificar el crédito fiscal, toda vez que los demás párrafos se refieren a otros supuestos.

En ese sentido, si la autoridad demandada en la resolución impugnada, contenida en el oficio 900-05-2013-48229, no citó el primer párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación y únicamente invoca el artículo 50 de manera general, denota una indebida fundamentación por lo que hace a su competencia material.

Lo anterior, en razón de que en primer párrafo del artículo en comento otorga la facultad a la autoridad para notificar el crédito fiscal, con lo que se deja a mi representada en estado de indefensión, pues la misma desconoce si la autoridad demandada está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos, violando con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV y V del Código Fiscal de la Federación, en relación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirve de sustento lo señalado en los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, mismos que se transcriben a continuación:

"NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA CONTRIBUCIONES OMITIDAS Y MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS. SE ENCUENTRAN INMERSOS DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ESTABLECE PARA LAS AUTORIDADES FISCALES QUE PRACTIQUEN VISITAS DOMICILIARIAS O EJERZAN LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRECEPTO 48 DEL PROPIO ORDENAMIENTO Y DETERMINEN CONTRIBUCIONES OMITIDAS, LA OBLIGACIÓN DE EMITIR Y NOTIFICAR PERSONALMENTE SU RESOLUCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES. Ahora bien, como la notificación no sólo constituye la forma en que se da a conocer la resolución administrativa correspondiente, sino que es un requisito de validez de todo el procedimiento del que deriva, a partir de que surte efectos legales comienza la eficacia del acto. Por tanto, se concluye que tanto la notificación de la resolución que determina

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 59 -

218

contribuciones omitidas como el momento en que ésta surte efectos se encuentran inmersos dentro del referido plazo.

SEGUNDO. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Amparo directo 735/2009. Constructora Uriegas, S.A. de C.V. 11 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Guzmán López. Secretario: Carlos Alberto Chávez López.

Por lo anterior, la autoridad demandada, al no haber citado el primer párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, incurre en una indebida fundamentación y motivación, violando con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV y V del mismo ordenamiento.

En consecuencia, es claro que la autoridad demandada dejó de aplicar debidamente lo dispuesto por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 14 y 16 Constitucionales, razón por la cual lo procedente será que esa Sala Fiscal con fundamento en los artículos 51, fracciones II y III y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declare su nulidad lisa y llana.

Finalmente, ofrezco por parte de mi mandante las siguientes:

AMPLIACIÓN DE DEMANDA

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN

UNICO.- ILEGALIDAD DE LOS OFICIOS 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078 AL RESULTAR VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En el presente concepto de impugnación se evidenciará que los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078 que exhibió la autoridad demandada en su contestación, son ilegales, al no encontrarse debidamente fundados y motivados, contraviniendo así dispuesto por el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior puesto que si bien en dichos oficios supuestamente constan los fundamentos y motivos que otorgan facultades a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, para nombrar a sus funcionarios, expedir identificaciones y ejercer facultades de comprobación, únicamente señalan las actividades que los notificadores pueden realizar, pero no señalan los fundamentos legales que contienen las facultades que se delegaron a dichos funcionarios públicos.

Al respecto, a través de las constancias de identificación que supuestamente se contienen en dichos oficios, los supuestos funcionarios de la autoridad fiscal, notificaron los oficios que a continuación se detallan:

1. El supuesto notificador Mario Salinas Pérez, realizó la ilegal notificación del oficio 900-05-2011-385, a través del cual se requirió directamente a mi mandante diversa información y documentación relacionada con el ejercicio fiscal de 2006, supuestamente identificándose con la constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2011-50.

2. El supuesto notificador Jaime Ortiz Sandoval, realizó la ilegal notificación del oficio 900-05-03-2012-54438, a través del cual se requirió directamente a mi mandante diversa información y documentación complementaria relacionada con el ejercicio fiscal de 2006, supuestamente identificándose con la constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-7682.

3. El supuesto notificador Ramón García Escalante, realizó la ilegal notificación del oficio 900-05-03-2012-69836, a través del cual se dieron a conocer a mi mandante las observaciones resultado del procedimiento de fiscalización por el ejercicio fiscal de 2006, supuestamente identificándose con la constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-58264.

4. El supuesto notificador Ramón García Escalante, realizó la ilegal notificación del oficio 900-05-2013-48229, a través del cual se determinó a cargo de mi mandante un crédito fiscal en cantidad total de \$2,636'428,880.12, por concepto de impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas, todo ello correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, supuestamente identificándose con la constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2013-25078.

Bajo esta tesitura, al resultar ilegales dichas constancias de identificación contenidas en los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078, resulta evidente que las resoluciones impugnadas en la demanda de nulidad que dio origen al juicio en que se actúa, son ilegales, al constituir frutos de actos viciados.

A. En primer lugar, es importante señalar que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen lo siguiente:

"Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(...)"

"Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

..."

Asimismo, los mencionados derechos constitucionales han sido reproducidos por el Derecho Tributario en el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, que para mayor ilustración nos permitimos transcribir a continuación:

"Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:

...

IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

..."

En México, los derechos fundamentales son el conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en la Constitución Política para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas para que éstas puedan conducir una existencia humana desde diversos ámbitos que por la vaguedad textual en las formulaciones de las normas que lo contienen carecen de contenido.

Así pues, como es del conocimiento de esa H. Sala, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º Constitucional, los derechos fundamentales se pueden encontrar en cualquier tratado internacional ratificado por el Estado mexicano, se refiera o no a derechos humanos en su denominación o contenido.

Asimismo, es importante destacar que los derechos fundamentales se hacen extensivos a las personas jurídicas colectivas, situación que ha sido plenamente reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese sentido, se analizan las violaciones a los derechos fundamentales de la parte actora en las que incurre la actuación de la autoridad hacendaria.

Por su parte, el derecho humano y garantía de seguridad jurídica se encuentran insertos en los artículos 16 Constitucional e imponen el mandato hacia toda autoridad de que en ningún momento podrán ocasionar molestias en la esfera jurídica de los gobernados, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Reitera lo anterior diversas tesis jurisprudenciales, las cuales son del tenor siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No:
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 61 -

7

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos.

Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos.

Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos.

Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos".

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.- Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.

Volumen CXXXII, pág. 49. Amparo en revisión. 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Volumen CXXXIII, pág. 63. Amparo en revisión. 9598/67. Oscar Leonel Velasco Casas. 1o. de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Alberto Orozco Romero.

Volumen CXXXIII, pág. 63. Amparo en revisión. 7228/67. Comisariado Ejidal del Poblado San Lorenzo Tezonco, Ixtapalapa,

D.F. y otros. 24 de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.

Séptima Época, Tercera Parte, Volumen 14, pág. 37. Amparo en revisión. 3717/69. Elías Chahín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 28, pág. 111. Amparo en revisión. 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73, pág. 52". (Énfasis de la actora).

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad

8

debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Volumen CXXXII, página 49. Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Secretario: José Tena Ramírez.

Volumen 14, página 37. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Secretario: Juan Díaz Romero.

Volumen 28, página 111. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez.

Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros y acumulado. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Fausta Moreno Flores.

Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: Luis Tirado Ledesma".

De conformidad con lo anterior, para garantizar el cumplimiento del derecho humano a la seguridad jurídica, todo acto de autoridad que deba notificarse a los particulares debe de estar debidamente fundado y motivado, para que cumpla con los requisitos mínimos de legalidad, entendiéndose por lo primero, que dicho acto debe apoyarse en una norma jurídica general y abstracta, que sea exactamente aplicable al caso y por lo segundo, que exprese el acto de razonamiento que formuló, por medio del cual llegó a la conclusión de que la situación concreta se ajusta a la hipótesis normativa.

B. Ahora bien, los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078 carecen de la debida fundamentación, y para demostrarlo, se reproduce a continuación a la parte en la que la autoridad demandada fundó la competencia y actuación de los notificadores en los siguientes términos:

"(...)

Esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 7, primer párrafo, fracciones VII, XII, XVIII, 8, primer párrafo,

fracción III y tercer transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1 de julio de 1997 y modificada mediante decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9 primer párrafo, fracciones III, VII, XXXVII y penúltimo párrafo, 10, primer párrafo, fracciones I y IV, 20 primer párrafo, Apartado A, fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XVI, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI y XLII, párrafos quinto y sexto numeral 5 y 21, primer párrafo apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, cuya vigencia inició el 23 de diciembre de 2008, conforme al Artículo Primero Transitorio del mismo Decreto, modificado por el Decreto por que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010, en vigor a partir del 20 de abril de 2010, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio y 33 último párrafo del Código Fiscal de la Federación, se expide la presente constancia de identificación que acredita la personalidad del (la) C. ... cuya fotografía y firma aparecen al margen izquierdo del presente documento, como servidor público del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... con cargo de ... y filiación número..."

El ... mencionado está facultado (a) para practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen y demás actos de fiscalización que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, incluso iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y levantar el acta correspondiente, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, incluyendo los que se causen por entrada a territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal y las relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales; verificar en su caso y determinar la clasificación arancelaria de las mercancías de procedencia extranjera, así como comprobar de conformidad con los Acuerdos, Convenios o Tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de los importadores, exportadores o productores; la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte, incluso lo referente a vehículos de procedencia extranjera y aeronaves y embarcaciones, además para asegurar, embargar y retener las mercancías de procedencia extranjera, incluyendo los vehículos cuya legal importación, transporte, manejo, tenencia o estancia en el país no se acredite; verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias de las mercancías de comercio exterior previa presentación de la orden que para tales efectos expida la

autoridad fiscal competente; notificar todos los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación de esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, así como de las unidades administrativas dependientes de la misma y practicar el embargo precautorio o aseguramiento en los casos en que la Ley lo señale, así como levantarlo cuando proceda; vigilar la destrucción de mercancías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente..."

[...]"

De la anterior transcripción se puede evidenciar que en los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078, se señalaron diversas disposiciones para internar fundar y motivar debidamente los mismos.

Sin embargo, como se demostrará en los siguientes apartados, la autoridad demandada citó únicamente los preceptos legales que dan facultades a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para expedir las citadas constancias de identificación y para ejercer sus facultades de comprobación, más no así, los fundamentos legales que contienen las facultades que se delegaron a los funcionarios públicos que se mencionan en las constancias de identificación.

C. A efecto de demostrar la ilegalidad de las constancias de identificación mencionadas en el cuerpo del presente escrito, se estima pertinente reproducir y analizar el contenido de todos y cada uno de los preceptos legales que se citan en los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078.

En primer término, se señalan los artículos 1, 2, 3, 4, 7, primer párrafo, fracciones VII, XII, XVII, 8, primer párrafo, fracción II y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

Dichos preceptos legales establecen lo siguiente:

"Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta Ley."

"Artículo 2o. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 63 -

11

generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria implantará programas y proyectos para reducir su costo de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a contribuciones, se entenderán comprendidos los aprovechamientos federales."

"Artículo 3o. El Servicio de Administración Tributaria gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones.

"Artículo 4o. El domicilio del Servicio de Administración Tributaria será la Ciudad de México, donde se ubicarán sus oficinas centrales. Asimismo, contará con oficinas en todas las entidades federativas y sus plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de garantizar una adecuada desconcentración geográfica, operativa y de decisión en asuntos de su competencia conforme a esta Ley, al reglamento interior que expida el Presidente de la República y a las demás disposiciones jurídicas que emanen de ellos.

"Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

...

VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;

...

XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.

XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.

[...]"

"Artículo 8o. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Servicio de Administración Tributaria contará con los órganos siguientes:

...

III. Las unidades administrativas que establezca su reglamento interior.

[...]"

12

Tercero. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente Ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.

[...]"

De los numerales antes transcritos se desprende:

- La naturaleza jurídica del Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifestándose que cuenta con atribuciones y facultades ejecutivas que establece su propia Ley.

- Que el Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.

- El Servicio de Administración Tributaria gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones.

- Que el domicilio del Servicio de Administración Tributaria será la Ciudad de México, donde se ubicarán sus oficinas centrales. Asimismo, contará con oficinas en todas las entidades federativas y sus plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de garantizar una adecuada desconcentración geográfica, operativa y de decisión en asuntos de su competencia, al reglamento interior que expida el Presidente de la República y a las demás disposiciones jurídicas que emanen de ellos.

Por otra parte, los preceptos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que se citaron en las constancias de identificación fueron los siguientes artículos:

"Artículo 1.- El Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos,

decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República y los programas especiales y asuntos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar y coordinar en las materias de su competencia.”

“**Artículo 2.-** Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria contará con las siguientes unidades administrativas:

...

B. Unidades Administrativas Centrales:

...

IV.- Administración General de Grandes Contribuyentes:

...

e) Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

...

Las Administraciones Generales estarán integradas por sus titulares y por Administradores Centrales, Coordinadores, Administradores, Subadministradores, Jefes de Departamento, Enlaces, Supervisores, Auditores, Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados Tributarios, Ejecutores, Notificadores, Verificadores, Oficiales de Comercio Exterior, personal al servicio de la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera y por los demás servidores públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.”

“**Artículo 9.-** Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

...

III.- Nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción o radicación, comisionar, reasignar o trasladar y demás acciones previstas en los ordenamientos aplicables, y conforme a los mismos, a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores que conforman las unidades administrativas a su cargo.

...

VII.- Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo, a fin de habilitarlos para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de sus facultades y autorizar la emisión de gafetes de identificación.

...

XXXVII.- Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas.

...

Las Administraciones Generales y las Administraciones Centrales que de ellas dependan, así como las Coordinaciones, las Administraciones y las

Subadministraciones que dependan de éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, excepto la Administración Central de Operación y Servicios Tecnológicos; las Administraciones para el Destino de Bienes, así como las Administraciones de Operación de Recursos y Servicios y las Subadministraciones de Recursos y Servicios, cuyas sedes podrán ubicarse fuera de la Ciudad de México.”

...

“**Artículo 10.-** Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas; los Coordinadores, y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I.- Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este Reglamento.

...

IV.- Nombrar, remover o comisionar, conforme a los ordenamientos aplicables, a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo.

[...]

“**Artículo 20.-** Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

A. Competencia:

...

V.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones, incluyendo las que se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, y para comprobar de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, inclusive en materia de origen; comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 65 -

15

obligaciones fiscales y reponer dicho procedimiento de conformidad con el Código Fiscal de la Federación.

VI.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cualquier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, relativas a la propiedad intelectual e industrial; detectar, analizar y dar seguimiento a los casos de impresión, reproducción o comercialización de documentos públicos y privados, así como la venta de combustibles, sin la autorización que establezcan las disposiciones legales aplicables, cuando tengan repercusiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o aduaneras de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como analizar y dar seguimiento a las denuncias que le sean presentadas dentro del ámbito de su competencia.

VII.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de los bienes y mercancías que vendan.

VIII.- Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes por no expedir o no entregar comprobantes de sus actividades; que los expedidos no reúnan requisitos fiscales o que los datos asentados en el comprobante correspondan a persona distinta a la que adquiere el bien o contrata el uso o goce temporal de bienes o la prestación de servicios, así como ordenar y practicar la clausura de los establecimientos de los contribuyentes en el caso de que no cuente con controles volumétricos.

IX.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales.

X.- Revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga

16

repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos.

...

XIII.- Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y de las verificaciones de origen practicadas y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante.

...

XVI.- Vigilar la destrucción o donación de mercancías incluyendo las importadas temporalmente y los bienes de activo fijo.

...

XVIII.- Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal, así como verificar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo de los contribuyentes o responsables solidarios, relativos a los casos de responsabilidad derivada de la fusión.

...

XX.- Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, a terceros relacionados con ellos y demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, los datos, informes o documentos para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional, definitivo, del ejercicio y complementarias.

...

XXIII.- Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y accesorios de carácter federal en el ámbito de su competencia.

...

XXIV.- Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento en los casos en que la Ley lo señale, así

como levantarlo cuando proceda y, en su caso, poner a disposición de los interesados los bienes.

XXV.- Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las organizaciones auxiliares del crédito, que ejecuten el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los contribuyentes o de los responsables solidarios y solicitar su levantamiento cuando así proceda.

...

XXVII.- Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos relativos a los trámites de devolución o de compensación de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, en el ámbito de su competencia.

...

XXXI.- Ordenar y practicar actos de comprobación necesarios para la obtención de la información y documentación que resulten procedentes, para proporcionarlos a las autoridades de los países con los que se tengan celebrados convenios o tratados en materia fiscal o aduanera, u otros que contengan disposiciones sobre dichas materias, e imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de los requerimientos que se formulen en los términos de esta fracción, así como solicitar a las autoridades de gobiernos extranjeros que, de conformidad con los tratados y demás instrumentos internacionales aplicables, ordenen y practiquen en su territorio las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones, incluso las relativas a la existencia de los documentos que acrediten la legal estancia y tenencia de las mercancías de comercio exterior, y los demás actos que establezcan las disposiciones aplicables.

...

XXXIV.- Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización.

XXXV.- Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo precautorio de mercancías de comercio exterior y sus medios de transporte, en los supuestos que establece la Ley Aduanera; tramitar y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, o del ejercicio de las facultades de comprobación efectuado por otras autoridades aduaneras, así como ordenar en los casos que proceda, el levantamiento del citado embargo y la entrega de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del procedimiento de que se trate, previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal; declarar que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal; liberar las garantías otorgadas respecto de la posible omisión del pago de contribuciones en mercancías

sujetas a precios estimados; notificar a las autoridades del país de procedencia la localización de los vehículos o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así como resolver acerca de su devolución y del cobro de los gastos que se hayan autorizado.

XXXVI.- Habilitar instalaciones como recintos fiscales para uso de la autoridad fiscal y aduanera, así como declarar el abandono de las mercancías que se encuentren en los patios y recintos fiscales bajo su responsabilidad.

...

XLII.- Verificar y, en su caso, determinar conforme a la Ley Aduanera, la clasificación arancelaria, así como el valor en aduana o el valor comercial de las mercancías de comercio exterior."

"Artículo 21.- Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las facultades que a continuación se precisan:

...

E. A la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y a las unidades administrativas adscritas a la misma:

I.- Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

[...]"

De las anteriores transcripciones se desprende lo siguiente:

- Que el Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República y los programas especiales y asuntos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar y coordinar en las materias de su competencia.
- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria contará con diversas unidades administrativas, entre las que se encuentran las Unidades Administrativas Centrales, como lo es la Administración General de Grandes Contribuyentes, de la que depende la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 67 -

19

• Que las Administraciones Generales estarán integradas por sus titulares y por Administradores Centrales, Coordinadores, Administradores, Subadministradores, Jefes de Departamento, Enlaces, Supervisores, Auditores, Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados Tributarios, Ejecutores, Notificadores, Verificadores, Oficiales de Comercio Exterior, personal al servicio de la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera y demás servidores públicos, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

• En el artículo 9 se señalan las facultades que son otorgadas a los Administradores Generales, entre las que se encuentran las de:

- o Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo, a fin de habilitarlos para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de sus facultades y autorizar la emisión de gafetes de identificación.
- o Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas.

• Que a los Administradores Centrales pueden ejercer algunas de las facultades que se atribuyen a los Administradores Generales, incluyendo las señaladas en el apartado que antecede.

• Que la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes se señala en el Apartado A del artículo 20 del Reglamento, y entre otras facultades, podrán:

- o Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras.
- o Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes.
- o Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los

20

fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales.

- o Revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos.
- o Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y de las verificaciones de origen practicadas y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante.

• Que entre las unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes que pueden ejercer sus facultades son las Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

De todo lo anterior podrá apreciarse que la cita de estos preceptos legales en las constancias de identificación que nos ocupan, únicamente tienen como objetivo dar a conocer al particular, los fundamentos y bases jurídicas que justifican las actuaciones del Servicio de Administración Tributaria.

Asimismo, estos preceptos legales establecen las facultades que tienen las unidades administrativas Generales y Centrales de dicha autoridad, para nombrar

y designar a sus servidores públicos, emitir las constancias de identificación de los mismas y para ejercer las facultades de comprobación que establecen las disposiciones fiscales correspondientes.

Sin embargo, es evidente que la autoridad demandada citó los preceptos legales que le otorgan facultades a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, pero no señala los fundamentos legales que contienen las facultades que se delegaron a los funcionarios públicos que se mencionan en las constancias de identificación, ya que únicamente señalan las actividades que los notificadores pueden realizar pero no los fundamentos legales que les otorgan esa atribuciones.

Es decir, para que los notificadores puedan actuar en el ámbito de sus competencias, se debieron señalar en el acto administrativo que los habilita, los preceptos legales en que se contuvieran las facultades que le están siendo delegadas, y al no hacerlo, se deja a mi representada en estado de indefensión, pues la misma desconoce si los notificadores están actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos, violando con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior tiene sustento con la siguiente jurisprudencia y tesis aislada, mismas que resultan aplicables de manera análoga en virtud de que en las mismas se señala que para que las autoridades pueda actuar, necesitan fundar y motivar los actos que les otorguen las facultades que están ejerciendo, ello puesto que el respecto a la debida fundamentación de los actos de autoridad que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en precisar exhaustivamente la competencia de la autoridad, citando al efecto la normativa que le otorga legitimación en su actuación, de tal modo que si se trata de una norma compleja, tendrán que indicarse la disposición, el apartado, la fracción, el inciso o incisos y subincisos respectivos:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA CITA ERRÓNEA DEL PÁRRAFO INVOCADO PARA FUNDAMENTARLA NO AFECTA LAS DEFENSAS DEL PARTICULAR, SI EN EL ACTO RELATIVO SE MENCIONAN LA FRACCIÓN Y LOS INCISOS DEL PÁRRAFO QUE, CON MOTIVO DE SU MODIFICACIÓN, CAMBIARON DE LUGAR. La debida fundamentación de los actos de autoridad que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en precisar exhaustivamente la competencia de la autoridad, citando al efecto la normativa que le otorga legitimación en su actuación, de tal modo que si se trata de una norma compleja, tendrán que indicarse la disposición, el apartado, la fracción, el

inciso o incisos y subincisos respectivos, lo que no sucede cuando la norma es genérica. Además, la finalidad de este valor constitucional es brindar al particular certeza en cuanto a la autoridad que ocasiona el acto de molestia y a los preceptos en que funda su proceder, para que, al conocerlos, se defienda con los medios legales existentes. Ahora bien, si una cláusula de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, como sucede con la séptima del celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, es modificada por la supresión de uno de sus párrafos, lo que en el caso ocurrió mediante decreto publicado en el indicado medio de difusión oficial el 7 de enero de 2000, lo consecuente es que se altere el orden de los demás párrafos que la conforman, de manera que si el acto de autoridad se funda en dicha cláusula y en la fracción aplicable, pero por error o equivocación se cita o menciona el orden o lugar del párrafo suprimido, debiendo ser el actual, ello no implica infracción a la garantía de la debida fundamentación ni afecta la defensa del gobernado, si el acto de autoridad refiere o cita la fracción y los incisos que establecen las facultades respectivas, que antes correspondían al párrafo que cambió de orden, pues tal contenido no fue modificado, ya que el particular podrá conocer los preceptos que le otorgan competencia a la autoridad, estando así en aptitud de defenderse como estime pertinente.

Contradicción de tesis 127/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 17 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Tesis de jurisprudencia 141/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho.

Época: Novena Época Registro: 168718 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 141/2008 Página: 441

"AUTORIDADES ADUANERAS. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁMITES Y ASUNTOS LEGALES CARECE DE EXISTENCIA JURÍDICA Y DE COMPETENCIA MATERIAL PARA EMITIR ACTOS DE MOLESTIA. Para estimar satisfecha la garantía de fundamentación legal establecida en los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 16 constitucional, resulta indispensable que en el texto de la ley se contenga la cita del precepto o preceptos legales que justifican la existencia jurídica de la autoridad y la competencia material para emitir actos de molestia en perjuicio de cualquier particular. Por tanto, para considerar satisfecho dicho requisito de legalidad, y que el particular esté en aptitud de conocer si la autoridad emisora se

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 69 -

23

encuentra o no facultada para emitir resoluciones determinantes de créditos fiscales, el funcionario que emitió el acto de molestia con el carácter de jefe de departamento de Control de Trámites y Asuntos Legales de la aduana, debe apoyar su actuación en la cita del precepto o preceptos legales que justifiquen su existencia jurídica y su competencia material para emitir actos de molestia, porque aun cuando el artículo 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria menciona como autoridad aduanera al citado jefe de departamento, sin embargo, la referencia que se hace en la resolución determinante del crédito fiscal de que el acto se emite en su calidad de encargado del Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la aduana, obliga a la autoridad a apoyar su actuación en la cita del precepto o preceptos que establezcan la existencia jurídica de dicho cargo; y de no resultar así, el acto emitido por la autoridad aduanera carece de fundamentación, lo cual origina la nulidad de la resolución impugnada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Revisión fiscal 77/2004. Administrador Local Jurídico de Torreón, en el Estado de Coahuila. 7 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Secretario: Jacinto Faya Rodríguez.

Revisión fiscal 80/2004. Administrador Local Jurídico de Torreón, en el Estado de Coahuila. 15 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo. Secretario: José Vicente Díaz Vivaldo.

Revisión fiscal 94/2004. Administrador Local Jurídico de Torreón, en el Estado de Coahuila. 29 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Octavio Villarreal Delgado. Secretario: Marcos Cardona Salazar.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 1773, tesis IV.2o.A.81 A, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE CONTROL DE TRÁMITES DE ASUNTOS LEGALES CARECE DE FACULTADES PARA ELABORAR EL ACTA DE INICIO RESPECTIVA, YA QUE SU EXISTENCIA JURÍDICA NO SATISFACE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2001)."

Época: Novena Época, Registro: 179662, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: VIII.1o.68 A, Página: 1720

(Énfasis añadido)

En virtud los precedentes transcritos, resulta inconcuso que de ninguna manera puede considerarse que en el presente caso que las constancias de

24

identificación se encuentren fundadas y motivadas debidamente, ya que para que pueda tenerse por satisfecho el requisito de fundamentación legal, previsto tanto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, es estrictamente necesario que en dichos actos se cite la disposición normativa general, que prevé la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, en otras palabras, que se señale la norma que acredite la existencia de la actividad de que se trate y que autorice al funcionario a llevarla a cabo.

A manera de ejemplo, se estima pertinente señalar que en las constancias de identificación a que nos venimos refiriendo, se señala que entre otras actividades, los notificadores tienen facultades para practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen y demás actos de fiscalización que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras.

Sin embargo, a efecto de respetar el derecho y garantía de la debida fundamentación, se debieron señalar en los oficios que nos ocupan los artículos que prevén la facultad para los notificadores de practicar visitas, inspecciones, etc..., pues al no haberlo hecho, se deja en incertidumbre a la parte actora, y ello puede provocar abusos por parte del funcionario, ya que el funcionario podría realizar actos de distinta naturaleza (fiscal y aduanera) sin límite alguno y en detrimento de la esfera jurídica del gobernado.

Esto es así porque la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad.

Lo que es más, conforme también lo ha establecido nuestro Máximo Tribunal, las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, o sea, que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia no debe derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución clara y precisa.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, queda plenamente demostrado que en las constancias de identificación la autoridad demandada no acreditó en norma jurídica las facultades que expresamente está entregando a los funcionarios notificadores, ya que solo se menciona por ejemplo que puede ejercer facultades de comprobación pero no se menciona el artículo del Código Fiscal de la Federación que contiene la facultad de comprobación que va a ejercer, ni el precepto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que señale las facultades que expresamente puede ejercer de manera directa.

Por lo que resulta evidente que no considerarse cumplido el requisito de que exista un acto de autoridad competente que motive la causa legal del procedimiento.

Ello puesto que si bien en dichas constancias de identificación se menciona que las *personas que se mencionan en las constancias de notificación, están facultados para "practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen y demás actos de fiscalización que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras"* etc..., también lo es que en dichas constancias no se citan los fundamentos o preceptos legales que otorgan las facultades para realizar esas actividades, es decir, que si el funcionario en el ámbito de sus competencias puede practicar visitas domiciliarias, deben señalarse los preceptos esa facultad de comprobación y los artículos que le permiten ejercer esas facultades.

Efectivamente, la autoridad se limita a señalar (motivar) las actividades que puede realizar, pero en ningún momento cita los preceptos legales que establezcan las facultades que se otorgan, situación que evidencia la ilegalidad de los oficios impugnados en la presente ampliación de demanda.

Lo anterior, pues se insiste, al momento de citar, señalar o describir las facultades que estaba delegando a los notificadores, se limitó a señalar las actividades que podía realizar, sin mencionar cada una de las fracciones y preceptos que establecían la posibilidad de realizarlas.

Para demostrar lo anterior cabe hacer mención que en la fracción VII del artículo 9 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se señala que los Administradores Generales y demás unidades administrativas y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria tienen la facultad de expedir las constancias y de habilitarlos para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de sus facultades.

Asimismo, con la cita del artículo 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se demuestra que las Administraciones Generales estarán integradas por sus titulares y por Administradores Centrales, Coordinadores, Administradores, Subadministradores, Jefes de Departamento, Enlaces, Supervisores, Auditores, Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados Tributarios, Ejecutores, Notificadores, Verificadores, Oficiales de Comercio Exterior, personal al servicio de la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera y por los demás servidores públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

Sin embargo, como se demostró anteriormente, en el mandamiento donde se otorgan dichas facultades a los particulares, deben constar el fundamento y los motivos de la facultad delegada, siendo que en el caso no se citaron tales preceptos, ya que las constancias de identificación de que se trata, únicamente contienen la motivación legal, ya que mencionan las actividades que puede realizar el funcionario, pero no citan los preceptos legales que les otorga dichas facultades.

Para robustecer lo anterior, se transcribe a continuación las siguientes jurisprudencias y tesis:

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD EMISORA DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA PARA NOMBRAR A LA PERSONA O PERSONAS QUE EFECTUARÁN LA VISITA CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EN EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SIN QUE LE EXIMA DE ESTA OBLIGACIÓN EL HABER NOMBRADO A UNA SOLA PERSONA PARA EFECTUARLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIV, noviembre de 2001, página 31 y XXII, septiembre de 2005, página 310, respectivamente, para cumplir con la garantía de fundamentación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la competencia de la autoridad emisora del acto de molestia, es necesario que en el documento donde se contenga dicho acto se invoque la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando el apartado, fracción, inciso o subinciso, en su caso, y si se trata de una norma compleja, deberá transcribirse la parte correspondiente. Entonces, si el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación contiene tres fracciones, en las que con claridad, certeza y precisión se señala lo que debe indicarse en la orden de visita domiciliaria, y específicamente en su fracción II prevé lo relativo al nombramiento de la persona o personas que deban efectuarla, así como a la posibilidad de realizarla conjunta o separadamente, es indudable que no se trata de una norma compleja y, consecuentemente, para estimar que dicha orden está debidamente fundada, en cuanto a la competencia para ejercer las facultades mencionadas, la autoridad emisora debe citar el artículo 43, fracción II, del Código Fiscal de la Federación que las prevé, sin que le exima de la obligación anotada el haber designado a una sola persona para efectuar la visita, toda vez que el numeral mencionado también establece que en cualquier tiempo la autoridad competente podrá aumentar en su número la persona o personas que deban llevarla a cabo, por lo que legalmente es aceptable que, tratándose de una sola persona, se ordene que podrá efectuarla conjunta o separadamente, ya que esta actuación conjunta podría darse en cualquier tiempo de la visita."



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 71 -

27

Contradicción de tesis 35/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Octavo Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Gutiérrez, Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Agustín Tello Espindola.

Tesis de jurisprudencia 85/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de abril de dos mil siete.

Notas:

Las tesis 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2001 citadas, aparecen publicadas con los rubros: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." y "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", respectivamente.

En la sesión celebrada el veintitrés de abril de dos mil ocho, se declaró infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2008-SS, en la cual se solicitó la modificación de la tesis jurisprudencial 2a./J. 85/2007, por mayoría de tres votos de los señores Ministros integrantes de la Segunda Sala: Mariano Azuela Gutiérrez, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente y Ponente José Fernando Franco González Salas. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra. Estuvo ausente el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

Por ejecutoria del trece de marzo del dos mil trece, la Segunda Sala declaró improcedente la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2013 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva.

Época: Novena Época. Registro: 172457. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 85/2007. Página: 990.

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES

28

OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afectan o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señala la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio."

Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil cinco.

Época: Novena Época, Registro: 177347, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 115/2005, Página: 310.

"FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", se advierte que las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen el alcance de exigir que en todo acto de autoridad se señalen con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo emita y definan el carácter con que éste actúa, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular correspondiente o por delegación de facultades y, en caso de que esas normas incluyan diversos supuestos, precisar el apartado, fracción o fracciones, incisos o subincisos en que apoya su actuación, y de no contenerlos, si se trata de una norma compleja, transcribir la parte correspondiente, atento a la exigencia constitucional de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico. En ese sentido, si la autoridad administrativa, al fundar su competencia cita los preceptos que la facultan para emitir el acto, pero omite señalar la porción normativa exacta y precisa que delimita su competencia territorial, es evidente que el acto impugnado está insuficientemente fundado, ya que, para satisfacer dicho principio constitucional, en todo acto de molestia deben constar los apartados, fracciones, incisos, subincisos o párrafos o, en su caso, transcribirse la parte correspondiente, tanto de los que facultan a la autoridad para emitir el acto, como los que prevén su competencia territorial."

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 38/2007. Subadministrador de lo Contencioso "2", en suplencia por ausencia del Administrador Local

Jurídico del Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, de los subadministradores de resoluciones "1" y "2", de lo Contencioso "1", en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

Revisión fiscal 95/2007. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación del Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 17 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretario: Andrés Vega Díaz.

Revisión fiscal 109/2007. Subadministrador de lo Contencioso "3" de la Administración Local Jurídica del Oriente del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, por ausencia del Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, de los Subadministradores de Resoluciones "1" y "2" y de lo Contencioso "1" y "2", en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, de la autoridad demandada, Administrador de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 7 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Soledad Tinoco Lara.

Revisión fiscal 122/2007. Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal y otras. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Urbano Martínez Hernández. Secretaria: Karen Leticia de Ávila Lozano.

Revisión fiscal 131/2007. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 21 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: María del Pilar Bolaños Rebollo, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Raúl Eduardo Maturano Quezada.

Época: Novena Época, Registro: 171455, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.So.A. J/10, Página: 2366

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 73 -

31

Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno."

(Énfasis añadido)

Así las cosas, atendiendo a las jurisprudencias antes transcritas, se puede apreciar que para cumplir con los requisitos de debida fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 38 fracciones III y IV del Código Fiscal de la

32

Federación, es estrictamente necesario, que la autoridad fiscal, al emitir los actos de molestia dirigidos a los contribuyentes, invoque las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación.

Por lo anterior, en el caso que nos ocupa, quedado demostrado que la autoridad demandada no citó los preceptos legales que otorgaron facultades a los funcionarios que realizaron ciertos actos de notificación dentro del procedimiento de fiscalización seguido a la parte actora, resulta evidente que tampoco pueda considerarse cumplido el requisito de que exista un acto de autoridad competente que motive la causa legal del procedimiento.

Es importante mencionar que aún en el supuesto de que los supuestos notificadores hubiesen tenido competencia para realizar las diligencias de notificación, los multicitados oficios debieron haberse fundado y motivado debidamente.

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia:

"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD FISCAL. AUNQUE NO SE DESCONOZCA QUE LA TIENE, DEBE FUNDARLA. Incluso en el supuesto de que la autoridad hacendaria emisora del acto tenga competencia para dictarlo, sea por sujeción del contribuyente o por disposición expresa de la ley, está obligada a fundarla por mandato de los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; es decir, la necesidad de citar los dispositivos en los que se establezca esa competencia, se insiste, sea tácita o expresa, no se desvanecen ante el sometimiento del gobernado, pues tal excepción no la contemplan los citados preceptos y si, por el contrario, la exigen; de manera, entonces, que hay que fundarla".

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 204/2001. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 11 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Jorge Arturo Gamboa de la Peña.

Amparo directo 115/2002. Serafín Raña Estévez. 9 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán.

Revisión fiscal 81/2002. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 8 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán.

Revisión fiscal 155/2002. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 19 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Juan Carlos Ríos López.

Revisión fiscal 124/2005. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 4 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Ríos López.

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXII, Septiembre de 2005 Tesis: VI.3o.A. J/50 Página: 1233

Como se desprende de la jurisprudencia transcrita, aun cuando una autoridad tenga una facultad por virtud de ley, dicha facultad debe fundarse en el acto correspondiente, a efecto de que el mismo sea legal.

Por tanto, al demostrarse que en las constancias de identificación contenidas en los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078, la autoridad no cumplen con la obligación de realizar la debida fundamentación legal de la competencia, es obvio que las mismas resultan ilegales y por ende las resoluciones impugnadas en la demanda de nulidad que dio origen al juicio en que se actúa, son ilegales, al constituir frutos de actos viciados.

Es decir, las resoluciones impugnadas en el presente juicio no pueden surtir efecto jurídico alguno, al derivar de un procedimiento de fiscalización viciado de origen, lo que ha sido reconocido por los Tribunales del Poder Judicial Federal, tal y como se advierte de la tesis de jurisprudencia que a continuación nos permitimos citar:

"ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montecargas de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 851/75. Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente".

(Énfasis añadido)

De conformidad con el precedente antes citado, cuando una diligencia o procedimiento que es declarado ilegal por estar viciado, todos los actos que de dicha diligencia o procedimiento deriven, deberán seguir la suerte de lo principal, por lo que deberán ser declarados ilegales también.

Aplicado lo anterior al caso particular, el procedimiento de fiscalización practicado con mi representada es ilegal por encontrarse viciado de origen, en virtud de que las constancias de identificación contenidas en los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078 carecen de la debida fundamentación en cuanto a las facultades de los notificadores; en ese sentido, las resoluciones impugnadas deberán ser declaradas ilegales, por ser un fruto del acto viciado.

Por todo lo anteriormente expuesto, lo procedente será que esa H. Sala declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en la demanda inicial, así como las impugnadas a través de la presente ampliación de demanda.

Asimismo, mediante escrito de alegatos de fecha 26 de mayo de 2016, la actora manifestó lo siguiente:

ALEGATOS DE LA ACTORA

TERCERO. Se desvirtúa la refutación que hace valer la autoridad demandada al Concepto de Impugnación Único del escrito de ampliación de la demanda de nulidad.

23

La autoridad demandada señala en su oficio de contestación a la ampliación de demanda que devienen infundados los argumentos hechos valer por mi representada, en el sentido de que los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078 son ilegales al no encontrarse debidamente fundados y motivados, pues no señalan los fundamentos legales que contienen las facultades que se delegaron a los funcionarios públicos en ellos señalados, en virtud de lo siguiente:

A. En primer lugar, la autoridad demandada señala en su oficio de contestación a la ampliación de demanda que devienen infundados los argumentos hechos valer por mi representada, pues la notificación de actos administrativos no requiere la identificación del personal que practica la diligencia correspondiente, al no existir disposición alguna que así lo prevea; máxime, que la notificación no constituye una resolución administrativa.

Asimismo, señaló la autoridad demandada en su oficio de contestación a la ampliación de demanda que las constancias de identificación contenidas en los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078 no son actos que le causen perjuicio de mi representada, pues las constancias de identificación del personal de la autoridad fiscal, no son impugnables en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De igual forma, si bien los actos dictados dentro de un procedimiento pueden ser controvertidos en unión del acto definitivo que se dicte como resolución final en el procedimiento de que se trate, en el caso, las constancias de identificación en comento no forman parte de los documentos que integran una revisión de gabinete, pues los artículos 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación no prevén que el personal encargado de practicar diligencias deba identificarse ante las personas con quien se entiendan las mismas.

De la misma manera, señaló la autoridad demandada en su oficio de contestación a la ampliación de demanda que las constancias de identificación no son actos regulados por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, no se encuentran sujetos a estar fundados y motivados, en virtud de que tales documentos no constituyen actos que deban ser notificados, pues su única función es identificar como funcionarios públicos al personal de determinada unidad administrativa encargado de practicar diversas diligencias con los contribuyentes, por lo que no están sujetos a normatividad alguna que les exija determinados requisitos.

Además, señaló la autoridad demandada en su oficio de contestación a la ampliación de demanda que la actuación de los notificadores al amparo de las constancias de identificación contenidas en los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078, no implica una delegación de facultades.

Lo anterior, pues los notificadores fungen como auxiliares del titular de la unidad administrativa correspondiente (Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente), siendo a éste último a quien únicamente pueden atribuírsele los resultados y consecuencia de una diligencia de notificación; máxime, que el auxiliar en comento no cuenta con la facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera jurídica de los contribuyentes y la de imponer a éstos sus determinaciones.

No obstante lo manifestado por las autoridades demandadas en el oficio de contestación a la ampliación de demandada, sus consideraciones devienen infundadas.

En efecto, si bien en las multitudinarias constancias de identificación se advierte que se citaron diversos preceptos, dichas disposiciones sólo como objetivo dar a conocer al particular, los fundamentos y bases jurídicas que justifican las actuaciones del Servicio de Administración Tributaria.

De igual manera, las disposiciones citadas establecen las facultades que tienen las unidades administrativas Generales y Centrales de dicha autoridad, para nombrar y designar a sus servidores públicos, emitir las constancias de identificación de los mismos y para ejercer las facultades de comprobación que establecen las disposiciones fiscales correspondientes.

No obstante lo anterior, si bien se citan los preceptos antes señalados, la autoridad demandada cita normas que le otorgan facultades a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, mas no señala los fundamentos legales que contienen las facultades que se delegaron a los funcionarios públicos que se mencionan en las constancias de identificación, ya que únicamente señalan las actividades que los notificadores pueden realizar pero no los fundamentos legales que les otorgan esa atribuciones.

Lo anterior resulta trascendental, pues para que los notificadores puedan actuar en el ámbito de sus competencias, se debieron señalar en el acto administrativo que los habilita, los preceptos legales en que se contuvieran las facultades que le están siendo delegadas, y al no hacerlo, se deja a mi representada en estado de indefensión, pues la misma desconoce si los notificadores están actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos, violando con ello lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Situación la anterior que es corroborada mediante la contradicción de tesis de rubro "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA CITA ERRÓNEA DEL PÁRRAFO INVOCADO PARA FUNDAMENTARLA NO AFECTA LAS DEFENSAS DEL PARTICULAR, SI EN EL ACTO RELATIVO SE MENCIONAN LA FRACCIÓN Y LOS INCISOS DEL PÁRRAFO QUE, CON MOTIVO DE SU MODIFICACIÓN, CAMBIARON DE LUGAR", así como a través de la tesis aislada "AUTORIDADES ADUANERAS. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁMITES Y ASUNTOS LEGALES CARECE DE EXISTENCIA JURÍDICA Y DE COMPETENCIA MATERIAL PARA EMITIR ACTOS DE MOLESTIA."

Por otra parte, las resoluciones impugnadas devienen ilegales, pues en los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078 se debieron señalar los artículos que prevén la facultad para los notificadores de practicar visitas, inspecciones, entre otras; sin embargo, al no haber realizado lo anterior, se deja en incertidumbre a la parte actora, y ello puede provocar abusos por parte del funcionario, ya que el funcionario podría realizar actos de distinta naturaleza (fiscal y aduanera) sin límite alguno y en detrimento de la esfera jurídica del gobernado, lo que hace evidente la violación al principio de legalidad.

25

Ello, pues las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, o sea, que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia no debe derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución clara y precisa, lo que en el caso no acontece.

Lo anterior es así, pues en ningún momento se menciona el artículo del Código Fiscal de la Federación que contiene la facultad de comprobación que va a ejercer, ni el precepto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que señale las facultades que expresamente puede ejercer de manera directa, sólo se cita que puede ejercer facultades de comprobación.

En tal virtud, es claro que las resoluciones impugnadas resulta ilegales, dado que fueron emitidas en contravención al principio de legalidad que todo acto de autoridad debe cumplimentar.

Dicha situación es corroborada con el hecho de que la fracción VII del artículo 9 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, señala que los Administradores Generales y demás unidades administrativas y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria tienen la facultad de expedir las constancias y de habilitarlos para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de sus facultades.

Asimismo, con el artículo 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se demuestra que las Administraciones Generales estarán integradas por sus titulares y por Administradores Centrales, Coordinadores, Administradores, Subadministradores, Jefes de Departamento, Enlaces, Supervisores, Auditores, Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados Tributarios, Ejecutores, Notificadores, Verificadores, Oficiales de Comercio Exterior, personal al servicio de la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera y por los demás servidores públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

En este sentido, es claro que se incumplió con los preceptos antes señalados y, por tanto, las resoluciones impugnadas devienen ilegales, pues en el mandamiento donde se otorgan facultades a las autoridades, que ocasionen un acto de molestia a los gobernados, deben constar el fundamento y los motivos de la facultad delegada a los funcionarios, situación que en la especie no aconteció, dado que sólo se mencionan las actividades que puede realizar el funcionario, pero no citan los preceptos legales que les otorga dichas facultades.

Derivado de lo anterior, al haber sido acreditado que las constancias de identificación contenidas en los oficios 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078 devienen ilegales, es evidente que las resoluciones impugnadas también resultan ilegales, al no haber acreditado mi representada la ilegalidad de los referidos oficios.

Así las cosas, lo procedente será que esa H. Sala desestime los razonamientos expuestos por la demandada en su oficio de contestación a la demanda y, en su oportunidad, dicte sentencia en la que declare la nulidad lisa de las resoluciones impugnadas.

Por su parte, la autoridad demandada mediante oficio de contestación a la demanda número 900 04 05-2015-58541 de fecha 14 de octubre de 2015, argumentó lo siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 77 -

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Sexto. La actora en el correlativo concepto de impugnación, manifiesta o siguiente:

- a) En el apartado A aduce cuáles son las formalidades del procedimiento de notificación, además de que afirma que las resoluciones impugnadas se encuentran viciadas de origen ante la ilegalidad de del procedimiento que las antecede y de los propias actas de notificación del oficio de inicio y de la resolución inicialmente recurridas;
- b) Alega que es ilegal el citatorio de 27 de junio de 2011 y el acta de notificación del día siguiente, mediante las cuales se dio inicio a las facultades de comprobación de la autoridad fiscalizadora, toda vez que considera que dicha diligencia de notificación no se llevó a cabo conforme a lo dispuesto por los artículos 48, 134 y 137, todos del Código Fiscal de la Federación.
- b.1.) La demandante argumenta lo anterior, toda vez que el citatorio y el acta de notificación de referencia se elaboraron sin haberse circunstanciado debidamente en atención de que en dichas actas no se especifica cómo es que el notificador conoció que el representante legal del contribuyente no se encontraba presente en el momento en el que

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

159

se constituyo en el domicilio a notificar, a qué persona se requirió la presencia o bien qué persona le informo al notificador que el representante legal no se encontraba presente:

Agrega que en ningún momento se demostró que la C. [REDACTED] en su carácter de tercero, fuese la misma persona a la cual se le solicitó informara de la presencia del representante legal, o que haya sido la persona que informó que el representante legal no se encontraba presente. Por lo anterior, mi contraria considera trascendental la calidad del tercero que atendió la diligencia y la manera en la que comprobó su relación con el contribuyente.

b.2.) Por otra parte, aduce que en el citatorio de referencia no se motivó porqué fue emitido para el efecto de que se esperara el día 28 del mismo mes y año al notificador y no para el efecto de que la persona citada acudiera a notificarse dentro del plazo de seis días a las oficinas de la autoridad fiscalizadora;

b.3.) Así mismo, que en dicho citatorio no se señaló expresamente la hora en la que el mismo fue entregado al tercero que atendió a diligencia;

b.4.) Que tampoco se describe cómo fue que el notificador se cercioró que el domicilio en el que se apersonaba era el correcto; y

b.5.) Que en dicha diligencia el notificador no se identificó plenamente como funcionario. Por ende la enjuiciante niega lisa y llanamente que el notificador haya sido funcionario de la Administración General de Grandes Contribuyentes y que ésta haya expedido documento alguno en el cual conste el cargo que lo autorice para llevar a cabo la notificación; así mismo, en el acta de notificación no se señalaron los preceptos legales conforme a los cuales dicha persona se encontraba facultada para expedirla.

c) Propone la demandante la ilegalidad del oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, porque no se le dieron a conocer sus derechos con contribuyente auditado;

d) Por otra parte mi opositora alega la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, toda vez que en el oficio de solicitud de documentos e información, no se señaló el periodo o ejercicio fiscal a revisar respecto de las contribuciones ahí señaladas;

e) Que dicho oficio fue dirigido a [REDACTED] y no a su representante legal, tal y como lo dispone el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación; y que en el



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

160

citatorio en mérito se afirma haber requerido la presencia de dicha persona moral, situación que resulta inadmisibles; asimismo, solicita se tengan por reproducidos éstos argumentos por lo que hace al oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012:

- f) Igualmente, aduce la ilegalidad del citado oficio 900-05-2011-385, ya que en éste no se estableció el plazo de duración de la revisión de gabinete de la cual fue objeto;
- g) De igual manera, argumenta la ilegalidad del citatorio de 27 de junio del 2011 por medio del cual se iniciaron las facultades de comprobación; pues no se fundan ni motiva la competencia en las constancias de identificación del notificador que practicó dicha diligencia, ya que resultaba necesario mencionar que dicha facultad está inmersa en el artículo 10 fracción IV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; así mismo, señala que adolecen de los mismos vicios los citatorios de 25 de julio de 2013, relativo al oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013 y el diverso de 17 de diciembre de 2012, relativo al oficio de observaciones.
- h) Indica que la autoridad fiscalizadora inició sus facultades de comprobación sin fundar y motivar debidamente su competencia material, omitiendo citar los artículos 17 y 3, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- i) Insiste la incoante en la ilegalidad del referido oficio 900-05-2011-385, ya que la autoridad fiscalizadora, sin fundar y motivar debidamente su competencia en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, cita el artículo 20, primer párrafo, apartado A, fracciones IX y X, y Apartado B, fracción II, quinto párrafo; sin especificar detalladamente el inciso o fracción en la cual se funda su competencia material; con lo cual, si la autoridad hubiera fundado dicha competencia en el primer párrafo numeral 5 del sexto párrafo del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el contribuyente hubiese tenido la certeza de que la autoridad estaba actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley.

Al respecto, ésta defensa advierte que los argumentos de la accionante resultan inoperantes por una parte, e infundados por otra, por lo cual no desvirtúan la legalidad de las resoluciones impugnadas.

En efecto, lo anterior es de ese modo, en la medida de lo siguiente:

- ✓ Consideración previa relativa a los antecedentes del caso.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

161

En primer término, se estima pertinente analizar los antecedentes del acto inicialmente recurrido, los cuales consisten en lo siguiente:

- El 21 de junio de 2011, el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente emitió el oficio número 900-05-2011-385, a través del cual solicitó informes, datos y documentos diversos que especificó en el mismo a [REDACTED] (ahora [REDACTED]) concediendo un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio descrito, para el efecto de que cumpliera lo requerido;
- El 27 de junio de 2011, siendo las 13:00 horas, el C. Mario Sañas Pérez, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, lo cual acreditó con la constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011, se constituyó en el domicilio fiscal de la contribuyente, se constató de encontrarse en el domicilio correcto y una vez que se constató que el representante legal de [REDACTED] (ahora [REDACTED]), no se encontraba, dejó citatorio con la C. [REDACTED] para que el día 28 de junio de 2011 a las 11:00 horas lo esperara el citado representante legal, a fin de notificarle el oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011; lo anterior, acorde con el propio citatorio en comento, del que se desprende lo siguiente:

Sin texto

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 81 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

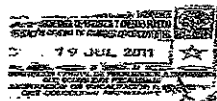
166

Al respecto solicito con fundamento en el artículo 53 inciso c) párrafo cuarto del vigente Código Fiscal de la Federación una prórroga por 10 días hábiles adicionales al plazo establecido en el oficio antes referido, a fin de que mi representante ésta en posibilidad de proporcionar la información y documentación que le solicitan, toda vez que por tratarse de un oficio pasado y por el volumen de información solicitada resulta de difícil obtención.

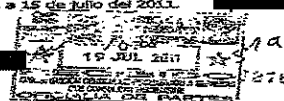
Por todo lo antes expuesto solicito:

UNION SE ME CONCEDA LA PRORROGA POR 10 DIAS ADICIONALES AL PLAZO A FIN DE QUE MI REPRESENTANTE ESTE EN POSIBILIDAD DE DAR DESIDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION SOLICITADA.

México, D.F., a 15 de julio del 2011.



ATENTAMENTE
LAE. REPRESENTANTE LEGAL



ASUNTO: SE DA CONTESTACION AL OFICIO DE
SOLICITUD DE INFORMACION NUMERO
No. 900-05-2011-385

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES
ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

PRESENTE

LAE. con R.F.C. en
representación de la empresa
personalidad debidamente acreditada con el poder notarial numero
95689 pasado ante la fe del notario público Licenciado Gerardo Correa Echegaray
titular de la notaría pública no. 89 del Distrito Federal, con domicilio fiscal para dar
y recibir notificaciones en
respetuosamente comparezco y expongo:

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

167

- Ahora bien, 13 de septiembre de 2012, el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3", emitió el oficio 900 05-03-2012-54438, a través del cual solicitó a mi contraria, los informes, datos y documentos complementarios que se indican en el mismo, concediendo para tal efecto, un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio descrito, para el efecto de contestar el requerimiento;
- En virtud de lo anterior, el 13 de septiembre de 2012 siendo las 17:45 horas, el C. Jaime Ortiz Sandoval, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, lo cual acreditó con la constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012, se constituyó en el domicilio fiscal de la contribuyente, constató de encontrarse en el domicilio correcto (además de describir el inmueble con las mismas características que el citatorio de 27 de junio de 2011) y una vez que se aseguró de que el representante legal de (ahora) López (misma persona con la cual se atendió la notificación del oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 y el citatorio que le antecedió) para que el día 14 de septiembre de 2012, a las 12:00 horas, lo esperara el representante legal de la enjuiciante, a fin de notificarle el oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, tal como se desprende de lo siguiente:

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

ASUNTO: CITATORIO

México, D.F., 13 de septiembre de 2012.




En virtud de lo anterior, el 13 de septiembre de 2012, el C. Jaime Ortiz Sandoval, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, lo cual acreditó con la constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012, se constituyó en el domicilio fiscal de la contribuyente, constató de encontrarse en el domicilio correcto (además de describir el inmueble con las mismas características que el citatorio de 27 de junio de 2011) y una vez que se aseguró de que el representante legal de (ahora) López (misma persona con la cual se atendió la notificación del oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 y el citatorio que le antecedió) para que el día 14 de septiembre de 2012, a las 12:00 horas, lo esperara el representante legal de la enjuiciante, a fin de notificarle el oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, tal como se desprende de lo siguiente:

Oficio 900 04 05-2015-58541
LN-12140/15-17-11-5.

172

[illegible]

- Ahora bien, el 18 de diciembre de 2012 a las 16:00 horas, el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, lo cual acreditó con la constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012, emitida por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó en el domicilio fiscal de la contribuyente, y una vez que se aseguró de que el representante legal de [REDACTED] (ahora [REDACTED]) no se encontraba, al no haber atendido al citatorio de 17 de diciembre de 2012, notificó el oficio 900-05-03-2013-69836 de fecha 17 de diciembre de 2012 a la C. [REDACTED] en los términos que a continuación se digitalizan:

 <p> SAT Servicio de Administración Tributaria Administración General de Cuentas Constitucionales Administración Central de Recaudación e Impuesto que Convierten Facturamiento. </p>		 <p> SNCP SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA </p>
DATOS GENERALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO		
R.F.C. CONTRIBUYENTE DOMICILIO FISCAL MUNICIPIO LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA		
DE SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EL 15 DE MARZO DE 2017.		

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

173

ACTA DE NOTIFICACION

Siendo las 16:00 horas del 18 de diciembre de 2012, al C. Ramón García Escobar, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración y Servicios Generales Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, se le suscribe con el propósito de identificación documental en el oficio SSO-05-03-2012-938383 del 17 de diciembre de 2012, con vigencia del 20 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador General de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en F.C. de R.F. No. 415, Interior C.J. Coloma Cruzilla del Moral, Delegación Iztapalapa, 09310, México, D.F., y cerciorándose que dicho domicilio fue el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, por coincidir con el señalado en el oficio SSO-05-03-2012-639 del 17 de diciembre de 2012, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos:

dominio la entrada corporativa de los autos polarizados, y por haberse presentado a la persona con la que se atiende la diligencia, quien dijo llamarse [REDACTED].

El domicilio mencionado coincide con el mismo (a) que se identifica con Luzma Rosa Valencia, que conserva la fotografía que corresponde a los rasgos físicos del dicho personal así como su firma, con domicilio en [REDACTED].

Y habiendo constatado esta última, que el domicilio es el correcto, se requirió la presencia del C. Representante Legal o representante autorizado, para lo cual se le solicitó comparecer y si no comparecía, se le requeriría comparecer, y si no presentaba, (a) o (a) C.

y si preguntar si éste se encontraba presente, expresó que el C. Representante Legal o se encontraba presente, por lo tanto no podía atender esta diligencia y sí no atender atendió el siguiente (as): S/O Hrs del 17 de diciembre de 2012 y ante su ausencia, en mala fecha se suspende (a) o (a) C.

En consecuencia de tercero, con cargo de actuando en su nombre y en el oficio SSO-05-03-2012-938383 del 17 de diciembre de 2012, firmado por el Lic. Maurizio Ayala Orrozco, Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3", mediante el que se le da a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión por el ejercicio comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31 primer párrafo, fracciones IX y XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., fracciones I, VII, XII y XVIII, 8o., fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1986, en vigor a partir del 1o. de julio de 1987 reformada, adicionada y derogada mediante decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1988, 12 de febrero de 2003, 6 de mayo de 2003 y 9 de abril de 2012, vigente a partir del día siguiente al de cada publicación; 1o., 2o., primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso II y tercer párrafo, 3o., primer párrafo, función XXXIV y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 2o., primer párrafo, Apartado A, fracción II, Apartado E, fracción II, párrafos antepenúltimo y penúltimo, nombres 5, inciso c) y 21.- primer párrafo, Apartado E, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme a Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos; así como en los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135, 136 y 137, del Código Fiscal de la Federación vigente, se le entrega el original con firma autógrafa del oficio antes mencionado y copia de la presente acta de notificación.

NOTIFICADO	NOTIFICADOR
Previa lectura del presente documento, informó que su intención es su nombre y apellidos <u>15</u> días del mes de diciembre de 2012.	<u>[Firma]</u> C. Ramírez García Escobar R.F. RAMÍREZ GARCÍA ESCOBAR



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 85 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

174

- Ahora bien, la hoy accionante dio contestación al oficio de observaciones 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012 a través de su escrito ingresado en la Oficialía de Partes de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente el 31 de enero de 2013; asimismo, mediante escrito presentado el 06 de junio de 2013, en alcance al escrito anterior, presentó pruebas supervenientes, lo cual se desprende de lo siguiente:

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente
Av. Hidalgo no. 77, Módulo III, Puente de la Amistad
C.P. México, D.F. 06700

México, D.F., 1 de febrero de 2013

Atención: Lic. Mauricio Ayala Ocampo
Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "5"

No. de Oficio: 900-05-03-2012-69836

Expediente: SAT940 05 04 2010 028222362

Contribuyente: [REDACTED]

R.F.C.: [REDACTED]

Domicilio Fiscal: [REDACTED]

Asunto: Se da contestación a las observaciones determinadas mediante el oficio 900-05-03-2012-69836, respecto de la revisión del ejercicio fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006.

L.A.E. [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) [REDACTED], en representación de [REDACTED] personalidad que acredito ante esta H. Administración con copia simple del poder notarial (Anexo X), acudiendo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el indicado al rubro de este escrito y teléfono 1720-7000, para proporcionar toda clase de información.

01 FEB 2013

31 ENE 2013

OFICIALÍA DE PARTES

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

175

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

07 JUL 2013

R.F.C. [REDACTED]
R.E. Oficio de observaciones 900-05-03-2012-69836
ASUNTO: Se presenta escrito al [REDACTED] y [REDACTED]

Se da contestación a las observaciones determinadas mediante el oficio 900-05-03-2012-69836, respecto de la revisión del ejercicio fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006.

Que por medio del presente escrito y con fundamento en la disposición por el artículo 48, fracciones IV y VI, en relación con los preceptos aplicables de la Ley de los Derechos del Contribuyente, vengo a notificar de mi representación, en tiempo y forma, a presentar manifestaciones y pruebas supervenientes al alance del escrito presentado el pasado 31 de enero de 2013 ante la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, mediante el cual se dio contestación a las observaciones formuladas por el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "5" de la Administración General de Grandes Contribuyentes, mediante el oficio 900-05-03-2012-69836.

Respecto del poco monto consolidado:

En este escrito de ideas y a efecto de [REDACTED] personalidad que acredito ante esta H. Administración con copia simple del poder notarial (Anexo X), acudiendo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el indicado al rubro de este escrito y teléfono 1720-7000, para proporcionar toda clase de información.

En la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 por un monto de \$1,539,023,827.00 (Un mil quinientos cincuenta y nueve millones veintidós mil ochocientos veintiseis pesos 00/100 M.N.) como resultado de no haber reflejado en el pago consolidado anual, el ajuste fiscal de su controlado [REDACTED] en dicho monto.

06 JUN 2013

10 JUN 2013

- Finalmente, la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente le determinó un crédito fiscal a cargo de la actora mediante oficio 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013;



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

176

- Por ello, con el propósito de notificarle a la demandante la resolución contenida en el oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, acreditando lo anterior mediante constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, se constituyó en el domicilio de [REDACTED] (ahora [REDACTED]), ese mismo día a las 17:35 horas y cerciorándose del domicilio, le requirió a la C. [REDACTED] la presencia del representante legal de mi contraria, y en virtud de su ausencia, le dejó citatorio con la persona que atendió la diligencia, para que lo esperara al día siguiente a las 17:30 horas, tal como se aprecia de la siguiente reproducción:



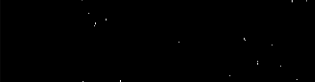
884

Asunto: CITATORIO

México, D.F. 25 de julio de 2013.

"Seg. Año de la Unidad Institucional y Consorcio del Ejército Mexicano".

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:



Siendo las 17:35 horas del 25 de julio de 2013, el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2013-25078 del 21 de mayo de 2013, con vigencia del 21 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2013, emitida por la Lic. Georgina Arias Ramírez, Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en: [REDACTED] entre las calles de [REDACTED] inmueble que cuenta con las siguientes características: [REDACTED] y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, toda vez que coincide en el señalado en el oficio 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013, en virtud de que la C. [REDACTED] confirmó que se trataba del domicilio correcto y toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: LETRERO EXTERNO NO UBICADO EN LA ENTRADA DEL PREDIO [REDACTED] se requirió la



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

177

exterior: [REDACTED]
presencia del C. Representante Legal de [REDACTED] antes [REDACTED] y al no haberse encontrado, EN ESTE MOMENTO EN SU DOMICILIO FISCAL [REDACTED] se procede a dejar el presente citatorio con (el) o (la) C. [REDACTED] en su carácter de tercero, identificándose con CON LICENCIA PARA CONDUCIR EMITIDA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, quien se encuentra en el interior del domicilio y que tiene relación con el contribuyente de: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES SIN ACREDITAR SIN ACREDITAR cuya media filiación es: estatura aprox. [REDACTED] complexión [REDACTED] tez color [REDACTED] cabello [REDACTED] ojos [REDACTED] edad aprox. [REDACTED] AÑOS, señalando además que se encuentra en el lugar en virtud de que CUMPLE CON SU HORARIO LABORAL; a efecto de que el C. Representante Legal de [REDACTED] antes [REDACTED] esté presente el día 26 de julio de 2013 a las 17:30 horas en el domicilio citado, a fin de notificarle el oficio 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013, firmado por la Lic. Georgina Arias Ramírez, Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente; mediante el que se le determina un crédito fiscal, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006. Si el Representante Legal no comparece, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio fiscal.

El presente citatorio, se emite con fundamento en los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135 y 137, del Código Fiscal de la Federación vigente.

RECIBÍ CITATORIO
ENTREGARLO AL DESTINATARIO

NOTIFICADOR

R.F.C.:

C. Ramón García Escalante
R.F.C. GAE460832U2

- En virtud de lo anterior, el 26 de julio de 2013 a las 17:30 horas, el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, acreditando lo anterior mediante constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, se constituyó en el domicilio de [REDACTED] (antes [REDACTED]) y en virtud de que su representante legal no se encontraba, se practicó la notificación correspondiente con la C. [REDACTED] en los términos que a continuación se reseñan:

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 87 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

178

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

88

2013 Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano

DATOS GENERALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

R.F.C.:
CONTRIBUYENTE :
DOMICILIO FISCAL:
COLONIA:
LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA:
OFICIO No. 900-05-2013-48229

DE FECHA: 25 DE JULIO DE 2013

ACTA DE NOTIFICACIÓN

Siendo las 17:30 horas del 28 de julio de 2013, el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2013-25078 del 21 de mayo de 2013, con vigencia del 21 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2013, emitida por la Lic. Georgina Arias Ramírez, Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en: [REDACTED] entre las calles de: [REDACTED] y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, por coincidir con el señalado en el oficio 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013 y con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, que contiene los datos de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: LETRERO EXTERNO NO UBICADO EN LA ENTRADA DEL PREDIO y por haberse preguntado a la persona con la que se atiende la diligencia, quien dijo llamarse [REDACTED] misma que se identifica con: LICENCIA PARA CONDUCIR EMITIDA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en [REDACTED] y haber contestado esta última, que el domicilio es el correcto, se requirió la presencia del C. Representante Legal de [REDACTED] antes [REDACTED] y al preguntarle si éste se encontraba presente, la C. [REDACTED] contestó de manera expresa que el C. Representante Legal de [REDACTED] no se encontraba presente, por lo tanto no podían atender esta diligencia y al no haber atendido el citatorio de las 17:35 hrs. del 25 de julio de 2013 que se dejó con la C. [REDACTED] y ante su ausencia, en esta fecha se notifica a la C. [REDACTED] en su carácter de TERCERO el cual se identificó con: LICENCIA PARA CONDUCIR EMITIDA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, quien se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con el Contribuyente de PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES SIN HABERLO ACREDITADO, cuya media

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

179

Estatura es: estatura aprox. [REDACTED] compleción [REDACTED] tez color [REDACTED] cabello [REDACTED] ojos [REDACTED] edad aprox. [REDACTED] señalando además que se encontraba en el lugar en virtud de que SUMPLE CON SU HORARIO LABORAL el oficio 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013, firmado por la Lic. Georgina Arias Ramírez, Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente; mediante el que se le determina un crédito fiscal, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 20, 21, 22, 23, 24, 25, fracciones I, VII, XII y XVIII, 26, fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1992, en vigor a partir del 10 de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso 3) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción XIV, Apartado B, fracción II, párrafos antepenúltimo y penúltimo; numeral 5 y 20, primer párrafo, Apartado E, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2012 y 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2012 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos; así como en los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135, 136 y 137, del Código Fiscal de la Federación vigente, se le entrega el original con firma autógrafa del oficio antes mencionado así como copia de la presente acta de notificación.

NOTIFICADO

Previo lectura del presente documento y enterado de su contenido, asiente de puño y letra, mi nombre, mi Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) y firma, a los 26 días del mes de [REDACTED] de 2013.

(NOMBRE Y FIRMA)
R.F.C.: 2116652925

NOTIFICADOR

C. Ramón García Escalante.
R.F.C.: GARR46082TUA
2 de 2

Una vez precisado lo anterior, es necesario precisar a esa H. Sala lo siguiente:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541

J.N. 12140/15-17-11-5.

180

A. Los argumentos planteados en contra de los citatorios y actas de notificación relativos a los oficios 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, 900-05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, devienen inoperantes.

La diligencia de notificación personal, constituye una forma de comunicación jurídica e individualizada, cuyos requisitos formales y medios están predeterminados expresamente en el ordenamiento jurídico que rija al acto, a fin de que el interesado reciba efectivamente dicha comunicación en función de los efectos jurídicos que de ella derivan, por lo que es claro que la finalidad última de toda notificación, lo constituye el hecho de que el interesado, tenga conocimiento del contenido del acto administrativo que se le pretende hacer de su conocimiento por parte de la autoridad fiscal.

En ese sentido, resulta ser que a efecto de cumplirse con el objetivo de comunicación, existen diversos requisitos determinados en las leyes fiscales, a fin de asegurar que el interesado tenga conocimiento pleno del acto administrativo que le notificó la autoridad, puesto que en caso de omitirse alguna formalidad en la notificación, existiría incertidumbre respecto a que si la notificación efectuada cumplió con su único y primordial objetivo: hacer del conocimiento del interesado, un acto administrativo emitido por la autoridad fiscal.

En ese contexto, resulta ser que los conceptos de impugnación expresados por la actora en contra de los citatorios de 27 de junio de 2011, 13 de septiembre de 2012 y 17 de diciembre de 2012, así como las notificaciones que les siguieron, de 28 de junio de 2011, 14 de septiembre de 2012 y 18 de diciembre de 2012, respectivamente, **resultan totalmente inoperantes** por intrascendentes, puesto que del expediente administrativo del cual derivó la resolución inicialmente recurrida, que ofrece como prueba la propia demandante, esa H. Sala podrá verificar que mi contraria procedió a proporcionar la información y documentación requerida por la autoridad fiscalizadora mediante oficios 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 y 900-05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012; así como contestar a las observaciones contenidas en el oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012.

Por lo anterior, es claro que los agravios que se contestan resultan ser totalmente inoperantes por intrascendentes, puesto que aún en el supuesto jamás concedido de que alguno de ellos resultare fundado, de ninguna manera afectaría la validez de la resolución impugnada en sede administrativa; ello, en atención a que [REDACTED] (antes [REDACTED]), por su conocimiento pleno y oportuno del contenido de los oficios 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, 900-05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, así como del oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013 y por lo tanto,



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541

J.N. 12140/15-17-11-5.

181

estuvo en la posibilidad de desahogar los requerimientos formulados por la autoridad fiscal de [REDACTED] para oportuna.

Se afirma lo anterior, en el sentido de que mi contraria no demuestra que las supuestas "irregularidades" que contienen los citatorios y notificaciones multicitadas, hubiesen afectado su esfera jurídica, tan es así que dicha empresa por conducto de su representante legal (el propio [REDACTED] que firma la demanda que se contesta), procedió a desahogar oportunamente las solicitudes de información y documentación, y contestar el oficio de observaciones, por lo que es evidente que los argumentos que se atienden resultan ser intrascendentes para desvirtuar la legalidad de las resoluciones impugnadas.

En otras palabras, las notificaciones de los oficios 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, 900-05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012 y 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, fueron del pleno conocimiento del representante legal de la enjuiciante, razón suficiente para considerar que fue cumplido el propósito de los actos instrumentales, resultando por tanto del todo intrascendente el que en un supuesto no concedido, las notificaciones y/o citatorios en análisis, contengan un vicio de carácter formal, pues ello de ninguna manera dejaría en incertidumbre jurídica a [REDACTED] (antes [REDACTED]), al haber tenido pleno conocimiento de los actos de fiscalización reseñados con antelación, así como de la resolución definitiva recaída a la revisión de gabinete.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.1o.A.84 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Registro No. 189035. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Agosto de 2001. Página: 1370. Tesis: III.1o.A.84 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

"NOTIFICACIÓN. SUS IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FISCAL SE CONVALIDAN SI EL PARTICULAR COMPARECE ANTE LA AUTORIDAD A OBSEQUIAR LO SOLICITADO. El artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en su parte conducente dice: "... En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución, ...". El artículo 238 del citado código señala: "Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afectó las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 89 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

182

particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada. ...". De lo anterior se deduce que cuando exista una violación durante el procedimiento realizado para que el particular cumpla con lo exigido por la autoridad hacendaria, la violación debe ser de tal índole que lo deje en estado de indefensión, al punto de que no pueda cumplir con lo que se le exige ni pueda hacer valer los medios de defensa que para tal efecto señala la ley, pues de otro modo la violación no tendría afectación a las defensas del quejoso ni trascendería al sentido de la resolución impugnada."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Revisión fiscal 356/2000. Administradora Local Jurídica de Ingresos de Guadalajara, Sur, 27 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretaria: María Antonia Dávila Véjar.

De igual manera, resulta aplicable la diversa tesis V-TA-2a5-85, sustentada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dispone a la letra lo siguiente:

No. Registro: 39,582. Precedente. Época: Quinta. Instancia: Segunda Sección. Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 50. Febrero 2005. Tesis: V-TA-2a5-85. Página: 154

"NOTIFICACIÓN DE UN REQUERIMIENTO.- SE CONVALIDAN SUS IRREGULARIDADES SI EL PARTICULAR COMPARECE A CUMPLIR CON LO SOLICITADO.- Siendo el objetivo de toda notificación que la persona a quien va dirigida conozca el contenido de un acto administrativo o fiscal, para atenderlo, en el supuesto de que exista una irregularidad en la notificación de un requerimiento de información y/o documentación, si el particular manifiesta que conoció el contenido del acto y cumple con lo ahí señalado, conforme a lo dispuesto por el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, dicha manifestación surte efectos de notificación desde la fecha en que se hace, en los términos del artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, por lo que es evidente que las irregularidades en la notificación no trascienden al sentido de la resolución impugnada. (19)"

Juicio No. 13561/03-17-07-6/48/04-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de agosto de 2004, por mayoría de 3 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Salvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.

(Tesis aprobada en sesión de 9 de noviembre de 2004)

(Énfasis añadido)

No obstante la conclusión antes alcanzada, tenemos que los citatorios de fechas 27 de junio de 2011, 13 de septiembre de 2012 y 17 de diciembre de 2012, así como las notificaciones que les

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

183

precedieron de 28 de junio de 2011, 14 de septiembre de 2012 y 18 de diciembre de 2012, respectivamente, se encuentran debidamente circunstanciadas y cumplen con los requisitos de legalidad.

A.1. Los actos de notificación en pugna fueron practicados con estricto apego a derecho.

Previo a demostrar lo anterior, se estima importante tener en cuenta lo que establece el Código Fiscal de la Federación, Título V De los Procedimientos Administrativos, Capítulo II De la Notificaciones y la Garantía del Interés Fiscal (vigente al momento en que se llevó a cabo cada una de las diligencias por tratarse de una norma adjetiva), pues son las disposiciones conforme a las cuales la autoridad fiscal llevó a cabo la notificación de los oficios 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, así como del oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013.

Así, dichas disposiciones establecen a la letra lo siguiente:

"Artículo 134. Las notificaciones de los actos administrativos se harán:

i. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.

En el caso de notificaciones por documento digital, podrán realizarse en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria o mediante correo electrónico, conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos.

El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como firma electrónica del particular notificado, la que se genere al utilizar la clave de seguridad que el Servicio de Administración Tributaria le proporcione.

La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.

El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el medio por el cual le haya sido enviado el citado documento.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

184

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión contendrá un sello digital que lo autentifique.

Las notificaciones por correo electrónico serán emitidas anexando el sello digital correspondiente, conforme lo señalado en los artículos 17-D y 38 fracción V de este Código.

II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la fracción anterior.

III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código.

IV. Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión.

V. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 137 de este Código.

Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el extranjero, se podrán efectuar por las autoridades fiscales a través de los medios señalados en las fracciones I, II o IV de este artículo o por mensajería con acuse de recibo, transmisión facsimilar con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios establecidos de conformidad con lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales suscritos por México.

El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que realicen las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo, cumpliendo con las formalidades previstas en este Código y conforme a las reglas generales que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

"Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación.

La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

185

conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior."

"Artículo 136. Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas.

Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de este Código. Asimismo, podrán realizarse en el domicilio que hubiere designado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos.

Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aún cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.

En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos."

"Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.

Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que éstos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este Código."

(Énfasis añadido)

Ahora bien, precisados los argumentos de la actora; la reproducción de las constancias de notificación sujetas a debate; y delimitado el marco normativo que rige las notificaciones de los actos que en pugna, debe reiterarse que los argumentos en cita



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 91 -



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

186

resultan infundados, y por lo tanto, ineficaces para desvirtuar la legalidad de las resoluciones impugnadas, en atención a las consideraciones jurídicas que a continuación se exponen:

A.2. Los actos de notificación sujetos a debate fueron debidamente circunstanciados.

En efecto, los citatorios de 27 de junio de 2011, 13 de septiembre de 2012, 17 de diciembre de 2012 y 25 de julio de 2013; así como las actas de notificación de 28 de junio de 2011, 14 de septiembre de 2012, 18 de diciembre de 2012 y 26 de julio de 2013, se encuentran circunstanciadas debidamente pues los mismos:

- ✓ Contienen la forma en la que se procedió a requerir la presencia del representante legal de [REDACTED] (antes [REDACTED]);
- ✓ De dichos documentos se desprende fehacientemente que los notificadores preguntaron si se encontraba el representante legal de la citada persona moral, a lo que de manera expresa la C. [REDACTED] contestó que no se encontraba presente, por lo que no podía atender la diligencia;
- ✓ Razón la anterior, por la cual se procedió a dejar los citatorios de mérito para que al día hábil siguiente, el representante legal de [REDACTED] (antes [REDACTED]) estuviera presente, esto es, los días 28 de junio de 2011 a las 11:00 horas; 14 de septiembre de 2012 a las 12:00 horas; 18 de diciembre de 2012 a las 16:00 horas; y 26 de julio de 2013 a las 17:30 horas en el propio domicilio fiscal de la contribuyente, respectivamente, tal y como lo establece el primer párrafo del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación (vigente al momento en que se llevó a cabo cada una de las diligencias);
- ✓ Lo anterior, puesto que dicho precepto prevé la opción para la autoridad fiscal de que el citatorio sea para la espera a una hora fija del día siguiente hábil, o para que en su caso acuda a notificarse dentro del plazo de seis días hábiles a las oficinas de la autoridad fiscal, por lo que cualquiera de las dos opciones ejercidas por la autoridad, de ninguna manera afectan la legalidad de la diligencia de notificación.

Abundando en el tema, de las constancias que amparan las diligencias sujetas a debate se desprende que los notificadores actuantes asentaron pormenorizadamente cómo fue que solicitaron la presencia del representante legal de mi contraria y cómo llegaron a la convicción de que el mismo estuvo ausente durante la práctica de dichas diligencias.



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

187

De lo asentado en dichas documentales, se aprecia con meridiana claridad que los días en que se diligenciaron los citatorios en pugna, así como sus correspondientes actas de notificación, y una vez que los notificadores se cercioraron de encontrarse en el domicilio fiscal de la incoante, procedieron a requerir la presencia del representante legal de ésta última, preguntando si éste último se encontraba presente, a lo que la persona con quien se entendieron todas las diligencias, contestó expresamente que el representante legal de la hoy accionante, no se encontraba presente, por lo que de conformidad con lo ordenado por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, los notificadores de trato procedieron a dejar al representante legal aludido, los citatorios de referencia y, posteriormente, a entender las diligencias con la empleada de la demandante, al no haber atendido el representante legal de ésta última los citatorios aludidos.

En ese contexto, es claro que no le asiste la razón a la actora, ya que contrario a sus apreciaciones, se desprende de los citatorios de referencia, así como de sus respectivas actas de notificación del día hábil posterior, que en las mismas se pormenorizaron los requerimientos de la presencia del representante legal de la demandante y las circunstancias por las cuales los notificadores verificaron que no se encontraba presente dicha persona en las fechas en que se diligenciaron los citatorios 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, 900-05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, así como del oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 101/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone a la letra lo siguiente:

Registro No. 172183. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Junio de 2007. Página: 286. Tesis: 2a./J. 101/2007. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa

"NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, COMO SE CERCIOÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, sostuvo que el notificador debe levantar razón circunstanciada, no sólo cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino se nieguen a recibir la notificación, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, sino al diligenciar cualquier notificación personal, en atención a sus características propias, su finalidad, su eficacia y los requisitos generales de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer. Ahora bien, conforme al criterio anterior y al texto del artículo 137 del Código Fiscal de la



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-S.

188

Federación, al constituirse en el domicilio del interesado, el notificador debe requerir su presencia o la de su representante y, en caso de no encontrarlo, dejarle citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, ocasión esta última en la cual debe requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero si éste o su representante no aguarda a la cita, previo cercioramiento y según pormenorizada de tal circunstancia, la diligencia debe practicarse con quien se encuentre en el domicilio o con un vecino, en su defecto. Lo anterior, porque el citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente a esperar al fedatario a la hora fijada con el apercibimiento de que, de no hacerlo, tendrá que soportar la consecuencia de su incuria, consistente en que la diligencia se entienda con quien se halle presente o con un vecino; por tanto, en aras de privilegiar la seguridad jurídica en beneficio de los particulares, debe constar en forma fehaciente que la persona citada incumplió el deber impuesto, porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho el presupuesto indispensable para que el apercibimiento legal pueda hacerse efectivo. En ese tenor, si al requerir la presencia del destinatario o de su representante, la persona que atiende al llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el fedatario debe asentarlo así en el acta relativa, a fin de que quede constancia circunstanciada de la forma por la que se cercioró de la ausencia referida."

Contradicción de tesis 72/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 9 de mayo de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

Tesis de jurisprudencia 101/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, se ~~sesión~~ privada del veintitrés de mayo de dos mil siete.

(Énfasis añadido)

Asimismo, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 60/2007, igualmente emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone a la letra lo siguiente:

Registro No. 172470. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007. Página: 962. Tesis: 2a./J. 60/2007. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa.

"NOTIFICACIÓN PERSONAL EN LA PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA QUE EN EL ACTA RELATIVA SE ASIENTE EL NOMBRE DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, PARA PRESUMIR QUE FUE LA MISMA QUE INFORMÓ AL NOTIFICADOR SOBRE LA AUSENCIA DEL DESTINATARIO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2007, página 494, sostuvo que el notificador debe levantar acta circunstanciada de las razones por las cuales entendió la notificación con una persona distinta del destinatario, para lo cual deberá precisar el domicilio en el que se constituyó, los datos de quien recibió el citatorio, así como los de la persona con



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-S.

189

quien se entendió la diligencia. En relación con lo anterior, conviene precisar que conforme al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, una vez que el notificador se constituye en el domicilio del destinatario, debe requerir su presencia, y en caso de no encontrarlo, dejar citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, fecha en la cual requerirá nuevamente la presencia del interesado, y en caso de que quien lo reciba le informe que no se encuentra presente, el notificador deberá practicar la diligencia con el informante, esto significa que la persona con quien se entiende la diligencia y la que informa son la misma, de modo que basta con que se asienten los datos de la persona con quien se entendió la diligencia, para que pueda presumirse que fue la misma que informó sobre la ausencia del destinatario."

Contradicción de tesis 25/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 28 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez y Jonathan Bass Herrera.

Tesis de jurisprudencia 60/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de abril de dos mil siete.

(Énfasis añadido)

De igual manera resulta perfectamente aplicable la tesis de jurisprudencia XIII.3o. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Registro No. 176227. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Enero de 2006. Página: 2251. Tesis: XIII.3o. J/2. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa.

"NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. ES SUFICIENTE EL DICHÓ DE LA PERSONA CON QUIEN SE PRACTICA PARA SATISFACER EL REQUISITO DEL REQUERIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE. La obligación de circunstanciar las diligencias de notificación personal que derivan de la interpretación del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto al requerimiento de la presencia del contribuyente o su representante legal, se satisface al momento de que el notificador asiente en el acta respectiva que preguntó por ellos a persona determinada y que ésta manifestó que no se encontraban, sin que sea necesario que se señalen los medios por los que esta última verificó su ausencia."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 93 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

190

Amparo directo 114/2005. Javier Maya Santiago. 15 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María de Fátima Isabel Sámano Hernández. Secretario: Leopoldo Delfino Vázquez Valencia.

Amparo directo 115/2005. Francisco Vázquez Calvo. 15 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: Ruth Ramírez Núñez.

Amparo directo 185/2005. Envasadora Gugar, S.A. de C.V. 29 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: Ruth Ramírez Núñez.

Amparo directo 167/2005. Centro de Distribución y Servicios, S.A. de C.V. 29 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María de Fátima Isabel Sámano Hernández. Secretario: Leopoldo Delfino Vázquez Valencia.

Amparo directo 147/2005. Estrategia Empresarial Castro López, S.C. 9 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: Ruth Ramírez Núñez.

(Énfasis añadido)

Finalmente, se considera aplicable la diversa tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyos votos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época: Novena Época. Registro: 162073. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Mayo de 2011. Materia(s): Administrativa. Tesis: XVII.1o.P.A. 3/22. Página: 913

"NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN CUANDO AQUÉLLAS SE ENTIENDEN CON UN TERCERO, BASTA QUE EL NOTIFICADOR ASIENTE EN EL ACTA CORRESPONDIENTE QUE EL INTERESADO NO LO ESPERÓ A LA HORA INDICADA EN EL CITATORIO PREVIO, DE LO CUAL SE CERCIOÓ POR LA INFORMACIÓN QUE A ESE RESPECTO LE PROPORCIONÓ LA PERSONA CON QUIEN LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA, DE QUIEN ASENTÓ SU NOMBRE Y EL VÍNCULO QUE TIENE CON EL CONTRIBUYENTE (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 60/2007, 2a./J. 101/2007 Y 2a./J. 82/2009). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 60/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 962, consideró que, tratándose de una notificación personal practicada en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, basta que en el acta relativa se asiente el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia para presumir que fue la misma que informó al notificador sobre la ausencia del destinatario; por su parte, en la diversa tesis 2a./J. 101/2007, contenida en el señalado medio de difusión, Tomo XXV, junio de 2007, página 286, sustentó el criterio consistente en que en el acta relativa el notificador debe asentar en forma circunstanciada cómo se

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

191

cercioó de la ausencia del interesado o de su representante, como presupuesto para que la diligencia se lleve a cabo por conducto de tercero y, en la jurisprudencia 2a./J. 82/2009, que aparece en los mismos Semanario y Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 404, estimó que cuando la mencionada diligencia se entiende con las personas que habitan en el domicilio, como los familiares o empleados domésticos, o con las que habitual o temporalmente están ahí, como los trabajadores, se cumple con el requisito de circunstanciación si se asienta el vínculo de tales personas con el contribuyente, lo cual ofrece garantía de que le informarán sobre la notificación. En congruencia con lo anterior, para cumplir con el requisito de circunstanciación de la indicada diligencia cuando se entiende con un tercero, basta con que el notificador asiente en el acta correspondiente que habiendo requerido la presencia del contribuyente o de su representante legal, éste no lo esperó a la hora señalada en el citatorio previo, de lo cual se cercioó por la información que a ese respecto le proporcionó la persona con quien llevó a cabo la diligencia, de quien asentó su nombre y el vínculo que tiene con el contribuyente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Revisión fiscal 180/2009. Administrador Local de Auditoría Fiscal de Ciudad Juárez, Chihuahua. 27 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan Fernando Luévano Ovalle.

Revisión fiscal 161/2010. Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Ciudad Juárez, Chihuahua. 19 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Rosa María Chávez González.

Revisión fiscal 213/2010. Administrador Local Jurídico de Ciudad Juárez, Chihuahua. 25 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan Fernando Luévano Ovalle.

Revisión fiscal 219/2010. Administradora Local de Auditoría Fiscal de Ciudad Juárez, Chihuahua. 4 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretario: Jorge Erik Montes Gutiérrez.

Revisión fiscal 10/2011. Administradora Local Jurídica de Chihuahua. 11 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretaria: Georgina Acevedo Barraza.

(Énfasis añadido)

En ese sentido, también será evidente para esa H. Sala, que los notificadores en cita preguntaron expresamente a la persona con quien entendieron las diligencias aludidas sobre la presencia del representante legal de la actora, siendo precisamente dicha persona la que contestó de manera expresa que el citado representante, no se encontró



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

192

presente al momento de practicar las diligencias sujetas a debate; por lo tanto, los argumentos de la demandante al respecto devienen claramente infundados.

Apoya los razonamientos de ésta defensa, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 60/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época: Novena Época, Registro: 172470, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 60/2007, Página: 962

"NOTIFICACIÓN PERSONAL EN LA PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA QUE EN EL ACTA RELATIVA SE ASIENTE EL NOMBRE DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, PARA PRESUMIR QUE FUE LA MISMA QUE INFORMÓ AL NOTIFICADOR SOBRE LA AUSENCIA DEL DESTINATARIO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, sostuvo que el notificador debe levantar acta circunstanciada de las razones por las cuales entendió la notificación con una persona distinta del destinatario, para lo cual deberá precisar el domicilio en el que se constituyó, los datos de quien recibió el citatorio, así como los de la persona con quien se entendió la diligencia. En relación con lo anterior, conviene precisar que conforme al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, una vez que el notificador se constituye en el domicilio del destinatario, debe requerir su presencia, y en caso de no encontrarlo, dejar citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, fecha en la cual requerirá nuevamente la presencia del interesado, y en caso de que quien lo reciba le informe que no se encuentra presente, el notificador deberá practicar la diligencia con el informante, esto significa que la persona con quien se entiende la diligencia y la que informa son la misma, de modo que basta con que se asienten los datos de la persona con quien se entendió la diligencia, para que pueda presumirse que fue la misma que informó sobre la ausencia del destinatario."

Contradicción de tesis 25/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 28 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez y Jonathan Bass Herrera.

En tal virtud, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones cuya legalidad se cuestiona en el expediente en que se actúa, de conformidad con los hechos y el derecho expuestos en el presente apartado.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

193

Ahora bien, respecto a la calidad de tercero que guardaba la C. [REDACTED] con [REDACTED] (antes [REDACTED]), los notificadores al llevar a cabo las diligencias de notificación, se aseguraron que dicha persona informaría a la contribuyente de los documentos dejados en su poder.

Lo anterior, dado que para cumplir con el requisito de la debida circunstanciación en el acta de notificación cuando la diligencia respectiva se realice con un tercero, entendido éste como la persona que por su vínculo con el contribuyente, ofrece cierta garantía de que efectivamente informará sobre el documento a su destinatario, el notificador debe asegurarse de que aquél no está en el domicilio por circunstancias ocasionales o accidentales, sino que por su actividad ordinaria o permanentemente está en contacto con el contribuyente, es decir, que tiene un vínculo, incluyendo en ese concepto, entre otras personas, a las que habitualmente están ahí por ser trabajadores o empleados, y que para ello resulta necesario que el notificador precise las características de la oficina o inmueble u otros datos diversos que indubitabilmente den certeza de que la diligencia se practicó en el domicilio correcto.

En ese contexto, para considerar que el acta de una notificación personal practicada en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación (vigente al momento en que se llevó a cabo cada una de las diligencias) entendida con un tercero está debidamente circunstanciada, basta que en ésta se cumpla con los siguientes requisitos:

- Que el tercero proporcione su nombre (C. [REDACTED] en el caso a estudio);
- Dicha persona se identifique y, (tal y como consta en las constancias de notificación, se identificó con la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED] que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona en las diligencias correspondientes al citatorio de 27 de junio de 2011 y la notificación de 28 de junio de 2011, así como con la licencia para conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal, de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, según consta en los citatorios de 13 de septiembre de 2012, 17 de diciembre de 2012 y 25 de julio de 2013 y en las actas de notificación que le siguieron a los mencionados citatorios); y
- Señale la razón por la cual está en el lugar o su relación con el interesado, (a lo que la C. [REDACTED] señaló que tenía relación con el contribuyente, pues prestaba sus servicios profesionales y se encontraba en el domicilio de [REDACTED] antes por estar cumpliendo con su horario de trabajo);



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 95 -



SAT

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

194

Pues al contar con esos datos objetivos, puede tenerse la certeza de que se practicó la diligencia en el domicilio del contribuyente, que fue buscado su representante legal y que pueda conocer o enterarse de la resolución que se le notifica y así preparar su defensa. Asimismo, no se desahució a la persona que atendió todas las diligencias de notificación sujetas a debate en sede administrativa y en la presente instancia contenciosa, lo que evidencia que si la actora respondió todos los requerimientos que efectuó la autoridad fiscal, tal como quedó señalado con antelación y en la resolución impugnada, entonces dicha persona no se encontraba de modo accidental en el domicilio de mi contraria, y existe la certidumbre de que hacía de su conocimiento los documentos que le eran notificados en su carácter de tercero.

En ese sentido, es válido concluir los argumentos que pretende hacer valer la enjuiciante son infundados, ya que se cumplieron con todos los requisitos establecidos en ley para llevar a cabo las notificaciones personales en pugna.

A lo anterior, se suma el hecho de que **por lo que hace al cercioramiento por parte del personal encargado de practicar las diligencias impugnadas, respecto a la relación que sostiene la persona con quien fueron entendidas las diligencias sujetas a debate con la enjuiciante, se reitera que dicho argumento es infundado.**

En efecto, lo anterior es de ese modo, ya que en primer término, conviene precisar que si bien es cierto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 82/2009, de rubro **NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO**, que el notificador al practicar una diligencia de notificación con un tercero, debe asegurarse que éste último no está en el domicilio por circunstancias accidentales, quedando incluidas en ese concepto desde las personas que habitan en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo), no menos cierto es que dicha exigencia se cumple al asentar en el acta correspondiente, el carácter de dicho tercero.

* Registro No. 166911. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Julio de 2009. Página: 404. Tesis: 2a./J. 82/2009. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa



SAT

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

195

Al respecto, conviene tener presente el considerando sexto de la ejecutoria que resolvió la 4ª. radicación de tesis 85/2009, que a la postre dio origen a la tesis de jurisprudencia referenciada en el punto que antecede:

"SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que se sustenta en la presente resolución.

A efecto de resolver lo conducente, conviene transcribir los artículos 134, 135, 136 y, nuevamente, el 137 del Código Fiscal de la Federación:

(Transcribe)

El artículo 134 establece los tipos de notificaciones que existen en materia fiscal, que pueden ser: Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo, por correo ordinario o por telegrama, por estrados, por edictos y por instructivo.

Por su parte, el artículo 135 previene el momento en que las notificaciones surten sus efectos (al día hábil siguiente en que fueron hechas) y el requisito relativo a que, al practicarlas, deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Asimismo, establece los requisitos que deben cumplirse cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o los terceros habilitados; y los efectos de la manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo.

El artículo 136 establece los lugares en donde pueden efectuarse las notificaciones y las relativas a las sociedades en liquidación.

Finalmente, el artículo 137 regula lo relativo a las notificaciones personales en materia fiscal. Al respecto dispone, como regla general, que cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.

Por otro lado, el segundo párrafo contiene una regla específica tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución. En este caso, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia "... con quien se encuentre en el domicilio ...", o, en su defecto, con un "vecino". En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

196

Como se ve, el numeral anterior permite dejar el citatorio y entender la diligencia de notificación, con un tercero distinto del contribuyente o de su representante legal, en el caso de que éste no se encuentre en la primera búsqueda o no lo espere en la segunda. Esa tercera persona es reputada por la ley, "no aquella que se "se encuentre en el domicilio", o bien, un "vecino".

Lo relativo al tema del tercero fue lo que originó la presente contradicción, pues en los casos que analizaron los tribunales contendientes, salvo el resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se advierte una constante: Las notificaciones fueron realizadas por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, quienes asentaron en las actas en que hicieron constar la entrega de los citatorios y las notificaciones posteriores respectivas, que entendieron las respectivas diligencias con determinada persona: "quien dijo ser tercero compareciente", "quien manifestó ser tercero compareciente", "en su carácter de tercero", "en su carácter de tercero del contribuyente". (Págs. 56, 57, 94, 95, 124, 125, 126, 127, 180, 338, 339, 431 y 432 del expediente de contradicción).

Así, dos Tribunales Colegiados consideraron que, a efecto de circunstanciar debidamente las actas levantadas con motivo de la entrega del citatorio y de la posterior notificación, el funcionario respectivo debió asentar, entre otros datos, la relación o vínculo que guardaba ese tercero con el contribuyente o su representante legal; y los otros dos lo consideraron innecesario. Asimismo, uno de aquellos dos primeros consideró que el tercero debía identificarse (y sólo en el caso de que no lo hiciera debía recabarse el dato relativo a la relación o vínculo), y otro lo estimó innecesario.

Ahora bien, el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación ya ha sido analizado en diversas ocasiones por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprende de las siguientes tesis de jurisprudencia:

(Transcribe)

De la ejecutoria de la cual derivó esta última jurisprudencia destacan las siguientes consideraciones:

(Transcribe)

De las tesis y texto anteriores sobresalen las siguientes premisas:

a) Debe levantarse acta circunstanciada al diligenciarse cualquier notificación personal en materia fiscal y no sólo tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, pues el objeto de las formalidades específicas que dispone el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

197

b) La circunstanciación a que se refiere dicho numeral implica que el notificador está obligado a asentar en la acta respectiva, las razones por las cuales entendió la notificación con una persona distinta del destinatario, para lo cual deberá precisar el domicilio en el que se constituyó, los datos de quien recibió el citatorio, así como los de la persona con quien se entendió la diligencia, presumiéndose que la persona con quien se entiende la diligencia y la que informa son la misma, de modo que basta con que se asienten los datos de la persona con quien se entendió la diligencia, para que pueda presumirse que fue la misma que informó sobre la ausencia del destinatario.

c) El citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente a esperar al fedatario a la hora fijada con el apercibimiento de que, de no hacerlo, tendrá que soportar la consecuencia de su incuria, consistente en que la diligencia se entienda con quien se halle presente o con un vecino; por tanto, en aras de privilegiar la seguridad jurídica en beneficio de los particulares, debe constar en forma fehaciente que la persona citada incumplió el deber impuesto, porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho el presupuesto indispensable para que el apercibimiento legal pueda hacerse efectivo.

d) Si al requerir la presencia del destinatario o de su representante, la persona que atiende al llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el fedatario debe asentarlo así en la acta relativa, a fin de que quede constancia circunstanciada de la forma por la que se cercioró de la ausencia referida.

e) El citatorio previo a la notificación personal que debe formular el notificador cuando no encuentre al visitado para que lo espere a una hora fija del día siguiente o para que acuda a notificarse, constituye una formalidad diversa a la obligación que debe cumplirse en las actas de notificación, en las que deben de asentarse todos los datos de circunstancia, incluyendo la forma como el notificador se cercioró del domicilio de la persona que debe notificar y tuvo convicción de ello, de acuerdo con los diversos elementos con los que cuente y según el caso concreto.

Como se advierte de lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, tales alcances que permitan hacer efectiva la garantía de seguridad jurídica a los sujetos a quienes deba notificarse "... entendida como el valor que se refiere a los órganos que crean los procedimientos, a la interpretación y aplicación del derecho, que permite dotar de certeza a la actuación de la administración tributaria, poniendo freno a su posible arbitrariedad", según reza una parte de la ejecutoria que originó a la primera de las tesis invocadas.

A efecto de salvaguardar esa garantía, en las tesis transcritas se ha establecido una constante: La de que las actas relativas a la notificación deben circunstanciarse debidamente. Específicamente, en cuanto al tema que interesa, en la tesis citada en segundo lugar (2a./J. 60/2007) se establece, por un lado, que el notificador debe levantar acta circunstanciada de las razones por las cuales entendió la notificación con una persona distinta del destinatario, para lo cual deberá precisar el domicilio en el que se constituyó, los datos de quien recibió el citatorio, así como los de la persona con quien se entendió la



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 97 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541

J.N. 12140/15-17-11-5.

198

diligencia y, por otro, que en caso de que quien lo reciba le informe que no se encuentra presente, el notificador deberá practicar la diligencia con el informante, lo cual significa que la persona con quien se entiende la diligencia y la que informa son la misma, de modo que basta con que se asienten los datos de ésta, para que pueda presumirse que fue la misma que informó sobre la ausencia del destinatario.

Del párrafo anterior se observa que, cuando la diligencia de notificación se entiende con "... la persona que se encuentre en el domicilio ...", o bien, con "... un vecino ...", es decir, un tercero, es necesario que el diligenciario asiente en las actas respectivas los datos de aquél a efecto de cumplir con la debida circunstanciación de ellas.

La palabra "dato", según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (vigésima primera edición, Madrid, 1992, página 663), significa: "1. Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. 2. Documento, testimonio, fundamento. 3. Inform. Representación de una información de manera adecuada para su tratamiento de un ordenador."

De acuerdo con la definición anterior y de lo que ha interpretado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, los datos que debe obtener el notificador son aquellos fundamentos o antecedentes que sean aptos para identificar al tercero, de donde deriva que la legalidad de una diligencia de notificación se sustenta entonces en los datos objetivos que se plasmen y que permitan tener la certeza de que el funcionario realizó la diligencia en el lugar indicado y que buscó al interesado; sin embargo, no puede exigirse que sean, necesariamente, aquellos que establezcan la relación o vínculo que guarda ese tercero con el interesado, ni tampoco que exprese la razón del porque se encuentra en el domicilio, como lo refirió uno de los Tribunales Colegiados contentivos, menos aún el de que se le exija una identificación determinada, por la simple y sencilla razón de que no lo establece así la codificación de la materia.

Así pues, la expresión "persona que se encuentre en el domicilio" (o sea, el tercero con el que se entienden las diligencias), no puede entenderse como cualquier persona, ya que no puede soslayarse que en el establecimiento o domicilio las personas pueden estar de forma permanente, habitual, temporal o accidental. No podría suponerse que una persona que está de forma circunstancial o accidental en el domicilio sea apta para informar sobre el paradero del contribuyente o de su representante legal, ni, mucho menos, para recibir el citatorio para la práctica de la diligencia; por ello, ésta no puede entenderse con cualquier persona, sino sólo con aquella que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que informará sobre el documento a su destinatario. Por esta razón, es innegable que el notificador debe asegurarse de que el tercero que se halla en el domicilio no está allí por circunstancias accidentales. Por tanto, en el concepto de "persona que se encuentre en el domicilio", podrían quedar incluidas desde las personas que habitan en el domicilio (familiar, o empleados domésticos) hasta las que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo).

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541

J.N. 12140/15-17-11-5.

199

Por tanto, a efecto de circunstanciar el acta de notificación en el caso que interesa, es necesario que el notificador asiente datos que objetivamente permitan concluir que la diligencia se practicó en el domicilio señalado, que se buscó al contribuyente o su representante y que ante la ausencia de éstos se entendió la diligencia con quien se concentraba en el domicilio, es decir, un vecino o un tercero, entendido éste en los términos de los párrafos anteriores. En este caso, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón de por qué está en el lugar o su relación con el interesado, pues quedó visto que no está constreñido a ello, se requerirá que el notificador asiente diversos datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son: las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que abrió la puerta o que atiende la oficina porque se encontraba detrás de un escritorio u otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva, es decir, datos objetivos que lleven a concluir que el notificador realmente se constituyó en el domicilio, se cercióró de que es el lugar buscado y que ante la ausencia del interesado entendió la diligencia con quien se encontraba en el lugar, circunstanciando estos hechos en la forma indicada.

Lo anterior significa que, para considerar que las actuaciones respectivas cumplen con la garantía de la debida fundamentación y motivación, no basta que el notificador asiente simplemente que las entendió con "quien dijo ser tercero compareciente", o frases similares, sino que debe circunstanciarlas debidamente en los términos que anteceden."

(Énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad que en ningún dispositivo legal —como lo señaló el Máximo Tribunal— se exige que los notificadores se aseguren del carácter con el que se ostentan las personas con quien entienden determinada diligencia, ya que así no lo exige el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación; no obstante lo anterior, si debe precisarse el carácter del tercero, mismo que por su relación con el interesado, puede dar noticia del documento a notificar a su destinatario, por lo que si en los citatorios y actas de notificación sujetos a debate se expresa o asienta el carácter de la tercero con quien fueron entendidos los mismos —empleada de la parte actora, en el caso a estudio—, ello es suficiente para considerar legales dichas diligencias, ya que es evidente que al ser empleada de la demandante la persona con quien fueron entendidas las diligencias de referencia, no se encuentra en el domicilio visitado por circunstancias accidentales, sino que es de las personas que habitual, temporal o permanentemente se encuentran en el mismo; en ese sentido, se hace patente que dicha persona haría los citatorios y los oficios materia de la presente instancia, del conocimiento de la interesada, hoy enjuiciante, máxime que la persona con quien fueron dejados los citatorios que nos ocupa y los propios oficios que se notificaron, es la misma.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

200

En ese contexto, resultan infundados los argumentos de mi contraria al respecto, ya que incluso ésta última es omisa en indicar el fundamento de sus gratuitas manifestaciones.

Lo anterior, es avalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2014 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor literal siguiente:

Época: Décima Época. Registro: 2007413. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 85/2014 (10a.). Página: 746

NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. PARA CIRCUNSTANCIAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON UN TERCERO, ES INNECESARIO QUE EL NOTIFICADOR RECABE DOCUMENTOS O ELEMENTOS INDUBITABLES QUE DEMUESTREN EL NEXO QUE ADUCE TENER CON EL CONTRIBUYENTE. De la interpretación del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación y en congruencia con el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en las jurisprudencias 2a./J. 15/2001 (*), 2a./J. 60/2007 (**), 2a./J. 101/2007 (***) y 2a./J. 82/2009 (****), se advierte que para circunstanciar el acta de notificación es necesario que el notificador asiente datos objetivos que permitan concluir que: a) la diligencia se practicó en el domicilio señalado; b) se buscó al contribuyente o a su representante; y c) ante la ausencia de éstos se entendió la diligencia con quien se encontraba en el domicilio. En este último caso, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni expresa la razón por la cual está en el lugar o la relación que tiene con el interesado, se requerirá que el notificador asiente diversos datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las características del inmueble; si el tercero se encontraba en el interior, u otros datos diversos que, razonablemente, conlleven la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con quien dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva. De ahí que no puede obligarse al notificador a recabar los documentos con los que se acredite el vínculo del tercero con el contribuyente pues éste no está constreñido a justificar la razón por la que se encuentra en el lugar o su relación con el interesado ni, por ende, a proporcionar documentación referida con esa circunstancia, bastando entonces, a efecto de salvaguardar la legalidad del acto, que el notificador asiente los datos indicados, circunstanciando esos hechos en forma objetiva y no en meras apreciaciones subjetivas."

Contradicción de tesis 132/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

201

Ahora bien, el Aíto Tribunal, en la ejecutoria antecedente del criterio recién transcrito, e^{fic}icamente en el considerando QUINTO, en la parte que nos interesa, estableció lo siguiente:

Sentado lo anterior, conviene recordar que en el caso que ahora se analiza, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes discrepan en el punto relativo a si para cumplir con el requisito de circunstanciación del acta relativa a la práctica de una notificación con un tercero, es necesario que el notificador recabe la documentación que demuestre el vínculo de ese tercero con el contribuyente o si basta con que se proporcionen datos objetivos que permitan tener certeza de que se informará al destinatario sobre la práctica de esa diligencia y de la materia de la notificación.

Para dilucidar tal punto y en congruencia con la evolución interpretativa contenida en las jurisprudencias con las que se ha dado cuenta, resulta ilustrativa la parte considerativa de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 101/2007, en la que se señaló lo siguiente:

(Trascribe)

Por otra parte, de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 82/2009, se destaca la siguiente parte considerativa:

(Trascribe)

De lo anterior, se sigue que esta Segunda Sala ha establecido ya los elementos que en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, son necesarios para salvaguardar los principios de seguridad jurídica y de fundamentación y motivación que deben revestir las diligencias de notificación, y de las actas que con motivo de ellas se levanten.

En concreto, en torno a las que se entienden con un tercero se ha establecido en la última de las jurisprudencias citadas a la que aluden los órganos colegiados que ahora contienen, que a efecto de circunstanciar el acta de notificación en el caso que interesa, es necesario que el notificador asiente datos que objetivamente permitan concluir que la diligencia se practicó en el domicilio señalado, que se buscó al contribuyente o su representante y que ante la ausencia de éstos se entendió la diligencia con quien se concentraba en el domicilio.

En este caso, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón de por qué está en el lugar o su relación con el interesado, pues no está constreñido a ello, se requerirá que el notificador asiente diversos datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que abrió la puerta o que atiende la oficina porque se encontraba detrás de un escritorio u otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

202

dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

Conforme a lo expuesto, para la circunstanciación del acta que se levante con motivo de la diligencia de notificación, no puede obligarse al notificador a recabar los documentos con los que se acredite el vínculo del tercero con el contribuyente pues como se ha visto, éstos no están constreñidos a explicar la razón por la que están en el lugar o su relación con el interesado ni por ende, a proporcionar documentación referida con esa circunstancia; sin embargo, en esos casos a efecto de salvaguardar la legalidad del acto, el notificador debe asentar diversos datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que abrió la puerta o que atiende la oficina porque se encontraba detrás de un escritorio u otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

Consecuentemente, el acta que se levante debe contener datos que lleven a concluir que el notificador realmente se constituyó en el domicilio, se cercióró de que es el lugar buscado y que ante la ausencia del interesado entendió la diligencia con quien se encontraba en el lugar, circunstanciando estos hechos en forma objetiva y no en meras apreciaciones subjetivas.

(énfasis añadido)

De lo resaltado por esta defensa, se advierte claramente la confusión en que incurre la parte actora, puesto que en su opinión, el personal encargado de practicar las diligencias que nos ocupan, debió cerciorarse del carácter de la tercero con quien practicaron las diligencia en pugna, lo cual resulta inexacto.

En efecto, lo anterior es de ese modo, puesto que respecto al tema en estudio, el Máximo Tribunal estableció que "...si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón de por qué está en el lugar o su relación con el interesado, pues no está constreñido a ello, se requerirá que el notificador asiente diversos datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio...", entonces el notificador estará obligado a asentar "...diversos datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que abrió la puerta o que atiende la oficina porque se encontraba detrás de un escritorio u otros datos diversos, se indubitadamente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva...", sin que haya hecho mención

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

203

a que sólo en dicha circunstancia, se relevará a dicho funcionario de asegurarse del carácter del tercero.

Lo expuesto es así, puesto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también estableció categóricamente que "...para la circunstanciación del acta que se levante con motivo de la diligencia de notificación, no puede obligarse al notificador a recabar los documentos con los que se acredite el vínculo del tercero con el contribuyente pues como se ha visto, éstos no están constreñidos a explicar la razón por la que están en el lugar o su relación con el interesado ni por ende, a proporcionar documentación referida con esa circunstancia..." de lo que se desprende que en ningún caso —ya sea que el tercero refiera su nombre y datos de identificación, ya sea que no proporcione dicha información— es dable vincular al notificador a acreditar la relación que manifiesten tener los terceros con el contribuyente buscado.

Lo anterior, en virtud de que los terceros en cita "...no están constreñidos a explicar la razón por la que están en el lugar o su relación con el interesado ni por ende, a proporcionar documentación referida con esa circunstancia...", circunstancia esta última que aparentemente pasa por alto la demandante.

Por ello, si en la especie no se desprende de ningún fragmento de la ejecutoria en estudio, que efectivamente el personal notificador debe verificar el carácter de los terceros con quienes entiendan diligencias —como inexactamente lo aprecia la enjuiciante—, es patente que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2014 (10a.) de rubro NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL PARA CIRCUNSTANCIAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON UN TERCERO, ES INNECESARIO QUE EL NOTIFICADOR RECABE DOCUMENTOS O ELEMENTOS INDUBITABLES QUE DEMUESTREN EL NEXO QUE ADUCE TENER CON EL CONTRIBUYENTE¹⁰ resulta perfectamente aplicable al caso puesto a consideración de esa H. Sala.

De conformidad con lo expuesto, ésta defensa estima procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las actuaciones cuya legalidad se cuestiona en el expediente en que se actúa, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 52 de la Ley General de Procedimiento Contencioso Administrativo.

¹⁰ Época: Décima Época. Registro: 2007413. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre de 2014, Torno I. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 85/2014 (10a.), Página: 746



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

204

A.3. Resulta infundado el argumento de la actora donde aduce que la autoridad fiscalizadora debe motivar porqué decidió realizar la notificación al día siguiente de la entrega del citatorio, y no dentro de seis días hábiles.

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación del Código Fiscal de la Federación, se advierte que en materia de notificaciones personales, el legislador otorgó a la autoridad fiscal una facultad reglada tratándose del procedimiento administrativo de ejecución y una discrecional en todos los demás procedimientos.

Se dice lo anterior porque cuando se trate del procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio de notificación siempre será para que el contribuyente espere a una hora fija del día hábil siguiente, en tanto que en cualquier otro procedimiento, **el fedatario puede decidir, acorde con la naturaleza del caso, la forma en que ha de llevarse a cabo la notificación cuando no encuentre a quien deba notificar.**

Cabe hacer la precisión de que el citatorio previo a la notificación fiscal reviste formalidades distintas a las de la diligenciación de un citatorio, y, por tanto, no le es exigible la circunstanciación de datos que, por regla general, deben colmarse al realizarse aquella diligencia. De ahí, que si el citatorio se traduce en un mero documento previo a la notificación, la cual en todo caso será que trascienda a la esfera jurídica del particular, resulta innecesario exigir a la autoridad un grado específico de descripción sobre las razones por las cuales determina que la notificación se lleve a cabo de una u otra forma (citación para el día hábil siguiente o para que el contribuyente acuda a notificarse a las oficinas de la autoridades), pues ello no trasciende a la certidumbre jurídica del gobernado, máxime que ambas formas de notificación le permiten conocer el acto jurídico respectivo y, en su caso, defenderse y hacer las manifestaciones que a sus intereses convengan, por lo que de encontrar irregularidades en dicha notificación, puede hacerlas valer mediante el medio de impugnación que considere procedente.

En ese tenor, basta que en el citatorio previo se asiente la fecha y hora en que se llevará a cabo la diligencia de notificación correspondiente, lo que resulta suficiente para otorgar certidumbre al particular, pues sabrá la manera en que se le dará a conocer el acto de la autoridad.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XCVII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

205

Época: Décima Época, Registro: 2004943, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. XCVII/2013 (10a.), Página: 646

"NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER QUE EL NOTIFICADOR DEJARÁ CITATORIO PARA QUE EL CONTRIBUYENTE ESPERE A UNA HORA FIJA DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE O PARA QUE ACUDA A NOTIFICARSE DENTRO DEL PLAZO DE 6 DÍAS A LAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES FISCALES, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Del citado precepto se advierte que en materia de notificaciones personales, el legislador otorgó a la autoridad una facultad reglada tratándose del procedimiento administrativo de ejecución y una discrecional en todos los demás procedimientos, ya que en aquél el citatorio de notificación siempre será para que el contribuyente espere a una hora fija del día hábil siguiente, en tanto que en cualquier otro procedimiento, el fedatario puede decidir, acorde con la naturaleza del caso, la forma en que ha de llevarse a cabo la notificación cuando no encuentre a quien deba notificar. Ahora bien, de los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el citatorio previo a la notificación fiscal reviste formalidades distintas a las de la notificación y, por tanto, no le es exigible la circunstanciación de datos que, por regla general, deben colmarse al realizarse dicha diligencia. De ahí que si el citatorio se traduce en un mero documento previo a la notificación, la cual en todo caso será la que trascienda a la esfera jurídica del particular, resulta innecesario exigir a la autoridad un grado específico de descripción sobre las razones por las cuales determina que la notificación se lleve a cabo de una u otra forma (citación para el día hábil siguiente o para que acuda a notificarse), pues ello no trasciende a la certidumbre jurídica del gobernado, máxime que ambas formas de notificación le permiten conocer el acto jurídico respectivo y, en su caso, defenderse y hacer las manifestaciones que a su derecho convenga, por lo que de encontrar irregularidades en dicha notificación puede hacerlas valer mediante el medio de impugnación que considere procedente. En ese tenor, el precepto referido no viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que basta que en el citatorio previo el notificador establezca expresamente cuál es el supuesto de notificación por el cual opta, lo que resulta suficiente para otorgar certidumbre al particular, pues sabrá la manera en que se le dará a conocer el acto de la autoridad."

Amparo directo en revisión 2392/2013. Apolo Tec, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

(Énfasis añadido)

En tal orden de ideas, si la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha definido que la decisión de dejar citatorio para la espera por parte del interesado o su representante legal al notificador de la autoridad fiscal, o dejar uno diverso para que dicho interesado o la persona que lo



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 101 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

206

represente acuda a las oficinas de la autoridad fiscal a notificarse, corresponde exclusivamente a la autoridad fiscal, sin que ésta deba precisar por qué elige una u otra forma de citación, es patente que los argumentos que se contestan devienen infundados, al tratarse dicha decisión en una facultad discrecional de la autoridad.

Al respecto, conviene destacar que la actora pierde de vista que la autoridad fiscalizadora no se encuentra vinculada a indicar porque elige una u otra forma de citación al practicar una diligencia de notificación personal, en la inteligencia de que las facultades de las autoridades fiscales para adoptar una u otra opción de las referidas, se despliegan de manera discrecional.

Ciertamente, resulta suficiente que la autoridad haya seguido a la letra al procedimiento estatuido en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, para proceder a notificar un acto administrativo, previo citatorio en tal o cual sentido.

En relación a lo anterior, la disposición citada en el párrafo que antecede, dispone a la letra lo siguiente:

"Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales."

Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este Código."

(Énfasis añadido)

De la disposición que se acaba de transcribir, se desprende con meridiana claridad que el citatorio para que el interesado o su representante legal espere en su domicilio al notificador al día siguiente, o para que aquél o la persona que lo represente acuda a las oficinas de las autoridades fiscales, quedará al prudente arbitrio de las autoridades fiscales.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

207

En ese contexto, se reitera que resulta infundada la pretensión de la demandante, ya que las disposiciones legales aplicables no disponen la inverosímil exigencia de mi contraria a cargo de las autoridades fiscales, sino que, como se adujo en líneas precedentes, constituye una facultad discrecional de las mismas, dejar citatorio para la espera antes aludida o para que los interesados acudan a la sede de la autoridad.

Por tal razón, resulta suficiente que en el citatorio que diligencie la autoridad fiscal, se mencione expresamente que el mismo se deja para la espera antes mencionada, o para que el interesado acuda a las oficinas de la autoridad fiscal, tal y como aconteció en la especie con los citatorios en pugna, en los cuales se estableció expresamente que los mismos se diligenciaron para el efecto de que el representante legal de la actora, esperara al notificador a hora fija del día hábil siguiente al en que se practicaron.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis XIV.2o.44 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto disponen a la letra lo siguiente:

Registro No. 184888. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Febrero de 2003. Página: 1063. Tesis: XIV.2o.44 K. Tesis Aislada. Materia(s): Común

"FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS. DIFERENCIAS. Para determinar si la autoridad goza de facultades discrecionales o regladas debe atenderse al contenido de la norma legal que las confiere. Si ésta prevé una hipótesis de hecho ante la cual la autoridad puede aplicar o no la consecuencia de derecho prevista en la misma, según su prudente arbitrio, debe afirmarse que la autoridad goza de facultades discrecionales. Empero, cuando la autoridad se encuentra vinculada por el dispositivo de la ley a actuar en cierto sentido sin que exista la posibilidad de determinar libremente el contenido de su posible actuación, debe concluirse que la autoridad no goza de facultades discrecionales sino regladas."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 191/2002. Joaquín Pacheco Medina. 31 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Gabriel García Lanz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Leticia Evely Córdoba Ceballos.

(Énfasis añadido)



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

208

En esa tesitura, si como se ha observado, el artículo 137, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dispone expresamente que las autoridades fiscales podrán dejar citatorios a los contribuyentes para que esperen a hora fija del día hábil siguiente al notificador, o para que queden a la sede de la autoridad fiscal a notificarse, sin exigirles la exposición del motivo por el cual eligieron tal o cual forma de notificación, es evidente que estamos ante facultades discrecionales, por lo cual resulta suficiente que la autoridad fiscal al diligenciar un citatorio —como en la especie ocurrió—, mencione que la expide con el fin o propósito de que el representante legal de la demandante espere al notificador a hora fija del día hábil siguiente, para considerar legal y válido los citatorios en pugna.

De conformidad con lo anterior, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

A.4. Por su parte, resulta infundado que manifesté mi contraria que no se señaló la hora en que fueron entregados los citatorios sujetos a debate.

En efecto, no debe olvidarse que la constitución en el domicilio, el requerimiento de la persona buscada, así como en su caso, la elaboración y entrega del citatorio, son un acto de tracto continuo, por lo que si el notificador se constituyó en una hora hábil (13:00 horas, 17:45 horas, 13:30 horas y 17:35 horas, en los citatorios de 27 de junio de 2011, 13 de septiembre de 2012, 17 de diciembre de 2012 y 25 de julio de 2013, respectivamente), es evidente que la entrega de los mismos se realizó dentro de las horas hábiles previstas en el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, aunado al hecho de que de conformidad con dicho precepto legal, una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez, lo cual evidentemente demuestra que el argumento de la actora es del todo infundado como, a continuación se muestra con lo establecido expresamente por el legislador:

Artículo 13. La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se considerarán hábiles todos los días del año y las 24 horas del día.

Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

209

diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de estabilidad o de bienes del particular."

(Énfasis añadido)

De acuerdo al precepto transcrito con anterioridad, en el citatorio es necesario que "...se asiente la hora en que se practicó la diligencia...", y por ello, es equívoca la interpretación de que se asiente en el citatorio, tanto la hora en que se levanta, como cuando se "entrega físicamente", pues se evidencia que el término de "entrega" del citatorio, se refiere al momento de su elaboración; además, sería ilógico que en una misma diligencia se asentaran dos horas distintas, si lo que el legislador pretende en el artículo 13 de la codificación legal citada, es dar certeza y seguridad de que la diligencia se practica en una hora hábil, elemento que queda satisfecho al establecer la hora en la que comienza la diligencia.

Se afirma lo anterior, pues la notificación es la última fase de elaboración de un acto administrativo, por lo que éste no se entiende acabado ni tiene eficacia jurídica hasta que se notifica debidamente; asimismo, sólo estableciéndose la hora en que se entregó el citatorio que, por ende a una notificación fiscal, podría determinarse si se efectuó dentro de las horas hábiles que instituye el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación.

Bajo tal contexto, se concluye que contrario a lo que la enjuiciante aduce, el artículo 137, del Código Fiscal de la Federación jamás establece que una vez precisada la hora en que el notificador llevó a cabo la diligencia de entrega del citatorio, también es necesario para su legalidad, que se asiente la hora en que materialmente se dejó, pues una diligencia por sí no es un acto administrativo, por lo que basta que los citatorios contengan la hora en que iniciaron tales diligencias para determinar si es legal o no la notificación, ya que una diligencia de esas características puede iniciar en hora hábil y culminar en una inhábil sin afectar su validez, según se advierte del propio artículo 13 del Código Fiscal de la Federación; salvaguardándose así la seguridad jurídica de la persona notificada y cobrando eficacia jurídica el acto administrativo a notificar.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.3o.C.30 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor literal siguiente:

Época: Novena Época. Registro: 176225. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006. Materia(s): Administrativa. Tesis: VII.3o.C.30 A, Página: 2419



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 103 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

210

"NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE ES LEGAL SI CONTIENE LA HORA EN QUE INICIÓ LA DILIGENCIA DE ENTREGA (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 75/98). De lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 75/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 502, con el rubro: "NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE DEBE CONTENER LA HORA EN QUE SE ENTREGUE.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que la notificación es la última fase de elaboración de un acto administrativo, por lo que éste no se entiende acabado ni tiene eficacia jurídica hasta que se notifica debidamente; y, por otra, que sólo estableciéndose la hora en que se entregó el citatorio que precede a una notificación fiscal podría determinarse si se efectuó dentro de las horas hábiles que instituye el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación. Ponderando esos dos aspectos, se concluye que censuró el hecho de que el citatorio no estableciera hora alguna; empero, jamás estableció que cuando contenía la hora en que inició la diligencia de dicha entrega, también era necesario -para su legalidad- que se asentara la hora en que materialmente se dejó, pues frente a lo que se establece en las consideraciones de la jurisprudencia que nos ocupa, que una diligencia por sí no es un acto administrativo, basta que contenga la hora en que inició tal diligencia para determinar si es legal o no la notificación, ya que una diligencia de esas características pueda iniciar en hora hábil y culminar en una inhábil sin afectar su validez, según se advierte del propio artículo 13 en comento; salvaguardándose así la seguridad jurídica de la persona notificada y cobrando eficacia jurídica el acto administrativo a notificar."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 416/2005. Panificadora San Andrés Tuxtla, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: Claudia Vázquez Montoya.

(Énfasis añadido)

De igual manera, sirve de apoyo a lo sostenido por ésta representación fiscal, la diversa tesis IV.3o.A.39 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, misma que dispone a la letra lo siguiente:

Época: Novena Época, Registro: 176919, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: IV.3o.A.39 A, Página: 2428

"NOTIFICACIONES EN MATERIA FISCAL. LA ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN CONSTITUYEN UN MISMO ACTO Y, POR TANTO, SE REALIZAN EN UN MISMO MOMENTO (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 75/98). La jurisprudencia 2a./J. 75/98, de rubro: "NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE DEBE CONTENER LA

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

211

"HORA EN QUE SE ENTREGUE.", publicada en la página 502 del Tomo VIII, octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, hace un análisis de los artículos 134, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, para concluir que en el citatorio es necesario que "se asiente la hora en que se practicó la diligencia", y por ende, que se observe el horario establecido en el artículo 13 de ese código. Por ello, es equivocada la interpretación de que se asiente en el citatorio, tanto la hora en que se levanta, como cuando se "entrega físicamente", pues no debe observarse bajo una connotación lingüística el título de la tesis, si del contexto y de la ejecutoria respectiva se evidencia que el término de "entrega" del citatorio, se refiere al momento de su elaboración; además, sería ilógico que en una misma diligencia se asentaran dos horas distintas, si lo que el legislador pretende en el artículo 13 de la codificación legal citada, es dar certeza y seguridad de que la diligencia se practica en una hora hábil, elemento que queda satisfecho al establecer la hora en la que comienza la diligencia."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 39/2005. Juan Pablo Molina Hernández. 3 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: Marfa Inocencia González Díaz.

Note esa H. Sala, que los Tribunales Colegiados de Circuito en cita, al emitir los criterios recién transcritos, analizaron la tesis de jurisprudencia 2a./J. 75/98 confeccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que la actora pretende sustentar sus argumentos, arribando a las conclusiones precisadas con antelación, lo que revela que el alcance que la demandante pretende imprimirle al criterio del Alto Tribunal, es inexacto y por ende, infundado.

Incluso, lo anterior ha sido reconocido por ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por conducto de la Primera Sala Regional de Oriente, mediante la tesis V-TASR-XIII-1839, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

V-TASR-XIII-1839, R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 57. Septiembre 2005. p. 214

"CITATORIO.- ASENTAR LA HORA EN QUE SE PRACTICA LA DILIGENCIA CUMPLE CON EL REQUISITO DE ASENTAR LA HORA EN QUE EL MISMO SE ENTREGA.- El requisito consistente en que el citatorio que se deja en el domicilio del contribuyente, contenga la hora en que se practicó la diligencia, se refiere precisamente a la hora en que se entregó el mismo, así mismo, de la jurisprudencia 2a./J. 75/98 cuyo rubro es del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE DEBE CONTENER LA HORA EN QUE SE ENTREGUE", se advierte que la misma se refiere a la entrega del citatorio y a la práctica de la diligencia, como un mismo acto, y no como actos aislados, motivo por el cual resulta suficiente que se asiente la hora en la que se practicó la diligencia respectiva, para considerar que el citatorio se apegó a lo dispuesto por los artículos 13 y 137 del Código Fiscal de la Federación, así como a la jurisprudencia citada, pues se considera un mismo acto. (82)"



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

212

Juicio No. 3095/04-12-01-4.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de enero de 2005, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaría: Lic. Gloria María de la C. Escobar Arrona.

En tal orden de ideas, es patente que los argumentos de la actora al respecto son infundados, y por ello, se estima procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

A.5. Por otro lado, no resulta necesario que los notificadores asienten en las actuaciones en que consten los citatorios que practiquen, cómo fue que se cercioraron de encontrarse en el domicilio fiscal de los contribuyentes.

En efecto, apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 60/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que dispone a la letra lo siguiente:

Época: Novena Época, Registro: 169934, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 60/2008, Página: 501

CITATORIO PREVIO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO REQUIERE QUE SE CIRCUNSTANCIE LA FORMA EN QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORÓ DEL DOMICILIO Y LLEGÓ A TAL CONVICCIÓN. De la relación armónica de los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, y de las jurisprudencias 2a./J. 15/2001, 2a./J. 40/2006, 2a./J. 101/2007 y 2a./J. 158/2007, de rubros: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).", "NOTIFICACIÓN PERSONAL EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER LAS FORMALIDADES PARA SU PRÁCTICA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.", "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO." y "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE ARROJAR LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTICÓ EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).", respectivamente, se advierte que la diligencia de notificación personal del acto administrativo, entre otros aspectos, debe proporcionar plena convicción de que se practicó en el domicilio del contribuyente. Ahora bien, el citatorio previo a la notificación personal que debe formular el notificador cuando no encuentre al visitado para que lo espere a una hora fija del día siguiente o para que acuda a notificarse, constituye una formalidad diversa a la obligación que debe cumplirse en las actas de notificación, en las que deben de asentarse todos los datos de circunstancia, incluyendo la



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

213

forma como el notificador se cercioró del domicilio de la persona que debe notificar y tuvo convicción de la de acuerdo con los diversos elementos con los que cuente y según el caso concreto, de manera que es innecesario que el notificador asiente de manera circunstanciada en el mencionado citatorio previo, el modo en que se cercioró del domicilio correcto y llegó a tal convicción.

Contradicción de tesis 19/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 26 de marzo de 2008. Mayoría de tres votos. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Secretaría: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes

(Énfasis añadido)

En ese tenor, es evidente que los argumentos que se contestan carecen de sustento jurídico alguno.

A.5.1. No obstante lo anterior, esa H. Sala podrá verificar que en las actuaciones sujetas a debate, (tanto citatorios como actas de notificación), los notificadores circunstanciaron de manera adecuada la forma mediante la cual se cercioraron de que se encontraban en el domicilio fiscal de la hoy actora, puesto que el mismo coincide con el señalado como domicilio fiscal, además describieron las características externas detalladas en las constancias de notificación que nos ocupan, así como por haber preguntado a la persona que atendió las diligencias, quien dijo llamarse Aurelia Cleofa Ríos López, y haber contestado dicha persona que el domicilio era el correcto.

Al respecto, es importante señalar que resulta innecesario que se señalen los locales o edificios con los que colinda el domicilio o que se precisen otras características físicas de éste o de aquéllos, porque si el notificador refiere, que acudió al domicilio buscado y que se cercioró de ello por la nomenclatura oficial existente en el lugar, que la persona que se encontraba en su interior dijo ser empleada del contribuyente, y que dicha persona corroboró esa información (ubicación del domicilio fiscal), estos datos son suficientemente razonables para tener la certeza de que aquéllos (notificadores) se constituyeron verdaderamente en el sitio indicado; hecho que aconteció en cada uno de los citatorios y actas de notificación en pugna.

Se considera aplicable, la tesis de jurisprudencia XIII.3o. J/1, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 105 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

214

Registro No. 176226. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Enero de 2006. Página: 2275. Tesis: XIII.3o./1. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa

"NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA CUANDO SE ENTIENDE CON PERSONA DISTINTA A LA BUSCADA. Tratándose de notificaciones personales, la razón circunstanciada a que se refiere el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, implica que el notificador asiente en la diligencia no sólo el domicilio fiscal, sino también los medios de convicción de que se valió para cerciorarse plenamente que se constituyó en éste, como podrían ser su ubicación, el dicho de terceras personas que se encuentren en ese lugar o cualquier otro medio fehaciente; el requerimiento de la presencia del contribuyente o de su representante legal, expresando, en su caso, los datos de la persona con quien se entienda la diligencia y su carácter, sin que sea necesario que ésta señale los medios de que se valió para concluir dicha ausencia, bastando su sola manifestación de que el interesado no se encontraba presente al practicarse la diligencia."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 114/2005. Javier Maya Santiago. 15 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María de Fátima Isabel Sámano Hernández. Secretario: Leopoldo Delfino Vázquez Valencia.

Amparo directo 115/2005. Francisco Vázquez Calvo. 15 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: Ruth Ramírez Núñez.

Amparo directo 185/2005. Envasadora Gugar, S.A. de C.V. 29 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: Ruth Ramírez Núñez.

Amparo directo 167/2005. Centro de Distribución y Servicios, S.A. de C.V. 29 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María de Fátima Isabel Sámano Hernández. Secretario: Leopoldo Delfino Vázquez Valencia.

Amparo directo 147/2005. Estrategia Empresarial Castro López, S.C. 9 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: Ruth Ramírez Núñez.

(Énfasis añadido)

Asimismo, sirve de apoyo a lo expuesto por ésta defensa, la tesis XXI.2o.P.A.111 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, misma que dispone a la letra lo siguiente:

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

215

Época: Novena Época. Registro: 164002. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010. Materia(s): Administrativa. Tesis: XXI.2o.P.A.111 A, Página: 2315

"NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA CONSIDERAR DEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADA EL ACTA RELATIVA, EN TÉRMINOS DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 82/2009, ES INNECESARIO QUE EN AQUELLA SE SEÑALEN LOS LOCALES O EDIFICIOS CON LOS QUE COLINDA EL DOMICILIO FISCAL O QUE SE PRECISEN OTRAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE ÉSTE O DE AQUELLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 82/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 404, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO.", estableció, entre otros aspectos, que para cumplir con el requisito de circunstanciación en el acta de notificación cuando la diligencia respectiva se realice con un tercero, entendido éste como la persona que por su vínculo con el contribuyente ofrece cierta garantía de que efectivamente informará sobre el documento a su destinatario, el notificador está obligado a asegurarse de que no está en el domicilio por circunstancias ocasionales o accidentales, sino que por su actividad ordinaria o permanentemente, está en contacto con el contribuyente, es decir, que tiene un vínculo, incluyendo en ese concepto, entre otras personas, a las que habitualmente están ahí por ser trabajadores o empleados, y que para ello resulta necesario que el notificador precise las características de la oficina o inmueble u otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que la diligencia se practicó en el domicilio correcto. En ese contexto, para considerar debidamente circunstanciada el acta de una notificación personal practicada en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación es innecesario que en ella se señalen los locales o edificios con los que colinda el domicilio o que se precisen otras características físicas de éste o de aquéllos, porque si el notificador refiere, por ejemplo, que acudió al domicilio buscado y que se cercioró de ello por la nomenclatura oficial existente en el lugar, que la persona que se encontraba en su interior dijo ser empleada del contribuyente y con la que finalmente entendió la diligencia corroboró esa información, estos datos son suficientemente razonables para tener la certeza de que aquél se constituyó verdaderamente en el sitio indicado."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 150/2009. Hotelera Lomas de Taxco, S.A. de C.V. 12 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. Secretaria: Guadalupe Juárez Martínez.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

216

En tales condiciones, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones cuya legalidad se cuestiona en el expediente en que se actúa, de conformidad con los hechos y el derecho expuestos en el presente apartado.

A.6. Ahora bien, respecto a los argumentos de la actora en los que aduce la presunta identificación indebida del personal notificador de la autoridad fiscalizadora, es menester precisar a esa H. Sala que los mismos resultan inoperantes.

En efecto, lo anterior es así, ya que tal y como se acredita de las reproducciones de los citatorios, así como de las actas de notificación sujetas a debate, todas ellas se llevaron a cabo por notificadores adscritos a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, lo cual se acreditó mediante los oficios expedidos por la citada Administración Central, sin que éstos tuvieran la obligación de precisar mayores detalles respecto a su identificación puesto que en una diligencia de notificación, la identificación del notificador constituye una formalidad accesorio, en virtud de que lo trascendente de la diligencia es hacer del conocimiento del interesado el acto administrativo que se notifica, precisando en las constancias correspondientes, todas las circunstancias que rodearon la práctica de cada diligencia en particular, no así los detalles de la persona que la practica.

Ciertamente, la identificación del diligenciario no constituye un elemento de validez en la práctica de notificaciones; más aún, no existe dispositivo legal alguno que prevea como obligación por parte de la autoridad, que el notificador actuante exhiba o circunstancie en el acta que para el efecto se levante, los datos relativos a su identificación —los cuales en la práctica se encuentran contenidos en su constancia de identificación—, siendo que en la especie existe criterio emitido por el Poder Judicial Federal, que dispone expresamente que la formalidad esencial del procedimiento de notificación de los actos administrativos, consiste precisamente en hacerlos del conocimiento del interesado, **sin que la falta o indebida identificación del notificador implique que tal actuación carezca de validez**; lo anterior, según se establece en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 187/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Registro No. 179849. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004. Página: 423. Tesis: 2a./J. 187/2004. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa

"NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA SU VALIDEZ NO ES NECESARIO QUE LOS NOTIFICADORES SE IDENTIFIQUEN ANTE LA PERSONA CON QUIEN VAN A ENTENDER LA



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

217

DILIGENCIA RELATIVA. Los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación establecen la forma en que deben practicarse las notificaciones; sin embargo, ninguno de ellos señala que la persona que debe a cabo la diligencia deba identificarse ante el notificado, pues la notificación no constituye una resolución administrativa, sino la comunicación de ésta, por lo que no tiene contenido particular, sino que transmite el del acto que la antecede, además de que constituye la actuación que complementa una decisión de la autoridad administrativa. Ahora bien, en el procedimiento administrativo en materia fiscal es necesario que los actos de autoridad sean notificados a las partes, pues ello constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración tributaria; sin embargo, el hecho de que el notificador no se identifique ante la persona con quien entienda la diligencia, no implica que tal actuación carezca de validez, si la formalidad esencial del procedimiento de comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad administrativa consiste en hacerlas de su conocimiento. Lo anterior es así, porque lo que resulta trascendente es la observancia de una serie de requisitos para garantizar tal conocimiento, pero no así de la persona del notificador, quien aunque figura como el ejecutor del acto de autoridad, juega un papel secundario en la finalidad de éste; de ahí que su identificación constituya una formalidad accidental, pues lo que tiene relevancia es su actuación. En consecuencia, **basta con que se mencione que la diligencia de notificación fue realizada por la persona señalada para ese efecto, para que aquélla tenga validez.**

Contradicción de tesis 142/2004-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 2 de octubre de 2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Tesis de jurisprudencia 187/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro.

(Énfasis añadido)

Por ello, resulta inoperante que la demandante pretenda inconformarse con lo siguiente:

- ✓ Que los notificadores encargados de practicar las diligencias impugnadas sean trabajadores de la Administración General de Grandes Contribuyentes; y
- ✓ Que dicho personal haya sido autorizado previamente por autoridad competente.

La inteligencia de que si el Máximo Tribunal ya estableció que ni siquiera es necesario que los notificadores se identifiquen al practicar diligencias de carácter personal, menos aún resulta necesario que acrediten su adscripción a unidad administrativa alguna o que hayan sido autorizados previamente por autoridad competente, máxime que ningún dispositivo legal vincula a las dependencias enjuiciadas a acreditar tales extremos.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 107 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

218

Aunado a que de las constancias en análisis y sus citatorios previos, se desprende que en las mismas sí se pormenorizaron los datos de identificación de los notificadores encargados de practicar dichas diligencias, por lo que incluso en ese sentido los argumentos de la parte actora al respecto resultan infundados y por lo tanto, ineficaces para desvirtuar la legalidad de las diligencias de notificación que nos ocupan, dado que en los documentos analizados, los notificadores sí hicieron constar pormenorizadamente sus datos de identificación.

Por lo tanto, si en los citatorios y notificaciones impugnados los notificadores hicieron constar que se identificaron ante la persona que atendió las diligencias en cita, ello resulta suficiente para considerar debidamente circunstanciados los actos instrumentales en pugna, sin que sean exigibles mayores requisitos legales al respecto.

Además, es patente que la manera en que se llevó a cabo la identificación de los notificadores al diligenciar la notificación de los oficios que forman parte de la revisión de gabinete que se llevó a cabo a la demandante, así como la propia resolución inicialmente recurrida, resulta intrascendente para dilucidar la legalidad de las notificaciones, pues lo que se tiene que ponderar para conocer si los actos instrumentales cumplen con los requisitos legales es el hecho de que se hayan efectuado de conformidad con los artículos 134, y 137, ambos del Código Fiscal de la Federación, pues que las formalidades que se previenen en dichas disposiciones son las que generan certeza jurídica al particular de que determinada actuación de las autoridades se hizo de su conocimiento.

Bajo esa óptica, el agravio que se analiza deviene inoperante.

A.6.1. Ahora bien, son inoperantes e infundados los argumentos en los que mi contraria indica que no se funda y motiva debidamente la competencia, en las constancias de identificación de los notificadores, es decir no señala qué numeral faculta a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para nombrar, remover o comisionar a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo (artículo 10, fracción IV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria), sin ser óbice a lo anterior el hecho de que la autoridad haya citado los artículos 10, primer párrafo, fracción I y 9, primer párrafo, fracciones VII y XXXVII, así como el último párrafo, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

En efecto, los argumentos de la enjuiciante pretenden controvertir las constancias de identificación de los notificadores, sin que estas documentales le deparen perjuicio alguno, pues tal y como se explicó en párrafos anteriores, el hecho de que incluso el notificador no se identifique ante la persona con quien entienda las diligencias de notificación, no implica que tal

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

219

actuación carezca de validez, si la formalidad esencial del procedimiento de comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad administrativa, consiste en hacerlas de su conocimiento. Es decir, lo que resulta trascendente es la observancia de una serie de requisitos para garantizar tal conocimiento de dichos actos, no así respecto de la persona del notificador, quien aunque figura como el ejecutor del acto de autoridad, juega un papel secundario en la finalidad de éste; de ahí que su identificación constituya una formalidad accidental, pues lo que tiene relevancia es su actuación. En consecuencia, basta con que se mencione que la diligencia de notificación fue realizada por la persona que la practicó, para que aquella tenga validez.

En ese contexto, la fundamentación y motivación contenida en las constancias de identificación de los notificadores encargados de hacer de su conocimiento diversos actos que fueron llevados a cabo por parte de la autoridad emisora de la resolución inicialmente recurrida no tiene trascendencia alguna en los citatorios y notificaciones a efecto de dilucidar su legalidad, razón por la cual, los agravios encaminados a controvertir tales constancias devienen de inoperantes.

Al amparo de lo anterior, si los auxiliares de la autoridad demandada (notificadores) reseñaron en los citatorios de 27 de junio de 2011, 13 de septiembre de 2012, 17 de diciembre de 2012 y 25 de julio de 2013, así como de las constancias de notificación de 28 de junio de 2011, 14 de septiembre de 2012, 18 de diciembre de 2012 y 26 de julio de 2013, que se identificaron ante la persona que atendió las diligencias, indicando el número de oficio donde se contiene la constancia de identificación de cada uno de ellos, así como su fotografía y datos identificatorios, es patente que no existe obligación de citar fundamentos en los actos instrumentales tendientes a evidenciar las facultades de la autoridad para nombrar, remover o comisionar a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo, puesto que esa no es la finalidad de la notificación de un acto de autoridad, además de que no forma parte de los requisitos que brindan certeza a los particulares de que los actos tendientes a hacer de su conocimiento un acto administrativo se llevaron a cabo.

Por lo tanto, se reitera que los argumentos de mi opositora pretenden controvertir las constancias de identificación de los notificadores, sin que dichos oficios guarden trascendencia con la resolución recurrida, pues no le causan ningún perjuicio, porque como se ha venido exponiendo a lo largo de la presente contestación, [redacted] (antes [redacted]), tuvo conocimiento pleno y oportuno del contenido de los oficios 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, así como del acto impugnado en sede administrativa, y por lo tanto estuvo en



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

220

la posibilidad de desahogar los requerimientos formulados por la autoridad fiscal de manera oportuna, así como de interponer el recurso administrativo de revocación del que deriva la resolución aquí impugnada, con lo cual quedan convalidadas las constancias de notificación correspondientes.

Ahora bien, esa H. Sala no debe perder de vista que el citatorio y la constancia de notificación por no son actos que se rijan por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ese sentido, no resulta necesario que los mismos se encuentren fundados y motivados.

En efecto, lo anterior es de ese modo ya que al no ser de aquellos documentos previstos por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, resulta irrelevante lo expuesto por la actora respecto a dichos documentos, en la medida de que los actos administrativos en comentario no pueden por sí sólo afectar la esfera jurídica de la actora, al ser actos instrumentales del procedimiento de notificación por estrados y en ese sentido, el supuesto vicio aducido por la demandante es inexistente por inatendible.

En tal sentido, se considera aplicable la tesis III.2o.A.15 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Tesis: III.2o.A.15 A (10a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000398. 1 de 3. Tribunales Colegiados de Circuito Libro VI, Marzo de 2012 Tomo 2 Pag. 1248 Tesis Aislada. (Constitucional, Administrativa). Libro VI, Marzo de 2012 Tomo 2.

"NOTIFICACIÓN EN MATERIA FISCAL. AL NO SER UN ACTO DE MOLESTIA, NO ESTÁ SUJETA A LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La notificación, en sí misma, no constituye un acto de molestia, pues no es propiamente un acto o resolución administrativa, sino una comunicación de la autoridad, habida cuenta que sólo transmite el acto que le precede, es decir, no es otra cosa sino enterar a alguien de aquello que a la autoridad le interesa que conozca. Por tanto, la notificación en materia fiscal no está sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación previstos por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 del Código Fiscal de la Federación, en tanto que esa diligencia se rige por los requisitos establecidos en los artículos 134 a 137 del ordenamiento citado en último término."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 436/2011. Gabriel Orendain Aguirre. 14 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

221

No obstante lo anterior, desde éste momento se ofrecen como pruebas de las autoridades demandadas, las constancias de identificación del personal que notificó los oficios 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, así como del acto impugnado en sede administrativa.

Al amparo de lo anterior, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones cuya legalidad se cuestiona en el expediente en que se actúa, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

A.7. Finalmente, esa H. Sala podrá verificar del análisis realizado a los citatorios y actas de notificación sujetos a debate, que se advierte que los mismos se encuentran dirigidos al representante legal de [REDACTED] (antes [REDACTED]), y a la contribuyente, sin que en dichas diligencias se tuviera que precisar la calidad de los sujetos, puesto que dicho dato quedó asentado en los propios oficios a notificar, sin que las disposiciones que rigen la materia exijan a la autoridad fiscal a especificar el carácter que tal contribuyente tuviera en relación con las solicitudes de información, contrario a lo aducido por mi opositora.

Por lo tanto, es patente que no se violó en ningún momento lo establecido en la fracción I del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, pues tal y como establece el precepto citado, la autoridad fiscal **al solicitar al contribuyente**, informes, datos o documentos para el ejercicio de sus facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria, como es el caso en estudio, **notificará la solicitud al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación.**

Al respecto, dispone el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación que las notificaciones en materia fiscal deben efectuarse en el domicilio fiscal, convencional o en las oficinas de las autoridades y toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aún cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales, y finalmente, que en los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos.

Bajo tal contexto, las hipótesis jurídicas que regulan las notificaciones en la revisión de gabinete solamente exigen que las solicitudes se hagan del conocimiento del contribuyente conforme al artículo 136. del Código Fiscal de la Federación.

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

222

Por lo tanto, si la actora es una persona moral y los citatorios y notificaciones sujetos a estudio son dirigidos a su representante legal, dicha situación no genera un estado de incertidumbre o indefensión, toda vez que las personas morales, como ficciones jurídicas que son, sólo pueden apersonarse a través de sus representantes legales, por lo que para la legalidad de los mencionados actos instrumentales, basta con las actuaciones correspondientes estén dirigidas al representante legal de la persona moral que corresponda.

Lo anterior, sin que deba exigirse que se precise la persona a la que se dirige y el carácter del contribuyente en relación con la solicitud de documentación como inexactamente lo indica la demandante, pues ello no se desprende de los artículos 48, fracción I, y 136, del Código Fiscal de la Federación.

En virtud de lo anterior, es evidente que resultan infundados los argumentos de mi contraria mediante los cuales controvierte los citatorios y actas de notificación aludidas, razón por la cual se estima procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

B. Resulta infundado el argumento de la actora respecto a que la autoridad fiscal, mediante oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, omitió señalar el periodo a revisar.

En efecto, pues del análisis que realice esa H. Sala a dicho oficio, se observa que sí se encuentra especificado el periodo sujeto a revisión.

Con la finalidad de comprobar lo anterior, a continuación se reproduce el contenido del oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, en la parte que interesa, del cual se desprende lo siguiente:

Sin texto

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

223

Esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir la presente en virtud de que la contribuyente es una sociedad controladora que cuenta con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, según oficio número 351-I-B-3-5334 de fecha 15 de abril de 1995, en términos de lo dispuesto por el artículo 57-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada el 30 de diciembre de 1990, en vigor a partir del 1 de enero de 1991, vigente en 1995 y en relación con los artículos 64 y Segundo Transitorio, fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, publicada el 1 de enero de 2002, vigente a partir del mismo día de su publicación, efo la revisión del dictamen fiscal que le fue formulado por el Contador Público con número de registro 7496, respecto a sus Estados Financieros por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, en términos de lo dispuesto por los artículos 42, primer párrafo, fracción IV y 52-A, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación, mediante oficio citatorio número 900 05-2010-2149 de fecha 1 de julio de 2010 y del oficio de solicitud de información y documentación al citado profesional con número 900-05-01-2011-10323 de fecha 3 de mayo de 2011 y con relación a las contribuciones federales de las que es sujeto directo, en materia de Impuesto Sobre la Renta a Impuesto al Activo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, primer párrafo, fracciones VII, XII y XVIII, 8, primer párrafo, fracción III y Tercero Transitorio, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso a) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracciones IX y X, y Apartado B, fracción II, quinto párrafo en la parte que establece: "La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus funciones por los servidores públicos que en adelante se señalan" y sexto párrafo, numeral 5, correspondiente al "Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente", 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, cuya vigencia terminó el 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del mismo Decreto, modificado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010, entrando en vigor a partir del 30 de abril de 2010, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio; así como en los artículos 33, último párrafo, 38, 42, primer párrafo, fracción II, antepenúltimo, penúltimo y último párrafos, 48, primer párrafo, fracciones I, II, III y último párrafo, y 52-A, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, habiéndose requerido al Contador Público que formuló el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción I del artículo 52-A del referido Código, después de haberlos recibido, ésta no es suficiente para observar la situación fiscal del contribuyente en virtud de que el Contador Público proporcionó incompleta la información y documentación, como se reseña a continuación:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

224

Mediante oficio 900 05-2010-2149 del 1 de julio de 2010, notificado legalmente previo citatorio, el 7 de julio de 2010, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero con cargo de Recepcionista del Despacho [REDACTED] sin haberlo acreditando, se citó a revisión de papeles de trabajo al C.P.C. [REDACTED] misma que se llevó a cabo el 16 de mayo de 2010, derivado de dicha revisión, fue necesario requerir información adicional, mediante oficio 900-05-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, notificado legalmente previo citatorio al Contador Público dictaminador, el día 11 de mayo de 2011, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero con cargo de "Empleada", sin haberlo acreditando, mediante el cual se le solicitó lo siguiente:

Con escrito de fecha 2 de junio de 2011, recibido a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, el mismo día de su fecha de emisión, el L.C. [REDACTED] en representación del C.P.C. [REDACTED] proporcionó los informes, datos y documentos, como se señala a continuación:

Del estudio y análisis a la información antes citada, se conoció que el L.C. [REDACTED] en representación del C.P.C. [REDACTED] proporcionó parcialmente la información solicitada, dejando de aportar lo siguiente:

Por lo anterior, no se cuenta con la información y documentación suficiente para verificar su situación fiscal y a efecto de seguir con el procedimiento de revisión, previsto en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación vigente, se inician las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, primer párrafo, fracción II y 52-A, primer párrafo, fracción II del propio Código Fiscal de la Federación vigente; por lo que se le solicita que ante esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con domicilio en Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, Planta Baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, proporcione la documentación e información que a continuación se indica:

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está sujeto como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Activo, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

De la reproducción efectuada del oficio de requerimiento 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, se advierten las siguientes premisas:

- ✓ Que mediante los oficios 900 05-2010-2149 de fecha 1 de julio de 2010 y 900 05-2011-10323 de 03 de mayo de 2011, la autoridad fiscalizadora ejerció sus facultades de



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

225

comprobación contenidas en los artículos 52-A, fracción I, y 42, fracción IV, ambos del Código Fiscal de la Federación;

- ✓ Que mediante los oficios aludidos, mi representada efectuó la revisión del dictamen fiscal que fue formulado por el Contador Público Registrado [REDACTED] respecto de los estados financieros de [REDACTED] (antes [REDACTED]), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006;
- ✓ Que toda vez que la documentación aportada por dicho profesionista fue insuficiente para conocer la situación fiscal de [REDACTED] (antes [REDACTED]), respecto del ejercicio fiscal de 2006, mediante oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, la autoridad fiscalizadora ejerció las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, primer párrafo, fracción II, antepenúltimo, penúltimo y último párrafo, 48, primer párrafo fracciones I, II, III y último párrafo, y además en el 52-A, primer párrafo, fracción II, todos del Código Fiscal de la Federación;
- ✓ Es decir, que una vez requerido al contador público que haya formulado el dictamen, fue considerado que la documentación aportada no resultó suficiente para conocer la situación fiscal de [REDACTED] (antes [REDACTED]); lo que justifica requerir directamente a la hoy actora, diversa información y documentación que se considera necesaria para conocer su situación fiscal;
- ✓ Lo anterior, toda vez que las autoridades fiscales podrán ejercer sus facultades de comprobación en forma conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente, lo cual ocurrió con la notificación de dicho oficio de requerimiento (900-05-2011-385).

Por lo que antecede, resulta evidente que la demandante siempre se encontró en posibilidad de saber con precisión el periodo que sería sujeto a revisión, pues es claro que así lo especifica la autoridad fiscalizadora en el citado oficio 900-05-2011-385, al señalar que se efectuó la revisión del dictamen fiscal "por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006", de ahí que la simple afirmación de mi contraria en el sentido de que en el oficio a [REDACTED] "no se señaló el periodo o ejercicio fiscal a revisar de las contribuciones sujetas a revisión", resulta insuficiente para desvirtuar la legalidad del mismo.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 111 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-S8541
J.N. 12140/15-17-11-5.

226

Además, conviene resaltar que mediante el oficio que nos ocupa, la autoridad requirió diversa información y documentación a la hoy enjuiciante, toda vez que tal como lo señala la autoridad fiscalizadora, después de haber recibido la información y documentación que le fue requerida al Contador Público Registrado respecto del dictamen fiscal de estados financieros en cita, ésta no fue suficiente para determinar la situación fiscal de mi opositora, respecto al impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado por el ejercicio 2006.

En consecuencia, si en el requerimiento de documentación claramente se asentó que la revisión se efectuaría "por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006", es claro que en ningún momento se le está dejando en estado de indefensión —como inexactamente lo refiere—, pues se reitera, la incoante siempre estuvo en pleno conocimiento del periodo o ejercicio fiscal a revisar, de ahí lo infundado de los argumentos que se contestan.

Consecuente a lo expuesto, debe decirse que mediante el oficio 900 05-03-2012-54438 del 13 de septiembre de 2012, la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3", solicitó a mi colitigante diversa información y documentación complementaria, entre otros, la relacionada con la determinación de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidado.

Es decir, el oficio 900 05-03-2012-54438 del 13 de septiembre de 2012, al ser una solicitud de documentación complementaria, no debía de revestir el requisito de precisar el periodo sujeto a revisión, pues éste es requisito establecido para el acto con el cual la autoridad fiscal inicia facultades de comprobación, pues el objeto de la revisión de gabinete no podría cambiarse en el transcurso de la facultad de comprobación ejercida.

No obstante lo anterior, en la foja 1 del referido, se menciona el periodo sujeto a revisión en los siguientes términos:

Esta Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" [...] en relación con la revisión que se le está practicando por el ejercicio comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, al amparo del oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011...."

(Énfasis añadido)

Consecuentemente, deviene infundado el agravio propuesto por mi colitigante, puesto que tanto en el oficio 900-05-2011-385, como en el diverso 900 05-03-2012-54438, se señaló el periodo sujeto a revisión por parte de la autoridad fiscal.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-S8541
J.N. 12140/15-17-11-5.

227

Al tenor de lo anterior, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto, en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

C. También es infundado que la accionante aduzca que la resolución inicialmente recurrida es ilegal, por presuntamente ser fruto de un acto investido de ilegalidad, como lo es el oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, mediante el cual se solicitan diversos informes, datos y documentos, en virtud de que el mismo fue dirigido a [REDACTED] (antes [REDACTED]) y no a su representante legal.

Lo anterior es así, ya que tal y como lo señala la propia actora, el oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, se encuentra dirigido a la persona moral interesada, es decir, a [REDACTED] (antes [REDACTED]), situación que no genera un estado de incertidumbre o indefensión, toda vez que las personas morales, como ficciones jurídicas que son, sólo pueden apersonarse a través de sus representantes legales, por lo que para la legalidad de dicho acto, basta con que se encuentre dirigido a nombre de la persona moral, para que se entienda que el mismo deberá ser notificado a quien acredite tener la legal representación de la sociedad de que se trate.

Al respecto cabe recordar que, el Código Civil Federal, en su artículo 25, refiriéndose a las personas colectivas, en su fracción III, previene que son personas morales, entre otros, las sociedades civiles o mercantiles; dispositivo legal que dispone a la letra lo siguiente:

"Artículo 25.- Son personas morales:

III. Las sociedades civiles o mercantiles;"

Por otra parte, el artículo 26 del ordenamiento legal en comento, previene que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para el objeto de su institución o constitución; mientras que en el diverso 27 del mismo cuerpo normativo, imperativamente dispone que éstas obran y se obligan por medio de los órganos que los representan, sea por disposiciones de la ley o conforme a las disposiciones de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos.

Al respecto, tenemos que los numerales en comento, disponen textualmente lo siguiente:

"Artículo 26. Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución."



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

228

Artículo 27. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos."

En el mismo orden de ideas, resulta que tratándose de sociedades mercantiles, el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece lo siguiente:

Artículo 10. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social.

En ese contexto, de las disposiciones contenidas en los preceptos legales que han quedado referidos con antelación, se colige que siendo la persona moral una ficción creada por la ley, sólo podrá apersonarse a través de sus representantes legales; y además, se desprende, que todos los actos jurídicos por los que ésta adquiera derechos u obligaciones, deberán entenderse con quienes legalmente la representen, independientemente de que los documentos en que se contengan esos derechos u obligaciones, se expidan o vayan dirigidos a nombre de la persona moral o que también se incluya de modo expreso el nombre de su representante legal.

En este orden de ideas, es inconcuso que tratándose de oficios a través de los cuales la autoridad fiscal requiera a la hoy demandante (persona moral) información, datos y documentación, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, no es necesario que se encuentren dirigidos expresamente a nombre del representante legal de la contribuyente auditada.

Lo anterior, porque no debe perderse de vista que por ministerio de ley, la persona moral se encuentra dotada de personalidad jurídica propia, es decir, distinta de la de sus socios, por tanto, es la única obligada por el acto de la autoridad fiscal, y en tales condiciones, deberá responder ante la autoridad a través de cualquiera de sus representantes legales por no poder hacerlo personalmente como si se tratara de una persona física.

Luego entonces, es dable concluir que se entiende que todos los actos de molestia dirigidos a una persona moral, deberán entenderse con quienes legalmente la representen, pues la diligencia deberá ser atendida sólo por quien acredite tener la legal representación de la sociedad de que se trate, sin que resulte requisito de legalidad, señalar el nombre del mismo.

A mayor abundamiento, la doctrina y la ley, tradicionalmente han considerado el concepto de persona como una entidad dotada de existencia jurídica, susceptible de ser titular de derechos



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

229

subjetivos, facultades, obligaciones y responsabilidades jurídicas, siendo la persona moral una ficción creada por la ley, que sólo podrá apersonarse a través de sus representantes legales; y se entiende que todos los actos jurídicos por los que ésta adquiera derechos u obligaciones, deberán entenderse con quienes legalmente la representen, independientemente de que los documentos en que se contengan esos derechos u obligaciones se expidan o vayan dirigidos a nombre de la persona moral, de manera que la diligencia deberá ser atendida sólo por quien acredite tener la legal representación de la sociedad de que se trate.

Así las cosas, es de hacer hincapié en que no existe violación a lo establecido por el artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el cual señala de manera textual lo siguiente:

Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del presente ordenamiento, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en el lugar donde éstas se encuentren."

(Énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende que cuando las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de las facultades de comprobación, deberán notificar al contribuyente de conformidad con el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación, mismo que a la letra señala lo siguiente:

Artículo 136. Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas.

Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de este Código...."

En sustento en lo anterior, se aprecia que una de las formas para efectuar la notificación en comentario, es que se realice en el domicilio fiscal de la contribuyente.

Bajo tales consideraciones, se observa que en el precepto de referencia no se establece que el oficio de solicitud de información o documentación debe dirigirse al representante legal de la,



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 113 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

230

persona moral de que se trata, y asentar el nombre de éste, tal y como lo pretende la contribuyente, por lo que de ninguna manera es ilegal tal actuación de la autoridad.

Sirve de apoyo a lo anterior, por el tema abordado, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 95/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que dispone a la letra lo siguiente:

Época: Décima Época, Registro: 2007861, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Torno I, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 2a./J. 95/2014 (10a.), Página: 1069

"CITATORIO PARA NOTIFICAR A PERSONA MORAL O JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES INNECESARIO QUE ADEMÁS DE DIRIGIRSE A AQUELLA, SE PRECISE EL NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). La circunstancia de que un citatorio para notificar una determinación en materia fiscal se dirija a la persona moral o jurídica interesada, o a ésta por conducto de su representante legal, sin precisar el nombre de éste, no genera un estado de incertidumbre o indefensión, toda vez que aquélla, como ficción jurídica, se apersona a través de sus representantes, cuya designación depende de lo estipulado en la escritura constitutiva o en los estatutos, con la posibilidad de cambiar en cualquier momento para conferirse a distinta persona, siendo esta última quien podrá representar al ente jurídico ante la autoridad. Máxime que del referido artículo, que regula el procedimiento de notificación cuando debe hacerse de manera personal, no deriva formalidad alguna en ese sentido."

Contradicción de tesis 149/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13 de agosto de 2014. Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Vallis Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

(Énfasis añadido)

Por lo tanto, es evidente que no existe violación a los preceptos legales invocados por la demandante, resultando infundados sus argumentos, por lo que se impone reconocer su validez en términos de la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

D. Es infundado que manifieste la actora que el oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011 es ilegal, porque en el mismo no se establece el plazo para concluir la revisión de gabinete.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

231

En efecto, lo anterior es así, pues contrario a lo argumentado por la demandante, el oficio de requerimiento de información y documentación contenido en el oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, se encuentra debidamente fundado y motivado, de conformidad con lo que establece el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con lo dispuesto en el artículo 48 del mismo Código Tributario.

Al respecto resulta oportuno traer a colación lo dispuesto por el artículo en comento, en la parte que interesa, de manera que se pueda verificar que mi representada cumplió con lo previsto en el mismo al efectuar el requerimiento que nos ocupa, y que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

I. La solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la persona a quien va dirigida y en su defecto, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o lugar donde éstas se encuentren. Si al presentarse el notificador en el lugar donde se iba de practicarse la diligencia, no estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la solicitud; si no lo hicieron, la solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma.

II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos.

III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante.

(Énfasis añadido)

De lo antes transcrito se desprende que los requisitos con los cuales debe cumplir la revisión actuada a mi contraria, al requerirle diversa documentación y documentación son los siguientes:

✓ La solicitud debe notificarse en el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la persona a quien va dirigida dicha solicitud;



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

232

- ✓ Dicha solicitud debe indicar el lugar y el plazo en el cual deben proporcionarse los informes y documentos; y
- ✓ Los informes libros o documentos requeridos que deberán ser proporcionados en los términos y plazos precisados por la autoridad emisora del requerimiento.

En virtud de lo anterior, resultará incuestionable para esa H. Sala que el argumento esgrimido por la actora resulta infundado, en virtud de que al emitir los oficios 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011 y 900-05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012 dirigidos a la enjuiciante, la autoridad fiscalizadora los emitió de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, pues mi representada cumplió todos los requisitos que dicho numeral prevé, sin que sea óbice para lo anterior, el hecho de que no se hubiera asentado el plazo que duraría la revisión de gabinete.

Sobre el particular, conviene destacar que el requisito al que alude mi opositora, resulta del todo excesivo, ya que no está contemplado en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación.

Esto es, se advierte con facilidad que del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, no se establece obligación alguna de las autoridades a señalar el plazo que durará la revisión, por lo que se practicará al contribuyente.

Sin que lo anterior implique una violación al artículo 16 Constitucional, o bien, al artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, pues lo que pretende la incoante es imponer un requisito que está sujeto a las particularidades de cada asunto, es decir, la duración de la revisión practicada por la autoridad fiscalizadora.

En tal contexto, resulta excesivo que [REDACTED] (antes [REDACTED]), pretenda exigir como un requisito de fundamentación y motivación del acto administrativo en pugna, el que la autoridad, *a priori*, hubiera señalado el plazo que durará la revisión, pues dicha situación se encuentra condicionada a las situaciones y hechos de cada caso en particular, y sobre hechos y actos que serán llevados a cabo durante el periodo de revisión.

Así, no debe soslayar esa H. Sala que el ejercicio de las facultades de comprobación ejercidas por la autoridad fiscalizadora en el presente asunto, se encuentran sujetas al término legal que establecen los artículos 46-A, Apartado A y último párrafo, así como el 48, en sus fracciones IV y VI, párrafos primero y último, ambos del Código Fiscal de la Federación.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

233

Al respecto, se estima necesario, transcribir el contenido de los artículos en cita, mismos que dicen a la letra lo siguiente:

"Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, **dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:**

A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquéllos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de:

I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga.

II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.

III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.

IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.

V. Tratándose de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 115 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

234

Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento.

VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.

*Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario.

VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o responsable solidario contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal...

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primer párrafo de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

235

(Énfasis añadido)

De la correcta interpretación realizada a los preceptos transcritos, se desprende que cuando la autoridad fiscal solicite de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos, o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, (supuesto que se actualiza tratándose de revisión de gabinete) tendrá la obligación de concluir la auditoría, dentro de un plazo máximo de 12 meses, contado a partir de que se notifique al contribuyente el inicio de facultades de comprobación.

Bajo el mismo contexto, el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, establece excepciones al plazo de los 12 meses, entre otros, cuando se trate de contribuyentes que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, circunstancia en la que se ubica mi opositora, tal como se puede advertir del análisis que realice esa H. Sala a las constancias que obran en el expediente administrativo ofrecido como prueba por la propia incoante, debido a que ésta tiene la calidad de empresa controladora; por tal motivo, en el presente caso el plazo será de dieciocho meses.

Al respecto, es importante destacar, que resulta por demás contundente que el plazo de veinte días señalado en el último párrafo de la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, es independiente del que se establece en el artículo 46-A del citado ordenamiento, de ahí que por disposición expresa de Ley, no deberá computarse dentro del plazo de 18 meses.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con las argumentaciones anteriores, es un hecho incontrovertible que el que en el requerimiento 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, así como en el diverso 900 05 03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, no se hubiere plasmado la duración de la revisión de gabinete, no implica la ilegalidad de los mismos, ya que dicho requisito no está establecido en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 12/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época: Décima Época, Registro: 2000114, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Torno 4, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 12/2011 (10a.), Página: 3577



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

236

ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO ES NECESARIO QUE INVOQUEN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVE LOS PLAZOS MÁXIMOS EN QUE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN RELATIVOS DEBEN CONCLUIR. Las referidas órdenes satisfacen el requisito de fundamentación y motivación contenido en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, cuando además de fundarse en las fracciones II y III del numeral 42 de dicho ordenamiento tributario federal, precisan las contribuciones motivo de verificación en cada caso, y cumplen las condiciones formales previstas en los artículos 38, 43 y 48 del propio Código, siendo innecesario invocar el diverso 46-A, que establece los plazos en que deben concluir los actos de fiscalización correspondientes, dependiendo del carácter del contribuyente, porque no es en este último precepto, sino en las referidas fracciones II y III, donde se prevén las respectivas facultades, pues en aquél sólo se determina la duración máxima de las visitas domiciliarias o revisiones de escritorio o gabinete; regla que constituye un deber de ineludible cumplimiento que ha de observar la autoridad fiscal por imperativo de ley, pues de no hacerlo, las consecuencias son que: a) La visita o revisión concluya en la fecha en que debiera culminar; b) Las órdenes queden sin efectos, es decir, que no produzcan consecuencias legales; y, c) Todo lo actuado quede insubsistente; además, porque de los referidos numerales 38, 43 y 48 no deriva que constituya un requisito de legalidad de las órdenes de que se trata, que deban señalar el plazo máximo que durarán las correspondientes facultades de comprobación, y la cita del precepto que alude a dicho plazo; máxime que la falta de esto último no irroga perjuicio a los destinatarios de las órdenes en cuestión, pues al estar legalmente previstos los plazos máximos de duración y las consecuencias de su incumplimiento por parte de la autoridad fiscal, no se les deja en inseguridad jurídica y sujetos a una indefinida intromisión en sus domicilios.

Contradicción de tesis 359/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Vallis Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Tesis de jurisprudencia 12/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once:

(Énfasis añadido)

En tal orden de ideas, si la actuación de mi representada cumple con los requisitos exigidos por el Máximo Tribunal en materia de orden de revisión, resulta inconcuso que los argumentos que se contestan devienen infundados.

En efecto, del oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 se desprende que en el mismo, la autoridad fiscalizadora:

- ✓ Citó –entre otros- el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación;



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

237

- ✓ Preciso el motivo de la verificación (revisar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta);
- ✓ Cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, a saber:
 - Notificó la orden de conformidad con el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, como fue demostrado en párrafos precedentes; y
 - Indicó el lugar y el plazo en que debieron entregarse los documentos e informes (oficinas de la autoridad fiscalizadora, en 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la diligencia de notificación);

Lo anterior, máxime que como fue señalado con antelación, la duración del periodo de un procedimiento fiscalizador no depende enteramente de la autoridad que lo despliega, sino que dicha duración también se encuentra sujeta al comportamiento del sujeto auditado.

Claramente, y como fue precisado con antelación, existen supuestos normativos que prevén la suspensión del plazo para que las autoridades concluyan el procedimiento fiscalizador que desplieguen, cuyo detonante depende de circunstancias atribuibles al propio contribuyente o a terceros relacionados con él.

En ese sentido, resulta inadmisibles que la demandante pretenda sujetar a la autoridad fiscalizadora a precisar un plazo determinado para desplegar sus facultades de comprobación, cuando dicha circunstancia no está en su absoluto control.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII-P-1aS-284, sustentada por la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

VII-P-1aS-284, R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 12. Julio 2012. p. 92.

"ORDEN DE REVISIÓN DE ESCRITORIO O DE GABINETE.- NO ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD SEÑALE LA FECHA DE DURACIÓN Y/O CONCLUSIÓN.- El artículo 38 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, establece que todos los actos administrativos deberán estar fundados y motivados. Por lo que, para que una orden de revisión de escritorio o de gabinete se considere debidamente fundada y motivada, debe señalar lo siguiente: 1) La documentación que requiere; 2) la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige; 3) la facultad que ejerce; 4) la denominación de las contribuciones; y, 5) el periodo a revisar. De manera que, el hecho de que la autoridad fiscal no señale la fecha de duración y/o



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 117 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

238

conclusión de las facultades ejercidas, no le resta validez a la orden de revisión de escritorio o gabinete, al no ser datos indispensables para que el contribuyente adquiera certeza jurídica en relación a la facultad de comprobación ejercida por la autoridad."

Juicio de Tratados Internacionales Núm. 19285/08-17-08-2/165/12-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2012)

(Énfasis añadido)

En relatadas consideraciones, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas, pues se insiste, el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación no previene como requisito que se mencione en la revisión de gabinete el plazo que la autoridad fiscal llevará a cabo sus facultades.

E. Los argumentos de la actora respecto a que en la especie existe una indebida fundamentación y motivación del oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, al no estar debidamente fundado y motivado respecto a la competencia material de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, al no haberse citado los artículos 17 y 31 primer párrafo fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual es necesario para acreditar la competencia material de mi representada, devienen en infundados.

En efecto, lo anterior debe ser considerado de esa manera por parte de esa H. Sala, pues del análisis que realice a los artículos que supuestamente la demandante, la autoridad debía citar, se advierte que los mismos, contrario a lo señalado por [REDACTED] (antes [REDACTED]), no fijan competencia por materia.

Ciertamente, el contenido de los artículos 17 y 31 primer párrafo fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el siguiente:

"Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables."

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

239

"Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XI. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;

XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos."

De la lectura a los numerales de referencia, se desprende por una parte que se establece la posibilidad de que las Secretarías de Estado cuenten con órganos desconcentrados que estarán subordinados a éstas, y que tendrán facultades específicas.

Asimismo, se indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

En tal tenor, es patente advierte que ninguno de los preceptos transcritos establece facultades o atribución alguna a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, razón por la cual, dicha unidad administrativa al emitir el oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, no se encontraba obligada a citar los artículos 17 y 31 primer párrafo fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para fundar su competencia material.

Por su parte, en el citado oficio, se advierte que la Administración Central aludida, invocó entre otros- el artículo 20, primer párrafo, apartado A, fracciones IX y X, apartado B, fracción II, y 21, primer párrafo apartado E, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, mismos que señalan a la letra, lo siguiente:

"Artículo 20. Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

A. Competencia:

IX. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarios para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan



Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

240

con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras: autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales.

X. Revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos.

B. Sujetos y entidades:

II. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado como controladoras, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 21. Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las facultades que a continuación se precisan:

F. A la **Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente** y a las unidades administrativas adscritas a la misma:

I. Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

Las señaladas en el apartado A, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, L, LII, LIV, LVI, LXVI y LXVII del artículo anterior de este Reglamento.

(Énfasis añadido)

De la transcripción que antecede, se advierte que la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, citó en el oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011,



Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

241

los preceptos legales que le confieren competencia material para requerir documentación y llevar a cabo la revisión de gabinete de la que fue objeto la actora; por lo tanto, es infundado el argumento de ésta en el que aduce que además, debían citarse los artículos 17 y 31 primer párrafo fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues se reitera, éstos no establecen competencia alguna a favor de la autoridad emisora de la resolución inicialmente recurrida.

Lo anterior, pues como ya ha quedado señalado, son los preceptos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que han sido reseñados, los que facultan a la autoridad fiscalizadora para requerir directamente a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

Máxime que según la propia manifestación de la actora, los artículos 17 y 31, fracción XI, facultan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cobro de ingresos federales, siendo que en el oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, no se está cobrando a la actora ningún impuesto, sino que se está informando sobre el ejercicio de sus facultades de comprobación, lo cual es muy distinto, y evidencia que no existía obligación alguna de citar tales artículos.

De conformidad con lo anterior, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

F. La autoridad fiscalizadora citó debidamente los artículos que la facultan para emitir el oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011.

Ciertamente, la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, citó de manera expresa en el oficio de referencia, el artículo 20, primer párrafo, Apartado A, fracciones IX y X, Apartado B, fracción II; quinto párrafo en la parte que establece: "La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalen" y sexto párrafo, numeral 5, correspondiente al "Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente", y 21, primer párrafo apartado E, fracción I, todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, entre otros.

En este sentido, resulta necesario transcribir dichos fundamentos a efecto de evidenciar que el oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, emitido por la Administración Central de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 119 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

242

Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se encuentra debidamente fundado y motivado; disposiciones legales que disponen a la letra lo siguiente:

Artículo 20. Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

A. Competencia:

IX. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarios para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales.

X. Revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos.

B. Sujetos y entidades:

II. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado como controladoras, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

243

Las unidades administrativas de las que sean titulares los servidores públicos que a continuación se indican estarán adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes:

5. Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

Artículo 21. Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las facultades que a continuación se precisan:

E. A la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y a las unidades administrativas adscritas a la misma:

I. Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

Las señaladas en el apartado A, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, **IX, X**, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, L, LIII, LIV, LVI, LXVI y LXVII del artículo anterior de este Reglamento."

(énfasis añadido)

De los fundamentos citados por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se advierte que le corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes, la competencia precisada en el apartado A de dicho artículo, cuando se trate de las entidades y de los sujetos comprendidos en el apartado B de dicho precepto.

Asimismo, se advierte que dicha competencia radica en requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes; así como para citar a los citados profesionistas a efecto de que exhiban sus papeles de trabajo con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; emitir oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad para que se continúe con el procedimiento instaurado al contribuyente.

Igualmente, se advierte que la autoridad cuenta con la facultad de revisar los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de bienes, o bien, cualquier tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, y



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

244

verificar que reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales.

En este sentido, se señala que dichas facultades se podrán efectuar respecto a las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado como controladoras, como lo es en la especie, durante 2011, [REDACTED] antes [REDACTED] [REDACTED], hecho que no está sujeto a discusión.

Aunado a lo anterior, se desprende que la Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que se señalan como los titulares de las unidades administrativas adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes, como lo es en la especie el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Iguálmente, se desprende que la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, cuenta con facultades expresas para requerir la documentación que se menciona en el oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011.

Por lo tanto, esa H. Sala podrá comprobar que de lo que se duele la actora, es que no se manifestó la fracción, el párrafo o el inciso del numeral 5, sexto párrafo del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que resulta aplicable a su situación particular, circunstancia con la cual, a su parecer, se le deja en pleno estado de indefensión, al existir diversas autoridades en dicho numeral.

Pues bien, en primer lugar, se advierte que **el quinto y sexto párrafos del artículo 20, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no establecen competencia de las unidades administrativas que lo componen.**

El aserto anterior, descansa en el hecho de que del contenido del quinto y sexto párrafos del artículo 20, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se desprende lo siguiente:

La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

245

Las unidades administrativas de las que sean titulares los servidores públicos que a continuación se indican estarán adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes:

5. Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

- a) Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1":
 - i) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1".
 - ii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "2".
 - iii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3".
 - iv) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "4".
- b) Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "2":
 - i) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "5".
 - ii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "6".
 - iii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "7".
 - iv) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "8".
- c) Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3":
 - i) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "9".
 - ii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "10".
 - iii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "11".
 - iv) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "12".
- d) Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "4":
 - i) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "13".



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 121 -



Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

246

- ii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "14".
- iii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "15".
- iv) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "16".
- e) Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "5".
- d) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "17".
- ii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "18".
- iii) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "19".
- iv) Subadministrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "20".

De lo anterior se desprende claramente que la parte que se estudia del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, únicamente establece la denominación de las unidades administrativas adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes, así las facultades o competencia material de dichas unidades; tan es así que en el artículo 21, apartado E, fracción I, se señalan en específico las atribuciones de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Por tanto, es válido concluir que contrario a lo que señala la demandante, no es necesario que la autoridad señalara de manera precisa qué parte del numeral 5 del sexto párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria establecía su competencia material, por la simple y sencilla razón de que en dicho numeral no se establece competencia alguna.

Además, si bien es cierto que en el oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, se citó como fundamentación el sexto párrafo, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, también lo es que se precisó que su aplicación corresponde a lo que se refiere al Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, razón por la cual no existe incertidumbre jurídica alguna respecto a cuál de los supuestos del numeral 5 se refirió la autoridad fiscalizadora, ello porque es patente que los distintos incisos y fracciones que lo integran se refieren a unidades administrativas distintas a mi representada.



Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

247

En suma a lo anterior, y toda vez que fue la misma Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, la que emitió tanto el oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, es por demás evidente que no se encontraba obligada a señalar ningún inciso o subinciso contenido en el numeral 5, del sexto párrafo del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pues con el hecho de haber señalado el numeral 5 queda acreditada la competencia con la que cuenta la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, por lo que en oposición a lo señalado por mi contraria, el no haber señalado algún inciso o subinciso contenido en el numeral 5 citado, obedece a que en la especie se advierte que el mismo no resulta aplicable al caso concreto.

En tales condiciones, se estima procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad con los hechos y el derecho expuestos en el presente apartado.

Séptimo. Manifiesta la actora en el concepto de impugnación que se contesta, que el oficio de observaciones antecedente del acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, toda vez que sólo se cito la fracción IV del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, omitiendo citar la diversa fracción I, en la cual se prevé la facultad que tiene la autoridad para notificar dicha actuación administrativa.

Al respecto, ésta defensa advierte que los argumentos de la demandante resultan **infundados**, mismos que devienen ineficaces para desvirtuar la legalidad de las resoluciones impugnadas.

En efecto, lo anterior es de esa manera, toda vez que para hacer constar lo anterior, es preciso transcribir el último párrafo de la foja 83 y primer párrafo de la foja 84 del oficio de observaciones número 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, pues de su contenido se desprende que efectivamente se encuentra fundado y motivado en los términos que exige la propia enjuiciante; transcripción de la que se advierte lo siguiente:

En los términos y para los efectos previstos en las **fracciones IV y VI** del primer párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente, dispone de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio de observaciones...

(Énfasis añadido)



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

248

De transcripción anterior, se puede corroborar con meridiana claridad que la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" citó el artículo 48, fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación, como se observa en el último párrafo de la hoja 83 del oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, que se refieren a la notificación del oficio de observaciones, **resultando innecesaria la cita de la diversa fracción I del numeral en cita**, toda vez que **la misma ni siquiera se refiere al oficio de observaciones, menos aún a su notificación.**

Por otro lado, es menester precisar que el artículo 48, fracción I del Código Fiscal de la Federación, no establece la competencia de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para determinar y notificar las irregularidades observadas en un procedimiento fiscalizador instruido en la modalidad de revisión de gabinete.

En efecto, el artículo en cita dispone a la letra lo siguiente:

"Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, ~~por~~ el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento.

(Énfasis añadido)

Así, será notorio para esa H. Sala que la norma transcrita es de carácter adjetivo, es decir, se encarga de regular la actuación de las autoridades en caso de que ejerzan facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria.

Asimismo, se desprende que en dicho numeral, el legislador federal se ocupó de regular la actuación de las autoridades fiscales al notificar **oficios de solicitud de documentación que impliquen el inicio de sus facultades, no así la práctica de una notificación del oficio de observaciones.**

Abundando en el tema, dicha regulación consiste en emitir y notificar un oficio de solicitud de documentación e informes con las formalidades a que se refiere el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

249

Bajo esa óptica, el hecho de que en la resolución inicialmente recurrida contenida en el oficio 900 05-03-2013-48229 de 25 de julio de 2013, no se hubiere citado el artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, no implica que exista insuficiencia en la fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad para notificar el oficio de observaciones antecedente de aquél, pues se reitera, el artículo sujeto a análisis es una norma de procedimiento que no fija competencia de las autoridades.

En relación con lo expuesto, en el oficio 900 05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, fundó su competencia para determinar y notificar un crédito fiscal —entre otros— en los artículos 9º, primer párrafo, fracción XXXVII, 10, primer párrafo, fracción I, así como en el diverso 20, primer párrafo, apartado A, fracción XIII, y 21, primer párrafo apartado E, fracción I, todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, mismos que disponen a la letra lo siguiente:

"Artículo 9. Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

XXXVII. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas."

"Artículo 10. Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas, los Coordinadores, y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I. Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, **XXXVII**, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este Reglamento."

"Artículo 20. Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

A. Competencia:

XIII. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y de las verificaciones de origen practicadas y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 123 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

250

Artículo 21. Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las facultades que a continuación se precisan:

E. A la **Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente** y a las unidades administrativas adscritas a la misma:

I. Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

Las señaladas en el apartado A, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, L, LIII, LIV, LVI, LXVI y LXVII del artículo anterior de este Reglamento.

(Énfasis añadido)

Así, los numerales de referencia establecen las atribuciones de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para dar a conocer las irregularidades que detecten derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación.

Por tanto, si en el oficio de observaciones que nos ocupa, se citaron tales preceptos legales de referencia, y el diverso 48, fracción I en el que pretende sustentar su pretensión la **Actora**, únicamente constituye parte del procedimiento rector que deben observar las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación y además, no hace referencia alguna al oficio de observaciones, resulta infundada la argumentación que se contesta en el sentido de que no se precisaron los fundamentos por los cuales se advierte la competencia de la autoridad fiscalizadora para notificar el citado oficio de irregularidades, máxime que tal y como se abordó en el presente apartado, el artículo 48, fracción I del Código Fiscal de la Federación, no establece competencia de las autoridades fiscalizadoras, por tratarse de una norma adjetiva que regula la actuación de éstas.

Al amparo de lo anterior, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad con los hechos y el derecho expuestos en el presente apartado.

Octavo. Manifiesta la actora en el correlativo concepto de impugnación, que a su criterio, la autoridad fiscalizadora al emitir la resolución inicialmente recurrida controlada con el número 00-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013 no fundó debidamente su competencia en el Código Fiscal de la Federación toda vez que al citar el artículo 50 del mismo, no especificó en concreto la parte que le era aplicable, además de que en dicho precepto se especifica la facultad de la autoridad fiscal para notificar el crédito fiscal.



Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

251

En primer término, es menester precisar que el artículo 50, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, no establece la competencia de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para determinar y notificar un crédito fiscal.

En efecto, el artículo 50, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, es del tenor siguiente:

Artículo 50. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código."

De lo anterior, advertirá esa H. Sala que la norma transcrita es de carácter adjetivo, es decir, se encarga de regular la actuación de las autoridades en caso de que conozcan de hechos y omisiones por los que se incumplan las disposiciones fiscales derivados del ejercicio de sus facultades de comprobación.

Abundando en el tema, dicha regulación consiste en emitir y notificar una resolución definitiva en un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se levante el acta final (tratándose de visita domiciliaria) o a partir de que concluyan los plazos con los que cuentan los particulares para desvirtuar los hechos y omisiones encontrados, o corregir su situación fiscal cuando se trata de una revisión de gabinete.

Bajo esa óptica, el hecho de que en la resolución inicialmente recurrida contenida en el oficio 900 05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, no se hubiere citado específicamente el primer párrafo del artículo 50, del Código Fiscal de la Federación, no implica que exista insuficiencia en la fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad para determinar y notificar un crédito fiscal, pues se reitera el artículo sujeto a análisis es una norma de procedimiento que no fija competencia de las autoridades.

En relación con lo expuesto, en el oficio 900 05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, fundó su competencia para determinar y notificar un crédito fiscal —entre otros— en los artículos 9º, primer párrafo, fracción XXXVII, 10, primer párrafo, fracción I, así como en el diverso 20, primer párrafo,



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

252

apartado A, fracción XIV, y 21, primer párrafo apartado E, fracción I, todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, mismos que disponen a la letra lo siguiente:

Artículo 9. Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

XXXVII. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas."

Artículo 10. Los **Administradores Centrales**, Regionales, Locales y de las Aduanas; los Coordinadores, y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I. Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, **XXXVII**, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este Reglamento."

Artículo 20. Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

A. Competencia:

XIV. Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar los derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo."

Artículo 21. Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las facultades que a continuación se precisan:

E. A la **Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente** y a las unidades administrativas adscritas a la misma:

I. Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

Las señaladas en el apartado A, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, **IX, X**, XI, XII, XIII, **XIV**, XV, XVI, XVII, **XIII**, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, **XXXVI**, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, L, LII, LIV, LVI, LXVI y LXVII del artículo anterior de este Reglamento.

(Énfasis añadido)



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

253

Así, los numerales de referencia establecen las atribuciones de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para determinar contribuciones omitidas y notificar los actos derivados de sus facultades de comprobación.

Por tanto, si en la resolución impugnada en sede administrativa, se citaron tales preceptos legales de referencia, y el diverso 50 en el que pretende sustentar su pretensión la actora, únicamente constituye parte del procedimiento rector que deben observar las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación, resulta infundada la argumentación que se contesta en el sentido de que no se precisaron los fundamentos por los cuales se advierte la competencia de la autoridad fiscalizadora para determinar créditos fiscales y notificarlos, máxime que tal y como se abordó en el presente apartado, el artículo 50, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, no establece competencia de las autoridades fiscalizadoras, por tratarse de una norma adjetiva que regula la actuación de éstas.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII-TASR-1GO-43, sustentada por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, misma que dispone a la letra lo siguiente:

VII-TASR-1GO-43, R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 439

"ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO RESTRINGE LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR RECARGOS Y MULTAS, PUES NO FIJA LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD FISCAL PARA EMITIR LIQUIDACIONES.- El artículo 50 del Código Fiscal de la Federación no establece facultad alguna para la autoridad fiscalizadora sino únicamente el límite temporal para que esta emita la resolución en la que determine la situación fiscal del contribuyente revisado una vez concluida la facultad de comprobación, pues al respecto establece que la autoridad cuenta con un plazo máximo de seis meses. Por lo tanto, no puede sostenerse que la autoridad fiscalizadora está impedida para determinar tanto contribuciones omitidas como sus accesorios (multas y recargos)."

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 383/12-13-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de octubre de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Anuar Hernández Hernández.

(Énfasis añadido)



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 125 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
CREDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

254

De igual manera, apoya los razonamientos de ésta representación fiscal, la diversa tesis VII-TASR-1GO-25, confeccionada por la propia Sala Regional en cita, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

VII-TASR-1GO-25, R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 15. Octubre 2012. p. 157

ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PREVÉ LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR CONTRIBUCIONES COMO RESULTADO DE UNA VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE, SINO SÓLO EL LÍMITE TEMPORAL PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. El artículo 50 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales al practicar visitas domiciliarias o ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 del Ordenamiento referido, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de las fases del procedimiento de fiscalización establecidas en dicho numeral. Sin embargo, ello no implica que en dicho precepto legal se establezca tal facultad, sino únicamente el límite temporal para que la autoridad fiscal emita la resolución correspondiente, en la que determine la situación fiscal del contribuyente revisado una vez concluida la facultad de comprobación correspondiente. Por consiguiente, no puede aducirse que la autoridad fiscalizadora carezca de facultades para determinar recargos y multas por el hecho de que en el artículo citado se aluda sólo a contribuciones, pues dichas atribuciones encuentran su sustento jurídico en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y en todo caso en los preceptos legales y reglamentarios que regulan la actuación de las autoridades fiscales.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1102/11-13-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de junio de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Luis Armando Murillo Mercado.

(Énfasis añadido)

Finalmente, debe destacarse que en el oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013 se citó el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, lo que resulta suficiente para entender suficientemente fundada la resolución determinante, sin que sea necesaria la cita del primer párrafo de ese numeral.

Al amparo de lo anterior, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad con los hechos y el derecho expuestos en el presente oficio.

Asimismo, la autoridad demandada mediante oficio de contestación a la ampliación de la demanda número 900 09 05-2016-2132 de fecha 15 de febrero de 2016, argumentó lo siguiente:

CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA

Contestación a los conceptos de impugnación.

Único.

Manifiesta la demandante en su único concepto de impugnación, que en los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, la autoridad emisora de los mismos no señaló los fundamentos legales que contienen las facultades que se delegaron a los notificadores.

Agrega que la autoridad fiscalizadora en los actos sujetos a debate, sólo citó los preceptos legales que le otorgan facultades a la entonces Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para expedir las citadas constancias y para ejercer sus facultades, no así los diversos fundamentos que contienen las facultades que se delegaron a los funcionarios públicos que se mencionan en las constancias de identificación.

Asimismo, aduce mi contraria que para que los notificadores puedan actuar en el ámbito de sus competencias, se debieron señalar en el acto administrativo que los habilita, los preceptos legales en que se contuvieran las facultades que le están siendo delegadas.

Continúa argumentando que en las constancias de identificación en cita, la autoridad fiscalizadora no acreditó en norma jurídica las facultades que expresamente está entregando a los funcionarios notificadores, ya que sólo se menciona por ejemplo, que puede ejercer facultades de comprobación, pero no se menciona el artículo del Código Fiscal de la Federación que contiene la facultad de comprobación que va a ejercer ni el precepto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que señale las facultades que expresamente puede ejercer de manera directa.

De igual manera, indica la enjuiciante que en los documentos en pugna no se citan los fundamentos o preceptos legales que otorgan las facultades para realizar las actividades que ahí se mencionan.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

4

Añade que al resultar ilegales las constancias de identificación contenidas en los oficios de referencia, resulta evidente que las resoluciones impugnadas también lo son.

Al respecto, ésta representación fiscal advierte que los argumentos de la actora resultan **inoperantes** por una parte, e **infundados** por otra, mismos que no poseen consistencia jurídica para desvirtuar la legalidad de las resoluciones impugnadas.

A. La notificación de actos administrativos no requiere la identificación del personal que practica la diligencia correspondiente.

En materia tributaria, la práctica de notificaciones se encuentra regulada por los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, mismos que son del tenor literal siguiente:

"Artículo 134. Las notificaciones de los actos administrativos se harán:

I. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.

La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos.

El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.

Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar.

Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será enviado un aviso mediante el mecanismo elegido por el contribuyente en términos del último párrafo del artículo 17-K de este Código.

Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al que se refiere el párrafo anterior.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

5

En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso.

La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.

El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el medio por el cual le haya sido enviado el citado documento.

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión contendrá un sello digital que lo autentique.

Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital correspondiente, conforme a lo señalado en los artículos 17-D y 38, fracción V de este Código.

II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la fracción anterior.

III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código.

IV. Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión.

V. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 137 de este Código.

Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el extranjero, se podrán efectuar por las autoridades fiscales a través de los medios señalados en las fracciones I, II o IV de este artículo o por mensajería con acuse de recibo, transmisión facsimilar con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios establecidos de conformidad con lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales suscritos por México.

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

6

El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que realicen las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo, cumpliendo con las formalidades previstas en este Código y conforme a las reglas generales que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria."

"**Artículo 135.** Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación.

La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior."

"**Artículo 136.** Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas.

Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de este Código. Asimismo, podrán realizarse en el domicilio que hubiere designado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos.

Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aún cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.

En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos."

"**Artículo 137.** Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil posterior que se señale en el mismo o para que acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis días

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

7

contado a partir de aquél en que fue dejado el citatorio, o bien, la autoridad comunicará el citatorio de referencia a través del buzón tributario.

El citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio del buzón tributario.

En caso de que el requerimiento de pago a que hace referencia el artículo 151 de este Código, no pueda realizarse personalmente, porque la persona a quien deba notificarse no sea localizada en el domicilio fiscal, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código, la notificación del requerimiento de pago y la diligencia de embargo se realizarán a través del buzón tributario.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este Código."

Al respecto, como podrá advertir esa H. Sala, ningún precepto establece que las autoridades fiscales tengan la obligación de que las personas que llevan a cabo las diligencias de notificación se identifiquen, lo que —como se anticipó— torna los argumentos que se contestan inoperantes.

Lo anterior, no podría ser de otra manera, pues son sólo afirmaciones carentes de sustento legal, ya que la inexistencia de la obligación de las autoridades fiscales de identificarse ante las personas con quien entienden una diligencia de notificación, obedece a que **la notificación no constituye una resolución administrativa**, ya que **no se trata de una decisión de la administración, sino una comunicación de ésta**. Por tanto, **la notificación no tiene contenido particular, sino que transmite el acto que la antecede y la genera**.

Así, las notificaciones de los actos administrativos constituyen un verdadero derecho de los administrados y una garantía jurídica frente a la actividad de la administración tributaria, siendo un mecanismo esencial para la seguridad jurídica de aquéllos.

Sin embargo, **el hecho de que el notificador no se identifique ante la persona con quien se realiza la diligencia y éste no pueda cerciorarse que aquél es autoridad competente para llevar a cabo dicha diligencia, como representante de un órgano**



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

8

del Estado, no implica que ésta carezca de validez, si la formalidad esencial del procedimiento, en tratándose de comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad administrativa, consiste en hacer de su conocimiento éstas. Lo que resulta trascendente es la observancia de la serie de requisitos indispensables para contar con una certeza del particular sobre el conocimiento del acto administrativo, pero no así de la persona del notificador, quien aunque figura como el ejecutor de ese acto de autoridad, juega un papel secundario en la finalidad del acto, de ahí que su identificación no constituye una formalidad esencial sino accidental, pues lo que tiene trascendencia es su actuación, no su persona.

En consecuencia, basta con que se mencione que la diligencia de notificación fue realizada por la persona encargada señalada para ese efecto, para que dicha actuación tenga validez, sin que sea necesario que el notificador se identifique ante la persona con quien entiende la diligencia.

Lo anterior, fue razonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que motivó la emisión de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 187/2004, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Registro No. 179849. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004. Página: 423. Tesis: 2a./J. 187/2004. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa.

"NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA SU VALIDEZ NO ES NECESARIO QUE LOS NOTIFICADORES SE IDENTIFIQUEN ANTE LA PERSONA CON QUIEN VAN A ENTENDER LA DILIGENCIA RELATIVA. Los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación establecen la forma en que deben practicarse las notificaciones; sin embargo, ninguno de ellos señala que la persona que lleve a cabo la diligencia deba identificarse ante el notificado, pues la notificación no constituye una resolución administrativa, sino la comunicación de ésta, por lo que no tiene contenido particular, sino que transmite el del acto que la antecede, además de que constituye la actuación que complementa una decisión de la autoridad administrativa. Ahora bien, en el procedimiento administrativo en materia fiscal es necesario que los actos de autoridad sean notificados a las partes, pues ello constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración tributaria; sin embargo, el hecho de que el notificador no se identifique ante la persona con quien entienda la diligencia, no implica que tal actuación carezca de validez, si la formalidad esencial del procedimiento de comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad administrativa consiste en hacerlas de su conocimiento. Lo

001092



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

9

anterior es así, porque lo que resulta trascendente es la observancia de una serie de requisitos para garantizar tal conocimiento, pero no así de la persona del notificador, quien aunque figura como el ejecutor del acto de autoridad, juega un papel secundario en la finalidad de éste; de ahí que su identificación constituya una formalidad accidental, pues lo que tiene relevancia es su actuación. En consecuencia, basta con que se mencione que la diligencia de notificación fue realizada por la persona señalada para ese efecto, para que aquélla tenga validez.

Contradicción de tesis 142/2004-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 2 de octubre de 2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Tesis de jurisprudencia 187/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro.

(Énfasis añadido)

La anterior jurisprudencia, incluso fue retomada por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tratándose de revisiones de gabinete -- como el antecedente de la resolución inicialmente recurrida-- en la tesis VII-TASR-NOII-10, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor literal siguiente:

VII-TASR-NOII-10. R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 533.

"NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS EMITIDOS EN LA REVISIÓN DE GABINETE PRACTICADA EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD.- LOS NOTIFICADORES NO ESTÁN OBLIGADOS A IDENTIFICARSE Y CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- En las revisiones de gabinete que se llevan a cabo en el domicilio de la autoridad en términos del artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las formalidades para la identificación del personal que lleva a cabo la notificación de actos emitidos dentro de la revisión, no resultan aplicables las que regula el artículo 44, fracción III, de dicho Código; pues dicha disposición legal resulta inaplicable al caso, al tratarse de una norma que regula exclusivamente las formalidades a seguir por los visitantes dentro de una visita domiciliaria; sin que resulten aplicables por analogía las formalidades que prevé el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, pues no existe similitud entre la realización de una visita domiciliaria y la revisión de la contabilidad que se lleva a cabo en el domicilio de la autoridad, la primera de ellas, es una verificación que por su naturaleza, conlleva mayor exigencia para la actuación de la autoridad, por

Oficio 900 09 05-2016-2132
I.N. 12140/15-17-11-5.

10

tratarse de una revisión donde se lleva a cabo la intromisión en el domicilio de la contribuyente revisada."

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 79/11-02-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de mayo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretaria: Lic. María Tercsa del Socorro Sujo Nava.

Bajo tales criterios, resulta inoperante que la accionante pretenda inconformarse con supuestos vicios contenidos en las constancias de identificación contenidas en los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, ya que el Máximo Tribunal ya ha establecido que resulta irrelevante en una diligencia de notificación, la identificación del funcionario que la practica.

En efecto, la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que ni siquiera es necesario que los notificadores se identifiquen al practicar diligencias y menos aún, resulta necesario que las constancias de identificación correspondientes reúnan los requisitos que exige la actora, máxime que ningún dispositivo legal vincula a mi representada a acreditar tales extremos.

De conformidad con lo anterior, lo procedente es que ese H. Tribunal reconozca la validez de las resoluciones impugnadas, de conformidad con los hechos y el derecho expuestos con antelación.

B. Las constancias de identificación contenidas en los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013 que pretende controvertir la demandante, no son actos que le causen perjuicio.

En efecto, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo¹,

¹ El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.

Oficio 900 09 05-2016-2132
I.N. 12140/15-17-11-5.

11

establece que el juicio contencioso administrativo procederá en contra de las resoluciones que señala el diverso 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que dispone a la letra lo siguiente:

"**Artículo 14.** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

12

VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales;

X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rijan a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

13

XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y

XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia."

(Énfasis añadido)

De lo anterior, se advierte que el artículo en comento, establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que en todo momento afectan el interés jurídico del contribuyente y le causan un agravio en materia fiscal.

En ese sentido, tenemos que de las materias señaladas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no se advierte que sean impugnables constancias de identificación del personal de alguna autoridad, como en el caso lo pretende la demandante; constancias que no afectan el interés jurídico ni causa perjuicio alguno en materia fiscal a mi contraria, ni determina la existencia de una obligación fiscal, ni se liquida o se sientan bases para su liquidación a ésta última, por lo que resulta evidente que dicha resolución no es de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Cuestión la anterior, que ya ha sido dilucidada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a. X/2003, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 131 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

14

Época: Novena Época. Registro: 184733. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Torno XVII, Febrero de 2003.
Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a. X/2003. Página: 336

"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de... dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados."

Contradicción de tesis 79/2002-S5. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 17 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanúel G. Rosales Guerrero.

(Énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende que aún y cuando para el ejercicio de la acción contenciosa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se requiere de la afectación de un interés, ello no significa que dicha acción constituya una potestad procesal para todo acto de la

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

15

administración pública, ya que se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia del juicio está condicionada a que dichos actos o resoluciones constituyan resoluciones definitivas, ...y que además se encuentren mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia previstas en la Ley Orgánica de dicho Tribunal...

Por lo tanto, al no constituir los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, resoluciones de aquellas que se encuentren "...dentro de las hipótesis de procedencia previstas en la Ley Orgánica de dicho Tribunal...", lo procedente resulta ser que sean calificados como inoperantes los conceptos de impugnación a los que doy contestación.

Ahora bien, aún cuando el criterio a que nos referimos alude al artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente hasta el seis de diciembre de dos mil siete, no debe pasar desapercibido que el diverso ordinal 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, reproduce las idénticas hipótesis normativas.

Apoya lo anterior, la siguiente tesis, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

No. Registro: 239,968. Tesis aislada, Materia(s): Común, Séptima Época, Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 205-216 Cuarta Parte, Tesis: Página: 98 Genealogía: Informe 1986, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 92, página 69.

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. AUN CUANDO EL PRECEPTO INTERPRETADO POR ELLA SE ENCUENTRE DEROGADO, DEBE SEGUIRSE APLICANDO SI EL LEGISLADOR REPRODUJO ESA MISMA NORMA EN UN ORDENAMIENTO POSTERIOR. Si se derogó la ley en que aparece un precepto interpretado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el legislador lo reproduce en diverso ordenamiento, y lo destina a regir las mismas situaciones que en el anterior, el criterio adoptado subsiste con la misma fuerza obligatoria, y en consecuencia debe seguirse aplicando, pues la fuente que le da vida es el contenido de la norma que en el nuevo cuerpo legal, quizá tan sólo con otro número, seguirá produciendo idénticos efectos que en el pasado."

Amparo en revisión 8960/83. Rolando Luis Juárez Rocha. 17 de abril de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
I.N. 12140/15-17-11-5.

16

(Énfasis añadido)

Ahora bien, nuestro Máximo Tribunal estableció en la citada tesis que la definitividad por efectos del juicio contencioso-administrativo, además de ponderar la atacabilidad de resolución administrativa a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa.

En ese sentido, dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas:

- ✓ Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o
- ✓ Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan, para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública.

Así, tratándose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza *inter* procedimental, no podrán considerarse "resoluciones definitivas", en obvio que éste sólo puede ser el fallo con el que culmine dicho procedimiento, excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido tal como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, que para este caso es precisamente la producción de la resolución administrativa definitiva cuyo objeto consiste, a su vez, en crear efectos jurídicos.

De igual manera, en consideración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado, en tanto la administración pública no diga su última palabra por medio de la autoridad a quien compete decidirla en el orden jurídico correspondiente, y solamente cuando la resolución de que se trata adquiere esa inamovilidad que impida reformas, se dice que "causa estado".

En tal virtud, la generación de esta situación últimamente mencionada, en combinación con la causación de un agravio objetivo, son las características de la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso-administrativo, además de lo que prevé el artículo 14 de la ley orgánica antes mencionada, lo que dará lugar al **nacimiento del interés requerido para acudir a la vía correspondiente para inconformarse con el acto de que se trate.**

De lo anteriormente expuesto, se desprende que las constancias de identificación en cita no se



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
I.N. 12140/15-17-11-5.

17

adecuan a ninguna hipótesis normativa prevista expresamente por el legislador como supuesto para ser materia de impugnación, lo que denota la improcedencia e inoperancia de los argumentos a los que se da contestación.

No pasa desapercibido para ésta defensa, que cuando se trate de actos dictados dentro de un procedimiento, éstos podrán ser controvertidos en unión del acto definitivo que se dicte como resolución final del procedimiento de que se trate, por ejemplo: un oficio de observaciones tratándose de una revisión de gabinete, o un acta final, cuando se trate de visitas domiciliarias, que de otra manera -es decir, vistos dichos actos en lo individual-, resulta imposible jurídicamente impugnar, en atención precisamente al razonamiento que antecede y que se sustenta en el contenido del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Lo anterior, como también lo señaló el Alto Tribunal en la tesis en análisis al determinar que *"...cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución..."*.

No obstante, bajo ninguna interpretación puede considerarse a las constancias de identificación contenidas en los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013 como parte integrante de la revisión de gabinete GSD9400235/11 que culminó con la emisión de la resolución contenida en el oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013 (inicialmente recurrida).

Ciertamente, lo expuesto es de esa manera, pues dichas constancias de identificación, si bien fueron emitidas por la autoridad fiscalizadora para que las personas que las portan practicasen diversas diligencias de notificación, **las mismas no forman parte de los documentos que integran una revisión de gabinete.**

Al respecto, el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación dispone a la letra lo siguiente:

"Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 133 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

18

I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento.

II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos.

III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante.

IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, quien podrá ser notificado de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de este Código.

V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados.

VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código.

VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción IV de este artículo, cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 179 y

002197



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

19

180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior, será de dos meses, pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente.

VIII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones, a que se refieren las fracciones VI y VII, el contribuyente podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que proporcionará copia a la autoridad revisora.

IX. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente."

De lo anterior, se desprende que, como sucede con los diversos 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, no se prevé que el personal encargado de practicar las diligencias deba identificarse ante las personas con quien se entiendan las mismas, por tanto, las constancias de identificación correspondientes no forman parte del procedimiento de revisión de gabinete.

De conformidad con lo expuesto, es evidente que la excepción a las reglas previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no se actualiza en la especie, pues opera únicamente cuando se trate de actos que formaron parte del procedimiento dictado en la resolución administrativa definitiva, cuestión que como se ha demostrado, no se actualiza en la especie.

Ciertamente, las constancias de identificación en cita no se expidieron para utilización exclusiva en el desarrollo de la revisión de gabinete CSD9400235/11, sino para practicar todas las diligencias que les sean encargadas a los portadores de las mismas; razón adicional para estimar que bajo ninguna interpretación, pueden considerarse como parte integrante de la citada revisión, como presupuesto para que proceda su impugnación, como inexactamente lo aprecia la actora.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
I.N. 12140/15-17-11-5.

20

Por lo tanto, todos los criterios aislados y jurisprudenciales que cita la actora en pretendido sustento de sus argumentos deberán desestimarse, porque los mismos no resultan aplicables.

En efecto, las tesis en comento sólo resultan aplicables a aquéllos actos que por su naturaleza les son inherentes los requisitos de fundamentación y motivación, así como el debido sustento de la competencia de la autoridad que emita tales actos; sin embargo, en la especie se ha acreditado que los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013 no son actos que le causen perjuicio a la demandante y por ello, no les son aplicables los requisitos legales que exige la enjuiciante.

No obstante lo expuesto, y suponiendo sin conceder que esa H. Sala estime lo contrario, aún de esa manera los argumentos de la actora resultan ineficaces e insuficientes para desvirtuar la legalidad de los actos sujetos a debate.

C. Las constancias de identificación no son actos regulados por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, mi colitigante pierde de vista que la constancia de identificación es un documento, en el cual se habilita a cierto personal para realizar determinadas facultades que le son propias (a la autoridad), bastando que la emisora de dicho documento cite aquéllos fundamentos que la facultan para emitir el acto en concreto, destacando que **al ser un documento que no se ubica en el supuesto del artículo 38, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, no debe encontrarse debidamente fundado y motivado.**

Ciertamente, el reclamo de la actora no encuentra sustento ni fundamento alguno, ya que pierde de vista que los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013 no se ubican en la hipótesis contemplada en el primer párrafo del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto, dicho numeral dispone a la letra lo siguiente:

"Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:

I. Constar por escrito en documento impreso o digital.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
I.N. 12140/15-17-11-5.

21

Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, deberán transmitirse notificados a los destinatarios.

II. Señalar la autoridad que lo emite.

III. Señalar lugar y fecha de emisión.

IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

V. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los funcionarios pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Segundo, del Título I denominado "De los Medios Electrónicos" de este ordenamiento.

En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el funcionario competente podrá expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el documento impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución.

Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el sello resultado del acto de firmar con la firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, que se encuentre contenida en el documento impreso, producirá los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos, con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.

Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que contenga la impresión del sello resultado de la firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, será verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del autor.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 135 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

22

El Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios a través de los cuales se podrá comprobar la integridad y autoría del documento señalado en el párrafo anterior.

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad."

(Énfasis añadido)

Del artículo preinserto, se desprenden los requisitos que deben cumplir —por lo menos— todos aquéllos **actos que deban notificarse**; sin embargo, los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, **al no ser actos que se deban notificar**, dado que constituyen únicamente constancias de identificación del personal de la autoridad fiscalizadora, **no están sujetos a ninguna normatividad que les exija determinados requisitos**, como la cita de ciertos artículos, que es el caso sujeto a debate propuesto por la enjuiciante.

Por lo tanto, al no estar sujetos los actos sujetos a debate en la presente instancia en la categoría de "...actos administrativos que se deban notificar...", no es dable exigirles que encuentren debidamente fundados y motivados, como inexactamente lo exige mi opositora.

Ciertamente, las constancias de identificación en pugna no son susceptibles de notificación, pues su única función es identificar como funcionarios públicos al personal de determinada unidad administrativa encargado de practicar diversas diligencias con los contribuyentes, quien al llevarlas a cabo —aun no estando obligado a ello, en el caso de notificaciones personales— deberá mostrarla al interesado o a la persona con quien se entienda la diligencia de que se trate.

Lo anterior, obedece a que dichas constancias no causan ningún agravio ni perjuicio en la esfera de los contribuyentes, al tratarse de un acto que identifica a determinado funcionario(a) en el ejercicio de sus funciones como auxiliar del titular de la Administración a la que se encuentre adscrito, lo cual evidentemente no puede generar afectación alguna a los administrados.

En efecto, mediante la emisión de los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013: i. no se determina situación fiscal alguna; ii. no se determina cantidad alguna a pagar; iii. no se dan las bases para su liquidación;

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



001090
SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

23

iv. ni se actualiza algún otro supuesto previsto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como presupuesto para que proceda su impugnación.

Razones las que anteceden, las que justifican que el legislador haya prescindido de las constancias de identificación como actos que se deban notificar, por lo que si en la emisión de las mismas no se exige requisito alguno a cumplir por parte de la autoridad emisora, no es jurídicamente procedente que se les exijan los requisitos que prevé el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, como inexactamente lo concibe la actora, por lo que su impugnación se torna ociosa.

De conformidad con lo anterior, no es procedente jurídicamente que se le exijan tales requisitos a la emisión de las constancias de identificación materia de impugnación, porque las mismas no están sujetas a la potestad del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, ya que:

- ✓ Los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013 no son actos que se deban notificar; y
- ✓ Dichas actos no modifican en manera alguna la esfera jurídica de los contribuyentes.

En tal orden de ideas, la pretensión de la demandante es infundada, en vista de que pretende fundamentación y motivación de las constancias de identificación sujetas a debate que, por su propia naturaleza, no les son atribuibles dichas características.

C.I. No obstante lo anterior, suponiendo que esa H. Sala estime lo contrario, es menester destacar en primer término que mi representada no se encuentra obligada a citar mayores numerales que los contenidos en los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013.

En efecto, si bien es cierto en las constancias en pugna se mencionan diversas actividades que podrán llevar a cabo los notificadores, no menos lo es que ello no vincula a mi representada a citar el fundamento de cada una de dichas actividades, como pretendido sustento de validez de la actuación de la entonces Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

24

Ciertamente, los fundamentos de cada una de las actividades que en los oficios de identificación se mencionan deberán citarse, en todo caso, en aquéllos actos administrativos en donde se materialice determinada facultad, pues será dicha actuación la que implica el ejercicio de la competencia de mi representada, no así la constancia de identificación de su personal.

Lo anterior, cobra mayor relevancia si recordamos que las facultades que despliegan los notificadores, se ejecutan en auxilio del titular de dichas atribuciones, por lo que las consecuencias de dicho ejercicio no se atribuyen a los auxiliares que las llevan a cabo, sino al poseedor de la potestad ejecutada, es decir, al titular de la unidad administrativa de que se trate.

En ese sentido, la cita de los artículos que sustentan las actividades mencionadas en las constancias de identificación sujetas a debate so pretexto de citar el fundamento de las mismas resulta innecesaria, pues no se están otorgando facultades ni delegándose las mismas a las personas a quienes se les expide una constancia de identificación, sino que únicamente se les habilita como auxiliares del titular de las facultades —en este caso, titular de la extinta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente—.

Por ello, la actuación de mi representada en los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013 se encuentra plenamente justificada, pues no resulta necesaria la cita de los artículos que menciona mi contraria en la ampliación de demanda que se contesta.

Lo anterior, en la inteligencia de que mediante la expedición de los oficios en cita, únicamente se está dotando al personal de la autoridad fiscalizadora de una identificación que lo acredite como servidor público, no así le está habilitando, autorizando u ordenando el ejercicio de las facultades que se enuncian en cada uno de los oficios.

Así las cosas, no resulta necesaria la cita de los numerales que indica la enjuiciante en su ampliación de demanda, ya que en los actos sujetos a debate únicamente se hace mención de las facultades que el notificador, en auxilio de la autoridad fiscalizadora, puede ejecutar, pero dicho acto no constituye ningún acto ejecutivo de dichas atribuciones, por lo que la invocación del fundamento de cada una de las mismas, no resulta indispensable en los actos en pugna, como inexactamente lo concibe mi opositora.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

25

En tal orden de ideas, se considera procedente que ese H. Tribunal reconozca la validez de las resoluciones impugnadas, de conformidad con los hechos y el derecho expuestos en el presente apartado.

C.2. En segundo término, conviene precisar que la propia accionante reconoce expresamente que mi representada citó —entre otros— el fundamento que le permite expedir constancias de identificación; tal es el caso del artículo 9, fracción VII, en relación con el diverso 10, fracción I, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en la época de los hechos, que disponen a la letra lo siguiente:

Artículo 9. Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

...
VII. Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo, a fin de habilitarlos para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de sus facultades y autorizar la emisión de gafetes de identificación.

Artículo 10. Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas; los Coordinadores, y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I. Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este Reglamento.

(Énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad la facultad de la entonces Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para emitir los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, que contienen las constancias de identificación material de impugnación, siendo suficiente la cita de los preceptos en comento, para tener por satisfecha la debida fundamentación de los actos en pugna.

Abundando en el tema, los artículos del Código Fiscal de la Federación y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria cuya cita exige la actora, no establecen a favor de dicha unidad administrativa ningún tipo de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 137 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

26

competencia para emitir constancias de identificación y por lo tanto, no es viable que prospere el argumento de la actora en relación a la supuesta indebida fundamentación y motivación de las constancias de identificación que nos ocupan.

En ese tenor, es fácil concluir que la cita de los preceptos que reclama la actora resulta intrascendente, toda vez que los mismos no se refieren a facultades o atribuciones de la autoridad fiscalizadora relacionados con la expedición de constancias de identificación.

Abundando en el tema –y como se demostró en párrafos precedentes–, la autoridad fiscalizadora acreditó sus facultades materiales para emitir los oficios que contienen las constancias de identificación de su personal.

Bajo esa óptica, si en la especie la autoridad fiscalizadora, acreditó plenamente su competencia material para emitir los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, dicha circunstancia es suficiente para confirmar que los argumentos que por esta vía se contestan son infundados.

Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente:

Registro No. 188432. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Noviembre de 2001. Página: 31. Tesis: 2a./J. 57/2001. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

27

jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica."

Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimitad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno.

En ese contexto, se ha definido por nuestro más Alto Tribunal, que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios; por lo que si en la especie se ha demostrado que la autoridad demandada acreditó su competencia material para emitir los actos sujetos a controversia en la presente instancia, como se ha explicado a lo largo del presente libelo, es claro que su actuación se sujetó al marco legal aplicable.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

28

Bajo esa óptica, resulta suficiente que en la especie se hayan citado los artículos 9, fracción VII, en relación con el diverso 10, fracción I, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en la época de los hechos en los oficios 900-05-2011-57 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, para considerar satisfecha la competencia de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente para emitir dichos actos, en la inteligencia de que la debida fundamentación también tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en **darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad**, de modo que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación *pro forma* pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, **ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, en virtud de que es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado.**

Apoya a lo anterior, la tesis jurisprudencial L4o.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dispone a la letra lo siguiente:

Registro No. 175082. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Mayo de 2006. Página: 1531. Tesis: L4o.A. J/43. Jurisprudencia. Materia(s): Común

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica



001012

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

29

defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación *pro forma* pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción."

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 10. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 10. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.

Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales.

Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.

Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 10. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.

Por lo consiguiente, ha quedado acreditado que es infundado el argumento de la enjuiciante encaminado a señalar que la autoridad fiscalizadora debió señalar qué artículos del Código Fiscal de la Federación y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria la habilitan para ejercer sus facultades de comprobación y desplegar las actividades encomendadas a los notificadores, puesto que como se ha demostrado a lo largo del presente libelo, tal señalamiento es incorrecto, al acreditarse en los oficios en pugna, que la autoridad enjuiciada sí acreditó su competencia para emitir los mismos, por lo que se estima procedente que esa H. Sala reconozca la legalidad y validez de la resolución impugnada, en términos del artículo 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 139 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

30

conformidad con los hechos y el derecho expuestos en el presente apartado.

Lo anterior, se confirma al considerar que mediante la expedición de los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, la autoridad fiscalizadora **no está ejerciendo ninguna facultad de comprobación** de las que la inviste tanto el Código Fiscal de la Federación como el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en la época, de los hechos, sino que **únicamente está expidiendo constancias de identificación a su personal**.

En ese tenor, es evidente que resulta innecesaria la cita de los artículos que reclama mi contraria, en tanto que los mismos no son aplicables a los actos materia de la presente instancia, por la simple y sencilla razón de que la expedición de los mismos no atiende al ejercicio de facultades de comprobación.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII-TASR-1GO-38, sustentada por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

VII-TASR-1GO-38. R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 435.

"VISITAS DOMICILIARIAS. NO ES NECESARIO FUNDAR LA COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL PARA REALIZARLAS EN LAS CONSTANCIAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES. El requisito de la debida fundamentación se satisface con la cita de los preceptos legales aplicables al acto de que se trate, por lo que tratándose de la fundamentación de la competencia de la autoridad, se deben citar los preceptos legales o reglamentarios en los que se encuentre la facultad de la autoridad para emitirlo. Por tanto, en el caso de las constancias de identificación de los funcionarios adscritos a una dependencia, la autoridad que las emitió sólo debe fundar su competencia para emitir dichas identificaciones y no así la competencia para llevar a cabo visitas domiciliarias, pues es evidente que en dichas constancias no se está ordenando su práctica."

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2537/11-13-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de julio de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Anuar Hernández Hernández.

(Énfasis añadido)

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

31

Además, es menester destacar a esa H. Sala que en la especie no estamos en presencia de armas complejas.

Ciertamente, en primer término se considera viable rememorar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que *"...para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden..."*.

En efecto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005 dispone a la letra lo siguiente:

Época: Novena Época, Registro: 177347, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 115/2005, Página: 310

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

32

haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil cinco.

Una vez precisado lo anterior, se reitera a esa H. Sala que en la especie no estamos frente a normas de naturaleza compleja, puesto que los artículos citados por la autoridad fiscalizadora para sustentar su competencia al emitir los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013 se encuentran perfectamente divididos en párrafos y fracciones, tal como incluso fue citado por mi representada.

Ciertamente, esa H. Sala podrá verificar que la entonces Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente citó específicamente en cada uno de los oficios de identificación que controvierte la impugnante, el artículo 9, fracción VII, en relación con el diverso 10, fracción I, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en la época de los hechos.

En ese sentido, se advierte con meridiana claridad que en las normas que cita mi representada



0012

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

33

en los actos controvertidos en la presente instancia, se encuentran perfectamente identificadas sus fracciones y párrafos, lo que equivale a considerar que los artículos 9, fracción VII, en relación con el diverso 10, fracción I en cita bajo ninguna interpretación pueden considerarse normas complejas.

De conformidad con lo anterior, y toda vez que es evidente que mediante la emisión de los oficios en pugna en la presente instancia, no se dio inicio a ninguna facultad de comprobación de la autoridad fiscalizadora, es patente que la cita de los artículos del Código Fiscal de la Federación y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que sustentan dichas facultades resulta innecesaria en los actos sujetos a debate.

D. La actuación de los notificadores al amparo de las constancias de identificación contenidas en los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013 no implica una delegación de facultades.

En efecto, lo anterior es de ese modo, ya que en primer término, conviene establecer que el titular de la facultad de "Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas"², es el titular de la entonces Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente —en este caso—, a quien por obvias razones, deben atribuírsele las consecuencias que de dicha facultad se deriven.

En ese sentido, la facultad originaria para notificar actos administrativos emitidos por ella misma y/o sus unidades administrativas corresponde a la propia Administración en cita, conforme al primer párrafo del artículo 9³ del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente hasta el 24 de agosto de 2015 —por ser el ordenamiento legal vigente en la época de expedición de los oficios en pugna—, en relación con el diverso 10, primer párrafo, fracción I⁴ del mismo ordenamiento legal.

² Fracción XXXVII del artículo 9 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente hasta el 24 de agosto de 2015.

³ Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

⁴ Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas; los Coordinadores, y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 141 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

34

De conformidad con lo expuesto, es evidente que la participación de los notificadores adscritos a la extinta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente no implica que se estén ejerciendo facultades propias ni que se les haya delegado facultades, pues aquellos —los notificadores— únicamente fungen como auxiliares del titular de la unidad administrativa de que se trate, reiterando que es a éste último a quien únicamente pueden atribuirse los resultados y consecuencias de una diligencia de notificación.

Por lo anterior, es evidente que los argumentos de la incoante resultan inexactos e imprecisos, mismos que no bastan para desvirtuar la legalidad de las resoluciones impugnadas.

Resulta ilustrativo, el criterio VII.1o.A.T.42 A sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época: Novena Época. Registro: 190240. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Febrero de 2001. Materia(s): Administrativa. Tesis: VII.1o.A.T.42 A. Página: 1812

"VISITAS DOMICILIARIAS. LA ACTUACIÓN DEL VISITADOR DESIGNADO PARA SU PRÁCTICA, NO IMPLICA UNA COMPETENCIA DIRECTA, O LA DELEGACIÓN DE FACULTADES PROPIAS QUE CORRESPONDEN AL ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL, SINO UNA FUNCIÓN COMO ÓRGANO AUXILIAR DE ÉSTE. Si bien de lo dispuesto en los artículos 42, fracción III y 43, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, 7º., fracción VII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 41, primero y segundo párrafos, apartado B, fracción IV, y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no se desprenden la existencia y competencia legales del visitador, tampoco pasa inadvertido que la facultad originaria de practicar las visitas domiciliarias, así como las consecuencias de derecho que resulten, recaen directamente sobre la responsabilidad del administrador local de Auditoría Fiscal, quien, además, está autorizado para designar a dicho personal como un órgano auxiliar, con el propósito de que la lleve a cabo, máxime que el referido numeral 41, último párrafo, así lo establece. De lo anterior se concluye, que la actuación de este personal de apoyo en la realización de esa facultad de comprobación de las obligaciones fiscales, no implica una competencia directa, pues el hecho de que el administrador local lo designe, no significa que esté delegando, o confirmando, una

I. Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este Reglamento.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

35

función que le es propia, sino que únicamente actúa como un órgano auxiliar de aquél, por lo que no se actualiza la causal de nulidad contemplada en el numeral 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL
SÉPTIMO CIRCUITO.

Revisión fiscal 73/2000. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras. 5 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Aféjo Luna. Secretaria: Laura Elvira Cárdenas Mateos.

(Énfasis añadido)

Abundando en el terna, es conveniente precisar que la práctica del auxilio de personal necesario para el desempeño de funciones o facultades conferidas a unidades administrativas, es una práctica común y reconocida legal y reglamentariamente en nuestro sistema jurídico, en la medida que la mayoría de los reglamentos interiores y leyes orgánicas de las distintas entidades y dependencias de la administración activa a nivel federal, prevén claramente la posibilidad de que las autoridades, entendidas como aquéllas a las que la ley, el reglamento o un acuerdo delegatorio de facultades les confirió ciertas atribuciones, **puedan auxiliarse para su ejercicio en los distintos servidores públicos que se encuentren bajo su dirección.**

En efecto, **ante la imposibilidad práctica de que los titulares de las facultades (cualquiera que sea el origen de las mismas) estén presentes y desahoguen todos los procedimientos y actos a su cargo, legal y reglamentaria, se ha previsto que sean auxiliados por servidores públicos subalternos en el ejercicio de tal atribución,** pues en la realidad **es la única manera en que puede operar la administración pública,** cuanto más si se toma en consideración que aproximadamente solo el 5% del personal de la administración o menos tiene realmente atribuciones legales, reglamentarias o delegadas propias o directas.

En este contexto, es evidente que la operatividad y la necesidad de atención de los asuntos de la administración pública por las autoridades que tienen las atribuciones para realizar los actos necesarios para tal fin, exigen el auxilio del restante 95% del personal que carece de ellas, sin que esta circunstancia se traduzca en la ilegalidad del acto, pues de aceptarse esta postura se imposibilitaría el actuar de la autoridad.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

36

Es claro que **la actuación de una persona en claro auxilio del titular de las facultades no puede descalificarse por considerarlo incompetente aisladamente**, es decir, sin tomar en cuenta la naturaleza real de la función desempeñada, pues **al ser auxiliar, actuación debe calificarse a la luz de las atribuciones otorgadas a quien suplió**.

Lo anterior, fue considerado por la H. Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso administrativo 5568/02-17-05-7/94/02-S1-04-03, que sirvió de base para la emisión de la tesis V-P-1aS-160, que resulta aplicable el caso en concreto por la identidad del tema tratado, y que dispone a la letra lo siguiente:

V-P-1aS-160. R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 36. Diciembre 2003. p. 402.

"PERITO ADUANAL ES COMPETENTE PARA CLASIFICAR ARANCELARIAMENTE MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA, AL ACTUAR COMO AUXILIAR DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL– En términos de lo dispuesto por los artículos 2º, primero y tercero párrafos, 23, quinto párrafo, 25, fracción II y último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y 144, fracción XIV de la Ley Aduanera, las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, a fin de establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías de comercio exterior, así como para determinar su clasificación arancelaria, tienen la posibilidad de requerir el auxilio necesario de cualquier perito, entre los que encontramos al perito aduanal, de suerte que aun cuando no se prevea expresamente su existencia en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, lo cierto es que sí se establece que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal contarán con el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio, quedando incluidos los referidos peritos, por ser auxiliares de las referidas administraciones, por lo que su actuación al emitir dictamen de clasificación y avalúo de la mercancía resulta legal. (37)"

Juicio No. 5568/02-17-05-7/94/02-S1-04-03.– Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de agosto de 2003, por mayoría de 4 votos a favor y 1 con los puntos resolutivos.– Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.– Secretaria: Lic. Virginia Pétrez Herrera.

(Tesis aprobada en sesión de 19 de agosto de 2003)

En abundancia de lo anterior, para esa H. Sala no debe pasar desapercibido que conforme al razonamiento de la enjuiciante, es decir, de aceptar que a los notificadores se les delegaron



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

37

atribuciones o facultades, se debería considerar a éstos como autoridades, premisas que bajo ninguna correcta interpretación es válida.

En efecto, y en primer término, para obtener una mayor claridad en la presente exposición, conviene establecer lo que debe entenderse por autoridad para el derecho administrativo, y con tal objeto, a continuación se procede a transcribir la definición que en este sentido se contiene en el Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo A-CH, Editorial Porrúa, páginas 287 y 288:

"Autoridad, para el derecho administrativo, es la persona física, trabajador del Estado, dotada por la Ley de poder público. De ordinario es quien representa al órgano administrativo, pero puede no serlo y estar investido de ese poder. Gabino Fraga afirma que: 'cuando la competencia otorgada a un órgano implica la facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones, es decir, cuando el referido órgano está investido de facultades de decisión y de ejecución, se está frente a un órgano de autoridad' (p.490). Manuel María Díez considera que, autoridades son los funcionarios públicos 'que tienen la potestad de mandar, decidir y hacer cumplir órdenes' (p.345).

En rigor los funcionarios públicos siempre están dotados de autoridad, es decir, están provistos de poder público, de poder de decisión y ejecución. Pueden, si la ley los autoriza, trasladar parte de esa autoridad a otros funcionarios y empleados públicos a través de un acto de delegación de facultades, en forma temporal o indefinida."

De las definiciones anteriores, se tiene que el término autoridad administrativa implica: i. que a una persona física, la ley la dote de poder público; y, ii. que esa persona tenga la facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y **que pueda imponer a éstos sus determinaciones**.

Ahora bien, el notificador no puede ser considerado como autoridad auxiliar de la autoridad fiscalizadora o como autoridad fiscalizadora, por la básica consideración de que **no tiene la facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones**, tal y como se señala en la definición que da el Maestro Gabino Fraga, puesto que su actividad sólo implica la comunicación de un acto de decisión, pero carece de la facultad de imponer a los particulares sus determinaciones, toda vez que sólo se ocupa de practicar diligencias de notificación, dando a conocer a los particulares actos administrativos, conforme a lo dispuesto por los artículos 134, 135, 136 y 137, todos del Código Fiscal de la Federación, cuya actividad siempre debe



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 143 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

38

ser avalada por el superior jerárquico que ostente la representación de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito.

De lo anterior, se sigue que el notificador no puede tener el carácter de autoridad; dado que no tiene la facultad de expresar la voluntad de la Administración y de imponerle a los particulares sus determinaciones, porque el acto que afecta en definitiva la esfera jurídica del particular, es el que emite el titular de la Administración a la que se encuentra adscrita, con base en las facultades de decisión y ejecución de que lo inviste la Ley de la materia, lo que da lugar a que **al notificador no se le pueda considerar como una autoridad, sino como un funcionario.**

En consecuencia, **el notificador no es una autoridad auxiliar o una autoridad fiscalizadora, sino que solamente es un auxiliar de la autoridad fiscalizadora habilitado para practicar diligencias de notificación**, tal y como se desprende del tercer párrafo del artículo 2 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente hasta el 24 de agosto de 2015⁵.

De la disposición legal transcrita, se obtiene que el notificador no tiene el carácter de autoridad fiscal o de autoridad auxiliar de las autoridades fiscales, sino que es sólo un auxiliar de la autoridad fiscal habilitado para practicar diligencias de notificación, porque la disposición normativa en comentario sólo le confiere el carácter de funcionario o empleado público auxiliar de las autoridades fiscales, ya que siendo —en este caso— el entonces Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente el superior jerárquico del notificador, es precisamente a aquél al que le corresponde el carácter de autoridad fiscal.

Lo anterior, sobre todo si se considera que de acuerdo con la definición de "autoridad que para el derecho administrativo" da el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el término autoridad presupone que una determinada persona física esté dotada de poder público con facultades de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera jurídica de los particulares y que pueda imponer a éstos sus determinaciones, requisitos los anteriores de los que carece el notificador, porque sus actos siempre deberán de ser avalados

⁵ Las Administraciones Generales estarán integradas por sus titulares y por Administradores Centrales, Coordinadores, Administradores, Subadministradores, Jefes de Departamento, Enlaces, Supervisores, Auditores, Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados Tributarios, Ejecutores, Notificadores, Verificadores, Oficiales de Comercio Exterior, personal al servicio de la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera y por los demás servidores públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT 001507
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

39

por su superior jerárquico, de ahí que ante lo expuesto, debe concluirse que el notificador no tiene el carácter de autoridad y, por ende, deberá de considerarse como un auxiliar de la autoridad fiscalizadora con facultades para practicar facultades de comprobación fiscal.

Sirve de apoyo a lo expuesto, por identidad del tema tratado, la tesis V-P-SS-117, sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

V-P-SS-117. R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 12. Diciembre 2001. p. 7.

"VISTAS ADUANALES.- SON AUXILIARES DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS, CON FACULTADES PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE MERCANCÍAS EN ADUANAS.- De una armónica interpretación de los artículos 3 y 29 de la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de marzo de 1996, así como 96 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente hasta el 13 de junio de 1996, y 114, apartado C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se desprende que a los vistas aduanales no se les concede el carácter de autoridades, sino sólo de auxiliares de las autoridades aduaneras, y tienen facultades expresas para practicar el reconocimiento aduanero, examinando las mercancías de comercio exterior al momento en que se lleva a cabo su reconocimiento, lo que implica el examen de la documentación respectiva y la rectificación de errores en los pedimentos de mercancías, actividades que forman parte del procedimiento de revisión de tales mercancías. (1)"

Contradicción de Sentencias No. 100(05)3/97/(A)-II-49/96, 100(A)-II-142/96/783/95 Y ACUMS. 100(A)-II-49/96/544/95, 100(A)-I-62/96/904/96, 100(A)-I-63/96/877/95, 100(A)-I-142/96/871/95.-Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 13 de enero de 1999, por mayoría de 7 votos a favor y 3 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Gustavo Villegas Parra.

(Tesis aprobada en sesión privada de 13 de enero de 1999)

En ese sentido, se confirma aun más lo infundado de los argumentos de la actora, si consideramos que para que exista una delegación de facultades, deben concurrir por lo menos, las siguientes circunstancias:

- ✓ **Existencia de dos órganos.** lo cual en la especie no se actualiza, en virtud de que si bien es cierto que la entonces Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente constituye un órgano del Servicio de Administración Tributaria,



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

40

los notificadores a los que la enjuiciante aduce que se les delegaron facultades, no constituyen ningún órgano del organismo desconcentrado en cita.

Ciertamente, el tercer párrafo del artículo 2 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en la época de los hechos, dispone expresamente que los notificadores son parte integrante de la Administración General a la que pertenecen, lo que no les permite tener el carácter de órgano:

- ✓ **Titularidad por parte de uno de los órganos, de dos facultades** (una que será transferida y otra la de delegar), circunstancia que en la especie tampoco se actualiza, ya que la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente no cuenta con la atribución de delegar sus facultades, tal como se desprende del artículo 20, apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en la época de los hechos.

En ese sentido, si no existe la posibilidad de que mi representada delegue sus facultades, se refuerza lo infundado de los argumentos que contengo, pues no existe posibilidad jurídica de que la autoridad fiscalizadora transmita sus facultades en los términos que aprecia mi opositora.

- ✓ **Aptitud del órgano destinatario para recibir una competencia por la vía de la delegación**, que tampoco se configura en el asunto en estudio, pues en primer término, ya hemos visto que los notificadores son auxiliares del titular de determinada unidad administrativa, no órganos del Servicio de Administración Tributaria y por ello, es evidente que no cuentan con atribuciones para recibir facultades vía delegación de las mismas.

En tal orden de ideas, es patente que al no ser el receptor de las facultades delegadas apto para tales efectos, no existe en la especie la actualización de dicha figura jurídica.

De conformidad con lo anterior, la circunstancia puesta a consideración de esa H. Sala no se actualiza en la especie, pues no se cumple ninguno de los requisitos básicos para estimar que estamos frente a una delegación de facultades con la emisión de los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013, como inexactamente lo aprecia la incoante.



001308

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 09 05-2016-2132
J.N. 12140/15-17-11-5.

41

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI. 2o J/146, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, misma que dispone a la letra lo siguiente:

Época: Octava Época, Registro: 221867, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Septiembre de 1991, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI. 2o J/146, Página: 69

"DELEGACION DE FACULTADES. Nuestro régimen jurídico ha consagrado la delegación de facultades como una técnica de transferencia de una competencia propia de un órgano superior de la administración pública en favor de un órgano inferior, y que persigue como propósito facilitar los fines de aquél y cuya justificación y alcance se hallan en la ley orgánica, puesto que para el perfeccionamiento del acto delegatorio se requiere la reunión de varios requisitos de índole legal, entre otros, la existencia de dos órganos, el delegante y el delegado, la titularidad por parte del primero de dos facultades, una la que será transferida y otra la de delegar y la aptitud del segundo para recibir una competencia por la vía de la delegación."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 199/88. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 30 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Revisión fiscal 19/90. Poly Cajica, S. A. 16 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Revisión fiscal 9/91. Carmen Patricia Núñez Bretón. 23 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Revisión fiscal 10/91. Industrial Textil Majestic, S. A. 3 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Revisión fiscal 18/91. Joel Méndez Ballesteros. 2 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 45, septiembre de 1991, página 47.

Al amparo de lo anterior y al haberse demostrado que mediante la emisión de los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013 no tuvo verificativo delegación alguna de facultades, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas, en términos de la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad con los hechos y el derecho expuestos en el presente apartado.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 145 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
I.N. 12140/15-17-11-5.

42

E. Resulta inoperante que manifieste la actora que al resultar ilegales las constancias de identificación contenidas en los oficios de referencia, resulta evidente que las resoluciones impugnadas también lo son.

Ciertamente, lo anterior es así, ya que en oposición a las pretensiones de la actora, esta última no ha acreditado ilegalidad alguna relacionada con los oficios 900-05-2011-50 de 11 de febrero de 2011; 900-05-2012-7682 de 1º de febrero de 2012; 900-05-2012-58264 de 20 de septiembre de 2012; y 900-05-2013-25078 de 21 de mayo de 2013.

En efecto, resulta ineficaz lo aducido por la actora, tal como se desprende de los razonamientos precisados en los párrafos que anteceden.

Por ello, los argumentos esgrimidos por la actora parten de premisas falsas y por ende, es evidente que resultan además, inoperantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época: Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326.

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida."

Amparo directo en revisión 63/2012. Calsonickansei Mexicana, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón.

Amparo directo en revisión 2981/2011. Arrendadora y Comercializadora de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Ursula Hernández Maquivar.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 09 05-2016-2132
I.N. 12140/15-17-11-5.

43

Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de Equipos de Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón.

Amparo directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé Sarquis Ávalos. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.

Amparo directo en revisión 2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.

Tesis de jurisprudencia 108/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil doce.

A tales condiciones, ésta defensa estima procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones cuya legalidad se cuestiona en el expediente en que se actúa, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad con los hechos y el derecho expuestos en el presente apartado.

De lo anterior se advierte que **la parte actora** esencialmente sostuvo lo siguiente:

APARTADO A.

a.1. Sostiene la ilegalidad de la resolución impugnada, así como de la originalmente recurrida, en virtud de que son fruto de un procedimiento de fiscalización viciado de origen, ya que a su consideración, el oficio **900-05-2011-385** de **21 de junio de 2011**, el oficio **900 05-03-2012-54438** de **13 de septiembre de 2012**, el oficio **900-05-03-2012-69836** de **17 de diciembre de 2012**, y la resolución recurrida contenida en el oficio **900-05-2013-48229** de **25 de julio de 2013**, no le fueron notificados personalmente de acuerdo a las formalidades previstas en los artículos 48, 134, fracción I, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación.

a.2 Por lo tanto, controvierte la legalidad del citatorio y acta de notificación, de fecha **27 y 28 de junio de 2011**, respectivamente, relativos al oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011; del citatorio y acta de notificación de fechas **13 y 14 de septiembre de 2012**, respectivamente, relativos al oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012; del citatorio y acta de notificación de fechas **17 y 18 de diciembre de 2012**, respectivamente, relativos al oficio número 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012; así como del citatorio y acta de notificación de fechas **25 y 26 de julio de 2013**, respectivamente, relativos al oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013.

a.3 Además, señala que si bien es cierto, tanto en los citatorios como en las actas de referencia los notificadores asentaron que se apersonaron en el domicilio ubicado en: “*** ***** ** *** ***** *****”

*** ***** ***** *** ***** ***** ***** ***** ***** también lo es, que no precisaron la forma en la cual se cercioraron que dicho domicilio correspondía al señalado en el oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, en el oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, en el oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012 y en el oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013; por lo que, resultan ilegales tanto los citatorios como las actas de notificación en cuestión.

a.4 En relación a ello, manifiesta que el cercioramiento de los notificadores debe realizarse justo al momento de realizar las diligencias, haciendo constar las características físicas del inmueble en el que debe de practicarse la diligencia, las circunstancias especiales de la misma, la manera en la que se cercioraron que el domicilio era el correcto conforme a los elementos físicos o materiales por los que llegaron a esa convicción.

a.5 Asimismo, manifiesta que resultan ilegales los citatorios de referencia, toda vez que al contener la leyenda "...y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar..." los notificadores previamente dieron por hecho que efectivamente encontrarían el domicilio en el que debían realizar la diligencia y se cerciorarían de que fuese el correcto, por lo tanto, dichas cuestiones pueden ser del conocimiento de los notificadores al momento de practicar la diligencia y no antes, por lo que a su consideración se vulneró su garantía de seguridad jurídica.

a.6 También, argumenta que los citatorios y actas de notificación de los oficios de referencia, resultan ilegales, toda vez que los notificadores omitieron señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, conforme a las cuales concluyeron que el representante legal de la actora no se encontraba en el domicilio.

a.7 Que en los citatorios y las actas de notificación de referencia, los notificadores no circunstanciaron a qué persona se requirió la presencia del representante legal, o bien, qué persona indicó al notificador que el representante legal no se encontraba.

a.8 Que los notificadores para cerciorarse de la presencia del representante legal y que se encontraba en el domicilio correcto en el citatorio y acta de notificación de referencia, debieron asentar: cómo fue que requirió la presencia del representante legal, la calidad del tercero que atendió la diligencia y la manera en que comprobó su relación con la empresa actora.

a.9 Asimismo, manifiesta que en relación a los citatorios y a las actas de referencia, el hecho de que se haya señalado que fueron

entendidos con la C. ***** ***** **** ***** en su carácter de tercero, no se desprende que los notificadores hayan asentado que a esa misma persona fue a quien se le solicitó informara la presencia del representante legal.

a.10 Del mismo modo, aduce que si bien el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación permite que el citatorio se deje con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, los notificadores se encontraban obligados a circunstanciar el vínculo que guardaba dicha persona y la contribuyente.

a.11 Por otra parte, argumenta que los citatorios referidos fueron emitidos para el efecto de que se esperaran a los notificadores el día siguiente, y no para que la persona citada acudiera a notificarse dentro del plazo de 6 días a las oficina de la autoridad fiscalizadora, señalando que, si bien el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación establece una facultad discrecional de la autoridad para llevar a cabo una u otra, en el citatorio en comento debió motivar por qué resultaba conveniente citar al día siguiente a una hora determinada y no citarlo para que acudiera a notificarse dentro del referido plazo de 6 días.

a.12 Aunado a ello, aduce que en los citatorios en cuestión, los notificadores omitieron señalar expresamente la hora en que los mismos fueron entregados al tercero con quien se entendió la diligencia, ello de conformidad con la jurisprudencia número 2a./J. 75/98, por lo tanto, señala que se desconoce si los notificadores al momento en que entregaron los citatorios estaban dentro del horario que expresamente señala el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación.

a.13 También, señala que en los citatorios y en las actas de notificaciones referidas, no se circunstanció que los notificadores se hubieran identificado plenamente ante la persona con la que llevaron a cabo dichas diligencias.

a.14 Lo anterior, ya que los notificadores se identificaron con constancias supuestamente emitidas por el Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, pero en ningún momento señalaron el cargo con el que actuaban los notificadores ante la persona con quien entendieron las diligencias.

a.15 Asimismo, asevera que los notificadores no asentaron lo siguiente: haberse identificado como funcionario, los elementos de identificación del documento con el que se identificaron, que el documento de identificación haya sido mostrada a la persona con la que se practicaron las diligencias, que ésta persona al momento de tenerla en sus manos se percató que efectivamente eran los datos correspondientes y los rasgos fisionómicos del notificador correspondieran plenamente con los asentados en el documento identificativo.

a.16 Del mismo modo, señala que desconoce si los notificadores eran funcionarios de alguna Administración perteneciente al Servicio de Administración Tributaria y de ser así, a cuál, aunado a que también desconoce si dicha cuestión la hicieron del conocimiento a la persona con quien entendieron las diligencias.

a.17 Además, aduce que para efecto de que se entienda debidamente identificados los notificadores, debieron asentarse de manera circunstanciada en los citatorios y actas de referencia, lo siguiente: el número de identificación o credencial con la que se identificaron; el nombre del funcionario de quien la expidió, citando los fundamentos legales con los que realizó dicha expedición; su vigencia, la circunstanciación de que la misma le fue mostrada a la persona con la que entendieron las diligencias; la circunstanciación de que la persona tuvo en sus manos la identificación y que tuvo oportunidad de constatar que los rasgos fisionómicos de los notificadores coincidían plenamente con los de la fotografía que se encontraba inserta en la identificación; y el oficio de asignación de cargo o de nombramiento, así como el número de folio del mismo.

a.18 También, niega que los notificadores sean funcionarios de la Administración General de Grandes Contribuyentes y que haya sido expedido documento alguno en el que conste cargo que les autorice llevar a cabo actos de notificación.

a.19 Asimismo, asevera que los notificadores omitieron señalar el nombre del funcionario que expidió la constancia de identificación y

los preceptos legales conforme a los cuales dicho funcionario se encontraba facultado para expedir constancia de notificación.

a.20 Del mismo modo, argumenta que resultan ilegales los citatorios y las actas de notificación de referencia, toda vez que las constancias de identificación de los notificadores que llevaron las diligencias, no estaban debidamente fundadas y motivadas respecto a la competencia material y territorial, pues no se citó en ellas el artículo 10, fracción IV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que faculta a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, para nombrar, remover o comisionar a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores a su cargo, por lo tanto, las constancias de identificación de dichos notificadores.

a.21 Por otra parte, en el escrito de ampliación a la demanda, la actora controvierte la legalidad de las constancias de identificación contenidas en los oficios números: 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078, de los diligenciarios que notificaron los oficios de 21 de junio de 2011, 13 de septiembre y 17 de diciembre ambos de 2012 y 25 de julio de 2013, mismas constancias que fueron exhibidas por la autoridad en su contestación a la demanda, señalando que las mismas no señalan los fundamentos legales que contienen las facultades que se delegaron a los funcionarios públicos correspondientes.

a.22 Asimismo, señala que para que los notificadores pudieran actuar en el ámbito de sus competencias, debieron señalar en las constancias de identificación de referencia, los preceptos legales en que se contuvieran las facultades que le están siendo delegadas, como lo son la práctica de visitas e inspecciones.

a.23 Del mismo modo, argumenta que los oficios de constancias de identificación únicamente contienen motivación, pero no citan los artículos 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e), tercer párrafo y 9, fracción VII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, donde habilita a los notificadores para realizar los actos relacionados con el ejercicio de sus facultades.

APARTADO B.

b.1 Que resulta ilegal el **oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011**, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, en virtud de que la autoridad no fundó y motivó debidamente su competencia material y territorial.

b.2 Ello, toda vez que la autoridad omitió citar los artículos 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los cuales contemplan su competencia material para despachar, realizar y ejercer facultades que les corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que, se le dejó en estado de indefensión, al no tener la certeza de que la autoridad actuó dentro de los límites y con las atribuciones conferidas por la ley.

b.3 Del mismo modo, señala que resulta ilegal el oficio de referencia, ya que las autoridades citaron el artículo 20, primer párrafo, apartado A, fracciones IX y X y Apartado B, fracción II, quinto párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, omitieron especificar qué fracción, párrafo o inciso de dicho precepto es en el que fundó su competencia material.

b.4 Asimismo, aduce que en relación al oficio referido, la autoridad citó el artículo 20, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, dicho precepto no es una norma compleja, por lo tanto no era necesario mencionar o transcribir la parte aplicable.

b.5 Aunado a lo anterior, argumenta que resulta ilegal el oficio en cuestión, en virtud de que las autoridades al momento de fundar su competencia en el artículo 20, numeral 5 del citado Reglamento, omitió precisar los párrafos, fracciones o incisos que resultaban aplicables al caso concreto, pues citó el numeral 5 de manera genérica.

b.6 Sostiene la ilegalidad de la resolución recurrida contenida en el oficio número **900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013**, toda vez que la autoridad no fundó debidamente su competencia material, ya que omitió citar el primer párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la cita es de manera general.

APARTADO C.

c.1 Por otra parte, señala que resulta ilegal el **oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011**, así como el **oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012**, por medio de los cuales se dio inicio a las facultades de comprobación y se solicitó diversa documentación e información relacionada con la determinación de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidados, respectivamente, toda vez que la autoridad omitió informar a la contribuyente en la solicitud de datos y documentos, el derecho que tenía para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho, en contravención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

c.2 Del mismo modo, argumenta que resulta ilegal el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, así como el oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, toda vez que la autoridad no señaló el periodo o ejercicio fiscal a revisar de las contribuciones sujetas a revisión.

c.3 Además, manifiesta que resulta ilegal el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 y el oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, en virtud de que fueron dirigidos a ***** y no a su representante legal, por lo que al haber sido citada la persona moral, jamás tuvo la oportunidad de presentar debidamente la información solicitada.

c.4 También, asevera que resultan ilegales los oficios número 900-05-2011-385 y 900 05-03-2012-54438, toda vez que no establecieron plazo para concluir la revisión de gabinete, por lo que se contravino lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con los numerales 14 y 16 Constitucionales.

c.5 Lo anterior, máxime que el artículo 12 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que al inicio de las facultades de comprobación, la contribuyente tiene el derecho a ser informada de sus derechos y obligaciones.

c.6 Además, manifiesta que al tener derecho de ser informada respecto a cuál era el plazo que tenía la autoridad para concluir la revisión de gabinete, en su caso, la demandada debió citar en el oficio 900-05-2011-385, así como en oficio número 900 05-03-2012-54438, el artículo 46-A y su párrafo aplicable del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que tuviera la seguridad de que la revisión no sería indefinida.

c.7 Sostiene la ilegalidad de la resolución impugnada, así como de la originalmente recurrida, en virtud de que son fruto de un procedimiento de fiscalización viciado en origen, ya que a su consideración, el oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la autoridad únicamente citó la fracción IV del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, omitiendo citar la fracción I de dicho numeral, misma que faculta a la autoridad para notificar el oficio de observaciones

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo la legalidad y validez tanto de la resolución impugnada, como de la originalmente recurrida.

A juicio de esta Primera Sección de la Sala Superior, de este Tribunal, resultan **infundados** los argumentos de la parte actora, por las consideraciones que se exponen a continuación:

APARTADO A. Por principio, esta Juzgadora procede a realizar el análisis de los argumentos planteados por la parte actora, encaminadas a controvertir la legalidad del citatorio y acta de notificación, de fechas **27 y 28 de junio de 2011**, respectivamente, relativos al oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011; del citatorio y acta de notificación, de fechas **13 y 14 de septiembre de 2012**, respectivamente, relativos al oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012; del citatorio y acta de

notificación, de fechas **17 y 18 de diciembre de 2012**, respectivamente, relativos al oficio número 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012; así como del citatorio y acta de notificación de fechas **25 y 26 de julio de 2013**, relativos al oficio número 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013.

Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera pertinente conocer los antecedentes que dieron origen a la resolución impugnada, mismos que derivan de las pruebas exhibidas en copia certificada por las autoridades demandadas en el expediente administrativo, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de las que se desprende lo siguiente:

1.- Mediante oficio número 900 05-2010-2149 de fecha 1° de julio de 2010, la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, citó al C.P. *****
***** ***** para que se presentara él o su representante legal ante dicha autoridad, a fin de llevar a cabo la revisión de los papeles de trabajo que formuló respecto del dictamen que para efectos fiscales, emitió sobre los estados financieros de la contribuyente ***** (ahora *****
***** *****), por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

2.- A través de oficio número 900-05-01-2011-10323 de fecha 3 de mayo de 2011, la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1" adscrita a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, dirigido al C.P. ***** se solicitó diversa información y documentación, entre otros, la relacionada con la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta consolidado del ejercicio en revisión.

3.- Mediante escrito de fecha 2 de junio de 2011, el representante legal del C.P. ***** dio contestación al oficio número 900-05-01-2011-10323 de fecha 2 de mayo de 2011.

4.- Mediante oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 155 -

Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, solicitó directamente a la contribuyente ***** (ahora *****), la información y documentación que a su consideración no fue proporcionada en su totalidad por el C.P. *****

5.- El oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, fue notificado a la parte actora el 28 de junio de 2011, previo citatorio de 27 de junio de 2011, por lo que, con la notificación de dicho oficio se dio inicio al ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la autoridad demandada, para el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

6.- Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2011, el representante legal de la parte actora, solicitó ampliación del plazo para presentar la información y documentación requerida a través del oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011.

7.- En atención a la solicitud de prórroga mencionada en el punto anterior, mediante oficio número 900 05-03-2011-13614 de 25 de julio de 2011, la Administración de Fiscalización de Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, comunicó a la parte actora que se le concedía prórroga por 10 días más, para dar cumplimiento a la solicitud de información y documentación requerida.

8.- Mediante oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, notificado a la parte actora el día 14 de septiembre de 2012, previo citatorio de día 13 del mismo mes y año, la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, solicitó a la accionante diversa información y documentación complementaria, entre otros, la relacionada con la determinación de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta consolidados.

9.- A través de escrito de 8 de octubre de 2012, el representante legal de la actora dio respuesta al oficio precisado en el punto anterior.

10.- Mediante oficio de observaciones número 900-05-03-2012-69836 de fecha 17 de diciembre de 2012, notificado a la actora el 18 de diciembre de 2012, previo citatorio del día 17 del mismo mes y año, la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer a la hoy demandante los hechos u omisiones conocidos, que a su consideración entrañaron el incumplimiento de las disposiciones fiscales, en relación a la revisión practicada a los estados financieros, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

11.- Por escrito presentado ante la autoridad demandada el día 31 de enero de 2013, el representante legal de la parte actora, dio contestación al oficio de observaciones precisado en el punto anterior, realizando manifestaciones encaminadas a controvertir los hechos y omisiones asentados en él y ofreciendo diversas pruebas.

12.- El día 6 de junio de 2013, la parte actora presentó ante la autoridad demandada escrito en alcance al señalado en el punto anterior, exhibiendo diversas probanzas.

13.- Mediante oficio número 900 05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013, la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, determinó un crédito fiscal a la parte actora, en cantidad total de \$2,636'428,880.12, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, actualización, recargos y multas por el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

14.- Inconforme con lo anterior, el día 1° de octubre de 2013, la actora interpuso recurso de revocación en contra de la resolución precisada en el punto anterior.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 157 -

15.- Mediante resolución contenida en el oficio número 900 04 05-2015-17797 de 19 de febrero de 2015, la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5" del Servicio de Administración Tributaria, resolvió el recurso de revocación y confirmó la diversa contenida en el oficio número 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013.

Una vez precisado lo anterior, y en virtud de que el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 fue notificado **personalmente** a la actora, mediante citatorio y acta de notificación de 27 y 28 de junio de 2011, respectivamente, (fojas 872 y 873 del expediente administrativo), así como el oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, mediante citatorio y acta de notificación de 13 y 14 de septiembre de 2012, respectivamente, (fojas 36 y 37 del expediente administrativo) y el oficio número 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, mediante citatorio y acta de notificación de 17 y 18 de diciembre de 2012, respectivamente, (fojas 1540 a 1542 del expediente administrativo), ya que la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5" del Servicio de Administración Tributaria, exhibió dichas documentales al momento de contestar la demanda en el presente juicio mediante oficio número 900 04 05-2015-58541 de fecha 14 de octubre de 2015.

Por lo que, de los argumentos vertidos por las partes se desprende que la *litis* del presente Apartado del Considerando de referencia, se constriñe en determinar si los oficios: 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012 y 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, fueron notificados personalmente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 134, fracción I, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto, es importante precisar lo siguiente:

- Mediante oficio número **900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011**, el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente del Servicio de Administración Tributaria, inició las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, primer párrafo,

fracción II y 52-A, primer párrafo, fracción II del Código Tributario vigente en 2011, por lo que solicitó a la actora que proporcionara diversa documentación e información, en términos del **artículo 48 del Código Fiscal de la Federación**, entre otros; tal y como se observa a continuación:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

ENTREGA PERSONAL

900-05-2011-385

GSD9400235/11

Prueba lectura e identificación
del notificador, RECI BI ORIGINAL
DEL PRESENTE OFICIO, ASÍ COMO
UN EJEMPLAR DE LA CARTA DE
LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
AUDITADO VIGENTE EN MI CARPETA
DE TRABAJO

1071

0853



ASUNTO: Se solicitan los informes, datos y documentos que se indican.

México, D.F., 21 de junio de 2011.

"2011, Año del Turismo en México".

[REDACTED]

Esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir la presente en virtud de que la contribuyente es una sociedad controladora que cuenta con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, según oficio número 361-I-B-3-5334 de fecha 15 de abril de 1985, en términos de lo dispuesto por el artículo 57-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada el 30 de diciembre de 1980, en vigor a partir del 1 de enero de 1981, vigente en 1985 y en relación con los artículos 64 y Segundo Transitorio, fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, publicada el 1 de enero de 2002, vigente a partir del mismo día de su publicación, efectuó la revisión del dictamen fiscal que le fue formulado por el Contador Público [REDACTED] con número de registro [REDACTED] respecto a sus Estados Financieros por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, en términos de lo dispuesto por los artículos 42, primer párrafo, fracción IV y 52-A, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación, mediante oficio citatorio número 900-05-2010-2149 de fecha 1 de julio de 2010 y del oficio de solicitud de información y documentación al citado profesionista con número 900-05-01-2011-10323 de fecha 3 de mayo de 2011 y con relación a las contribuciones federales de las que es sujeto directo, en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Activo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, primer párrafo, fracciones VII, XII y XVIII, 8, primer párrafo, fracción III y Tercero Transitorio, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracciones IX y X, y

Página 1 de 19

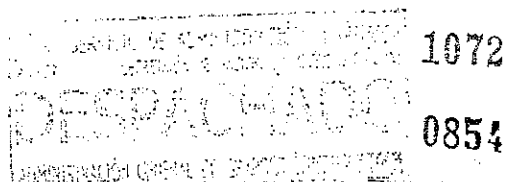
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 159 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



900-05-2011-385

GSD9400235/11

Apartado B, fracción II; quinto párrafo en la parte que establece: "La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan" y sexto párrafo, numeral 5, correspondiente al "Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente", y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, cuya vigencia inició el 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del mismo Decreto, modificado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010, entrando en vigor a partir del 30 de abril de 2010, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio; así como en los artículos 33, último párrafo, 38, 42, primer párrafo, fracción II, antepenúltimo, penúltimo y último párrafos, 48, primer párrafo, fracciones I, II, III y último párrafo, y 52-A, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, habiéndose requerido al Contador Público que formuló el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción I del artículo 52-A del referido Código, después de haberlos recibido, ésta no es suficiente para observar la situación fiscal del contribuyente en virtud de que el Contador Público proporcionó incompleta la información y documentación, como se reseña a continuación:

Mediante oficio 900 05-2010-2149 del 1 de julio de 2010, notificado legalmente previo citatorio, el 7 de julio de 2010, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero con cargo de "Recepcionista del Despacho [REDACTED] sin haberlo acreditando, se citó a revisión de papeles de trabajo al C.P.C. [REDACTED] misma que se llevó a cabo el 16 de julio de 2010, derivado de dicha revisión, fue necesario requerir información adicional, mediante oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, notificado legalmente previo citatorio al Contador Público dictaminador, el día 11 de mayo de 2011, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero con cargo de "Empleada", sin haberlo acreditando, mediante el cual se le solicitó lo siguiente:

"1.- ...

2.- Cédula de trabajo con la determinación analítica del Impuesto al Activo individual y Consolidado tanto de pagos provisionales como del ejercicio sujeto a revisión, así como fotocopia legible de la(s) declaración(nes) anual(es) que sirvieron de base para la determinación de los pagos provisionales.

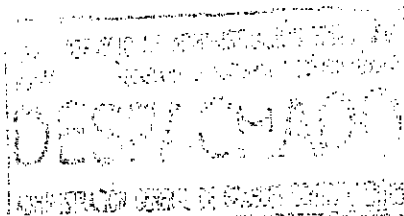
3.- Cédula de trabajo con la determinación del "ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPAC", que en cantidad de \$8'520,429, aparece en la declaración complementaria del impuesto al activo consolidado del ejercicio en revisión, presentada por la contribuyente el día 13 de agosto de 2010, adjuntando la documentación comprobatoria que justifique su dicho.

0254

Página 2 de 19



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1073

0855



900-05-2011-385

GSD9400235/11

4.- Papel de trabajo que sirvió para el cálculo y determinación de los pagos individuales y consolidados del impuesto sobre la renta, de enero de 2006 a diciembre de 2006, que coincidan con el importe manifestado por la contribuyente en la última declaración del ejercicio presentada, incluyendo el o los coeficientes de utilidad utilizados y fotocopia de las declaraciones del impuesto sobre la renta que sirvieron de base para su obtención.

Asimismo, indique si en la determinación de los pagos provisionales consolidados del impuesto sobre la renta del ejercicio en revisión, la contribuyente [REDACTED] consideró el inventario acumulable de su sociedad controlada [REDACTED]

[REDACTED] en su caso, señale la razón y/o fundamento legal en que se basó [REDACTED] para no haberlo considerado, proporcionando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.

5.- Fotocopia legible de las declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidados del ejercicio en revisión, de los meses de febrero de 2007 a septiembre de 2007, presentados todos vía internet el 9 de julio de 2007.

8.- Cédula de trabajo que contenga la integración de la "PERDIDA CAMBIARIA", así como de "LOS INTERESES A CARGO", que en cantidades de \$1,353'017,516 y \$715'277,751, aparecen en los índices 073010 y 072100, respectivamente, del anexo "7.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO" del dictamen fiscal, adjuntando fotocopias de los 10 comprobantes de mayor cuantía, de cada uno de los conceptos.

9.- Cédula de trabajo que contenga la integración del resultado fiscal consolidado, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, así como del impuesto sobre la renta a cargo o a favor, considerando para efectos de dicha determinación las utilidades o pérdidas fiscales manifestadas en las declaraciones anuales normales y/o complementarias en su caso, presentadas a la fecha, por cada una de las sociedades controladas de [REDACTED] que contenga entre otros datos lo siguiente:

- Nombre de la sociedad controlada y/o controladora.
- Utilidad o pérdida fiscal individual.
- Porcentaje de participación accionaria.
- Utilidad o pérdida fiscal en la participación consolidable por cada controlada y por la propia controladora.
- En su caso, conceptos especiales de consolidación que se sumen o que resten.

0255



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

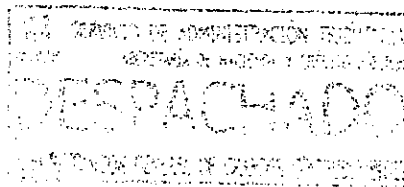
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 161 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1074

0856



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

900-05-2011-385

GSD9400235/11

- f) Conceptos y montos correspondientes a los efectos por desincorporaciones de controladas o **desconsolidación**, que se sumen o se resten, correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, cuyos efectos debe reconocer [REDACTED] en el ejercicio fiscal de 2006.
- g) Conceptos y montos correspondientes a los efectos por variaciones en los porcentajes de participación consolidable, que se sumen o resten, de las sociedades controladas, en su caso.
- h) Pérdidas fiscales por las cuales se perdió el derecho a disminuirlas a nivel individual que se reversan en la consolidación fiscal, en su caso.
- i) Utilidad o pérdida fiscal consolidada.
- j) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores consolidadas que se disminuyen.
- k) Resultado fiscal consolidado.
- l) Impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio.
- m) Acreditamiento de pagos provisionales correspondientes a las sociedades controladas y la propia controladora.
- n) Pagos provisionales consolidados.
- ñ) Impuesto sobre la renta retenido a la sociedad controladora, acreditable contra el impuesto anual.
- o) Otros acreditamientos: especificando concepto y monto e identificando a la sociedad controlada que corresponda, así como el porcentaje de participación consolidable. En su caso especificar si se trata de un importe correspondiente a la consolidación fiscal.
- p) Saldo a cargo o a favor.

11.- Cédula de trabajo que contenga la integración de las "OPERACIONES FINANCIERAS", que en cantidad de \$198'488,138, aparece incluido en el índice 123053 del anexo "12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", del dictamen fiscal, adjuntando fotocopia de la documentación comprobatoria de los 5 comprobantes de mayor cuantía, (facturas, estados de cuenta bancarios, contratos, su determinación analítica, etc.)

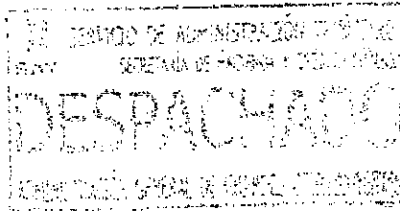
12.- Indique razón y fundamento legal, en su caso, de la diferencia en cantidad de \$1'559,028,827, que resulta de comparar el resultado fiscal de la sociedad controlada [REDACTED] manifestado en el índice 280017, columna "UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL INDIVIDUAL", del anexo "28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORME EN CONSOLIDACIÓN", del dictamen fiscal de [REDACTED] en cantidad de \$1,808,197,492, y el importe por \$3,367,226,319, registrado en el índice 120170 "Resultado Fiscal" del anexo "12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", del dictamen fiscal correspondiente a la sociedad controlada [REDACTED] adjuntando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.

0256

Página 4 de 19



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1075

0857



900-05-2011-385

GSD9400235/11

13.- En relación a los Dividendos pagados por importe de \$309'809,167, que aparece en el índice 320120 del anexo "32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN CONSOLIDADA)", del dictamen fiscal, señale a quiénes fueron pagados y por qué importes, fotocopia del acta de asamblea protocolizada en la que conste el decreto de dicha distribución de dividendos, así como fotocopia de las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de los ejercicios fiscales de 1997, 1998 y 1999, que según el papel de trabajo denominado "Decretos de dividendos", proporcionado mediante archivo electrónico por el C.P. [REDACTED]

[REDACTED] quien compareció en su representación en el desarrollo de la revisión de papeles de trabajo celebrada el día 16 de julio de 2010, corresponden al pago de dichos dividendos, señalando además el monto histórico e índices nacionales de precios al consumidor utilizados para obtener los factores de actualización utilizados.

14.- En relación a su papel de trabajo, proporcionado mediante archivo electrónico, denominado "DEPRECIACIÓN FISCAL Y PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006", y respecto al equipo de cómputo que en cantidad de \$115'833,527 aparece en el mismo de los importes de: \$2'809,774, \$1'384,115, \$1'901,861, \$10'845,048 y \$7'767,356, se solicita fotocopia de las facturas que comprueben su adquisición, en las que se compruebe el monto de la inversión.

...

16.- Con relación a las fusiones y/o desincorporaciones que se efectuaron en el ejercicio fiscal de 2007, de algunas sociedades controladas y por las cuales la sociedad controladora deberá reconocer los efectos en el ejercicio en revisión, sírvase proporcionar la información que se señala a continuación:

- Declaración complementaria del ejercicio en revisión, en la que [REDACTED] reconozca los efectos en la determinación del resultado fiscal consolidado, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.
- Relación analítica por ejercicio fiscal, de las diferentes partidas, que de las sociedades controladas fusionadas en el ejercicio fiscal de 2007, se hayan considerado para efectos de la determinación de la pérdida o utilidad fiscal consolidada, en los ejercicios en que consolidaron para efectos fiscales con [REDACTED]
- Exhiba y proporcione fotocopia legible de las declaraciones de los ejercicios en que consolidaron las siguientes sociedades controladas: [REDACTED]
[REDACTED] con R.F.C.: [REDACTED]
[REDACTED] con R.F.C.: [REDACTED]
[REDACTED] con R.F.C.: [REDACTED] y [REDACTED]
[REDACTED] con R.F.C.: [REDACTED]



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

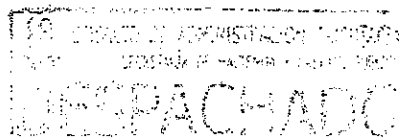
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 163 -



Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1076

0858



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



900-05-2011-385

GSD9400235/11

Así mismo, señale si las sociedades controladas mencionadas anteriormente, cambiaron de razón social posteriormente a la fusión e indique la razón y fundamento legal del porqué no se reconocieron los efectos de desincorporación en el resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión o, en su caso, del porque la contribuyente [REDACTED] no ha presentado la declaración complementaria del ejercicio en revisión, reconociendo los efectos de desincorporación de sus sociedades controladas, efectuadas en 2007, adjuntando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.

- d) Declaración complementaria del ejercicio en revisión en la que la contribuyente reconozca los efectos en la determinación del impuesto sobre la renta consolidado, en los términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.
- e) Cédula de trabajo con los cálculos de todos los efectos en el resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión, derivados de la desincorporación por fusión de las citadas sociedades controladas.
- f) Cédula de trabajo en los que se determine analíticamente el importe de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir de las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] que se desincorporan, en los términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, en el que indique, entre otros datos, lo siguiente:

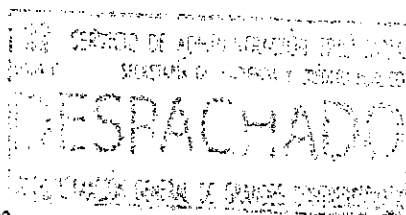
- Nombre de la sociedad que se desincorpora.
- Ejercicio en el que se obtuvo la pérdida fiscal.
- Importe histórico de la pérdida por aplicar a nivel individual.
- Pérdida actualizada.
- Factor de actualización, indicando los Índices Nacionales de Precios al Consumidor utilizados para el cálculo del factor de actualización.
- Monto de la pérdida fiscal aplicada contra utilidades.
- Remanente de la pérdida fiscal.
- Porcentaje de participación accionaria o consolidable.
- Pérdida fiscal en participación accionaria o consolidable.
- Asimismo, anexe fotocopia del los registros especiales de consolidación en donde se observe el monto de las utilidades y las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas que se desincorporan a que hace referencia el artículo 72, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2007.

4258

Página 6 de 19



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1077

0859



900-05-2011-385

GSD9400235/11

- g) Cédula de trabajo con la comparación del saldo del registro de utilidades fiscales netas de las sociedades controladas que se desincorporaron en 2007, contra el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas, y la comparación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas que se desincorporaron, contra el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada.

17.- En relación a las operaciones efectuadas con las sociedades

que por importes de \$51'960,000, \$2'232,275 y \$3'039,868, respectivamente, manifiesta como ingresos en el anexo "17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS", del dictamen fiscal, proporcione los papeles de trabajo que elaboró con motivo de su revisión e indique el tipo de servicio prestado a dichas sociedades, adjuntando los contratos respectivos, así mismo, indique a que se deben las diferencias entre las cifras antes mencionadas y las que aparecen en el anexo 17, de los dictámenes cada una de las sociedades controladas por \$61'960,000, \$3'242,475 y \$6'827,500, respectivamente.

18.- Fotocopia legible de la declaración anual del impuesto sobre la renta consolidado, complementaria del ejercicio en revisión, en la que se observe que como sociedad controladora, haya reconocido el efecto en la consolidación, de la modificación a la utilidad fiscal de sus sociedades controladas y, con motivo de que dichas sociedades controladas presentaron con fechas 12 de agosto de 2010 y 14 de julio del mismo año, respectivamente, declaración anual complementaria, en la que modifican su utilidad fiscal, lo anterior, conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción III, del artículo 72, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006, en caso de no haberse presentado la declaración anual complementaria del impuesto sobre la renta consolidado por desincorporación, indique la razón y/o fundamento legal, adjuntando la documentación comprobatoria que ampare su dicho."

Con escrito de fecha 2 de junio de 2011, recibido a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, el mismo día de su fecha de emisión, el L.C. en representación del C.P.C. proporcionó los informes, datos y documentos, como se señala a continuación:

"...

Con relación al punto 2 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- Se incluye la cédula de trabajo con la determinación del impuesto al activo individual y consolidado correspondiente al ejercicio de 2006.

0259

Página 7 de 19



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

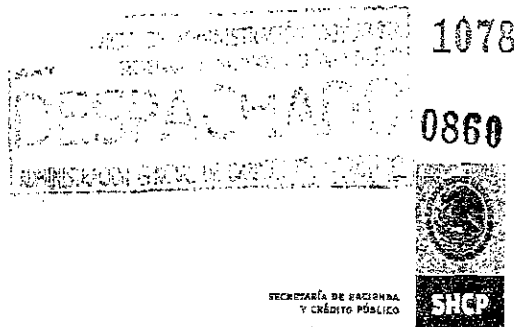
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 165 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



900-05-2011-385

GSD9400235/11

b.- Debido a que nuestra revisión solo incluyó el cotejo de los importes contra los papeles de trabajo de las compañías controladas para la determinación del impuesto al activo individual y consolidado correspondientes al ejercicio de 2006, no contamos con las copias fotostáticas de dichos papeles de trabajo; sin embargo han sido solicitadas al contribuyente y están en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación.

Con relación al punto 3 del citado oficio se incluye lo siguiente:

Se incluye el anexo C "Impuesto al activo consolidado" de la declaración anual complementaria presentada el 13 de agosto de 2010 en la que se refleja el ISR pagado en exceso aplicado contra el impuesto al activo por la cantidad de \$8,520,429, mismo que se manifestó en la declaración anual complementaria de fecha 13 de agosto de 2010, sin embargo el contribuyente debió declarar la cantidad de \$4,772,854, como resultado de la modificación que realizó en el impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio en revisión, de \$177,948,496 a \$181,693,071.

Con relación al punto 4 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- Se incluye las cédulas de trabajo de los pagos provisionales consolidados de los meses de febrero, mayo y septiembre, así como los pagos provisionales individuales de febrero y septiembre, los cuales fueron seleccionados para mi revisión. Por los meses que no fueron seleccionados, han sido solicitados al contribuyente y están en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación.

b.- Las declaraciones que sirvieron de base para la determinación del coeficiente de utilidad, han sido solicitadas al contribuyente y están en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación.

c.- En los pagos provisionales consolidados del impuesto sobre la renta del ejercicio en revisión, no fue considerado el inventario acumulable de la sociedad controlada [REDACTED]

d.- La razón y fundamento legal en que se basó el contribuyente para no considerarlo en los pagos provisionales consolidados, se menciona en la respuesta al punto 12 del citado oficio.

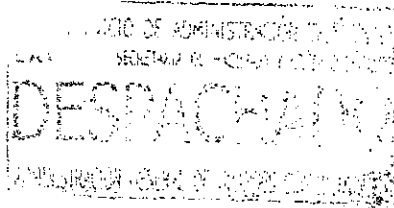
Con relación al punto 5 del citado oficio se incluye lo siguiente:

No tenemos conocimiento de que el 9 de julio de 2007 el contribuyente haya presentado declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidado de los meses de febrero a septiembre de 2007.

Página 8 de 19



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1079

0861



900-05-2011-385

GSD9400235/11

Con relación al punto 8 del citado oficio se incluye lo siguiente:

La integración analítica de la pérdida cambiaria y de los intereses a cargo, por \$1,353,017,516 y \$715,277,751, respectivamente, así como las fotocopias de los diez comprobantes de mayor cuantía de cada uno de los conceptos, han sido solicitadas al contribuyente y están en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación.

Con relación al punto 9 del citado oficio se incluye lo siguiente:

Se proporcionan las cédulas de trabajo de la determinación del resultado fiscal consolidado, la cual sirvió de base para la determinar el resultado fiscal consolidado de la declaración anual normal presentada el 30 de abril de 2007 y complementarias presentadas el 7 de septiembre de 2007 y 13 de agosto de 2010, respectivamente, considerando las utilidades fiscales o pérdidas fiscales manifestadas en las declaraciones normales y complementarias de las sociedades controladas del contribuyente.

...

Con relación al punto 11 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- Se proporciona la cédula de trabajo que contiene la integración de las operaciones financieras por la cantidad de \$198,488,138, que aparece incluido en el índice 123053 del anexo 12 "Conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del impuesto sobre la renta" del dictamen fiscal.

b.- Las fotocopias de los cinco comprobantes de mayor cuantía, han sido solicitados al contribuyente y están en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación.

Con relación al punto 12 del citado oficio se incluye lo siguiente:

La diferencia citada por la autoridad fiscal requirente, deviene de que [REDACTED] en cabal cumplimiento del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente consideró, para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, los conceptos expresamente previstos en el precepto legal antes aludido en el que no se incluye el inventario acumulable.

Con relación al punto 13 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- Los dividendos decretados por \$309,809,167, fueron pagados en su totalidad a [REDACTED]



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

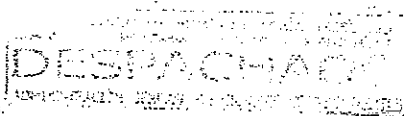
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 167 -



Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1080

0862



900-05-2011-385

GSD9400235/11

b.- Se incluye fotocopia del acta de Asamblea de Accionistas protocolizada, en la que consta el decreto de dividendos por \$309,609,167.

c.- Debido a que no contamos con las copias fotostáticas de las declaraciones anuales del ejercicio fiscal 1997, 1998 y 1999, han sido solicitados al contribuyente y están en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación.

d.- Se incluye la cédula de trabajo de la cuenta de utilidad fiscal nota consolidada, la cual contiene los montos históricos, índices nacionales de precios al consumidor y factores de actualización que fueron utilizados.

Con relación al punto 14 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- Respecto a las copias fotostáticas de las facturas que comprueban la adquisición de equipo de cómputo por los importes de \$2,809,774, \$1,384,115, \$1,901,861, \$10,845,048 y \$7,767,356, han sido solicitadas al contribuyente y están en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación, debido a que nuestra auditoría no incluyó la revisión de los importes señalados.

b.- El motivo de la diferencia por la cantidad de \$2,180,358, entre \$118,013,885 que se muestra en el papel de trabajo denominado "Amarre de activos para efectos de consolidación contable-fiscal correspondiente al ejercicio 2006" y \$115,833,527 que se muestra en el papel de trabajo denominado "Depreciación fiscal y promedio de activos fijos correspondiente al ejercicio de 2006", corresponde a efectos de actualización a que hace referencia el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las cuales están identificados en el papel de trabajo proporcionado.

Con relación al punto 16 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- El contribuyente no presentó la declaración complementaria en la que reconozca los efectos de desincorporación a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2007, debido a que no existen dichos efectos.

b.- La relación analítica por ejercicio fiscal de las diferentes partidas de las sociedades controladas fusionadas y liquidadas en el ejercicio sujeto a revisión no forma parte de mis papeles de trabajo, por lo que ha sido solicitada al contribuyente y está en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación.

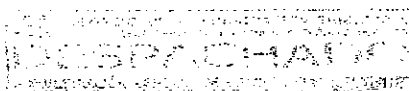
c.- Debido a que nuestra revisión solo incluyó el cotejo de las declaraciones de los ejercicios en que consolidaron fiscalmente, no contamos con las copias fotostáticas de dichas declaraciones, por lo que se han solicitado al contribuyente y está en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación.

Página 10 de 19

Av. Hidalgo No. 77, Módulo 111, Plazuela Baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México D.F., www.sat.gob.mx



Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1081

0863



900-05-2011-386

GSD9400235/11

d.- [REDACTED] y [REDACTED] no tenían pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir el momento de la desincorporación.

Con relación al punto 17 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- No existe diferencia entre las operaciones efectuadas por [REDACTED] con [REDACTED]

b.- La aclaración de la diferencia respecto a las operaciones celebradas durante el ejercicio sujeto a revisión con [REDACTED] ha sido solicitada al contribuyente y está en proceso de aclaración a la fecha de la presente comunicación.

c.- Respecto a la diferencia entre las operaciones celebradas con [REDACTED] desconocemos el motivo de la diferencia de la información manifestada en el anexo 17 del dictamen fiscal del contribuyente, debido a que no dictaminé el ejercicio fiscal en revisión de dicha compañía, la declaración correspondiente ha sido solicitada al contribuyente esta en proceso de aclaración a la fecha de la presente comunicación.

Con relación al punto 18 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- Se proporciona copia legible de la declaración anual del impuesto sobre la renta consolidado complementaria presentada el 18 de agosto de 2010 por la modificación en la utilidad fiscal de la sociedad controlada [REDACTED] la cual se proporciona en el punto 1.

b.- El contribuyente no ha presentado la declaración complementaria del ejercicio en revisión, en la que se reconozca el efecto en la consolidación fiscal, por la modificación en la utilidad fiscal de la sociedad controlada [REDACTED]

c.- Las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] no han sido desincorporadas.

Del estudio y análisis a la información antes citada, se conoció que el L.C. [REDACTED] proporcionó parcialmente la información solicitada, dejando de aportar lo siguiente:

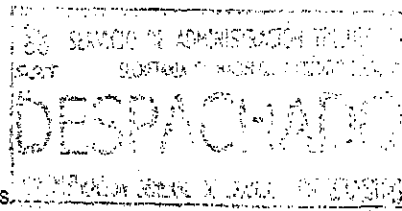
Referente al punto 2, del oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, no proporcionó Cédula de trabajo con la determinación analítica de los pagos provisionales del Impuesto al Activo individual y consolidado, tampoco proporcionó fotocopia legible de la(s) declaración(es) anual(es) que sirvieron de base para la determinación de los pagos provisionales.

Página 11 de 19

Av. Hidalgo No. 77, Módulo 111, Plazuela Baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México D.F., www.sat.gob.mx



Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1082

0864



900-05-2011-385

GSD9400235/11

Referente al punto 3, del oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, no proporcionó Cédula de trabajo con la determinación del "ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPAC", que en cantidad de \$8'520,429 aparece en la declaración complementaria del impuesto al activo consolidado del ejercicio en revisión, presentada por la contribuyente el día 13 de agosto de 2010, adjuntando la documentación comprobatoria que justifique su dicho.

Referente al punto 4, del oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, no proporcionó papel de trabajo que sirvió para el cálculo y determinación de los pagos individuales y consolidados del impuesto sobre la renta de los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, todos del ejercicio fiscal de 2006, que coincidan con el importe manifestado por la contribuyente en la última declaración del ejercicio presentada, tampoco incluyó el o los coeficientes de utilidad utilizados y fotocopia de las declaraciones del impuesto sobre la renta que sirvieron de base para su obtención.

Por el punto 5, del mencionado oficio, no proporcionó fotocopia legible de las declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidados del ejercicio en revisión, de los meses de febrero a septiembre, presentados todos vía internet el 9 de julio de 2007.

Del punto 8, no proporcionó cédula de trabajo que contenga la integración de la "PERDIDA CAMBIARIA", así como de "LOS INTERESES A CARGO", que en cantidades de \$1,353'017,516 y \$715'277,751, aparecen en los índices 073010 y 072100, respectivamente, del anexo "7.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO" del dictamen fiscal, adjuntando fotocopias de los 10 comprobantes de mayor cuantía, de cada uno de los conceptos.

En relación al punto 9 del citado oficio, no proporcionó la cédula de trabajo que contenga la integración del resultado fiscal consolidado, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, así como del impuesto sobre la renta a cargo o a favor, considerando para efectos de dicha determinación las utilidades o pérdidas fiscales manifestadas en las declaraciones anuales normales y/o complementarias en su caso, presentadas a la fecha por cada una de las sociedades controladas de [REDACTED] que contenga entre otros datos el concepto y montos correspondientes a los efectos por desincorporaciones de controladas o desconsolidación, que se sumen o resten, correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, cuyos efectos debe reconocer [REDACTED] en el ejercicio fiscal de 2006.

Referente al punto 11, del oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, no proporcionó fotocopia de la documentación comprobatoria de los 5 comprobantes de mayor cuantía, (facturas, estados de cuenta bancarios, contratos, su determinación analítica, etc.), respecto a la integración de las "OPERACIONES FINANCIERAS", que en cantidad de \$198'488,138, aparece incluido en el índice 123053 del anexo "12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE/Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", del dictamen fiscal.

Página 12 de 19



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

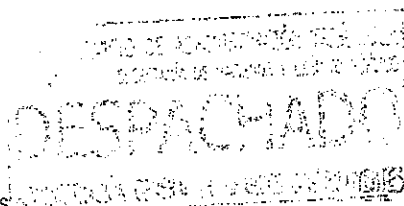
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 169 -



Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1083

0865



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

900-05-2011-385

GSD9400235/11

Referente al punto 12, del oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, no indicó razón y fundamento legal, en su caso, de la diferencia en cantidad de \$1'559,028,827, que resulta de comparar el resultado fiscal de la sociedad controlada [REDACTED] manifestado en el índice 280017, columna "UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL INDIVIDUAL", del anexo "28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORME EN CONSOLIDACIÓN", del dictamen fiscal de [REDACTED] en cantidad de \$1,808,197,492, y el importe por \$3,367,226,319, registrado en el índice 120170 "Resultado Fiscal" del anexo "12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", del dictamen fiscal correspondiente a la sociedad controlada [REDACTED] adjuntando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.

Referente al punto 13, del oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, en relación a los Dividendos pagados por importe de \$309'809,167, que aparece en el índice 320120 del anexo "32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN CONSOLIDADA)", del dictamen fiscal, no proporcionó fotocopia de las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de los ejercicios fiscales de 1997, 1998 y 1999, que según el papel de trabajo denominado "Decretos de dividendos", proporcionado mediante archivo electrónico por el L.C. [REDACTED] quien compareció en su representación en el desarrollo de la revisión de papeles de trabajo celebrada el día 16 de julio de 2010, corresponden al pago de dichos dividendos, señalando además el monto histórico e índices nacionales de precios al consumidor utilizados para obtener los factores de actualización utilizados.

Del punto 14, del oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, en relación al papel de trabajo proporcionado mediante archivo electrónico por L.C. [REDACTED] en el desarrollo de la revisión de papeles de trabajo celebrada el día 16 de julio de 2010, denominado "DEPRECIACIÓN FISCAL Y PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006", y respecto al equipo de cómputo que en cantidad de \$115'833,527 aparece en el mismo de los importes de: \$2'809,774, \$1'384,115, \$1'901,861, \$10'845,048 y \$7'767,356, no proporcionó fotocopia de las facturas que comprueben su adquisición, en las que se compruebe el monto de la inversión.

Del punto 16, inciso b), del oficio antes señalado, señaló que "b.- La relación analítica por ejercicio fiscal de las diferentes partidas de las sociedades controladas fusionadas y liquidadas en el ejercicio sujeto a revisión no forma parte de mis papeles de trabajo, por lo que ha sido solicitada al contribuyente y está en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación."

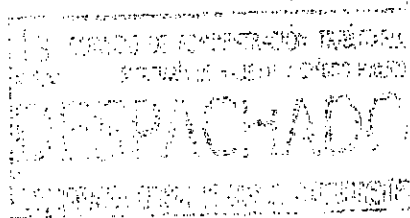
En relación al punto 16, inciso c), del oficio antes señalado, señaló que "c.- Debido a que nuestra revisión solo incluyó el cotejo de las declaraciones de los ejercicios en que consolidaron fiscalmente, no contamos con las copias fotostáticas de dichas declaraciones, por lo que se han solicitado al contribuyente y está en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación"

Asimismo del segundo párrafo del punto e inciso señalados en el párrafo anterior no proporcionó la información y documentación solicitada.

Página 13 de 19



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1084

0866



900-05-2011-385

GSD9400235/11

De igual forma, no proporcionó información y documentación respecto a lo solicitado en el punto 16, incisos d), e), f), y g), del oficio antes citado.

Del punto 17, del oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, no proporcionó la información y documentación solicitada.

En relación al punto 18 del citado oficio, no proporcionó fotocopia legible de la declaración anual del impuesto sobre la renta consolidado, complementaria del ejercicio en revisión, en la que se observe que [REDACTED] como sociedad controladora, haya reconocido el efecto en la consolidación, de la modificación a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] con motivo de que dicha sociedad controlada presentó con fecha 14 de julio de 2010, declaración anual complementaria, en la que modifica su utilidad fiscal, lo anterior, conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción III, del artículo 72, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006.

Por lo anterior, no se cuenta con la información y documentación suficiente para verificar su situación fiscal y a efecto de seguir con el procedimiento de revisión previsto en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación vigente, se inician las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, primer párrafo, fracción II y 52-A, primer párrafo, fracción II del propio Código Fiscal de la Federación vigente; por lo que se le solicita que ante esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con domicilio en Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, Planta Baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, proporcione la documentación e información que a continuación se indica:

- 1.- Cédula de trabajo con la determinación analítica de los pagos provisionales del Impuesto al Activo, individual y consolidado correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, así como fotocopia legible de la(s) declaración(es) anual(es) que sirvieron de base para la determinación de dichos pagos.
- 2.- Cédula de trabajo con la determinación del "ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPAC", que en cantidad de \$8'520,429, aparece en su declaración complementaria del impuesto al activo consolidado del ejercicio en revisión, presentada por la contribuyente el día 13 de agosto de 2010, adjuntando la documentación comprobatoria que justifique su dicho.
- 3.- Papel de trabajo que sirvió para el cálculo y determinación de los pagos provisionales individuales y consolidados del impuesto sobre la renta de los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, todos del ejercicio fiscal de 2006, que coincidan con el importe manifestado en su última declaración del ejercicio presentada, incluyendo el o los coeficientes de utilidad utilizados y fotocopia de las declaraciones del impuesto sobre la renta que sirvieron de base para su obtención.

Página 14 de 19



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

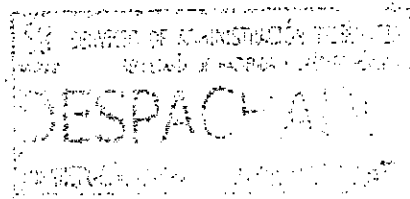
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 171 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1085

0867

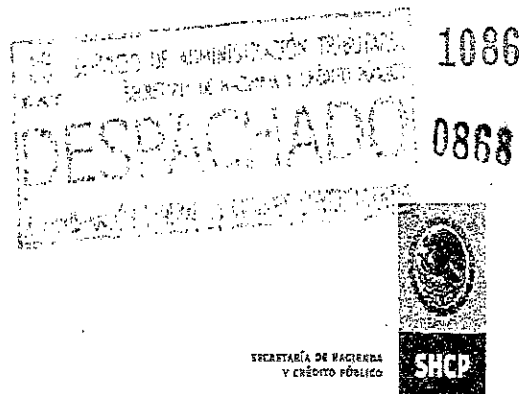


900-05-2011-385
[REDACTED]
GSD9400235/11

- 4.- Fotocopia legible de las declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidados del ejercicio en revisión.
- 5.- Cédula de trabajo que contenga la integración de la "PERDIDA CAMBIARIA", así como de "LOS INTERESES A CARGO", que en cantidades de \$1,353'017,516 y \$715'277,751, aparecen en los índices 073010 y 072100, respectivamente, del anexo "7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO" del dictamen fiscal, adjuntando fotocopias de los 10 comprobantes de mayor cuantía, de cada uno de los conceptos.
- 6.- Cédula de trabajo que contenga la integración del resultado fiscal consolidado, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, así como del impuesto sobre la renta a cargo o a favor, considerando para efectos de dicha determinación las utilidades o pérdidas fiscales manifestadas en las declaraciones anuales normales y/o complementarias en su caso, presentadas a la fecha por cada una de las sociedades controladas de [REDACTED] que contenga entre otros datos lo siguiente:
 - a) Nombre de la sociedad controlada y/o controladora.
 - b) Utilidad o pérdida fiscal individual.
 - c) Porcentaje de participación accionaria.
 - d) Utilidad o pérdida fiscal en la participación consolidable por cada controlada y por la propia controladora.
 - e) En su caso, conceptos especiales de consolidación que se sumen o que resten.
 - f) Conceptos y montos correspondientes a los efectos por desincorporaciones de controladas o desconsolidación, que se sumen o se resten, correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, cuyos efectos debe reconocer [REDACTED] en el ejercicio fiscal de 2006.
 - g) Conceptos y montos correspondientes a los efectos por variaciones en los porcentajes de participación consolidable, que se sumen o resten, de las sociedades controladas, en su caso.
 - h) Pérdidas fiscales por las cuales se perdió el derecho a disminuirlas a nivel individual que se reversan en la consolidación fiscal, en su caso.
 - i) Utilidad o pérdida fiscal consolidada.
 - j) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores consolidadas que se disminuyen.
 - k) Resultado fiscal consolidado.
 - l) Impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio.
 - m) Acreditamiento de pagos provisionales correspondientes a las sociedades controladas y la propia controladora.
 - n) Pagos provisionales consolidados.
 - ñ) Impuesto sobre la renta retenido a la sociedad controladora, acreditable contra el impuesto anual.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



900-05-2011-385

GSD9400235/11

- o) Otros acreditamientos: especificando concepto y monto e identificando a la sociedad controlada que corresponda, así como el porcentaje de participación consolidable. En su caso especificar si se trata de un importe correspondiente a la consolidación fiscal.
- p) Saldo a cargo o a favor.

7.- En relación a las "OPERACIONES FINANCIERAS", que en cantidad de \$198'488,138, aparece incluido en el índice 123053 del anexo "12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", del dictamen fiscal, proporcione fotocopia de los 5 comprobantes de mayor cuantía, (facturas, estados de cuenta bancarios, contratos, su determinación analítica, etc.).

8.- Indique razón y fundamento legal, en su caso, de la diferencia en cantidad de \$1'559,028,827, que resulta de comparar el resultado fiscal de la sociedad controlada [REDACTED] manifestado en el índice 280017, columna "UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL INDIVIDUAL", del anexo "28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORME EN CONSOLIDACIÓN", del dictamen fiscal de [REDACTED] en cantidad de \$1,808,197,492, y el importe por \$3,367,226,319, registrado en el índice 120170 "Resultado Fiscal" del anexo "12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", del dictamen fiscal correspondiente a la sociedad controlada [REDACTED] adjuntando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.

9.- En relación a los Dividendos pagados por importe de \$309'809,167, que aparece en el índice 320120 del anexo "32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN CONSOLIDADA)", del dictamen fiscal, proporcione fotocopia de las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de los ejercicios fiscales de 1997, 1998 y 1999, que según el papel de trabajo denominado "Decretos de dividendos", proporcionado mediante archivo electrónico por el C.P. [REDACTED] quien compareció en representación del C.P.C. [REDACTED] en el desarrollo de la revisión de papeles de trabajo celebrada el día 16 de julio de 2010, corresponden al pago de dichos dividendos.

10.- Respecto al papel de trabajo proporcionado mediante archivo electrónico por el L.C. [REDACTED] quien compareció en representación del C.P.C. [REDACTED] en el desarrollo de la revisión de papeles de trabajo celebrada el día 16 de julio de 2010, denominado "DEPRECIACIÓN FISCAL Y PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006", y respecto al equipo de cómputo que en cantidad de \$115'833,527 aparece en el mismo, por los importes de: \$2'809,774, \$1'384,115, \$1'901,861, \$10'845,048 y \$7'767,356, proporcione fotocopia de las facturas que comprueben su adquisición, en las que se observe el monto de adquisición de la inversión.

0268

Página 16 de 19



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

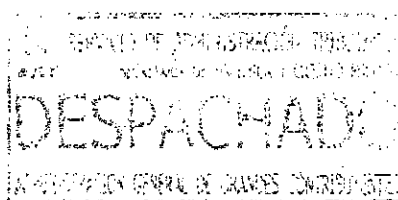
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 173 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1087

0869



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

900-05-2011-385

GSD9400235/11

11.- Con relación a las fusiones y/o desincorporaciones que se efectuaron en el ejercicio fiscal de 2007, de algunas sociedades controladas y por las cuales [REDACTED] como sociedad controladora tuvo que reconocer los efectos en el ejercicio en revisión, sírvase proporcionar la información que se señala a continuación:

- a) Relación analítica por ejercicio fiscal, de las diferentes partidas, que de las sociedades controladas fusionadas en el ejercicio fiscal de 2007, se hayan considerado para efectos de la determinación de la pérdida o utilidad fiscal consolidada, en los ejercicios en que consolidaron para efectos fiscales con [REDACTED]
- b) Exhiba y proporcione fotocopia legible de las declaraciones de los ejercicios en que consolidaron las siguientes sociedades controladas:
- [REDACTED] con R.F.C.: [REDACTED]
- [REDACTED] con R.F.C.: [REDACTED]
- [REDACTED] E.C.V., con R.F.C.: [REDACTED] y [REDACTED]
- [REDACTED] con R.F.C.: [REDACTED]

Así mismo, señale si las sociedades controladas mencionadas anteriormente, cambiaron de razón social posteriormente a la fusión e indique la razón y fundamento legal del porqué no se reconocieron los efectos de desincorporación en el resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión o, en su caso, del porque la contribuyente [REDACTED] no ha presentado la declaración complementaria del ejercicio en revisión, reconociendo los efectos de desincorporación de sus sociedades controladas, efectuadas en 2007, adjuntando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.

- c) Declaración complementaria del ejercicio en revisión en la que la contribuyente reconozca los efectos en la determinación del impuesto sobre la renta consolidado, en los términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.
- d) Cédula de trabajo con los cálculos de todos los efectos en el resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión, derivados de la desincorporación por fusión de las citadas sociedades controladas.
- e) Cédula de trabajo en los que se determine analíticamente el importe de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir de las sociedades [REDACTED]

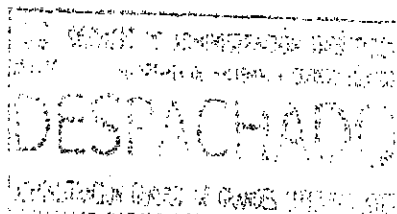
[REDACTED] que se desincorporan, en los términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, en el que indique, entre otros datos, lo siguiente:

0269

Página 17 de 19



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1088

0870



900-05-2011-385

GSD9400235/11

- Nombre de la sociedad que se desincorpora.
- Ejercicio en el que se obtuvo la pérdida fiscal.
- Importe histórico de la pérdida por aplicar a nivel individual.
- Pérdida actualizada.
- Factor de actualización, indicando los Índices Nacionales de Precios al Consumidor utilizados para el cálculo del factor de actualización.
- Monto de la pérdida fiscal aplicada contra utilidades.
- Remanente de la pérdida fiscal.
- Porcentaje de participación accionaria o consolidable.
- Pérdida fiscal en participación accionaria o consolidable.
- Asimismo, anexe fotocopia del los registros especiales de consolidación en donde se observe el monto de las utilidades y las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas que se desincorporan a que hace referencia el artículo 72, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2007.

f) Cédula de trabajo con la comparación del saldo del registro de utilidades fiscales netas de las sociedades controladas que se desincorporaron en 2007, contra el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas, y la comparación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas que se desincorporaron, contra el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada.

12.- En relación a las operaciones efectuadas con las sociedades

que por importes de \$51'960,000, \$2'232,275 y \$3'039,868, respectivamente, manifiesta como ingresos en el anexo "17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS", de su dictamen fiscal, proporcione papeles de trabajo con la integración de dichos importes e indique el tipo de servicio prestado a las citadas sociedades, adjuntando los contratos respectivos, así mismo, indique a que se deben las diferencias entre las cifras antes mencionadas y las que aparecen en el anexo 17, de los dictámenes cada una de las sociedades controladas por \$61'960,000, \$3'242,475 y \$6'827,500, respectivamente.

13.- Fotocopia legible de la declaración anual del impuesto sobre la renta consolidado, complementaria del ejercicio en revisión, en la que se observe que C.V., como sociedad controladora, haya reconocido el efecto en la consolidación, de la modificación a la utilidad fiscal de su sociedad controlada con motivo de que dicha sociedad controlada presentó con fecha 14 de julio de 2010 declaración anual complementaria, en la que modificó su utilidad fiscal, lo anterior, conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción III, del artículo 72, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006.

Página 18 de 19



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

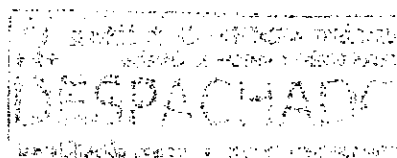
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 175 -



Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



1089

0871



900-05-2011-385

GSD9400235/11

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecto como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Activo, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

La documentación e información deberá presentarse en forma completa, correcta, legible y oportuna mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al número de este oficio.

Para tal efecto, se le concede un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo previsto al respecto en el artículo 53, primer párrafo, inciso c) del mencionado Código Fiscal de la Federación vigente.

De conformidad con lo que establece el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente, se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta, legible y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación, constituye una infracción en términos del artículo 85, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, primer párrafo, fracción I del propio Código Fiscal de la Federación vigente, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40, del referido Código.

1-899847

Atentamente,

Lic. Edgar López Hicks.
Administrador Central de Fiscalización
a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Página 19 de 19

Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, Planta Baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México D.F. /www.sat.gob.mx

- Mediante oficio número 900 05-03-2012-54438 de fecha 13 de septiembre de 2012, el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" del Servicio de Administración Tributaria, solicitó

a la parte actora, diversos informes, datos y documentos complementarios, en términos del **artículo 48 del Código Fiscal de la Federación** vigente en 2012, entre otros; tal y como se observa a continuación:



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.

Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3"

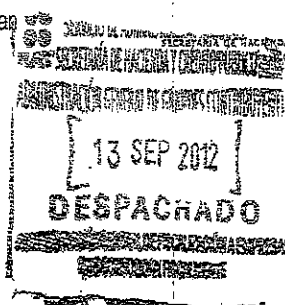
Oficio: 900-05-03-2012-54438

Exp.: [REDACTED]

GSD9400235/11

ENTREGA PERSONAL

Asunto: Se solicitan los informes, datos y documentos complementarios que se indican.



0093

0034

México D.F., 13 SEP 2012

C. Representante Legal de:

[REDACTED] antes

Esta Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, en relación con la revisión que se le está practicando por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, al amparo del oficio número 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, expedido por el Lic. Edgar López Hicks, Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, mismo que le fue notificado previo citatorio al Representante Legal el 28 de junio de 2011; autoridad competente para emitir el presente, en virtud de que la contribuyente es una sociedad controladora que cuenta con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, según oficio número 361-I-B-3-5334 de fecha 15 de abril de 1985, emitido por la entonces Dirección General Técnica de Ingresos, en términos de lo dispuesto por el artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, en vigor a partir del 1 de enero de 1981, vigente en 1985 y en relación con los artículos 64 y Segundo Transitorio, primer párrafo, fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, vigente a partir del mismo día de su publicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., fracciones I, VII, XII y XVIII, 8o., fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1o. de julio de 1997, reformada, adicionada y

Continúa en hoja 2...



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 177 -



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.

Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3".

Oficio: 900 05-03-2012-54438

Exp.: [REDACTED]

GSD9400235/11

Hoja 2

derogada, mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente al de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción IX y X y Apartado B, fracción II; párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 5, inciso c) y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y el 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos; así como en los artículos 6, primero y quinto párrafos, 26, primer párrafo, fracción I, 33, último párrafo, 38, y a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 30, párrafos quinto y octavo, 42, primer párrafo, fracciones II y IV, antepenúltimo, penúltimo y último párrafos, 48 primer párrafo, fracciones I, II y III y último párrafo, 52 y 52-A, fracción II, y 53 primero y segundo párrafos, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente; le solicita la información y documentación que a continuación se señala:

La información y documentación que se deberá proporcionar como complemento a la solicitada mediante el oficio señalado en el primer párrafo del presente, es la siguiente:

- 1.- Señale la razón y/o fundamento legal en que se basó [REDACTED] actualmente [REDACTED] para no incluir en la determinación de los pagos provisionales consolidados del impuesto sobre la renta del ejercicio en revisión, el inventario acumulable que su sociedad controlada [REDACTED] utilizó en el cálculo de sus pagos provisionales.
- 2.- Respecto a los Dividendos pagados por importe de \$309'809,167, que aparece en el índice 320120 del anexo "32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN CONSOLIDADA)", del dictamen fiscal, se solicita fotocopia del acta de asamblea protocolizada en la que conste el decreto de dicha distribución de dividendos, así como fotocopia de las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta donde se originaron los mencionados dividendos señalando además el monto histórico e índices nacionales de precios al consumidor utilizados para obtener los factores de actualización ocupados para su actualización, hasta la fecha de su pago.

Continúa en hoja 3...



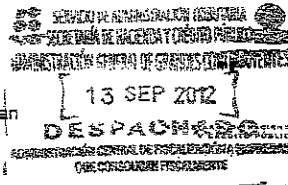
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3"

Oficio: 900 05-03-2012-54438

Exp.: [REDACTED]

GSD9400235/11

Hoja 3



0036

0095

0035

Esta información complementaria deberá presentarse en forma completa, correcta, legible y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al número de éste oficio, en esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con domicilio en Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, P.B., Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 53, primero y segundo párrafos, inciso c) del mencionado Código Fiscal de la Federación vigente.

De conformidad con lo que establece el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente, se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta, legible y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación, constituye una infracción en términos del artículo 85, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, primer párrafo, fracción I del propio Código Fiscal de la Federación, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40, del referido Código.

Atentamente.

Lic. Mauricio Ayala Orozco.
Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3".

PREVIA LECTURA E IDENTIFICACION
DEL NOTIFICADOR, RECIBI ORIGINAL
CON FIRMA AUTOGRAFA DEL PRESENTE
OFICIO

[REDACTED]
RECIBIENDO 14/09/12 12:00 HRS
[REDACTED]
[REDACTED]

Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, Planta Baja, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. / Tel 56 02 14 90 / www.sat.gob.mx

- Mediante oficio número **900-05-03-2012-69836** de fecha **17 de diciembre de 2012**, el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" del Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer a la parte actora las observaciones determinadas como resultado de la revisión de la que fue objeto respecto al Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006; asimismo, se le informó que disponía de veinte días hábiles, contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho oficio, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el oficio de referencia, así como para optar por corregir su situación, ello en términos del **artículo 48, fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación** vigente en 2012, entre otros.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 179 -



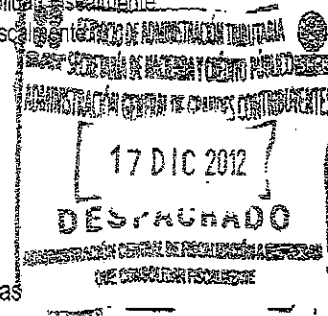
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente

Oficio: 900-05-03-2012-69836

Exp.: [REDACTED]

ENTREGA PERSONAL

Asunto: Se dan a conocer las observaciones determinadas
como resultado de la revisión.



1699
1456

México D.F., 17 de diciembre de 2012.

C. Representante Legal de:

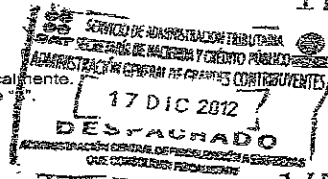
[REDACTED] ANTES

Esta Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3", dependiente de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir la presente, en virtud de que la contribuyente es una sociedad controladora que cuenta con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, según oficio número 361-I-B-3-5334 de fecha 15 de abril de 1985 emitido por la entonces Dirección General Técnica de Ingresos, en términos de lo dispuesto por el artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, en vigor a partir del 1 de enero de 1981, vigente en 1985 y en relación con los artículos 64 y Segundo Transitorio, primer párrafo, fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, vigente a partir del mismo día de su publicación, respecto a los Estados Financieros por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, cuya exhibición y revisión de papeles de trabajo se efectuó el día 16 de julio de 2010, con el L.C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal del C.P. Gustavo Gabriel Llamas Monjardín y con relación a las contribuciones de la que es sujeto directo consistente en Impuesto sobre la Renta; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., fracciones I, VII, XII y XVIII, 8o., fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1o. de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente al de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo,

Continúa en hoja 2...



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
Oficio: 900-05-03-2012-69836
Exp.: [REDACTED]



1700

1457

Hoja 2

fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción IX, X y XIII, Apartado B, fracción II; párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 5, inciso c) y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto, por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y el 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos; así como en los artículos 6, primer párrafo, 33, último párrafo, 38, 42, primer párrafo, fracciones II, IV y antepenúltimo párrafo, artículos 52 y 52-A, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48, primer párrafo, fracción IV, y 63 del propio Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica lo siguiente:

Se le dan a conocer las observaciones determinadas en relación a la revisión de la que fue objeto al solicitarle información y documentación a la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, mediante oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, el cual ampara la orden de revisión GSD9400235/11, emitido por el Lic. Edgar López Hicks, Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente del Servicio de Administración Tributaria, notificado legalmente el 28 de junio de 2011, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero, en virtud de que está cumpliendo con su horario de trabajo, previo citatorio al Representante Legal de esa contribuyente; se le solicitó directamente a la contribuyente información y documentación, a efectos de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está obligado como sujeto directo en materia de las contribuciones federales: impuesto sobre la Renta por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

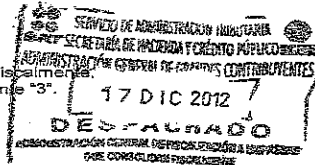
Mediante oficio 900-05-2010-2149 del 01 de julio de 2010, emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, firmado por ausencia en suplencia por el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" dependiente de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente adscrita a la Administración General de Grandes contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, se citó al C.P. [REDACTED] con número de registro [REDACTED] para que se presentara él o su Representante Legal debidamente acreditado en términos del artículo 19 del

Continúa en hoja 3...

Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, PB, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, 06300, México, D.F. Tel. 0155 58020000 Ext.53661 www.sat.gob.mx



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3".
Oficio: 900-05-03-2012-69836
Exp.: [REDACTED]



1701

1458

Hoja 3

Código Fiscal de la Federación vigente, ante dicha autoridad, a fin de llevar a cabo la revisión de los papeles de trabajo que formuló respecto del dictamen que para efectos fiscales, emitió sobre los estados financieros de la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, mismo que fue notificado legalmente, previo citatorio al citado contador el 07 de julio de 2010, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero, con cargo de "Recepcionista del Despacho [REDACTED] con quien dijo tener vínculo laboral", sin que lo haya acreditado, despacho en el que labora el C.P. [REDACTED] revisión de papeles de trabajo que se realizó el día 16 de julio de 2010, con el L.C. [REDACTED] en representación del citado profesionista, quien se acreditó con Escritura Pública número cincuenta y seis mil novecientos noventa y uno, volumen mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, de fecha 6 de octubre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Carlos A. Yfarraguerri y Villarreal, Titular de la Notaría Pública número veintiocho del Distrito Federal, quien se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral.- Registro Federal de Electores, número de folio [REDACTED] clave de elector [REDACTED] y año de registro [REDACTED]

Derivada de la revisión de papeles de trabajo antes citada, mediante oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1" adscrita a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, firmado por la C.P. María Leticia Bernal Velázquez, Administradora de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1", dirigido al C.P. [REDACTED] notificado legalmente, previo citatorio el 11 de mayo de 2011, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero, quien tiene relación de "EMPLEADA", con la contribuyente, sin haberlo acreditado, despacho en el que labora el citado contador público, se le solicitó diversa información y documentación, entre otros, la relacionada con la declaración anual del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio en revisión, en la cual [REDACTED] actualmente [REDACTED] reconozca los efectos en el resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión, derivado de la modificación a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] presentada en declaración anual por corrección fiscal del 14 de julio de 2010, como resultado al inicio de las facultades de comprobación a esa contribuyente; de la desincorporación por fusión de sus sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] así mismo la diferencia en cantidad de \$1,558'055.993 en la participación consolidable, que resulta de comparar el resultado fiscal determinado por su sociedad controlada [REDACTED] y el fluido a la sociedad controladora.

Continúa en hoja 4...

Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, PB, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, 06300, México, D.F. Tel. 0155 58020000 Ext.53661 www.sat.gob.mx



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

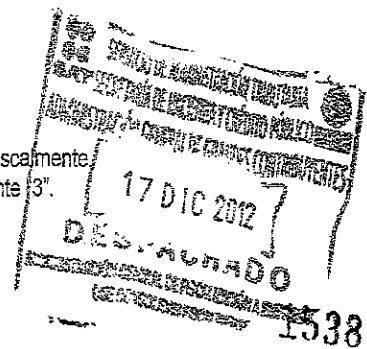
ACTORA:

- 181 -

1781



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente 3".
Oficio: 900-05-03-2012-69836
Exp.: [REDACTED]



Hoja 83

Las observaciones anteriores originan una omisión en la determinación del resultado fiscal consolidado en cantidad de \$3,812'947,923, asimismo se observa que enteró los pagos provisionales en cantidad menor por \$154'249,706, omitiendo en consecuencia el pago de la actualización y recargos correspondientes por los meses de enero a diciembre del ejercicio de 2006. Por lo anterior, se hacen constar en este oficio las siguientes:

Las observaciones anteriores originan una omisión en la determinación del resultado fiscal consolidado en cantidad de \$3,812'947,923, así mismo, se observa que enteró los pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio en revisión en cantidad menor por \$154'249,706, omitiendo en consecuencia el pago de la actualización y recargos correspondientes por los meses de enero a diciembre.

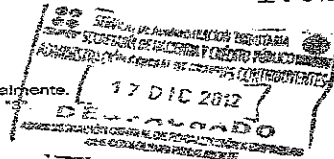
CONCEPTO		SEGÚN CONTRIBUYENTE ÚLTIMA DECLARACIÓN PRESENTADA EL 13/08/2010	SEGÚN ESTA ADMINISTRACIÓN	DIFERENCIA
UTILIDAD FISCAL CONTROLADORA		\$619,519,245	\$619,519,245	\$0
UTILIDAD FISCAL DE CONTROLADAS		3,652,413,102	5,214,316,239	(*) 1,561,903,137
PÉRDIDA FISCAL DE CONTROLADAS		2,366,409,115	2,366,409,115	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONSOLIDACIÓN CONTROLADAS		1,278,995,401	1,278,995,401	0
PÉRDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	SUMAN			
	RESTAN			
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		626,527,831	2,188,430,968	1,561,903,137
DESINCORPORACIÓN DE CONTROLADAS O DESCONSOLIDACIÓN	PÉRDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	0	2,251,044,786	2,251,044,786
PÉRDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO				
PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO		\$626,527,831	\$4,439,475,754	\$3,812,947,923

En los términos y para los efectos previstos en las fracciones IV y VI del primer párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente, dispone de veinte días hábiles contados a

Continúa en hoja 84...



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3".
Oficio: 900-05-03-2012-69836
Exp.: [REDACTED]



1782

1539

Hoja 84

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente Oficio de Observaciones, para presentar ante esta Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3", de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, Planta Baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, 06300, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal, teniéndose por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio otorgado en el presente oficio no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

Atentamente.

Lic. Mauricio Ayala Orozco.
Administrador de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente "3".

LIC. MAURICIO AYALA OROZCO

PRESENTE LECTURA DEL OFICIO E
IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADO
RECIBI ORIGINAL DEL PRESENTE
CON FIRMA AUTOGRAFADA

[REDACTED]
18/12/12 16:00 HRS

Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, PB, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, 06300, México, D.F. Tel. 0155 58020000 Ext. 53661 www.sat.gob.mx

- Finalmente, mediante oficio número oficio número **900-05-2013-48229** de **25 de julio de 2013**, a través de la cual, la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente del Servicio de Administración Tributaria, le determinó a la parte actora un crédito fiscal por la cantidad de \$2,636'428,880.12 por concepto de Impuesto Sobre la Renta, actualización, recargos y multas, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, (resolución recurrida).

En ese orden de ideas, esta Juzgadora estima conveniente tener presente el artículo 48, fracciones I, IV y VI del Código Fiscal de la Federación, vigente en los años 2011 y 2012, a saber:

"ARTÍCULO 48.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

I. La solicitud **se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del presente ordenamiento,**

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 183 -

tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en el lugar donde éstas se encuentren.

(...)

IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario.

(...)

VI.- El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código.

(...)"

(Énfasis añadido)

El precepto legal transcrito, establece fundamentalmente las formalidades que se deberán atender, cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria.

En relación a lo anterior, la **fracción I**, del numeral transcrito, establece que dicha solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con

lo establecido en el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en el lugar donde éstas se encuentren.

Por lo que hace a la **fracción IV**, del artículo 48 del Código Tributario, la misma establece que como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario.

Al respecto, la **fracción VI, del numeral 48** del ordenamiento de referencia, señala que el oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada, es decir, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, establece que el contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

También señala que se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

Finalmente, establece que el plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de la fracción VI, del numeral de referencia, es independiente del que se establece en el artículo 46-A del Código Tributario.

En ese orden de ideas, esta Juzgadora advierte que el oficio número **900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011**, emitido por el

Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente del Servicio de Administración Tributaria, al consistir la solicitud a la actora para que proporcionara diversa documentación e información, en términos del **artículo 48, fracción I del Código Fiscal de la Federación**, dicho oficio debió haber sido notificado de conformidad con el artículo 136 del Código en comento.

Asimismo, el oficio número **900 05-03-2012-54438 de fecha 13 de septiembre de 2012**, emitido por el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" del Servicio de Administración Tributaria, al consistir en la solicitud a la parte actora de diversos informes, datos y documentos complementarios, en términos del **artículo 48, fracción I del Código Fiscal de la Federación**, dicho oficio debió haber sido notificado atendiendo a las formalidades establecidas en el numeral 136 del ordenamiento en cuestión.

Del mismo modo, el oficio de observaciones número **900-05-03-2012-69836 de fecha 17 de diciembre de 2012**, al haber sido emitido por el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual dio a conocer a la parte actora las observaciones determinadas como resultado de la revisión de la que fue objeto respecto al Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006, y le informó que disponía de veinte días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho oficio, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el oficio de referencia, así como para optar por corregir su situación, el mismo fue emitido en términos del **artículo 48, fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación**; por lo tanto, el oficio de referencia debió haber sido notificado a la contribuyente, de conformidad con el artículo 136 del Código referido.

En conclusión, los oficios números 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, 900 05-03-2012-54438 de fecha 13 de septiembre de 2012, y 900-05-03-2012-69836 de fecha 17 de diciembre de 2012, al haber sido emitidos de conformidad con el artículo 48 del Código Fiscal de la

Federación, la autoridad debió notificarlos a la parte actora, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación, vigente en los años 2011 y 2012.

En este contexto, la autoridad demandada exhibió como probanzas en su oficio de contestación de demanda de fecha 14 de octubre de 2014, el citatorio y acta de notificación de 27 y 28 de junio de 2011, respectivamente, relativos al oficio **900-05-2011-385** de fecha **21 de junio de 2011**; el citatorio y acta de notificación de 13 y 14 de septiembre de 2012, respectivamente, relativos al oficio **900 05-03-2012-54438** de fecha **13 de septiembre de 2012**; así como el citatorio y acta de notificación de 17 y 18 de diciembre de 2012, respectivamente, relativos al oficio **900-05-03-2012-69836** de fecha **17 de diciembre de 2012**. Y por lo que hace a la resolución recurrida contenida en el oficio número **900-05-2013-48229** de **25 de julio de 2013**, la actora exhibió copia certificada de dicho oficio, como probanza en su escrito inicial de demanda.

Por lo tanto, a fin de analizar la legalidad de los citatorios y actas de notificación precisados en el párrafo anterior, resulta pertinente transcribir los **artículos 13, 134, fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación**, vigentes en los años 2011, 2012 y 2013, mismos que a la letra señalan lo siguiente:

“ARTÍCULO 13.- La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se considerarán hábiles todos los días del año y las 24 horas del día.

Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular.”

“ARTÍCULO 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán:

I.- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 187 -

(...)"

"ARTÍCULO 135. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación.

La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior."

"ARTÍCULO 136.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas.

Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de este Código. Asimismo, podrán realizarse en el domicilio que hubiere designado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos.

Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aún cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.

En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos."

"ARTÍCULO 137.- Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.

Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos

legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este Código.”

De lo anterior, se advierte que las prácticas de las diligencias por las autoridades fiscales deberán efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas, aquellas diligencias de notificación iniciadas en horas hábiles podrán concluirse en hora inhábil sin afectar su validez; asimismo, las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular.

Por su parte, el artículo 135 previene el momento en que las notificaciones surten sus efectos (al día hábil siguiente en que fueron hechas) y el requisito relativo a que, al practicarlas, deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique; que los requisitos que deben colmarse cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o los terceros habilitados; y que los efectos de la manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo.

En cuanto al artículo 136, se aprecia que las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas; las cuales también se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de este Código; y que podrán realizarse en el domicilio que hubiere designado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos.

Asimismo, que toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales, y que en los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios

liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos, en los lugares en donde pueden efectuarse las notificaciones y las relativas a las sociedades en liquidación.

Finalmente, el artículo 137 establece en la parte que interesa que cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.

Que tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino; que en caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.

Que si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de ese Código.

En este mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió pronunciamiento al resolver la **Contradicción de Tesis No. 85/2009**, la cual en la parte que interesa señala lo siguiente:

“(…)

SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que se sustenta en la presente resolución.

A efecto de resolver lo conducente, conviene transcribir los artículos 134, 135, 136 y, nuevamente, el 137 del Código Fiscal de la Federación:

(...)

El artículo 134 establece los tipos de notificaciones que existen en materia fiscal, que pueden ser: Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo, por correo ordinario o por telegrama, por estrados, por edictos y por instructivo.

Por su parte, el artículo 135 previene el momento en que las notificaciones surten sus efectos (al día hábil siguiente en que fueron hechas) y el requisito relativo a que, al practicarlas, deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Asimismo, establece los requisitos que deben colmarse cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o los terceros habilitados; y los efectos de la manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo.

El artículo 136 establece los lugares en donde pueden efectuarse las notificaciones y las relativas a las sociedades en liquidación. Finalmente, el artículo 137 regula lo relativo a las notificaciones personales en materia fiscal. Al respecto dispone, como regla general, que cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.

Por otro lado, el segundo párrafo contiene una regla específica tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución. En este caso, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia **“...con quien se encuentre en el domicilio...”**, o, en su defecto, con un **“vecino”**. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.

Como se ve, el numeral anterior permite dejar el citatorio y entender la diligencia de notificación, con un tercero distinto del contribuyente o de su representante legal, en el caso de que éste no se encuentre en la primera búsqueda o no lo espere en la segunda. Esa tercera persona es reputada por la ley como aquella que se “se encuentre en el domicilio”, o bien, un “vecino”.

Lo relativo al tema del tercero fue lo que originó la presente contradicción, pues en los casos que analizaron los Tribunales contendientes, salvo el resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se advierte una constante: Las notificaciones fueron realizadas por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, quienes asentaron en las actas en que hicieron constar la entrega de los citatorios y las notificaciones posteriores respectivas, que entendieron las respectivas diligencias con determinada persona **“quien dijo ser tercero compareciente”, “quien manifestó ser tercero compareciente”, “en su carácter de tercero”, “en su carácter de tercero del contribuyente”**. (Págs. 56, 57, 94, 95, 124, 125, 126, 127, 180, 338, 339, 431 y 432 del expediente de contradicción).

Así, dos Tribunales Colegiados consideraron que, a efecto de circunstanciar debidamente las actas levantadas con motivo de la entrega del citatorio y de la posterior notificación, el funcionario

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 191 -

respectivo debió asentar, entre otros datos, la relación o vínculo que guardaba ese tercero con el contribuyente o su representante legal; y los otros dos lo consideraron innecesario. Asimismo, uno de aquellos dos primeros consideró que el tercero debía identificarse (y sólo en el caso de que no lo hiciera debía recabarse el dato relativo a la relación o vínculo), y otro lo estimó innecesario.

Ahora bien, el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación ya ha sido analizado en diversas ocasiones por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprende de las siguientes tesis de jurisprudencia:

“NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). Si bien es cierto que dicho precepto únicamente prevé la obligación del notificador de levantar razón circunstanciada de las diligencias, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y, en concreto, cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino con quien pretendan realizarse aquéllas, se negasen a recibir la notificación, también lo es que atendiendo a las características propias de las notificaciones personales, en concordancia con las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, la razón circunstanciada debe levantarse no sólo en el supuesto expresamente referido, sino también al diligenciarse cualquier notificación personal, pues el objeto de las formalidades específicas que dispone el numeral en cita permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados.”
(Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001. Tesis: 2a./J. 15/2001. Página: 494).

“NOTIFICACIÓN PERSONAL. EN LA PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA QUE EN EL ACTA RELATIVA SE ASIENTE EL NOMBRE DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, PARA PRESUMIR QUE FUE LA MISMA QUE INFORMÓ AL NOTIFICADOR SOBRE LA AUSENCIA DEL DESTINATARIO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, sostuvo que el notificador debe levantar acta circunstanciada de las razones por las cuales entendió la notificación con una persona distinta del destinatario, para lo cual deberá precisar el domicilio en el que se constituyó, los datos de quien recibió el citatorio, así como los de la persona con quien se entendió la diligencia. En relación con lo anterior, conviene precisar que conforme al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, una vez que el notificador se constituye en el domicilio del destinatario, debe requerir su

presencia, y en caso de no encontrarlo, dejar citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, fecha en la cual requerirá nuevamente la presencia del interesado, y en caso de que quien lo reciba le informe que no se encuentra presente, el notificador deberá practicar la diligencia con el informante, esto significa que la persona con quien se entiende la diligencia y la que informa son la misma, de modo que basta con que se asienten los datos de la persona con quien se entendió la diligencia, para que pueda presumirse que fue la misma que informó sobre la ausencia del destinatario.” (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007. Tesis: 2a./J. 60/2007. Página: 962).

“NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCORÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, sostuvo que el notificador debe levantar razón circunstanciada, no sólo cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino se nieguen a recibir la notificación, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, sino al diligenciar cualquier notificación personal, en atención a sus características propias, su finalidad, su eficacia y los requisitos generales de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer. Ahora bien, conforme al criterio anterior y al texto del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, al constituirse en el domicilio del interesado, el notificador debe requerir su presencia o la de su representante y, en caso de no encontrarlo, dejarle citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, ocasión esta última en la cual debe requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero si éste o su representante no aguarda a la cita, previo cercioramiento y razón pormenorizada de tal circunstancia, la diligencia debe practicarse con quien se encuentre en el domicilio o con un vecino, en su defecto. Lo anterior, porque el citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente a esperar al fedatario a la hora fijada con el apercibimiento de que, de no hacerlo, tendrá que soportar la consecuencia de su incuria, consistente en que la diligencia se entienda con quien se halle presente o con un vecino; por tanto, en aras de privilegiar la seguridad jurídica en beneficio de los particulares, debe constar en forma fehaciente que la persona citada incumplió el deber impuesto, porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho el presupuesto indispensable para que el apercibimiento legal pueda hacerse efectivo. En ese tenor, si al requerir la presencia del destinatario o de su representante, la persona que atienda al llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el fedatario debe asentarlo así en el acta relativa, a fin de que quede constancia circunstanciada de la forma por la que se cercoró de la ausencia referida.” (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007. Tesis: 2a./J. 101/2007. Página: 286).

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 193 -

De la ejecutoria de la cual derivó esta última jurisprudencia destacan las siguientes consideraciones:

“...

Sentado lo anterior, a efecto de arribar al criterio que habrá de prevalecer en este caso, debe precisarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, cuando el notificador no encuentre al destinatario o a su representante legal, le debe dejar citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, en el entendido que, de no atender al citatorio, la diligencia se practicará con quien se encuentre en el domicilio.

En relación con lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que, para la validez de la notificación, es necesario que se asiente expresamente el nombre de la persona que en un primer momento recibió el citatorio, así como de aquella con quien se entendió la diligencia, en caso de que el destinatario no haya atendido al citatorio.

Ahora bien, la notificación personal es una forma de comunicación jurídica e individualizada, cuyos requisitos formales generalmente están predeterminados en el ordenamiento jurídico que rija al acto, a fin de procurar que haya certeza de que el interesado reciba efectivamente dicha comunicación en función de los efectos jurídicos que de ella derivan, puesto que la resolución que se notifica podría afectar sus derechos e intereses.

De ahí que, dada la naturaleza e importancia de los actos a notificar, el legislador trató de establecer un conjunto de formalidades específicas para la práctica de las notificaciones personales, sin las cuales la notificación personal carecería de validez, pues para garantizar la adecuada defensa del particular, el legislador ha rodeado a las notificaciones de distintas formalidades que las provean de certeza.

Luego, si las formalidades que la ley exige para la práctica de las notificaciones personales tienen aquella finalidad, orientada a que exista certidumbre de que el interesado tendrá conocimiento de la resolución notificada o, cuando menos, que exista presunción fundada de que la resolución respectiva habrá de llegar a ser conocida por el interesado o su representante, esto último para el caso de que la notificación se realice por conducto de la persona que se halle en el domicilio; debe existir entonces, la certeza de que la notificación se efectúa en el lugar señalado para tal efecto, con el interesado o su representante legal, según corresponda; así como las circunstancias que, en su caso, hayan llevado al notificador a realizar la diligencia con persona distinta al interesado, sea un tercero que se encuentre en el domicilio o un vecino; todo ello, con el propósito de que se satisfagan los requisitos de motivación y fundamentación de los que debe estar revestido todo acto de autoridad y a fin de no provocar incertidumbre en la esfera jurídica del gobernado.

Se afirma que las circunstancias que hayan llevado al notificador a realizar la comunicación oficial por conducto de tercero deben asentarse en forma expresa y pormenorizada porque, en aras de certeza jurídica, el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación ordena que la notificación se efectúe directamente al interesado, a cuyo efecto en la primera búsqueda, si el notificador encuentra al destinatario (o al representante, en su caso) le debe practicar la notificación referida; pero si no lo encuentra, debe dejarle citatorio en el domicilio por conducto de quien esté presente, para que espere a hora fija del día hábil siguiente.

El citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente, a esperar al fedatario a la hora fijada, ya que de no hacerlo tendrán que soportar la consecuencia de su incuria, la cual consiste en que, ante su ausencia, la notificación personal se llevará a cabo por conducto de la persona que se halle presente o de un vecino.

Así, en la segunda ocasión, a la hora especificada en el citatorio, el fedatario debe también acudir en búsqueda del interesado o, en su caso, del representante. Si encuentra al destinatario, debe hacerle la notificación respectiva, pero en caso de que no ocurra así y la persona citada o su representante no aguarden a la cita, el notificador se encontrará facultado para practicar la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con un vecino.

Como se ve, con el precepto analizado se procura que la notificación se realice en forma directa al interesado o a su representante y sólo ante la inobservancia del deber de aguardar al fedatario a la hora fija precisada en el citatorio, tendrá lugar la consecuencia consistente en que la diligencia se realizará con la persona que se halle presente o con un vecino.

De manera que el citatorio conlleva el apercibimiento de que, en caso de que la persona citada o su representante no esperen al notificador a la hora fijada, la actuación se llevará a cabo con tercera persona, con el riesgo que ello implica, al quedar legalmente notificado sin que haya certidumbre total de que la comunicación oficial respectiva llegará a sus manos.

Ahora bien, para que un apercibimiento se haga efectivo, debe constar necesariamente que se satisficieron las formalidades esenciales, a fin de que la omisión de llevar a cabo la conducta ordenada por la autoridad denote, en forma fehaciente, que el interesado incumplió lo ordenado y que tal conducta justifica la aplicación de la consecuencia prevista para tal inobservancia.

De ahí que si no se hace constar que, efectivamente, la persona citada incumplió el deber impuesto (aguardar al notificador a la hora fijada en el citatorio) es claro que no se podrá estimar satisfecho el presupuesto indispensable, para que el apercibimiento legal pueda hacerse efectivo, puesto que sólo la inobservancia de aquel deber de aguardar al notificador puede generar, válidamente, la aplicación de la consecuencia a tal incumplimiento, consistente en realizar la diligencia con la persona que se halle presente en el domicilio o con un vecino.

...



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 195 -

"CITATORIO PREVIO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO. NO REQUIERE QUE SE CIRCUNSTANCIE LA FORMA EN QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORÓ DEL DOMICILIO Y LLEGÓ A TAL CONVICCIÓN. De la relación armónica de los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, y de las jurisprudencias 2a./J. 15/2001, 2a./J. 40/2006, 2a./J. 101/2007 y 2a./J. 158/2007, de rubros: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).", "NOTIFICACIÓN PERSONAL. EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER LAS FORMALIDADES PARA SU PRÁCTICA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.", "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO." y "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE ARROJAR LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTICÓ EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).", respectivamente, se advierte que la diligencia de notificación personal del acto administrativo, entre otros aspectos, debe proporcionar plena convicción de que se practicó en el domicilio del contribuyente. Ahora bien, el citatorio previo a la notificación personal que debe formular el notificador cuando no encuentre al visitado para que lo espere a una hora fija del día siguiente o para que acuda a notificarse, constituye una formalidad diversa a la obligación que debe cumplirse en las actas de notificación, en las que deben de asentarse todos los datos de circunstancia, incluyendo la forma como el notificador se cercioró del domicilio de la persona que debe notificar y tuvo convicción de ello, de acuerdo con los diversos elementos con los que cuente y según el caso concreto, de manera que es innecesario que el notificador asiente de manera circunstanciada en el mencionado citatorio previo, el modo en que se cercioró del domicilio correcto y llegó a tal convicción." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008. Tesis: 2a./J. 60/2008. Página: 501).

De las tesis y texto anteriores sobresalen las siguientes premisas:

a) Debe levantarse acta circunstanciada al diligenciarse cualquier notificación personal en materia fiscal y no sólo tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, pues el objeto de las formalidades específicas que dispone el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados.

b) La circunstanciación a que se refiere dicho numeral implica que el notificador está obligado a asentar en el acta respectiva, las razones por las cuales entendió la notificación con una persona distinta del destinatario, para lo cual deberá precisar el domicilio en el que se constituyó, los datos de quien recibió el citatorio, así como los de la persona con quien se entendió la diligencia, presumiéndose que la persona con quien se entiende la diligencia y la que informa son la misma, de modo que basta con que se asienten los datos de la persona con quien se entendió la diligencia, para que pueda presumirse que fue la misma que informó sobre la ausencia del destinatario.

c) El citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente a esperar al fedatario a la hora fijada con el apercibimiento de que, de no hacerlo, tendrá que soportar la consecuencia de su incuria, consistente en que la diligencia se entienda con quien se halle presente o con un vecino; por tanto, en aras de privilegiar la seguridad jurídica en beneficio de los particulares, debe constar en forma fehaciente que la persona citada incumplió el deber impuesto, porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho el presupuesto indispensable para que el apercibimiento legal pueda hacerse efectivo.

d) Si al requerir la presencia del destinatario o de su representante, la persona que atiende al llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el fedatario debe asentarlo así en el acta relativa, a fin de que quede constancia circunstanciada de la forma por la que se cercioró de la ausencia referida.

e) El citatorio previo a la notificación personal que debe formular el notificador cuando no encuentre al visitado para que lo espere a una hora fija del día siguiente o para que acuda a notificarse, constituye una formalidad diversa a la obligación que debe cumplirse en las actas de notificación, en las que deben de asentarse todos los datos de circunstancia, incluyendo la forma como el notificador se cercioró del domicilio de la persona que debe notificar y tuvo convicción de ello, de acuerdo con los diversos elementos con los que cuente y según el caso concreto.

Como se advierte de lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, tales alcances que permitan hacer efectiva la garantía de seguridad jurídica a los sujetos a quienes deba notificarse ***“...entendida como el valor que se refiere a los órganos que crean los procedimientos, a la interpretación y aplicación del derecho, que permite dotar de certeza a la actuación de la administración tributaria, poniendo freno a su posible arbitrariedad.”***, según reza una parte de la ejecutoria que originó a la primera de las tesis invocadas.

A efecto de salvaguardar esa garantía, en las tesis transcritas se ha establecido una constante: La de que las actas relativas a la notificación deben circunstanciarse debidamente. Específicamente, en cuanto al tema que interesa, en la tesis citada en segundo lugar (2a./J. 60/2007) se establece, por un lado, que el notificador debe levantar acta circunstanciada de las razones por las cuales entendió la notificación con una persona distinta del destinatario, para lo cual deberá precisar el domicilio en el que se constituyó, los datos de quien recibió el citatorio, así como los de la persona con quien se entendió la diligencia y, por otro, que en caso de que quien lo reciba le informe que no se encuentra presente, el notificador deberá practicar la diligencia con el informante, lo cual significa que

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 197 -

la persona con quien se entiende la diligencia y la que informa son la misma, de modo que basta con que se asienten los datos de ésta, para que pueda presumirse que fue la misma que informó sobre la ausencia del destinatario.

Del párrafo anterior se observa que, cuando la diligencia de notificación se entiende con **"... la persona que se encuentre en el domicilio..."**, o bien, con **"...un vecino..."**, es decir, un tercero, es necesario que el diligenciario asiente en las actas respectivas los datos de aquél a efecto de cumplir con la debida circunstanciación de ellas.

La palabra "dato", según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (vigésima primera edición, Madrid, 1992, página 663), significa: **"1. Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. 2. Documento, testimonio, fundamento. 3. Inform. Representación de una información de manera adecuada para su tratamiento de un ordenador."**

De acuerdo con la definición anterior y de lo que ha interpretado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, los datos que debe obtener el notificador son aquellos fundamentos o antecedentes que sean aptos para identificar al tercero, de donde deriva que la legalidad de una diligencia de notificación se sustenta entonces en los datos objetivos que se plasmen y que permitan tener la certeza de que el funcionario realizó la diligencia en el lugar indicado y que buscó al interesado; sin embargo, no puede exigirse que sean, necesariamente, aquéllos que establezcan la relación o vínculo que guarda ese tercero con el interesado, ni tampoco que exprese la razón del por qué se encuentra en el domicilio, como lo refirió uno de los Tribunales Colegiados contendientes, menos aún el de que se le exija una identificación determinada, por la simple y sencilla razón de que no lo establece así la codificación de la materia.

Así pues, la expresión **"persona que se encuentre en el domicilio"** (o sea, el tercero con el que se entienden las diligencias), no puede entenderse como cualquier persona, ya que no puede soslayarse que en el establecimiento o domicilio las personas pueden estar de forma permanente, habitual, temporal o accidental. No podría suponerse que una persona que está de forma circunstancial o accidental en el domicilio sea apta para informar sobre el paradero del contribuyente o de su representante legal, ni, mucho menos, para recibir el citatorio para la práctica de la diligencia; por ello, ésta no puede entenderse con cualquier persona, sino sólo con aquélla que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que informará sobre el documento a su destinatario. Por esta razón, es innegable que el notificador debe asegurarse de que el tercero que se halle en el domicilio no está allí por circunstancias accidentales. Por tanto, en el concepto de **"persona que se encuentre en el domicilio"**, podrían quedar incluidas desde las personas que habitan en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo).

Por tanto, a efecto de circunstanciar el acta de notificación en el caso que interesa, es necesario que el notificador asiente datos que objetivamente permitan concluir que la diligencia se practicó en el domicilio señalado, que se buscó al contribuyente o su representante y que ante la ausencia de éstos se entendió la diligencia con quien se concentraba en el domicilio, es decir, un vecino o un tercero, entendido éste en los términos de los párrafos anteriores. En este caso, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón de por qué está en el lugar o su relación con el interesado, pues quedó visto que no está constreñido a ello, se requerirá que el notificador asiente diversos datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que abrió la puerta o que atiende la oficina porque se encontraba detrás de un escritorio u otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva, es decir, datos objetivos que lleven a concluir que el notificador realmente se constituyó en el domicilio, se cercioró de que es lugar buscado y que ante la ausencia del interesado entendió la diligencia con quien se encontraba en el lugar, circunstanciando estos hechos en la forma indicada.

Lo anterior significa que, para considerar que las actuaciones respectivas cumplen con la garantía de la debida fundamentación y motivación, no basta que el notificador asiente simplemente que las entendió con ***"quien dijo ser tercero compareciente"***, o frases similares, sino que debe circunstanciarlas debidamente, en los términos que anteceden.

(...)"

De la transcripción que antecede, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis No. 85/2009, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Octavo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, señaló que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, ya ha sido analizado en diversas ocasiones, bajo el tenor de las tesis jurisprudenciales, cuyos rubros se citan a continuación:

"NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001. Tesis: 2a./J. 15/2001. Página: 494).

"NOTIFICACIÓN PERSONAL. EN LA PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA QUE EN EL ACTA RELATIVA SE

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 199 -

ASIENTE EL NOMBRE DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, PARA PRESUMIR QUE FUE LA MISMA QUE INFORMÓ AL NOTIFICADOR SOBRE LA AUSENCIA DEL DESTINATARIO. (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007. Tesis: 2a./J. 60/2007. Página: 962).

“NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO. (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007. Tesis: 2a./J. 101/2007. Página: 286).

“CITATORIO PREVIO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO. NO REQUIERE QUE SE CIRCUNSTANCIE LA FORMA EN QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORÓ DEL DOMICILIO Y LLEGÓ A TAL CONVICCIÓN. (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008. Tesis: 2a./J. 60/2008. Página: 501).

Asimismo, que de las tesis y razonamientos que anteceden sobresalen las siguientes premisas:

a) Debe levantarse acta circunstanciada al diligenciarse cualquier notificación personal en materia fiscal y no sólo tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, pues el objeto de las formalidades específicas que dispone el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados.

b) La circunstanciación a que se refiere dicho numeral implica que el notificador está obligado a asentar en el acta respectiva, las razones por las cuales entendió la notificación con una persona distinta del destinatario, para lo cual deberá precisar el domicilio en el que se constituyó, los datos de quien recibió el citatorio, así como los de la persona con quien se entendió la diligencia, presumiéndose que la persona con quien se entiende

la diligencia y la que informa son la misma, de modo que **basta con que se asienten los datos de la persona con quien se entendió la diligencia**, para que pueda presumirse que fue la misma que informó sobre la ausencia del destinatario.

c) El citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente a esperar al fedatario a la hora fijada con el apercibimiento de que, de no hacerlo, tendrá que soportar la consecuencia de su incuria, consistente en que la diligencia se entienda con quien se halle presente o con un vecino; por tanto, en aras de privilegiar la seguridad jurídica en beneficio de los particulares, debe constar en forma fehaciente que la persona citada incumplió el deber impuesto, porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho el presupuesto indispensable para que el apercibimiento legal pueda hacerse efectivo.

d) Si al requerir la presencia del destinatario o de su representante, la persona que atiende al llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el fedatario debe asentarlo así en el acta relativa, a fin de que quede constancia circunstanciada de la forma por la que se cercioró de la ausencia referida.

e) El citatorio previo a la notificación personal que debe formular el notificador cuando no encuentre al visitado para que lo espere a una hora fija del día siguiente o para que acuda a notificarse, constituye una formalidad diversa a la obligación que debe cumplirse en las actas de notificación, en las que deben de asentarse todos los datos de circunstancia, incluyendo la forma como el notificador se cercioró del domicilio de la persona que debe notificar y tuvo convicción de ello, de acuerdo con los diversos elementos con los que cuente y según el caso concreto.

Que cuando la diligencia de notificación se entiende con "... la persona que se encuentre en el domicilio...", o bien, con "...un vecino...", es decir, un tercero, es necesario que el diligenciario asiente en las actas respectivas los datos de aquél a efecto de cumplir con la debida circunstanciación de ellas.

Que la palabra "dato", según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (vigésima primera edición, Madrid, 1992, página 663), significa: **"1. Antecedente necesario para llegar al**



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 201 -

conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. 2. Documento, testimonio, fundamento. 3. Inform. Representación de una información de manera adecuada para su tratamiento de un ordenador.”

Que de acuerdo con la definición anterior y de lo que ha interpretado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, los datos que debe obtener el notificador son aquellos fundamentos o antecedentes que sean aptos para identificar al tercero, de donde deriva que la legalidad de una diligencia de notificación se sustenta entonces en los datos objetivos que se plasmen y que permitan tener la certeza de que el funcionario realizó la diligencia en el lugar indicado y que buscó al interesado; sin embargo, no puede exigirse que sean, necesariamente, aquéllos que establezcan la relación o vínculo que guarda ese tercero con el interesado, ni tampoco que exprese la razón del por qué se encuentra en el domicilio, como lo refirió uno de los Tribunales Colegiados contendientes, menos aún que se le exija una identificación determinada, por la simple y sencilla razón que no lo establece así la codificación de la materia.

Asimismo, que la expresión ***“persona que se encuentre en el domicilio”*** (o sea, el tercero con el que se entienden las diligencias), no puede entenderse como cualquier persona, ya que no puede soslayarse que en el establecimiento o domicilio las personas pueden estar de forma permanente, habitual, temporal o accidental. No podría suponerse que una persona que está de forma circunstancial o accidental en el domicilio sea apta para informar sobre el paradero del contribuyente o de su representante legal, ni, mucho menos, para recibir el citatorio para la práctica de la diligencia; por ello, ***ésta no puede entenderse con cualquier persona, sino sólo con aquélla que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que informará sobre el documento a su destinatario;*** que por esta razón, es innegable que el notificador debe asegurarse de que el tercero que se halle en el domicilio no está allí por circunstancias accidentales. Por tanto, en el concepto de ***“persona que se encuentre en el domicilio”***, podrían quedar incluidas desde las personas que habitan en el domicilio (familiares o

empleados domésticos) hasta las que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo).

Que, por lo tanto a efecto de circunstanciar el acta de notificación en el caso que interesa, es necesario que el notificador asiente datos que objetivamente permitan concluir que la diligencia se practicó en el domicilio señalado, que se buscó al contribuyente o su representante y que ante la ausencia de éstos se entendió la diligencia con quien se concentraba en el domicilio, es decir, un vecino o un tercero, entendido éste en los términos de los párrafos anteriores. En este caso, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón de por qué está en el lugar o su relación con el interesado, pues quedó visto que no está constreñido a ello, se requerirá que el notificador asiente diversos datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que abrió la puerta o que atiende la oficina porque se encontraba detrás de un escritorio u otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva, es decir, datos objetivos que lleven a concluir que el notificador realmente se constituyó en el domicilio, se cercioró de que es el lugar buscado y que ante la ausencia del interesado entendió la diligencia con quien se encontraba en el lugar, circunstanciando estos hechos en la forma indicada.

Lo anterior dio origen a la Jurisprudencia número **2a./J.82/2009**, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de julio de 2002, la cual a la letra señala lo siguiente:

“NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO. Para cumplir con el requisito de circunstanciación, es necesario que el notificador asiente en el acta relativa datos que objetivamente permitan concluir que practicó la diligencia en el domicilio señalado, que buscó al contribuyente o a su representante y que ante la ausencia de éstos entendió la diligencia con dicho tercero, entendido éste como la persona que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que informará sobre el documento a su destinatario, para lo cual el

notificador debe asegurarse de que ese tercero no está en el domicilio por circunstancias accidentales, quedando incluidas en ese concepto desde las personas que habitan en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo). Además, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón por la cual está en el lugar o su relación con el interesado, el diligenciario deberá precisar las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

Contradicción de tesis 85/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del Octavo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 27 de mayo de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco García Sandoval. Tesis de jurisprudencia 82/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de junio de dos mil nueve."

Bajo esa tesitura, a efecto de considerar que una diligencia de notificación es legal, el notificador debe cumplir con las formalidades que establece el **artículo 137 del Código Fiscal de la Federación**, mismas que deben circunstanciarse en el acta de notificación que al efecto se levante.

Lo anterior, se traduce en que el notificador debe cumplir con el requisito de circunstanciación, para lo cual es necesario que en el acta de notificación pormenorice los hechos y datos que objetivamente permitan concluir que se cumplieron con las formalidades que dispone el **artículo 137 del Código Fiscal de la Federación**, ello en aras de dar cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia jurídica de los actos administrativos, establecidos en los **artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, así como el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los particulares.

Por lo tanto, los elementos que debe circunstanciar el notificador al momento de llevar a cabo las diligencias, son los siguientes:

- a) Que se constituyó en el domicilio de la persona buscada.
- b) Que se cercioró de estar en el domicilio correcto.
- c) Que requirió la presencia del representante legal del contribuyente o su representante, y que ante la ausencia de éstos, la diligencia se entendió con un tercero.
- d) Circunstanciar la forma por la que se cercioró de la ausencia referida.
- e) En relación al tercero con quien entendió la diligencia, que el mismo no se encontraba en el domicilio por circunstancias accidentales, quedando incluidas en ese concepto desde las personas que habitan en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo).
- f) Que en caso de que el tercero no proporcione su nombre, no se identifica, ni señala la razón por la cual está en el lugar o su relación con el interesado, el diligenciario deberá precisar las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que indubitablemente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

En el caso concreto, se estima oportuno tener presente en primer lugar, tanto el citatorio de fecha **27 de junio de 2011**, como su Acta de notificación de fecha **28 de junio de 2011**, mediante la cual se notificó el oficio número **900-05-2011-385** de fecha **21 de junio de 2011**, exhibidas en copia certificada por la autoridad demandada, adquiriendo pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los diversos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, mismas que son del tenor siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 205 -

CITATORIO
DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2011.

1090

0872



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Asunto: CITATORIO

México, D.F., 27 de junio de 2011.

"2011, Año del Turismo en México"

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:



Siendo las 13:00 horas del 27 de junio de 2011, el C. Mario Salinas Pérez, Notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, D.F., de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2011-50 del 11 de febrero de 2011, con vigencia del 11 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, emitida por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en: [Redacted] entre las calles de: [Redacted];

inmueble que cuenta con las siguientes características: [Redacted]
y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal de la contribuyente a notificar, por coincidir con el señalado en el oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011 y con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, que contiene los datos de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, y por haberse preguntado a la persona con la que se atiende la diligencia quien dijo llamarse [Redacted] misma(o) que se identifica con CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE. Folio [Redacted] que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en: [Redacted] quien conieto que el domicilio es el correcto; se requirió la presencia del C. Representante Legal de [Redacted] y al no haberlo encontrado, POR FALTA EN JUNTA DE TRABAJO

se procedió a dejar el presente citatorio con (el) o (la) C. [Redacted] en su carácter de tercero, identificándose con CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE Folio [Redacted]

quien se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con la contribuyente de: TERCERO
estatura aprox. [Redacted] complexión [Redacted] tez color [Redacted] cuva media filiación es: [Redacted] ojos [Redacted] edad aprox. [Redacted] cabello [Redacted] señalando además que se encuentra en el lugar en virtud de que ESTO CORRESPONDE CON SU HORARIO DE TRABAJO

a efecto de que el C. REPRESENTANTE LEGAL DE [Redacted] esté presente el día 29 de junio de 2011 a las 11:00 horas en el domicilio citado, a fin de notificarle el oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, firmado por el Lic. Edgar López Hicks, Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente; mediante el que se le requiere que presente la información y documentación que se indica, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006; advirtiéndole que de no estar presente en la hora y fecha señalada, la diligencia se entenderá con quien se encuentre presente en el domicilio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 136 y 137, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

RECIBÍ CITATORIO PARA
ENTREGARLO AL DESTINATARIO

NOTIFICADOR

R.F.C.: BILAG50925

C. Mario Salinas Pérez.
R.F.C.: SAPM670213

ACTA DE NOTIFICACIÓN
DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2011.



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

ESTADÍSTICA DE INGRESOS
Y EGRESOS FISCAL



DATOS GENERALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

"2011, Año del Turismo en México"

R.F.C.:

CONTRIBUYENTE:

DOMICILIO FISCAL:

COLONIA:

LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA:

OFICIO: 900-05-2011-385

DE FECHA: 21 DE JUNIO DE 2011.

ACTA DE NOTIFICACIÓN

Siendo las 11:00 horas del 28 de junio de 2011, el C. Mario Salinas Pérez, Notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, D.F., de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2011-50 del 11 de febrero de 2011, con vigencia del 11 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, emitida por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en:

entre las calles de:

GOMEZ

inmueble que cuenta con las siguientes características:

y cerciorándose que

este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, por coincidir con el señalado en el oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011 y con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, que contiene los datos de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, y por haberse preguntado a la persona con la que se atiende la diligencia, quien dijo llamarse

misma que se identifica con: CARDENAS PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en:

y haber contestado esta última, que el domicilio es el correcto, se requirió la presencia del C. REPRESENTANTE LEGAL DE y preguntado si éste se encontraba presente, (el) o (la) C. contestó de manera expresa que el C. Representante Legal de no se encontraba presente, por lo tanto no podía atender esta diligencia y al no haber atendido el citatorio del 27 DE JUNIO DE 2011

que se le dejó con (el) o (la) C. y ante su ausencia, en esta fecha se notifica a (el) o (la) C. en su carácter de tercero, con cargo de TERCERO (el) o (la) cual se identificó con: CARDENAS PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO

quien se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con el Contribuyente de TERCERO cuya media filiación es: estatura aprox. compleción tez color cabello ojos edad aprox. señalando además que se encontraba en el lugar en virtud de que ESTA CUMPLE CON SU HORARIO DE TRABAJO

el oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, firmado por el Lic. Edgar López Hicks, Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente; mediante el que se le requiere que presente la información y documentación que se indica, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

Continúa en hoja 2



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 207 -



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



Hoja 2.

Con fundamento en los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación vigente; 1, 2, 3, 4 y 7, primer párrafo, fracciones VII, XII y XVIII, 8, primer párrafo, fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1º de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracciones XXXVII, LII y penúltimo párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción IX, Apartado B, fracción II; quinto párrafo en la parte que establece: "La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que adelante se señalan." y sexto párrafo, numeral 5, correspondiente al "Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente", y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, cuya vigencia inició el 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del mismo Decreto, modificado por Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010, en vigor a partir del 30 de abril de 2010, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio; y conforme a lo dispuesto por el artículo 135 del mencionado Código, se le entrega el original con firma autógrafa del oficio antes mencionado, así como copia de la presente acta y en cumplimiento al artículo 2, primer párrafo, fracción XII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente vigente, en este mismo acto se le entrega un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado vigente, la cual contiene sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley antes citada.

NOTIFICADO

Previa lectura del presente documento y enterado de su contenido, asiento de puño y letra, mi nombre y firma a los 19 días del mes de junio de 2011.

NOTIFICADOR

(NOMBRE Y FIRMA)

R.F.C.:

C. Mario Samiás Pérez.
R.F.C.: SAPM670213

Del **citatorio de fecha 27 de junio de 2011**, se advierte que el notificador asentó que se constituyó legalmente a las 13:00 horas en el domicilio ubicado en: "***** ** *** ** * ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****" señalando que dicho domicilio se encuentra entre las calles de ***** ***** ** * ***** ***** cerciorándose de ser el domicilio correcto de la empresa demandante, por coincidir con el señalado en el oficio número 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, toda vez que dicho domicilio contaba con las siguientes características: Nave Industrial color gris, rejas en color amarillo y por coincidir con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente.

Asimismo, se cercioró de ser el domicilio correcto, por habérselo preguntado a la persona que atendió la diligencia quien dijo llamarse ***** quien se identificó con credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, Folio *****, que contenía la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, y su domicilio ubicado en "*****" quien señaló que el domicilio de la contribuyente era el correcto.

Del mismo modo, el notificador requirió la presencia del representante legal de ***** (ahora *****), y al no haberle encontrado por “estar en junta de trabajo”, procedió a dejar el presente citatorio con la C. ***** misma que, como se señaló anteriormente, se identificó ante el notificador; asimismo, asentó que dicha persona se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con la contribuyente de “tercero”.

Al respecto, el notificador asentó los rasgos físicos de la tercero, de la siguiente forma: "estatura aprox: **** *****; complexión: *****; tez *****; cabello *****; ojos *****; edad aprox: ** años".

También, el notificador asentó que la persona de nombre ***** (tercero) se encontraba en el lugar, en virtud de que estaba cumpliendo con su horario de trabajo.

Además, en relación a su adscripción e identificación, el notificador asentó lo siguiente: *"...el C. Mario Salinas Pérez, Notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2011-50 del 11 de febrero de 2011, con vigencia del 11 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, emitida por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente..."*

Por lo que, el notificador dejó citatorio para que el día hábil siguiente el representante de la hoy parte actora, se presentara en el domicilio antes señalado el día 28 de junio de 2011, a las 11:00 horas, a fin de notificarle el oficio número 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, bajo el apercibimiento que de no estar presente en la hora y fecha señalada, la diligencia se entendería con quien se encontrara presente en el domicilio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 136 y 137, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el año 2011; firmando el citatorio en comento los intervinientes para su constancia.

En relación al **acta de notificación de fecha 28 de junio de 2011**, se advierte que el notificador asentó que se constituyó legalmente a las 11:00 horas en el domicilio de la hoy actora ubicado en: *"******
**** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ******
******"* señalando que dicho domicilio se encuentra entre las calles de *"******
****** ***** ***** ***** ****** cerciorándose de ser el domicilio correcto de la empresa demandante, por coincidir con el señalado en el oficio número 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, y por coincidir con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, del mismo modo, asentó que dicho domicilio contaba con las siguientes características: Nave Industrial color gris, rejas en color amarillo.

Asimismo, se cercioró de ser el domicilio correcto, por habérselo preguntado a la persona que atendió la diligencia quien dijo

llamarse ***** quien se identificó con credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, Folio *****, que contenía la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, y su domicilio ubicado en "*****" quien señaló que el domicilio de la contribuyente era el correcto.

Del mismo modo, el notificador requirió la presencia del representante legal de ***** (ahora *****), y preguntó a la C. ***** si se encontraba presente dicho representante legal, a lo que contestó de manera expresa que **no se encontraba presente**.

En consecuencia, ante dicha ausencia, notificó a la C. ***** en su carácter de tercero, misma que, como se señaló anteriormente, se identificó ante el notificador; asimismo, asentó que dicha persona se encontraba en el **interior del domicilio** y que tiene relación con la contribuyente de "tercero".

Al respecto, el notificador asentó los rasgos físicos de la tercero, de la siguiente forma: "estatura aprox: ****; complexión: *****; tez *****; cabello *****; ojos *****; edad aprox: ** años".

También, el notificador asentó que la persona de nombre ***** (tercero) se encontraba en el lugar, en virtud de que estaba cumpliendo con su horario de trabajo.

Además, en relación a su adscripción e identificación, el notificador asentó lo siguiente: "...el C. Mario Salinas Pérez, Notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2011-50 del 11 de febrero de 2011, con vigencia del 11 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, emitida por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente..."

Por lo que, se notificó el oficio número **900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011**, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, mediante el que se le requirió a la hoy actora que presentara la información y documentación indicada en el oficio de referencia, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

También, asentó que el acta de notificación de referencia, fue emitida con fundamento en los siguientes artículos: *“134, primer párrafo, fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación vigente; 1, 2, 3, 4 y 7, primer párrafo, fracciones VII, XII y XVIII, 8, primer párrafo, fracción III, Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1° de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de marzo de 2009, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracciones XXXVII, LII y penúltimo párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción IX, Apartado B, fracción II; quinto párrafo en la parte que establece “La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que adelante se señalan” y sexto párrafo, numeral 5, correspondiente al “Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente”, y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, cuya vigencia inició el 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del mismo Decreto, modificado por Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010, en vigor a partir del 30 de abril de 2010, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio.”*

Finalmente, asentó que el oficio 900-05-2011-385 fue entregado en original con firma autógrafa de conformidad con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011, así como copia de la presente acta y en cumplimiento al artículo 2, primer párrafo, fracción XII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente vigente en 2011, se le entregó un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado vigente en 2011, la cual contiene sus derechos y obligaciones establecidos en la ley citada; firmando el acta de notificación en comento los intervinientes para su constancia.

En ese orden de ideas, el citatorio de fecha **27 de junio de 2011** y el acta de notificación de fecha **28 de junio de 2011**, se ajustaron a los requisitos legales, que establece el **artículo 137 del Código Fiscal de la Federación**, en virtud de que dichas diligencias fueron circunstanciadas de manera pormenorizada por la persona notificadora, pues de las mismas se advierte claramente lo siguiente:

- [illegible]

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 213 -

votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, Folio ******, que contenía la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, y su domicilio ubicado en ***** y se asentaron los rasgos físicos de la tercero, de la siguiente forma: "estatura aprox: *****; complexión: *****; tez *****; cabello *****; ojos *****; edad aprox: ** años".

- d) Circunstanció la forma por la que se cercioró de la ausencia del representante legal de la contribuyente, ya que en el citatorio de 27 de junio de 2011 se asentó que no fue encontrado por estar en junta de trabajo y en el acta de notificación de 28 de junio de 2011 se asentó que la C. ***** contestó expresamente que no se encontraba presente.
- e) En relación a la tercero con quien entendió las diligencias, asentó tanto en el citatorio como en el acta de referencia, que se encontraba al interior del domicilio de la contribuyente, señalando que se encontraba en el lugar en virtud de que estaba cumpliendo con su horario de trabajo. Por lo tanto, se advierte que dicha tercero no se encontraba en el domicilio por circunstancias accidentales.
- f) En tal virtud, toda vez que la tercero proporcionó su nombre (*****), se identificó, señaló la razón por la cual estaba en el lugar y su relación con el interesado; resulta innecesario que el diligenciario precisara las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que indubitablemente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda

como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

En consecuencia, esta Juzgadora advierte que el citatorio de fecha **27 de junio de 2011** y el acta de notificación de fecha **28 de junio de 2011**, relativas al oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, cumplieron con los requisitos de circunstanciación sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y que fueron expuestas previamente), por lo tanto, se concluye que se cumplieron con las formalidades que dispone el **artículo 137 del Código Fiscal de la Federación**, ello en aras de dar cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia jurídica de los actos administrativos, establecidos en los **artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, así como el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los particulares.

Ahora bien, a fin de analizar si el citatorio de fecha **13 de septiembre de 2012** y del acta de notificación de fecha **14 de septiembre de 2012**, relativos al oficio número **900 05-03-2012-54438 de fecha 12 de septiembre de 2012**, atendieron las formalidades previstas en los artículos 13, 134, fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2012 (transcritos con anterioridad),

Esta Juzgadora estima conveniente tener presente el citatorio de fecha 13 de septiembre de 2012 y el acta de notificación de fecha 14 de septiembre de 2012, mismas que fueron exhibidas en copia certificada por la autoridad demandada, adquiriendo pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los diversos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, mismas que son del tenor siguiente:

**CITATORIO
DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012.**



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 215 -



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

0037
0096

0036



Asunto: CITATORIO

México, D.F., 13 de septiembre de 2012.

C. Representante Legal de:

antes

Siendo las 17:45 horas del 13 de septiembre de 2012, el C. Jaime Ortiz Sandoval, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-7682 del 01 de febrero de 2012, con vigencia del 01 de febrero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en:

entre las calles de:

inmueble que cuenta con las siguientes características:

Verificándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, por coincidir con el señalado en el oficio 00 05-03-2012-54438 del 13 de septiembre de 2012 y con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, que contiene los datos de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, y por haberse preautenticado a la persona con la que se atiende la diligencia quien dijo llamarse

misma que se identifica con

para confirmar tipo A Do.

que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en:

quien contestó que el domicilio es el correcto, se requirió la presencia del C. Representante Legal de

antes

y al no haberse encontrado,

en este momento, se procedió a dejar el presente citatorio con (el) o (la)

en su carácter de tercero, identificándose con

para confirmar tipo A Do.

quien se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con la contribuyente de

servicio profesionales sin aval. parte

cuva media filiación es:

estatura aprox. / ojos / complexión / tez color / cabello

señalando además que se encuentra en el lugar en virtud de que

a efecto de que el C. REPRESENTANTE LEGAL

DE

antes

está presente el día 14 de

septiembre de 2012 a las 12:00 horas en el domicilio citado, a fin de notificarle el oficio 900 05-03-2012-54438 del 13

de septiembre de 2012, firmado por el Lic. Mauricio Ayala Orozco, Administrador de Fiscalización a Empresas que

Consolidan Fiscalmente "3"; mediante el que se le requiere que presenten los informes, datos y documentos

complementarios, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006. Si el

Representante Legal no esperare, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio fiscal.

El presente citatorio se emite con fundamento en los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135 y 137, primer párrafo del

Código Fiscal de la Federación vigente.

RECIBÍ CITATORIO PARA

ENTREGARLO AL DESTINATARIO

R.F.C.:

NOTIFICADOR

C. Jaime Ortiz Sandoval.
R.F.C.: OISJ631011

Av. Hidalgo N° 77, Módulo III, Planta Baja, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, 06300, México, D.F./ Teléfono 58-02-24-62/ www.sat.gob.mx

ACTA DE NOTIFICACIÓN
DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

0097

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



0037

DATOS GENERALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

R.F.C.:

CONTRIBUYENTE:

DOMICILIO FISCAL:

COLONIA:

LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA:

OFICIO: 900 05-03-2012-54438

DE FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

ACTA DE NOTIFICACIÓN

Siendo las 12:00 horas del 14 de septiembre de 2012, el C. Jaime Ortiz Sandoval, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-7682 del 01 de febrero de 2012, con vigencia del 01 de febrero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en:

entre las calles de:

inmueble que cuenta con las siguientes características:

y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, por coincidir con el señalado en el oficio 900 05-03-2012-54438 del 13 de septiembre de 2012 y con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, que contiene los datos de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, y por haberse preguntado a la persona con la que se atiende la diligencia, quien dijo llamarse [redacted] mismo(a) que se identifica con:

que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en:

y haber contestado esta última, que el domicilio es el correcto, se requirió la presencia del C. REPRESENTANTE LEGAL DE [redacted] antes [redacted] (el) o (la) [redacted], contesto de manera expresa que el C. Representante Legal no se encontraba presente, por lo tanto no podía atender esta diligencia y al no haber atendido el citatorio del 13 de septiembre de 2012 que se le dejó con (él) o (la) C. [redacted] y ante su ausencia, en esta fecha se notifica a (él) o (la) C. [redacted]

en su carácter de tercero, con cargo de [redacted] el cual se identificó con: [redacted]

[redacted] quien se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con el Contribuyente de [redacted] cuya media filiación es: estatura aprox. [redacted] complexión [redacted] tez color [redacted] cabello [redacted] ojos [redacted] edad aprox. [redacted] señalando además que se encontraba en el lugar en virtud de que [redacted] el oficio 900 05-03-2012-54438 del 13 de septiembre de 2012, firmado por el Lic. Mauricio Ayala Orozco, Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3", mediante el que se le requiere que presenten los informes, datos y documentos complementarios, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

Continúa en hoja 2...



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 217 -



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Hoja 2.

Con fundamento en los artículos 134, primer párrafo, fracción I y 136 del Código Fiscal de la Federación vigente; 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., fracciones I, VII, XII y XVIII, 8o., fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1o. de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1o., 2o., primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción XIV, Apartado B, fracción II; párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 5, y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos y conforme a lo dispuesto por el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, se le entrega el original con firma autógrafa del oficio antes mencionado y copia de la presente acta de notificación.

NOTIFICADO

Previa lectura del presente documento y enterado de su contenido, asiento de puño y letra, mi nombre y firma a los 14 días del mes de septiembre de 2012.

(NOMBRE Y FIRMA)

R.F.C.:

NOTIFICADOR

C. Jaime Ortiz Sandoval.

R.F.C.: OISJ631011

Av. Hidalgo N° 77, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06900, México, D.F. / Teléfono 56-02-24-62 / www.sat.gob.mx

Del citatorio de fecha 13 de septiembre de 2012, se advierte que el notificador asentó que se constituyó legalmente a las 17:45 horas en el domicilio ubicado en: "*****

***** señalando que

dicho domicilio se encuentra entre las calles de *****
***** cerciorándose de ser el domicilio correcto de la empresa demandante, por coincidir con el señalado en el oficio número 900 05-03-2012-54438 del 13 de septiembre de 2012, y por coincidir con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, del mismo modo, asentó que dicho domicilio contaba con las siguientes características: Nave Industrial color gris, bordes en color amarillo.

Asimismo, se cercioró de ser el domicilio correcto, por habérselo preguntado a la persona que atendió la diligencia quien dijo llamarse ***** quien se identificó con licencia para conducir tipo * No. *****, que contenía la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, y su domicilio ubicado en "*****" quien señaló que el domicilio de la contribuyente era el correcto.

Del mismo modo, el notificador requirió la presencia del representante legal de ***** (ahora *****), y al no haberle encontrado por "no estar al momento en su domicilio fiscal", procedió a dejar el presente citatorio con la C. ***** misma que, como se señaló anteriormente, se identificó ante el notificador; asimismo, asentó que dicha persona se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con la contribuyente de "prestar sus servicios profesionales sin acreditarlo".

Al respecto, el notificador asentó los rasgos físicos de la persona con quien entendió la diligencia, de la siguiente forma: "estatura aprox: *****, compleción: *****, tez color *****, cabello *****, ojos *****, edad aprox: ** años".

También, el notificador asentó que la persona de nombre ***** (tercero) se encontraba en el lugar, en virtud de que presta sus servicios profesionales sin acreditarlo.

Además, en relación a su adscripción e identificación, el notificador asentó lo siguiente: "...el C. Jaime Ortiz Sandoval, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 219 -

Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-7682 del 01 de febrero de 2012, con vigencia del 01 de febrero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente...”

Por lo que, el notificador dejó citatorio para que el día hábil siguiente el representante de la hoy parte actora, se presentara en el domicilio antes señalado el día 14 de septiembre de 2012, a las 12:00 horas, a fin de notificarle el oficio número 900 05-03-2012-54438 del 13 de septiembre de 2012, bajo el apercibimiento de que si el representante legal no esperare, se practicaría la diligencia con quien se encontrara en el domicilio fiscal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135 y 137, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el año 2012; firmando el citatorio en comento los intervinientes para su constancia.

En relación al **acta de notificación de fecha 14 de septiembre de 2012**, se advierte que el notificador asentó que se constituyó legalmente a las 12:00 horas en el domicilio de la hoy actora ubicado en:

***** señalando que dicho domicilio se encuentra entre las calles de ***** cerciorándose de ser el domicilio correcto de la empresa demandante, por coincidir con el señalado en el oficio número 900 05-03-2012-54438 del 13 de septiembre de 2012, y por coincidir con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, del mismo modo, asentó que dicho domicilio contaba con las siguientes características: Nave Industrial color gris, bordes en color amarillo.

Asimismo, se cercioró de ser el domicilio correcto, por habérselo preguntado a la persona que atendió la diligencia quien dijo llamarse ***** quien se identificó con licencia para conducir tipo * No. *****, que contenía la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, quien señaló que el domicilio de la contribuyente era el correcto.

Del mismo modo, el notificador requirió la presencia del representante legal de ***** (antes *****), y preguntó a la C. ***** si se encontraba presente dicho representante legal, a lo que contestó de manera expresa que **no se encontraba presente**.

En consecuencia, ante dicha ausencia, notificó a la C. ***** en su carácter de tercero, con cargo de administrativo, el oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, y asentó que dicha persona se encontraba en el **interior del domicilio** y que tiene relación con la contribuyente de "prestar sus servicios profesionales sin acreditarlo".

Al respecto, el notificador asentó los rasgos físicos de la tercero, de la siguiente forma: "estatura aprox: **** metros; compleción: *****; tez color *****; cabello *****; ojos color ****; edad aprox: ** años".

También, el notificador asentó que la persona de nombre ***** (tercero) se encontraba en el lugar, en virtud de que presta sus servicios profesionales sin acreditarlo.

Además, en relación a su adscripción e identificación, el notificador asentó lo siguiente: "...el C. Jaime Ortiz Sandoval, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-7682 del 01 de febrero de 2012, con vigencia del 01 de febrero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente..."

Por lo que, se notificó el oficio número **900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012**, emitido por el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3", mediante el cual se le requirió a la hoy actora que presentara los informes, datos y documentos complementarios por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 221 -

También, asentó que el acta de notificación de referencia, fue emitida con fundamento en los siguientes artículos: *“134, primer párrafo, fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación vigente; 1, 2, 3, 4 y 7, primer párrafo, fracciones I, VII, XII y XVIII, 8, fracción III, Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1° de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de marzo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción XIV, Apartado B, fracción II; párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 5 y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012 respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos...”*

Finalmente, asentó que el oficio 900 05-03-2012-54438 fue entregado en original con firma autógrafa de conformidad con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2012, así como copia de la presente acta de notificación; firmando el acta de notificación en comento los intervinientes para su constancia.

En ese orden de ideas, el citatorio de fecha **13 de septiembre de 2012** y el acta de notificación de fecha **14 de septiembre de 2012**, se ajustaron a los requisitos legales, que establece el **artículo 137 del Código**

Fiscal de la Federación, en virtud de que dichas diligencias fueron circunstanciadas de manera pormenorizada por la persona notificadora, pues de las mismas se advierte claramente lo siguiente:

- a) Que se constituyó en el domicilio de la contribuyente, ubicado en: "***** ** *** ***** ***** **** ***** ***** ****
***** ***** ***** ***** ***** *****" * señalando que dicho domicilio se encuentra entre las calles de *****
***** ** * **** ***** y señalando tanto en el citatorio como en el acta en cuestión, que dicho domicilio contaba con las siguientes características: Nave Industrial color gris, bordes en color amarillo.
- b) Que se cercioró de estar en el domicilio correcto, por coincidir con el señalado en el oficio número 900 05-03-2012-54438 del 13 de septiembre de 2012, por coincidir con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente y por así haberse preguntado a la persona que atendió la diligencia, la C. ***** ***** ***** dichas cuestiones fueron asentadas en el citatorio y en el acta de notificación en cuestión.
- c) Que requirió la presencia del representante legal del contribuyente, y que ante la ausencia de éste, las diligencias se entendieron con la C. ***** ***** ***** quien se identificó con licencia para conducir tipo * No. ***** , que contenía la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, quien señaló que el domicilio de la contribuyente era el correcto, y se asentaron los rasgos físicos de la tercero, de la siguiente forma: "estatura aprox: **** *****; compleción: *****; tez color ***** *****; cabello ***** *****; ojos color ****; edad aprox: ** años".
- d) Circunstanció la forma por la que se cercioró de la ausencia del representante legal de la contribuyente, ya que en el citatorio de 13 de septiembre de 2012 se asentó que no fue encontrado por no estar en ese momento en el domicilio fiscal y en el acta de notificación de 14 de septiembre de 2012 se

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 223 -

asentó que la C. ***** contestó expresamente que no se encontraba presente.

- e) En relación a la tercero con quien entendió las diligencias, asentó en el citatorio y en el acta referida, que se encontraba al interior del domicilio de la contribuyente, señalando que se encontraba en el lugar en virtud de que estaba prestando sus servicios profesionales sin acreditarlo. Por lo tanto, se advierte que dicha tercero no se encontraba en el domicilio por circunstancias accidentales.
- f) En tal virtud, toda vez que la tercero proporcionó su nombre (*****), se identificó, señaló la razón por la cual estaba en el lugar y su relación con el interesado; resulta innecesario que el diligenciario precisara las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que indubitablemente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

En consecuencia, esta Juzgadora advierte que el citatorio de fecha **13 de septiembre de 2012** y el acta de notificación de fecha **14 de septiembre de 2012**, relativas al oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, cumplieron con los requisitos de circunstanciación sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y que fueron expuestas previamente), por lo tanto, se concluye que se cumplieron con las formalidades que dispone el **artículo 137 del Código Fiscal de la Federación**, ello en aras de dar cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia jurídica de los actos administrativos, establecidos en los **artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, así como el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los particulares.

Ahora bien, a fin de analizar si el citatorio de fecha 17 de diciembre de 2012 y del acta de notificación de fecha 18 de diciembre de 2012, relativos al oficio número 900-05-03-2012-69836 de fecha 17 de diciembre de 2012, atendieron las formalidades previstas en los artículos 13, 134, fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2012, (transcritos con anterioridad),

Esta Juzgadora estima conveniente tener presente el citatorio de fecha 17 de diciembre de 2012 y el acta de notificación de fecha 18 de diciembre de 2012, mismas que fueron exhibidas en copia certificada por la autoridad demandada, adquiriendo pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los diversos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, mismas que son del tenor siguiente:

CITATORIO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2012.



1783

Asunto: CITATORIO

México, D.F. 17 de diciembre de 2012.

1540

C. Representante Legal de:

antes

Siendo las 16:30 horas del 17 de diciembre de 2012, el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-58264 del 20 de septiembre de 2012, con vigencia del 20 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en:

entre las calles de _____; inmueble que cuenta con las siguientes características:

y cerciorándose que éste fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, en virtud de que (el) o (la) C. _____ confirmó de que se trataba del domicilio correcto y toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: la entrada con puertas de cristal colorizada

se requirió la presencia del Representante Legal de _____ y al no habersele encontrado, en este momento en el domicilio fiscal

se procedió a dejar el presente citatorio con (el) o (la) C. _____ en su carácter de tercero, identificándose con _____

quien se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con el contribuyente de _____

cuya media filiación es: estatura aprox. _____ compleción _____ tez color _____

además que se encuentra en el lugar en virtud de que _____ edad aprox. _____ años, señalando

a efecto de que el C. Representante Legal de _____

antes _____ esté presente el día 18 de diciembre de 2012 a las 16:00

horas en el domicilio citado, a fin de notificarle el oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, firmado por

el Lic. Mauricio Ayala Orozco, Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3", mediante el

que se le dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión por el ejercicio fiscal comprendido

del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006. Si el Representante Legal no esperare, se practicará la diligencia

con quien se encuentre en el domicilio fiscal.

El presente citatorio se emite con fundamento en los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135 y 137, del Código Fiscal

de la Federación vigente.

RECIBÍ CITATORIO ENJOY

ENTREGARLO AL DESTINATARIO

C. _____

R.F.C. _____

NOTIFICADOR

C. Ramón García Escalante
R.F.C. GAER460831TU2

0430

Av. Hidalgo N° 77, Módulo III, Planta Baja, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, 06306, México, D.F. / Teléfono 0155 56020000 Ext. 53851/ www.sat.gob.mx

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2012.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 225 -



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



1784

DATOS GENERALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

R.F.C.:

CONTRIBUYENTE:

antes

1541

DOMICILIO FISCAL:

COLONIA:

LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA:

OFICIO No. 900-05-03-2012-69836

DE FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2012.

ACTA DE NOTIFICACIÓN

Siendo las 16:00 horas del 18 de diciembre de 2012, el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-58264 del 20 de septiembre de 2012, con vigencia del 20 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en:

y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, por coincidir con el señalado en el oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos:

y por haberse preguntado a la persona con la que se atiende la diligencia, quien dijo llamarse

mismo (a) que se identifica con: Licencia para emitir de por el Gobierno del Distrito Federal, Sección de Tránsito y Vialidad que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en

y haber contestado esta última, que el domicilio es el correcto, se requirió la presencia del C. Representante Legal de antes y al preguntar si éste se encontraba presente, (el) o (la) C. antes contestó de manera expresa que el C. Representante Legal no se encontraba presente, por lo tanto no podía atender esta diligencia y al no haber atendido el citatorio de las 13:30 Hrs del 17 de diciembre de 2012 y ante su ausencia, en esta fecha se notifica a (él) o (la) C. antes en

su carácter de tercero, con cargo de empleado de la empresa el oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, firmado por el Lic. Mauricio Ayala Orozco, Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3"; mediante el que se le dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión por el ejercicio comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., fracciones I, VII, XII y XVIII, 8o., fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1o. de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente al de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción IX, Apartado B, fracción II, párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 5, inciso c) y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de

0431

Continúa en hoja 2...



Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



Hoja 2

1542

Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos; así como en los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135, 136 y 137, del Código Fiscal de la Federación vigente, se le entrega el original con firma autógrafa del oficio antes mencionado y copia de la presente acta de notificación.

NOTIFICADO

Previo lectura del presente documento y enterado de su contenido, asiento de puño y letra, mi nombre y firma a los 18 días del mes de diciembre de 2012.

(NOMBRE Y FIRMA)

R.F.C.:

NOTIFICADOR

C. Ramón García Escalante
R.F.C. GAER460831TU2

Del citatorio de fecha 17 de septiembre de 2012, se advierte que el notificador asentó que se constituyó legalmente a las 13:30 horas en el domicilio ubicado en: *****
***** señalando que dicho domicilio se encuentra entre las calles de *****
***** cerciorándose de ser el domicilio correcto de la empresa demandante, por habérselo confirmado la C. ***** quien se identificó con

licencia para conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Transporte y Vialidad.

Asimismo, asentó que las características del inmueble eran: ****, y asentó que los datos externos del domicilio era: la entrada con puerta de cristal polarizada.

Del mismo modo, el notificador requirió la presencia del representante legal de **** (antes ****), y al no haberle encontrado por "no estar al momento en el domicilio fiscal", procedió a dejar el presente citatorio con la C. ***** misma que, como se señaló anteriormente, se identificó ante el notificador; asimismo, asentó que dicha persona se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con la contribuyente de "prestar sus servicios profesionales sin acreditarlo".

Al respecto, el notificador asentó los rasgos físicos de la persona con quien entendió la diligencia, de la siguiente forma: "estatura aprox: ****; compleción: ****; tez color ****; cabello ****; ojos color ****; edad aprox: ** años".

También, el notificador asentó que la persona de nombre ***** (tercero) se encontraba en el lugar, en virtud de que cumple con un horario laboral.

Además, en relación a su adscripción e identificación, el notificador asentó lo siguiente: "...el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-58264 del 20 de septiembre de 2012, con vigencia del 20 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente..."

Por lo que, el notificador dejó citatorio para que el día hábil siguiente el representante de la hoy parte actora, se presentara en el domicilio antes señalado el día 18 de diciembre de 2012, a las 16:00 horas, a fin de notificarle el oficio número 900 05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, bajo el apercibimiento de que si el representante legal no esperase, se practicaría la diligencia con quien se encontrara en el domicilio fiscal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135 y 137, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el año 2012; firmando el citatorio en comento los intervinientes para su constancia.

En relación al **acta de notificación de fecha 18 de diciembre de 2012**, se advierte que el notificador asentó que se constituyó legalmente a las 16:00 horas en el domicilio de la hoy actora ubicado en: "***** ** ***
**** ** ***** ** ***** ***** ** ***** ***** ***** *****
***** *****" cerciorándose de ser el domicilio correcto de la empresa demandante, por coincidir con el señalado en el oficio número 900 05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, del mismo modo, asentó que dicho domicilio contaba con las siguientes características: la entrada con puerta de cristal polarizada.

Asimismo, se cercioró de ser el domicilio correcto, por habérselo preguntado a la persona que atendió la diligencia quien dijo llamarse ***** quien se identificó con licencia para (sic) emitida por el Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Transportes y Vialidad, que contenía la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, quien señaló que el domicilio de la contribuyente era el correcto.

Del mismo modo, el notificador requirió la presencia del representante legal de ***** (antes *****), y preguntó a la C. ***** si se encontraba presente dicho representante legal, a lo que contestó de manera expresa que **no se encontraba presente**.

En consecuencia, ante dicha ausencia, notificó a la C. ***** en su carácter de tercero, con cargo de empleada sin acreditarlo, el oficio 900 05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 229 -

Además, en relación a su adscripción e identificación, el notificador asentó lo siguiente: *"...el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-58264 del 20 de septiembre de 2012, con vigencia del 20 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente..."*

Por lo que, se notificó el oficio número **900 05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012**, emitido por el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3", mediante el que se le dieron a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

También, asentó que el acta de notificación de referencia, fue emitida con fundamento en los siguientes artículos: *"16 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 4 y 7, fracciones I, VII, XII y XVIII, 8, fracción III, Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1° de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción XIV, Apartado B, fracción II, párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 5, inciso c) y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del*

Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos...”

Finalmente, asentó que el oficio 900 05-03-2012-69836 fue entregado en original con firma autógrafa de conformidad con los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2012, así como copia de la presente acta de notificación; firmando el acta de notificación en comento los intervinientes para su constancia.

En ese orden de ideas, el citatorio de fecha **17 de diciembre de 2012** y el acta de notificación de fecha **18 de diciembre de 2012**, se ajustaron a los requisitos legales, que establece el **artículo 137 del Código Fiscal de la Federación**, en virtud de que dichas diligencias fueron circunstanciadas de manera pormenorizada por la persona notificadora, pues de las mismas se advierte claramente lo siguiente:

- a) Que se constituyó en el domicilio de la contribuyente, ubicado en: “***** * señalando que dicho domicilio se encuentra entre las calles de ***** ***** ** * ***** y señalando en el citatorio en cuestión que dicho domicilio contaba con las siguientes características: ***** ***** ***** ** ***** ***** y asentó tanto en el citatorio como en el acta referida, los datos externos de dicho domicilio: entrada con ***** ** ***** *****.
- b) Que en el acta de notificación de referencia se cercioró de estar en el domicilio correcto, por coincidir con el señalado en el oficio número 900 05-03-2012-54438 del 17 de diciembre de 2012, y tanto en el citatorio como en el acta en cuestión,

se cercioró por así habérselo confirmado la persona que atendió la diligencia, la C. *****

- c) Que requirió la presencia del representante legal del contribuyente, y que ante la ausencia de éste, el citatorio y acta en cuestión se entendieron con la C. ***** quien se identificó con licencia para conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Transporte y Vialidad, que contenía la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, quien señaló que el domicilio de la contribuyente era el correcto, además, en el citatorio de referencia, asentó los rasgos físicos de la tercero, de la siguiente forma: "estatura aprox: ****, compleción: ****, tez color ****, cabello ****, ojos color ****; edad aprox: ** años".
- d) Circunstanció la forma por la que se cercioró de la ausencia del representante legal de la contribuyente, ya que en el citatorio de 17 de diciembre de 2012, se asentó que no fue encontrado por no estar en ese momento en el domicilio fiscal y en el acta de notificación de 18 de diciembre de 2012, se asentó que la C. ***** contestó expresamente que no se encontraba presente.
- e) En relación a la tercero con quien entendió las diligencias, en el citatorio en comento, asentó que se encontraba al interior del domicilio de la contribuyente, señalando que se encontraba en el lugar en virtud de que estaba prestando sus servicios profesionales sin acreditarlo. Por lo tanto, se advierte que dicha tercero no se encontraba en el domicilio por circunstancias accidentales.
- f) En tal virtud, toda vez que la tercero proporcionó su nombre (*****), se identificó, señaló la razón por la cual estaba en el lugar y su relación con el interesado; resulta innecesario que el diligenciario precisara las características

del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

En consecuencia, esta Juzgadora advierte que el citatorio de fecha **17 de diciembre de 2012** y el acta de notificación de fecha **18 de diciembre de 2012**, relativas al oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, cumplieron con los requisitos de circunstanciación sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y que fueron expuestas previamente), por lo tanto, se concluye que se cumplieron con las formalidades que dispone el **artículo 137 del Código Fiscal de la Federación**, ello en aras de dar cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia jurídica de los actos administrativos, establecidos en los **artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, así como el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los particulares.

Ahora bien, a fin de analizar si el citatorio de fecha **25 de julio de 2013** y del acta de notificación de fecha **26 de julio de 2013**, relativos a la resolución recurrida contenida en el oficio número **900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013**, atendieron las formalidades previstas en los artículos 13, 134, fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2013, (transcritos con anterioridad),

Esta Juzgadora estima conveniente tener presente el citatorio de fecha 25 de julio de 2013 y el acta de notificación de fecha 26 de julio de 2013, mismas que fueron exhibidas por la parte actora en su escrito inicial de demanda, adquiriendo pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los diversos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, mismas que son del tenor siguiente:

**CITATORIO
DE FECHA 25 DE JULIO DE 2013.**



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 233 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Asunto: CITATORIO

México, D.F. 25 de julio de 2013.

1681

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano".

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:

ANTES

Siendo las 17:35 horas del 25 de julio de 2013, el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2013-25078 del 21 de mayo de 2013, con vigencia del 21 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2013, emitida por la Lic. Georgina Arias Ramírez, Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en:

entre las calles de: inmueble que cuenta con las siguientes características: y cerciorándose que éste fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, toda vez que coincide en el señalado en el oficio 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013, en virtud de que la C. confirmó que se trataba del domicilio correcto y toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: LETRERO EXTERNO NO UBICADO EN LA ENTRADA DEL PREDIO se requirió la presencia del C. Representante Legal de antes y al no habersele encontrado, EN ESTE MOMENTO EN SU DOMICILIO FISCAL se procede a dejar el presente citatorio con (el) o (la) C. en su carácter de tercero, identificándose con CON LICENCIA PARA CONDUCIR EMITIDA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, quien se encuentra en el interior del domicilio y que tiene relación con el contribuyente de: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES SIN ACREDITAR SIN ACREDITAR cuya media filiación es: estatura aprox. compleción tez color cabello ojos edad aprox. AÑOS, señalando además que se encuentra en el lugar en virtud de que CUMPLE CON SU HORARIO LABORAL; a efecto de que el C. Representante Legal de antes esté presente el día 26 de julio de 2013 a las 17:30 horas en el domicilio citado, a fin de notificarle el oficio 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013, firmado por la Lic. Georgina Arias Ramírez, Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente; mediante

1 de 2



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.


el que se le determina un crédito fiscal, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006. Si el Representante Legal no esperare, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio fiscal.

El presente citatorio, se emite con fundamento en los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135 y 137, del Código Fiscal de la Federación vigente.

RECIBÍ CITATORIO PARA
ENTREGARLO AL DESTINATARIO

R.C.: [REDACTED]

NOTIFICADOR


C. Ramón García Escalante
R.F.C.: GAER460831TU2



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 235 -

ACTA DE NOTIFICACIÓN
DE FECHA 26 DE JULIO DE 2013.

1933



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

1682

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano".

DATOS GENERALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

R.F.C.: [REDACTED]
CONTRIBUYENTE : [REDACTED] antes [REDACTED]
DOMICILIO FISCAL: [REDACTED]
COLONIA: [REDACTED]
LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA: [REDACTED]
OFICIO No. 900-05-2013-48229 DE FECHA: 25 DE JULIO DE 2013.

ACTA DE NOTIFICACIÓN

Siendo las 17:30 horas del 26 de julio de 2013, el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2013-25078 del 21 de mayo de 2013, con vigencia del 21 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2013, emitida por la Lic. Georgina Arias Ramírez, Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en: [REDACTED] entre las calles de: [REDACTED] y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, por coincidir con el señalado en el oficio 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013 y con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, que contiene los datos de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: LETRERO EXTERNO NO UBICADO EN LA ENTRADA DEL PREDIO [REDACTED] y por haberse preguntado a la persona con la que se atiende la diligencia, quien dijo llamarse [REDACTED] misma que se identifica con: LICENCIA PARA CONDUCIR EMITIDA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en [REDACTED] y haber contestado esta última, que el domicilio es el correcto, se requirió la presencia del C. Representante Legal de [REDACTED] antes [REDACTED] y al preguntar si éste se encontraba presente, la C. [REDACTED] contestó de manera expresa que el C. Representante Legal de [REDACTED] antes [REDACTED] no se encontraba presente, por lo tanto no podían atender esta diligencia y al no haber atendido el citatorio de las 17:35 hrs., del 25 de julio de 2013 que se dejó con la C. [REDACTED] y ante su ausencia, en esta fecha se notifica a la C. [REDACTED] en su carácter de TERCERO el cual se identificó con: LICENCIA PARA CONDUCIR EMITIDA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, quien se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con el Contribuyente de PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES SIN HABERLO ACREDITADO, cuya media

1 de 2



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

filiación es: estatura aprox. [REDACTED] complexión [REDACTED] tez color [REDACTED] cabello [REDACTED] ojos [REDACTED] edad aprox. [REDACTED] AÑOS, señalando además que se encontraba en el lugar en virtud de que CUMPLE CON SU HORARIO LABORAL, el oficio 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013, firmado por la Lic. Georgina Arias Ramírez, Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente; mediante el que se le determina un crédito fiscal, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10., 20., 30., 40., 70., fracciones I, VII, XII y XVIII, 80., fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 10. de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1., 2., primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo; 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción XIV, Apartado B, fracción II; párrafos antepenúltimo y penúltimo; numeral 5 y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos; así como en los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135, 136 y 137, del Código Fiscal de la Federación vigente, se le entrega el original con firma autógrafa del oficio antes mencionado así como copia de la presente acta de notificación.

NOTIFICADO

Previa lectura del presente documento y enterado de su contenido, asiento de puño y letra, mi nombre, mi Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) y firma a los 26 días del mes de julio de 2013.

(NOMBRE Y FIRMA) /

R.F.C.: [REDACTED]

NOTIFICADOR

C. Ramón García Escalante.
R.F.C.: GAER460832TU2

2 de 2

Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, PB, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, 06300, México, D.F. Tel. 0155 58020000 Ext.53661
sat.gob.mx youtube.com/sat.mx twitter.com/sat.mx

Del citatorio de fecha 25 de julio de 2013, se advierte que el notificador asentó que se constituyó legalmente a las 17:35 horas en el domicilio ubicado en: "***** * * * * * " señalando que dicho domicilio se encuentra entre las calles de * * * * * cerciorándose de ser el domicilio correcto de la empresa demandante, por habérselo confirmado la C. * * * * * quien se identificó con licencia para conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Transporte y Vialidad.

Asimismo, asentó que las características del inmueble eran:
*****; y asentó que los datos externos
del domicilio eran: letrero externo no ubicado en la entrada del predio "Elektra".

Del mismo modo, el notificador requirió la presencia del
representante legal de ***** (antes *****
*****)* y al no haberle encontrado "en este momento en su domicilio fiscal",
procedió a dejar el presente citatorio con la C. ***** misma
que, como se señaló anteriormente, se identificó ante el notificador; asimismo,
asentó que dicha persona se encontraba en el interior del domicilio y que tiene
relación con la contribuyente de "prestar sus servicios profesionales sin
acreditarlo".

Al respecto, el notificador asentó los rasgos físicos de la
persona con quien entendió la diligencia, de la siguiente forma: "estatura
aprox: ****; complexión: *****; tez color *****; cabello *****
*****; ojos color ****; edad aprox: ** años".

También, el notificador asentó que la persona de nombre
***** (tercero) se encontraba en el lugar, en virtud de que
cumple con un horario laboral.

Además, en relación a su adscripción e identificación, el
notificador asentó lo siguiente: "...el C. Ramón García Escalante, notificador
adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que
Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes
Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la
Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de
identificación contenida en el oficio 900-05-2013-25078 del 21 de mayo de
2013, con vigencia del 21 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2013,
emitida por la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que
Consolidan Fiscalmente..."

Por lo que, el notificador dejó citatorio para que el día hábil siguiente el representante de la hoy parte actora, se presentara en el domicilio antes señalado el día 26 de julio de 2013, a las 17:30 horas, a fin de notificarle el oficio número 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013, bajo el apercibimiento de que si el representante legal no esperare, se practicaría la diligencia con quien se encontrara en el domicilio fiscal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135 y 137, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el año 2012; firmando el citatorio en comento los intervinientes para su constancia.

En relación al **acta de notificación de fecha 26 de julio de 2013**, se advierte que el notificador asentó que se constituyó legalmente a las 17:30 horas en el domicilio de la hoy actora ubicado en: ***** ** ** *

***** ** ** * ***** ** ** * ***** ** ** * ***** ** ** * ***** ** ** *

***** señalando que dicho domicilio se encuentra entre las calles de ***** ** ** * ***** ** ** * ***** cerciorándose de ser el domicilio correcto de la empresa demandante, por coincidir con el señalado en el oficio número 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013, y con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, del mismo modo, asentó que dicho domicilio contaba con las siguientes características: letrero externo no ubicado en la entrada del predio ******

Asimismo, se cercioró de ser el domicilio correcto, por habérselo preguntado a la persona que atendió la diligencia quien dijo llamarse ***** ** ** * ***** quien se identificó con licencia para conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Transportes y Vialidad, que contenía la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, y con domicilio en ***** ** ** * ***** ** ** * ***** ** ** * ***** ** ** * ***** y dicha persona señaló que el domicilio de la contribuyente era el correcto.

Del mismo modo, el notificador requirió la presencia del representante legal de ***** ** ** * ***** (antes ***** ** ** * *****)* y al preguntar si se encontraba, la C. ***** ** ** * ***** contestó de manera expresa que el representante legal **no se encontraba presente**.

En consecuencia, ante dicha ausencia, notificó a la C* ***** ***** en su carácter de tercero, y que tiene relación con la contribuyente

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 239 -

de "prestar sus servicios profesionales sin haberlo acreditado", el oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013.

Al respecto, el notificador asentó los rasgos físicos de la persona con quien entendió la diligencia, de la siguiente forma: "estatura aprox: ****; compleción: *****; tez color *****; cabello *****; ojos color ****; edad aprox: ** años".

También, el notificador asentó que la persona de nombre ***** (tercero) se encontraba en el lugar, en virtud de que cumple con un horario laboral.

Además, en relación a su adscripción e identificación, el notificador asentó lo siguiente: "...el C. Ramón García Escalante, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2013-25078 del 21 de mayo de 2013, con vigencia del 21 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2013, emitida por la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente..."

Por lo que, se notificó el oficio número **900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013**, emitido por la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, mediante el que se determinó un crédito fiscal a la actora, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

También, asentó que el acta de notificación de referencia, fue emitida con fundamento en los siguientes artículos: "16 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 4 y 7, fracciones I, VII, XII y XVIII, 8, fracción III, Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 241 -

dicho domicilio se encuentra entre las calles de *****
***** y señalando en el citatorio que
dicho domicilio contaba con las siguientes características: ****
*****; y asentando en el acta
de notificación que el mismo contaba con las siguientes
características: letrero externo no ubicado en la entrada del
predio "*****"

- b) Que se cercioró de estar en el domicilio correcto, tanto en el citatorio como en el acta de referencia, por coincidir con el señalado en el oficio número 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013, y por así habérselo confirmado la persona que atendió la diligencia, la C. *****
- c) Que en el citatorio de referencia requirió la presencia del representante legal del contribuyente, y que ante la ausencia de éste, la diligencia se entendió con la C. ***** y en el acta de notificación también requirió la presencia del representante legal del contribuyente, a lo que contestó de manera expresa la C. ***** que no se encontraba presente; persona que en ambas diligencias se identificó con licencia para conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Transporte y Vialidad, que señaló que el domicilio de la contribuyente era el correcto. Además, el notificador asentó tanto en el citatorio como en el acta de referencia, los rasgos físicos de la tercero, de la siguiente forma: "estatura aprox: ****; compleción: ***** (**); tez color *****; cabello *****; ojos color ****; edad aprox: ** años".
- d) Circunstanció la forma por la que se cercioró de la ausencia del representante legal de la contribuyente, ya que en el citatorio de 25 de julio de 2013, se asentó que no fue encontrado por no estar en ese momento en el domicilio fiscal y en el acta de notificación de 26 de julio de 2013, se asentó

que la C. ***** contestó expresamente que no se encontraba presente.

- e) En relación a la tercero con quien entendió las diligencias, en el citatorio y en el acta en comento, asentó que se encontraba al interior del domicilio de la contribuyente, señalando que se encontraba en el lugar en virtud de que estaba prestando sus servicios profesionales sin acreditarlo. Por lo tanto, se advierte que dicha tercero no se encontraba en el domicilio por circunstancias accidentales.
- f) En tal virtud, toda vez que la tercero proporcionó su nombre (*****), se identificó, señaló la razón por la cual estaba en el lugar y su relación con el interesado; resulta innecesario que el diligenciario precisara las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

En consecuencia, esta Juzgadora advierte que el citatorio de fecha **25 de julio de 2013** y el acta de notificación de fecha **26 de julio de 2013**, relativas al oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, cumplieron con los requisitos de circunstanciación sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y que fueron expuestas previamente), por lo tanto, se concluye que se cumplieron con las formalidades que dispone el **artículo 137 del Código Fiscal de la Federación**, ello en aras de dar cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia jurídica de los actos administrativos, establecidos en los **artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, así como el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los particulares.

Entonces, resultan infundados los argumentos de la actora, precisados en el presente apartado con los incisos **a.1** y **a.2**, toda vez que los oficios números: 900 05-2011-385, 900 05-03-2012-54438, 900-05-03-2012-69836 y 900-05-2013-48229, de fechas 21 de junio de 2011, 13 de septiembre

de 2012, 17 de diciembre de 2012 y 25 de julio de 2013, respectivamente, sí fueron notificados personalmente, atendiendo las formalidades previstas en los artículos 48, 134, fracción I, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, vigente en los años 2011, 2012 y 2013.

Por lo que, del mismo modo, los citatorios de **27 de junio de 2011, 13 de septiembre de 2012, 17 de diciembre de 2012 y 25 de julio de 2013**, así como las actas de notificación de fecha **28 de junio de 2011, 14 de septiembre de 2012, 18 de diciembre de 2012 y 26 de julio de 2013**, resultan legales, al haber cumplido con las formalidades previstas por el Poder Judicial de la Federación, relativas a las notificaciones de carácter personal, mismas que fueron expuestas previamente.

Ahora bien, por lo que hace a los argumentos de la parte actora precisados en los incisos **a.3, a.4 y a.5**, por medio de los cuales señala que en los citatorios y actas de notificación de referencia los notificadores no precisaron la forma en la cual se cercioraron que el domicilio que señalaron, correspondía al señalado en los oficios **900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, y 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013**; que los notificadores no se cercioraron que el domicilio era el correcto conforme a los elementos físicos o materiales por los que llegaron a esa convicción; y que los citatorios correspondientes a los oficios de referencia, al contener la leyenda "...y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar..." vulneran su garantía de seguridad jurídica pues dio por hecho que efectivamente encontraría el domicilio de la actora y que éste sería el correcto. Al respecto, dichos argumentos resultan **infundados**.

En relación a lo anterior, es importante precisar que acorde con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalados anteriormente, se colige que para cumplir con el requisito de circunstanciación en las actas de notificación, el diligenciarlo debe asentar razón pormenorizada de los hechos ocurridos durante la diligencia, de tal manera que **arrojen la plena convicción de que la notificación efectivamente se llevó a cabo en el domicilio de la persona o personas**

señaladas en el acta, de ahí que el notificador se encuentra obligado a circunstanciar **la forma en la que se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto**.

Entonces, en primer lugar, de conformidad con lo manifestado por la parte actora y acorde a lo expuesto previamente, en el citatorio y acta de notificación, de fechas 27 y 28 de junio de 2011, respectivamente; en el citatorio y acta de notificación, de fechas 13 y 14 de septiembre de 2012, respectivamente; en el citatorio y acta de notificación, de fechas 17 y 18 de diciembre de 2012, respectivamente; así como en el citatorio y acta de notificación, de fechas 25 y 26 de julio de 2013, respectivamente, los notificadores asentaron que se apersonaron en el domicilio ubicado en: ****

***** ** *** ***** ** ***** ***** ** ***** *****

***** ***** ***** *****

Aunado a lo anterior, en los citatorios y actas de notificación referidas, los notificadores asentaron que dicho domicilio se encontraba: entre las calles de ***** ** * *****

Además, en el citatorio de fecha **27 de junio de 2011** y acta de notificación de **28 de junio de 2011**, el notificador asentó que el domicilio de referencia contaba con las siguientes características: **** *****
***** ** *****; y en el citatorio de fecha **13 de septiembre de 2012**, así como en el acta de notificación de **14 de septiembre de 2012**, el notificador asentó que el domicilio de referencia contaba con las siguientes características: **** ***** ***** ***** ***** ** *****

También asentaron que se cercioraron que el domicilio era el correcto, ya que el mismo coincidía:

- Con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, que contiene los datos de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.
- Con el señalado en el oficio número 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011 y en el oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, respectivamente.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 245 -

- Y por haberle preguntado a la persona que atendió la diligencia, la C. ***** misma que se identificó (dicha cuestión se detallará más adelante).

Ahora, por lo que hace al citatorio de fecha **17 de diciembre de 2012**, el notificador asentó que el domicilio de referencia contaba con las siguientes características: *****

Además, asentó que se cercioró de que el domicilio fiscal de la contribuyente fuera el correcto, en virtud de que la C* ***** (misma que se identificó) se lo confirmó y porque dicho domicilio ostentaba los siguientes datos externos: la entrada con puerta de cristal polarizada.

Respecto al acta de notificación de fecha **18 de diciembre de 2012**, el notificador asentó que se cercioró que fuese el domicilio fiscal de la contribuyente de acuerdo con lo siguiente:

- Por coincidir con el domicilio señalado en el oficio número 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012.
- Porque el domicilio ostentaba los siguientes datos externos: la entrada con puerta de cristal polarizada.
- Por haberle preguntado a la persona que atendió la diligencia, la C. ***** misma que se identificó, tal y como se detallará posteriormente.

En relación al citatorio de fecha **25 de julio de 2013**, el notificador asentó que el domicilio de referencia contaba con las siguientes características: *****

Asimismo, asentó que se cercioró que fuese el domicilio fiscal de la contribuyente de acuerdo con lo siguiente:

- Por coincidir con el señalado en el oficio número 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013.
- Porque la C. ***** (quien se identificó) confirmó que se trataba del domicilio correcto.
- Por ostentar los siguientes datos externos: letrero externo no ubicado en la entrada del predio "*****"

En cuanto al acta de notificación de fecha **26 de julio de 2013**, el notificador asentó que se cercioró que fuese el domicilio fiscal de la contribuyente a notificar, de acuerdo con lo siguiente:

- Por coincidir con el señalado en el oficio número 900-05-2013-48229 del 25 de julio de 2013.
- Por coincidir con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, que contiene los datos de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.
- En virtud de que el domicilio ostentaba los siguientes datos externos: letrero externo no ubicado en la entrada del predio "*****"
- Por haberle preguntado a la persona que atendió la diligencia, la C. ***** misma que se identificó (cuestión que se precisará más adelante).

En ese orden de ideas, contrario a lo manifestado por la parte actora, los notificadores del citatorio y acta de notificación, de fechas 27 y 28 de junio de 2011, respectivamente, del citatorio y acta de notificación, de fechas 13 y 14 de septiembre de 2012, respectivamente, del citatorio y acta de notificación, de fechas 17 y 18 de diciembre de 2012, respectivamente, así como del citatorio y acta de notificación, de fechas 25 y 26 de julio de 2013, sí señalaron la manera en la que se cercioraron, que el domicilio ubicado en:

***** era el correcto, pues circunstanciaron de manera pormenorizada la forma en que lo hicieron, máxime que, a consideración de esta Juzgadora, los datos asentados en los citatorios y actas de notificación

en cuestión, arrojan la plena convicción de que las diligencias efectivamente se llevaron en el domicilio de la parte actora.

Bajo esa tesitura, tampoco se le da razón a la accionante, al señalar que los notificadores no precisaron la forma en la cual se cercioraron que el domicilio de referencia, correspondía al señalado en los oficios: 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, y 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013.

Ello es así, pues como se precisó con anterioridad, los notificadores de los oficios referidos, al momento de practicar las diligencias respectivas, sí señalaron de manera pormenorizada la forma en la que se cercioraron que se habían constituido en el domicilio ubicado en: “***
***** ** *** * ya que en las mismas asentaron las características de dicho domicilio, y entre otras cuestiones, por haberle preguntado a la persona que atendió las diligencias, pues en todas fue la C. ***** misma que se identificó (cuestión que se precisará más adelante); en consecuencia, resultan **infundados** los argumentos planteados por la accionante, sintetizados en los incisos **a.3** y **a.4** del Apartado A.

Ahora bien, por lo que hace al argumento descrito en el inciso **a.5** por medio del cual, la demandante aduce que resultan ilegales los citatorios de 27 de junio de 2011, 13 de septiembre de 2012, 17 de diciembre de 2012 y 25 de julio de 2013, toda vez que al contener la leyenda “...y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar...” los notificadores previamente dieron por hecho que efectivamente encontrarían el domicilio en el que debían realizar las diligencias y se cerciorarían de que fuese el correcto, por lo tanto, dichas cuestiones pueden ser del conocimiento de los notificadores al momento de practicar la diligencia y no antes, vulnerando así su garantía de seguridad; dicho argumento resulta **infundado**.

Lo anterior resulta ser así, toda vez que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, vigente en los años 2011, 2012 y 2013, establece el procedimiento para la práctica de notificaciones personales y no prohíbe la utilización de formatos preimpresos, pues la única finalidad de esos formatos es agilizar la diligencia, sin que por ello provoque inseguridad jurídica al gobernado, pues el hecho de emplear formatos en el levantamiento de la diligencia, no implica que el acta no esté debidamente circunstanciada, en virtud de que lo que importa es lograr que el destinatario tenga conocimiento del acto.

A lo anterior, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia **2a./J. 140/2005** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y textos son del tenor literal siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 176515
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Diciembre de 2005
Materia(s): Administrativa
Tesis: **2a./J. 140/2005**
Página: 367

NOTIFICACIONES PERSONALES DE CRÉDITOS FISCALES PRACTICADAS CON FORMATOS PREIMPRESOS. SON VÁLIDAS AUN CUANDO LO QUE SE HAGA CONSTAR EN ELLOS SEA LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE.

Aun cuando el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento para la práctica de notificaciones personales y **no prohíbe la utilización de formatos preimpresos**, subsiste la obligación del notificador de asentar el lugar en que se esté llevando a cabo la diligencia y los datos que justifiquen el porqué se realiza con persona distinta del interesado; de ahí que no es factible alegar que sólo tiene validez una notificación donde se asienten todos los datos manuscritos, y que la ilegalidad del acto se genera por la mera circunstancia de que el acta sea un formato preimpreso donde conste que se requirió la presencia del interesado o de su representante y no se encontró, porque la única finalidad de esos formatos es agilizar la diligencia, sin que por ello se provoque inseguridad jurídica al gobernado, pues si se emplean formatos o "machotes" en el levantamiento de la diligencia, y consta preimpreso que se requirió la presencia del interesado, esto no implica que el acta no esté debidamente circunstanciada, en virtud de que lo que importa es lograr que el destinatario tenga conocimiento del acto.

Contradicción de tesis 151/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 14 de octubre de 2005. Cinco votos. Ponente:

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 249 -

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Tesis de jurisprudencia 140/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil cinco."

Asimismo, resulta aplicable el precedente **VII-P-1aS-1211** de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, misma que se cita para efectos de su reiteración, la cual a la letra dispone lo siguiente:

"NOTIFICACIONES PERSONALES PRACTICADAS EN MATERIA FISCAL. LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS QUE SE DEDUZCAN DE LAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE MANERA IMPRESA NO LAS INVALIDAN SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De acuerdo con lo previsto por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, el notificador tiene la obligación de asentar el lugar en que se esté llevando a cabo la diligencia y los datos que justifiquen el porqué se realizó con persona distinta al interesado, esto es, los requisitos que den certeza jurídica en relación a que la notificación personal se ha practicado con la persona que se encontró en lugar del sujeto a notificar, ello, previo citatorio dejado y entregado para su espera al día siguiente; sin que el referido artículo prohíba la utilización de medios informáticos, a efecto de atender lo dispuesto por dicho dispositivo legal. En efecto, si durante la diligencia de notificación, el notificador hace uso de los medios informáticos como en su caso lo pueden ser una computadora y una impresora, con la finalidad de hacer constar los hechos que resulten de su desarrollo, ello, atiende a la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas, mismas que no pueden verse excluidas de la labor cotidiana de la administración pública, sin que ello afecte la legalidad de sus actuaciones. En consecuencia, si el notificador cumple con este procedimiento, el hecho de que la toma de razón de las diligencias de notificación y cita se hayan asentado de forma impresa y no de puño y letra de aquel, no es razón suficiente para restarle validez, toda vez que en el caso no se trata de un "formato pre impreso", o bien, "formato pre elaborado", sino que, la utilización de estos medios tiene como finalidad agilizar la diligencia y clarificar los datos contenidos en el acta de notificación relativa, a efecto de circunstanciar de manera clara e inmediata los hechos suscitados durante la diligencia de notificación correspondiente.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14457/13-17-01-2/1042/14-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de junio de 2015, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 25 de junio de 2015)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 50. Septiembre 2015. p. 87”

En ese contexto, el hecho de que los citatorios de referencia contengan la leyenda: “...y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar...”, no le resta validez a las diligencias en cuestión, pues atendiendo al criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal, los formatos preimpresos tienen como finalidad agilizar la diligencia, y contrario a lo manifestado por la accionante, no vulneran su garantía de seguridad jurídica, ya que lo que importa es lograr que el destinatario tenga conocimiento del acto.

Lo anterior, máxime que el propio artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, vigente en los años 2011, 2012 y 2013, no establece prohibición alguna para la utilización de formatos preimpresos al llevar a cabo las notificaciones personales; en consecuencia, resulta **infundado** el argumento de la actora, marcado con el inciso **a.5** del presente Apartado.

Por otra parte, esta Juzgadora procede a realizar el análisis de los siguientes argumentos planteados por la demandante, mismos que al tener relación entre sí, se estudiarán de manera conjunta, a saber:

a.6 Que los citatorios de fechas: 27 de junio de 2011, 13 de septiembre y 17 de diciembre, ambos de 2012, y 26 de julio de 2013, así como las actas de notificación de fechas: 28 de junio de 2011, 14 de septiembre y 18 de diciembre, ambos de 2012 y 27 de julio de 2013, resultan ilegales, toda vez que los notificadores omitieron señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, conforme a las cuales concluyeron que el representante legal de la actora no se encontraba en el domicilio.

a.7 Argumenta que en los citatorios y las actas de notificación de referencia, los notificadores no circunstanciaron debidamente a qué persona se requirió la presencia del representante legal, o bien, qué persona indicó al notificador que el representante legal no se encontraba.

a.8 Señala que los notificadores para cerciorarse de la presencia del representante legal y que se encontraba en el domicilio correcto en el citatorio y acta de notificación de referencia, debieron asentar: cómo fue que requirió la presencia del representante legal, la calidad del tercero que

atendió la diligencia y la manera en que comprobó su relación con la empresa actora.

a.9 Asimismo manifiesta que en relación a los citatorios y a las actas de referencia, el hecho de que se haya señalado que fueron entendidos con la C. ***** en su carácter de tercero, no se desprende que los notificadores hayan asentado que a esa misma persona fue a quien se le solicitó informara la presencia del representante legal.

a.10 Del mismo modo, aduce que si bien el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación permite que el citatorio se deje con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, los notificadores se encontraban obligados a circunstanciar el vínculo que guardaba dicha persona y la contribuyente.

Al respecto, dichos argumentos resultan **infundados**, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Por principio, esta Juzgadora estima conveniente destacar de nueva cuenta, que acorde con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalados anteriormente, se colige que para cumplir con el requisito de circunstanciación en las actas de notificación, el notificador deberá cumplir, entre otras cuestiones, con lo siguiente:

- Que requirió la presencia del representante legal del contribuyente o su representante, y que ante la ausencia de éstos, la diligencia se entendió con un tercero.
- Circunstanciar la forma por la que se cercioró de la ausencia referida.
- En relación al tercero con quien entendió la diligencia, que el mismo no se encontraba en el domicilio por circunstancias accidentales, quedando incluidas en ese concepto desde las personas que habitan en el domicilio (familiares o empleados

domésticos) hasta las que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo).

- Que en caso de que el tercero no proporcione su nombre, no se identifica, ni señala la razón por la cual está en el lugar o su relación con el interesado, el diligenciario deberá precisar las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

Ahora bien, en el caso concreto, esta Juzgadora advierte que de los citatorios de fechas: 27 de junio de 2011, 13 de septiembre y 17 de diciembre, ambos de 2012, y 26 de julio de 2013, así como las actas de notificación de fechas: 28 de junio de 2011, 14 de septiembre y 18 de diciembre, ambos de 2012 y 27 de julio de 2013, **los notificadores requirieron la presencia del representante legal de ***** antes *******

Del mismo modo, se advierte que tanto en los citatorios, como en las actas de notificación de referencia, ante la ausencia del representante legal de la parte actora, **las diligencias se entendieron con un tercero, la C. *******

Ahora bien, por lo que hace al argumento de la demandante sintetizado en el inciso **a.6**, contrario a lo manifestado, el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación vigente en los años 2011, 2012 y 2013, ni los criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación y que previamente se expusieron, establecen que el notificador al llevar a cabo la diligencia, deba señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, conforme a las cuales concluyeron que el representante legal de la contribuyente no se encontraba en el domicilio.

No obstante lo anterior, de conformidad con los criterios sostenidos por nuestro Máximo Tribunal, el notificador sí debe circunstanciar la forma por la que se cercioró de la ausencia del representante legal de la

contribuyente, por lo tanto, esta Juzgadora procede a realizar el análisis respectivo a los citatorios y actas de notificación en cuestión, respecto a dicha circunstanciación.

En relación al citatorio de fecha **27 de junio de 2011**, se desprende que el notificador asentó haber requerido la presencia del representante legal de la parte actora, y al no haberle encontrado por estar en junta de trabajo, procedió a dejar dicho citatorio a la C. *****

Por lo que hace al acta de notificación de fecha **28 de junio de 2011**, el notificador circunstanció que requirió la presencia del representante legal de la hoy demandante, preguntando si éste se encontraba presente, a lo que la C. ***** contestó de manera expresa que no se encontraba presente.

En cuanto al citatorio de fecha **13 de septiembre de 2012**, el notificador asentó que requirió la presencia del representante legal de la accionante, y al no habersele encontrado en ese momento en su domicilio fiscal, procedió a dejar dicho citatorio a la C. *****

Respecto al acta de notificación de fecha **14 de septiembre de 2012**, el notificador circunstanció que requirió la presencia del representante legal de la hoy actora, a lo que la C. ***** contestó de manera expresa que no se encontraba presente, por lo tanto no podía atender la diligencia.

En relación al citatorio de fecha **17 de diciembre de 2012**, se desprende que el notificador asentó haber requerido la presencia del representante legal de la promovente, y al no habersele encontrado en ese momento en el domicilio fiscal, procedió a dejar dicho citatorio a la C. *****
***** en su carácter de tercero.

Por lo que hace al acta de notificación de fecha **18 de diciembre de 2012**, se advierte que el notificador circunstanció haber requerido la presencia del representante legal de la demandante, y al

preguntar si éste se encontraba presente, la C. ***** contestó de manera expresa que no se encontraba presente, por lo tanto no podía atender la diligencia.

En relación al citatorio de fecha **25 de julio de 2013**, se desprende que el notificador requirió la presencia del representante legal de la hoy actora, y asentó que al no habérsele encontrado en ese momento en el domicilio fiscal, procedió a dejar dicho citatorio a la C. ***** en su carácter de tercero.

Finalmente, respecto al acta de notificación de fecha **26 de julio de 2013**, se advierte que el notificador circunstanció haber requerido la presencia del representante legal de la accionante, y al preguntar si se encontraba presente, la C. ***** contestó de manera expresa que no se encontraba presente, por lo tanto no podían atender la diligencia.

Entonces, contrario a lo manifestado por la parte actora, los notificadores de los citatorios y actas de referencia, sí circunstanciaron cómo fue que se cercioraron que el representante legal de la contribuyente no se encontraba en el domicilio fiscal.

Por lo que hace a los argumentos sintetizados en los incisos **a.7, a.8 y a.9**, no le asiste la razón a la parte actora, respecto a que los notificadores debieron asentar lo siguiente: a qué persona se requirió la presencia del representante legal; qué persona indicó al notificador que el representante legal no se encontraba; cómo fue que requirió la presencia del representante legal; así como el hecho de que los notificadores omitieron asentar que a la C. ***** fue a quien se le solicitó informara la presencia del representante legal. Dichos argumentos resultan **infundados**.

Lo anterior es así, en virtud de que los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalados anteriormente, así como el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, vigente en los años 2011, 2012 y 2013, no establecen que los notificadores al momento de circunstanciar las diligencias respectivas, deban asentar los requisitos señalados por la accionante.

Además, como se expuso anteriormente, los notificadores asentaron haber buscado al representante legal de la contribuyente, y que

ante la ausencia de éste, entendió la diligencia con un tercero (C. *****
**** *****), por lo que circunstanciaron los datos correspondientes para
acreditar que llevaron a cabo las diligencias con una tercero.

Ahora, en relación al argumento de la actora, precisada en el
inciso **a.10**, relativo a que los notificadores se encontraban obligados a
circunstanciar el vínculo que guardaba la tercero y el contribuyente,
acreditando así su calidad, el mismo resulta **infundado**.

Al respecto, es de señalarse nuevamente que en relación al
tercero con quien el notificador entienda la diligencia, se debe cerciorar que el
mismo no se encontraba en el domicilio por circunstancias accidentales,
quedando incluidas en ese concepto desde las personas que habitan en el
domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual,
temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por
ejemplo).

Además, que buscó al contribuyente o a su representante y
que ante la ausencia de éstos entendió la diligencia con un tercero, entendido
éste como la persona que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta
garantía de que informará sobre el documento a su destinatario.

Por lo tanto, dicho tercero deberá proporcionar, su nombre,
identificarse, señalar la razón por la cual está en el lugar o su relación con el
interesado, y en caso de no hacerlo, entonces sí, el diligenciario deberá
precisar las características del inmueble u oficina, que el tercero se
encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u
otros datos diversos que indubitadamente conlleven a la certeza de que se
actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado
tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia
de notificación respectiva.

En ese orden de ideas, en el caso concreto, los notificadores
asentaron en los citatorios de fechas: 27 de junio de 2011, 13 de septiembre
y 17 de diciembre, ambos de 2012, y 26 de julio de 2013, así como en las

actas de notificación de fechas: 28 de junio de 2011, 14 de septiembre y 18 de diciembre, ambos de 2012 y 27 de julio de 2013, que las diligencias se entendieron con la C. ***** ***** **** ***** ante la ausencia del representante legal de la contribuyente.

Ahora, por lo que hace al citatorio de **27 de junio de 2011** y su acta de notificación de **28 de junio de 2011**, en relación a la tercero con quien se entendieron las diligencias, el notificador asentó los siguientes datos:

- Nombre: ***** ***** **** *****
- Carácter de tercero.
- Se identificó con: Credencial para votar expedida por el IFE folio *****, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma.
- Que se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con la contribuyente de tercero.
- Media filiación: "estatura aprox. **** * complexión ***** tez color ***** ***** cabello ***** ***** ojos calor ***** edad aprox. ** años."
- Que se encontraba en el lugar en virtud de que estaba cumpliendo con su horario de trabajo.

En relación al citatorio de **13 de septiembre de 2012** y su acta de notificación de **14 de septiembre de 2012**, respecto a la tercero con quien se entendieron las diligencias, el notificador asentó los siguientes datos:

- Nombre: ***** ***** **** *****
- Carácter de tercero.
- Se identificó con: licencia para conducir tipo A No. *****, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma.
- Que se encontraba en el interior del domicilio.
- Que tiene relación con la contribuyente al prestar sus servicios profesionales sin acreditarlo.
- Media filiación: "estatura aprox. **** * complexión ***** tez color ***** ***** cabello ***** ***** ojos calor ***** edad aprox. ** años."

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 257 -

- Que se encontraba en el lugar en virtud de que presta sus servicios profesionales sin acreditarlo.

Respecto al citatorio de **17 de diciembre de 2012**, en relación a la tercero con quien se entendió la diligencia, el notificador asentó los siguientes datos:

- Nombre: *****
- Carácter de tercero.
- Se identificó con: licencia para conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Transporte y Vialidad, que contiene la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma.
- Que se encontraba al interior del domicilio.
- Que tiene relación con la contribuyente de prestar sus servicios profesionales sin acreditarlo.
- Media filiación: "estatura aprox. **** * compleción ***** tez color ***** * cabello ***** * ojos calor ***** edad aprox. ** años."
- Que se encontraba en el lugar en virtud de que cumple con un horario laboral.

Por lo que hace al acta de notificación de **18 de diciembre de 2012**, en relación a la tercero con quien se entendió la diligencia, el notificador asentó los siguientes datos:

- Nombre: *****
- Carácter de tercero.
- Se identificó con: Licencia para (sic) emitida por el Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Transporte y Vialidad, que contiene la fotografía que correspondía a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma.
- Que tiene cargo de empleada, sin acreditarlo.

Finalmente, respecto al citatorio de **25 de julio de 2013** y su acta de notificación de **26 de julio de 2013**, en relación a la tercero con quien se entendió la diligencia, el notificador asentó los siguientes datos:

- Nombre: ***** ***** **** *****
- Carácter de tercero.
- Se identificó con: licencia para conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Transporte y Vialidad.
- Que se encontraba al interior del domicilio.
- Que tiene relación con la contribuyente de prestar sus servicios profesionales sin acreditarlo.
- Media filiación: "estatura aprox. **** **** compleción ***** tez color ***** ***** cabello ***** ***** ojos calor ***** edad aprox. ** años."
- Que se encontraba en el lugar en virtud de que cumple con un horario laboral.

En ese orden de ideas, se desprende que en los citatorios y actas de referencia, la tercero **proporcionó su nombre, se identificó, señaló la razón por la cual estaba en el lugar y su relación con la contribuyente**, tal y como se expuso anteriormente; por lo que resulta inconcuso que la tercero con la que se entendieron los citatorios y actas de referencia (***** ***** **** *****)* tenía un vínculo con la contribuyente. Por ende, resulta **infundado** el argumento de la actora precisado en el inciso **a.10** del presente Apartado.

Por otra parte, en relación al argumento señalado en el inciso **a.11** del presente apartado, relativo a que los citatorios de referencia, fueron emitidos para que se esperara a los notificadores al día siguiente y no para que la persona citada acudiera a notificarse dentro del plazo de 6 días a la oficina de la autoridad, señalando que, si bien el artículo 137 del Código Tributario establece una facultad discrecional, la autoridad debió motivar por qué resultaba conveniente citar al día siguiente; dicho argumento resulta **infundado**.

Lo anterior es así, ya que, tal y como lo señala la actora, el numeral 137 del Código de referencia establece una facultad discrecional para

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 259 -

la autoridad, ya que al no encontrar a quien deba notificar, podrá: a) dejar citatorio en el domicilio, para que espere a una hora fija del día hábil posterior que se señale en el mismo; o b) dejar citatorio para que acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis días contados a partir de aquél en que fue dejado el citatorio.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado mediante la tesis aislada **2a.XCVII/2013**, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

“Época: Décima Época
Registro: 2004943
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo 1, Libro XXVI, Noviembre de 2013
Materia(s): Constitucional.
Tesis: **2a.XCVII/2013**
Página: 646

NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER QUE EL NOTIFICADOR DEJARÁ CITATORIO PARA QUE EL CONTRIBUYENTE ESPERE A UNA HORA FIJA DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE O PARA QUE ACUDA A NOTIFICARSE DENTRO DEL PLAZO DE 6 DÍAS A LAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES FISCALES, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Del citado precepto se advierte que en materia de notificaciones personales, el legislador otorgó a la autoridad una facultad reglada tratándose del procedimiento administrativo de ejecución y una discrecional en todos los demás procedimientos, ya que en aquél el citatorio de notificación siempre será para que el contribuyente espere a una hora fija del día hábil siguiente, en tanto que en cualquier otro procedimiento, el fedatario puede decidir, acorde con la naturaleza del caso, la forma en que ha de llevarse a cabo la notificación cuando no encuentre a quien deba notificar. Ahora bien, de los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el citatorio previo a la notificación fiscal reviste formalidades distintas a las de la notificación y, por tanto, no le es exigible la circunstanciación de datos que, por regla general, deben colmarse al realizarse dicha diligencia. De ahí que si el citatorio se traduce en un mero documento previo a la notificación, la cual en todo caso será la que trascienda a la esfera jurídica del particular, resulta innecesario exigir a la autoridad un grado específico de descripción sobre las razones por las cuales determina que la notificación se lleve a cabo de una u otra forma (citación para el día hábil siguiente o para que acuda a notificarse), pues ello no trasciende a la certidumbre jurídica del gobernado, máxime que ambas formas de notificación le permiten conocer el acto jurídico respectivo y, en su caso, defenderse y hacer las

manifestaciones que a su derecho convenga, por lo que de encontrar irregularidades en dicha notificación puede hacerlas valer mediante el medio de impugnación que considere procedente. En ese tenor, el precepto referido no viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que basta que en el citatorio previo el notificador establezca expresamente cuál es el supuesto de notificación por el cual opta, lo que resulta suficiente para otorgar certidumbre al particular, pues sabrá la manera en que se le dará a conocer el acto de la autoridad.

Amparo directo en revisión 2392/2013. Apolo Tec, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.”

Del criterio anterior, se advierte esencialmente que, resulta innecesario exigir a la autoridad un grado específico de descripción sobre las razones por las cuales determina que la notificación se lleve a cabo de una u otra forma (citación para el día hábil siguiente o para que acuda a notificarse), pues ello no trasciende a la certidumbre jurídica del gobernado, máxime que ambas formas de notificación le permiten conocer el acto jurídico respectivo y, en su caso, defenderse y hacer las manifestaciones que a su derecho convenga, por lo que **basta que en el citatorio previo el notificador establezca expresamente cuál es el supuesto de notificación por el cual opta**, para otorgar certidumbre al particular.

En consecuencia, los notificadores de los citatorios en cuestión, no se encontraban obligados a señalar las razones por las cuales optaron por citar a la contribuyente al día hábil siguiente y no para que acudiera a notificarse ante la autoridad fiscalizadora.

Ahora, no le asiste la razón a la demandante al señalar que, la autoridad al ejercer dicha facultad discrecional, debió motivar los citatorios 27 de junio de 2011, 13 de septiembre y 17 de diciembre, ambos de 2012, y 26 de julio de 2013, pues los citatorios y las notificaciones no constituyen un acto de molestia, ya que no son propiamente un acto o resolución administrativa, sino ésta última una comunicación de la autoridad, que sólo busca transmitir el acto que le precede, por lo que, los citatorios y las notificaciones **no están sujetas a los requisitos de fundamentación y motivación**.

A lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada **III.2o.A.15 A** del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y textos son del tenor literal siguiente:

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 261 -

“Época: Décima Época
Registro: 2000398
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo 2, Libro VI, Marzo de 2012
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: **III.2o.A.15 A**
Página: 1248

NOTIFICACIÓN EN MATERIA FISCAL. AL NO SER UN ACTO DE MOLESTIA, NO ESTÁ SUJETA A LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La notificación, en sí misma, no constituye un acto de molestia, pues no es propiamente un acto o resolución administrativa, sino una comunicación de la autoridad, habida cuenta que sólo transmite el acto que le precede, es decir, no es otra cosa sino enterar a alguien de aquello que a la autoridad le interesa que conozca. Por tanto, la notificación en materia fiscal no está sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación previstos por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 del Código Fiscal de la Federación, en tanto que esa diligencia se rige por los requisitos establecidos en los artículos 134 a 137 del ordenamiento citado en último término.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 436/2011. Gabriel Orendain Aguirre. 14 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.”

En otra cuestión, resulta **infundado** el argumento de la demandante precisado en el inciso **a.12** del presente apartado, por medio del cual señala que en los citatorios de 27 de junio de 2011, 13 de septiembre y 17 de diciembre ambos de 2012 y 25 de julio de 2013, los notificadores omitieron señalar expresamente la hora en que el mismo fue entregado al tercero con quien se entendió la diligencia, ello de conformidad con la jurisprudencia número 2a./J. 75/98, por lo tanto, señala que se desconoce si los notificadores al momento en que entregaron los citatorios estaban dentro del horario que expresamente señala el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto, es de destacarse que, tal y como se expuso anteriormente, el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, vigente en

los años 2011, 2012 y 2013, las prácticas de las diligencias por las autoridades fiscales deberán efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas, aquellas diligencias de notificación iniciadas en horas hábiles podrán concluirse en hora inhábil sin afectar su validez; asimismo, las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular.

Ahora, en el caso concreto, los notificadores asentaron que las diligencias relativas a los citatorios en cuestión iniciaron a la siguiente hora:

- Citatorio de 27 de junio de 2011: Inició a las 13:00 horas.
- Citatorio de 13 de septiembre de 2012: Inició a las 17:45 horas.
- Citatorio de 17 de diciembre de 2012: Inició a las 13:30 horas.
- Citatorio de 25 de julio de 2013: Inició a las 17:35 horas.

En virtud de lo anterior, y contrario a lo manifestado por la actora, los citatorios de referencia se diligenciaron en las horas hábiles contempladas en el artículo 13 del Código Tributario, pues los notificadores asentaron que las mismas se llevaron a cabo entre las 7:30 y las 18:00 horas.

Ahora, la demandante manifiesta que los notificadores omitieron señalar expresamente la hora en que los citatorios fueron entregados.

Al respecto, con el fin de dilucidar el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación en relación al argumento planteado, esta Juzgadora estima conveniente tener presente la jurisprudencia **2a./J. 75/98** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de información, rubro y texto son del tenor siguiente:

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 263 -

Registro: 195396
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo VIII, Octubre de 1998
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 75/98
Página: 502

NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE DEBE CONTENER LA HORA EN QUE SE ENTREGUE. Si bien los artículos 134, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, no exigen terminantemente que en los citatorios se asiente la hora en que se entreguen, lo cierto es que ante la omisión de ese dato, la persona notificada no puede saber si la diligencia se practicó en horas hábiles, por lo que tales disposiciones no pueden analizarse en forma aislada, sino en concordancia con los preceptos aplicables a las diligencias de notificación que contiene tal ordenamiento, debiendo observarse obligatoriamente para que los actos de autoridad puedan reputarse legales, y se salvaguarde la seguridad jurídica de la persona notificada. Por tanto, al señalar el artículo 13 del ordenamiento citado que las diligencias que practiquen las autoridades fiscales deben efectuarse entre las 07:30 y las 18:00 horas por conceptuarse éstas como hábiles, es necesario que en el citatorio se asiente la hora en que se practicó la diligencia para determinarse si se cumplió con esta disposición, pues de no efectuarse en los términos señalados, esa diligencia debe reputarse ilegal.

Contradicción de tesis 87/97. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y los Tribunales Segundo Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo Colegiado del Quinto Circuito. 21 de agosto de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel.

Tesis de jurisprudencia 75/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho."

De la jurisprudencia de referencia, se advierte medularmente que los notificadores deberán asentar en los citatorios la hora en que se practicó la diligencia, para determinarse si se cumplió con lo dispuesto en el artículo 13 del Código Tributario relativo a la práctica de diligencias en horas hábiles, pues de no efectuarse en esos términos, la diligencia sería ilegal.

En relación a dicha jurisprudencia, el Poder Judicial de la Federación, formuló su interpretación mediante las tesis aisladas **IV.3o.A.39**

A y VII.3o.C.30 A, cuyos datos de identificación, rubros y textos son del tenor literal siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 176919
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Octubre de 2005
Materia(s): Administrativa
Tesis: **IV.3o.A.39 A**
Página: 2428

NOTIFICACIONES EN MATERIA FISCAL. LA ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE Y SU ELABORACIÓN CONSTITUYEN UN MISMO ACTO Y, POR TANTO, SE REALIZAN EN UN SOLO MOMENTO (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 75/98). La jurisprudencia 2a./J. 75/98, de rubro: "NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE DEBE CONTENER LA HORA EN QUE SE ENTREGUE.", publicada en la página 502 del Tomo VIII, octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, hace un análisis de los artículos 134, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, para concluir que en el citatorio es necesario que "se asiente la hora en que se practicó la diligencia", y por ende, que se observe el horario establecido en el artículo 13 de ese código. Por ello, es equívoca la interpretación de que se asiente en el citatorio, tanto la hora en que se levanta, como cuando se "entrega físicamente", pues no debe observarse bajo una connotación lingüística el título de la tesis, si del contexto y de la ejecutoria respectiva se evidencia que el término de "entrega" del citatorio, se refiere al momento de su elaboración; además, sería ilógico que en una misma diligencia se asentaran dos horas distintas, si lo que el legislador pretende en el artículo 13 de la codificación legal citada, es dar certeza y seguridad de que la diligencia se practica en una hora hábil, elemento que queda satisfecho al establecer la hora en la que comienza la diligencia.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 39/2005. Juan Pablo Molina Hernández. 3 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María Inocencia González Díaz."

“Época: Novena Época
Registro: 176225
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIII, Enero de 2006
Materia(s): Administrativa
Tesis: **VII.3o.C.30 A**
Página: 2419

NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE ES LEGAL SI CONTIENE LA HORA EN QUE INICIÓ LA DILIGENCIA DE ENTREGA (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 75/98). De lo dispuesto en la

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 265 -

jurisprudencia 2a./J. 75/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 502, con el rubro: "NOTIFICACIONES FISCALES. EL CITATORIO QUE LAS PRECEDE DEBE CONTENER LA HORA EN QUE SE ENTREGUE.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que la notificación es la última fase de elaboración de un acto administrativo, por lo que éste no se entiende acabado ni tiene eficacia jurídica hasta que se notifica debidamente; y, por otra, que sólo estableciéndose la hora en que se entregó el citatorio que precede a una notificación fiscal podría determinarse si se efectuó dentro de las horas hábiles que instituye el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación. Ponderando esos dos aspectos, se concluye que censuró el hecho de que el citatorio no estableciera hora alguna; empero, jamás estableció que cuando contenía la hora en que inició la diligencia de dicha entrega, también era necesario -para su legalidad- que se asentara la hora en que materialmente se dejó, pues frente a lo que se establece en las consideraciones de la jurisprudencia que nos ocupa, que una diligencia por sí no es un acto administrativo, basta que contenga la hora en que inició tal diligencia para determinar si es legal o no la notificación, ya que una diligencia de esas características puede iniciar en hora hábil y culminar en una inhábil sin afectar su validez, según se advierte del propio artículo 13 en comento; salvaguardándose así la seguridad jurídica de la persona notificada y cobrando eficacia jurídica el acto administrativo a notificar.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 416/2005. Panificadora San Andrés Tuxtla, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: Claudia Vázquez Montoya.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2428, tesis IV.3o.A.39 A, de rubro: "NOTIFICACIONES EN MATERIA FISCAL. LA ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE Y SU ELABORACIÓN CONSTITUYEN UN MISMO ACTO Y, POR TANTO, SE REALIZAN EN UN SOLO MOMENTO (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 75/98)."

De lo anterior, se desprende que el Poder Judicial de la Federación realizó diversas interpretaciones a la jurisprudencia **2a./J. 75/98** transcrita con anterioridad, y determinó esencialmente que en la misma jamás se estableció que cuando el citatorio contenga la hora en que inició la diligencia de entrega, también era necesario que se asentara la hora en que materialmente se dejó, pues una diligencia no es un acto administrativo, por lo que **basta que contenga la hora en que inició tal diligencia para determinar si es legal o no la notificación**, ya que una diligencia de esas características puede iniciar en hora hábil y culminar en una inhábil sin afectar

su validez, de conformidad con el numeral 13 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, se concluyó que era equívoca la interpretación de que se asiente en el citatorio, tanto la hora en que se levanta, como cuando se "entrega físicamente", pues no debe observarse bajo una connotación lingüística el título de la tesis **2a./J. 75/98** (citada por la actora), si del contexto y de la ejecutoria respectiva se evidencia que el término de "entrega" del citatorio, se refiere al momento de su elaboración, aunado a que sería ilógico que en una misma diligencia se asentaran dos horas distintas, si lo que el legislador pretende en el artículo 13 de la codificación legal citada, es dar certeza y seguridad de que la diligencia se practica en una hora hábil, elemento que queda satisfecho al establecer la hora en la que comienza la diligencia.

En virtud de lo expuesto, resulta **infundado** el argumento de la promovente marcado en el presente apartado con el inciso **a.12**, toda vez que los notificadores de los citatorios de 27 de junio de 2011, 13 de septiembre y 17 de diciembre, ambos de 2012, y 25 de julio de 2013, **no se encontraban obligados a asentar la hora en que fueron entregados dichos citatorios, pues basta con que hayan circunstanciado la hora en que se iniciaron las diligencias**. Máxime que la hora en que se iniciaron, fueron entre las horas hábiles, contempladas en el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, vigente en los años 2011, 2012 y 2013, es decir, entre las 7:30 y 18:00 horas.

Por otra parte, esta Juzgadora procede a analizar y resolver los siguientes argumentos planteados por la actora en su escrito inicial de demanda:

a.13 Que en los citatorios de fechas: 27 de junio de 2011, 13 de septiembre y 17 de diciembre ambos de 2012 y 25 de julio de 2013, así como en las actas de notificación de fechas: 28 de junio de 2011, 14 de septiembre y 18 de diciembre ambos de 2012 y 26 de julio de 2013, no se circunstanció que los notificadores se hubieran identificado plenamente ante la persona con la que llevaron a cabo dichas diligencias.

a.14 Lo anterior, ya que los notificadores se identificaron con constancias supuestamente emitidas por el Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, pero en

ningún momento señalaron el cargo con el que actuaban los notificadores ante la persona con quien entendieron las diligencias.

a.15 Que los notificadores no asentaron lo siguiente: haberse identificado como funcionario, los elementos de identificación del documento con el que se identificaron, que el documento de identificación haya sido mostrada a la persona con la que se practicaron las diligencias, que ésta persona al momento de tenerla en sus manos se percató que efectivamente eran los datos correspondientes y los rasgos fisionómicos del notificador correspondieran plenamente con los asentados en el documento identificativo.

a.16 Del mismo modo, señala que desconoce si los notificadores eran funcionarios de alguna Administración perteneciente al Servicio de Administración Tributaria y de ser así, a cuál, aunado a que también desconoce si dicha cuestión la hicieron del conocimiento a la persona con quien entendieron las diligencias.

a.17 Además, aduce que para efecto de que se entienda debidamente identificados los notificadores, debieron asentarse de manera circunstanciada en los citatorios y actas de referencia, lo siguiente: el número de identificación o credencial con la que se identificaron; el nombre del funcionario de quien la expidió, citando los fundamentos legales con los que realizó dicha expedición; su vigencia, la circunstanciación de que la misma le fue mostrada a la persona con la que entendieron las diligencias; la circunstanciación de que la persona tuvo en sus manos la identificación y que tuvo oportunidad de constatar que los rasgos fisionómicos de los notificadores coincidían plenamente con los de la fotografía que se encontraba inserta en la identificación; y el oficio de asignación de cargo o de nombramiento, así como el número de folio del mismo.

a.18 También, niega que los notificadores sean funcionarios de la Administración General de Grandes Contribuyentes y que haya sido expedido documento alguno en el que conste cargo que les autorice llevar a cabo actos de notificación.

Al respecto, a juicio de este Órgano Colegiado, los argumentos señalados resultan **infundados**, de acuerdo a los siguientes razonamientos:

Por principio, de los argumentos de referencia, se desprende esencialmente que la parte actora controvierte la identificación por parte de los notificadores que llevaron a cabo las diligencias relativas a los citatorios y actas de notificación en cuestión, de acuerdo a las formalidades que considera resultaban necesarias asentar, y que los notificadores no son pertenecientes a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.

Ahora, en relación al tema relativo a la identificación de los notificadores para llevar a cabo las diligencias de manera personal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, al resolver la **Contradicción de tesis 142/2004-SS**, misma que en su parte conducente se transcribe a continuación:

“(…)

SEXTO.- El criterio que debe prevalecer es el que se sustenta en la presente resolución, conforme a lo siguiente:

En principio, conviene tener presente que al tenor de lo expuesto en el considerando que antecede, el punto concreto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala, de acuerdo a lo expresamente planteado al tribunal contendiente, consiste en:

Determinar si los notificadores que hacen del conocimiento del particular un acto administrativo deben identificarse ante la persona con quien va a entender la diligencia, para que ésta tenga validez.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, notificar significa hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades preceptuadas para el caso.

Por tanto, el notificador es el empleado o funcionario público que tiene como actividad base hacer saber conforme a las reglas de la ley a las partes una determinada resolución.

Ahora bien, en el capítulo II del Código Fiscal de la Federación, relativo a las notificaciones, en los artículos 134, 135, 136 y 137, se establece lo siguiente:

(…)

Del texto de los artículos transcritos se desprende que el Código Fiscal de la Federación reconoce distintos tipos de notificaciones, cada uno rodeado de sus propias formalidades; sin embargo, ninguno de los numerales en cita establece que sea necesario que las personas que van a llevar a efecto esas diligencias deban identificarse ante el notificado.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 269 -

Lo antes expuesto obedece a que la notificación no constituye una resolución administrativa, ya que no se trata de una decisión de la administración, sino una comunicación de ésta. Por tanto, la notificación no tiene contenido particular, sino que transmite el del acto que la antecede.

La notificación constituye la actuación que complementa una decisión de la autoridad administrativa.

En consecuencia, la notificación obliga al particular a cumplir con el acto que se hace de su conocimiento, de allí que sea requisito necesario para que opere el carácter ejecutorio del acto, pues la autoridad administrativa no puede válidamente ejecutar el acto sin haberlo previamente hecho del conocimiento del particular.

Ahora bien, en el procedimiento administrativo en materia fiscal es menester que los actos que se emiten sean notificados a las partes, pues ello constituye un verdadero derecho de los administrados y una garantía jurídica frente a la actividad de la administración tributaria, siendo un mecanismo esencial para la seguridad jurídica de aquéllos.

Sin embargo, **el hecho de que el notificador no se identifique ante el notificado y éste no pueda cerciorarse que aquél es autoridad competente para llevar a cabo dicha diligencia, como representante de un órgano del Estado, no implica que esa diligencia carezca de validez, si la formalidad esencial del procedimiento, en tratándose de comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad administrativa, consiste en hacer de su conocimiento éstas.** Lo que resulta trascendente es que el legislador secundario exija la observancia de la serie de requisitos indispensables para garantizar tal conocimiento, pero no así de la persona del notificador, quien aunque figura como el ejecutor de ese acto de autoridad, juega un papel secundario en la finalidad del acto, de ahí que **su identificación no constituye una formalidad esencial sino accidental, pues lo que tiene trascendencia es su actuación, no su persona.**

En consecuencia, basta con que se mencione que la diligencia de notificación fue realizada por la persona encargada señalada para ese efecto, para que dicha actuación tenga validez, sin que sea necesario que el notificador se identifique ante la persona con quien entiende la diligencia.

(...)"

De lo anterior, se advierte que el punto concreto de contradicción que dilucidó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistió en determinar si los notificadores que hacen del conocimiento del particular un acto administrativo deben identificarse ante la persona con quien va a entender la diligencia, para que ésta tenga validez.

Al respecto, se determinó que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, notificar significa hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades preceptuadas para el caso. Por lo que, el notificador es el empleado o funcionario público que tiene como actividad base hacer saber conforme a las reglas de la ley a las partes una determinada resolución.

Asimismo, se estableció que de conformidad con los artículos 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, se reconocen distintos tipos de notificaciones, cada uno rodeado de sus propias formalidades; sin embargo, ninguno de los numerales en cita establece que sea necesario que las personas que van a llevar a efecto esas diligencias deban identificarse ante el notificado.

Que lo anterior, obedece a que la notificación no constituye una resolución administrativa, ya que no se trata de una decisión de la administración, sino una comunicación de ésta. Por tanto, la notificación no tiene contenido particular, sino que transmite el del acto que la antecede.

Por lo que, determinaron que la notificación constituye la actuación que complementa una decisión de la autoridad administrativa; por lo que, la notificación obliga al particular a cumplir con el acto que se hace de su conocimiento, de allí que sea requisito necesario para que opere el carácter ejecutorio del acto, pues la autoridad administrativa no puede válidamente ejecutar el acto sin haberlo previamente hecho del conocimiento del particular.

Que en relación al procedimiento administrativo en materia fiscal es menester que los actos emitidos sean notificados a las partes, pues ello constituye un verdadero derecho de los administrados y una garantía jurídica frente a la actividad de la administración tributaria, siendo un mecanismo esencial para la seguridad jurídica de aquéllos.

Que sin embargo, el hecho de que el notificador no se identifique ante el notificado y éste no pueda cerciorarse que aquél es autoridad competente para llevar a cabo dicha diligencia, como representante de un órgano del Estado, no implica que esa diligencia carezca de validez, si la formalidad esencial del procedimiento, en tratándose de comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad administrativa, consiste en hacer

de su conocimiento éstas. Lo que resulta trascendente es que el legislador secundario exija la observancia de la serie de requisitos indispensables para garantizar tal conocimiento, pero no así de la persona del notificador, quien aun cuando figura como el ejecutor de ese acto de autoridad, juega un papel secundario en la finalidad del acto, de ahí que su identificación no constituye una formalidad esencial sino accidental, pues lo que tiene trascendencia es su actuación, no su persona.

En consecuencia, determinaron que basta con mencionar que la diligencia de notificación fue realizada por la persona encargada señalada para ese efecto, para que dicha actuación tenga validez, sin que sea necesario que el notificador se identifique ante la persona con quien entiende la diligencia.

Así, tales razonamientos dieron lugar a la **jurisprudencia 2a./J. 187/2004** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y textos son del tenor literal siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 179849
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XX, Diciembre de 2004
Materia(s): Administrativa
Tesis: **2a./J. 187/2004**
Página: 423

NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA SU VALIDEZ NO ES NECESARIO QUE LOS NOTIFICADORES SE IDENTIFIQUEN ANTE LA PERSONA CON QUIEN VAN A ENTENDER LA DILIGENCIA RELATIVA.- Los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación establecen la forma en que deben practicarse las notificaciones; sin embargo, ninguno de ellos señala que la persona que lleve a cabo la diligencia deba identificarse ante el notificado, pues la notificación no constituye una resolución administrativa, sino la comunicación de ésta, por lo que no tiene contenido particular, sino que transmite el del acto que la antecede, además de que constituye la actuación que complementa una decisión de la autoridad administrativa. Ahora bien, en el procedimiento administrativo en materia fiscal es necesario que los actos de autoridad sean notificados a las partes, pues ello constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración

tributaria; sin embargo, el hecho de que el notificador no se identifique ante la persona con quien entienda la diligencia, no implica que tal actuación carezca de validez, si la formalidad esencial del procedimiento de comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad administrativa consiste en hacerlas de su conocimiento. Lo anterior es así, porque lo que resulta trascendente es la observancia de una serie de requisitos para garantizar tal conocimiento, pero no así de la persona del notificador, quien aunque figura como el ejecutor del acto de autoridad, juega un papel secundario en la finalidad de éste; de ahí que su identificación constituya una formalidad accidental, pues lo que tiene relevancia es su actuación. En consecuencia, basta con que se mencione que la diligencia de notificación fue realizada por la persona señalada para ese efecto, para que aquélla tenga validez.

Contradicción de tesis 142/2004-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 2 de octubre de 2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Tesis de jurisprudencia 187/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro.”

Con base en lo anterior, es claro que tratándose de las notificaciones personales, no es requisito de legalidad la identificación por parte de los notificadores.

No obstante lo anterior, contrario a lo que sustenta la actora, en los citatorios de referencia los notificadores sí se identificaron.

Al respecto, en el **citatorio de fecha 27 de junio de 2011**, como del **acta de notificación de fecha 28 de junio de 2011**, antes digitalizados, se observa que el notificador de nombre C. MARIO SALINAS PÉREZ, asentó estar “...adscrito a la *Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria*”, lo cual, señaló acreditar con: “...constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2011-50 del 11 de febrero de 2011, con vigencia del 11 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, emitida por la *Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente...*”.

Por lo tanto, se concluye que el notificador del citatorio de 27 de junio de 2011 y su acta de notificación de 28 de junio de 2011, **sí se identificó** ante la persona que atendió la diligencia.

En cuanto al **citatorio de fecha 13 de septiembre de 2012**, así como el **acta de notificación de fecha 14 de septiembre de 2012**, antes digitalizados, se desprende que el notificador de nombre C. JAIME ORTÍZ SANDOVAL, asentó estar *"...adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal..."* lo cual, señaló acreditar con *"...con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-7682 del 01 de febrero de 2012, con vigencia del 01 de febrero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente..."*.

Por ende, se concluye que el notificador del citatorio de 13 de septiembre de 2012 y su acta de notificación de 14 de septiembre de 2012, **sí se identificó** ante la persona que atendió la diligencia.

Respecto al **citatorio de fecha 17 de diciembre de 2012**, así como el **acta de notificación de fecha 18 de diciembre de 2012**, antes digitalizados, se desprende que el notificador de nombre C. RAMÓN GARCÍA ESCALANTE, asentó estar *"...adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal..."*, lo cual, señaló acreditar *"...con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2012-58264 del 20 de septiembre de 2012, con vigencia del 20 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente..."*.

Por ello, se concluye que el notificador del citatorio de 17 de diciembre de 2012 y su acta de notificación de 18 de diciembre de 2012, **sí se identificó** ante la persona que atendió la diligencia.

En relación al **citatorio de fecha 25 de julio de 2013**, así como el **acta de notificación de fecha 26 de julio de 2013**, antes

digitalizados, se desprende que el notificador de nombre C. RAMÓN GARCÍA ESCALANTE, asentó estar *“...adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal...”*, lo cual, señaló acreditar *“...con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2013-25078 del 21 de mayo de 2013, con vigencia del 21 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2013, emitida por la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente...”*

Por lo tanto, se concluye que el notificador del citatorio de 25 de julio de 2013 y su acta de notificación de 26 de julio de 2013, **sí se identificó** ante la persona que atendió la diligencia.

Es este contexto, se desprende que si los notificadores referidos, se identificaron ante la persona con quien entendió la diligencia, mediante constancias de identificación números 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078, correspondientes al personal que notificó el citatorio y acta de 27 y 28 de junio de 2011, 13 y 14 de septiembre de 2012, 17 y 18 de diciembre de 2012 y 25 y 26 de junio de 2013, respectivamente, y aunado a ello señaló la vigencia de cada una de las constancias, así como la autoridad que emitió las mismas, es inconcuso que **las diligencias referidas fueron realizadas por las personas encargadas señaladas para ese efecto; por lo que ello es suficiente para que dichas actuaciones tengan validez**. Siendo importante señalar que resultaba innecesario que los notificadores se identificaran ante la persona con quien entendieron las diligencias.

Lo anterior es así, toda vez que si en el procedimiento administrativo en materia fiscal, es menester que los actos emitidos sean notificados a las partes, al constituir un verdadero derecho de los administrados y una garantía jurídica frente a la actividad de la administración tributaria, siendo un mecanismo esencial para la seguridad jurídica de aquéllos.

No menos cierto es, que el hecho de que los notificadores no se identifiquen ante la notificada o bien no asiente el fundamento que le permita cerciorarse que aquél es autoridad competente para llevar a cabo dicha diligencia, como representante de un órgano del Estado, ello no implica

que esa diligencia carezca de validez, pues en todo caso la formalidad esencial del procedimiento, en tratándose de comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad administrativa, consiste en hacer de su conocimiento éstas.

Así, lo que resulta trascendente es que el legislador secundario exija la observancia de una serie de requisitos indispensables para garantizar tal conocimiento, pero no así de la persona del notificador, quien aunque figura como el ejecutor de ese acto de autoridad, juega un papel secundario en la finalidad del acto, de ahí que su identificación no constituye una formalidad esencial sino accidental, pues **lo que tiene trascendencia es su actuación, no su persona.**

Máxime, que en el caso que nos ocupa los notificadores actuantes si se identificaron, tal y como quedó señalado en los párrafos que anteceden, con lo cual dichas actuaciones adquieren validez, toda vez que, si bien, es cierto, que los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 fracciones IV y V del Código Fiscal de la Federación, advierten que todo acto administrativo debe estar emitido por autoridad competente en el que cite los preceptos legales que lo facultan para su emisión; no menos cierto es, que los artículos 48, 134, 135, 136 y 137 del Código citado no establecen obligación al notificador de asentar en el acta respectiva, la cita de los fundamentos que establezcan la competencia del notificador para practicarla, ni tampoco la cita de los fundamentos en los que la autoridad correspondiente habilitó al notificador para practicar la diligencia en cuestión o bien, para expedir la constancia con la cual se haya identificado el notificador.

Ello es así, toda vez que la notificación no constituye una resolución administrativa que deba cumplir con la fundamentación de la competencia de la autoridad, sino que se trata de la comunicación de los actos administrativos que tiene como esencia hacer del conocimiento de los mismos al particular; por lo que el hecho de no cerciorarse el actor de la competencia del notificador para llevar a cabo la diligencia respectiva, no implica que la diligencia carezca de validez, ya que las notificaciones deben practicarse

conforme a las formalidades que el legislador estableció en las leyes secundarias, pues lo trascendente es la actuación del notificador y no su persona, al ser este último un auxiliar de la autoridad que emitió el acto.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la **jurisprudencia VII-J-SS-107**, que a la letra señala lo siguiente:

“NOTIFICACIÓN.- NO CONSTITUYE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE DEBA CUMPLIR CON LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL NOTIFICADOR QUE LA PRACTICÓ O DEL QUE LO HABILITÓ PARA PRACTICARLA.- De conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 fracciones IV y V del Código Fiscal de la Federación, todo acto administrativo debe estar emitido por autoridad competente en el que cite los preceptos legales que lo facultan para su emisión, asimismo los artículos 48, 134, 135, 136 y 137 del Código citado, disponen la forma en que deben practicarse las notificaciones de los actos, sin que tales preceptos normativos establezcan la obligación del notificador de asentar en el acta circunstanciada que al efecto se elabore con motivo de la diligencia de notificación del oficio de observaciones en el ejercicio de las facultades de fiscalización de la autoridad, la cita de los fundamentos que establezcan la competencia del notificador para practicarla y tampoco la cita de los fundamentos en los que la autoridad correspondiente habilitó al notificador a practicar la diligencia en cuestión, toda vez que la notificación al no constituir una resolución administrativa no debe cumplir con la fundamentación de la competencia de la autoridad, sino que se trata de la comunicación de los actos administrativos que tiene como esencia hacer del conocimiento de los mismos al particular, por lo que, el hecho de que el gobernado no pueda cerciorarse de que el notificador es autoridad competente para llevar a cabo la notificación, no implica que la diligencia carezca de validez, ya que las notificaciones deben practicarse conforme a las formalidades que el legislador estableció en las leyes secundarias, en virtud de que lo trascendente es la actuación del notificador y no su persona, al ser este un auxiliar de la autoridad que emitió el acto.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/11/2014)”

Por lo que, resultan **infundados** los argumentos de la actora (sintetizados con los **inciso a.13, a.14, a.15, a.16, a.17 y a.18** del apartado A del presente Considerando), relativos a la ilegalidad de los citatorios de fechas: 27 de junio de 2011, 13 de septiembre y 17 de diciembre, ambos de 2012 y 25 de julio de 2013, así como las actas de notificación de fechas: 28 de junio de 2011, 14 de septiembre y 18 de diciembre ambos de 2012 y 26 de julio de 2013, por considerar que los notificadores no se identificaron debidamente y que los mismos no pertenecían a alguna Administración del Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, resultan **infundados** e **inoperantes** los argumentos de la demandante, precisados en los incisos **a.19** y **a.20** relativos a que los notificadores omitieron señalar el nombre del funcionario que expidió las constancias de identificación, los preceptos legales que facultaban al servidor público para expedir las constancias de notificación, la debida fundamentación y motivación de la competencia material y territorial de las constancias de identificación; así como los incisos **a.21**, **a.22** y **a.23**, vertidos en su ampliación a la demanda, por medio de los cuales controvierte lo siguiente:

a.21 La legalidad de las constancias de identificación contenidas en los oficios números: 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078, de los diligenciarios que notificaron los oficios de 21 de junio de 2011, 13 de septiembre y 17 de diciembre ambos de 2012 y 25 de julio de 2013, mismas constancias que fueron exhibidas por la autoridad en su contestación a la demanda, señalando que las mismas no señalan los fundamentos legales que contienen las facultades que se delegaron a los funcionarios públicos correspondientes.

a.22 Asimismo, señala que para que los notificadores pudieran actuar en el ámbito de sus competencias, debieron señalar en las constancias de identificación de referencia, los preceptos legales en que se contuvieran las facultades que le están siendo delegadas, como lo son la práctica de visitas e inspecciones.

a.23 Del mismo modo, argumenta que los oficios de constancias de identificación únicamente contienen motivación, pero no citan los artículos 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e), tercer párrafo y 9, fracción VII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, donde habilite a los notificadores para realizar los actos relacionados con el ejercicio de sus facultades.

En principio, los argumentos en cuestión resultan **infundados**, toda vez que, tal y como fue expuesto con anterioridad, resulta innecesario que dichos notificadores se identificaran ante la persona que

atendió las diligencias, de conformidad con la jurisprudencia **2a./J. 187/2004** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (transcrita previamente), ya que su identificación constituye una formalidad accidental, pues lo que tiene relevancia es su actuación.

Por lo que, basta con que se mencione que las diligencias de notificación fueron realizadas por las personas señaladas para ese efecto, para que aquéllas tengan validez. Cuestión que sucedió en el caso concreto, pues como se precisó en los párrafos que preceden, en el citatorio y acta de notificación de fechas 27 y 28 de junio de 2011, respectivamente, se señaló como notificador al C. MARIO SALINAS PÉREZ, en el citatorio y acta de notificación de fechas 13 y 14 de septiembre de 2012, se señaló como notificador al C. JAIME ORTÍZ SANDOVAL, y por lo que hace a los citatorios de 17 de diciembre de 2012 y 25 de julio de 2013, así como en las actas de notificación de 18 de diciembre de 2012 y 26 de julio de 2013, se señaló como notificador al C. RAMÓN GARCÍA ESCALANTE.

Ahora bien, los argumentos en cuestión resultan **inoperantes**, en virtud de que, la actora controvierte la debida fundamentación y motivación de las constancias referidas, así como la competencia del funcionario que emitió las constancias de identificación contenidas en los oficios números: 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078, de los notificadores que llevaron a cabo las diligencias relativas a los citatorios de fechas: 27 de junio de 2011, 13 de septiembre y 17 de diciembre, ambos de 2012 y 25 de julio de 2013, así como las actas de notificación de fechas: 28 de junio de 2011, 14 de septiembre y 18 de diciembre ambos de 2012 y 26 de julio de 2013.

En relación a ello, es conveniente destacar que, este Tribunal puede declarar la ilegalidad de una resolución, únicamente cuando el funcionario incompetente se encuentre en alguna de las siguientes hipótesis: 1) haya dictado la resolución impugnada; 2) ordenado el procedimiento respectivo, o 3) tramitado dicho procedimiento.

Por lo que, cuando se cuestione la competencia de un funcionario por un acto anterior o externo al procedimiento del cual se deriva la resolución impugnada, dicho agravio resulta inoperante al no poder tener como consecuencias que este Tribunal declare la ilegalidad de dicha resolución. Tal es el caso del funcionario que expidió los documentos que

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 279 -

identifican a los visitantes, pues es una actuación administrativa anterior a la expedición de la orden de visita y, por lo tanto, también anterior al procedimiento respectivo.

A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia **V-J-SS-92** del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, misma que a la letra dispone lo siguiente:

“AGRAVIO INOPERANTE.- LO ES EL QUE CUESTIONA LA COMPETENCIA DE UN FUNCIONARIO QUE REALIZA UN ACTO ANTERIOR Y AJENO AL PROCEDIMIENTO.- En los términos de la fracción I del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede declarar la ilegalidad de una resolución únicamente cuando el funcionario incompetente se encuentre en alguna de las siguientes hipótesis: 1) Haya dictado la resolución impugnada; 2) Ordenado el procedimiento respectivo, o 3) Tramitado dicho procedimiento. En consecuencia, cuando se cuestione la competencia de un funcionario por un acto anterior o externo al procedimiento del cual se deriva la resolución impugnada, dicho agravio resulta inoperante al no poder tener como consecuencia que este Tribunal declare la ilegalidad de dicha resolución. Tal es el caso del funcionario que expidió los documentos que identifican a los visitantes; actuación administrativa anterior a la expedición de la orden de visita y, por lo tanto, también anterior al procedimiento respectivo.

Contradicción de Sentencias No. 3105/04-17-09-7/ Y OTRO/146/05-PL-08-01.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de octubre de 2005, por mayoría de 6 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de octubre de 2005)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. Tomo I. No. 61. Enero 2006. p. 47”

En virtud de lo anterior, si sus manifestaciones se encuentran encaminadas a controvertir la debida fundamentación y motivación de las constancias de identificación contenidas en los oficios números: 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078, por medio de los cuales se facultó a los notificadores para llevar a cabo las diligencias de referencia, así como la competencia material y territorial del funcionario que las emitió, es inconcuso que sus argumentos resultan inoperantes, ya que las constancias de identificación referidas, son actos anteriores al

procedimiento de fiscalización que dieron origen a la resolución recurrida así como a la impugnada.

Por lo que, resultan inoperantes los argumentos de la actora relativos a la ilegalidad de las constancias de identificación de dichos notificadores, pues las mismas no le restan validez a las diligencias efectuadas, ya que basta con que se haya señalado las personas que llevarían a cabo las mismas tal y como sucedió en el caso concreto. En tal virtud, esta Juzgadora no entra al estudio de la legalidad de las constancias de identificación contenidas en los oficios números: 900-05-2011-50, 900-05-2012-7682, 900-05-2012-58264 y 900-05-2013-25078, pues ello no afectaría la validez de las diligencias en cuestión.

No obstante lo expuesto en el presente Apartado, es de señalarse que, cuando exista una violación durante el procedimiento realizado para que el particular cumpla con lo exigido por la autoridad hacendaria, la violación debe ser de tal índole que lo deje en estado de indefensión, al grado de que no pueda cumplir con lo que se le exige ni pueda hacer valer los medios de defensa que para tal efecto señala la ley, pues de otro modo la violación no tendría afectación a las defensas del particular ni trascendería al sentido de la resolución impugnada; por lo que, las irregularidades en el procedimiento administrativo se convalidan si el particular comparece ante la autoridad a cumplir lo solicitado.

A lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada **III.1o.A.84 A** del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y textos son del tenor literal siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 176515
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Diciembre de 2005
Materia(s): Administrativa
Tesis: **2a./J. 140/2005**
Página: 367

NOTIFICACIÓN. SUS IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FISCAL SE CONVALIDAN SI EL PARTICULAR COMPARECE ANTE LA AUTORIDAD A OBSEQUIAR LO SOLICITADO. El artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en su parte conducente dice: "... En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 281 -

defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución. ...". El artículo 238 del citado código señala: "Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada. ...". De lo anterior se deduce que cuando exista una violación durante el procedimiento realizado para que el particular cumpla con lo exigido por la autoridad hacendaria, la violación debe ser de tal índole que lo deje en estado de indefensión, al grado de que no pueda cumplir con lo que se le exige ni pueda hacer valer los medios de defensa que para tal efecto señala la ley, pues de otro modo la violación no tendría afectación a las defensas del quejoso ni trascendería al sentido de la resolución impugnada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Revisión fiscal 356/2000. Administradora Local Jurídica de Ingresos de Guadalajara, Sur. 27 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretaria: María Antonia Dávila Véjar."

Asimismo, toda vez que el objetivo de toda notificación es que la persona a quien va dirigida conozca el contenido de un acto administrativo o fiscal, para atenderlo, en el supuesto de que exista una irregularidad en la notificación de un requerimiento de información y/o documentación, si el particular manifiesta que conoció el contenido del acto y cumple con lo ahí señalado, dicha manifestación surte efectos de notificación, por lo que las irregularidades en la notificación no trascienden al sentido de la resolución impugnada.

Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada **V-TA-2aS-85** de la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, misma que a la letra dispone lo siguiente:

"NOTIFICACIÓN DE UN REQUERIMIENTO.- SE CONVALIDAN SUS IRREGULARIDADES SI EL PARTICULAR COMPARECE A CUMPLIR CON LO SOLICITADO.- Siendo el objetivo de toda notificación que la persona a quien va dirigida conozca el contenido de un acto administrativo o fiscal, para atenderlo, en el supuesto de que exista una irregularidad en la notificación de un requerimiento de información y/o documentación, si el particular manifiesta que conoció el contenido del acto y cumple con lo ahí señalado, conforme a lo dispuesto por el artículo 135 del Código Fiscal de la

Federación, dicha manifestación surte efectos de notificación desde la fecha en que se hace, en los términos del artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, por lo que es evidente que las irregularidades en la notificación no trascienden al sentido de la resolución impugnada.

Juicio No. 13561/03-17-07-6/48/04-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de agosto de 2004, por mayoría de 3 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.

(Tesis aprobada en sesión de 9 de noviembre de 2004)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 50. Febrero 2005. p. 154"

Bajo esa tesitura, en relación al oficio **900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011**, el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente del Servicio de Administración Tributaria, inició las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, primer párrafo, fracción II y 52-A, primer párrafo, fracción II del Código Tributario vigente en 2011, por lo que solicitó a la actora que proporcionara diversa documentación e información.

En relación a lo anterior, mediante escrito de fecha 15 de julio de 2011, el representante legal de la parte actora, solicitó ampliación del plazo para presentar la información y documentación requerida a través del oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011.

En atención a la solicitud de prórroga mencionada de la actora, mediante oficio número 900 05-03-2011-13614 de 25 de julio de 2011, la Administración de Fiscalización de Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, comunicó a la parte actora que se le concedía prórroga por 10 días más, para dar cumplimiento a la solicitud de información y documentación requerida.

Al respecto, se estima conveniente tener presente el escrito de 15 de julio de 2011, mismo que se digitaliza a continuación:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

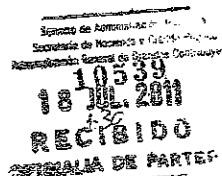
ACTORA:

- 283 -

ASUNTO: SE SOLICITA PLAZO ADICIONAL
OFICIO DE SOLICITUD DE DOCUMENTACION
No. 900-05-2011-385

0884

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE



PRESENTE

LAE. [REDACTED] con R.F.C. [REDACTED] en
representación de la empresa [REDACTED] con R.F.C. [REDACTED]
personalidad debidamente acreditada con el poder notarial numero
95889 pasado ante la fe del notario público Licenciado Gerardo Correa Etchegaray
titular de la notaría pública no. 89 del Distrito Federal., con domicilio fiscal para oír
y recibir notificaciones en [REDACTED]

[REDACTED] respetuosamente comparezco y expongo:

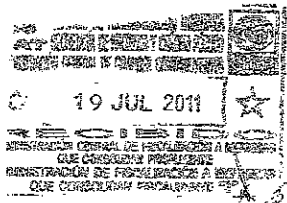
Que con numero de oficio 900-05-2010-385 de fecha 21 de junio del 2011, se le
requirió a mí representada para que proporcione diversa información y
documentación relacionada con el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2006, para lo cual se le otorgó plazo de 15 días hábiles para
que proporcionara la documentación solicitada.

Al respecto solicito con fundamento en el artículo 53 inciso c) párrafo cuarto del
vigente código Fiscal de la Federación una prórroga por 10 días hábiles
adicionales al plazo establecido en el oficio antes referido, a fin de que mi
representada éste en posibilidad de proporcionar la información y documentación
que le solicitan, toda vez que por tratarse de un ejercicio pasado y por el volumen
de información solicitada resulta de difícil obtención.

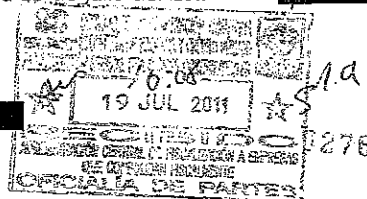
Por todo lo antes expuesto solicito:

**UNICO: SE ME CONCEDA LA PRORROGA POR 10 DIAS ADICIONALES AL PLAZO
A FIN DE QUE MI REPRESENTADA ESTE EN POSIBILIDAD DE DAR DEBIDO
CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION SOLICITADA.**

México, D.F., a 15 de julio del 2011.



ATENTAMENTE
LAE. [REDACTED]
REPRESENTANTE LEGAL



Por lo tanto, se concluye que la demandante sí conoció el
oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, tan es así que presentó un
escrito de solicitud de prórroga para proporcionar la documentación e
información requerida por la autoridad. En consecuencia, en dado caso de
que hubieran existido irregularidades en el citatorio 27 de junio de 2011 y en
el acta de notificación de 28 de junio de 2011, las mismas se convalidarían,
pues no trascienden al sentido de la resolución impugnada.

Por lo que hace al oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13
de septiembre de 2012, a través del cual, la Administración de Fiscalización
a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" de la Administración General de
Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, solicitó a la

accionante diversa información y documentación complementaria, entre otros,
la relacionada con la determinación de los pagos provisionales del Impuesto
Sobre la Renta consolidados.

En atención a dicho requerimiento, la parte actora dio
respuesta a través de escrito de fecha 8 de octubre de 2012.

Al respecto, se considera conveniente traer a colación el
escrito de fecha 8 de octubre de 2012, mismo que se digitaliza a continuación:

ASUNTO: SE DA CONTESTACION AL OFICIO DE
SOLICITUD DE INFORMACION COMPLEMENTARIA NUMERO
No. 900-05-03-2012-54438

0045

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE



09 OCT 2012

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

representación de la empresa [REDACTED] con R.F.C. [REDACTED] en
[REDACTED] personalidad debidamente acreditada con el poder notarial numero
95889 pasado ante la fe del notario público Licenciado Gerardo Correa Etchegaray
titular de la notaría pública no. 89 del Distrito Federal, con domicilio fiscal para oír
y recibir notificaciones en [REDACTED]
[REDACTED] respetuosamente comparezco y expongo:

Que con numero de oficio 900-05-03-2012-54438 de fecha 13 de septiembre del
2012, se le requirió a mi representada para que proporcione diversa información y
documentación complementaria relacionada con el ejercicio fiscal comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2006, que por medio del presente escrito
proporciono la documentación solicitada consistente en:

1.- Del punto uno manifiesto que mi representada aplico para la determinación de
los pagos provisionales consolidados del impuesto sobre la renta del ejercicio en
revisión, lo expresamente previsto en el artículo 77 de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta vigente para 2006, que a la letra dice:

" La sociedad controladora efectuara pagos provisionales consolidados, aplicando
el procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, **y considerando los ingresos de todas las controladas y los suyos
propios**, en la participación consolidable correspondiente al periodo por el que se
efectuó el pago, y el coeficiente de utilidad aplicable será el de consolidación,
determinado este con base en los ingresos nominales de todas las controladas, en
la participación consolidable, y la utilidad fiscal consolidada"

Como podrá observarse Grupo Elektra en cabal cumplimiento del artículo 77 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente considero, para efectos del cálculo
de los pagos provisionales consolidados, los conceptos expresamente previstos en
el precepto legal antes aludido en el que no se incluye el inventario acumulable, ya



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 285 -

que de conformidad con el artículo 17 de la misma ley, el inventario acumulable no es un ingreso.

9046

2.- Del punto dos con respecto a los dividendos pagados se proporciona fotocopia del acta de asamblea protocolizada en la que consta el decreto de la distribución de dicho dividendos, así como la declaración anual de donde se originaron los mencionados dividendos, importe histórico y su actualización.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito:

UNICO.- Se den por cumplidos en tiempo y forma los requerimientos de información solicitados a mi representada.

México, D.F., a 08 de octubre del 2012.

ATENTAMENTE,

LAE. 
REPRESENTANTE LEGAL

Por lo tanto, se concluye que la demandante sí conoció el oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, tan es así, que presentó un escrito atendiendo a la solicitud de diversa información y documentación complementaria formulada por la autoridad. En consecuencia, en dado caso de que hubieran existido irregularidades en el citatorio de 13 de septiembre de 2012 y en el acta de notificación de 14 de septiembre de 2012, las mismas se convalidarían, pues no trascienden al sentido de la resolución impugnada.

En relación al oficio número **900-05-03-2012-69836 de fecha 17 de diciembre de 2012**, por medio del cual, la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer a la hoy demandante los hechos u omisiones conocidos, que a su consideración entrañaron el incumplimiento de las disposiciones fiscales, en relación a la revisión practicada a los estados

financieros, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

En atención a dicho requerimiento, a través de escrito presentado ante la autoridad demandada el día 31 de enero de 2013, el representante legal de la parte actora, dio contestación al oficio de observaciones precisado en el párrafo anterior, realizando manifestaciones encaminadas a controvertir los hechos y omisiones asentados en él y ofreciendo diversas pruebas, e incluso el día 6 de junio de 2013, la accionante presentó ante la autoridad escrito en alcance al precisado anteriormente, exhibiendo a su vez diversas probanzas.

Al respecto, resulta conveniente tener presentes la parte de interés de los escritos presentados ante la autoridad el 31 de enero de 2013 y el 6 de junio de 2013, mismos que se digitalizan a continuación:

1543

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente
Av. Hidalgo no. 77, Módulo III, Planta Baja
Col. Guerrero, Del. Cuahutemoc
C.P. 06300, México D.F.

México, D.F., 1 de febrero de 2013

Atención: Lic. Mauricio Ayala Orozco
Administrador Central de Fiscalización a Empresas
que consolidan fiscalmente "3"

No. de Oficio: 900-05-03-2012-69836

Expediente: SAT340 05 02 2010 GEL911213622

Contribuyente: [REDACTED]
antes [REDACTED]

R.F.C.: [REDACTED]

Domicilio Fiscal: [REDACTED]

Asunto: Se da contestación a las observaciones determinadas mediante el oficio 900-05-03-2012-69836, respecto de la revisión del ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

RECEBIDO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN A EMPRESAS
QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE
OFICINA DE PARTES

31 ENE 2013

1730445
diciembre
Folio 3603

Entrada
01 febrero
10:39

L.A.E. [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) [REDACTED], en representación de [REDACTED] antes [REDACTED] personalidad que acredito ante esta H. Administración con copia simple del poder notarial (Anexo I), señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el indicado al rubro de este escrito y teléfono 1720-7000, para proporcionar toda clase de información,

(...)

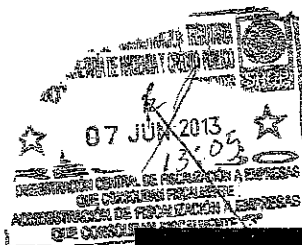
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 287 -

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN A EMPRESAS QUE
CONSOLIDAN FISCALMENTE

1556



R.F.C. [REDACTED]

Ref.- Oficio de observaciones 900-05-03-2012-69836

ASUNTO: Se presenta escrito al alcance y pruebas supervenientes

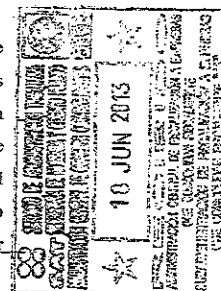
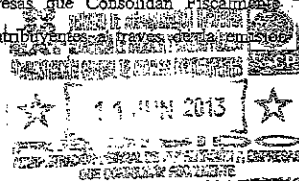
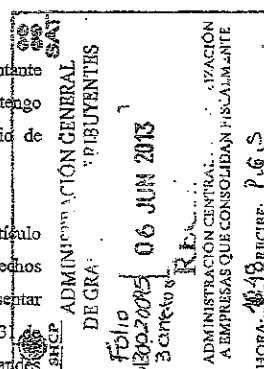
[REDACTED] promoviendo en mi carácter de representante legal de la empresa [REDACTED] personalidad que tengo debidamente acreditada en el expediente administrativo del que deviene el oficio de observaciones al rubro identificado, respetuosamente comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, fracciones IV y VI, en relación con los preceptos aplicables de la Ley de los Derechos del Contribuyente, vengo a nombre de mi representada, en tiempo y forma, a presentar manifestaciones y pruebas supervenientes al alcance del escrito presentado el pasado 3 de enero de 2013 ante la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, mediante el cual se dio contestación a las observaciones formuladas por el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" de la Administración General de Grandes Contribuyentes, a través de la emisión del oficio número 900-05-03-2012-69836.

Respecto del pago anual consolidado

En este orden de ideas y a efecto de [REDACTED] del presente escrito, es preciso señalar que de acuerdo a lo establecido en el oficio de observaciones anteriormente referido, se desprende que la Autoridad habría advertido la supuesta omisión en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 por un monto de \$1,559,028,827.00 (Un mil quinientos cincuenta y nueve millones veintiocho mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) como resultado de no haber reflejado en el pago consolidado anual, el efecto fiscal de su controlada [REDACTED] por dicho monto.

Bajo esta consideración, se estableció la supuesta omisión, bajo el argumento relativo a que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar, a más



18 JUNIO 2013
Escrito
9:30
0624

(...)

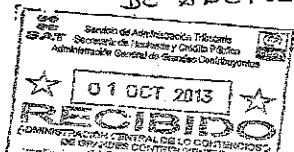
Por ende, se concluye que la demandante sí conoció el oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, tan es así que presentó un escrito por medio del cual dio contestación al oficio de observaciones formulado por la autoridad. En consecuencia, en dado caso de que hubieran existido irregularidades en el citatorio de 17 de diciembre de 2012 y en el acta de notificación de 18 de diciembre de 2012, las mismas se convalidarían, pues no trascienden al sentido de la resolución impugnada.

Finalmente, en relación a la **resolución recurrida contenida en el oficio número 900 05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013**, la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, determinó un crédito fiscal a la parte actora, en cantidad total de \$2,636'428,880.12, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, actualización, recargos y multas por el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

Inconforme con lo anterior, el día 1° de octubre de 2013, la actora interpuso recurso de revocación en contra de la resolución recurrida contenida en el oficio número 900 05-2013-48229 de 25 de julio de 2013.

Al respecto, se estima pertinente tener presente la parte de interés del escrito de recurso de revocación interpuesto por la parte actora, en contra de la resolución recurrida, misma que se digitaliza a continuación:

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LO CONTENCIOSO DE GRANDES CONTRIBUYENTES 349
SE ADJUNTA FORMA DE ACUSE CON DETALLE DE APETOS.



R.F.C.: [REDACTED] (ANTES [REDACTED])
Ref: Se presenta Recurso Administrativo de Revocación

[REDACTED] en nombre y representación de la persona moral denominada [REDACTED] (ANTES [REDACTED]) personalidad que me ha sido legalmente reconocida en la resolución determinante que se recurre, contenida en el oficio con número de folio 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013, en cuya foja cuatro se señaló textualmente lo siguiente: "...el L.A.E. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] antes [REDACTED] personalidad que acreditó con fotocopia del Instrumento Público Notarial número 95,889, volumen 1853 de fecha 13 de octubre de 2003, otorgado ante la fe del Lic. Gerardo Correa Echegaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal..."; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la calle de [REDACTED] y autorizando para tales efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación a los Licenciados en Derecho [REDACTED]

[REDACTED] asimismo se autoriza a todos y cada uno de los Profesionistas y Pasantes en Derecho antes mencionados para recibir toda clase de documentos y valores dentro del juicio de garantías aquí instado, respetuosamente comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 129, fracción II y demás relativos y aplicables del Código Fiscal de la Federación, mi poderdante viene en tiempo y forma a interponer el Recurso Administrativo de Revocación en contra de la resolución contenida en el oficio con número de folio 900 05-2013-48229 de fecha 25 de Julio de 2013, emitida — presuntamente— por la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, órgano

(...)



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 289 -

o sea de visita domiciliar o de un oficio de requerimiento de información y/o documentación, así como los demás actos realizados por las autoridades dentro del procedimiento de fiscalización, al impugnar la resolución dictada como consecuencia de los resultados encontrados en la inspección o auditoría efectuada, razón por la cual se impugnan de manera conjunta a la liquidación que nos atañe, las resoluciones que dieron origen a la liquidación fiscal y que se suscitaron a lo largo del procedimiento de fiscalización del que fue objeto la parte actora.

III.- TERCERO INTERESADO.

No existe tercero interesado en el presente asunto

IV.- AUTORIDADES RECURRIDAS.

Tienen tal carácter:

1. El C. Administrador General de Grandes Contribuyentes.
2. La C. Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes.

V.- COMPETENCIA Y TÉRMINOS.

Es competente esa H. Autoridad para conocer del presente Recurso de Revocación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 y 129, fracción II del Código Fiscal de la Federación.

Se está dentro del plazo establecido por el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que mi poderdante se hizo sabedora de la resolución liquidatoria por esta vía combatida el pasado 26 de agosto de 2013, situación que se manifiesta bajo protesta de decir verdad, al no haber sido legalmente notificada a través de persona legalmente facultada para ello y en términos de las disposiciones legales aplicables.

VI.- PRETENSIÓN DEDUCIDA.

Es pretensión de mi representada el que esa H. Autoridad revoque lisa y llana las resoluciones identificadas como impugnadas en el capítulo respectivo. Ello es así, dada la serie de ilegalidades en que incurre las Autoridades Recurridas en las propias resoluciones combatidas, ya que dichas resoluciones y actuaciones resultan violatorias, en perjuicio de la

(...)

Por lo tanto, se concluye que la demandante sí tuvo conocimiento de la resolución recurrida contenida en el oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, tan es así que interpuso recurso de revocación en contra de la resolución recurrida. En consecuencia, en dado caso de que hubieran existido irregularidades en el citatorio de 25 de julio de 2013 y en el acta de notificación de 26 de julio de 2013, las mismas se convalidarían, pues no trascienden al sentido de la resolución impugnada, siendo que fue la propia actora quien reconoció que fue el día 26 de julio de 2013 el día que conoció la resolución recurrida.

Por lo tanto, se confirma la validez de la resolución recurrida de fecha 25 de julio de 2013, así como de la resolución impugnada de fecha 19 de febrero de 2015.

APARTADO B. En otra cuestión, con el fin de dilucidar si el **oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011**, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, cumple con el requisito de debida fundamentación y motivación en cuanto a la **competencia material y territorial**, se estima pertinente digitalizar dicho oficio en la parte de interés, tal y como se observa a continuación:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

ENTREGA PERSONAL

900-05-2011-385

GSD9400235/11

*Pravia lectura e identificación
del notificador, recibi original
del presente oficio, así como
un ejemplar de la carta de
los derechos del contribuyente
auditado vigente en México
de fecha 28/10/2011*



ASUNTO: Se solicitan los informes, datos y documentos que se indican.

México, D.F., 21 de junio de 2011.

"2011, Año del Turismo en México".

Esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir la presente en virtud de que la contribuyente es una sociedad controladora que cuenta con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, según oficio número 361-I-B-3-5334 de fecha 15 de abril de 1985, en términos de lo dispuesto por el artículo 57-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada el 30 de diciembre de 1980, en vigor a partir del 1 de enero de 1981, vigente en 1985 y en relación con los artículos 64 y Segundo Transitorio, fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, publicada el 1 de enero de 2002, vigente a partir del mismo día de su publicación, efectuó la revisión del dictamen fiscal que le fue formulado por el Contador Público [REDACTED] con número de registro 7499, respecto a sus Estados Financieros por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008, en términos de lo dispuesto por los artículos 42, primer párrafo, fracción IV y 52-A, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación, mediante oficio citatorio número 900-05-2010-2149 de fecha 1 de julio de 2010 y del oficio de solicitud de información y documentación al citado profesionista con número 900-05-01-2011-10323 de fecha 3 de mayo de 2011 y con relación a las contribuciones federales de las que es sujeto directo, en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Activo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, primer párrafo, fracciones VII, XII y XVIII, 8, primer párrafo, fracción III y Tercero Transitorio, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracciones IX y X, y



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 291 -



Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

0854



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

900-05-2011-385
[REDACTED]
GSD9400235/11



Apartado B, fracción II; quinto párrafo en la parte que establece: "La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan" y sexto párrafo, numeral 5, correspondiente al "Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente", y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, cuya vigencia inició el 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del mismo Decreto, modificado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010, entrando en vigor a partir del 30 de abril de 2010, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio; así como en los artículos 33, último párrafo, 38, 42, primer párrafo, fracción II, antepenúltimo, penúltimo y último párrafos, 48, primer párrafo, fracciones I, II, III y último párrafo, y 52-A, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, habiéndose requerido al Contador Público que formuló el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción I del artículo 52-A del referido Código, después de haberlos recibido, ésta no es suficiente para observar la situación fiscal del contribuyente en virtud de que el Contador Público proporcionó incompleta la información y documentación, como se reseña a continuación:

Mediante oficio 900 05-2010-2149 del 1 de julio de 2010, notificado legalmente previo citatorio, el 7 de julio de 2010, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero con cargo de "Recepcionista del Despacho [REDACTED] sin haberlo acreditando, se citó a revisión de papeles de trabajo al C.P.C. [REDACTED] misma que se llevó a cabo el 16 de julio de 2010, derivado de dicha revisión, fue necesario requerir información adicional, mediante oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, notificado legalmente previo citatorio al Contado Público dictaminador, el día 11 de mayo de 2011, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero con cargo de "Empleada", sin haberlo acreditando, mediante el cual se le solicitó lo siguiente:

"1.- ...

2.- Cédula de trabajo con la determinación analítica del Impuesto al Activo Individual y Consolidado tanto de pagos provisionales como del ejercicio sujeto a revisión, así como fotocopia legible de la(s) declaración(nes) anual(es) que sirvieron de base para la determinación de los pagos provisionales.

3.- Cédula de trabajo con la determinación del "ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPAC", que en cantidad de \$8'520,429, aparece en la declaración complementaria del impuesto al activo consolidado del ejercicio en revisión, presentada por la contribuyente el día 13 de agosto de 2010, adjuntando la documentación comprobatoria que justifique su dicho.

(...)



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

0866



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

900-05-2011-385

GSD9400235/11

De igual forma, no proporcionó información y documentación respecto a lo solicitado en el punto 16, incisos d), e), f), y g), del oficio antes citado.

Del punto 17, del oficio 900-05-01-2011-10323 del 3 de mayo de 2011, no proporcionó la información y documentación solicitada.

En relación al punto 18 del citado oficio, no proporcionó fotocopia legible de la declaración anual del impuesto sobre la renta consolidado, complementaria del ejercicio en revisión, en la que se observe que [REDACTED] como sociedad controladora, haya reconocido el efecto en la consolidación, de la modificación a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] con motivo de que dicha sociedad controlada presentó con fecha 14 de julio de 2010, declaración anual complementaria, en la que modifica su utilidad fiscal, lo anterior, conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción III, del artículo 72, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006.

Por lo anterior, no se cuenta con la información y documentación suficiente para verificar su situación fiscal y a efecto de seguir con el procedimiento de revisión previsto en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación vigente, se inician las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, primer párrafo, fracción II y 52-A, primer párrafo, fracción II del propio Código Fiscal de la Federación vigente; por lo que se le solicita que ante esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con domicilio en Av. Hidalgo No. 77, Módulo III, Planta Baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, proporcione la documentación e información que a continuación se indica:

- 1.- Cédula de trabajo con la determinación analítica de los pagos provisionales del Impuesto al Activo, individual y consolidado correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, así como fotocopia legible de la(s) declaración(es) anual(es) que sirvieron de base para la determinación de dichos pagos.
- 2.- Cédula de trabajo con la determinación del "ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPAC", que en cantidad de \$8'520,429, aparece en su declaración complementaria del impuesto al activo consolidado del ejercicio en revisión, presentada por la contribuyente el día 13 de agosto de 2010, adjuntando la documentación comprobatoria que justifique su dicho.
- 3.- Papel de trabajo que sirvió para el cálculo y determinación de los pagos provisionales individuales y consolidados del impuesto sobre la renta de los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, todos del ejercicio fiscal de 2006, que coincidan con el importe manifestado en su última declaración del ejercicio presentada, incluyendo el o los coeficientes de utilidad utilizados y fotocopia de las declaraciones del impuesto sobre la renta que sirvieron de base para su obtención.

Página 14 de 19

(...)

De lo anterior se advierte esencialmente que en el **oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011**, el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, precisó los datos siguientes:

- Que mediante oficio citatorio número 900 05-2010-2149 de fecha 1° de julio de 2010 y del oficio de solicitud de información y documentación número 900-05-01-2011-10323 de 3 de mayo de 2011, la autoridad efectuó la revisión del dictamen fiscal que le fue formulado por el Contador Público ***** con número de registro ***** respecto a los estados financieros de la hoy accionante, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, en términos de lo dispuesto por los artículos 42, primer párrafo, fracción IV y 52-A, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación, con relación a las contribuciones federales de las que es sujeto directo la hoy actora, en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Activo.

- Que habiéndose requerido al Contador Público que formuló el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción I del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011, después de haberlos recibido, a su consideración ésta no fue suficiente para observar la situación fiscal de la hoy actora, en virtud de que el Contador Público proporcionó incompleta diversa información y documentación.

- Que al no contar con la información y documentación suficiente para verificar la situación fiscal de la demandante y a efecto de seguir con el procedimiento de revisión previsto en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011, solicitó a la actora para que proporcionara ante la autoridad, diversa documentación e información.

- Fundamentó su **competencia** para emitir el oficio en controversia, citando, entre otros preceptos, los **artículos 42**, primer párrafo, fracción II, antepenúltimo, penúltimo y último párrafos, y **52-A**, primer párrafo,

fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011; 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, primer párrafo, fracciones VII, XII y XVIII, párrafo de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1° de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009, vigentes a partir de su publicación; 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracciones IX y X, y Apartado B, fracción II; quinto párrafo en la parte que establece: “La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan” y sexto párrafo, numeral 5, correspondiente al “Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente”, y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, cuya vigencia inició el 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del mismo Decreto, modificado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010, entrando en vigor a partir del 30 de abril de 2010, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio. En tal virtud, se transcriben los preceptos legales siguientes:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

“ARTÍCULO 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

(...)

II.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

(...)

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 295 -

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III y IV de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.

La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión.”

“ARTÍCULO 52-A.- Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el Reglamento de este Código, estarán a lo siguiente:

(...)

II.- Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 53-A de este Código, o dicha información y documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación.

(...)”

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

“ARTÍCULO 7º.- El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

(...)

VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;

(...)

XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.

(...)

XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.

(...)"

**REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE
2007 Y REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ABRIL DE
2010)**

"ARTÍCULO 2º.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria contará con las siguientes unidades administrativas:

(...)

B.- Unidades Administrativas Centrales:

(...)

IV.- Administración General de Grandes Contribuyentes:

(...)

e) Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

(...)

Las Administraciones Generales estarán integradas por sus titulares y por Administradores Centrales, Coordinadores, Administradores, Subadministradores, Jefes de Departamento, Enlaces, Supervisores, Auditores, Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados Tributarios, Ejecutores, Notificadores, Verificadores, Oficiales de Comercio Exterior, personal al servicio de la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera y por los demás servidores públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

(...)"

"ARTÍCULO 9.- Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

(...)

XXXVII.- Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas.

(...)

Las Administraciones Generales y las Administraciones Centrales que de ellas dependan, así como las Coordinaciones, las Administraciones y las Subadministraciones que dependan de éstas,

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 297 -

tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, excepto la Administración Central de Capacitación Fiscal, la Administración Central de Operación y Servicios Tecnológicos, las Administraciones para el Destino de Bienes, así como las Administraciones de Operación de Recursos y Servicios y las Subadministraciones de Recursos y Servicios, cuyas sedes podrán ubicarse fuera de la Ciudad de México.”

“ARTÍCULO 10.- Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas; los Coordinadores, y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I.- Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, **XXXVII**, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este Reglamento.

(...)”

“ARTÍCULO 20.- Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

A. Competencia:

(...)

IX.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales.

X.- Revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y

los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos.

(...)

B. Sujetos y entidades:

(...)

II.- Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado como controladoras, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

(...)

La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan.

(...)

5. Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.”

“ARTÍCULO 21.- Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las facultades que a continuación se precisan:

(...)

E. A la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y a las unidades administrativas adscritas a la misma:

I.- Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

Las señaladas en el apartado A, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, L, LIII, LIV, LVI, LXVI y LXVII del artículo anterior de este Reglamento.

(...)”

Del transcrito artículo 42, fracción II del Código Tributario se advierte que la autoridad fiscal, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales y en su caso, determinen las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales; está facultada para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio,

establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

Asimismo, en su antepenúltimo párrafo se advierte que las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

Además, en el penúltimo párrafo se desprende que en el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III y IV de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.

Y en el último párrafo, se desprende que la revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión.

Por su parte, el diverso 52-A del citado código, establece que cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el Reglamento del presente Código; de conformidad con la fracción II, establece que cuando se hubiese requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción I, después de haberlos recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 53-A de este Código, o dicha información y que los documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación.

De las fracciones VII, XII y XVIII del artículo 7º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se desprende que dicha dependencia, tiene entre otras atribuciones, la de vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones, por lo que podrá allegarse de la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, según el caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales; así como ejercer las demás atribuciones necesarias para llevar a cabo las facultades previstas en la ley en cita, su reglamento interior y disposiciones jurídicas aplicables.

Al respecto, el artículo 2 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, prevé que para el despacho de los asuntos competencia del Servicio de Administración Tributaria, éste contará con diversas unidades administrativas, entre las que se encuentran las Unidades Administrativas Centrales, como son la Administración General de Grandes Contribuyentes de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Por su parte, el artículo 9, fracción XXXVII del Reglamento citado, prevé medularmente que los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere dicho Reglamento, tendrán, entre otras, la atribución de notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas, facultad que en términos del artículo 10, fracción I del mismo ordenamiento, podrán ejercer los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas; los Coordinadores, y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales; asimismo, el penúltimo párrafo del artículo 9 en análisis, establece entre otras que las unidades administrativas centrales tendrán la sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, excepto la Administración Central de Capacitación Fiscal, la Administración Central de Operación y Servicios Tecnológicos, las Administraciones para el Destino de Bienes, así como las Administraciones de Operación de Recursos y Servicios y las Subadministraciones de Recursos y Servicios, cuyas sedes podrán ubicarse fuera de la Ciudad de México.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 301 -

Por lo que hace al artículo 20 del Reglamento de referencia, se desprende que corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

Asimismo, se advierte que la fracción IX del Apartado A en cuestión, establece como facultad de la Administración General de Grandes Contribuyentes, requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales.

En cuanto a la fracción X del Apartado A de referencia, se desprende que el mismo establece como facultad de la Administración General de Grandes Contribuyente revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso

para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos.

En cuanto al Apartado B del artículo 20 del Reglamento en cita, se desprende esencialmente que los sujetos y entidades que son competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes, son entre otras, de acuerdo a la fracción II del precepto en comento, las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado como controladoras, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Además, el Apartado B establece en su que la Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por diversos servidores públicos, entre ellos, el precisado en el numeral 5, el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Finalmente, por lo que hace al artículo 21, Apartado E, fracción I del Reglamento en cuestión, establece esencialmente que compete a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente (adscrita a aquella) ejercer las facultades señaladas en el apartado A, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, **IX, X**, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, L, LIII, LIV, LVI, LXVI y LXVII del artículo 20 de este Reglamento.

En el caso concreto, como se precisó, el oficio número **900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011**, lo emitió el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, por lo que del análisis al oficio en comento y preceptos transcritos, es indudable que la demandada sí es **competente por razón de materia** para emitir el oficio referido, ejercer sus facultades de comprobación, como lo es la revisión de gabinete y a su vez requerir diversa información y documentación a efecto de llevar a cabo la revisión de su contabilidad.

Lo anterior, toda vez que el oficio en cuestión, emitido por el

Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, está debidamente fundada en cuanto a su competencia material al citar, entre otros, el artículo 20, Apartado B, fracción II, quinto y sexto párrafo, numeral 5, en relación con el artículo 21, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria los cuales contemplan la figura de dicho servidor público para llevar a cabo las facultades del Apartado A, fracciones IX y X.

Dichas facultades, son las consistentes en **requerir** a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales; tal y como sucedió en el asunto que nos ocupa.

Y como se señaló, la facultad contenida en la fracción X, consistente en revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso

para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos; tal y como sucedió en el caso concreto.

Aunado a ello, la autoridad resulta competente materialmente para llevar a cabo dichas facultades, pues las mismas son aplicables para las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado como controladoras, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tal y como lo es la hoy parte actora.

Además, del análisis al oficio en comento y preceptos transcritos, es inconcuso que la demandada sí es **competente por razón de territorio** para emitir el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, pues al ser emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria,

Ahora bien, por lo que hace a la **competencia territorial** del Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria para emitir el oficio número **900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011**, la autoridad citó entre otros preceptos, el artículo 9, penúltimo párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el cual faculta a los Administradores Centrales dependientes de las Administraciones Generales, a ejercer sus facultades en todo del territorio nacional, cuestión que es suficiente para que esté debidamente fundamentada su competencia territorial para emitir el oficio de referencia.

A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia **2a./J. 83/2010** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXI, página 272 en el mes de junio de 2010, la cual dispone textualmente lo siguiente:

"SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ES INNECESARIA LA INVOCACIÓN DE LOS ACUERDOS POR LOS QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 305 -

DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMO FUNDAMENTO DE SU COMPETENCIA EN ESE ÁMBITO, AL ENCONTRARSE ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE AQUÉL.

Para cumplir con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad precise su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida; por lo que en el caso del Administrador General de Grandes Contribuyentes y las Administraciones Centrales dependientes de él, para fundar correctamente su competencia territorial, entre otros preceptos, es suficiente con la cita de las disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que prevé que tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, resultando innecesaria la invocación de las disposiciones contenidas en los Acuerdos que establecen la circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria que se publican en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de instrumentos normativos dirigidos a especificar la circunscripción territorial de las Administraciones Locales o Regionales del citado organismo.

Contradicción de tesis 142/2010. Entre las sustentadas por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de mayo de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

Tesis de jurisprudencia 83/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de junio de dos mil diez."

En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden, se concluye que el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria fundamentó y motivó debidamente su competencia material, territorial y de grado, para emitir el oficio número **900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011.**

Ahora bien, esta Juzgadora procede a resolver los siguientes argumentos planteados por la actora, a saber:

b.1 Que resulta ilegal el oficio **900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011**, emitido por el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de

Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, en virtud de que la autoridad no fundó y motivó debidamente su competencia material y territorial.

b.2 Ello, toda vez que la autoridad omitió citar los artículos 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los cuales contemplan su competencia material para despachar, realizar y ejercer facultades que les corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que, se le dejó en estado de indefensión, al no tener la certeza de que la autoridad actuó dentro de los límites y con las atribuciones conferidas por la ley.

b.3 Del mismo modo, señala que resulta ilegal el oficio de referencia, ya que las autoridades citaron el artículo 20, primer párrafo, apartado A, fracciones IX y X y Apartado B, fracción II, quinto párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, omitieron especificar qué fracción, párrafo o inciso de dicho precepto es en el que fundó su competencia material.

b.4 Asimismo, aduce que en relación al oficio referido, la autoridad citó el artículo 20, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, sin embargo, dicho precepto no es una norma compleja, por lo tanto no era necesario mencionar o transcribir la parte aplicable.

b.5 Aunado a lo anterior, argumenta que resulta ilegal el oficio en cuestión, en virtud de que las autoridades al momento de fundar su competencia en el artículo 20, numeral 5 del citado Reglamento, omitió precisar los párrafos, fracciones o incisos que resultaban aplicables al caso concreto, pues citó el numeral 5 de manera genérica.

b.6 Sostiene la ilegalidad de la resolución recurrida contenida en el oficio número **900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013**, toda vez que la autoridad no fundó debidamente su competencia material, ya que omitió citar el primer párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la cita es de manera general.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 307 -

A juicio de este Órgano Colegiado, los argumentos precisados anteriormente resultan **infundados** de acuerdo a los siguientes razonamientos:

En relación al argumento sintetizado en el inciso b.2, esta Juzgadora estima conveniente tener presente los artículos 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a saber:

“ARTÍCULO 17.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”

“ARTÍCULO 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

(...)

XI.- Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;

(...)

XXXIV.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.”

Del artículo 17 de referencia, se advierte que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

En cuanto al artículo 31 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, se advierte que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le corresponde el despacho, entre otros asuntos, cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, de conformidad con la fracción XI de dicho numeral, y los demás atribuidos expresamente en leyes y reglamentos, ello de acuerdo a lo señalado en la fracción XXXIV del precepto en cuestión.

En ese orden de ideas, dichos preceptos no resultan aplicables al caso concreto para que la autoridad fundamentara su competencia material en ellos, pues el numeral 17 en cuestión no establece una facultad atribuida a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, sino únicamente señala de manera genérica que las Secretarías de Estado contarán con órganos administrativos desconcentrados que tendrán facultades específicas.

Asimismo, por lo que hace al artículo 31, fracciones XI y XXXIV, no resulta aplicable al asunto que nos ocupa, pues en el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, no se está cobrando ningún impuesto a la parte actora, sino se está informando sobre el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, por lo que no resultaba obligatorio que ésta citara dichos preceptos normativos.

Por otra parte, también resultan **infundados** los argumentos marcados con los incisos **b.3**, **b.4** y **b.5**, pues en principio, resultan contradictorias sus aseveraciones, pues asevera que la autoridad al citar el artículo 20, primer párrafo, Apartado A, fracciones IX y X, y Apartado B, fracción II, quinto párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, omitió especificar qué fracción, inciso o párrafo, fue con el que fundó su competencia, y posteriormente manifiesta que dicho precepto legal no es una norma compleja, y concluye señalando que citó el numeral 5 del artículo 20 de forma genérica.

Al respecto, cabe señalar que la norma compleja es aquella que incluye diversos elementos competenciales o establece una pluralidad de

competencias o facultades que constituyen aspectos independientes unos de otros, de manera que para estimarse correcta la fundamentación de un acto de autoridad que se apoye en un precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa del apartado, fracción, inciso o subinciso que otorgue la atribución ejercida o, si no los contiene, la transcripción del texto correspondiente, tal y como lo ha sostenido el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la jurisprudencia Número **I.7o.A.J/65(9a.)**, la cual es del tenor siguiente:

“NORMAS COMPLEJAS. SU NATURALEZA DEPENDE DE LA PLURALIDAD DE HIPÓTESIS QUE LAS COMPONEN. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: “COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.”, **una norma compleja es aquella que incluye diversos elementos competenciales o establece una pluralidad de competencias o facultades que constituyan aspectos independientes unos de otros, de manera que para estimarse correcta la fundamentación de un acto de autoridad que se apoye en un precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa del apartado, fracción, inciso o subinciso que otorgue la atribución ejercida o, si no los contiene, la transcripción del texto correspondiente.** Por tanto, la naturaleza de una norma compleja depende de la pluralidad de hipótesis que la componen, porque el particular no tiene la certeza a cuál de ellas se refiere el acto que le perjudica.”

(El énfasis es nuestro)

Ahora bien, en el caso que nos ocupa el artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en 2011, y que fue transcrito anteriormente en su parte de interés, sí es una norma compleja, pues contiene una pluralidad de hipótesis, relativas a la competencia material de la autoridad demandada.

No obstante lo anterior, el Administrador Central de

Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria al emitir el **oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011**, citó expresamente lo siguiente: *“20, primer párrafo, Apartado A, fracciones IX y X, y Apartado B, fracción II; quinto párrafo en la parte que establece: La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan” y sexto párrafo, numeral 5, correspondiente al Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente”*.

En consecuencia, contrario a lo manifestado por la actora, el artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en 2011 sí es una norma compleja, y también, contrario a sus argumentaciones, la autoridad sí citó las fracciones, párrafos e incisos correspondientes a su competencia material para emitir el oficio de 21 de junio de 2011, por lo tanto, no citó dicho numeral de forma genérica.

Bajo esa tesitura, resulta **infundado** el argumento sintetizado en el inciso **b.1** del presente Apartado, ya que el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria sí fundamentó debidamente su competencia material y territorial del oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011.

Por lo tanto, prevalece la validez de la resolución originalmente recurrida, así como de la resolución impugnada.

Ahora bien, con el fin de dilucidar si la **Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria**, fundamentó debidamente su competencia material, al emitir la resolución recurrida contenida en el oficio número **900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013**, esta Juzgadora estima conveniente tener presente dicho oficio en la parte de interés, a saber:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

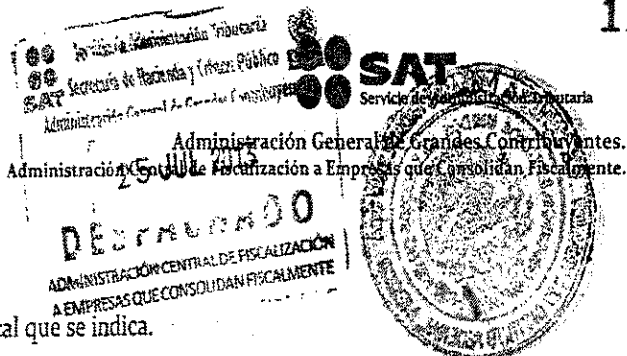
EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 311 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



117

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

Asunto: Se determina el crédito fiscal que se indica.

México, D.F., 25 de julio de 2013.

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano".

C. Representante Legal de:



ANTES

PREVIAMENTE LECTA E IDENTIFICACION
DEL NOTIFICADOR, RECIBI COPIA
CON FIRMA AUTOGRAFADA DEL
PRESENTE OFICIO

TENERO 26/07/2013 17:30 HRS

Esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir la presente, en virtud de que la contribuyente es una sociedad controladora que cuenta con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, según oficio número 361-I-B-3-5334 del 15 de abril de 1985, emitido por la entonces Dirección General Técnica de Ingresos, en términos de lo dispuesto por el artículo 37-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, vigente en 1985 y en relación con los artículos 64 y Segundo Transitorio, primer párrafo, fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., fracciones I, VII, XII y XVIII, 8o., fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1o de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012, vigentes a partir del día siguiente al de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e), y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracciones XXXI y XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracciones IX, X y XIV, Apartado B, fracción II; párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 5 y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del Decreto, por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y el 13 de julio de

1 de 96



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos; así como en los artículos 6, primer párrafo, 17-A, 20 Bis, 21, 33 último párrafo, 38, 42, primer párrafo, fracciones II y IV y antepenúltimo párrafo, 48, primer párrafo, fracciones I, II, III y IX, 50, 51, 52, 52-A, 63, 70, 76 del Código Fiscal de la Federación vigente y artículo 76 del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción, procede a determinar el crédito fiscal en materia del impuesto sobre la renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, derivado de la revisión de gabinete número GSD9400235/11, contenida en el oficio número 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, conforme a lo siguiente:

- a) Con oficio 900-05-2010-2149 del 1 de julio de 2010, emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, firmado por ausencia en suplencia por el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" dependiente de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, se citó al C.P. [REDACTED] con número de registro 7499, para que se presentara él o su Representante Legal debidamente acreditado en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación vigente, ante dicha autoridad, a fin de llevar a cabo la revisión de los papeles de trabajo que formuló respecto del dictamen que para efectos fiscales, emitió sobre los estados financieros de la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, mismo que fue notificado legalmente, previo citatorio al citado contador el 07 de julio de 2010, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero, con cargo de "Recepcionista del Despacho [REDACTED] con quien dijo tener vínculo laboral", sin que lo haya acreditado, despacho en el que labora el C.P. Gustavo [REDACTED] revisión de papeles de trabajo que se realizó el día 16 de julio de 2010, con el L.C. [REDACTED] en representación del citado profesionista, quien acreditó su representación legal mediante Escritura Pública número cincuenta y seis mil novecientos noventa y uno, volumen mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, de fecha 6 de octubre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Carlos A. Yfarraguerri y Villarreal, Titular de la Notaría Pública número veintiocho del Distrito Federal, quien se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral.- Registro Federal de Electores, número de folio [REDACTED] clave de elector [REDACTED] y año de registro [REDACTED]
- b) Mediante oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1" adscrita a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, firmado por la C.P. María Letícia Bernal Velázquez, Administradora de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1" adscrita a esta Administración, dirigido al C.P. [REDACTED] notificado legalmente, previo citatorio el 11 de mayo de 2011, a la C. [REDACTED] en su carácter

2 de 96

Avenida Hidalgo No. 77, Módulo III, P.B., Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, 06100, México, D.F. Tel: (55) 5800 5800 ext. 111
sat.gob.mx youtube.com/sat.mx twitter.com/sat.mx

(...)

De lo anterior se advierte esencialmente que en el oficio número 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria determinó un crédito fiscal en contra de la actora en materia del Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006, derivado de la revisión de gabinete número GSD9400235/11, contenida en el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011.

Asimismo, se advierte esencialmente que la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la

Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, fundamentó su competencia material para emitir el oficio de fecha 25 de julio de 2013 (resolución recurrida), con base, entre otros, en los artículos artículos 42, primer párrafo, fracciones II y IV y antepenúltimo párrafo, 28, primer párrafo, fracciones I, II, III y IX, 50, 51, 52-A, 63, 70, 76 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011; 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, primer párrafo, fracciones I, VII, XII y XVIII, párrafo de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1° de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2012 vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracciones XXXI y XXXVII y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, **Apartado A**, fracciones IX, X y XIV, y Apartado B, fracción II; párrafos antepenúltimo y penúltimo, numeral 5, y 21, primer párrafo, **Apartado E**, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, modificado por Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010 y el 13 de julio de 2012, en vigor a partir del 30 de abril de 2010 y 14 de agosto de 2012, respectivamente, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio de los citados Decretos.

En relación a lo anterior, esta Juzgadora estima conveniente transcribir los siguientes preceptos legales (todos vigentes en el año 2013), relativos únicamente a la competencia material de la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria para emitir la resolución recurrida de 25 de julio de 2013, a saber:

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

“ARTÍCULO 9.- Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

(...)

XXXVII.- Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas.

(...)”

“ARTÍCULO 10.- Los **Administradores Centrales**, Regionales, Locales y de las Aduanas, así como los Coordinadores, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I.- Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, **XXXVII**, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVII y XLVIII del artículo anterior.

(...)”

“ARTÍCULO 20.- Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

A. Competencia:

(...)

XIV.- **Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar los derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo.**

(...)”

“ARTÍCULO 21.- Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las facultades que a continuación se precisan:

(...)

E. A la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y a las unidades administrativas adscritas a la misma:

I.- Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente:

Las señaladas en el apartado A, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, **XIV**, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, L, LIII, LIV, LVI,

LXVI y LXVII del artículo anterior de este Reglamento.

(...)"

(Énfasis añadido)

Del artículo 9 de referencia, se advierte que los Administradores Generales, tendrán de entre otras, la facultad de notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas, de conformidad con la fracción XXXVII de dicho precepto normativo. Y en relación a ello, el artículo 10 del Reglamento en cuestión, faculta a los Administradores Centrales, para ejercer entre otras facultades, la precisada en la fracción XXXVII de referencia.

Por lo que hace al artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, establece entre otras facultades, la contenida en la fracción XIV relativa a la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes, para determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar los derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las facultades a que se refiere el precepto en cuestión.

Y en relación al artículo 21 del ordenamiento de referencia, se desprende que la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se encuentra facultada para llevar a cabo la potestad precisada en el numeral 20, en su fracción XIV, entre otras.

En ese orden de ideas, en el caso concreto, como se precisó, el oficio número **900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013**, lo emitió la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, por lo que del análisis al oficio en comento y preceptos transcritos, es indudable que la demandada **sí es competente por razón de materia** para determinar un crédito fiscal en contra de la actora en materia del Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio fiscal

comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

Lo anterior, toda vez que el oficio en cuestión, emitido por la **Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria**, está debidamente fundada en cuanto a su competencia material al citar, entre otros, el artículo 20, Apartado A, fracción XIV, en relación con el artículo 21, Apartado E, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pues éste último precepto contempla la figura de dicho servidor público para llevar a cabo la facultad del Apartado A, fracción XIV, la cual consiste en determinar los impuestos y accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los contribuyentes responsables solidarios y demás obligados, así como determinar los derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las facultades de dicho artículo, pues en el caso concreto, la autoridad determinó un crédito fiscal en contra de la actora en materia de Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

Ahora bien, por lo que hace al argumento planteado por la actora, sintetizado en el inciso **b.6** del presente Apartado, por medio del cual sostiene la ilegalidad de la resolución recurrida toda vez que la autoridad no fundó debidamente su competencia material, ya que omitió citar el primer párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, ya que lo citó únicamente de manera general; el mismo resulta **infundado**.

Al respecto, esta Juzgadora estima conveniente transcribir el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año 2013, mismo que a la letra dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 50.- Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código.

El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en los casos previstos en las fracciones I, II y III del

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 317 -

artículo 46-A de este Código.

Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final de visita o del oficio de observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate.

En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.”

(El énfasis es nuestro)

Del artículo anteriormente transcrito, se advierte esencialmente que, las autoridades fiscales que practiquen visitas a los contribuyentes o ejerzan las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 del Código Tributario, y que conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 del Código en cuestión.

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 50 establece que el plazo precisado en el párrafo anterior para emitir la resolución, se suspenderá en los casos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 46-A del multicitado Código.

Además, el párrafo tercero, señala que si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen algún

medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final de visita o del oficio de observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Por lo que hace al penúltimo párrafo del precepto legal en cuestión, el mismo establece que cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate.

Finalmente, el último párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, señala que en la resolución mencionada deberán precisarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo, y que cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.

En ese orden de ideas, se concluye esencialmente que el primer párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, señala únicamente el límite temporal que tiene la autoridad fiscal para emitir la resolución correspondiente, en la que determine la situación fiscal del contribuyente revisado una vez concluida la facultad de comprobación respectiva. Por lo que, contrario a lo manifestado por la actora, dicho numeral no establece facultad alguna para la autoridad fiscalizadora, sino únicamente un límite temporal para emitir la resolución en cuestión.

Por ende, el hecho de que en la resolución recurrida de fecha 25 de julio de 2013 no se hubiere citado precisamente el primer párrafo del artículo 50 del Código Tributario, no implica que dicha resolución se encuentre indebidamente fundada en cuanto a la competencia material de la autoridad que la emitió, pues se reitera que dicho precepto no establece la competencia de autoridad alguna para la determinación de un crédito fiscal.

No obstante lo anterior, como se expuso anteriormente, la autoridad sí fundó debidamente su competencia material para determinar y notificar el crédito fiscal contenido en el oficio número **900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013**, pues citó entre otros preceptos legales, el numeral 9,

primer párrafo, fracción XXXVII, 10, primer párrafo, fracción I, así como el diverso 20, primer párrafo, apartado A, fracción XIV, y 21, primer párrafo, apartado E, fracción I, todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente en el año 2013.

En consecuencia, prevalece la validez de la resolución originalmente recurrida, así como de la resolución impugnada.

APARTADO C. En otra cuestión, esta Juzgadora procede a realizar el análisis de los argumentos planteados por la demandante, encaminados a controvertir la debida fundamentación y motivación del oficio número **900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012**, así como del oficio número **900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012**; dichos argumentos son los siguientes:

c.1 Que resulta ilegal el **oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, así como el oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012**, por medio de los cuales se dio inicio a las facultades de comprobación y se solicitó diversa documentación e información relacionada con la determinación de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidados, respectivamente, toda vez que la autoridad omitió informar a la contribuyente en la solicitud de datos y documentos, el derecho que tenía para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho, en contravención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

c.2 Del mismo modo, argumenta que resulta ilegal el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011 así como el oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, toda vez que la autoridad no señaló el periodo o ejercicio fiscal a revisar de las contribuciones sujetas a revisión.

c.3 Además, manifiesta que resulta ilegal el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 y el oficio número 900-05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, en virtud de que fueron dirigidos a *****

***** ** ** y no a su representante legal, por lo que al haber sido citada la persona moral, jamás tuvo la oportunidad de presentar debidamente la información solicitada.

c.4 También, asevera que resultan ilegales los oficios número 900-05-2011-385 y 900 05-03-2012-54438, toda vez que no establecieron plazo para concluir la revisión de gabinete, por lo que se contravino lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con los numerales 14 y 16 Constitucionales.

c.5 Lo anterior, máxime que el artículo 12 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que al inicio de las facultades de comprobación, la contribuyente tiene el derecho a ser informada de sus derechos y obligaciones.

c.6 Además, manifiesta que al tener derecho de ser informada respecto a cuál era el plazo que tenía la autoridad para concluir la revisión de gabinete, en su caso, la demandada debió citar en el oficio 900-05-2011-385, así como en oficio número 900 05-03-2012-54438, el artículo 46-A y su párrafo aplicable del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que tuviera la seguridad de que la revisión no sería indefinida.

c.7 Sostiene la ilegalidad de la resolución impugnada, así como de la originalmente recurrida, en virtud de que son fruto de un procedimiento de fiscalización viciado en origen, ya que a su consideración, el oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012 no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la autoridad únicamente citó la fracción IV del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, omitiendo citar la fracción I de dicho numeral, misma que faculta a la autoridad para notificar el oficio de observaciones

A juicio de esta Primera Sección de la Sala Superior, de este Tribunal, resultan **infundados** los argumentos de la parte actora precisados en el presente apartado, por las consideraciones que se exponen a continuación:

Por lo que hace al argumento sintetizado en el inciso **c.1**, el mismo será analizado y resuelto en el Considerando Quinto del presente fallo, por tener relación con el argumento vertido por la actora en el Apartado D del

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 321 -

quinto concepto de impugnación de la demanda.

En relación al argumento de la demandante, sintetizado en el inciso c.2 por medio del cual señala que la autoridad omitió citar el periodo o ejercicio fiscal a revisar de las contribuciones sujetas a revisión, tanto en el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 así como en el oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012; el mismo resulta infundado.

Al respecto, resulta conveniente tener presentes las partes de interés del oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 así como en el oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, tal y como digitaliza a continuación:

OFICIO NÚMERO 900-05-2011-38 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2011

(...)

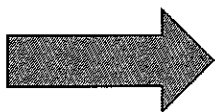

Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

0871



900-05-2011-385
GSD9400235/11

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecto como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Activo, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.



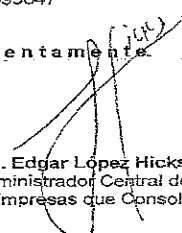
La documentación e información deberá presentarse en forma completa, correcta, legible y oportuna mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al número de este oficio.

Para tal efecto, se le concede un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo previsto al respecto en el artículo 53, primer párrafo, inciso c) del mencionado Código Fiscal de la Federación vigente.

De conformidad con lo que establece el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente, se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta, legible y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación, constituye una infracción en términos del artículo 85, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, primer párrafo, fracción I del propio Código Fiscal de la Federación vigente, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40, del referido Código.

1-899847

Atentamente,


Lic. Edgar López Hicks.
Administrador Central de Fiscalización
a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

0871

OFICIO NÚMERO 900 05-03-2012-54438 DE FECHA 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2012.



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que
Consolidan Fiscalmente.
Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan
Fiscalmente "3"

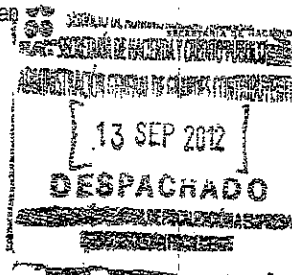
Oficio: 900 05-03-2012-54438

Exp.: [REDACTED]

GSD9400235/11

ENTREGA PERSONAL

Asunto: Se solicitan los informes, datos y
documentos complementarios
que se indican.



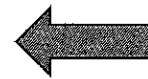
0034

México D.F., 13 SEP 2012

C. Representante Legal de:

antes

Esta Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, en relación con la revisión que se le está practicando por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, al amparo del oficio número 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, expedido por el Lic. Edgar López Hicks, Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, mismo que le fue notificado previo citatorio al Representante Legal el 28 de junio de 2011; autoridad competente para emitir el presente, en virtud de que la contribuyente es una sociedad controladora que cuenta con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, según oficio número 361-I-B-3-5334 de fecha 15 de abril de 1985, emitido por la entonces Dirección General Técnica de Ingresos, en términos de lo dispuesto por el artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, en vigor a partir del 1 de enero de 1981, vigente en 1985 y en relación con los artículos 64 y Segundo Transitorio, primer párrafo, fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, vigente a partir del mismo día de su publicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 31, primer párrafo, fracciones XI y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., fracciones I, VII, XII y XVIII, 8o., fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1o. de julio de 1997, reformada, adicionada y



Continúa en hoja 2...

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 323 -

Del oficio número **900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011** se advierte en la parte conducente, que la autoridad señaló que la información y documentación requerida, era considerada necesaria para el ejercicio de sus facultades de comprobación, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la hoy actora como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Activo, **por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.**

Respecto al oficio número **900 05-03-2012-54438 de fecha 13 de septiembre de 2012**, se advierte en la parte conducente, que la autoridad señaló que dicho oficio se emitía en relación a la revisión que se le estaba practicando a la actora, **por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.**

Siendo importante destacar, que respecto al oficio de 13 de septiembre de 2012, el mismo fue una solicitud de documentación complementaria dirigida a la accionante, por lo que no debía precisar el periodo sujeto a revisión, ya que dicho requisito fue señalado en el acto de inicio de facultades de comprobación, es decir, en el oficio de fecha 21 de junio de 2011.

En ese orden de ideas, contrario a lo manifestado por la accionante, la autoridad demandada sí señaló el ejercicio fiscal a revisar de las contribuciones sujetas a revisión de la actora, tanto en el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, como en el oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2013; en consecuencia, resulta **infundado** el argumento de la actora precisado en el inciso **c.2** del presente apartado.

Por otra parte, también resulta **infundado** el argumento de la demandante, sintetizado en el inciso **c.3** del presente apartado, por medio del cual manifiesta que resulta ilegal el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 y el oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre

de 2012, en virtud de que fueron dirigidos a ***** y no a su representante legal, por lo que al haber sido citada la persona moral, jamás tuvo la oportunidad de presentar debidamente la información solicitada.

Ello es así, ya que de conformidad con los criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación, las personas morales, como ficciones jurídicas que son, sólo pueden apersonarse a través de sus representantes, por lo que, **si un acto se dirige a la persona moral, debe entenderse que se le está dirigiendo por medio de su representante legal**, por lo cual tanto, no se genera ningún estado de incertidumbre o indefensión a la contribuyente.

A lo anterior, resultan aplicables las siguientes jurisprudencias, cuyos datos de identificación, rubros y textos son del tenor literal siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 200715
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo II, Septiembre de 1995
Materia(s): Administrativa
Tesis: **2a./J. 48/95**
Página: 140

CITATORIOS PARA NOTIFICACION EN MATERIA FISCAL. NO ES NECESARIO, PARA SU VALIDEZ, QUE SE DIRIJAN, ADEMAS DE A LA PERSONA MORAL INTERESADA, A SU REPRESENTANTE LEGAL. Si un citatorio para notificación en materia fiscal se dirige a nombre de la persona moral interesada, es claro que esta situación no genera ningún estado de incertidumbre o indefensión, pues las personas morales, como ficciones jurídicas que son, sólo pueden apersonarse al través de dichos representantes. En este sentido, es incuestionable que si el citatorio de referencia se dirige a la persona moral, debe entenderse que se le está dirigiendo por medio de su representante legal.

Contradicción de tesis 3/95. Entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 25 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.

Tesis de Jurisprudencia 48/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión pública de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”

“Época: Décima Época
Registro: 2006106
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 325 -

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo II, Libro 5, Abril de 2014
Materia(s): Administrativa
Tesis: **XXI.2o.P.A. J/ 4**
Página: 1351

NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, PARA SU VALIDEZ, NO ES NECESARIO QUE SE REQUIERA LA PRESENCIA DE SU REPRESENTANTE LEGAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 48/95, que en los citatorios para llevarse a cabo una notificación en materia fiscal, en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, no es necesario, para su validez, que se dirijan además de a la persona moral interesada, a su representante legal, porque esa situación no genera algún estado de incertidumbre o indefensión, pues las personas morales, como ficciones jurídicas que son, sólo pueden apersonarse al través de dichos representantes, por lo que es incuestionable que si el citatorio de referencia se dirige a la persona moral, debe entenderse que se le está dirigiendo por medio de su representante legal. De esta manera, en aplicación del mencionado criterio, tratándose de notificaciones a personas físicas, tampoco cabe exigir que éstas se dirijan además a su representante legal, porque en este supuesto son aquéllas las directamente obligadas por el acto de autoridad que se pretende notificar y, por consecuencia, quienes responden ante la autoridad personalmente, aunado a que las personas físicas pueden actuar por propio derecho y no necesariamente a través de su representante legal, contrariamente a lo que sucede con las personas morales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 82/2010. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra. 9 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Julián Jiménez Pérez.

Revisión fiscal 43/2013. Administradora Local Jurídica de Acapulco, por sí y en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra. 9 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Julián Jiménez Pérez.

Amparo directo 359/2013. Alfredo Salmerón Salmerón. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jacinto Figueroa Salmorán, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de Circuito. Secretario: Orlando Hernández Torreblanca.

Amparo directo 418/2013. Laura Villanueva Barrera. 13 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez.

Amparo directo 453/2013. 13 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jacinto Figueroa Salmorán, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de Circuito. Secretario: Orlando Hernández Torreblanca.”

En ese orden de ideas, la autoridad fiscalizadora no se encontraba obligada a asentar en el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, su respectivo citatorio y acta de notificación de 27 y 28 del mismo mes y año, así como el oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, su respectivo citatorio y acta de notificación de 13 y 14 del mismo mes y año, que los mismos se encontraban dirigidos a la contribuyente y no a su representante legal, pues si un acto se dirige a la persona moral, debe entenderse que se le está dirigiendo por medio de su representante legal, por lo que, el hecho de que los mismos hayan sido dirigidos a ***** (antes *****) tal y como lo manifestó la accionante, no genera ningún estado de indefensión o incertidumbre a la accionante.

En consecuencia, resulta infundada la manifestación del actor, sintetizada en el inciso **c.3** del presente apartado.

Por otra parte, esta Juzgadora procede a realizar el análisis conjunto de los argumentos de la demandante precisados en los incisos c.4, c.5 y c.6 del presente apartado, por medio de los cuales asevera lo siguiente:

c.4 Que resultan ilegales los oficios número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 y 900 05-03-2012-54438 13 de septiembre de 2012, toda vez que no establecieron plazo para concluir la revisión de gabinete, por lo que se contravino lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con los numerales 14 y 16 Constitucionales.

c.5 Lo anterior, máxime que el artículo 12 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que al inicio de las facultades de comprobación, la contribuyente tiene el derecho a ser informada de sus derechos y obligaciones.

c.6 Además, que al tener derecho de ser informada respecto a cuál era el plazo que tenía la autoridad para concluir la revisión de gabinete, en su caso, la demandada debió citar en el oficio 900-05-2011-385, así como en oficio número 900 05-03-2012-54438, el artículo 46-A y su párrafo aplicable del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que tuviera la seguridad de que la revisión no sería indefinida.

A juicio de esta Juzgadora, los argumentos referidos resultan **infundados**, de acuerdo a los siguientes razonamientos:

Por principio, esta Juzgadora estima conveniente transcribir el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en los años 2011 y 2012, mismo que a la letra señala lo siguiente:

"ARTÍCULO 46-A.- Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:

A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquéllos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de:

I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga.

II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.

III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.

IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.

V. Tratándose de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento.

Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento.

VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.”

Del **artículo 46-A** transcrito, se advierte esencialmente que, las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, **dentro de un plazo** máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

Una de las salvedades para que la autoridad en el plazo señalado en el párrafo anterior concluya la visita, es para los contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquéllos que consoliden para

efectos fiscales de conformidad con el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

La otra salvedad para que la autoridad en el plazo máximo de 12 meses concluya la visita, es para los contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

Asimismo, el precepto legal de referencia, establece que los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo del artículo de referencia, se suspenderán en los siguientes casos:

De acuerdo a la fracción I, en caso de huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga.

De conformidad con la fracción II, cuando llegase a fallecer el contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.

En relación a la fracción III, cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.

Respecto a la fracción IV, cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.

Conforme a la fracción V, tratándose de la fracción VIII del artículo 46 del Código Fiscal, el plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento; dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento.

Finalmente, de acuerdo a la fracción VI, cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Ahora, en el penúltimo párrafo del artículo de referencia, se desprende que, si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Finalmente, el último párrafo del precepto normativo en cuestión, establece que cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida

en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.

Ahora bien, es de destacarse que tal y como se expuso en los apartados A y B, **el oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011**, fue emitido entre otros preceptos, con base en el artículo **42, fracción II del Código Fiscal de la Federación**, el cual establece que la autoridad fiscal, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales y en su caso, determinen las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales; está facultada para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

En ese orden de ideas, **resulta innecesario que la autoridad citara el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación**, en el oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, toda vez que dicho precepto establece los plazos en que deben concluir los actos de fiscalización correspondientes, dependiendo del carácter del contribuyente, entonces, sólo se determina la duración máxima de las revisiones de gabinete, por lo que no es en dicho numeral, sino en el artículo 42, fracción II del Código Tributario donde se prevén las respectivas facultades

Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número **2a./J. 12/2011** de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:

"Época: Décima Época
Registro: 2000114
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro IV, Enero de 2012
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 12/2011
Página: 3577

ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO ES NECESARIO QUE INVOQUEN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LOS PLAZOS MÁXIMOS EN QUE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN RELATIVOS DEBEN CONCLUIR. Las referidas órdenes satisfacen el requisito de fundamentación y motivación contenido en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, cuando además de fundarse en las fracciones II y III del numeral 42 de dicho ordenamiento tributario federal, precisan las contribuciones motivo de verificación en cada caso, y cumplen las condiciones formales previstas en los artículos 38, 43 y 48 del propio Código, siendo innecesario invocar el diverso 46-A, que establece los plazos en que deben concluir los actos de fiscalización correspondientes, dependiendo del carácter del contribuyente, porque no es en este último precepto, sino en las referidas fracciones II y III, donde se prevén las respectivas facultades, pues en aquél sólo se determina la duración máxima de las visitas domiciliarias o revisiones de escritorio o gabinete; regla que constituye un deber de ineludible cumplimiento que ha de observar la autoridad fiscal por imperativo de ley, pues de no hacerlo, las consecuencias son que: a) La visita o revisión concluya en la fecha en que debiera culminar; b) Las órdenes queden sin efectos, es decir, que no produzcan consecuencias legales; y, c) Todo lo actuado quede insubsistente; además, porque de los referidos numerales 38, 43 y 48 no deriva que constituya un requisito de legalidad de las órdenes de que se trata, que deban señalar el plazo máximo que durarán las correspondientes facultades de comprobación y la cita del precepto que alude a dicho plazo; máxime que la falta de esto último no irroga perjuicio a los destinatarios de las órdenes en cuestión, pues al estar legalmente previstos los plazos máximos de duración y las consecuencias de su incumplimiento por parte de la autoridad fiscal, no se les deja en inseguridad jurídica y sujetos a una indefinida intromisión en sus domicilios.

Contradicción de tesis 359/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

Tesis de jurisprudencia 12/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once."

Lo anterior, máxime que de conformidad con el criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal, el hecho de que la autoridad no señalara el plazo máximo para concluir la revisión de gabinete, ello no irroga perjuicio a los contribuyentes que hayan recibido como en este caso, el oficio



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 333 -

900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 por medio del cual la autoridad inició sus facultades de comprobación la autoridad, así como el oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012 por medio del cual la demandante requirió diversos documentos e información a la actora, pues al estar legalmente previstos los plazos máximos de duración y las consecuencias de su incumplimiento por parte de la autoridad fiscal, no se les deja en inseguridad jurídica y sujetos a una indefinida intromisión a sus domicilios.

Bajo esa tesitura, resultan aplicables los precedentes **VII-P-1aS-284** y **VII-P-1aS-793** de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, mismas que se citan para efectos de su reiteración, las cuales se transcriben a continuación:

VII-P-1aS-284

“ORDEN DE REVISIÓN DE ESCRITORIO O DE GABINETE.- NO ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD SEÑALE LA FECHA DE DURACIÓN Y/O CONCLUSIÓN.- El artículo 38 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, establece que todos los actos administrativos deberán estar fundados y motivados. Por lo que, para que una orden de revisión de escritorio o de gabinete se considere debidamente fundada y motivada, debe señalar lo siguiente: 1) La documentación que requiere; 2) la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige; 3) la facultad que ejerce; 4) la denominación de las contribuciones; y, 5) el periodo a revisar. De manera que, el hecho de que la autoridad fiscal no señale la fecha de duración y/o conclusión de las facultades ejercidas, no le resta validez a la orden de revisión de escritorio o gabinete, al no ser datos indispensables para que el contribuyente adquiera certeza jurídica en relación a la facultad de comprobación ejercida por la autoridad.”

Juicio de Tratados Internacionales Núm. 19285/08-17-08-2/165/12-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2012)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 12. Julio 2012. p. 92”

VII-P-1aS-793

“OFICIO DE SOLICITUD DE DATOS, DOCUMENTOS E INFORMES, NO REQUIERE PARA SU LEGALIDAD, SEÑALAR EL PLAZO PARA CONCLUIR LA REVISIÓN DE GABINETE.- De conformidad con el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, deberán hacerlo cumpliendo con los requisitos que ese precepto señala: indicar el lugar y el plazo en el cual se deben proporcionar los informes o documentos requeridos, y que estos sean proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante. Asimismo, el oficio en comento deberá de satisfacer las formalidades establecidas en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación; esto es, constar por escrito en documento impreso, señalar la autoridad que lo emite, lugar y fecha de emisión, estar fundado y motivado, expresando el objeto del mismo y ostentar la firma del funcionario competente que lo emite y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que se encuentra dirigido; consecuentemente, la autoridad fiscal no se encuentra compelida a señalar el plazo que durará la revisión, pues como quedó precisado, ese señalamiento no constituye un requisito previsto en los artículos 38 y 48 del Código Fiscal de la Federación.”

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13364/11-17-10-5/851/13-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de diciembre de 2013)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 31. Febrero 2014. p. 160”.

Ahora bien, tampoco le asiste la razón a la demandante, en relación a que de conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la autoridad debió señalar en los oficios 900-05-2011-385 y 900 05-03-2012-54438 el plazo para concluir la revisión de gabinete, pues tenía derecho a ser informada de sus derechos y obligaciones.

Ello resulta ser así, toda vez que, como se ha expuesto en los párrafos precedentes, la autoridad no se encontraba obligada a señalar el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, que medularmente contempla los plazos máximos para que la autoridad lleve a cabo sus facultades de comprobación.

No obstante lo anterior, se transcribe el artículo 12 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente referido por la actora, a saber:

“ARTÍCULO 12.- Los contribuyentes tendrán derecho a ser informados, al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.”

Dicho precepto legal, establece que los contribuyentes tendrán derecho a ser informados, al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

Ahora, como se ha expuesto previamente, si la autoridad no informó a la actora el plazo para concluir la revisión de gabinete, no afecta la validez de lo actuado por aquella ni del crédito, ello de conformidad con la jurisprudencia número **VI.3o.A. J/75** del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, misma que fue transcrita con anterioridad.

Bajo esa tesitura, resultan **infundados** los argumentos planteados por la accionante, precisados en el presente apartado con los incisos **c.4, c.5 y c.6.**

Finalmente, también resulta **infundado** el argumento de la demandante, sintetizado en el inciso **c.7** del presente apartado, a través del cual señala que el oficio de observaciones **900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012** no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la autoridad únicamente citó la fracción IV del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, omitiendo citar la fracción I de dicho numeral, misma que faculta a la autoridad para notificar el oficio de observaciones.

Al respecto, es importante señalar que tal y como se expuso en el apartado A, el oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012 **consistente en el oficio de observaciones**, fue emitido con base, entre otros, en el artículo 48, fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, esta toda vez que en el Apartado A del presente Considerando, este Órgano Colegiado transcribió el artículo 48, fracciones I, IV y VI del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año 2012, resulta innecesario reproducirlos de nueva cuenta, empero, se hará una recapitulación de su contenido, a saber:

- El **artículo 48** del Código Fiscal de la Federación, establece fundamentalmente las formalidades que se deberán atender, cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria.

- La **fracción I** del numeral 48 en comento, establece que dicha solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en el lugar donde éstas se encuentren.

- En cuanto a la **fracción IV** del artículo 48 del Código Tributario, la misma establece que como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales **formularán oficio de observaciones**, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario.

- Al respecto, la **fracción VI del numeral 48** del ordenamiento de referencia, señala que el **oficio de observaciones** a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada, es decir, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación.

Bajo esa tesitura, la autoridad demandada no se encontraba obligada a citar la fracción I del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación en el oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, pues como

se ha señalado, dicha fracción regula la notificación de los oficios de solicitud de documentación que impliquen el inicio de las facultades de la autoridad, y no así la práctica de una notificación de oficio de observaciones, como lo es el de fecha 17 de diciembre de 2012 que nos ocupa.

Por lo que, se colige que la fracción I del multicitado artículo 48 del Código Tributario, no establece facultad ni competencia alguna de la autoridad para llevar actuar dentro de sus límites, sino únicamente contempla cómo debe ser la notificación de la solicitud de información a la que se ha hecho referencia.

De acuerdo con los razonamientos expuestos, la autoridad no se encontraba obligada a citar la fracción I del Código en cuestión, en el oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, ni en su citatorio y acta de notificación de 17 y 18 de diciembre de 2012, respectivamente, pues no le resulta aplicable a dicho oficio, ya que éste es un oficio de observaciones el cual debe atender las fracciones IV y VI del precepto normativo de referencia, tal como sucedió en la especie, ya que la autoridad si citó estas últimas fracciones en el oficio de 17 de diciembre de 2012.

En consecuencia, resulta **infundado** el argumento planteado por la accionante, y que fue sintetizado en el inciso **c.7** del presente apartado; por lo tanto prevalece la validez de la resolución originalmente recurrida, así como de la resolución impugnada.

Entonces, en ese orden de ideas esta Juzgadora **concluye** lo siguiente:

- En relación al **Apartado A** del presente Considerando, los oficios números: 900 05-2011-385, 900 05-03-2012-54438, 900-05-03-2012-69836 y 900-05-2013-48229, de fechas 21 de junio de 2011, 13 de septiembre de 2012, 17 de diciembre de 2012 y 25 de julio de 2013, respectivamente, sí

fueron notificados presonalmente, atendiendo las formalidades previstas en los artículos 48, 134, fracción I, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, vigente en los años 2011, 2012 y 2013.

- Por lo tanto, resultan legales los citatorios de 27 de junio de 2011, 13 de septiembre de 2012, 17 de diciembre de 2012 y 25 de julio de 2013, así como las actas de notificación de fecha 28 de junio de 2011, 14 de septiembre de 2012, 18 de diciembre de 2012 y 26 de julio de 2013.

- Respecto al **Apartado B** del presente Considerando, el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria sí fundó y motivó debidamente su competencia material y territorial, al emitir el oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011.

- Asimismo, la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, fundó debidamente su competencia material, al momento de emitir la resolución recurrida contenida en el oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013.

- Por lo que hace al **Apartado C** del presente Considerando, se concluye que en relación a los argumentos planteados por la parte actora y que fueron precisados en el Apartado de mérito, el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, el oficio 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, así como el oficio 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, fueron debidamente fundados y motivados.

En consecuencia, prevalece la validez de la resolución impugnada contenida en el oficio número 900 04 05-2015-17797 de 19 de febrero de 2015, así como la originalmente recurrida contenida en el oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 339 -

CUARTO.- Esta Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, procede al análisis y resolución del concepto de impugnación primero de la demanda, en el cual la actora argumentó lo siguiente:

DEMANDA

PRIMERO. VIOLACIÓN DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS A LOS ARTÍCULOS 5 Y 38, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL DERIVAR DE UNA INDEBIDA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2007, EN RELACIÓN A LA SUPUESTA OMISIÓN DE MI MANDANTE DE ADICIONAR A LA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA EL MONTO DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS FUSIONADAS.

En el presente concepto de impugnación, se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, al considerar que mi representada omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006 sus sociedades controladas [REDACTED]

[REDACTED] y [REDACTED] en cantidad de \$1,867'583,390 y \$383'461,396, respectivamente, que en suma ascienden a la cantidad de \$2,251'044,756.

11

Lo anterior, pues dicha determinación deriva de una indebida interpretación y aplicación del artículo 71, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

A. En primer lugar, resulta importante tener en cuenta el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos³ que establece lo que la doctrina ha denominado la garantía de legalidad, conforme a la cual, todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados.

En efecto, la fórmula jurídica de fundamentación y motivación implica un razonamiento o silogismo lógico jurídico, consistente en una adecuación real de los hechos generadores del acto y la norma jurídica aplicados al mismo.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que un acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado, no sólo es suficiente que se señalen en el acto respectivo disposiciones legales y las razones o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para aplicar dichas disposiciones, sino que también es necesario que exista una debida adecuación entre los motivos aducidos y la configuración de éstos en las hipótesis normativas correspondientes.⁴

³ "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." (Subrayado añadido)

⁴ **FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.** De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉXTO CIRCUITO.

Amparo directo 194/88.- Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V.- 28 de junio de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- Secretario: José Alberto González Álvarez.

Sostienen la misma tesis:

Amparo directo 367/90.- Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V.- 29 de enero de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Revisión fiscal 20/91.- Robles y Compañía, S.A.- 13 de agosto de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Octava Época, Tomo IX, marzo de 1992, p. 204."

En efecto, los principios de fundamentación y motivación, como parte de las garantías de seguridad y legalidad jurídicas que prevé el artículo 16 constitucional, tienen el objeto de proporcionar a los particulares seguridad jurídica en relación con los actos de autoridad que pudieran ejercitarse en su perjuicio, mediante la normatividad de la actuación de las autoridades que previene el precepto constitucional antes transcrito.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁶, establece que jurídicamente fundar un acto de autoridad supone apoyar la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentren establecidas en un cuerpo normativo; y ese mismo acto estará motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de los motivos que la condujeron a emitirlo, concluyendo que para cumplir con la garantía de legalidad se debe de citar los preceptos legales y explicar los razonamientos que le llevan a la conclusión.

En relación con lo anterior, el artículo 14 de nuestra Carta Magna establece como garantía que los actos de las autoridades deben ser emitidos conforme a

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado; entendiéndose por lo primero que se expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Sexta Época, Tercera Parte:

Vol. CXXXII, pág. 49, A.R. 8280/67. Augusto Vallego Olivo 5 votos. (Énfasis añadido)

"MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias del hecho que se formula por la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal."

Tesis Jurisprudencial número 1173, visible en la página 1889 de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988. (Énfasis añadido)

"MOTIVACIÓN, TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa."

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 18/86.- Jorge Antonio Vicente Jiménez.- 11 de octubre de 1986.- Unanimidad de votos.- Ponente: Roberto Avendaño.- Secretario: No. Gutiérrez Díaz.

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Tesis XX.102 K, página 501. (Énfasis añadido)

⁶ Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Colección de Garantías Individuales", Tomo 2 "Las Garantías de Seguridad Jurídica", toja 94.

las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, esto es, al igual que el artículo 16 constitucional, el precepto de referencia establece que los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, ello con el simple fin de que los gobernados tengan la seguridad y certeza de que las actuaciones de las autoridades estén apegadas a derecho y no a decisiones arbitrarias.

Por su parte, el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación⁶, el cual es un fiel reflejo del artículo 16 constitucional, establece el requisito de legalidad que deben contener los actos administrativos que se deban notificar, consistente en que todos los actos de molestia deben estar fundados y motivados.

En el mismo sentido, no podemos pasar desapercibido que existen criterios judiciales que señalan que la garantía de legalidad debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica.⁷

Así, para que exista la debida y suficiente motivación de un acto de autoridad, es imprescindible que éste se encuentre apegado a los hechos sucedidos y que se apliquen las disposiciones legales correctas.

Derivado de lo anterior, no basta que un acto de autoridad contenga las disposiciones jurídicas en las que se funda, así como los razonamientos lógicos jurídicos por los que se estima que dichas disposiciones resultan aplicables, sino que además es necesario que la autoridad analice debidamente los hechos acontecidos y aplique correctamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, situación que no ocurrió en el caso concreto.

⁶ "Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:

[...]

IV. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate." (Énfasis añadido.)

⁷ "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez."



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 341 -

14

En este sentido, la debida fundamentación y motivación genera una seguridad jurídica a los gobernados de que los actos de autoridad que pudieran ejercitarse en contra de ellos, se encuentren apegados a los hechos efectivamente acontecidos en el caso concreto y que en esos actos de autoridad se apliquen las disposiciones legales correctas.

Sobre el particular, es necesario hacer énfasis en que para que los gobernados cuenten con seguridad jurídica, es menester que se encuentren en posibilidad de desvirtuar las argumentaciones de las autoridades administrativas que con sus resoluciones les causen un perjuicio, para la cual éstas deben señalar el supuesto normativo que resulta exactamente aplicable a los hechos acontecidos.

En efecto, el principio de seguridad jurídica no sólo se transgrede cuando las autoridades administrativas no fundan y motivan sus resoluciones, sino quizá de manera más grave se transgrede cuando las autoridades fiscales fundamentan y motivan sus resoluciones basadas en hipótesis diferentes y excluyentes entre sí.

Lo anterior, como no escapará de la prudente apreciación de ese H. Tribunal, origina en perjuicio de los gobernados una extrema inseguridad jurídica, pues éstos no saben a ciencia cierta cuál de las hipótesis o fundamentos y motivos deben desvirtuar con el fin de demostrar la ilegalidad de las resoluciones que les causen perjuicio.

En este sentido, en el caso particular, el hecho de que un acto de autoridad haya sido emitido utilizando un fundamento legal que no corresponde a la hipótesis normativa y motivos contenidos en el mismo, implica necesariamente una aplicación indebida de las disposiciones legales correctas, situación que claramente evidencia una indebida fundamentación y motivación, resultando por tanto ilegal y violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 16 constitucional.

B. Ahora bien, para evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, es preciso transcribir la parte conducente de las mismas que causa un agravio a mi representada:

Al respecto, en la resolución contenida en el oficio 900-05-2013-48229, la autoridad demandada señala medularmente lo siguiente:

"(...)

a) Omitió adicionar a la utilidad fiscal consolidada el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de las sociedades que se desincorporaron de la consolidación.

RESULTADO DE LA REVISIÓN

De la revisión practicada a la información y documentación proporcionada por el Contador Público

15

Registrado, y en el transcurso de la revisión, proporcionada por la contribuyente, esta autoridad determina que omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas

y en cantidad de \$1'867,583,390 y \$383'461,396, respectivamente, que en suma ascienden a \$2,251'044,786, pérdidas fiscales pendientes de disminuir actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007, según Instrumento notarial número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007 y en consecuencia:

(...)

Del estudio a los argumentos manifestado por la contribuyente en su escrito del 1 de febrero (sic), recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, en relación a las observaciones dadas a conocer en el oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, respecto a que omitió sumar a su utilidad fiscal consolidada por el ejercicio sujeto a revisión, el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas y en cantidad total de \$2,251'044,786.13 actualizadas al mes de diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007 en el ejercicio posterior al de revisión, en el cual las citadas contribuyentes desaparecen y subsiste la sociedad controlada según Instrumento notarial número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, el 18 de octubre de 2007, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, de conformidad con el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

La conclusión anterior, se basa en que dichas pérdidas fiscales fueron restadas por la sociedad controladora actualmente para la determinación del resultado fiscal consolidado correspondiente al ejercicio en que

50017

las citadas sociedades controladas las generaron en el caso que nos ocupa el ejercicio de 2006.

Ahora bien, de la revisión a la información proporcionada por esa contribuyente y el contador público dictaminador, en el transcurso de la revisión y la que obra en el expediente administrativo abierto en esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, así como a los argumentos vertidos en su escrito de respuesta al oficio de observaciones señalado en las páginas 30 y 31 de esta resolución, esta autoridad determina que las observaciones no fueron desvirtuadas por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que refiere a los argumentos citados en las hojas 2 y 3 de su escrito de 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, mencionado con anterioridad, mismos que ya fueron transcritos anteriormente en las páginas de la 30 y 31 del presente oficio, y en los que medularmente precisa que esta Administración sostiene en el Oficio de Observaciones que en términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, su representada omitió el pago del impuesto diferido en virtud de que debió adicionar a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio de 2006 pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que tenía pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, de sus sociedades controladas fusionadas.

en cantidad de \$2,251,044,786.13 actualizadas al mes de diciembre de 2006, indicando que lo anterior no es correcto puesto que "... las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ...

... fueron amortizadas a la fecha de fusión, por lo que al momento de la desincorporación, mi representada no se ubicó en el supuesto contenido en el artículo 71 de la Ley del ISR referente a sumar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las sociedades que se desincorporan".

Del análisis a sus argumentos antes transcritos se precisa lo siguiente:

La contribuyente actualmente en su carácter de sociedad controladora se ubicó en el supuesto del segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007, toda vez que sus sociedades y

entre otras, fueron fusionadas por ... según consta en instrumento notarial número 36,446, volumen 880, de fecha 18 de octubre de 2007, pasado ante la fe de la Lto. Ana Patricia Bandala Tolentino, notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, fusiones que surtieron efectos legales al 31 de octubre de

2007, teniendo la obligación de sumar a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior a aquel en que ocurrió la fusión, es decir, 2006, el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que habían generado sus sociedades controladas desincorporadas y que a esa fecha aún tenían dichas pérdidas como pendientes de amortizar, máxime que dichas pérdidas habían sido restadas por la sociedad controladora, actualmente, para la determinación del resultado fiscal consolidado correspondiente al ejercicio en el que las sociedades controladas las generaron, razón por la cual, y de conformidad con los preceptos anteriormente señalados, la contribuyente revisada, tiene la obligación de reconocer los efectos de desincorporación, y de aplicar el procedimiento especialmente establecido para ello, por lo que se ubica en el supuesto que establece el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007 la fusión se considera desincorporación.

(...)

En relación con lo anterior, cabe señalar que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 71 de la multicitada Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, transcrito anteriormente, año en que se desincorporaron las sociedades controladas

y entre otras, por haberse fusionado con la señalada controlada el 18 de octubre de 2007, la contribuyente revisada estaba obligada a reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior, en declaración complementaria de dicho ejercicio, que en el caso que nos ocupa, sería ejercicio de 2006.

Para ello, la disposición, señalada en el párrafo anterior señala, que la contribuyente revisada al situarse en el supuesto, debió sumar a la utilidad fiscal consolidada de dicho ejercicio, es decir, el de 2006, entre otros conceptos, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que las sociedades que se desincorporaron, en este caso por fusión, tuvieran derecho a disminuir al momento de la desincorporación, y hace un especial énfasis al señalar, que para estos efectos, sólo se considerarán aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la o de las sociedades que se desincorporaron para determinar el resultado fiscal consolidado.

Es decir, el monto de las pérdidas fiscales que generaron las sociedades controladas fusionadas y en el propio ejercicio de 2006, por importe de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 343 -

18

\$1,811,604,802 y \$371,967,597, cumplen con el requisito que se señala en el párrafo anterior, al haber sido restadas en dicho ejercicio para determinar el resultado fiscal consolidado, lo cual resulta correcto, ya que dichas pérdidas de manera inmediata fueron amortizadas contra las utilidades fiscales obtenidas por otras sociedades controladas del grupo de consolidación en el mismo ejercicio, generando con ello el diferimiento del impuesto sobre la renta correspondiente a dichas utilidades fiscales en la parte que consolidaron, lo cual a todas luces constituye un diferimiento, más nunca una omisión del impuesto.

Ahora bien, de los argumentos vertidos por la contribuyente revisada, en el sentido de que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar fueron aplicadas a la fecha de la fusión por las sociedades controladas desincorporadas

y
que obtuvieron en su ejercicio fiscal irregular comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2007 (situación que quedó debidamente acreditada en la página 25 del presente oficio), contra la utilidad fiscal de \$2,106,174,218 y \$477,670,532 respectivamente, como se observa en sus declaraciones presentadas el 31 de diciembre de 2007 y 22 de julio de 2008, con número de operación 9104989 y 9873285, respectivamente, documentación que obra en el expediente administrativo abierto de la contribuyente en revisión de conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, como sigue:

(...)

De lo anterior, se desprende que las sociedades controladas desincorporadas

y
al haber terminado su ejercicio fiscal irregular correspondiente al año 2007, el 31 de octubre de 2007, determinaron una utilidad fiscal que amortizaron con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores; sin embargo, estas utilidades fiscales no fueron sumadas por la sociedad controladora para determinar el resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2007.

Por lo que, sólo si dichas utilidades hubieran sido sumadas al resultado fiscal consolidado del ejercicio 2007 por la sociedad controladora, concordaría con su argumento de no sumar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las citadas sociedades controladas, situación que no se dio en los términos señalados, por lo que la irregularidad subsiste en los términos precisados.

De no revertir la sociedad controladora
ACTUALMENTE, el efecto de haber consolidado las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas desincorporadas

19

y
2006, tal y como lo establece el artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta antes citado, indebidamente podría obtener un beneficio fiscal, ya que al ser restadas de manera indebida contra las utilidades fiscales obtenidas por las sociedades del grupo en el ejercicio de 2006, obtuvieron un resultado fiscal consolidado menor en \$2,183,572,399 y en consecuencia pagar un impuesto sobre la renta disminuido y al no reversarlas, para determinar la utilidad fiscal consolidada de 2006, como lo marca la norma específica, jamás pagarán el impuesto sobre la renta diferido.

Cabe recalcar, que el régimen de consolidación permite a nivel consolidado la disminución de las pérdidas fiscales obtenidas por una sociedad del grupo, de las utilidades fiscales obtenidas por otra sociedad de dicho grupo en el mismo ejercicio, y tal disminución implica que el impuesto que se cause respecto de las utilidades obtenidas se diferirá y el mismo se pueda pagar en el momento en que la sociedad controladora se ubique en algún supuesto de pago del impuesto diferido.

Por lo anterior, a efecto de evitar que el impuesto sobre la renta que se hubiera diferido deje de ser pagado por la sociedad controladora, el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, establece la obligación que tiene dicha sociedad controladora de reconocer la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en la declaración complementaria de dicho ejercicio es por ello, por lo que la citada sociedad controladora debe de adicionar a la utilidad fiscal consolidada o disminuir de la pérdida fiscal consolidada, del ejercicio de que se trate, las pérdidas fiscales obtenidas en lo individual por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, cuando éstas no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y hubieren sido restadas en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, procedimiento con el cual evita el efecto del diferimiento obtenido por la aplicación de las pérdidas.

Toda vez que, actualmente, para determinar el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006, restó las pérdidas fiscales que generaron sus sociedades controladas desincorporadas, por fusiones en el ejercicio de 2007.

y
de
establecido en el segundo párrafo del artículo 71 de la citada Ley, debió adicionarlas al resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 ya que a dicha fecha no habían sido disminuidas por las

sociedades controladas desincorporadas en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y fueron restadas en el propio ejercicio de 2006 para determinar la utilidad fiscal consolidada de la contribuyente [REDACTED] actualmente, [REDACTED] ya que dicho procedimiento no es opcional, más bien obligatorio.

Por lo antes expuesto, esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente determina que [REDACTED] actualmente, [REDACTED] omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006 de sus sociedades controladas [REDACTED] y

[REDACTED] en cantidad de \$1'867,583,390 y \$383'461,396, respectivamente, que en suma ascienden a \$2,251'044,786, actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007, según instrumento notarial número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Toientino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, procedimiento que debió llevar a cabo de conformidad con lo establecido el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno, párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007.

(...)

Asimismo, en la resolución contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797, la autoridad demandada señala medulantemente lo siguiente:

Octavo.- La recurrente en los agravios décimo segundo y décimo tercero, cuyo apartado denomina como "A. EN RELACIÓN A LA SUPUESTA OMISIÓN DE LA CONTRIBUYENTE DE NO ADICIONAR A LA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA EL MONTO DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS FUSIONADAS.", controvierte la legalidad del oficio determinante, bajo los razonamientos siguientes:

A. Resulta infundado el argumento de esa recurrente en el que solicita una interpretación histórica del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque supuestamente no previene como supuesto expreso de desincorporación el de fusión de empresas controladas cuando la subsistente o la naciente permanezca en el régimen de consolidación, y que por tanto debe prevalecer tácitamente el contenido del artículo 57-J, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente hasta 2001).

Artículo 5° (Se transcribe)

En ese orden de ideas, ante lo dispuesto en el transcrito artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, es menester precisar que la circunstancia de que sean de aplicación estricta las disposiciones que establezcan el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una determinada contribución, o las excepciones a las cargas a los particulares, tiene su origen en que tales normas, por su peculiar repercusión a la esfera jurídica de los gobernados, constituyen auténticas normas de excepción que conforman regímenes jurídicos especiales, donde solo los sujetos que realizan el hecho imponible deben contribuir al gasto público, y dentro de esos sujetos únicamente los que se ubican en la precisa hipótesis de exención, se encuentran eximidos de su pago, sin que sea válido realizar una aplicación extensiva o restrictiva de las respectivas leyes.

Es decir, el que el legislador haya establecido la interpretación estricta de tales normas no impide al interprete desentrañar su verdadero alcance, ante su falta de claridad o el uso de palabras técnicas o de uso común, acudiendo a los métodos de interpretación jurídica, pues su efecto es constreñir a este a realizar la aplicación de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en ella.

Con base en lo antes expuesto, en el caso que nos ocupa, lo establecido en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, resulta ser una disposición que establece cargas a los particulares, puesto que la misma se encuentra relacionada con los sujetos y base del impuesto sobre la renta de las empresas que determinan su resultado fiscal de manera consolidada, y de manera específica, respecto a los efectos de la desincorporación de sociedades controladas.

Por lo tanto, es evidente que lo establecido en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, debe ser aplicado de manera estricta.

En ese contexto, se estima que esa recurrente hace una interpretación incorrecta del contenido de los párrafos segundo y noveno del citado precepto legal, mismos que establecen lo siguiente:

"Artículo 71" (Se transcribe)

De lo establecido en los párrafos antes transcritos, es claro advertir que en el caso de fusión de sociedades, el legislador estableció que se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, y por lo tanto, en tal tenor, la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para ello, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal

900017



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 345 -

22

consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores que fueron amortizadas en la consolidación fiscal, mismas que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos solo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado.

Esto es, el noveno párrafo del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, de manera clara, establece que cuando se realice una fusión de sociedades, se considera que las sociedades fusionadas quedan desincorporadas del régimen de consolidación fiscal, sin establecer distinción alguna respecto a que si la fusión se realizó entre empresas que forman parte del mismo grupo que consolida sus resultados fiscales o con una empresa ajena al grupo.

Bajo tal situación, es evidente que el agravio de la recurrente resulta infundado, puesto que la interpretación propuesta contraviene el primer párrafo del artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, pues se argumenta que el noveno párrafo del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, no puede considerarse que actualiza la figura de la desincorporación por el hecho de que la fusión se realizó entre empresas que formaban parte del mismo grupo de situación, la cual, en modo alguno estableció el legislador.

En tal sentido, es claro que tal situación resulta totalmente alejada a derecho, dada que el noveno párrafo del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, de ningún modo hace distinción alguna al hecho de que cuando se realice la fusión entre sociedades que pertenecen al mismo grupo de consolidación, por esa situación se deba entender que no existe desincorporación, sino por el contrario, la norma de referencia, de manera genérica establece que cuando exista fusión de sociedades, se entenderá que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión.

Por lo tanto, de una aplicación estricta de citado precepto legal, en toda fusión de sociedades, las empresas controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, quedaran desincorporadas del régimen de consolidación fiscal, con independencia de que la empresa que surja o subsista permanezca en el régimen.

Más aun, y a efecto de analizar integralmente el agravio planteado por recurrente, se estima necesario observar lo establecido en el doceavo párrafo del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, mismo que establecía lo siguiente:

(Se transcribe)

23

De lo anterior, se advierte de manera clara y precisa, que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el ejercicio de 2001, cuando existía fusión de sociedades entre empresas del mismo grupo de consolidación, se consideraba que no existía desincorporación, puesto que las sociedades disueltas habían sido absorbidas por otra u otras controladas del mismo grupo de consolidación.

Sin embargo, dicha disposición tuvo vigencia hasta el ejercicio de 2001, puesto que a partir del ejercicio de 2002, con la publicación de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta y su consecuente abrogación de la Ley vigente hasta 2001, de conformidad con el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el tratamiento en fusión de sociedades cambió, puesto que de manera expresa y de forma general, se considera que en el caso de fusión de sociedades, las empresas controladas que desaparezcan con motivo de la fusión quedan desincorporadas del régimen de consolidación fiscal.

La anterior es así, puesto que de la lectura a la exposición de motivos a la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta que entró en vigor a partir de 2002, se advierte que en un principio, se había determinado de manera expresa que en el caso de fusión de sociedades, se consideraba que no existía desincorporación, cuando la controlada que se disuelve fuere absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora, o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo, tal y como se advierte de la siguiente transcripción:

"Artículo 72" (Se transcribe)

Sin embargo, la iniciativa del ejecutivo, fue modificada mediante el dictamen de 29 de diciembre de 2001, en el cual se determinó por lo que se refiere al régimen de consolidación fiscal que cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan y en el caso de que la sociedad que desaparezca sea la controladora, se considerará que existe desconsolidación.

Bajo estas consideraciones, resulta totalmente claro y evidente que la intención del legislador, fue determinar que cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedad controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan y en el caso de que la sociedad que desaparezca sea la controladora, se considerará que existe desconsolidación, situación que quedó plasmada de manera clara e integral en el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir de 2002, por lo cual es patente para esta unidad administrativa, que el sentido que debe brindarse

a esa norma es el que se desprende de su interpretación literal.

Por lo tanto, es dable concluir que de la interpretación causal y teleológica de la norma se desprende que el legislador lo que estimó relevante para efectos de considerar que ocurría la desincorporación del régimen de las empresas controladas, es que existiera una fusión de sociedades y desaparecieran las controladas como consecuencia de la misma ello; con independencia de que surgiera o subsistiera una empresa que también formara parte de la consolidación fiscal, lo que sin duda para esta autoridad evidencia lo infundado del agravio planteado por esa recurrente, pues contrario a su dicho el artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece claramente que en todos los casos en que las empresas controladas desaparezcan con motivo de una fusión, se considerará que existe desincorporación.

Igualmente, esta unidad administrativa considera infundado el argumento de esa recurrente en el que indica que en el artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prevalece tácitamente el contenido del artículo 57-J, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente hasta 2001), al hacer referencia expresa de que no existe desincorporación del régimen cuando con motivo una fusión de las sociedades controladas surge o subsiste una empresa que permanece dentro del grupo, pues el referido artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el anteproyecto de dictamen del que se originó su texto es claro al respecto, siendo patente además que no puede subsistir tácitamente el contenido del artículo 57-J, antes mencionado, máxime porque este fue abrogado junto con toda la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2001, tal y como se menciona en las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de enero de 2002, mismas que se transcriben:

(Se transcriben)

B. Resulta infundado el argumento de esa recurrente en el que indica que no debía reconocer los efectos de la desincorporación de sus controladas y

porque al momento en que surtió efectos legales la fusión de las mismas no tenían pérdidas fiscales pendientes de disminuirse.

momento de la fusión de sus sociedades controladas y estas si tenían pérdidas fiscales pendientes de disminuir de manera individual.

En primer lugar, debe decirse que el momento en que se llevó a cabo la fusión de las sociedades controladas y fue el 18 de octubre de 2007, fecha en la cual desaparecieron dichas sociedades con motivo de la fusión.

Con motivo de la desaparición de y Bodegas de es que dejaron de ser empresas controladas de esa recurrente, por lo que hasta entonces se encontraban en aptitud de cumplir con las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual, ello, acorde al artículo 71, párrafo primero, y noveno de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dicen:

“Artículo 71”. (Se transcribe)

En efecto, tal como se puede advertir de la cita anterior, cuando una empresa deje de ser controlada (en el caso sujeto a estudio por virtud de fusión de conformidad con noveno párrafo del artículo citado), dicha sociedad deberá cumplir con sus obligaciones del ejercicio en que deje de ser controlada de forma individual lo cual únicamente puede entenderse en el sentido de que, solo hasta que la empresa deje de ser controlada, deberá cumplir con su obligación de manera individual.

En tal virtud, si esa recurrente pretende acreditar que al momento de la desincorporación de las sociedades y estas aplicaron las pérdidas fiscales pendientes de disminuir en lo individual contra sus utilidades del ejercicio 2007, debe manifestarse que tal afirmación resulta carente de todo sustento jurídico, pues de lo expresado con anterioridad se advierte que únicamente hasta que la sociedad deja de ser controlada, tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales a nivel individual.

Consecuentemente, si las empresas antes referidas presentaron declaraciones por el ejercicio de 2007, al ser este el ejercicio en el que se fusionaron y en el que debe entenderse que hubo desincorporación, debe concluirse que resulta falso que dichas pérdidas se hubieran disminuido al momento en que se llevó a cabo la fusión de las empresas y

es decir, antes de que se hubiesen desincorporado con motivo de la fusión, pues se insiste, de conformidad con el primer párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la obligación de cumplir con las cargas fiscales de manera individual, únicamente se actualiza en el momento en que existe la desincorporación, por lo que es ilógico que la recurrente señale que la disminución de las pérdidas de dichas empresas se efectuó en el mismo momento en que se desincorporación éstas.

Lo anterior, se traduce en que las empresas y el 18 de octubre de 2007, momento en que se llevó a cabo la fusión, si tenían pérdidas fiscales pendientes de amortizar individualmente, y por ende, esa recurrente se encontraba obligada a reconocer los efectos derivados de la desincorporación de esas empresas.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 347 -

26

Concatenado a lo anterior, esta autoridad considera que es infundada la afirmación de esa recurrente en el sentido de que al momento en que se efectúa la desincorporación en el caso concreto es cuando surte efectos la fusión de las empresas controladas.

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 71, primero y noveno párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, constituye la legislación especial aplicable tratándose de la desincorporación de sociedades controladas, por lo que en la especie el artículo dice que "En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión.", entonces es evidente que el legislador refirió que se configura la desincorporación, al momento en que haya nacido a la vida legal la fusión, esto es, a partir de que se concrete el acto jurídico relativo, no de que surta efectos frente a terceros, pues dicho surtimiento de efectos tendría como propósito garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las fusionadas frente a terceros, mas no así de determinar la época del nacimiento de las nuevas obligaciones fiscales derivadas de la fusión.

Asimismo, por la que se refiere al agravio de esa recurrente donde modularmente indica que la autoridad fiscalizadora con fundió el momento en que deben de considerarse el monto de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir (de haber existido), esto es, el momento de darse la fusión de las sociedades controladas, con el momento, en que el citado monto debe de adicionarse.

De lo anterior se advierte que la autoridad fiscalizadora consideró que la empresa controladora tenía que reconocer los efectos de la desincorporación, sumando las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que sus empresas controladas.

tenían al momento en que se llevó a cabo la fusión, por lo que el argumento de esa recurrente deviene de infundado al afirmar que, las pérdidas fiscales que se refería la autoridad eran aquellas pendientes de disminuir al cierre del ejercicio 2006.

C. Análisis relacionado con la supuesta ilegalidad de la resolución controvertida porque no existe precepto legal que obligue a su mandante a sumar las utilidades de las empresas controladas que aplicaron contra las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir como un efecto de la desincorporación fiscal.

De la lectura que efectuó esta autoridad a la resolución controvertida, advirtió que en la misma se indicó que en caso de que la empresa controladora no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporaran del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal 2007, la controladora hubiera sumado las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo

27

individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

La inserción anterior permite distinguir a esta unidad administrativa que la fiscalizadora no se encontraba obligada a citar precepto legal alguno por el cual se estableciera la obligación de la empresa controladora de que en caso de que no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporaran del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado de ese ejercicio, tendría que sumar las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

Lo anterior, porque en la resolución recurrida no se establece como obligación para la recurrente el de que en caso de no reversar las pérdidas fiscales de las empresas controladas que se desincorporaron con motivo de la fusión, entonces se deberán sumar utilidades de las empresas controladas en el resultado fiscal consolidado 2007, sino que se menciona dicha circunstancia a efecto de que se viera nulificado el beneficio derivado de la consolidación fiscal.

Es decir, atendiendo al principio de simetría fiscal, es que la fiscalizadora más que obligar a sumar las utilidades que se extinguieron con la amortización de las pérdidas fiscales generadas por las controladas.

plasmó que incluso en su auditoría no observó que se hubieran reconocido los efectos de la desincorporación de las empresas controladas.

En otras palabras esta autoridad no advierte violación al principio de legalidad, entendiendo como tal adecuación de los supuestos legales con los hechos o razonamientos vertidos por la fiscalizadora, pues en el caso concreto la omisión en la que consideró que incurrió esa recurrente fue entre otras la de no sumar las pérdidas fiscales de sus empresas controladas que se desincorporaron del régimen de consolidación fiscal, ello en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que el hecho de que la fiscalizadora hubiese mencionado que en dado caso esa controladora hubiera sumado las utilidades de sus controladas en el resultado fiscal consolidado de 2007, no implica omisión de la autoridad de fundar su resolución definitiva, puesto que esta simplemente reflejó la necesidad de que esa recurrente reconociera los efectos derivados de la desincorporación de sus empresas controladas a efecto de no obtener un beneficio indebido derivado del diferimiento del impuesto que ha venido efectuando, destacando que el fundamento legal para cumplir con esa exigencia (reconocimiento de la desincorporación de empresas controladas) se encuentra en el multicitado artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Además, suponiendo sin conceder que fuera fundado el agravio planteado en el sentido de que no se citó en la resolución impugnada el precepto legal por el cual se

estableciera la obligación de la empresa controladora de que en caso de que no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado de ese ejercicio, tendría que sumar las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizarse, se dice que tal vicio sería de naturaleza formal, por lo que en nada trascendería al sentido de la resolución impugnada, especialmente porque subsistirán plenamente los fundamentos y motivos reseñados en el resto de la resolución que hasta este momento se han analizado, es decir, la violación apuntada no implica que esa recurrente no deba reconocer los efectos de la desincorporación de sus empresas controladas. Soluciones

y al haberse desincorporado del régimen de consolidación con motivo de la fusión, pues los hechos y el derecho en que se sustenta esa determinación prevalecen en el caso concreto, lo cual ha quedado evidenciado en los apartados A y B, de las consideraciones relacionadas con el presente motivo de la resolución.

Por otro lado, resulta infundado el argumento donde indica la recurrente que adicionalmente autoridad fiscal carecía de legitimidad para determinar que en su caso, su mandante se encontraba obligada a adicionar las utilidades fiscales de las empresas y [redacted] contra las cuales se amortizaron pérdidas fiscales para efectos de la determinación de su resultado fiscal en 2007, especialmente cuando el objeto del procedimiento de fiscalización del cual deriva la resolución combatida se encontró limitado al ejercicio 2006, no así a uno diverso como el 2007.

De la inserción digital anterior, así como de la lectura íntegra a la resolución recurrida, esta autoridad aprecia que la fiscalizadora determinó la omisión de la empresa controladora de reconocer los efectos derivados de la desincorporación de sus empresas controladas, todo ello por lo que respecta al ejercicio fiscal 2006, sin que se desprenda que se haya establecido una obligación a su mandante con respecto a un ejercicio fiscal diverso a aquel que constituyó el objeto de la revisión fiscal.

No es óbice a lo anterior que a fojas 37 a 39 de la resolución recurrida se señalara que en caso de que la empresa controladora no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal 2007, la controladora hubiera sumado las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

Lo anterior, porque esa circunstancia no se estableció como una obligación a esa recurrente, sino como un elemento de la resolución que trata de evidenciar que la

controladora debía reconocer los efectos derivados de la desincorporación de sus controladas, de donde se sigue que la fiscalizadora subsumió en todo momento su actuación al ejercicio revisado determinando omisión únicamente por el ejercicio 2006, no así por el ejercicio 2007, como lo menciona esa recurrente."

De lo anterior, se desprende que las autoridades demandadas consideraron medularmente lo siguiente, a efecto de concluir que mi mandante debía sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas [redacted] en cantidad de \$1'867,583,390 y \$383'461,396, respectivamente, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007.

a) Que mi representada omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas [redacted] en cantidad de

\$1'867,583,390 y \$383'461,396, respectivamente, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007.

b) Que derivado de la aplicación estricta del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, cuando se realice una fusión de sociedades, se considera que las sociedades fusionadas quedan desincorporadas del régimen de consolidación fiscal, sin establecer distinción alguna respecto a que si la fusión se realizó entre empresas que forman parte del mismo grupo de consolidación o con una empresa ajena al grupo.

c) Que la fusión surtió efectos legales al 31 de octubre de 2007, teniendo la obligación de sumar a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior a aquel en que ocurrió la fusión (2006) el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que habían generado sus sociedades controladas desincorporadas y que a esa fecha aún tenían dichas pérdidas como pendientes de amortizar, máxime que las mismas fueron restadas por la controladora para la determinación del resultado fiscal consolidado correspondiente al ejercicio en el que las sociedades controladas las generaron.

d) Que el monto de las pérdidas fiscales que generaron las sociedades fusionadas en el propio ejercicio de 2006, cumplen con el requisito de ser las que señala artículo 71 en relación con el 68, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, al haber sido restadas en dicho ejercicio para determinar el resultado fiscal consolidado.

e) Que de no revertir la sociedad controladora el efecto de haber consolidado las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas desincorporadas en el ejercicio de 2006, indebidamente podría obtener un beneficio fiscal, ya que al ser restadas de manera indebida contra las utilidades fiscales obtenidas por las sociedades del grupo en el ejercicio de 2006,



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 349 -

30

obtuvieron un resultado fiscal consolidado menor en \$2,183,572,399 y, en consecuencia, pagar un impuesto sobre la renta disminuido y al no reversarlas, para determinar la utilidad fiscal consolidado de 2006, jamás pagarán el impuesto sobre la renta diferido.

Las consideraciones anteriores, fueron confirmadas en todos sus términos en la resolución impugnada contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797 medularmente por las mismas razones.

Sin embargo, como se demostrará en los siguientes apartados, dichas consideraciones y conclusiones son ilegales, de conformidad con lo siguiente:

C. En primer lugar, es importante mencionar que las resoluciones impugnadas son ilegales, al señalar que derivado de la aplicación estricta del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, cuando se realice una fusión de sociedades, se considera que las sociedades fusionadas quedan desincorporadas del régimen de consolidación fiscal, sin establecer distinción alguna respecto a si la fusión se realizó entre empresas que forman parte del mismo grupo de consolidación o con una empresa ajena al grupo.

En efecto, las autoridades demandadas parten de dicha interpretación para determinar a mi mandante un crédito fiscal, al considerar que no obstante las empresas fusionadas y la fusionante se encontraban dentro del mismo grupo de consolidación fiscal, aun así subsiste la figura jurídica de la desincorporación surgiendo para la controladora la obligación de determinar en declaración complementaria del ejercicio inmediato anterior los efectos de dicha desincorporación.

A. efecto de evidenciar la ilegalidad de la interpretación sostenida por las autoridades demandadas, es importante recordar que el régimen de consolidación fiscal era un régimen mediante el cual la autoridad fiscal otorgaba un reconocimiento a grupos de empresas con intereses económicos comunes; que reunieran ciertas características y cumplieran con los requisitos establecidos en la ley para tributar conforme a un régimen especial, como una unidad económica, aun cuando legalmente se encontraran organizadas como sociedades individuales.

Las principales características del régimen de consolidación fiscal vigente hasta el año de 2013, eran las siguientes:

- Reunir las utilidades y pérdidas de una entidad o unidad económica, integrada por la compañía controladora y sus controladas como si se tratara de una sola empresa, para que sobre este resultado se enteraran los impuestos relativos.
- Permitir que las pérdidas generadas por una sociedad del grupo que consolida sean amortizadas de inmediato contra las utilidades generadas por otras sociedades del mismo grupo, independientemente de que la controlada que las hubiera generado, todavía no tuviera la posibilidad de aplicar dichas pérdidas en lo individual.

31

Las disposiciones jurídicas que regulaban este régimen fueron incorporadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta en el Capítulo IV del Título II denominado "*De las Sociedades Mercantiles Controladoras*", que entró en vigor el 1º de enero de 1982; las que estuvieron vigentes hasta diciembre de 1998, periodo en el que si bien se verificaron ciertas modificaciones, no hubo un cambio trascendental sino hasta las reformas que entraron en vigor en 1999 y posteriores reformas.

En los años de 1983, 1984, 1988, 1990, 1991, 1992, así como en 1997 y 2010, el régimen de consolidación fiscal sufrió una serie de ajustes con la finalidad de aclarar su contenido y simplificar el régimen aplicable a los grupos de empresas que tributaban bajo dicho sistema.

En relación con dichas reformas, el legislador ordinario manifestó que las razones que tuvo para modificar el régimen en comento consistieron en que el interés del Estado se encuentra encaminado a satisfacer ciertos objetivos que consideraba relevantes, los cuales consistieron en:

- Financiar la reducción substancial en la nueva tasa que se aplicaría a las actividades empresariales (30%)
- Evitar el diferimiento del pago de los impuestos por largos periodos o bien de manera indefinida
- Lograr la simplificación del sistema así como adecuarlo a las prácticas internacionales, corrigiendo además disposiciones y procedimientos que provocan prácticas de elusión fiscal

En el régimen de consolidación fiscal descrito vigente hasta el 31 de diciembre del año 2001, la base del impuesto sobre la renta consolidada se obtenía calculando la utilidad o pérdida fiscal consolidada; en caso de resultar una utilidad fiscal, a ésta se restaba el importe de las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores y, al resultado, se aplicaba la tasa establecida en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que en la fecha señalada era del 35%, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 57-A vigente en el lapso mencionado.

Consecuentemente, la sociedad controladora calculaba la utilidad o pérdida fiscal consolidada, conforme a lo siguiente:

- a) Sumaba la totalidad de las utilidades fiscales del ejercicio de que se tratara correspondientes a todas las sociedades controladas;
- b) Al resultado, restaba la totalidad de las pérdidas fiscales del ejercicio en que hubieran incurrido las controladas, sin actualización;
- c) Según el caso (de existir pérdida o utilidad fiscal), a lo anterior sumaba o restaba su propia utilidad o pérdida fiscal del ejercicio relativo;
- d) Al resultado, se restaban o sumaban, según el caso, los conceptos especiales de consolidación del ejercicio y sus modificaciones, así como la

utilidad o pérdida fiscal de las controladas correspondientes a ejercicios anteriores;

e) El monto resultante constituía, en su caso, la pérdida o la utilidad fiscal consolidada a la que se aplicaba la tasa del 35% para determinar el monto líquido del impuesto sobre la renta a enterar.

La reforma que sufrió este régimen en enero del año 2002 tuvo como objetivo simplificar la mecánica anteriormente descrita para la determinación del resultado fiscal consolidado al otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes de este régimen, pues se adecuó y ajustó a las prácticas internacionales y cambios efectuados al régimen general de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta.

La anterior reforma se realizó mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero del año 2002, en que fue emitida la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente y abrogada la ley anterior expedida en 1980.

Las disposiciones jurídicas que regulan este régimen conforme a su concepción esencial actual, fueron incorporadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta en el Capítulo IV del Título II denominado "De las Sociedades Mercantiles Controladoras", que entró en vigor el 1º de enero de 1982, las que estuvieron vigentes hasta diciembre de 1998, periodo en el que si bien se verificaron ciertas modificaciones, no hubo un cambio trascendental sino hasta las reformas que entraron en vigor en 1999 y después bajo las reformas que entraron en vigor en 2002.

Ahora bien, el régimen de consolidación fiscal preveía una serie de pasos a llevarse a cabo para el caso de desconsolidación o desincorporación de sociedades del grupo. Específicamente, para el caso de fusión de sociedades, la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1999 establecía textualmente lo siguiente:

"Artículo 57-J. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 57-C de esta Ley, la controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser controlada, en forma individual.

La controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará según sea el caso a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, los conceptos especiales de consolidación que con motivo de la desincorporación de la sociedad que deja de ser controlada deben considerarse como efectuados con terceros, desde la fecha en que se realizó la operación que los hizo calificar como conceptos especiales de consolidación, el monto de las pérdidas de ejercicios

33

anteriores a que se refiere el inciso b) de la fracción I del artículo 57-E de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos octavo a undécimo de este artículo, así como los dividendos que hubiera distribuido la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de sus cuentas de utilidad fiscal neta y de utilidad fiscal neta reinvertida, multiplicados por el factor de 1.5385.

(...)

En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo."

(Énfasis añadido)

Del párrafo duodécimo del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, se desprende que este disponía expresamente que en el caso de fusión de sociedades, no existía desincorporación cuando la controlada que se disolvía fuera absorbida por otra u otras controladas de la misma controladora, o cuando la controladora se fusionara a una controlada del mismo grupo.

Sin embargo, en la nueva ley, vigente a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2013, en el párrafo noveno del artículo 71, si bien se señala que habrá desincorporación (del régimen de consolidación fiscal) en el caso de fusión, la ley es omisa en citar con claridad qué debe suceder con respecto al caso en que la nueva empresa resultante de la fusión de empresas controladas, se mantenga tributando bajo el régimen de la consolidación fiscal, como si lo señalaba de manera textual la anterior.

Esta falta de precisión, de ninguna manera puede ser acogida bajo una interpretación rigorista ni mucho menos limitativa o simplista como lo hacen las autoridades demandadas, en el sentido de que toda fusión de sociedades controladas debe necesariamente ser considerada como una desincorporación.

En efecto, tal como se desprende de las resoluciones impugnadas, y específicamente a fojas 92 a 108 de la resolución al recurso de revocación, se desprende que las autoridades demandadas sostienen que el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta debe ser aplicado de manera estricta de conformidad con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, y que a su parecer conforme a la interpretación histórica del referido artículo, se desprende que de manera expresa y de forma general se considera que en



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 351 -

34

el caso de fusión de sociedades, las empresas controladas que desaparezcan con motivo de la fusión quedan desincorporadas del régimen de consolidación fiscal.

Lo anterior, tomando como antecedente la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2002, así como el dictamen correspondiente de la cámara de diputados, señalando que si bien en la exposición de motivos se planteó conservar la redacción del artículo 57-J, esto es, que la fusión de empresas no se considera desincorporación en caso de que la sociedad que subsista esté dentro del grupo de consolidación, dicha disposición no subsistió y por tanto ahora considera que cualquier fusión de sociedades dentro o fuera del grupo de intereses se considera desincorporación.

Sin embargo, contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas, dichos documentos en relación con el texto legal que subsistió al final del proceso legislativo, no hacen sino evidenciar que la intención del legislador es precisamente no considerar dentro del supuesto de desincorporación la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación, esto es, que subsista lo dispuesto por el artículo 57-J.

A efecto de evidenciar lo anterior, es necesario traer a colación lo expuesto en la exposición de motivos del Ejecutivo Federal, de la cual se advierte que había determinado de manera expresa que, en el caso de fusión de sociedades se considerará que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve fuere absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora, o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo, lo cual se preveía en el artículo 72 de su propuesta.

Sin embargo, la autoridad demandada en la resolución al recurso de revocación, sostiene ilegalmente que de la interpretación causal y teleológica del artículo 71, se desprende que por el contrario, el régimen de consolidación fiscal cambió para prever expresamente que cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan.

Lo anterior, a su parecer, de conformidad con la redacción del dictamen de 29 de diciembre de 2001 de la Cámara de Diputados, el cual señala textualmente:

"Cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan y en el caso de que la sociedad que desaparezca sea la controladora, se considerará que existe desconsolidación."

35

De esta manera, sostiene la demandada que era claro y evidente que fue la intención del legislador determinar que cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan, situación que a su ilegal parecer quedó plasmada de manera clara e integral en el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2002, siendo claro para dicha autoridad que el sentido que debe brindarse a la norma es el que se desprende de su interpretación literal.

Sin embargo, esa H. Sala no podrá pasar desapercibida la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2002, no quedó plasmado tal cual como lo señalan las autoridades demandadas, sino que fue modificado para quedar como sigue:

"Artículo 71. En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación."

De lo anterior, se desprende que no obstante en el dictamen de la Cámara de Diputados se propuso considerar desincorporación la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación, la redacción plasmada en última instancia en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2002, no introdujo dicha consideración de manera expresa.

De ahí la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, específicamente la resolución al recurso de revocación, pues contrario a lo ahí resuelto, lo cierto es que aun cuando de la interpretación histórica derivada del proceso legislativo del artículo en comento, se desprende que se podría considerar desincorporación la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación fiscal, dicha redacción no subsistió, por lo que no es dable sostener la interpretación que pretenden darle las autoridades demandadas al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Esto es, al eliminarse la redacción que hacía referencia específica a que el supuesto de fusión se actualizaría aún en caso de que la fusión se lleve a cabo entre empresas del mismo grupo de consolidación, dicha eliminación evidencia que la interpretación que debe hacerse del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es en el sentido de que el caso de una fusión dentro del mismo grupo de consolidación no debe considerarse como un supuesto de desincorporación.

De esta manera, es que de la interpretación histórica en relación al texto legal que efectivamente surgió de la reforma, del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2002 y hasta 2013, es claro que no fue intención del legislador introducir una disposición tan limitativa como la que nos ocupa, sino que continúa rigiendo lo dispuesto por el artículo 57-J de la Ley abrogada.

Pues de haber sido esa la interpretación, así hubiera quedado redactado en el texto legal que quedó plasmado en la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2002 en adelante.

Esto es, tan es incorrecta la interpretación de las autoridades fiscales —que en algún momento compartió el legislador—, que ni siquiera quedó plasmada en el texto legal vigente a partir de 2002.

Lo anterior no puede ser de otra manera, pues de lo contrario se estaría desconociendo el texto legal aprobado en última instancia por el legislador con respecto a los supuestos de la desincorporación fiscal, sentados bajo un esquema lógico y congruente, en el que no existe motivo razonado alguno para considerar que en el supuesto de una fusión entre dos o más empresas controladas pudiesen ser consideradas desincorporadas del régimen de la consolidación fiscal, más aún, cuando la nueva sociedad emergente de la fusión se mantiene dentro de este mismo régimen especial de tributación, asumiendo las mismas obligaciones de aquellas empresas controladas que le dieron origen.

Desincorporación que por supuesto resulta lógica, clara y congruente cuando un tercero adquiere las acciones de las empresas o cuando la empresa resultante de la fusión deja de pertenecer al grupo que consolida, en donde es evidente, que todos y cada uno de los efectos del régimen, pendientes de retrotraer, deben ser retrotraídos al generarse precisamente la desincorporación, pero jamás respecto de una fusión en la que la sociedad emergente se mantiene en el mismo grupo de intereses.

En efecto, el hecho de que una sociedad desaparezca por fusión, no implica automáticamente que no siga dentro del mismo grupo de consolidación, por el contrario, la sociedad fusionada permanece dentro del régimen en caso de que la fusionante pertenezca de igual forma al grupo de consolidación.

Ello, pues como es del conocimiento de ese H. Tribunal, la fusión de sociedades es un negocio corporativo (exclusivo de sociedades) de carácter complejo y naturaleza contractual, cuyos efectos se traducen en la sucesión universal del activo y del pasivo de la o las sociedades fusionadas en favor de la fusionante, lo que implica el paso y la adición de los socios de aquellas a los de ésta. Además, genera la extinción de la o las fusionadas, ya sea para incorporarse a una existente (fusión por incorporación) o para integrar y constituir una nueva (fusión por integración)⁸.

⁸ FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. EN MATERIA FISCAL, SURTE EFECTOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO O CONVENIO RESPECTIVO. La fusión es un negocio corporativo (exclusivo de sociedades) de carácter complejo y naturaleza contractual.

37

De esta manera, si la fusión supone una forma de extinción de la personalidad jurídica de una sociedad, ello es únicamente en virtud de que la sociedad que subsiste va a detentar los activos y pasivos de la sociedad fusionada, convirtiéndose esta última en el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

Sin embargo, en el caso de que la fusión ocurra ya sea por incorporación o por integración dentro del mismo grupo de consolidación, esto es, que la sociedad en la que se incorporaron las sociedades fusionadas o la que nazca con motivo de la fusión sea parte del grupo de intereses, debe entenderse que la sociedad fusionada permanece en dicho régimen, no que se desincorpora.

Lo anterior, se insiste, de conformidad con la interpretación histórica, contextual y lógica del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en

desarrollado en diversas etapas sucesivas y cuyos efectos se traducen en la sucesión universal del activo y del pasivo de la o las sociedades fusionadas en favor de la fusionante, lo que implica el paso y la adición de los socios de aquellas a los de ésta; además, genera la extinción de la o las fusionadas, ya sea para incorporarse a una existente (fusión por incorporación) o para integrar y constituir una nueva (fusión por integración). Ahora, si bien es cierto que la naturaleza del acto de fusión es eminentemente mercantil, según se advierte de los artículos 222 a 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyos efectos para con los acreedores de las sociedades participantes y relaciones jurídicas de índole comercial, siguen surtiéndose tres meses después de su inscripción en el Registro Público de Comercio, también lo es que, en materia fiscal, es distinto, porque en ésta la legislación pretende que el fisco tenga conocimiento de determinados actos atendiendo a la realidad económica y financiera de la empresa desde que se realiza la fusión. Así, de los artículos 11, 14, fracción IX, 14-B, 32-A, fracción III, y 27 del Código Fiscal de la Federación, 19 y 20 de su reglamento, así como 14, párrafo antepenúltimo, 25, párrafos primero, tercero y cuarto, y 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deriva que el legislador ha regulado los diversos efectos originados a partir de la eficacia jurídica interna de la fusión, es decir, los derechos y las obligaciones derivados del contrato o acuerdo de fusión válidamente adoptado, los que inician con una serie de actos para instrumentar la incorporación de bienes en la sociedad fusionante o en la que surja de la fusión, así como para que ésta continúe con las actividades de las fusionadas. Esto es, en el ámbito fiscal surgen diversas consecuencias y obligaciones con motivo de la firma del contrato o convenio de fusión, entre las cuales se encuentran la terminación anticipada del ejercicio de las fusionadas; la de solicitar autorización cuando se pretenda realizar una fusión dentro de los cinco años posteriores a que se hubiere llevado a cabo una anterior; las obligaciones que asumen los fedatarios públicos al protocolizar un convenio de fusión; las de dictaminar y presentar los avisos y declaraciones correspondientes, así como la actualización de supuestos de desincorporación o desconsolidación del régimen de consolidación fiscal. Tales aspectos regulados son parte de la realidad (económica y jurídica) de las empresas que participan en la fusión y no dependen de la inscripción del convenio en el Registro Público de Comercio, pues ocurren sin necesidad de que ésta se realice. Por tanto, en materia fiscal, la fusión surte efectos desde el momento en que se firma el contrato o convenio de fusión, derivado de la regulación que las disposiciones aplicables realizan de la eficacia y consecuencias que genera para las partes y los socios tal acto jurídico, salvo cuando haya existido oposición judicial en la vía sumaria por cualquier acreedor, siempre que hubiere sido declarada fundada.

Contradicción de tesis 452/2011. Suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, 10 de julio de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

Tesis de jurisprudencia 91/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 353 -

38

relación con la lógica y naturaleza jurídica de la figura de la fusión, pues el activo, pasivo y capital de la empresa fusionada no desaparecen ni se transmiten a una sociedad fuera del grupo de intereses, sino, que permanecen en el grupo de consolidación a través de la sociedad fusionante.

Ello, máxime si tomamos en cuenta que la fusión es un tipo de extinción de las sociedades sin liquidación, por lo que es claro que al subsistir los activos y pasivos, esto es, derechos y obligaciones de la sociedad fusionada y haberse transmitido a otra sociedad DENTRO DEL MISMO GRUPO, debe interpretarse que permanece la fusionada dentro del grupo de consolidación esto es, que no hay desincorporación.

Consecuentemente, el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1º de enero de 2002, debe ser entendido e interpretado sobre las bases rectoras de su artículo y ley antecesoras (57-J), sin que pueda adoptarse un criterio reservista en cuanto a que ante la falta de distinción expresa de la ley, todos y cada uno de los casos de fusión deben ser considerados como desincorporación del régimen, pues, ello sería tanto como desconocer las distintas variables sobre las que se genera una fusión de sociedades; recordando que ante el silencio del legislador o falta de precisión, la interpretación de la ley debe ser la más apegada al beneficio del particular, en este caso de los contribuyentes, a fin de no vulnerar su seguridad jurídica.

En este sentido, es claro que en el caso que nos ocupa, contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas, no se actualizó el supuesto de desincorporación previsto en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta derivado de la fusión entre las sociedades controladas y en el ejercicio fiscal de 2007.

De ahí la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues al no haber desincorporación, tampoco se generó obligación alguna para mi mandante respecto a sumar pérdidas fiscales de sus controladas a su utilidad en términos del artículo 71 en relación con el 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo anterior, las resoluciones impugnadas son ilegales al derivar de una incorrecta interpretación y por tanto aplicación de las disposiciones legales conducentes, siendo procedente que esa H. Sala declare su nulidad en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

D. No obstante que lo anterior es más que suficiente para evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, en el presente apartado se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al sostener que derivado de la fusión de las empresas controladas y en mi mandante

tenía la obligación de sumar a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio

39

inmediato anterior a aquel en que ocurrió la fusión el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que habían generado sus sociedades controladas desincorporadas y que a esa fecha aún tenían dichas pérdidas como pendientes de amortizar.

Lo anterior, pues las resoluciones impugnadas, además de derivar de una incorrecta interpretación del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, también derivan de una indebida aplicación de dicha disposición como resultado de una incorrecta apreciación de los hechos que las motivaron.

Ello, pues aun suponiendo sin conceder que la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación actualice el supuesto de desincorporación, lo cierto es que en todo caso al momento de desincorporación ya no existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

En efecto, aún en el supuesto de que fuese correcta la premisa de la que parten las autoridades demandadas en cuanto a que la fusión de sociedades controladas, aún y cuando la empresa resultante de la fusión se mantuviese tributando bajo el mismo régimen que en el de las empresas fusionadas, deba considerarse como una desincorporación del régimen de consolidación, lo cierto es que los hechos comprobados y fiscalizados sobre los que se sustenta la resolución recurrida, en ningún momento se traducen en la supuesta obligación de mi representada de sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006 sus sociedades controladas y en

cantidad de \$1,867'583,390 y \$383'461,396, respectivamente, que en suma ascienden a la cantidad de \$2,251'044,756, pérdidas fiscales pendientes de disminuir actualizadas a diciembre de 2006.

Determinación que se traduce en una indebida aplicación del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2007.

A fin de demostrar la indebida aplicación del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es necesario citar de manera textual su contenido:

"Artículo 71. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual.

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las

pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que dicha sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.3889 se sumará en su totalidad.

Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate. Tratándose de los dividendos, éstos se actualizarán desde la fecha de su pago y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. Los saldos de la cuenta y el registro a que se refieren los párrafos séptimo y octavo de este artículo que se tengan a la fecha de la desincorporación, se actualizarán por el período comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se realice la desincorporación.

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación. Si resulta una diferencia de

impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución.

La sociedad controladora disminuirá del monto del impuesto al activo consolidado pagado en ejercicios anteriores que tenga derecho a recuperar, el que corresponda a la sociedad que se desincorpora, y en el caso de que el monto del impuesto al activo consolidado que la controladora tenga derecho a recuperar sea inferior al de la sociedad que se desincorpora, la sociedad controladora pagará la diferencia ante las oficinas autorizadas, dentro del mes siguiente a la fecha de la desincorporación. Para estos efectos, la sociedad controladora entregará a la sociedad controlada que se desincorpora una constancia que permita a esta última la recuperación del impuesto al activo que le corresponda.

La sociedad controladora comparará el saldo del registro de utilidades fiscales netas de la controlada que se desincorpora con el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas. En caso de que este último fuera superior al primero se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente. Si por el contrario, el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas fuera inferior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889. La controladora, en este último caso, podrá tomar una pérdida fiscal en los términos del artículo 61 de esta Ley por un monto equivalente a la utilidad acumulada, la cual se podrá disminuir en la declaración del ejercicio siguiente a aquél en que se reconozcan los efectos de la desincorporación. El saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas se disminuirá con el saldo del mismo registro correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora.

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad controladora comparará el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad controlada que se desincorpora con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada. En el caso de que este último sea superior al primero sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora. Si por el contrario el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior al de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889 y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora, hasta llevarla a cero.

En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 355 -

42

sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación.

Las sociedades que se encuentren en suspensión de actividades deberán desincorporarse cuando esta situación dure más de un año. Cuando por segunda ocasión en un periodo de cinco ejercicios contados a partir de la fecha en que se presentó el aviso de suspensión de actividades por primera ocasión, una sociedad se encuentre en suspensión de actividades, la desincorporación será inmediata.

Cuando la sociedad controladora deje de determinar su resultado fiscal consolidado estará a lo dispuesto en este artículo por cada una de las empresas del grupo incluida ella misma.

En el caso en que el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto correspondiente dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se efectúe la desconsolidación. Tratándose del caso en que el grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, la sociedad controladora enterará el impuesto derivado de la desconsolidación dentro del mes siguiente a la fecha en que obtenga la autorización para dejar de consolidar.

Las sociedades controladoras a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Cuando el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la controladora deberá presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

En el caso en que el grupo hubiera optado por dejar de consolidar su resultado fiscal con anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que surtió efectos la autorización de consolidación, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto derivado de la desconsolidación, con los recargos calculados por el periodo transcurrido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber consolidado en los términos de este Capítulo y hasta que el mismo se realice. Para estos efectos, el Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general.

Cuando durante un ejercicio se desincorporen una o varias sociedades cuyos activos en su totalidad representen el 85% o más del valor total de los activos del grupo que consolida fiscalmente al momento de la desincorporación, y este hecho ocurra con anterioridad

43

a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que el grupo empezó a consolidar su resultado fiscal, se considerará que se trata de una desconsolidación, debiéndose pagar el impuesto y los recargos en los términos establecidos en el párrafo anterior. Para los efectos de este párrafo, el valor de los activos será el determinado conforme al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo.

En el caso en que la sociedad controladora continúe consolidando a una sociedad que deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley por más de un ejercicio, hubiera o no presentado el aviso, deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas y enterar el impuesto y los recargos conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

La sociedad controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 72 de esta Ley, deberá desconsolidar y enterar el impuesto diferido por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal en los términos de este artículo.

En caso de que con anterioridad a la desincorporación de una sociedad se hubiera efectuado una enajenación parcial de acciones de dicha sociedad, la parte de los dividendos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo que se adicionará a la utilidad fiscal consolidada o se disminuirá de la pérdida fiscal consolidada será la que no se hubiera disminuido en la enajenación referida, en los términos del artículo 73 de esta Ley."

En términos del artículo anteriormente transcrito y particularmente de su segundo párrafo, la empresa controladora se encuentra obligada a sumar o a restar a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior al que ocurrió la desincorporación, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar por parte de las empresas controladas.

Asimismo, se desprende que el monto de las pérdidas fiscales que una o varias empresas controladas tuvieran pendientes de disminuir y que tendrán que sumarse o restarse, según el caso, a la utilidad fiscal consolidada o pérdida fiscal consolidada al ejercicio inmediato anterior al que sucedió la desincorporación, será el monto de las pérdidas pendientes de disminuir al momento en que se efectúa la desincorporación.

Ahora bien, de la aplicación estricta e interpretación literal de la redacción del párrafo en comento se desprende que en el caso que nos ocupa dicho momento ocurrió cuando surtió efectos la fusión de la empresas controladas (31 de octubre de 2007).

Al respecto, de la redacción de la disposición en comento no se desprende que se debe restar el monto actualizado de las pérdidas pendientes de disminuir al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se genera la desincorporación, pues ello es un supuesto distinto y errado, y que

es precisamente sobre el que sustenta su determinación la autoridad fiscalizadora. De ahí la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, al no adecuarse a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Esto es, las resoluciones impugnadas son ilegales al haber apreciado incorrectamente que al momento de la desincorporación derivada de la fusión (situación que se insiste, de ninguna manera se acepta) las empresas fusionadas contaban con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar, derivando así en una aplicación indebida del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior es así, debido a que tal y como se advierte del dictamen de consolidación fiscal motivo de revisión y de las aseveraciones hechas por la propia autoridad fiscalizadora⁹, las empresas controladas amortizaron las pérdidas fiscales que se encontraban pendientes de disminuir en el ejercicio fiscal en que se realizó la fusión de las sociedades, esto es, en el momento de la desincorporación.

En efecto, si conforme al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta la obligación de la empresa controladora es la de sumar o restar las pérdidas fiscales de sus controladas desincorporadas que tuviesen pendientes de disminuir al momento de la desincorporación (en el caso que nos ocupa, momento en que surtió efectos la fusión) para efectos de determinar su resultado fiscal consolidado del ejercicio inmediato anterior al de la desincorporación, es claro que si las pérdidas fiscales de las empresas fusionadas

y **[REDACTED]** se agotaron en el ejercicio en el que se dio la fusión como supuesto de desincorporación (asumido por la autoridad fiscal), es claro que no existían pérdidas fiscales pendientes de disminuir que debiesen haberse sumado o restado para determinar la utilidad o pérdida fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior al de la fusión, esto es, del ejercicio fiscal de 2006.

Siendo importante destacar, que es la propia autoridad fiscalizadora la que reconoce que en el ejercicio irregular en el que se dio la fusión de las sociedades controladas (2007) fue que se agotaron las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, bastando para acreditarlo, que esa H. Autoridad se sirva realizar una lectura detallada de las fojas 31 a la 40 (y más

⁹ Específicamente a fojas 35 y 39 de la resolución impugnada contenida en el oficio 900-05-2013-48229, la autoridad señala: "Es decir, el monto de las pérdidas fiscales que generaron las sociedades controladas fusionadas

y **[REDACTED]** en el propio ejercicio de 2006 por importe de \$1,811,604,802 y \$371,967,597, cumplen con el requisito que se señala en el párrafo anterior, al haber sido restados en dicho ejercicio para determinar el resultado fiscal consolidado, lo cual resulta correcto, ya que dichas pérdidas de manera inmediata fueron amortizadas contra las utilidades fiscales obtenidas por otras sociedades controladas del grupo de consolidación en el mismo ejercicio, generando con ello el diferimiento del impuesto sobre la renta correspondiente a dichas utilidades fiscales en la parte que consolidaron, lo cual a todas luces constituye un diferimiento, mas nunca una omisión del impuesto." y "De lo anterior, se desprende que las sociedades controladas desincorporadas

y **[REDACTED]** al haber terminado su ejercicio fiscal irregular

específicamente, 35 y 39) de la resolución determinante recurrida, de donde se desprende con suma claridad que es la propia autoridad la que señala:

- Que el año en que se desincorporaron las sociedades controladas **[REDACTED]** y **[REDACTED]** por haberse fusionado con la controlada **[REDACTED]** fue el 18 de octubre de 2007;
- Que el monto de las pérdidas fiscales que generaron las sociedades controladas fusionadas **[REDACTED]** y **[REDACTED]** en el propio ejercicio de 2006, ascendieron al importe de \$1,811,604,802 y \$371,967,597, respectivamente;
- Que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar fueron aplicadas a la fecha de la fusión por las sociedades controladas desincorporadas **[REDACTED]** y **[REDACTED]** que obtuvieron en su ejercicio fiscal irregular comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2007 -situación que incluso enfatiza- quedó debidamente acreditada en la página 39 del oficio recurrido; que se aplicaron, contra la utilidad fiscal de \$2,106,174,218 y \$477,670,532 respectivamente, como se observa en sus declaraciones presentadas el 31 de diciembre de 2007 y 22 de julio de 2008, con número de operación 9104989 y 9873285, respectivamente, documentación que obra en el expediente administrativo abierto por dicha autoridad con motivo de la revisión.

Situación anterior que hace prueba plena en contra de la autoridad fiscal en términos del artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al reconocer expresamente que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar fueron aplicadas a la fecha de la fusión por las sociedades controladas desincorporadas.

Bajo tales consideraciones, aún y en el supuesto no concedido de que se tenga que establecer como un supuesto de desincorporación del régimen especial de la consolidación fiscal la fusión de dos o más empresas controladas aún y cuando la empresa emergente de dicha fusión se mantenga tributando bajo ese mismo esquema de tributación por seguir perteneciendo al mismo grupo consolidado, mi representada no se encontraba obligada a considerar para efectos de la determinación de su resultado fiscal consolidado o de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006, monto alguno por concepto de pérdidas fiscales pendientes de disminuir de sus sociedades controladas fusionadas, pues al momento de darse la fusión, como supuesto de desincorporación, no existían pérdidas pendientes de amortizar ya que dichas pérdidas fueron amortizadas por las empresas controladas contra las utilidades generadas en el mismo ejercicio en el que se dio la fusión.

Situación la anterior, que quedará debidamente acreditada con la prueba pericial en materia de contabilidad que se ofrece en el presente juicio contencioso.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 357 -

46

Por lo anterior, si el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las pérdidas que deben sumarse o restarse, según el caso, para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado o de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior al de la desincorporación (momento de darse la fusión) son precisamente las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al momento de generarse dicha desincorporación, es claro que si a ese momento no existían más pérdidas pendientes de disminuir, mi representada no se encontraba obligada a sumar el monto de las pérdidas fiscales referido por la autoridad fiscalizadora, máxime cuando dicho monto se refiere al monto actualizado de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar pero no al momento de la desincorporación sino al momento del cierre del ejercicio inmediato fiscal al que aquella se dio.

Siendo claro también, que la autoridad fiscalizadora confunde la obligación de sumar o restar las pérdidas pendientes de amortizar de las sociedades fusionadas que éstas tuvieran al momento de la fusión como supuesto de desincorporación, que en términos del propio artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deben adicionarse o restarse a la utilidad o pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior a la fusión, con el monto actualizado de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que se tenía al cierre del ejercicio inmediato anterior al de la fusión.

En otras palabras, confunde el momento en que deben de considerarse el monto de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir (de haber existido), esto es, el momento de darse la fusión de las sociedades controladas, con el momento en que el citado monto debe de adicionarse o restarse de la utilidad o pérdida fiscal consolidada (cierre del ejercicio inmediato anterior al que se efectuó la fusión).

Así, el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que el monto a adicionar o sumar a la utilidad o pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior al de la fusión, es precisamente el monto que se tenía pendiente de disminuir al momento de la fusión, que en el caso que nos ocupó era igual a 0 (cero) dado que las utilidades fiscales de las sociedades fusionadas generadas en el año de la fusión fue amortizado contra el monto de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, no existiendo por tanto, monto susceptible de sumar o restar para efectos del multicitado segundo párrafo.

Por lo que pretender que el monto a adicionar para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior al de la fusión (2006) sea el monto actualizado de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al cierre de dicho ejercicio inmediato anterior, no encuentra cabida en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tratarse de un supuesto diverso al expresamente establecido, por lo que si la determinación de la autoridad demandada se sustenta en dicha premisa, es claro también, que ésta estaría viciada de una indebida fundamentación y motivación y como consecuencia de ello, tal y como

47

lo es, la resolución recurrida sería del todo ilegal, al carecer de sustento legal expreso.

Derivado de lo anterior, es claro que las resoluciones impugnadas derivan de una incorrecta apreciación de los hechos y, por tanto indebida aplicación de las disposiciones fiscales, puesto que al momento de la desincorporación las empresas controladas ya no contaban con pérdidas fiscales pendientes de amortizar, pues ello sucedió al momento en que surtió efectos la fusión el 31 de octubre de 2007.

Por todo lo anterior, lo procedente será que esa H. Sala declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al derivar de una incorrecta apreciación de los hechos e indebida aplicación de las disposiciones fiscales.

E. La ilegalidad de las resoluciones impugnadas se evidencia aún más, si consideramos que las autoridades demandadas sostienen que mi representada omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas y en cantidad de \$1'867,583,390 y \$383'461,396, respectivamente, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007, pues a su parecer la fusión de sociedades se considera desincorporación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007.

En efecto, en las resoluciones impugnadas, las autoridades demandadas sostienen que mi mandante omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006 sus sociedades controladas y

Lo anterior, pues contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas, lo cierto es que suponiendo sin conceder que mi mandante debiera de reconocer los efectos de la desincorporación en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007 –situación que de ninguna manera se acepta, pues la fusión de sociedades de un mismo grupo de consolidación no debe considerarse así–, en todo caso las pérdidas fiscales que mi mandante debió “revertir”, son las correspondientes al ejercicio de 2005 y anteriores, y no así como lo resolvieron las autoridades demandadas las correspondientes a 2006, evidenciando así la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al partir de una falsa premisa.

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de desvirtuar las conclusiones a las que arribó la autoridad demandada, resulta necesario exponer lo que debe entenderse por reversión de pérdidas fiscales en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como su tratamiento.

Así, en el apartado a) siguiente se evidenciará lo que debe entenderse por desincorporación, así como el procedimiento aplicable a efecto de revertir las pérdidas fiscales consolidadas, y en el apartado b) siguiente se evidenciará la ilegalidad de la interpretación efectuada por las autoridades demandadas al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al considerar que el mandante se encontraba obligada a revertir las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006.

a). En primer lugar, a efecto de comprender el procedimiento previsto en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativo a la reversión de las pérdidas fiscales, resulta necesario distinguir lo que debe entenderse por "desincorporación" así como por "desconsolidación" conforme al régimen de consolidación fiscal.

Al respecto, la "desincorporación" ocurre cuando una sociedad controlada deja de serlo, debiendo cumplir con sus obligaciones a nivel individual, como si no hubiera consolidado durante el ejercicio.

Sobre el particular, es importante recordar que la consolidación fiscal es un régimen a partir de 1999 de diferimiento del impuesto sobre la renta, por lo que cuando una sociedad controlada se desincorpora, el impuesto del grupo que se hubiera diferido en virtud de su participación en la consolidación fiscal debe pagarse.

En este sentido, cuando una sociedad controlada se desincorpora, la sociedad controladora debe tomar en consideración elementos que se adicionen o disminuyen según sea el caso, para generar un resultado fiscal consolidado cuyo importe sea; acorde con el que se hubiera pagado como si la sociedad que se desincorpora nunca hubiera formado parte de la consolidación fiscal.

El procedimiento para realizar el ajuste mencionado, se encuentra previsto en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta¹⁰. Dicho artículo prevé una

¹⁰ "Artículo 71. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual.

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos sexto y séptimo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889.⁽¹⁰⁾ Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que

serie de pasos que dan origen a ciertas cifras que deben sumarse o restarse, según sea el caso, a la base del impuesto consolidado del ejercicio. Al llevar a cabo dichos pasos, se neutraliza en el resultado fiscal consolidado, el efecto que tuvieron los elementos individuales aportados en su momento por la sociedad que se desincorpora.

El ajuste que resulta debe hacerse respecto del resultado fiscal consolidado del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se desincorpora la sociedad controlada. Para ello, la sociedad controladora presentará una declaración complementaria de consolidación, en la que efectuará las adiciones o sustracciones que resulten de aplicar lo dispuesto en el artículo 71.

Específicamente, la sociedad controladora deberá sumar o restar, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de disminuir de conformidad con el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que tuviere una sociedad controlada.¹¹

dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que dicha sociedad se desincorpora. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.3889⁽¹⁰⁾ se sumará en su totalidad.

(...)

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación. Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución.

(...)

Cuando la sociedad controladora deje de determinar su resultado fiscal consolidado estará a lo dispuesto en este artículo por cada una de las empresas del grupo incluida ella misma.

En el caso en que el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto correspondiente dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se efectúe la desconsolidación. Tratándose del caso en que el grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, la sociedad controladora enterará el impuesto derivado de la desconsolidación dentro del mes siguiente a la fecha en que obtenga la autorización para dejar de consolidar.

Las sociedades controladoras a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante regías de carácter general. Cuando el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la controladora deberá presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo."

(Énfasis añadido)

¹¹ "Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 359 -

50

En términos de lo anterior, la "reversión" de las pérdidas fiscales acontece cuando una sociedad controlada se desincorpora del Grupo, en cuyo caso la sociedad controladora deberá sumar o restar a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que la sociedad que se desincorpora tenga el derecho a disminuir al momento de su desincorporación y que hubieren sido restadas para determinar el resultado fiscal consolidado.

Ahora bien, es importante precisar que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio.

Así, al existir una desincorporación de una sociedad controlada conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la controladora debe reflejar los efectos de dicho evento en la declaración del

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trata correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso.

(...)

II. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, que no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó en los términos del artículo 61 de esta Ley, y que en los términos del primer párrafo del inciso b) y del primer párrafo del inciso c) de la fracción I de este artículo se hubieran restado en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la utilidad fiscal consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en que se pierda el derecho a disminuirlos. El monto equivalente a las pérdidas fiscales que se adicione a la utilidad fiscal consolidada o se disminuya de la pérdida fiscal consolidada, según sea el caso conforme a este párrafo, se actualizará por el periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio al que corresponda dicha pérdida y hasta el último mes del ejercicio en el que se adicionen o se disminuyan.

51

ejercicio fiscal anterior, situación que es excepcional, pues la regla general prevista en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, establece que los efectos fiscales de los actos de los contribuyentes se reflejan en la declaración del ejercicio.

En efecto, dentro del régimen de consolidación fiscal, cuando una sociedad se desincorpora, el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos lleva a que se determine el impuesto como si no hubiere tenido tal carácter en el ejercicio fiscal en el que se desincorpora, lo cual se logra mediante el deber impuesto a la controladora de reflejar los efectos de la desincorporación en el ejercicio fiscal anterior (se crea una ficción como si a partir de ese ejercicio se hubiera dejado de consolidar).

Por ejemplo, si una sociedad controlada se desincorpora el 31 de octubre de 2007, la sociedad controladora deberá reconocer la desincorporación al cierre del ejercicio fiscal de 2006 mediante la presentación de una declaración complementaria en dicho ejercicio.

Para tal efecto, sumará o restará según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio (2007) el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores (2006) que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos, sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado.

Adicionalmente, en caso de existir un impuesto a cargo de la sociedad controladora, con motivo de la desincorporación de una sociedad controlada, deberá enterarlo al fisco federal dentro del mes siguiente a la desincorporación de una sociedad controlada. Si resultara un saldo a favor, podrá pedir su devolución.

Ahora bien, el caso de la "desconsolidación" implica que un grupo que consolidaba fiscalmente deje de hacerlo, con lo cual es necesario determinar todo el impuesto que se hubiera diferido mientras el grupo tributó bajo ese régimen.

Al respecto, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece dos maneras en las que puede determinarse el impuesto diferido por la consolidación fiscal, en función de la causa que motiva la desconsolidación.

En primer lugar, como ha quedado señalado el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece ciertos procedimientos específicos para ajustar la situación de la consolidación fiscal cuando ocurre una desincorporación de sociedades controladas. Dichos procedimientos también aplican en el caso de una desconsolidación fiscal, con la diferencia de que los mismos deben realizarse respecto de cada una de las sociedades que consolidan.

En este sentido, el procedimiento que aplica para la reversión de las pérdidas fiscales con motivo de la "desincorporación" o "desconsolidación" es el previsto por el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la diferencia de que en el caso de una desconsolidación, los procedimientos deben realizarse respecto de cada una de las sociedades que desconsolidan.

Ahora bien, una vez que ha quedado evidenciado lo que debe entenderse por desconsolidación así como el procedimiento correspondiente a la reversión de pérdidas fiscales con motivo de la misma, a continuación se procede a evidenciar la ilegalidad con la que se condujo la autoridad demandada, al interpretar de manera indebida lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al sostener que mi representada debió reversar las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de las utilidades fiscales al 31 de diciembre de 2006.

b) Una vez expuesto lo anterior, es importante precisar que la autoridad demandada de manera por demás ilegal estableció que a mi representada le resulta aplicable el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de la fusión que llevaron a cabo sus sociedades controladas

y el 31 de octubre de 2007, subsistiendo la sociedad controlada por lo que debió de reversar las pérdidas fiscales, tomando en consideración las que tenía pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006.

Como se ha señalado con anterioridad, la autoridad fiscal afirma que si bien la fusión surtió efectos legales al 31 de octubre de 2007, entonces mi mandante debía sumar a su utilidad fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores a dicho ejercicio pendientes de amortizar en lo individual, señalando que son aquellas generadas en el ejercicio de 2006.

Ahora bien, partiendo de la premisa que la propia autoridad señala, debemos interpretar ahora si las pérdidas que se debieron haber reversado con motivo de la desincorporación-desconsolidación son las correspondientes a 2006 o aquellas relativas a 2005.

Al existir una desincorporación-desconsolidación, la controladora debe reflejar los efectos de dicho evento en la declaración del ejercicio fiscal anterior, de conformidad con el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual se insiste, es una situación, excepcional, a comparación de la regla general prevista en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior nos lleva a que el propósito del legislador, es que cuando una sociedad se desconsolide del régimen de consolidación fiscal, se determine el impuesto como si no hubiere tenido tal carácter en el ejercicio fiscal en que se desconsolida, lo cual se logra mediante el deber impuesto a la controladora de reflejar los efectos de desincorporación, en el ejercicio fiscal anterior (como si a partir de éste hubiere dejado de consolidar).

Esto es, en un evento de desconsolidación, la sociedad controladora debe determinar el resultado fiscal consolidado conforme al último ejercicio fiscal en el que consolidó, esto es, en el ejercicio fiscal en el cual se reflejan los efectos fiscales de la desconsolidación, mas no la del ejercicio en que materialmente ocurre la desconsolidación, se insiste, porque en este último la sociedad debe determinar su resultado fiscal de manera individual, como si nunca hubiera consolidado.

En el caso que nos ocupa, como lo señala la autoridad, partiendo de la base que la materialización del supuesto de desincorporación ocurre en el ejercicio fiscal de 2006, lo cierto es que la Ley obliga a mi mandante a determinar el impuesto con base en situaciones de hecho existentes en el ejercicio fiscal previo, esto es, 2005.

A efecto de evidenciar lo anterior, es necesario traer nuevamente a colación lo dispuesto textualmente por el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se transcribe a continuación:

"Artículo 71. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual.

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se derivan de lo establecido en los párrafos sexto y séptimo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889.⁽²⁾ Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 361 -

54

De la transcripción anterior, se desprende con toda claridad que la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio, para lo cual sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores.

Situación la anterior que es confirmada por la autoridad fiscal a lo largo de las resoluciones impugnadas, al usar el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta como fundamento para su ilegal determinación.

Es decir, se deben sumar o restar las pérdidas fiscales anteriores al ejercicio en el cual se va a presentar la declaración correspondiente a la desincorporación.

En el caso concreto, al ser esta la declaración correspondiente a 2006 (tal cual lo reconocen las autoridades demandadas) entonces el monto de las pérdidas fiscales que debe ser sumado es la de ejercicios anteriores a 2006, esto es, de 2005 y anteriores.

Lo anterior, pues a efecto de reconocer los efectos de la desconsolidación, se debe sumar o restar a la utilidad fiscal o pérdida fiscal, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores, a saber, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2005, y no así como ilegalmente sostiene la autoridad demandada las pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006.

En efecto, suponiendo sin conceder que se trate de contribuciones correspondientes al ejercicio 2006, no obstante que la fusión fue en 2007, las pérdidas pendientes de disminuir que se debieron sumar en su caso, serían las correspondientes al ejercicio fiscal de 2005 y anteriores.

Lo anterior, conforme a la lectura del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece que "La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Dicho enunciado lo que establece es que los efectos de una desincorporación se van a reconocer en el ejercicio anterior.

Continúa el artículo señalando "Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio,..." El único ejercicio al que se está refiriendo este enunciado es el anterior a la desincorporación.

Luego entonces, en el caso que nos ocupa al haber sucedido la desincorporación en el ejercicio de 2007, se deben sumar o restar al resultado fiscal consolidado, las pérdidas de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores a 2006, esto es, ejercicio de 2005 para atrás.

55

Esquemáticamente, en el caso que nos ocupa la referida disposición se traduce en lo siguiente:

- [REDACTED] deberá reconocer los efectos de la desincorporación (2007)
- Ello, al cierre del ejercicio inmediato anterior (2006) en declaración complementaria de dicho ejercicio.
- Para estos efectos, restará a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio (2006):
- El monto de las pérdidas de ejercicios anteriores (2005 y anteriores).

En este sentido, si para la determinación del impuesto sobre la renta para el caso de desincorporación la Ley obliga a la controladora a tomar en cuenta la situación fiscal existente en el ejercicio fiscal anterior al evento de desincorporación, es ilegal que la autoridad demandada pretenda que mi mandante revierta las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, pues como esa H. Sala apreciará, en todo caso, mi representada debió revertir las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2005 y anteriores, a efecto de que en el ejercicio fiscal de 2006 se reconocieran los efectos de la desconsolidación.

Máxime, que la ilegalidad de la resolución impugnada se pone en evidencia a foja 35 de la misma, en la que la autoridad liquidadora sostiene que "el monto de las pérdidas fiscales que generaron las sociedades controladas fusionadas y [REDACTED] en el propio ejercicio de 2006, por importe de \$1,811'604,802 y \$371'967,597, cumplen con el requisito que se señala en el párrafo anterior..."

Así, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues las pérdidas generadas en 2006 de las sociedades controladas de ninguna manera pueden actualizar el supuesto que señala la autoridad demandada, pues este ejercicio es en el que se deben reconocer los efectos de la desincorporación ocurrida en 2007, y en el cual en todo caso se deberían restar o sumar las pérdidas o utilidades de ejercicios anteriores, esto es, 2005 para atrás.

En este sentido, es evidente que de considerar correcta la interpretación de la autoridad, las pérdidas fiscales que mi mandante debió considerar eran las que se encontraban pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2005, pues la supuesta desconsolidación surtió efectos en el ejercicio fiscal de 2006.

Por lo anterior, es evidente que es ilegal que la autoridad demandada haya determinado en las resoluciones impugnadas, que mi mandante se encontraba obligada a considerar la reversión de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, pues como ha quedado evidenciado, la desconsolidación surte efectos en dicho ejercicio, debiendo considerar las pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2005.

En este sentido, de conformidad con el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mi mandante debió considerar las pérdidas fiscales pendientes de

disminuir al 31 de diciembre de 2005, y no así, las pendientes a disminuir al 31 de diciembre de 2006 como ilegalmente lo sostiene la autoridad demandada, de ahí que la resolución impugnada sea contraria a derecho.

Por lo anterior, las conclusiones a las que arribó la autoridad demandada resultan del todo incorrectas e ilegales, pues son producto de una interpretación y aplicación indebida de las disposiciones legales, en específico, del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, actualizando la causal de ilegalidad prevista por el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que lo procedente será que esa H. Sala declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en términos del artículo 52, fracción II de este último ordenamiento legal.

F. Aunado a lo anterior, es de igual forma ilegal que las autoridades demandadas sostengan que en caso de que mi mandante no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2007, la controladora hubiera sumado las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

En efecto, las autoridades demandadas sostienen que de no revertir mi mandante el efecto de haber consolidado las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas desincorporadas en el ejercicio de 2006, indebidamente podría obtener un beneficio fiscal, ya que al ser restadas de manera inmediata contra las utilidades fiscales obtenidas por las sociedades del grupo en el ejercicio de 2006, obtuvieron un resultado fiscal consolidado menor y, en consecuencia, pagaron un impuesto sobre la renta disminuido, y que al no reversarlas para determinar la utilidad fiscal consolidada de 2006, jamás pagarán el impuesto sobre la renta diferido.

Al respecto, en el presente apartado se harán valer argumentos tendientes a demostrar que las autoridades demandadas en ningún momento fundaron y motivaron debidamente el supuesto beneficio indebido que obtuvo mi mandante, derivado de que en ninguna parte de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece como obligación de las sociedades controladoras que tengan que sumar a la utilidad consolidada del ejercicio en que se dio la desincorporación las utilidades de sus controladas, evidenciando así la ilegalidad de la resolución impugnada derivado de su falta de fundamentación y motivación.

En la resolución determinante del crédito fiscal, se indicó que en caso de que la empresa controladora no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2007 la controladora hubiera sumado las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

A lo cual, la autoridad resolutora sostuvo que dicha autoridad no se encontraba obligada a citar precepto legal alguno por el cual se estableciera dicha

obligación, pues a su parecer en la resolución recurrida no se estableció como obligación dicho supuesto, sino que únicamente se mencionó a efecto de que se viera nulificado el beneficio derivado de la consolidación fiscal atendiendo, según su dicho, al principio de simetría fiscal.

Lo anterior, es a todas luces ilegal, pues como es del conocimiento de esa H. Sala, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado adecuando los hechos y circunstancias que rodean una hipótesis a la legislación exactamente aplicable, citando el precepto legal exacto en el que sustenten su determinación.

Cobra relevancia al caso que nos ocupa, la siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente, señala

"SEGURIDAD JURIDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la existencia de un ordenamiento tributario, participe de las características de todo ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación del fenómeno tributario y su conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal o de "seguridad a través del Derecho"."



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 363 -

58

Amparo en revisión 820/2011. Estación de Servicios Los Álamos, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 251/2012. Maquillas y Detallistas, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 686/2012. Incomer, S.A. de C.V. 25 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 1073/2012. Gold Medal Construction, S.A. de C.V. 27 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 416/2012. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 8 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Tesis de jurisprudencia 139/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil doce.

Así, es ilegal que en la resolución liquidatoria la autoridad demandada haya determinado un crédito fiscal a mi mandante derivado de un supuesto beneficio indebido que no funda y motiva, pues su hipótesis relativa a que si mi mandante no revirtió las pérdidas de las controladas, entonces debía sumar sus utilidades en el resultado consolidado del ejercicio de 2007, es del todo ilegal al carecer de sustento jurídico.

En este sentido, es aun más ilegal que la autoridad resolutora del recurso de revocación haya resuelto que la autoridad liquidadora no debía motivar el beneficio indebido, derivado de un supuesto de simetría fiscal, pues ello es totalmente contrario a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas.

Pues de lo contrario, las autoridades podrían determinar créditos fiscales basados en hipótesis que no están previstas en la ley, adecuando arbitrariamente cualquier situación a un principio en materia fiscal como es la simetría fiscal, dejando a los gobernados en un estado de total inseguridad jurídica.

Incluso, evidencia aun más la ilegalidad de las resoluciones que aquí se impugnan, el hecho de que a foja 121 de la resolución al recurso de revocación la autoridad demandada haya resuelto que, en todo caso, la falta de cita del precepto legal en el que se estableciera la obligación de la empresa controladora de que en caso de que no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, entonces en el resultado consolidado de ese ejercicio tendría que sumar las utilidades de estas en contra de las cuales se amortizaron en lo

59

individual pérdidas fiscales, es un vicio de naturaleza formal que en nada trascendería al sentido de la resolución impugnada.

En efecto, sostuvo la autoridad resolutora, que la violación apuntada no implica que mi mandante no deba reconocer los efectos de la desincorporación de sus empresas controladas al haberse desincorporado del régimen de consolidación con motivo de la fusión, pues los hechos y el derecho en que se sustenta esa determinación prevalecen en el caso concreto.

Lo anterior no puede ser más incorrecto, pues el mero hecho de que la autoridad liquidadora haya señalado textualmente que el argumento de mi mandante sólo haría sentido de haber sumado las utilidades de las controladas en el resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2007, lleva a concluir que entonces al no subsistir el argumento de la autoridad, el argumento de mi mandante es el que hace sentido.

Así, las resoluciones impugnadas resultan ilegales, pues con independencia de que mi representada no se encontraba obligada a sumar el monto de pérdidas fiscales pendientes de amortizar al momento de generarse la fusión de sus empresas controladas,

y porque no existían pérdidas pendientes de amortizar, en acatamiento estricto a lo establecido en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cierto es que aun suponiendo sin conceder que existiesen dichas pérdidas pendientes de amortizar al momento de la fusión, de los preceptos legales referidos por la autoridad fiscalizadora dentro de la resolución impugnada, no se desprende que se establezca como una obligación a cargo de los contribuyentes, ante un supuesto de desincorporación como en el caso que nos ocupa, que ante la falta de adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al resultado fiscal consolidado deban sumarse, en su caso, las utilidades fiscales de las empresas fusionadas contra las que se amortizaron las pérdidas, o con respecto a las cuales se tuviese el derecho a realizar dicha amortización.

Se insiste, NO EXISTE disposición legal alguna en la Ley del Impuesto sobre la Renta o algún otro ordenamiento de carácter fiscal que establezca como obligación fiscal a cargo de las empresas controladoras, el que ante la fusión de empresas controladas deban adicionarse las utilidades fiscales de dichas empresas contra las que fueron amortizadas las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, en el ejercicio en el que se llevó a cabo la fusión de sociedades y menos aun, que la adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al momento de la fusión o la adición de las utilidades contra las que se estarían amortizando dichas pérdidas constituya un supuesto de elección entre uno y otro supuesto, sometidos al libre arbitrio de las propias empresas controladoras o de las autoridades fiscales.

De esta manera, la premisa en que la autoridad demandada sustenta su determinación, relativa a que ante la falta de adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las empresas controladas al momento de darse la fusión de sociedades —en el supuesto no concedido de resultar procedente su adición en los términos referidos por la autoridad fiscal— debían adicionar en su

caso, las utilidades fiscales contra las que fueron amortizadas dichas pérdidas al resultado fiscal consolidado, carece de sustento legal alguno.

Así, la ausencia de fundamentación sobre el postulado mencionado, genera por sí sola la ilegalidad de la resolución determinante, pues aun cuando esa H. Sala pudiera considerarlo como un vicio formal, dicha ilegalidad es evidente.¹²

¹² "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquellas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos insitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Méndez. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.

Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.

Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.

Así, aun cuando se declare la nulidad para efecto de que la autoridad funde y motive su resolución, citando la disposición legal exactamente aplicable al caso en concreto, dicha ilegalidad jamás se podría subsanar, pues NO EXISTE tal disposición que obligue a una empresa controladora a adicionar a su resultado fiscal consolidado las utilidades de las controladoras en caso de desincorporación, en el ejercicio en el que ello ocurra, en caso de no haber revertido el efecto de las pérdidas fiscales.

Además, es importante señalar a esa H. Sala que el argumento de mi mandante hace todo el sentido porque tal como ha quedado expuesto en apartados anteriores, las pérdidas fiscales que en todo caso tenían que revertirse son las correspondientes a los ejercicios fiscales de 2005 y anteriores, y en el ejercicio fiscal de 2007 en el que surtió efectos la fusión, se amortizaron las pérdidas correspondientes a 2006 derivado del cierre del ejercicio al momento de la fusión.

Por todo lo anterior, lo procedente será que esa H. Sala declare la nulidad de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues las mismas carecen de fundamentación y motivación.

G. Por último, en el presente apartado se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, al derivar de un procedimiento de fiscalización que no se llevó a cabo conforme a derecho.

Lo anterior, pues no obstante la revisión de que fue objeto mi mandante fue en relación a sus obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal de 2006, y se determinaron contribuciones por dicho ejercicio, lo cierto es que el ejercicio que en todo caso debieron auditar las autoridades fiscales es el correspondiente a 2007, pues en dicho ejercicio ocurrió el hecho generador de las obligaciones determinadas por 2006.

Como ha sido expuesto con anterioridad, es de explorado derecho que por mandato Constitucional (artículo 31, fracción IV), todos los mexicanos se encuentran obligados a contribuir para los gastos públicos.

Derivado de que muchos contribuyentes no aportan al fisco las cantidades que constitucionalmente se encuentran obligados o que en su caso, realizan interpretaciones erradas de las disposiciones fiscales, lo que motiva que la recaudación tributaria disminuya, generando con ello que las autoridades fiscalizadoras se vean en la necesidad de ejercer actos de molestia para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, los cuales se encuentran tutelados por el artículo 42 del Código Fiscal Federal.

Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.

Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 365 -

62

Lamentablemente en aras de incrementar la recaudación, las autoridades fiscalizadoras también cometen violaciones a la "esfera" jurídica de los gobernados, que obliga a estos a acudir a instancias jurisdiccionales para salvaguardar sus derechos.

Ahora bien, el antepenúltimo párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República establece:

"Artículo 16. (...)

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se busquen, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluir, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

(...)

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

(...)"

(Énfasis añadido)

De lo antes expuesto se desprenden los requisitos jurídicos mínimos que se exigen para la realización de los cateos, los cuales deberán de ser satisfechos por las autoridades fiscales al efectuar visitas domiciliarias a los sujetos pasivos, a saber:

- La orden de visita deberá constar por escrito.
- Debe expresarse el lugar que ha de inspeccionarse.
- La persona o personas con las que se entenderá.
- El objeto preciso de la visita.
- Levantar acta circunstanciada al término de la inspección, en presencia de dos testigos propuestos por el visitado y ante su negativa o ausencia, por la autoridad que practique la diligencia.
- Obligación de cumplir los demás requisitos señalados por las leyes respectivas. (Código Fiscal de la Federación, etc.)

En relación al señalamiento del objeto preciso de la visita, la autoridad que emita la orden de visita domiciliaria por un principio lógico y de seguridad jurídica para el visitado, debe precisar el objeto o propósito de la misma; así, este principio fue recogido por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, precepto que establece en lo conducente que el acto de molestia

63

debe de encontrarse debidamente fundado y motivado y expresar el objeto o propósito de que se trate.

Para satisfacer con plenitud dichos requisitos, es necesario que en la orden de visita se precise de manera clara y por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden cerciorarse, pues ello permite que la persona visitada conozca en forma plena las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a la verificación de los renglones establecidos en la visita ya que el señalar con precisión el objeto o propósito de la misma, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, debe ser pleno pues sólo de esta manera se cumple debidamente con el requisito establecido en el artículo 16 constitucional en el sentido de que las visitas practicadas por las autoridades administrativas ~~de~~ deben sujetar a las formalidades previstas para los cateos, entre la que ~~se~~ encuentra, precisamente que en la orden se debe señalar los objetos que se buscan, que en la especie sería señalar por su nombre los impuestos, de cuyo cumplimiento, las autoridades fiscales pretenden cerciorarse. Cobra relevancia la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"ORDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS. De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 16 constitucional y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de visita se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.

Contradicción de tesis. Varios 40/90. Entre la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 19 de abril de 1993. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Alfonso Soto Martínez.

Tesis de Jurisprudencia 7/93. Aprobada por la

Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano y Fausta Moreno Flores. Véase:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 333, tesis por contradicción 2a./J. 59/97 de rubro "ORDEN DE VISITA DOMICILIADA, SU OBJETO".
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 391, tesis por contradicción 2a./J. 116/2002 de rubro "VISITAS DOMICILIARIAS. ES INNECESARIO QUE EN LA ORDEN RELATIVA SE PRECISE LA RAZÓN POR LA QUE SE ATRIBUYE AL SUJETO VISITADO LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE DIRECTO, SOLIDARIO O TERCERO".

Genealogía:

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 509, página 367.

(Énfasis añadido)

Como corolario de lo anterior, es exigencia indispensable, que las órdenes de visita domiciliaria cumplan con los requisitos constitucionales analizados en el presente escrito, aunque la ley secundaria no lo señale expresamente, la falta de valor probatorio de la resolución determinante del crédito o de las sanciones aplicables con base en dicha acta, toda vez que si un acto resulta inconstitucional, todos los actos que de él deriven también resultan inconstitucionales, de conformidad con la Jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"ACTOS VICIADOS. FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado, y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben dárles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta, irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

(Énfasis añadido)

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas por derivar de un procedimiento de fiscalización viciado de origen, resulta necesario recordar el procedimiento para la reversión de pérdidas fiscales en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, que deriva de la figura de desincorporación o desconsolidación del régimen de consolidación fiscal.

Como ya se ha expuesto, la "desincorporación" ocurre cuando una sociedad controlada deja de serlo, debiendo cumplir con sus obligaciones a nivel individual, como si no hubiera consolidado durante el ejercicio.

La desincorporación de una sociedad del régimen de consolidación fiscal puede darse derivado de la liquidación de la sociedad controlada, su fusión por integración o incorporación en una sociedad fuera del grupo de intereses, etc.

Sobre el particular, es importante recordar que la consolidación fiscal era a partir de 1999 un régimen de diferimiento del impuesto sobre la renta, por lo que cuando una sociedad controlada se desincorpora, el impuesto del grupo que se hubiera diferido en virtud de su participación en la consolidación fiscal debe pagarse.

En este sentido, cuando una sociedad controlada se desincorpora, la sociedad controladora debe tomar en consideración elementos que se adicionen o disminuyen según sea el caso, para generar un resultado fiscal consolidado cuyo importe sea, acorde con el que se hubiera pagado como si la sociedad que se desincorpora nunca hubiera formado parte de la consolidación fiscal.

El procedimiento para realizar el ajuste mencionado, se encuentra previsto en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta¹³. Dicho artículo prevé una

¹³ "Artículo 71. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual.

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos sexto y séptimo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889¹⁴. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso a) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que dicha sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.3889¹⁵ se sumará en su totalidad.

(...)



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 367 -

66

serie de pasos que dan origen a ciertas cifras que deben sumarse o restarse, según sea el caso, a la base del impuesto consolidado del ejercicio. Al llevar a cabo dichos pasos, se neutraliza, en el resultado fiscal consolidado, el efecto que tuvieron los elementos individuales aportados en su momento por la sociedad que se desincorpora.

El ajuste que resulta debe hacerse respecto del resultado fiscal consolidado del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se desincorpora la sociedad controlada. Para ello, la sociedad controladora presentará una declaración complementaria de consolidación, en la que efectuará las adiciones o sustracciones que resulten de aplicar lo dispuesto en el artículo 71 referido.

Específicamente, la sociedad controladora deberá sumar o restar, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de disminuir de conformidad con el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que tuviere una sociedad controlada.¹⁴

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deja de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación. Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución.

(...)

Cuando la sociedad controladora deje de determinar su resultado fiscal consolidado estará a lo dispuesto en este artículo por cada una de las empresas del grupo incluida ella misma.

En el caso en que el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto correspondiente dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se efectúe la desconsolidación. Tratándose del caso en que el grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, la sociedad controladora enterará el impuesto derivado de la desconsolidación dentro del mes siguiente a la fecha en que obtenga la autorización para dejar de consolidar.

Las sociedades controladoras a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Cuando el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la controladora deberá presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo."

(Énfasis añadido)

¹⁴ "Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

- a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.
- b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

67

En términos de lo anterior, la "reversión" de las pérdidas fiscales acontece cuando una sociedad controlada se desincorpora del Grupo, en cuyo caso la sociedad controladora deberá sumar o restar a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que la sociedad que se desincorpora tenga el derecho a disminuir al momento de su desincorporación y que hubieren sido restadas para determinar el resultado fiscal consolidado.

Ahora bien, es importante precisar que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio.

Así, al existir una desincorporación de una sociedad controlada conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la controladora debe reflejar los efectos de dicho evento en la declaración del ejercicio fiscal anterior, situación que es excepcional, pues la regla general prevista en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece que los efectos fiscales de los actos de los contribuyentes se reflejan en la declaración del ejercicio.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso.

(...)

II. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, que no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó en los términos del artículo 61 de esta Ley, y que en los términos del primer párrafo del inciso b) y del primer párrafo del inciso c) de la fracción I de este artículo se hubieran restado en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la utilidad fiscal consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en que se pierde el derecho a disminuirlos. El monto equivalente a las pérdidas fiscales que se adicione a la utilidad fiscal consolidada o se disminuya de la pérdida fiscal consolidada, según sea el caso conforme a este párrafo, se actualizará por el periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio al que corresponda dicha pérdida y hasta el último mes del ejercicio en el que se adicionen o se disminuyan.

En efecto, dentro del régimen de consolidación fiscal, cuando una sociedad se desincorpora, el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que se determine el impuesto como si no hubiere tenido tal carácter en el ejercicio fiscal en el que se desincorpora, lo cual se logra mediante el deber impuesto a la controladora de reflejar los efectos de la desincorporación en el ejercicio fiscal anterior (se crea una ficción como si a partir de ese ejercicio se hubiera dejado de consolidar).

Por ejemplo, si una sociedad controlada se desincorpora el 31 de octubre de 2007, la sociedad controladora deberá reconocer la desincorporación al cierre del ejercicio fiscal de 2006 mediante la presentación de una declaración complementaria en dicho ejercicio.

Para tal efecto, sumará o restará según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio (2006) el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores (2005 y anteriores) que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos, sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado.

Adicionalmente, en caso de existir un impuesto a cargo de la sociedad controladora, con motivo de la desincorporación de una sociedad controlada, deberá enterarlo al fisco federal dentro del mes siguiente a la desincorporación de una sociedad controlada. Si resultara un saldo a favor, podrá pedir su devolución.

Ahora bien, una vez que ha quedado evidenciado el procedimiento para reconocer los efectos de una desincorporación en el régimen de consolidación fiscal, así como el procedimiento correspondiente a la reversión de pérdidas fiscales con motivo de la misma, a continuación se procede a evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues las mismas derivan de un procedimiento de fiscalización que se llevó a cabo respecto de un ejercicio en el cual no ocurrió el hecho generador de las obligaciones, situación que de sí implica la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por derivar de un procedimiento viciado de origen.

En efecto, la autoridad demandada de manera por demás ilegal determinó un crédito fiscal a mi mandante por supuestas omisiones en el entero del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, derivado de la revisión que efectuó a dicho ejercicio fiscal, sin tomar en cuenta que el hecho generador de las obligaciones que revisó y determinó ocurrió en el ejercicio fiscal de 2007 y, por tanto, debió haber auditado dicho ejercicio para válidamente poder determinar contribuciones omitidas a mi mandante.

En efecto, como ha quedado explicado brevemente en el presente apartado, la fusión de una sociedad del grupo de consolidación conlleva a su desincorporación -tomando como premisa lo resuelto por las autoridades demandadas, pues la presente demanda de nulidad parte de la premisa de que

la fusión de una empresa dentro del mismo grupo de consolidación debe considerarse en el sentido que permanece en dicho grupo de intereses-.

Así, tenemos que la fusión es el hecho generador de la figura de desincorporación dentro del régimen de consolidación fiscal, derivada de la cual surge la obligación para las empresas controladoras de reconocer los efectos de la desincorporación en declaración complementaria del ejercicio inmediato anterior al en que se da la fusión.

No obstante lo anterior, la resolución liquidatoria en la que la autoridad demandada, con motivo de que mi mandante no reconoció los efectos de la desincorporación ocurrida en el ejercicio fiscal de 2007, procedió a determinar a mi mandante contribuciones omitidas por el ejercicio fiscal de 2006, deriva de un procedimiento de fiscalización llevado a cabo respecto de las obligaciones de mi mandante por el ejercicio fiscal de 2006.

En este sentido, es ilegal la resolución impugnada en virtud de que la autoridad demandada determinó que mi mandante incumplió con sus obligaciones fiscales derivadas de la desincorporación que se generó con motivo de la fusión de sus sociedades controladas en el ejercicio de 2007, siendo que el ejercicio revisado y por el cual se liquidó a mi representada comprende al ejercicio fiscal de 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

Sobre el particular, resultan aplicables los siguientes artículos del Código Fiscal de la Federación, mismos que en la parte conducente señalan:

"Artículo 6. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en el que ocurran.

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

(...)

Artículo 11. Cuando las leyes establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año calendario. (...)

En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la sociedad escidente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación.

Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, y en su caso,



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 369 -

70

determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

(...)

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III y IV de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.

La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para el ejercicio sujeto a revisión.

(Énfasis y subrayado añadidos)

De las anteriores transcripciones se desprende que la revisión que efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para el ejercicio sujeto a revisión, es decir, las resoluciones que dicten las autoridades demandadas por el ejercicio sujeto a revisión, únicamente podrán versar sobre dicho ejercicio.

Tal como esa H. Sala apreciará de la resolución impugnada, la liquidación es producto de las facultades de revisión que ejerció la autoridad demandada, específicamente sobre el ejercicio fiscal de 2006.

Sin embargo, la ilegalidad de las resoluciones impugnadas deriva de que el hecho generador de las obligaciones fiscales de mi mandante ocurrió en el ejercicio fiscal de 2007, por lo que de conformidad con los artículos 6, 11 y 42 del código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscalizadora hoy demandada debió haber ejercido sus facultades de comprobación respecto de dicho ejercicio, a fin de poder determinar contribuciones omitidas a mi mandante derivado de que a su parecer indebidamente no reconoció los efectos de la desincorporación de sus sociedades controladas en el ejercicio de 2006.

Sin que sea óbice a lo anterior, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta los efectos de la desincorporación deban reconocerse en declaración complementaria del ejercicio inmediato anterior al en que sucedió, pues no se debe perder de vista que el primer hecho generador de la obligación es precisamente la desincorporación (fusión) de las sociedades.

En efecto, si bien los efectos de la desincorporación se deben reconocer en el ejercicio fiscal de 2006, lo cierto es que la desincorporación per se como hecho generador ocurrió en el ejercicio fiscal de 2007, específicamente el 31 de octubre de dicho año.

71

Tan lo anterior es así, que a lo largo de toda la resolución liquidatoria así como de la resolución al recurso de revocación, los fundamentos que utilizan las autoridades demandadas son los vigentes en el ejercicio fiscal de 2007, situación que constituye una confesión expresa de que la causación de las obligaciones derivado de su hecho generador sucedió en el ejercicio fiscal de 2007, siendo evidente que es dicho ejercicio el que debió ser sujeto a revisión si es que la autoridad pretendía determinar contribuciones omitidas derivadas del no reconocimiento de los efectos de una desincorporación de sociedades dentro del régimen de consolidación fiscal.

En este sentido, tal como esa H. Sala apreciará, es ilegal que la autoridad demandada, haya determinado contribuciones omitidas que derivaron de un hecho ocurrido en el ejercicio de 2007, siendo que el ejercicio sujeto a revisión es el correspondiente a 2006.

Lo anterior se afirma, pues de validarse la actuación de la autoridad demandada, sería tanto permitir que la fiscalizadora revise indistintamente dos ejercicios a su voluntad, a pesar de que sus facultades de revisión tenían por objeto revisar únicamente el ejercicio fiscal de 2006.

En efecto, es ilegal que la autoridad demandada determine un crédito fiscal a mi mandante, sosteniendo que debió reconocer los efectos de la desincorporación ocurrida en 2007, pues como esa H. Sala apreciará demandada ejerció sus facultades de comprobación respecto del ejercicio de 2006, por lo que no podía revisar ni mucho menos liquidar sobre contribuciones que se causaron en un ejercicio diverso al revisado.

Lo anterior es así, en virtud de que cuando las autoridades demandadas ejercen las facultades de comprobación respecto de un ejercicio, es evidente que se encuentran impedidas a determinar diferencias de impuestos de un ejercicio distinto al revisado, pues ello implica que lleven a cabo un nuevo acto de comprobación, sin encontrarse facultados para ello, situación que evidentemente transgrede las garantías de seguridad jurídica y de inviolabilidad del domicilio de mi mandante, pues de confirmarse la actuación de la autoridad fiscal se estaría permitiendo que revisara y liquidara contribuciones a cargo de la hoy actora por dos ejercicios indistintamente.

Se dice lo anterior, en virtud de que al determinar que mi mandante debió reconocer los efectos de la desincorporación de sus sociedades controladas ocurrida en 2007, a pesar de que el objeto de la revisión a la que fue sujeta mi representada y que dio origen a la resolución impugnada, implica claramente que la autoridad demandada sólo revisó el ejercicio de 2006, es ilegal, pues se contravendrían las garantías de legalidad y seguridad jurídicas e inviolabilidad del domicilio de la hoy actora.

En este sentido, es evidente que la resolución determinante del crédito es ilegal, en virtud de que a partir de la misma la autoridad demandada se encuentra liquidando obligaciones que se generaron en el 2007, pero se fundamenta en una revisión respecto del ejercicio de 2006.

00092

Por lo anterior, es evidente que las resoluciones impugnadas son ilegales por determinar diferencias a cargo de mi mandante cuyo hecho generador ocurrió en un ejercicio distinto al revisado, motivo por el cual, esa H. Sala deberá declarar la nulidad lisa y llana con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, al derivar de un procedimiento de fiscalización viciado de origen.

Asimismo, mediante escrito de alegatos de fecha 26 de mayo de 2016, la actora manifestó lo siguiente:

ALEGATOS DE LA ACTORA

JUICIO FISCAL 12140/15-17-11-5

DÉCIMO PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL H. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

[REDACTED] autorizado por la parte actora en términos del artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, personalidad que tengo debidamente acreditada en los autos del juicio en que se actúa, respetuosamente comparezco y expongo:

Con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estando en tiempo y forma legales, por medio del presente escrito vengo a formular el siguiente apunte de:

★ 27 MAY 2016 ★

ALEGATOS:

En su oficio de contestación a la demanda, así como de contestación a la ampliación de la demanda de nulidad, la autoridad demandada vierte una serie de argumentos con los que pretende desvirtuar los conceptos de impugnación contenidos en el escrito inicial de demanda, los cuales resultan a todas luces infundados, por lo que deberán ser desestimados por esa H. Sala al momento de dictar sentencia, tal y como se demuestra a continuación:

PRIMERO. Se desvirtúa la refutación que hace valer la autoridad demandada al Concepto de Impugnación Primero del escrito inicial de demanda.

A. En primer término, la autoridad demandada señala en su oficio de contestación a la demanda que devienen infundados los argumentos hechos valer por mi representada en el Primer Concepto de Impugnación del escrito inicial de la demanda de nulidad, relacionados con que la hoy actora no fue omisa en adicionar a la utilidad fiscal consolidada, el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de sus sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED].

Lo anterior, al considerar la hoy demandada que resulta ineficaz el argumento de mi mandante en el que solicita se realice una interpretación histórica del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, al no prever como supuesto expreso de desincorporación, el de fusión de empresas controladas cuando la subsistente o la naciente permanezca en el régimen de consolidación y que, por tanto, debe prevalecer tácitamente el contenido del artículo 57-J de la misma Ley vigente hasta 2001.

Ello, pues la demandada consideró que el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007 debe ser aplicado de manera estricta en términos del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, al ser una disposición que establece cargas a los contribuyentes, dado que la misma se encuentra relacionada con los sujetos y base del impuesto sobre la renta de las empresas que determinan su resultado fiscal consolidado, en específico, respecto de los efectos de la desincorporación de sociedades controladas.

En este sentido, contrario a lo argumentado por mi mandante, señaló la autoridad demandada que dicho precepto debe ser interpretado en el sentido de que cuando se realice una fusión de sociedades, se considera que las sociedades fusionadas quedan desincorporadas del régimen de consolidación fiscal, sin establecer distinción alguna respecto a que la fusión se realice entre empresas que forman parte



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

***** ***** ***** ** *****

- 371 -

2

del mismo grupo que consolida sus resultados fiscales o con una empresa ajena al grupo.

Sin embargo, las manifestaciones de la autoridad demandada devienen en infundadas e ilegales, al partir de una indebida interpretación y aplicación del artículo 71, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, pues contrario a lo determinado por la misma, mi mandante no fue omisa en adicionar a la utilidad fiscal consolidada, el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de sus sociedades controladas fusionadas y

Lo anterior, pues de la interpretación histórica en relación al texto legal que efectivamente surgió de la reforma, del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2002 y hasta 2013, es claro que no fue intención del legislador introducir una disposición tan limitativa como la que nos ocupa, sino que continúa rigiendo lo dispuesto por el artículo 57-J de la Ley abrogada.

En efecto, como esa H. Sala no podrá pasar inadvertido, del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1999 se desprende que este disponía expresamente que en el caso de fusión de sociedades, no existía desincorporación cuando la controlada que se disolvía fuera absorbida por otra u otras controladas de la misma controladora, o cuando la controladora se fusionara a una controlada del mismo grupo.

Posteriormente, en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2013, en el párrafo noveno del artículo 71, si bien se señala que habrá desincorporación (del régimen de consolidación fiscal) en el caso de fusión, la ley es omisa en citar con claridad qué debe suceder con respecto al caso en que la nueva empresa resultante de la fusión de empresas controladas, se mantenga tributando bajo el régimen de la consolidación fiscal, como si lo señalaba de manera textual la anterior ley (artículo 57-J).

No obstante lo anterior, dicha falta de precisión de ninguna manera puede ser acogida bajo una interpretación rigorista ni mucho menos limitativa o simplista como lo hacen las autoridades demandadas, en el sentido de que toda fusión de sociedades controladas debe necesariamente ser considerada como una desincorporación.

Ello, ya que la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2002, así como el dictamen correspondiente de la Cámara de Diputados, evidencian que la intención del legislador es precisamente la de no considerar dentro del supuesto de desincorporación, a la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación, esto es, se demuestra que la intención del legislador en todo momento fue que subsistiera lo dispuesto por el artículo 57-J (en el caso de fusión de sociedades, no existía desincorporación cuando la controlada que se disolvía fuera absorbida por otra u otras controladas de la misma controladora o cuando la controladora se fusionara a una controlada del mismo grupo).

Lo anterior es así, pues de lo señalado en la exposición de motivos en comento se advierte que se había determinado de manera expresa que, en el caso de fusión de sociedades, se considerará que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve fuera absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma

controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo, lo cual se preveía en el artículo 72 de su propuesta.

No obstante lo anterior, como esa H. Sala no podrá pasar desapercibido, las autoridades demandadas señalan que de la interpretación causal y teleológica del artículo 71, se desprende que, por el contrario, el régimen de consolidación fiscal cambió para prever expresamente que cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan, situación que hace evidente la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues es claro que el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2002, no quedó plasmado tal cual como lo señalan las autoridades demandadas, sino que fue modificado para quedar como sigue: "En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación".

Inclusive, con esa interpretación teleológica que la autoridad realiza, admite expresamente que es posible realizar una interpretación del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, pues incluso la propia autoridad demandada realiza una interpretación de dicho precepto, motivo por el cual no resulta válido que señale que no es posible realizar una interpretación del mismo.

Lo anterior, pues por un lado, la autoridad realiza una interpretación teleológica del artículo en comento y, por otro, controvierte el hecho de que mi representada haya realizado una interpretación histórica, situación que deviene en contradictoria.

Ello, llegando a la anterior conclusión de conformidad con la redacción del dictamen de fecha 29 de diciembre de 2001 de la Cámara de Diputados, en el cual se señaló que cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan y en el caso de que la sociedad que desaparezca sea la controladora, se considerará que existe desconsolidación.

De lo anterior, se desprende que no obstante en el dictamen de la Cámara de Diputados se propuso considerar desincorporación la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación, la redacción plasmada en última instancia en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2002, NO introdujo dicha consideración de manera expresa.

De esta manera, se evidencia la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues contrario a lo resuelto, lo cierto es que aun cuando de la interpretación histórica derivada del proceso legislativo del artículo en comento se desprende que se podría considerar desincorporación la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación fiscal, dicha redacción no subsistió, por lo que no es dable sostener la interpretación que pretenden darle las autoridades demandadas al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Dicha situación es así, pues el hecho de que se hubiere eliminado la redacción del artículo que señalaba que, "en caso de que la fusión se realice entre empresas del mismo grupo de consolidación se considera que existe desincorporación", ello evidencia que la interpretación que debe subsistir del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es en el sentido de que en los casos de fusión dentro del mismo grupo de consolidación, no deben considerarse como un supuesto de desincorporación.

Lo anterior no puede ser de otra manera, pues de lo contrario se estaría desconociendo el texto legal aprobado en última instancia por el legislador con respecto a los supuestos de la desincorporación fiscal, basados en un esquema lógico y congruente, en el que no existe motivo razonado alguno para considerar que en el supuesto de una fusión entre dos o más empresas controladas pudiesen ser consideradas desincorporadas del régimen de la consolidación fiscal, más aún, cuando la nueva sociedad emergente de la fusión se mantenga dentro de este mismo régimen especial de tributación, asumiendo las mismas obligaciones de aquellas empresas controladas que le dieron origen.

Lo anterior, se insiste, de conformidad con la interpretación histórica, contextual y lógica del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con la lógica y naturaleza jurídica de la figura de la fusión, pues el activo, pasivo y capital de la empresa fusionada no desaparecen ni se transmiten a una sociedad fuera del grupo de intereses, sino que permanecen en el grupo de consolidación a través de la sociedad fusionante.

Así las cosas, lo procedente será que esa H. Sala desestime los razonamientos expuestos por la demandada en su oficio de contestación a la demanda y, en su oportunidad, dicte sentencia en la que declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

B. Asimismo, la autoridad demandada señala en su oficio de contestación a la demanda que deviene infundado el argumento hecho valer por mi mandante en el sentido de que no debía reconocer los efectos de la desincorporación de sus controladas [REDACTED] y [REDACTED] en virtud de que al momento en que surtió efectos la fusión de las mismas, estas últimas no tenían pérdidas fiscales pendientes de disminuirse.

Elo, al considerar la hoy demandada que, contrario a lo señalado por mi representada, al momento de la fusión de las empresas controladas antes señaladas, si contaban con pérdidas fiscales pendientes de disminuir de manera individual, pues estimó la autoridad demandada que si las referidas empresas presentaron declaración por el ejercicio de 2007, al ser éste el ejercicio en que se fusionaron y en el que debe entenderse que hubo desincorporación, debe concluirse que resulta falso que las pérdidas fiscales se hubieran disminuido al momento de su fusión.

Dicha situación es así, pues señaló la demandada que de conformidad con el primer párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, la obligación de cumplir con las cargas fiscales de manera individual únicamente se actualiza en el momento en que exista la desincorporación, en la especie, el 18 de octubre de 2007 (fecha de la fusión), por lo que a la referida fecha [REDACTED] y [REDACTED] si contaban con pérdidas fiscales pendientes de disminuir.

5
1072

Adicionalmente a lo anterior, la autoridad demandada manifestó que resulta infundado el argumento relativo a que el momento en que se efectuó la desincorporación es cuando surte efectos la fusión de las empresas controladas, pues en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, esto es, cuando haya nacido a la vida legal la fusión concretándose el acto jurídico correspondiente, no así, cuando surta efectos frente a terceros.

Sin embargo, las anteriores consideraciones de la autoridad demandada devienen infundadas, pues suponiendo sin conceder que la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación actualice el supuesto de desincorporación, lo cierto es que al momento de desincorporación ya no existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

Al respecto, suponiendo sin conceder que lo correcto era que mi mandante sumara a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006 sus sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] de cualquier manera, devienen infundados los argumentos hechos valer por la demandada, toda vez que al momento de desincorporación dichas empresas no contaban con pérdidas fiscales.

En este sentido, las resoluciones impugnadas son ilegales, pues a través de las mismas se apreció incorrectamente el hecho de que al momento de la desincorporación derivada de la fusión, las empresas fusionadas contaban con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar, derivando así en una aplicación indebida del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior es así, pues tal y como se advierte del dictamen de consolidación fiscal motivo de revisión y de las aseveraciones hechas por la propia autoridad fiscalizadora, las empresas controladas amortizaron las pérdidas fiscales que se encontraban pendientes de disminuir en el ejercicio fiscal en que se realizó la fusión de las sociedades, esto es, en el momento de la desincorporación.

En efecto, si conforme al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la obligación de la empresa controladora es la de sumar o restar las pérdidas fiscales de sus controladas desincorporadas que tuviesen pendientes de disminuir al momento de la desincorporación (en el caso, cuando surtió efectos la fusión) para efectos de determinar su resultado fiscal consolidado del ejercicio inmediato anterior al de la desincorporación, es claro que si las pérdidas fiscales de las empresas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] se agotaron en el ejercicio en el que se dio la fusión como supuesto de desincorporación, resulta evidente que no existían pérdidas fiscales pendientes de disminuir que debiesen haberse sumado o restado para determinar la utilidad o pérdida fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior al de la fusión, esto es, del ejercicio fiscal de 2006.

Además, evidencia aún más la ilegalidad de las resoluciones impugnadas el hecho de que la propia autoridad fiscalizadora reconoce expresamente a fojas 31 a la 40 de la resolución liquidatoria impugnada que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar fueron aplicadas a la fecha de la fusión por las sociedades controladas



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 373 -

desincorporadas fusionadas. [REDACTED] mismas que obtuvieron en su ejercicio fiscal irregular comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2007 y que fueron aplicadas contra la utilidad fiscal de \$2,106'174,218 y \$477'870,532, respectivamente, tal y como es posible observar de sus declaraciones presentadas el 31 de diciembre de 2007 y 22 de julio de 2008, documentación que obra en el expediente administrativo abierto por dicha autoridad con motivo de la revisión.

En tal virtud, esa H. Sala no podrá pasar inadvertido que el anterior reconocimiento, hace prueba plena en contra de la autoridad fiscal en términos del artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que reconoce expresamente que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar fueron aplicadas a la fecha de la fusión por las sociedades controladas desincorporadas, contrario a lo que las hoy demandadas pretenden acreditar.

Aunado a lo anterior, es evidente la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues si mi representada no contaba con pérdidas fiscales una vez realizada la desincorporación, por tanto no se encontraba obligada considerarla para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado o de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006, siendo claro que las hoy demandadas confunden el momento en que deben de considerarse el monto de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, de haber existido.

Eilo, ya que como esa H. Sala no podrá pasar por alto, la autoridad demandada confunde el momento en que deben de considerarse el monto de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir (de haber existido), esto es, el momento de darse la fusión de las sociedades controladas, con el momento en que el citado monto debe de adicionarse o restarse de la utilidad o pérdida fiscal consolidadas (cierre del ejercicio inmediato anterior al que se efectuó la fusión).

En este sentido, contrario a lo determinado por las autoridades demandadas, las pérdidas fiscales que "supuestamente" mi mandante debió "revertir", son las correspondientes al ejercicio de 2005 y anteriores y, no así, las correspondientes a 2006, lo que evidencia la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al partir de una falsa premisa.

A efecto de evidenciar lo anterior, resulta necesario recordar lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual prevé la mecánica para determinar el resultado fiscal consolidado cuando una sociedad se desincorpore, a efecto de calcular al mismo como si la referida sociedad que se desincorpora nunca hubiera formado parte de la consolidación fiscal.

Dicho precepto señala que la sociedad controladora deberá sumar o restar, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de disminuir de conformidad con el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tuviere una sociedad controlada.

En este sentido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la sociedad controladora debe reconocer los efectos de la

desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio.

En tal virtud, en un evento de desconsolidación, la sociedad controladora debe determinar el resultado fiscal consolidado conforme al último ejercicio fiscal en el que consolidó, esto es, en el ejercicio fiscal en el cual se reflejen los efectos fiscales de la desconsolidación, mas no la del ejercicio en que materialmente ocurre la desconsolidación, se insiste, porque en este último la sociedad debe determinar su resultado fiscal de manera individual, como si nunca hubiera consolidado.

En el caso que nos ocupa, como lo señala la autoridad, partiendo de la base que la materialización del supuesto de desincorporación ocurre en el ejercicio fiscal de 2006, lo cierto es que la Ley obliga a mi mandante a determinar el impuesto con base en situaciones de hecho existentes en el ejercicio fiscal previo, esto es, 2005.

Lo anterior es así, pues como ha sido analizado, el 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio, para lo cual sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores.

Esto es, se deben sumar o restar las pérdidas fiscales anteriores al ejercicio en el cual se va a presentar la declaración correspondiente a la desincorporación.

En el caso que nos ocupa, al consistir la declaración que corresponde a la desincorporación aquella respectiva a 2006, por ende, el monto de las pérdidas fiscales que debe ser considerado para efectos de la determinación del impuesto consolidado, es aquel de ejercicios anteriores a 2006 (a saber, del ejercicio de 2005 y anteriores).

Eilo, ya que, se insiste, a efecto de reconocer los efectos de la desconsolidación, se debe sumar o restar a la utilidad fiscal o pérdida fiscal, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores, a saber, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2005, y no así, como ilegalmente sostiene la autoridad demandada, las pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006.

En este sentido, es evidente la ilegalidad de las resoluciones impugnada, pues si para la determinación del impuesto sobre la renta, para el caso de desincorporación, la Ley obliga a la controladora a tomar en cuenta la situación fiscal existente en el ejercicio fiscal anterior al evento de desincorporación, resulta ilegal que la autoridad demandada pretenda que mi mandante revierta las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, ya que como esa H. Sala no dejará de advertir, en su caso, mi representada debió revertir las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2005 y anteriores, a efecto de que en el ejercicio fiscal de 2006 se reconocieran los efectos de la desconsolidación.

Así, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues las pérdidas generadas en 2006 de las sociedades controladas de ninguna manera pueden actualizar el supuesto que señala la autoridad demandada, pues este ejercicio es en el que se deben reconocer los efectos de la desincorporación ocurrida en 2007 y, en el cual, se deberían restar o sumar las pérdidas o utilidades de ejercicios anteriores (2005 hacia atrás).

Derivado de lo anterior, resulta ilegal que la autoridad demandada haya determinado en las resoluciones impugnadas, que mi mandante se encontraba obligada a considerar la reversión de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, pues como ha quedado evidenciado, la desconsolidación surte efectos en dicho ejercicio, debiendo considerar las pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2005.

Lo anterior, con independencia de que las autoridades demandadas señalaran que resulta infundado el argumento de mi mandante relativo a que el momento en que se efectuó la desincorporación es cuando surte efectos la fusión de la empresas controladas.

Ello, ya que como esa H. Sala no podrá pasar inadvertido, la fecha en la que se desincorporaron las sociedades controladas [redacted] y [redacted] por haberse fusionado con [redacted] fue el 18 de octubre de 2007.

Inclusive, dicha situación fue corroborada en el dictamen pericial rendido por el perito designado por mi mandante, así como por el perito tercero, al dar contestación a la pregunta número 15 del cuestionario que corresponde a la prueba pericial ofrecida por mi representada en el juicio de nulidad que nos ocupa, en la cual manifestaron que si es correcto señalar que la fecha en que las referidas sociedades controladas, se desincorporaron fue el 18 de octubre de 2007, situación que fue advertida, del instrumento notarial número 36,446, volumen 88 de la Notaría Número 155 del Distrito Federal.

En este sentido, es claro que, contrario a lo argumentado por las hoy demandadas, la fecha de desincorporación de [redacted] y [redacted] fue el 18 de octubre de 2007.

Así las cosas, lo procedente será que esa H. Sala desestime los razonamientos expuestos por la demandada en su oficio de contestación a la demanda y, en su oportunidad, dicte sentencia en la que declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

C. De igual forma, la autoridad demandada señaló que resulta ineficaz el que mi mandante aduzca que no existe precepto legal que la obligue a sumar las utilidades de las empresas controladas que aplicaron contra las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir como un efecto de la desincorporación por fusión.

Lo anterior, al manifestar mi representada que resultaba infundado el hecho de que la autoridad resolutora hubiese señalado que en caso de que la empresa controladora no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas, que tuvieran al momento en que se desincorporaron del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2007, la controladora debió sumar las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

Ello, señalando la autoridad demandada que no se encontraba obligada a citar precepto legal alguno por el cual se estableciera dicha obligación, sino que sólo lo citó a

9

efecto de que se viera nulificado el beneficio derivado de la consolidación fiscal, atendiendo al principio de simetría fiscal.

No obstante lo anterior, las anteriores consideraciones de la autoridad demandada devienen infundadas, pues como esa H. Sala no dejará de advertir, en ninguna parte de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece como obligación de las sociedades controladoras que tengan que sumar a la utilidad consolidada del ejercicio en que se dio la desincorporación, las utilidades de sus controladas, lo que hace evidente la ilegalidad de las resoluciones impugnadas.

Lo anterior, pues no resulta válido que, como lo sostuvo la autoridad, un acto administrativo actualice una falta de fundamentación y motivación, sin que ello sea subsanado con el hecho de que autoridad demandada haya manifestado que no se encontraba obligada a citar precepto legal alguno que estableciera la obligación antes referida, al no haber señalado como obligación de mi mandante dicho supuesto.

Ello, manifestando que sólo se hizo mención a la misma a efecto de que se viera nulificado el beneficio derivado de la consolidación fiscal atendiendo, según su dicho, al principio de simetría fiscal.

Lo anterior, como es del conocimiento de esa H. Sala, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado adecuando los hechos y circunstancias que rodean una hipótesis a la legislación exactamente aplicable, citando el precepto legal exacto en el que sustenten su determinación, pues de lo contrario, el acto administrativo carecería de sustento jurídico situación que resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas.

Considerar lo contrario implicaría que las autoridades fiscales pudieran determinar créditos fiscales basados en hipótesis que no están previstas en la ley, adecuando arbitrariamente cualquier situación a un principio en materia fiscal como es la simetría fiscal y, por tanto, dejando a los gobernados en un estado de total inseguridad jurídica.

Así las cosas, lo procedente será que esa H. Sala desestime los razonamientos expuestos por la demandada en su oficio de contestación a la demanda y, en su oportunidad, dicte sentencia en la que declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la ausencia de fundamentación y motivación de una resolución administrativa genera por sí sola su ilegalidad, como acontece en la especie.

D. Adicionalmente, la autoridad demandada señala en su oficio de contestación a la demanda que deviene infundado el argumento a través del cual mi mandante señala que carece de legitimidad para determinar que, en su caso, aquella se encontraba obligada a adicionar las utilidades fiscales de las empresas [redacted] y [redacted] contra las cuales se amortizaron las pérdidas fiscales para efectos de la determinación de su resultado fiscal en 2007, especialmente cuando el objeto del procedimiento de fiscalización se encontró limitado al ejercicio de 2006, no así, a uno diverso como el de 2007.

Ello, pues dicha circunstancia se estableció como un elemento de la resolución que procura evidenciar que la controladora debía reconocer los efectos derivados de la



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 375 -

10

desincorporación de sus controladas, además de que la autoridad demandada subsumió en todo momento su actuación al ejercicio revisado únicamente, a saber, 2006.

Sin embargo, las anteriores manifestaciones de la autoridad demandada resultan infundadas, pues no obstante la revisión de que fue objeto mi mandante fue en relación a sus obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal de 2006 y se determinaron contribuciones por dicho ejercicio, lo cierto es que el ejercicio que en todo caso debieron auditar las autoridades fiscales es el correspondiente al de 2007, pues en dicho ejercicio ocurrió el hecho generador de las obligaciones determinadas por 2006.

De esta manera, resultan ilegales las resoluciones impugnada, pues las autoridades demandadas determinaron que mi mandante incumplió con sus obligaciones fiscales derivadas de la desincorporación que se generó con motivo de la fusión de sus sociedades controladas en el ejercicio de 2007, siendo que el ejercicio revisado y por el cual se liquidó a mi representada comprende al ejercicio fiscal de 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.

Dicha situación se corrobora aún más, si consideramos que las hoy demandadas determinaron a mi representada contribuciones omitidas por el ejercicio fiscal de 2006, en virtud de que supuestamente mi mandante no reconoció los efectos de la desincorporación ocurrida en el ejercicio fiscal de 2007, lo que hace evidente la ilegalidad de las resoluciones impugnadas.

Ello, pues de conformidad con los artículos 8, 11 y 42 del Código Fiscal de la Federación, la revisión que efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para el ejercicio sujeto a revisión, es decir, las resoluciones que dicten las autoridades demandadas por el ejercicio sujeto a revisión, únicamente podrán versar sobre dicho ejercicio, lo que claramente no aconteció en el caso que nos ocupa, ya que el hecho generador de las obligaciones fiscales de mi mandante ocurrió en el ejercicio fiscal de 2007.

Por tanto, la autoridad fiscalizadora, hoy demandada, debió haber ejercido sus facultades de comprobación respecto de dicho ejercicio, a fin de poder determinar contribuciones omitidas a mi mandante derivado de que a su parecer indebidamente no reconoció los efectos de la desincorporación de sus sociedades controladas en el ejercicio de 2006.

Lo anterior, con independencia de que el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señale que los efectos de la desincorporación deban reconocerse en declaración complementaria del ejercicio inmediato anterior al en que sucedió, pues no se debe perder de vista que el primer hecho generador de la obligación es precisamente la fusión de las sociedades (ejercicio de 2007).

En este sentido, es evidente la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, ya que de validarse la actuación de la autoridad demandada, sería tanto permitir que la fiscalizadora revise indistintamente dos ejercicios a su voluntad, a pesar de que sus facultades de revisión tenían por objeto revisar únicamente el ejercicio fiscal de 2006.

Así las cosas, lo procedente será que esa H. Sala desestime los razonamientos expuestos por la demandada en su oficio de contestación a la demanda y, en su oportunidad, dicte sentencia en la que declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones

11

impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues las mismas derivan de un procedimiento de fiscalización viciado de origen.

Por su parte, la autoridad demandada mediante **oficio de contestación a la demanda número 900 04 05-2015-58541** de fecha **14 de octubre de 2015**, argumentó lo siguiente:

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Refutación de los conceptos de impugnación.

Primero: Manifiesta la actora que las resoluciones impugnadas son violatorias de los artículos 5 y 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, al derivar de una indebida interpretación y aplicación del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, en relación a la omisión de la demandante de sumar a la utilidad fiscal consolidada, las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir sus sociedades controladas fusionadas.

Agrega que la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2002 es omisa en citar con claridad qué debe suceder con la nueva empresa resultante de la fusión de empresas controladas, tal y como sí se señalaba en la Ley anterior de manera textual, específicamente en su numeral 57-J.

Asimismo, aduce que la intención del legislador al eliminar la redacción que hacía referencia específica a que el supuesto de fusión se actualiza aún en caso de que la misma se lleve a cabo.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

10

entre empresas del mismo grupo de consolidación, evidencia que la interpretación que debe hacerse del citado artículo 71 es que subsista lo dispuesto en el referido artículo 57-J, la cual es no considerar dentro del supuesto de desincorporación, la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación, para lo cual mi contraria afirma que en el caso concreto, al momento de la desincorporación, ya no existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

Continúa argumentando que en relación con la redacción del artículo 71 aludido, de dicha disposición no se desprende que se debe restar el monto actualizado de las pérdidas pendientes de disminuir al cierre del ejercicio inmediato anterior al en que se genera la desincorporación; por lo cual, mi contraria sostiene que las empresas controladas amortizaron las pérdidas fiscales al momento de la desincorporación, situación que fue reconocida por la propia autoridad fiscal tal y como se observa a fojas 31 a 40 así como 35 y 39 de la resolución inicialmente recurrida, lo cual pretende acreditar con la prueba pericial ofrecida.

De igual manera, indica que es ilegal que la autoridad demandada pretenda que revierta las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, toda vez que en todo caso, la misma debió revertir las pérdidas fiscales del 31 de diciembre de 2005 y años anteriores, a efecto de que en el ejercicio fiscal 2006 se reconocieran los efectos de la desconsolidación.

Añade que la resolución impugnada resulta ilegal en relación con el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que suponiendo sin conceder que existieran dichas pérdidas pendientes de amortizar al momento de la fusión, de tal precepto no se desprende que se establezca como una obligación del contribuyente, ante un supuesto de desincorporación como lo es el caso en concreto, que ante la falta de adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al resultado fiscal consolidado, deban sumarse las utilidades de las empresas fusionadas contra las que se amortizan en la pérdida. Aunado a esto, la enjuiciante afirma que NO existe disposición legal que la obligue a ello.

También supone la ilegalidad de la resolución inicialmente recurrida, toda vez que afirma, deriva de un procedimiento de verificación que no se llevó a cabo conforme a derecho, toda vez que el ejercicio que debió auditar la autoridad fiscalizadora es el correspondiente al 2007, pues es en éste en donde ocurrió el hecho generador de las obligaciones determinadas por el diverso de 2006.

Al respecto, ésta representación fiscal advierte que los argumentos de la incoante resultan **infundados**, mismos que carecen de consistencia jurídica para desvirtuar la legalidad de las resoluciones que por ésta vía se controvierten.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 377 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

11

En primer lugar, resulta necesario traer a estudio el contenido de la resolución determinante del crédito fiscal, a efecto de conocer los fundamentos y motivos que tomó en cuenta la autoridad fiscalizadora para determinar la situación fiscal de mi opositora, respecto a la omisión de adicionar a la utilidad fiscal consolidada el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de sus sociedades controladas fusionadas, por lo cual se procede a su inserción digital:

Fojas 15-40

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES SOCIEDADES CONTROLADAS Y PARTICIPACIONES
EJERCICIO REVISADO: Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.
IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO.
a) Omisión adicionar a la utilidad fiscal consolidada el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de las sociedades que se desincorporaron de la consolidación.

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

De la revisión practicada a la información y documentación proporcionada por el Contador Público Registrado, y en el transcurso de la revisión, proporcionada por la contribuyente, esta Autoridad determina que omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas en cantidad de \$3,867,583,390 y \$383,461,356, respectivamente, que en suma ascienden a \$4,251,044,786, pérdidas fiscales pendientes de disminuir actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007, según instrumento notarial número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007 y en consecuencia:

La observación anterior, modifica la utilidad fiscal y el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006, manifestado por [REDACTED] en declaración anual complementaria de fecha 13 de agosto de 2010 actualizándose [REDACTED] así como las señaladas en las páginas 40 a la 52 y de la 52 a la 76, del presente oficio, tal y como se determina en el cuadro transcrito en las páginas 9 y 10, del presente oficio.

Las pérdidas fiscales que tenían pendientes de aplicar en lo individual en cantidad de \$4,251,044,786 actualizadas al mes de diciembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, se determinan como sigue:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

12

DESCRIPCIÓN SOCIEDADES CONTROLADAS Y PARTICIPACIONES QUE SE ORIGINÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS FISCALLES EN	IMPORTE DEL QUINTO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR A AQUEL EN EL CUAL SE DESINCORPORÓ LA SOCIEDAD, DICIEMBRE DEL 2006	IMPORTE DEL MES DE LA MITAD DEL EJERCICIO DE ORIGEN JULIO DEL 2006	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA (ANEXO 1)	PÉRDIDAS FISCALLES A DICIEMBRE DE 2006 PENDIENTES DE ADICIONAR AL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO DEL EJERCICIO DE LA DESINCORPORACIÓN
2006	1,030,944,786	3,867,583,390	3,867,583,390	1.0309	3,987,583,390	3,987,583,390	3,987,583,390
2007	383,461,356	383,461,356	383,461,356	1.0309	395,461,356	395,461,356	395,461,356
Total	1,414,446,142	4,251,044,786	4,251,044,786	1.0309	4,383,044,786	4,383,044,786	4,383,044,786

(1) Impuestos y participación accionaria incluidos en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión, como se indica en la página 10 del presente oficio.

El factor de actualización se determinó de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, que a la letra señala: "...En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquel en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate. ..." para lo cual se aplicará el factor, como sigue:

El factor de actualización de 1.0309 que se cita en el cuadro que antecede, para efecto de actualizar las pérdidas fiscales que la sociedad controladora [REDACTED] no adicionó a la utilidad fiscal consolidada en la determinación del resultado fiscal consolidado de 2006, se determinó tomando el índice nacional de precios al consumidor del mes de diciembre de 2006 por 83.451 correspondiente al último mes del ejercicio en que se adiciona, es decir diciembre de 2006 y dividiéndolo entre el índice nacional de precios al consumidor del mes de julio de 2006 por 80.9444 que corresponde al primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió dicha pérdida fiscal, ambos índices expresados con la base "segunda quincena de junio de 2002=100", según comunicado del Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de octubre de 2006; ambos índices modificados y expresados con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", según comunicado del Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 2011.

Cabe señalar que en comunicado del 23 de febrero de 2011, el Banco de México publicó la información histórica que contiene la tabla que representa los índices de precios al consumidor mensual a partir de enero de 1969 expresado conforme a la nueva base: segunda quincena de



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

13

diciembre de 2010 = 100, con el propósito de vincular dichos índices con los que se determinan de conformidad con la publicación que realizó el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de enero de 2011, conforme a lo siguiente:

Último mes del ejercicio en que se adiciona	Índice Nacional de Precios al Consumidor	Según D.O.F. de fecha	Entre: el mes en que se actualizó por última vez	Índice Nacional de Precios al Consumidor	Según D.O.F. de fecha	Factor de Actualización
dic-06	83.55113826432	10/01/2007	jul-06	80.944467047782	10/08/2006	1.0309

El INPC base segunda quincena de junio de 2002 = 100 de cada mes se dividió entre la constante C = 145.033 y el resultado así obtenido se multiplicó por cien, utilizando al efecto doce decimales.

El INPC base segunda quincena de junio de 2002 = 100 del mes de julio de 2006 fue de 80.9444 puntos, $((17.380\%) / (145.033)) \times 100 = 80.944467047782$.

*El INPC del mes de julio de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2006.

El INPC base segunda quincena de junio de 2002 = 100 del mes de diciembre de 2006 fue de 83.452 puntos, $((22.075\%) / (145.033)) \times 100 = 83.4523866322$.

*El INPC del mes de diciembre de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2007.

Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de abril de 2008, se otorgaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las facultades exclusivas para la elaboración del Índice Nacional de Precios al Consumidor. En tales consideraciones, cuando las disposiciones legales hagan mención al Índice Nacional de Precios al Consumidor, a partir del 15 de julio de 2011, dicha referencia se entenderá efectuada al índice que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad con los artículos 59, fracción III, letra a, Primero y Décimo Primero Transitorios de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008.

En relación al cuadro de la página 15 del presente oficio, la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, de sus sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] en cantidad de \$1,867'583,390 y \$383'461,396, respectivamente, que en suma ascienden a \$2,251'044,786, actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007 en el ejercicio posterior al de revisión, en la cual las citadas contribuyentes desaparecen y subsiste la sociedad controlada [REDACTED] lo anterior, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, de conformidad con el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007, y en consecuencia, omitió un impuesto sobre la renta consolidado.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

14

Derivado de lo anterior, mediante oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "5" adscrita a esta Administración y referido en el inciso j) de la página 5 del presente oficio, se hizo del conocimiento a esa contribuyente las observaciones que entrañaron incumplimiento de las disposiciones fiscales en relación, entre otras, a que esa contribuyente omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, de sus sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED]

[REDACTED] en cantidad de \$2,251'044,786 actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007 en el ejercicio posterior al de revisión, en la cual las citadas contribuyentes desaparecen y subsiste la sociedad controlada [REDACTED] lo anterior, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, de conformidad con el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007.

Lo anterior se conoció a través de la documentación proporcionada por el L.C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal del C.P. [REDACTED] mediante escrito de fecha 2 de junio de 2011 recibido en la Oficina de Partes de esta Administración General de Grandes Contribuyentes, el mismo día de su fecha de emisión, en contestación a la pregunta número 15 del oficio de solicitud de información y documentación 900-05-01-2011-20323 del 03 de mayo de 2011, como se señaló en las páginas 18 a la 20 del presente oficio, a través de la cual se informó que [REDACTED] actualmente [REDACTED]

[REDACTED] presentó avisos de fusión de sus sociedades controladas [REDACTED] en la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, ambas con fecha de recepción 29 de octubre de 2007, mismas fusiones que de conformidad que con el instrumento número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, surtieron efectos legales al 31 de octubre de 2007.

Por lo que de conformidad con los preceptos antes mencionados, esa contribuyente, al ser una persona moral que optó por consolidar su utilidad fiscal, se encuentra obligada a aplicar el procedimiento legalmente establecido para dicho régimen en específico, situación que en la especie no ocurrió, razón por la cual, esta Administración procede a determinar el correcto cálculo de dicha Utilidad Fiscal Consolidada.

Ahora bien, con escrito del 1º de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013 en la Oficina de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003605 firmado por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] quien acreditó su personalidad con fotocopia del Instrumento Público Notarial número 93,889, volumen 1853 de fecha 19 de octubre de 2003, otorgado ante la fe del Lic. Gerardo Correa Escobedo, Notario Público número 89 del Distrito Federal, dio respuesta al oficio de observaciones dentro del plazo legal de 20 días previsto en el artículo 48, primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente, manifestando lo siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 379 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

15

Del estudio a los argumentos manifestados por la contribuyente en su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, en relación a las observaciones dadas a conocer en el oficio 900-05-05-2012-69836 del 27 de diciembre de 2012, respecto a que omitió sumar a su utilidad fiscal consolidada por el ejercicio sujeto a revisión, el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas fusionadas [REDACTED] en cantidad total de \$2,351,044,786.13 actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007 en el ejercicio posterior al de revisión, en el cual las citadas contribuyentes desaparecen y subsiste la sociedad controlada [REDACTED] según instrumento notarial número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, el 18 de octubre de 2007, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, de conformidad con el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

La conclusión anterior, se basa en que dichas pérdidas fiscales fueron restadas por la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] para la determinación del resultado fiscal consolidado correspondiente al ejercicio en que las citadas sociedades controladas las generaron en el caso que nos ocupa el ejercicio de 2006.

Ahora bien, de la revisión a la información proporcionada por esa contribuyente y el contador público dictaminador, en el transcurso de la revisión y la que obra en el expediente administrativo abierto en esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, así como a los argumentos vertidos en su escrito de respuesta al oficio de observaciones señalado en las páginas 30 y 31 de esta resolución, esta autoridad determina que las observaciones no fueron desvirtuadas por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a sus argumentos citados en las hojas 2 y 3 de su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, mencionado con anterioridad, mismos que ya fueron transcritos anteriormente en las páginas de la 30 y 31 del presente oficio, y en los que medularmente precisa que esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, así como a los argumentos vertidos en su escrito de respuesta al oficio de observaciones señalado en las páginas 30 y 31 de esta resolución, esta autoridad determina que las observaciones no fueron desvirtuadas por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a sus argumentos citados en las hojas 2 y 3 de su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, mencionado con anterioridad, mismos que ya fueron transcritos anteriormente en las páginas de la 30 y 31 del presente oficio, y en los que medularmente precisa que esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, así como a los argumentos vertidos en su escrito de respuesta al oficio de observaciones señalado en las páginas 30 y 31 de esta resolución, esta autoridad determina que las observaciones no fueron desvirtuadas por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a sus argumentos citados en las hojas 2 y 3 de su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, mencionado con anterioridad, mismos que ya fueron transcritos anteriormente en las páginas de la 30 y 31 del presente oficio, y en los que medularmente precisa que esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, así como a los argumentos vertidos en su escrito de respuesta al oficio de observaciones señalado en las páginas 30 y 31 de esta resolución, esta autoridad determina que las observaciones no fueron desvirtuadas por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a sus argumentos citados en las hojas 2 y 3 de su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, mencionado con anterioridad, mismos que ya fueron transcritos anteriormente en las páginas de la 30 y 31 del presente oficio, y en los que medularmente precisa que esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, así como a los argumentos vertidos en su escrito de respuesta al oficio de observaciones señalado en las páginas 30 y 31 de esta resolución, esta autoridad determina que las observaciones no fueron desvirtuadas por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

16

Del análisis a sus argumentos antes transcritos se precisa lo siguiente:

La contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su carácter de sociedad controladora se ubicó en el supuesto del segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007, toda vez que sus sociedades [REDACTED] entre otras, fueron fusionadas por [REDACTED] según consta en instrumento notarial número 36,446, volumen 880, de fecha 18 de octubre de 2007, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, fusiones que surrieron efectos legales al 31 de octubre de 2007, teniendo la obligación de sumar a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior a aquel en que ocurrió la fusión, es decir 2006, el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que habían generado sus sociedades controladas desincorporadas y que a esa fecha aún tenían dichas pérdidas como pendientes de amortizar, máxime que dichas pérdidas habían sido restadas por la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] para la determinación del resultado fiscal consolidado correspondiente al ejercicio en el que las sociedades controladas las generaron, razón por la cual, y de conformidad con los preceptos anteriormente señalados, la contribuyente revisada, tiene la obligación de reconocer los efectos de desincorporación, y de aplicar el procedimiento especialmente establecido para ello, por lo que se ubica en el supuesto que establece el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007 la fusión se considera desincorporación.

En virtud de lo anterior, es clara la obligación a cargo de la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] de reconocer los efectos de desincorporación, entre otros, el previsto en el artículo 71, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, que a la letra señala, lo conducente:

Asimismo, es de enfatizar lo manifestado por la contribuyente [REDACTED] antes [REDACTED] en el sentido de que las pérdidas fiscales pendientes de disminuir por sus sociedades que se desincorporan:

"fueron amortizadas a la fecha de fusión, por lo que al momento de la desincorporación, mi representada no se ubicó en el supuesto contenido en el artículo 71 de la Ley del ISR referente a sumar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las sociedades que se desincorporan".

En relación con lo anterior, cabe señalar que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 71 de la mencionada Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, transcrita anteriormente, esto en que se desincorporaron las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] entre otras, por haberse fusionado con la señalada controlada [REDACTED] el 18 de octubre de 2007, la contribuyente revisada, estaba obligada a reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior, en declaración complementaria de dicho ejercicio, que en el caso que nos ocupa, sería ejercicio de 2006.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

17

Para ello, la disposición, señalada en el párrafo anterior señala, que la contribuyente revisada al situarse en el supuesto, debió sumar a la utilidad fiscal consolidada de dicho ejercicio, es decir, el de 2006, entre otros conceptos, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que las sociedades no se desincorporaron, en este caso por fusión, tuvieron derecho a disminuir al momento de la desincorporación, y hace un especial énfasis al señalar, que para estos efectos, sólo se considerarían aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la o las sociedades que se desincorporan para determinar el resultado fiscal consolidado.

Es decir, el monto de las pérdidas fiscales que generaron las sociedades controladas fusionadas en el propio ejercicio de 2006 por importe \$8,864,802 y \$37,967,597, cumplen con el requisito que se señala en el párrafo anterior, al haber sido restadas en dicho ejercicio para determinar el resultado fiscal consolidado, lo cual resulta correcto, ya que dichas pérdidas de manera inmediata fueron amortizadas contra las utilidades fiscales obtenidas por otras sociedades controladas del grupo de consolidación en el mismo ejercicio, generando con ello el diferimiento del impuesto sobre la renta correspondiente a dichas utilidades fiscales en la parte que consolidaron, lo cual a todas luces constituye un diferimiento, mas nunca una omisión del impuesto.

Ahora bien, de los argumentos vertidos por la contribuyente revisada, en el sentido de que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar fueron aplicadas a la fecha de la fusión por las sociedades controladas desincorporadas, que obtuvieron en su ejercicio fiscal irregular y comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2007 (situación que quedó debidamente acreditada en la página 25 del presente oficio), contra la utilidad fiscal de \$3,106,174.218 y \$477,670,532, respectivamente, como se observa en sus declaraciones presentadas el 31 de diciembre de 2007 y 22 de julio de 2008, con número de operación 9104969 y 9879286, respectivamente, documentación que obra en el expediente administrativo abierto de la contribuyente en revisión de conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, como sigue:

Ahora bien, en el resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2007 la sociedad controladora actualmente, tampoco consideró dichas utilidades de forma tal que nulificarán el efecto de la consolidación fiscal, tal y como se puede observar en el dictamen fiscal de 2007, en su anexo "34-EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE- INFORMACIÓN SOBRE CONSOLIDACIÓN", presentado el 11 de julio de 2008, con folio de recepción 54823, y que se hace referencia en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, como a continuación se observa:

[...]

De lo anterior, se desprende que las sociedades controladas desincorporadas al haber terminado su ejercicio fiscal irregular correspondiente al año de 2007, el 31 de octubre de 2007, determinaron una utilidad fiscal que amortizaron con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores; sin embargo, esas utilidades fiscales no fueron sumadas por la sociedad controladora para determinar el resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2007.

Por lo que, sólo si dichas utilidades hubieran sido sumadas al resultado fiscal consolidado del ejercicio 2007 por la sociedad controladora, concordaría con su argumento de no sumar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las citadas sociedades controladas, situación que no se dio en los términos señalados, por lo que la irregularidad subsiste en los términos precisados.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

18

De no revertir la sociedad controladora ACTUALMENTE el efecto de haber consolidado las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas desincorporadas en el ejercicio de 2006, tal y como lo establece el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta antes citada, indebidamente podría obtener un beneficio fiscal, ya que al ser restadas de manera inmediata contra las utilidades fiscales obtenidas por las sociedades del grupo en el ejercicio de 2006, obtuvieron un resultado fiscal consolidado menor en \$2,183,572,399 y en consecuencia pagar un impuesto sobre la renta disminuido y al no revertirlas, para determinar la utilidad fiscal consolidada de 2006, como lo marca la norma específica, jamás pagarán el impuesto sobre la renta diferido.

Cabe recalcar, que el régimen de consolidación permite a nivel consolidado la disminución de las pérdidas fiscales obtenidas por una sociedad del grupo, de las utilidades fiscales obtenidas por otra sociedad de dicho grupo en el mismo ejercicio, y tal disminución implica que el impuesto que se causa respecto de las utilidades obtenidas se difiera y el mismo se pueda pagar en el momento en que la sociedad controladora se ubique en algún supuesto de pago del impuesto diferido.

Por lo anterior, a efecto de evitar que el impuesto sobre la renta que se hubiera diferido deje de ser pagado por la sociedad controladora, el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, establece la obligación que tiene dicha sociedad controladora de reconocer la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en la declaración complementaria de dicho ejercicio es por ello, por lo que la citada sociedad controladora debe de adicionar a la utilidad fiscal consolidada o disminuir de la pérdida fiscal consolidada, del ejercicio de que se trate, las pérdidas fiscales obtenidas en lo individual por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, cuando éstas no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y hubieran sido restadas en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, procedimiento con el cual evita el efecto del diferimiento obtenido por la aplicación de las pérdidas.

Toda vez que, actualmente para determinar el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006, restó las pérdidas fiscales que generaron sus sociedades controladas desincorporadas, por fusiones en el ejercicio de 2007, en el ejercicio de 2007, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debió adicionarlas al resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 ya que a dicha fecha no habían sido disminuidas por las sociedades controladas desincorporadas en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y fueron restadas en el propio ejercicio de 2006 para determinar la utilidad fiscal consolidada de la contribuyente, ya que dicho procedimiento no es opcional, más bien obligatorio.

Por lo antes expuesto, esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, determina que actualmente omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir el 31 de diciembre de 2006, de sus sociedades controladas en cantidad de \$1,867,582,399 y \$383,461,396, respectivamente, que en suma ascienden a \$2,251,044,796, actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007, según instrumento notarial número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tokentino, Notaria número cincuena y cinco del Distrito Federal, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, procedimiento que debió llevar a cabo de conformidad con lo establecido el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno, párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 381 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

19

De la inserción anterior, esa H. Sala podrá verificar que mi representada a efecto de concluir que mi litigante omitió reconocer los efectos derivados de la desincorporación por fusión de sus sociedades controladas y consideró lo siguiente:

- ✓ Que la accionante es una empresa controladora que tributa bajo el régimen especial de consolidación fiscal;
- ✓ Que en el ejercicio 2006, a efecto de calcular el resultado fiscal consolidado, hoy aplicó las pérdidas fiscales generadas por sus controladas en cantidad total de \$2'251'044,786.13, actualizadas a diciembre de 2006;
- ✓ Que el 18 de octubre de 2007, las empresas controladas en cita, se fusionaron, subsistiendo la controlada;
- ✓ Que con motivo de la fusión de sus controladas, la actora debió reconocer los efectos de la desincorporación del régimen en términos del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado (2006);
- ✓ Que la demandante sí se ubicó en el supuesto establecido en el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del citado artículo 71, dado que al momento en que ocurrió la fusión de sus empresas controladas, éstas tenían pérdidas fiscales pendientes de amortizar en términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, máxime cuando dichas pérdidas habían sido restadas por mi contraria, ahora para la determinación del resultado fiscal consolidado correspondiente al ejercicio en el que las sociedades controladas las generaron;
- ✓ Que en el caso de los argumentos vertidos durante el procedimiento fiscalizador en el sentido de que las pérdidas fiscales de las referidas sociedades controladas, fueron amortizadas al momento en que surtió efectos legales la fusión correspondiente (31 de octubre de 2007), debe observarse que con la finalidad de reconocer los efectos de la desincorporación de dichas empresas controladas, entonces debían sumarse las utilidades reportadas por éstas en el resultado fiscal consolidado relativo al ejercicio fiscal 2007; y

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

20

- ✓ Que de adoptar el criterio propuesto por mi contraria, se generaría un beneficio fiscal indebido, consistente en el no pago del impuesto diferido conforme a la propia mecánica del régimen de consolidación fiscal.

Ahora bien, tal como fue resuelto por ésta Administración en el recurso administrativo de revocación cuya resolución constituye la impugnada en el juicio en que se actúa, los argumentos que nuevamente propone la enjuiciante devienen infundados, tal como fue anunciado con antelación, lo cual se demuestra al tenor siguiente:

A. Es ineficaz el argumento de mi opositora en el que solicita una interpretación histórica del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque supuestamente no previene como supuesto expreso de desincorporación, el de fusión de empresas controladas cuando la subsistente o la naciente permanezca en el régimen de consolidación, y que por tanto debe prevalecer tácitamente el contenido del artículo 57-J, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente hasta 2001).

En efecto, en principio resulta menester precisar que el artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, establece a la letra lo siguiente:

Artículo 5º.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa."

{Énfasis añadido}

Del precepto citado, se advierte que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y excepciones a las mismas, son de aplicación estricta, y que se consideran como disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares, aquéllas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

Ahora bien, para desentrañar el alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución, y las excepciones a ésta, las respectivas hipótesis jurídicas deben aplicarse en forma estricta y, la interpretación del resto de las disposiciones fiscales podrá realizarse aplicando cualquier otro método de interpretación jurídica.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

21

Ante tal disposición, se estima conveniente señalar que la interpretación jurídica descansa en dos etapas, a saber:

- ✓ **La primera etapa de la interpretación jurídica** tiene por objeto precisar cuál es el significado de la norma que se estudia, para lo cual debe acudir a su análisis gramatical, sistemático, histórico, causal y teleológico, entre otros, lo que permite determinar con precisión qué establece la norma, cuál es la proposición que ella contiene, cuál es su exacto significado y, por ende, dejar al descubierto la voluntad e intención del legislador; y
- ✓ **Una vez concluida esa etapa debe abordarse la siguiente**, a través de la cual se aplicará o concretará a un caso específico, la hipótesis cuyo sentido se desentrañó, para lo cual **debe atenderse a otros criterios interpretativos**, que se encuentran diseminados en el orden jurídico, que permiten que prevalezca la estructura orgánica del sistema normativo, y su aplicación no puede tener lugar cuando se desentraña el significado de la disposición de observancia general sino, únicamente, cuando se realiza su aplicación al caso concreto.

Entre esos criterios interpretativos destacan:

- A las hipótesis jurídicas que prevén excepciones, el intérprete debe darles una **aplicación estricta**, es decir, circunscrita a la situación específicamente regulada por el legislador; por lo que cuando la norma jurídica está prevista para regir una específica situación de hecho, el que pretenda aplicar la norma al caso concreto está constreñido a realizarlo únicamente en el caso de que se actualice esa o esas precisas circunstancias;
- **La ley especial prevalece sobre la general**. Una vez desentrañado el alcance de las normas general y especial, que aparentemente regulan una misma situación, la especial será la aplicable al caso concreto, siempre y cuando éste se ubique en la precisa hipótesis que se regula por ella, aun cuando pudiera encuadrar en lo dispuesto en la diversa norma general;
- **Cuando la ley no distingue no es dable al intérprete distinguir**. Precisado el alcance de la disposición, solamente podrá aplicarse a los casos concretos que encuadran en ella, mas no a situaciones que no se rigen por la misma;
- **El que está facultado por la norma para realizar lo más, está facultado para realizar lo menos**, por lo que una vez desentrañado el alcance de la norma, el intérprete podrá aplicarla a casos no previstos en ella, cuando la autorización que contiene lleva



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

22

implícita la potestad para realizar otros que, por su naturaleza y por orden lógico, se encuentran inmersos en aquella autorización;

- Cuando el caso concreto se asimila en lo accesorio y no en lo esencial al supuesto de hecho previsto en la norma, tendrá lugar una aplicación negativa de la consecuencia jurídica que prevé esta última; procedimiento lógico conocido como **interpretación en sentido contrario o a contrario sensu**.

Ahora bien, existen diversos criterios para realizar esta segunda etapa de la interpretación de una hipótesis jurídica, debiendo destacar que la distinción en comentario no queda en una mera apreciación teórica, pues trasciende a la aplicación cotidiana del derecho y tiene entre otras finalidades, entre las que destaca la de distinguir entre los métodos que se utilizan en el procedimiento interpretativo abstracto cuyo objeto es desentrañar el significado de una norma jurídica y los criterios que orientan al procedimiento interpretativo concreto, el cual tiene como propósito aplicar al caso preciso la hipótesis jurídica cuyo justo alcance se fijó.

En ese orden de ideas, ante lo dispuesto en el transcrito artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, es menester precisar que la circunstancia de que sean de aplicación estricta las disposiciones que establezcan el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una determinada contribución, o las excepciones a las cargas a los particulares, tiene su origen en que tales normas, por su peculiar repercusión a la esfera jurídica de los gobernados, constituyen auténticas normas de excepción que conforman regímenes jurídicos especiales, donde sólo los sujetos que realizan el hecho imponible deben contribuir al gasto público, y **dentro de esos sujetos únicamente los que se ubican en la precisa hipótesis de exención, se encuentran eximidos de su pago, sin que sea válido realizar una aplicación extensiva o restrictiva de las respectivas leyes**.

Por todo lo anterior, lo dispuesto en el referido precepto del código tributario federal conlleva a que una vez determinado el justo alcance de las respectivas hipótesis jurídicas, acudiendo a los métodos de interpretación literal, sistemático, causal-teleológico e histórico, entre otros, el intérprete, ya sea un particular, la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional, no podrán, en manera alguna, aplicar las normas en forma restrictiva o extensiva, ubicando a un gobernado cuya situación de *facto* no encuadra en el hecho imponible, como sujeto de la respectiva contribución, o siguiendo un diverso procedimiento para determinar la base de ésta, o aplicando una tasa diferente, a la que específicamente se disponga para ese contribuyente en la norma aplicable.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 383 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

23

Dicho en otras palabras, para conocer el verdadero alcance de una norma que establezca los elementos de una contribución, debe acudir, por principio, a su interpretación literal o gramatical, en caso de que por las palabras utilizadas, técnicas o de uso común, no se genere certidumbre sobre tales elementos, será necesario acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del legislador; así, una vez fijado el significado de la norma, al realizar su aplicación al caso concreto, ésta se llevará a cabo en forma estricta y tendrá lugar solamente cuando las circunstancias de hecho encuadren dentro de la norma.

Es decir, el que el legislador haya establecido la interpretación estricta de tales normas, no impide al intérprete desentrañar su verdadero alcance, ante su falta de claridad o el uso de palabras técnicas o de uso común, acudiendo a los métodos de interpretación jurídica, pues su efecto es constreñir a éste a realizar la aplicación de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en ella.

Con base en lo antes expuesto, en el caso que nos ocupa, lo establecido en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, resulta ser una disposición que establece cargas a los particulares, puesto que la misma se encuentra relacionada con los sujetos y base del impuesto sobre la renta de las empresas que determinan su resultado fiscal consolidado, y de manera específica, respecto a los efectos de la desincorporación de sociedades controladas.

Por lo tanto, es evidente que lo establecido en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, debe ser aplicado de manera estricta.

En ese contexto, es dable precisar a esa H. Sala que la actora efectúa una interpretación incorrecta del contenido de los párrafos segundo y noveno del citado precepto legal, mismos que establecen a la letra lo siguiente:

"Artículo 71.

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

24

por el factor de 1.3889. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación."

[Énfasis añadido]

De lo establecido en los párrafos antes transcritos, es claro advertir que en el caso de fusión de sociedades, el legislador estableció que se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, y por lo tanto, en tal tenor, la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para ello, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores que fueron amortizadas en la consolidación fiscal, mismas que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado.

Esto es, el noveno párrafo del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, de manera clara, establece que cuando se realice una fusión de sociedades, se considera que las sociedades fusionadas quedan desincorporadas de régimen de consolidación fiscal, **sin establecer distinción alguna respecto a que la fusión se realice entre empresas que forman parte del mismo grupo que consolida sus resultados fiscales o con una empresa ajena al grupo.**

Bajo tal situación, es evidente que los argumentos de la demandante resultan infundados, en virtud de que la interpretación propuesta por ésta contraviene el primer párrafo del artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, pues se argumenta que el noveno párrafo del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, no puede considerarse que actualiza la figura de la desincorporación por el hecho de que la fusión se realizó entre empresas que formaban parte del mismo grupo de consolidación, situación, la cual, en modo alguno estableció el legislador.

En tal sentido, es claro que tal situación resulta totalmente alejada a derecho, dado que el noveno párrafo del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, de ningún modo



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

25

hace distinción alguna en relación al supuesto de fusión entre sociedades que pertenecen al mismo tipo de consolidación, y que por esa situación, se deba entender que no existe desincorporación, sino por el contrario, la norma de referencia, de manera genérica establece que cuando exista fusión de sociedades, se entenderá que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión.

Por lo tanto, de una aplicación estricta del citado precepto legal, se obtiene que **en toda fusión de sociedades, las empresas controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, quedarán desincorporadas del régimen de consolidación fiscal, con independencia de que la empresa que surja o subsista permanezca en el régimen.**

Más aún, y a efecto de aportar elementos para reforzar la defensa del acto inicialmente recurrido, se estima necesario observar lo establecido en el doceavo párrafo del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, mismo que establecía lo siguiente:

"En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo"

De lo anterior, se advierte de manera clara y precisa, que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el ejercicio de 2001, cuando existía fusión de sociedades entre empresas del mismo grupo de consolidación, se consideraba que no existía desincorporación, puesto que las sociedades disueltas habían sido absorbidas por otra u otras controladas del mismo grupo de consolidación.

Sin embargo, dicha disposición tuvo vigencia hasta el ejercicio de 2001, puesto que a partir del ejercicio de 2002, con la publicación de la nueva —en aquel momento— Ley del Impuesto sobre la Renta y la consecuente abrogación de la Ley vigente hasta 2001, de conformidad con el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, **el tratamiento en fusión de sociedades cambió**, puesto que de manera expresa y de forma general, se considera que en el caso de fusión de sociedades, las empresas controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, **quedaran desincorporadas del régimen de consolidación fiscal.**

Lo anterior es así, puesto que de la lectura a la exposición de motivos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que entró en vigor a partir de 2002, se advierte que en un principio, se había determinado, de manera expresa que en el caso de fusión de sociedades, se consideraba que no existía desincorporación, cuando la controlada que se disuelve fuere absorbida totalmente por otra u otras



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

26

controladas de la misma controladora, o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo, tal y como se advierte de la siguiente transcripción:

Proceso legislativo:
EXPOSICION DE MOTIVOS
CAMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
México, D.F., a 5 de Abril del 2001
INICIATIVA DEL EJECUTIVO

EXPOSICION GENERAL DE LA PROPUESTA DE LA NUEVA HACIENDA PUBLICA DISTRIBUTIVA

Artículo 72. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser controlada, en forma individual.

La controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará según sea el caso a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, los conceptos especiales de consolidación que con motivo de la desincorporación de la sociedad que deja de ser controlada deben considerarse como efectuados con terceros, desde la fecha en que se realizó la operación que los hizo calificar como conceptos especiales de consolidación, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera decretado o acordado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.4706. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley a que se refieren las fracciones III y VII del artículo 69 de la misma Ley, no estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de dicha Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, los conceptos especiales de consolidación y las pérdidas de ejercicios anteriores correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán o restarán según corresponda, en la participación consolidable al cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél en que dicha sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.4706 se sumará en su totalidad.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 385 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

27

Los conceptos especiales de consolidación mencionados se actualizarán por el período comprendido desde el último mes del ejercicio en que se realizó la operación que dio lugar a dichos conceptos tratándose de las operaciones a que se refieren las fracciones I y IV del artículo 69 de esta Ley, y hasta el mes en que se realice la desincorporación. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones a que se refieren las fracciones III y VII del artículo 69 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate. Tratándose de los dividendos, éstos se actualizarán desde la fecha de su decreto o acuerdo y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. Los saldos de las cuentas y registros a que se refieren los párrafos séptimo y octavo de este artículo que se tengan a la fecha de la desincorporación, se actualizarán por el período comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se realice la desincorporación.

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación. Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución.

La sociedad controladora disminuirá del monto del impuesto al activo consolidado pagado en ejercicios anteriores que tenga derecho a recuperar, el que corresponda a la sociedad que se desincorpora, y en caso de que el monto del impuesto al activo consolidado que la controladora tenga derecho a recuperar sea inferior al de la sociedad que se desincorpora, la controladora pagará la diferencia ante las oficinas autorizadas, dentro del mes siguiente a la fecha de la desincorporación. Para estos efectos, la controladora entregará a la controlada que se desincorpora una constancia que permita a esta última la recuperación del impuesto al activo que le corresponda.

La controladora comparará el saldo del registro de utilidades fiscales netas de la controlada que se desincorpora con el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas. En caso de que este último fuera superior al primero se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente. Si por el contrario el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas fuera inferior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.4706. La controladora, en este último caso, podrá tomar una pérdida fiscal en los términos del artículo 61 de esta Ley por un monto equivalente a la utilidad acumulada, en la declaración del ejercicio siguiente a aquél en que se reconozcan los efectos de la desincorporación. El saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas se disminuirá con el saldo del mismo registro correspondiente a la controlada que se desincorpora.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

28

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, la controladora comparará el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la controlada que se desincorpora con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada. En caso de que este último sea superior al primero sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la controlada que se desincorpora. Si por el contrario el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior al de la controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.4706 y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la controlada que se desincorpora, hasta llevarla a cero.

En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora, o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo.

[Énfasis añadido]

Sin embargo, la iniciativa del ejecutivo fue modificada mediante el dictamen de 29 de diciembre de 2001, en el cual se determinó, por lo que se refiere al régimen de consolidación fiscal, que cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan, y en el caso de que la sociedad que desaparezca sea la controladora, se considerará que existe desconsolidación.

Lo anterior, fue plasmado de la siguiente manera:

Proceso legislativo:
DICTAMEN/ORIGEN
DICTAMEN
México, D.F., a 29 de Diciembre de 2001.

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I y 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por conducto de esta H. Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de "Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales", misma que fue turnada el jueves 5 de abril, 2001, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

29

Esta Comisión que suscribe con base en las facultades antes señaladas, se abocó al análisis de la iniciativa de Decreto del Ejecutivo, determinándose por parte de la Mesa Directiva que lo más conveniente para su adecuado dictamen era el de separarla por temas específicos, dado lo amplio y diverso de su contenido.

En tal sentido, en el presente dictamen se aborda lo relativo a los Artículos Primero y Segundo de la Iniciativa de Decreto antes citado referentes a la expedición de una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de sus correspondientes disposiciones transitorias.

Por acuerdo de la Comisión de Hacienda se constituyó un grupo de trabajo con diputados integrantes de la Comisión y aquellos otros legisladores que manifestaron su interés por participar. Para tal efecto se inscribieron un total de 26 Diputados, de los cuales 10 pertenecen al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 6 al Partido Acción Nacional, 7 al Partido de la Revolución Democrática, y uno por cada uno de los siguientes Grupos Parlamentarios: Partidos Verde Ecologista de México, Sociedad Nacionalista y del Trabajo.

Desde su instauración a fines de mayo, se llevaron a cabo un total de 20 sesiones con una asistencia promedio de 7 Diputados por reunión, en las que se recibió a diversas representaciones sindicales entre las cuales estuvieron el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el de Telefonistas de la República Mexicana, de los Trabajadores del IMSS y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores; también se recibió al Consejo Nacional Agropecuario y a la Confederación Nacional Ganadera, entre otras organizaciones gremiales.

Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Confederación Patronal de la República Mexicana y de igual forma, la Industria Nacional de Autopartes, el Movimiento Unificado de Comerciantes de los Mercados Públicos de la República Mexicana, además diversos centros de investigación y enseñanza superior.

Se contó, por otro lado, con la participación activa de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, quienes proporcionaron toda aquella información técnica y jurídica que permitió profundizar y aclarar diversos cuestionamientos que se presentaron acerca de la iniciativa en estudio.

Derivado de la complejidad y amplitud de la parte relativa a los regímenes especiales de tributación, se optó por crear un grupo específico dedicado al análisis y evaluación de la propuesta relativa a estas actividades. Dicho grupo se integró por 14 Diputados de diversos Grupos Parlamentarios: 7 del PRI, 4 del PAN y 3 del PRD.

Realizaron un total de 6 reuniones de trabajo en las cuales se atendieron en audiencia a diversas organizaciones del sector agropecuario y del autotransporte, principalmente provenientes del interior



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

30

del país, mismas que convergieron en la presentación de 6 propuestas específicas que se analizaron por este grupo.

De la misma forma, para la elaboración del presente dictamen se tomaron en consideración diversas iniciativas, propuestas y estudios que hicieron llegar tanto los Grupos Parlamentarios, como Diputados en lo individual; Congresos Locales de varias entidades, así como institutos, cámaras y asociaciones, mismas que fueron atendidas por los grupos de trabajo.

Conforme a los resultados de estos dos grupos de trabajo y de las deliberaciones y el análisis de los miembros de esta Comisión de Hacienda reunidos en pleno, se presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

ANTEPROYECTO DE DICTAMEN

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

ESCRIPCION DE LA INICIATIVA

b) Propuestas de modificación a la iniciativa de Ley

De acuerdo a lo anterior, esta Dictaminadora ha considerado conveniente incorporar a la iniciativa analizada, como resultado de su evaluación y análisis, y en consideración a los diversos estudios, iniciativas y propuestas examinadas por el Grupo de Trabajo creado exprofeso, los siguientes cambios al proyecto de Ley, en el entendido de que, por lo extenso de los mismos, los textos legales propuestos, se presentan en el anexo que forma parte integral del presente dictamen:

Título I

Disposiciones Generales

Capítulo VI

Del Régimen de Consolidación Fiscal

El Régimen de Consolidación Fiscal surge en 1982 como resultado de la incorporación del Capítulo IV "De las sociedades mercantiles controladoras", dentro del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Desde entonces, el régimen ha sufrido diversas modificaciones y adecuaciones, algunas de las cuales fueron motivadas por los cambios que experimentaron otras disposiciones fiscales, destacando por su importancia, la entrada en vigor de la base nueva en sustitución de la base tradicional en la Ley Impuesto sobre la Renta, así como la mecánica para determinar el impuesto al Activo de manera consolidada y la Reforma Fiscal de 1999, en la cual se introdujo el concepto de participac consolidable (60% de la participación accionaria de la controladora en la controlada).



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 387 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

31

La incorporación del régimen de consolidación fiscal en la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, ha permitido la integración financiera, económica y organizacional de grupos de empresas con determinados intereses comunes o con ciertas similitudes que deciden actuar como un solo ente económico, con el objeto de optimizar sus procesos productivos y, consecuentemente, lograr una mayor competitividad y desarrollo como grupo en los mercados domésticos e internacionales.

Derivado de lo anterior, y después de realizar el análisis correspondiente de la Iniciativa de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de consolidación fiscal presentada por el Ejecutivo, esta Comisión, con la finalidad de simplificar la mecánica en la determinación del resultado fiscal consolidado, de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes de este régimen, así como de adecuarlo a las prácticas internacionales y ajustarlo con los cambios efectuados al régimen general de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, estima necesario realizar las siguientes adecuaciones:

a) Participación consolidable

b) Fusión de sociedades

Cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan y en el caso de que la sociedad que desaparezca sea la controladora, se considerará que existe desconsolidación.

(Énfasis añadido)

Bajo estas consideraciones, resulta totalmente claro y evidente que la intención del legislador fue determinar que cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan, y en el caso de que la sociedad que desaparezca sea la controladora, se considerará que existe desconsolidación, situación que quedó plasmada de manera clara e integral en el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir de 2002, por lo cual, será evidente para esa H. Sala, que el sentido que debe brindarse a esa norma es el que se desprende de su interpretación literal.

Así mismo cuando se tiene que hasta el ejercicio de 2001, si una sociedad controlada se fusionaba con el carácter de fusionada con un ente ajeno al grupo de consolidación, se actualizaba el supuesto de desincorporación, lo cual no tendría lugar si dicho acto se realizaba entre empresas del mismo grupo.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

32

Es decir, la modificación de dicho tratamiento para 2002 tuvo como objetivo el de calificar dentro de la figura de desincorporación precisamente a la fusión entre empresas del mismo grupo; en ese sentido, se puede afirmar que el noveno párrafo del artículo 71 es aplicable para las empresas que, siendo controladas, se fusionan con otras empresas del mismo grupo, no así como lo propone mi contraria.

Por lo tanto, es dable concluir que de la interpretación causal y teleológica de la norma en análisis, se desprende que el legislador lo que estimó relevante para efectos de considerar que ocurría la desincorporación del régimen de las empresas controladas, es que existiera una fusión de sociedades y desaparecieran las controladas como consecuencia de la misma; ello, con independencia de que surgiera o subsistiera una empresa que también formara parte de la consolidación fiscal, lo que sin duda evidencia lo infundado de los argumentos que se contestan, pues contrario a lo considerado por la enjuiciante, el artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en la época e los hechos, establece claramente que en todos los casos en que las empresas controladas desaparezcan con motivo de una fusión, se considerará que existe desincorporación.

Igualmente, es viable destacar a esa H. Sala que es infundado el argumento de mi opositora, el que indica que en el artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prevalece tácitamente el contenido del artículo 57-J, de la diversa Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2001, al hacer referencia expresa de que no existe desincorporación del régimen cuando con motivo una fusión de las sociedades controladas surge o subsiste una empresa que permanece dentro del grupo, pues el referido artículo 71, así como el anteproyecto de dictamen del que se originó su texto, es claro al respecto, siendo patente además que no puede subsistir tácitamente el contenido del artículo 57-J antes mencionado, máxime que éste fue abrogado junto con toda la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2001, tal y como se menciona en las disposiciones transitorias de la diversa Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de enero de 2002, mismas que se transcriben a continuación:

(Cambiar a minúsculas)

Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo segundo. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

33

I. La Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el artículo primero del presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero del 2002, salvo que en otros artículos del mismo se establezcan fechas de entrada en vigor diferentes.

II. Se aboga la Ley del Impuesto sobre la Renta de 30 de diciembre de 1980. El Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 29 de febrero de 1984, continuará aplicándose en lo que no se oponga a la presente ley y hasta en tanto no se expida un nuevo reglamento."

(Énfasis añadido)

Al respecto, es de observarse que el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición, define el concepto jurídico de abrogación en los siguientes términos:

Hojas 30 y 31.

"Abrogación. (Del latín abrogatio, del verbo abrogare abrogar, anular).

I. Es la supresión total de la vigencia y, por lo tanto, de la obligatoriedad de una ley.

II. El término abrogación tiene su origen en la Roma republicana. En ella se denominaba rogatio a la presentación de una ley ante los comicios; subrogatio era la adición o modificación de los preceptos de la ley; la anulación parcial de la ley tomaba el nombre de derogatio; y por último se llamaba abrogatio a la anulación completa de la ley.

III. En el lenguaje técnico-jurídico se sigue haciendo la distinción entre derogación y abrogación; refiriéndonos en el primer caso a la privación parcial de efectos de la ley y en el segundo a la privación total de efectos de ésta.

El CC a este respecto dispone (a. 9) que la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.

De este artículo se desprende (y la doctrina así lo ha señalado) que existen dos clases de abrogación y son:

1) Expresa cuando una nueva ley declara la abrogación de una ley anterior que regía sobre la misma materia que la nueva ley va a regular. En nuestro derecho el procedimiento generalmente usado para este tipo de abrogación es declarar en los artículos transitorios de la nueva ley que las disposiciones anteriores que contraríen a esta, quedan derogadas. Para algunos autores de aquí surge un problema



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

34

pues el juez habrá de buscar en todo el ordenamiento jurídico cuales son esas disposiciones que se oponen a la nueva ley. 2) Y tácita que resulta no de un texto legal expreso sino de la incompatibilidad total o parcial que existe entre los preceptos de la ley anterior y los de la posterior. Esto es lógico pero no se podrían aplicar ambas leyes a la vez y debe inferirse que es voluntad del legislador que se observe la segunda (lex posterior derogat priori). Puede suceder que la ley anterior tenga un campo de regulación mayor que el de la ley que va a entrar en vigor. En este caso la abrogación sólo se da en el límite de aplicación de la nueva ley (un ejemplo hipotético, si se promulgara un Código familiar no quedaría derogado todo el Código Civil sino sólo las disposiciones correspondientes al derecho de familia). Aunque la mayoría de las leyes tienen un período de vigencia indefinido, existen algunas que son promulgadas para hacer frente a ciertos acontecimientos de carácter excepcional y tienen vigor mientras perdure dicha circunstancia (leges ad tempus). Se entiende que para su abrogación no es necesaria, una nueva ley; bastando la terminación del Estado de emergencia que les dio origen.

El a. 10 del CC establece que contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Por lo tanto en México la costumbre no puede abrogar a la ley.

Norma fundamental en materia de abrogación es la del inciso f) del a. 72 de la Constitución que dispone que en la derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación."

(Énfasis añadido)

Al amparo de las premisas que anteceden, y ante la abolición de la ley que contenía el artículo 57-J referido, es técnica y jurídicamente imposible que subsista su contenido de manera tácita. Más aún cuando en el caso concreto incluso dicha subsistencia no se configura, toda vez que el artículo 71, párrafo noveno, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado, previene claramente que se configura la desincorporación de empresas controladas cuando con motivo de la fusión desaparecen, sin que el legislador haya hecho una excepción al respecto.

En consecuencia, es infundado el concepto de impugnación que se contesta, en el sentido de que debía prevalecer el criterio contenido en el artículo 57-J, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, dado que esa norma fue sustituida por el artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente ejercicio que fue revisado, cuya aplicación es estricta, y establece específicamente que se configura la desincorporación del régimen de consolidación fiscal cuando desaparecen las empresas controladas con motivo de una fusión.

De conformidad con lo expuesto, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 389 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

35

Resulta infundado el argumento de la incoante en el que indica que no debía reconocer los efectos de la desincorporación de sus controladas y porque al momento en que surtió efectos legales la fusión de las mismas, no tenían pérdidas fiscales pendientes de disminuirse.

En efecto, en primer lugar, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que a continuación se transcribe:

"Artículo 71. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual.

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aqué en el que dicha sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.3889 se sumará en su totalidad.

Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

36

ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aqué en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate. Tratándose de los dividendos, éstos se actualizarán desde la fecha de su pago y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad, y los saldos de la cuenta y el registro a que se refieren los párrafos séptimo y octavo de este artículo que tengan a la fecha de la desincorporación, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se realice la desincorporación.

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación. Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución.

La sociedad controladora disminuirá del monto del impuesto al activo consolidado pagado en ejercicios anteriores que tenga derecho a recuperar, el que corresponda a la sociedad que se desincorpora, y en el caso de que el monto del impuesto al activo consolidado que la controladora tenga derecho a recuperar sea inferior al de la sociedad que se desincorpora, la sociedad controladora pagará la diferencia ante las oficinas autorizadas, dentro del mes siguiente a la fecha de la desincorporación. Para estos efectos, la sociedad controladora entregará a la sociedad controlada que se desincorpora una constancia que permita a esta última la recuperación del impuesto al activo que le corresponda.

La sociedad controladora comparará el saldo del registro de utilidades fiscales netas de la sociedad que se desincorpora con el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas. En caso de que este último fuera superior al primero se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente. Si por el contrario, el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas fuera inferior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889. La controladora, en este último caso, podrá tomar una pérdida fiscal en los términos del artículo 61 de esta Ley por un monto equivalente a la utilidad acumulada, la cual se podrá disminuir en la declaración del ejercicio siguiente a aqué en que se reconozcan los efectos de la desincorporación. El saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas se disminuirá con el saldo del mismo registro correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora.

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad controladora comparará el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad controlada que se desincorpora con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada. En el caso de que este último sea superior al primero sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora. Si por el contrario el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior al de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889 y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora, hasta llevarla a cero.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

37

En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación.

Las sociedades que se encuentren en suspensión de actividades deberán desincorporarse cuando esta situación dure más de un año. Cuando por segunda ocasión en un periodo de cinco ejercicios contados a partir de la fecha en que se presentó el aviso de suspensión de actividades por primera ocasión, una sociedad se encuentre en suspensión de actividades, la desincorporación será inmediata.

Cuando la sociedad controladora deje de determinar su resultado fiscal consolidado estará a lo dispuesto en este artículo por cada una de las empresas del grupo incluida ella misma.

En el caso en que el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto correspondiente dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se efectúe la desconsolidación. Tratándose del caso en que el grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, la sociedad controladora enterará el impuesto derivado de la desconsolidación dentro del mes siguiente a la fecha en que obtenga la autorización para dejar de consolidar.

Las sociedades controladoras a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Cuando el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la controladora deberá presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

En el caso en que el grupo hubiera optado por dejar de consolidar su resultado fiscal con anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que surtió efectos la autorización de consolidación, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto derivado de la desconsolidación, con los recargos calculados por el periodo transcurrido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber consolidado en los términos de este Capítulo y hasta que el mismo se realice. Para estos efectos, el Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general.

Cuando durante un ejercicio se desincorporen una o varias sociedades cuyos activos en su totalidad representen el 85% o más del valor total de los activos del grupo que consolide fiscalmente al momento de la desincorporación, y este hecho ocurra con anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que el grupo empezó a consolidar su resultado fiscal, se considerará que se trata



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

38

de una desconsolidación, debiéndose pagar el impuesto y los recargos en los términos establecidos en el párrafo anterior. Para los efectos de este párrafo, el valor de los activos será el determinado conforme al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo.

En el caso en que la sociedad controladora continúe consolidando a una sociedad que deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley por más de un ejercicio, hubiera o no presentado el aviso, deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas y enterar el impuesto y los recargos conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

La sociedad controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 72 de esta Ley, deberá desconsolidar y enterar el impuesto diferido por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal en los términos de este artículo.

En caso de que con anterioridad a la desincorporación de una sociedad se hubiera efectuado una enajenación parcial de acciones de dicha sociedad, la parte de los dividendos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo que se adicionará a la utilidad fiscal consolidada o se disminuirá de la pérdida fiscal consolidada será la que no se hubiera disminuido en la enajenación referida, en los términos del artículo 73 de esta Ley."

(Énfasis añadido)

El precepto legal de referencia establece —entre otros supuestos— el reconocimiento que deben hacer las empresas controladoras cuando ocurre la desincorporación de sus empresas controladas.

Ahora bien, atento al párrafo segundo del numeral en comento, el reconocimiento de los efectos derivados de la desincorporación de sociedades controladas por parte de la controladora, consiste en que al cierre del ejercicio inmediato anterior, presente declaración complementaria de dicho ejercicio, sumando o restando, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores en que hayan incurrido sus sociedades controladas y que se hubieren aplicado en la consolidación fiscal, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación.

Es decir, **al haber concluido los beneficios de la consolidación fiscal respecto a las empresas controladas que se desincorporan, se debe pagar el impuesto que se había diferido durante todo el tiempo que duraron en la consolidación las empresas que se desincorporan del grupo.**



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

41

En tal virtud, si la demandante pretende acreditar que al momento de la desincorporación de las sociedades [redacted] y [redacted] éstas aplicaron las pérdidas fiscales pendientes de disminuir en lo individual contra sus utilidades del ejercicio 2007, debe manifestarse que tal afirmación resulta carente de todo sustento jurídico, pues de lo expresado con anterioridad se advierte que **únicamente hasta que la sociedad deja de ser controlada, tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales a nivel individual.**

Consecuentemente, si las empresas antes referidas presentaron declaraciones por el ejercicio de 2007, al ser este el ejercicio en el que se fusionaron y en el que debe entenderse que hubo desincorporación, debe concluirse que resulta falso que dichas pérdidas se hubieran disminuido al momento en que se llevó a cabo la fusión de las empresas [redacted] y [redacted] es decir, antes de que se hubiesen desincorporado con motivo de la fusión, pues se insiste, de conformidad con el primer párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la obligación de cumplir con las cargas fiscales de manera individual, únicamente se realiza en el momento en que existe la desincorporación, por lo que **es ilógico que mi contraria señale que la disminución de las pérdidas de dichas empresas se efectuó en el mismo momento en que se desincorporación éstas.**

Lo anterior, se traduce en que las empresas controladas y posteriormente fusionadas, el 18 de octubre de 2007, momento en que se llevó a cabo la fusión, si tenían pérdidas fiscales pendientes de amortizar individualmente, y por ende, mi opositora se encontraba obligada a reconocer los efectos derivados de la desincorporación de esas empresas.

Además, esa H. Sala podrá verificar que [redacted] y [redacted] aplicaron las pérdidas fiscales en cantidades respectivas de \$2,106,174,218.00, y \$477,670,532.00, ello, al momento en que cada una presentó su declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2007, los días 31 de diciembre de 2007, y 22 de julio de 2008, razón por la cual se advierte que el 18 de octubre de 2007, fecha en la cual se celebró la fusión de esas sociedades entonces controladas, si tenían pérdidas fiscales pendientes de disminuir.

En otras palabras, si las pérdidas fiscales fueron aplicadas por [redacted] y [redacted] el 31 de diciembre de 2007 y 28 de julio de 2008, respectivamente, es patente que al día 18 de octubre de 2007, o el día 31 de ese mismo mes y año, dichas empresas tenían pérdidas fiscales pendientes de disminuir.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

42

Concatenado a lo anterior, es infundada la afirmación de la enjuiciante en el sentido de que al momento en que se efectúa la desincorporación en el caso concreto, es cuando **surte efectos la fusión** de las empresas controladas.

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 71, primero y noveno párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, constituye la legislación especial aplicable tratándose de la desincorporación de sociedades controladas, por lo que si en la especie el artículo establece expresamente que **"En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión"**, entonces es evidente que el legislador refirió que se configura la desincorporación, al momento en que **haya nacido a la vida legal la fusión, esto es, a partir de que se concrete el acto jurídico relativo, no a partir de que surta efectos frente a terceros**, pues dicho surtimiento de efectos tendría como propósito garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las fusionadas frente a terceros, mas no así el de determinar la época del nacimiento de las nuevas obligaciones fiscales derivadas de la fusión.

Sirve de apoyo a las premisas expuestas, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 91/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época: Décima Época, Registro: 2004913, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a./J. 91/2013 (10a.), Página: 333

FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. EN MATERIA FISCAL, SURTE EFECTOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO O CONVENIO RESPECTIVO. La fusión es un negocio corporativo (exclusivo de sociedades) de carácter complejo y naturaleza contractual, desarrollado en diversas etapas sucesivas y cuyos efectos se traducen en la sucesión universal del activo y del pasivo de la o las sociedades fusionadas en favor de la fusionante, lo que implica el paso y la adición de los socios de aquéllas a los de ésta; además, genera la extinción de la o las fusionadas, ya sea para incorporarse a una existente (fusión por incorporación) o para integrar y constituir una nueva (fusión por integración). Ahora, si bien es cierto que la naturaleza del acto de fusión es eminentemente mercantil, según se advierte de los artículos 222 a 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyos efectos para con los acreedores de las sociedades participantes y relaciones jurídicas de índole comercial, siguen surtiéndose tres meses después de su inscripción en el Registro Público de Comercio, también lo es que, en materia fiscal, es distinto, porque en ésta la legislación pretende que el fisco tenga conocimiento de determinados hechos atendiendo a la realidad económica y financiera de la empresa desde que se realiza la fusión. Así, de los artículos 11, 14, fracción IX, 14-B, 32-A, fracción III, y 27 del Código Fiscal de la Federación, 19 y 20 de su reglamento, así como 14, párrafo antepenúltimo, 25, párrafos primero, tercero y cuarto, y 71 de la



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 393 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

43

Ley del Impuesto sobre la Renta, deriva que el legislador ha regulado los diversos efectos originados a partir de la eficacia jurídica interna de la fusión, es decir, los derechos y las obligaciones derivados del contrato o acuerdo de fusión válidamente adoptado, los que inician con una serie de actos para instrumentar la incorporación de bienes en la sociedad fusionante o en la que surja de la fusión, así como para que ésta continúe con las actividades de las fusionadas. Esto es, en el ámbito fiscal surgen diversas consecuencias y obligaciones con motivo de la firma del contrato o convenio de fusión, entre las cuales se encuentran la terminación anticipada del ejercicio de las fusionadas; la de solicitar autorización cuando se pretenda realizar una fusión dentro de los cinco años posteriores a que se hubiere llevado a cabo una anterior; las obligaciones que asumen los fedatarios públicos al protocolizar un convenio de fusión; las de dictaminar y presentar los avisos y declaraciones correspondientes, así como la actualización de supuestos de desincorporación o desconsolidación del régimen de consolidación fiscal. Tales aspectos regulados son parte de la realidad (económica y jurídica) de las empresas que participan en la fusión y no dependen de la inscripción del convenio en el Registro Público de Comercio, pues ocurren sin necesidad de que ésta se realice. Por tanto, en materia fiscal, la fusión surte efectos desde el momento en que se firma el contrato o convenio de fusión, derivado de la regulación que las disposiciones aplicables realizan de la eficacia y consecuencias que genera para las partes y los socios tal acto jurídico, salvo cuando haya existido oposición judicial en la vía sumaria por cualquier acreedor, siempre que hubiere sido declarada fundada.

Contradicción de tesis 452/2011. Suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 10 de julio de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos, en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalva Argüeros López. Tesis de jurisprudencia 91/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece.

(Énfasis añadido)

No obstante lo anterior, en el supuesto de que tal y como lo menciona mi opositora, la interpretación del artículo 71, noveno párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, condujera a considerar que el momento en que se configura la desincorporación por fusión de empresas controladas, es hasta que la fusión surte efectos legales, aún en esa suposición se encontraría obligada a reconocer los efectos de la desincorporación, pues de igual forma, sería hasta ese momento en que sus empresas controladas dejarían de serlo y, por ende, **hasta después de que hubiera efectos legales la fusión es que se encontrarían en aptitud de aplicar las pérdidas fiscales, nunca antes de la fusión o durante su tramitación, lo que trae como consecuencia el hecho de que al momento en que fue celebrada la fusión o surtió efectos legales, sus controladas tenían pérdidas fiscales pendientes de amortizar en lo individual.**



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

44

Ahora bien, por lo que se refiere al agravio de la incoante donde medularmente indica que "...la autoridad fiscalizadora confundió el momento en que deben de considerarse el monto de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir (de haber existido), esto es, el momento de dar a la fusión de las sociedades controladas, con el momento en que el citado monto debe de adicionarse o restarse de la utilidad o pérdida fiscal consolidadas (cierre del ejercicio inmediato al que se efectuó la fusión)...", debe destacarse a esa H. Sala que el mismo deviene infundado.

En efecto, la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, en el oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, señaló en la parte que interesa lo siguiente:

Foja 30

Del estudio a los argumentos manifestados por la contribuyente en su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, en relación a las observaciones dadas a conocer en el oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, respecto a que omitió sumar a su utilidad fiscal consolidada por el ejercicio sujeto a revisión, el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas fusionadas [redacted] en cantidad total de \$2,321,044,786.13 actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007 en el ejercicio posterior al de revisión, en el cual las citadas contribuyentes desaparecen y subsiste la sociedad controlada [redacted] según instrumento notarial número 36,446, volumen 380, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, el 18 de octubre de 2007, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, de conformidad con el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

Foja 34

En relación con lo anterior, cabe señalar que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 71 de la multicitada Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, transcrita anteriormente, año en que se desincorporaron las sociedades controladas [redacted] entre otras, por haberse fusionado con la señalada controlada [redacted] el 18 de octubre de 2007, la contribuyente revisada, estaba obligada a reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior, en declaración complementaria de dicho ejercicio, que en el caso que nos ocupa, sería ejercicio de 2006.

De lo anterior se advierte que la autoridad fiscalizadora consideró que la empresa controladora tenía que reconocer los efectos de la desincorporación, sumando las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que sus empresas controladas [redacted] y [redacted] tenían al momento en que se llevó a cabo la fusión, lo que pone de relieve que el argumento de la actora deviene infundado, al afirmar ésta que las

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

45

pérdidas fiscales que se refería la autoridad eran aquellas pendientes de disminuir al cierre del ejercicio 2006.

En ese tenor y dado que al momento en que se desincorporaron del régimen de consolidación fiscal sus empresas controladas [REDACTED] y [REDACTED]

[REDACTED] si tenían pérdidas fiscales pendientes de disminuir, es que devienen de infundados los agravios que se contestan.

C. Es ineficaz que aduzca la demandante que no existe precepto legal que la obligue a sumar las utilidades de las empresas controladas que aplicaron contra las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir como un efecto de la desincorporación por fusión.

Ciertamente, la autoridad fiscalizadora en la resolución impugnada en sede administrativa indicó que en caso de que la empresa controladora no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal 2007, la controladora debió sumar las utilidades de estas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

Lo anterior, fue plasmado a fojas 37 a 39 de la resolución combatida, donde se indicó textualmente lo siguiente:

Fojas 37 a 39

...
Ahora bien, en el resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2007 la sociedad controladora [REDACTED] acualmente [REDACTED] tampoco consideró dichas utilidades de forma tal que nulificarán el efecto de la consolidación fiscal, tal y como se puede observar en el dictamen fiscal de 2007, en su anexo "34-EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACIÓN SOBRE CONSOLIDACIÓN", presentado el 11 de julio de 2008, con folio de recepción 64813, y que se hace referencia en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, como a continuación se observa:

...
De lo anterior, se desprende que las sociedades controladas desincorporadas, [REDACTED] al haber terminado su ejercicio fiscal irregular correspondiente al año de 2007, el 31 de octubre de 2007, determinaron una utilidad fiscal que amortizaron con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores; sin embargo, estas utilidades fiscales no fueron sumadas por la sociedad controladora para determinar el resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2007.

Por lo que, sólo si dichas utilidades hubieran sido sumadas al resultado fiscal consolidado del ejercicio 2007 por la sociedad controladora, concordaría con su argumento de no sumar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las citadas sociedades controladas, situación que no se dio en los términos señalados, por lo que la irregularidad subsiste en los términos precisados.

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

46

De no revertir la sociedad controladora [REDACTED] ACTUALMENTE [REDACTED] el efecto de haber consolidado las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas desincorporadas [REDACTED] y [REDACTED] en el ejercicio de 2006, tal y como lo establece el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta antes citada, indebidamente podría obtener un beneficio fiscal, ya que al ser restadas de manera inmediata contra las utilidades fiscales obtenidas por las sociedades del grupo en el ejercicio de 2006, obtuvieron un resultado fiscal consolidado menor en \$2,183,572,399 y en consecuencia pagar un impuesto sobre la renta disminuido y al no revertidas, para determinar la utilidad fiscal consolidada de 2006, como lo marca la norma específica, jamás pagarán el impuesto sobre la renta diferido.

La inserción que antecede permite distinguir que la autoridad fiscalizadora no se encontraba obligada a citar precepto legal alguno por el cual se estableciera la obligación de la empresa controladora para el caso de que no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, de sumar las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizar en el resultado fiscal consolidado de ese ejercicio.

Lo anterior, porque en la resolución inicialmente recurrida no se establece como obligación para mi contraria que en caso de no revertir las pérdidas fiscales de las empresas controladas que se desincorporaron con motivo de la fusión, entonces se debían sumar utilidades de las empresas controladas en el resultado fiscal consolidado 2007, sino que se menciona dicha circunstancia a efecto de que se viera nulificado el beneficio derivado de la consolidación fiscal.

Es decir, atendiendo al principio de simetría fiscal, es que la fiscalizadora más que obligar a sumar las utilidades que se extinguieron con la amortización de las pérdidas fiscales generadas por las controladas [REDACTED]

[REDACTED] plasmó que incluso en su auditoría no observó que se hubieren reconocido los efectos de la desincorporación de las empresas controladas.

En otras palabras, no existe violación alguna al principio de legalidad, entendiendo como tal la adecuación de los supuestos legales con los hechos o razonamientos vertidos por la autoridad fiscalizadora, pues en el caso concreto, la omisión en la que consideró mi representada que incurrió la enjuiciante fue —entre otras— la de no sumar las pérdidas fiscales de sus empresas controladas que se desincorporaron del régimen de consolidación fiscal, ello en términos del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado, por lo que el



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 395 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

47

hecho de que la autoridad fiscalizadora hubiese mencionado que en dado caso mi opositora hubiera sumado las utilidades de sus controladas en el resultado fiscal consolidado de 2007, no implica omisión de la autoridad de fundar su resolución definitiva, puesto que ésta simplemente reflejó la necesidad de que la incoante reconociera los efectos derivados de la desincorporación de sus empresas controladas a efecto de no obtener un beneficio indebido derivado del diferimiento del impuesto que ha venido efectuando, destacando que el fundamento legal para cumplir con esa exigencia (reconocimiento de la desincorporación de empresas controladas) se encuentra en el multicitado artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Además, suponiendo sin conceder que fuera fundado el agravio planteado en el sentido de que no se citó en la resolución impugnada en sede administrativa, el precepto legal por el cual se estableciera la obligación de la empresa controladora para el caso de que no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado de ese ejercicio tendría que sumar las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizarse, se dice que tal vicio sería de naturaleza formal, por lo que en nada trascendería al sentido de la resolución impugnada, especialmente porque subsistirían plenamente los fundamentos y motivos reseñados en el resto de la resolución que hasta este momento se han analizado, es decir, **la presunta violación apuntada no implica que la actora no deba reconocer los efectos de la desincorporación de sus empresas controladas**

al haberse desincorporado del régimen de consolidación con motivo de la fusión, pues los hechos y el derecho en que se sustenta esa determinación prevalecen en el caso concreto, lo cual ha quedado evidenciado en los apartados que anteceden.

En efecto, lo expuesto es así, en la inteligencia de que esa H. Sala no debe perder de vista que el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, desarrolla el principio de presunción de legitimidad y conservación de los actos administrativos, que incluye lo que en la teoría del derecho administrativo se conoce como ilegalidades no invalidantes, respecto de las cuales, por supuesto, no procede declarar su nulidad sino confirmar la validez.

Se considera relevante en este punto, tener en consideración que el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece a la letra lo siguiente:

Artículo 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

48

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.

En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.

Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio.

(Énfasis añadido)

Esta norma permite aclarar que no toda omisión de formalidades o vicios del procedimiento tendrá como consecuencia la nulidad de la resolución; sino que **es necesario que tales omisiones o vicios afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada**, por lo que cualquier "vicio" que no cubra el requisito anterior, se ubicará en lo que se conoce como ilegalidades no invalidantes; es decir, es menester que dichos "vicios" ocasionen un perjuicio, porque de lo contrario, el concepto de anulación esgrimido, sería insuficiente y no para declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

49

En corolario de lo anterior, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/49, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Registro No. 171872. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Agosto de 2007. Página: 1138. Tesis: I.4o.A. J/49. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa

"ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE AFECTAN CON MOTIVO DE "ILEGALIDADES NO INVALIDANTES" QUE NO TRASCIENDEN NI CAUSAN INDEFENSIÓN O AGRAVIO AL PARTICULAR (CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). Si la ilegalidad del acto de autoridad no se traduce en un perjuicio que afecte al particular, resulta irrelevante tal vicio, en tanto que se obtuvo el fin deseado, es decir, otorgarle la oportunidad para que ofreciera pruebas y alegara lo que a su derecho conviniera. En consecuencia, es evidente que no se dan los supuestos de ilegalidad a que se refiere el artículo 238, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, si no se afectaron las defensas del particular, por lo que al no satisfacerse las condiciones legales para la eficacia de la ilegalidad en comento, resulta indebido declarar la nulidad, cuando la ratio legis es muy clara en el sentido de preservar y conservar actuaciones de la autoridad administrativa que, aunque ilegales, no generan afectación al particular, pues también debe atenderse y perseguir el beneficio de intereses colectivos, conducentes a asegurar efectos tales como una adecuada y eficiente recaudación fiscal, lo que justifica la prevención, clara e incondicional del legislador, en el sentido de salvaguardar la validez y eficacia de ciertas actuaciones; y es así que el artículo 237 del mismo código y vigencia, desarrolló el principio de presunción de legitimidad y conservación de los actos administrativos, que incluye lo que en la teoría del derecho administrativo se conoce como "ilegalidades no invalidantes", respecto de las cuales no procede declarar su nulidad, sino confirmar la validez del acto administrativo. Luego, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada y que ocasionen un perjuicio efectivo, porque de lo contrario el concepto de anulación esgrimido sería insuficiente y ocioso para declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada."

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 44/2004. Mauricio Chavero Blázquez y otros. 28 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Revisión contenciosa administrativa 80/2004. Director de Responsabilidades y Sanciones en la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal. 16 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

50

Revisión fiscal 113/2006. Subadministrador de lo Contencioso "3", en suplencia por ausencia de los Subadministradores de Resoluciones "1" y "2", de lo Contencioso "1" y "2" y del Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, este último en su carácter de autoridad demandada y como unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 10 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo directo 5/2007. Gustavo González Briseño. 28 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Al respecto, es preciso señalar a esa H. Sala que si bien el criterio jurisprudencial que se transcribe, se refiere a los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, no menos cierto es que los diversos artículos 50 y 51 respectivamente, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, reproducen integralmente el contenido de las primeras disposiciones en comento, por lo que el criterio que se cita debe ser considerado por esa H. Sala al momento de emitir la sentencia definitiva correspondiente, acorde con el artículo 217 de la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone a la letra lo siguiente:

No. Registro: 239,968. Tesis aislada. Materia(s): Común, Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 205-216 Cuarta Parte, Tesis: Página: 98 Genealogía: Informe 1986, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 92, página 69.

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. AUN CUANDO EL PRECEPTO INTERPRETADO POR ELLA SE ENCUENTRE DEROGADO, DEBE SEGUIRSE APLICANDO SI EL LEGISLADOR REPRODUJO ESA MISMA NORMA EN UN ORDENAMIENTO POSTERIOR. Si se derogó la ley en que aparece un precepto interpretado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el legislador lo reproduce en diverso ordenamiento, y lo destina a regir las mismas situaciones que en el anterior, el criterio adoptado subsiste con la misma fuerza obligatoria, y en consecuencia debe seguirse aplicando, pues la fuente que le da vida es el contenido de la norma que en el nuevo cuerpo legal, quizá tan sólo con otro número, seguirá produciendo idénticos efectos que en el pasado."

Amparo en revisión 8960/83. Rolando Luis Juárez Rocha. 17 de abril de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 397 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

51

(Énfasis añadido)

Por otro lado, también es dable destacar a esa H. Sala que resulta infundado el argumento donde indica mi coligante que adicionalmente, la autoridad fiscal carecía de legitimidad para determinar que en su caso, aquélla se encontraba obligada a adicionar las utilidades fiscales de las empresas contra las cuales se amortizaron pérdidas fiscales para efectos de la determinación de su resultado fiscal en 2007, especialmente cuando el objeto del procedimiento de fiscalización del cual deriva la resolución combatida se encontró limitado al ejercicio 2006, no así a uno diverso como el 2007.

Efectivamente, la revisión de gabinete número GSD9400235/11, tuvo por objeto el revisar la situación fiscal de la hoy accionante por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

Sobre esa premisa, a foja 77 de la resolución inicialmente recurrida, la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se determinó lo siguiente:

1.- Para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio en revisión, la contribuyente actualmente determinó su resultado fiscal consolidado en cantidad menor, toda vez que no consideró lo siguiente:

- a) Omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas fusionadas en cantidad de \$2,357,044,786.13 actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión efectuada el 28 de octubre de 2007, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, de conformidad con el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de 2007.

De la inserción digital anterior, así como de la lectura íntegra a la resolución recurrida, es viable apreciar que la fiscalizadora determinó la omisión de la empresa controladora de reconocer los efectos derivados de la desincorporación de sus empresas controladas, todo ello por lo que respecta al ejercicio fiscal 2006, sin que se desprenda que se haya establecido una obligación a cargo de la actora con respecto a un ejercicio fiscal diverso a aquel que constituyó el objeto de la revisión fiscal.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

52

No es óbice a lo anterior que a fojas 37 a 39 de la resolución impugnada en sede administrativa, se señalara que en caso de que la empresa controladora no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal 2007, la controladora hubiera sumado las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

Lo anterior, porque esa circunstancia no se estableció como una obligación a la demandante, sino como un elemento de la resolución que procura evidenciar que la controladora debía reconocer los efectos derivados de la desincorporación de sus controladas, de donde se sigue que la autoridad fiscalizadora subsumió en todo momento su actuación al ejercicio revisado determinando omisión únicamente por el ejercicio 2006, no así por el ejercicio 2007, como lo menciona inexactamente lo menciona mi contraria.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la Primera Sección de la Sala Superior de ese H. Tribunal ya se ha pronunciado en los términos que anteceden, al emitir la sentencia definitiva de 1° de septiembre de 2015, en el juicio contencioso administrativo 24030/10-17-02-4/824/12-S1-01-04, también promovido por [REDACTED] en la que fue resuelto lo siguiente:

Fojas 129 a 159

Ahora bien, conforme a la regulación específica que contenía la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal revisado (2002), tenemos que las características de dicho régimen se observan claramente del contenido del artículo 64 dicha ley, que establece:

De la norma anterior se desprende que se consideran sociedades controladoras las que reúnan los siguientes requisitos: que se trate de una sociedad residente en México; que sean propietarios de más del 50% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades controladas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras sociedades que a su vez sean controladas por la misma sociedad controladora y que en



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

53

ningún caso más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información.

Se establece que la sociedad controladora que opte por considerar su resultado fiscal consolidado, deberá determinarlo conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Ley y al resultado fiscal consolidado se le aplicará la tasa establecida en el artículo 10 de la Ley, en su caso, para obtener el impuesto a pagar por la sociedad controladora en el ejercicio.

Se señala que una vez ejercida la opción de consolidación, la sociedad controladora deberá continuar pagando su impuesto sobre el resultado fiscal consolidado, por un periodo no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer la opción citada, y hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria no le autorice dejar de hacerlo, o bien, cuando la sociedad controladora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, o deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos del artículo 71 de la misma.

Respecto de la forma de pagar el impuesto, se establece que la sociedad controladora y las sociedades controladas, presentarán su declaración del ejercicio en los términos de los artículos 72 y 76 de la Ley, y pagarán, en su caso, el impuesto que resulte en los términos del artículo 10 de la misma.

Otra de las características importantes del régimen consiste en la posibilidad de diferir el impuesto sobre la renta; al respecto, es conveniente señalar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el verbo diferir tiene los siguientes significados:



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

54

Luego entonces, el diferimiento del impuesto sobre la renta consiste en la posibilidad que otorga la norma legal de aplazar el pago del impuesto, mas no extirarlo; en el caso específico, el propio artículo 64 establece que el impuesto que se hubiera diferido con motivo de la consolidación fiscal se enterará, ante las oficinas autorizadas, cuando se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo, varíe la participación accionaria en una sociedad controlada, se desincorpore una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, en los términos de esta Capítulo. Cabe acotar que los supuestos anteriores conforme a los cuales se revierten los beneficios del diferimiento que permite la consolidación fiscal, se regulan en forma más específica en el artículo 71 de la ley de la materia, en el que se establece el procedimiento para calcular en su caso, el impuesto a pagar.

Es decir, la desincorporación de una sociedad controlada o bien, la desconsolidación del grupo de empresas que venían tributando en esos términos, tiene como consecuencia legal que se pague el impuesto sobre la renta cuyo pago se había aplazado por virtud del propio régimen de consolidación.

Específicamente por cuanto hace a la empresa que adquiere el carácter de controladora, el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece algunas de las obligaciones a que están sujetas:

Como se observa de la disposición anterior, las empresas que tienen el carácter de controladoras, tienen entre otras obligaciones:

Sin texto



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 399 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Administración General de
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

55

- ✓ Llevar los registros que permitan determinar la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada conforme a lo previsto por el artículo 69 de esta Ley, así como de la totalidad de los dividendos o utilidades percibidos o pagados por la sociedad controladora y las sociedades controladas, conforme a lo dispuesto en las reglas de carácter general que para estos efectos expida el Servicio de Administración Tributaria; de las utilidades y las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas en cada ejercicio, incluso de las ganancias y pérdidas que provengan de la enajenación de acciones, así como de la disminución de dichas pérdidas en los términos de los artículos 81 y 32, fracción XVII de la Ley; de las utilidades y las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora en cada ejercicio, incluso de las ganancias y pérdidas que provengan de la enajenación de acciones, así como de la disminución de dichas pérdidas en los términos de los artículos 81 y 32, fracción XVII de esta Ley y del impuesto sobre la renta a su cargo, que le hubiera correspondido de no haber consolidado fiscalmente; los que permitan determinar la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 88 de la Ley, que hubiera correspondido a la sociedad controladora de no haber consolidado y de las utilidades fiscales netas consolidadas que se integrarán con las utilidades fiscales netas consolidables de cada ejercicio.
- ✓ Presentar la declaración de consolidación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de su ejercicio en la que determinará el resultado fiscal consolidado y el impuesto que a éste corresponda; en esta declaración acreditará el monto de los pagos provisionales consolidados efectivamente enterados ante las oficinas autorizadas y en el caso de que en la declaración a que se refiere esa fracción resulte diferencia a cargo, la sociedad controladora deberá enterarla con la propia declaración.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Administración General de
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

56

- ✓ En el caso de que alguna o algunas de las sociedades controladas presenten declaración complementaria con el fin de subsanar errores u omisiones, así como cuando en el ejercicio de sus facultades las autoridades fiscales modifiquen la utilidad o la pérdida fiscal de una o más sociedades controladas y con ello se modifique el resultado fiscal consolidado, la pérdida fiscal consolidada o el impuesto acreditado manifestados, y se derive un impuesto a cargo, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que ocurra este hecho, la sociedad controladora presentará declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar. Cuando no se derive impuesto a cargo, la declaración complementaria de consolidación se presentará a más tardar dentro de los dos meses siguientes a aquél en que ocurra la primera modificación, pero sí en la declaración complementaria de consolidación resulta diferencia a cargo, la sociedad controladora deberá enterarla.
- ✓ Presentar su declaración del ejercicio y calcular el impuesto como si no hubiera consolidación; del impuesto que resulte enterar ante las oficinas autorizadas el 40%.

Por su parte, las sociedades controladas, entre otras obligaciones, tienen las señaladas en el artículo 75, que dispone:

Es decir, corresponde a las sociedades controladas, entre otras obligaciones:

- ✓ Presentar su declaración del ejercicio y calcular el impuesto como si no hubiera consolidación (causación del Impuesto sobre la Renta).
- ✓ Del impuesto que resulte disminuido de los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio entregarán a la sociedad controladora el que corresponda a la participación consolidable del ejercicio de que se trate. (Impuesto sobre la Renta a cargo de la controlada en la parte consolidable, que es enterado por la controladora).
- ✓ Posteriormente, las sociedades controladas enterarán ante las oficinas



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

57

autorizadas el impuesto que se obtenga de disminuir al que calcularon, el que entregaron a la sociedad controladora (Impuesto sobre la Renta a cargo de la controlada en la parte no consolidable).

Lo que significa que tanto el impuesto sobre la Renta enterado en la parte que consolida como el que se enteró en la parte no consolidable, se calcula una vez que se determina el impuesto sobre la Renta causado como si no hubiera consolidación y se disminuyen los pagos provisionales.

Ahora bien, el procedimiento conforme al cual la sociedad controladora determina su resultado fiscal, se contiene en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece:

De la norma anterior se desprende que para obtener la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, se sigue el siguiente procedimiento:

- Se suman las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas y se restan las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.
- Posteriormente, según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate, que no contendrá la actualización a que se refiere el artículo 61 de la Ley.
- A continuación se sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esa fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esa fracción.



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

58

- Asimismo, restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas en el ejercicio por las sociedades controladas y la sociedad controladora, siempre que la adquisición y enajenación de acciones se efectúe dando cumplimiento a los requisitos a que se refiere la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.
- Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esa fracción, se sumarán o se restarán en la participación consolidable y que para los efectos de ese Capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta multiplicada por el factor de 0.60; que para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio y que la participación consolidable de las sociedades controladoras, será del 60%, mientras que la proporción de la participación que conforme a ese párrafo no se consolida se considerará como de tercemos.
- A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61 de la Ley.
- Las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, que no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó en los términos del artículo 61 de la Ley, y que en los términos del primer párrafo del inciso b) y del primer párrafo del inciso c) de la fracción I de ese artículo se hubieran restado en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la utilidad fiscal consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en que se pierda el derecho a disminuirlos. El



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 401 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

59

monto equivalente a las pérdidas fiscales que se adicione a la utilidad fiscal consolidada o se disminuya de la pérdida fiscal consolidada, según sea el caso conforme a ese párrafo, se actualizará por el periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio al que corresponda dicha pérdida y hasta el último mes del ejercicio en el que se adicionen o se disminuyan.

Conforme a lo hasta aquí expuesto se advierte con claridad que la sociedad controladora se obliga a determinar el impuesto (tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al activo) del grupo de empresas que integra el régimen de consolidación por la participación consolidable; sin embargo, por la participación minoritaria o que no forme parte del régimen de consolidación, deberá responder en lo individual cada una de las empresas.

Específicamente por cuanto hace al tratamiento de las pérdidas fiscales, en el régimen de consolidación tiene una particularidad que lo distingue, pues como se ha señalado con anterioridad, las pérdidas que corresponden a cada una de las controladas pueden amortizarse contra las utilidades fiscales de las sociedades del grupo; esto permite justamente diferir el impuesto sobre la renta pues a través de este régimen de tributación, se logra que las pérdidas que se tengan en algunas empresas del grupo se amorticen de inmediato contra las utilidades de otras empresas integrantes del propio grupo, de manera que una empresa no tiene que esperar a que en lo individual genere utilidades para saldar sus pérdidas sufridas en años anteriores.

Sin embargo, el límite temporal del diferimiento del impuesto por la aplicación de pérdidas fiscales de las sociedades controladas en la obtención del resultado fiscal consolidado, lo establece justamente el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicado por la autoridad demandada -que encuentra su antecedente en el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta que entró en vigor el 1° de enero de 1999- cuya interpretación es precisa para dirimir la controversia:

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

60

El precepto anterior regula todos los casos en que se revierte el diferimiento del impuesto, sin embargo, para efectos prácticos sólo nos ocuparemos de lo que se conoce como "reversión" de pérdidas fiscales, que consiste en que al actualizarse algunos supuestos establecidos en la ley, los beneficios obtenidos por consolidación de pérdidas fiscales se cancelan, neutralizan o nulifican, pues dicha mecánica obliga a acumular a los ingresos o a restar de la pérdida fiscal, el monto de las pérdidas fiscales obtenidas por la empresa controladora o sus controladas.

Así, del análisis a la norma se advierte lo siguiente:

1. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de la Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto y en este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual.
2. Por su parte, la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio y para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio: 1) el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 69 de esa Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, 2) las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de ese artículo y 3) los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.4708.



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-S.

61

➤ Para tales efectos, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que dicha sociedad se desincorpore y a la cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.4706 se sumará en su totalidad.

➤ Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deja de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación. Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución.

Ahora bien, en el caso no existe controversia respecto a que las sociedades [REDACTED] dejaron de ser controladas por virtud de que desaparecieron debido a la fusión de dichas empresas con la también sociedad controlada [REDACTED] por lo que ese hecho se tiene como cierto ya que forma parte de la motivación de la resolución impugnada y la accionante no se inconforma por cuanto hace a su veracidad.

En efecto, según lo dispone el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de la Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto y en este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual.

Esto significa que al haber ocurrido la fusión de las empresas [REDACTED] con fechas 30 de septiembre de 2003 y 28 de diciembre de 2003, respectivamente, como se señala en la resolución impugnada, luego entonces, las empresas desincorporadas del régimen de consolidación fiscal efectivamente estaban



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-S.

62

obligadas a cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que dejaron de ser sociedades controladas, en forma individual; lo cual evidentemente ocurriría al presentar su declaración del ejercicio fiscal de 2003, en la cual por supuesto, ya no resultarían aplicables las reglas de la consolidación a que se refiere el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el cálculo del impuesto.

Como lo refiere la demandante, cumplieron con sus obligaciones fiscales en forma individual presentando la declaración por el ejercicio fiscal de 2003 incompleto, según lo dispone el artículo 11, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2003, que establece:

Pues conforme a dicho precepto, en los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la sociedad escidente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, respectivamente.

Así, al desaparecer por virtud de la fusión, las empresas [REDACTED] presentaron su declaración de 2003 (dictamen fiscal), en forma individual.

Ahora bien, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio y para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 403 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

63

séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.4708. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esa Ley, estarán a lo dispuesto en ese párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esa Ley.

Asimismo, dispone el tercer párrafo que para los efectos del párrafo segundo, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que dicha sociedad se desincorpore y la cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.4708 se sumará en su totalidad.

Ahora bien, en estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, se procede a analizar la interpretación que da la parte actora del artículo 71, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el artículo 68, fracciones I y II del mismo ordenamiento.

Ello a efecto de determinar cuál es el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación.

Asimismo es preciso analizar el contenido de la fracción II de dicho numeral a efecto de atender el argumento de la parte actora en el sentido de que, de la interpretación conjunta del artículo 68, fracción II y 71, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en 2003, se desprende que la intención del legislador fue que las empresas que determinaran pérdidas fiscales y fueran pertenecientes a un grupo consolidado, obtuvieran utilidades contra las cuales amortizaran, antes de que aquéllas caducaran o de que se desincorporaran del régimen, sin que de ninguna forma se pueda considerar que dicha amortización debía hacerse en conjunto con la consolidación.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

64

Al respecto el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en la parte que nos interesa, establece:

El artículo anterior, precisa la forma en que la sociedad controladora debe determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada.

Así en su fracción I, inciso b) se refiere a que la controladora, debe obtener la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a un procedimiento que le permite restar las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, en la actualización a que se refiere el artículo 61 de la Ley.

Por otra parte, señala la fracción II, segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que las pérdidas fiscales obtenidas por una sociedad controlada o controladora, que no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó y que se hubieran restado en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la utilidad consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en que se pierda el derecho a disminuir.

A este respecto sostiene la parte actora que dicho artículo establece a cargo de la sociedad controladora, la obligación de determinar su resultado o pérdida fiscal consolidada, para lo cual debe restar o sumar, según sea el caso, las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora que no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó y que en el caso que nos ocupa las empresas controladas con anterioridad a su desincorporación, amortizaron en forma individual las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir contra su utilidad determinada, de ahí que las empresas controladas al momento de su desincorporación del régimen, no tenían pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de disminuir.

Ahora bien, esta Juzgadora difiere de la interpretación realizada por la parte actora, del artículo 68, fracción II, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues contrario a lo manifestado por la accionante se estima que del contenido de dicho numeral se desprende que para efectos del



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

65

régimen de consolidación fiscal, las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, que no hubieren podido disminuirse por la sociedad que las generó, deberán adicionarse o disminuirse, según sea el caso, de su utilidad o pérdida fiscal consolidada, sin que en forma alguna de dicho numeral se desprenda el alcance que pretende darle la parte actora en el sentido de que no se distingue si dichas pérdidas debían aprovecharse junto con la controladora o en forma individual.

Lo anterior es así toda vez que la empresa actora pierda de vista que dicho precepto regula la forma en que la sociedad controladora debe determinar su resultado o pérdida fiscal consolidada, sin que de la interpretación que se hace se desprenda que dichas pérdidas podían aprovecharse en lo individual.

En consecuencia sí, en el caso en estudio las empresas controladas [redacted] disminuyeron sus pérdidas a nivel individual antes de su desincorporación del régimen de consolidación, al decir de la parte actora no se encontraba obligada a aplicar el artículo 71, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece que la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio y para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado; evidentemente se refiere a las pérdidas fiscales que al momento de la desincorporación (no después de presentada la declaración anual en forma individual del ejercicio fiscal de 2003) cada una de dichas empresas tenía derecho a disminuir y que justamente son las pérdidas fiscales a que hemos hecho referencia.



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

66

Esto es así, ya que estamos ante dos momentos distintos que distinguen los párrafos primero y segundo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

- El momento en que ocurre la desincorporación, es decir, cuando se lleva a cabo el acto jurídico de la fusión por virtud de la cual las controladoras desaparecen, que es al que se refiere el segundo párrafo del precepto.
- El momento en que ocurrida la desincorporación, las empresas desincorporadas están obligadas a presentar su declaración del ejercicio fiscal irregular en forma individual, que es al que se refiere el primer párrafo del precepto.

Por tanto, a consideración de esta juzgadora es clara la norma por cuanto hace al supuesto normativo que obliga a la controladora a considerar los efectos de la desincorporación, pues evidentemente el segundo párrafo se refiere a las pérdidas fiscales que las empresas desincorporadas tienen derecho a disminuir en el momento en que se lleva a cabo la desincorporación, no así después de presentada la declaración anual en forma individual. Pues justamente este párrafo contempla la reversión de las pérdidas fiscales que fueron consideradas en el resultado fiscal consolidado de los ejercicios fiscales en los que las empresas [redacted]

[redacted] tuvieron este carácter.

En este sentido, si la propia accionante reconoce la existencia de las pérdidas fiscales de las empresas desincorporadas a que hace alusión la autoridad demandada, luego entonces, dichas pérdidas debió considerarlas como efectos de la desincorporación en términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En consecuencia, de una debida interpretación a dicho numeral cuando una empresa deje de ser controlada debe reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior, por lo que si en el caso en cuestión las empresas [redacted] a la fecha de su desincorporación del régimen de consolidación contaban con pérdidas fiscales pendientes de amortizar, conforme al segundo



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 405 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes,
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

67

párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se encontraba obligada a sumar a la utilidad fiscal las pérdidas en comentario.

Sin que sea óbice a lo anterior que manifieste que esas pérdidas fiscales fueron aplicadas contra las utilidades fiscales que ambas empresas obtuvieron en el ejercicio fiscal de 2003, pues se insiste, la norma analizada, se refiere claramente al momento en que ocurre la desincorporación, no al momento posterior a la presentación de la declaración individual a que se refiere el primer párrafo del artículo 71 en comentario.

A mayor abundamiento, como ya ha sido señalado el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga a las empresas controladoras a reconocer los efectos de la desincorporación de las empresas controladas al cierre del ejercicio inmediato anterior en la declaración complementaria de dicho ejercicio, ello siempre y cuando existan efectos que reconocer.

Por ello, si antes de la desincorporación de las sociedades

estas aún contaban con pérdidas pendiente de disminuir, y si éstas presentaron declaraciones por el ejercicio de 2003, al ser este ejercicio en el que se fusionaron y en el que debe entenderse que hubo desincorporación, resulta falso que dichas pérdidas se hubieran disminuido antes de que se hubiesen desincorporado con motivo de la fusión, pues de conformidad con el primer párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la obligación de cumplir con las cargas fiscales de manera individual, únicamente se actualiza en el momento en que existe la desincorporación, de ahí que no le asiste la razón a la actora al señalar que la disminución de las pérdidas de dichas empresas se efectuó antes de la desincorporación de éstas.

Ahora bien, para que a través de una declaración exista una disminución de pérdidas a nivel individual, primero tiene que existir la desincorporación de la empresa controlada del régimen de consolidación, pues de no ser así dicha empresa controlada se encontraría obligada a seguir consolidando su resultado fiscal junto con su empresa controladora, razón por la cual, en el caso que nos ocupa la hoy actora de ninguna forma acredita que antes de la desincorporación del régimen consolidado hubiese disminuido las pérdidas que tenían sus entonces controladas y

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes,
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

68

Bajo ese tenor, esta juzadora considera que no existe la contradicción a que se refiere la accionante por cuanto hace a la motivación de la resolución impugnada, pues la autoridad demandada claramente señaló que las pérdidas fiscales que las empresas desincorporadas tenían derecho a aplicar al momento de la desincorporación, posteriormente fueron aplicadas contra la utilidad fiscal del ejercicio fiscal declarado en forma individual; sin embargo, ello no es óbice para desconocer la obligación de la demandante de reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior vía declaración complementaria de dicho ejercicio, en el caso, del ejercicio fiscal de 2002.

Por cuanto hace al argumento de la demandante en el que sostiene que el fisco federal no resultó perjudicado alguno; resulta infundado pues si la accionante no reconoció los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio, en el caso, el ejercicio fiscal de 2002, si existe un perjuicio para el fisco federal, constituido justamente por el crédito fiscal que le fue determinado en la resolución impugnada.

En tal orden de ideas, si ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por conducto de su Sala Superior, ya resolvió el tema atinente al juicio en que se actúa, se estima procedente que esa H. Sala se pronuncie en los mismos términos, a fin de evitar criterios contradictorios.

Finalmente, se objeta la prueba pericial ofrecida por la actora, por lo que se estima procedente que esa H. Sala desestime el alcance y valor probatorio que aquélla le pretende imprimir.

En primer término, es dable destacar que ofrece la probanza de mérito en los siguientes términos:

(Hoja 219 de la demanda de nulidad)



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

69

II. La prueba pericial en materia contable, a efecto de demostrar que [REDACTED] no debía adicionar las pérdidas fiscales generadas por sus empresas controladas al momento de la fusión el 31 de octubre de 2007, así como que tampoco debía incluir en la utilidad fiscal consolidada el inventario acumulable de sus empresas controladas.

Ahora bien, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define al "peritaje", como a continuación es citado:

"Peritaje. 1. Recibe el nombre de peritaje el examen de personas, hechos u objetos, realizado por un experto en alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de ilustrar al juez o magistrado que conozca de una causa civil, criminal, mercantil o de trabajo, sobre cuestiones que por su naturaleza requieran de conocimientos especializados que sean del dominio cultural de tales expertos, cuya opinión resulte necesaria en la resolución de una controversia jurídica. Medio de prueba mediante el cual una persona competente, atraída al proceso, lleva a cabo una investigación respecto de alguna materia o asunto que forme parte de un juicio, a efecto de que el tribunal tenga conocimiento del mismo, se encuentre en posibilidad de resolver respecto de los propósitos perseguidos por las partes en conflicto, cuando carezca de elementos propios para hacer una justa evaluación de los hechos.

Al definir y explicar la voz dictamen pericial señalamos que debe ajustarse a las disposiciones legales respectivas para otorgarle eficacia probatoria y se indicó que es un auxiliar eficaz para el juzgador, que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico que exijan una preparación de la cual carece. En cuanto al peritaje debemos agregar que son precisamente los conocimientos especiales los que lo integran, por cuya razón no puede hablarse de peritaje donde no sean necesarios éstos, pues de ello deriva su importancia en la dilucidación de una serie de asuntos. El peritaje, en esencia, es el método de aplicación de la ciencia en el campo de aplicación de la justicia.

(Énfasis añadido)

De la definición que nos ocupa, se desprende lo siguiente:

- ✓ Peritaje es el examen de personas, hechos u objetos, realizado por un experto en alguna ciencia, técnica o arte;
- ✓ Un peritaje tiene por objeto ilustrar al juez o magistrado que conozca de una causa, sobre cuestiones que por su naturaleza **requieran de conocimientos especializados** que sean del dominio cultural de tales expertos, cuya opinión resulte necesaria en la resolución de una controversia jurídica; y



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

70

- ✓ Que son precisamente los conocimientos especiales los que integran un peritaje, y por esa razón, no puede hablarse de peritaje donde no sean necesarios éstos, pues de ello deriva su importancia en la dilucidación de una serie de asuntos.

En tal orden de ideas, es dable concluir que **sólo será necesario el desahogo de una prueba pericial cuando el asunto que deba resolver el juzgador requiera conocimientos especializados en determinada materia.**

Una vez precisado lo anterior, es evidente que **la probanza ofrecida por la actora no reviste la idoneidad necesaria, toda vez que para la resolución de la litis puesta a consideración de esa H. Sala, no se requieren conocimientos técnicos especializados.**

En efecto, lo anterior es así, ya que todos los cuestionamientos que formula la hoy tercera interesada pueden ser fácilmente contestados con la información que obra en autos, es decir, con las pruebas documentales que conforman el expediente administrativo que ofreció como prueba la propia actora.

Luego entonces, el desahogo de la prueba pericial en contabilidad resulta innecesario, puesto que de la valoración que esa H. Sala practique a las documentales en cita, es posible desprender la verdad de los hechos controvertidos.

Por tanto, se considera procedente que esa H. Sala desestime la prueba pericial en contabilidad ofrecida por la demandante, al no actualizarse los presupuestos legales para su desahogo, en la inteligencia de que las cuestiones a las que ésta última pretende dar respuesta, son resueltas con la información contenida en documentación que obra en los propios autos del expediente en que se actúa, sin que sea necesaria la opinión experta y especializada de profesionistas en materia contable; cuestión ésta última —necesidad de especialistas en conocimientos técnicos ajenos al derecho— que es la clave para que se actualice la indispensabilidad de una prueba pericial.

Ahora bien, el vocablo "contabilidad", de conformidad con el Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información de la Universidad de Guadalajara, significa —en la parte que nos interesa— lo siguiente:

Contabilidad (descripción amplia). La contabilidad estudia los distintos sistemas y métodos susceptibles de emplearse para la clasificación, ordenación, registro, análisis y valoración de la información económica sobre la actividad funcional y las modificaciones patrimoniales de una organización...



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 407 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

71

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad que la contabilidad —de manera muy elemental, pero útil para efectos del presente medio de defensa— consiste en un método que sistematiza las operaciones de una unidad económica, y registra las variaciones en su patrimonio.

Así las cosas, una prueba pericial en dicha materia necesariamente debe tener por objeto explicar un tema determinado relacionado con la contabilidad del contribuyente, lo que incluso puede llevar a determinar el legal actuar de la autoridad al revisar dichos sistemas contables.

En esa tónica, es evidente que la prueba ofrecida por [REDACTED] no resulta adecuada para dilucidar la legalidad de la actuación de mi representada, puesto que la conclusión correspondiente debe ser resultado del análisis de los hechos sujetos a controversia con la legislación aplicable, lo que debe ser efectuado por un perito en derecho, como se erige esa H. Sala.

En tal orden de ideas, al haberse acreditado que no resulta necesaria la intervención de personas especializadas en conocimientos contables en el principal, es que se hace innecesario el desahogo de la prueba pericial que ofrece mi contraria.

En ese respecto y para mayor ilustración, resulta menester precisar el contenido del artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia contenciosa administrativa, mismo que dispone a la letra lo siguiente:

"Artículo 143. La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley."

De lo dispuesto por el legislador federal en el dispositivo legal de mérito, se desprende que como se ha sostenido a lo largo del presente oficio, **la prueba pericial únicamente tendrá verificativo cuando para resolver una causa jurídica, se requieran conocimientos especializados respecto a una ciencia o arte, ajena, por supuesto, al derecho.**

Ahora bien, esa H. Sala no debe soslayar que las pruebas que ofrezcan las partes únicamente deberán valorarse cuando las mismas sean idóneas, aptas y pertinentes para dilucidar la *litis* puesta a consideración del juzgador.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

72

Al respecto, cabe destacar que si bien es cierto, conforme al segundo párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo¹, son admisibles en los juicios que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa toda clase de pruebas, con las restricciones ahí mismo señaladas —que no aplican a la prueba pericial—, no menos cierto es que la valoración de pruebas debe apreciarse con mesura, a fin de calificar su idoneidad y eficacia para resolver los puntos controvertidos respecto de determinado negocio jurídico.

Así, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone a la letra lo siguiente:

Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la *litis*, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes."

(Énfasis añadido)

En tal orden de ideas, la facultad del juzgador al valorar pruebas en el juicio contencioso administrativo no es irrestricta, en la inteligencia de que tiene como única condición, verificar su idoneidad y sentido de pertinencia.

Lo anterior, obedece a dotar de eficiencia la labor del juzgador al emitir su juicio, en la inteligencia de que en el momento procesal oportuno, contará sólo con aquellas constancias de pruebas que sean aptas para probar los hechos que pretende acreditar cada una de las partes, sin tener que valorar probanzas cuya falta de idoneidad y pertinencia provoquen una dilación en el dictado del fallo que corresponda.

En ese entendido, si bien es cierto que no existe limitación alguna por cuanto hace al derecho de las partes de ofrecer las pruebas que estimen pertinentes a efecto de acreditar los extremos de su acción o de sus excepciones —con las restricciones previstas en la ley de la materia de que se trate—, no menos cierto es que su valoración sí queda condicionada a las propiedades a que nos hemos

¹ En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

73

venido refiriendo, pues las mismas determinarán su eficacia en juicio, que es la finalidad última de pruebas, es decir, esclarecer los hechos.

Por lo tanto, si en la especie la prueba pericial ofrecida por la actora reviste un contenido legal, y su objeto es revelar situaciones o circunstancias que pueden ser resueltas mediante información contenida en los autos que integran el juicio contencioso administrativo en que se actúa, es evidente que procede que la misma sea desestimada, al no poseer cualidades básicas para que una prueba pueda ser admitida, como lo es la idoneidad y la pertinencia.

Lo expuesto es así, en la medida de que para dar respuesta al cuestionario propuesto por [REDACTED] no es necesario poseer conocimientos especializados ajenos a la ciencia jurídica, tal como se ha demostrado en los párrafos que anteceden.

Por ello, no basta el sólo ofrecimiento de la prueba pericial que nos ocupa para que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentren vinculadas a valorarlas, sino que deben analizar si las mismas resultan el medio probatorio más adecuado para acreditar los hechos sujetos a litis, y no proceder a otorgarle idoneidad al amparo del artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que como se ha demostrado con antelación, recae en el juzgador la obligación procesal de verificar la idoneidad y pertinencia de las pruebas que ofrezcan las partes, a efecto de brindar celeridad a la resolución de la controversia puesta a su consideración.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII-P-1aS-326, sustentada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

VII-P-1aS-326, R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 13. Agosto 2012. p. 192.

"IDONEIDAD DE LA PRUEBA. FACULTAD PARA DETERMINARLA. De la interpretación concatenada de los artículos 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquél, se advierte que el juzgador goza de amplia libertad para valorar las pruebas aportadas por las partes en el juicio. Consecuentemente es el Juzgador quien tiene la facultad de calificar y determinar la idoneidad de una prueba aportada en juicio."

PRECEDENTE:

VI-P-1aS-467
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4346/09-07-01-8/193/11-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

74

de junio de 2011, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Rossina Montandon Spinoso.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de junio de 2011)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 1. Agosto 2011. p. 102

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VII-P-1aS-326
Juicio de Lesividad Núm. 36587/07-17-06-3/390/12-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 12 de junio de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Cinthya Miranda Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de junio de 2012)*

(Énfasis añadido)

También se estima aplicable a lo expuesto en líneas precedentes, la tesis VII-TASR-PE-17, confeccionada por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dispone a la letra lo siguiente:

VII-TASR-PE-17, R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 12. Julio 2012. p. 245.

PRINCIPIOS DE PERTINENCIA E IDONEIDAD DE LA PRUEBA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. Si bien el artículo 40, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, refiere que en el juicio contencioso administrativo federal, serán admisibles toda clase de pruebas, con las excepciones que apunta dicho precepto, es el caso que ello no significa que el Magistrado Instructor está obligado a admitir y desahogar como pruebas todas aquellas que ofrezcan las partes en el juicio, sino que para su admisión, éstas deben cumplir con los principios de pertinencia y de idoneidad de la prueba. En efecto, el artículo 46 de la ley adjetiva, establece una serie de reglas de valoración de las pruebas rendidas por las partes en el juicio contencioso administrativo federal, a que se encuentra sujeto este Tribunal, señalándose en cuanto a las pruebas pericial y testimonial, así como a otras pruebas distintas de las documentales, que el valor de las mismas quedará a la prudente apreciación de la Sala. Por su parte, el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio contencioso administrativo federal, atento a lo dispuesto en el artículo 1º, primer párrafo, de la ley adjetiva, establece que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria. De donde se sigue que al señalar el artículo 38, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que una de las atribuciones del Magistrado Instructor, es la de admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas, ello conduce a estimar que efectivamente cuenta con la facultad de analizar si las pruebas ofrecidas por las partes no sólo están relacionadas con la cuestión o hecho a



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 409 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

75

demostrar (que no es otro que el principio de pertinencia de la prueba), sino que también está facultado para verificar si las pruebas son el medio apropiado y adecuado para demostrar los hechos materia de la controversia planteada, que es precisamente el principio de idoneidad de la prueba. Principios que si bien no están previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ni en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sí se contemplan en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio contencioso administrativo federal, al señalar que para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Por lo que a fin de verificar si las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio, cumplen con los principios de pertinencia y de idoneidad de la prueba, resulta conducente analizar la naturaleza de dichos medios probatorios, para que de ese modo se confronte con la pretensión de las partes que persiguen con su ofrecimiento.

Recurso de Reclamación Núm. 269/12-16-01-6.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de mayo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Virginia Pétrez Herrera.- Secretario: Lic. Arturo Garrido Sánchez."

(Énfasis añadido)

Al respecto, se estima aplicable la tesis VI-TASR-XXXIX-61, sostenida por la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor literal siguiente:

VI-TASR-XXXIX-61

"PRUEBA PERICIAL CONTABLE, ES INADMISIBLE POR FALTA DE PERTINENCIA CUANDO SE REFIERE A CUESTIONES DE ÍNDOLE LEGAL. Resulta procedente señalar que según el diccionario Espasa Calpe, una prueba puede concebirse desde ángulos diversos. Puede considerarse como una actividad lógica y material orientada en el mismo sentido de la realidad que se trata de averiguar, resto es, como operación y esfuerzo amparados en una verdad: es la prueba fin. Pero también puede valorarse como el conjunto particular de recursos que pueden utilizarse para obtener aquella demostración: es la prueba medio. En este orden de ideas, la prueba pericial se practicará cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, estos conocimientos serán por parte de aquel especialista en una cierta materia, en específico la que se refiere a la prueba ofrecida, es decir, el perito debe tener los conocimientos en la ciencia o arte a que pertenece el punto sobre el que ha de oírse en juicio. Y para su idoneidad la oferente debe acreditar los extremos que se pretendan probar indicando con precisión la parte de la resolución y el hecho que de esta índole le agravia los derechos de la promovente. Por tanto, en la presente instancia es inadmisibile la prueba pericial contable de conformidad con los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

76

supletoria, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que al no estar relacionada directamente al aspecto en materia de registros o asientos relativos a las operaciones o transacciones realizadas por el contribuyente, debido a que su argumento, se refiere propiamente a la violación de diversas normas jurídicas con el actuar de la autoridad demandada, sin embargo, resultan ser cuestiones de índole legal, que no requieren para su valoración el auxilio de conocimientos técnicos especializados.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 325/10-12-03-6.- Resuelto por la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Tapia Tovar.- Secretaria: Lic. María del Carmen Marcela Martínez Pérez."

(Énfasis añadido)

En el mismo sentido, se estima aplicable la diversa tesis II-TASS-8613, sustentada por el Pleno del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, que dispone a la letra lo siguiente:

No. Registro: 9,430. Precedente, Época: Segunda, Instancia: Pleno. Fuente: R.T.F.F. Segunda Época. Año VII. No. 76. Abril 1986, Tesis: II-TASS-8613, Página: 851

"PRUEBA PERICIAL CONTABLE, NO ES LA IDONEA PARA DILUCIDAR CUESTIONES DE Estricto DERECHO. Cuando ante la Sala a quo se plantean cuestiones de estricto derecho como puede ser, si un determinado causante se situó o no en una causal de estimativa de ingresos, no debe tomar en consideración la prueba pericial contable ofrecida por las partes, pues ésta solo sirve para dilucidar cuestiones técnicas más no de estricto derecho." (58)"

Revisión No. 4/83.- Resuelta en sesión de 15 de abril de 1986, por unanimidad de 9 votos.- Magistrado Ponente: Gonzalo Armienta Calderón.- Secretaria: Lic. Ma. Teresa Islas Acosta.

EN EL MISMO SENTIDO:

Revisión No. 237/83.- Resuelta en sesión de 18 de abril de 1986, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Armando Díaz Olivares.- Secretario: Lic. Marcos García José.

(Énfasis añadido)

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.Io.A.12 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, misma que dispone a la letra lo siguiente:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5".

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-S.

77

Época: Novena Época, Registro: 182123, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Febrero de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.10.A.12 K, Página: 1112

"PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO, LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LA, IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A ADMITIRLA. Los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de las de posiciones y de las que estén en contra de la moral y del derecho, y que con el fin de preparar su desahogo, la prueba pericial deberá ser anunciada (ofrecida) con cinco días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día de su ofrecimiento y el de la celebración de la audiencia. Sin embargo, no deben interpretarse tales preceptos en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir y desahogar las pruebas ofrecidas en todos los casos sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de los principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto y, el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que recibir una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 63/2003. Hilda Rivera Morales y coag. 30 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretaria: Luisa Fernanda Ávalos Vázquez.

(Énfasis añadido)

En virtud de lo anterior, y toda vez que **si bien es cierto que la prueba de referencia guarda relación con los hechos controvertidos, no menos lo es que no es la probanza adecuada para dilucidar la litis puesta a consideración de esa H. Sala,** ya que se insiste, las interrogantes contenidas en el cuestionario propuesto por la empresa enjuiciada son resueltas con la información contenida en las documentales que obran en el expediente en que se actúa, sin que sean necesarios los conocimientos especializados de un experto en contabilidad.

Apoya las anteriores consideraciones, la tesis 2a. LIV/2005, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5".

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-S.

78

Época: Novena Época, Registro: 178360, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. LIV/2005, Página: 1211

"PRUEBAS EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EL MINISTRO INSTRUCTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ADMITIR LAS QUE CAREZCAN DE IDONEIDAD. Del artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el ofrecimiento de pruebas tiene como limitante el que guarden relación con la controversia constitucional o que influyan en la sentencia definitiva, pues de lo contrario serán desechadas; sin embargo, no basta con que el medio de convicción ofrecido tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, sino que es necesario que esa prueba sea adecuada para que el juzgador conozca la verdad material de los hechos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba el cual, si bien no está previsto en la ley citada, sí se contempla en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta aplicable supletoriamente a dicha ley reglamentaria, en términos de su artículo 1o. En consecuencia, si se ofrece una prueba que no satisfaga ese requisito, resulta contraria a derecho y, por ende, el Ministro Instructor no está obligado a admitirla, en términos del referido artículo 31."

Recurso de reclamación 85/2005-PL, derivado de la controversia constitucional 51/2004. Estado de Colima. 22 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: V. Miguel Bravo Meigoza.

(Énfasis añadido)

Aporta el mismo razonamiento, la diversa tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce:

No. Registro: 238,546, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 66 Tercera Parte, Tesis: Página: 59, Genealogía: Informe 1974, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 13, página 37, Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 219, página 363.

"PRUEBA, DESECHAMIENTO DE. TRATÁNDOSE DE LA QUE NO INFLUIRA EN EL SENTIDO DEL FALLO, NO CAUSA AGRAVIO. La resolución del Juez de Distrito que niega la admisión de prueba que no trasciende al resultado del fallo, no causa agravio a la parte que la ofrece; por otra parte, esa falta de influencia convierte en ocioso decretar la reposición del procedimiento del juicio para el solo efecto de que la prueba sea admitida."

Séptima Época, Tercera Parte:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 411 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

79

Volumen 4, página 155. Amparo en revisión 7140/68. José López Delgado. 10 de abril de 1969. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.

Volumen 27, página 61. Amparo en revisión 4252/70. Ejido Palma Sola, Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 5 de marzo de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu.

Volumen 56, página 31. Amparo en revisión 494/73. Lucila Zepeda Godínez de Gomar y María Godínez Silva de Zepeda (acumulados). 30 de agosto de 1973. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.

Volumen 62, página 39. Amparo en revisión 2216/73. Pablo Francisco y otros. 28 de febrero de 1974. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.

Volumen 63, página 34. Amparo en revisión 3106/73. Antonio Martínez y otro. 7 de marzo de 1974. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.

En virtud de lo anterior, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones que por ésta vía se controvierten, en términos de la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad con los hechos y el derecho expuestos en el presente apartado.

Del mismo modo, la demandada a través del oficio de alegatos número 900 09 05-2016-6739 de fecha 11 de mayo de 2016, sostuvo lo siguiente:

ALEGATOS DE LA AUTORIDAD

Alegatos

A. Es ineficaz el argumento de mi opositora en el que solicita una interpretación histórica del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque supuestamente no previene con supuesto expreso de desincorporación, el de fusión de empresas controladas cuando la subsistente o la naciente permanezca en el régimen de consolidación, y que por tanto debe prevalecer tácitamente el contenido del artículo 57-I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2001.

Ciertamente, del artículo 71, párrafos segundo y noveno¹ de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado, es claro advertir que en el caso de fusión de sociedades, el

¹ "La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.



Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes

Oficio 900 09 05-2016-6739
J.N. 12140/15-17-11-5.

3

legislador estableció que se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, y por lo tanto, en tal tenor, la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para ello, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores que fueron amortizadas en la consolidación fiscal, mismas que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado.

Esto es, el artículo en cita, de manera clara, establece que cuando se realice una fusión de sociedades, se considera que las sociedades fusionadas quedan desincorporadas del régimen de consolidación fiscal, sin establecer distinción alguna respecto a que la fusión se realice entre empresas que forman parte del mismo grupo que consolida sus resultados fiscales o con una empresa ajena al grupo.

En tal sentido, el noveno párrafo del artículo 71, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado, de ningún modo hace distinción alguna en relación al supuesto de fusión entre sociedades que pertenecen al mismo grupo de consolidación, y por ello, esa situación de ninguna manera debe entenderse en el sentido de que no existe desincorporación, sino por el contrario, la norma de referencia, de manera genérica, establece que cuando exista fusión de sociedades, se entenderá que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión.

Por lo tanto, de una aplicación estricta del citado precepto legal, se obtiene que en toda fusión de sociedades, las empresas controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, quedarán desincorporadas del régimen de consolidación fiscal, con independencia de que la empresa que surja o subsista permanezca en el régimen.

Al amparo de las premisas que preceden, y ante la abolición de la ley que contenía el artículo 57-J referido, es técnica y jurídicamente imposible que subsista su contenido de manera tácita. Más aún cuando en el caso concreto incluso dicha subsistencia no se configura, toda vez que el artículo 71, párrafo noveno, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado, previene claramente que se configura la desincorporación de empresas controladas cuando con motivo de la fusión desaparecen, sin que el legislador haya hecho una excepción al respecto.

En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación.

Av. Hidalgo núm. 77, Módulo III, P.B., Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
Teléfono (55) 58-02-00-00, www.sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

Reg. 8542.



Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes

Oficio 900 09 05-2016-6739
J.N. 12140/15-17-11-5.

4

B. Resulta infundado el argumento de la incoante en el que indica que no debía reconocer los efectos de la desincorporación de sus controladas
porque al momento en que surtió efectos legales la fusión de las mismas, no tenían pérdidas fiscales pendientes de disminuirse.

Ciertamente, al haber concluido los beneficios de la consolidación fiscal respecto a las empresas controladas que se desincorporan, se debe pagar el impuesto que se había diferido durante todo el tiempo que duraron en la consolidación las empresas que se desincorporan del grupo.

En efecto, cuando las sociedades controladas desaparecen con motivo de la fusión, se considera en todos los casos que existe desincorporación del régimen, por lo tanto, la controladora debe reconocer los efectos de esa desincorporación presentando la declaración complementaria correspondiente al ejercicio inmediato anterior al en que ocurrió la fusión, sumando o restando las pérdidas, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio.

Por otro lado, de la resolución inicialmente recurrida, se advierte lo siguiente:

1. En el ejercicio 2006, las empresas controladas aludidas generaron pérdidas fiscales respectivas por importe de \$1,811,604,802 y \$371,967,597, mismas que en cantidades actualizadas a diciembre de 2006, suman el total de \$2,251,044,786.13, las cuales fueron restadas en dicho ejercicio por la actora al determinar su resultado fiscal consolidado;
2. El 18 de octubre de 2007 fue celebrada la fusión de las sociedades controladas en cita, en donde subsistió desapareciendo por consecuencia las dos empresas primeramente mencionadas;
3. Dicha fusión surtió efectos legales el 31 de octubre de 2007;
4. En esa fecha, presentó su declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2007, donde aplicó pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en cantidad de \$2,106,174,218.00; y
5. El 22 de julio de 2008, presentó su declaración complementaria correspondiente al ejercicio fiscal 2007, donde aplicó pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en cantidad de \$477,670,532.00;

En tal orden de ideas, los antecedentes descritos permiten llegar a la conclusión de que al momento de la fusión de las sociedades controladas aludidas, éstas sí tenían pérdidas fiscales pendientes de disminuir de manera individual.

Av. Hidalgo núm. 77, Módulo III, P.B., Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
Teléfono (55) 58-02-00-00, www.sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

Reg. 8542.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 413 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes

Oficio 900 09 05-2016-6739
I.N. 12140/15-17-11-5.

5

Ahora bien, con motivo de la desaparición de [REDACTED] y [REDACTED] fue que dejaron de ser empresas controladas de la [REDACTED] por lo que hasta entonces se encontraban en aptitud de cumplir con las obligaciones fiscales del ejercicio en que dejaron de ser sociedades controladas en forma individual, ello, acorde al artículo 71, párrafo primero², y noveno de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado.

En efecto, tal como se puede advertir del artículo en cita, cuando una empresa deje de ser controlada (en el caso sujeto a estudio por virtud de fusión de conformidad con noveno párrafo del citado artículo 71), dicha sociedad deberá cumplir con sus obligaciones del ejercicio en que deje de ser controlada de forma individual, lo cual únicamente puede entenderse en el sentido de que sólo hasta que la empresa deje de ser controlada, deberá cumplir con su obligación de manera individual.

Consecuentemente, si las empresas antes referidas presentaron declaraciones por el ejercicio 2007, al ser este el ejercicio en el que se fusionaron y en el que debe entenderse que hubo desincorporación, debe concluirse que resulta falso que dichas pérdidas se hubieran disminuido al momento en que se llevó a cabo la fusión de las empresas [REDACTED] y [REDACTED].

[REDACTED] es decir, antes de que se hubiesen desincorporado con motivo de la fusión, pues se insiste, de conformidad con el primer párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la obligación de cumplir con las cargas fiscales de manera individual, únicamente se actualiza en el momento en que existe la desincorporación, por lo que es ilógico que mi contraria señale que la disminución de las pérdidas de dichas empresas se efectuó en el mismo momento en que se desincorporaron éstas.

C. Es ineficaz que aduzca la demandante que no existe precepto legal que la obligue a sumar las utilidades de las empresas controladas que aplicaron contra las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir como un efecto de la desincorporación por fusión.

Ciertamente, la autoridad fiscalizadora no se encontraba obligada a citar precepto legal alguno por el cual se estableciera la obligación de la empresa controladora para el caso de que no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, de sumar las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizar en el resultado fiscal consolidado de ese ejercicio.

² "Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual."

Av. Hidalgo núm. 77, Módulo III, P.B., Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
Teléfono (55) 58-02-00-00, www.sat.gob.mx, [youtube.com/satmx](https://www.youtube.com/satmx), twitter.com/satmx

Reg. 8542.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes

Oficio 900 09 05-2016-6739
I.N. 12140/15-17-11-5.

6

Lo anterior, porque en la resolución inicialmente recurrida no se establece como obligación para mi contraria que en caso de no reversar las pérdidas fiscales de las empresas controladas que se desincorporaron con motivo de la fusión, entonces se debían sumar utilidades de las empresas controladas en el resultado fiscal consolidado 2007, sino que se menciona dicha circunstancia a efecto de que se viera nulificado el beneficio derivado de la consolidación fiscal.

Además, suponiendo sin conceder que fuera fundado el agravio planteado en el sentido de que no se citó en la resolución impugnada, en sede administrativa, el precepto legal por el cual se estableciera la obligación de la empresa controladora para el caso de que no sumara las pérdidas fiscales de sus sociedades controladas que tuvieran al momento en que se desincorporan del régimen, entonces en el resultado fiscal consolidado de ese ejercicio tendría que sumar las utilidades de éstas en contra de las cuales en lo individual aplicaron pérdidas fiscales pendientes de amortizarse, se dice que tal vicio sería de naturaleza formal, por lo que en nada trascendería al sentido de la resolución impugnada, especialmente porque subsistirían plenamente los fundamentos y motivos reseñados en el resto de la resolución que hasta este momento se han analizado, es decir, la presunta violación apuntada no implica que la actora no deba reconocer los efectos de la desincorporación de sus empresas controladas [REDACTED].

[REDACTED] al haberse desincorporado del régimen de consolidación con motivo de la fusión, pues los hechos y el derecho en que se sustenta la determinación prevalecen en el caso concreto, lo cual ha quedado evidenciado en los apartados que anteceden.

D. La prueba pericial ofrecida por la actora carece de idoneidad.

En efecto, sólo será necesario el desahogo de una prueba pericial cuando el asunto que deba resolver el juzgador requiera conocimientos especializados en determinada materia.

Una vez precisado lo anterior, es evidente que la probanza ofrecida por la actora no reviste la idoneidad necesaria, toda vez que para la resolución de la *litis* puesta a consideración de esa H. Sala, no se requieren conocimientos técnicos especializados.

Ciertamente, si bien es cierto que la prueba de referencia guarda relación con los hechos controvertidos, no menos lo es que NO es la probanza adecuada para dilucidar la *litis* puesta a consideración de esa H. Sala, ya que las interrogantes contenidas en el cuestionario propuesto por la empresa enjuiciante son resueltas con la información contenida en las documentales que obran en el expediente en que se actúa, sin que sean necesarios los conocimientos especializados de un experto en contabilidad.

De lo anterior se advierte que **la parte actora** esencialmente sostuvo lo siguiente:

Que las resoluciones impugnadas contenidas en los oficios números 900 04 05-2015-177797 y 900-05-2013-48229 de fechas 19 de febrero de 2015 y 25 de julio de 2013, respectivamente, por la indebida interpretación y aplicación que realizó la autoridad al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

Toda vez que, no puede interpretarse que toda fusión de sociedades controladas debe necesariamente ser considerada como una desincorporación, ya que el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, disponía expresamente que en el caso de fusión de sociedades, no existía desincorporación cuando la controlada que se disolvía fuera absorbida por otra u otras controladas de la misma controladora o cuando la controladora se fusionara a una controlada del mismo grupo.

Siendo que el artículo 71, noveno párrafo vigente a partir del 1° de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2013, es omiso en citar con claridad qué debe suceder con respecto al caso en que la nueva empresa resultante de la fusión de empresas controladas, se mantenga tributando bajo el régimen de consolidación fiscal, como sí lo señalaba de manera textual la ley anterior.

Asimismo, que no obstante en el dictamen de la Cámara de Diputados se propuso considerar desincorporación la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación, la redacción plasmada en última instancia en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2002, no introdujo dicha consideración de manera expresa.

Que aun cuando de la interpretación histórica derivada del proceso legislativo del artículo en comento, se desprende que se podría considerar desincorporación la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación fiscal, dicha redacción no subsistió, por lo que no se puede sostener la interpretación que le dan las autoridades demandadas al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Del mismo modo, que la interpretación que debe hacerse del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es en el sentido de que en



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 415 -

el caso de una fusión dentro del mismo grupo de consolidación no debe considerarse como un supuesto de desincorporación, toda vez que no fue la intención del legislador introducir una disposición tan limitativa como la que nos ocupa, sino que continúa rigiendo lo dispuesto por el artículo 57-J de la Ley abrogada el 31 de diciembre de 2001.

Asimismo, que son ilegales las resoluciones impugnadas pues al no haber desincorporación, tampoco se generó la obligación de la actora de sumar pérdidas fiscales de sus controladas a su utilidad en términos del artículo 71 en relación con el diverso 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Que suponiendo sin conceder que la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación actualice el supuesto de desincorporación, al momento en que se generó ésta, ya no existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

Del mismo modo, que el reconocimiento expreso de la demandada en el sentido de que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar fueron aplicadas a la fecha de la fusión por las sociedades controladas (2007) hace prueba plena, por lo que si las pérdidas fiscales de las empresas fusionadas ***** y ***** se agotaron en el ejercicio en el que se dio la fusión como supuesto de desincorporación es claro que no existían pérdidas fiscales pendientes de disminuir que debieron sumarse o restarse para determinar la utilidad o pérdidas fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior al de la fusión, esto es, del ejercicio fiscal de 2006.

Que contrario a lo resuelto por las autoridades, las pérdidas fiscales que estaba obligada a revertir son las correspondientes al ejercicio fiscal 2005 y anteriores, no las correspondientes a 2006, pues si los efectos de la desincorporación de 2007, se reconocen en el ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria (2006), se debería restar la pérdida fiscal consolidada en dicho ejercicio (2006), el momento de las pérdidas de ejercicios anteriores (2005 y anteriores).

Por otro lado, la demandante señala que las autoridades demandadas en ningún momento fundaron y motivaron debidamente el supuesto beneficio indebido que obtuvo, derivado de que la Ley del Impuesto sobre la Renta no establece como obligación de las sociedades controladoras que tengan que sumar a la utilidad consolidada del ejercicio en que se dio la desincorporación las utilidades de sus controladas.

Asimismo, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se desprende que se establezca la obligación de que ante el supuesto de desincorporación, la falta de adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al resultado consolidado deban sumarse en su caso las utilidades fiscales de las empresas fusionadas contra las que se amortizaron las pérdidas.

Que no existe disposición legal alguna que obligue a la empresa controladora a adicionar a su resultado fiscal consolidado las utilidades de las controladoras en caso de desincorporación, en el ejercicio en el que ello ocurra, de no haber revertido el efecto de las pérdidas fiscales.

Finalmente, que las resoluciones impugnadas son ilegales, toda vez que derivan de un procedimiento de fiscalización que se llevó a cabo respecto de un ejercicio en el cual no ocurrió el hecho generador de las obligaciones, es decir 2006, sin tomar en cuenta que el hecho generador de las obligaciones que revisó y determinó ocurrió en el ejercicio fiscal 2007, por tanto se debió haber auditado dicho ejercicio para válidamente determinar las contribuciones.

Además, que los fundamentos que utilizaron las autoridades demandadas son los vigentes en el ejercicio 2007, lo que constituye una confesión expresa de que la causación de las obligaciones derivado de su hecho generador sucedió en el ejercicio fiscal 2007, siendo que la autoridad sólo revisó el ejercicio fiscal 2006, lo que contraviene las garantías de legalidad y seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio.

Por su parte, la autoridad demandada al momento de contestar la demanda, sostuvo la legalidad y validez tanto de la resolución impugnada como de la originalmente recurrida.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 417 -

A juicio de los Magistrados Integrantes de esta Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, resulta **parcialmente fundado** el concepto de impugnación en estudio, pero insuficiente para declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, por las siguientes consideraciones:

Por principio, cabe señalar que tal y como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 2030/99, **el régimen de consolidación fiscal**, en términos generales, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a grupos de empresas con intereses económicos comunes, que reúnen ciertas características y cumplen con los requisitos establecidos en la ley, de ser consideradas como una unidad económica y, bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales.

Asimismo, que las principales características del régimen de consolidación fiscal, son:

a) Reunir las utilidades y pérdidas de una entidad o unidad económica, integrada por la compañía controladora y sus controladas como si se tratara de una sola empresa, para que sobre este resultado se pague el impuesto.

b) Permitir que las pérdidas generadas por una sociedad del grupo que consolida sean amortizadas de inmediato contra las utilidades generadas por otras sociedades del mismo grupo, independientemente de que la controlada que la hubiera generado, todavía no tuviera la posibilidad de aplicar dichas pérdidas en lo individual.

El criterio que antecede, dio origen a la Jurisprudencia número P./J. 120/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de octubre de 2001, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 188647
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XIV, Octubre de 2001
Materia(s): Administrativa
Tesis: P./J. 120/2001
Página: 11

**CONSOLIDACIÓN FISCAL. NATURALEZA Y
CARACTERÍSTICAS DE ESE RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN.**

El régimen de consolidación fiscal, en términos generales, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a determinados grupos de empresas con intereses económicos comunes, que al reunir ciertas características y cumplir con los requisitos establecidos en la ley, son consideradas como una unidad económica, lo que les permite, bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales. Entre sus principales características se encuentran las de reunir las utilidades y pérdidas de una entidad o unidad económica, integrada por la compañía controladora y sus controladas, como si se tratara de una sola empresa, para que sobre este resultado se pague el impuesto, así como la de permitir que las pérdidas generadas por una sociedad del grupo que consolida sean amortizadas de inmediato contra las utilidades generadas de otras sociedades del mismo grupo, independientemente de que la controlada que hubiera resentido la pérdida todavía no tuviese la posibilidad de aplicarla en lo individual.

Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.

Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número 120/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil uno."

En esencia, el régimen de consolidación fiscal se inspiró en un beneficio concedido a cierto grupo de empresas, para lo cual, el legislador estableció una serie de modificaciones específicas del sistema tributario general, conformando un régimen diverso o especial para aquellas



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 419 -

sociedades mercantiles que decidieran acogerse a él, siempre y cuando cumplieran con determinados requisitos.

Sobre el particular, es necesario destacar que la conclusión que antecede se corrobora con el hecho de que la prerrogativa que se otorga al grupo de empresas que deciden acogerse al régimen de consolidación fiscal, no es un derecho autónomo, es decir, que sea factible de gozar de éste de una manera inmediata por la simple circunstancia de ubicarse dentro de los supuestos normativos que establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que para poder hacerlo efectivo, se requiere y es indispensable, que se cumplan determinados requisitos y condiciones objetivas (grupo de empresas y solicitud) para que se emita la autorización correspondiente, resolución particular y concreta expedida a quien lo solicite, toda vez que el Fisco debe proteger los intereses sociales que le corresponden estableciendo reglas para tal fin.

Por otro lado, conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, se define a la fusión y a la desincorporación en los términos siguientes:

Fusión

1. f. Acción y efecto de fundir o fundirse.
2. f. Unión de intereses, ideas o partidos.
3. f. Econ. Integración de varias empresas en una sola entidad, que suele estar legalmente regulada para evitar excesivas concentraciones de poder sobre el mercado.

Desincorporar

- 1.- tr. Separar lo que estaba incorporado. U. t. c. prnl.

Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que fusión es un negocio corporativo (exclusivo de sociedades) de carácter complejo y naturaleza contractual, desarrollado en diversas etapas sucesivas y cuyos efectos se traducen en la sucesión universal del activo y del pasivo de la o las sociedades fusionadas en favor de

la fusionante, lo que implica el paso y la adición de los socios de aquéllas a los de ésta; además, genera la extinción de la o las fusionadas, ya sea para incorporarse a una existente (fusión por incorporación) o para integrar y constituir una nueva (fusión por integración).

Esto es, que en el ámbito fiscal surgen diversas consecuencias y obligaciones con motivo de la firma del contrato o convenio de fusión, entre las cuales se encuentran la terminación anticipada del ejercicio de las fusionadas; la de solicitar autorización cuando se pretenda realizar una fusión dentro de los cinco años posteriores a que se hubiere llevado a cabo una anterior; las obligaciones que asumen los fedatarios públicos al protocolizar un convenio de fusión; las de dictaminar y presentar los avisos y declaraciones correspondientes, así como la actualización de supuestos de desincorporación o desconsolidación del régimen de consolidación fiscal.

El anterior criterio, lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1a./J. 91/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de noviembre de 2013, la cual señala lo siguiente:

“Época: Décima Época
Registro: 2004913
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1
Materia(s): Administrativa
Tesis: 1a./J. 91/2013 (10a.)
Página: 333

FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. EN MATERIA FISCAL, SURTE EFECTOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO O CONVENIO RESPECTIVO. La fusión es un negocio corporativo (exclusivo de sociedades) de carácter complejo y naturaleza contractual, desarrollado en diversas etapas sucesivas y cuyos efectos se traducen en la sucesión universal del activo y del pasivo de la o las sociedades fusionadas en favor de la fusionante, lo que implica el paso y la adición de los socios de aquéllas a los de ésta; además, genera la extinción de la o las fusionadas, ya sea para incorporarse a una existente (fusión por incorporación) o para integrar y constituir una nueva (fusión por integración). Ahora, si bien es cierto que la naturaleza del acto de fusión es eminentemente mercantil, según se advierte de los artículos 222 a 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyos efectos para con los acreedores de las sociedades participantes y relaciones jurídicas de índole comercial, siguen surtiéndose tres meses después de su inscripción en el Registro Público de Comercio, también lo es que, en materia fiscal, es distinto, porque



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 421 -

en ésta la legislación pretende que el fisco tenga conocimiento de determinados actos atendiendo a la realidad económica y financiera de la empresa desde que se realiza la fusión. Así, de los artículos 11, 14, fracción IX, 14-B, 32-A, fracción III, y 27 del Código Fiscal de la Federación, 19 y 20 de su reglamento, así como 14, párrafo antepenúltimo, 25, párrafos primero, tercero y cuarto, y 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deriva que el legislador ha regulado los diversos efectos originados a partir de la eficacia jurídica interna de la fusión, es decir, los derechos y las obligaciones derivados del contrato o acuerdo de fusión válidamente adoptado, los que inician con una serie de actos para instrumentar la incorporación de bienes en la sociedad fusionante o en la que surja de la fusión, así como para que ésta continúe con las actividades de las fusionadas. **Esto es, en el ámbito fiscal surgen diversas consecuencias y obligaciones con motivo de la firma del contrato o convenio de fusión, entre las cuales se encuentran la terminación anticipada del ejercicio de las fusionadas; la de solicitar autorización cuando se pretenda realizar una fusión dentro de los cinco años posteriores a que se hubiere llevado a cabo una anterior; las obligaciones que asumen los fedatarios públicos al protocolizar un convenio de fusión; las de dictaminar y presentar los avisos y declaraciones correspondientes, así como la actualización de supuestos de desincorporación o desconsolidación del régimen de consolidación fiscal.** Tales aspectos regulados son parte de la realidad (económica y jurídica) de las empresas que participan en la fusión y no dependen de la inscripción del convenio en el Registro Público de Comercio, pues ocurren sin necesidad de que ésta se realice. Por tanto, en materia fiscal, la fusión surte efectos desde el momento en que se firma el contrato o convenio de fusión, derivado de la regulación que las disposiciones aplicables realizan de la eficacia y consecuencias que genera para las partes y los socios tal acto jurídico, salvo cuando haya existido oposición judicial en la vía sumaria por cualquier acreedor, siempre que hubiere sido declarada fundada.

Contradicción de tesis 452/2011. Suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 10 de julio de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

Tesis de jurisprudencia 91/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece."

(El énfasis es nuestro)

Mientras que la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que la desincorporación, se actualiza cuando una empresa controlada desaparece con motivo de la fusión.

En ese sentido, esta Juzgadora considera necesario tener presente el contenido de los artículos 66 y 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007, los cuales a la letra señalan lo siguiente:

“Artículo 66. Para los efectos de esta Ley se consideran sociedades controladas aquéllas en las cuales más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de una sociedad controladora. Para estos efectos, la tenencia indirecta a que se refiere este artículo será aquella que tenga la sociedad controladora por conducto de otra u otras sociedades que a su vez sean controladas por la misma sociedad controladora.”

“Artículo 71. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual.

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos sexto y séptimo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que dicha sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.3889 se sumará en su totalidad.

Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 423 -

cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate. Tratándose de los dividendos, éstos se actualizarán desde la fecha de su pago y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. Los saldos de la cuenta y el registro a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo que se tengan a la fecha de la desincorporación se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se realice la desincorporación.

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación. Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución.

Sexto párrafo (Se deroga).

La sociedad controladora comparará el saldo del registro de utilidades fiscales netas de la controlada que se desincorpora con el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas. En caso de que este último fuera superior al primero se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente. Si por el contrario, el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas fuera inferior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889. La controladora, en este último caso, podrá tomar una pérdida fiscal en los términos del artículo 61 de esta Ley por un monto equivalente a la utilidad acumulada, la cual se podrá disminuir en la declaración del ejercicio siguiente a aquél en que se reconozcan los efectos de la desincorporación. El saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas se disminuirá con el saldo del mismo registro correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora.

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad controladora comparará el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad controlada que se desincorpora con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada. En el caso de que este último sea superior al primero sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora. Si por el contrario el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior al de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889 y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora, hasta llevarla a cero.

En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación.

Las sociedades que se encuentren en suspensión de actividades deberán desincorporarse cuando esta situación dure más de un año. Cuando por segunda ocasión en un periodo de cinco ejercicios contados a partir de la fecha en que se presentó el aviso de suspensión de actividades por primera ocasión, una sociedad se encuentre en suspensión de actividades, la desincorporación será inmediata.

Cuando la sociedad controladora deje de determinar su resultado fiscal consolidado estará a lo dispuesto en este artículo por cada una de las empresas del grupo incluida ella misma.

En el caso en que el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto correspondiente dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se efectúe la desconsolidación. Tratándose del caso en que el grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, la sociedad controladora enterará el impuesto derivado de la desconsolidación dentro del mes siguiente a la fecha en que obtenga la autorización para dejar de consolidar.

Las sociedades controladoras a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Cuando el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la controladora deberá presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

En el caso en que el grupo hubiera optado por dejar de consolidar su resultado fiscal con anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que surtió efectos la autorización de consolidación, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto derivado de la desconsolidación, con los recargos calculados por el periodo transcurrido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber consolidado en los términos de este Capítulo y hasta que el mismo se realice. Para estos efectos, el Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general.

Cuando durante un ejercicio se desincorporen una o varias sociedades cuyos activos en su totalidad representen el 85% o más del valor total de los activos del grupo que consolide fiscalmente al momento de la desincorporación, y este hecho ocurra con anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que el grupo empezó a consolidar su resultado fiscal, se considerará que se trata de una desconsolidación, debiéndose pagar el impuesto y los recargos en los términos establecidos en el párrafo anterior. Para los efectos de este párrafo, el valor de los activos será el determinado conforme al artículo 9o-A de esta Ley.

En el caso en que la sociedad controladora continúe consolidando a una sociedad que deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley por más de un ejercicio, hubiera o no presentado el aviso, deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas y enterar el impuesto y los recargos conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 425 -

La sociedad controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 72 de esta Ley, deberá desconsolidar y enterar el impuesto diferido por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal en los términos de este artículo.

En caso de que con anterioridad a la desincorporación de una sociedad se hubiera efectuado una enajenación parcial de acciones de dicha sociedad, la parte de los dividendos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo que se adicionará a la utilidad fiscal consolidada o se disminuirá de la pérdida fiscal consolidada será la que no se hubiera disminuido en la enajenación referida, en los términos del artículo 73 de esta Ley."

El artículo 66 que de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que antecede, establece que las sociedades controladas son aquéllas en las cuales más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de una sociedad controladora.

Asimismo, que para estos efectos, la tenencia indirecta será aquella que tenga la sociedad controladora por conducto de otra u otras sociedades que a su vez sean controladas por la misma sociedad controladora.

Por su parte, del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta antes transcrito se desprende lo siguiente:

1.- Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto (primer párrafo).

2.- La sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual (primer párrafo).

3.- La sociedad controladora **deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio** (segundo párrafo).

4.- Para lo cual **sumará** o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, **el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores** a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, **que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación** (segundo párrafo).

5.- Considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron:

a) Las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado.

b) Las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos sexto y séptimo del artículo en comento.

c) Los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta multiplicados por el factor de 1.3889. (segundo párrafo).

6.- Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta estarán a lo dispuesto en el párrafo segundo que nos ocupa, siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de la citada Ley (segundo párrafo).

7.- Para los efectos del párrafo segundo del citado precepto legal, **las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores**, así como las pérdidas en enajenación de acciones **correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que dicha sociedad se desincorpore**. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el segundo párrafo por el factor de 1.3889 se sumará en su totalidad (tercer párrafo).

8.- Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad (cuarto párrafo).

9.- En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de la Ley en cita, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate (cuarto párrafo).

10.- Tratándose de los dividendos, éstos se actualizarán desde la fecha de su pago y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad (cuarto párrafo).

11.- Los saldos de la cuenta y el registro a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de dicho artículo que se tengan a la fecha de la desincorporación se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se realice la desincorporación (cuarto párrafo).

12.- Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación (quinto párrafo).

13.- Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución (quinto párrafo).

14.- Sexto párrafo (Se deroga).

15.- La sociedad controladora comparará el saldo del registro de utilidades fiscales netas de la controlada que se desincorpora con el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas (séptimo párrafo).

16.- En caso de que el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas fuera superior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la controlada que se desincorpora (séptimo párrafo) la sociedad controladora comparará el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad controlada que se desincorpora con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada (octavo párrafo).

17.- En el caso de que este último sea superior al primero sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora (octavo párrafo).

18.- Si por el contrario el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior al de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889 y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora, hasta llevarla a cero (octavo párrafo).

19.- Si por el contrario, el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas fuera inferior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889 (séptimo párrafo).

20.- La controladora, en este último caso, podrá tomar una pérdida fiscal en los términos del artículo 61 de la Ley en mención por un monto equivalente a la utilidad acumulada, la cual se podrá disminuir en la declaración del ejercicio siguiente a aquél en que se reconozcan los efectos de la desincorporación (séptimo párrafo).

21.- El saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas se disminuirá con el saldo del mismo registro correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora (séptimo párrafo).

22.- En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión (noveno párrafo).

23.- En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación (noveno párrafo).

24.- Las sociedades que se encuentren en suspensión de actividades deberán desincorporarse cuando esta situación dure más de un año (décimo párrafo).

25.- Cuando por segunda ocasión en un periodo de cinco ejercicios contados a partir de la fecha en que se presentó el aviso de suspensión de actividades por primera ocasión, una sociedad se encuentre en suspensión de actividades, la desincorporación será inmediata (décimo párrafo).

26.- Cuando la sociedad controladora deje de determinar su resultado fiscal consolidado estará a lo dispuesto en este artículo por cada una de las empresas del grupo incluida ella misma (décimo primer párrafo).

27.- En el caso en que el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto correspondiente dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se efectúe la desconsolidación (décimo segundo párrafo).

28.- Tratándose del caso en que el grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, la sociedad controladora enterará el impuesto derivado de la desconsolidación dentro del mes siguiente a la fecha en que obtenga la autorización para dejar de consolidar (décimo segundo párrafo).

29.- Las sociedades controladoras del grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, deberán presentar la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general (décimo tercer párrafo).

30.- Cuando el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de dicha Ley y del octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafos del artículo que nos ocupa, la controladora deberá presentar el aviso ante las autoridades fiscales dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto (décimo tercer párrafo).

31.- En el caso en que el grupo hubiera optado por dejar de consolidar su resultado fiscal con anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que surtió efectos la autorización de consolidación, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto derivado de la desconsolidación, con los recargos calculados por el periodo transcurrido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber consolidado en los términos de este Capítulo y hasta que el mismo se realice, para lo cual el Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general (décimo cuarto párrafo).

32.- Cuando durante un ejercicio se desincorporen una o varias sociedades cuyos activos en su totalidad representen el 85% o más del valor total de los activos del grupo que consolide fiscalmente al momento de la desincorporación, y este hecho ocurra con anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que el grupo empezó a consolidar su resultado fiscal, se considerará que se trata de una desconsolidación (décimo quinto párrafo).

33.- Para lo cual, se deberá pagar el impuesto y los recargos calculados por el periodo transcurrido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber consolidado en los términos de este Capítulo y hasta que el mismo se realice, al respecto el Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general (décimo quinto párrafo).



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 431 -

34.- Para los efectos del párrafo décimo quinto el valor de los activos será el determinado conforme al artículo 9-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

35.- En el caso en que la sociedad controladora continúe consolidando a una sociedad que deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley por más de un ejercicio, hubiera o no presentado el aviso, deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas y enterar el impuesto y los recargos conforme a lo señalado en los puntos 32 a 34 (antepenúltimo párrafo).

36.- La sociedad controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 72 de esta Ley, deberá desconsolidar y enterar el impuesto diferido por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal en los términos del artículo en cuestión (penúltimo párrafo).

37.- Finalmente, en caso de que con anterioridad a la desincorporación de una sociedad se hubiera efectuado una enajenación parcial de acciones de dicha sociedad, la parte de los dividendos a que se refiere el segundo párrafo de dicho artículo que se adicionará a la utilidad fiscal consolidada o se disminuirá de la pérdida fiscal consolidada será la que no se hubiera disminuido en la enajenación referida, en los términos del artículo 73 de la ley de la materia (último párrafo).

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte actora manifiesta que las resoluciones impugnadas contenidas en los oficios números 900 04 05-2015-177797 de fecha 25 de julio de 2013 y 900-05-2013-4822915 19 de fecha febrero de 2015, son ilegales por la indebida interpretación y aplicación que realizó la autoridad del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

Ello al considerar que no puede interpretarse que toda fusión de sociedades controladas debe necesariamente ser considerada como una desincorporación, ya que el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta

vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, disponía expresamente que en el caso de fusión de sociedades, no existía desincorporación cuando la controlada que se disolvía fuera absorbida por otra u otras controladas de la misma controladora, o cuando la controladora se fusionara a una controlada del mismo grupo.

Además, que el artículo 71, noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2013, es omiso en citar con claridad qué debe suceder con respecto al caso en que la nueva empresa resultante de la fusión de empresas controladas se mantenga tributando bajo el régimen de consolidación fiscal, como sí lo señalaba de manera textual la ley anterior del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, que no obstante en el dictamen de la Cámara de Diputados se propuso considerar como desincorporación a la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación, la redacción plasmada en última instancia en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2002, no introdujo dicha consideración de manera expresa.

Por lo que, la actora considera que la interpretación que debe hacerse del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es en el sentido de que en el caso de una fusión dentro del mismo grupo de consolidación, no debe considerarse como un supuesto de desincorporación, toda vez que no fue la intención del legislador introducir una disposición tan limitativa como la que nos ocupa, sino que continúa rigiendo lo dispuesto por el artículo 57-J de la Ley abrogada el 31 de diciembre de 2001.

Para dilucidar lo anterior, esta Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, estima necesario atender a la iniciativa turnada el 5 de abril de 2001 a la comisión de Hacienda y Crédito Público, misma que dio origen al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, así como la exposición de motivos a su respectiva modificación, las cuales son del tenor siguiente:

“Jueves 5 de abril de 2001

**Propuesta de la Nueva Hacienda Pública Distributiva
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

“(…)”



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 433 -

Artículo 72. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser controlada, en forma individual.

La controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará según sea el caso a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, los conceptos especiales de consolidación que con motivo de la desincorporación de la sociedad que deja de ser controlada deben considerarse como efectuados con terceros, desde la fecha en que se realizó la operación que los hizo calificar como conceptos especiales de consolidación, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera decretado o acordado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.4706. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley a que se refieren las fracciones III y VII del artículo 69 de la misma Ley, no estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de dicha Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, los conceptos especiales de consolidación y las pérdidas de ejercicios anteriores correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán o restarán según corresponda, en la participación consolidable al cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél en que dicha sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.4706 se sumará en su totalidad.

Los conceptos especiales de consolidación mencionados se actualizarán por el período comprendido desde el último mes del ejercicio en que se realizó la operación que dio lugar a dichos conceptos tratándose de las operaciones a que se refieren las fracciones I y IV del artículo 69 de esta Ley, y hasta el mes en que se realice la desincorporación. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones a que se refieren las fracciones III y VII del artículo 69 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta

Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate. Tratándose de los dividendos, éstos se actualizarán desde la fecha de su decreto o acuerdo y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. Los saldos de las cuentas y registros a que se refieren los párrafos séptimo y octavo de este artículo que se tengan a la fecha de la desincorporación, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se realice la desincorporación.

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación. Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución.

La sociedad controladora disminuirá del monto del impuesto al activo consolidado pagado en ejercicios anteriores que tenga derecho a recuperar, el que corresponda a la sociedad que se desincorpora, y en caso de que el monto del impuesto al activo consolidado que la controladora tenga derecho a recuperar sea inferior al de la sociedad que se desincorpora, la controladora pagará la diferencia ante las oficinas autorizadas, dentro del mes siguiente a la fecha de la desincorporación. Para estos efectos, la controladora entregará a la controlada que se desincorpora una constancia que permita a esta última la recuperación del impuesto al activo que le corresponda.

La controladora comparará el saldo del registro de utilidades fiscales netas de la controlada que se desincorpora con el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas. En caso de que este último fuera superior al primero se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente. Si por el contrario el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas fuera inferior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.4706. La controladora, en este último caso, podrá tomar una pérdida fiscal en los términos del artículo 61 de esta Ley por un monto equivalente a la utilidad acumulada, en la declaración del ejercicio siguiente a aquél en que se reconozcan los efectos de la desincorporación. El saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas se disminuirá con el saldo del mismo registro correspondiente a la controlada que se desincorpora.

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, la controladora comparará el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la controlada que se desincorpora con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada. En caso de que este último sea superior al primero sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la controlada que se desincorpora. Si por el contrario el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior al de la controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.4706 y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la controlada que se desincorpora, hasta llevarla a cero.

En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 435 -

absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora, o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo.

Las sociedades que se encuentren en suspensión de actividades deberán desincorporarse cuando esta situación dure más de un año. Cuando por segunda ocasión en un periodo de cinco ejercicios contados a partir de la fecha en que se presentó el aviso de suspensión de actividades por primera ocasión, una sociedad se encuentre en suspensión de actividades, la desincorporación será inmediata.

Cuando la controladora deje de determinar su resultado fiscal consolidado estará a lo dispuesto en este artículo por cada una de las empresas del grupo, incluida ella misma.

En el caso en que el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo de este artículo, la controladora deberá enterar el impuesto correspondiente dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se efectúe la desconsolidación. Tratándose del caso en que el grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, la controladora enterará el impuesto derivado de la desconsolidación dentro del mes siguiente a la fecha en que obtenga la autorización para dejar de consolidar.

Las sociedades controladoras a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Cuando el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo de este artículo, la controladora deberá presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

La controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 73 de esta Ley, deberá desconsolidar y enterar el impuesto diferido por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal en los términos de este artículo.

En caso de que con anterioridad a la desincorporación de una sociedad se hubiera efectuado una enajenación parcial de acciones de dicha sociedad, la parte de los dividendos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo que se adicionará a la utilidad fiscal consolidada o se disminuirá de la pérdida fiscal consolidada será la que no se hubiera disminuido en la enajenación referida, en los términos del artículo 74 de esta Ley.”

(http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Iniciativas/58/gp58_a1segundo.html)

(El énfasis es nuestro)

Al respecto, el 29 de diciembre de 2001, por conducto de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del H.

Congreso de la Unión la Iniciativa de "Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales", misma que fue turnada el jueves 5 de abril de 2001, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, el cual en la parte de interés se hizo en los siguientes términos:

**"COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
HONORABLE ASAMBLEA:**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I y 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por conducto de esta H. Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de "Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales", misma que fue turnada el jueves 5 de abril de 2001, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

Esta Comisión que suscribe con base en las facultades antes señaladas, se abocó al análisis de la Iniciativa de Decreto del Ejecutivo, determinándose por parte de la Mesa Directiva que lo más conveniente para su adecuado dictamen era el de separarla por temas específicos, dado lo amplio y diverso de su contenido.

En tal sentido, en el presente dictamen se aborda lo relativo a los Artículos Primero y Segundo de la Iniciativa de Decreto antes citado referentes a la expedición de una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de sus correspondientes disposiciones transitorias.

Por acuerdo de la Comisión de Hacienda se constituyó un grupo de trabajo con diputados integrantes de la Comisión y aquellos otros legisladores que manifestaron su interés por participar. Para tal efecto se inscribieron un total de 26 Diputados, de los cuales 10 pertenecen al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 6 al Partido Acción Nacional, 7 al Partido de la Revolución Democrática, y uno por cada uno de los siguientes Grupos Parlamentarios: Partidos Verde Ecologista de México, Sociedad Nacionalista y del Trabajo.

Desde su instauración a fines de mayo, se llevaron a cabo un total de 20 sesiones con una asistencia promedio de 7 Diputados por reunión, en las que se recibió a diversas representaciones sindicales entre las cuales estuvieron el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el de Telefonistas de la República Mexicana, de los Trabajadores del IMSS y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores; también se recibió al Consejo Nacional Agropecuario y a la Confederación Nacional Ganadera, entre otras organizaciones gremiales.

Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Confederación Patronal de la República Mexicana y de igual forma, la Industria Nacional de Autopartes, el Movimiento Unificado de Comerciantes de los Mercados Públicos de la República Mexicana, además diversos centros de investigación y enseñanza superior.

Se contó, por otro lado, con la participación activa de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, quienes proporcionaron toda aquella información técnica y jurídica que permitió profundizar y



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 437 -

aclarar diversos cuestionamientos que se presentaron acerca de la iniciativa en estudio.

Derivado de la complejidad y amplitud de la parte relativa a los regímenes especiales de tributación, se optó por crear un grupo específico dedicado al análisis y evaluación de la propuesta relativa a estas actividades. Dicho grupo se integró por 14 Diputados de diversos Grupos Parlamentarios: 7 del PRI, 4 del PAN y 3 del PRD.

Realizaron un total de 6 reuniones de trabajo en las cuales se atendieron en audiencia a diversas organizaciones del sector agropecuario y del autotransporte, principalmente provenientes del interior del país, mismas que convergieron en la presentación de 6 propuestas específicas que se analizaron por este grupo.

De la misma forma, para la elaboración del presente dictamen se tomaron en consideración diversas iniciativas, propuestas y estudios que hicieron llegar tanto los Grupos Parlamentarios, como Diputados en lo individual; Congresos Locales de varias entidades, así como institutos, cámaras y asociaciones, mismas que fueron atendidas por los grupos de trabajo.

Conforme a los resultados de estos dos grupos de trabajo y de las deliberaciones y el análisis de los miembros de esta Comisión de Hacienda reunidos en pleno, se presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

ANTEPROYECTO DE DICTAMEN
DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

b) Propuestas de modificación a la Iniciativa de Ley

De acuerdo a lo anterior, esta Dictaminadora ha considerado conveniente incorporar a la Iniciativa analizada, como resultado de su evaluación y análisis, y en consideración a los diversos estudios, iniciativas y propuestas examinadas por el Grupo de Trabajo creado ex-profeso, los siguientes cambios al proyecto de Ley, en el entendido de que, por lo extenso de los mismos, los textos legales propuestos, se presentan en el anexo que forma parte integral del presente dictamen:
(...)

Título I

Disposiciones Generales
Capítulo VI

Del Régimen de Consolidación Fiscal

El Régimen de Consolidación Fiscal surge en 1982 como resultado de la incorporación del Capítulo IV "De las sociedades mercantiles controladoras", dentro del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Desde entonces, el régimen ha sufrido diversas modificaciones y adecuaciones, algunas de las cuales fueron motivadas por los cambios que experimentaron otras disposiciones fiscales, destacando por su importancia, la entrada en vigor de la base nueva en sustitución de la base tradicional en la Ley Impuesto

sobre la Renta, así como la mecánica para determinar el Impuesto al Activo de manera consolidada y la Reforma Fiscal de 1999, en la cual se introdujo el concepto de participación consolidable (60% de la participación accionaria de la controladora en la controlada).

La incorporación del régimen de consolidación fiscal en la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, ha permitido la integración financiera, económica y organizacional de grupos de empresas con determinados intereses comunes o con ciertas similitudes que deciden actuar como un solo ente económico, con el objeto de optimizar sus procesos productivos y, consecuentemente, lograr una mayor competitividad y desarrollo como grupo en los mercados domésticos e internacionales.

Derivado de lo anterior, y después de realizar el análisis correspondiente de la Iniciativa de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de consolidación fiscal presentada por el Ejecutivo, esta Comisión, con la finalidad de simplificar la mecánica en la determinación del resultado fiscal consolidado, de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes de este régimen, así como de adecuarlo a las prácticas internacionales y ajustarlo con los cambios efectuados al régimen general de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, estima necesario realizar las siguientes adecuaciones:

(...)

h) Fusión de sociedades

Cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan y en el caso de que la sociedad que desaparezca sea la controladora, se considerará que existe desconsolidación.

(...)"

En consecuencia, como resultado del estudio y dictamen realizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al decreto que establece, reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones fiscales de la ley del Impuesto sobre la Renta, en la parte de interés, específicamente es el artículo 71 quedó como sigue:

"Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 910-I, sábado 29 de diciembre de 2001

**De la iniciativa recibida el 5 de abril
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON
PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE, REFORMA,
ADICIONA, Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**

(...)

Artículo 71. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 439 -

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.4706. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que dicha sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.4706 se sumará en su totalidad.

Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate. Tratándose de los dividendos, éstos se actualizarán desde la fecha de su pago y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. Los saldos de la cuenta y el registro a que se refieren los párrafos séptimo y octavo de este artículo que se tengan a la fecha de la desincorporación, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se realice la desincorporación.

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la fecha en que se efectúe la desincorporación. Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución.

La sociedad controladora disminuirá del monto del impuesto al activo consolidado pagado en ejercicios anteriores que tenga derecho a recuperar, el que corresponda a la sociedad que se desincorpora, y en el caso de que el monto del impuesto al activo consolidado que la controladora tenga derecho a recuperar sea inferior al de la sociedad que se desincorpora, la sociedad controladora pagará la diferencia ante las oficinas autorizadas, dentro del mes siguiente a la fecha de la desincorporación. Para estos efectos, la sociedad controladora entregará a la sociedad controlada que se desincorpora una constancia que permita a esta última la recuperación del impuesto al activo que le corresponda.

La sociedad controladora comparará el saldo del registro de utilidades fiscales netas de la controlada que se desincorpora con el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas. En caso de que este último fuera superior al primero se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente. Si por el contrario, el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas fuera inferior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.4706. La controladora, en este último caso, podrá tomar una pérdida fiscal en los términos del artículo 61 de esta Ley por un monto equivalente a la utilidad acumulada, la cual se podrá disminuir en la declaración del ejercicio siguiente a aquél en que se reconozcan los efectos de la desincorporación. El saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas se disminuirá con el saldo del mismo registro correspondiente a la controlada que se desincorpora.

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad controladora comparará el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad controlada que se desincorpora con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada. En el caso de que este último sea superior al primero sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora. Si por el contrario el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior al de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.4706 y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora, hasta llevarla a cero.

En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación.

Las sociedades que se encuentren en suspensión de actividades deberán desincorporarse cuando esta situación dure más de un año. Cuando por segunda ocasión en un periodo de cinco ejercicios contados a partir de la fecha en que se presentó el aviso de suspensión de actividades por primera ocasión, una sociedad se encuentre en suspensión de actividades, la desincorporación será inmediata.

Cuando la sociedad controladora deje de determinar su resultado fiscal consolidado estará a lo dispuesto en este artículo por cada una de las empresas del grupo incluida ella misma.

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 441 -

En el caso en que el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto correspondiente dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se efectúe la desconsolidación. Tratándose del caso en que el grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, la sociedad controladora enterará el impuesto derivado de la desconsolidación dentro del mes siguiente a la fecha en que obtenga la autorización para dejar de consolidar.

Las sociedades controladoras a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Cuando el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos de este artículo, la controladora deberá presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

En el caso en que el grupo hubiera optado por dejar de consolidar su resultado fiscal con anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que surtió efectos la autorización de consolidación, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto derivado de la desconsolidación, con los recargos calculados por el periodo transcurrido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber consolidado en los términos de este Capítulo y hasta que el mismo se realice. Para estos efectos, el Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general.

Cuando durante un ejercicio se desincorporen una o varias sociedades cuyos activos en su totalidad representen el 85% o más del valor total de los activos del grupo que consolide fiscalmente al momento de la desincorporación, y este hecho ocurra con anterioridad a que haya concluido el plazo de cinco ejercicios desde que el grupo empezó a consolidar su resultado fiscal, se considerará que se trata de una desconsolidación, debiéndose pagar el impuesto y los recargos en los términos establecidos en el párrafo anterior. Para los efectos de este párrafo, el valor de los activos será el determinado conforme al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo.

En el caso en que la sociedad controladora continúe consolidando a una sociedad que deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley por más de un ejercicio, hubiera o no presentado el aviso, deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas y enterar el impuesto y los recargos conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

La sociedad controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 72 de esta Ley, deberá desconsolidar y enterar el impuesto diferido por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal en los términos de este artículo.

En caso de que con anterioridad a la desincorporación de una sociedad se hubiera efectuado una enajenación parcial de acciones de dicha sociedad, la parte de los dividendos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo que se adicionará a la utilidad fiscal consolidada o se disminuirá de la pérdida fiscal consolidada será la que no se hubiera disminuido en la enajenación referida, en los términos del artículo 73 de esta Ley.”

(<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2001/dic/20011229-I.html>)

(El énfasis es nuestro)

De lo anterior, se desprende que en principio el Ejecutivo Federal en el artículo 72 del proyecto correspondiente al decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, señaló que en el caso de fusión de sociedades, se consideraría que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora, o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo.

Sin embargo, la iniciativa de ley del 5 de abril de 2001, que contenía tal determinación fue modificada el 29 de diciembre de 2001, al considerar que era conveniente incorporar a la Iniciativa analizada, como resultado de su evaluación y análisis y en consideración a los diversos estudios, iniciativas y propuestas examinadas por el Grupo de Trabajo creado ex-profeso, diversos cambios al proyecto de Ley.

Así, respecto al **Régimen de Consolidación Fiscal**, se señaló que surgió en 1982 como resultado de la incorporación del Capítulo IV “De las sociedades mercantiles controladoras”, dentro del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que desde entonces, el régimen ha sufrido diversas modificaciones y adecuaciones, algunas de las cuales fueron motivadas por los cambios que experimentaron otras disposiciones fiscales, destacando por su importancia, la entrada en vigor de la base nueva en sustitución de la base tradicional en la Ley Impuesto sobre la Renta, así como la mecánica para determinar el Impuesto al Activo de manera consolidada y la Reforma Fiscal de 1999, en la cual se introdujo el concepto de participación consolidable (60% de la participación accionaria de la controladora en la controlada).

Además, se señaló que la incorporación del régimen de consolidación fiscal en la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, ha permitido la integración financiera, económica y organizacional de grupos de empresas con determinados intereses comunes o con ciertas similitudes que deciden

actuar como un solo ente económico, con el objeto de optimizar sus procesos productivos y, consecuentemente, lograr una mayor competitividad y desarrollo como grupo en los mercados domésticos e internacionales.

Que derivado de lo anterior, y después de realizar el análisis correspondiente de la Iniciativa de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de consolidación fiscal presentada por el Ejecutivo el 5 de abril de 2001, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de simplificar la mecánica en la determinación del resultado fiscal consolidado, de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes de este régimen, así como de adecuarlo a las prácticas internacionales y ajustarlo con los cambios efectuados al régimen general de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, estima necesario realizar entre otras las siguientes adecuaciones:

Respecto a la fusión de sociedades, se señaló que **cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus resultados fiscalmente, y con motivo de dicho acto desaparezcan una o varias de las sociedades controladas, se considerará que existe desincorporación de las sociedades que desaparezcan y en el caso de que la sociedad que desaparezca sea la controladora, se considerará que existe desconsolidación.**

En ese sentido, en el artículo 71 del proyecto del decreto que establece, reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002, **establece que en el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión**, así como que en el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación, tal y como refirió la Comisión de Hacienda y Crédito Público se modificaría.

Por lo que, resulta evidente que como lo refiere la autoridad demandada, la intención del legislador fue determinar que cuando se lleve a cabo una fusión de sociedades dentro de un grupo que consolida sus

resultados fiscalmente y en consecuencia desaparezcan una o varias de las empresas controladas debe considerarse que existe desincorporación.

Pues, de no haber sido esa la intención del legislador, hubiese dejado el texto como se encontraba en el artículo 72 de la iniciativa presentada el 5 de abril de 2001, lo que se insiste no sucedió en la especie a que dicha iniciativa fue modificada el 29 de diciembre de 2001 y al haber cambiado el legislador el texto del citado artículo, para plasmarlo en el diverso 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero de 2002, debe interpretarse que la intención del legislador fue determinar que toda fusión que se lleve a cabo entre sociedades controladas, darían origen a una desincorporación, aún si estas pertenecen a un mismo grupo de consolidación fiscal.

Ahora bien, el artículo 57-J de la Ley del Impuesto Sobre la Renta abrogada el 31 de diciembre de 2001, sostenía que en el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo, a saber:

“Artículo 57-J. (...)

En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo.

Lo anterior, tal y como se desprende del siguiente cuadro comparativo:

Ley del Impuesto Sobre la Renta Derogada el 31 de diciembre de 2001	Jueves 5 de abril de 2001	Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 910-I, sábado 29 de diciembre de 2001
	Propuesta de la Nueva Hacienda Pública Distributiva	
	CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, QUE INCLUYE: Exposición de Motivos.	DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA, Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 57-J. (...)	Artículo 72. (...)	Artículo 71. (...)
En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo.	En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora, o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo.	<p>En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación.</p> <p>(texto correspondiente al contenido del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero de 2002, vigente hasta el 1° de enero de 2014)</p>

En ese orden de ideas, es la iniciativa de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada el 5 de abril de 2001, modificada el 29 de diciembre del mismo año, con el contenido del artículo 71, propuso modificar lo establecido en el diverso 57-J de la Ley del Impuesto Sobre la Renta abrogada el 31 de diciembre de 2001, en cuanto a las consecuencias que derivan de la fusión de sociedades controladas.

Por tanto, resulta evidente que con la publicación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero de 2002, el legislador decidió suprimir el contenido del artículo 57-J de la ley abrogada, al igual que decidió no dejar el contenido del artículo 72 del proyecto de decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales del 5 de abril de 2001.

Lo anterior es así, pues del análisis realizado a la evolución de una de las figuras (desincorporación) que contiene el noveno párrafo del

artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007, se desprende que la verdadera intención del legislador fue quitar la excepción prevista para la consecuencia en caso de fusión realizada por sociedades controladas y determinar que se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, sean o no pertenecientes al mismo grupo de la consolidación fiscal.

Así, al haberse modificado del artículo 72, noveno párrafo del proyecto de decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales del 5 de abril de 2001, (artículo 71, con la modificación del 29 de diciembre de 2001), la premisa de que en el caso de fusión de sociedades, se considerarían que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora, o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo, entonces debe entenderse que el legislador no tuvo la intención de que tal circunstancia prevaleciera.

Pues contrario a las aseveraciones de la parte actora, si el artículo 71 de la ley de la materia vigente en 2007, no establece que sucederá respecto al caso en que la nueva empresa resultante de la fusión de sociedades controladas se mantenga tributando bajo el régimen de consolidación fiscal como lo establecía el artículo 57-J de la ley abrogada en 2001, entonces debe entenderse que se configuró la desincorporación de la misma.

Ya que al no contener de manera expresa el artículo 71 en comentario si se podría o no considerar desincorporación la fusión de sociedades dentro del mismo grupo de consolidación fiscal y atendiendo a la modificación del 29 de diciembre de 2001, debe entenderse que la verdadera intención del legislador fue no hacer diferencia, en el sentido de que se consideraría que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, sean estas del mismo grupo de consolidación fiscal o no.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, el 18 de octubre de 2007, las sociedades controladas ***** y *****
***** se fusionaron a ***** (todas sociedades de la contribuyente ***** actualmente *****
***** hoy actora), tal y como se desprende del Instrumento



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 447 -

Notarial número 36,446, volumen 880 de fecha 18 de octubre de 2007, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria Pública número 155 del Distrito Federal ahora Ciudad de México, a saber:



195 NOTARIAS 18

ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO
PATRICIO GARZA BANDALA



----- 3 6 , 4 4 6 -----
----- INSTRUMENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS -----
----- VOLUMEN OCHOCIENTOS OCHENTA. -----
----- EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a dieciocho de octubre de dos mil siete, yo, ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO, Notaria Pública Ciento Noventa y Cinco del Distrito Federal, plenamente facultada en este acto, hago constar: -----

----- I.- LA DECLARACION DE QUE SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES APLICABLES A LA ESCISION DE -----

----- II.- LA DECLARACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION A QUE ESTUVO SUJETA LA CONSTITUCION POR ESCISION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA -----

ambos actos a solicitud del señor ----- en representación de -----

----- III.- LA DECLARACION DE QUE SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES APLICABLES A LA ESCISION DE -----

----- IV.- LA DECLARACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION A QUE ESTUVO SUJETA LA CONSTITUCION POR ESCISION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA -----

los actos a que se refieren los puntos tres y cuatro a solicitud del señor ----- en representación de -----

----- V.- LA FUSION de ----- VARIABLE COMO FUSIONANTE, CON -----

COMO



20066

ASAMBLEAS, ASI COMO EL AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE DE LA ERSIONANTE Y LA REVOCACION DE PODERES DE LAS FUSIONADAS, todo lo anterior como resultado de la protocolización de las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de accionistas de las expresadas sociedades en las que se adoptaron dichos acuerdos, y del convenio de fusión respectivo, a solicitud de la licenciada Ana Patricia Gutiérrez de Velasco Hernández, delegada especial de las mismas, en los términos de los siguientes ANTECEDENTES y CLAUSULAS: - - - - -

ANTECEDENTES

- - - Los comparecientes acreditan la legal constitución y existencia de las sociedades, así como la validez y eficacia de los acuerdos que más adelante se protocolizan, con los documentos que a continuación se relacionan, manifestando bajo protesta de decir verdad, advertidos de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante Notario, que las sociedades no han sufrido modificación alguna distinta de las siguientes: - - - - -

A) DE

- - - I.- CONSTITUCION.- Que por escritura sesenta y dos mil quinientos cincuenta y cinco, de catorce de marzo de dos mil, ante el licenciado Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Notario ciento cuarenta del Distrito Federal, inscrita el veintitres de junio siguiente en el Registro Público de Comercio de esta capital en el Folio Mercantil "261,481", se constituyó [REDACTED] con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital mínimo fijo de cincuenta mil pesos, Moneda Nacional, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto, entre otros, la compra, venta, contratación y celebración de cualquier otro acto jurídico, transacción comercial, civil y de cualquier naturaleza, a través de medios electrónicos y de comunicación como internet,

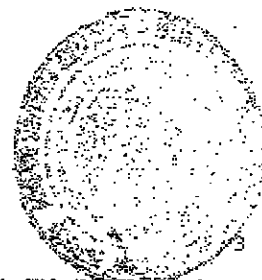


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 449 -



videoconferencia, voz, datos y cualquier otra similar que permita el logro del objeto social, así como la realización de cualquier acto y la celebración de toda clase de contratos que sean necesarios o convenientes para el logro de los objetos sociales.-

- - - II.- ASAMBLEA.- Que con fecha treinta de septiembre de de dos mil siete se celebró una Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad de que se trata, de la cual se levantó un acta en pliego por separado, ya que no se tuvo a la mano el libro de actas respectivo, lo que manifiestan los comparecientes, misma que consta en cinco fojas útiles con texto sólo por el anverso y que agrego al Apéndice de este instrumento marcada con el número "UNO", la cual transcribo a continuación: - - - - -

- - - ASAMBLA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - - -

- - - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 - - -

- - - En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del 30 de septiembre de 2007, se reunieron en el domicilio social de [REDACTED] los accionistas cuyos nombres y números de acciones adjunta se indican, con el propósito de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a la cual fueron personalmente convocados: - - - - -

ACCIONISTAS - - - ACCIONES - CAPITAL FIJO - - - CAPITAL

[REDACTED] - - - 49 - - - \$49,000.00

R.F.C.: [REDACTED] - - - - -

[REDACTED] - - - 1 - - - \$1000.00

R.F.C.: [REDACTED] - - - - -

- - - TOTALES - - - 50 - - - \$50,000.00

- - - Presidió la asamblea por designación unánime de los presentes el L.A.E. [REDACTED] y actuó como Secretario de la Asamblea la Lic. [REDACTED]



NR 20066

Para dar cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad,
actuaron como Escrutadores el LAM. [REDACTED] y la Lic.

[REDACTED] quienes después de aceptar sus
cargos procedieron a examinar la documentación que acredita la
calidad de los accionistas presentes y a formular la Lista de
Asistencia que se agraga a esta acta como anexo "A", certificando
que se encontraba debidamente representado el 100% del capital
social. - - - - -

- - - En virtud de la certificación de los escrutadores y toda vez
que no fue necesaria la formalidad de previa publicación de la
convocatoria por encontrarse representado el total del capital
social, de conformidad con lo establecido en los artículos 188 y
189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente
declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos
que en ella se adopten. - - - - -

- - - Por indicación del Presidente la Secretaria dio lectura al
siguiente: - - - - -

ORDEN DEL DÍA - - - - -

- - - I. PROPUESTA PARA LA REFORMA DE ARTICULO SEXTO DE ESTATUTOS
SOCIALES. - - - - -

- - - II. FUSIÓN DE LA SOCIEDAD. - - - - -

- - - III. APROBACION DE CONVENIO DE FUSION. - - - - -

- - - IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES
QUE ADOPTA LA ASAMBLEA. - - - - -

- - - Los Accionistas aprobaron por unanimidad de votos el Orden
del Día, procediéndose a su desarrollo, en la forma siguiente: - - -

- - - PUNTO UNO. En relación con el primer punto del Orden del Día
y por así convenir a los intereses de la sociedad, se propone
reformular los estatutos sociales de la Sociedad, con el propósito
que las acciones que representan el capital social no tenga
expresión de valor nominal. - - - - -



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 451 -



5

Una vez que los accionistas presentes aprobaron ampliamente el punto anterior, por una unanimidad de votos, la Asamblea tomó la siguiente: - - - - -

- - - - - RESOLUCIÓN - - - - -

1. Se acuerda reformar el ARTÍCULO SEXTO de los estatutos sociales de la Sociedad para eliminar el valor nominal de las acciones que representan el capital social, para que el mismo quede redactado de la siguiente manera: - - - - -

ARTÍCULO SEXTO.- El capital social se divide en acciones nominativas, comunes y ordinarias, sin expresión de valor nominal. Las acciones confieren iguales derechos y en las Asambleas Generales de Accionistas, cada accionista representará un voto por cada acción que posea. Estarán representadas por certificados provisionales y posteriormente por títulos definitivos y estos últimos llevarán adheridos cupones. - - - - -

PUNTO DOS. En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente explicó a los accionistas la conveniencia de que [REDACTED] como sociedad fusionante, fusione a [REDACTED]

[REDACTED] como sociedades fusionadas, con la finalidad de hacer más eficiente su operación. - - - - -

El Presidente manifestó que en caso de que la fusión sea aprobada, ésta se realizará sobre la base de que el patrimonio de las fusionadas se incorporará con todos bienes, derechos y obligaciones a la fusionante con base en los balances generales de las sociedades al 31 de agosto de 2007 y que la fusión deberá surtir efectos el día 1 de octubre de 2007, en base a los balances presentados, los cuales se actualizarán con cifras a dicha fecha.

Para tal efecto somete a consideración de la Asamblea y en su caso aprobación el balance de la Sociedad al 31 de agosto de



20066

Discurso lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos, acordó las siguientes:

RESOLUCIONES

1. "Se autoriza el Balance General de [redacted] al 31 de agosto de 2007".

2. "Con fundamento en el artículo 222 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se aprueba la fusión de [redacted] como fusionante con las empresas: [redacted]

[redacted] desapareciendo estas últimas como sociedades fusionadas, con datos y cifras de los balances de dichas sociedades al 31 de agosto de 2007."

3. "Como consecuencia de la fusión, la fusionante absorbe todo el patrimonio de las fusionadas a título universal, es decir con todos sus activos y pasivos, acciones derechos, obligaciones y responsabilidades así como todo lo que de hecho y por derecho les corresponda".

4. "Derivado de la fusión los accionistas de las fusionadas tendrán derecho a recibir e intercambiar sus acciones por acciones de la fusionante en la proporción que les corresponde conforme a lo indicado en la Tabla de Intercambio Accionario, que como anexo "C" se agrega a esta acta"

5. "En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se deberá publicar el acuerdo relativo a la fusión una vez formalizado, así como los balances generales al 31 de agosto de 2007 e inscribir dicho acuerdo en el Registro Público de Comercio del domicilio social de cada sociedad".

6. "La fusión de las sociedades [redacted]

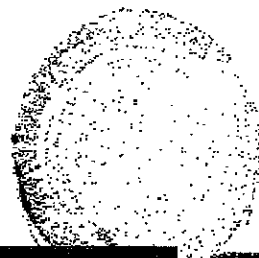


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 453 -



[REDACTED] surtirá efectos a partir del 1 de octubre de 2007, sujeto a que se cumplan las formalidades respectivas y se inscriban los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio correspondiente a sus domicilios. Para lo anterior, las sociedades que se fusionan han obtenido el consentimiento de la mayoría de sus accioneros y respecto de aquellos adeudos para los que no se haya obtenido consentimiento, éstos se considerarán liquidos y exigibles, encontrándose el importe de tales créditos a disposición del acreedor de que se trate, en las oficinas de la sociedad fusionante." - - - - -

- - 7. "En términos del segundo párrafo del artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, el ejercicio fiscal de las fusionadas terminará anticipadamente, simultáneamente al momento en que surta efectos la fusión, esto es, el día 1 de octubre de 2007, debiendo la fusionante presentar las declaraciones que correspondan a las fusionadas." - - - - -

- - 8. Cuando surta efectos la fusión las fusionadas serán dadas de baja en el Registro Federal de Contribuyentes, en los términos que señalan las disposiciones fiscales vigentes y serán cancelados todos los libros, registros y documentos, así como la contabilidad en general de las mismas, los cuales serán guardados por la fusionante para los efectos legales a que haya lugar." - - - - -

- - 9. "Como consecuencia de la fusión antes aprobada, el capital social de [REDACTED] se va aumentando en la cantidad, \$67,385,916.00 M.N., ordenándose la emisión de 67,385,916 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, representativas de la parte variable del capital social." - - - - -

- - 10. "En virtud de lo anterior el capital social total de [REDACTED] es de \$67,435,916.00, representado por 67,435,916 acciones, suscritas y pagadas de la siguiente manera:"



20066

ACCIONES	ACCIONES	PORCENTAJE
CAPITAL FIJO	CAPITAL	
	VARIABLE	
49,000	67,385,904	99.9905%
1,000	12	0.0015%
SUB TOTAL	67,385,916	
TOTAL DE ACCIONES	67,435,916	100%

11. "Se instruya al Administrador Único de la Sociedad para que efectúe los asientos respectivos en el Libro de Registro de Accionistas y en el de Variaciones de Capital de la Sociedad reflejando el aumento al capital social aprobado conforme a las resoluciones anteriores."

PUNTO TRES.- En desahogo del tercer punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES

1. "Se autoriza en los términos del anexo "B", de esta acta, el Convenio de Fusión a celebrarse entre

como fusionante y

como fusionadas."

2. "Se autoriza a los señores LAE. Lic. y Lic.

para que indistintamente firmen el Convenio de Fusión, en los términos a que se refiere la resolución inmediata anterior."

PUNTO CUATRO.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Se nombran delegados especiales de la presente asamblea a los señores LAE.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 455 -



[REDACTED] para que conjunta o separadamente (i) publiquen en el Periódico Oficial correspondiente el Convenio de Fusión aprobado por esta Asamblea y el Balance General de la Sociedad al 31 de agosto del 2007; (ii) protocolicen en un mismo instrumento dicho Convenio de Fusión y el acta de la presente Asamblea ante el Notario Público de su elección; (iii) realicen los trámites relativos a la inscripción del testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en su caso, (iv) den cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica; (v) en general tomen todas las medidas y firmen todos los documentos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea ante particulares y autoridades, (vi) así como para solicitar la expedición de los testimonios, copias simples o certificadas que de la protocolización de esta acta se lleguen a necesitar.

- - - Se hace constar que los accionistas que intervinieron en esta Asamblea estuvieron presentes en todo momento, especialmente cuando se tomaron las resoluciones, habiéndose suspendido la Asamblea por el tiempo necesario para levantar la presente acta, la cual fue leída y aprobada unánimemente por los accionistas y firmada para constancia por el Presidente y Secretario. - - -

- - - PRESIDENTE.- (Firma).- L.A.E. [REDACTED] - - -

- - - SECRETARIO.- (Firma).- L.I.C. [REDACTED] - - -

- - - Agrego al referido Apéndice marcada con el número "BOS" la lista de asistencia a la Asamblea cuya acta ha quedado transcrita, y con el número "TRES", formando un solo documento, lo que declara la licenciada Gutiérrez de Velasco son los documentos que como anexos "B" y "C" se agregaron al acta antes transcrita. - - -



20066

CONSTITUCION.- Que por escritura seis mil seiscientos treinta y cuatro, de quince de diciembre de dos mil tres, ante el licenciado Antonio Andere Pérez Moreno, Notario doscientos treinta y uno del Distrito Federal, inscrita el diecinueve de febrero de dos mil cuatro en el Registro Público de Comercio de esta capital en el Folio Mercantil "315,560", se constituyó por escisión de la sociedad [REDACTED]

[REDACTED] como escidente que subsistió, la sociedad denominada [REDACTED]

[REDACTED] con domicilio en México, Distrito Federal, duración hasta el primero de enero de dos mil cinco dos, capital mínimo fijo de cincuenta mil pesos, Moneda Nacional, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto, entre otros, la compra, venta, fabricación, comercialización y en general, actividades industriales y actos de comercio, relacionados con toda clase de bienes y servicios. - - - - -

- - - Dicha constitución estuvo sujeta a la condición suspensiva de que la escisión surtiera plenamente sus efectos en los términos de lo dispuesto por el artículo doscientos veintiocho bis, fracción quinta de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - -

- - - Asimismo, en la escritura en comento se hizo constar que por la escritura seis mil seiscientos trece, de once de diciembre de dos mil tres, ante el licenciado Antonio Andere Pérez Moreno, Notario doscientos treinta y uno del Distrito Federal, se formalizó la escisión de [REDACTED]

[REDACTED] que dió origen a [REDACTED]

- - - La referida escritura seis mil seiscientos trece quedó inscrita al quince de diciembre de dos mil tres en el Registro



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 457 -



Público de Comercio de esta capital en el Folio Mercantil

II.- PUBLICACIONES DE LA ESCISION.- Que en relación con la escisión a que se refiere el último párrafo del punto uno de esta antecedente "B", las publicaciones a que se refiere la fracción quinta del artículo doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles se realizaron en el periódico "EXCELSIOR" y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día dieciocho de diciembre de dos mil tres.- Una fotocopia de dichas publicaciones, que me exhiben los comparecientes las agregó al Apéndice de este instrumento, formando un solo documento, marcadas con el número "CUATRO".

III.- ASAMBLEA.- Que con fecha treinta de septiembre de dos mil siete se celebró una Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad de que se trata, de la cual se levantó un acta en pliego por separado, ya que no se tuvo a la mano el libro de actas respectivo, lo que manifiestan los comparecientes, misma que consta en cuatro fojas útiles con texto sólo por el anverso y que agregó al citado Apéndice con el número "CINCO", la cual transcribo a continuación:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las horas del 30 de septiembre de 2007, se reunieron en el domicilio social de

los accionistas cuyos nombres y números de acciones se indican, con el propósito de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

ACCIONISTAS ACCIONES SERIE ACCIONES SERIE

"A"

"B"



№ 20000

-----	49,000	-----	6,407,018	---
-----	-----	-----	-----	Sin
R.F.C.:	-----	1	-----	Valor
-----	-----	-----	-----	Nominal
TOTAL	50,000	-----	6,407,019	---

Presidió la asamblea por designación unánime de los presentes el L.A.E. [REDACTED] y actuó como Secretario de la Asamblea la Lic. [REDACTED]

Para dar cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad, actuaron como Escrutadores al L.A.E. [REDACTED] y la Lic. [REDACTED] quienes después de aceptar sus cargos procedieron a examinar la documentación que acredita la calidad de los accionistas presentes y a formular la Lista de Asistencia que se agrega a esta acta como anexo "A", certificando que se encontraba debidamente representado el 100% del capital social.

En virtud de la certificación de los escrutadores y toda vez que no fue necesaria la formalidad de previa publicación de la convocatoria por encontrarse representado el total del capital social, de conformidad con lo establecido en los artículos 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se adoptan.

Por indicación del Presidente la Secretaría dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. FUSIÓN DE LA SOCIEDAD.
- II. APROBACION DEL CONVENIO DE FUSION,
- III. REVOCACION DE PODERES DE LA SOCIEDAD
- IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 459 -



13

QUE ADOpte LA ASAMBLEA. -----

- - - Los Accionistas aprobaron por unanimidad de votos el orden del día, procediéndose a su desahogo, en la forma siguiente: -----

- - - PUNTO UNO. En relación con el primer punto del orden del día, el Presidente sometió a la consideración de los accionistas la conveniencia de que la Sociedad se fusione con [REDACTED]

[REDACTED] extinguiéndose [REDACTED]

como sociedad fusionada y subsistiendo [REDACTED]

[REDACTED] como sociedad fusionante -----

- - - Asimismo manifestó que en caso de que la fusión sea aprobada, ésta se realizará sobre la base de que el patrimonio de

[REDACTED] se incorporará

con todos sus bienes, derechos y obligaciones a la fusionante con base en el balance general de la Sociedad al 31 de agosto de 2007 y que la fusión deberá surtir efectos el día 1 de octubre de 2007, en base a los balances presentados. -----

- - - Para tal efecto somete a consideración de la Asamblea y en su caso aprobación el balance de la Sociedad al 31 de agosto de 2007. -----

- - - Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las siguientes: -----

----- RESOLUCIONES -----

- - - 1. "Se aprueba el balance General de [REDACTED] al 31 de agosto de 2007".

- - - 2. "Con fundamento en el artículo 222 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se aprueba la fusión de [REDACTED]

[REDACTED] como sociedad fusionada, y Com

[REDACTED] como sociedad fusionante,

desapareciendo la primera y subsistiendo esta última, con datos y cifras de los balances de las Sociedades al 31 de agosto de 2007." -----



Nº 20066

3. "Como consecuencia de la fusión, la fusionante absorbe todo el patrimonio de la fusionada a título universal, es decir con todas sus activos y pasivos, acciones, derechos, obligaciones y responsabilidades así como todo lo que de hecho y por derecho les corresponda". - - - - -

4. "Derivado de la fusión los accionistas de la fusionada tendrán derecho a recibir e intercambiar sus acciones por acciones de la fusionante en la proporción que les corresponda, conforme a lo indicado en la Tabla de Intercambio Accionario, que como anexo "C" se agrega a este acta" - - - - -

5. "En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se deberá publicar el acuerdo relativo a la fusión una vez formalizado, así como los balances generales al 31 de agosto de 2007 e inscribir dicho acuerdo en el Registro Público de Comercio del domicilio social de cada sociedad". - - - - -

6. "La fusión de las sociedades [REDACTED]

[REDACTED] surtirá efectos a partir del 1 de octubre de 2007, sujeto a que se cumplan las formalidades respectivas y se inscriban los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio correspondiente a sus domicilios. Para lo anterior, las sociedades que se fusionen han obtenido el consentimiento de la mayoría de sus acreedores y respecto de aquellos adeudos para los que no se haya obtenido consentimiento, éstos se considerarán liquidos y exigibles, encontrándose el importe de tales créditos a disposición del acreedor de que se trata, en las oficinas de la sociedad fusionante." - - - - -

7. "En términos del segundo párrafo del artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, el ejercicio fiscal de la



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 461 -



15

fusionada terminará anticipadamente, simultáneamente al momento en que surta efectos la fusión, esto es, el día 1 de octubre de 2017, debiendo la fusionante presentar las declaraciones que correspondan a la fusionada." - - - - -

- - - H. Cuando surta efectos la fusión, la fusionada será dada de bajo en el Registro Federal de Contribuyentes, en los términos que señalan las disposiciones fiscales vigentes y serán cancelados todos los libros, registros y documentos, así como la contabilidad en general de la misma, los cuales serán guardados por la fusionante para los efectos legales a que haya lugar". - - - - -

- PUNTO DOS.- En desahogo del segundo punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

- - - - - RESOLUCIONES - - - - -

- 1. "Se autoriza en los términos del anexo "B", de esta acta, el Convenio de Fusión a celebrarse entre [REDACTED] como fusionante y [REDACTED] como fusionada junto con [REDACTED] y [REDACTED] también fusionadas. - - - - -

- 2. "Se autoriza a los señores IAE. [REDACTED] Lic. [REDACTED] y Lic. [REDACTED] para que indistintamente firmen por esta Sociedad el Convenio de Fusión, en los términos a que se refiere la resolución inmediata anterior. - - - - -

- PUNTO TRES.- En desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente sometió a la consideración de los accionistas la necesidad de revocar los poderes de la Sociedad, en virtud de su fusión. - - - - -

- Una vez analizado lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos de sus accionistas tomó la siguiente: - - - - -

- - - - - RESOLUCIÓN - - - - -



№ 20066

1. "Quedan revocados a partir de la fecha en que surta sus efectos la fusión todos los poderes de la Sociedad, otorgados con anterioridad a la fecha de esta Asamblea". - - - - -

- - - PUNTO CUATRO.- En desahogo del quinto punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

- - - RESOLUCIÓN - - - - -

- - - 1.- Se nombran delegados especiales de la presente asamblea a los señores LAZ. [REDACTED]

[REDACTED] y Lic. [REDACTED]

[REDACTED] para que conjunta o separadamente (i) publiquen en el Periódico Oficial correspondiente el Convenio de Fusión aprobado por esta Asamblea y el Balance General de la Sociedad al 31 de agosto del 2007; (ii) protocolicen en un mismo instrumento dicho Convenio de Fusión y el acta de la presente Asamblea ante el Notario Público de su elección; (iii) realicen los trámites relativos a la inscripción del testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en su caso, (iv) con cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica; (v) en general tomen todas las medidas y firmen todos los documentos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea ante particulares y autoridades, (vi) así como para solicitar la expedición de los testimonios, copias simples o certificadas que de la protocolización de esta acta se lleguen a necesitar. - - - -

- - - Se hace constar que los accionistas que intervinieron en esta Asamblea estuvieron presentes en todo momento, especialmente cuando se tomaron las resoluciones, habiéndose suspendido la Asamblea por el tiempo necesario para levantar la presente acta, la cual fue leída y aprobada unánimemente por los accionistas y firmada para constancia por el Presidente y Secretario. - - - -

- - - PRESIDENTE - - - - -



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 463 -



--- (Firma).- L.A.E. [REDACTED] ---
--- SECRETARIO ---
--- (Firma).- LIC. [REDACTED] ---
--- Agrego al referido Índice marcada con el número "SEIS" la
lista de asistencia a la Asamblea cuyo acta ha quedado transcrita,
y con el número "SIETE", formando un solo documento, lo que
declara la Licenciada Gutiérrez de Velasco son los documentos que
como anexos "B" y "C" se agregaron al acta antes transcrita. ---

→ (C) [REDACTED] +
[REDACTED] ---

--- I.- CONSTITUCION.- Que por escritura dieciocho mil
setecientos cincuenta, de primero de diciembre de dos mil cinco,
ante el licenciado Eduardo Adolfo Manautico Ayala, Notario ciento
veintitres de Monterrey, Nuevo León, inscrita el dieciséis de
diciembre siguiente en el Registro Público de Comercio de
Monterrey, Nuevo León en el Folio Mercantil Electrónico "96267-1",
se constituyó por escisión de la sociedad "Verza Networks México",
Sociedad Anónima de Capital Variable como escidente que
subsistió, la sociedad denominada [REDACTED]

[REDACTED] con domicilio en Monterrey,
Nuevo León, duración de noventa y nueve años, capital mínimo fijo
de ochenta y cinco mil pesos, Moneda Nacional, cláusula de
admisión de extranjeros y teniendo por objeto, entre otros, la
realización de actividades y prestación de servicios en el área de
las telecomunicaciones, la información y la comunicación. ---

--- Dicha constitución estuvo sujeta a la condición suspensiva
de que la escisión surtiera plenamente sus efectos en los términos
de lo dispuesto por el artículo doscientos veintidós bis de la
Ley General de Sociedades Mercantiles. ---

--- Asimismo, en la escritura en comento se hizo constar que por



20066

escritura dieciocho mil setecientos treinta y ocho, de treinta y ocho noventa y dos mil cinco, ante el licenciado Eduardo Adolfo Martínez Ayala, Notario, ciento veintitres de Monterrey, Nuevo León, se formalizó la escisión de [REDACTED]

[REDACTED] que dió origen a [REDACTED]

[REDACTED] y de la cual se desprende que en el acta de la Asamblea protocolizada en dicha escritura, celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, se acordó la escisión de que se trata y como consecuencia de lo cual se constituiría una nueva sociedad que se denominaría [REDACTED]

[REDACTED] o con la denominación que en su momento autorizara la Secretaría de Relaciones Exteriores. - - - - -

- - - Declaran los comparecientes, en relación con la denominación de la sociedad escindida a que se refiere el párrafo precedente, que la denominación que autorizó la Secretaría de Relaciones Exteriores fue la de [REDACTED]

- - - La referida escritura dieciocho mil setecientos treinta y ocho quedó inscrita el catorce de diciembre de dos mil cinco en el Registro Público de Comercio de Monterrey, Nuevo León en el Folio Mercantil Electrónico "28203*8". - - - - -

- - - II.- PUBLICACIONES DE LA ESCISION.- Que en relación con la escisión a que se refiere el último párrafo del punto uno de este antecedente "C", las publicaciones a que se refiere la fracción quinta del artículo doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles se realizaron en el periódico "El Porvenir" y en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, los días ocho y nueve de diciembre de dos mil cinco, respectivamente.- Una fotocopia de dichas publicaciones, que se exhiben los comparecientes las agrego al Apéndice de este instrumento,

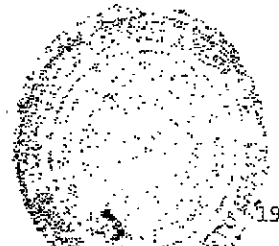


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 465 -



formando un solo documento, marcadas con el número "OCHO".

--- III.- MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y

REFORMAS.- Que por escritura veinticuatro mil quinientos cuarenta y seis, de siete de febrero de dos mil seis, ante el licenciado

Carlos Antonio Morales Montes de Oca, Notario doscientos veintiséis del Distrito Federal, sin que se me proporcionen de

inscripción en el Registro Público de Comercio de Monterrey, Nuevo León y en trámite de inscripción en el Registro Público de

Comercio del Distrito Federal, al cual ingresó con el folio de entrada y trámite "456805" el dieciséis de octubre de dos mil

siete, se protocolizó el acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad de que se trata, en

la que se adoptaron, entre otros acuerdos, los siguientes: ---

--- A) La modificación a su objeto social, con la consecuente reforma al artículo tercero de sus estatutos sociales, para quedar, entre otros, como la compra, venta y fabricación de toda clase de bienes; y ---

--- B) Cambiar su domicilio de Monterrey, Nuevo León a la Ciudad de México, Distrito Federal, reformando al efecto el artículo tercero de sus estatutos sociales. ---

--- Una fotocopia del referido folio de entrada y trámite "456805", que me exhiben los comparecientes, la agrego al citado Apéndice marcada con el número "NUEVE". ---

--- IV.- ASAMBLEA.- Que con fecha treinta de septiembre de dos mil siete se celebró una Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad de que se trata, de la cual se levantó un acta en pliego por separado, ya que no se tuvo a la mano el libro de actas respectivo, lo que manifiestan los comparecientes, misma que consta en cuatro fojas útiles con texto sólo por el anverso y que agrego al referido Apéndice con el número "DIEZ", la cual transcribo a continuación: ---



22

20066

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas del 30 de septiembre de 2007, se reunieron en el domicilio social de [REDACTED] los accionistas cuyos nombres y números de acciones adelante se indican, con el propósito de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a la cual fueron personalmente convocados:

ACCIONISTAS	ACCIONES	Valor Nominal	CAPITAL
-------------	----------	---------------	---------

SERIE "A"

[REDACTED]	84,991	\$1.00	\$84,991
------------	--------	--------	----------

R.F.C:

[REDACTED]	9	\$1.00	\$9.00
------------	---	--------	--------

R.F.C:

TOTAL	85,000		\$85,000.00
-------	--------	--	-------------

Presidió la asamblea por designación unánime de los presentes el L.A.P. [REDACTED] y actuó como Secretario de la Asamblea la Lic. [REDACTED]

Para dar cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad, actuaron como Escrutadores el L.A.P. [REDACTED] y la Lic. [REDACTED] quienes después de aceptar sus cargos procedieron a examinar la documentación que acredita la calidad de los accionistas presentes y a formular la Lista de Asistencia que se agrega a esta acta como anexo "A", certificando que se encontraba debidamente representado el 100% del capital social.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 467 -



21

En virtud de la certificación de los escrutadores y actuarios que no fue necesaria la formalidad de previa publicación de la convocatoria por encontrarse representado el capital social, de conformidad con lo establecido en los artículos 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se adoptan.

Por indicación del Presidente la Secretaría dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. FUSIÓN DE LA SOCIEDAD.

II. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE FUSIÓN.

III. (SIC) REVOCACIÓN DE PODERES DE LA SOCIEDAD

IV. DESIGNACIÓN DE ENCOMENDADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE ADOpte LA ASAMBLEA.

Los Accionistas aprobaron por unanimidad de votos el orden del día, prestandose a su desahogo, en la forma siguiente:

PUNTO UNO. En relación con el primer punto del orden del día, el Presidente sometió a la consideración de los accionistas la conveniencia de que la Sociedad se fusione con

extinguiéndose

como sociedad fusionada y subsistiendo

como sociedad fusionante

Asimismo manifestó que en caso de que la fusión sea aprobada, ésta se realizará sobre la base de que el patrimonio de

se incorporará con todos

sus bienes, derechos y obligaciones a la fusionante con base en el balance general de la Sociedad al 31 de agosto de 2007 y que la fusión deberá surtir efectos el día 1 de octubre de 2007, en base a los balances presentados.

Para tal efecto somete a consideración de la Asamblea y en



22.

su aprobación el balance de la Sociedad al 31 de agosto de 2007.

20066

Disputado lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

1. "Se aprueba el Balance General de [REDACTED] al 31 de agosto de 2007".

2. "Con fundamento en el artículo 222 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se aprueba la fusión de [REDACTED]

[REDACTED] como sociedad fusionada, a [REDACTED]

[REDACTED] como sociedad fusionante, desapareciendo la primera y subsistiendo esta última, con datos y cifras de los balances de las Sociedades al 31 de agosto de 2007."

3. "Como consecuencia de la fusión, la fusionante absorbe todo el patrimonio de la fusionada a título universal, es decir con todos sus activos y pasivos, acciones, derechos, obligaciones y responsabilidades así como todo lo que de hecho y por derecho les corresponda".

4. "Derivado de la fusión los accionistas de la fusionada tendrán derecho a recibir e intercambiar sus acciones por acciones de la fusionante en la proporción que les corresponda, conforme a lo indicado en la Tabla de Intercambio Accionario, que como anexo "C" se agrega a este acta"

5. "En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se deberá publicar el acuerdo relativo a la fusión una vez formalizado, así como los balances generales al 31 de agosto de 2007 e inscribir dicho acuerdo en el Registro Público de Comercio del domicilio social de cada sociedad".

6. "La fusión de las sociedades [REDACTED], [REDACTED]



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 469 -



23

surtilirá efectos a partir del 1 de octubre de 2007, sujeto a que se cumplan las formalidades respectivas y (se inscriban los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio correspondiente a sus domicilios. Para lo anterior, las sociedades que se fusionan han obtenido el consentimiento de la mayoría de sus acreedores y respecto de aquellos adeudos para los que no se haya obtenido consentimiento, éstos se considerarán liquidos y exigibles, encontrándose el importe de tales créditos a disposición del acreedor de que se trate, en las oficinas de la sociedad fusionante." - - - - -

- - - 7. "En términos del segundo párrafo del artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, el ejercicio fiscal de la fusionada terminará anticipadamente, simultáneamente al momento en que surta efectos la fusión, esto es, el día 1 de octubre de 2007, debiendo la fusionante presentar las declaraciones que correspondan a la fusionada." - - - - -

- - - 8. Cuando surta efectos la fusión, la fusionada será dada de baja en el Registro Federal de Contribuyentes, en los términos que señalan las disposiciones fiscales vigentes y serán cancelados todos los libros, registros y documentos, así como la contabilidad en general de la misma, los cuales serán guardados por la fusionante para los efectos legales a que haya lugar". - - - - -

- - - PUNTO DOS. En desahogo del segundo punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de votos, adoptan las siguientes:

- - - RESOLUCIONES - - - - -

- - - 1. "Se autoriza en los términos del anexo "B", de esta acta, el Convenio de fusión a celebrarse entre

como fusionante y
como fusionada junto con S.O.L.E.C.T.O

y



20066

accionadas. - - - - -

- 2. "Se autoriza a los señores LAS. [REDACTED]

Lic. [REDACTED] Contreras Cordero y Lic. [REDACTED]

[REDACTED] para que indistintamente firmen por esta Sociedad el Convenio de Fusión, en los términos a que se refiere la resolución inmediata anterior. - - - - -

- - - PUNTO TRES.- En desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente sometió a la consideración de los accionistas la necesidad de revocar los poderes de la Sociedad, en virtud de su fusión. - - - - -

- - - Una vez analizado lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos de sus accionistas tomó la siguiente: - - - - -

- - - - - RESOLUCIÓN - - - - -

- - - 1. "Quedan revocados a partir de la fecha en que surta sus efectos la fusión todos los poderes de la Sociedad, otorgados con anterioridad a la fecha de esta Asamblea". - - - - -

- - - PUNTO CUATRO.- En desahogo del quinto punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

- - - - - RESOLUCIÓN - - - - -

- - - 1.- Se nombran delegados especiales de la presente asamblea a los señores LAS. [REDACTED]

[REDACTED] y Lic. [REDACTED]

[REDACTED] para que conjunta o separadamente (i) publiquen en el Periódico Oficial correspondiente el Convenio de Fusión aprobado por esta Asamblea y el Balance General de la Sociedad al 31 de agosto del 2007; (ii) protocolicen en un mismo instrumento dicho Convenio de Fusión y el acta de la presente Asamblea ante el Notario Público de su elección; (iii) realicen los trámites relativos a la inscripción del testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en su caso, (iv) den cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 471 -



25

Competencia Económica; (v) en general tomar todas las medidas que
firmen todos los documentos necesarios para formalizar y dar
cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea
ante particulares y autoridades, (vi) así como para solicitar la
expedición de los testimonios, copias simples o certificadas que
de la protocolización de esta acta se lleguen a necesitar. - - -

- - - Se hace constar que los accionistas que intervinieron en
esta Asamblea estuvieron presentes en todo momento, especialmente
cuando se tomaron las resoluciones, habiéndose suspendido la
Asamblea por el tiempo necesario para levantar la presente acta,
la cual fue leída y aprobada unánimemente por los accionistas y
firmada para constancia por el Presidente y Secretario. - - -

- - - PRESIDENTE.- (Firma).- L.A.E. [REDACTED]
- - - SECRETARIO.- (Firma).- LIC. [REDACTED]

- - - Agrego al referido Apéndice marcada con el número "B" la
lista de asistencia a la Asamblea cuya acta ha quedado transcrita,
y con el número "DOCE", formando un solo documento, lo que declara
la licenciada [REDACTED] son los documentos que como
anexos "B" y "C" se agregaron al acta antes transcrita. - - -

- - - I.- CONSTITUCION.- que por escritura dos mil cuatrocientos
treinta y ocho, de dos de febrero mil novecientos ochenta y siete,
acto la licenciada Sara Cuevas Villalobos, Notaria ciento noventa
y siete del Distrito Federal, inscrita el doce de mayo siguiente
en el Registro Público de Comercio de esta capital en el Folio
Mercantil "96,140" se constituyó [REDACTED]
[REDACTED] con domicilio
en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años,



NE 20066

capital mínimo fijo de cinco millones de pesos (hoy cinco mil pesos), denominación nacional, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto, entre otros, el ejercicio de actividades comerciales en todas sus manifestaciones. - - - - -

- - - II.- PRIMERA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.- Que por escritura tres mil doscientos treinta, de treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante la misma Notaría que la anterior, inscrita en el referido Folio Mercantil "S6,140", se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de [REDACTED]

[REDACTED] en la que se acordó reformar totalmente sus estatutos sociales. - - - - -

- - - III.- SEGUNDA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.- Que por escritura cincuenta y cuatro mil doscientos veintiocho, de once de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el licenciado Miguel Alfonso Robles, Notario diecinueve del Distrito Federal, sin que se le proporcionen datos de registro, se protocolizó el acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de [REDACTED]

[REDACTED] en la que se adoptó, entre otros acuerdos, reformar totalmente sus estatutos sociales, conservando su denominación, domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, cláusula de admisión de extranjeros, capital mínimo fijo de cinco mil pesos, y estableciendo su objeto como, entre otros, el ejercicio de actividades comerciales en todas sus manifestaciones. - - - - -

- - - IV.- CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMAS.- Que por escritura once mil novecientos cuarenta y uno, de cuatro de noviembre de dos mil tres, ante el licenciado Carlos Antonio Morales Montes de Oca, Notario doscientos veintiseis del Distrito Federal, inscrita el ocho de enero de dos mil cuatro en el citado Folio Mercantil



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 473 -



"96,140", se protocolizó el acto de la Asamblea General

Extraordinaria de accionistas de [REDACTED]

[REDACTED] se le que se

adoptaron, entre otros acuerdos cambiar su denominación para

adoptar la que ostenta actualmente de [REDACTED]

[REDACTED] reformando al efecto el

artículo primero de sus estatutos sociales. - - - - -

- V.- ASAMBLA.- Que con fecha trece de septiembre de dos

mil siete se celebró una Asamblea General Extraordinaria de

accionistas de la sociedad de que se trata, de la cual se levantó

un acta en pliego por separado, ya que no se tuvo a la mano el

libro de actas respectivo, lo que manifiestan los comparecientes,

misma que consta en cuatro fojas útiles con texto sólo por el

anverso y que agrego al citado Apéndice con el número "TRECE", la

cual transcribo a continuación: - - - - -

[REDACTED]

- ASAMBLA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS -

- 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 -

- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce

horas del 30 de septiembre de 2007, se reunieron en el domicilio

social de [REDACTED] los accionistas

cuyos nombres y números de acciones que adelante se indican, con

el propósito de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas, mismos que se relacionan a continuación: - - - - -

- ACCIONISTAS - - - - - ACCIONES - - ACCIONES - - CAPITAL - - -

- - - - - SERIE "A" - - CAPITAL - - - - -

- - - - - VARIABLE - - - - -

[REDACTED] - 49,995 - - - 60,793,837 - 60,843,896.00

[REDACTED] - - - - -

R.F.C.: [REDACTED] - - - - -

[REDACTED] - - - - -



28.

Nº 20066
L.A.E. 1 \$1.00
50,000 60,793,897 60,843,897.00

Presidió la asamblea por designación unánime de los
presentes el L.A.E. [REDACTED] y actuó como secretario
de la Asamblea la Lic. [REDACTED]

Para dar cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad,
actuaron como escrutadores el L.A.E. [REDACTED] y la
Lic. [REDACTED] quienes después de aceptar
sus cargos procedieron a examinar la documentación que acredita la
calidad de los accionistas presentes y a formular la Lista de
Asistencia que se agrega a esta acta como anexo "A", certificando
que se encontraba debidamente representado el 100% del capital
social.

En virtud de la certificación de los escrutadores y toda vez
que no fue necesaria la formalidad de previa publicación de la
convocatoria por encontrarse representado el total del capital
social, de conformidad con lo establecido en los artículos 128 y
189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente
declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos
que en ella se adopten.

Por indicación del Presidente la Secretaria dio lectura al
siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. FUSIÓN DE LA SOCIEDAD.
- II. APROBACION DEL CONVENIO DE FUSION.
- III. (SIC) REVOCACION DE PODERES DE LA SOCIEDAD
- IV. DESIGNACIÓN DE ENLEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES
QUE ADOpte LA ASAMBLEA.

Los Accionistas aprobaron por unanimidad de votos el orden

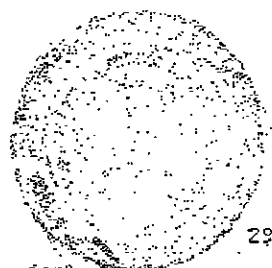


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 475 -



29

del día, procediéndose a su desahogo, en la forma siguiente:

- - PUNTO UNO. En relación con el primer punto del orden del día, el Presidente sometió a la consideración de los señores accionistas la conveniencia de que la Sociedad se fusionara con [REDACTED]

[REDACTED] extinguiéndose [REDACTED]

como sociedad fusionada y subsistiendo [REDACTED]

como sociedad fusionante - - - - -

- - Asimismo manifestó que en caso de que la fusión sea aprobada, ésta se realizará sobre la base de que el patrimonio de [REDACTED] se incorporará con todos sus bienes, derechos y obligaciones a la fusionante con base en el balance general de la Sociedad al 31 de agosto de 2007 y que la fusión deberá surtir efectos el día 1 de octubre de 2007, en base a los balances presentados. - - - - -

- - Para tal efecto sometió a consideración de la Asamblea y en su caso aprobación el balance de la Sociedad al 31 de agosto de 2007. - - - - -

- - Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las siguientes: - - - - -

- - - - - RESOLUCIONES - - - - -

- - 1. "Se aprueba el Balance General de [REDACTED] al 31 de agosto de 2007". - - - - -

- - 2. "Con fundamento en el artículo 222 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se aprueba la fusión de [REDACTED]

[REDACTED] como sociedad fusionada, a [REDACTED]

[REDACTED] como sociedad fusionante, desapareciendo la primera y subsistiendo esta última, con datos y cifras de los balances de las Sociedades al 31 de agosto de 2007." - - - - -

- - 3. "Como consecuencia de la fusión, la fusionante absorbe todo el patrimonio de la fusionada a título universal, es decir con todos sus activos y pasivos, acciones, derechos, obligaciones



34.

responsabilidades así como todo lo que de hecho y por derecho
les corresponda". - - - - -

20066

Derivado de la fusión los accionistas de la fusionada
tendrán derecho a recibir e intercambiar sus acciones por acciones
de la fusionante en la proporción que les corresponda, conforme a
lo indicado en la Tabla de Intercambio Accionario, que como anexo
"C" se agrega a esta acta" - - - - -

- - - 5. "En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 223 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles se deberá publicar el
acuerdo relativo a la fusión una vez formalizado, así como los
balances generales al 31 de agosto de 2007 e inscribir dicho
acuerdo en el Registro Público de Comercio del domicilio social de
cada sociedad". - - - - -

- - - 6. "La fusión de las sociedades [REDACTED]

[REDACTED] surtirá efectos a partir del 1 de octubre de 2007, sujeto a
que se cumplan las formalidades respectivas y se inscriban los
acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio
correspondiente a sus domicilios. Para lo anterior, las sociedades
que se fusionan han obtenido el consentimiento de la mayoría de
sus acreedores y respecto de aquellos adeudos para los que no se
haya obtenido consentimiento, éstos se considerarán liquidados y
exigibles, encontrándose el importe de tales créditos a
disposición del acreedor de que se trate, en las oficinas de la
sociedad fusionante." - - - - -

- - - 7. "En términos del segundo párrafo del artículo 11 del
Código Fiscal de la Federación, el ejercicio fiscal de la
fusionada terminará anticipadamente, simultáneamente al momento en
que surta efectos la fusión, esto es, al día 1 de octubre de 2007,
debiendo la fusionante presentar las declaraciones que

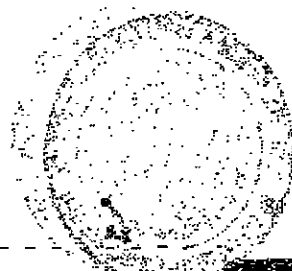


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 477 -



corresponden a la fusionada." - - - - -

- - - 6. Cuando surta efectos la fusión, la fusionada será dada de baja en el Registro Federal de Contribuyentes, en los términos que señalen las disposiciones fiscales vigentes y serán cancelados todos los libros, registros y documentos, así como la contabilidad en general de la misma, los cuales serán guardados por la fusionante para los efectos legales a que haya lugar." - - - - -

- - - PUNTO DOS.- En desahogo del segundo punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

- - - - - RESOLUCIONES - - - - -

- - - 1. "Se autoriza en los términos del anexo "B", de esta acta, el Convenio de Fusión a celebrarse entre

[REDACTED] como fusionante y [REDACTED]

como fusionada junto con [REDACTED]

[REDACTED] y [REDACTED] también

fusionadas." - - - - -

- - - 2. "Se autoriza a los señores LAF, [REDACTED]

Lic. [REDACTED] y Lic. [REDACTED]

[REDACTED] para que indistintamente firmen por esta

Sociedad el Convenio de Fusión, en los términos a que se refiere

la resolución inmediata anterior." - - - - -

- - - PUNTO TRES.- En desahogo del tercer punto del orden del día,

el Presidente sometió a la consideración de los accionistas la

necesidad de revocar los poderes de la Sociedad, en virtud de su

fusión." - - - - -

- - - Una vez analizado lo anterior, la Asamblea, por unanimidad

de votos de sus accionistas tomó la siguiente: - - - - -

- - - - - RESOLUCIÓN - - - - -

- - - 1. "Quedan revocados a partir de la fecha en que surta sus

efectos la fusión todos los poderes de la Sociedad, otorgados con

anterioridad a la fecha de esta Asamblea." - - - - -



32

CUATRO.- En desahogo del quinto punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

Nº 20066

RESOLUCIÓN

1.- Se nombran delegados especiales de la presente asamblea a los señores LAF. [redacted] Lic. [redacted]

y Lic. [redacted]

[redacted] para que conjunta o separadamente (i) publiquen en el Periódico Oficial correspondiente al Convenio de Fusión aprobado por esta Asamblea y el Balance General de la Sociedad al 31 de agosto del 2007; (ii) protocolicen en un mismo instrumento dicho Convenio de Fusión y el acta de la presente Asamblea ante el Notario Público de su elección; (iii) realicen los trámites relativos a la inscripción del testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en su caso, (iv) den cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica; (v) en general tomen todas las medidas y firmen todos los documentos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea ante particulares y autoridades, (vi) así como para solicitar la expedición de los testimonios, copias simples o certificadas que de la protocolización de esta acta se lleguen a necesitar.

Se hace constar que los accionistas que intervinieron en esta Asamblea estuvieron presentes en todo momento, especialmente cuando se tomaron las resoluciones, habiéndose suspendido la Asamblea por el tiempo necesario para levantar la presente acta, la cual fue leída y aprobada unánimemente por los accionistas y firmada para constancia por el Presidente y Secretario.

PRESIDENTE.- (Firma).- L.A.E. [redacted]

SECRETARIO.- (Firma).- [redacted]



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 479 -



33

- - - Agrego al referido Apéndice marcada con el número "QUINCE" la lista de asistencia a la Asamblea cuya acta ha quedado transcrita, y con el número "QUINCE", formando un solo documento, lo que declara la licenciada [REDACTED] son los documentos que como anexos "A" y "C" se agregaron al acta antes transcrita. - - -

- - E) CONVENIO DE FUSION. - Que la licenciada [REDACTED] compareciente exhibe el convenio de fusión celebrado entre [REDACTED]

[REDACTED] como FUSIONANTE, CON [REDACTED]

[REDACTED] como FUSIONADAS mismo que agrego al Apéndice de este instrumento marcado con el número "DIECISEIS". - - -

- - - F) PUBLICACIONES. - Que las publicaciones a que se refiere el artículo doscientos veintitres de la Ley General de Sociedades Mercantiles se realizaron en el Diario Oficial de la Federación el día once de octubre de dos mil siete, mismas que agrego al citado Apéndice marcadas con el número "DIECISIETE". - - -

- - - Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes: - - -

- - - C L A U S U L A S - - -

- - - I. - DE LO RELATIVO A LA DECLARACION DE QUE SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES APLICABLES A LA ESCISION DE "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. - - -

- - - PRIMERA. - El señor [REDACTED] en su expresado carácter, declara que la escritura seis mil seiscientos trece, de once de diciembre de dos mil tres, ante el licenciado Antonio Andara Pérez Moreno, Notario doscientos treinta y uno del Distrito



34

que contiene la escisión de [REDACTED]

NO 20066

relacionada en el punto uno del antecedente "B" de este instrumento, quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de esta capital el QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRES en el Folio Mercantil "5316", tal y como se desprende de lo relacionado por la suscrita en el propio antecedente. - - - - -

- - - SEGUNDA.- Ha transcurrido el plazo a que se refiere la fracción quinta del artículo doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que se haya presentado oposición alguna a la escisión por parte de los acreedores de la sociedad, según declara el compareciente. - - - - -

- - - TERCERA.- Que en razón de lo anterior, la escisión de [REDACTED] surte plenos efectos. - - - - -

- - - II.- DE LO RELATIVO A LA CONSTITUCION POR ESCISION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA [REDACTED]

- - - CUARTA.- En consideración a lo expresado en las cláusulas que anteceden, en este acto el señor Jesús Morales Aguilar, con la representación que ostenta, declara que se tiene por cumplida la condición suspensiva a que estuvo sujeta la constitución de la sociedad [REDACTED]

- - - III.- DE LO RELATIVO A LA DECLARACION DE QUE SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES APLICABLES A LA ESCISION DE [REDACTED]

- - - QUINTA.- El señor [REDACTED] en su expresado carácter, declara que la escritura dieciocho mil setecientos treinta y ocho, de treinta de noviembre de dos mil cinco, ante el licenciado Eduardo Adolfo Manantou Ayala, Notario ciento

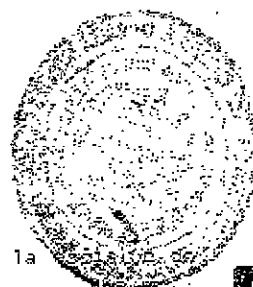


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 481 -



35

veintitres de Monterrey, Nuevo León, que contiene la

relacionada en el punto uno del antecedente "C" de esta
instrumento, quedó quedó inscrita el OCHO DE DICIEMBRE DE DOS
MIL CINCO en el Registro Público de Comercio de Monterrey, Nuevo
León en el Folio Mercantil Electrónico "28209*9", tal y como se
desprende de lo relacionado por la suscrita en el propio
antecedente. - - - - -

- - - SEXTA. - Ha transcurrido el plazo a que se refiere la
fracción quinta del artículo doscientos veintiocho bis de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, sin que se haya presentado
oposición alguna a la escisión por parte de los acreedores de la
sociedad, según declara el compareciente. - - - - -

- - - SEPTIMA. - Que en razón de lo anterior, la escisión de
[REDACTED] surte
plenos efectos. - - - - -

- - - IV. - DE LO RELATIVO A LA CONSTITUCION POR ESCISION DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA [REDACTED]

- - - OCTAVA. - En consideración a lo expresado en las cláusulas
que anteceden, en este acto el señor [REDACTED] con la
representación que ostenta, declara que se tiene por cumplida la
condición suspensiva a que estuvo sujeta la constitución de la
sociedad [REDACTED]

- - - V. - DE LA FUSION DE SOCIEDADES. - - - - -

- - - NOVENA. - Quedan protocolizadas, lo que certifica la suscrita
Notaria, las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de
Accionistas de [REDACTED]



36.

NE 20066

[REDACTED] respectivamente, todas de fecha treinta de septiembre de dos mil siete, y formalizados los acuerdos en ellas adoptadas.-----

--- DECIMA.-- Queda formalizado el aumento de capital social en la parte variable de [REDACTED]

[REDACTED] en los términos que se indican en la respectiva acto protocolizada.-----

--- DECIMA PRIMERA.-- Queda formalizada la revocación de poderes de [REDACTED]

[REDACTED] en los términos que se indican en las respectivas actos protocolizadas.-----

--- Manifiestan los comparecientes que [REDACTED] notificaré a los interesados de sus respectivas revocaciones, liberándome de toda responsabilidad por ese concepto.-----

--- DECIMA SEGUNDA.-- Queda formalizada la FUSION de [REDACTED] COMO FUSIONANTE, CON

[REDACTED] COMO FUSIONADAS en los términos que se precisan en las respectivas actos protocolizadas.

--- DECIMA TERCERA.-- Queda protocolizado el convenio de fusión celebrado entre [REDACTED]

[REDACTED] COMO FUSIONANTE, CON [REDACTED]

[REDACTED] COMO



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 483 -



FUSIONADAS que ha quedado agregado al Apéndice del
instrumento. - - - - -

- - - - - PERSONALIDADES - - - - -

- - - I. - [REDACTED]

[REDACTED] - El señor Jesús Morales Aguilar

declarará que su representada es capaz para este acto, que la personalidad que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos y me la acredita con la escritura seis mil seiscientos treinta y cuatro, de quince de diciembre de dos mil tres, ante el licenciado Antonio Andere Pérez Moreno, Notario doscientos treinta y uno del Distrito Federal, inscrita el diecinueve de febrero de dos mil cuatro en el Registro Público de Comercio de esta capital en el Folio Mercantil "315,560", por la que se constituyó por escisión de la sociedad "Desarrollo de Infraestructura", Sociedad Anónima de Capital Variable como escidente que subsistió, la sociedad denominada "SOLUCIONES EMPRESARIALES DE NEGOCIOS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración hasta el primero de enero de dos mil ciento dos, capital mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda Nacional, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto, entre otros, la compra, venta, fabricación, comercialización y en general, actividades industriales y actos de comercio, relacionados con toda clase de bienes y servicios. - - -

- - - Dicha constitución estuvo sujeta a la condición suspensiva de que la escisión surtiera plenamente sus efectos en los términos de lo dispuesto por el artículo doscientos veintiocho bis, fracción quinta de la Ley General de Sociedades Mercantiles, misma que se cumplió según lo relacionado en los antecedentes y el clausulado de este instrumento. - - - - -

- - - En el instrumento antes relacionado se hizo constar el otorgamiento en su favor, en unión de otros apoderados, entre



38

Nº 20066

otras facultades, de un poder general para actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. - - - - -

- - - II. -

- El señor [REDACTED] declara que su representada es capaz para este acto, que la personalidad que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos y me la acredita como sigue: - - - - -

- - - I. - CONSTITUCION.- Con la escritura dieciocho mil setecientos cincuenta, de primero de diciembre de dos mil cinco, ante el Ilcenciado Eduardo Adolfo Manautou Ayala, Notario ciento veintitres de Monterrey, Nuevo León, inscrita el dieciseis de diciembre siguiente en el Registro Público de Comercio de Monterrey, Nuevo León en el Folio Mercantil Electrónico "96,267*1", por la que se constituyó por escisión de la sociedad

[REDACTED] como
asociante que subsistió, la sociedad denominada [REDACTED]

[REDACTED] con
domicilio en Monterrey, Nuevo León, duración de noventa y nueve años, capital mínimo fijo de ochenta y cinco mil pesos, Moneda Nacional, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto, entre otros, la realización de actividades y prestación de servicios en el área de las telecomunicaciones, la información y la comunicación. - - - - -

- - - Dicha constitución estuvo sujeta a la condición suspensiva de que la escisión surtiera plenamente sus efectos en los términos de lo dispuesto por el artículo doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, misma que se cumplió según lo relacionado en los antecedentes y el clausulado de este instrumento. - - - - -



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 485 -



39

II.- MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL, CAMBIO DE DOMICILIO

PODER.- Con la escritura veinticuatro mil quinientos cuarenta y seis, de siete de febrero de dos mil seis, ante el licenciado Carlos Antonio Morales Montes de Oca titular de la Notaría número doscientos veintiséis del Distrito Federal, en trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio de esta capital, por la que se protocolizó el acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad de que se trata, en la que se adoptaron, entre otros acuerdos, los siguientes: - - - - -

- - - A) La modificación a su objeto social, con la consecuente reforma al artículo tercero de sus estatutos sociales, para quedar, entre otros, como la compra, venta y fabricación de toda clase de bienes; - - - - -

- - - B) Cambiar su domicilio de Monterrey, Nuevo León a la Ciudad de México, Distrito Federal, reformando al efecto el artículo tercero de sus estatutos sociales; y - - - - -

- - - C) Otorgarle, en unión de otros apoderados, entre otras facultades, de un poder general para actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. - - - - -

- - - Yo, la Notaría, hago constar bajo mi fe: - - - - -

- - - 1.- Que conozco personalmente a la licenciada [REDACTED] no así a los demás comparecientes quienes se identificaron ante mí con los documentos que se relacionan en sus respectivas generales, que en fotocopia que certifico concuerda con su correspondiente original agregó al citado Apéndice, formando un solo documento, marcadas con el número "DIECIOCHO", y que a mi juicio son capaces para este acto; -

- - - 2.- Que por sus GERERALES declararon ser mexicanos, casados,



40.

NO 20066

de esta vecindad y origen, con domicilio en Insurgentes Sur tres mil quinientos setenta y nueve, torre uno, piso ocho, colonia Tlalpaz, la liconcizada [REDACTED]

[REDACTED] nacida el nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, abogada; el señor [REDACTED] nacido el veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, licenciado en administración de empresas, y se identifica con credencial para votar folio [REDACTED] y el señor [REDACTED]

[REDACTED] nacido el quince de julio de mil novecientos sesenta y seis, contador público y se identifica con credencial para votar folio [REDACTED]

- - - 3.- Que solicité a los comparecientes las cédulas de identificación fiscal de los accionistas que comparecieron a las asambleas cuyas actas en este instrumento se protocolizan, sin que me las exhibiera por lo que daré los avisos correspondientes. - -

- - - 4.- Que declaran los comparecientes, que por así convenir a los intereses de sus representadas, en el Registro Público de Comercio de esta capital: a) NO deberá de tomarse nota del aumento de capital en la parte variable acordado en la respectiva acta protocolizada; y b) sólo se deberá de tomar nota de las revocaciones cuyos poderes estén previamente inscritos en el Folio Mercantil correspondiente. - - -

- - - 5.- Que lo relacionado e inserto concuerda con los documentos a que me remito y tuve a la vista; - - -

- - - 6.- Que hice saber a los comparecientes su derecho de leer personalmente el presente instrumento, así como de que su contenido les sea explicado por la suscrita; - - -

- - - 7.- Que no obstante lo anterior se los leyó en su integridad y les expliqué su valor, consecuencias y alcances legales; y - - -

- - - 8.- Que enterados de su contenido, previa manifestación de su comprensión plena y de su conformidad con él, lo otorgaron



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 487 -

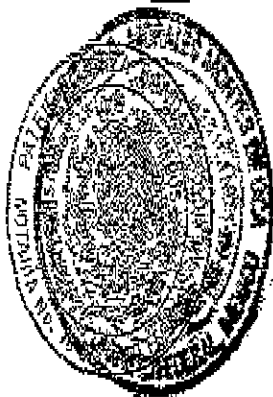


Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal en el Folio Mercantil
número: 312141317101 9/1/08
Derechos: \$ 15/612 de fecha 5 de 11 de 08
Línea de captura: 9319101012101215121
61810141812191819161
Ciudad de México 12 de 08 de 08
Registrador

CECILIENNA BARTOLO

J. CARLOS GARCÍA PEREZ
DIRECTOR DEL REGISTRO
DE PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL
CARRERA DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL
EN LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL
CON LA LEY EN MATERIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL

SE TOMÓ NOTA
EN EL APENDICE



№ 20066

Firmando el día siguiente al de su fecha, acto en el que AUTORIZO

PRESENTEMENTE.- DOY FE. -----

--- (Firmas personales de los señores licenciada: [redacted]

[redacted] y [redacted]

[redacted] -----

--- (Firma), -----

--- (Sello de autorizar), -----

ES - P R I M E R ---- TESTIMONIO QUE AXEIDO PARA [redacted]

[redacted] COMO FUSIONANTE, Y PARA

[redacted]

[redacted] COMO FUSIONADAS, EN ESTAS VEINTION

FOJAS UTILES, COTEJADAS Y CORREGIDAS.- EL PRESENTE TESTIMONIO VA

PROTEGIDO POR KINEGRAMAS QUE PUEDEN NO TENER NUMERACION CONTINUA.-

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL-

SETE.- DOY FE. -----



[Handwritten signature]



PATRICIO GARZA BANDALA, Notario 18 del Distrito
Federal, actuando como asociado de la licenciada
ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO, Notaria 195 del
Mismo Distrito.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 71, noveno párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002 vigente en 2007, toda vez que las sociedades controladas ***** y ***** ** ***** ***** **, fueron fusionadas por ***** esta Juzgadora concluye que existió una desincorporación de las dos primeras.

De ahí, que al caso concreto debe aplicarse el contenido del artículo 71 de la citada Ley, no así lo dispuesto por el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada el 31 de diciembre de 2001, como lo refiere la demandante, pues contrario a sus aseveraciones, de haber sido la intención del legislador que no se considerara desincorporación la fusión de sociedades pertenecientes al mismo grupo de consolidación fiscal, hubiese conservado en el texto de la norma tal circunstancia, lo que no sucedió en la especie.

Pues, de los contextos anteriores que influyen para el entendimiento de la norma actual, se concluye que lo que quería el legislador al crear el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, era precisamente, determinar que la fusión de las sociedades controladas (sean del mismo grupo de consolidación fiscal o no) actualizan una desincorporación.

Ya que, el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada el 31 de diciembre de 2001, contenía la regla general y la excepción, al señalar que con la fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve fuera absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora se fusione a una controlada del mismo grupo.

Sin embargo, al haber quedado derogado el precepto legal de mérito y surgir el artículo 71 de la ley de la materia, resulta claro que el legislador decidió que solo prevaleciera la regla general, por lo que debe entenderse que dicha regla aplica para toda fusión realizada entre sociedades controladas o controladoras, del mismo grupo de consolidación fiscal o no; en

consecuencia, cuando se esté frente a una fusión de controladas, se entenderá que existe desincorporación de las mismas.

Ya que, no debe pasarse por alto que en el sistema jurídico mexicano la fusión supone una forma de disolución sin liquidación, porque el periodo de liquidación es incompatible con el hecho de que, la fusión de la sociedad que subsiste o la que resulte de la fusión se convierte en la nueva titular de los derechos y obligaciones de las fusionadas, de tal suerte que la fusión tiene como efectos, entre otros:

a) Que la sociedad fusionante o la que resulte es la nueva titular del patrimonio de las fusionadas; y,

b) La extinción de las fusionadas, que implica la pérdida de su personalidad jurídica y patrimonio a partir de que surta efectos la fusión.

Consecuentemente, las sociedades fusionadas no conservan esa personalidad jurídica para continuar con la conclusión de sus operaciones, lo que es propio de la liquidación y, por tanto, los mandatos otorgados antes de la fusión carecen de validez, salvo que en el pacto de fusión se acuerde su eficacia por tiempo determinado o condición.

Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis número XVI.3o.1 C, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de marzo de 2002, la cual a la letra señala lo siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 187529
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XV, Marzo de 2002
Materia(s): Civil
Tesis: XVI.3o.1 C
Página: 1352

FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. LAS FUSIONADAS, AL EXTINGUIRSE, PIERDEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA.

De conformidad con los artículos 223 y 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el sistema jurídico mexicano la fusión supone una forma de disolución sin liquidación, porque el periodo de liquidación es incompatible con el hecho de que, a virtud de la fusión la sociedad que subsiste o la que resulte de la fusión se convierte en la nueva titular de los derechos y obligaciones de las fusionadas. Si las fusionadas se liquidasen, no tendría sentido lo

establecido en el referido artículo 224 que prevé su extinción para que todos sus activos y pasivos formen parte del patrimonio de un ente distinto a ellas. De tal suerte que la fusión tiene como efectos, entre otros: a) que la sociedad fusionante o la que resulte es la nueva titular del patrimonio de las fusionadas; y, b) la extinción de las fusionadas, que implica la pérdida de su personalidad jurídica y patrimonio a partir de que surta efectos la fusión. Consecuentemente, las sociedades fusionadas no conservan esa personalidad jurídica para continuar con la conclusión de sus operaciones, lo que es propio de la liquidación y, por tanto, los mandatos otorgados antes de la fusión carecen de validez, salvo que en el pacto de fusión se acuerde su eficacia por tiempo determinado o condición.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

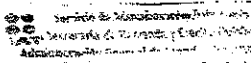
Amparo en revisión 235/2000. Distribuidora Alda, S.A. de C.V. y otro. 23 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Sierra López. Secretaria: Cristina Guzmán Ornelas.”

En virtud de lo anterior, resultan **infundados** los argumentos de la accionante, en el sentido de que son ilegales las resoluciones impugnadas pues al no haber desincorporación, tampoco se genera la obligación de la actora de sumar pérdidas fiscales de sus controladas a su utilidad en términos del artículo 71 en relación con el 68, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que se insiste, en términos del multicitado artículo 71 de la Ley de referencia, si existió desincorporación de las sociedades controladas ***** y *****
***** al fusionarse con *****

En ese sentido, **tampoco le asiste la razón a la demandante**, en relación a que no tenía obligación de sumar las pérdidas de las empresas fusionadas, ya que al momento en que se generó la desincorporación, no existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar, por lo siguiente:

Al respecto, la autoridad demandada en la resolución recurrida contenida en el oficio número **900-05-2013-48229** de fecha **25 de julio de 2013**, determinó en la parte que interesa lo siguiente:

“(…)



Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.: [REDACTED]

DE [REDACTED]
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA- DE LAS PERSONAS MORALES SOCIEDADES MERCANTILES CONTROLADORAS.

EJERCICIO REVISADO: Del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO.

a) Omitió adicionar a la utilidad fiscal consolidada el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de las sociedades que se desincorporan de la consolidación.

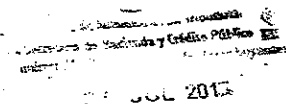
RESULTADO DE LA REVISIÓN:

De la revisión practicada a la información y documentación proporcionada por el Contador Público Registrado, y en el transcurso de la revisión, proporcionada por la contribuyente, esta Autoridad determina que omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas [REDACTED] en cantidad de \$1,867,583,390 y \$383,461,396, respectivamente, que en suma ascienden a \$2,251,044,786, pérdidas fiscales pendientes de disminuir actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 28 de octubre de 2007, según instrumento notarial número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007 y en consecuencia:

La observación anterior, modifica la utilidad fiscal y el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006, manifestado por [REDACTED] en declaración anual complementaria de fecha 13 de agosto de 2010 actualmente [REDACTED] así como las señaladas en las páginas 40 a la 52 y de la 52 a la 76, del presente oficio, tal y como se determina en el cuadro transcrito en las páginas 9 y 10, del presente oficio.

Las pérdidas fiscales que tenían pendientes de aplicar en lo individual en cantidad de \$2,251,044,786 actualizadas al mes de diciembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, se determinan como sigue:

15 de 96



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

EJERCICIO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y EJERCICIO EN QUE SE ORIGINA LA PÉRDIDA	INPC DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR A AQUEL EN EL CUAL SE REALICE LA DESINCORPORACIÓN, DE DICIEMBRE DE 2006	INPC 1er. MES DE LA 2a. MITAD DEL EJERCICIO DE ORIGEN JULIO DE 2006	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA (100%) (1)	PÉRDIDAS FISCALES A DICIEMBRE DE 2006 PENDIENTES DE ADICIONAR AL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO COMO EFECTO DE LA DESINCORPORACIÓN	
2006	1,867,583,390.38	83,451	80,9444	1.0309	1,867,583,390.38	100%	1,867,583,390.38
BODEGA DE REMATES ELEKTRA, S.A. DE C.V.							
2006	383,461,396.75	83,451	80,9444	1.0309	383,461,396.75	100%	383,461,396.75
Total	2,251,044,786.13				2,251,044,786.13		2,251,044,786.13

(1) Importes y participación accionaria incluidos en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión, como se indica en la página 22 del presente oficio.

El factor de actualización se determinó de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, que a la letra señala: "...En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora, que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquel en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate." para lo cual se aplicará el factor, como sigue:

El factor de actualización de 1.0309 que se cita en el cuadro que antecede, para efecto de actualizar las pérdidas fiscales que la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] no adicionó a la utilidad fiscal consolidada en la determinación del resultado fiscal consolidado de 2006, se determinó tomando el índice nacional de precios al consumidor del mes de diciembre de 2006 por 83.451 correspondiente al último mes del ejercicio en que se adiciona, es decir diciembre de 2006 y dividiéndolo entre el índice nacional de precios al consumidor del mes de julio de 2006 por 80.9444 que corresponde al primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió dicha pérdida fiscal, ambos índices expresados con la base "segunda quincena de junio de 2002=100", según comunicado del Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de octubre de 2002; ambos índices modificados y expresados con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", según comunicado del Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 2011.

Cabe señalar que en comunicado del 23 de febrero de 2011, el Banco de México publicó la información histórica que contiene la tabla que representa los índices de precios al consumidor mensual a partir de enero de 1969 expresado conforme a la nueva base segunda quincena de

16 de 96



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 493 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
DESPACHADO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Oficio: 900-05-2013-45229
Exp.: [REDACTED]

diciembre de 2010 = 100, con el propósito de vincular dichos índices con los que se determinan de conformidad con la publicación que realizó el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de enero de 2011, conforme a lo siguiente:

Último mes del ejercicio en que se adiciona	Índice Nacional de Precios al Consumidor	Según D.O.F. de fecha	Entre: el mes en que se actualizó por última vez	Índice Nacional de Precios al Consumidor	Según D.O.F. de fecha	Factor de Ajuste
dic-06	83.451138863412	10/01/2007	jul-06	80.944467047782	10/06/2006	1.0309

El INPC base segunda quincena de junio de 2002 = 100 de cada mes se dividió entre la constante C = 145.013 y el resultado así obtenido se multiplicó por cien, utilizando al efecto doce decimales.

El INPC base segunda quincena de junio de 2002 = 100 del mes de julio de 2006 fue de 80.9444 puntos, [(117.380*) / (145.013)] X 100 = 80.944467047782.

*El INPC del mes de julio de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2006.

El INPC base segunda quincena de junio de 2002 = 100 del mes de diciembre de 2006 fue de 83.4511 puntos, [(122.015*) / (145.013)] X 100 = 83.451138863412.

*El INPC del mes de diciembre de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2007.

Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de abril de 2008, se otorgaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las facultades exclusivas para la elaboración del Índice Nacional de Precios al Consumidor. En tales consideraciones, cuando las disposiciones legales hagan mención al Índice Nacional de Precios al Consumidor, a partir del 15 de julio de 2011, dicha referencia se entenderá efectuada al índice que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad con los artículos 59, fracción III, letra a, Primero y Décimo Primero Transitorios de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008.

En relación al cuadro de la página 16 del presente oficio, la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, de sus sociedades controladas.

[REDACTED] en cantidad de \$1,867'583,390 y \$383'461,396, respectivamente, que en suma ascienden a \$2,251'044,786, actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007 en el ejercicio posterior al de revisión, en la cual las citadas contribuyentes desaparecen y subsiste la sociedad controlada [REDACTED] lo anterior, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, de conformidad con el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007, y en consecuencia, omitió un impuesto sobre la renta consolidado.

17 de 96

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
25 JUL 2013
Oficio: 900-05-2010-2149
DESPACHADO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE



SAT
Servicio de Administración Tributaria
25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
DESPACHADO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

[REDACTED] 644,786, se determinó en base a lo siguiente:

Oficio 900 05-2010-2149 del 01 de julio de 2010, emitido por esta Administración, referido en el inciso a) de la página 2 del presente oficio se citó al C.P. [REDACTED] para llevar a cabo la revisión de papeles de trabajo que formuló, respecto del [REDACTED] para efectos fiscales, emitió sobre los estados financieros de la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

Esta revisión se realizó el día 16 de julio de 2010, con el L.C. [REDACTED] en representación del C.P. [REDACTED] en la cual se levantó acta de comparecencia a folios CONS3-10-466 a CONS3-10-473, así mismo, haciéndose constar, entre otras, las siguientes preguntas y respuestas:

"PREGUNTA N° 17.- De la información y documentación que obra en los expedientes de esta Administración, abierto a nombre de [REDACTED] y sus sociedades controladas, así como de los sistemas institucionales, se conoció que en el ejercicio fiscal de 2007 se fusionaron las siguientes sociedades controladas: [REDACTED]

[REDACTED] al respecto exhiba la declaración complementaria del ejercicio en revisión en la que la contribuyente reconozca los efectos en la determinación del impuesto sobre la renta consolidado, derivado de dichas fusiones, adjuntando la documentación con los cálculos de todos los efectos, en su caso, indique razón y fundamento legal del porqué la contribuyente no la ha presentado.

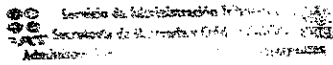
RESPUESTA.- Debido a que la desincorporación de las compañías mencionadas se efectuó en el ejercicio fiscal de 2007, en estos momentos no cuento con la documentación soporte de esa operación, se encuentra en mis papeles de trabajo del ejercicio en que se llevo a cabo las fusiones citadas."

Derivado de lo anterior, mediante oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1" adscrita a esta Administración, referido en el inciso b) de las páginas 2 y 3 del presente oficio, se solicitó al C.P. [REDACTED] entre otra, la siguiente información y documentación:

9.- Cédula de trabajo que contenga la integración del resultado fiscal consolidado, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, así como del impuesto sobre la renta a cargo o a favor, considerando para efectos de dicha determinación las utilidades o pérdidas fiscales manifestadas en las declaraciones anuales normales y/o complementarias en su caso, presentadas a la fecha por cada una de las sociedades controladas de [REDACTED] que contenga entre otros datos lo siguiente:

- Nombre de la sociedad controlada y/o controladora.
- Utilidad o pérdida fiscal individual.
- Porcentaje de participación accionaria.
- Utilidad o pérdida fiscal en la participación consolidable por cada controlada y por la propia controladora.

18 de 96



25 JUL 2013

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 000-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

- e) En su caso, conceptos especiales de consolidación que se sumen o que resten.
- f) Conceptos y montos correspondientes a los efectos por desincorporaciones de consolidadas o desconsolidación, que se sumen o se resten, correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, cuyos efectos debe reconocer [REDACTED] en el ejercicio fiscal de 2006.
- g) Conceptos y montos correspondientes a los efectos por variaciones en los porcentajes de participación consolidable, que se sumen o resten, de las sociedades controladas, en su caso.
- h) Pérdidas fiscales por las cuales se perdió el derecho a disminuirlas a nivel individual que se reversan en la consolidación fiscal, en su caso.
- i) Utilidad o pérdida fiscal consolidada.
- j) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores consolidadas que se disminuyen.
- k) Resultado fiscal consolidado.
- l) Impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio.
- m) Acreditamiento de pagos provisionales correspondientes a las sociedades controladas y la propia controladora.
- n) Pagos provisionales consolidados.
- ñ) Impuesto sobre la renta retenido a la sociedad controladora, acreditable contra el impuesto anual.
- o) Otros acreditamientos: especificando concepto y monto e identificando a la sociedad controlada que corresponda, así como el porcentaje de participación consolidable. En su caso especificar si se trata de un importe correspondiente a la consolidación fiscal.
- p) Saldo a cargo o a favor.

15.- De la información y documentación que obra en los expedientes de esta Administración, abierto a nombre de [REDACTED] y sus sociedades controladas, se conoció que en el ejercicio fiscal de 2007, se fusionaron las siguientes sociedades controladas:

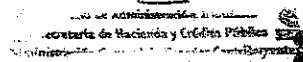
[REDACTED] al respecto se solicita fotocopia de:

- a) Avisos de desincorporación por fusión de las sociedades antes citadas, presentados ante la Autoridad Fiscal por la contribuyente [REDACTED] de conformidad con lo establecido en el artículo 72, primer y noveno párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.
- b) Actas de asamblea en donde se acordaron las fusiones de las referidas sociedades controladas.
- c) Indique, si esas fueron todas las sociedades que se desincorporaron en el 2007, con efectos en el ejercicio en revisión (SIC)

16.- Con relación a las fusiones y/o desincorporaciones que se efectuaron en el ejercicio fiscal de 2007, de algunas sociedades controladas y por las cuales la sociedad controladora deberá reconocer los efectos en el ejercicio en revisión, sírvase proporcionar la información que se señala a continuación:

- a) Declaración complementaria del ejercicio en revisión, en la que [REDACTED] reconozca los efectos en la determinación del resultado fiscal consolidado, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.
- b) Relación analítica por ejercicio fiscal, de las diferentes partidas, que de las sociedades controladas fusionadas en el ejercicio fiscal de 2007, se hayan considerado para efectos de la

19 de 96



25 JUL 2013

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DE [REDACTED]

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Nº 20

[REDACTED] de la pérdida o utilidad fiscal consolidada, en los ejercicios en que consolidaron las pérdidas fiscales con [REDACTED]

[REDACTED] y proporcione fotocopia legible de las declaraciones de los ejercicios en que consolidaron las siguientes sociedades controladas:

con R.F.C.: [REDACTED] con R.F.C.: CDA [REDACTED]
[REDACTED] (SIC) con R.F.C.: [REDACTED]

Así mismo, señale si las sociedades controladas mencionadas anteriormente, cambiaron de razón social posteriormente a la fusión e indique la razón y fundamento legal del porqué no se reconocieron los efectos de desincorporación en el resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión o, en su caso, del porque la contribuyente [REDACTED] no ha presentado la declaración complementaria del ejercicio en revisión, reconociendo los efectos de desincorporación de sus sociedades controladas, efectuadas en 2007, adjuntando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.

- d) Declaración complementaria del ejercicio en revisión en la que la contribuyente reconozca los efectos en la determinación del impuesto sobre la renta consolidado, en los términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.
- e) Cédula de trabajo con los cálculos de todos los efectos en el resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión, derivados de la desincorporación por fusión de las citadas sociedades controladas.
- f) Cédula de trabajo en los que se determine analíticamente el importe de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir de las sociedades [REDACTED]

[REDACTED] que se desincorporan, en los términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, en el que indique, entre otros datos, lo siguiente:

- Nombre de la sociedad que se desincorpora.
- Ejercicio en el que se obtuvo la pérdida fiscal.
- Importe histórico de la pérdida por aplicar a nivel individual.
- Pérdida actualizada.
- Factor de actualización, indicando los Índices Nacionales de Precios al Consumidor utilizados para el cálculo del factor de actualización.
- Monto de la pérdida fiscal aplicada contra utilidades.
- Remanente de la pérdida fiscal.
- Porcentaje de participación accionaria o consolidable.
- Pérdida fiscal en participación accionaria o consolidable.
- Asimismo, anexe fotocopia del los registros especiales de consolidación en donde se observe el monto de las utilidades y las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas que se desincorporan a que hace referencia el artículo 72, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2007.
- g) Cédula de trabajo con la comparación del saldo del registro de utilidades fiscales netas de las sociedades controladas que se desincorporaron en 2007, contra el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas, y la comparación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas que se desincorporaron, contra el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada."

20 de 96



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 495 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente

SAT
Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DESIGNADO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

En respuesta a lo anterior, con escrito del 2 de junio de 2011, recibido en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, el mismo día de su fecha de emisión, señalado en el inciso c) de la página 3 del presente oficio, dicho profesionista proporcionó entre otra información y documentación la siguiente:

...
Con relación al punto 9 del citado oficio se incluye lo siguiente:

Se proporcionan las cédulas de trabajo de la determinación del resultado fiscal consolidado, la cual sirvió de base determinar el resultado fiscal consolidado de la declaración anual normal presentada el 30 de abril de 2007 y complementarias presentadas el 7 de septiembre de 2007 y 13 de agosto de 2010, respectivamente, considerando las utilidades fiscales o pérdidas fiscales manifestadas en las declaraciones normales y complementarias de las sociedades controladas del contribuyente.

...

Con relación al punto 15 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- Se incluye copia fotostática legible de los avisos de desincorporación por fusión de [REDACTED]

b.- Actas de Asamblea de Accionistas en donde se acordaron las fusiones de [REDACTED]

c.- Acta de Asamblea de Accionistas de [REDACTED] en donde se acuerda su liquidación.

d.- [REDACTED] (SIC), son todas las sociedades que se desincorporaron en el 2007.

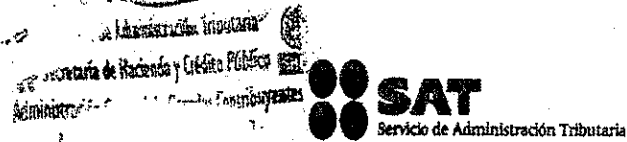
Con relación al punto 16 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- El contribuyente no presentó la declaración complementaria en la que reconozca los efectos de desincorporación a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, vigente en 2007, debido a que no existen dichos efectos.

b.- La relación analítica por ejercicio fiscal de las diferentes partidas de las sociedades controladas fusionadas y liquidadas en el ejercicio sujeto a revisión no forma parte de mis papeles de trabajo, por lo que ha sido solicitada al contribuyente y está en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación.

c.- Debido a que nuestra revisión solo incluyó el cotejo de las declaraciones de los ejercicios en que consolidaron fiscalmente, no contamos con las copias fotostáticas de dicha declaraciones, por lo que han solicitado al contribuyente y está en proceso de entrega a la fecha de la presente comunicación.

d.- [REDACTED] (SIC), no tenían



25 JUL 2017
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DESTRUCIDO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

perdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir al momentos (sic) de la consolidación."

Respecto a lo anterior, a continuación se transcribe papel de trabajo denominado **RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 IMPUESTO SOBRE LA RENTA**, mismo que fue proporcionado, mediante el citado escrito de fecha 02 de junio de 2011, en respuesta a la pregunta 9 del oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011, como sigue:

RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

COMPANIA	UTILIDAD O PERDIDA	PARTICIPACION CONSOLIDABLE	UTILIDAD O PERDIDA CONSOLIDABLE	PARTICIPACION POR INCORPORACION	CONSOLIDADO
Subtotal:	810,519,244	100.0000%	810,519,244.37	0.00	810,519,244.37
	1,771,701	100.0000%	1,771,701.00	0.00	1,771,701.00
	11,114,249	100.0000%	11,114,249.81	0.00	11,114,249.81
	11,132,414	100.0000%	11,132,414.00	0.00	11,132,414.00
	796,114	100.0000%	796,114.00	0.00	796,114.00
	8,418,710	100.0000%	8,418,730.00	0.00	8,418,730.00
SUB TOTAL			840,523,963.53	0.00	840,523,963.53
	13,161,604	100.0000%	13,161,604.00	0.00	13,161,604.00
	1,771,128,230	99.0376%	1,771,128,230.33	0.00	1,771,128,230.33
	298,997	100.0000%	298,997.00	298,997.00	0.00
	8,878,438	100.0000%	8,878,438.00	0.00	8,878,438.00
	114,983	100.0000%	114,983.00	0.00	114,983.00
	858,860	100.0000%	858,860.00	0.00	858,860.00
	298,525	99.9999%	298,525.00	298,525.00	0.00
	4,027,111	99.9999%	4,027,106.84	0.00	4,027,106.84
	300,009	100.0000%	300,009.00	0.00	300,009.00
	13,707,511	100.0000%	13,707,511.00	0.00	13,707,511.00
	12,975,200	100.0000%	12,975,200.00	0.00	12,975,200.00
	4,718,890	100.0000%	4,718,890.00	0.00	4,718,890.00
	152,515	100.0000%	152,515.00	0.00	152,515.00
	1,701,431	100.0000%	1,701,431.00	0.00	1,701,431.00
	5,598,308	100.0000%	5,598,307.30	0.00	5,598,307.30
	0	100.0000%	0.00	0.00	0.00
	189,890,124	100.0000%	189,890,124.00	0.00	189,890,124.00
	21,800,108	100.0000%	21,800,108.00	0.00	21,800,108.00
	791,722	99.9999%	791,722.00	0.00	791,722.00
	0	99.9999%	0.00	0.00	0.00
	242,834	100.0000%	242,834.00	0.00	242,834.00
	48,137	100.0000%	48,137.00	0.00	48,137.00
	13,339,152	99.9999%	13,339,152.93	0.00	13,339,152.93
	1,752,971	100.0000%	1,752,971.00	0.00	1,752,971.00
	1,203	100.0000%	1,203.00	0.00	1,203.00
	3,316,819	100.0000%	3,316,819.00	0.00	3,316,819.00
	55,879,212	100.0000%	55,879,208.47	0.00	55,879,208.47
	4,649,214	99.9999%	4,649,207.34	0.00	4,649,207.34
	36,064,090	100.0000%	36,064,090.13	0.00	36,064,090.13
	106,013,087	99.9999%	106,013,084.26	0.00	106,013,084.26
	3,344,896	100.0000%	3,344,896.00	0.00	3,344,896.00
	46,372,773	100.0000%	46,372,773.00	0.00	46,372,773.00
	1,081,414	99.9999%	1,081,413.00	0.00	1,081,413.00
	2,060,435	100.0000%	2,060,435.00	0.00	2,060,435.00
	0	99.9999%	0.00	0.00	0.00
	147,518,205	100.0000%	147,518,205.08	0.00	147,518,205.08
	371,967,597	100.0000%	371,967,597.00	0.00	371,967,597.00
	1,811,004,802	100.0000%	1,811,004,801.49	0.00	1,811,004,801.49
	5,517	99.9999%	5,517.00	0.00	5,517.00
	20,072	99.9999%	20,072.97	0.00	20,072.97
	5,408,773	99.9999%	5,408,766.14	0.00	5,408,766.14
	163,371,885	99.9999%	163,371,880.53	0.00	163,371,880.53
	390,367,148	100.0000%	390,367,148.00	0.00	390,367,148.00
	760,216,556	99.9999%	760,216,553.00	0.00	760,216,553.00
	18,219	99.9999%	18,219.64	0.00	18,219.64

1,264,890,367.66 1,278,595,400.53 13,996,132.66

1,264,890,367.66 1,278,595,400.53 626,127,810.87

0.00

626,127,810.87

0.00

181,593,071.00

Pagos Provisionales 115,534,889

Impuesto a Corrientes 1,000,000

De lo anterior, se observa que el L.C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal del C.P. [REDACTED] proporcionó la información y



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 497 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.: [REDACTED]

documentación, solicitada mediante oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011 antes referido, en forma parcial, motivo por el cual no se contó con la información y documentación suficiente para verificar la situación fiscal de la contribuyente, por lo que para efectos de seguir con el procedimiento de revisión previsto en el artículo 52-A, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, mediante oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, el cual contiene la solicitud de información y documentación GSD9400235/11 emitida por esta Administración y referido en el inciso d) de la página 3 del presente oficio, se solicitó directamente a [REDACTED] actualmente [REDACTED] la información y documentación que no fue proporcionada por el contador público dictaminador, requerida mediante oficio número 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011, con fundamento en lo establecido en el artículo 52-A, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, como sigue:

"6.- Cédula de trabajo que contenga la integración del resultado fiscal consolidado, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, así como del impuesto sobre la renta a cargo o a favor, considerando para efectos de dicha determinación las utilidades o pérdidas fiscales manifestadas en las declaraciones anuales normales y/o complementarias en su caso, presentadas a la fecha por cada una de las sociedades controladas de [REDACTED] que contenga entre otros datos lo siguiente:

- Nombre de la sociedad controlada y/o controladora.
- Utilidad o pérdida fiscal individual.
- Porcentaje de participación accionaria.
- Utilidad o pérdida fiscal en la participación consolidable por cada controlada y por la propia controladora.
- En su caso, conceptos especiales de consolidación que se sumen o que resten.
- Conceptos y montos correspondientes a los efectos por desincorporaciones de controladas o desconsolidación, que se sumen o se resten, correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, cuyos efectos debe reconocer [REDACTED] en el ejercicio fiscal de 2006.
- Conceptos y montos correspondientes a los efectos por variaciones en los porcentajes de participación consolidable, que se sumen o resten, de las sociedades controladas, en su caso.
- Pérdidas fiscales por las cuales se perdió el derecho a disminuirlos a nivel individual que se reversan en la consolidación fiscal, en su caso.
- Utilidad o pérdida fiscal consolidada.
- Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores consolidadas que se disminuyen.
- Resultado fiscal consolidado.
- Impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio.
- Acreditamiento de pagos provisionales correspondientes a las sociedades controladas y la propia controladora.
- Pagos provisionales consolidados.
- Impuesto sobre la renta retenido a la sociedad controladora, acreditable contra el impuesto anual.
- Otros acreditamientos: especificando concepto y monto e identificando a la sociedad controlada que corresponda, así como el porcentaje de participación consolidable. En su caso especificar si se trata de un importe correspondiente a la consolidación fiscal.
- Saldo a cargo o a favor.

11.- Con relación a las fusiones y/o desincorporaciones que se efectuaron en el ejercicio fiscal de 2007, de algunas sociedades controladas y por las cuales [REDACTED] como sociedad

23 de 06

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.

SAT
Servicio de Administración Tributaria

200668

que se reconozca los efectos en el ejercicio en revisión, sírvase proporcionar la información que se señala a continuación:

Declaración analítica por ejercicio fiscal, de las diferentes partidas, que de las sociedades controladas fusionadas en el ejercicio fiscal de 2007, se hayan considerado para efectos de la determinación de la pérdida o utilidad fiscal consolidada, en los ejercicios en que consolidaron para efectos fiscales con [REDACTED]


Exhiba y proporcione fotocopia legible de las declaraciones de los ejercicios en que consolidaron las siguientes sociedades controladas: [REDACTED] con R.F.C.: [REDACTED] con R.F.C.: CDA 9905275M71 y [REDACTED] con R.F.C.: [REDACTED]

Así mismo, señale si las sociedades controladas mencionadas anteriormente, cambiaron de razón social posteriormente a la fusión e indique la razón y fundamento legal del porqué no se reconocieron los efectos de desincorporación en el resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión o, en su caso, del porqué la contribuyente [REDACTED] no ha presentado la declaración complementaria del ejercicio en revisión, reconociendo los efectos de desincorporación de sus sociedades controladas, efectuadas en 2007, adjuntando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.


- Declaración complementaria del ejercicio en revisión en la que la contribuyente reconozca los efectos en la determinación del impuesto sobre la renta consolidado, en los términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.
- Cédula de trabajo con los cálculos de todos los efectos en el resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión, derivados de la desincorporación por fusión de las citadas sociedades controladas.
- Cédula de trabajo en los que se determine analíticamente el importe de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir de las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] que se desincorporan, en los términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, en el que indique, entre otros datos, lo siguiente:

- Nombre de la sociedad que se desincorpora.
- Ejercicio en el que se obtuvo la pérdida fiscal.
- Importe histórico de la pérdida por aplicar a nivel individual.
- Pérdida actualizada.
- Factor de actualización, indicando los Índices Nacionales de Precios al Consumidor utilizados para el cálculo del factor de actualización.
- Monto de la pérdida fiscal aplicada contra utilidades.
- Remanente de la pérdida fiscal.
- Porcentaje de participación accionaria o consolidable.
- Pérdida fiscal en participación accionaria o consolidable.
- Asimismo, anexe fotocopia de los registros especiales de consolidación en donde se observe el monto de las utilidades y las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas que se desincorporan a que hace referencia el artículo 71, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2007.

24 de 96



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.: [Redacted]

1) Cédula de trabajo con la comparación del saldo del registro de utilidades fiscales netas de las sociedades controladas que se desincorporaron en 2007, contra el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas, y la comparación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas que se desincorporaron, contra el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada.
(Subrayado agregado)


Por lo anterior, mediante escrito del 15 de julio de 2011, recibido el día 18 del mismo mes y año ante la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, referido en el inciso e) de las páginas 3 y 4 del presente oficio, el L.A.E. [Redacted] en su carácter de Representante Legal de [Redacted] antes [Redacted] solicitó ampliación del plazo para presentar la información y documentación requerida a través del oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, antes señalado.

En atención a la solicitud de prórroga antes mencionada, con oficio 900-05-03-2011-13614 del 25 de julio de 2011, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" adscrita a esta Administración y referido en el inciso f) de la página 4 del presente oficio, se le comunicó a dicha contribuyente que se le concedía prórroga por diez días más para dar cumplimiento a la solicitud de la información y documentación contenida en el oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011.


Ahora bien, mediante escrito del 02 de agosto de 2011, recibido el 3 del mismo mes y año en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, referido en el inciso g) de la página 4 del presente oficio, firmado por el L.A.E. [Redacted] en su carácter de Representante Legal de la contribuyente [Redacted] actualmente [Redacted] la contribuyente dió respuesta al oficio antes mencionado manifestando, entre otros, lo siguiente:

- 6.- Del punto seis se proporciona cédula de trabajo con la integración del resultado fiscal consolidado conforme a lo establecido en el artículo 68 de la LISR, así como la determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio sujeto a revisión.
- 12.- En relación al punto once se proporciona cédula de trabajo con la determinación de los efectos de las desincorporaciones por fusión de las sociedades controladas, (SIC)
- Así mismo se proporciona integración analítica de los resultados fiscales de las sociedades controladas por el periodo que consolidaron para efectos fiscales.
- Se proporcionan declaraciones y/o anexos del dictamen fiscal de las sociedades controladas fusionadas de los ejercicios fiscales en que consolidaron fiscalmente.

25 de 46



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DESARROLLO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

En relación al punto de la desincorporación no se presentó la declaración complementaria en la que se determinan los efectos de desincorporación a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 71 del Código de Procedimientos de Impuesto sobre la Renta, vigente en 2007, debido a que no existen dichos efectos.

Por otro lado [Redacted] y [Redacted] (SIC), no tenían pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir al momento de la desincorporación.

A continuación se transcriben los papeles de trabajo proporcionados por esa contribuyente mediante escrito de fecha 02 de agosto de 2011, en respuesta a lo solicitado en los numerales 6 y 11, como sigue:

Resumen de Utilidades y/o Pérdidas Fiscales consideradas durante el periodo en el que consolidaron

	2004	2005	2006
[Redacted]	401,672,455	180,449,390	*-371,967,597
[Redacted]	529,132,145	1,268,352,244	*-1,811,604,802
			760,216,956*

(Énfasis añadido)

*Estos importes coinciden con el manifestado en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006, como se muestra en las páginas 22 y 41 a la 44 del presente oficio.

Asimismo, los datos principales de las declaraciones y del anexo "12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA" del dictamen fiscal, proporcionadas por el contribuyente [Redacted] antes [Redacted] con escrito del 02 de agosto de 2011, respecto a sus sociedades controladas fusionadas antes señaladas, contienen los siguientes datos principales:

Sistema de Presentación del Dictamen 2006		
12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
INDICE	CONCEPTO	TOTAL
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL	
	31 DE DICIEMBRE DE 2006	
	(CIFRAS EN PESOS)	
00000	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	

Sigue cuadro ...



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 499 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

SAT
Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2016

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.: [REDACTED]

Continúa cuadro:

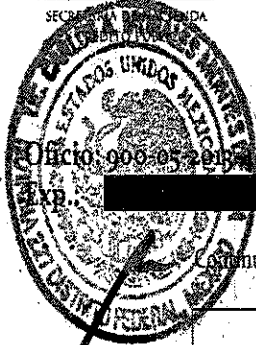
120020	PERDIDA DEL EJERCICIO	48,980,639
	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
120030	RESULTADO FAVORABLE	11,244,503
120040	RESULTADO DESFAVORABLE	
120050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
120060	PERDIDA HISTORICA	60,335,142
	MAS:	
120070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
120080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	2,272,043,470
	MENOS:	
120090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	2,431,093,121
	MENOS:	
120100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	1,592,330,210
120110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	1,811,604,803
120120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
120130	PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
120140	PERDIDA FISCAL	1,811,604,803
120150	UTILIDAD FISCAL	
120160	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
120170	RESULTADO FISCAL	0

Énfasis añadido.

"Sistema de Presentación del Dictamen 2006."		
[REDACTED]		
12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
INDICE	CONCEPTO	TOTAL
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL	
	31 DE DICIEMBRE DE 2006	

Sigue cuadro ...

SHCP



Oficio: 900-05-2015-8229

EXP:

continúa cuadro:



Servicio de Administración Tributaria
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Administración General de Grandes Contribuyentes



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

25 JUL 2015

DESFAVORABLE

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

	(CIFRAS EN PESOS)		
120010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
120020	PERDIDA DEL EJERCICIO	13,462,615	
	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10		
120030	RESULTADO FAVORABLE		
120040	RESULTADO DESFAVORABLE	-479,634	
120050	UTILIDAD NETA HISTORICA		
120060	PERDIDA HISTORICA	13,942,249	
	MAS:		
120070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	10,756,552	
	MAS:		
120080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	107,749,850	
	MENOS:		
120090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	19,481,587	
120100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	457,050,163	
120110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	378,967,597	
120120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		
120130	PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		

Sigue cuadro ...



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 501 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITOS PÚBLICOS



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.: [REDACTED]

Continúa cuadro:

120140	PERDIDA FISCAL	376367.282
120150	UTILIDAD FISCAL	27200
120160	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
120170	RESULTADO FISCAL	0

Énfasis añadido.

Derivado de lo anterior, mediante oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" adscrita a esta Administración y referido en el inciso j) de la página 5 del presente oficio, se hizo del conocimiento a esa contribuyente las observaciones que entrañaron incumplimiento de las disposiciones fiscales en relación, entre otras, a que esa contribuyente omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, de sus sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] Remates [REDACTED] en cantidad de \$2,251,044,786 actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007 en el ejercicio posterior al de revisión, en la cual las citadas contribuyentes desaparecen y subsiste la sociedad controlada [REDACTED] lo anterior, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, de conformidad con el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de 2007.

Lo anterior se conoció a través de la documentación proporcionada por el L.C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal del C.P. [REDACTED] mediante escrito de fecha 2 de junio de 2011 recibido en la Oficialía de Partes de esta Administración General de Grandes Contribuyentes, el mismo día de su fecha de emisión, en contestación a la pregunta número 15 del oficio de solicitud de información y documentación 900-05-01-2011-20323 del 03 de mayo de 2011, como se señaló en las páginas 18 a la 20 del presente oficio, a través de la cual se informó que [REDACTED] actualmente [REDACTED] y [REDACTED] en la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, ambas con fecha de recepción 29 de octubre de 2007, mismas fusiones que de conformidad con el instrumento número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, surtieron efectos legales al 31 de octubre de 2007.

29 de 96

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITOS PÚBLICOS
Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.: [REDACTED]



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

De conformidad con los preceptos antes mencionados, esa contribuyente, al ser una persona física que optó por consolidar su utilidad fiscal, se encuentra obligada a aplicar el procedimiento legalmente establecido para dicho régimen en específico, situación que en la especie no ocurrió, razón por la cual, esta Administración procede a determinar el correcto cálculo de la utilidad fiscal consolidada.

Ahora bien, con escrito del 1º de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013 en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603 firmado por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] quien acreditó su personalidad con fotocopia del Instrumento Público Notarial número 95,889, volumen 1853 de fecha 13 de octubre de 2003, otorgado ante la fe del Lic. Gerardo Correa Etchegaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal, dio respuesta al oficio de observaciones dentro del plazo legal de 20 días previsto en el artículo 48, primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente, manifestando lo siguiente:

REFUTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES

PRIMERO: Observaciones efectuadas por esa H. Administración en relación con la revisión del resultado fiscal consolidado por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 que determinó [REDACTED] antes [REDACTED]

IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- DE LAS PERSONAS MORALES SOCIEDADES MERCANTILES CONTROLADAS.

Ejercicio de 1º de enero al 31 de diciembre de 2006

1. Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio en revisión, declaró un resultado fiscal consolidado en cantidad menor, toda vez que la contribuyente en su determinación no consideró lo siguiente:

a) Omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, de sus sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] en cantidad de \$2,251,044,786.13 actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión en el ejercicio posterior al de revisión, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, de conformidad con el segundo, tercero, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio 2007.

Al respecto manifestó lo siguiente:

El artículo 71 párrafo octavo párrafo de la Ley del impuesto sobre la renta (ISR) vigente en 2006, establece que en caso de fusión de sociedades controladas se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión.

30 de 96

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



25 JUL 2013
SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.: [REDACTED]

En el segundo párrafo del mismo ordenamiento establece lo siguiente:

"La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará y restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada del ejercicio el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado..."
(Énfasis añadido)"

De la anterior disposición, es claro que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar que se adicionarán al resultado fiscal en caso de una desincorporación, son aquellas que se consideraron para determinar el resultado fiscal consolidado en el ejercicio en que se generaron y que a la fecha de su desincorporación, se encuentran pendientes de su amortización.

En el caso que nos ocupa, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de [REDACTED] y [REDACTED] fueron amortizadas a la fecha de fusión, por lo que al momento de la desincorporación, mi representada no se ubicó en el supuesto contenido en el artículo 71 de la Ley del ISR referente a sumar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las sociedades que se desincorporan.

Del estudio a los argumentos manifestados por la contribuyente en su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, en relación a las observaciones dadas a conocer en el oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, respecto a que omitió sumar a su utilidad fiscal consolidada por el ejercicio sujeto a revisión, el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] en cantidad total de \$2,251'044,786.13 actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007 en el ejercicio posterior al de revisión, en el cual las citadas contribuyentes desaparecen y subsiste la sociedad controlada [REDACTED] según instrumento notarial número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, el 18 de octubre de 2007, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, de conformidad con el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

La conclusión anterior, se basa en que dichas pérdidas fiscales fueron restadas por la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] para la determinación del resultado fiscal consolidado correspondiente al ejercicio en que las citadas sociedades controladas las generaron en el caso que nos ocupa el ejercicio de 2006.

31 de 96



25 JUL 2013
SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Por lo que de la revisión a la información proporcionada por esa contribuyente y el contador público dictaminador, en el transcurso de la revisión y la que obra en el expediente administrativo abierto en esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a [REDACTED] y [REDACTED] así como a los argumentos vertidos en su escrito de respuesta al [REDACTED] en las páginas 30 y 31 de esta resolución, esta autoridad determina que las observaciones no fueron desvirtuadas por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a sus argumentos citados en las hojas 2 y 3 de su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, mencionado con anterioridad, mismos que ya fueron transcritos anteriormente en las páginas de la 30 y 31 del presente oficio, y en los que medularmente precisa que esta Administración sostiene en el Oficio de Observaciones que en términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, su representada omitió el pago del impuesto diferido en virtud de que debió adicionar a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio de 2006 pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que tenía pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, de sus sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] en cantidad de \$2,251'044,786.13 actualizadas a diciembre de 2006, indicando que lo anterior no es correcto puesto que "...las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de [REDACTED] y [REDACTED] fueron amortizadas a la fecha de fusión, por lo que al momento de la desincorporación, mi representada no se ubicó en el supuesto contenido en el artículo 71 de la Ley del ISR referente a sumar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las sociedades que se desincorporan".

Del análisis a sus argumentos antes transcritos se precisa lo siguiente:

La contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su carácter de sociedad controladora se ubicó en el supuesto del segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007, toda vez que sus sociedades [REDACTED] y [REDACTED] entre otras, fueron fusionadas por [REDACTED] según consta en instrumento notarial número 36,446, volumen 880, de fecha 18 de octubre de 2007, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, fusiones que surtieron efectos legales al 31 de octubre de 2007, teniendo la obligación de sumar a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior a aquel en que ocurrió la fusión, es decir 2006, el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que habían generado sus sociedades controladas desincorporadas y que a esa fecha aún tenían dichas pérdidas como pendientes de amortizar, máxime que dichas pérdidas habían sido restadas por la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] para la determinación del resultado fiscal consolidado correspondiente al ejercicio en el que las sociedades controladas las generaron, razón por la cual, y de conformidad con los preceptos anteriormente señalados, la contribuyente revisada, tiene la obligación de reconocer los efectos de

32 de 96



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 503 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Oficio: 000-05-2013-48229
Exp.: [REDACTED]

desincorporación, y de aplicar el procedimiento especialmente establecido para ello, por lo que se ubica en el supuesto que establece el noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007 la fusión se considera desincorporación.

En virtud de lo anterior, es clara la obligación a cargo de la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] de reconocer los efectos de desincorporación, entre otros, el previsto en el artículo 71, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, que a la letra señala, lo conducente:

"Artículo 71. Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de esta Ley, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual.

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3859. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en que dicha sociedad se desincorpora...

Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate. Tratándose de los dividendos, éstos se actualizarán desde la fecha de su pago y hasta el mes en que se realice la desincorporación de la sociedad. Los saldos de la cuenta y el registro a que se refieren los párrafos séptimo y octavo de este artículo que se tengan a la fecha de la desincorporación, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se realice la desincorporación.

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser controlada resulta una diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la

33 de 96



25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

SAT
Servicio de Administración Tributaria

fecha en que se efectuó la desincorporación. Si resulta una diferencia de impuesto a favor de la sociedad controladora, ésta podrá solicitar su devolución.
En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión, ..."

(Énfasis y subrayado añadido)

Asimismo, es de enfatizar lo manifestado por la contribuyente [REDACTED] antes [REDACTED] en el sentido de que las pérdidas fiscales pendientes de disminuir por sus sociedades que se desincorporan:

"...fueron amortizadas a la fecha de fusión, por lo que al momento de la desincorporación, mi representada no se ubicó en el supuesto contenido en el artículo 71 de la Ley del ISR referente a sumar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las sociedades que se desincorporan".

En relación con lo anterior, cabe señalar que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 71 de la multicitada Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, transcrito anteriormente, [REDACTED] en que se desincorporaron las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] entre otras, por haberse fusionado con la señalada controlada [REDACTED] el 18 de octubre de 2007, la contribuyente revisada, estaba obligada a reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior, en declaración complementaria de dicho ejercicio, que en el caso que nos ocupa, sería ejercicio de 2006.

Para ello, la disposición, señalada en el párrafo anterior señala, que la contribuyente revisada al situarse en el supuesto, debió sumar a la utilidad fiscal consolidada de dicho ejercicio, es decir, el de 2006, entre otros conceptos, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que las sociedades que se desincorporaron, en este caso por fusión, tuvieran derecho a disminuir al momento de la desincorporación, y hace un especial énfasis al señalar, que para estos efectos, sólo se considerarán aquéllos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la o las sociedades que se desincorporan para determinar el resultado fiscal consolidado.

34 de 96

SHCP

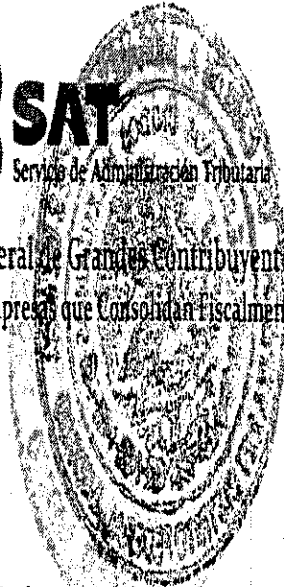
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2008
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.



Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Es decir, el monto de las pérdidas fiscales que generaron las sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] en el propio ejercicio de 2006 por importe \$1,811,604,802 y \$371,967,597, cumplen con el requisito que se señala en el párrafo anterior, al haber sido restadas en dicho ejercicio para determinar el resultado fiscal consolidado, lo cual resulta correcto, ya que dichas pérdidas de manera inmediata fueron amortizadas contra las utilidades fiscales obtenidas por otras sociedades controladas del grupo de consolidación en el mismo ejercicio, generando con ello el diferimiento del impuesto sobre la renta correspondiente a dichas utilidades fiscales en la parte que consolidaron, lo cual a todas luces constituye un diferimiento, mas nunca una omisión del impuesto.

Ahora bien, de los argumentos vertidos por la contribuyente revisada, en el sentido de que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar fueron aplicadas a la fecha de la fusión por las sociedades controladas desincorporadas [REDACTED] y [REDACTED] que obtuvieron en su ejercicio fiscal irregular comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2007 (situación que quedó debidamente acreditada en la página 25 del presente oficio), contra la utilidad fiscal de \$2,106'174,218 y \$477'670,532, respectivamente, como se observa en sus declaraciones presentadas el 31 de diciembre de 2007 y 22 de julio de 2008, con número de operación 9104989 y 9873285, respectivamente, documentación que obra en el expediente administrativo abierto de la contribuyente en revisión de conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, como sigue:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 505 -

Oficio: 000-05-2013-48229

25 JUL 2017

DECLARACIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

12 2006

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAL MORAL

CONTRIBUYENTE: [REDACTED]

CODIGO: 190807 - 12/2007

FECHA DE PRESENTACIÓN: lunes, 31 de diciembre de 2007

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal

ALR LLAVE DE LA DECLARACIÓN: 19080-22390912

1	1 Rfc del contribuyente		
2	2 Tipo de contribuyente	MORAL	
3	3 Entidad receptora	19080-Internet SAT 19080	
4	4 Llave detalle		22390912
5	5 Llave movimiento	19080-22390912	
6	6 Número de operación		9104989
7	7 Materia	21-Declaración del ejercicio	
8	8 Medio de recepción	3-Internet	
9	9 Fecha de presentación	31/12/2007	
10	10 Hora de presentación	12:45	
11	11 Fecha de recaudación	31/12/2007	
12	12 Fecha de registro	31/12/2007 12:53:00 p.m.	
13	13 Periodo	35-Enero-Diciembre - Del Ejercicio	
14	14 Ejercicio		2007
15	15 Tipo de pago	1-Normal	
16	206005 RFC imputado		
17	206011 Denominación o razón social		
18	206002 Tipo de declaración	\$	1.00
19	205004 Fecha de presentación de la declaración inmediata anterior		
20	900000 Cantidad a pagar	\$	
21	111001 Total de ingresos acumulables	\$	2,637,079,560.00
22	111002 Total de deducciones autorizadas y deducción inmediata de inversiones	\$	530,906,332.00
23	111003 Unidad fiscal del ejercicio	\$	2,106,174,218.00
24	111004 Pérdida fiscal del ejercicio		
25	111005 Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio	\$	2,106,174,218.00
26	111006 Resultado fiscal	\$	
27	111009 Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio	\$	
28	111010 Reducciones del ISR		
29	111012 Impuesto del ejercicio	\$	
30	111860 Estimulo por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico, realizados en el ejercicio		
31	111013 Pagos provisionales efectuados	\$	432,663.00
32	111016 Impuesto retenido al contribuyente		
33	111015 Impuesto acreditable pagado en el extranjero		
34	111017 Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos		
35	111011 Impuesto a cargo correspondiente a la consolidación fiscal		
36	111018 Diferencia a cargo		
37	111019 Diferencia a favor	\$	432,663.00
38	901730 Impuesto a la venta de bienes y servicios sujeta a acreditación		
39	111058 Impuesto por inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes		
40	111023 ISR pagado en exceso aplicado contra el impac	\$	260,525.00
41	111021 Impuesto a cargo del ejercicio	\$	
42	111024 Saldo a favor del ejercicio	\$	172,138.00

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

Declaración del Ejercicio Personas Morales

CONTRIBUYENTE [REDACTED]

PERIODO : 1/2007 - 12/2007

FECHA DE PRESENTACIÓN : martes, 22 de julio de 2008

TIPO DE DECLARACIÓN: Complementaria por dictamen

A.L.R. LLAVE DE LA DECLARACIÓN: 19080-15781936

880059

PAGAR CLAVE	DESCRIPCION	VALOR
1	1 Rfc del contribuyente	[REDACTED]
2	2 Tipo de contribuyente	MORAL
3	3 Entidad receptora	19080-Internet SAT 19080
4	4 Llave detalle	15781936
5	5 Llave movimiento	19080-15781936
6	6 Numero de operacion	9873285
7	7 Matena	21-Declaracion del ejercicio
8	8 Medio de recepcion	3-Internet
9	9 Fecha de presentacion	22/07/2008
10	10 Hora de presentacion	10:45
11	11 Fecha de recaudacion	22/07/2008
12	12 Fecha de registro	22/07/2008 10:53:00 a.m
13	13 Periodo	35-Enero-Diciembre - Del Ejercicio
14	14 Ejercicio	2007
15	15 Tipo de pago	4-Complementaria por dictamen
16	205005 RFC imputado	[REDACTED]
17	206011 Denominacion o razon social	[REDACTED]
18	205002 Tipo de declaracion	\$ 4.00
19	205004 Fecha de presentacion de la declaracion inmediata anterior	
20	900000 Cantidad a pagar	\$
21	111001 Total de ingresos acumulables	\$ 953,258,122.00
22	111002 Total de deducciones autorizadas y deduccin inmediata de inversiones	\$ 475,587,590.00
23	111003 Utilidad fiscal del ejercicio	\$ 477,670,532.00
24	111004 Perdida fiscal del ejercicio	
25	111005 Perdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio	\$ 477,670,532.00
26	111006 Resultado fiscal	\$
27	111008 Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio	\$
28	111010 Reducciones del ISR	\$
29	111012 Impuesto del ejercicio	\$
30	111860 Estimulo por proyectos en investigacion y desarrollo tecnologico realizados en el ejercicio	
31	111013 Pagos provisionales efectuados	\$ 706,298.00
32	111016 Impuesto retenido al contribuyente	
33	111015 Impuesto acreditable pagado en el extranjero	
34	111017 Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos	
35	111011 Impuesto a cargo correspondiente a la consolidacion fiscal	
36	111018 Diferencia a cargo	
37	111019 Diferencia a favor	\$ 706,298.00
38	801730 Impuesto a la venta de bienes y servicios suuntuarios acreditable	
39	111058 Impuesto por inversiones en territorios con regimenes fiscales preferentes	
40	111023 ISR pagado en exceso aplicado contra el impac	\$ 32,846.00
41	111021 Impuesto a cargo del ejercicio	\$
42	111024 Saldo a favor del ejercicio	\$ 673,652.00

Ahora bien, en el resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2007 la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] tampoco consideró dichas utilidades de forma tal que nulificarán el efecto de la consolidación fiscal, tal y como se puede observar en el dictamen fiscal de 2007, en su anexo "34-EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACIÓN SOBRE CONSOLIDACIÓN", presentado el 11 de julio de 2008, con folio de recepción 648113, y que se hace referencia en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, como a continuación se observa:

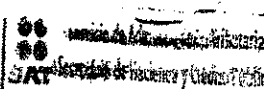
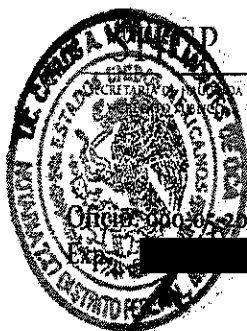


TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 507 -



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

25 JUL 2013

DECLARACIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

NO 20066

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRIBUYENTE					
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRIBUYENTE					
PERIODO DE EJERCICIO	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	PERIODO DE FISCALIZACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012
DENOMINACIÓN SOCIAL					
340001	00111273622	1	2,947,354,212	2,947,354,212	
340002	00111273622	1	1,434,334	1,434,334	
340003	00111273622	1	-1,143,886	-1,143,886	
340004	00111273622	1	-4,108,380	-4,108,380	
340005	00111273622	1	-1,860,139	-1,860,139	
340006	00111273622	1	752,015	752,015	
340007	00111273622	1	2,045,687	2,045,687	
340008	00111273622	1	2,712,046,525	2,712,046,525	
340009	00111273622	1	246,927	246,927	246,927
340010	00111273622	1	4,195,686	4,195,686	
340011	00111273622	1	-44,279	-44,279	
340012	00111273622	1	2,774,637	2,774,637	
340013	00111273622	1	720,156	720,156	720,156
340014	00111273622	1	-2,771,642	-2,771,642	
340015	00111273622	1	143,826	143,826	
340016	00111273622	1	72,367,515	72,367,515	
340017	00111273622	1	7,795,364	7,795,364	
340018	00111273622	1	3,346,266	3,346,266	
340019	00111273622	1	-836,224	-836,224	
340020	00111273622	1	656,971	656,971	
340021	00111273622	1	2,965,232	2,965,232	
340022	00111273622	1	-302,180	-302,180	
340023	00111273622	1	225,078,384	225,078,384	
340024	00111273622	1	1,840,002	1,840,002	
340025	00111273622	1	80,234,230	80,234,230	
340026	00111273622	1	358,017	358,017	
340027	00111273622	1	80,127	80,127	
340028	00111273622	1	14,231,520	14,231,520	
340029	00111273622	1	3,831,759	3,831,759	88,451
340030	00111273622	1	-151,105	-151,105	
340031	00111273622	1	-122,651	-122,651	
340032	00111273622	1	-48,254,042	-48,254,042	
340033	00111273622	1	-6,118,848	-6,118,848	
340034	00111273622	1	35,449,184	35,449,184	
340035	00111273622	1	153,876,520	153,876,520	
340036	00111273622	1	1,844,006	1,844,006	
340037	00111273622	1	22,176,039	22,176,039	
340038	00111273622	1	-817,021,134	-817,021,134	
340039	00111273622	1	-1,842,142	-1,842,142	
340040	00111273622	1	0	0	
340041	00111273622	1	10,358,122	10,358,122	4,116,849
340042	00111273622	1	840,267	840,267	
340043	00111273622	1	-30,415	-30,415	
340044	00111273622	1	784,329	784,329	
340045	00111273622	1	406,734,322	406,734,322	212,187,044
340046	00111273622	1	261,475,671	261,475,671	
340047	00111273622	1	74,176	74,176	74,176
340048	00111273622	1	258,125,290	258,125,290	
340049	00111273622	1	0	0	
340050	00111273622	1	0	0	
340051	00111273622	1	0	0	
340052	00111273622	1	0	0	
340053	00111273622	1	0	0	
340054	00111273622	1	0	0	
340055	00111273622	1	0	0	
340056	00111273622	1	0	0	
340057	00111273622	1	0	0	
340058	00111273622	1	0	0	
340059	00111273622	1	0	0	
340060	00111273622	1	0	0	
340061	00111273622	1	0	0	
340062	00111273622	1	0	0	
340063	00111273622	1	0	0	
340064	00111273622	1	0	0	
340065	00111273622	1	0	0	
340066	00111273622	1	0	0	
340067	00111273622	1	0	0	
340068	00111273622	1	0	0	
340069	00111273622	1	0	0	
340070	00111273622	1	0	0	
340071	00111273622	1	0	0	
340072	00111273622	1	0	0	
340073	00111273622	1	0	0	
340074	00111273622	1	0	0	
340075	00111273622	1	0	0	
340076	00111273622	1	0	0	
340077	00111273622	1	0	0	
340078	00111273622	1	0	0	
340079	00111273622	1	0	0	
340080	00111273622	1	0	0	
340081	00111273622	1	0	0	
340082	00111273622	1	0	0	
340083	00111273622	1	0	0	
340084	00111273622	1	0	0	
340085	00111273622	1	0	0	
340086	00111273622	1	0	0	
340087	00111273622	1	0	0	
340088	00111273622	1	0	0	
340089	00111273622	1	0	0	
340090	00111273622	1	0	0	
340091	00111273622	1	0	0	
340092	00111273622	1	0	0	
340093	00111273622	1	0	0	
340094	00111273622	1	0	0	
340095	00111273622	1	0	0	
340096	00111273622	1	0	0	
340097	00111273622	1	0	0	
340098	00111273622	1	0	0	
340099	00111273622	1	0	0	
340100	00111273622	1	0	0	
340101	00111273622	1	0	0	
340102	00111273622	1	0	0	
340103	00111273622	1	0	0	
340104	00111273622	1	0	0	
340105	00111273622	1	0	0	
340106	00111273622	1	0	0	
340107	00111273622	1	0	0	
340108	00111273622	1	0	0	
340109	00111273622	1	0	0	
340110	00111273622	1	0	0	
340111	00111273622	1	0	0	
340112	00111273622	1	0	0	
340113	00111273622	1	0	0	
340114	00111273622	1	0	0	
340115	00111273622	1	0	0	
340116	00111273622	1	0	0	
340117	00111273622	1	0	0	
340118	00111273622	1	0	0	
340119	00111273622	1	0	0	
340120	00111273622	1	0	0	
340121	00111273622	1	0	0	
340122	00111273622	1	0	0	
340123	00111273622	1	0	0	
340124	00111273622	1	0	0	
340125	00111273622	1	0	0	
340126	00111273622	1	0	0	
340127	00111273622	1	0	0	
340128	00111273622	1	0	0	
340129	00111273622	1	0	0	
340130	00111273622	1	0	0	
340131	00111273622	1	0	0	
340132	00111273622	1	0	0	
340133	00111273622	1	0	0	
340134	00111273622	1	0	0	
340135	00111273622	1	0	0	
340136	00111273622	1	0	0	
340137	00111273622	1	0	0	
340138	00111273622	1	0	0	
340139	00111273622	1	0	0	
340140	00111273622	1	0	0	
340141	00111273622	1	0	0	
340142	00111273622	1	0	0	
340143	00111273622	1	0	0	
340144	00111273622	1	0	0	
340145	00111273622	1	0	0	
340146	00111273622	1	0	0	
340147	00111273622	1	0	0	
340148	00111273622	1	0	0	
340149	00111273622	1	0	0	
340150	00111273622	1	0	0	
340151	00111273622	1	0	0	
340152	00111273622	1	0	0	
340153	00111273622	1	0	0	
340154	00111273622	1	0	0	
340155	00111273622	1	0	0	
340156	00111273622	1	0	0	
340157	00111273622	1	0	0	
340158	00111273622	1	0	0	
340159	00111273622	1	0	0	
340160	00111273622	1	0	0	
340161	00111273622	1	0	0	
340162	00111273622	1	0	0	
340163	00111273622	1	0	0	
340164	00111273622	1	0	0	
340165	00111273622	1	0	0	
340166	00111273622	1	0	0	
340167	00111273622	1	0	0	
340168	00111273622	1	0	0	
340169	00111273622	1	0	0	
340170	00111273622	1	0	0	
340171	00111273622	1	0	0	
340172	00111273622	1	0	0	
340173	00111273622	1	0	0	
340174	00111273622	1	0	0	
340175	00111273622	1	0	0	
340176	00111273622	1	0	0	
340177	00111273622	1	0	0	
340178	00111273622	1	0	0	
340179	00111273622	1	0	0	
340180	00111273622	1	0	0	
340181	00111273622	1	0	0	
340182	00111273622	1	0	0	
340183	00111273622	1	0	0	
340184	00111273622	1	0	0	
340185	00111273622	1	0	0	
340186	00111273622	1	0	0	
340187	00111273622	1	0	0	
340188	00111273622	1	0	0	
340189	00111273622	1	0	0	
340190	00111273622	1	0	0	
340191	00111273622	1	0	0	
340192	00111273622	1	0	0	
340193	00111273622	1	0	0	
340194	00111273622	1	0	0	
340195	00111273622	1	0	0	
340196	00111273622	1	0	0	
340197	00111273622	1	0	0	
340198	00111273622	1	0	0	
340199	00111273622	1	0	0	
340200	TOTAL		5,394,096,260	5,394,096,260	217,434,569



Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Administración General de Grandes Contribuyentes



25 JUL 2013
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente
DESPACHADO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.: [REDACTED]

De lo anterior, se desprende que las sociedades controladas desincorporadas [REDACTED] y [REDACTED] al haber terminado su ejercicio fiscal irregular correspondiente al año de 2007, el 31 de octubre de 2007, determinaron una utilidad fiscal que amortizaron con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores; sin embargo, éstas utilidades fiscales no fueron sumadas por la sociedad controladora para determinar el resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2007.

Por lo que, sólo si dichas utilidades hubieran sido sumadas al resultado fiscal consolidado del ejercicio 2007 por la sociedad controladora, concordaría con su argumento de no sumar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las citadas sociedades controladas, situación que no se dio en los términos señalados, por lo que la irregularidad subsiste en los términos precisados.

De no revertir la sociedad controladora [REDACTED] ACTUALMENTE el efecto de haber consolidado las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas desincorporadas [REDACTED] y [REDACTED] en el ejercicio de 2006, tal y como lo establece el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta antes citado, indebidamente podría obtener un beneficio fiscal, ya que al ser restadas de manera inmediata contra las utilidades fiscales obtenidas por las sociedades del grupo en el ejercicio de 2006, obtuvieron un resultado fiscal consolidado menor en \$2,183,572,399 y en consecuencia pagar un impuesto sobre la renta disminuido y al no reversarlas, para determinar la utilidad fiscal consolidada de 2006, como lo marca la norma específica, jamás pagarán el impuesto sobre la renta diferido.

Cabe recalcar, que el régimen de consolidación permite a nivel consolidado la disminución de las pérdidas fiscales obtenidas por una sociedad del grupo, de las utilidades fiscales obtenidas por otra sociedad de dicho grupo en el mismo ejercicio, y tal disminución implica que el impuesto que se causa respecto de las utilidades obtenidas se difiera y el mismo se pueda pagar en el momento en que la sociedad controladora se ubique en algún supuesto de pago del impuesto diferido.

Por lo anterior, a efecto de evitar que el impuesto sobre la renta que se hubiera diferido deje de ser pagado por la sociedad controladora, el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, establece la obligación que tiene dicha sociedad controladora de reconocer la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en la declaración complementaria de dicho ejercicio es por ello, por lo que la citada sociedad controladora debe de adicionar a la utilidad fiscal consolidada o disminuir de la pérdida fiscal consolidada, del ejercicio de que se trate, las pérdidas fiscales obtenidas en lo individual por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, cuando éstas no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y hubieren sido restadas en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, procedimiento con el cual evita el efecto del diferimiento obtenido por la aplicación de las pérdidas.

39 de 96



Administración General de Grandes Contribuyentes



Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente
25 JUL 2013

DESPACHADO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

Además que, [REDACTED] actualmente [REDACTED] para determinar el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006, restó las pérdidas fiscales que generaron sus sociedades controladas desincorporadas, por fusiones en el ejercicio de 2007, [REDACTED] y [REDACTED] en el ejercicio de 2007; de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 71 de la citada Ley, debió adicionarlas al resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 ya que a dicha fecha no habían sido disminuidas por las sociedades controladas desincorporadas en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y fueron restadas en el propio ejercicio de 2006 para determinar la utilidad fiscal consolidada de la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] ya que dicho procedimiento no es opcional, más bien obligatorio.

Por lo antes expuesto, esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, determina que [REDACTED] actualmente [REDACTED] omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, de sus sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] en cantidad de \$1,867'583,390 y \$383'461,396, respectivamente, que en suma ascienden a \$2,251'044,786, actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007, según instrumento notarial número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal, con efectos legales al 31 de octubre de 2007, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación, procedimiento que debió llevar a cabo de conformidad con lo establecido el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno, párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2007.

(...)"



EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 509 -


De la digitalización que antecede, se desprende esencialmente que de la revisión practicada por la autoridad fiscal a la información y documentación proporcionada por el Contador Público Registrado de la actora y en el transcurso de la revisión efectuada a dicha contribuyente, la demandada determinó que la accionante **omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006**, sus sociedades controladas

***** y *****


**** en cantidad de **\$1,867'583,390** y **\$383'461,396**, respectivamente, que en suma ascienden a **\$2,251'044,786**, pérdidas fiscales pendientes de disminuir actualizadas a diciembre de 2006, **derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007**, según instrumento notarial número 36,446, volumen 880, pasado ante la fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal ahora Ciudad de México.

Ello, toda vez que la fusión de sociedades se considera desincorporación de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno párrafos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007; en consecuencia, la demandada sostuvo que la actora ***** modificó la utilidad fiscal y el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006, manifestado en declaración anual complementaria de fecha 13 de agosto de 2010.

Asimismo, que las pérdidas en cantidad de **\$2,251'044,786.** actualizadas al mes de diciembre de 2006, de conformidad con el artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007, se determinaron como sigue:




SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
División de Control y Asesoría a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE DESINTEGRACIÓN A EMPRESAS



EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD

EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD

EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD
EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD	EXERCICIO DE LA PERDIDA DE LA ENTIDAD
2006	1,831,504,802	80,944	80,944	1,0300	1,867,381,392.35	100%
2006	371,567,592	80,944	80,944	1,0300	383,461,392.75	100%
Total	2,183,572,399				2,250,842,785.10	

Además, que derivado de la fusión de las sociedades controladas ***** ** ***** **** ** ***** y ***** ** ***** ***** ** ***** con la controlada ***** **** ** ***** el 18 de octubre de 2007, la contribuyente revisada, estaba obligada a reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior, en declaración complementaria de dicho ejercicio, que en el caso que nos ocupa, sería ejercicio de 2006.

Por lo que, la demandante debió sumar a la utilidad fiscal consolidada de dicho ejercicio, es decir, el ejercicio de 2006, entre otros conceptos, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que las sociedades que se desincorporaron, en este caso por fusión, tuvieran derecho a disminuir al momento de la desincorporación, y hace un especial énfasis al señalar, que para estos efectos, sólo se considerarán aquéllos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la o las sociedades que se desincorporan para determinar el resultado fiscal consolidado.

Que la empresas desincorporadas al haber terminado su ejercicio fiscal irregular correspondiente al año de 2007, el 31 de octubre de 2007, determinaron una utilidad fiscal que amortizaron con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores; sin embargo, éstas utilidades **fiscales no fueron sumadas por la sociedad controladora para determinar el resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2007.**

Asimismo, la demandada señaló en la resolución recurrida que de no revertir la sociedad controladora ***** ***** ** ***** el efecto de haber consolidado las pérdidas fiscales generadas por las sociedades controladas desincorporadas ***** ***** ** ***** y ***** ** ***** ***** **** ** ***** en el ejercicio de 2006, tal y como lo establece el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, indebidamente podría obtener un beneficio fiscal, ya que al ser restadas de manera inmediata contra las utilidades fiscales obtenidas por las sociedades del grupo en el ejercicio de 2006, obtuvieron un resultado fiscal consolidado menor en \$2,183,572,399.00 y en consecuencia pagar un impuesto sobre la renta disminuido y al no revertirlas para determinar la utilidad fiscal consolidada de 2006, como lo marca la norma específica, jamás pagarán el Impuesto sobre la Renta diferido.

Que para efecto de evitar que el Impuesto sobre la Renta que se hubiera diferido deje de ser pagado por la sociedad controladora, el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley de la materia, establece la obligación que tiene dicha sociedad controladora de reconocer la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en la declaración complementaria de dicho ejercicio; es por ello, por lo que la citada sociedad controladora debió adicionar a la utilidad fiscal consolidada o disminuir de la pérdida fiscal consolidada, del ejercicio de que se trate, las pérdidas fiscales obtenidas en lo individual por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, cuando éstas no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y hubieren sido restadas en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, procedimiento con el cual evita el efecto del diferimiento obtenido por la aplicación de las pérdidas.

Por lo que, al haber restado la hoy actora del ejercicio fiscal 2006, las pérdidas de las sociedades controladas desincorporadas por fusiones en 2007, debió adicionarlas al resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 ya que a dicha fecha no habían sido disminuidas por las sociedades controladas desincorporadas en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y fueron restadas en el propio ejercicio de 2006 para determinar la utilidad fiscal consolidada de la contribuyente ***** hoy accionante.

Una vez precisados los motivos que llevaron a la demandada a determinarle a la parte actora un crédito fiscal en cantidad total de \$2,636'428,880.12 por concepto de Impuesto sobre la Renta, actualización, recargos y multas, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, cabe reiterar que en términos del artículo 71, primer y segundo párrafo, cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 66 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, nos encontramos ante tres momentos:

1.- Cuando ocurre la desincorporación, esto es, cuando se lleva a cabo el acto jurídico de la fusión por virtud de la cual las controladas

desaparecen, momento que se establece en el noveno párrafo del citado precepto legal.

2.- Cuando ocurrida la fusión, la empresa controladora, está obligada a reconocer los efectos de la desincorporación, al cierre del ejercicio inmediato anterior a través de la declaración complementaria de dicho ejercicio.

3.- Momento en que la controladora sumará o restará a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada del ejercicio anterior a la desincorporación el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores, que las sociedades desincorporadas tengan derecho a disminuir al momento de la desincorporación.

Los momentos 2 y 3, se desprenden del contenido del párrafo segundo del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en 2007.

Así, respecto al momento número 1, toda vez que las sociedades controladas ***** y ***** se fusionaron a la sociedad controlada ***** se configura la desincorporación de las dos primeras, en términos del noveno párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007, ello contrario a las aseveraciones de la actora.

En cuanto al momento número 2, en virtud de que las sociedades controladas ***** y ***** se fusionaron a la sociedad controlada ***** el 18 de octubre de 2007, **el ejercicio inmediato anterior en que se debió reconocer los efectos de la desincorporación es en 2006.**

Mientras que, respecto al momento número 3, ***** hoy actora, como sociedad controladora, ante la desincorporación de las sociedades controladas ***** debió **sumar** a su utilidad fiscal consolidada del ejercicio precisado en el momento número 2, **el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores** a que refiere el artículo 68, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta **que dichas controladas tuvieran derecho a disminuir al momento de su desincorporación.**

En consecuencia, la sociedad controladora ***** debió sumar **el monto de las pérdidas de ejercicios**

anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de dicha Ley (\$2,251'044,786.00), **que las sociedades que se desincorporan de la consolidación** ***** ** ***** **
***** y ***** ** ***** ** ***** ** ***** **tenían derecho a disminuir al momento de su desincorporación** (18 de octubre de 2007).

En efecto, si el **momento en que se llevó a cabo la desincorporación fue el 18 de octubre de 2007**, la sociedad controladora hoy actora, debió **sumar el monto de las pérdidas de los ejercicios anteriores** de las sociedades desincorporadas; esto es, las correspondientes al **ejercicio 2006**, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado.

Pues es clara la norma por cuanto hace al supuesto normativo que obliga a la controladora hoy demandante, a considerar los efectos de la desincorporación y por tanto a aplicar el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007, el cual hace referencia a las pérdidas fiscales que las empresas desincorporadas (*****
** ***** ** ***** y ***** ** ***** ** *****), tenían derecho a disminuir al momento en que se llevó a cabo la desincorporación (18 de octubre de 2007).

Ello, toda vez que el citado precepto legal, contempla la reversión de las pérdidas fiscales que fueron consideradas en el resultado fiscal consolidado de los ejercicios fiscales en los que las empresas *****
***** ** ***** y ***** ** ***** tuvieron ese carácter, ya que al haberse fusionado se entiende que desaparecieron.

En virtud de lo anterior, **no le asiste la razón** a la actora, en cuanto hace a que las pérdidas que estaba obligada a revertir son las correspondientes al ejercicio fiscal 2005 y anteriores, no las correspondientes a 2006, pues se insiste, si el momento en que se llevó a cabo la desincorporación de las sociedades controladas fue el 18 de octubre de 2007, entonces, el ejercicio inmediato anterior a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007,

es el 2006, por ende, si en dicho ejercicio las sociedades desincorporadas contaban con pérdidas, la controladora actora estaba obligada a sumarlas a la utilidad fiscal consolidada.

Aunado a lo anterior, tampoco beneficia a la accionante el reconocimiento expreso de la autoridad demandada al que hace referencia, en el sentido de que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar fueron aplicadas a la fecha de la fusión por las sociedades desincorporadas ***** y ***** al haberse agotado en el ejercicio en el que se dio la fusión (2007) como supuesto de desincorporaciones.

Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto la demandada señaló en la resolución recurrida que el monto de las **pérdidas fiscales que generaron** las sociedades fusionadas ***** y ***** en el ejercicio de 2006, ascendieron al importe de \$1,811'604,802.00 y \$371'967,597.00 respectivamente, también lo es que ello se corrobora con las propias documentales (anexo 23 "Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores") que la accionante ofreció como pruebas en el procedimiento de fiscalización, a saber:

Sistema de Presentación del Dictamen 2007

20. AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
INDICE	CONCEPTO	MONTOS ORIGINALES PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE	AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO CUS SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL				
	30 DE SEPTIEMBRE DE 2007				
	(CIFRAS EN PESOS)				
	AÑO DE GENERACION				
200000	1997				
200020	1998				
200030	1999				
200040	2000	274,824,828	51,022,132	51,022,132	0
200050	2001	34,147,710	43,783,023	43,783,023	0
200060	2002	112,294,939	138,322,501	138,322,501	0
200070	2003	19,529	22,780	22,780	0
200080	2004				
200090	2005				
200100	2006	1,811,804,802	1,878,415,374	1,875,043,782	3,371,592



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

Sistema de Presentación del Dictamen 2007

2.- AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
INDICE	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA PÉRDIDA	IMPORTE DE LA PÉRDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE	AMORTIZACIÓN EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007				
	(CIFRAS EN PESOS)				
	AÑO DE GENERACIÓN				
120140	1987				
120140	1988				
120140	1989				
120140	2000				
120140	2001				
120140	2002	218,903,213	102,365,035	102,365,035	0
120140	2003	371,967,597	383,461,388	375,301,497	8,159,891
120140	2004				
120140	2005				
120140	2006				

Además, del anexo 12, “Conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del Impuesto sobre la Renta”, correspondiente al sistema de presentación del dictamen 2006, de las sociedades ***** y ***** se desprende que en los renglones 120140 de cada anexo, la parte actora señaló pérdidas fiscales para el ejercicio 2006, en cantidades de \$1,811’604,802.00 y \$371’967,597.00 respectivamente, tal y como se desprende de las digitalizaciones que a continuación se insertan.

Sistema de Presentación del Dictamen 2006		
12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
INDICE	CONCEPTO	TOTAL
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	
	(CIFRAS EN PESOS)	
120010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	

120030	PERDIDA DEL EJERCICIO	48,980,639	
	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10		
120030	RESULTADO FAVORABLE	11,244,503	
120040	RESULTADO DESFAVORABLE		
120050	UTILIDAD NETA HISTORICA		
120060	PERDIDA HISTORICA	60,225,142	
	MAS:		
120070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		
	MAS:		
120080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	2,372,043,470	
	MENOS:		
120090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	2,431,093,121	
	MENOS:		
120100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	1,592,330,010	
120110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	1,811,604,803	
120120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		
120130	PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		
120140	PERDIDA FISCAL	1,811,604,803	
120150	UTILIDAD FISCAL		
120160	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
120170	RESULTADO FISCAL	0	

***** ** ***** ***** ** ** *

"Sistema de Presentación del Dictamen 2006"			
12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
INDICE	CONCEPTO	TOTAL	
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL		
	31 DE DICIEMBRE DE 2006		



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 517 -

	(CIFRAS EN PESOS)		
120010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
120020	PERDIDA DEL EJERCICIO	13,462,615	
	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10		
120030	RESULTADO FAVORABLE		
120040	RESULTADO DESFAVORABLE	-479,634	
120050	UTILIDAD NETA HISTORICA		
120060	PERDIDA HISTORICA	13,942,249	
	MAS:		
120070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	10,756,552	
	MAS:		
120080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	107,749,850	
	MENOS:		
120090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	19,481,587	
120100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	457,050,163	
120110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	374,967,597	
120120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		
120130	PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		

120140	PERDIDA FISCAL	374,967,597	
120150	UTILIDAD FISCAL	0	
120160	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
120170	RESULTADO FISCAL	0	

En ese sentido, contrario a las manifestaciones de la parte actora, las pérdidas fiscales que aplicaron las empresas desincorporadas ***** y ***** en el ejercicio 2007, no se obtuvieron del ejercicio fiscal irregular comprendido del 1° de enero al 31 de octubre de 2007 como lo afirma la accionante, sino en el ejercicio 2006, tal y como se desprende de las digitalizaciones que anteceden.

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Juzgadora que la actora haya señalado que a la fecha de la fusión de las sociedades desincorporadas se aplicaron contra la utilidad fiscal, las pérdidas fiscales en cantidades de \$2,106'174,218.00 y \$477'670,532.00 respectivamente, como se observa en sus declaraciones presentadas el 31 de diciembre de 2007 y 22 de julio de 2008, con número de operación 9104989 y 9873285, a saber:

12 21068
 CONTRIBUYENTE: [REDACTED]
 PERIODO: 12/2007
 FECHA DE PRESENTACIÓN: lunes, 31 de diciembre de 2007
 TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 ALR LLAVE DE LA DECLARACIÓN: 19080-22390912

1	1 Rfc del contribuyente	[REDACTED]	
2	2 Tipo de contribuyente	MORAL	
3	3 Entidad receptora	19080-Internet SAT 19080	
4	4 Llave detalle		22390912
5	5 Llave movimiento	19080-22390912	
6	6 Número de operación		9104989
7	7 Materia	21-Declaración del ejercicio	
8	8 Medio de recepción	3-Internet	
9	9 Fecha de presentación	31/12/2007	
10	10 Hora de presentación	12:45	
11	11 Fecha de recaudación	31/12/2007	
12	12 Fecha de registro	31/12/2007 12:53:00 p.m	
13	13 Período	35-Enero-Diciembre - Del Ejercicio	
14	14 Ejercicio		2007
15	15 Tipo de pago	1-Normal	
16	206005 RFC Imputado	[REDACTED]	
17	206001 Denominación o razón social	[REDACTED]	
18	206002 Tipo de declaración	\$	1.00
19	206004 Fecha de presentación de la declaración inmediata anterior		
20	900000 Cantidad a pagar	\$	
21	111001 Total de ingresos acumulables	\$	2,637,079,550.00
22	111002 Total de deducciones autorizadas y deducción inmediata de inversiones	\$	530,906,332.00
23	111003 Utilidad fiscal del ejercicio	\$	2,106,174,218.00
24	111004 Pérdida fiscal del ejercicio	\$	
25	111005 Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio	\$	2,106,174,218.00
26	111006 Resultado fiscal	\$	
27	111009 Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio	\$	
28	111010 Reducciones del ISR	\$	
29	111012 Impuesto del ejercicio	\$	
30	111060 Estimulo por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico, realizados en el ejercicio	\$	
31	111013 Pagos provisionales efectuados	\$	432,663.00
32	111016 Impuesto retenido al contribuyente		
33	111015 Impuesto acreditable pagado en el extranjero		
34	111017 Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos		
35	111011 Impuesto a cargo correspondiente a la consolidación fiscal		
36	111018 Diferencia a cargo		
37	111019 Diferencia a favor	\$	432,663.00
38	901730 Impuesto a la venta de bienes y servicios sustruados acreditable		
39	111058 Impuesto por inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes		
40	111023 ISR pagado en exceso aplicado contra el impac	\$	269,525.00
41	111021 Impuesto a cargo del ejercicio	\$	
42	111024 Saldo a favor del ejercicio	\$	172,136.00





TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

Declaración del Ejercicio Personas Morales
CONTRIBUYENTE: [REDACTED]
PERIODO : 1/2007 - 12/2007
FECHA DE PRESENTACIÓN: martes, 22 de julio de 2008
TIPO DE DECLARACIÓN: Complementaria por dictamen
A.L.R. LLAVE DE LA DECLARACIÓN: 15080-15781936

880089

PAGARCLAVE	DESCRIPCION	VALOR
1	1 Rfc del contribuyente	
2	2 Tipo de contribuyente	MORAL
3	3 Entidad receptora	19080-Internet SAT 19080
4	4 Llave detalle	
5	5 Llave movimiento	19080-15781936 15781936
6	6 Numero de operacion	
7	7 Matena	21-Declaracion del ejercicio
8	8 Medio de recepcion	3-Internet
9	9 Fecha de presentacion	22/07/2008
10	10 Hora de presentacion	10:45
11	11 Fecha de recaudacion	22/07/2008
12	12 Fecha de registro	22/07/2008 10:50:00 a.m.
13	13 Periodo	35-Enero-Diciembre - Del Ejercicio
14	14 Ejercicio	2007
15	15 Tipo de pago	4-Complementaria por dictamen
16	206005 RFC imputado	
17	206011 Denominacion o razon social	
18	205002 Tipo de declaracion	\$ 4.00
19	205004 Fecha de presentacion de la declaracion inmediata anterior	
20	903000 Cantidad a pagar	\$
21	111001 Total de ingresos acumulados	\$ 953,258,122.00
22	111002 Total de deducciones autorizadas y deducciones inmediatas de inversiones	\$ 475,587,590.00
23	111003 Utilidad fiscal del ejercicio	\$ 477,670,532.00
24	111004 Perdida fiscal del ejercicio	
25	111005 Perdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio	\$ 477,670,532.00
26	111006 Resultado fiscal	\$
27	111008 Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio	\$
28	111010 Reducciones del ISR	\$
29	111012 Impuesto del ejercicio	\$
30	111860 Estimulo por proyectos en investigacion y desarrollo tecnologico realizados en el ejercicio	
31	111013 Pagos provisionales efectuados	\$ 706,298.00
32	111016 Impuesto retenido al contribuyente	
33	111015 Impuesto acreditable pagado en el extranjero	
34	111017 Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos	
35	111011 Impuesto a cargo correspondiente a la consolidacion fiscal	
36	111018 Diferencia a cargo	
37	111019 Diferencia a favor	\$ 706,298.00
38	901730 Impuesto a la venta de bienes y servicios suunterarios acreditable	
39	111058 Impuesto por inversiones en territorios con regimenes fiscales preferentes	
40	111023 ISR pagado en exceso aplicado contra el impac	\$ 32,646.00
41	111021 Impuesto a cargo del ejercicio	\$
42	111024 Saldo a favor del ejercicio	\$ 673,652.00



Sin embargo, se insiste, tanto del anexo 23 “Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores”, como del anexo 12 “Conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del Impuesto sobre la Renta”, ofrecidos por la actora en el procedimiento fiscalizador, se desprende que las pérdidas aplicadas en dichas declaraciones corresponden al ejercicio de 2006, no así al 2007; por tanto, si la accionante señaló que las empresas fusionadas de referencia generaron en 2006 pérdidas fiscales, es claro que dichas pérdidas debieron considerarse como efectos de la desincorporación en términos del segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007.

Por tanto, este Órgano Colegiado, concluye que contrario a las aseveraciones de la demandante, lo único que acredita es que efectivamente en el ejercicio fiscal 2006, las sociedades fusionadas, contaban con pérdidas fiscales y que las mismas se aplicaron hasta el ejercicio fiscal

2007, año en que se desincorporaron las sociedades controladas *****
***** ** ***** ** ** ** ** y ***** ** ***** ***** ** ** **

Por lo que, toda vez que fue hasta el 31 de diciembre de 2007, que presentó la empresa ***** ** ***** ** ** ** ** declaración normal y hasta el 22 de julio de 2008, que la sociedad ***** ** ***** ***** ** ** ** presentó declaración complementaria, mediante las cuales declararon pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, es contradictorio que la parte actora haya señalado que no contaba con pérdidas a la fecha en que se llevó a cabo la fusión de las citadas controladas, pues de lo declarado por éstas, se advierte que si tenían pérdidas correspondientes a ejercicios anteriores (2006), tal y como lo determinó la autoridad fiscal.

Por ello, si antes de la desincorporación de las sociedades ***** ** ***** ** ** ** y ***** ** ***** ***** ** ** ***** éstas aun contaban con pérdidas pendientes de disminuir y si éstas presentaron declaraciones por el ejercicio 2007, al ser este el ejercicio en el que se fusionaron y en el que debe entenderse que hubo desincorporación, resulta falso que no hayan existido pérdidas fiscales de las empresas de referencia, de ahí que no le asista la razón a la parte actora al señalar que no contaba con pérdidas de dichas sociedades al momento en que se efectuó la desincorporación de éstas.

Sin que sea óbice a lo anterior que la demandante manifieste que esas pérdidas fiscales fueron aplicadas en 2007, pues se insiste, la norma en estudio refiere a los ejercicios anteriores al momento en que ocurre la desincorporación, no al momento posterior de la desincorporación.

En consecuencia, de una debida interpretación al artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007, cuando una empresa deje de ser controlada debe reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior; por lo que, si en el caso que nos ocupa, las empresas ***** ** ***** ** ** ** y ***** ** ***** ***** ** ** ***** a la fecha de su desincorporación del régimen de consolidación (por haber desaparecido en virtud de la fusión con la empresa ***** ** ***** ** ** **) contaban con pérdidas fiscales pendientes de amortizar conforme al segundo párrafo del artículo 71 en comento, la accionante se encontraba obligada a sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas en comento, lo que no sucedió en la especie.



EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 521 -

Lo anterior, toda vez que del análisis realizado por este Órgano Colegiado a la declaración complementaria por dictamen presentada por la actora el 7 de septiembre de 2007, así como a la declaración complementaria que presentó el 13 de agosto de 2010, se advierte que en el Aparatado denominado “Desincorporación de controladas o desconsolidación”, en específico en el rubro correspondiente a “pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de controladas y controladoras –suman–” la accionante no asentó dato alguno en dicho campo, a saber:

**DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN PRESENTADA EL
7 DE SEPTIEMBRE DE 2007.**

635



SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración Anual



ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2006

R.F.C.

Nombre, Denominación o Razón Social:

Tipo de Presentación:

Fecha de Presentación:

Hora de Presentación:

Número de Operación:

Folio de Recepción:

Complementaria por Dictamen

07/09/2017

10-28

79A12

78A12
88D2550

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:

[illegible]

Sello Digital:

ljrjDOLcYzypjVhebdagScm5qad8WwzNidDH7wJZhgZEIyRmtNLu0KoeUEclwMoEzE3bp7WpXZy/cchu5UTthkYWFywwFWSUX9B1G3b
vaNuliZR5+D7MP6vvyP5QcAastAl+RWVwMZEts79CwG3WBW7TU2EK0p9qNvgepmJZY#

Fecha y hora de emisión de este acuse: 30/04/2015 14:07:11

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación señalados.

Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.



Declaración del ejercicio
Personas Morales Consolidación

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	
EJERCICIO	2006
DECLARACIÓN	Complementaria
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA	07/09/2007
NÚMERO DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA	78512
INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CORREGIR EL EJERCICIO	



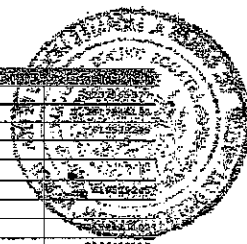
637

(...)

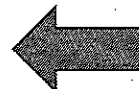


Declaración del ejercicio
Personas Morales Consolidación

DATOS DE LA CONTROLADORA		TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU		TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE (EJERCICIOS 2004 Y ANTERIORES)		
PTU PASADA EN EL EJERCICIO		
DATOS DE LA CONTROLADORA UTILIDAD FISCAL		
DATOS DE LA CONTROLADORA PÉRDIDA FISCAL		
UTILIDAD FISCAL DE CONTROLADAS		
PÉRDIDA FISCAL DE CONTROLADAS		2366405113
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONSOLIDACIÓN	CONTROLADAS	2366405113
	CONTROLADORA	
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN	SUMAN	
	RESTAN	
	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN	SUMAN
		RESTAN
POR MODIFICACIÓN EN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DE CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUMAN
		RESTAN
	PÉRDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	SUMAN
		RESTAN
	DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE, SUMAN	
		SUMAN
		RESTAN
PÉRDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	SUMAN	
		RESTAN
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		520527931
PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADA		
	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN	SUMAN
		RESTAN
	PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA, SUMAN	
		RESTAN
DESINCORPORACIÓN DE CONTROLADAS O DESCONSOLIDACIÓN	COMPARACIÓN DE CUFINRE	
	UTILIDADES	COMPARACIÓN DE CUFINRE REINVERTIDAS
		COMPARACIÓN DE REGISTROS DE UFIN
		COMPARACIÓN DE REGISTROS DE UFIN REINVERTIDA
		DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE
		PÉRDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS
PÉRDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO:		
PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO		626527931
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS		
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS		
OTRAS REDUCCIONES		
ISR POR MODIFICACIÓN EN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	SUMA	
	RESTA	
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL		
OTROS ESTÍMULOS		
TOTAL DE ESTÍMULOS		
0		
PACOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS		
CONTROLADAS		
CONTROLADORA		
CONSOLIDADAS		
320234989		
CONTROLADAS		
CONTROLADORA		
IMPUESTO ACREDITABLE	RETENIDO A	
	PAGADO EN EL EXTRANJERO	
	POR DIVIDENDOS O UTILIDADES	
	OTROS	
CRÉDITO FISCAL LETI POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS		
OTRAS CANTIDADES A CARGO		
OTRAS CANTIDADES A FAVOR		
DIFERENCIA A CARGO		
DIFERENCIA A FAVOR		
1330641819		
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO		
ISR A CARGO DEL EJERCICIO		
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC		
4772954		
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL LETI		
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO		
120000563		
DE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO		
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES DE LA CONTROLADORA		
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES DE LA CONTROLADORA		



640



(...)"



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 523 -

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA EL 13 DE AGOSTO
DE 2010.

656



Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración Anual



ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2008

R.F.C.:

Nombre, Denominación o Razón Social:

Tipo de Presentación:

Fecha de Presentación:

Hora de Presentación:

Número de Operación:

Folio de Recepción:

Complementaria

13/08/2010

19:17

13905

43284061

Cadena Original, Impuesto(s) que declara:

1110001=19080120002=43284061140002=20100813140003=1917113006=10023=20070907110033=180004=MOA1541029HDFRGS01800402=01800502=0172901102=10541405181800102=00980916711300202=44880405811301702=22243927311301802=4980883551302202=123659181711302302=50827250811302502=335907211302602=232890135911302702=1488978811303002=44850405811303202=011303402=011303802=011303802=44880405811304002=011304202=011304402=011304602=011304802=011305102=7158139811305402=35219097211305702=011306002=011306302=011306602=143248830711307202=39935928311307502=011307802=011308102=011308402=13630175151308602=39835334811309102=2420273511309402=011309502=2420273511309802=011310102=011400802=28775305611401102=71512237511401402=28440508611401502=1332291402102=47066999811402802=20045093411403402=43594966211404202=137555528811405002=011600202=141202767511600302=273810192511600402=10185029711600802=13567240811600902=1852237511601002=18306121811601102=35281146611601202=20148075511601302=73079833511601402=107185033911601502=236001697301601902=1753031192011601802=140523047811602002=40488352411602202=43710872811602402=3045692811602502=2061131101602702=6344469896611602802=149884814211603202=596403068311603802=259013164811604102=310711853211604302=011604702=1791003117111605002=013100302=323711653773100402=25139770831101402=36524131023101502=238640911513101602=12786954013103902=62552783113104302=62652783113104402=18158807113105302=3755348893105502=013105502=1338418183106902=477285413107602=013200102=14111080832819200202=200213200702=13075188828013200902=1035921806513201102=18646592513201402=18645592513201602=17794549513202502=852042813202802=13073265302=479014055913203402=478014055913203502=013203802=13832076576813203702=12598154770013203802=1005921806513201102=014100402=014101202=014101302=014101402=014102002=014200202=017800602=0130003=000001000007000112183

Sello Digital:

ILDT//AKXSLFQYeqmYhD6GSW0i6SJVIHKj7bUNbWg2Ue7+wpYfmeLIMdRKzSZFFVH8Jevd/qOEZm9/6mzL/Gq3n1FmsBacLn1zR7sc3c9R6NwigRzWZndCQvzKdE3vJXDM1oMreECNaRLwqASj46gv0Ld

Fecha y hora de emisión de este acuse: 30/04/2016 14:06:05

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación señalados.

Lo anterior, sin perjuicio de la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades contenidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.



Declaración del ejercicio
Personas Morales Consolidación

DATOS REPRESENTACIÓN	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	
EJERCICIO	2006
DECLARACIÓN	Normal
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA	



(...)

DATOS DE LA CONTROLADORA		
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		379,203,300
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS		29,908,891.9
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU		349,294,408.1
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		
DATOS DE LA CONTROLADORA UTILIDAD FISCAL		57,447,823.1
DATOS DE LA CONTROLADORA PÉRDIDA FISCAL		
UTILIDAD FISCAL DE CONTROLADAS		411,974,639.2
PÉRDIDA FISCAL DE CONTROLADAS		238,074,874.9
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONSOLIDACIÓN	CONTROLADAS	131,487,020.7
	CONTROLADORA	
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN	SUMAN	
	RESTAN	
POR MODIFICACIÓN EN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN	SUMAN
		RESTAN
	UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DE CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUMAN
		RESTAN
	PÉRDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	SUMAN
		RESTAN
PÉRDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	SUMAN	
	RESTAN	
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN	SUMAN	
	RESTAN	
DESINCORPORACIÓN DE CONTROLADAS O DESCONSOLIDACIÓN	PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA, SUMAN	
	COMPARACIÓN DE CUFINES	
	COMPARACIÓN DE CUFINES INVERTIDAS	
	COMPARACIÓN DE REGISTROS DE CUFIN	
	COMPARACIÓN DE REGISTROS DE CUFIN INVERTIDA	
	DESINCORPORACIÓN DE CONTROLADAS O DESCONSOLIDACIÓN, DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE	
PÉRDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	SUMAN	
	RESTAN	
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		99,830,575.7
PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADA		
PÉRDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO		
PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO		99,830,575.7
REDUCCIONES DEL ISR		
ISR POR MODIFICACIÓN EN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	SUMAN	
	RESTAN	
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		815,990.7
OTROS ESTÍMULOS		1,019,402.4
IMPUESTO ACREDITABLE	PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS	CONTROLADAS
		CONTROLADORA
		CONSOLIDADOS
	RETENIDO A:	CONTROLADAS
		CONTROLADORA
	PASADO EN EL EXTRANJERO	CONTROLADAS
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES		CONTROLADORA
IMPUESTO ACREDITABLE OTROS		38,557,109
IMPUESTO A INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES DE LA CONTROLADORA		
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		
DIFERENCIA A FAVOR		779,369.60
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC		
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		779,369.60

(...)"

En efecto, si en el caso que nos ocupa las sociedades

***** y *****

***** se desincorporaron el 18 de octubre de 2007, evidentemente, la actora no estaba obligada a sumar las pérdidas fiscales a las que tenían derecho las empresas fusionadas al momento de la desincorporación, en la declaración por dictamen presentada el 7 de septiembre de 2007, por haberse presentado con anterioridad a que el acto jurídico se realizara.

Sin embargo, ello no sucede con la declaración complementaria presentada el 13 de agosto de 2010, ya que en esa fecha si se encontraba obligada la accionante a cumplir con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007, tal y como quedó precisado a lo largo del presente Considerando.

De ahí, que como lo afirma la autoridad demandada, la parte actora omitió sumar a la utilidad fiscal consolidada, las pérdidas fiscales que las sociedades controladas al momento de su desincorporación tenían derecho, por tanto, prevalece la legalidad y validez tanto de la resolución impugnada como de la originalmente recurrida.

Por otra parte, resultan **infundados** los argumentos de la actora en el sentido de que las resoluciones impugnadas son ilegales, toda vez que derivan de un procedimiento de fiscalización que se llevó a cabo respecto de un ejercicio en el cual no ocurrió el hecho generador de las obligaciones, es decir 2006, sin tomar en cuenta que el hecho generador de las obligaciones que revisó y determinó ocurrió en el ejercicio fiscal 2007, por tanto considera que se debió haber auditado dicho ejercicio para válidamente determinar las contribuciones.

Además, que los fundamentos que utilizaron las autoridades demandadas son los vigentes en el ejercicio 2007, lo que constituye una confesión expresa de que la causación de las obligaciones derivado de su hecho generador, sucedió en el ejercicio fiscal 2007, siendo que la autoridades solo revisaron el ejercicio fiscal 2006, lo que controvierte las garantías de legalidad y seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio.

Para dilucidar lo anterior, esta Juzgadora considera necesario tener presente el contenido de los artículos 5 y 6, primero, segundo y tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, los cuales a la letra señalan lo siguiente:

“Artículo 5.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así

como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.”

“Artículo 6.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación.

(...)”

De lo anterior se desprende que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.

Asimismo, que se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

Que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica y a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.

Del mismo modo, que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

Además, que **las contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad** y que corresponde a los contribuyentes la

determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario.

Finalmente que si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación.

En ese orden de ideas, del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación antes transcrito, se puede concluir que en materia fiscal, únicamente, las cuestiones de carácter sustantivo, se encuentran asidas a la aplicación de las disposiciones vigentes en el momento de su causación, en tanto que las normas de orden procedimental se aplicarán en el momento que estén vigentes o las que se expidan con posterioridad.

Así, es indispensable distinguir que las **normas sustantivas**, también llamadas materiales o de fondo, son aquellas que reconocen un derecho o imponen una obligación, resolviendo, en su caso, directamente el conflicto de intereses suscitado entre las partes conductas, sanciones y reglas para aplicarlas.

Mientras que las **normas procesales**, denominadas también instrumentales o adjetivas, son las que fijan los requisitos de los actos destinados a componer el probable conflicto, regulando los medios para llegar a la solución y estableciendo las disposiciones referentes a los sujetos procesales, procedimientos, su regulación y autoridades.

Precisado lo anterior, toda vez que si bien es cierto el **periodo sujeto a revisión**, en la revisión de gabinete instaurada a la accionante **fue del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006**, y que a través de la resolución contenida en el oficio número 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente del Servicio de Administración Tributaria, le determinó a la parte actora un crédito fiscal por la cantidad de \$2,636'428,880.12 por concepto de Impuesto sobre la Renta, actualización, recargos y multas, correspondientes a dicho ejercicio fiscal, así como que efectivamente el hecho generador

sucedió en el ejercicio fiscal de 2007, también lo es que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, la sociedad controladora (hoy actora) debió reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio.

Ello, por haber omitido sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas ***** ** ***** ** ***** y ***** ** ***** ***** ** ***** en cantidad de \$1,867'583,390.00 y \$383'461,396.00, respectivamente, que en suma ascienden a \$2,251'044,786.00 pérdidas fiscales pendientes de disminuir actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007.

Por lo que, si el hecho generador; es decir la desincorporación de las sociedades controladas sucedió en 2007 (origen de la obligación) y los efectos de ésta se deberían reconocer al cierre del ejercicio inmediato anterior; esto es en el 2006, la legislación aplicable en cuanto a la norma sustantiva es la vigente en 2007, por ser el año en que se llevó a cabo la desincorporación de las sociedades controladas, tal y como lo refieren las partes.

De ahí que no le asista la razón a la parte actora, ya que no debe perderse de vista, que para que una sociedad controladora este obligada a sumar las pérdidas al cierre del ejercicio anterior, es necesario que se lleva a cabo la desincorporación de las sociedades controladas, pues de no ser así, la hoy actora se encontraría obligada a seguir consolidando su resultado fiscal junto con las empresas ***** ** ***** y ***** ** ***** ***** ***** ** *****

Sin que ello implique que debió haberse revisado el ejercicio fiscal 2007 con el fin de determinar el crédito fiscal correspondiente, ya que no debe parar desapercibido que los efectos de la desincorporación en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al momento de la fusión de las sociedades controladas, la sociedad controladora debe reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior, y sumar las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación.

Aunado a qué debe entenderse que si el hecho generador se realizó en 2007 y los efectos corresponden al diverso de 2006, resulta correcto que la autoridad fiscal haya revisado el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, ya que se insiste, al haberse realizado la fusión de las controladas en el 2007, la norma sustantiva aplicable en términos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, es la vigente en ese año.

En ese sentido, contrario a las aseveraciones de la actora, el crédito fiscal controvertido se determinó por el ejercicio fiscal correcto.

Por otra parte, resulta **fundado pero insuficiente** para declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, el argumento de la accionante en el sentido de que las autoridades demandadas no fundaron y motivaron debidamente el supuesto beneficio que obtuvo la actora, para que tengan que sumar a la utilidad consolidada del ejercicio en que se dio la desincorporación las utilidades de sus controladas.

Asimismo, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se desprende que se establezca la obligación de que ante el supuesto de desincorporación, la falta de adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al resultado consolidado deban sumarse en su caso las utilidades fiscales de las empresas fusionadas contra las que se amortizaron las pérdidas, por no existir disposición legal alguna que obligue a la empresa controladora a adicionar a su resultado fiscal consolidado las utilidades de las de las controladas en caso de desincorporación, en el ejercicio en el que ello ocurra, en caso de no haber revertido el efecto de las pérdidas fiscales.

Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en cuestión, no establece la obligación de la sociedad controladora para el efecto de que la falta de adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al resultado consolidado trae como consecuencia sumar en su caso las utilidades fiscales de las empresas fusionadas contra las que se amortizaron las pérdidas, también lo es, que aun

cuando no se prevea en la norma dicho supuesto, la omisión por la que se está determinando el crédito fiscal a la accionante se configuró.

Esto es, la sociedad controladora hoy parte actora, fue omisa en sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas ***** y ***** en cantidad de \$1,867'583,390 y \$383'461,396, respectivamente, que en suma ascienden a \$2,251'044,786.00, ello derivado de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007, con *****

En consecuencia, aun cuando la autoridad demandada fue omisa en señalar el precepto legal que contuviera la obligación de la empresa controladora para adicionar a su resultado fiscal consolidado las utilidades de las controladoras en caso de desincorporación, ello es insuficiente para declarar la nulidad tanto de la resolución impugnada como de la originalmente recurrida, ya que no debe pasar desapercibido que la actora evidentemente incumplió con la obligación prevista en el artículo 71 , segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007.

Por lo que, al no haber demostrado la accionante la indebida aplicación e interpretación del artículo antes citado, se concluye que la resolución impugnada, así como la originalmente recurrida, no contravienen las garantías de legalidad, seguridad e inviolabilidad del domicilio, al estar las mismas ajustadas a derecho en términos del artículo 16 Constitucional, 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Una vez precisado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional procede a valorar la prueba pericial en materia de contabilidad desahogada por los peritos de las partes y el perito tercero en discordia, respecto del tema que nos ocupa, haciendo la aclaración de que la valoración de la prueba pericial queda al prudente arbitrio de esta Juzgadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 46, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 43 de la citada Ley, tal y como lo sostuvo el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en la Jurisprudencia número VII-P-SS-198, publicada en su revista en el mes de septiembre de 2014, la cual es del tenor siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 531 -

“VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PERICIALES.- QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.- El artículo 46, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que la valoración de la prueba pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación de la Sala; por su parte, el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone que el valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del Tribunal. En consecuencia, aun cuando en el procedimiento contencioso administrativo se hubiere admitido la prueba pericial ofrecida por la actora y por su parte el perito de la demandada y el perito tercero en discordia hubieren formulado sus dictámenes correspondientes, **la valoración de dicha probanza queda al prudente arbitrio del juzgador, atendiendo a la litis planteada y a los hechos que se pretendan demostrar con la misma que debe ser la idónea y versar sobre las cuestiones técnicas propias de la pericial de que se trate**

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 38. Septiembre 2014. p. 101”

(El énfasis es nuestro)

En efecto, es importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el objeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de justicia, consistente en que un experto en una determinada ciencia, técnica o arte, aporte al juzgador conocimientos propios en la materia en la que es experto y de los que el juzgador carece, ya que escapan al cúmulo de conocimientos que posee una persona de nivel cultural promedio, siendo que resultan esenciales para resolver la controversia en cuestión.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cuando un dictamen sea emitido por un perito que carezca de especialización en la materia, el mismo carecerá de alcance probatorio alguno, dado que sería incongruente otorgar un valor demostrativo a la opinión de una persona que carece de una relación con el campo de conocimiento que requiere; contrario a ello, cuando el perito sea reconocido como experto y posea un cierto grado de vinculación con la materia que versa el peritaje, entonces el mismo podrá generar una convicción en el juzgador, dependiendo del grado de proximidad entre una materia y otra, así como del análisis realizado al dictamen, ya que el valor probatorio del mismo será en la medida

en que supere un examen más escrupuloso de razonabilidad llevado a cabo por el juzgador.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada **1a.CCXCIV/2013 (10a.)** emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Tomo 2, página 1059, en el mes de octubre de 2013, la cual señala lo siguiente:

“PRUEBA PERICIAL. SU ALCANCE PROBATORIO ACORDE A LA PROXIMIDAD ENTRE EL CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN DEL PERITO Y LA MATERIA DEL DICTAMEN. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el objeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de justicia y consiste en que un experto en determinada ciencia, técnica o arte, aporte al juzgador conocimientos propios en la materia de la que es experto, y de los que el juzgador carece, porque escapan al cúmulo de conocimientos que posee una persona de nivel cultural promedio, mismos que además, resultan esenciales para resolver determinada controversia. Así las cosas, cuando un dictamen sea rendido por un perito, cuyo campo de especialización carezca de vinculación o proximidad con la materia respecto a la cual el dictamen fue emitido, el mismo carecerá de alcance probatorio alguno, pues de lo contrario se caería en el absurdo de otorgarle valor demostrativo a la opinión de una persona cuya experticia carece de una mínima relación con el campo de conocimientos que el dictamen requiere. Sin embargo, cuando el campo en el que se encuentra reconocido como experto determinado perito posea un cierto grado de vinculación con la materia en torno a la cual versa el peritaje, el mismo podrá generar convicción en el órgano jurisdiccional, pero ello dependerá del grado de proximidad entre una materia y la otra, así como de un análisis estricto del contenido del dictamen, esto es, el mismo podrá tener valor probatorio en la medida en que supere un examen más escrupuloso de razonabilidad llevado a cabo por el juzgador.

Amparo directo 78/2012. 21 de agosto de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.”

Así, esta Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, procede a valorar los dictámenes ofrecidos por los peritos de las partes y ante la notoria discrepancia de éstos, el de la perito tercero designada por este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los cuales en la parte de interés a la letra señalan lo siguiente:

**DICTAMEN PERICIAL CONTABLE DEL PERITO DESIGNADO
POR LA ACTORA**



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 533 -

CUESTIONARIO

1. Dirá el perito, ¿cuál es el objeto gravable del impuesto sobre la renta, de conformidad con la Ley que lo regula y de acuerdo a la interpretación que de éste han realizado los órganos jurisdiccionales federales?

El artículo 1º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante "LISR") establece lo siguiente:

"Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

- I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.
- II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.
- III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste."

En este sentido, el objeto gravable del impuesto sobre la renta (en adelante "ISR") son precisamente los ingresos que obtengan los contribuyentes en el ejercicio en que se generen, de conformidad con lo dispuesto en los diversos Títulos de esta misma Ley, según corresponda.

Asimismo, a manera de reforzar el argumento antes mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lo que debe entenderse por ingreso:

"RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "INGRESO" PARA EFECTOS DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta no define el término "ingreso", ello no implica que carezca de sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital, además de que puede surgir como compensación por: servicios prestados; el desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas; intereses; rentas, regalías o dividendos; el pago de pensiones o seguros; y por obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras causas. Sin embargo, la enunciación anterior no debe entenderse en el sentido de que todas estas formas de ingreso han de recibir el mismo trato o que todas se consideran acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades que pueden generar ingresos. Aunado a lo anterior, es particularmente relevante que la legislación aplicable no establece limitantes específicas al concepto "ingreso", ni acota de alguna manera las fuentes de las que éste podría derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 10. y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecen que las personas morales están obligadas al pago del tributo respecto de todos sus ingresos y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así, se desprende que la mencionada Ley entiende al ingreso en un sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o realizado que represente una renta para el receptor, siendo innecesario que el ingreso se traduzca en una entrada en efectivo, pues incluso la propia Ley reconoce la obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal suerte que el ingreso se reconoce cuando se han actualizado todos los eventos que determinan el derecho a recibir la contraprestación y cuando el monto de dicha contraprestación puede conocerse con razonable precisión. En ese sentido, se concluye que la regla interpretativa para efectos del concepto "ingreso" regulado en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de carácter amplio e incluyente de todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente, salvo que el legislador expresamente hubiese efectuado alguna precisión en sentido contrario, como acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado artículo 17."

Amparo directo en revisión 1504/2006. Cómputo Intccsis, S.A. de C.V. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Guidino Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

(Énfasis añadido)

Adicionalmente, para robustecer lo anterior, el autor Enrique Calvo Nicolau, en su Tratado del Impuesto Sobre la Renta señala lo siguiente:

"Para ilustrar la función normativa de permitir acudir a la descripción y análisis de la LISR mexicana. El objeto de la Ley es "gravar los ingresos", no "las utilidades", 10 situación que se advierte con toda nitidez en el a. 1 de la LISR. Por ejemplo, prescribe el a. 1-1 que:

(...)
En este precepto aparecen dos elementos esenciales de la norma: los sujetos de la contribución y el objeto de la misma. En cuanto a lo segundo, aparece

que la obligación consiste en pagar el ISR respecto de todos "los ingresos", lo que significa, implícitamente, que la norma, en principio, no incluye la posibilidad de que se efectúen deducciones; el deber de los sujetos del impuesto consiste en pagar una contribución sobre "la totalidad de los ingresos que obtengan".

(Énfasis añadido)

En ese orden de ideas se desprende que el objeto de la LISR es gravar los ingresos, es decir, aquellas cantidades que modifiquen positivamente el haber patrimonial del contribuyente.

2. Dirá el perito, ¿qué es una fusión desde el punto de vista contable?

De acuerdo con el inciso O) del párrafo 9 de la Norma de Información Financiera (en adelante "NIF") B-7, el término fusión se encuentra definido de la siguiente manera "es la figura legal de adquisición por medio de la cual se disuelven algunas entidades legales, cuyos activos netos pasan a ser propiedad de otra entidad".

Continuando con lo anterior, desde el punto de vista legal la fusión de sociedades es un negocio corporativo (exclusivo de sociedades) de carácter complejo y naturaleza contractual, cuyos efectos se traducen en la sucesión universal del activo y del pasivo de la o las sociedades fusionadas en favor de la fusionante, lo que implica el paso y la adición de los socios de aquéllas a los de ésta. Además, genera la extinción de la o las fusionadas, ya sea para incorporarse a una existente (fusión por incorporación) o para integrar y constituir una nueva (fusión por integración).

3. Dirá el perito, ¿si el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, contemplaba expresamente como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal la fusión de dos o más sociedades o personas morales pertenecientes a dicho régimen especial y bajo qué condiciones o presupuestos legales?

El párrafo décimo segundo, del artículo 57-J de la LISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 señalaba expresamente lo siguiente:

" (...)

En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo".

(Énfasis añadido)

Del artículo citado se desprende que NO se contemplaba expresamente como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal la fusión de dos o más sociedades o personas morales pertenecientes a dicho régimen especial dentro del mismo grupo consolidado.

Al efecto, señala que en el caso de fusión de sociedades, no existiría desincorporación en los siguientes supuestos: (i) la controlada que se disolvía fuera absorbida por otra u otras controladas de la misma controladora, o (ii) cuando la controladora se fusionara a una controlada del mismo grupo.

4. Dirá el perito, en relación directa con la pregunta que antecede, ¿si expresamente el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, preveía como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, el caso en el que la empresa resultante de la fusión de sociedades se mantenía dentro del mencionado régimen especial de tributación, procediendo en su caso, a citar de manera textual la parte normativa que expresamente contemplaba el supuesto de referencia?

Con respecto a lo mencionado en respuesta que antecede y a lo que establecía dicho ordenamiento legal, el caso concreto bajo análisis NO era considerado como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, siendo el único supuesto de desincorporación del régimen especial de tributación en el caso de fusión de sociedades cuando la empresa fusionada fuera absorbida de forma total por sociedades que se encontraban fuera del grupo de consolidación fiscal al cual pertenecía dicha sociedad que desaparecía por el mencionado acto corporativo. Para lo anterior, se transcribe la parte normativa que expresamente contempla lo antes mencionado:

"Artículo 57-J.

Cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos del artículo 57-C de esta Ley, la controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto. En este caso, la sociedad deberá cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser controlada, en forma individual.

En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo.

(...)"

5. En caso de que la respuesta que antecede no fuese afirmativa, dirá el perito, ¿cuáles eran las razones fiscales y/o legales que habrían motivado el no considerar como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal el caso antes referido?

Con respecto al tema en cuestión, el supuesto de desincorporación plasmado en el artículo 57-J de la LISR vigente hasta 2001 resultaba congruente ya que establecía que en caso de que un tercero adquiere las acciones de las empresas o cuando la empresa resultante de la fusión deja de pertenecer al grupo que consolida dicha fusión se debería considerar como desincorporación, caso en el cual resulta lógico que todos y cada uno de los efectos del régimen, pendientes de retrotraer, deben ser retrotraídos al generarse precisamente la desincorporación; caso contrario respecto de una fusión en la que la sociedad que subsista se mantiene en el mismo grupo consolidado.

De lo anterior, hace sentido que en el caso que una sociedad desaparezca por motivo de una fusión, esto no debería implicar que los efectos que dicha sociedad fusionada generó dentro del grupo consolidado no sigan dentro del mismo grupo en el caso que la sociedad fusionante pertenezca de igual forma al grupo de consolidación.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 535 -

Y como ya se comentó dentro de la respuesta al punto 2 del presente, la fusión supone una forma de extinción de la personalidad jurídica de una sociedad, ello es únicamente en virtud de que la sociedad que subsiste va a detentar los activos y pasivos de la sociedad fusionada, convirtiéndose esta última en el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

Sin embargo, en el caso de que la fusión ocurra dentro del mismo grupo de consolidación, esto es, que la sociedad en la que se incorporaron las sociedades fusionadas o la que nazca con motivo de la fusión sea parte del grupo de intereses, debe entenderse que los activos/derechos y pasivos/obligaciones de la sociedad fusionada permanece en dicho grupo y por lo tanto no se desincorporan.

6. Dirá el perito, si bajo su consideración los supuestos de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, respecto del caso de la fusión, contemplados en el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, fueron trasladados al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2002?, precisando las similitudes y diferencias al respecto, considerando el contenido de ambos artículos de manera comparativa.

A continuación se muestra en una tabla el artículo 57-J de la LISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, y el artículo 71 de la LISR vigente a partir del 1° de enero de 2002:

Artículo 57-J (vigente hasta 2001)	Artículo 71 (vigente a partir 2002)
En el caso de fusión de sociedades, <u>se considera que no existe desincorporación</u> cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo.	En el caso de fusión de sociedades, <u>se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión.</u> En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación.

De la transcripción anterior, se desprende que el artículo 57-J de la LISR vigente en 2001, considera que no existía una desincorporación de sociedades en los siguientes supuestos: (i) la controlada que se disolvía fuera absorbida por otra u otras controladas de la misma controladora, o (ii) cuando la controladora se fusionaba con una controlada del mismo grupo.

No obstante el artículo 71 de la LISR vigente a partir del 1° de enero de 2002, no señala qué debe suceder respecto al caso en que la nueva empresa resultante de la fusión de empresas controladas se mantenga tributando bajo el régimen de la consolidación fiscal, como anteriormente sí lo mencionaba textualmente el artículo 57-J de la LISR.

Por lo anterior, de acuerdo a una interpretación histórica legislativa se considera que dicho artículo debiera interpretarse en el sentido que, en el caso de una fusión de sociedades que consoliden en un mismo grupo, dicha fusión no debiera considerarse como un supuesto de desincorporación del régimen.

7. Dirá el perito, ¿cuáles son los efectos fiscales y financieros de una fusión de empresas?

Con respecto al tema, la fusión de sociedades contiene ciertas implicaciones fiscales las cuales están establecidas en distintos artículos de la LISR, siendo estos efectos, entre otros:

- La entidad que surge por fusión debe efectuar pagos provisionales desde el primer ejercicio así como determinar coeficiente de utilidad consolidado con datos de las fusionadas.
- El costo fiscal de las acciones transmitidas por la fusionada será el que corresponda a la fecha de fusión.
- El saldo por deducir de inversiones será el que corresponda a la fusionada, mientras que la fusionante sólo podrá deducir el remanente.
- Pérdidas fiscales no se podrán transmitir. No podrán ser ni deducibles ni amortizables.
- Amortización de pérdidas fiscales de la fusionante sólo podrá tener efecto contra utilidades provenientes del mismo giro que las originó.
- Saldos de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta y Cuenta de Capital de Aportación podrán transmitirse.

Financieramente, se entiende que los efectos de una fusión son el traspaso de todo el activo, pasivo y capital y por ende, el patrimonio neto de una sociedad considerada fusionada a otra sociedad considerada fusionante.

8. Dirá el perito, ¿en qué consiste la desincorporación del régimen de consolidación fiscal?, desde el punto de vista contable.

Este fenómeno hace alusión a cuando una sociedad deje de ser controlada en los términos de la LISR. Sin embargo, contablemente no se tendría efecto alguno ya que el régimen de consolidación es puramente fiscal, por lo que no afecta en ninguna manera a lo contable, más que posiblemente en la determinación de la provisión del impuesto sobre la renta, el cual puede variar derivado a dicha desincorporación.

En este sentido, partiendo del hecho de que la desincorporación del régimen de consolidación fiscal, es independiente del tema contable, se puede entender que el Grupo no sufriría ninguna modificación financiera o contable ya que en la medida en la que la empresa siga formado parte del Grupo, el patrimonio del Grupo seguirá siendo el mismo antes y después de la fusión.

9. Dirá el perito, ¿si conforme a la aplicación estricta del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2002, se puede determinar la existencia expresa de disposición normativa que prevea la desincorporación del régimen de la consolidación fiscal en el supuesto de la fusión de dos o más sociedades que tributen bajo dicho régimen y cuya sociedad resultante se mantenga tributando de manera consolidada?, debiendo señalar en su caso, los motivos de su respuesta.

En la LISR vigente a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2013, en el párrafo noveno del artículo 71, si bien se señala que habrá desincorporación en el caso de fusión, la LISR es omisa en citar con claridad qué debe suceder con respecto al caso en que la empresa resultante de la fusión de empresas controladas se mantenga tributando bajo el régimen de la consolidación fiscal dentro del mismo grupo consolidado, como sí lo señalaba de manera textual el artículo 57-J de dicha Ley vigente hasta 2001.

Derivado de lo anterior, se puede considerar que esta falta de precisión del artículo 71 de la LISR a partir del 2002 no podría ser interpretada de manera estricta en el sentido de que toda fusión de sociedades controladas debe necesariamente ser considerada como una desincorporación.

En tal virtud, se considera que a efecto de poder realizar una correcta interpretación de dicho artículo se debe de atender a los diversos métodos de interpretación jurídica, en el caso concreto, la interpretación histórica, es decir, lo señalado en el artículo 57-J de la LISR vigente hasta 2001, toda vez que dicho cuerpo normativo sí contemplaba expresamente que debía suceder en dichos casos.

10. Dirá el perito, ¿si contable y/o financieramente, en una fusión de sociedades que consolidan, la sociedad fusionada necesariamente debe de salir de la consolidación fiscal?

No, ni contable ni financieramente la sociedad fusionada debe salir del régimen de consolidación en la medida en que la sociedad fusionante esté incluida dentro del mismo resultado consolidado ya que como se ha explicado de forma reiterativa, en el caso de fusión de sociedades, los activos netos de la sociedad fusionada pasan a ser propiedad de dicha sociedad fusionante; es decir, existe la sucesión universal del activo y del pasivo de la sociedad fusionada en favor de la fusionante, y en caso que ambas empresas fueran parte del mismo resultado consolidado, tanto los activos/derechos como los pasivos/obligaciones seguirían siendo parte de dicha consolidación.

11. Dirá el perito, ¿cuáles son los efectos contables y/o financieros, en una fusión de sociedades que consolidan, tanto en el supuesto de que la sociedad resultante de la fusión ya no continúe consolidando como en el supuesto de que lo continúe haciendo? Debiendo señalar con precisión las similitudes o diferencias más representativas en ambos supuestos.

En el supuesto en que la sociedad resultante de la fusión continúe consolidando como parte del Grupo, no existiría ningún efecto contable y/o financiero ya que, el patrimonio de la fusionada pasaría a ser parte del patrimonio de la fusionante y como consecuencia, el patrimonio del Grupo seguiría siendo prácticamente el mismo, solo con un posible efecto en la parte minoritaria, en su caso.

Por otra parte, en el supuesto en que la sociedad resultante de la fusión no forme parte del Grupo que consolida, existiría un efecto contable/financiero importante ya que dependiendo del patrimonio resultante de la sociedad fusionante, si el mismo es igual o mayor a XXX la misma debería de considerarse como parte del Grupo consolidado, sumando así al patrimonio consolidado el correspondiente a la sociedad fusionante antes de dicho acto; situación inversa si el patrimonio de la sociedad fusionante es menor a YYY, dicha sociedad debería considerarse fuera del Grupo consolidado y por consiguiente restar al patrimonio consolidado el correspondiente a la sociedad fusionada que desapareció.

12. Dirá el perito, ¿si la sociedad fusionante [REDACTED] una vez realizada la fusión, continuó o no, tributando bajo el régimen de la consolidación fiscal?, debiendo precisar los motivos y documentales en los que se apoya su respuesta.

Del análisis de los documentos, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa actora, pude constatar que [REDACTED] Sí continuó tributando bajo el régimen de consolidación fiscal como sociedad controlada, aun posterior a la fusión, derivado a que la misma seguía cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la LISR para estos efectos.

Lo anterior según se desprende específicamente de las declaraciones anuales de dicha compañía por los ejercicios de 2007 y 2008. Que se acompaña como Anexo I.

13. Dirá el perito, ¿si en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, es válido considerar que la desincorporación del régimen de consolidación fiscal de empresas controladas fusionadas se genera en el momento en que la fusión surte sus efectos legales?

En el supuesto de que se considere que la fusión entre sociedades controladas implica un supuesto de desincorporación del régimen fiscal de consolidación, que como mencionamos anteriormente no sucede; la hipótesis prevista en el artículo 71 de la LISR establece que se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparecen.

En consecuencia, se debe considerar que la desincorporación se produce en el ejercicio en el que se actualice la hipótesis normativa, que en el caso sucede en el momento en el cual se entiende que surte efectos la fusión, para efectos fiscales.

14. Dirá el perito, en términos del artículo 71, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, ¿cuál es el monto que la empresa controladora se encuentra obligada a sumar o restar a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior al que se efectuó la fusión: a) el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar por parte de sus empresas controladas fusionadas al momento de efectuarse la fusión o b) el monto actualizado de las pérdidas pendientes de disminuir al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se genera la desincorporación?, debiendo en su caso, exponer los motivos para asumir su conclusión.

El segundo párrafo del artículo 71 de la LISR vigente para 2006 establece lo siguiente:

“(....)

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889. (1) Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 537 -

refiere el inciso c) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley

(Énfasis añadido)

(...)"

Derivado de lo anterior, se desprende que la empresa controladora tiene la obligación de sumar o restar a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada, el monto de las pérdidas pendientes de disminuir al momento en que se verifica el supuesto de desincorporación.

Lo anterior, toda vez que dicho artículo atiende a que para efectos de determinar el impuesto sobre la renta en el caso de desincorporación, es necesario que se considere la situación fiscal existente en el ejercicio fiscal anterior al evento de desincorporación como expresamente lo señala el artículo 71 de la LISR vigente en 2006 antes citado, considerando las pérdidas "que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación".

15. Conforme a la respuesta anterior, dirá el perito a qué ejercicio(s) correspondían las pérdidas fiscales pendientes de amortizar que [redacted] se encontraba obligada a sumar o restar a su utilidad o pérdida fiscal consolidada.

Del análisis de los documentos, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa actora, así como de lo señalado en la pregunta que antecede, puede constatar que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar que [redacted] se encontraba obligada a sumar o restar a su utilidad o pérdida fiscal consolidada eran aquellas pérdidas que tenía derecho a disminuir al momento en que se verificara el cumplimiento de la hipótesis de desincorporación.

En este sentido, suponiendo que la presente fusión implica un supuesto de desincorporación del régimen de consolidación, las pérdidas que, en su caso, debieron considerarse para la determinación de la utilidad o pérdida fiscal consolidada corresponden a las del ejercicio 2006.

Sin embargo, de la revisión y análisis de los documentos, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa actora, se desprende que las pérdidas fiscales correspondientes al ejercicio 2006 de las sociedades controladas, que participaron como sociedades fusionadas, fueron amortizadas en su totalidad a nivel individual, en el momento en que tuvo verificativo la fusión. Por lo tanto, no existían pérdidas fiscales que la controlada tuviese derecho a amortizar al momento en que se verifica el supuesto de desincorporación.

Por lo anterior, se considera que la sociedad controladora no tenía obligación de adicionar o restar a su utilidad o pérdida fiscal consolidada cantidad alguna por concepto de pérdidas fiscales de sus sociedades controladas.

16. Dirá el perito, ¿si es correcto señalar que la fecha en que se desincorporaron las sociedades controladas [redacted] y [redacted] por haberse fusionado con la controlada [redacted]

[redacted] fue el 18 de octubre de 2007?, debiendo precisar los motivos y documentales en los que se apoya su respuesta.

Del análisis de los documentos, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa actora, específicamente de la declaración anual que se proporciona como Anexo I, se considera que Sí es correcto señalar que la fecha en que se desincorporaron las sociedades controladas [redacted] y [redacted] por haberse fusionado con la controlada [redacted]

[redacted] fue el 18 de octubre de 2007, pues fue en dicha fecha cuando surte efectos la fusión, asumiendo sin conceder que dicho acto jurídico en este caso actualiza la hipótesis de desincorporación.

17. Dirá el perito, en qué ejercicio fiscal se generaron las pérdidas fiscales que amortizaron las sociedades controladas [redacted] y [redacted] al haberse fusionado con la controlada [redacted]

Las pérdidas fiscales que generaron las sociedades [redacted] y [redacted] mismas que fueron amortizadas por dichas compañías en la determinación de su impuesto sobre la renta por el ejercicio en que surtió efectos la fusión fueron las siguientes:

Ejercicio durante el que se generaron las pérdidas		
2000	274,824,828.00	
2001	34,147,710.00	
2002	112,234,939.00	218,903,213.00
2003	19,529.00	
2006	1,811,604,801.84	371,967,597.00

18. Dirá el perito, ¿cuál es el monto de las pérdidas fiscales que generaron las sociedades controladas fusionadas [redacted] y [redacted] en el ejercicio fiscal de 2006?, debiendo precisar los motivos y documentales en los que se apoya su respuesta.

Del análisis de los documentos, libros, registros y específicamente del dictamen fiscal del 2007, que se acompaña como Anexos C y D, confirmo que el monto de las pérdidas fiscales que generaron en 2006 las sociedades controladas fusionadas [redacted] asciende a \$1,811,604,802, y [redacted] asciende a \$371,967,597.

19. Dirá el perito, ¿si las sociedades controladas fusionadas [redacted] y [redacted] aplicaron las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a la fecha de la fusión?, debiendo precisar el monto de dichas pérdidas y el monto de la utilidad fiscal frente a la que se habrían aplicado las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, así como las documentales de las que habría obtenido la información respectiva.

Del análisis de los documentos, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa actora, específicamente del dictamen fiscal de 2007, que se acompaña como Anexos C y D, ejercicio en que surtió efectos fiscales la fusión, me pude percatar que las sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] aplicaron, contra la utilidad fiscal de \$2,106'174,218 y \$477'670,532 respectivamente, las pérdidas pendientes de amortizar en cantidad de \$2,106'174,218 y \$477'670,532 respectivamente.

20. Dirá el perito, ¿si es correcto señalar que al momento de efectuarse la fusión de las sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] ya no existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar por ninguna de las dos sociedades?, debiendo precisar los motivos de su conclusión así como las documentales que habría consultado para emitir su respuesta.

Del análisis de los documentos, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa actora, y específicamente del dictamen fiscal de 2006 y 2007, que se acompaña como Anexo C y D, de las sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] pude confirmar que ambas sociedades sí contaban con pérdidas fiscales pendientes de amortizar al momento de la fusión.

Asimismo, del análisis a la documentación señalada también pude constatar que dichas pérdidas fiscales fueron amortizadas contra la utilidad fiscal del ejercicio en el que se dio la fusión como supuesto de desincorporación (2007).

Por lo tanto, es correcto afirmar que al momento de efectuarse la fusión las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] ya no tenían pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

21. Dirá el perito, ¿si existe disposición expresa en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 o en la vigente en 2007, en la que se establezca como una obligación fiscal a cargo de las empresas controladoras, que ante la fusión de empresas controladas deban adicionarse las utilidades fiscales de dichas empresas contra las que fueron amortizadas las pérdidas fiscales de ejercicios fiscales anteriores, en el ejercicio en el que se llevó a cabo la fusión de sociedades y si la adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al momento de la fusión o la adición de las utilidades contra las que se estarían amortizando dichas pérdidas constituye un supuesto de elección sometidos al libre arbitrio de las empresas controladoras o de las autoridades fiscales?, debiendo en su caso, señalar de manera textual la parte normativa que así lo establezca.

Al respecto, es importante señalar que no existe ninguna disposición expresa en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2006 o en la vigente en 2007, en la que se establezca como una obligación fiscal a cargo de las empresas controladoras, que ante la fusión de empresas controladas deban adicionarse las utilidades fiscales de dichas empresas contra las que fueron amortizadas las pérdidas fiscales de ejercicios fiscales anteriores, en el ejercicio en el que se llevó a cabo la fusión de sociedades.

Asimismo, tampoco alguna que señale que la adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al momento de la fusión o la adición de las utilidades contra las que se estarían amortizando dichas pérdidas constituya un supuesto de elección entre uno y otro supuesto, sometidos al libre arbitrio de las propias empresas controladoras o de las autoridades fiscales.

(...)



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 539 -

30. Dirá el perito la razón de su dicho.

La razón de mi dicho se basa en la revisión que efectué a la contabilidad, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa quejosa, misma que se adjunta en los distintos anexos al presente documento, así como en la experiencia con que cuento en el ejercicio de la profesión de Contador Público.

(...)"

CUESTIONARIO PROPUESTO POR LA AUTORIDAD

CUESTIONARIO

1. Dirá el perito, del análisis a la contabilidad, documentación y papeles de trabajo del expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, ¿Qué Ley del Impuesto sobre la Renta vigente resulta aplicable, respecto de la fusión de sociedades que se realizó el 18 de octubre de 2007, entre las empresas [redacted] y [redacted] con la contribuyente [redacted]?

La Ley que resulta aplicable para la fusión que se celebró el 18 de octubre de 2007, entre las empresas [redacted] y [redacted] con la contribuyente [redacted] es la LISR vigente en 2007, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de determinar si se actualizan los supuestos de desincorporación en el ejercicio fiscal de 2007 y de ser este el caso, determinar cuál es el momento en que se deben reconocer los efectos de la desincorporación. Sin embargo, la Ley vigente en 2007 exige que se reconozcan los efectos de la desincorporación en la declaración del ejercicio de 2006, por lo cual los conceptos adicionales que establezca la Ley vigente en 2007 deben ser incluidos en el cálculo de la declaración de 2006 a la cual le resulta aplicable la Ley vigente en el ejercicio de 2006.

2. Dirá el perito, de la revisión y análisis que efectúe al expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, si las empresas [redacted] (antes [redacted]), [redacted] y [redacted] interpusieron algún medio de defensa en contra del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente

hasta el 31 de diciembre de 2001, así como del 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, y si este fue resuelto a su favor, indicando si la resolución quedó firme.

Las empresas [redacted] y [redacted] no interpusieron ningún medio de defensa en contra del artículo 57-J de la LISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, ni en contra del artículo 71 de la LISR vigente en 2007, de conformidad con una interpretación histórica.

3. Dirá el perito, del análisis a la contabilidad, documentación y papeles de trabajo del expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, si por el periodo del 01 de enero al 30 de octubre de 2007, las sociedades [redacted] fueron sociedades controladas de la contribuyente [redacted] (antes [redacted]), y si estas, al momento de su fusión con la empresa [redacted] jurídicamente se ubicaron en el supuesto establecido en el párrafo noveno del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

Del análisis a la contabilidad, documentación y papeles de trabajo de las empresas controladas pude corroborar que efectivamente las sociedades [redacted] y [redacted] fueron sociedades controladas de la contribuyente [redacted] (antes [redacted]) por el periodo del 01 de enero al 18 de octubre de 2007.

Adicionalmente, pude corroborar que en el párrafo noveno del artículo 71 de la LISR vigente en 2007, se señala que habrá desincorporación (del régimen de consolidación fiscal) en el caso de fusión, siendo dicho ordenamiento omiso con respecto al caso en que la empresa fusionante se mantenga tributando bajo el régimen de la consolidación fiscal dentro del mismo grupo consolidado al cual pertenecían dichas empresas fusionadas, como sí lo señalaba de manera textual el artículo 57-J de la LISR vigente hasta el ejercicio 2001.

En este sentido, considero que dichas sociedades NO se ubicaban en el supuesto establecido en el párrafo noveno del artículo 71 de la LISR vigente en 2007.

4. Dirá el perito, de la revisión que efectúe al expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, el fundamento legal aplicable, que le permitió a la contribuyente [redacted] (antes [redacted]), no considerar en la utilidad fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de las sociedades controladas [redacted] y [redacted] considerando que las mismas se fusionaron el 31 de octubre de 2007 con la empresa [redacted].

De la revisión y análisis del expediente del cual derivó la resolución impugnada, así como de la documentación aportada por la parte actora en el presente juicio contencioso administrativo, me pude percatar de lo siguiente:

En primer lugar, de conformidad con la escritura 36,446 que obra agregada al expediente del juicio de nulidad en que se actúa, se desprende que la fusión se efectuó con fecha 18 de

octubre de 2007, misma fecha en la que surtió sus efectos desde una perspectiva fiscal, y no así, como lo indica la autoridad demandada el 31 de octubre de 2007.

Suponiendo que la fusión implica un supuesto de desincorporación del régimen fiscal de consolidación, el fundamento legal que le permitió a la parte actora no considerar, en la determinación de la utilidad fiscal consolidada de 2006, las pérdidas de sus sociedades controladas es el artículo 71 de la LISR vigente para 2007, toda vez que en el mismo no se señala expresamente que la fusión de las sociedades controladas de un Grupo que forma parte del Régimen de consolidación fiscal se deba considerar como desincorporación de dichas sociedades como parte del este régimen.

Es importante mencionar, que aun cuando el Grupo cayera en el supuesto del artículo 71 de la LISR vigente para 2007, al momento de la desincorporación las sociedades fusionadas ya no contaban con pérdidas pendientes de amortizar, por lo cual no había pérdidas que se pudieran considerar en la utilidad de la controladora [REDACTED] (antes [REDACTED]).

(...)

7. Dirá el perito la razón de su dicho.

La razón de mi dicho se basa en la revisión que efectué a la contabilidad, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa quejosa, misma que se adjunta en los distintos anexos al presente documento, así como en la experiencia con que cuento en el ejercicio de la profesión de Contador Público.

Además, la razón de mi dicho se basa en el análisis específico de, entre otros, los siguientes documentos:

- a) Dictamen fiscal por los ejercicios 2006 y 2007 de la compañía [REDACTED]
- b) Dictamen fiscal por el ejercicio 2007 de la compañía [REDACTED]
- c) Dictamen fiscal por el ejercicio 2007 de la compañía [REDACTED]
- d) Dictamen fiscal por el ejercicio 2007 de la compañía [REDACTED]
- e) Papel de trabajo de las pérdidas fiscales de las compañías [REDACTED] y [REDACTED]
- f) Sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011
- g) Escritura 36,446 en la cual consta que la fusión entre [REDACTED] y [REDACTED] fue celebrada el 18 de octubre de 2007
- h) Declaraciones anuales 2005 y 2006 de la compañía [REDACTED]

Por lo antes expuesto y fundado,

A ESA H. SALA, atentamente, pido se sirva:

ÚNICO. Tenerme por presentado en tiempo y forma legales el presente dictamen pericial.

[REDACTED]

(...)"



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 541 -

DICTAMEN PERICIAL CONTABLE DE LA PERITO DESIGNADA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

DICTAMEN

CUESTIONARIO PROPUESTO POR LA ACTORA.

1. Dirá el perito, ¿cuál es el objeto gravable del impuesto sobre la renta, de conformidad con la Ley que lo regula y de acuerdo a la interpretación que de éste han realizado los órganos jurisdiccionales federales?

Respuesta:

De conformidad con el artículo 1º de la Ley del Impuesto sobre la Renta el objeto de gravamen, son los ingresos obtenidos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, como a continuación se describe:

Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este.

De acuerdo a la interpretación que de éste han realizado los órganos jurisdiccionales federales, el poder judicial de la federación se ha pronunciado respecto al objeto para efectos del impuesto sobre la renta mediante la siguiente tesis que la letra detalla:

Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo: IV, Octubre de 1996. Tesis: P/J. 52/96. Página 101.

RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN QUE SE GENERA EL IMPUESTO.- De conformidad con el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los sujetos pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de éstos nace en el momento mismo en que se obtienen los ingresos, bien sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, como lo establece el artículo 15 del mismo ordenamiento, y no hasta que al término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades. No es óbice para esta conclusión el hecho de que sean las utilidades las que constituyen la base a la que habrá de aplicarse la tarifa de acuerdo con la cual se determinará el impuesto, así como tampoco la circunstancia de que aun cuando haya ingresos, si no hay utilidades, no se cubrirá impuesto alguno, pues en este caso debe entenderse que esos ingresos que, sujetos a las deducciones establecidas por la ley, no produjeron utilidades, están

desgravados, y lo que es más, que esa pérdida fiscal sufrida en un ejercicio fiscal, será motivo de compensación en ejercicio posterior. No es cierto pues, que el impuesto sobre la renta se causa anualmente, ya que, como se dijo, éste se va causando operación tras operación en la medida en que se vayan obteniendo los ingresos; por ende, no es cierto tampoco, que al realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto, se esté enterando un tributo no causado y que ni siquiera se sabe si se va a causar. El impuesto se ha generado, se va causando operación tras operación, ingreso tras ingreso, y el hecho de que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley en comento, sea hasta el fin del ejercicio fiscal cuando se haga el cómputo de los ingresos acumulables, y se resten a éstos las deducciones permitidas por la ley, para determinar una utilidad fiscal que va a constituir la base (no el objeto), a la que se habrá de aplicar la tarifa que la misma Ley señala, para obtener así el impuesto definitivo a pagar, no implica que dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que éste no se hubiese generado con anterioridad.

2. Dirá el perito, ¿qué es una fusión desde el punto de vista contable?

Respuesta:

De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el boletín B-7, se define a la fusión como la figura legal de una adquisición de negocios en la que dos o más empresas se integran entre sí, disolviéndose una o algunas, o todas las que se fusionan creándose una nueva entidad legal.

3. Dirá el perito, ¿si el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, contemplaba expresamente como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal la fusión de dos o más sociedades o personas morales pertenecientes a dicho régimen especial y bajo qué condiciones o presupuesto legales?

Respuesta:

El artículo 57-J de la Ley del impuesto sobre la renta vigente hasta 2001, si contemplaba como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal la fusión de dos o más sociedades o personas morales pertenecientes a dicho régimen especial, toda vez que la condición en la que se consideraba que no existía desincorporación era cuando la controlada que se disolvía fuera absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusionara a una controlada del mismo grupo.

4. Dirá el perito, en relación directa con la pregunta que antecede, ¿si expresamente el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, preveía como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, el caso en el que la empresa resultante de la fusión de sociedades se mantenía dentro del mencionado régimen especial de tributación, procediendo en su caso, a citar de manera textual la parte normativa que expresamente contemplaba el supuesto de referencia?

Respuesta:

Como se mencionó en la respuesta de la pregunta que antecede el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente hasta 2001, sí contemplaba como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal la fusión de dos o más sociedades o personas morales pertenecientes a dicho régimen especial, toda vez que la condición en la que se consideraba que no existía desincorporación era cuando la controlada que se disolvía fuera absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusionara a una controlada del mismo grupo

5. En caso de que la respuesta que antecede no fuese afirmativa, dirá el perito, ¿cuáles eran las razones fiscales y/o legales que habrían motivado el no considerar como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal el caso antes referido?

Respuesta:

No aplica

6. Dirá el perito, si bajo su consideración los supuestos de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, respecto del caso de la fusión, contemplados en el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, fueron trasladados al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del 1º de enero de 2002?, precisando las similitudes y diferencias al respecto, considerando el contenido de ambos artículos de manera comparativa.

Respuesta:

El artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 consideraba que no existía desincorporación cuando existía fusión de sociedades entre empresas del mismo grupo de consolidación y con motivo de la abrogación de dicha Ley y la publicación de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio de 2002, se cambió el tratamiento de la fusión de sociedades que consolidaban el cual fue establecido en el artículo 71 párrafo noveno de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1º de enero de 2002, puesto que de manera expresa y de forma general se considera que en el caso de fusión de sociedades las empresas controladas que desaparezcan con motivo de fusión quedan desincorporadas del régimen de consolidación fiscal; por lo tanto no fueron trasladados los supuestos de desincorporación en el caso de fusión contemplados en el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 al artículo 71 noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio de 2002.

Se precisan las similitudes y diferencias en el siguiente cuadro comparativo:

000553

Artículo 57-J párrafo doceavo Ley del ISR vigente hasta 2001	Artículo 71, noveno párrafo Ley del ISR vigente a partir de 2002	Similitud	Diferencias
En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo.	En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación.	Hace referencia a la fusión de sociedades que consolidan fiscalmente.	El artículo 57-J señalaba que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo. El artículo 71 noveno párrafo señala que sí existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión.

7. Dirá el perito, ¿cuáles son los efectos fiscales y financieros de una fusión de empresas?

Respuesta:

Efectos fiscales:

Se señalan los principales de acuerdo a:

A. Código Fiscal de la Federación:

- En el artículo 11 segundo párrafo, señala que el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha que sea fusionada.
- En el artículo 14 señala que se entiende como enajenación de bienes y en la fracción IX hace mención que la que se realice mediante fusión excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 14-B de este Código.
- El artículo 14-B, fracción I, señala los casos en que no se considera enajenación señalando a la fusión, siempre que cumpla con ciertos requisitos señalando entre otros, que cuando la sociedad que subsista o surja con motivo de la fusión, presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales les correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas, correspondientes al ejercicio que terminó por fusión y presente el aviso de fusión en los términos del reglamento de este código.

B. Ley del Impuesto sobre la renta:

La Ley del Impuesto sobre la Renta trata sobre las fusiones, principalmente desde el punto de vista del accionista o socio, ya que la empresa no debe ser gravada porque no se realiza enajenación sino se fusiona o se unen sin producir utilidad o pérdida.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 543 -

- En el artículo 14 antepenúltimo párrafo, señala los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades en la que surja una nueva sociedad, efectuarán en dicho ejercicio, pagos provisionales del mes en que ocurra la fusión.
- El artículo 37 tercer párrafo, señala que la fecha de adquisición de los bienes que se adquirieran con motivo de fusión se considera la que le correspondió a la fusionada.
- El artículo 42 fracción IV, señala que para efectos de depreciación los valores sujetos a depreciación no deberán ser superiores a los valores pendientes de deducir en la sociedad fusionada.
- El artículo 61 penúltimo párrafo, señala que el derecho de disminuir pérdidas es personal del contribuyente que las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de la fusión.
- El artículo 62 señala, que no se disminuirá la pérdida fiscal o la parte de ella, que provenga de fusión de sociedades, en las que el contribuyente sea socio o accionista.
- El artículo 63 señala, que la sociedad fusionante sólo podrá disminuir su pérdida fiscal pendiente al momento de la fusión con cargo a la utilidad fiscal correspondiente a la explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida.
- El artículo 71 noveno párrafo, señala que en el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación.
- El artículo 88 último párrafo, señala que en los casos de fusión el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse a otra u otras sociedades.
- El artículo 89 señala que cuando ocurra una fusión de sociedades, el saldo de la cuenta de capital de aportación se deberá transmitir a las sociedades que surjan o subsistan con motivo de dicho acto.

Efectos financieros:

- a) De la sociedad fusionada:
- Registrar en los libros de contabilidad las cuentas complementarias eliminadas (estimaciones, depreciaciones y amortizaciones) contra sus principales cuentas.
 - Realizar el cierre de los libros contables.

000000

- Saldar las cuentas de Activo, Pasivo y Capital Contable, en la sociedad que desaparece.
- b) De la sociedad fusionante:
- Elaboración del estado de situación financiero neto (reexpresar el estado de situación financiera neto y registrar en los libros de contabilidad los cambios y movimientos).
 - Elaborar todos los estados financieros que las empresas emplean regularmente, así como los que sean solicitados por los accionistas de la nueva empresa, por ejemplo: estado de flujo de efectivo, de utilidades retenidas, de variaciones en el capital contable.
8. Dirá el perito, ¿en qué consiste la desincorporación del régimen de consolidación fiscal?, desde el punto de vista contable.

Respuesta:

La normatividad contable no contempla ninguna regulación o explicación del régimen de consolidación fiscal, por lo que la desincorporación del citado régimen no está definida en dicha normatividad contable.

9. Dirá el perito, ¿si conforme a la aplicación estricta del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1º de enero de 2002, se puede determinar la existencia expresa de disposición normativa que prevea la desincorporación del régimen de la consolidación fiscal en el supuesto de fusión de dos o más sociedades que tributen bajo dicho régimen y cuya sociedad resultante se mantenga tributando de manera consolidada?, debiendo señalar en su caso, los motivos de su respuesta.

Respuesta:

Sí existe disposición expresa toda vez que el artículo 71 noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente a partir del 2002, hace mención que "En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión...", sin requerir o limitar que la sociedad fusionante esté o no en el grupo de consolidación.

10. Dirá el perito, ¿si contable y/o financieramente, en una fusión de sociedades que consolidan, la sociedad fusionada necesariamente debe de salir de la consolidación fiscal?

Respuesta:

Sí, toda vez que la sociedad fusionada, es la sociedad que se disuelve o se extingue y al no existir en la vida jurídica es imposible que consolide.

11. Dirá el perito, ¿cuáles son los efectos contables y/o financieros, en una fusión de sociedades que consolidan, tanto en el supuesto de que la sociedad resultante de la

fusión ya no continúe consolidando como en el supuesto de que lo continúe haciendo? Debiendo señalar con precisión las similitudes o diferencias más representativas en ambos supuestos.

Respuesta:

Son los mismos efectos contables y/o financieros tanto en el supuesto de que la sociedad resultante de la fusión ya no continúe consolidando como en el supuesto de que lo continúe haciendo:

- a) De la sociedad fusionada:
 - Registrar en los libros de contabilidad las cuentas complementarias eliminadas (estimaciones, depreciaciones y amortizaciones) contra sus principales cuentas.
 - Realizar el cierre de los libros contables.
 - Saldar las cuentas de Activo, Pasivo y Capital Contable, en la sociedad que desaparece.
- b) De la sociedad fusionante:
 - Elaboración del estado de situación financiero neto (reexpresar el estado de situación financiera neto y registrar en los libros de contabilidad los cambios y movimientos).
 - Elaborar todos los estados financieros que las empresas emplean regularmente, así como los que sean solicitados por los accionistas de la nueva empresa, por ejemplo: estado de flujo de efectivo, de utilidades retenidas, de variaciones en el capital contable.

12. Dirá el perito, ¿si la sociedad fusionante [REDACTED] una vez realizada la fusión, continuó o no, tributando bajo el régimen de la consolidación fiscal?, debiendo precisar los motivos y documentales en los que se apoya su respuesta.

Respuesta:

De acuerdo al expediente administrativo de la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] en el que consta el anexo 34.- "Empresas que Consolidan Fiscalmente.- Información sobre consolidación" por el ejercicio de 2007 se observa que la sociedad controlada [REDACTED] fue relacionada como sociedad controlada y por lo tanto sí continuó tributando bajo el régimen de consolidación fiscal una vez realizada la fusión.

13. Dirá el perito, ¿si en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, es válido considerar que la desincorporación del régimen de consolidación fiscal de empresas controladas fusionadas se genera en el momento en que la fusión surte sus efectos legales?

Respuesta:

000000

Como se ha hecho mención el artículo 71 párrafo noveno de la de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, hace mención que "...se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. ...", de lo anteriormente descrito se desprende que se da la desincorporación con el simple hecho del acto de fusión, sin distinguir el momento en que surte efectos legales.

No obstante lo anterior, es importante señalar que en el presente caso la legislación aplicable es la correspondiente a 2007, cuyo texto es el mismo, ya que la fusión de sociedades entre las empresas [REDACTED] y [REDACTED]

[REDACTED] con la contribuyente [REDACTED] se realizó el 18 de octubre de 2007.

14. Dirá el perito, en términos del artículo 71, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, ¿cuál es el monto que la empresa controladora se encuentra obligada a sumar o restar a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior al que se efectuó la fusión: a) si el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar por parte de sus empresas controladas fusionadas al momento de efectuarse la fusión o b) el monto actualizado de las pérdidas pendientes de disminuir al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se genera la desincorporación?, debiendo en su caso, exponer los motivos para asumir su conclusión.

Respuesta:

El artículo 71, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, establece lo siguiente: "La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado..."

Asimismo el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, establece lo siguiente: "b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley."

Cabe mencionar que el cuarto párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente en 2006, establece que "...En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 545 -

del ejercicio inmediato anterior a aquel en que se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate. ..."

Por lo anterior, el monto que la empresa controladora se encuentra obligada a sumar o restar a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior al que se efectuó la fusión es el monto de las pérdidas pendientes de disminuir actualizadas al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se genera la desincorporación.

No obstante lo anterior, es importante señalar que en el presente caso la legislación aplicable es la correspondiente a 2007, cuyo texto es el mismo, ya que la fusión de sociedades entre las empresas [redacted] con la contribuyente [redacted] y [redacted]

[redacted] se realizó el 18 de octubre de 2007.

15. Conforme a la respuesta anterior, dirá el perito a qué ejercicio(s) correspondían las pérdidas fiscales pendientes de amortizar que [redacted] se encontraba obligada a o sumar o restar a su utilidad o pérdida fiscal consolidada.

Respuesta:

De acuerdo con la respuesta a la pregunta que antecede las pérdidas fiscales pendientes de amortizar que [redacted] actualmente [redacted] se encontraba obligada a o sumar o restar a su utilidad o pérdida fiscal consolidada en el ejercicio de 2006 son las siguientes:

- a) Las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la renta, esto es en el ejercicio de 2006.
- b) En el caso de desincorporación de sociedades controladas por las fusiones efectuadas en el ejercicio de 2007, son las pérdidas fiscales pendientes de disminuir actualizadas al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se genera la desincorporación de la sociedad de que se trate, esto las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que se tenían en el ejercicio de 2006.

16. Dirá el perito, si es correcto señalar que la fecha en que se desincorporaron las sociedades controladas [redacted] y [redacted] por haberse fusionado con la controlada [redacted] fue el 18 de octubre de 2007, debiendo precisar los motivos y documentales en los que se apoya su respuesta.

Respuesta:

De conformidad con el artículo 71 párrafo noveno de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, el cual hace mención que "...se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. ...", de lo anteriormente descrito se desprende que se da la

000061

desincorporación con el simple hecho que se de la fusión y de acuerdo con el instrumento notarial número 36,446, volumen 880 de fecha 18 de octubre de 2007, mediante el cual se protocolizó el acta de asamblea donde se acordó la fusión, se considera que el 18 de octubre de 2007 es la fecha correcta de la desincorporación de las sociedades controladas [redacted] y [redacted] por haberse fusionado con la controlada [redacted]

17. Dirá el perito, en qué ejercicio fiscal se generaron las pérdidas fiscales que amortizaron las sociedades controladas [redacted] y [redacted] al haberse fusionado con la controlada [redacted]

Respuesta:

Las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de la sociedades controladas fusionadas [redacted] y [redacted] se generaron en el ejercicio fiscal de 2006.

18. Dirá el perito, ¿cuál es el monto de las pérdidas fiscales que generaron las sociedades controladas fusionadas [redacted] y [redacted] en el ejercicio fiscal de 2006?, debiendo precisar los motivos y documentales en los que se apoya su respuesta.

Respuesta:

El monto de las pérdidas fiscales generadas en el ejercicio de 2006 por las sociedades controladas fusionadas son los siguientes:

SOCIEDAD CONTROLADA FUSIONADA	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO 2006	DOCUMENTALES
[redacted]	\$1,811,604,802	Declaración anual normal presentada el 30 de marzo de 2007
[redacted]	\$371,967,597	Declaración anual complementaria por dictamen presentada el 12 de julio de 2007

19. Dirá el perito, ¿si las sociedades controladas fusionadas [redacted] y [redacted] aplicaron las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a la fecha de la fusión?, debiendo precisar el monto de dichas pérdidas y el monto de la utilidad fiscal frente a la que se habrían aplicado las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, así como las documentales de las que habría obtenido la información respectiva.

Respuesta:

De acuerdo con las declaraciones que obran en el expediente administrativo y del instrumento notarial número 36,446, volumen 880 de fecha 18 de octubre de 2007, mediante el cual se protocolizó el acta de asamblea donde se acordó la fusión:

- a) El 31 de diciembre de 2007, se presentó declaración normal a nombre de [REDACTED] correspondiente al ejercicio de 2007 en la cual se manifestó una utilidad fiscal de \$2,106,174,218.00, asimismo se registró en el renglón pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio un monto de \$2,106,174,218.00, manifestando un Resultado Fiscal de \$0.
- b) El 22 de julio de 2008, se presentó declaración complementaria a nombre de [REDACTED] correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, en la cual se manifestó una utilidad fiscal de \$477,670,532.00, asimismo se registró en el renglón pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio un monto de \$477,670,532.00, manifestando un Resultado Fiscal de \$0.
- c) Con el instrumento notarial número 36,446, volumen 880 de fecha 18 de octubre de 2007, se protocolizó el acta de asamblea donde se acordó la fusión.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se considera que al momento de la fusión de acuerdo con el instrumento notarial fue el 18 de octubre de 2007 y las declaraciones en que se aplicaron las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] fueron presentadas en fechas 31 de diciembre de 2007 y 22 de julio de 2008, respectivamente, no se aplicaron las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a la fecha de la fusión.

20. Dirá el perito, ¿si es correcto señalar que al momento de efectuarse la fusión de las sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] ya no existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar por ninguna de las dos sociedades?, debiendo precisar los motivos de su conclusión así como las documentales que habría consultado para emitir su respuesta.

Respuesta:

En base a la respuesta a la pregunta 19 que antecede, en la cual se consideró que al momento de la fusión de acuerdo con el instrumento notarial fue el 18 de octubre de 2007 y las declaraciones en que se aplicaron las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de las sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] fueron presentadas en fechas el 31 de diciembre de 2007 y 22 de julio de 2008, se considera que no es correcto señalar que al momento de efectuarse la fusión de las sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] ya no existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar por ninguna de las dos sociedades, toda vez que si contaban con pérdidas fiscales pendientes de amortizar a la fecha de la fusión.

21. Dirá el perito, ¿si existe disposición expresa en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 o en la vigente en 2007, en la que se establezca como una obligación fiscal a cargo de las empresas controladoras, que ante la fusión de empresas controladas deban adicionarse las utilidades fiscales de dichas empresas contra las que fueron amortizadas las pérdidas fiscales de ejercicios fiscales anteriores, en el ejercicio en el que se llevó a cabo la fusión de sociedades y si la adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al momento de la fusión o la adición de las utilidades contra las que se estarían amortizando dichas pérdidas constituye un supuesto de elección sometidos al libre al arbitrio de las empresas controladoras o de las autoridades fiscales?, debiendo en su caso, señalar de manera textual la parte normativa que así lo establezca.

Respuesta:

No existe disposición expresa en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 o en la vigente en 2007, en la que se establezca como una obligación fiscal a cargo de las empresas controladoras, que ante la fusión de empresas controladas deban adicionarse las utilidades fiscales de dichas empresas contra las que fueron amortizadas las pérdidas fiscales de ejercicios fiscales anteriores, en el ejercicio en el que se llevó a cabo la fusión de sociedades.

Asimismo, como ya se ha mencionado en respuestas anteriores, de acuerdo con el artículo 71 párrafos segundo y noveno de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, establecen que:

Párrafo segundo: "La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado..."

Noveno párrafo: "En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. ..."

De acuerdo con lo establecido en los párrafos segundo y noveno del artículo 71 de la Ley del impuesto sobre la Renta vigente en 2006, se advierte que en el caso de fusión de sociedades se establece claramente que se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de fusión y por tanto, la sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio y para ello, sumará o restará, según sea el caso a la utilidad fiscal consolidada o pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores que



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 547 -

fueron amortizadas en la consolidación fiscal, mismas que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de las sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado. Por lo anterior, la adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al momento de la desincorporación no constituyen un supuesto de elección sometidos al libre al arbitrio de las empresas controladoras o de las autoridades fiscales.

No obstante lo anterior, es importante señalar que en el presente caso la legislación aplicable es la correspondiente a 2007, cuyo texto es el mismo, ya que la fusión de sociedades entre las empresas [REDACTED] y

[REDACTED] con la contribuyente [REDACTED]

[REDACTED] se realizó el 18 de octubre de 2007.

(...)

30. Dirá el perito la razón de su dicho.

Respuesta:

Se llega a lo anterior, debido a las siguientes consideraciones:

- a) El penúltimo párrafo del artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que "Las sociedades controladoras y las sociedades controladas que consoliden, estarán a lo dispuesto en las demás disposiciones de esta Ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en este Capítulo".
- b) Los tres primeros incisos de la fracción I del artículo 68, señalan, en la parte conducente, el procedimiento conforme al cual las empresas controladoras, que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, deben determinar su resultado fiscal.
- c) En este sentido, la sociedad controladora, para determinar su resultado fiscal consolidado, debe sumar o restar las utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades controladas, así como la propia, determinadas en términos de lo señalado en el penúltimo párrafo, del artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a las demás disposiciones de dicha Ley que resulten aplicables, en virtud de que la sociedad controladora constituye el sujeto pasivo del impuesto generado sobre el resultado fiscal consolidado.
- d) Lo anterior, no obstante que, las sociedades controladas, así como la sociedad controladora, determinen en lo individual, las utilidades o pérdidas fiscales que les correspondan, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- e) En la inteligencia de que dentro de las relaciones jurídicas derivadas del consentimiento y de la autorización para consolidar está el derecho que tiene la controladora para exigir de las controladas la entrega de un monto igual a los pagos provisionales y al impuesto del ejercicio que hubieran causado, en la proporción en que su utilidad o pérdida fiscal esté consolidada, con la finalidad de proveerle de recursos para cubrir los pagos provisionales y el impuesto generado.
- f) Ahora bien, de los artículos 10 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se colige que, tanto las sociedades controladas como la sociedad controladora, determinan su utilidad o pérdida fiscal disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas en el respectivo Título II.
- g) De ahí la obligación de la sociedad controladora de tomar en consideración, para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada no sólo las utilidades fiscales del ejercicio de las sociedades controladas, sino también el inventario acumulable que les corresponda, pues dicha obligación deviene de su consentimiento y de la autorización para consolidar y así exigir a las sociedades controladas la entrega de un monto igual al de los pagos provisionales y al impuesto del ejercicio que hubieren causado, en la proporción en que su utilidad o pérdida fiscal esté consolidada, en la que evidentemente se incluye el inventario acumulable de las sociedades que forman el grupo de consolidación fiscal.
- h) De tal suerte que resulta inexacto, que para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, deban tomarse en cuenta únicamente las utilidades fiscales del ejercicio de las sociedades controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, sin que, para tal efecto, se considere el inventario acumulable de las sociedades que forman el grupo de consolidación.
- i) Lo anterior, al haber autorizado la consolidación fiscal, tanto la controladora como las controladas deben determinar su utilidad o pérdida fiscal, disminuyendo

de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas en el respectivo Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

- j) Luego entonces, debido a que el inventario acumulable constituye parte de una utilidad fiscal, y, en esa virtud, se está obligado a acumular los inventarios, para revertir el efecto de la deducción y así evitar la doble deducción de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, deducidos hasta dicho ejercicio mediante el sistema de deducción al adquirir las mercancías y a partir del 2005 mediante el sistema de deducción del costo de lo vendido.
- k) De tal suerte que, la sociedad controladora, para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada, debe considerar, entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus sociedades controladas y su propia utilidad fiscal, y por ende, debe considerar dentro de dichos conceptos, el inventario acumulable correspondiente a cada una de las sociedades controladas obligadas a efectuar la acumulación de dicho inventario, como es el caso de la sociedad controlada [REDACTED]

(...)"

CUESTIONARIO PROPUESTO POR LA AUTORIDAD

1. Dirá el perito, del análisis a la contabilidad, documentación y papeles de trabajo del expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, ¿Qué Ley del Impuesto sobre la Renta vigente resulta aplicable, respecto de la fusión de sociedades que se realizó el 18 de octubre de 2007, entre las empresas [REDACTED] y [REDACTED] con la contribuyente [REDACTED] [REDACTED]

Respuesta:

Es la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2007.

2. Dirá el perito, de la revisión y análisis que efectúe al expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, si las empresas [REDACTED] (antes [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] interpusieron algún medio de defensa en contra del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, así como del 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, y si éste fue resuelto a su favor, indicando si la resolución quedó firme.

Respuesta:

De acuerdo con los documentales que se encuentran en el expediente del cual deriva la resolución impugnada y la aportada por la contribuyente en el presente juicio, no



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 549 -

000000

se conoció que las empresas [REDACTED] (antes [REDACTED]) y [REDACTED] interpusieran algún medio de defensa en contra del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, así como del 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

3. Dirá el perito, del análisis a la contabilidad, documentación y papeles de trabajo del expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, si por el periodo del 01 de enero al 30 de octubre de 2007, las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] fueron sociedades controladas de la contribuyente [REDACTED] (antes [REDACTED]) y si éstas, al momento de su fusión con la empresa [REDACTED] jurídicamente se ubicaron en el supuesto establecido en el párrafo noveno del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

Respuesta:

Sí eran controladas las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] de la contribuyente [REDACTED] (antes [REDACTED]) por el periodo del 01 de enero al 30 de octubre de 2007, lo anterior toda vez que con instrumento notarial número 36,446, volumen 880 de fecha 18 de octubre de 2007, se protocolizó el acta de asamblea donde se acordó la fusión, de las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] que de acuerdo con el dictamen fiscal de la sociedad controladora [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su anexo 28.- "Empresas que Consolidan Fiscalmente.- Información sobre consolidación" por el ejercicio de 2006 se observa que relacionó como sociedades controladas a [REDACTED] y [REDACTED]

Asimismo, se señala que en el presente caso sí se actualiza el supuesto establecido en el artículo 71 párrafo noveno de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2007, el cual hace mención que "...se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. ...", de lo anteriormente descrito se desprende que se da la desincorporación con el simple hecho que se de la fusión y de acuerdo con el instrumento notarial número 36,446, volumen 880 de fecha 18 de octubre de 2007, mediante el cual se protocolizó el acta de asamblea donde se acordó la fusión, se considera que el 18 de octubre de 2007 se desincorporaron las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] por haberse fusionado con la controlada [REDACTED]

4. Dirá el perito, de la revisión que efectúe al expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, el fundamento legal aplicable, que le permitió a la contribuyente [REDACTED] (antes [REDACTED]), no considerar en la

utilidad fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] considerando que las mismas se fusionaron el 31 de octubre de 2007 con la empresa [REDACTED]

Respuesta:

No hay fundamento legal aplicable que permita a la contribuyente [REDACTED] (antes [REDACTED]), el no considerar en la utilidad fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] derivado de la fusión efectuada en 2007.

(...)

000087

7. Dirá el perito la razón de su dicho.

Respuesta

Lo anterior con base en mis conocimientos contables, así como en atención al estudio y análisis efectuado a las disposiciones fiscales aplicables y documentación que obra en el expediente abierto por la autoridad demandada a nombre de la contribuyente [REDACTED] se desahoga el presente dictamen.

Por todo lo antes expuesto, a esa H. Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atentamente solicito tenerme por presentada en tiempo y forma en términos del presente escrito y se tenga por rendido el presente dictamen pericial en materia contable.

Atentamente

L.C. [REDACTED]
Cédula Profesional [REDACTED]

La perito designada por la autoridad demandada en el expediente al rubro señalado, ratifica en todos y cada uno de sus puntos el presente dictamen pericial en materia contable, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

L.C. [REDACTED]
Cédula Profesional [REDACTED]

(...)"

DICTAMEN PERICIAL CONTABLE DE LA PERITO TERCERO DESIGNADA POR ESTE TRIBUNAL

1.- Dirá el perito, ¿cuál es el objeto gravable del impuesto sobre la renta, de conformidad con la Ley que lo regula y de acuerdo a la interpretación que de éste han realizado los órganos jurisdiccionales federales?

Respuesta: En la Ley del impuesto sobre la Renta respecto del objeto gravable de los ingresos que percibe una persona moral, se establece lo siguiente:

Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 551 -

2

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

2.- Dirá el perito, ¿qué es una fusión desde el punto de vista contable?

Respuesta: En las Normas de Información Financiera en el boletín B-7 se establece que la fusión es la figura legal de una adquisición de negocios en la que dos o más empresas se integran entre sí, disolviéndose una o algunas, o todas las que se fusionan creándose una nueva entidad legal.

3.- Dirá el perito, ¿si el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, contemplaba expresamente como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal la fusión de dos o más sociedades o personas morales pertenecientes a dicho régimen especial y bajo qué condiciones o presupuesto legales?

Respuesta: El artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 señala que en el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo, por lo que en caso de que las sociedades que no sean absorbidas por otras controladas o por la controladora se considera que hay desincorporación del régimen de consolidación fiscal.

4.- Dirá el perito, en relación directa con la pregunta que antecede, ¿si expresamente el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, preveía como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, el caso en el que la empresa resultante de la fusión de sociedades se mantenía dentro del mencionado régimen especial de tributación, procediendo en su caso, a citar de manera textual la parte normativa que expresamente contemplaba el supuesto de referencia?

Respuesta: El artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 señala respecto de la fusión de sociedades:

"En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo."

3

Derivado de lo anterior se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo, por lo que en caso de que las sociedades que no sean absorbidas por otras controladas o por la controladora se considera que hay desincorporación del régimen de consolidación fiscal bajo las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001.

5.- En caso de que la respuesta que antecede no fuese afirmativa, dirá el perito, ¿cuáles eran las razones fiscales y/o legales que habrían motivado el no considerar como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal el caso antes referido?

Respuesta: Como se mencionó anteriormente, el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 señala respecto de la fusión de sociedades:

"En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo."

Derivado de lo anterior se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo, por lo que en caso de que las sociedades que no sean absorbidas por otras controladas o por la controladora se considera que hay desincorporación del régimen de consolidación fiscal bajo las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001.

6.- Dirá el perito, si bajo su consideración los supuestos de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, respecto del caso de la fusión, contemplados en el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, fueron trasladados al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del 1, de enero de 2002?, precisando las similitudes y diferencias al respecto, considerando el contenido de ambos artículos de manera comparativa.

Respuesta: En relación a los supuestos de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, respecto del caso de la fusión, el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 menciona:

"En el caso de fusión de sociedades, se considera que no existe desincorporación cuando la controlada que se disuelve sea absorbida totalmente por otra u otras controladas de la misma controladora o en los casos en que la controladora fusione a una controlada del mismo grupo."

Al respecto el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del 1 de enero de 2002 señala:

"En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación."

De lo anterior se observa que el tratamiento de la desincorporación de sociedades por fusión fue modificado a partir del ejercicio 2002 para que sea considerado el supuesto de desincorporación de sociedades cuando la sociedad controladora desaparezca con motivo de la fusión.

7.- Dirá el perito, ¿cuáles son los efectos fiscales y financieros de una fusión de empresas?

Respuesta: En mi opinión considero que los principales efectos fiscales y financieros de una fusión de sociedades son los siguientes:

- Transmisión del patrimonio de la sociedad fusionada a la sociedad fusionante.
- El periodo del ejercicio fiscal de la fusionada terminará a la fecha que se lleve a cabo la fusión.
- Las pérdidas fiscales de la fusionada no podrán ser transmitidas como consecuencia de la fusión.
- Se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas cuando éstas desaparezcan con motivo de la fusión.
- El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse a otra u otras sociedades.
- El saldo de la cuenta de capital de aportación se deberá transmitir a las sociedades que surjan o que subsistan con motivo de la fusión.
- La sociedad fusionada debe registrar las operaciones que conducen a la fusión como el registro del cierre de los libros contables, saldando las cuentas de activo, pasivo y capital, cuentas de depreciaciones y amortizaciones con sus respectivas cuentas asociadas.

- La sociedad fusionante debe registrar las operaciones que resultan de la fusión de la sociedad fusionada a su Activo Pasivo y Capital agregando los valores de los activos, pasivos y capital de la sociedad fusionada.
- Las implicaciones financieras en ambos casos corresponden con la transmisión del patrimonio de la sociedad fusionada a la sociedad fusionante.

8.- Dirá el perito, ¿en qué consiste la desincorporación del régimen de consolidación fiscal?, desde el punto de vista contable.

Respuesta: De conformidad con las Normas de Información Financiera, no se establecen lineamientos específicos para la desincorporación del régimen de consolidación fiscal de la entidad. En términos generales el efecto principal recae en el resultado fiscal de las entidades afectadas.

9.- Dirá el perito, ¿si conforme a la aplicación estricta del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1. de enero de 2002, se puede determinar la existencia expresa de disposición normativa que prevea la desincorporación del régimen de la consolidación fiscal en el supuesto de la fusión de dos o más sociedades que tributen bajo dicho régimen y cuya sociedad resultante se mantenga tributando de manera consolidada?, debiendo señalar en su caso, los motivos de su respuesta.

Respuesta: El artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del 1, de enero de 2002 señala:

"En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación."

De lo anterior se comprende que existe disposición normativa expresa para la desincorporación de sociedades del régimen de consolidación fiscal en el supuesto de la fusión de sociedades que desaparezcan con motivo de la fusión, sin hacer mención de la condición que tenga la sociedad resultante de la fusión.

10.- Dirá el perito, ¿si contable y/o financieramente, en una fusión de sociedades que consolidan, la sociedad fusionada necesariamente debe de salir de la consolidación fiscal?

Respuesta: Como se mencionó anteriormente, de conformidad con las Normas de Información Financiera, no se establecen lineamientos específicos para la



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 553 -

6

desincorporación del régimen de consolidación fiscal de la entidad. En términos generales el efecto principal recae en el resultado fiscal de las entidades afectadas.

En el caso particular de la fusión de las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] sociedades controladas por [REDACTED] de la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que en la operación de fusión las fusionadas dejaron de existir al fusionarse con la sociedad [REDACTED] la cual se aprecia como una entidad jurídica distinta de las sociedades fusionadas ahora extintas.

Derivado de lo anterior, considero que resultan desincorporadas de la consolidación fiscal de [REDACTED] y [REDACTED] las sociedades [REDACTED]

De acuerdo con la documentación revisada en el expediente de la Actora, en el dictamen fiscal del ejercicio 2007, el documento Anexo 34 Empresas que Consolidan Fiscalmente respecto del ejercicio 2007 se observó que la sociedad [REDACTED] fue incluida como sociedad controlada y por lo que se considera que se determinó tributar bajo el régimen de la consolidación fiscal.

11.- Dirá el perito, ¿cuáles son los efectos contables y/o financieros, en una fusión de sociedades que consolidan, tanto en el supuesto de que la sociedad resultante de la fusión ya no continúe consolidando como en el supuesto de que lo continúe haciendo? Debiendo señalar con precisión las similitudes o diferencias más representativas en ambos supuestos.

Respuesta: En mi opinión los efectos contables en una fusión de sociedades tanto en el supuesto de que la sociedad resultante de la fusión ya no continúe consolidando como en el supuesto de que lo continúe haciendo consisten principalmente en lo siguiente:

La sociedad fusionada debe registrar las operaciones que conducen a la fusión como el registro del cierre de los libros contables, saldando las cuentas de activo, pasivo y capital, cuentas de depreciaciones y amortizaciones con sus respectivas cuentas asociadas.

La sociedad fusionante debe registrar las operaciones que resultan de la fusión de la sociedad fusionada a su Activo Pasivo y Capital agregando los valores de los activos, pasivos y capital de la sociedad fusionada.

7

Las implicaciones financieras en ambos casos corresponden con la transmisión del patrimonio de la sociedad fusionada a la sociedad fusionante.

12.- Dirá el perito, ¿si la sociedad fusionante [REDACTED] una vez realizada la fusión, continuó o no, tributando bajo el régimen de la consolidación fiscal?, debiendo precisar los motivos y documentales en los que se apoya su respuesta.

Respuesta: De la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que en la operación de fusión las fusionadas dejaron de existir al fusionarse con la sociedad [REDACTED] la cual se aprecia como una entidad jurídica distinta de las sociedades fusionadas ahora extintas.

De acuerdo con la documentación revisada en el expediente de la Actora, en el dictamen fiscal del ejercicio 2007, en el documento Anexo 34 Empresas que Consolidan Fiscalmente respecto del ejercicio 2007 se observó que la sociedad [REDACTED] fue incluida como sociedad controlada y por lo que se considera tributo bajo el régimen de la consolidación fiscal.

13.- Dirá el perito, ¿si en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, es válido considerar que la desincorporación del régimen de consolidación fiscal de empresas controladas fusionadas se genera en el momento en que la fusión surte sus efectos legales?

Respuesta: El artículo 71 noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006 establece lo siguiente:

"En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión."

Derivado de lo anterior, se considera que la desincorporación del régimen de consolidación fiscal de empresas controladas fusionadas se genera en el momento en que la fusión se realiza.

14.- Dirá el perito, en términos del artículo 71, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, ¿cuál es el monto que la empresa controladora se encuentra obligada a sumar o restar a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior al que se efectuó la fusión: a) el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar por parte de sus empresas

controladas fusionadas al momento de efectuarse la fusión o b) el monto actualizado de las pérdidas pendientes de disminuir al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se genera la desincorporación?, debiendo en su caso, exponer los motivos para asumir su conclusión.

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el artículo 71, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006 mismo que señala:

"La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley."

El artículo 68 fracción I, primer párrafo, inciso b, del mismo ordenamiento señala lo siguiente:

"b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda

de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate."

El artículo 71, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento señala lo siguiente:

"En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, éstas se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate."

Considerando las disposiciones señaladas anteriormente, el monto que la empresa controladora se encuentra obligada a sumar o restar a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior al que se efectuó la fusión es el monto de las pérdidas pendientes de disminuir actualizadas al cierre del ejercicio inmediato anterior al evento de desincorporación.

15.- Conforme a la respuesta anterior, dirá el perito a qué ejercicio(s) correspondían las pérdidas fiscales pendientes de amortizar que [REDACTED] se encontraba obligada a sumar o restar a su utilidad o pérdida fiscal consolidada.

Respuesta: Considerando las disposiciones señaladas anteriormente, y tomando en cuenta que la fusión se llevó a cabo el 18 de octubre de 2007, las pérdidas pendientes de disminuir y en su caso actualizadas al cierre del ejercicio inmediato anterior al evento de desincorporación, son las pérdidas pendientes de disminuir al cierre del ejercicio 2006, tanto las pérdidas ocurridas en el ejercicio 2006 como las ocurridas en ejercicios anteriores que tuvieran derecho a amortizar las sociedades que se desincorporan del régimen de consolidación fiscal.

16.- Dirá el perito, si es correcto señalar que la fecha en que se desincorporaron las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] por haberse fusionado con la controlada [REDACTED] fue el 18 de octubre de 2007?, debiendo precisar los motivos y documentales en los que se apoya su respuesta.

Respuesta: De la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que las sociedades [REDACTED] y [REDACTED]



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 555 -

10

llevaron a cabo la fusión de sus entidades el 18 de octubre de 2007 según instrumento notarial número 36,446 volumen 88°, Notaría número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino; por lo que se considera que la fecha en que se desincorporaron las sociedades controladas y fue el 18 de octubre de 2007.

17.- Dirá el perito, en qué ejercicio fiscal se generaron las pérdidas fiscales que amortizaron las sociedades controladas y al haberse fusionado con la controlada

Respuesta: De la lectura a los dictámenes fiscales del ejercicio 2007 presentados por las sociedades controladas se conoció que las sociedades amortizaron pérdidas fiscales en el resultado del ejercicio 2007 según el anexo 20 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores de la siguiente forma:

Pérdidas fiscales actualizadas amortizadas en ejercicio 2007

Ejercicio		
2000		51,022,132.00
2001		43,763,023.00
2002	102,369,035.00	136,322,501.00
2003	375,301,497.00	22,780.00
2006		1,875,043,782.00
Total	477,670,532.00	2,106,174,218.00

18.- Dirá el perito, ¿cuál es el monto de las pérdidas fiscales que generaron las sociedades controladas fusionadas y en el ejercicio fiscal de 2006?, debiendo precisar los motivos y documentales en los que se apoya su respuesta.

Respuesta: De la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que las sociedades controladas generaron pérdidas en el ejercicio 2006 como sigue:

11

Ejercicio		
2006	371,967,597.00	1,811,604,803.00

19.- Dirá el perito, ¿si las sociedades controladas fusionadas aplicaron las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a la fecha de la fusión?, debiendo precisar el monto de dichas pérdidas y el monto de la utilidad fiscal frente a la que se habrían aplicado las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, así como las documentales de las que habría obtenido la información respectiva.

Respuesta: De la lectura a los dictámenes fiscales del ejercicio 2007 presentados por las sociedades controladas se conoció que las sociedades amortizaron pérdidas fiscales en el resultado del ejercicio 2007 según el anexo 20 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores de la siguiente forma:

Pérdidas fiscales actualizadas amortizadas en ejercicio 2007

Ejercicio		
2000		51,022,132.00
2001		43,763,023.00
2002	102,369,035.00	136,322,501.00
2003	375,301,497.00	22,780.00
2006		1,875,043,782.00
Total	477,670,532.00	2,106,174,218.00

De la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que las sociedades llevaron a cabo la fusión de sus entidades el 18 de octubre de 2007 según instrumento notarial número 36,446 volumen 88°, Notaría número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino; por lo que se considera que la desincorporaron las sociedades controladas y se llevó a cabo el 18 de octubre de 2007.

En el dictamen fiscal del ejercicio 2007 presentado por la sociedad [REDACTED] se manifestó utilidad fiscal por el ejercicio 2007 en cantidad de \$ 2,106,174,218.00 a la cual se aplicaron las pérdidas fiscales en cantidad de \$ 2,106,174,218.00

Pérdidas fiscales amortizadas en ejercicio 2007

Ejercicio	Importe Histórico	Importe Actualizado
2000	274,824,828.00	51,022,132.00
2001	34,147,710.00	43,763,023.00
2002	112,234,939.00	136,322,501.00
2003	19,529.00	22,780.00
2006	1,811,604,801.84	1,875,043,782.00
Total	2,232,831,807.84	2,106,174,218.00

Derivado de lo anterior, el monto de pérdidas fiscales que estaban pendientes de amortizar es de \$ 2,106,174,218.00 a la fecha en que se llevó a cabo la fusión y al cierre inmediato anterior a este evento.

De conformidad con el dictamen fiscal del ejercicio 2007 presentado por la sociedad [REDACTED] se manifestó utilidad fiscal por el ejercicio 2007 en cantidad de \$477,670,532.00 a la cual se aplicaron las pérdidas fiscales en cantidad de \$477,670,532.00

Pérdidas fiscales amortizadas en ejercicio 2007

Ejercicio	Importe Histórico	Importe Actualizado
2002	218,903,213.00	102,369,035.00
2003	371,967,597.00	375,301,497.00
Total	590,870,810.00	477,670,532.00

Derivado de lo anterior, el monto de pérdidas fiscales que estaban pendientes de amortizar es de \$477,670,532.00 a la fecha en que se llevó a cabo la fusión y al cierre inmediato anterior a este evento.

20.- Dirá el perito, ¿si es correcto señalar que al momento de efectuarse la fusión de las sociedades controladas fusionadas Soluciones Empresariales [REDACTED] y [REDACTED] ya no existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar por ninguna de las dos sociedades?, debiendo precisar los motivos de su conclusión así como las documentales que habría consultado para emitir su respuesta.

Respuesta: En mi opinión considero que al momento de efectuarse la fusión, esto es el 18 de octubre de 2007, de las sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] si existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar y que dichas sociedades aplicaron las pérdidas pendientes de amortizar posteriormente, hasta que concluyó el cierre del ejercicio 2007, de acuerdo con la documentación revisada del expediente de la Actora y el análisis siguiente:

De la lectura a los dictámenes fiscales del ejercicio 2007 presentados por las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] se conoció que las sociedades amortizaron pérdidas fiscales en el resultado del ejercicio 2007 según el anexo 20 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores de la siguiente forma:

Pérdidas fiscales actualizadas amortizadas en ejercicio 2007

Ejercicio	[REDACTED]	[REDACTED]
2000		51,022,132.00
2001		43,763,023.00
2002	102,369,035.00	136,322,501.00
2003	375,301,497.00	22,780.00
2006		1,875,043,782.00
Total	477,670,532.00	2,106,174,218.00

De la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] llevaron a cabo la fusión de sus entidades el 18 de octubre de 2007 según instrumento notarial número 36,446 volumen 88°, Notaría número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino; por lo que se considera que la desincorporaron las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] se lleva a cabo el 18 de octubre de 2007.

En el dictamen fiscal del ejercicio 2007 presentado por la sociedad [REDACTED] se manifestó utilidad fiscal por el ejercicio 2007 en cantidad de \$ 2,106,174,218.00 a la cual se aplicaron las pérdidas fiscales en cantidad de \$ 2,106,174,218.00



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 557 -

14

Pérdidas fiscales amortizadas en ejercicio 2007

Ejercicio	Importe Histórico	Importe Actualizado
2000	274,824,828.00	51,022,132.00
2001	34,147,710.00	43,763,023.00
2002	112,234,939.00	136,322,501.00
2003	19,529.00	22,780.00
2006	1,811,604,801.84	1,875,043,782.00
Total	2,232,831,807.84	2,106,174,218.00

Derivado de lo anterior, el monto de pérdidas fiscales que estaban pendientes de amortizar es de \$ 2,106,174,218.00 a la fecha en que se llevó a cabo la fusión y al cierre inmediato anterior a este evento.

En el dictamen fiscal del ejercicio 2007 presentado por la sociedad [REDACTED] se manifestó utilidad fiscal por el ejercicio 2007 en cantidad de \$477,670,532.00 a la cual se aplicaron las pérdidas fiscales en cantidad de \$477,670,532.00

Pérdidas fiscales amortizadas en ejercicio 2007

Ejercicio	Importe Histórico	Importe Actualizado
2002	218,903,213.00	102,369,035.00
2003	371,967,597.00	375,301,497.00
Total	590,870,810.00	477,670,532.00

Derivado de lo anterior, el monto de pérdidas fiscales que estaban pendientes de amortizar es de \$477,670,532.00 a la fecha en que se llevó a cabo la fusión y al cierre inmediato anterior a este evento.

Por tanto, considero que no es correcto señalar que al momento de efectuarse la fusión de las sociedades controladas fusionadas [REDACTED] y [REDACTED] ya no existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar por ninguna de las dos sociedades.

21. Dirá el perito, ¿Si existe disposición expresa en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 o en la vigente en 2007, en la que se establezca como una obligación fiscal a cargo de las empresas controladoras, que ante la fusión de empresas controladas deban adicionarse las utilidades fiscales de dichas empresas contra las que fueron

15

amortizadas las pérdidas fiscales de ejercicios fiscales anteriores, en el ejercicio en el que se llevó a cabo la fusión de sociedades y si la adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al momento de la fusión o la adición de las utilidades contra las que se estarían amortizando dichas pérdidas constituye un supuesto de elección sometidos al libre al arbitrio de las empresas controladoras o de las autoridades fiscales?, debiendo en su caso, señalar de manera textual la parte normativa que así lo establezca.

Respuesta: De conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2007 en relación a la consolidación fiscal de sociedades, no existe disposición expresa que establezca como una obligación fiscal a cargo de las empresas controladoras, que ante la fusión de empresas controladas deban adicionarse las utilidades fiscales de dichas empresas contra las que fueron amortizadas las pérdidas fiscales de ejercicios fiscales anteriores, en el ejercicio en el que se llevó a cabo la fusión de sociedades. Respecto de la adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al momento de la fusión o la adición de las utilidades contra las que se estarían amortizando dichas pérdidas, el artículo 71 párrafos segundo y noveno de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 establecen lo siguiente:

Párrafo segundo:

"La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos séptimo y octavo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3889. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley."

Párrafo noveno;

"En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión."

Derivado de lo anterior, se comprende que la sociedad controladora tiene la obligación de reconocer los efectos de la desincorporación de sociedades controladas al cierre del ejercicio inmediato anterior que en el caso en concreto son las sociedades controladas que desaparecieron con motivo de la fusión y entonces sumar o restar a la utilidad fiscal consolidada o pérdida fiscal consolidada el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores que las sociedades controladas tenían derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de las sociedades que se desincorporan para determinar el resultado fiscal consolidado; por lo que no se considera que se trata de una opción a elegir por la Contribuyente sino una obligación establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

(...)

30.- Dirá el perito la razón de su dicho.

Respuesta: Los razonamientos vertidos en el presente cuestionario fueron realizados con base a mi leal saber y entender de las disposiciones citadas y en la documentación provista en el expediente de la Actora.

(...)"

CUESTIONARIO PROPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

24

CUESTIONARIO PROPUESTO POR LA AUTORIDAD

1.- Dirá el perito, del análisis a la contabilidad, documentación y papeles de trabajo del expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, ¿Qué Ley del Impuesto sobre la Renta vigente resulta aplicable, respecto de la fusión de sociedades que se realizó el 18 de octubre de 2007, entre las empresas [REDACTED] y [REDACTED] con la contribuyente [REDACTED]?

Respuesta: De acuerdo con la documentación revisada en el expediente de la Actora, considero que la Ley del Impuesto sobre la Renta que resulta aplicable en relación a la fusión que realizaron las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] es la que corresponde al año de 2007.

2.- Dirá el perito, de la revisión y análisis que efectúe al expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, si las empresas [REDACTED] (antes [REDACTED]), [REDACTED] y [REDACTED] interpusieron algún medio de defensa en contra del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, así como del 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, y si éste fue resuelto a su favor, indicando si la resolución quedó firme.

Respuesta: De acuerdo con la documentación revisada en el expediente de la Actora, no se observó que las empresas [REDACTED] (antes [REDACTED]), [REDACTED] y [REDACTED]

interpusieran algún medio de defensa en contra del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, así como del 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

3.- Dirá el perito, del análisis a la contabilidad, documentación y papeles de trabajo del expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, si por el periodo del 1 de enero al 30 de octubre de 2007, las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] fueron sociedades controladas de la contribuyente [REDACTED]?



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 559 -

25

[REDACTED] (antes [REDACTED]), y si éstas, al momento de su fusión con la empresa [REDACTED] jurídicamente se ubicaron en el supuesto establecido en el párrafo noveno del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

Respuesta: De la lectura al dictamen fiscal del ejercicio 2006 presentado por la sociedad controladora [REDACTED] ahora [REDACTED] en el anexo 28 EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE – INFORMACIÓN SOBRE CONSOLIDACIÓN, se conoció que las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] fueron incluidas como sociedades controladas de la sociedad [REDACTED].

Así mismo, de la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] llevaron a cabo la fusión de sus entidades el 18 de octubre de 2007 según instrumento notarial número 36,446 volumen 88°, Notaria número ciento cincuenta y cinco del Distrito Federal Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino; por lo que se considera que la desincorporaron de las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] de la controladora [REDACTED] se llevó a cabo el 18 de octubre de 2007.

De acuerdo con lo establecido en el párrafo noveno del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007:

“En el caso de fusión de sociedades, se considera que existe desincorporación de las sociedades controladas que desaparezcan con motivo de la fusión. En el caso de que la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad controladora, se considera que existe desconsolidación.”

De la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que en la fusión llevada a cabo las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] desaparecen y subsiste la sociedad [REDACTED].

Considero que debido a que las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] al fusionarse

26

desaparecieron, se ubicaron en el supuesto establecido en el párrafo noveno del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007 mencionado anteriormente que señala la desincorporación de las sociedades del régimen de consolidación fiscal.

4.- Dirá el perito, de la revisión que efectúe al expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, el fundamento legal aplicable, que le permitió a la contribuyente [REDACTED] (antes [REDACTED]), no considerar en la utilidad fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] considerando que las mismas se fusionaron el 31 de octubre de 2007 con la empresa [REDACTED].

Respuesta: De acuerdo con mi leal saber y entender de las disposiciones fiscales aplicables y de la revisión efectuada al expediente de la Actora, considero que no hay fundamento legal aplicable, que le permitiera a la contribuyente [REDACTED] (antes [REDACTED]), no considerar en la utilidad fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de las sociedades controladas [REDACTED] y [REDACTED] con motivo de la fusión que realizaron.

(...)

7.- Dirá el perito la razón de su dicho.

Respuesta: Los razonamientos vertidos en el presente cuestionario fueron realizados con base a mi leal saber y entender de las disposiciones citadas y en la documentación provista en el expediente de la Actora.



Por lo expuesto a ustedes C. C. Magistrados atentamente pido:

Se tenga por presentado este dictamen que se emite de acuerdo a los conocimientos, métodos y técnicas en materia contable y con apego a las Normas de Información Financiera (antes Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. , los cuales rigen la profesión contable.

PROTESTO LO NECESARIO


C. P. 
México D. F. a 27 de abril de 2016.

Con fundamento en el artículo 43 fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en este acto Ratifico el presente dictamen pericial contable, mismo que consta en 28 fojas útiles y que viene mi firma autógrafa al final del mismo.


C. P. 
México D. F. a 27 de abril de 2016.

Por principio, cabe señalar que los peritos de las partes y la perito tercero en discordia, asentaron la razón de su dicho, en las respuestas correspondientes a las preguntas 30 del cuestionario de la accionante y 7 del cuestionario dela demandada, señalando que lo hicieron con base en su leal saber y entender, así como, en las disposiciones fiscales aplicables y documentación que obra en el expediente a nombre de la contribuyente actora, como la contabilidad, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la demandante.

Ahora bien, es de precisar que la actora ofreció como prueba la pericial contable, a efecto de demostrar que ***** (hoy actora), no debía adicionar las pérdidas fiscales generadas por sus empresas controladas al momento de la fusión el 31 (sic) de octubre de 2007, así como que tampoco debía incluir en la utilidad fiscal consolidada el inventario acumulable de sus empresas controladas.

Así, es el caso que las preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14 y 21 del cuestionario de la actora, así como la 1, 3 y 4 del cuestionario planteado por la autoridad demandada, van encaminadas a demostrar la interpretación del texto de la Ley, en el caso del artículo 57-J de la ley abrogada el 31 de diciembre de 2001 y el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, como se constata de los cuestionamientos de la accionante y de la autoridad, las respuestas a los mismos formulados por los peritos del actor, de la autoridad y de la perito tercero, designada por este Tribunal, cuando esa interpretación sólo puede derivar del texto de la ley y no de la opinión de un contador público.

Ello, en virtud de que la prueba pericial contable, debe referirse a la técnica que sistemática y estructuralmente produce información cuantitativa expresada en unidades monetarias, sobre las situaciones económicas identificables y cuantificables que realiza una entidad, lo cual se logra a través de un proceso de captación de las operaciones que midan, clasifiquen, registren y resuman con claridad, tales aseveraciones a fin de producir información.

Mientras que, corresponde al juzgador conocer el derecho y aplicarlo atendiendo al texto e interpretación de la ley y de las normas a la situación concreta del caso; en consecuencia, la prueba pericial en materia contable no constituye el medio probatorio idóneo para acreditar o sustentar el alcance de una norma jurídica, pues esto último no corresponde a las cuestiones técnicas contables y en esa razón las respuestas del perito en materia contable enfocadas a ese fin resultarán inatendibles.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número VI-P-SS-496, del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, publicada en su Revista en el mes de abril de 2011, la cual a la letra señala lo siguiente.

“PRUEBA PERICIAL EN MATERIA CONTABLE. NO ES IDÓNEA PARA DEMOSTRAR EL ALCANCE DEL TEXTO DE LA LEY.- Lo anterior obedece a la naturaleza de las pruebas periciales, pues éstas deben versar sobre cuestiones eminentemente técnicas. **En**

el caso de una prueba pericial contable, esta debe referirse a la técnica que sistemática y estructuralmente produce información cuantitativa expresada en unidades monetarias, sobre las situaciones económicas identificables y cuantificables que realiza una entidad, lo cual se logra a través de un proceso de captación de las operaciones que midan, clasifiquen, registren y resuman con claridad, tales aseveraciones a fin de producir información. Por otra parte, corresponde al juzgador conocer el derecho y aplicarlo atendiendo al texto e interpretación de la ley y de las normas a la situación concreta del caso. En consecuencia, la prueba pericial en materia contable no constituye el medio probatorio idóneo para acreditar o sustentar el alcance de una norma jurídica, pues esto último no corresponde a las cuestiones técnicas contables y en esa razón las respuestas del perito en materia contable

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 40. Abril 2011. p. 18”

(El énfasis es nuestro)

Asimismo, se aclara que la valoración de la prueba pericial queda al prudente arbitrio del Juzgador, conforme a lo dispuesto en el artículo 46, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 43 de la citada Ley, tal y como lo sostuvo el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en la Jurisprudencia número **VII-P-SS-198**, publicada en su revista en el mes de septiembre de 2014, la cual es del tenor siguiente:

“VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PERICIALES.- QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.- El artículo 46, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que la valoración de la prueba pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación de la Sala; por su parte, el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone que el valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del Tribunal. En consecuencia, aun cuando en el procedimiento contencioso administrativo se hubiere admitido la prueba pericial ofrecida por la actora y por su parte el perito de la demandada y el perito tercero en discordia hubieren formulado sus dictámenes correspondientes, **la valoración de dicha probanza queda al prudente arbitrio del juzgador, atendiendo a la litis planteada y a los hechos que se pretendan demostrar con la misma que debe ser la idónea y versar sobre las cuestiones técnicas propias de la pericial de que se trate**

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 38. Septiembre 2014. p. 101”

(El énfasis es nuestro)

En efecto, del análisis realizado por esta Juzgadora a los dictámenes antes digitalizados se desprende que por lo que hace a las respuestas correspondientes a las **preguntas números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14 y 21**, del cuestionario de la actora, así como la **1, 3 y 4** del cuestionario planteado por la autoridad demandada, las mismas no se tomaran en cuenta, en virtud de que van encaminadas a interpretar el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta, abrogada el 31 de diciembre de 2001 y el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, lo cual únicamente corresponde a este Órgano Colegiado, por tratarse de cuestiones de derecho y no así de un conocimiento técnico, mismas que señalan:

PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA PARTE ACTORA

1.- Dirá el perito, ¿cuál es el objeto gravable del impuesto sobre la renta, de conformidad con la Ley que lo regula y de acuerdo a la interpretación que de éste han realizado los órganos jurisdiccionales federales?

3.- Dirá el perito, ¿si el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, contemplaba expresamente como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal la fusión de dos o más sociedades o personas morales pertenecientes a dicho régimen especial y bajo qué condiciones o presupuestos legales?

4.- Dirá el perito, en relación directa con la pregunta que antecede, ¿si expresamente el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, preveía como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, el caso en el que la empresa resultante de la fusión de sociedades se mantenía dentro del mencionado régimen especial de tributación, procediendo en su caso, a citar de manera textual la parte normativa que expresamente contemplaba el supuesto de referencia?

5.- En caso de que la respuesta que antecede no fuese

afirmativa, dirá el perito, ¿cuáles eran las razones fiscales y/o legales que habrían motivado el no considerar como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal el caso antes referido?

6.- Dirá el perito, si bajo su consideración los supuestos de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, respecto del caso de la fusión, contemplados en el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, fueron trasladados al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2002?, precisando las similitudes y diferencias al respecto, considerando el contenido de ambos artículos de manera comparativa.

7.- Dirá el perito, ¿cuáles son los efectos fiscales y financieros de una fusión de empresas?

9.- Dirá el perito, ¿si conforme a la aplicación estricta del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2002, se puede determinar la existencia expresa de disposición normativa que prevea la desincorporación del régimen de la consolidación fiscal en el supuesto de la fusión de dos o más sociedades que tributen bajo dicho régimen y cuya sociedad resultante se mantenga tributando de manera consolidada?, debiendo señalar en su caso, los motivos de su respuesta.

13.- Dirá el perito, ¿si en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, es válido considerar que la desincorporación del régimen de consolidación fiscal de empresas controladas fusionadas se genera en el momento en que la fusión surte sus efectos legales?

14.- Dirá el perito, en términos del artículo 71, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, ¿cuál es el monto que la empresa controladora se encuentra obligada a sumar o restar a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada del ejercicio inmediato anterior al que se efectuó la fusión: a) el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar por parte de sus empresas controladas fusionadas al momento de efectuarse la fusión o b) el monto actualizado de las pérdidas pendientes de disminuir al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se genera la desincorporación?, debiendo en su caso, exponer los motivos para asumir su conclusión.

21.- Dirá el perito, ¿si existe disposición expresa en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 o en la vigente en 2007, en la que se establezca como una obligación fiscal a cargo de las empresas controladoras, que ante la fusión de empresas controladas deban adicionarse las utilidades fiscales de dichas empresas contra las que fueron amortizadas las pérdidas fiscales de ejercicios fiscales anteriores, en el ejercicio en el que se llevó a cabo la fusión de sociedades y si la adición de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al momento de la fusión o la adición de las utilidades contra las que se estarían amortizando dichas pérdidas constituye un supuesto de elección sometidos al libre arbitrio de las empresas controladoras o de las autoridades fiscales?, debiendo en su caso, señalar de manera textual la parte normativa que así lo establezca.

PREGUNTAS PROPUESTAS POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

1.- Dirá el perito, ¿cuál es el objeto gravable del impuesto sobre la renta, de conformidad con la Ley que lo regula y de acuerdo a la interpretación que de éste han realizado los órganos jurisdiccionales federales?

3.- Dirá el perito, ¿si el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, contemplaba expresamente como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal la fusión de dos o más sociedades o personas morales pertenecientes a dicho régimen especial y bajo qué condiciones o presupuesto legales?.

4.- Dirá el perito, en relación directa con la pregunta que antecede, ¿si expresamente el artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, preveía como supuesto de desincorporación del régimen de consolidación fiscal, el caso en el que la empresa resultante de la fusión de sociedades se mantenía dentro del mencionado régimen especial de tributación, procediendo en su caso, a citar de manera textual la parte normativa que expresamente contemplaba el supuesto de referencia?.

Ahora bien, por lo que hace a las respuestas de la **pregunta número 2** del cuestionario planteado por la actora, los peritos de las partes y el tercero en discordia coinciden en que de acuerdo con el inciso O) del párrafo 9 de la Norma de Información Financiera B-7, el término fusión se encuentra definido de la siguiente manera "es la figura legal de adquisición por medio de la cual se disuelven algunas entidades legales, cuyos activos netos pasan a ser propiedad de otra entidad.

Sin embargo, si bien es cierto que los peritos que desahogaron la pericial en el presente juicio son contestes en la respuesta de referencia, también, lo es que con la misma no se demuestra que la parte actora no se encuentra obligada a adicionar las pérdidas fiscales a las que tenían derecho sus empresas controladas al momento de la fusión el 18 de octubre de 2007, por tanto la respuesta a la pregunta número 2, se desestima por no ser idónea para acreditar la pretensión de la demandante.

Por otra parte, en relación a la **pregunta señalada con el numeral 8**, tanto los peritos de las partes, como la tercero en discordia señalaron que desde el punto de vista contable la desincorporación fiscal no se tendría efecto alguno, ya que es puramente fiscal, por lo que no afecta en ninguna manera a lo contable, pues de conformidad con las Normas de Información Financiera, no establece lineamientos específicos para la desincorporación.

En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional considera que dicha respuesta tampoco incide en la determinación de la autoridad fiscal respecto a que la accionante fue omisa en sumar a la utilidad fiscal consolidada las pérdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, sus sociedades controladas ***** ** ***** **** ** ***** y ***** ** ***** ***** **** ** ***** en cantidad de \$1,867'583,390.00 y \$383'461,396, respectivamente, que en suma ascienden a \$2,251'044,786.00 pérdidas fiscales pendientes de disminuir actualizadas a diciembre de 2006, derivadas de la fusión celebrada el 18 de octubre de 2007, ya que lo único que aporta es que la desincorporación no tienen efectos contables.

En relación a las respuestas dadas a la **pregunta número 10**, la perito de la autoridad demandada y la tercero en discordia, señalaron esencialmente que derivado de la fusión de las empresas *****



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 567 -

***** y ***** dejaron de existir al fusionarse con la empresa ***** por lo que ya no existen en la vida jurídica, donde la que tributa bajó el régimen de incorporación fiscal es precisamente la sociedad fusionante.

Mientras que el perito de la parte actora, señaló al respecto que “ni contable ni financieramente la sociedad fusionada debe salir del régimen de consolidación en la medida en que la sociedad fusionante esté incluida dentro del mismo resultado consolidado ya que de forma reiterativa, en el caso de fusión de sociedades, los activos netos de la sociedad fusionada pasan a ser propiedad de dicha sociedad fusionante; es decir, que existe la sucesión universal del activo y del pasivo de la sociedad fusionada en favor de la fusionante, y en caso que ambas empresas fueran parte del mismo resultado consolidado, tanto los activos/derechos como los pasivos/obligaciones seguirían siendo parte de dicha consolidación”.

Sin embargo, tal y como quedó precisado con anterioridad en el sistema jurídico mexicano la fusión supone una forma de disolución sin liquidación, porque el periodo de liquidación es incompatible con el hecho de que, a virtud de la fusión la sociedad que subsiste o la que resulte de la fusión se convierte en la nueva titular de los derechos y obligaciones de las fusionadas.

De tal suerte que la fusión tiene como efectos, entre otros que la sociedad fusionante o la que resulte es la nueva titular del patrimonio de las fusionadas y la extinción de las fusionadas, que implica la pérdida de su personalidad jurídica y patrimonio a partir de que surta efectos la fusión.

Por lo que, si las sociedades fusionadas no conservan esa personalidad jurídica, ello conllevaría a que la única que existe dentro del grupo de consolidación fiscal es la empresa a la que se funcionaron, es decir, ***** lo que nos lleva a determinar necesariamente que una vez fusionadas las empresas controladas ***** ya no existen en la vida jurídica, pues la única que subsiste es la diversa *****

En relación a las respuestas de los peritos, correspondientes a la **pregunta número 11**, el perito de la parte actora señaló que no existe ningún efecto contable y/o financiero en una fusión de sociedades que se consolidan, ya que en una fusión, el patrimonio de la fusionada pasaría a ser parte del patrimonio de la fusionante y como consecuencia, el patrimonio del Grupo seguiría siendo prácticamente el mismo, solo con un posible efecto en la parte minoritaria, en su caso de que continúe consolidando o no una sociedad.

Asimismo que, “en el supuesto en que la sociedad resultante de la fusión no forme parte del Grupo que consolida, existiría un efecto contable/financiero importante ya que dependiendo del patrimonio resultante de la sociedad fusionante, si el mismo es igual o mayor a XXX la misma debería de considerarse como parte del Grupo consolidado y si es menor dicha sociedad debería considerarse fuera del Grupo consolidado y por consiguiente restar al patrimonio consolidado el correspondiente a la sociedad fusionada que desapareció”.

Por su parte, la perito de la autoridad demandada señaló que son los mismos efectos contables y/o financieros tanto en el supuesto de que la sociedad resultante de la fusión ya no continúe consolidando como en el supuesto de que continúe haciéndolo.

Mientras que la perito tercero en discordia, señaló que los efectos contables en una fusión de sociedades tanto en el supuesto de que la sociedad resultante de la fusión ya no continúe consolidando como en el supuesto de que lo continúe haciendo tienen implicaciones financieras en ambos casos con la transmisión del patrimonio de la sociedad fusionada a la fusionante.

En relación a las respuestas que anteceden, esta Juzgadora considera que las mismas no inciden en la determinación de que la fusión realizada por las sociedades controladas ***** ** ***** ** y ***** sea una desincorporación o no y que en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, la empresa controladora debe sumar las pérdidas de éstas, como consecuencia de dicha desincorporación, pues tal obligación precisamente se señala en el precepto legal citado.

Ya que el caso en concreto, no se está haciendo referencia a la obligaciones de las empresas fusionante o de las fusionadas, sino de la sociedad controladora (*****), quien se insiste, en específico es quien se encuentra obligada a sumar las pérdidas a las que tenían derecho las sociedades ***** y ***** al fusionarse a ***** ello de conformidad con lo establecido en el multicitado artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007.

Por otra parte, en relación a la **pregunta número 12**, si bien es cierto la respuesta tanto de los peritos de las partes, como la de la perito tercero en discordia, coinciden al señalar que ***** después de la fusión con las sociedades ***** y ***** sigue tributando bajo el régimen de consolidación fiscal, también lo es que las mismas, de ninguna manera inciden en la determinación de este Órgano Colegiado, en cuanto a que la fusión de referencia originó una desincorporación de las empresas fusionadas, así como que en 2006 dichas empresas si tenían pérdidas por tanto, las debió haber sumado la accionante del juicio contencioso administrativo al rubro citado, en su calidad de empresa controladora, lo que no sucedió en la especie.

Por lo que, las respuestas de referencia no son idóneas para desvirtuar la omisión en la que incurrió la parte actora, como lo refirió la demandada.

En relación a las **preguntas números 15, 16, 17 y 18**, los peritos de las partes y la tercero en discordia, coincidieron con la determinación de esta Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, al señalar que efectivamente las pérdidas de las empresas fusionadas ***** y ***** correspondían al ejercicio 2006, en atención a que la desincorporación de las mismas se llevó a cabo el 18 de octubre de 2007.

Así como que, las pérdidas que amortizaron las empresas fusionadas de referencia se generaron en el ejercicio 2006 en cantidad de \$371'967,597.00 y \$1,811'604,803.00., de ahí que se corrobore la determinación a la que llegó este Órgano Colegiado y por ende, que la parte actora tenga la obligación de sumarlas a su utilidad fiscal consolidada, tal y como lo determinó la autoridad fiscal al momento de determinarle el crédito fiscal controvertido.

Por lo que hace a la **pregunta número 19** planteada por la demandante, el perito de la actora y la tercero en discordia señalaron esencialmente que las empresas desincorporadas aplicaron en el ejercicio 2007, las pérdidas fiscales pendientes por amortizar conforme a los dictámenes financieros de 2007 de la actora.

Mientras que la perito de la autoridad demandada señaló que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar no se efectuaron en la fecha en que se llevó a cabo la desincorporación de las empresas (18 de octubre de 2008), sino hasta el 31 de diciembre de 2007 y el 22 de julio de 2008, conforme a las declaraciones anuales presentadas a nombre de ***** y ***** respectivamente.

No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que la sociedad controladora (*****), debió reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato; es decir, en el 2006, ejercicio en el que debió sumar las pérdidas fiscales de las sociedades desincorporadas de la consolidación que tenían derecho al momento de su desincorporación, siendo que de la declaración complementaria presentada por la actora el 13 de agosto de 2010, en el apartado correspondiente a la desincorporación de controladas o desincorporación, en específico en el rubro de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de controladas y controladoras –suman-, no se advierte dato alguno.

Por lo que, toda vez que las empresas fusionadas contaban con pérdidas de ejercicios anteriores a su desincorporación (18 de octubre de 2007), en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007, debió sumarlas a su utilidad fiscal consolidada, lo que se insiste no sucedió en la especie.

En ese sentido, respecto a la **pregunta 20** planteada por la accionante, la perito de la autoridad y la tercero en discordia señalaron que al momento de efectuarse la fusión, de las sociedades fusionadas *****
***** ** ***** ** ***** y ***** ** ***** ***** ** ***** esto es el 18 de octubre de 2007, si existían pérdidas fiscales pendientes de amortizar y que dichas sociedades aplicaron las pérdidas pendientes de amortizar posteriormente, hasta que concluyó el cierre del ejercicio 2007, de acuerdo con la documentación revisada del expediente de la actora.

Mientras que el perito de la parte actora, señaló que al momento de efectuarse la fusión las sociedades controladas *****
***** ** ***** ** ***** y ***** ** ***** ***** ** ***** ya no tenían pérdidas fiscales pendientes de amortizar.

En ese sentido, esta Juzgadora coincide con la determinación de la perito de la demandada y la tercero en discordia, ya que tal y como quedó precisado con anterioridad, las empresas fusionadas *****
***** ** ***** ** ***** y ***** ** ***** ***** ** *****
***** contaban en 2006, con pérdidas fiscales en cantidades de \$1,811'604,801.84 y \$371'967,597.00, respectivamente.

Pérdidas con las que contaban al momento de fusionarse las empresas de referencia; es decir al 18 de octubre de 2007, por lo que, contrario a lo determinado por el perito de la accionante, las sociedades desincorporadas si tenían pérdidas fiscales pendientes de amortizar, mismas que debieron sumarse a la utilidad fiscal consolidada de la controladora hoy actora.

Ahora, en relación a la **pregunta número 2**, planteada por la autoridad demandada, los peritos de las partes y la tercero en discordia, señalaron que las empresas *****
***** ** ***** ** ***** y ***** ** ***** *****
***** no interpusieron ningún medio de defensa en contra del artículo 57-J de la ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, ni en contra del artículo 71 de la ley de la materia vigente en 2007.

Sin embargo, la pregunta realizada por la demandada no incide en la determinación de esta Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, toda vez que el hecho de que las empresas en cita no hayan controvertido las disposiciones legales de referencia, no significa que las haya consentido.

Lo anterior es así, en virtud de que tal y como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión número 2486/2011, tratándose de las cuestiones de consolidación fiscal, el régimen general es originariamente forzoso para todas las personas morales, mientras que para los grupos empresariales que reúnen los requisitos legales para ser considerados como controladoras y controladas, el régimen es optativo al general, lo cual de igual manera opera en el impuesto sobre la renta; de ahí que la aplicación de las disposiciones jurídicas 57-J de la ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 y 71 de la ley de la materia vigente en 2007, se origina de un acto voluntario que realiza el gobernado, y que consiste en la decisión de obtener el beneficio de tributar bajo el esquema del régimen de consolidación fiscal; esto es, que el consentimiento de la norma deriva de que la hoy recurrente controladora permanece voluntariamente en el régimen de consolidación fiscal, no así por no haber controvertido dichos preceptos legales.

De ahí, que la pregunta en cuestión, no incida en la determinación de esta Juzgadora.

En consecuencia, al no haber demostrado la accionante la indebida aplicación e interpretación del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007, se concluye que la resolución impugnada, así como la originalmente recurrida, no contravienen las garantías de legalidad, seguridad e inviolabilidad del domicilio, al estar las mismas ajustadas a derecho en términos del artículo 16 Constitucional, 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, por tanto prevalece la legalidad y validez de las mismas, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 573 -

QUINTO.- Este Órgano Colegiado procede al análisis y resolución de los conceptos de impugnación **segundo, tercero, cuarto y quinto** de la demanda, en los cuales la actora argumenta lo siguiente:

DEMANDA

SEGUNDO. VIOLACIÓN DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS AL ENCONTRARSE INDEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS EN CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL DERIVAR DE UNA INCORRECTA APRECIACIÓN DE LOS HECHOS EN RELACIÓN A QUE SOBRE EL CONCEPTO LIQUIDADADO YA HABÍA COSA JUZGADA.

En el presente Concepto de Impugnación se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, al resolver que ya existe cosa juzgada en relación a la obligación de mi mandante en el ejercicio fiscal de 2006 de considerar en el cálculo de su resultado fiscal consolidado el inventario acumulable de sus sociedades controladas, específicamente [REDACTED]

Lo anterior, pues las autoridades demandadas parten de una incorrecta apreciación de los hechos y por tanto indebida aplicación de las disposiciones fiscales, específicamente pues mi mandante cuenta con una sentencia en la cual, no obstante se declaró la validez de la resolución impugnada en un tema similar, lo cierto es que sus efectos y consecuencias no son los que señalan las autoridades demandadas.

A. En primer lugar, solicito tener por reproducido como si a la letra se insertase lo expuesto en el apartado A. del Primer Concepto de Impugnación de la presente demanda de nulidad, en relación con las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, así como la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir.

B. Por otra parte, a efecto de evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, es necesario transcribir la parte conducente que causa agravio a mi mandante.

Al respecto, en la resolución contenida en el oficio 900-05-2013-48229, la autoridad demandada señala medularmente lo siguiente:

"Cabe mencionar que de conformidad con el primer párrafo del artículo 69 en correlación con el artículo 63 ambos del Código Fiscal de la Federación vigente, de los expedientes abiertos a nombre de [REDACTED] actualmente en la Administración General de Grandes Contribuyentes, se conoció que la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitió sentencia de fecha 01 de octubre de 2010 en la que reconoció

73

la validez de la resolución impugnada de fecha 01 de marzo de 2011, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, misma que ha causado estado por ministerio de Ley, en relación al juicio de nulidad 33900/07-17-06-1 promovido por [REDACTED]

respecto de la solicitud de confirmación de criterio en el que solicitaba que para efecto del cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en términos de la fracción I, inciso a) del artículo 63 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente deberá tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, sin considerar el inventario acumulable determinado por las sociedades controladas, la cual actualmente se encuentra firme.

En relación a lo anterior, es evidente que la contribuyente actualmente promovió juicio de nulidad ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, sin que en dicho medio de defensa haya sido emitida una resolución favorable a esa contribuyente, por lo que la contribuyente en revisión en su carácter de sociedad controladora, debió considerar en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión, la utilidad fiscal del ejercicio de su sociedad controlada en sus términos sin excluir el inventario acumulable determinado por ésta en el ejercicio en revisión.

De acuerdo a lo antes expuesto, esta Administración Central determinó que la contribuyente [REDACTED] al, actualmente [REDACTED] en su carácter de sociedad controladora, emite sumar con el resultado fiscal consolidado, la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada del ejercicio de 2006 de \$1,821,128,230 a \$3,380,157,057, en participación consolidable manifestada en declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, toda vez que dicha sociedad controlada consideró en la determinación de su resultado fiscal el inventario acumulable en cantidad de \$1,559,028,827, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 y en consecuencia emitió el impuesto sobre la renta consolidado correspondiente."

Asimismo, en la resolución contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797, la autoridad demandada señala medularmente lo siguiente:

"La autoridad no apreció los hechos de manera equivocada al afirmar que sobre el tema de fondo ya

existía la sentencia firme dictada en el juicio 33900/07-17-05-1, misma que resulta desfavorable a los intereses del particular.

De lo anterior, se desprende que la fiscalizadora independientemente de los motivos y fundamentos contenidos en la resolución controvertida, consideró que esa recurrente debía estimar en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la utilidad fiscal del ejercicio de su sociedad controlada [REDACTED] en sus términos sin excluir el inventario acumulable.

Lo anterior, porque sobre el tema consistente en que esa recurrente debía considerar en consolidación fiscal el inventario acumulable de sus controladas, ya existía sentencia firme que le resultaba desfavorable.

Al respecto, esa recurrente señala que la autoridad analizó parcialmente las constancias del juicio contencioso 33900/07-17-05-1, radicado en la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues si bien es cierto que la sentencia de 01 de octubre de 2010 se reconoció la validez de la resolución impugnada, también lo es que dicho fallo fue impugnado mediante el juicio de amparo 408/2011, mismo que fue resuelto en la sesión del 17 de febrero de 2012 por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de no amparar a su mandante, sin embargo dice que en la sentencia dictada en dicho juicio constitucional se indicó que su obligación consistía únicamente en considerar las utilidades de sus empresas controladas, ello para efectos de la determinación del resultado fiscal o pérdida fiscal consolidados.

Tales argumentaciones son infundadas, dado que en la sentencia recaída al juicio de amparo 408/2011, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, no indicó que esa recurrente tenía la obligación únicamente de considerar las utilidades de sus empresas controladas (sin considerar el inventario acumulable), ello para efectos de la determinación del resultado fiscal o pérdida fiscal consolidados.

Al respecto, basta efectuar una simple lectura a la sentencia de 17 de febrero de 2012, dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el D.A. 408/2011, para llegar a la conclusión de que ese no fue el pronunciamiento del Poder Judicial Federal.

En efecto, a fojas 42 en delante de la ejecutoria recaída al D.A. 408/2011, se menciona: Consideraciones, en su conjunto, que llevaron a la Sala a concluir que resultaba inexacta la afirmación de la quejosa en el sentido de que no existía disposición expresa que estableciera que el inventario acumulable de una controladora se debía acumular a la utilidad fiscal.

De la inserción anterior, así como de la lectura integral a la sentencia anteriormente señalada, misma que fue ofrecida como prueba por esa recurrente, esta autoridad colige que en ninguna parte de su contenido se advierte la afirmación de su representada en el sentido de que esa empresa controladora para calcular el resultado fiscal consolidado únicamente se encontraba obligada a sumar las utilidades de sus empresas controladas sin considerar el inventario acumulable.

Por el contrario, se desprende que el inventario acumulable debe ser considerado individualmente por sus controladas como parte de la utilidad fiscal, y posteriormente, dicha utilidad debe ser aplicada en consolidación sin dejar de aplicar el inventario acumulable.

Tales razonamientos llevan a concluir que la autoridad fiscalizadora apreció de manera correcta los hechos al afirmar que sobre el tema de fondo consistente en dilucidar si esa recurrente se encuentra obligada a considerar dentro de la utilidad fiscal de sus controladas el inventario acumulable, pues evidentemente la sentencia dictada el 01 de marzo de 2011, por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso 33900/07-17-05-1, a la que hace alusión en la resolución combatida no fue modificada y se encuentra firme.

Especialmente cuando la legalidad respecto del contenido de la sentencia de 01 de marzo de 2011 fue convalidada al resolverse el amparo D.A. 408/2012, lo que sin duda representa que sobre tal punto debe operar la figura de la cosa juzgada refleja.

Para que opere la eficacia refleja de la cosa juzgada aún y cuando no se actualice la "identidad tripartita (partes, objeto y causa)", el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a hacer suyos los razonamientos medulares de la sentencia firme por ser indispensables para apoyar el nuevo fallo en el fondo, sobre el o los elementos que estén estrechamente interrelacionados con anterioridad y así evitar el dictado de sentencias contradictorias.

En ese contexto esta autoridad a fin de cumplir con dicha figura jurídica considera que esa recurrente al haber obtenido un fallo desfavorable que se encuentra firme, en el cual medularmente se dijo que no le asistía la razón al afirmar que para efectos de determinar su resultado fiscal consolidado no debía considerar el inventario acumulable de sus empresas controladas, es que se encuentra obligada por virtud de la fuerza de la cosa juzgada a considerar el inventario acumulable de su empresa controlada [REDACTED] como parte de la utilidad fiscal a determinar en consolidación.

Bajo tales consideraciones, su argumento es infundado, dado que sí debió considerar el inventario



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 575 -

76

acumulable como parte íntegra de la utilidad fiscal para determinar el resultado fiscal consolidado, cuya postura se refuerza con la sentencia antes analizada, misma que evidencia la configuración de la cosa juzgada, por lo que esa recurrente debió observarla.

De lo anterior, se desprende que la autoridad fiscalizadora partió de las siguientes premisas, a efecto de determinar un crédito fiscal a mi mandante derivado de que supuestamente omitió considerar el inventario acumulable de su empresa controlada a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006:

a) Que independientemente de los motivos y fundamentos contenidos en la resolución determinante del crédito fiscal, mi mandante debía estimar en la determinación de su resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 la utilidad fiscal de [REDACTED] sin excluir el inventario acumulable, pues ya existía sentencia firme dictada en el juicio fiscal 33900/07-17-05-1 que le resultaba desfavorable respecto al tema consistente en que debía considerar en consolidación fiscal el inventario acumulable de sus representadas.

b) Que contrario a lo señalado por mi mandante, en la sentencia dictada en el juicio de amparo 408/2011 no se indicó que mi mandante tenía la obligación únicamente de considerar las utilidades de sus empresas controladas sin considerar el inventario acumulable para efectos de la determinación del resultado fiscal o pérdida fiscal consolidados.

c) Que en el caso que nos ocupa, existe cosa juzgada refleja

Las consideraciones anteriores, fueron confirmadas en todos sus términos en la resolución impugnada contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797 modularmente por las mismas razones.

Sin embargo, como se demostrará en los siguientes apartados, dichas consideraciones y conclusiones son ilegales, de conformidad con lo siguiente:

C. En el presente apartado se evidenciara que, contrario a lo señalado por las autoridades demandadas, en el caso que nos ocupa no existe cosa juzgada ni cosa juzgada refleja respecto a que mi mandante, para la determinación de la utilidad fiscal consolidada, debe considerar el inventario acumulable de [REDACTED]

A efecto de evidenciar lo anterior, es importante definir en primera instancia el concepto de cosa juzgada.

Los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a la letra disponen lo siguiente:

"Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase salvo los casos expresamente determinados por la ley."

77

"Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria

"Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias:

I. Las que no admitan ningún recurso;

II. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y

III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes Legítimos o sus mandatarios con poder bastante."

30045

De los anteriores preceptos se advierte que hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria, así como que la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Al respecto, la Jurisprudencia 1a./J. 161/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece lo siguiente:

"COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer."

Sexta Época, Quinta Parte:

Volumen X, página 61. Amparo directo 7757/57. José Gómez Gómez. 18 de abril de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ángel González de la Vega.

Volumen XXVIII, página 28. Amparo directo 1747/59. Alfredo Sánchez Barrera y coagraviados. 21 de octubre de 1959. Cinco votos. Ponente: Gilberto Valenzuela.

Volumen XLII, página 13. Amparo directo. 4031/60. Sindicato Nacional de Trabajadores Terraceros Constructores y Conexos de la República Mexicana y coagraviados. 8 de diciembre de 1960. Cinco votos. Ponente: Arturo Martínez Adame.

Séptima Época, Quinta Parte:

Volumen 5, página 13. Amparo directo 3069/68. María Moreno Barbosa. 14 de mayo de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

Volumen 71, página 15. Amparo directo 2994/74. Hipólito Guzmán García. 11 de noviembre de 1974. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

De la transcripción anterior, se desprende la cosa juzgada opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate.

Al respecto, es necesario definir cada uno de los elementos que deben actualizarse para efecto de que exista cosa juzgada:

1. Sujetos: es necesaria la identidad de los sujetos, es decir, que sean los mismos en ambos procedimientos.
2. Objeto: es necesario que ambos procedimientos tengan el mismo objeto procesal
3. Causa: es necesario que exista la misma pretensión en ambos procedimientos.

En el caso que nos ocupa, se advierte que claramente no existe identidad de objetos, pues el juicio de amparo directo 408/2011 y el juicio fiscal 33900/07-17-05-1, en virtud de los cuales concluye que en el caso que nos ocupa existe cosa juzgada, derivó de una consulta fiscal formulada por mi mandante durante el ejercicio fiscal de 2006, mientras que la determinación del crédito fiscal impugnado, deriva de una revisión secuencial del ejercicio de 2006, razón por la cual resulta evidente que ambos procedimientos no tienen el mismo objeto.

En efecto, en el caso que nos ocupa no existe identidad de objetos, pues el juicio de amparo directo 408/2014 y la revisión a la que fue sujeta mi mandante y que concluyó en la determinación de un crédito fiscal a su cargo, derivan de procedimientos y de ejercicios distintos.

Así las cosas, contrario a lo señalado por las autoridades demandadas en las resoluciones impugnadas, no existe cosa juzgada respecto al tema de fondo que nos ocupa -si mi mandante debía estimar para su resultado fiscal consolidado el inventario acumulable de sus sociedades controladas-, pues como ha quedado demostrado en el presente apartado, no hay identidad de objetos en el caso que nos ocupa, respecto al juicio de amparo directo 408/2014 y el juicio fiscal 33900/07-17-05-1, en virtud de que no se trata del mismo tipo de procedimiento y además, acontecieron en ejercicios diversos. Sin que sea óbice a lo anterior, que la autoridad resolutora al recurso de revocación sostenga que en el caso se actualiza la figura de cosa juzgada refleja, pues ello es de igual forma ilegal.

A efecto de evidenciar lo anterior, es necesario traer a colación lo que el Poder Judicial de la Federación ha sostenido como cosa juzgada refleja:

79

"COSA JUZGADA. INFLUENCIA DE UN JUICIO ANTERIOR POR SER REFLEJA AL QUE VA A FALLARSE, NO OBSTANTE QUE NO EXISTA IDENTIDAD EN LAS COSAS O ACCIONES EJERCITADAS. Para que exista cosa juzgada es necesario que entre el caso resuelto por sentencia definitiva y aquel en que se invoca, concurren identidad de las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes y en la calidad con que lo fueren, esto es, que se haya hecho con anterioridad un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. De ese modo las excepciones vertidas por la demandada, que derivan de haber celebrado un contrato verbal de compraventa respecto del inmueble materia de la controversia, quedó resuelto en forma definitiva al considerarse que no acreditó la existencia del citado contrato, respecto de lo cual sí existe un pronunciamiento de fondo, que causó ejecutoria y constituye cosa juzgada, misma que no se puede variar a riesgo de vulnerar la garantía de seguridad jurídica. Ahora bien, la cosa juzgada refleja opera cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de objeto de un contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los litigios, pero no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro futuro; es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sea de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes. La cosa juzgada tiene por objeto, en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica, y para que surta efectos en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia ejecutoriada y aquel en que ésta sea invocada, concurren identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron; y no obstante que en el caso no exista identidad en las cosas o acciones ejercitadas, no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual es refleja."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 12293/99. Estela Rabinovich Shaderman. 30 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marruf. Secretario: Alfredo Lugo Pérez.

Amparo directo 2083/2001. María Hilaria Santeliz López. 18 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Hilario Salazar Zavaleta.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 577 -

80

Amparo directo 2603/2002. Bayer de México, S.A. de C.V. 14 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Francisco Peñaloza Heras.

Amparo directo 171/2008. Rubén González Mendoza. 14 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González Bárcena.

Amparo en revisión 107/2009. 11 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

De la transcripción anterior, se desprende que para que la cosa juzgada refleje tenga efectos en otro juicio, debe existir identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron, aun cuando no exista identidad en las acciones ejercitadas.

En el caso que nos ocupa, no existe identidad de cosas, pues la primera causa deriva de una sentencia recaída a un asunto en el que se planteó una confirmación de criterio a las autoridades fiscales.

Tampoco existe identidad de personas de los litigantes pues, si bien mi mandante [REDACTED] presentó la consulta motivo de la primer controversia, y es el contribuyente al cual se le determinaron contribuciones en el ejercicio de 2006, acción que se impugnó en la presente demanda de nulidad, lo cierto es que la autoridad que resolvió la consulta presentada y la autoridad que emitió la liquidación por el ejercicio fiscal de 2006, son distintas.

Derivado de lo anterior, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al motivar su resolución en el hecho de que sobre el asunto que nos ocupa ya había cosa juzgada derivado de la sentencia dictada por la Quinta Sala de ese H. Tribunal.

Tan no es cosa juzgada ni cosa juzgada refleja el hecho de que mi mandante tuviera que estimar en su resultado fiscal consolidado las cantidades correspondientes al inventario acumulable de sus empresas controladas, que si así lo fuera ni siquiera estaría en controversia dicha situación, como lo está ahora.

En consecuencia y contrario a lo señalado por las autoridades demandadas, en el caso que nos ocupa no existe cosa juzgada ni cosa juzgada refleja, pues no se actualiza uno de los elementos esenciales para exista cosa juzgada, ni mucho menos cosa juzgada refleja.

Derivado de lo anterior, esa H. Sala deberá declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al derivar de una incorrecta apreciación de los hechos.

81

D. Incluso, suponiendo sin conceder que en el caso que nos ocupa sí exista cosa juzgada refleja en cuanto al fondo del asunto derivado del juicio de amparo 408/2011 y el juicio fiscal 33900/07-17-05-1, aun en ese supuesto las resoluciones impugnadas son ilegales.

Lo anterior, pues aun ese supuesto derivan de una incorrecta apreciación de los hechos, actualizándose la causal de nulidad prevista en el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que en todo caso la cosa juzgada se actualizaría en favor de mi mandante.

Como podrá apreciar esa H. Sala de la lectura que efectúe a las resoluciones impugnadas, las mismas se fundan y motivan en el hecho de que a su parecer, en el caso que nos ocupa existe cosa juzgada refleja respecto al tema de fondo en términos de la sentencia dictada el 1° de marzo de 2011 por la Quinta Sala Regional Metropolitana al resolver el juicio fiscal 33900/07-17-05-1, así como la dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 17 de febrero de 2012, al resolver el juicio de amparo D.A. 408/2011, en las cuales a su parecer se resuelve que mi mandante debe considerar para su resultado fiscal consolidado las cantidades correspondientes al inventario acumulable de sus empresas controladas.

Asimismo, señala la autoridad demandada resolutoria del recurso de revocación, que contrario a lo argumentado por mi mandante, en el juicio de amparo 408/2011, nunca se resolvió que mi mandante no tuviera que estimar en su utilidad fiscal consolidada las cantidades correspondientes al inventario acumulable de sus sociedades controladas, y que por tanto se convalidó en todos sus términos la sentencia dictada en el juicio fiscal 33900/07-17-05-1.

Sin embargo, las resoluciones impugnadas son ilegales, pues aun suponiendo sin conceder que en el caso exista cosa juzgada refleja, las autoridades demandadas apreciaron incorrectamente los términos en que se dictó la sentencia dictada en el juicio de amparo 408/2011, dado que en todo caso dicha figura jurídica se actualiza en favor de mi mandante.

A efecto de evidenciar lo anterior, a continuación se transcribe la parte conducente de la sentencia dictada en el juicio de amparo 408/2011, a partir de la foja 43:

"Lo anterior en virtud de que, el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que las controladoras para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada deben considerar, entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable y restará, entre otros, las pérdidas fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia pérdida fiscal, ambas en la participación señalada, y si la consulta deriva de un antecedente concreto con relación a que en el caso algunas de las sociedades controladas ejercieron la opción de acumular la

existencia de inventarios al 31 de diciembre de 2004, para estar en posibilidad de deducir dicho inventario mediante el costo de lo vendido, entonces, lógicamente, la Sala tenía que analizar la litis planteada, atendiendo a la consulta formulada.

Relacionado con lo anterior, se destaca que las premisas de que partió la Sala para establecer que resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la quejosa, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, no obedecieron a que correspondieran a conceptos adicionales a la utilidad o pérdida fiscal individuales de las controladas, ni como conceptos adicionales a la propia utilidad fiscal consolidada, como, inexactamente lo afirma la quejosa.

Lo expuesto, en virtud de que la Sala partió de la premisa de que para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, sería por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encontraban sujetas al régimen de la consolidación fiscal.

Esto es, entre otros aspectos a que atendió la Sala para resolver en ese sentido, obedeció a que las sociedades controladas así como la controladora, determinaban en lo individual, las utilidades o pérdidas fiscales que correspondieran, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la ley; lo cual será disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, así como que la deducción de los inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, al ser enajenados no formaban parte de la deducción mediante el costo de lo vendido porque fueron deducidos al momento de la adquisición, por lo que la enajenación de dicho inventario representa solamente un ingreso acumulable.

(...)

Y si bien es cierto que en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cálculo del resultado consolidado se conforma de las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas, también lo es, que no podría dejarse de advertir, tal y como se determinó en la sentencia, que acorde a las disposiciones legales que rigen las obligaciones fiscales de la controlada como de la controladora, en lo individual, se previene como tal, la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que incluye la acumulación de los inventarios, en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable, lo cual necesariamente se ve reflejado en la utilidad o pérdida fiscal.

(...)

Sin embargo, tales aspectos, la quejosa los sustrae de una parte de los razonamientos que llevaron a la Sala a concluir que acorde a las disposiciones legales que rigen las obligaciones fiscales tanto de la controlada como de la controladora, en lo individual, se previene como tal, la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que, se reitera, no podría dejarse de advertir, pues conforme a las disposiciones legales contenidas en los artículos 10 y 29, fracción I; del Capítulo II, sección III, del Título II denominado "Del costo de lo vendido", fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del 1° de enero de 2005, en los que se previene la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que incluye la acumulación de los inventarios, en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable, lo cual necesariamente se verá reflejado en la utilidad o pérdida fiscal consolidada.

(...)

Ello se afirma, en tanto que, la primera consideración fue expuesta para justificar la conclusión en la existencia de un ordenamiento legal del que se desprendía la acumulación alegada por el promovente; y, la segunda para precisar que tal descripción legal no se preveía de manera expresa, sino que derivaba de un circunstancia fáctica a raíz de la operabilidad del supuesto normativo regulador de la condición ahí prevista."

(...)

La ineficacia de lo así considerado radica en que la Sala no estableció, como lo aduce la quejosa, que el inventario de las controladas debía acumularse como ingreso a la utilidad fiscal de cada una de las controladas y posteriormente volverse a acumular a la utilidad fiscal consolidada, pues, se insiste, la Sala fue determinante en señalar que la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, debería hacerse por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, esto es, en lo individual, para luego obtener el resultado consolidado.

De la transcripción anterior, se desprende que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal a mi mandante en contra de la sentencia dictada en el juicio fiscal 33900/07-17-05-1, al considerar medularmente lo siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 579 -

84

a) Que la Sala Fiscal partió de la premisa de que para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, sería por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encontraban sujetas al régimen de la consolidación fiscal.

b) Que acorde a las disposiciones legales que rigen las obligaciones fiscales de la controlada como de la controladora, se previene como tal, la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que incluye la acumulación de los inventarios, en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable, lo cual necesariamente se ve reflejado en la utilidad o pérdida fiscal.

c) Que la Sala Fiscal fue determinante en señalar que la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, debería hacerse por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, esto es, en lo individual, para luego obtener el resultado consolidado.

De lo anterior, esa H. Sala podrá apreciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al determinar y convalidar un crédito fiscal determinado a mi mandante, que partió de la premisa consistente en que ya existía cosa juzgada refleja sobre el tema de fondo, la cual consistió en que para determinar el resultado fiscal consolidado de mi mandante, esta tenía que considerar las utilidades fiscales de sus controladas sin excluir el inventario acumulable.

Lo anterior, tal como se desprende de la lectura de las sentencias en las que se basa la autoridad fiscal para sostener que existe cosa juzgada refleja, en todo caso ello no tendría el efecto y consecuencias señalados por las autoridades demandadas.

Ella, pues la cosa juzgada refleja en todo caso sería que si bien mi mandante debe considerar el inventario acumulable de sus controladas para calcular su resultado fiscal consolidado, ello es únicamente al momento en que la sociedad controlada ENAJENE el referido inventario, y por tanto se acumulará POR VÍA DE UTILIDAD O PÉRDIDA.

En efecto, es importante hacer notar a esa H. Sala, que no obstante el Tribunal Colegiado encargado de resolver el amparo directo 408/2011 efectuó un razonamiento respecto a que la Sala responsable había determinado que el inventario acumulable de las sociedades controladas deben reconocerse en el resultado fiscal consolidado de la sociedad controladora, lo cierto es que la conclusión a la que arriba una vez analizada la sentencia dictada por la Sala Fiscal es que dicho inventario se encuentra incluido en la utilidad que la sociedad controlada le reporta a la controladora, pues ello ocurre al momento de enajenación del inventario.

85

Así, es que esa H. Sala deberá apreciar los verdaderos términos en los que fue emitida la sentencia ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en el juicio de amparo 408/2011, que es considerar que el inventario acumulable de las empresas controladas de [REDACTED] se transmite a la controladora en vía de utilidad al momento de la enajenación del inventario.

Lo que de ninguna manera implica que mi mandante o sus sociedades controladas deban adicionar a su utilidad fiscal el concepto de inventario acumulable, como ilegalmente lo sostuvieron las autoridades demandadas, pues dichas cantidades se reconocerían por vía de utilidad o pérdida al momento de enajenar el inventario.

Lo anterior significa, que el inventario que tenía una sociedad controlada al 31 de diciembre de 2004, y que aún se encuentre pendiente de enajenarse, se reconocerá en términos de la opción ejercida respecto del Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, hasta el momento en que se enajene, pues es en ese momento en el que representará una utilidad para la sociedad que lo enajene.

En otras palabras, la acumulación del inventario vendrá incluida en el precio de venta del inventario, y se reconocerá, en consecuencia, como un ingreso propio de la controlada por vía de cada una de las utilidades o pérdidas fiscales de las empresas controladas.

Situación la anterior que de ninguna manera obliga a mi mandante como sociedad controladora a estimar en su resultado fiscal consolidado un inventario acumulable de sus empresas controladas, pues esta ya vendría acumulada en su utilidad al haber sido reconocida como un ingreso al momento de su enajenación.

Así, mi mandante únicamente debía considerar para determinar su resultado fiscal consolidado, las utilidades efectivamente reportadas por sus empresas controladas.

De lo hasta aquí expuesto, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al derivar de una incorrecta apreciación de los hechos, pues aun suponiendo sin conceder que exista un pronunciamiento de fondo en cuanto al tema que nos ocupa, ello es distinto a como lo apreciaron las autoridades demandadas, y se actualiza en favor de mi mandante.

Lo anterior, pues al no haber fundado y motivado las resoluciones impugnadas tomando en consideración que el inventario acumulable de las empresas controladas de mi mandante tendría que ser reconocido por vía de utilidad, es claro que las resoluciones impugnadas son ilegales al carecer de toda fundamentación y motivación al señalar que en el tema de fondo ya existía cosa y juzgada refleja en contra de mi mandante.

Así, si la cosa juzgada refleja se actualiza en el caso que nos ocupa, ello es únicamente para el efecto de considerar que [REDACTED] reconoció su inventario acumulable por vía de utilidad, y que así lo reconoció mi mandante en su resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006, evidenciando así la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al apreciar equivocadamente los términos de la sentencia que a su parecer actualiza la cosa juzgada refleja.

Cabe señalar, que en el hecho de que la autoridad liquidadora haya fundado su resolución en el hecho de que se actualiza la figura de cosa juzgada refleja en términos de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 33900/07-17-05-1, y que la autoridad resolutora del recurso de revocación haya resuelto que incluso dicha cosa juzgada se actualiza en términos de la sentencia dictada en el juicio de amparo 408/2011, constituye una confesión expresa por parte de las autoridades demandadas y que hace prueba plena en su contra en términos del artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, situación que esa H. Sala deberá tomar en consideración al momento de dictar sentencia en el juicio en que se actúa.

Por todo lo anterior, lo procedente será que esa H. Sala declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, al haber sido emitidas sin la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir.

TERCERO. VIOLACIÓN DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS A LOS ARTICULOS 5 Y 38, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL DETERMINAR QUE MI MANDANTE OMITIÓ CONSIDERAR EL INVENTARIO ACUMULABLE DE SU EMPRESA CONTROLADA [REDACTED] COMO PARTE DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2006.

En el presente concepto de impugnación, se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al derivar de una indebida interpretación y, por tanto, aplicación de las disposiciones fiscales al caso en concreto, actualizándose la causal de nulidad contenida en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Lo anterior, pues independientemente de que como quedó evidenciado en el anterior Concepto de Impugnación, al no ser cosa juzgada la obligación de estimar el inventario acumulable de las sociedades controladas al resultado fiscal consolidado, mi mandante de ninguna manera estaba obligada a hacerlo de tal manera en el ejercicio fiscal de 2006, contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas, mi mandante no debía considerar para su resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 el inventario acumulable de su empresa controlada [REDACTED]

A. En primer lugar, solicito tener por reproducido como si a la letra se insertase lo expuesto en el apartado A. del Primer Concepto de Impugnación de la presente demanda de nulidad, en relación con las garantías de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 581 -

87

legalidad y seguridad jurídicas, así como la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir.

B. Por otra parte, a efecto de evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, es necesario transcribir la parte conducente que causa agravio a mi mandante:

Al respecto, en la resolución contenida en el oficio 900-05-2013-48229, la autoridad demandada señala medularmente lo siguiente:

"De la revisión practicada se determina que dicha contribuyente en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la utilidad fiscal en la participación consolidable correspondiente a su sociedad controlada ejercicio 2006 de \$1,821'128,230 a \$3,380'167,057, esta última manifestada en la declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, e incluye el inventario acumulable en cantidad de \$1,558'028,827, que en participación consolidable es de 1'558,058,993, infringiendo lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2006, siendo parcial y no total la utilidad fiscal individual fluida a la controladora.

(...)

La diferencia en cantidad de \$1,558'058,993, mostrado en la página siguiente de este oficio deriva de la omisión de considerar la utilidad fiscal manifestada en la declaración complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, por su sociedad controlada en el resultado fiscal consolidado en el ejercicio de 2006; toda vez que la sociedad controladora revisada consideró la utilidad fiscal individual de dicha sociedad controlada, sin sumar el importe del inventario acumulable determinado por esta en cantidad de \$1,558'058,993, en participación consolidable la cual se integra como sigue:

(...)

Por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, la sociedad controladora revisada para determinar su resultados fiscal consolidada o pérdida fiscal consolidada debió sumar, entre otros conceptos, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable por lo que no procede confirmar a de actualmente el criterio de que para el efecto del cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal

88

consolidada, en los términos de lo dispuesto por la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, no puede sumarse de forma parcial las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas con el objeto de determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, es decir, no existe disposición alguna que señale que no pueda considerarse dentro de la utilidad fiscal para efectos de determinar el resultado fiscal consolidado, el inventario acumulable determinado por sus sociedades e incluido en su utilidad fiscal individual.

Asimismo, tampoco procede confirmar a de actualmente que no existe disposición expresa en la ley que establezca que el inventario acumulable de una controlada se deba acumular a la utilidad fiscal consolidada o bien, como un concepto adicional, a las utilidades y pérdidas fiscales de las controladas que se consideran en la determinación del resultado fiscal consolidado, toda vez que el inventario acumulable es sumado para determinar la utilidad o en su caso la pérdida fiscal individual y estas (sic) se suman a la utilidad o pérdida fiscal de la controladora quien es la que suma o resta para determinar el resultado fiscal consolidado."

Asimismo, en la resolución contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797, la autoridad demandada señala medularmente lo siguiente:

"Décimo quinto.- La recurrente en el agravio décimo quinto, décimo sexto, y décimo séptimo, cuyo apartado denomina como "C. EN RELACIÓN A LA SUPUESTA OMISIÓN DE NO CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LA UTILIDAD FISCAL DE LA SOCIEDAD CONTROLADA EN EL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO", contravierte la legalidad del oficio determinante, bajo los razonamientos siguientes:

Esa recurrente si debe considerar el inventario acumulable de su empresa como parte de la utilidad que de se debe reportar en consolidación fiscal.

Sentado lo anterior, esta autoridad advierte que en el agravio que se analiza esa recurrente insiste en que no tenía obligación de considerar el inventario acumulable de su controlada ello en virtud de que no existe precepto legal que lo indique expresamente. Dicho argumento deviene de infundado, pues en primer lugar tenemos que en materia de impuesto sobre la renta, hasta el 31 de diciembre de 2004, los contribuyentes podían considerar como deducible de los ingresos acumulables del ejercicio, la cantidad que erogaban por la adquisición de mercancías en el mismo ejercicio en que se realizaba la adquisición.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2005, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de diciembre del 2004, se derogó el sistema de deducción de adquisición de mercancías, sustituyéndose por el sistema de deducción del costo de lo vendido.

Para mayor comprensión de lo anterior, a continuación se precisa que es lo que disponía la fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre del 2004, y que es lo que dispone la fracción II del artículo en comento vigente a partir del 1 de enero de 2005.

(se transcribe)

Al respecto, es patente que antes del 1° de enero de 2005, los contribuyentes deducían la adquisición de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, mientras que después de esa fecha los contribuyentes deducen el costo de lo vendido.

En tal contexto a partir del año 2005, los contribuyentes deducirían el costo de lo vendido de las mercancías cuando sean enajenadas, cambiando así la situación jurídica de los causantes al no poder deducir las mercancías por su simple adquisición como se venía haciendo hasta ese año.

Es decir, a partir del ejercicio de 2005 las personas morales y las personas físicas con actividades empresariales, ya no deducirían el costo por la adquisición de mercancías en el mismo ejercicio de su adquisición, sino que empezarían a deducir el conjunto de las erogaciones efectuadas para adquirir el producto o procesarlo y convertirlo en un producto terminado, hasta que el mismo haya sido enajenado, por lo que el inventario que se tenga al 31 de diciembre de 2004 no se considera para la determinación del costo.

Esto es, el sistema de deducción vía costo de lo vendido (que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2005) atiende al costo de adquisición o de producción de las mercancías al momento en que son enajenadas; por lo que en el ejercicio en que se enajena un producto se atiende a lo que le costó al contribuyente ponerlo a la venta.

Sin embargo, dicha mecánica no le es aplicable a los inventarios existentes hasta el 31 de diciembre de 2004.

En efecto, resulta importante precisar que las mercancías que los contribuyentes tenían al 31 de diciembre de 2004, no son objeto del nuevo sistema de deducción (costo de lo vendido), en virtud de que al momento en que fueron adquiridas ya fueron deducidas, atendiendo al régimen de deducción vigente hasta 2004 (deducción de las mercancías en el momento mismo de su adquisición) que imperaba en los ejercicios anteriores a 2005.

No obstante, como un supuesto excepcional el legislador otorga a los contribuyentes la posibilidad de considerar a los inventarios que se tengan al 31 de diciembre de 2004 dentro de la determinación del costo de lo vendido para el

ejercicio 2005 y siguientes, ello bajo la condición de que el referido inventario lo acumulen.

Dicha opción fue concebida en el Artículo Tercero Transitorio del decreto publicado el 1° de diciembre de 2004, en el Diario Oficial de la Federación, que en su fracción IV, precisó lo siguiente:

"ARTÍCULO TERCERO." (Se transcribe)

Del numeral transitorio se desprende como regla general que los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir las mercancías que tenían al 31 de diciembre de 2004.

Sin embargo, como regla de excepción a efecto de poder deducir las mercancías enajenadas relativas al inventario que se tenía al 31 de diciembre de 2004, los contribuyentes deberán acumular el inventario que se tenga al 31 de diciembre de 2004, atendiendo al procedimiento que establece la fracción V, del Artículo Tercero Transitorio del Decreto publicado el 1 de diciembre de 2004 (opción).

En ese entendido, respecto los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, hay que destacar que a partir del ejercicio de 2005, la obligación de los contribuyentes es sujetarse a la regla general que en este caso consiste en que para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir mercancías al momento de adquirirse; sin embargo, si por voluntad propia los contribuyentes deciden ejercer la opción prevista en la disposición transitoria en estudio, consistente en deducir mercancías enajenadas relativas al inventario que tenían al 31 de diciembre de 2004, resulta entonces que tienen la ineludible obligación de cumplir con los requisitos que se establecen a efecto de poder ejercer tal opción.

Las consideraciones anteriores, demuestran que derivado del nuevo sistema de deducción denominado "costo de lo vendido", en el cual se permite la deducción del costo de adquisición de mercancías hasta que sean enajenadas, es que no se permite que la existencia en inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004 sean deducidas, es decir, que sean consideradas para efectos de determinar el costo de lo vendido, pues en dicho ejercicio (2004) la ley permitía la deducción del costo de las mercancías en el momento en que se adquirían con independencia de su enajenación.

En otras palabras, la prohibición expresa de no deducir los inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004 mediante el nuevo sistema de costo de lo vendido, tuvo como propósito impedir que el costo de adquisición de las mercancías se deduzca en dos ocasiones, toda vez que la deducción de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004 se efectuó en el ejercicio en que se adquirieron, por lo que al ser enajenadas no formarán parte de la deducción mediante el "costo de lo vendido".

Así, si bien es cierto en principio su empresa controlada **[REDACTED]** tiene la obligación de acumular las existencias en inventario, también es cierto que cuando decidió ejercer la opción prevista en la fracción



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 583 -

91

IV, del Artículo Tercero Transitorio del Decreto, ello tiene como consecuencia que la obligación contenida en tal disposición adquiere relevancia en su esfera jurídica no por prescripción imperativa del legislador, sino porque su empresa controlada, decidió ejercer la referida opción.

Bajo estas circunstancias, de la interpretación armónica, sistemática y causal de las disposiciones que integran el sistema de "costo de lo vendido", se desprende con suma claridad que cuando el legislador hizo referencia a "inventario acumulable" ello conlleva que el inventario que tenía al 31 de diciembre de 2004 se adicionara o acumulara al momento de determinar la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, pues solo así se neutralizaría el efecto de la doble deducción que se autorizó mediante la fracción IV del Artículo Tercero de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2006.

Lo anterior, trasladado al régimen de consolidación quiere decir que el porcentaje que a nivel consolidado debe fluir a la controladora, será influenciado por la opción de acumulación de los inventarios que la sociedad controlada [REDACTED] ejercido en su momento, ya que de lo contrario se estaría reconociendo únicamente la doble deducción (autorizada mediante la fracción IV del Artículo Tercero de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta), inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004.

Aunado a ello, es que esta autoridad considera que la resolución combatida se encuentra debidamente fundada y motivada.

Se afirma lo anterior, toda vez que la autoridad fiscalizadora al señaló a fojas 52 a 76, de la resolución combatida los fundamentos y los razonamientos por los cuales en consolidación fiscal esa recurrente debía considerar el inventario acumulable de su controlada [REDACTED] citando medularmente los artículos 10, 68, fracción I, inciso a), y 76, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (2006), así como las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues de su contenido se llegó a la conclusión que esa sociedad controladora a la que representa su mandante para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada debe considerar, entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable y restará -entre otros- las pérdidas fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia pérdida fiscal, ambas en la participación señalada, por lo que es infundado el argumento formulado por esa recurrente en el sentido de que para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada únicamente deberán tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que para tales efectos pueda considerarse dentro de dichos conceptos el inventario acumulable de [REDACTED]

92

Debe resaltarse que si bien los artículos 10 y 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no prevén de forma expresa que para la determinación del impuesto consolidado, la controladora deba incluir en la base de la consolidación el inventario acumulable, dicha inclusión deriva de la aplicación voluntaria que realizó [REDACTED] al optar por deducir sus inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004 conforme al nuevo sistema de deducción del costo de lo vendido en términos de las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En este sentido, todos aquellos contribuyentes que opten por acogerse a lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio, incrementan voluntariamente los conceptos con los que deben determinar su utilidad o pérdida del ejercicio, es decir, además de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas deberán considerar el inventario acumulable a efecto de poder determinar su utilidad o pérdida del ejercicio.

Así las cosas, debe señalarse que para la determinación de la utilidad o pérdida fiscal, se deberán considerar todos aquellos conceptos que la ley señale como acumulables, y no solo los conceptos que tengan la naturaleza de ingresos.

Por tanto, es claro que contrario a lo que señala la recurrente, para la determinación de la pérdida o utilidad fiscal del ejercicio, si se debe acumular el efecto del inventario previsto por la fracción IV del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en dos mil cinco.

Bajo este orden de ideas, podemos concluir que el inventario acumulable, al ser un concepto de adición es parte integrante de la determinación de la utilidad o pérdida fiscal que las empresas controladas en lo individual posteriormente deben reportar a la consolidación fiscal; es decir, la utilidad fiscal o pérdida fiscal que deben reportar las controladas que optaron por acogerse a lo dispuesto por el Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en dos mil cinco, a su controladora a efecto de determinar el resultado fiscal consolidado, incluye el inventario acumulable a que se refiere dicha disposición.

Lo anterior, pues, como es del conocimiento del contribuyente, el artículo 68, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que la sociedad controladora determinará la utilidad fiscal o pérdida fiscal consolidada, sumando las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas, y restando las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin actualizar, y, si gan sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate.

Además, -entre otros conceptos- la controladora sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores.

En ese tenor, al determinar la utilidad fiscal o pérdida fiscal una empresa controlada, necesariamente debe considerar a nivel individual el inventario acumulable dentro del cálculo para entregar esa información a la empresa controladora, pues al citado inventario se le brinda el tratamiento de un ingreso acumulable de conformidad con las fracciones IV y V del artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por tanto, independientemente si dicho concepto tiene o no la naturaleza de Ingreso acumulable, la empresa controladora se encuentra obligada a considerar el efecto del inventario acumulable en la determinación del impuesto consolidado del ejercicio, ello al momento de considerar en la participación consolidable los montos de las utilidades o pérdidas que se reportan en el grupo, entre ellas, las de su controlada.

De lo anterior, se desprende que la autoridad fiscalizadora partió de las siguientes premisas, a efecto de determinar un crédito fiscal a mi mandante derivado de que supuestamente omitió considerar el inventario acumulable de su empresa controlada a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006:

a) Que [REDACTED] debió adicionar al resultado fiscal consolidado el inventario acumulable en cantidad de \$1,558'055,993 de su empresa controlada [REDACTED] pues independientemente de la naturaleza del inventario (Ingreso o no) así lo había dispuesto el legislador.

b) Que al haber optado la empresa [REDACTED] en lo individual por la opción contenida en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, su inventario acumulable forma parte de su utilidad fiscal al tratarse de un concepto que busca nulificar el beneficio de una doble deducción en la adquisición de mercancías, por lo que el inventario acumulable debía ser considerado para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado.

Las consideraciones anteriores, fueron confirmadas en todos sus términos en la resolución impugnada contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797 medularmente por las mismas razones.

Sin embargo, como se demostrará en los siguientes apartados, dichas consideraciones y conclusiones son ilegales, de conformidad con lo siguiente:

C. En primer lugar, se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al derivar de una incorrecta interpretación y aplicación del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la referida Ley vigente en 2005, pues mi mandante, contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas, no se encontraba obligada en el ejercicio de 2006 a considerar para la determinación de su

94

resultado fiscal consolidado, las cantidades correspondientes al inventario acumulable de la sociedad controlada [REDACTED]

Lo anterior, en virtud de que el inventario acumulable no constituye un ingreso acumulable para efectos de determinar la utilidad fiscal de una sociedad controlada, sino que constituye un "concepto acumulable", y por lo tanto no incide en la determinación de su utilidad fiscal, y en consecuencia, tampoco tiene efecto en la determinación de la utilidad fiscal de la controladora.

A efecto de evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues el inventario acumulable no se debe considerar como un ingreso acumulable para efectos del cálculo de la utilidad fiscal de una sociedad controlada, y que por lo tanto, tampoco debe incidir en la determinación de la utilidad fiscal consolidada, es importante efectuar un breve análisis sobre la determinación de la utilidad fiscal consolidada, así como de la opción que entró en vigor a partir del 1° de enero de 2005 relativa al inventario acumulable.

I. En el régimen de consolidación fiscal, las sociedades controladas, así como la controladora, determinan en lo individual las utilidades o pérdidas fiscales que correspondan a las sociedades controladas, de conformidad con el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, mismo que establecía textualmente lo siguiente:

"Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 585 -

95

ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso.

d) Sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción.

e) Restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas en el ejercicio por las sociedades controladas y la sociedad controladora, siempre que la adquisición y enajenación de acciones se efectúe dando cumplimiento a los requisitos a que se refiere la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

El monto de las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior, se podrá disminuir, sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la ganancia que por este mismo concepto obtengan en el mismo ejercicio la sociedad controladora y las demás sociedades controladas.

Sumará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas por las sociedades controladas y la sociedad controladora en el ejercicio y en ejercicios anteriores y que hayan sido restadas conforme al primer párrafo de este inciso en dichos ejercicios, que hubieran deducido en el ejercicio conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se sumarán o se restarán en la participación consolidable.

Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades controladoras, será del 100%.

96

Para calcular las modificaciones a las utilidades o a las pérdidas fiscales, de las sociedades controladas de ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción, cuando la participación accionaria de la sociedad controladora en el capital social de una sociedad controlada cambie de un ejercicio a otro, se dividirá la participación accionaria que la sociedad controladora tenga en el capital social de la sociedad controlada durante el ejercicio en curso entre la participación correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a cada uno de los ejercicios mencionados; el cociente que se obtenga será el que se aplicará a las utilidades o a las pérdidas fiscales, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción, incluidas en las declaraciones de los ejercicios anteriores, y al impuesto que corresponda a estos ejercicios, en los términos del artículo 75 de esta Ley.

II. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61 de esta Ley.

[...]

De la transcripción anterior, se desprende que el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la mecánica para el cálculo del resultado fiscal consolidado, misma que se debe efectuar conforme a lo siguiente:

i) La sociedad controladora sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

ii) Dicha sociedad, podrá restar las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, tomando en cuenta que el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir, que tuviera una sociedad controlada, se podrá disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

iii) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate, tomando en cuenta que las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en que comience a consolidar, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal de dicho ejercicio.

iv) Sumará o restará las modificaciones a la utilidad o pérdidas fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir mencionadas en el punto ii) anterior, y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas.

v) La sociedad controladora restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria obtenidas en el ejercicio por las sociedades controladas y la sociedad controladora.

Adicionalmente, dicho artículo establece en su fracción II que a la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores.

Para efectos de determinar la utilidad o pérdida fiscal, el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006 establecía lo siguiente:

"Artículo 10.

(...)

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título. Al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

[...]"

Del artículo anteriormente transcrito, se desprende que la utilidad fiscal se determinará disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas previstas en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Así las cosas, es evidente que una sociedad controladora como mi mandante, a efecto de determinar su resultado fiscal consolidado, únicamente debe considerar las utilidades o pérdidas fiscales de sus sociedades controladas determinadas en lo individual, mismas que en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, se calcularán disminuyendo de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas previstas en el Título II de dicho ordenamiento jurídico.

II. Una vez señalado lo anterior, es importante mencionar que dentro del paquete de reformas fiscales que en materia de impuesto sobre la renta entraron en vigor el 1º de enero de 2005, se estableció un cambio respecto al momento de deducción de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados.

Dicho cambio consistió en reformar el artículo 29, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2004 que establecía la deducción de las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, para establecer a partir de 2005 que será el costo de lo vendido lo que se deduce.

Lo anterior implicó que, a partir de 2005, el contribuyente ya no deduce al momento de la adquisición, sino que debe realizar la deducción del costo de la mercancía hasta el momento en que la enajena.

En relación con los inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004, mediante disposiciones transitorias a la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2005, el legislador estableció que para determinar el costo de lo vendido, los contribuyentes no podrán deducir el costo de dichos inventarios al momento en que los enajenaran.

Sin embargo, en las disposiciones transitorias se estableció que si el contribuyente opta por acumular los inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004, sí podría considerarlos para efectos de determinar el costo de lo vendido.

Es decir, las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta califican al inventario acumulable, como un concepto acumulable.

Al respecto, las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 2005, establecía lo siguiente:

"Artículo Tercero.

(...)

IV. Los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán optar por acumular los inventarios a que se refiere esta fracción, conforme a lo establecido en la siguiente fracción, en cuyo caso podrán deducir el costo de lo vendido conforme enajenen las mercancías. Cuando los contribuyentes no opten por acumular los inventarios considerarán que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 587 -

99

al 1 de enero de 2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha.

V. Los contribuyentes al 31 de diciembre de 2004, deberán determinar el inventario base considerando el valor de los inventarios que tengan a dicha fecha, utilizando el método de primeras entradas primeras salidas.

El inventario acumulable se obtendrá disminuyendo del inventario base a que se refiere el párrafo anterior, los conceptos señalados en los incisos a), b) y c) de esta fracción:

a) El saldo pendiente por deducir al 1 de enero de 2005 que en su caso tengan en los términos de las fracciones II y III del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1986, reformado el 31 de diciembre de 1988 y de la regla 106 de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1993.

b) Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2004 de las utilidades fiscales. Las pérdidas fiscales que se disminuyan en los términos de este inciso, ya no se podrán disminuir de la utilidad fiscal en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

c) Tratándose de contribuyentes que tengan en sus inventarios bienes que hayan importado directamente, la diferencia que resulte de comparar la suma del costo promedio mensual de los inventarios de dichos bienes de los últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2004, contra la suma del costo promedio mensual de los inventarios de bienes de importación que tuvieron en los últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2003, siempre que la suma del costo promedio mensual del ejercicio fiscal de 2004 sea mayor a la suma del costo promedio mensual del ejercicio fiscal de 2003. La diferencia que resulte en los términos de este inciso, se acumulará en el ejercicio de 2005.

El inventario acumulable en cada ejercicio se determinará multiplicando el valor del inventario acumulable por el por ciento de acumulación que corresponda al índice promedio de rotación de inventarios calculado por el periodo correspondiente a los años de 2002 a 2004, o de acuerdo al que se determine cuando el contribuyente haya iniciado actividades con posterioridad a 2002, conforme a la siguiente tabla:

Índice promedio de rotación de inventarios	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
De más de 15	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
De más de 10 a 15	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

100

De más de 10 a 15	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
De más de 8 a 10	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
De más de 6 a 8	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
De más de 4 a 6	19.07	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
De más de 3 a 4	15.00	14.00	13.00	12.00	11.11	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00
De más de 2 a 3	14.00	13.00	12.00	11.00	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00	0.00
De más de 1 a 2	13.00	12.50	12.00	11.00	10.00	9.09	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00	0.00
De más de 0 a 1	12.00	11.50	11.00	10.00	9.00	8.33	7.69	7.00	6.33	5.66	5.00	4.33	3.66	3.00	2.33

Para determinar el índice promedio de rotación de inventarios del periodo comprendido por los años de 2002 a 2004, o el que corresponda cuando el contribuyente haya iniciado actividades con posterioridad a 2002, se estará a lo siguiente:

i) Por cada uno de los años de que se trate se restarán de las adquisiciones de mercancías, así como de las materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre los mismos de conformidad con la fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2004.

ii) Para determinar el inventario promedio anual de cada uno de los años de que se trate, se dividirá entre dos, la suma del inventario inicial y final de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, que el contribuyente haya utilizado en su actividad empresarial, valuados conforme al método que tenga implantado.

iii) El índice de rotación de inventarios por cada año será el cociente que resulte de dividir el monto que se obtenga conforme al inciso i), entre el monto calculado de acuerdo al inciso ii).

iv) El índice promedio de rotación de inventarios del periodo de que se trate se determinará sumando el índice de rotación de inventarios para cada uno de los años del periodo citado, entre el número de años que corresponda a dicho periodo.

Los contribuyentes que posteriormente disminuyan el valor de sus inventarios al 31 de diciembre del año de que se trate con respecto al inventario base a que se refiere esta fracción, deberán determinar el monto que deban acumular en el ejercicio de que se trate conforme a lo siguiente:

1. Para determinar el monto de acumulación de ejercicios posteriores, se calculará la proporción que represente el inventario reducido respecto al inventario base, el por ciento así obtenido se multiplicará por el inventario acumulable y al monto que resulte se le aplicará el por ciento que le corresponda de acuerdo con el índice promedio de rotación de inventarios

multiplicado dicho por ciento por el número de años pendientes de acumular de acuerdo con la tabla de acumulación.

2. Para determinar la cantidad que se debe acumular en el año en el que se reduzca el inventario, los contribuyentes disminuirán del inventario acumulable, el monto pendiente de acumulación de ejercicios posteriores a la reducción de inventarios determinada conforme al numeral anterior y las acumulaciones efectuadas en años anteriores a dicha reducción.

3. En los ejercicios posteriores a aquél en el que se reduzca por primera vez el inventario, se estará a lo siguiente:

i. Cuando el monto del inventario reducido del ejercicio de que se trate, sea inferior al monto del inventario reducido por el cual se aplicó por última vez el procedimiento señalado en los numerales 1 y 2, se aplicará lo dispuesto en dichos numerales.

ii. Cuando el monto del inventario reducido del ejercicio de que se trate, sea superior al monto del inventario reducido por el cual se aplicó por última vez el procedimiento señalado en los numerales 1 y 2, para calcular la proporción a que se refiere el numeral 1 se considerará este último inventario y el número de años pendientes de acumular de acuerdo con la tabla de acumulación incluirá el año por el que se efectúe el cálculo. Para determinar la cantidad que se debe acumular en el año en que se reduzca el inventario y en los posteriores, se dividirá la cantidad obtenida en el numeral 1 entre el número de años pendientes de acumular, incluido el año por el que se efectúe el cálculo.

(...)

Para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, los contribuyentes deberán acumular a la utilidad fiscal la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago. Además, en el ejercicio de 2005, se acumulará mensualmente la doceava parte de la diferencia que resulte en los términos del inciso c) de esta fracción multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago.

[...]

De la transcripción anterior se desprende que en relación con los inventarios al 31 de diciembre de 2004, existían dos opciones.

La primera opción consiste en no deducir las existencias en inventarios que tuvieran al 31 de diciembre de 2004, mientras que la segunda opción otorga la posibilidad de que los contribuyentes acumulen el valor de sus inventarios al 31 de diciembre de 2004, caso en el cual podrán efectuar su deducción

conforme vendan las mercancías correspondientes, es decir, como costo de lo vendido.

Elio, con el objeto de no duplicar la deducción, pues como se mencionó en la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2005 *"la citada opción consistiría en que los contribuyentes que tengan inventarios al 31 de diciembre de 2004, acumulen el ingreso por la venta de las mercancías sin deducción del costo de lo vendido, toda vez que al haberse efectuado la deducción como gasto, de no acumularse el ingreso cuando se vendan dichas mercancías, se estaría duplicando la deducción, o bien, la disposición permitiría al contribuyente que acumule los inventarios al 31 de diciembre de 2004, en forma proporcional a lo largo de cinco años, de acuerdo a su rotación de inventarios y, en consecuencia, permitirles la deducción del costo de lo vendido cuando se enajene la mercancía correspondiente a dichos inventarios."*

De modo que si optan por la opción mencionada en segundo término, los contribuyentes deberán determinar un inventario acumulable, mismo que se obtendrá a partir de un inventario base considerando el valor de los inventarios que se tengan, utilizando el método de Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS), disminuido de ciertos conceptos expresamente señalados para tales efectos.

Asimismo, la disposición establece que una vez determinado el inventario acumulable, se deberá determinar el monto que se acumulará en cada ejercicio.

Para tal efecto, se debe multiplicar dicho inventario por el por ciento de acumulación que corresponda, el cual varía en función del índice promedio de rotación de inventarios que tenga el contribuyente.

En el caso que nos ocupa, [REDACTED] aplicó la opción de acumulación de inventarios, es decir, acumular el inventario que tenía al 31 de diciembre de 2004 a que se refieren las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal 2005, y por lo tanto, debe determinar el monto del inventario que se acumulará en cada ejercicio hasta agotarlos.

C.1. Una vez expuesto lo anterior, a continuación se demostrará que contrario a lo señalado por las autoridades demandadas, el inventario acumulable de [REDACTED] no debió ser considerado por mi mandante para efectos de determinar la utilidad fiscal consolidada, al no calificar como como un ingreso.

Lo anterior, pues dicho inventario acumulable no representa un ingreso, sino un concepto acumulable, motivo por el cual no puede ser considerado para efectos de determinar la utilidad o pérdida fiscal, a nivel individual o a nivel consolidado.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 589 -

103

En efecto, el inventario acumulable no puede representar un ingreso para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues no resulta en una modificación positiva al haber patrimonial de una persona moral.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lo que debe entenderse por ingreso:

"RENTA, QUE DEBE ENTENDERSE POR "INGRESO" PARA EFECTOS DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta no define el término "ingreso", ello no implica que carezca de sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital, además de que puede surgir como compensación por servicios prestados; el desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas; intereses; rentas, regalías o dividendos; el pago de pensiones o seguros; y por obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras causas. Sin embargo, la enunciación anterior no debe entenderse en el sentido de que todas estas formas de ingreso han de recibir el mismo trato o que todas se consideran acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades que pueden generar ingresos. Aunado a lo anterior, es particularmente relevante que la legislación aplicable no establece limitantes específicas al concepto "ingreso", ni acota de alguna manera las fuentes de las que éste podría derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecen que las personas morales están obligadas al pago del tributo respecto de todos sus ingresos y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así, se desprende que la mencionada Ley entiende al ingreso en un sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o realizado que represente una renta para el receptor, siendo innecesario que el ingreso se traduzca en una entrada en efectivo, pues incluso la propia Ley reconoce la obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal suerte que el ingreso se reconoce cuando se han actualizado todos los eventos que determinan el derecho a recibir la contraprestación y cuando el monto de dicha contraprestación puede conocerse con razonable precisión. En ese sentido, se concluye que la regla interpretativa para efectos del concepto "ingreso" regulado en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de carácter amplio e incluye de todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente, salvo que el legislador expresamente hubiese efectuado alguna precisión en sentido contrario, como acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado artículo 17."

Amparo directo en revisión 1604/2006. Cómputo Intecsis, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Ros Jacobo.

104

(Énfasis añadido).

De la tesis transcrita, se desprende que para efectos de lo dispuesto por el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se debe definir ingreso como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona.

En efecto, un ingreso se traduce forzosamente en la incorporación de una renta real y disponible para el sujeto pasivo, misma que incrementa su patrimonio.

Así, es evidente que el inventario acumulable no es un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, pues dicho concepto no aumenta de manera positiva el patrimonio del contribuyente.

Se afirma lo anterior, pues tal y como se señaló anteriormente, el artículo Tercero Transitorio, fracciones IV y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, estableció la posibilidad de acumular los inventarios para posteriormente deducirlos, a efecto de que las empresas hicieran la transición del sistema de deducción de compras al del costo de ventas.

En este sentido, no obstante [REDACTED] ejerció la opción prevista en dicho artículo, aun así el inventario acumulable no produce una modificación en su patrimonio, en virtud de que se trata de un concepto que se utilizó para reversar una deducción, pues al acumular el valor de adquisición de las mercancías que conforman el inventario, se revierte la deducción efectuada por ese concepto conforme al sistema de deducción de compras previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2004, ya que de lo contrario se podría duplicar la deducción efectuada.

En consecuencia, el inventario acumulable no incorpora una renta real y disponible para el sujeto pasivo, y por consiguiente, no incrementa su patrimonio, pues únicamente se trata de un concepto que tiene como objetivo principal, revertir una deducción efectuada con anterioridad.

Por lo tanto, contrario a lo señalado en las resoluciones impugnadas, mi mandante de ninguna manera debió considerar para determinar su utilidad fiscal consolidada las cantidades correspondientes al inventario acumulable de [REDACTED]

Lo anterior, en virtud de que dicho concepto no constituye un ingreso para dicha sociedad controlada, evidenciando así la ilegalidad de las resoluciones impugnadas.

Derivado de lo anterior, esa H. Sala deberá declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas al encontrarse indebidamente fundadas y motivadas en contravención al artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, pues las autoridades demandadas efectuaron una incorrecta interpretación y aplicación de los artículos 10 y 68 de la Ley del Impuesto

sobre la Renta, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la referida Ley vigente en el ejercicio fiscal de 2005.

C.2. No obstante que lo anterior es más que suficiente para evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues mi mandante de ninguna manera debía reconocer el inventario acumulable de sus controladas para determinar su resultado fiscal consolidado, al no representar un ingreso que modifique positivamente el patrimonio del contribuyente, en el presente apartado se evidenciará que además dicho inventario no se reconoce como ingreso acumulable en la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que califica como un concepto acumulable, situación que evidencia aún más que la ilegalidad de las resoluciones impugnadas.

A efecto de evidenciar lo anterior, es importante mencionar que el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006 establecía que las personas morales residentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero.

En relación a los ingresos acumulables, el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal 2006 establecía lo siguiente:

"Artículo 20. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:

I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales.

II. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, para determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se trata en la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que para el caso de enajenación permite esta Ley, siempre que se cumplan con los requisitos que para ello se establecen en la misma y en las demás disposiciones fiscales. Tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido se determinará conforme a lo dispuesto en la Sección III, del Capítulo II del Título II de esta Ley.

III. Derogada

IV. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se

106

considera obtenido al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades fiscales.

V. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero; en las que el contribuyente sea socio o accionista.

En los casos de reducción de capital o de liquidación, de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determinará conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 167 de esta Ley.

En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso acumulable la ganancia derivada de dichos actos, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación.

VI. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable.

VII. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente.

VIII. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcir de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes.

IX. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con documentación comprobatoria a nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto.

X. Los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de intereses moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los efectivamente cobrados. Para estos efectos, se considerará que los ingresos por intereses moratorios que se perciban con posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el que el deudor incurrió en mora cubren, en primer término, los intereses moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que el deudor incurrió en mora, hasta que el monto percibido exceda al monto de los intereses moratorios devengados acumulados correspondientes al último período citado.

Para los efectos del párrafo anterior, los intereses moratorios que se cobren se acumularán hasta el momento en el que los efectivamente cobrados excedan al monto de los moratorios acumulados en los



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 591 -

107

primeros tres meses y hasta por el monto en que excedan.

XI. El ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los términos del artículo 46 de esta Ley.

XII. Las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a \$600,000.00, cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 86-A de esta Ley."

Como se desprende del artículo antes transcrito, para efectos del impuesto sobre la renta se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de la Ley respectiva, conceptos tales como los ingresos determinados de manera presunta por la autoridad; la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie; los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles; la ganancia derivada de la enajenación de activo fijos y terrenos; títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidas por sociedades nacionales de crédito; así como la ganancia realizada que derive de fusión o escisión de sociedades; los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incoobrable, la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros; tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, acciones o enfermedad de técnicos o dirigentes; las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros; los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno, los intereses moratorios, según las reglas particulares establecidas, el ajuste anual por inflación que resulte del procedimiento previsto para su determinación.

De lo anterior se desprende que la Ley del Impuesto sobre la Renta no reconoce como un ingreso acumulable al inventario acumulable para efecto de determinar la utilidad fiscal correspondiente.

En este sentido, si la Ley del Impuesto sobre la Renta no considera como un ingreso acumulable el inventario acumulable, entonces las resoluciones impugnadas resultan ilegales al determinar a mi mandante un crédito fiscal derivado de que no consideró las cantidades correspondientes al inventario acumulable de sus controladas para determinar su resultado fiscal consolidado.

Se confirma lo anterior con el hecho de que el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tampoco contempla un momento en que el valor del inventario acumulable se considere percibido, elemento que resultaría fundamental para determinar que se trata de un ingreso acumulable para la utilidad fiscal.

Lo anterior, toda vez que si el legislador hubiera pretendido darle el carácter de ingreso a la cantidad en comento, así lo hubiera establecido

108

expresamente en la legislación fiscal, situación que como ya se comentó, no ocurre, pues dicha situación no se desprende de los artículos 17, 18 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006.

Por lo anterior, es que son ilegales las resoluciones impugnadas al derivar de una incorrecta interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales, pues a través de las mismas se pretende que mi mandante acumule como ingreso cantidades que en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta NO son considerados como ingresos acumulables.

Lo anterior pues, se insiste, el inventario acumulable califica como un concepto acumulable, más nunca como un ingreso acumulable.

Derivado de todo lo anterior, las resoluciones impugnadas devienen en ilegales pues mi mandante no omitió indebidamente sumar el inventario acumulable de [REDACTED] para el cálculo de la utilidad fiscal consolidada del ejercicio, pues este no constituye un ingreso acumulable al no encontrarse expresamente establecido como ingreso en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo anterior, esa H. Sala deberá declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues las mismas derivan de una incorrecta interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales.

C.3. Incluso, evidencia aún más la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, el hecho de que para efectos de la consolidación fiscal, el inventario acumulable tampoco constituye un ingreso acumulable, pues el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, establece que únicamente se debe considerar en la determinación del resultado fiscal consolidado, las utilidades o pérdidas fiscales de cada una de sus sociedades controladas, (en el caso que nos ocupa, [REDACTED])

En efecto, si no existe disposición expresa dentro del régimen general de consolidación fiscal que obligue a mi mandante a acumular a la utilidad fiscal a nivel consolidado, los inventarios acumulables de cada una de sus empresas controladas, es ilegal que la autoridad manifieste que mi mandante debía incluir las cantidades correspondientes al inventario acumulable de su sociedad controlada [REDACTED] para calcular su resultado fiscal consolidado.

Al respecto, el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, establecía lo siguiente:

"Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso.

d) Sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción.

e) Restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas en el ejercicio por las sociedades controladas y la sociedad controladora, siempre que la adquisición y enajenación de acciones se efectúe dando cumplimiento a los requisitos a que se refiere la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

El monto de las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior, se podrá disminuir, sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la ganancia que por este mismo concepto obtengan en el mismo ejercicio la sociedad controladora y las demás sociedades controladas.

Sumará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas por las sociedades controladas y la sociedad controladora en el ejercicio y en ejercicios anteriores y que hayan sido restadas conforme al primer párrafo de este inciso en dichos ejercicios, que hubieran deducido en el ejercicio conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se sumarán o se restarán en la participación consolidable.

Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades controladoras, será del 100%.

Para calcular las modificaciones a las utilidades o a las pérdidas fiscales, de las sociedades controladas de ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción, cuando la participación accionaria de la sociedad controladora en el capital social de una sociedad controlada cambie de un ejercicio a otro, se dividirá la participación accionaria que la sociedad controladora tenga en el capital social de la sociedad controlada durante el ejercicio en curso entre la participación correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a cada uno de los ejercicios mencionados; el cociente que se obtenga será el que se aplicará a las utilidades o a las pérdidas fiscales, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción, incluidas en las declaraciones de los ejercicios anteriores, y al impuesto que corresponda a estos ejercicios, en los términos del artículo 75 de esta Ley.

II. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61 de esta Ley.

[...]"



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 593 -

111

Del artículo transcrito se desprende que para la determinación del resultado fiscal consolidado debe sumarse, entre otros conceptos, las utilidades fiscales del ejercicio de las sociedades controladas y la propia utilidad fiscal de la controlada, ambas en la participación consolidable y se restará, entre otros conceptos, las pérdidas fiscales del ejercicio de sus controladas y la propia pérdida fiscal de la controlada.

En relación con lo anterior, es importante recordar que como se ha expuesto en apartados anteriores, el inventario acumulable no es un ingreso que modifique positivamente el patrimonio de los contribuyentes, ni mucho menos es un ingreso acumulable en términos de los artículos 17 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por tanto, es evidente que el inventario acumulable no puede considerarse, tampoco para efectos de calcular la utilidad o pérdida fiscal a nivel individual o a nivel consolidado.

Lo anterior, pues lo que debe considerarse en la determinación del resultado fiscal consolidado es la utilidad fiscal de las sociedades controladas, la cual NO incluye de ninguna manera las cantidades por inventario acumulable.

Derivado de ello, si el inventario acumulable es un concepto que se adiciona posterior a la determinación de la utilidad fiscal, es evidente que el mismo tampoco debe ser considerado al momento de determinar el resultado fiscal consolidado.

Así las cosas, al ser el "inventario acumulable" un concepto que no constituye parte de la utilidad fiscal de las sociedades controladas, entonces no debe considerarse en la determinación del resultado fiscal consolidado en los términos del citado artículo.

Por lo tanto, el hecho de que mi mandante no haya considerado el inventario acumulable de su sociedad controlada [REDACTED] al determinar el resultado fiscal consolidado, contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas no contraviene lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, toda vez que de la citada disposición se desprende que para la determinación del resultado fiscal consolidado, únicamente se deberá considerar la utilidad fiscal de la sociedad controlada.

Por todo lo anterior, lo procedente será que esa H. Sala declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, al derivar de una incorrecta interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales.

C.4. No obstante que lo anterior es más que suficiente para evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues el inventario acumulable no es un ingreso para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por lo tanto no debe considerarse para determinar la utilidad fiscal consolidada, es importante mencionar que además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que para que un ingreso sea acumulable, resulta

112

indispensable que la Ley del impuesto sobre la Renta de manera expresa señale que se considera objeto del gravamen.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió lo siguiente:

"ESTÍMULOS FISCALES. TIENEN LA NATURALEZA DE SUBSIDIOS, PERO NO LA DE INGRESOS GRAVABLES, SALVO LOS CASOS QUE ESTABLEZCA EXPRESAMENTE EL LEGISLADOR. De los artículos 25 a 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la dotación al Estado Mexicano de bases constitucionales tendientes a modernizar la legislación de fomento, constituyendo los subsidios una de las medidas orientadas a ese propósito, esto es, promover el desarrollo económico de áreas prioritarias. Ahora bien, los estímulos fiscales comparten tanto la naturaleza como el destino de los subsidios, pues su enfoque y aplicación serán en actividades o áreas que, por razones económicas, sociales, culturales o de urgencia, requieran de una atención especial para el desarrollo nacional. En ese sentido, los estímulos fiscales, como herramienta de fomento económico, no pueden considerarse ingresos gravables para efectos fiscales, pues ello sería incongruente con su propósito de disminuir el monto de los impuestos a cargo del contribuyente; sin embargo, el legislador puede, en ejercicio de su potestad tributaria y con respeto a los principios constitucionales económicos, tributarios y de razonabilidad, establecer expresamente que dichos estímulos se graven y acumulen a los demás ingresos de los contribuyentes. Sólo en ese caso serán ingresos gravables."

Amparo directo en revisión 1037/2011. Delphi Automotive Systems, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García Martínez."

(Énfasis añadido).

De la tesis anteriormente transcrita, se desprende que en principio, los estímulos fiscales no se consideran ingresos, a menos que el legislador establezca expresamente en la ley los supuestos en que dichos estímulos se deban considerarse como ingresos acumulables.

Lo anterior, resulta aplicable por analogía al caso que nos ocupa, pues si bien las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2005 prevén la opción de que el inventario acumulable se adicione a la utilidad fiscal para efecto de determinar el resultado fiscal de una persona moral, también es cierto que en ningún momento la ley prevé de manera expresa que dicho concepto sea un ingreso acumulable para efectos de la determinación de la utilidad fiscal, y por tanto, resulta claro que el inventario acumulable no puede considerarse como un

ingreso acumulable objeto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas.

Al respecto, es importante mencionar que lo anterior tiene aplicación en el caso que nos ocupa, pues históricamente el régimen de consolidación fiscal tiene su origen en el propósito de conceder un incentivo fiscal, que se creó en un "Decreto de Estímulos" publicado en 1973, a favor de ciertas empresas o unidades económicas, denominadas de fomento que se consideraban como promotoras del desarrollo industrial y turístico del país, cuya participación se consideró que resultaba benéfica a la economía nacional.

Así, el beneficio de carácter económico concedido por el decreto a las empresas o unidades económicas, también tenía como finalidad la satisfacción de necesidades de interés nacional.

En este sentido, es plenamente aplicable por analogía el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí inserto, pues al ser la consolidación fiscal un tipo de estímulo o incentivo fiscal, es claro que para que un ingreso sea acumulable, así debe establecerlo expresamente el legislador.

Al no haberlo hecho así respecto a las cantidades correspondientes al inventario acumulable de las empresas controladas, es ilegal que las autoridades demandadas pretendan obligar a mi mandante a acumularlas para determinar su resultado fiscal consolidado, pues ello deriva de una indebida interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales, específicamente el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, en relación con el 68 de la referida Ley vigente en 2006.

Así, contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas, el inventario acumulable de [REDACTED] no debe considerarse para el cálculo de la utilidad fiscal consolidada del ejercicio, pues no constituye un ingreso acumulable al no encontrarse expresamente establecido como ingreso en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Derivado de lo anterior, al encontrarse indebidamente fundadas y motivadas las resoluciones impugnadas, lo procedente será que esa H. Sala declare la nulidad lisa y llana de las mismas, al haber sido emitidas en contravención al artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.

C.5. Robustece más aún todo lo anteriormente expuesto, el hecho de que para efectos del cálculo de los pagos provisionales consolidados, el inventario acumulable es un concepto que se adiciona a la utilidad fiscal de la sociedad controlada, es decir, que es posterior a la utilidad, conforme a lo establecido en la fracción V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para 2005.

Al respecto, la fracción V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, establece textualmente lo siguiente:

"Artículo Tercero.

(...)

V.

(...)

Para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, los contribuyentes deberán acumular a la utilidad fiscal la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago. Además, en el ejercicio de 2005, se acumulará mensualmente la doceava parte de la diferencia que resulte en los términos del inciso c) de esta fracción multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago.

[...]"

(Énfasis añadido)

De la transcripción anterior se desprende que la fracción V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, establece que para efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, los contribuyentes deberán acumular a la utilidad fiscal, la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago.

Asimismo, el artículo Vigésimo Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005-2006 establecía lo siguiente:

"Vigésimo. Los contribuyentes que no hubieran ejercido la opción de acumular los inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, publicadas en el DOF el 1 de diciembre de 2004, podrán ejercer la citada opción a más tardar el último día del mes de junio de 2005.

Cuando se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán acumular a la utilidad fiscal determinada para los efectos de los pagos provisionales, la parte del inventario acumulable que les corresponda de conformidad con el último párrafo de la fracción V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, publicadas en el DOF el 1 de diciembre de 2004, el impuesto que resulte deberá enterarse con la actualización y los recargos determinados de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. Para estos efectos, los contribuyentes deberán de presentar conjuntamente con el pago provisional del mes de junio de 2005, las



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 595 -

115

declaraciones complementarias correspondientes a cada uno de los pagos provisionales de los meses de enero a mayo de 2005."

(Énfasis añadido)

De la disposición transitoria transcrita anteriormente se desprende que para efectos de los pagos provisionales, los contribuyentes que decidan ejercer la opción establecida en el Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán acumular a la utilidad fiscal, la parte del inventario acumulable que corresponda.

En efecto, de las citadas disposiciones claramente se desprende que el inventario acumulable no constituye un concepto que se deba considerar para efectos de determinar la utilidad fiscal, sino un concepto acumulable que se adiciona posteriormente, pues incluso para efecto de determinar el pago provisional, los contribuyentes que hayan ejercido la opción establecida en la fracción V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, deberán acumular una parte del inventario acumulable a la utilidad fiscal que resulte al momento de determinar el pago provisional correspondiente.

Se afirma lo anterior, pues las propias disposiciones establecen que dicha parte deberá ser adicionada a la utilidad fiscal que derive de la determinación de los pagos provisionales, sin que por ello pueda considerarse al inventario acumulable como un ingreso acumulable, por lo que resulta evidente que es un concepto que no incide en la determinación de la utilidad fiscal.

Es decir, las disposiciones en comento establecen una ficción de acumulación de una determinada cantidad derivada del monto de los inventarios al 31 de diciembre de 2004, misma que no significa un ingreso acumulable que deba considerarse para efectos del cálculo de la utilidad fiscal, sino como la propia ley y la resolución miscelánea lo señalan, un concepto que se adiciona a la utilidad fiscal del contribuyente, una vez determinada dicha utilidad fiscal, para efectos de los pagos provisionales del mismo.

Lo anterior, pues si el legislador hubiera pretendido que el inventario acumulable formara parte de la determinación de la utilidad fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta establecería expresamente que dicho concepto tuviera el carácter de ingreso acumulable al inventario acumulable, situación que como ya se comentó, no ocurre, pues de lo contrario no se establecería que la doceava parte dicho concepto tuviera que adicionarse a la utilidad fiscal.

Por lo anterior, es claro que contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas, mi mandante no tiene la obligación de considerar el inventario acumulable de [REDACTED] para efectos de la determinación de su resultado fiscal consolidado, situación que queda en evidencia con el procedimiento para efectuar los pagos provisionales.

116

Lo anterior pues, se insiste, dicho concepto se adiciona a la utilidad fiscal de dicha sociedad controlada, es decir, no es un ingreso acumulable que se deba considerar para efectos del cálculo de la utilidad fiscal de la controlada, motivo por el cual resoluciones impugnadas se encuentran indebidamente fundadas y motivadas.

Derivado de lo anterior, esa H. Sala deberá declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

CUARTO. VIOLACIÓN DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS AL ENCONTRARSE INDEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS EN CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL DESESTIMAR LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA POR [REDACTED]

Por último, en el presente Concepto de Impugnación se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, al no fundar y motivar el por qué se desestimó el valor de la declaración complementaria presentada por la empresa controlada [REDACTED] el 14 de mayo de 2013.

A. En primer lugar, solicito tener por reproducido como si a la letra se insertase lo expuesto en el apartado A. del Primer Concepto de Impugnación de la presente demanda de nulidad, en relación con las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, así como la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir.

B. Por otra parte, a efecto de evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, es necesario transcribir la parte conducente que causa agravio a mi mandante.

Al respecto, en la resolución contenida en el oficio 900-05-2013-48229, la autoridad demandada señala medularmente lo siguiente:

"Del estudio a sus argumentos citados anteriormente por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su escrito sin fecha de emisión recibido el día 06 de junio de 2013 en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, en alcance a su escrito de fecha 1º de febrero (sic) de 2013, recibido el 31 de enero de 2013, se conoció que aun cuando su sociedad controlada [REDACTED] haya presentado con fecha 14 de mayo de 2013, declaración anual complementaria del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, la misma no desvirtúa las observaciones consignadas en el oficio número 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, referido en el inciso j) de la

117

página 5 del presente oficio, por lo que al respecto, se hace de su conocimiento la siguiente determinación:

Cabe señalar que efectivamente [REDACTED] presentó declaración anual complementaria del ejercicio 2006, a través de la cual, disminuye su utilidad fiscal individual, en virtud de que elimina el inventario acumulable de los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por la contribuyente revisada, en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, irregularidad determinada por esta Administración, y dada a conocer a través del oficio de observaciones emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente adscrita a esta Administración mediante oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, señalado en el inciso j) de la página 5 de esta resolución, no obstante lo anterior, la irregularidad subsiste, por lo señalado en las páginas 65 a 76 de esta resolución.

Al respecto, resulta importante señalar que mediante escrito de fecha de emisión, presentado en la Oficialía de partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, al que le correspondió el folio de entrada número 130020045, señalado en las páginas 72 a 74 de esta resolución, la contribuyente revisada, manifestó que había corregido su situación fiscal respecto de sus pagos provisionales consolidados, observación que se le dio a conocer mediante el oficio de observaciones señalado en el párrafo anterior, sumando a la utilidad fiscal consolidada estimada determinada de conformidad con el segundo párrafo del artículo 77 del Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago correspondiente, determinada por su sociedad controlada [REDACTED] en los términos de la fracción V del artículo 13 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005.

De lo anterior, se desprende que es la propia controladora revisada que reconoce, con motivo de dicha autocorrección, que el inventario acumulable correspondiente al ejercicio de 2006, determinado por su sociedad controlada [REDACTED], si es un ingreso acumulable de conformidad con lo dispuesto en la citada fracción V del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005, es por ello que esta Administración además de los argumentos vertidos, concluye que la irregularidad persiste y al contribuyente revisada debió sumar la utilidad fiscal individual de la citada sociedad controlada



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 597 -

118

Incluyendo el inventario acumulable del ejercicio 2006.

Es por ello que la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] no desvirtuó la omisión respecto a la modificación de la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] al no incluir el inventario acumulable determinado por esa sociedad controlada, en el cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en términos de la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al proporcionar la declaración complementaria del impuesto sobre la renta del ejercicio de 2006 presentada el 14 de mayo de 2013 por la sociedad controlada.

Asimismo, en la resolución contenida en el oficio 900-05-2013-48229, la autoridad demandada señala medularmente lo siguiente:

"No se desvirtúan los fundamentos y motivos que tuvo la fiscalizadora para desestimar la declaración complementaria que presentó su controlada [REDACTED]

Bajo tal contexto, se desprende en primer lugar que no subsiste una conducta omisiva como lo menciona su mandante en el sentido de que la fiscalizadora no expuso las razones por las cuales no eran desvirtuadas las observaciones encontradas, pues como se ha reseñado en los puntos anteriores, si se indicaron los motivos, razones y circunstancias por las que se llegó a esa conclusión.

Aunado a lo expuesto, esta autoridad observa que subsiste la legalidad de la resolución impugnada al no combatirse los fundamentos y motivos que tuvo la fiscalizadora para desestimar la declaración complementaria que fue presentada por su empresa controlada [REDACTED] esencialmente porque en el agravio que marca como décimo séptimo de su escrito de revocación únicamente alega una supuesta omisión de los fundamentos y motivos considerados por la autoridad y que ante la declaración complementaria de su empresa controlada, esa controladora no tenía obligación de incluir en la utilidad fiscal consolidada de 2006 el inventario acumulable aludido por la autoridad, puesto que este fue disminuido.

(...)

Consecuentemente, para esta autoridad subsiste la legalidad de la resolución combatida en términos del artículo 68, del Código Fiscal de la Federación, pues no se combaten los motivos y fundamentos que tuvo la autoridad fiscal para desestimar la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013, por [REDACTED]

119

II. La declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013, por [REDACTED] no puede surtir efectos en los términos propuestos en el recurso de revocación.

No obstante que lo razonado en el punto anterior para esta autoridad es suficiente para confirmar la legalidad de la resolución impugnada se exponen a continuación los razonamientos por los cuales no es dable valorar la prueba consistente en la declaración complementaria presentada por [REDACTED] en los términos propuestos en la presente instancia.

Por principio de cuentas, resulta oportuno precisar en qué consiste el régimen de consolidación, destacando algunos de sus principales efectos, en correlación con los preceptos legales que regulan dicho sistema:

En tal virtud se advierte que el régimen de consolidación fiscal, evidencia la estrecha vinculación jurídico-económica entre las sociedades controladora y las controladas, en virtud de que el cálculo del impuesto, que de manera consolidada se debe cubrir al fisco, lo que pone de manifiesto que las disposiciones legales dirigidas a la controladora repercuten en la controlada y viceversa, las dirigidas a la controlada repercuten en la controladora, pues corre a cargo de esta la obligación de determinar el resultado fiscal consolidado, el cual no se lograría sin la participación económica y jurídica, desde el punto de vista tributario, de la controlada.

El artículo 64, de la Ley del Impuesto sobre la Renta precisa sobre el resultado fiscal consolidado lo siguiente:

"Artículo 64." (Se transcribe)

Derivado de lo anterior, corresponde a la sociedad controladora determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, de acuerdo al artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que literalmente indica:

"Artículo 68" (Se transcribe)

En ese tenor, el régimen de consolidación es un régimen con características especiales, en el que la sociedad que ejerce el control del grupo de consolidación (sociedad controladora) en representación de las demás empresas (sociedades controladas) paga en conjunto los impuestos a cargo del grupo de empresas que lo integran.

Esto es, la sociedad controladora se obliga a determinar el tributo del grupo de empresas que integra el régimen de consolidación, por la participación consolidable, siempre y cuando haya

ejercido la opción de consolidación a que se refiere el segundo párrafo, del artículo 64, antes transcrito.

Por ello, es que contrario al sistema general de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el cual cada persona moral (contribuyente) en lo individual debe calcular su resultado fiscal del ejercicio, disminuyendo a sus ingresos acumulables las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores (artículo 10), dentro del régimen de consolidación fiscal el impuesto consolidado (o sea, el que corresponde a la unidad económica formada por el conjunto de sociedades individuales en la parte que consolida) se determina y se paga por la sociedad controladora de conformidad con lo siguiente:

En estas circunstancias, en virtud de que el grupo de consolidación es una unidad económica o un todo, por consiguiente, por la parte que consolide fiscalmente se deberá determinar un solo resultado fiscal consolidado, el cual abarcará los resultados fiscales de la sociedad controladora y de las sociedades controladas en cuanto a la participación consolidable.

Ahora bien, el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación señala textualmente:

"Artículo 32." (Se transcribe)

El numeral de referencia en atención al principio de autodeterminación de los tributos establece la posibilidad de que los causantes hasta en tres ocasiones modifiquen sus declaraciones de impuestos, sin embargo tales declaraciones no tendrán efectos jurídicos cuando se presenten una vez iniciadas las facultades de comprobación.

Sin embargo, el citado numeral establece una excepción y consiste en que las declaraciones complementarias podrán ser presentadas más de tres veces y aún iniciadas las facultades de comprobación, cuando solo los causantes incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades, disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta, cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo, y cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de Ley.

También se desprende que aquellas declaraciones complementarias que tengan repercusión en el ejercicio revisado, por las autoridades fiscales no tendrán efectos jurídicos.

En esa virtud, el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación traído al régimen de consolidación fiscal debe ser interpretado tomando en consideración que la empresa controladora y sus controladas constituyen una unidad económica que tributan bajo un esquema de beneficio que permite amortizar pérdidas fiscales en el mismo ejercicio en que son generadas, ocasionando con ello el diferimiento del impuesto.

En otras palabras, las declaraciones complementarias de las empresas controladas que repercutan en el resultado fiscal consolidado modificando su utilidad o pérdida fiscal individual, no tendrán efectos jurídicos una vez que hayan sido iniciadas las facultades de comprobación a la empresa controladora (siempre y cuando no se ubiquen en los supuestos legales de excepción), pues la intención del legislador con la inclusión de ese precepto legal fue la de no obstaculizar o limitar el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales lo cual ocurre en consolidación con la modificación en la declaración de las empresas controladas considerando las particularidades de ese régimen.

Lo anterior se robustece si consideramos que el propio artículo 32, del Código Fiscal de la Federación establece que "Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda lo que se traduce en que ninguna otra declaración complementaria tendrá efectos jurídicos, salvo lo dispuesto en ese mismo numeral.

En tal contexto jurídico, esta autoridad fiscal valora en términos del artículo 120, del Código Fiscal de la Federación la prueba consistente en la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por [REDACTED] y concluye que dicha documental fue presentada una vez que la autoridad fiscal inicia las facultades de comprobación a la empresa controladora [REDACTED] por el ejercicio fiscal 2006.

Por lo que siendo que esa declaración tuvo repercusión en el resultado fiscal consolidado al disminuir la utilidad fiscal de la empresa controlada [REDACTED] en cantidad de \$1,559'028,827, es que a consideración de esta autoridad no puede tener efecto jurídico acorde a la interpretación efectuada al artículo 32, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el marco jurídico que rige el régimen de consolidación fiscal, en específico el artículo 68, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 599 -

122

Lo anterior, especialmente porque la declaración complementaria de [REDACTED] no se ubica en las hipótesis de excepción establecidas en el artículo 32, del Código Fiscal de la Federación, y en consecuencia, no tiene ningún efecto jurídico.

Adicionalmente, se advierte por el dicho de esa recurrente (foja 246 último párrafo del escrito de revocación) que en la declaración complementaria de 14 de mayo de 2013, [REDACTED] disminuyó el inventario acumulable declarado en cantidad de \$1,559,028,827, porque únicamente consideró en la declaración del ejercicio 2006, los ingresos derivados de la enajenación de dicho inventario, es decir, no se aprecia que se hubiera corregido la situación fiscal de esa recurrente, sino únicamente que se disminuyó el inventario acumulable de la utilidad fiscal de la controlada porque a su parecer no constituía ingreso, lo cual a consideración de esta autoridad es incorrecto por los motivos precisados a lo largo de la presente resolución y, en específico, donde se da la respuesta al agravio sujeto a estudio, prevaleciendo entonces la legalidad del acto combatido."

De lo anterior, se desprende que las autoridades demandadas, partieron de las siguientes premisas a efecto de desestimar la declaración complementaria presentada por [REDACTED]

a) Que si bien [REDACTED] presentó una declaración complementaria en la que disminuyó su utilidad fiscal individual, al eliminar el inventario acumulable de los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, a su parecer ello fue con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por mi mandante en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, por lo que la irregularidad determinada subsiste.

b) Que la declaración complementaria presentada el 14 de mayo por [REDACTED] no puede ser valorada en los términos propuestos por mi mandante, pues el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, traído al régimen de consolidación fiscal debe ser interpretado tomando en consideración que la empresa controladora y sus controladas constituyen una unidad económica, y que las declaraciones complementarias de las empresas controladas que repercutan en el resultado fiscal consolidado modificando su utilidad o pérdida fiscal individual, no tendrán efectos jurídicos una vez que hayan sido iniciadas las facultades de comprobación a la empresa controladora, a efecto de no limitar el ejercicio de facultades de comprobación.

Sin embargo, a continuación se evidenciará la ilegalidad de dichas premisas, pues carece de todo fundamento el desestimar la declaración complementaria de [REDACTED]

C. En primer lugar, se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, al sostener la autoridad liquidadora que no le podía dar valor probatorio a la declaración complementaria presentada por [REDACTED]

123

[REDACTED] el 14 de mayo de 2013, pues a su parecer ello fue con el único motivo de equiparar su utilidad fiscal a la de mi mandante, al disminuir de la utilidad únicamente las cantidades correspondientes al inventario acumulable.

Al respecto, la autoridad resolutora del recurso convalidó la legalidad de la resolución recurrida, pues a su parecer la autoridad sí expuso los motivos y fundamentos que la llevaron a concluir de tal manera.

Sin embargo, de la simple lectura que esa H. Sala efectúe a las resolución contenida en el oficio 900-05-2013-48229, se podrá percatar que la autoridad demandada en ningún momento fundamenta ni motiva en ninguna disposición legal su actuar en el sentido de desestimar la declaración complementaria presentada por [REDACTED] evidenciando así la ilegalidad de la resolución impugnada al carecer de toda fundamentación y motivación.

En efecto, la autoridad demandada decide desestimar de plano el valor probatorio de la declaración complementaria que nos ocupa, sin fundarse en un precepto legal que le permita llevar a cabo tal acción en contra de mi mandante, lo cual es a todas luces ilegal por arbitrario.

Sin que sea óbice a lo anterior, que la autoridad demandada haya señalado que desestima la declaración complementaria que nos ocupa, pues a su parecer ello fue con el único objetivo de equiparar la utilidad fiscal de la empresa controlada a la de mi mandante.

Lo anterior, pues aun suponiendo sin conceder que ello haya sucedido así, no existe precepto legal alguno en el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta o cualquier otra disposición fiscal que le permita a una autoridad fiscalizadora desestimar el valor probatorio de una declaración complementaria, por el simple hecho de que haya sido presentada con un objetivo determinado, específicamente el equiparar la utilidad de una empresa controlada a la de su controladora.

Máxime, que si [REDACTED] efectuó tal modificación de su utilidad fiscal, fue porque como se ha venido exponiendo a lo largo de la presente demanda de nulidad, el inventario acumulable no es un ingreso que modifique positivamente el patrimonio de los contribuyentes.

Así, con base en el principio general del derecho y el principio de legalidad conforme a los cuales las autoridades únicamente pueden hacer lo que les esté expresamente permitido, y que los gobernados pueden hacer todo menos lo que les esté expresamente prohibido, en el caso que nos ocupa la autoridad fiscal de ninguna manera podía desestimar el valor de la declaración complementaria presentada por [REDACTED] pues no existe precepto legal que así se lo permita, y la referida contribuyente estaba en todo su derecho a corregir su situación a través de la presentación de una declaración complementaria.

Derivado de lo anterior, es clara la ilegalidad de la resolución determinante del crédito fiscal al carecer de todo fundamento, así como la resolución en la que

se resolvió el recurso de revocación interpuesto por mi mandante al sostener que la autoridad fiscalizadora sí había señalados los fundamentos, motivos y circunstancias que la llevaron a desestimar la declaración complementaria presentada por [REDACTED]

Por lo anterior, esa H. Sala deberá declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al carecer de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir.

D. Ahora bien, en la resolución al recurso de revocación contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797, la autoridad resolutora expone los razonamientos por los cuales a su parecer no es dable valorar la prueba consistente en la declaración complementaria presentada por [REDACTED] en los términos propuestos.

Al respecto, medularmente sostiene que de su interpretación al artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, traído al régimen de consolidación fiscal, debe ser interpretado tomando en consideración que la empresa controladora y sus controladas constituyen una unidad económica, y que las declaraciones complementarias de las empresas controladas que repercutan en el resultado fiscal consolidado modificando su utilidad o pérdida fiscal individual, no tendrán efectos jurídicos una vez que hayan sido iniciadas las facultades de comprobación a la empresa controladora, a efecto de no limitar el ejercicio de facultades de comprobación.

(i) No obstante, en primer lugar esa H. Sala no podrá pasar por alto la ilegalidad de dicha resolución, al pretender modificar el acto impugnado mejorando su fundamentación, sin que ello le esté permitido por el Código Fiscal de la Federación.

En efecto, en el primer apartado del presente Concepto de Impugnación, se expuso que la resolución primigenia carece de fundamentación y motivación, pues la autoridad liquidadora no razonó ni fundamentó en una disposición legal su decisión de desestimar el valor probatorio de la declaración complementaria presentada por [REDACTED]

Sin embargo, en la resolución al recurso de revocación, la autoridad resolutora expone un apartado específico exponiendo las razones por las cuales a su parecer no es dable valorar la prueba consistente en la declaración complementaria presentada por [REDACTED] efectuando una interpretación «ilegal» del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación en relación al régimen de consolidación.

Al respecto, tal actuar de la autoridad es del todo ilegal, pues el modificar una resolución recurrida en perjuicio del contribuyente no está permitido en términos del artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, mismo que se transcribe para dar mayor claridad:

“Artículo 133. La resolución que ponga fin al recurso podrá:

125

I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso.

II. Confirmar el acto impugnado.

III. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución.

IV. Dejar sin efectos el acto impugnado.

V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Quando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana.”

De la transcripción anterior, se desprende que al momento de resolver un recurso de revocación, las autoridades fiscales pueden resolver desechar el recurso, confirmar el acto impugnado, mandar que se emita una nueva resolución, dejar sin efectos el acto impugnado, o modificarlo.

Esta última manera de resolver —modificar el acto impugnado— únicamente puede suceder cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

En el caso que nos ocupa, la autoridad resolutora modificó el acto impugnado mejorando su fundamentación. Ello, no obstante que el recurso fue resuelto de manera totalmente desfavorable a mi mandante.

Así, es que la resolución al recurso de revocación se encuentra revestida de ilegalidad, al modificar el acto impugnado sin que ello le estuviera permitido por el Código Fiscal de la Federación.

Por lo anterior, las resoluciones impugnadas se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, en contravención al artículo 38, fracción IV en relación con el 133 del Código Fiscal de la Federación.

(ii) Asimismo, suponiendo sin conceder que esa H. Sala considere que la autoridad resolutora podía válidamente modificar la resolución al recurso, no obstante esta haya sido emitida de manera totalmente desfavorable a mi mandante, aun en ese supuesto los razonamientos expuestos por dicha autoridad para no dar valor probatorio a la declaración complementaria de [REDACTED] son ilegales.

En efecto, la autoridad demandada señala que la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por [REDACTED] no puede ser valorada en los términos propuestos por mi mandante, pues el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, traído al régimen de consolidación fiscal debe ser interpretado tomando en consideración que la empresa controladora y sus controladas constituyen una unidad económica, y



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 601 -

126

que las declaraciones complementarias de las empresas controladas que repercuten en el resultado fiscal consolidado modificando su utilidad o pérdida fiscal individual, no tendrán efectos jurídicos una vez que hayan sido iniciadas las facultades de comprobación a la empresa controladora, a efecto de no limitar el ejercicio de facultades de comprobación.

Sin embargo, tal interpretación que efectúa la autoridad demandada es del todo ilegal en perjuicio de mi mandante, pues no obstante como señala la autoridad demandada el régimen de consolidación fiscal se traduce en que las sociedades que lo conforman tributen como una unidad económica, ello es únicamente para efectos de integrar un resultado fiscal consolidado y el entero del impuesto correspondiente, sin que las sociedades pierdan personalidad jurídica o se confundan los derechos y obligaciones que cada una de las sociedades controladas y la controladora tengan en lo individual.

Tan es así, que tanto la empresa controladora como las controladas tienen la obligación en términos del artículo 64^{1o} de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, de presentar su declaración del ejercicio.

En este sentido, si bien mi mandante en su calidad de controladora y [REDACTED] como controlada conforman una unidad económica, ello es únicamente para efectos del entero del resultado fiscal consolidado, pero sin que ello implique confusión de sus derechos y obligaciones, pues subsiste cada una con personalidad jurídica propia.

Tomando como base esta premisa, es del todo ilegal que la autoridad fiscal pretenda encuadrar la declaración presentada por [REDACTED] con el supuesto de falta de efectos de una declaración contenida en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir de 2009.

A efecto de dar mayor claridad, a continuación se transcribe la referida disposición:

"Artículo 32. Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de tres ocasiones las declaraciones correspondientes, aun cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, en los siguientes casos:
I. Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades.

1o Artículo 64. Para los efectos de esta Ley, se consideran sociedades controladoras las que reúnan los requisitos siguientes:

(...)

La sociedad controladora y las sociedades controladas, presentarán su declaración del ejercicio en los términos de los artículos 72 y 76 de esta Ley, y pagarán, en su caso, el impuesto que resulte en los términos del artículo 10 de la misma.

127

II. Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta.

III. Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo.

IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de Ley.

La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo, se efectuará mediante la presentación de declaración complementaria que modifique los datos de la original.

Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda, debiendo pagarse las multas que establece el citado artículo 76.

Se presentará declaración complementaria conforme a lo previsto por el quinto párrafo del artículo 144 de este Código, caso en el cual se pagará la multa que corresponda, calculada sobre la parte consentida de la resolución y disminuida en los términos del séptimo párrafo del artículo 76 de este ordenamiento.

Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que correspondía, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 21 de este Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago."

De lo anterior, se desprende que las declaraciones complementarias que presenten los contribuyentes son definitivas y solo se podrán modificar hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, salvo en ciertos casos.

En el caso que nos ocupa, mi mandante [REDACTED] no presentó ninguna declaración complementaria en la que disminuyera utilidad alguna, sino que fue [REDACTED] la entidad que presentó la declaración complementaria.

Situación la anterior a la cual estaba en todo su derecho, pues [REDACTED] no es sujeto del ejercicio de facultades de comprobación que derivaron en la determinación del crédito fiscal a cargo de mi mandante.

En este sentido, es clara la ilegalidad de la resolución impugnada al pretender encuadrar la declaración complementaria presentada por [REDACTED]

el supuesto previsto por el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación consistente en que una vez iniciadas las facultades de comprobación no tendrán efectos jurídicos.

Lo anterior, pues en primer lugar las facultades de comprobación no fueron ejercidas respecto de la empresa [REDACTED] sino sobre mi mandante [REDACTED].

Asimismo, la autoridad fiscal pretende encuadrar el supuesto consistente en que una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación, no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando.

Lo anterior, pues en primer lugar dicha disposición se refiere a que no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes, si es que tienen una repercusión en el ejercicio revisado.

Situación la anterior que no se actualiza en el caso que nos ocupa, pues [REDACTED] no presentó ninguna declaración de ejercicios anteriores a ser valorada por la autoridad fiscal.

Así, es ilegal que la autoridad demandada pretenda interpretar el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, en relación a su teoría de unidad económica bajo el régimen de consolidación en el sentido de que cualquier declaración complementaria de cualquier sociedad que tenga repercusión en el ejercicio revisado por las autoridades fiscales no tendrán efectos jurídicos, pues ello es una interpretación por demás arbitraria, excesiva y contraria a derecho.

Como hemos señalado, conforme al principio de legalidad las autoridades fiscales únicamente pueden hacer lo que les está expresamente permitido por la ley, por lo que si el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación expresamente establece que no tendrán efectos fiscales las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que tengan repercusiones en el ejercicio revisado —al contribuyente en cuestión evidentemente—, ello no le permite a la autoridad fiscal eliminar los efectos que a su arbitrio tengan repercusión en un ejercicio revisado a otro contribuyente.

Derivado de lo anterior, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al haber sido emitidas conforme a una incorrecta interpretación y aplicación del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad demandada se excede de manera arbitraria al pretender encuadrar la declaración complementaria presentada por [REDACTED] en el supuesto de no surtimiento de efectos del artículo 32.

En este sentido, es ilegal que se haya determinado un crédito fiscal a mi mandante en su calidad de sociedad controladora, no obstante se corrigió la utilidad fiscal de la sociedad controlada [REDACTED].

situación que fue hecha del conocimiento de la autoridad fiscalizadora con anterioridad a la determinación del crédito fiscal.

Por todo lo anterior, lo procedente será que esa H. Sala declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, al derivar de una incorrecta interpretación de las disposiciones fiscales.

QUINTO. ILEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS AL ENCONTRARSE INDEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS EN VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN A LOS SUPUESTOS EFECTOS DE LLA PRESENTACION ANUAL POR CORRECCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006 DE LA SOCIEDAD CONTROLADA [REDACTED]

En el presente agravio quedará evidenciada la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, al sostener que mi mandante debió reconocer a nivel consolidado los efectos de la declaración por corrección presentada por su sociedad controlada [REDACTED] en el ejercicio de 2006.

Lo anterior, pues las autoridades demandadas son omisas en señalar los fundamentos y motivos por los cuales mi mandante debía modificar su resultado fiscal consolidado, además de no haber hecho de su conocimiento el derecho que le asistía a corregir su situación fiscal.

A. En primer lugar, solicito tener por reproducido como si a la letra se insertase lo expuesto en el apartado A. del Primer Concepto de impugnación de la presente demanda de nulidad, en relación con las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, así como la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir.

B. Por otra parte, a efecto de evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, es necesario transcribir la parte conducente que causa agravio a mi mandante.

Al respecto, en la resolución contenida en el oficio 900-05-2013-48229, la autoridad demandada señala medularmente lo siguiente:

"Del estudio a los argumentos manifestados por la contribuyente en su escrito del 1 de febrero (sic) de 2010, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, en relación a las observaciones dadas a conocer en el oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, respecto a que [REDACTED] antes [REDACTED] se conoció que omitió reconocer en el resultados fiscal consolidado la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio del 2006 y como consecuencia



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 603 -

130

omitir un impuesto sobre la renta consolidado, por lo que de la revisión a la información proporcionada por esa contribuyente y por el Contador Público Dictaminador, en el transcurso de la revisión y la que obra en el expediente administrativo abierto en esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, y que se hace referencia en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad determina que la observación no fue desvirtuada por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a su argumento, citado en la nota 2 del mencionado escrito del 1 de febrero de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, mismo que ya fueron transcritos anteriormente en la página 49 del presente oficio, y en los que medularmente precisa y reconoce el L.A.E. en su carácter de representante legal de la contribuyente, actualmente la falta de presentación de la declaración anual complementaria del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio en revisión, en la que reconozca en su resultado fiscal consolidado la modificación a la utilidad fiscal de sus sociedad controlada, en la participación consolidable, y que en su respuesta al oficio de observaciones antes citado, señala que dicha declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio en revisión: "...se encuentra en proceso de la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006, en donde reconozca los efectos de la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la presentación de la declaración complementaria de la controlada".

Lo cierto es que, actualmente, a la fecha del presente oficio no ha presentado la citada declaración.

Ahora bien, en virtud a todo lo anterior, como resultado de la revisión efectuada, está administrativamente determinada que, en su carácter de sociedad controladora omitió reconocer en el resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada del ejercicio 2006 de \$163'473,885, a \$167'332,432, manifestada en la declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010, toda vez que dicha sociedad disminuyó el monto manifestado en el renglón de la misma, denominado deducciones autorizadas.- gastos generales, en cantidad de \$3'849,567.

131

Lo anterior, considerando que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria del Impuesto sobre la Renta Consolidado, reconociendo el efecto en la consolidación por la determinación y modificación efectuada por esta autoridad a la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada.

como resultado al inicio de facultades de comprobación, modificando la utilidad fiscal consolidada del ejercicio, y en consecuencia omitió un impuesto sobre la renta consolidado para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a), tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 y 72, primer párrafo, fracción III de la Ley en comento vigente en 2010, mismos que disponen lo siguiente:

(se transcribe)
(...)

Asimismo, en la resolución contenida en el oficio 900 04 05-2015-17797, la autoridad demandada resolvió medularmente conforme a lo siguiente:

"(...)

Bajo ese contexto, se advierte en primer término que contrario a lo aducido por esa recurrente, la autoridad fiscalizadora sí señaló el supuesto legal que previene la obligación de esa empresa controladora de modificar mediante declaración anual complementaria el resultado fiscal consolidado, en el que se debe tomar en cuenta la modificación de sus controladas, en este caso, de la empresa

En efecto, la fiscalizadora sustentó su actuación - entre otros- en el artículo 72, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente en 2010), que indica:

(se transcribe)

El numeral de referencia claramente señala que cuando haya modificación de la utilidad de una empresa controlada, ya sea por declaración complementaria de éstas o por corrección fiscal efectuada por las autoridades en ejercicio de sus facultades de comprobación, la empresa controladora tendrá la obligación de presentar la declaración complementaria de consolidación donde haga las modificaciones a que haya lugar.

(...)

Tampoco le asiste la razón a esa recurrente al argumentar que la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se limitó a indicar en la resolución combatida que "esta autoridad determina que la observación no fue desvirtuada por la contribuyente",

ello sin efectuar los razonamientos a través de los cuales hubiese arribado a tal conclusión.

Lo anterior, porque de la simple lectura al oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, mismo que constituye el acto recurrido en el presente medio de defensa, se advierte que la autoridad no se limitó como dice esa recurrente a afirmar que esta autoridad determina que la observación no fue desvirtuada por la contribuyente, pues en las fojas 48 a 50 del citado oficio se mencionó:

(...)

Lo anterior, sin que en el procedimiento de fiscalización, ni en el presente medio de defensa se hubiere exhibido la declaración complementaria, a la que hizo alusión esa recurrente, razón por la que subsistió la omisión observada por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, siendo que en la resolución combatida se señalaron los fundamentos y motivos en los que se sustenta dicha determinación, por lo que no subsisten las violaciones alegadas en su recurso de revocación.

Finalmente, resulta infundado el argumento donde esa recurrente aduce que en el oficio de observaciones no se hizo de su conocimiento la posibilidad que tenía para corregir su situación fiscal, respecto del punto en controversia, en términos de la Ley de los Derechos del Contribuyente.

En primer lugar, esta autoridad aprecia que en el oficio de observaciones levantado por las autoridades fiscales, no es obligación la de señalar en términos de la Ley de los Derechos del Contribuyente, la posibilidad que éstos tienen de corregir su situación fiscal.

Efectivamente, los artículos 12 y 13 de la Ley de los Derechos del Contribuyente señalan:

(se transcribe)

En esa medida, del estudio al expediente administrativo que esa recurrente ofreció como prueba, se desprende que mediante oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, la autoridad fiscal solicitó diversa documentación a esa recurrente a efecto de llevar a cabo sus facultades de comprobación, es decir, dicho oficio constituye el inicio de facultades de comprobación en que se sustenta la resolución definitiva que se controvierte en el presente medio de defensa.

La notificación del oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, se llevó a cabo el día 28 de junio de 2011, y en el acta respectiva se hizo constar *...se le entrega el original con firma autógrafa del oficio antes mencionado, así como copia de la presente acta y en cumplimiento al artículo 2, primer párrafo, fracción XII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente auditado vigente, la*

cual contiene sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley antes citada.

De lo anterior, se desprende que las autoridades demandadas consideraron medularmente lo siguiente, a efecto de determinar que mi mandante omitió en la determinación del resultado fiscal consolidado la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED]

a) Que derivado de la revisión efectuada a la sociedad controlada [REDACTED] esta modificó su utilidad fiscal presentando una declaración por corrección fiscal del ejercicio 2006.

b) Que de conformidad con el artículo 72, fracción III vigente en 2006, mi mandante en su calidad de controladora debió presentar una declaración complementaria de consolidación.

c) Que la autoridad liquidadora no omitió informar a mi mandante de su derecho a corregir su situación fiscal en términos de la Ley de Derechos del Contribuyente, pues ello le fue informado al momento de iniciar las facultades de comprobación a través de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado Vigente.

Sin embargo, a continuación se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, al encontrarse indebidamente fundadas y motivadas.

C. Son ilegales las resoluciones recurridas al sostener que mi mandante omitió presentar declaración complementaria de consolidación derivado de la corrección efectuada por su empresa controlada [REDACTED] pues dicha consideración se encuentra indebidamente fundada y motivada.

Lo anterior, pues contrario a lo sostenido por las autoridades demandadas, tanto la resolución liquidatoria como la recurrida causan inseguridad jurídica a mi mandante, al no saber con certeza conforme a qué disposición fundan la supuesta omisión de presentar la declaración complementaria.

En efecto, de la lectura que esa H. Sala se sirva efectuar a la resolución liquidatoria contenida en el oficio número 900-05-2013-48229, se desprende que la misma pretende fundar su ilegal actuar en los artículos 68, fracción I, inciso a), tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, y 72 fracción III de la referida Ley vigente en 2010.

Asimismo, en la resolución al recurso de revocación, la autoridad resolutora justifica el actuar de la recurrida al señalar que esta fundó y motivó debidamente su resolución en el artículo 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010.

De ahí la ilegalidad de la resolución impugnada, pues la norma en la que en todo caso debió fundar y motivar su actuación, era la vigente en 2006, no así en 2010.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 605 -

134

Al respecto, de conformidad con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación¹⁶, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

Asimismo, señala que las contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

De conformidad con lo anterior, es claro que en el caso que nos ocupa, no obstante la sociedad controlada [REDACTED] presentó su declaración complementaria el 14 de julio de 2010 (situación que es reconocida por la autoridad demandada a foja 45 del oficio 900-05-2013-48229) lo cierto es que la contribución causada en virtud de dicha declaración corresponde al ejercicio fiscal de 2006 y, por tanto, la norma que rige su causación es la correspondiente a 2006, no así 2010.

Derivado de lo anterior, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al encontrarse indebidamente fundadas y motivadas con base en una ley que no se encontraba vigente al momento de causación de las contribuciones.

Lo anterior, pues en todo caso la ley que debe regir sobre si mi mandante como controladora debe presentar declaración complementaria derivado de la diversa presentada por su sociedad controlada, es la vigente en 2006.

Por lo anterior, esa H. Sala deberá declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

No obstante la ilegalidad de las resoluciones recurridas, se hace del conocimiento de esa H. Sala que mi representada se encuentra en proceso de la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006, en donde se reconocen los efectos de la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la presentación de la declaración complementaria de la controlada Procuraduría de Cobranza Judicial.

D. En efecto, suponiendo sin conceder que mi mandante deba presentar una declaración complementaria derivado de la corrección llevada a cabo por la sociedad controlada [REDACTED] en el presente apartado se evidenciará la ilegalidad de las resoluciones impugnadas pues contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas, la autoridad fiscal fue omisa en informarle a mi mandante del derecho que tenía para corregir su situación

¹⁶ Artículo 6. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

135

fiscal, en contravención al artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en relación con su Artículo Segundo Transitorio, es una obligación para todas las autoridades fiscales al momento de iniciar sus facultades de comprobación, informar al contribuyente del derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer tal derecho.

A efecto de dar mayor claridad a lo anterior, a continuación se transcriben dichas disposiciones:

"Artículo 13.- Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado."

"Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades fiscales realizarán una campaña masiva para difundir las nuevas disposiciones contenidas en la misma.

"Artículo Segundo.- Las disposiciones previstas en la presente Ley, sólo serán aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento."

Tal y como podrá advertir esa H. Sala, el Artículo Segundo Transitorio del referido ordenamiento instituye que las disposiciones establecidas en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente serán aplicadas en el ejercicio de facultades de comprobación de todas las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, lo cual ocurrió un mes después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005.

En este sentido, resultaba obligatorio para el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente estar a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en la cual de manera expresa se exige que en la primera solicitud de información (primer acto con que inicia las facultades de revisión de gabinete) se informe al contribuyente del derecho que le asiste de corregir su situación fiscal.

En consecuencia, el incumplimiento de dicho requisito ocasiona una violación directa e inmediata a los derechos de mi mandante como gobernado y como contribuyente.

En este sentido, las resoluciones impugnadas son ilegales al derivar de un procedimiento viciado de origen, ya que la autoridad fiscal omitió señalar el

derecho que tenía mi mandante para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho consagrado a su favor en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente.

Tal y como esa H. Sala Fiscal podrá observar de la solicitud de datos y documentos, en momento alguno el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente informó del derecho establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, no obstante, que esta es una obligación para toda autoridad fiscal al momento de iniciar sus facultades de comprobación y constituye un derecho a favor de mi representada.

De tal manera que, las resoluciones impugnadas, al derivar de un procedimiento en el que no se señaló al inicio en la misma el derecho que le otorga a mi mandante como contribuyente el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, siendo este "el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado", violan con ello lo establecido por el artículo 16 constitucional y por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto las tesis jurisprudenciales emitidas por los Órganos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyos rubros y textos se citan a continuación:

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA SU ILEGALIDAD. SI NO SE SEÑALA EN LA MISMA EL DERECHO QUE LE OTORGA AL CONTRIBUYENTE EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE.- De conformidad con lo establecido por el artículo 16 constitucional y por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las ordenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas, así como expresar el objeto o propósito de que se trate. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que entró en vigor el 23 de julio de 2005, cuando las autoridades fiscales ejercen sus facultades para comprobar las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, **DEBERÁN INFORMAR AL CONTRIBUYENTE CON EL PRIMER ACTO QUE IMPLIQUE EL INICIO DE SUS FACULTADES, EL DERECHO QUE TIENE PARA CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL Y LOS BENEFICIOS DE EJERCER DICHO DERECHO;** entonces es de concluirse que si en la orden de visita como la que se impugna en el presente juicio, la autoridad omitió señalar el derecho a que alude el citado numeral, entonces resulta que la orden de visita es ilegal, ya que no se cumplió con lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el numeral 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. (29)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 105/07-16-01-2.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de mayo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda. - Secretario: Lic. Luis Fernando Berzunza Ojeda."

"Quinta Época. Instancia: Primera Sala Regional de Oriente (Puebla, Pue.) R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año II. No. 13 Enero 2002. Tesis: V-TASR-XIII-133
Página: 282

PRESUNCIÓN DE VALIDEZ.- CONFORME AL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA CONSIDERAR QUE EN LOS ACTOS DE AUTORIDAD SUBSISTE LA PRESUNCIÓN QUE CONTRAE ESTE DISPOSITIVO LEGAL, ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD DEMUESTRE QUE SU ACTUACIÓN SE APEGÓ A ESTRICTO DERECHO.- Conforme a la tesis III-TASS-2074, que ha sustentado el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, visible en la página 29, de su órgano informativo, Tercera Época. Año IV. No. 38. Febrero 1991; bajo el rubro: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA" O ALLANAMIENTO TÁCITO A LA PRETENSIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE.- Cuando la parte demandada omite producir en su escrito de contestación de demanda, controvertir o responder alguno de los hechos aducidos por la parte demandante, hay un allanamiento o aceptación tácita del mismo, generando la presunción de certeza respecto de las aseveraciones de la parte demandantes autoridades no den respuesta." De ahí que, aun y cuando de conformidad con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos de la autoridad se presumirán legales, también lo es, que este mismo dispositivo legal, dispone que cuando el afectado los niegue lisa y llanamente la carga de la prueba se revierte a la autoridad de probar que su actuación se ajustó a derecho; por ende, no resulta válido, que la autoridad al contestar la demanda sólo solicite, que el juicio se resuelva de conformidad con el contenido de dicho dispositivo legal, si no exhibe las pruebas pertinentes con que se acredite la legalidad de su actuación, ya que con ello no se desvirtúa la negativa del actor, y que por ende el enjuiciante tiene a su favor el silencio de la autoridad, que implica una aceptación tácita de los hechos negados por el demandante toda vez que resulta inconcuso que se está ante la presencia de un allanamiento tácito a las pretensiones del demandante; dado que no se aportó ningún elemento probatorio del que se pudiera desprender que le fue notificado el requerimiento que dio origen a la emisión de la resolución impugnada, y que fue el motivo que tuvo la autoridad para imponer la sanción. De ahí que esta Sala Juzgadora concluya que le asiste la razón al actor, al aludir que no se le puede sancionar por el incumplimiento de un requerimiento que nunca le fue dado a conocer. (27)

Juicio No. 86/01-07-01-2, Sentencia de la Primera Sala Regional de Oriente, de 27 de marzo del 2001, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Francisco Xavier Melo Melo.- Secretaria: Lic. Blanca Lidia Madrid González."



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 607 -

138

Instancia: Sala Regional del Noroeste I (Tijuana, B.C.)
R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año I. No. 2. Febrero 2001.
Tesis: V-TASR-XXV-19 Página: 179

Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al derivar de un procedimiento viciado de origen, pues la autoridad fiscalizadora, omitió al momento de ejercer sus facultades de comprobación, prevista en la fracción II, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, informar a mi mandante con el primer acto (solicitud de datos y documentación) que implica el inicio de sus facultades, el derecho que tenía para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho, lo cual resulta contrario en perjuicio de mi mandante de lo dispuesto en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 38, fracciones IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, quedando debidamente acreditada la violación sus garantías de seguridad jurídica y legalidad.

Sin que sea óbice a lo anterior, que la autoridad resolutora al recurso de revocación sostenga que en la primera solicitud de informes y documentos se anexó una copia de la carta de los derechos del contribuyente, pues ello no puede subsanar la omisión de insertar en la propia resolución el derecho de mi mandante a corregir su situación fiscal.

Lo anterior, pues los criterios antes transcritos son claros al señalar que en la orden de visita se debe informar del derecho previsto en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, no así en un documento anexo que puede o no contener dicho derecho. Derivado de lo anterior, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al derivar de un procedimiento viciado de origen.

Por lo anterior, lo procedente será que esa H. Sala declare la nulidad de las resoluciones impugnadas con fundamento en el artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Asimismo, mediante escrito de alegatos de fecha 26 de mayo de 2016, la actora manifestó lo siguiente:

SEGUNDO. Se desvirtúa la refutación que hace valer la autoridad demandada a los Conceptos de Impugnación Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del escrito Inicial de demanda.

A. En primer término, la autoridad demandada señala en su oficio de contestación a la demanda que devienen infundados los argumentos hechos valer por mi representada, pues ésta última debió considerar el inventario acumulable de su controlada [REDACTED] como parte de la utilidad que se debe de reportar en consolidación fiscal.

Lo anterior, aun y cuando los artículos 10 y 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes en 2006, no previeran de forma expresa que para la determinación del impuesto consolidado, la controladora debía incluir en la base de la consolidación el inventario acumulable de [REDACTED] pues dicha inclusión deriva de la aplicación voluntaria que la referida empresa controlada realizó, al optar por deducir los inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004, conforme al nuevo sistema de deducción de costo de lo vendido en términos de las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ello, en virtud de que para la determinación de la utilidad o pérdida fiscal se deben considerar todos aquellos conceptos que la ley señale como acumulables, y no sólo aquellos que tengan la naturaleza de ingresos, por lo que para la determinación de la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio si se debe acumular el efecto del inventario acumulable previsto por la fracción IV del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, pues además, al inventario acumulable se le otorga el tratamiento de ingreso acumulable de conformidad con las fracciones IV y V del Artículo Tercero en comento.

Luego entonces, consideró la autoridad demandada que si [REDACTED] forma parte del régimen de consolidación y optó por aplicar el beneficio concedido por las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2005, éste debe determinar en lo individual su utilidad o pérdida considerando los efectos del inventario acumulable.

Sin embargo, las anteriores manifestaciones de la autoridad demandada resultan infundadas, pues contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas, no se encontraba obligada en el ejercicio de 2006 a considerar para la determinación de su resultado fiscal consolidado, las cantidades correspondientes al inventario acumulable de la sociedad controlada [REDACTED]

Lo anterior, en virtud de que el inventario acumulable no constituye un ingreso acumulable para efectos de determinar la utilidad fiscal de una sociedad controlada, sino que constituye un "concepto acumulable", y por lo tanto no incide en la determinación de su utilidad fiscal y, en consecuencia, tampoco tiene efecto en la determinación de la utilidad fiscal de la controladora.

A efecto de evidenciar lo anterior, resulta necesario recordar que a partir de 2005, el contribuyente ya no deduce al momento de la adquisición, tal y acontecía en 2004,

sino que debe realizar la deducción del costo de la mercancía hasta el momento en que la enajena.

No obstante lo anterior, en las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2005, se estableció que si el contribuyente opta por acumular los inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004, sí podría considerarlos para efectos de determinar el costo de lo vendido, ello, con el objeto de no duplicar la deducción.

Al respecto, [REDACTED] aplicó la opción de acumulación de inventarios, es decir, acumular el inventario que tenía al 31 de diciembre de 2004 a que se refieren las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal 2005 y, por lo tanto, debe determinar el monto del inventario que se acumulará en cada ejercicio hasta agotarlos.

Sin embargo, contrario a lo señalado por las autoridades demandadas, el inventario acumulable de [REDACTED] no debió ser considerado por mi mandante para efectos de determinar la utilidad fiscal consolidada, al no calificar como un ingreso.

Lo anterior, pues dicho inventario acumulable no representa un ingreso, sino un concepto acumulable, al no resultar en una modificación positiva al haber patrimonial, se una persona moral, motivo por el cual no puede ser considerado para efectos de determinar la utilidad o pérdida fiscal, a nivel individual o a nivel consolidado.

No obstante que lo anterior es más que suficiente para evidenciar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues mi mandante de ninguna manera debía reconocer el inventario acumulable de sus controladas para determinar su resultado fiscal consolidado, al no representar un ingreso que modifique positivamente el patrimonio del contribuyente, adicionalmente, el referido inventario no se reconoce como ingreso acumulable en la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que califica como un concepto acumulable, situación que evidencia aún más que la ilegalidad de las resoluciones impugnadas.

En efecto de un análisis que se realice al artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal 2006, se desprende que se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de la Ley respectiva, conceptos tales como los ingresos determinados de manera presunta por la autoridad; la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie; los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles; la ganancia derivada de la enajenación de activo fijos y terrenos; títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidas por sociedades nacionales de crédito; así como la ganancia realizada que derive de fusión o escisión de sociedades; los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable, la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros; tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, acciones o enfermedad de técnicos o dirigentes; las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros; los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin

ajuste alguno, los intereses moratorios, según las reglas particulares establecidas, el ajuste anual por inflación que resulte del procedimiento previsto para su determinación.

Por otra parte, el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006 establecía que las personas morales residentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero.

De igual forma, el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tampoco contempla un momento en que el valor del inventario acumulable se considere percibido, elemento que resultaría fundamental para determinar que se trata de un ingreso acumulable para la utilidad fiscal.

En este sentido, es evidente que la Ley del Impuesto sobre la Renta no reconoce como un ingreso acumulable al inventario acumulable para efecto de determinar la utilidad fiscal correspondiente, por lo tanto, si la Ley no lo reconoce de esa manera, no deben ser consideradas para efectos de la utilidad fiscal del ejercicio, lo que evidencia la ilegalidad de las resoluciones impugnadas.

Ello, toda vez que si el legislador hubiera pretendido darle el carácter de ingreso a la cantidad en comento, así lo hubiera establecido expresamente en la legislación fiscal, situación que como ya se comentó, no ocurre, pues ello no se desprende de los artículos 17, 18 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006.

Incluso, evidencia aún más la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, el hecho de que para efectos de la consolidación fiscal, el inventario acumulable tampoco constituye un ingreso acumulable, pues el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, establece que únicamente se debe considerar en la determinación del resultado fiscal consolidado, las utilidades o pérdidas fiscales de cada una de sus sociedades controladas (en el caso que nos ocupa, [REDACTED]).

Por otra parte, el hecho de que el inventario acumulable no debe ser considerado como ingreso acumulable de las empresas controladas, para efecto de determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada se corrobora con el dictamen pericial rendido por el perito designado por mi mandante, así como por el perito tercero, al dar contestación a la pregunta número 26 del cuestionario que corresponde a la prueba pericial ofrecida por mi representada en el juicio de nulidad que nos ocupa.

Lo anterior, pues de los mismos se advierte que los peritos referidos coincidieron en que no existe disposición expresa en la Ley del Impuesto sobre la Renta que establezca como una obligación a cargo de las empresas controladas, el considerar como ingreso acumulable el inventario de sus empresas controladas, para efecto de determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada correspondiente.

En tal virtud, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al derivar de una incorrecta interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales, pues a través de las mismas se pretende que mi mandante acumule como ingreso cantidades que en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta NO son considerados como ingresos acumulables.

Por tanto, si no existe disposición expresa dentro del régimen general de consolidación fiscal que obligue a mi mandante a acumular a la utilidad fiscal a nivel consolidado, los inventarios acumulables de cada una de sus empresas controladas, es ilegal que la autoridad manifieste que mi mandante debía incluir las cantidades correspondientes al inventario acumulable de su sociedad controlada Elektra del Milenio para calcular su resultado fiscal consolidado.

Así las cosas, lo procedente será que esa H. Sala desestime los razonamientos expuestos por la demandada en su oficio de contestación a la demanda y, en su oportunidad, dicte sentencia en la que declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

B. Por otra parte, la autoridad demandada estimó que la autoridad resolutora de ninguna manera apreció los hechos de manera equivocada al afirmar que sobre el tema de fondo, relativo a la obligación de incluir el inventario acumulable en la determinación de la utilidad o pérdida fiscal de [REDACTED] ya existe sentencia firme dictada en el juicio de nulidad 33900/07-17-05-1, misma que resulta desfavorable a los intereses de mi mandante.

Ello, pues de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 408/2011 dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual resolvió en definitiva el juicio de nulidad 33900/07-17-05-1, así como de la sentencia dictada el 1º de marzo de 2011 por la Quinta Sala Regional Metropolitana, se desprende que se determinó que mi representada se encontraba obligada a considerar el inventario acumulable dentro de la utilidad fiscal de sus controladas, lo que demuestra que sobre tal punto debe operar la figura de la cosa juzgada refleja.

Lo anterior, ya que en la especie concurren todos los elementos necesarios para que opere la figura de cosa juzgada, pues existe identidad de sujetos, la calidad con la que intervinieron en el procedimiento anterior, el objeto y la causa de pedir.

Sin embargo, contrario a lo señalado por las autoridades demandadas, en el caso que nos ocupa no existe cosa juzgada, ni cosa juzgada refleja respecto a que mi mandante, para la determinación de la utilidad fiscal consolidada, debe considerar el inventario acumulable de [REDACTED]

A efecto de evidenciar lo anterior, cabe recordar que la figura de cosa juzgada se actualiza cuando la sentencia ha causado ejecutoria, la cual constituye la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

En este sentido, es necesario precisar que la cosa juzgada opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate, situación que no sucede en el caso que nos ocupa.

Al respecto, en la especie, no existe identidad de objetos, pues el juicio de amparo directo 408/2011 y el juicio fiscal 33900/07-17-05-1 antes señalados, derivaron de una consulta fiscal formulada por mi mandante durante el ejercicio fiscal de 2006, mientras que la determinación del crédito fiscal impugnado en el presente juicio, deriva de una revisión secuencial del ejercicio de 2006, razón por la cual resulta evidente que

ambos procedimientos no tienen el mismo objeto, a saber, derivan de procedimientos y de ejercicios distintos.

Sin que sea óbice a lo anterior, que la autoridad resolutora demandada sostenga que en el caso se actualiza la figura de cosa juzgada refleja, pues para que dicha figura tenga efectos en otro juicio, debe existir identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron, aun cuando no exista identidad en las acciones ejercitadas, lo que no acontece en la especie.

Ello, ya que no existe identidad de cosas, dado que como se demostró, la primera causa deriva de una sentencia recaída a un asunto en el que se planteó una confirmación de criterio a las autoridades fiscales.

Asimismo, tampoco existe identidad de personas de los litigantes pues, si bien mi mandante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presentó la consulta motivo de la primer controversia y es el contribuyente al cual se le determinaron contribuciones en el ejercicio de 2006, lo cierto es que la autoridad que resolvió la consulta presentada y la autoridad que emitió la liquidación por el ejercicio fiscal de 2006, son distintas.

Además, de configurarse las figuras de cosa juzgada y cosa juzgada refleja, no existiría la controversia que nos ocupa.

Derivado de lo anterior, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al pretender motivar su resolución en el hecho de que sobre el asunto que nos ocupa ya había cosa juzgada derivado de la sentencia dictada por la Quinta Sala de ese H. Tribunal.

Aunado a lo anterior, suponiendo sin conceder que en el caso que nos ocupa sí exista cosa juzgada refleja en cuanto al fondo del asunto, de cualquier formas las resoluciones impugnadas devienen en ilegales.

En efecto, en caso de considerar que existe cosa juzgada, dicha figura opera claramente a favor de mi mandante, situación que fue pasada por alto por las autoridades demandadas al emitir las resoluciones impugnadas.

Lo anterior, pues como esa H. Sala no dejará de advertir, al dictar la sentencia dictada en el juicio de amparo 408/2011 el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, si bien resolvió negar el amparo solicitado por mi representada, determinó que mi mandante debe considerar el inventario acumulable de sus controladas para calcular su resultado fiscal consolidado, ello, únicamente al momento en que la sociedad controlada ENAJENE el referido inventario, el cual por tanto, se acumulará POR VÍA DE UTILIDAD O PÉRDIDA.

En efecto, es importante hacer notar a esa H. Sala, que no obstante el Tribunal Colegiado encargado de resolver el amparo directo 408/2011 efectuó un razonamiento respecto a que la Sala responsable había determinado que el inventario acumulable de las sociedades controladas deben reconocerse en el resultado fiscal consolidado de la sociedad controladora, lo cierto es que la conclusión a la que arriba, una vez analizada la sentencia dictada por la Sala Fiscal, es que dicho inventario se encuentra incluido en la utilidad que la sociedad controlada le reporta a la controladora, pues ello ocurre al momento de enajenación del inventario.

Dicha situación, de ninguna manera implica que mi mandante o sus sociedades controladas deban adicionar a su utilidad fiscal el concepto de inventario acumulable, como ilegalmente lo sostuvieron las autoridades demandadas, pues dichas cantidades se reconocerían por vía de utilidad o pérdida al momento de enajenar el inventario, esto es, el inventario que tenía una sociedad controlada al 31 de diciembre de 2004, y que aún se encuentre pendiente de enajenarse, se reconocerá en términos de la opción ejercida respecto del Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, hasta el momento en que se enajene, pues es en ese momento en el que representará una utilidad para la sociedad que lo enajene.

En virtud de lo anterior, mi mandante únicamente debía considerar para determinar su resultado fiscal consolidado, las utilidades efectivamente reportadas por sus empresas controladas.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que de un análisis que se realice a los dictámenes periciales rendidos por el perito designado por mi mandante, así como por el perito tercero, es posible advertir que mediante sentencia dictada en el amparo directo 408/2011 se resolvió que mi mandante no debía considerar el inventario acumulable de sus empresas consolidadas como parte de la utilidad fiscal de cada una de éstas.

Ello, aunado a que de dichos dictámenes se desprende que en el referido juicio de amparo se determinó que de conformidad con las obligaciones de la controlada, así como de la controladora, se previene como tal la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que incluye la acumulación de inventarios en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable, lo cual necesariamente se ve reflejado en la utilidad o pérdida fiscal.

De esta manera, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, ya que derivan de una incorrecta apreciación de los hechos, pues como fue demostrado, suponiendo sin conceder que exista un pronunciamiento de fondo en cuanto al tema que nos ocupa, la figura de cosa juzgada en realidad opera a favor de mi mandante.

Situación la anterior que evidencia la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, dado que carecen de toda fundamentación y motivación.

Así las cosas, lo procedente será que esa H. Sala desestime los razonamientos expuestos por la demandada en su oficio de contestación a la demanda y, en su oportunidad, dicte sentencia en la que declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

C. Por otro lado, la autoridad demandada señala en su oficio de contestación a la demanda que devienen infundados los argumentos hechos valer por mi representada, ya que no desvirtúa los fundamentos y motivos que tuvo la autoridad fiscalizadora para desestimar la declaración complementaria que presentó su controlada [REDACTED]

Asimismo, señaló la autoridad demandada que, contrario a lo argumentado por mi representada, la autoridad fiscalizadora sí indicó los motivos, razones y circunstancias por las llegó a la conclusión de que la declaración complementaria en comento fue

17

realizada con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por mi mandante en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006, así como que el entero de los pagos provisionales donde sí se consideró la doceava parte del inventario acumulable constituye un consentimiento expreso relacionado con la inclusión del inventario acumulable de la controlada [REDACTED] motivo por el cual no se le otorgó valor probatorio a dicha declaración.

Sin embargo, contrario a lo estimado por las autoridades demandadas, las resoluciones impugnadas resultan ilegales al carecer de fundamentación y motivación en relación al motivo por el cual determinaron desestimar el valor de la declaración complementaria presentada por la empresa controlada [REDACTED] el 14 de mayo de 2013.

Lo anterior, dado que las autoridades demandadas determinaron que no le podían dar valor probatorio a la referida declaración complementaria pues a su parecer ésta fue presentada con el único motivo de equiparar su utilidad fiscal a la de mi mandante, al disminuir de la utilidad únicamente las cantidades correspondientes al inventario acumulable, ello, sin fundamentar su consideración el precepto legal alguno.

Sin que sea óbice a lo anterior, que la autoridad demandada haya señalado que desestima la declaración complementaria que nos ocupa, pues a su parecer ello fue con el único objetivo de equiparar la utilidad fiscal de la empresa controlada a la de mi mandante.

Lo anterior, pues aun suponiendo sin conceder que ello haya sucedido así, no existe precepto legal alguno en el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta o cualquier otra disposición fiscal que le permita a una autoridad fiscalizadora desestimar el valor probatorio de una declaración complementaria, por el simple hecho de que haya sido presentada con un objetivo determinado, específicamente el equiparar la utilidad de una empresa controlada a la de su controladora.

Además, Elektra del Milenio efectuó tal modificación de su utilidad fiscal, pues como ha sido demostrado a largo del juicio de nulidad, el inventario acumulable no es un ingreso que modifique positivamente el patrimonio de los contribuyentes.

Cabe precisar que las autoridades únicamente pueden hacer lo que les esté expresamente permitido, por tanto, en el caso que nos ocupa la autoridad fiscal de ninguna manera podía desestimar el valor de la declaración complementaria presentada por [REDACTED] pues no existe precepto legal ni fundamento alguno que así se lo permita, siendo que la referida contribuyente estaba en todo su derecho a corregir su situación a través de la presentación de una declaración complementaria.

Derivado de lo anterior, es clara la ilegalidad de las resoluciones impugnadas, pues carecen de todo fundamento y motivación, en clara contravención a los principios de legalidad y seguridad jurídica que deben prevalecer.

C.1. Asimismo, señaló la autoridad demandada en su oficio de contestación a la demanda que, contrario a lo argumentado por mi mandante, la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por [REDACTED] no puede surtir efectos en los términos propuestos por la hoy actora.

Lo anterior, pues no es posible valorar la referida prueba, al haber sido presentada una vez que la autoridad fiscal inició facultades de comprobación por el ejercicio fiscal de 2006 a la controladora (hoy parte actora).

De esta manera, manifestó la autoridad demandada que, en virtud de haber tenido repercusión dicho medio de prueba en el resultado fiscal consolidado, al disminuir la utilidad fiscal de la empresa controlada [REDACTED] es que la misma no puede tener efecto jurídico de conformidad con lo dispuesto con el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación.

Ello, pues si la controlada de mi mandante modificó su utilidad fiscal en la declaración de corrección para efectos de no considerar el inventario acumulable que tenía, como ingreso acumulable, resulta evidente que se actualiza la prohibición del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, ya que lo declarado por la controlada invariablemente impactó en el resultado fiscal consolidado, por lo que la referida declaración no podrá tener efectos al ya haberse iniciado facultades de comprobación por el ejercicio de 2006 a mi mandante y en virtud de repercutir dicha declaración en el ejercicio revisado.

Sin embargo, las anteriores manifestaciones devienen infundadas, en virtud de que no obstante el régimen de consolidación fiscal se traduce en que las sociedades que lo conforman tributen como una unidad económica, ello es únicamente para efecto de integrar un resultado fiscal consolidado y el entero del impuesto correspondiente, lo que no implica que las sociedades pierdan personalidad jurídica o que se confundan los derechos y obligaciones que cada una de las sociedades controladas y la controladora tengan en lo individual.

Dicha situación se corrobora si consideramos que tanto la empresa controladora como las controladas tienen la obligación en términos del artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, de presentar su declaración del ejercicio.

Ahora bien, el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación señala, entre otras cuestiones que, las declaraciones complementarias que presenten los contribuyentes son definitivas y solo se podrán modificar hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, salvo en ciertos casos.

En tal virtud, dispone el referido precepto que una vez iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda, debiendo pagarse las multas que establece el citado artículo 76.

En este sentido, resulta del todo apegado a derecho el que [REDACTED] hubiere presentado una declaración complementaria el 14 de mayo de 2013, pues no se debe pasar por alto el hecho de que dicha empresa no era sujeto de un ejercicio de facultades de comprobación que derivaron en la determinación del crédito fiscal, tal y como en realidad sí sucedió con mi representada, motivo por el cual la referida declaración sí surte efectos jurídicos y debió ser valorada por las hoy demandadas.

19

Además, mi mandante no presentó ninguna declaración de ejercicios anteriores a ser valorada por la autoridad fiscal, motivo por el cual, se insiste, resulta válida la declaración complementaria presentada por la controlada [REDACTED].

De esta manera, deviene ilegal el que las autoridades demandadas pretendan interpretar el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, en relación a su teoría de unidad económica bajo el régimen de consolidación, en el sentido de que cualquier declaración complementaria de cualquier sociedad que tenga repercusión en el ejercicio revisado por las autoridades fiscales no tendrán efectos jurídicos, pues ello es una interpretación por demás arbitraria, excesiva y contraria a derecho, ya que dicho precepto en ningún momento precisa lo señalado por las hoy demandadas.

Bajo esta tesitura, cabe recordar que las autoridades únicamente se encuentran facultadas para realizar para hacer lo expresamente les está permitido, por tanto, si el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación expresamente establece que no tendrán efectos fiscales las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que tengan repercusiones en el ejercicio revisado —al contribuyente en cuestión evidentemente—, ello no le permite a la autoridad fiscal eliminar los efectos que a su arbitrio tengan repercusión en un ejercicio revisado a otro contribuyente, como se pretende en el caso que nos ocupa.

Derivado de lo anterior, es evidente que las resoluciones impugnadas devienen ilegales, al haber sido emitidas conforme a una incorrecta interpretación y aplicación del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad demandada se excede de manera arbitraria al pretender encuadrar la declaración complementaria presentada por [REDACTED] en el supuesto de no surtimiento de efectos del artículo 32.

Así las cosas, lo procedente será que esa H. Sala desestime los razonamientos expuestos por la demandada en su oficio de contestación a la demanda y, en su oportunidad, dicte sentencia en la que declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

C.2. Adicionalmente, señaló la autoridad demandada resolutora en su oficio de contestación a la demanda que, a través de la resolución que resolvió el recurso de revocación correspondiente, hoy impugnada, no mejoró los fundamentos y motivos de la resolución liquidatoria impugnada.

Ello es así, pues sólo valoró la prueba consistente en la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por [REDACTED] a fin de dar cumplimiento a su obligación como autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales, y así, respetar y hacer cumplir el derecho fundamental de impartición de justicia completa; aunado a que el recurso de revocación es la instancia idónea para valorar las pruebas ofrecidas por los contribuyentes, lo que se refuerza si consideramos que debe existir pronunciamiento expreso sobre todos los puntos controvertidos.

Sin embargo, a través de la resolución al recurso de revocación, la autoridad resolutora demandada expone un apartado específico exponiendo las razones por las cuales a su parecer no es dable valorar la prueba consistente en la declaración complementaria presentada por [REDACTED] efectuando una interpretación —ilegal— del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación en relación al régimen de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 613 -

20

consolidación, pretendiendo modificar la resolución recurrida, situación que devienen en ilegal.

Lo anterior, ya que en términos del artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, al resolver un recurso de revocación, la autoridad fiscal únicamente pueden desechar el mismo, confirmar el acto impugnado, ordenar emitir una nueva resolución, dejar sin efectos el acto impugnado, o modificarlo, esto último, únicamente cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

En el caso que nos ocupa, esa H. Sala no podrá pasar inadvertido que el recurso de revocación presentado por mi mandante fue resuelto de manera desfavorable a mi mandante, motivo por el cual, se promovió el juicio de nulidad que nos ocupa.

En este sentido, es claro que la autoridad resolutora demandada no se encontraba facultada para modificar el acto impugnado, mejorando su fundamentación y motivación, pues la modificación de tal acto sólo puede ocurrir cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente, situación que en la especie no aconteció.

En tal virtud, es evidente que las resoluciones impugnadas devienen ilegales, toda vez que la autoridad resolutora demandada pretendió modificar y mejorar la fundamentación y motivación de la liquidación impugnada, a través de la resolución, al recurso de revocación impugnada, lo que resulta ilegal.

D. Asimismo, la autoridad demandada señala en su oficio de contestación a la demanda que devienen infundados los argumentos hechos valer por mi representada en el Quinto Concepto de Impugnación del escrito inicial de la demanda de nulidad.

D.1. Al respecto, la autoridad demandada manifestó en su oficio de contestación a la demanda que devienen infundados los argumentos hechos valer por mi representada, en el sentido de que no se indicó el fundamento que la vincula a presentar una declaración complementaria respecto de la corrección efectuada por su controlada

Lo anterior, pues la autoridad demandada sustentó su actuación, entre otros, en el artículo 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, ~~no~~ que establece que cuando haya modificación de la utilidad de una empresa controlada, ya sea por declaración complementaria de éstas o por corrección fiscal efectuada por las autoridades en el ejercicio de sus facultades de comprobación, la empresa controladora tendrá la obligación de presentar la declaración complementaria de consolidación donde las modificaciones a que haya lugar.

Además, la demandada resolutora determinó que la omisión observada por la autoridad fiscalizadora demandada subsistió, pues mi representada no presentó la declaración complementaria de consolidación donde realizara las modificaciones derivadas de la corrección fiscal de

Sin embargo, las resoluciones impugnadas devienen ilegales, pues al emitirlas las autoridades demandadas fueron omisas en señalar los fundamentos y motivos por los cuales mi mandante debía modificar su resultado fiscal consolidado.

21

En efecto, como esa H. Sala no podrá pasar desapercibido, las resoluciones impugnadas se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, ocasionando a mi mandante inseguridad jurídica, al no saber con certeza conforme a qué disposición fundan la supuesta omisión en comento de presentar la declaración complementaria.

En este sentido, de la lectura que esa H. Sala se sirva efectuar a la resolución liquidatoria contenida en el oficio número 900-05-2013-48229, se desprende que la misma pretende fundar su ilegal actuar en los artículos 68, fracción I, inciso a), tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, y 72, fracción III de la referida Ley vigente en 2010.

De esta manera, como esa H. Sala no dejará de advertir, el precepto legal en que se fundan las resoluciones impugnadas es el consistente, entre otras, en el artículo 72, fracción III Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010; no obstante lo anterior, el precepto en el que las hoy demandadas debieron fundamentar las referidas resoluciones debió ser el artículo vigente en 2006.

Lo anterior, pues aun y cuando la sociedad controlada ~~presentó su declaración complementaria el 14 de julio de 2010, lo cierto es que la contribución causada en virtud de dicha declaración corresponde al ejercicio fiscal de 2006 y, por tanto, la norma que rige su causación es la correspondiente a 2006, no así 2010 como lo pretenden las hoy demandadas.~~

Ello, con independencia de que las autoridades demandadas manifiesten que el texto del artículo 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010 y el vigente en el ejercicio de 2006, es idéntico en ambos casos, por lo que aun y cuando le pudiera asistir la razón a mi mandante, dicha situación no le causa perjuicio.

Dicha situación es así, ya que el hecho de que las demandadas hayan pretendido fundamentar las resoluciones impugnadas con base en un precepto no aplicable, por no encontrarse vigente, evidencia que las mismas devienen ilegales al encontrarse indebidamente fundadas y motivadas, en clara contravención a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Así las cosas, lo procedente será que esa H. Sala desestime los razonamientos expuestos por la demandada en su oficio de contestación a la demanda y, en su oportunidad, dicte sentencia en la que declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en términos del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

D.2. De igual forma, la autoridad demandada manifestó en su oficio de contestación a la demanda que resulta infundado el argumento hecho valer por mi mandante en relación a que en el oficio de observaciones levantado por la autoridad fiscal, no se hizo de su conocimiento la posibilidad que tenía para corregir su situación fiscal respecto del punto en controversia, de conformidad con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Lo anterior, pues desde el inicio de las facultades de comprobación se hizo saber a mi mandante, a través de la entrega a la misma de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado vigente, el derecho con el que cuenta para corregir su situación fiscal, motivo por el cual en el oficio de observaciones no debía informarse a la hoy

actora de nueva cuenta sobre ese derecho; máxime, que en el oficio de observaciones sí se le dio a conocer tal derecho.

No obstante lo anterior, las anteriores consideraciones devienen infundadas, dado que la autoridad sí fue omisa en informar a mi mandante el derecho que tenía para corregir su situación fiscal, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Con la finalidad de evidenciar lo anterior, es necesario recordar que de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en relación con su Artículo Segundo Transitorio, es una obligación para todas las autoridades fiscales al momento de iniciar sus facultades de comprobación, informar al contribuyente del derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer tal derecho.

Sin embargo, al no haber informado el Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente lo anterior, siendo que se encontraba obligado a ello, deriva en un incumplimiento a las disposiciones antes señaladas y, por ende, a una violación directa e inmediata a los derechos de mi mandante como gobernado y como contribuyente.

Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente la ilegalidad de las resoluciones impugnadas al derivar de un procedimiento viciado de origen, pues la autoridad fiscalizadora, omitió al momento de ejercer sus facultades de comprobación, prevista en la fracción II, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, informar a mi mandante con el primer acto (solicitud de datos y documentación) que implica el inicio de sus facultades, el derecho que tenía para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho, lo cual resulta contrario en perjuicio de mi mandante de lo dispuesto en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 38, fracciones IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, quedando debidamente acreditada la violación sus garantías de seguridad jurídica y legalidad.

Sin que sea óbice a lo anterior, que la autoridad resolutora al recurso de revocación sostenga que en la primera solicitud de informes y documentos se anexó una copia de la carta de los derechos del contribuyente, pues ello no puede subsanar la omisión de insertar en la propia resolución el derecho de mi mandante a corregir su situación fiscal.

Lo anterior, pues como fue demostrado en la demanda de nulidad, se debe informar del derecho previsto en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, no así en un documento anexo que puede o no contener dicho derecho.

Así las cosas, lo procedente será que esa H. Sala desestime los razonamientos expuestos por la demandada en su oficio de contestación a la demanda y, en su oportunidad, dicte sentencia en la que declare la nulidad de las resoluciones impugnadas.

Por su parte, la autoridad demandada mediante **oficio de contestación a la demanda número 900 04 05-2015-58541** de fecha **14 de octubre de 2015**, argumentó lo siguiente:

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto. Por técnica procesal, los correlativos conceptos de impugnación se contestan de manera conjunta, en virtud de la identidad de su contenido, así como por la estrecha relación que guardan entre sí.

Manifiesta la actora en el **segundo** concepto de impugnación que se contesta, que las resoluciones impugnadas son ilegales, debido a una incorrecta apreciación de los hechos por parte de las autoridades emisoras de las mismas, toda vez que resulta inexacto que la autoridad fiscalizadora cuente con una sentencia en la cual se reconoció la validez de lo determinado en la resolución inicialmente recurrida respecto a considerar el inventario acumulable de su controlada [REDACTED] al determinar la utilidad de ésta, argumentando que lo cierto es que sus efectos y consecuencias no son los que señala ésta autoridad demandada; por lo cual, no existe ni cosa juzgada ni cosa juzgada refleja, ya que en el caso que nos ocupa, la cosa juzgada derivó de una consulta fiscal, mientras que la determinación del crédito fiscal impugnado se deriva de una revisión secuencial del ejercicio 2006, por lo tanto no existe identidad de objetos, de cosas ni de gantes.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 615 -

Agrega la demandante en el **tercer** concepto de impugnación, que el inventario acumulable no representa un ingreso, sino un concepto acumulable, motivo por el cual, no puede ser considerado para efectos de determinar la utilidad o pérdida de fiscal a nivel individual o consolidado. Además,

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.Nº 12140/15-17-11-5.

80.

de que, dicho inventario no incorpora una renta real y disponible para el sujeto pasivo, y por consiguiente, no incrementa su patrimonio, pues únicamente tiene como objeto revertir una deducción efectuada con anterioridad.

Ante esto, mi contraria parte de la premisa de que si la Ley del Impuesto sobre la Renta no considera como un ingreso acumulable el inventario acumulable, luego, las resoluciones impugnadas son ilegales al considerar legal la determinación de un crédito fiscal derivado de que no consideró las cantidades correspondientes al inventario acumulable de una de sus controladas para determinar su resultado fiscal consolidado; ya que la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 18, tampoco contempla un monto en que el valor del inventario acumulable se considere percibido.

Aunado a lo anterior, la demandante argumenta que el inventario acumulable no forma parte de la determinación de la utilidad fiscal, ya que el legislador no estableció lo contrario de manera expresa en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, aduce en el **cuarto** concepto de impugnación, que la autoridad fiscalizadora no fundamenta ni motiva su actuar al desestimar la declaración complementaria presentada por [REDACTED] para lo cual la enjuiciante afirma que no existe precepto legal que le permita a mi representada desestimar el valor probatorio de una declaración complementaria por el hecho de que haya sido presentada con el objeto de equiparar la utilidad de una empresa controlada a la de su controladora. Además de que la empresa que presentó dicha declaración complementaria fue [REDACTED] no mi opositora. Ante esto, aduce la ilegalidad de la actuación de mis representadas, al pretender encuadrar la declaración presentada por la empresa en mención en lo previsto en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación.

Continúa argumentando en el **quinto** concepto de impugnación, que las resoluciones impugnadas son ilegales, toda vez que la autoridad fiscalizadora es omisa en señalar los fundamentos y motivos por los cuales la demandante debía modificar su resultado fiscal consolidado, aunado a que la autoridad no hizo de su conocimiento el derecho de corregir su situación fiscal; por lo cual la demandante aduce que tanto la resolución liquidatoria como la impugnada, le causan inseguridad jurídica, aunado a que la autoridad pretende fundar su ilegal actuar en el artículo 68 fracción I, inciso a) tercer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2006 y 72 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010.

Asimismo, aduce que la contribución causada en virtud de la declaración complementaria que presentó [REDACTED] el 14 de julio de 2010, corresponde al ejercicio fiscal 2006, por lo cual la norma que rige su causación es la de 2006 no la de 2010. Aunado a lo anterior, la



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

81

demandante argumenta que esta autoridad omitió señalar su derecho a corregir su situación fiscal, consagrado en el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Al respecto, esta defensa advierte que los argumentos de la demandante resultan **infundados**, mismos que devienen ineficaces e insuficientes para desvirtuar la legalidad de las resoluciones impugnadas.

En efecto, lo anterior es de ese modo, en la inteligencia de que contrario a las consideraciones plasmadas en la demanda que se contesta:

A. Mi contraria sí debe considerar el inventario acumulable de su controlada, como parte de la utilidad que de se debe reportar en consolidación fiscal.

En primer lugar, esta autoridad estima necesario tomar en consideración el contenido de la resolución combatida en sede administrativa, que en la parte que interesa establece lo siguiente:

folios 52 a 72

c) Efecto en el resultado fiscal consolidado por no considerar la totalidad de la utilidad fiscal de su sociedad controlada, en el ejercicio de 2006

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

De la revisión practicada se determina que dicha contribuyente actualmente omitió sumar en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la utilidad fiscal en la participación consolidable correspondiente a su sociedad controlada del mismo ejercicio 2006 de \$1,841,283,330 a \$3,380,157,057, esta última manifestada en declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, e incluye el inventario acumulable en cantidad de \$1,555,028,827, que en participación consolidable es de \$1,558,075,993, infringiendo lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2006, siendo parcial y no total la utilidad fiscal individual fluida a la sociedad controladora.

Sin texto



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

82

Del estudio a los argumentos manifestados por la contribuyente en su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, en relación a las observaciones dadas a conocer en el oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, respecto a que antes en relación a que esa contribuyente omitió sumar en la determinación del resultado fiscal consolidado la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada así como de la revisión a la información proporcionada por esa contribuyente y el contador público dictaminador, en el transcurso de la revisión y la que obra en el expediente administrativo abierto en esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, esta autoridad determina que la observación no fue desvirtuada por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a sus argumentos citados a partir del último párrafo de la hoja 3 al segundo párrafo de la hoja 6 de su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, mismos que ya fueron transcritos anteriormente en las páginas de la 62 a la 65 del presente oficio, y en los que modularmente señala que el inventario acumulable no forma parte de la utilidad o pérdida fiscal de su sociedad controlada, al no representar un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, sino al momento de que dicho inventario es enajenado, por lo que el citado concepto no se deberá considerar para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, se precisa lo siguiente:

I. El artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006, establece:

Conforme al precepto transcrito, la utilidad fiscal se obtiene por la diferencia que resulta entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Por lo que respecta al régimen de consolidación fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, en su artículo 68 establece:

De acuerdo con el precepto transcrito, la sociedad controladora, para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada sumará, entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable y restará, entre otros, las pérdidas fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia pérdida fiscal, ambas en la participación señalada.

Por lo que toca a las sociedades controladas, éstas deben determinar su impuesto sobre la renta como si no hubiera consolidación. Lo anterior, se encuentra regulado por el artículo 76, fracciones I y II de la Ley de la materia vigente en 2006, en el cual textualmente se establece:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 617 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

83

III. Ahora bien, conforme a las modificaciones que para el ejercicio fiscal de 2005 sufrió la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de dicho ejercicio entró en vigor la deducción denominada Costo de lo Vendido, la cual vino a sustituir el régimen de Deducciones de Compras. Lo anterior, de acuerdo con lo siguiente:

Hasta el 31 de diciembre de 2004, el artículo 29, fracción II de la citada ley establecía:

...

A partir del 1 de enero de 2005, dicha disposición se reformó en los siguientes términos:

...

El costo de lo vendido implica de manera general, que las deducciones de las mercancías adquiridas por las personas morales las podrán deducir hasta el momento en que se acumule el ingreso por la enajenación de sus productos, empatando así el ingreso con la deducción correspondiente.

El introducir el régimen de deducción del costo de lo vendido implicó el terminar con la anticipación de la deducción que representaba el régimen de deducción de compras. En efecto, bajo este último régimen, con el solo hecho de haber comprado inventario, ya se tenía una deducción, independientemente de que la empresa no hubiera sufrido ninguna disminución en su patrimonio al cambiar un activo monetario por otro activo como son los inventarios. Asimismo, bajo este esquema la fecha en que se obtuviera el ingreso por la venta de ese inventario (que es cuando verdaderamente se modifica el patrimonio del contribuyente, ya sea porque obtenga una ganancia o una pérdida con motivo de la enajenación de ese inventario), era irrelevante para el momento de tomar la deducción pues se insiste, ésta se tomaba en el momento mismo de que se compraba.

El costo de lo vendido implica de manera general, que las deducciones de las mercancías adquiridas por las personas morales las podrán deducir hasta el momento en que se acumule el ingreso por la enajenación de sus productos, empatando así el ingreso con la deducción correspondiente.

El introducir el régimen de deducción del costo de lo vendido implicó el terminar con la anticipación de la deducción que representaba el régimen de deducción de compras. En efecto, bajo este último régimen, con el solo hecho de haber comprado inventario, ya se tenía una deducción, independientemente de que la empresa no hubiera sufrido ninguna disminución en su patrimonio al cambiar un activo monetario por otro activo como son los inventarios. Asimismo, bajo este esquema la fecha en que se obtuviera el ingreso por la venta de ese inventario (que es cuando verdaderamente se modifica el patrimonio del contribuyente, ya sea porque obtenga una ganancia o una pérdida con motivo de la enajenación de ese inventario), era irrelevante para el momento de tomar la deducción pues se insiste, ésta se tomaba en el momento mismo de que se compraba.

Dicho régimen, es el contenido en las fracciones IV y V del Artículo Tercero citado, en el cual se establece:

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

84

De lo anterior, tenemos lo siguiente:

a) La regla general consistía en que las mercancías adquiridas al 31 de diciembre de 2004, no podrán deducirse conforme al régimen del Costo de lo Vendido.

Lo anterior obedece a que las mercancías adquiridas al 31 de diciembre de 2004, que no hubieran sido vendidas y por lo tanto formarían parte del inventario final a esa fecha, ya habían sido deducidas.

b) Ahora bien, como primera excepción a la regla general antes señalada, se establece la opción para los contribuyentes de deducir sus mercancías que tuvieran al 31 de diciembre de 2004, conforme al régimen del Costo de lo vendido, siempre y cuando acumularan los inventarios de las mismas, conforme las reglas previstas en la ley de que se trata.

El objeto principal de esta opción, es deshacer los efectos de la deducción previamente realizada por los contribuyentes cuando adquirieron las mercancías, respecto de los inventarios existentes el 31 de diciembre de 2004. Así, si a la fecha citada se restaron (vía deducción), para devolver la deducción se tuvo que regular el efecto contrario, esto es, sumarlos, lo cual sucede mediante la acumulación de dichos inventarios. Con esto último se anulaba la deducción y el contribuyente ya se encontraba en la posibilidad de nuevamente tomar la deducción cuando los enajenara, lo cual debía suceder a partir de 2005, y por lo tanto, el contribuyente podía deducir los mismos conforme a las reglas del Costo de lo Vendido.

c) Por último, en caso de no ejercer la anterior opción, los contribuyentes deberán considerar que lo primero en enajenar a partir del 1 de enero de 2005, es lo primero que habían adquirido con anterioridad a dicha fecha, hasta agotar sus existencias.

Con esta última opción, se permite a aquellos contribuyentes que no les resulte conveniente la aplicación de la acumulación de inventarios, darle una presunción legal consistente en que lo primero que enajenan es lo primero que habían adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2005 hasta agotar dichos inventarios, este orden permite no mezclar el inventario con que se contaba al 31 de diciembre de 2004 y el adquirido a partir de esa fecha.

Ahora bien, cabe señalar que en el caso de que se hubiera optado por acumular el inventario con que se contaba al 31 de diciembre de 2004, esto no se haría en un sólo ejercicio, sino conforme al índice promedio de rotación de inventarios de cada empresa, lo cual podrá ir desde cuatro hasta doce años, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción V del Artículo Tercero en comento, con lo cual no se impacta la liquidez de los contribuyentes para destinárselo al pago de impuestos en lugar de sus operaciones.

Conforme a lo mencionado, se concluye que en el caso de los contribuyentes que hayan optado por considerar las existencias en inventarios que tuvieran al 31 de diciembre de 2004, como un concepto deducible de conformidad con las reglas del costo de lo vendido, conforme se enajenen las mercancías que integran ese concepto, éstos debieron acumular dichos inventarios en los términos que establece la fracción V del Artículo Tercero de Disposiciones Transitorias a que se hace referencia en el presente punto.



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

85

De acuerdo con lo anterior, si bien el inventario acumulable determinado en los términos de la fracción V citada no es propiamente un ingreso de los establecidos en la Ley del Impuesto sobre Renta vigente en 2006, esa naturaleza se la da la disposición transitoria en comento y por la cual optó su sociedad controlada [REDACTED] por lo que el mismo resulta un concepto acumulable que debe considerarse para la obtención de la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, a que se refiere el artículo 10, fracción I de la referida Ley.

En este sentido, las sociedades que hubieran ejercido la opción prevista en las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2005, como es el caso, en la cual la sociedad controlada [REDACTED] de acuerdo a lo manifestado en su escrito, la misma estuvo obligada a determinar y acumular un inventario acumulable en los términos de la fracción V del precepto citado, concepto que deben considerar para la obtención de su utilidad o pérdida fiscal del ejercicio de dicha sociedad controlada.

IV. Cabe mencionar que al determinar la utilidad fiscal del ejercicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, uno de los elementos que se deben considerar son los ingresos acumulables, por lo que los contribuyentes que optaron por acumular el inventario deben sumar a dichos ingresos la cantidad correspondiente al inventario acumulable del ejercicio. Lo anterior, en términos de lo establecido en el tercer párrafo de la fracción V de la Disposición Transitoria en comento.

Adicionalmente, en el último párrafo de la multicitada fracción V se señala que para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, los contribuyentes deben acumular a la utilidad fiscal la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago. Además, en el ejercicio de 2005, se

acumulará mensualmente la doceava parte de la diferencia que resulte en los términos del inciso c) de esa fracción multicitada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago.

En ese sentido, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 establece que la utilidad fiscal para pagos provisionales se determina multiplicando el coeficiente de utilidad por los ingresos nominales correspondientes al periodo, siendo dicha utilidad fiscal a la cual se adiciona el inventario determinado conforme a lo señalado en el párrafo anterior.



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

86

V. De acuerdo con lo anterior, toda vez que el ejercicio de la opción contenida en las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir de 2005 por parte de las sociedades, como es el caso de la sociedad controlada [REDACTED] de acuerdo a lo manifestado en su escrito, le obliga a ésta a determinar un inventario acumulable, concepto que acumularon para la determinación de su utilidad o pérdida fiscal del ejercicio 2005 y en el caso que nos ocupa 2006, en términos de lo establecido en la fracción V del artículo tercero citado, como se señala además en el punto III anterior.

Por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, la sociedad controladora revisada para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada debió sumar, entre otros conceptos, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable, por lo que no procede confirmar a [REDACTED] actualmente [REDACTED] el criterio de que para efecto del cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en los términos de lo dispuesto por la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, no pueda sumarse de forma parcial las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas con el objeto de determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, es decir no existe disposición alguna que señale que no pueda considerarse dentro de la utilidad fiscal para efectos de determinar el resultado fiscal consolidado, el inventario acumulable determinado por sus sociedades e incluido en su utilidad fiscal individual.

Asimismo, tampoco procede confirmar a [REDACTED] actualmente [REDACTED] que no existe disposición expresa en la ley que establezca que el inventario acumulable de una controlada se deba acumular a la utilidad fiscal consolidada o bien, como un concepto adicional a las utilidades y pérdidas fiscales de las controladas que se consideran en la determinación del resultado fiscal consolidado, toda vez que el inventario acumulable es sumado para determinar la utilidad o en su caso la pérdida fiscal individual y estas se suman a la utilidad o pérdida fiscal de la controladora quien es la que suma o resta para determinar el resultado fiscal consolidado.

Por lo antes expuesto, esta Administración enuncia la observación que se conoció con motivo de la revisión practicada a la documentación e información proporcionada, como sigue:

La contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] para efectos de la determinación de la utilidad fiscal consolidada, omitió sumar para determinar su resultado fiscal consolidado la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio 2006 de \$1,821,128,230 a \$3,380,157,057, manifestada en declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, toda vez, que dicha sociedad considera en la determinación de su resultado fiscal el inventario acumulable en cantidad de \$1,559,028,827, en participación consolidable por \$1,558,055,993 lo anterior, de conformidad con los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

87

Del análisis efectuado a la documentación comprobatoria proporcionada por la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] que amparan la determinación de la utilidad fiscal consolidada, incluidos en los papeles de trabajo antes transcritos y a los argumentos plasmados por la propia contribuyente, se desprende que, el primer párrafo del artículo 68, primer párrafo de la fracción I, inciso a) y tercer párrafo de la fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, señala lo siguiente:

Asimismo, es de aclarar, que el artículo 68 anteriormente señalado, obliga a [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su carácter de sociedad controladora, a determinar su resultado fiscal consolidado bajo la mecánica que el propio artículo le establece.

De la inserción anterior, se desprende medularmente lo siguiente:

- La empresa [REDACTED] es una sociedad controlada de la actora que en el ejercicio fiscal de 2006, reportó en sus utilidades un monto de \$1,559,028,827, que en participación consolidable es de \$1,558,055,993, y que la demandante tuvo que reportar en consolidación de conformidad con el artículo 68, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta;
- Que mi contraria no podía disminuir la cantidad de \$1,558,055,993, por concepto de inventario acumulable de su controlada [REDACTED] bajo el argumento de que ese concepto no formaba parte de la utilidad fiscal porque no representaba ingresos, pues independientemente de la naturaleza del inventario, lo cierto es que debía considerarlo al así haberlo dispuesto el legislador; y
- Que si bien, en el caso concreto la empresa [REDACTED] en lo individual, fue que optó por tributar conforme a lo dispuesto en el artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir de 2005, lo cierto también es que el inventario acumulable forma parte de su utilidad fiscal al tratarse de un concepto que busca nulificar el beneficio de una doble deducción en la adquisición de mercancías, el inventario acumulable debía ser considerado para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado.

Una vez precisado lo anterior, se reitera que el argumento que se contesta deviene infundado, pues en primer lugar, tenemos que en materia de impuesto sobre la renta, hasta el 31 de



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

88

diciembre de 2004, los contribuyentes podían considerar como deducible de los ingresos acumulables del ejercicio, la cantidad que erogaban por la adquisición de mercancías en el mismo ejercicio en que se realizaba la adquisición.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2005, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1º de diciembre del 2004, se derogó el sistema de deducción de adquisición de mercancías, sustituyéndose por el sistema de deducción del costo de lo vendido.

Para mayor comprensión de lo anterior, a continuación se precisa qué es lo que disponía la fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre del 2004, y qué es lo que dispone la fracción II del artículo en comento aplicable al ejercicio fiscal revisado.

Ley del Impuesto sobre la Renta 2004	Ley del Impuesto sobre la renta 2005
Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas inclusive en ejercicios posteriores.	Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: II. El costo de lo vendido.

Al respecto, es patente que antes del 1º de enero de 2005, los contribuyentes podían deducir la adquisición de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados que adquirieran en el ejercicio correspondiente, mientras que después de esa fecha, los contribuyentes sólo pueden deducir el costo de lo vendido.

En tal contexto, a partir de 2005, los contribuyentes sólo pueden deducir el costo de lo vendido de las mercancías cuando sean enajenadas, cambiando así la situación jurídica de los causantes de no poder deducir las mercancías por su simple adquisición, como se venía haciendo hasta ese año.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

89

Es decir, a partir del ejercicio de 2005, las personas morales y las personas físicas con actividades empresariales, ya no deducirían el costo por la adquisición de mercancías en el mismo ejercicio de su adquisición, sino que empezarían a deducir el conjunto de las erogaciones efectuadas para adquirir el producto o procesarlo y convertirlo en un producto terminado, hasta que el mismo haya sido enajenado, por lo que el inventario que se tenía al 31 de diciembre de 2004 no se considera para la determinación de dicho costo.

Esto es, el sistema de deducción vía costo de lo vendido (que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2005) atiende al costo de adquisición o de producción de las mercancías al momento en que son enajenadas, por lo que **en el ejercicio en que se enajena un producto, se atiende a lo que le costó al contribuyente ponerlo en venta.**

Sin embargo, dicha mecánica no le es aplicable a los inventarios existentes hasta el 31 de diciembre de 2004.

En efecto, resulta importante precisar que las mercancías que los contribuyentes tenían al 31 de diciembre de 2004, no son objeto del nuevo sistema de deducción (costo de lo vendido), en virtud de que al momento en que fueron adquiridas, ya fueron deducidas, atendiendo al régimen de deducción vigente hasta 2004 (deducción de las mercancías en el momento mismo de su adquisición) que imperaba en los ejercicios anteriores a 2005.

No obstante, como un supuesto excepcional, el legislador otorgó a los contribuyentes la posibilidad de considerar a los inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004 dentro de la determinación del costo de lo vendido para el ejercicio 2005 y siguientes, ello bajo la condición de que el referido inventario lo acumulen.

Dicha opción fue concebida en el Artículo Tercero Transitorio del decreto publicado el 1º de diciembre de 2004, en el Diario Oficial de la Federación, que en su fracción IV, precisó lo siguiente:

"Artículo tercero. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

IV. Los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán optar por acumular los inventarios a que se refiere esta fracción, conforme a lo establecido en la siguiente fracción, en cuyo caso podrán deducir el costo de lo vendido conforme enajenen las mercancías. Cuando los contribuyentes no opten por acumular los inventarios considerarán que lo primero que se enajena es lo primero que se



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

90

había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha.

(Énfasis añadido)

Del numeral transcrito, se desprende como regla general que **los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido, no podrán deducir las mercancías que tenían al 31 de diciembre de 2004.**

Sin embargo, como regla de excepción a efecto de poder deducir las mercancías enajenadas relativas al inventario que se tenía al 31 de diciembre de 2004, **los contribuyentes deberán acumular el inventario que tengan al 31 de diciembre de 2004, atendiendo al procedimiento que establece la fracción V, del propio Artículo Tercero Transitorio del Decreto publicado el 1 de diciembre de 2004 (opción).**

En ese entendido, respecto de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, es importante destacar a esa H. Sala que a partir del ejercicio de 2005, la obligación de los contribuyentes es sujetarse a la regla general que en este caso consiste en que para determinar el costo de lo vendido, no podrán deducir mercancías al momento de adquirirse; sin embargo, **por voluntad propia los contribuyentes deciden ejercer la opción prevista en la disposición transitoria en estudio, consistente en deducir mercancías enajenadas relativas al inventario que tenían al 31 de diciembre de 2004, resulta entonces que tienen la ineludible obligación de cumplir con los requisitos que se establecen a efecto de poder ejercer tal opción.**

Las consideraciones anteriores, demuestran que derivado del nuevo sistema de deducción denominado "costo de lo vendido", en el cual se permite la deducción del costo de adquisición de mercancías hasta que sean enajenadas, es que no se permite que la existencia en inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004 sean deducidas, es decir, que sean consideradas para efectos de determinar el costo de lo vendido, pues en dicho ejercicio (2004) la ley permitía la deducción del costo de las mercancías en el momento en que las mismas se adquirían con independencia de su enajenación.

En otras palabras, la prohibición expresa de no deducir los inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004 mediante el nuevo sistema de costo de lo vendido, **tuvo como propósito impedir que el costo de adquisición de las mercancías se deduzca en dos ocasiones**, toda vez que la deducción de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004 se efectuó en el



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 621 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

91

ejercicio en que se adquirieron, por lo que al ser enajenadas, ya no formarán parte de la deducción frente al "costo de lo vendido".

Así, si bien es cierto en principio la empresa controlada [REDACTED] tiene la obligación de acumular las existencias en inventario, también es cierto que cuando decidió ejercer la opción prevista en la fracción IV, del Artículo Tercero Transitorio del Decreto de referencia, ello tiene como consecuencia que la obligación contenida en tal disposición adquiera relevancia en su esfera jurídica, no por prescripción imperativa del legislador, sino porque dicha empresa controlada, decidió ejercer la opción aludida.

Por ende, es válido concluir que tanto la actora, como su empresa controlada, [REDACTED] pueden ejercer la opción prevista en el referido Artículo Tercero transitorio; empero, como el ejercicio de la opción no es obligatorio, en caso de considerarla inconveniente, basta con estar a la regla general sin someterse a la vía de excepción, es decir, no deducir las existencias en inventarios al 31 de enero de 2004.

En estas circunstancias, de la interpretación armónica, sistemática y causal de las disposiciones que integran el sistema de "costo de lo vendido", se desprende con suma claridad que cuando el legislador hizo referencia a "inventario acumulable", ello conllevaba que el inventario que tenía la citada empresa controlada al 31 de diciembre de 2004, se adicionara o acumulara al momento de determinar la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, pues sólo así se neutralizaría el efecto de la doble deducción que se autorizó mediante la fracción IV del Artículo Tercero de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005.

Lo anterior, trasladado al régimen de consolidación, quiere decir que el porcentaje que a nivel consolidado debe fluir a la controladora, será influenciado por la opción de acumulación de los inventarios que la sociedad controlada ejerció en su momento; de lo contrario, se estaría reconociendo únicamente la doble deducción (autorizada mediante la fracción IV del Artículo Tercero de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta), pero no se reconocería el efecto de reversión, es decir, el de acumular la existencia de inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004.

Aunado a ello, es que esta autoridad consideró legal la determinación adoptada por la diversa fiscalizadora, por lo que la resolución combatida en sede administrativa se encuentra debidamente fundada y motivada.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

92

Se afirma lo anterior, toda vez que la autoridad fiscalizadora sí señaló a fojas 52 a 76, de la referida resolución, los fundamentos y los razonamientos por los cuales en consolidación fiscal, la demandante debía considerar el inventario acumulable de su controlada [REDACTED] citando mediariamente los artículos 10, 68, fracción I, inciso a), y 76, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (2006), así como las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2005, pues de su contenido se llega a la conclusión que mi contraria, para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada, debe considerar, entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable, y restará —entre otros— las pérdidas fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia pérdida fiscal, ambas en la participación señalada, por lo que es infundado el argumento que se contesta, en el sentido de que para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, únicamente debe tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que para tales efectos pueda considerarse dentro de dichos conceptos, el inventario acumulable de [REDACTED]

Debe resaltarse a esa H. Sala que si bien los artículos 10 y 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en la época de los hechos, no prevén de forma expresa que para la determinación del impuesto consolidado, la controladora deba incluir en la base de la consolidación su inventario acumulable, dicha inclusión deriva de la aplicación voluntaria que realizó [REDACTED] al optar por deducir sus inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004, conforme al nuevo sistema de deducción del costo de lo vendido en términos de las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En este sentido, todos aquellos contribuyentes que opten por acogerse a lo dispuesto por el citado artículo Tercero Transitorio, incrementan voluntariamente los conceptos con los que deben determinar su utilidad o pérdida del ejercicio, es decir, además de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, deberán considerar el inventario acumulable a efecto de poder determinar su utilidad o pérdida del ejercicio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.3o.A.181 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, misma que dispone a la letra lo siguiente:

Época: Novena Época, Registro: 181590, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Mayo de 2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI.3o.A.181 A, Página: 1757



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

93

CONSOLIDACIÓN FISCAL. VENTAJAS QUE REPRESENTA ESE RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN OPCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1993). La consolidación fiscal permite integrar las utilidades o pérdidas fiscales de las diversas empresas que conforman el grupo y determinar el impuesto sobre la renta en torno a esa base, por ende, se logra que las pérdidas que se tengan en algunas empresas del grupo se amorticen de inmediato contra las utilidades de otras empresas integrantes del propio grupo. Bajo este esquema de tributación, una empresa no tiene que esperar a que en lo individual genere utilidades para saldar sus pérdidas sufridas en años anteriores, situación que puede generar beneficios financieros adicionales; en el supuesto de que tenga pérdida consolidada, ésta se podrá compensar contra la utilidad consolidada de ejercicios futuros; además, la consolidación tiene como ventaja, la centralización de la tesorería del grupo para llevar a cabo el pago de los impuestos, en virtud de que la parte del interés minoritario de las controladas se entera directamente al fisco, y la parte consolidada fluye a la controladora. Si el pago provisional consolidado resulta inferior a los determinados en lo particular, la controladora tendrá flujos de efectivo adicionales debido a los recursos canalizados por sus controladas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 48/2004. Talleres Mecánicos Montserrat, S.A. de C.V. 11 de marzo de 2004.
Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez.

(Énfasis añadido)

Así las cosas, debe señalarse que **para la determinación de la utilidad o pérdida fiscal, se deberán considerar todos aquellos conceptos que la ley señale como acumulables, y no sólo los conceptos que tengan la naturaleza de ingresos.**

Por tanto, es claro que contrario a lo que señala la enjuiciante, para la determinación de la pérdida o utilidad fiscal del ejercicio, **si se debe acumular el efecto del inventario previsto por la fracción IV del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2005.**

Bajo este orden de ideas, es válido concluir que el inventario acumulable, al ser un concepto de adición, es parte integrante de la determinación de la utilidad o pérdida fiscal que las empresas controladas en lo individual posteriormente deben reportar a la consolidación fiscal; es decir, la utilidad fiscal o pérdida fiscal que deben reportar las controladas que optaron por acogerse a lo dispuesto por el Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2005, a su controladora a efecto de determinar el resultado fiscal consolidado, incluye el inventario acumulable a que se refiere dicha disposición.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

94

Lo anterior, pues como es del conocimiento de esa H. Sala, el artículo 68, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado, señala que la sociedad controladora determinará la utilidad fiscal o pérdida fiscal consolidada, sumando las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas, y restando las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin actualizar, y, según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate.

Además, entre otros conceptos- la controladora sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de sus sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores.

En ese tenor, al determinar la utilidad fiscal o pérdida fiscal una empresa controlada, necesariamente debe considerar a nivel individual el inventario acumulable dentro del cálculo para entregar esa información a la empresa controladora, pues al citado inventario se le brinda el tratamiento de un ingreso acumulable de conformidad con las fracciones IV y V del artículo transitorio en análisis.

Luego, si [REDACTED] forma parte del régimen de consolidación y optó por aplicar el beneficio concedido por las fracciones IV y V del artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2005 -se insiste-, está debe determinar en lo individual (como lo hizo en la declaración complementaria presentada el 12 de agosto de 2010) su utilidad o pérdida considerando los efectos del inventario acumulable.

Por tanto, independientemente de si dicho concepto tiene o no la naturaleza de ingreso acumulable, **la empresa controladora se encuentra obligada a considerar el efecto del inventario acumulable en la determinación del impuesto consolidado del ejercicio, ello, al momento de considerar en la participación consolidable los montos de las utilidades o pérdidas que se reportan en el grupo, entre ellas, las de su controlada [REDACTED]**

En consecuencia, esa H. Sala podrá verificar que resultan incorrectas las afirmaciones de mi opositora en el sentido de que no debía considerar el inventario acumulable como parte de la utilidad fiscal de su empresa controlada, pues como se ha visto, la concesión del beneficio establecido en el artículo Tercero de las disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2005, obliga a considerar su inventario acumulable como parte integral de su utilidad fiscal, pues incluso tal afirmación concuerda con el hecho de que las empresas controladas deben reportar sus utilidades fiscales a la controladora como si no hubiera



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 623 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

95

consolidación, las cuales deben ser consideradas por la empresa holding a efecto de no incurrir en beneficio indebido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.A.45 A (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época: Décima Época, Registro: 2005382, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.9o.A.45 A (10a.), Página: 3075

"INVENTARIOS ACUMULABLES. AL CONSTITUIR UN INGRESO ACUMULABLE PARA EL CÁLCULO DE LA UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEBEN CONSIDERARSE PARA EL DE LA BASE DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. En la jurisprudencia P./J. 114/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 7, de rubro: "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. LOS ARTÍCULOS 16 Y 17, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIOLAN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002)", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la base gravable a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es la utilidad fiscal a que alude el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual se obtiene por las personas morales al disminuir las deducciones autorizadas por la propia ley del total de sus ingresos acumulables. Por su parte, el artículo 29, fracción II, del ordenamiento citado prevé como deducción el costo de lo vendido, como aquella partida que puede restarse de los ingresos acumulables, con la finalidad de que se determine la base gravable. Además, conforme al sistema de deducción, que establecen los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el contribuyente puede deducir de sus ingresos acumulables las cantidades que haya devengado a fin de producir determinado artículo, el precio de la adquisición del artículo que le genera esos ingresos, o bien, los gastos o erogaciones que realiza para la prestación de cierto servicio. Al efecto, el artículo tercero transitorio, fracciones IV y V, del decreto de reformas a la ley mencionada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, vigente a partir del 1o. de enero del año siguiente, estableció dos posibilidades para que las empresas hagan la transición del sistema de deducción de adquisiciones al de costo de ventas deducible. La primera consiste en que no deben contemplar en el costo de ventas deducible el valor de adquisición de las mercancías existentes en sus inventarios, pues éste ya lo dedujeron conforme al sistema anterior -ya que, de lo contrario, podría duplicarse la deducción-, además de que previamente a que consideren que enajenaron mercancía adquirida a partir de 2005 (en que entró en vigor el nuevo sistema) deberán agotar el inventario referido. La segunda implica que opten por acumular el valor de adquisición de las mercancías que conformen el inventario, lo que se traduce en



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

96

revertir la deducción efectuada por ese concepto en el anterior sistema -ya que de lo contrario podría duplicarse la deducción-, con lo que se les permite deducir ese valor conforme se enajene la mercancía a partir de 2005, de acuerdo con las reglas que determina la fracción V del propio artículo. En ~~este~~ ~~la~~ ~~esquema~~, la finalidad de las operaciones comentadas es, precisamente, proporcionar un valor o costo al inventario para poder deducirlo cuando se enajene, pues debe recordarse que, en ese momento, carece de tal costo al haber sido deducido conforme al sistema anterior, es decir, en el momento de su adquisición, porque el sistema opcional también fue implementado por el legislador para evitar una doble deducción, ya que hasta antes de la entrada en vigor de los artículos 45-A a 45-I señalados, los costos de producción se deducían conforme al sistema de adquisiciones. Así, resultaría un contrasentido sostener que los inventarios no constituyen un ingreso acumulable para determinar la utilidad del ejercicio y, al mismo tiempo, reconocer la posibilidad de deducir para tales efectos el costo de lo vendido, ya que con ello se permitiría deducir un concepto que no impactó en la generación de riqueza del sujeto obligado al pago. Entonces, aunque no pueda afirmarse que el inventario constituya un ingreso, por sí, pues no está expresamente señalado en la ley, el legislador se valió de una ficción jurídica para estimarlo como un ingreso que debe acumularse a los restantes del ejercicio, para hacer viable la opción de deducción a que se refiere la fracción IV, primer párrafo, del artículo tercero transitorio y contrarrestar las consecuencias derivadas de una doble deducción sobre un mismo concepto. Por tanto, como los inventarios acumulables modifican el haber patrimonial de su propietario, constituyen un ingreso acumulable para el cálculo de la utilidad fiscal gravable del impuesto sobre la renta, por lo que deben considerarse para el de la base de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas."

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 101/2013. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de Circuito. Secretarías: Elizabeth Trejo Galán.

(Énfasis añadido)

De igual manera, resulta aplicable a los razonamientos que anteceden, la diversa tesis I.2o.A.60 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, misma que dispone a la letra lo siguiente:

Época: Novena Época, Registro: 163440, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.2o.A.60 A, Página: 1545

"RENTA. AL ELEGIR LA OPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIONES IV Y V, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, EL INVENTARIO ACUMULABLE O VALOR DE



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

97

ADQUISICIÓN DE LAS MERCANCÍAS DEBE SUMARSE A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA SER AFECTADO POR EL CÁLCULO DE LA INDICADA CONTRIBUCIÓN COMO SI FUERA INGRESO, AUNQUE NO LO SEA. Dichas disposiciones fueron emitidas para reglamentar la sustitución del antiguo sistema de deducción de "adquisiciones" por el nuevo de deducción de "costo de lo vendido", para lo cual disponen dos formas que el contribuyente puede emplear para tratar las deducciones del inventario que tuviera hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. La primera consiste en que no debe contemplar en el costo de ventas deducible el valor de adquisición de las mercancías existentes en ese inventario, pues tal valor ya lo habría deducido conforme al anterior sistema -toda vez que de lo contrario se podría duplicar la deducción-, además de que previamente a que considere que enajenó mercancía adquirida a partir de dos mil cinco (en que entró en vigor el nuevo sistema) deberá agotar el inventario en mención. La segunda, implica que opte por acumular el valor de adquisición de las mercancías que conformen ese inventario, lo que se traduce en revertir la deducción efectuada por ese concepto en el anterior sistema -ya que de lo contrario se podría duplicar la deducción-, con lo que se le permite deducir ese valor conforme vaya enajenando la mercancía a partir de dos mil cinco, siguiendo las reglas que determina la fracción V del propio artículo tercero. Así, esa reversión de la deducción opera en sentido contrario de la deducción efectuada, es decir, la deducción se lleva a cabo restando de los ingresos acumulables el valor de adquisición de las mercancías, mientras que la reversión implica sumar el monto que se dedujo por ese concepto como si fuera un ingreso, aunque no lo sea, dado que la reversión no le quita el carácter de gasto, sino que más bien difiere el momento en que será deducible ese valor con base en el nuevo sistema. De tal forma, cuando el contribuyente opta por acumular el mencionado valor o inventario acumulable, ese concepto debe sumarse a los ingresos acumulables para ser afectado por el cálculo del impuesto como si fuera un ingreso, aunque no lo sea, pues solamente de esa forma se revierte la deducción que respecto de ese valor ya se había hecho con anterioridad; de lo contrario se desconocería la opción elegida que busca evitar que se duplique la deducción.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 244/2010. Servicios y Fertilizantes del Noroeste, S.A. de C.V. 19 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Suárez Camacho. Secretario: Pedro Enrique Díaz Pacheco.

(Énfasis añadido)

De igual manera, ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ya se ha pronunciado al respecto, por conducto de la Segunda Sala Regional Hidalgo-México en la tesis VI-TASR-XII-II-34, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

VI-TASR-XII-II-34, R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 277.

"ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DE ENERO DE 2005, NO SE OPONE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 1, 10 Y 17 DE LA CITADA LEY.- Del análisis a las aludidas disposiciones, se advierte que



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

98

no existe oposición entre ellas, ya que de su análisis sistemático, se advierte que los artículos 1, 10 y 17, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prevén el sujeto, objeto, base, tasa, época de pago del impuesto de la materia, así, el objeto lo constituyen los ingresos que generen riqueza o modificaciones positivas al patrimonio de las personas; por su parte, en las disposiciones transitorias, en ningún momento se prevé que el inventario se deba considerar ingreso, mas si tiene implicaciones con las deducciones que se disminuyen de dichos ingresos para obtener en su caso la utilidad fiscal, por lo que, la fórmula establecida por el legislador en las disposiciones transitorias relativas a acumular los inventarios tiende a evitar el efecto que el costo de adquisición de las mercancías se deduzca nuevamente, considerando que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, se podía deducir el costo de adquisición de las mercancías aun antes de haberse enajenado. Por lo que, en virtud de que a partir de 2005, se substituyó dicha deducción por la del costo de lo vendido en el ejercicio en que ocurra su enajenación, la ley no autoriza a deducir cuando se enajenan las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004, cuando su valor ya fue deducido, a menos que el contribuyente opte por acumular los inventarios referidos, conforme a lo establecido en la fracción V, del artículo transitorio mencionado, en cuyo caso podrá deducir el costo de lo vendido de los inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004, conforme los enajene, siempre que siga el procedimiento establecido en la citada fracción V, donde se determina cómo se obtendrá el inventario acumulable. (32)"

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6505/07-11-02-4.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de junio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Victorino M. Esquivel Camacho.- Secretario: José Luis Méndez Zamudio.

(Énfasis añadido)

De igual manera, cobra aplicación la tesis VI-TASR-XXI-28, sustentada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

VI-TASR-XXI-28, R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 238.

"INGRESOS ACUMULABLES. SE CONSIDERAN COMO TALES LOS INVENTARIOS, CUANDO EL CONTRIBUYENTE HAYA EJERCIDO LA OPCIÓN QUE ESTABLECE LAS FRACCIONES IV Y V, DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE PARA 2005.- En las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de diciembre de 2004, y que entró en vigor el 1° de enero de 2005, se reformó la fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, modificando el sistema de deducciones aplicable a las personas morales, pasando de un sistema de deducción de adquisiciones al de la deducción del costo de lo vendido. Ahora bien, en la fracción IV del



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 625 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

99

artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, por una parte, establece que para determinar el costo de lo vendido, los contribuyentes no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004, toda vez que el valor de adquisición de los mismos ya habría sido deducido por el causante, y, por otra, prevé una opción a favor de los contribuyentes, consistente en la posibilidad de reflejar el mencionado valor de adquisición dentro del costo de lo vendido de los inventarios al 31 de diciembre de 2004, conforme éstos sean enajenados a partir de enero de 2005, siempre y cuando el valor de dichas existencias sea acumulado, conforme a las reglas que determina la diversa fracción V del propio precepto. En ese contexto, si los contribuyentes optan por acumular sus inventarios en términos de las fracciones IV y V del artículo tercero transitorio, entonces dichos inventarios adquieren el carácter de ingresos acumulables, lo anterior ya que por virtud de la opción ejercida existe la voluntad del contribuyente de considerarlos como tales. (1)"

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 11734/07-17-10-6.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de junio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Avelino C. Toscano Toscano.- Secretario: Lic. Fernando Hernández López.

(Énfasis añadido)

En tales condiciones, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

B. La autoridad no apreció los hechos de manera equivocada al afirmar que sobre el tema de fondo abordado en el apartado precedente ya existe la sentencia firme dictada en el juicio 33900/07-17-05-1, misma que resulta desfavorable a los intereses de mi opositora.

Ciertamente, a fojas 75 y 76 del oficio 900-05-2013-48229 se indica literalmente:

Cabe mencionar que de conformidad con el primer párrafo del artículo 6º en correlación con el artículo 63 ambos preceptos normativos del Código Fiscal de la Federación vigente, de los expedientes

Sin texto

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

100

abiertos a nombre de [REDACTED] actualmente [REDACTED] en la Administración General de Grandes Contribuyentes, se conoció que la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitió sentencia de fecha 01 de octubre de 2010 en la que reconoció la validez de la resolución impugnada de fecha 01 de marzo de 2010, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, misma que ha causado estado por ministerio de Ley, en relación al juicio de Nulidad 33900/07-17-05-1, promovido por [REDACTED] actualmente [REDACTED] respecto de la solicitud de confirmación de criterio en el que solicitaba que para efecto del cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en términos de la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente deberá tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, sin considerar el inventario acumulable determinado por las sociedades controladas, la cual actualmente se encuentra firme.

En relación a lo anterior, es evidente que la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] promovió juicio de Nulidad ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, sin que en dicho medio de defensa haya sido emitida una resolución favorable a esa contribuyente, por lo que la contribuyente en revisión en su carácter de sociedad controladora, debió considerar en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión la utilidad fiscal del ejercicio de su sociedad controlada [REDACTED] en sus términos sin excluir el inventario acumulable determinado por ésta en el ejercicio en revisión.

De lo reproducido, se desprende que la autoridad fiscalizadora, independientemente de los motivos y fundamentos contenidos en la resolución controvertida en sede administrativa, consideró que la incipiente debía estimar en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la utilidad fiscal del ejercicio de su sociedad controlada [REDACTED] en sus términos, sin excluir el inventario acumulable.

Lo anterior, porque sobre el tema consistente en que mi colitigante debía considerar en consolidación fiscal el inventario acumulable de sus controladas, ya existe sentencia firme que le resulta desfavorable.

Al respecto, la accionante señala que la autoridad analizó parcialmente las constancias del juicio contencioso 33900/07-17-05-1, radicado en la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues si bien es cierto que por sentencia de 01 de octubre de 2010, fue reconocida la validez de la resolución impugnada, también lo es que dicho fallo fue impugnado mediante el juicio de amparo 408/2011, mismo que fue resuelto en la sesión del 17 de febrero de 2012 por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de no ampararla; sin embargo aduce que en la sentencia dictada en dicho juicio constitucional, se indicó que su obligación consistía únicamente en considerar las



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

101

utilidades de sus empresas controladas, ello para efectos de la determinación del resultado fiscal o pérdida fiscal consolidados.

Ahora bien, tales argumentaciones —como fue anunciado con antelación— son infundadas, dado que en la sentencia recaída al juicio de amparo 408/2011, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no indicó que la actora tenía la obligación únicamente de considerar las utilidades de sus empresas controladas (sin considerar el inventario acumulable), ello para efectos de la determinación del resultado fiscal o pérdida fiscal consolidados.

Al respecto, basta efectuar una simple lectura a la sentencia de 17 de febrero de 2012, dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el D.A. 408/2011, para llegar a la conclusión de que ese no fue el pronunciamiento del Poder Judicial Federal por conducto del citado tcc.

En efecto, a fojas 42 en delante de la ejecutoria recaída al D.A. 408/2011, se resolvió lo siguiente:

Consideraciones, en su conjunto, que llevaron a la Sala a concluir que resultaba inexacta la afirmación de la quejosa en el sentido de que no existía disposición expresa que estableciera que el inventario acumulable de una controlada se debía acumular a la utilidad fiscal.

Por ello, resultan infundados los argumentos de la quejosa bajo la línea argumentativa de que no fueron materia de controversia los elementos que debían de considerarse para calcular la utilidad o pérdida fiscal de las controladas, pues sería tanto como desconocer los aspectos que fueron

Sin texto



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

102

ventilados en la consulta formulada y a la postre, controvertidos en la demanda de nulidad.

En efecto, la consulta elevada a la autoridad la hoy quejosa la sustentó, de acuerdo a los hechos y antecedentes narrados en la misma, del régimen fiscal de consolidación a que se encontraba sujeta como sociedad controladora a fin de obtener el resultado fiscal consolidado; a las obligaciones emanadas del régimen de costo de lo vendido y de manera particular, de las empresas controladas, así como el tratamiento fiscal que correspondía al inventario acumulable de cada una de éstas; elementos a considerar que llevaron a la contribuyente a solicitar que se confirmara, entre otros aspectos, que no existía disposición expresa en la ley que estableciera que el inventario de las controladas, como un concepto adicional a las pérdidas o utilidades de las mismas, se considerara en la determinación del resultado fiscal consolidado.

De ahí que la Sala a efecto de resolver la litis planteada, justificadamente abordó los elementos que debían de considerarse para calcular la utilidad o pérdida fiscal de las controladas, pues fue uno de los aspectos torales que la llevaron a concluir que la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, sería por vía de cada una de las determinaciones de utilidades

Sin texto



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 627 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

103

o pérdidas fiscales de las sociedades que se encontraban sujetas al régimen de consolidación fiscal.

En efecto, partiendo de que era el propio artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el que establecía, atendiendo al régimen de consolidación fiscal, la mecánica para obtener la utilidad fiscal consolidada y en función de los hechos y antecedentes narrados que involucraba la obtención de utilidad fiscal de las empresas controladas que habían optado por la deducción de los inventarios acumulados, la Sala arribó a su determinación.

Lo anterior en virtud de que, el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que las controladoras para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada deben considerar, entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable y restará, entre otros, las pérdidas fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia pérdida fiscal, ambas en la participación señalada, y si la consulta derivaba de un antecedente concreto con relación a que en el caso algunas de las sociedades controladas ejercieron la opción de acumular la existencia de inventarios al 31 de diciembre de 2004, para estar en posibilidad de deducir dicho inventario mediante el costo de lo

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

104

vendido, entonces, lógicamente, la Sala tenía que analizar la litis planteada atendiendo a la consulta formulada.

Relacionado con lo anterior, se destaca que las premisas de que partió la Sala para establecer que resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la quejosa, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, no obedecieron a que correspondieran a conceptos adicionales a la utilidad o pérdida fiscal individuales de las controladas, ni como conceptos adicionales a la propia utilidad fiscal consolidada, como inexactamente lo afirma la quejosa.

Lo expuesto, en virtud de que la Sala partió de la premisa de que para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, sería por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encontraban sujetas al régimen de consolidación fiscal.



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-S.

105

Esto es, entre los aspectos a que atendió la Sala para resolver en ese sentido, obedeció a que las sociedades controladas así como la controladora, determinaban en lo individual, las utilidades o pérdidas fiscales que correspondieran, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la ley; lo cual será disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas, así como que la deducción de los inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, al ser enajenados no formaban parte de la deducción mediante el costo de lo vendido porque fueron deducidos al momento de la adquisición, por lo que la enajenación de dicho inventario representaba solamente un ingreso acumulable.

Lo así resuelto, resulta acorde a las disposiciones de la Ley del impuesto sobre la Renta que fueron materia de interpretación en la sentencia recurrida, en el sentido de que las reformas vigentes a partir del año de dos mil cinco, fueron emitidas para reglamentar la sustitución del antiguo sistema de deducción de "adquisiciones" por el nuevo de deducción de "costo de lo vendido", para lo cual disponen dos formas que el contribuyente puede emplear para tratar las deducciones del inventario que tuviera hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro.



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-S.

106

La primera consiste en que no debe contemplar en el costo de ventas deducible el valor de adquisición de las mercancías existentes en ese inventario, pues tal valor ya lo habría deducido conforme al anterior sistema —toda vez que de lo contrario se podría duplicar la deducción—, además de que previamente a que considere que enajenó mercancía adquirida a partir de dos mil cinco (en que entró en vigor el nuevo sistema) deberá agotar el inventario en mención.

La segunda, implica que opte por acumular el valor de adquisición de las mercancías que conformen ese inventario, lo que se traduce en revertir la deducción efectuada por ese concepto en el anterior sistema —ya que de lo contrario se podría duplicar la deducción—, con lo que se le permite deducir ese valor conforme vaya enajenando la mercancía a partir de dos mil cinco, siguiendo las reglas que determina la fracción V del propio artículo tercero.

De tal forma, cuando el contribuyente opta por acumular el mencionado valor o inventario acumulable, ese concepto debe sumarse a los ingresos acumulables para ser afectado por el cálculo del impuesto como si fuera un ingreso, aunque no lo sea, pues solamente de esa forma se revierte la deducción que respecto de ese valor ya se había hecho con anterioridad; de lo contrario se desconocería la opción elegida que busca evitar que se duplique la deducción.

Sin texto



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 629 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

107

Y si bien es cierto que en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cálculo del resultado consolidado se conforma de las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas, también lo es, que no podría dejarse de advertir, tal y como se determinó en la sentencia, que acorde a las disposiciones legales que rigen las obligaciones fiscales tanto de la controlada como de la controladora, en lo individual, se previene como tal, la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que incluye la acumulación de los inventarios, en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable, lo cual necesariamente se ve reflejado en la utilidad o pérdida fiscal.

De ahí que deben desestimarse los argumentos de la quejosa referentes a que:

- En términos del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se establece de manera expresa el que los inventarios acumulables de las empresas controladas se deban adicionar a la utilidad fiscal consolidada;
- No existe disposición expresa dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establezca dicha circunstancia.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

108

De la inserción anterior, así como de la lectura integral a la sentencia anteriormente reseñada, misma que fue ofrecida como prueba por la propia demandante, se colige con facilidad que en ninguna parte de su contenido se advierte la afirmación de aquella en el sentido de que para calcular el resultado fiscal consolidado únicamente se encontraba obligada a sumar las utilidades de sus empresas controladas sin considerar el inventario acumulable.

Por el contrario, se desprende que el inventario acumulable debe ser considerado individualmente por sus controladas como parte de la utilidad fiscal, y posteriormente, dicha utilidad debe ser aplicada en consolidación sin dejar de aplicar el inventario acumulable.

Incluso, a efecto de que a esa H. Sala no le quede duda de lo efectivamente resuelto por el citado Tribunal Colegiado de Circuito, cabe precisar lo resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana en la sentencia de 1º de marzo de 2011, cuya firmeza se actualizó derivado de la negativa de protección constitucional reproducida con antelación:

Fojas 44 y 45

Conforme a lo antes precisado, se estima por esta juzgadora que, tal y como lo estableció la autoridad demandada en la resolución impugnada, resulta aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, de conformidad con los artículos 10, y 28, fracción I, del Capítulo II, Sección III, del Título II, denominado "Del costo de lo vendido" que comprende los artículos 45-A a 45-I, 64 y 68, así como las fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

109

del 1 de enero de 2005, de ahí que resulte inexacto, como lo refiere el ocurrente, que no exista disposición expresa que establezca que el inventario acumulable de una controlada se deba acumular a la utilidad fiscal consolidada.

De donde resulta fundada la negativa de confirmar el criterio de la actora en el sentido de que, para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, en los términos del artículo 68, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente deba tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que, para tales efectos, pueda considerarse dentro de dichos conceptos el inventario acumulable de las consolidadas, como ya se indicó con antelación, dicho cálculo no se ajusta a la ley.

Tales razonamientos llevan a concluir que la autoridad fiscalizadora apreció de manera correcta los hechos al afirmar que sobre el tema de fondo consistente en dilucidar si mi contraría se encuentra obligada a considerar dentro de la utilidad fiscal de sus controladas el inventario acumulable, pues evidentemente la sentencia dictada el 01 de marzo de 2011, por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso 33900/07-17-05-1, a la que hace alusión en la resolución combatida, **no fue modificada y se encuentra firme.**

Especialmente, cuando la legalidad respecto del contenido de la sentencia de 01 de marzo de 2011 es convalidada al resolverse el amparo D.A. 408/2012 en el sentido de negar el amparo solicitado por la hoy enjuiciante, lo que sin duda demuestra que sobre tal punto debe operar la figura de la cosa juzgada refleja.



Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

110

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/66 (9a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época: Décima Época, Registro: 160323, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C. J/66 (9a.), Página: 2078.

"COSA JUZGADA. INFLUENCIA DE UN JUICIO ANTERIOR POR SER REFLEJA AL QUE VA A FALLARSE, NO OBSTANTE QUE NO EXISTA IDENTIDAD EN LAS COSAS O ACCIONES EJERCITADAS. Para que exista cosa juzgada es necesario que entre el caso resuelto por sentencia definitiva y aquel en que se invoca, concurren identidad de las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes y en la calidad con que lo fueren, esto es, que se haya hecho con anterioridad un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. De ese modo las excepciones vertidas por la demandada, que derivan de haber celebrado un contrato verbal de compraventa respecto del inmueble materia de la controversia, quedó resuelto en forma definitiva al considerarse que no acreditó la existencia del citado contrato, respecto de lo cual sí existe un pronunciamiento de fondo, que causó ejecutoria y constituye cosa juzgada, misma que no se puede variar a riesgo de vulnerar la garantía de seguridad jurídica. Ahora bien, la cosa juzgada refleja opera cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de objeto de un contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los litigios, pero no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro futuro; es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sea de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes. La cosa juzgada tiene por objeto, en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica, y para que surta efectos en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia ejecutoriada y aquel en que ésta sea invocada, concurren identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron; y no obstante que en el caso no exista identidad en las cosas o acciones ejercitadas, no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual es refleja."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 12293/99. Estela Rabinovich Shaderman. 30 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secretario: Alfredo Lugo Pérez. Amparo directo 2083/2001. María Hilaria Santelíz López. 18 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Hilario Salazar Zavaleta. Amparo directo 2603/2001. Bayer de México, S.A. de C.V. 14 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Francisco Peñaloza Heras. Amparo directo 171/2008. Rubén González Mendoza. 14 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 631 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

111

Salvador Andrés González Bárcena. Amparo en revisión 107/2009. 11 de junio de 2009.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

(Énfasis añadido)

Así las cosas, para que opere la eficacia refleja de la cosa juzgada, aún y cuando no se actualice la "identidad tripartita (partes, objeto y causa)", el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a hacer suyos los razonamientos medulares de la sentencia firme por ser indispensables para apoyar el nuevo fallo en el fondo, sobre el o los elementos que estén estrechamente interrelacionados con anterioridad, y así **evitar el dictado de sentencias contradictorias**.

En ese contexto, esa H. Sala, a fin de cumplir con dicha figura jurídica, debe considerar que mi opositora al haber obtenido un fallo desfavorable que se encuentra firme, en el cual medularmente se resolvió que no le asiste la razón al afirmar que para efectos de determinar su resultado fiscal consolidado, no debía considerar el inventario acumulable de sus empresas controladas, es que **se encuentra obligada por virtud de la fuerza de la cosa juzgada a considerar el inventario acumulable de su empresa controlada** como parte de la **identidad fiscal a determinar en consolidación**.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que lo anterior resulta perfectamente aplicable al juicio contencioso administrativo, tal como se desprende de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 198/2010, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época: Novena Época. Registro: 163187, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 198/2010, Página: 661

"COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU EFICACIA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La institución de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en ella descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; sin embargo, existen circunstancias particulares en las cuales la eficacia de dicha institución no tiene un efecto directo respecto a un juicio posterior, al no actualizarse la identidad tripartita (partes, objeto y causa), sino una eficacia indirecta o refleja y, por tanto, el órgano jurisdiccional debe asumir los razonamientos medulares de la sentencia firme -cosa juzgada- por ser indispensables para apoyar el nuevo fallo en el fondo, sobre el o los elementos que estén estrechamente interrelacionados con lo sentenciado con anterioridad y evitar la emisión de sentencias contradictorias en perjuicio del gobernado. Ahora bien, si en términos del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, alguna de

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

112

las partes hace valer como prueba superveniente dentro de un juicio contencioso administrativo instado contra actos tendentes a la ejecución de un diverso acto administrativo, la resolución firme recaída en el proceso donde se impugnó este último y se declaró nulo, procede que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aplique lo resuelto en el fondo de dicha ejecutoria, haga suyas las consideraciones que sustentan el fallo y declare la nulidad de los actos impugnados, a fin de eliminar la presunción de eficacia y validez que, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación posee todo acto administrativo desde que nace a la vida jurídica, evitando así la emisión de sentencias contradictorias."

Contradicción de tesis 332/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Décimo Tercero en la misma materia del Primer Circuito. 17 de noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Voto concurrente de Sergio A. Vallis Hernández. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Jonathan Bass Herrera. Tesis de jurisprudencia 198/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de noviembre de dos mil diez.

Una vez precisado lo expuesto, se estima conveniente puntualizar porqué se satisfacen los requisitos para la configuración de la figura procesal en comento, para lo cual resulta menester señalar que **a) existe coincidencia de sujetos**; además existe identidad por lo que hace a **b) Los objetos**; y por último, a **c) La causa de pedir**.

Ciertamente, lo anterior es de ese modo, toda vez que:

- ✓ **Existe coincidencia de sujetos**, en la medida de que si bien es cierto, la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo 33900/07-17-05-1 es una dependencia distinta de la hoy demandada, no menos cierto es que ambas pertenecen al Servicio de Administración Tributaria, como unidades administrativas de dicho organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En efecto, esa H. Sala no debe pasar desapercibido que en términos del artículo 8 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria², dicha dependencia, para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, contará —entre otros— con las unidades administrativas que establezca su Reglamento Interior.

² Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Servicio de Administración Tributaria contará con los órganos siguientes:

I. Junta de Gobierno;

II. Jefe, y

III. Las unidades administrativas que establezca su reglamento interior.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

113

En ese sentido, la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo 33900/07-17-05-1 y la diversa impugnada en el presente expediente, no actúan por cuenta propia, sino en representación y en nombre del Servicio de Administración Tributaria, al que se encuentran adscritas.

Por ello, no debe entenderse –como inexactamente lo hace la demandante– que la autoridad demandada en el juicio y la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente son autoridades distintas e independientes una de otra, pues si bien es cierto, en principio podría concebirse de esa manera, no debe soslayarse que ambas pertenecen y se encuentran adscritas al Servicio de Administración Tributaria, y actúan en su nombre y representación.

En tal orden de ideas, en ambos juicios, la parte demandada fue el Servicio de Administración Tributaria, por lo que en la especie se actualiza el primer supuesto para que se actualice la cosa juzgada.

- ✓ **Se actualiza la identidad de los objetos**, en la inteligencia de que en ambos procedimientos jurisdiccionales, se encuentra en *litis* el tema de si mi contraria debe considerar como ingresos acumulables, los inventarios de sus controladas.

En efecto, en el juicio 33900/07-17-05-1 la hoy enjuiciante señaló como acto impugnado la respuesta a la consulta que formuló a la extinta Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, en el sentido de **no** considerar como ingreso acumulable, el inventario de sus controladas.

Por su parte, y como se ha reseñado con antelación, el concepto de impugnación que se contesta, versa precisamente sobre el mismo tema.

Ergo, es evidente que también se surte el segundo supuesto en análisis, para la configuración de la cosa juzgada.

- ✓ **Se surte la identidad en la causa de pedir**, en la medida de que en ambos procedimientos, mi opositora somete a la potestad de ese H. Tribunal, emita decisión sobre la procedencia de considerar como ingreso acumulable, los inventarios de sus controladas, por la misma vía (juicio de nulidad).



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

114

Ciertamente, la incoante mediante dos juicios distintos, a controvertido el tema referido en el párrafo que antecede, lo que invariablemente actualiza el tercer supuesto para considerar que se configura plenamente la figura de la cosa juzgada.

En este orden de ideas, deberán ser desestimados los argumentos de mi opositora, en virtud de que en la especie **sí** concurren todos los elementos necesarios para que opere la cosa juzgada, como lo son: **la identidad de sujetos, la calidad con la que intervinieron en el procedimiento anterior, el objeto y la causa de pedir.**

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 161/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que dispone a la letra lo siguiente:

Época: Novena Época, Registro: 170353, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Torno XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 161/2007, Página: 197

***COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA.** Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurren identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi) en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra."

Contradicción de tesis 39/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, el anterior Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito; actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Juan Carlos de la Barrera Vite. Tesis de jurisprudencia 161/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha catorce de noviembre de dos mil siete.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 633 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

115

(Énfasis añadido)

Bajo tales consideraciones, es evidente que el argumento que se contesta es infundado, dado que mi coltigante sí debió considerar el citado inventario acumulable como parte integrante de la utilidad fiscal para determinar el resultado fiscal consolidado, cuya postura se refuerza con la sentencia antes analizada, misma que evidencia la configuración de la cosa juzgada, por lo que es patente que la incoante debió observarla.

Así las cosas, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

C. Mi coltigante no desvirtúa los fundamentos y motivos que tuvo la autoridad fiscalizadora para desestimar la declaración complementaria que presentó su controlada

En efecto, la accionante no combate los fundamentos y motivos que se contienen en el oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, [fojas 74 y 75] donde fue señalado lo siguiente:

Cabe señalar que efectivamente [redacted] presentó declaración anual complementaria del ejercicio 2006, a través de la cual, disminuye su utilidad fiscal individual.

Sin texto

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

116

en virtud de que elimina el inventario acumulable de los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por la contribuyente revisada, en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, irregularidad determinada por esta Administración, y dada a conocer a través del oficio de observaciones emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente adscrita a esta Administración mediante oficio 900-05-09-2013-6986 del 17 de diciembre de 2013, señalado en el inciso i) la página 5 de esta resolución, no obstante lo anterior, la irregularidad subsiste, por lo señalado en las páginas 65 a 76 de esta resolución.

Al respecto, resulta importante señalar que mediante escrito sin fecha de emisión, presentado en la oficina de partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, al que le correspondió el folio de entrada número 130000045, señalado en las páginas 72 a 74 de esta resolución, la contribuyente revisada, manifestó que había corregido su situación fiscal respecto de sus pagos provisionales consolidados, observación que se le dio a conocer mediante el oficio de observaciones señalado en el párrafo anterior, sumando a la utilidad fiscal consolidada estimada determinada de conformidad con el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago correspondiente, determinado por su sociedad controlada [redacted] en los términos de la Fracción V del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005.

De lo anterior, se desprende que es la propia controladora revisada que reconoce, con motivo de dicha autocorrección, que el inventario acumulable correspondiente al ejercicio de 2006, determinado por su sociedad controlada [redacted] si es un ingreso acumulable, de conformidad con lo dispuesto en la citada fracción V del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005, es por ello que esta Administración además de los argumentos vertidos, concluye que la irregularidad persiste y la contribuyente revisada debió sumar la utilidad fiscal individual de la citada sociedad controlada incluyendo el inventario acumulable del ejercicio 2006.

Es por ello que la contribuyente [redacted] actualmente [redacted] no desvirtuó la omisión respecto a la modificación de la utilidad fiscal de su sociedad controlada [redacted] al no incluir el inventario acumulable determinado por esa sociedad controlada, en el cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en términos de la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al proporcionar la declaración complementaria del impuesto sobre la renta del ejercicio de 2006 presentada el 14 de mayo de 2013 por la sociedad controlada.

De lo anterior, se desprende que la autoridad fiscalizadora no tuvo por desvirtuadas las observaciones derivadas de la revisión de gabinete de la que fue objeto la actora, por lo siguiente:

- ✓ Porque la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por [redacted] se efectuó con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por la demandante, en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, razón por la cual no se le concedió valor probatorio en ninguna de las instancias previas; y
- ✓ Que la actora manifestó que había corregido su situación fiscal respecto de sus pagos provisionales consolidados, por lo que sumó a la utilidad fiscal consolidada estimada la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

117

comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago correspondiente, determinado por su sociedad controlada [REDACTED]

Bajo tal contexto, se desprende en primer lugar que no se actualiza una conducta omisiva como lo menciona mi contraria en el sentido de que la autoridad fiscalizadora no expuso las razones por las cuales no eran desvirtuadas las observaciones encontradas, pues como se ha reseñado en los puntos anteriores, si se indicaron los motivos, razones y circunstancias por las que mi representada llegó a esa conclusión.

Aunado a lo expuesto, esa H. Sala podrá verificar que subsiste la legalidad de las resoluciones impugnadas al no combatirse los fundamentos y motivos que tuvo la fiscalizadora y posteriormente ésta autoridad, para desestimar la declaración complementaria que fue presentada por su empresa controlada [REDACTED] y confirmar dicha postura, respectivamente, esencialmente porque en el agravio que marcó como décimo séptimo de su escrito de revocación, únicamente alegó una supuesta omisión de los fundamentos y motivos considerados por la autoridad fiscalizadora y que ante la declaración complementaria de su empresa controlada, la actora no tenía obligación de incluir en la utilidad fiscal consolidada de 2006 el inventario acumulable aludido por mi representada, puesto que éste fue disminuido.

En efecto, la hoy demandante a foja 245, de su escrito de revocación señaló textualmente lo siguiente:

...
Ante dicho escenario, la negativa de la autoridad recurrida para tener por no desvirtuada la observación apuntada, carece de todo sustento jurídico, ya que si bien tiene por presentada la prueba documental superveniente aportada por mi representada, deja de considerar el valor probatorio pleno que tenía y solo se limita a afirmar de manera lisa y llana que bajo su consideración la presentación de dicha declaración no lograba desvirtuar la observación respectiva.

Actitud omisiva que desde luego conlleva la violación flagrante de la garantías de seguridad jurídica, legalidad y debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad, ello, debido a que la autoridad recurrida omite señalar los motivos, circunstancias, situaciones particulares y específicamente los fundamentos legales considerados para no considerar el valor probatorio de la declaración complementaria exhibida.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

118

La digitalización que antecede, permite observar que mi contraria alegó una ausencia de fundamentación y motivación por lo que se refiere a la conclusión de la autoridad fiscalizadora de no tener por desvirtuados los hechos consistentes en la obligación de la propia enjuiciante de determinar el resultado fiscal consolidado considerando el inventario acumulable de su empresa controlada [REDACTED]

Lo anterior, sin que se combata lo aludido por la autoridad fiscalizadora—situación que se repite en la presente instancia—en el sentido de que dicha declaración se efectuó con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por mi opositora en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, ni tampoco que el entero de los pagos provisionales donde sí se considera la doceava parte del multicitado inventario, constituye un consentimiento expreso relacionado con la inclusión del inventario acumulable de su empresa controlada [REDACTED]

Consecuentemente, debe subsistir la legalidad de la resolución combatida en sede administrativa en términos del artículo 68, del Código Fiscal de la Federación, y el diverso 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues no se combaten los motivos y fundamentos que tuvo la autoridad fiscal para desestimar la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013, por [REDACTED]

C.I. La declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013, por [REDACTED] no puede surtir efectos en los términos propuestos por la incoante.

No obstante que lo razonado en el punto que antecede es suficiente para confirmar la legalidad de las resoluciones impugnadas, se exponen a continuación los razonamientos por los cuales no es dable valorar la prueba consistente en la declaración complementaria presentada por [REDACTED] en los términos propuestos en la presente instancia y en la diversa que antecede,

En principio, resulta oportuno precisar en qué consiste el régimen de consolidación, destacando algunos de sus principales efectos, en correlación con los preceptos legales que regulan dicho sistema:

- ✓ El objetivo fundamental del esquema de consolidación para fines de pago de impuestos, es el de establecer un régimen neutral de gravamen que pudiera aplicarse a los grupos de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 635 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

119

intereses económicos que por razones comerciales, financieras, laborales o de otra naturaleza, decidieron organizarse a partir de sociedades mercantiles, jurídicamente independientes entre sí, de forma tal, que por su forma de organización, no tuvieran efectos favorables ni desfavorables desde el punto de vista de los elementos básicos del impuesto respecto de los grupos organizados, a partir de una sola empresa o de una matriz con sus sucursales²;

- ✓ El régimen de consolidación fiscal, en términos generales, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a grupos de empresas con intereses económicos comunes, que reúnen ciertas características y cumplen con los requisitos establecidos en la ley, de ser consideradas como una unidad económica y bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun y cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales.

Esto es, el objetivo del régimen de consolidación fiscal es el permitir que un grupo de empresas con determinadas características, integre como un ente jurídico distinto de cada una de ellas, su **resultado fiscal consolidado**.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 120/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor literal siguiente:

Época: Novena Época. Registro: 188647. Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001. Materia(s): Administrativa. Tesis: P./J. 120/2001. Página: 11

"CONSOLIDACIÓN FISCAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE ESE RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN. El régimen de consolidación fiscal, en términos generales, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a determinados grupos de empresas con intereses económicos comunes, que al reunir ciertas características y cumplir con los requisitos establecidos en la ley, son consideradas como una unidad económica, lo que les permite, bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales. Entre sus principales características se encuentran las de reunir las utilidades y pérdidas de una entidad o unidad económica, integrada por la compañía controladora y sus controladas, como si se tratara de una sola empresa, para que sobre este resultado se pague el impuesto, así como la de permitir que las pérdidas generadas por una sociedad del grupo que consolida sean amortizadas de inmediato contra las utilidades

² Alberto Navarro Rodríguez- "La Consolidación Fiscal".



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

120

generadas de otras sociedades del mismo grupo, independientemente de que la controlada que hubiera resentido la pérdida todavía no tuviese la posibilidad de aplicarla en lo individual."

Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unánimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unánimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 1551/99. Dornos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unánimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unánimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unánimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

Por ello, fue necesario que el legislador estableciera en la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta, un esquema bajo el cual la empresa controladora (quien aglutina el interés económico y corporativo de todas las empresas del grupo), sea quien determine el resultado fiscal consolidado (el correspondiente a todo el grupo de consolidación), es decir, la base para el pago del impuesto sobre la renta, correspondiente al conjunto de empresas en consolidación, para lograr que estas tributen como si fueran un mismo contribuyente.

De esta manera tenemos que nuestros legisladores a través de la Ley en cita, reconocen la existencia de "unidades económicas" formadas por el conjunto de las sociedades individuales que consolidan, las cuales debido a sus características especiales, deben sujetarse a reglas de tributación específicas contenidas en el llamado régimen de consolidación fiscal.

En tal virtud, se advierte que el régimen de consolidación fiscal, evidencia la estrecha vinculación jurídico-económica entre las sociedades controladoras y las diversas controladas, en virtud de que el cálculo del impuesto, que de manera consolidada se debe cubrir al fisco, pone de manifiesto que las disposiciones legales dirigidas a la controladora repercuten en la controlada y viceversa; las dirigidas a la controlada repercuten en la controladora, pues corre a cargo de ésta la obligación de determinar el resultado fiscal consolidado, el cual no se lograría sin la participación económica y jurídica, desde el punto de vista tributario, de la controlada.

Con base a lo anterior, ahora se hace necesario revisar el régimen de consolidación fiscal, mismo que se encuentra integrado de la siguiente manera:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

121

- ✓ **Sociedades que se consideran Controladoras.** Sociedades residentes en México; propietarias de más del 50% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades controladas; y que en ningún caso más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. (artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2013);
- ✓ **Sociedades que se consideran Controladas.** Sociedades que más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de una sociedad controladora. (artículo 66 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2013).

Ahora bien, el artículo 64, de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, precisa sobre el resultado fiscal consolidado, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Artículo 64...

La sociedad controladora que opte por considerar su resultado fiscal consolidado, deberá determinarlo conforme a lo previsto en el artículo 68 de esta Ley. Al resultado fiscal consolidado se le aplicará la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley, en su caso, para obtener el impuesto a pagar por la sociedad controladora en el ejercicio.

El impuesto que se haya determinado conforme al segundo párrafo de este artículo, será el que se acreditará contra el impuesto al activo del mismo ejercicio, y será el causado para determinar la diferencia que se podrá acreditar adicionalmente contra el impuesto al activo en los términos del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo.

Una vez ejercida la porción de consolidación, la sociedad controladora deberá continuar pagando su impuesto sobre el resultado fiscal consolidado, por un período no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquél en que se empezó a ejercer la opción citada, y hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria no le autorice dejar de hacerlo, o bien, cuando la sociedad controladora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, o deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos del artículo 71 de la misma. El plazo anterior no se reinicia con motivo de una reestructuración corporativa.

La sociedad controladora y las sociedades controladas, presentarán su declaración del ejercicio en los términos de los artículos 72 y 76 de esta Ley, y pagarán, en su caso, el impuesto que resulte en los términos del artículo 10 de la misma..."

(Énfasis añadido)



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

122

Derivado de lo anterior, corresponde a la sociedad controladora determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, de acuerdo al artículo 68 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en cita, que literalmente indica:

"Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

- a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.
- b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.
- c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se sumarán o se restarán en la participación consolidable.

Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades controladoras, será del 100%."

En ese tenor, el régimen de consolidación es un régimen con características especiales, en el que la sociedad que ejerce el control del grupo de consolidación (sociedad controladora) en representación de las demás empresas (sociedades controladas) **paga en conjunto los impuestos a cargo del grupo de empresas que lo integran**.

Esto es, la sociedad controladora se obliga a determinar el tributo del grupo de empresas que integra el régimen de consolidación, **por la participación consolidable, siempre y cuando haya ejercido la opción de consolidación** a que se refiere el segundo párrafo, del artículo 64, antes transcrito.

Por ello, es que contrario al sistema general de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual cada persona moral (contribuyente) en lo individual debe calcular su resultado fiscal del ejercicio,



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 637 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

123

disminuyendo a sus ingresos acumulables las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores (artículo 10), **dentro del régimen de consolidación fiscal el impuesto consolidado** (o sea, el que corresponde a la unidad económica formada por el conjunto de sociedades individuales en la parte que consolida) se determina y se paga por la sociedad controladora de conformidad con lo siguiente:

- ✓ Acorde a lo establecido en el artículo 68 de la aludida Ley del Impuesto sobre la Renta, se determina el resultado fiscal consolidado (utilidad o pérdida fiscal consolidada), **sumando o restando, según corresponda, los conceptos siguientes:** i) utilidades fiscales, o las pérdidas fiscales sin actualizar, ambas del ejercicio, **correspondientes a las sociedades controladas;** ii) su utilidad fiscal o su pérdida fiscal sin actualizar del ejercicio y iii) las modificaciones a la utilidad o pérdida de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores que tuviera una sociedad que se incorpore al grupo y pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de las sociedades controladas y iv) las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas, de las que no hayan sido consideradas entre el gran público inversionista;
- ✓ A la utilidad fiscal consolidada determinada según el punto anterior, la sociedad controladora puede disminuir las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, con lo cual se determina el "resultado fiscal consolidado" del ejercicio.

En estas circunstancias, en virtud de que el grupo de consolidación es **una unidad económica o un todo**, por consiguiente, **por la parte que consolide fiscalmente se deberá determinar un sólo resultado fiscal consolidado**, el cual abarcará los resultados fiscales de la sociedad controladora y de las sociedades controladas en cuanto a la participación consolidable.

Ahora bien, el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación señala textualmente lo siguiente:

"Artículo 32.- Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente **hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación.**

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de tres ocasiones las declaraciones correspondientes, **aún cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, en los siguientes casos:**

- I. Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

124

- II. Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta.

III. Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo.

- IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de Ley.

Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo se efectuará mediante la presentación de declaración que sustituya a la anterior, debiendo contener todos los datos que requiera la declaración aun cuando sólo se modifique alguno de ellos.

Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda, debiendo pagarse las multas que establece el citado artículo 76.

Se presentará declaración complementaria conforme a lo previsto por el quinto párrafo del artículo 144 de este Código, caso en el cual se pagará la multa que corresponda, calculada sobre la parte consentida de la resolución y disminuida en los términos del séptimo párrafo del artículo 76 de este ordenamiento.

Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que correspondía, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 21 de este Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago.

N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VEASE TRANSITORIO UNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CODIGO.
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE DICIEMBRE DE 2009)

Para los efectos de este artículo, **una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando. [...]"**

(Énfasis añadido)



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

125

El numeral de referencia en atención al principio de autodeterminación de los tributos, establece la posibilidad de que los causantes hasta en tres ocasiones, modifiquen sus declaraciones de impuestos; sin embargo, **tales declaraciones no tendrán efectos jurídicos cuando se presenten una vez iniciadas las facultades de comprobación.**

No obstante, el citado numeral establece una excepción, y consiste en que las declaraciones complementarias podrán ser presentadas más de tres veces y aún iniciadas las facultades de comprobación, cuando sólo los causantes **incrementen sus ingresos** o el valor de sus actos o actividades, **disminuyan sus deducciones o pérdidas** o reduzcan las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta; cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo, y **cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de Ley.**

También se desprende que **aquellas declaraciones complementarias que tengan repercusión en el ejercicio revisado por las autoridades fiscales no tendrán efectos jurídicos.**

En esa virtud, el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación traído al régimen de consolidación fiscal, debe ser interpretado tomando en consideración a que la empresa controladora y sus controladas constituyen una unidad económica que tributan bajo un esquema de beneficio que permite amortizar pérdidas fiscales en el mismo ejercicio en que son generadas, ocasionando con ello el diferimiento del impuesto.

En otras palabras, **las declaraciones complementarias de las empresas controladas, que repercutan en el resultado fiscal consolidado modificando su utilidad o pérdida fiscal individual, no tendrán efectos jurídicos una vez que hayan sido iniciadas las facultades de comprobación a la empresa controladora** (siempre y cuando no se ubiquen en los supuestos legales de excepción), pues la intención del legislador con la inclusión de ese precepto legal fue la de no obstaculizar o limitar el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, lo cual ocurre en consolidación con la modificación en la declaración de las empresas controladas considerando las particularidades de ese régimen.

Lo anterior se robustece si consideramos que el propio artículo 32, del Código Fiscal de la Federación establece que **"...Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se**



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

126

podrá presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda..., lo que se traduce en que ninguna otra declaración complementaria tendrá efectos jurídicos, salvo lo dispuesto en ese mismo numeral.

En tal contexto jurídico, esta autoridad fiscal valoró, en términos del artículo 130, del Código Fiscal de la Federación la prueba consistente en la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por [REDACTED] y concluyó válidamente que dicha documental **fue presentada una vez que la autoridad fiscal inició las facultades de comprobación a la empresa controladora [REDACTED] por el ejercicio fiscal 2006.**

Por lo que siendo que esa declaración tuvo repercusión en el resultado fiscal consolidado al disminuir la utilidad fiscal de la empresa controlada [REDACTED] en cantidad de \$1,559'028,827, es que **no puede tener efecto jurídico acorde a la interpretación efectuada al artículo 32, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el marco jurídico que rige el régimen de consolidación fiscal, en específico el artículo 68, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado.**

Lo anterior, especialmente porque la declaración complementaria de [REDACTED] **no se ubica en las hipótesis de excepción establecidas en el artículo 32, del Código Fiscal de la Federación, y en consecuencia, no tiene ningún efecto jurídico.**

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis V-TASR-XXX-781, sustentada por la Sala Regional del Norte Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

V-TASR-XXX-781, R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 33. Septiembre 2003. p. 211.

"DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA.- DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN, NO OBSTANTE QUE SE HAYA PRESENTADO CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, SI SE UBICA DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, las declaraciones que presenten los contribuyentes, serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades; también lo es, que el citado precepto establece excepciones a dicha limitación, esto es, se pueden presentar declaraciones complementarias, una vez iniciadas las facultades de comprobación, **siempre que el particular se ubique en cualquiera de los supuestos que establece el artículo en cuestión, en las fracciones I a IV del mismo. (37)"**



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 639 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541.
J.N. 12140/15-17-11-5.

127

Juicio No. 1260/02-04-01-5.- Resuelto por la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de mayo de 2003, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Lic. Guillermina Ruiz Bohórquez.-Secretaría: Lic. Norma Isabel Bustamante Herrera.

(Énfasis añadido)

De igual manera, se estima aplicable la diversa tesis IV-TA-2aS-15, emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, misma que dispone a la letra lo siguiente:

IV-TA-2aS-15. R.T.F.F. Cuarta Época. Año II. No. 6. Enero 1999. p. 146

"DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA.- INICIADAS LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, ES IMPROCEDENTE LA SEGUNDA PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE, EN LA QUE DISMINUYA SUS INGRESOS O EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES, O AUMENTE SUS DEDUCCIONES O PÉRDIDAS, O LAS CANTIDADES ACREDITABLES O COMPENSADAS, O LOS PAGOS PROVISIONALES O DE CONTRIBUCIONES A CUENTA.- Del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que las declaraciones que presenten los contribuyentes, son definitivas, pudiendo ser modificadas por el propio contribuyente hasta en dos ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación; sin embargo, esta limitante en cuanto al número de declaraciones complementarias que pueden presentarse, no opera aun cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, ya que el contribuyente podrá modificar la declaración original, siempre y cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos: I.- sólo incrementa sus ingresos o el valor de los actos o actividades; II.- Sólo disminuya sus deducciones o pérdidas o reduzca las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta; y, III.- Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo. Por tanto, si el contribuyente, una vez iniciadas las facultades de comprobación, presenta una segunda declaración complementaria en la que disminuye sus ingresos o el valor de los actos o actividades, o aumenta sus deducciones o pérdidas, o las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta, la misma resulta improcedente al no estar dentro de los supuestos previstos por el precepto en comento. (3)"

Juicio de Nulidad No. 100(14)45/98/207/98.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 29 de septiembre de 1998, por mayoría de 3 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaría: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de septiembre de 1998)

Asimismo, se actualiza la hipótesis de la diversa tesis III-TASR-XV-282, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

128

III-TASR-XV-282. R.T.F.F. Tercera Época. Año VIII. No. 88. Abril 1995. p. 39

"DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS.- SON IMPROCEDENTES SI YA SE INICIARON LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- De conformidad con el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en dos ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación; o sea, que se da al contribuyente la posibilidad de corregir voluntariamente su situación; sin embargo, tal posibilidad no opera, si se le practicó una auditoría respecto del período que pretende corregir, pues se encuentra en la excepción que señala el mismo artículo, luego entonces ya no está en posibilidad de modificar la declaración respecto a los créditos determinados, ni aún cuando la auditoría que les dio origen hubiera terminado, ya que no tiene apoyo legal esta pretensión.(18)"

Juicio No. 28/94.- Sentencia de 23 de mayo de 1994, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Celia López Reynoso.- Secretaría: Lic. Adriana Castellanos Valdés.

Adicionalmente, se advierte por lo argumentado por la propia actora (foja 246 último párrafo del escrito de revocación) que en la declaración complementaria de 14 de mayo de 2013, Elektra del Milenio, S.A. de C.V., disminuyó el inventario acumulable declarado en cantidad de \$1,559'028.827.00 porque únicamente consideró en la declaración del ejercicio 200 los ingresos derivados de la enajenación de dicho inventario, es decir, no se aprecia que se hubiere corregido la situación fiscal de la demandante, sino únicamente que se disminuyó el inventario acumulable de la utilidad fiscal de la controlada, porque a su parecer, no constituía ingreso, lo cual, de conformidad con lo expuesto con antelación, es incorrecto, en específico, donde se da respuesta al agravio sujeto a estudio, debiendo prevalecer la legalidad de los actos combatidos en el juicio en que se actúa.

C.2. Esta Administración no mejoró los fundamentos y motivos de la resolución inicialmente recurrida.

En efecto, si bien es cierto fue valorada en sede administrativa la declaración complementaria aludida en el apartado que antecede, no menos cierto es que ello atiende a que el recurso de revocación, como medio de control de legalidad de la actuación de la autoridad fiscal, constituye un mecanismo de vigilancia para el propio Servicio de Administración Tributaria; en la medida de que será dicho organismo desconcentrado, quien a través del citado recurso, revise su actuación y determine, la legalidad o ilegalidad de la actuación de sus propias administraciones.

Así, el recurso de revocación como medio de control de legalidad al interior del propio Servicio de Administración Tributaria, tiene como función principal vigilar que las administraciones adscritas a



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541.
J.N. 12140/15-17-11-5.

129

dicha dependencia desplieguen su actuar de conformidad con las normas legales aplicables, dejando, confirmando, mandando a reponer un procedimiento o incluso, dejando sin efectos o modificando aquellas actuaciones que no se ajusten a la normatividad que resulte aplicable, en términos del artículo 133 del Código Fiscal de la Federación.

Una vez fijada la naturaleza jurídica del citado medio de defensa, es dable ahora recordar lo establecido por el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone a la letra lo siguiente:

"Artículo 17.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

No escapa a la apreciación de ésta defensa, que el texto referido se refiere a los tribunales como "partidores de justicia"; no obstante, si bien es cierto que ésta unidad administrativa no está elegida como un tribunal, también lo es que **ejerce facultades materialmente jurisdiccionales**, al estar contemplada entre sus facultades, "Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos contra resoluciones o actos de ella misma o de las unidades administrativas que de ella dependan...", tal como se desprende de la fracción LIX del apartado A del artículo 20, en relación con el diverso 21, apartado D, fracción II, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

Una vez precisado lo anterior, también es dable destacar que el legislador constituyente estableció como derecho humano, la impartición de justicia pronta, completa e imparcial.

Por su parte, la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación⁶ ha definido dicho concepto como aquél consistente en "...que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso

Epoca: Novena Época. Registro: 187030. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002. Materia(s): Tesis: 2a. L/2002. Página: 299
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541.
J.N. 12140/15-17-11-5.

130

concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garantizan la tutela jurisdiccional que ha solicitado".

En tal orden de ideas, es menester señalar para efectos del presente apartado, que debe considerarse al recurso de revocación como un procedimiento materialmente jurisdiccional, en tanto que las Secciones I⁵ y III⁶ del Capítulo I⁷ correspondiente al Título V⁸ del Código Fiscal de la Federación, regulan el trámite que se le deberá dar a un recurso de revocación, tales como: **i)** el tipo de actos contra los que procederá dicho medio de defensa; **ii)** el plazo y medio en que se deberá presentar el escrito por el que se promueve el recurso en cita; **iii)** los requisitos de dicha promoción; **iv)** en qué casos se actualiza la improcedencia del medio de defensa en cita; **v)** las restricciones a que debe sujetarse su trámite cuando se impugnen actos del procedimiento administrativo de ejecución; **vi)** la clase de pruebas que serán admitidas en su tramitación; **vii)** el plazo en que la autoridad deberá dictar resolución; **viii)** los sentidos que puede adoptar la resolución que resuelva el medio de defensa que nos ocupa; y **ix)** el plazo para el cumplimiento de resoluciones dictadas en un recurso de revocación.

En ese sentido, es patente que **el recurso de revocación promovido por la aquí actora, es un procedimiento materialmente jurisdiccional**, toda vez que el procedimiento que lo regiere es en forma de juicio, tal como se desprende de los artículos que integran las Secciones I y III del Capítulo I perteneciente al Título V del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, es viable destacar que para que sea respetado dicho principio fundamental de impartición de justicia completa, la entidad que conoce de una controversia debe, al resolverla, atender todos los argumentos que le son puestos a consideración, y lo anterior, no se obstaculiza si, como en el caso a estudio, ésta unidad administrativa, al resolver el recurso de revocación promovido por [REDACTED] valoró la declaración complementaria aludida, toda vez que en aras de resolver de manera efectiva y completa la controversia puesta a juicio de ésta Administración, debe ocuparse de todos aquéllos argumentos que en consideración del recurrente, la causan afectación a su esfera de derechos.

De conformidad con los razonamientos que anteceden, y con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional aludido, es evidente que en disenso con lo considerado por la accionante, ésta Administración **no mejoró los motivos y fundamentos expuestos en el acto**

⁵ Del Recurso de Revocación.

⁶ Del Trámite y Resolución del Recurso.

⁷ De los Recursos Administrativos.

⁸ De los Procedimientos Administrativos.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 641 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S".

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

131

inicialmente recurrido, sino que únicamente valoró la prueba en comentario a fin de dar cumplimiento a su obligación como autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales y así, respetar y hacer cumplir el derecho fundamental de impartición de justicia completa.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época: Décima Época, Registro: 2004012, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013, Torno 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 73/2013 (10a.), Página: 917

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)]. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S".

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

132

documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa, en ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular.

Contradicción de tesis 528/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

(Énfasis añadido)

Lo anterior, en el entendido de que el recurso de revocación es precisamente la instancia idónea para valorar las pruebas que los contribuyentes estimen pertinentes para desvirtuar las consideraciones de las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de revocación; lo anterior, máxime que la valoración hecha por ésta Autoridad obedeció a la solicitud expresa que al respecto formuló la propia actora.

Lo expuesto se refuerza si consideramos que, a efecto de impartir justicia completa, debe existir pronunciamiento expreso respecto de todos los puntos controvertidos propuestos por la hoy demandante, puesto que a ningún fin práctico llevaría devolver jurisdicción a la autoridad fiscalizadora.

En esa misma línea de reflexión, incluso resulta más conveniente para [REDACTED] que los puntos de disenso propuestos en el presente medio de defensa, hayan sido resueltos en la instancia administrativa, en la medida de que así, mi contraria sabe los motivos y fundamentos que consideró ésta Administración al valorar la declaración complementaria en cita, generando con ello la oportunidad de argumentar lo que a su derecho convenga en el presente juicio.

C.3. Cabe agregar que la declaración de corrección fiscal en cita no puede ser valorada en los términos que propone la actora, ni tiene el alcance que pretende imprimirle.

En efecto, lo anterior es de ese modo, ya que aún cuando la controlada que presentó la citada declaración, posea personalidad jurídica propia, ello no implica que por esa situación, pueda, legalmente, modificar el resultado fiscal consolidado.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

133

Ciertamente, y como fue expuesto en párrafos precedentes, la demandante y sus controladas conforman una unidad económica, cuyos actos en materia fiscal repercuten en el resultado consolidado que reporta la controladora hoy enjuiciante.

En ese sentido, no resulta apegado a derecho que so pretexto de que [REDACTED] es una persona moral independiente, con personalidad y capacidad jurídica propias, presente declaraciones de corrección fiscal **modificando el resultado fiscal consolidado respecto de ejercicios que están siendo revisados por la autoridad fiscal.**

Lo expuesto, en la inteligencia de que permitir las prácticas que pone en marcha mi contraria, implicaría que todas aquellas controladoras que estén sujetas al ejercicio de facultades de comprobación pudieran modificar su resultado fiscal consolidado, aún cuando dicha prerrogativa ya haya fenecido en su perjuicio, por haberse iniciado las citadas facultades.

Ciertamente, deberán desestimarse los efectos que pretende imprimirle la actora a la declaración que nos ocupa, en tanto que la misma no cubre los requisitos preestablecidos por el legislador para ser considerada en sus términos.

En tal orden de ideas, si la controlada de la demandante modificó su utilidad fiscal en la declaración de corrección en cita para efectos de no considerar el inventario que tenía, como ingreso acumulable —mismo que en un principio así fue considerado de esa manera—, resulta evidente que se actualiza la prohibición destacada en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, porque lo declarado por la controlada invariablemente impactó en el resultado fiscal consolidado.

Lo anterior, porque en primer término, la controlada en cita disminuyó sus ingresos acumulables, lo cual no encuadra en el supuesto previsto en la fracción I del citado numeral, pues la presunta acción correctiva formulada por la citada controlada consiste en la hipótesis contraria a la excepción prevista por el legislador para que se considere una declaración complementaria aún cuando se hayan iniciado facultades de comprobación.

Y en segundo término, pero reforzando lo anterior, la disminución de ingresos acumulables de la controlada invariablemente impactará en el resultado fiscal consolidado que reporta la controladora, pues al concentrar ésta las utilidades o pérdidas de sus controladas, evidentemente declarará una utilidad menor a la que tuvo como resultado considerar como ingresos acumulables los inventarios de la controlada que presentó la declaración por corrección fiscal.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

134

Además de lo anterior, esa H. Sala no debe perder de vista lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en la época de los hechos, mismo que dispone a la letra lo siguiente:

Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso.

d) Sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción.

e) Restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones emitidas por las sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas por la sociedad controladora, siempre que se cumplan con los requisitos señalados en la fracción XVII, incisos a), b), c) y d) del artículo 32 de esta Ley.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 643 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

135

Las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones por la sociedad controladora emitidas por sociedades que no sean sociedades controladas, únicamente se disminuirán de las utilidades que por el mismo concepto obtenga la sociedad controladora provenientes de acciones emitidas por sociedades no controladas, cumpliendo con lo establecido en la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

En ningún caso la sociedad controladora integrará dentro de la determinación de su utilidad fiscal o pérdida fiscal, según sea el caso, las pérdidas referidas en los párrafos anteriores.

Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se sumarán o se restarán en la participación consolidable.

Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades controladoras, será del 100%.

Para calcular las modificaciones a las utilidades o a las pérdidas fiscales, de las sociedades controladas de ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción, cuando la participación accionaria de la sociedad controladora en el capital social de una sociedad controlada cambie de un ejercicio a otro, se dividirá la participación accionaria que la sociedad controladora tenga en el capital social de la sociedad controlada durante el ejercicio en curso entre la participación correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a cada uno de los ejercicios mencionados; el cociente que se obtenga será el que se aplicará a las utilidades o a las pérdidas fiscales, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción, incluidas en las declaraciones de los ejercicios anteriores, y al impuesto que corresponda a estos ejercicios, en los términos del artículo 75 de esta Ley.

II. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, que no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó en los términos del artículo 61 de esta Ley, y que en los términos del primer párrafo del inciso b) y del primer párrafo del inciso c) de la fracción I de este artículo se hubieran restado en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la utilidad fiscal consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en que se pierda el derecho a disminuirlas. El monto equivalente a las pérdidas

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

136

fiscales que se adicione a la utilidad fiscal consolidada o se disminuya de la pérdida fiscal consolidada, según sea el caso conforme a este párrafo, se actualizará por el periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio al que corresponda dicha pérdida y hasta el último mes del ejercicio en el que se adicionen o se disminuyan.

Las pérdidas en enajenación de acciones obtenidas por la sociedad controladora o por una sociedad controlada, que en los términos del inciso e) de la fracción I de este artículo se hubieran restado en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la utilidad fiscal consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en que se pierda el derecho a disminuirlas conforme a lo previsto en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley. El monto equivalente a las pérdidas fiscales que se adicione a la utilidad fiscal consolidada o que se disminuya de la pérdida fiscal consolidada, según sea el caso conforme a este párrafo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio en el que se adicionen o se disminuyan.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no procederá respecto de las pérdidas fiscales o las pérdidas en enajenación de acciones que se hayan considerado en la determinación y pago del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley.

También podrán restarse contra la utilidad fiscal consolidada o sumarse a la pérdida fiscal consolidada, según se trate, las pérdidas fiscales o las pérdidas en enajenación de acciones obtenidas por las sociedades controladas y controladora, en el ejercicio fiscal en el que sean disminuidas de su utilidad fiscal por dichas sociedades a nivel individual o de las ganancias que por enajenación de acciones obtenga, según corresponda y hasta por el monto de la misma, siempre que las citadas pérdidas se hubieran considerado en la determinación y pago del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley en algún ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se disminuyan a nivel individual dichas pérdidas.

Quando la sociedad controladora o las sociedades controladas tengan inversiones a que se refiere el artículo 212 de esta Ley, la sociedad controladora no deberá considerar el ingreso gravable, la utilidad fiscal o el resultado fiscal, derivados de dichas inversiones para determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, y estará a lo dispuesto en el artículo 213 de dicha Ley.

(Énfasis añadido)

De conformidad con lo anterior —especialmente lo resaltado por ésta defensa—, se desprende que las sociedades controladoras —como es el caso de la actora— deberán sumar las utilidades de sus controladas para efecto de determinar el resultado fiscal consolidado del grupo.

En esos términos, si la controlada de la accionante ya había considerado como ingreso acumulable el monto de sus inventarios, la demandante, como controladora, se encontraba obligada a



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

137

considerar dicha utilidad al declarar el resultado fiscal consolidado; no obstante, y ante el mandato expreso del legislador, no lo hizo.

No es óbice a lo anterior como se ha precisado con antelación- el que la controlada de mi coltigante haya "ajustado" sus ingresos acumulables, restando el monto de sus inventarios a la utilidad previamente declarada, para así "ajustarse" al resultado fiscal declarado por mi contraria, ya que ello: i) ocurrió durante el ejercicio de facultades de comprobación instruidas a la enjuiciante; y ii) ésta se encuentra vinculada a considerar como ingreso acumulable, el monto de los inventarios de sus controladas.

En ese sentido, la presunta acción correctiva en cita no debe tener los efectos ni alcances que pretende la actora, porque dicha actuación no encuadra en las hipótesis de excepción previstas por el legislador en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación.

En tales condiciones, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

D. Resultan infundados los argumentos planteados en el quinto concepto de impugnación.

En efecto, lo anterior es de ese modo, en la medida de que:

D.1. Es infundada la manifestación de la actora respecto a que no se indicó el fundamento que la vincula a presentar una declaración complementaria respecto de la corrección efectuada por su controlada [REDACTED]

En efecto, con la finalidad de evidenciar lo anterior, resulta conveniente tomar en consideración el contenido de la resolución combatida, por lo que a continuación se inserta la parte que interesa:

Fojas 41 a 52



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

138

b) Efecto en el resultado fiscal consolidado derivado de la presentación de la declaración anual por corrección del ejercicio fiscal del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006 de su sociedad controlada [REDACTED] modificando su utilidad fiscal.

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

De la revisión practicada al dictamen fiscal, a la información y documentación proporcionada por la contribuyente revisada, así como a la que obra en los archivos de esta administración, se determina que la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su carácter de sociedad controladora a la fecha del presente oficio, omitió

adicionar en el resultado fiscal consolidado como consecuencia de la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] correspondiente al ejercicio 2006 de \$63'473,885 a \$67'323,432, manifestada en declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010, como resultado al inicio de las facultades de comprobación efectuadas por esta Administración, y consecuentemente omitió un impuesto sobre la renta consolidado de conformidad a lo señalado en los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión y 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, ordenamiento jurídico vigente en el año en que se modificó la utilidad fiscal de su sociedad controlada y en el cual nace la obligación de esa sociedad controladora de modificar el resultado fiscal consolidado.

La determinación anterior, así como las señaladas en las páginas de la 15 a la 40 y de la 52 a la 76 de la presente resolución, modifican la utilidad fiscal consolidada y el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006 declarado por [REDACTED] actualmente [REDACTED] como se señaló en las páginas 9 y 10 del presente oficio determinativo de crédito fiscal.

El resultado fiscal consolidado se determina como sigue:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 645 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

139

EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN A SU SOCIEDAD CONTROLADA

Mediante oficio 900 05-2010-2298 del 19 de octubre de 2010, emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, firmado por ausencia en suplencia por el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" notificado legalmente el 22 de octubre de 2010, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero de [REDACTED] quien señaló que se encontraba en el lugar en virtud de que "esta cumpliendo con su jornada de trabajo", previo citatorio al Representante Legal, se comunicó la conclusión de la revisión por autocorrección, por el ejercicio fiscal de 2006, como resultado de la revisión efectuada a su sociedad controlada [REDACTED] por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, en virtud de que con escrito de fecha 16 de julio de 2010, recibido el 27 de julio de 2010 a través de la Oficina de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 12202, dicha controlada, anexó fotocopia de la declaración del ejercicio por corrección fiscal, presentada a través de medios electrónicos en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria el 14 de julio de 2010 con número de operación [REDACTED] y con folio de recepción 4313360, en la que manifestó una disminución de la subcuenta de Fletes, incluida en el concepto de Varios de la cuenta de Gastos Generales, la cantidad de \$3'849,547, la cual se refleja en el renglón de deducciones autorizadas, disminuidas de \$33'309,183 a \$347'459,636 en la declaración complementaria antes citada, lo anterior como a continuación se indica:

De lo anterior se concluye, que la sociedad controladora [REDACTED] antes [REDACTED] omitió reflejar en el resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED]

Derivado de lo anterior, mediante oficio 900-05-03-2012-69896 del 17 de diciembre de 2012, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" adscrita a esta Administración y referido en el inciso D) de la página 3 del presente oficio, se le dieron a conocer a la contribuyente revisada las observaciones determinadas que entrañaron incumplimiento de las disposiciones fiscales relacionadas, entre otras, con la obligación que tiene la sociedad controladora [REDACTED] de presentar declaración complementaria de consolidación derivada de la modificación efectuada a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] por la presentación de la declaración anual por corrección del ejercicio fiscal del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, efectuada por dicha controlada.

Ahora bien, con escrito de fecha de emisión 1° de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013 en la Oficina de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

140

folio de recepción 130003608 firmado por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] quien acreditó su personalidad mediante copia del Instrumento Público Notarial número 95,889, volumen 1893 de fecha 13 de octubre de 2003, otorgado ante la fe del Lic. Gerardo Correa Echegaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal, dio respuesta al oficio de observaciones dentro del plazo legal de 20 días previsto en el artículo 48, primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente, manifestando, en la parte que interesa, lo siguiente:

Del estudio a los argumentos manifestados por la contribuyente en su escrito del 1° de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de la Oficina de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003608, en relación a las observaciones dadas a conocer en el oficio 900-05-03-2012-69896 del 17 de diciembre de 2012, respecto a que [REDACTED] antes [REDACTED] se concluyó que omitió reconocer en el resultado fiscal consolidado la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio de 2006 y como consecuencia omitió un impuesto sobre la renta consolidado, por lo que de la revisión a la información proporcionada por esa contribuyente y por el Contador Público Dictaminador, en el transcurso de la revisión y la que obra en el expediente administrativo abierto en esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, y que se hace referencia en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad determina que la observación no fue desvirtuada por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a su argumento citado en la hoja 2 del mencionado escrito del 1° de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de la Oficina de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003608, misma que ya fueron transcritos anteriormente en la página 40 del presente oficio, y en los que médularmente precisa y reconoce el L.A.E. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de la contribuyente [REDACTED] antes [REDACTED] la falta de la

presentación de la declaración anual complementaria del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio en revisión, en la que reconoce en su resultado fiscal consolidado, la modificación a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] en la participación consolidable, y que en su respuesta al oficio de observaciones antes citado, señala que dicha declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio en revisión "..." se encuentra en proceso de la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006, en donde reconoce los efectos de la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la presentación de la declaración complementaria de la controlada [REDACTED] lo cierto es que [REDACTED] antes [REDACTED] a la fecha del presente oficio, no ha presentado la citada declaración.

Ahora bien, en virtud de todo lo anterior, como resultado de la revisión efectuada, esta administración determina que [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su carácter de sociedad controladora, omitió reconocer en el resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio 2006 de \$163'473,883, a \$167'323,432, manifestada en la declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010, toda vez que dicha sociedad disminuyó el monto manifestado en el renglón de la suma, denominada deducciones autorizadas- gastos generales, en cantidad de \$3'849,547.

Lo anterior, considerando que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria del impuesto sobre la Renta Consolidada, reconociendo el efecto en la consolidación por la determinación y modificación efectuada por esta autoridad a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] como resultado al inicio de facultades de comprobación, modificando la utilidad fiscal consolidada del ejercicio, y en consecuencia omitió un impuesto sobre la renta consolidado para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a), tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 y 77, primer párrafo, fracción III de la Ley en comento vigente en 2010, mismos que disponen, lo siguiente:

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

141

Como se observa, el artículo 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) y párrafo tercero de la mencionada fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio que se revisa, dispone que la sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada, sumará las utilidades fiscales del ejercicio de las sociedades controladas en la participación consolidable.

Asimismo, se puede apreciar la obligación a que se encuentra constreñida esa sociedad controladora, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72, primer párrafo, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente tanto en 2006 como en 2010, de presentar declaración anual complementaria para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado, cuando alguna de sus sociedades controladas presenten una declaración complementaria a fin de subsanar errores u omisiones, así como cuando en el ejercicio de sus facultades las Autoridades Fiscales modifiquen la utilidad o la pérdida fiscal de una o varias sociedades controladas y con ello modifiquen el resultado

fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, el impuesto, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por lo antes expuesto, esta Administración determina una diferencia en cantidad de \$2'847,144, derivada de que [REDACTED] actualmente [REDACTED] omitió en la determinación del resultado fiscal consolidado incluir la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio 2006 de \$163'473,885, a \$167'323,432, manifestada en declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010, toda vez que dicha sociedad disminuyó en el renglón deducciones autorizadas.- gastos generales, en cantidad de \$3'849,547, lo anterior, considerando que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que ocurra este hecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión y 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, ordenamiento jurídico vigente en el año en que se modificó la utilidad fiscal de su sociedad controlada y en el cual nace la obligación de esa sociedad controladora de modificar el resultado fiscal consolidado.

Por lo anterior, la observación anterior así como las señaladas en las páginas de la 15 a la 40 y de la 52 a la 76, modifican la utilidad fiscal consolidada y el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006 declarado por [REDACTED] actualmente [REDACTED] como se señaló en las páginas 9 y 10 del presente oficio determinativo de crédito fiscal.

De la inserción anterior, se desprende que autoridad fiscalizadora señaló lo siguiente:

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

142

- ✓ Que la empresa controlada [REDACTED] modificó su utilidad fiscal, mediante la declaración por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010, ello una vez que fueron iniciadas las facultades de comprobación a dicha empresa por parte de la autoridad;
- ✓ Que su mandante omitió modificar el resultado fiscal consolidado en el ejercicio fiscal 2006, ello de conformidad con los artículos 68, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta (2006), en relación con el diverso 72, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010;
- ✓ Que durante la fiscalización no se lograron desvirtuar los hechos y omisiones encontrados, dado que la actora manifestó que estaba en proceso la modificación de la utilidad fiscal consolidada, sin que se hubiere presentado en algún momento dicha modificación; y
- ✓ Que la empresa controladora omitió presentar la declaración complementaria del impuesto sobre la renta consolidado, reconociendo el efecto en la consolidación por la determinación y modificación efectuada por la autoridad fiscal a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED]

Bajo ese contexto, se advierte en primer término que contrario a lo aducido por la demandante, la autoridad fiscalizadora, sí señaló el supuesto legal que previene la obligación de la empresa controladora de modificar mediante declaración anual complementaria, el resultado fiscal consolidado, en el que se debe tomar en cuenta la modificación de sus controladas, en este caso, de la empresa [REDACTED]

En efecto, mi representada sustentó su actuación —entre otros— en el artículo 72, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente en 2010), que indica en la parte que nos interesa, lo siguiente:

"Artículo 72. La sociedad controladora que ejerza la opción de consolidar a que se refiere el artículo 64 de esta Ley, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la misma, tendrá las siguientes:

III. En el caso de que alguna o algunas de las sociedades controladas presenten declaración complementaria con el fin de subsanar errores u omisiones, así como cuando en el ejercicio de sus facultades las autoridades fiscales modifiquen la utilidad o la pérdida fiscal de una o más sociedades controladas y con ello se modifique el resultado fiscal consolidado, la pérdida fiscal consolidada o el impuesto acreditado manifestados, y se derive un impuesto a cargo, a más tardar



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 647 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

143

dentro del mes siguiente a aquél en el que ocurra este hecho, la sociedad controladora presentará declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar. Cuando no se derive impuesto a cargo, la declaración complementaria de consolidación se presentará a más tardar dentro de los dos meses siguientes a aquél en que ocurra la primera modificación.

Si en la declaración complementaria de consolidación resulta diferencia a cargo, la sociedad controladora deberá enterarla.

Cuando se trate de declaraciones complementarias de las sociedades controladas, originadas por el dictamen a sus estados financieros, la sociedad controladora podrá presentar una sola declaración complementaria a más tardar en la fecha de presentación del dictamen relativo a la sociedad controladora.

[Énfasis añadido]

El numeral de referencia claramente señala que cuando haya modificación de la utilidad de una empresa controlada, ya sea por declaración complementaria de éstas o por corrección fiscal efectuada por las autoridades en ejercicio de sus facultades de comprobación, la empresa controladora tendrá la obligación de presentar la declaración complementaria de consolidación donde haga las modificaciones a que haya lugar.

Por lo tanto, es infundado el argumento de mi contraria en el sentido de que en la resolución controvertida no se citó el artículo que la obligue como empresa controladora a presentar una declaración complementaria cuando una de sus controladas modifique su resultado fiscal.

Asimismo, se vertieron en la resolución combatida los razonamientos específicos que actualizan el supuesto normativo contenido en el artículo 72, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que se indicó en qué consistió la modificación por corrección fiscal efectuada por [redacted] razón por la que, contrario a lo argumentado por la enjuiciante, el oficio impugnado en sede administrativa se encuentra debidamente fundado y motivado.

Por otro lado de la simple lectura que esa H. Sala realice al oficio 900-05-2013-48229 de 25 de julio de 2013, mismo que constituye el acto inicialmente recurrido, se advierte que la autoridad, en las fojas 48 a 50 del citado oficio, mencionó:

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

144

Con escrito de fecha 02 de agosto de 2011, recibido el 03 del mismo mes y año, en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, referido en el inciso g) de la página 4 del presente oficio, la contribuyente dio respuesta al oficio antes mencionado, manifestando entre otros, lo siguiente:

"3.- En relación al punto cinco, mi representada manifiesta que a la fecha no ha presentado la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006 del [redacted] (SIC) en donde reconozca los efectos en la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal de la sociedad controlada [redacted] (SIC), con motivo de la presentación de la declaración complementaria presentada con fecha 12 de julio de 2011, al respecto se manifiesta que dicha declaración será presentada en cuanto se conozcan los resultados de la revisión a que está siendo sujeta mi representada."

[Énfasis y subrayado añadido.]

Derivado de lo anterior, mediante oficio 900-05-03-2011-69896 del 17 de diciembre de 2011, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" adscrita a esta Administración y referido en el inciso j) de la página 5 del presente oficio, se le dieron a conocer a la contribuyente revisada las observaciones determinadas que entrañaron incumplimiento de las disposiciones fiscales relacionadas, entre otras, con la obligación que tiene la sociedad controladora [redacted] antes [redacted] de presentar declaración complementaria de consolidación derivada de la modificación efectuada a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [redacted] por la presentación de la declaración anual por corrección del ejercicio fiscal del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, efectuada por dicha controlada:

Ahora bien, con escrito de fecha de emisión 1^o de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013 en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con

folio de recepción 130003603 firmado por el C. [redacted] en su carácter de Representante Legal de [redacted] actualmente [redacted] quien acreditó su personalidad mediante copia del Instrumento Público Notarial número 55,889, volumen 1893 de fecha 13 de octubre de 2003, otorgado ante la fe del Lic. Gerardo Cotrea Etcheagaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal, dió respuesta al oficio de observaciones dentro del plazo legal de 20 días previsto en el artículo 48, primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente, manifestando, en la parte que interesa, lo siguiente:

"5.- Omisión en la determinación del resultado fiscal consolidado la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a la sociedad controlada [redacted] del ejercicio 2006 de 2069,473,886, a 2067,323,432, manifestado en declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2011 toda vez que dicha sociedad disminuyó sus deducciones autorizadas: gastos generales, en cantidad de 53,849,547, lo anterior considerando que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que ocurra este hecho, de conformidad con los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) y artículo 72, fracción III, ambos ordenamientos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2006."



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

145

En relación con lo anterior, manifiesto que mi representada se encuentra en proceso de la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006, en donde se reconozca los efectos de la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la presentación de la declaración complementaria de la controlada (énfasis y subrayado añadido).

Del estudio a los argumentos manifestados por la contribuyente en su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, en relación a las observaciones dadas a conocer en el oficio 900-05-03-2013-60836 del 17 de diciembre de 2012, respecto a que [redacted] antes [redacted] se conoció que omitió reconocer en el resultado fiscal consolidado la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [redacted] del ejercicio de 2006 y como consecuencia omitió un impuesto sobre la renta consolidado; por lo que de la revisión a la información proporcionada por esa contribuyente y por el Contrador Público Dictaminador, en el transcurso de la revisión y la que obra en el expediente administrativo abierto en esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, y que se hace referencia en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad determina que la observación no fue desvirtuada por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a su argumento citado en la hoja 2 del mencionado escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, mismos que

ya fueron transcritos anteriormente en la página 49 del presente oficio, y en los que inequívocamente precisa y reconoce el L.A.E. [redacted] en su carácter de Representante Legal de la contribuyente [redacted] antes [redacted] la falta de la presentación de la declaración anual complementaria del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio en revisión, en la que reconozca en su resultado fiscal consolidado, la modificación a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [redacted] en la participación consolidable, y que en su respuesta al oficio de observaciones antes citado, señala que dicha declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio en revisión "... se encuentra en proceso de la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006, en donde reconozca los efectos de la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la presentación de la declaración complementaria de la controlada [redacted] lo cierto es que [redacted] antes [redacted] a la fecha del presente oficio, no ha presentado la citada declaración.

De la inserción anterior, se desprende que la autoridad razonó claramente que no se desvirtuaban las omisiones encontradas porque esa empresa controladora no presentó la declaración



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

146

complementaria de consolidación donde se efectuaran las modificaciones derivadas de la corrección fiscal de la empresa [redacted]

Además, en la resolución sujeta a debate, la autoridad señaló que el C. [redacted] en su carácter de representante legal de [redacted] actualmente [redacted] manifestó mediante escrito recibido el 31 de enero de 2013 en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, manifestó siguiente:

"...manifiesto que mi representada se encuentra en proceso de la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal 2006, en donde se reconozca los efectos de la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la presentación de la declaración complementaria de la controlada [redacted]

(Énfasis añadido)

Lo anterior, sin que en el procedimiento de fiscalización, ni en el trámite del recurso de revocación, ni en la presente instancia contenciosa, se hubiere exhibido la declaración complementaria a la que hizo alusión la propia actora, razón por la que subsistió la omisión observada por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, siendo que en la resolución combatida se señalaron los fundamentos y motivos en los que se sustenta dicha determinación, por lo que no se actualizan las violaciones alegadas por la demandante.

D.1.1. Por otro lado, también es infundado que manifieste la actora que la contribución causada con motivo de la declaración en cita corresponde al ejercicio fiscal de 2006, no así al de 2010.

En efecto, el artículo 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 y 2010, no presenta cambio alguno, tal como se desprende de la siguiente comparación:

Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006	Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010
Artículo 73. La sociedad controladora que ejerza la opción de consolidar a que se refiere el artículo 64 de esta Ley, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la misma, tendrá las siguientes: ... III. En el caso de que alguna o algunas de las	Artículo 73. La sociedad controladora que ejerza la opción de consolidar a que se refiere el artículo 64 de esta Ley, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la misma, tendrá las siguientes: ... III. En el caso de que alguna o algunas de las



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 649 -



Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

147

sociedades controladas presenten declaración complementaria con el fin de subsanar errores u omisiones, así como cuando en el ejercicio de sus facultades las autoridades fiscales modifiquen la utilidad o la pérdida fiscal de una o más sociedades controladas y con ello se modifique el resultado fiscal consolidado, la pérdida fiscal consolidada o el impuesto acreditado manifestados, y se derive un impuesto a cargo, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que ocurra este hecho, la sociedad controladora presentará declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar. Cuando no se derive impuesto a cargo, la declaración complementaria de consolidación se presentará a más tardar dentro de los dos meses siguientes a aquél en que ocurra la primera modificación. Si en la declaración complementaria de consolidación resulta diferencia a cargo, la sociedad controladora deberá enterarla. Cuando se trate de declaraciones complementarias de las sociedades controladas, originadas por el dictamen a sus estados financieros, la sociedad controladora podrá presentar una sola declaración complementaria a más tardar en la fecha de presentación del dictamen relativo a la sociedad controladora.

sociedades controladas presenten declaración complementaria con el fin de subsanar errores u omisiones, así como cuando en el ejercicio de sus facultades las autoridades fiscales modifiquen la utilidad o la pérdida fiscal de una o más sociedades controladas y con ello se modifique el resultado fiscal consolidado, la pérdida fiscal consolidada o el impuesto acreditado manifestados, y se derive un impuesto a cargo, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que ocurra este hecho, la sociedad controladora presentará declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar. Cuando no se derive impuesto a cargo, la declaración complementaria de consolidación se presentará a más tardar dentro de los dos meses siguientes a aquél en que ocurra la primera modificación. Si en la declaración complementaria de consolidación resulta diferencia a cargo, la sociedad controladora deberá enterarla. Cuando se trate de declaraciones complementarias de las sociedades controladas, originadas por el dictamen a sus estados financieros, la sociedad controladora podrá presentar una sola declaración complementaria a más tardar en la fecha de presentación del dictamen relativo a la sociedad controladora.

De lo anterior, esa H. Sala podrá verificar que el argumento que se atiende resulta intrascendente, en tanto que el texto de ambas disposiciones normativas es idéntico en los ejercicios fiscales de 2006 y 2010.

Por ello, aún cuando pudiera asistir la razón a la demandante, lo cierto es que ello no le causa ningún perjuicio, ya que incluso ésta es omisa en referirlo.



Administración General de Grandes Contribuyentes,
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

148

A lo anterior, se suma el hecho de que en términos del segundo párrafo del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, serán aplicables las normas adjetivas que sean aplicables para determinar las contribuciones que correspondan, aquéllas que estén vigentes al momento de su causación.

Ciertamente, el numeral en cita dispone lo siguiente:

Artículo 6...

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

En tal orden de ideas, si mi representada citó el artículo 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, es evidente que ello obedece a que la declaración en cita precisamente fué presentada en el año aludido.

En virtud de lo anterior, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

D.2. Asimismo, resulta infundado el argumento en el que mi contraria aduce que en el oficio de observaciones no se hizo de su conocimiento la posibilidad que tenía para corregir su situación fiscal respecto del punto en controversia, en términos de la Ley de los Derechos del Contribuyente.

En primer lugar, es menester destacar a esa H. Sala que en el oficio de observaciones levantado por las autoridades fiscales, no es su obligación señalar en términos de la Ley de los Derechos del Contribuyente, la posibilidad que éstos tienen de corregir su situación fiscal.

Efectivamente, los artículos 12 y 13 de la Ley de los Derechos del Contribuyente, señalan:

Artículo 12. Los contribuyentes tendrán derecho a ser informados, al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones."

Artículo 13. Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado."

[Énfasis añadido]



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

149

La lectura a los numerales de referencia permite distinguir que en los casos en que las autoridades fiscales ejercen sus facultades de comprobación —en específico para el caso que nos ocupa, la revisión de gabinete—, se encuentran obligadas a informar con el primer acto que implique el inicio de facultades el derecho que tiene para corregir su situación fiscal.

Por lo tanto, las autoridades fiscales que ejercen facultades de comprobación, **al inicio de una revisión de gabinete** se encuentran obligadas a informar al sujeto auditado sobre el derecho que tiene de corregir su situación fiscal.

En esa medida, del expediente administrativo ofrecido como prueba por la propia enjuiciante, se desprende que mediante oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, la autoridad fiscal solicitó diversa documentación mi opositora a efecto de llevar a cabo sus facultades de comprobación, es decir, **dicho oficio constituye el inicio de facultades de comprobación** en que se sustenta la resolución definitiva que se controvierte en el presente medio de defensa.

Ahora bien, la notificación del oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011 se llevó a cabo el 24 del mismo mes y año, y en el acta respectiva se hizo constar: "...se le entrega el original con la autógrafo del oficio antes mencionado, así como copia de la presente acta y en cumplimiento al artículo 2, primer párrafo, fracción XII de la Ley de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente vigente, **en este mismo acto se le entrega un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado vigente, la cual contiene sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley antes citada.**"

Concatenado a lo expuesto, en la página 1, del oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, la persona que se encargó de recibirlo asentó: "Previo lectura e identificación del notificador **RECIBÍ ORIGINAL DEL PRESENTE OFICIO, ASÍ COMO UN EJEMPLAR DE LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO VIGENTE EN MI CARÁCTER DE TERCERO**"

Así, el análisis de las documentales citadas permite concluir que en el caso concreto fue desde el inicio de facultades de comprobación, como lo ordena la Ley de los Derechos del Contribuyente, que la autoridad hizo de su conocimiento el derecho de la incoante para corregir su situación fiscal, razón por la cual en el oficio de observaciones no debía informarse de nueva cuenta ese derecho.

Lo anterior, porque es patente que el oficio de observaciones en una revisión de gabinete, no es el acto que implica el inicio de facultades de comprobación, sino todo lo contrario, es el acto por el cual se hacen constar los hechos y omisiones encontrados en la fiscalización; es decir, constituye la finalización del procedimiento fiscalizador, sin que en el mismo deba informarse al particular el



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

150

derecho de corregir su situación fiscal en los términos de la referida Ley de los Derechos del Contribuyente.

No obstante lo antes apuntado, en el oficio de observaciones controlado con el número 900-05-03-2012-69836 de 17 de diciembre de 2012, mismo que obra en el expediente administrativo antes referido, se desprende a su foja 83, lo siguiente:

En los términos y para los efectos previstos en las fracciones IV y VI del primer párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente, dispone de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente Oficio de Observaciones, para presentar ante esta Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" [...] los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, **así como para corregir su situación fiscal.**"

(Énfasis añadido)

La reproducción anterior evidencia que en términos del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, fue que la autoridad fiscalizadora concedió a mi colitigante un plazo de veinte días para desvirtuar los hechos y omisiones encontrados, **así como para corregir su situación fiscal**, razón por la cual, la autoridad fiscalizadora en el oficio de observaciones, sí hizo del conocimiento de la accionante, la posibilidad de que corrigiera su situación fiscal.

En virtud de lo anterior, se considera procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

D.2.1. Por otro lado, la autoridad fiscalizadora **sí cumplió con la prerrogativa consagrada por el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.**

Ciertamente, el contenido del artículo 2º, fracción XII, en relación con el 13, ambos de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, señalan a la letra lo siguiente:

Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, **sobre sus derechos y obligaciones** en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.

Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 651 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

151

a omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.

Artículo 13. Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado."

(Énfasis añadido)

De los preceptos antes transcritos se desprenden las siguientes premisas:

- ✓ Son derechos generales de los contribuyentes, el ser informado al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones;
- ✓ Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda;
- ✓ La omisión de ser informado sobre sus derechos, no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal; y
- ✓ Dentro de los derechos que tiene el contribuyente en el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, se encuentra el relativo a ser informado con el primer acto de aplicación, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho.

En este sentido, del análisis del oficio número 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, se desprende que con el mismo se dio inicio a la revisión de gabinete dirigida a [REDACTED] Cantes [REDACTED], de la cual derivó la resolución determinante inicialmente [REDACTED] surrida, por lo que al momento de notificarse dicho oficio, es cuando la autoridad debió cumplir con dicha obligación, no obstante no mencionarse dicha circunstancia en el cuerpo del propio oficio 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
I.N. 12140/15-17-11-5.

152

En ese contexto, tenemos que de conformidad con la fracción XII, del artículo 2º, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos (incluido claro está, el relativo a ser informado con el primer acto de aplicación en el ejercicio de las facultades de comprobación, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho), cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.

Por lo tanto y atendiendo a dicha obligación a cargo de la autoridad fiscalizadora, tenemos que en el último párrafo del acta de notificación de fecha 28 de junio de 2011, se hizo el señalamiento respectivo, tal y como se aprecia a continuación:

Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación [REDACTED] de 2010, según lo dispone el Artículo Primero-Transitorio; y conforme a lo dispuesto por el artículo 135 del mencionado Código, se le entrega el original con firma autógrafa del oficio antes mencionado, así como copia de la presente acta y en cumplimiento al artículo 2, primer párrafo, fracción XII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente vigente, en este mismo acto se le entrega un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado vigente, la cual contiene sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley antes citada.

NOTIFICADO

Previa lectura del presente documento y enterado de su contenido, asiente de puño y letra, mi nombre y firma a los 19 días del mes de junio de 2011.

(NOMBRE Y FIRMA)
R.F.C.: [REDACTED]

NOTIFICADOR

C. Mario Samir Pérez
R.F.C.: SAPM576213

Asimismo, esa H. Sala podrá verificar que en la página 1 del propio oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, la C. [REDACTED] persona con quien se entendió la diligencia de notificación de la actuación en cita, por los hechos circunstanciados en la propia acta —y que, al no haber sido controvertidos por la actora, gozan de la presunción de legalidad., señaló de su propio puño y letra lo siguiente:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

153

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

ENTREGA PERSONAL
900-05-2011-385
GSD9400235/11

Trávia factua e identificación
del notificado, recibir asistencia
del representante oficio, del caso
en el momento de la carta de
los derechos del contribuyente
auditor vigente en el caso

ASUNTO: Se solicitan los informes, datos y documentos que se indican.

México, D.F., 21 de junio de 2011

Por lo tanto, de los hechos que constan en el expediente administrativo del cual derivó la resolución impugnada en sede administrativa, tenemos que la autoridad fiscalizadora, al inicio de la facultad de comprobación ejercida a la hoy actora, consistente en una revisión de gabinete, cumplió de manera cabal la obligación prevista en el artículo 2º, fracción XII, en relación con el 13, ambos de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, razón por la cual, es patente que los argumentos de la demandante devienen infundados.

En ese tenor, si como quedó señalado, al momento en que se notificó el oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, se dio inicio a las facultades de comprobación a [REDACTED] y fue cuando se entregó a ésta la Carta de los Derechos de Contribuyente Auditado, por conducto de la persona indicada en párrafos precedentes, es claro que los argumentos que se contestan resultan ser totalmente infundados, puesto que de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, dentro de los derechos que tiene el contribuyente en el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, se encuentra el relativo a ser informado al inicio de las facultades de comprobación el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios que ejercer dicha prerrogativa implica.

Esto es, que el propio numeral es claro en establecer que dicha obligación a cargo de la autoridad fiscal, será únicamente al inicio de las facultades de comprobación, y no así en cada acto subsiguiente, por lo que si como quedó señalado, al momento de notificar el oficio 900-05-2011-385 de 21 de junio de 2011, la autoridad fiscalizadora dio cabal cumplimiento a la obligación contenida en el multireferido artículo 13 de la Ley Federal de Derechos al Contribuyente, resulta infundada la pretensión de mi contraria.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

154

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

Registro No. 167730. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009. Página: 447. Tesis: 2a./J. 23/2009. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa

"DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, DE INFORMAR EL DERECHO QUE LE ASISTE A AQUEL DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL Y LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE SU EJERCICIO, A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, SE CUMPLE CUANDO SE LE ENTREGA LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE Y ASÍ SE ASIENTA EN LA ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE. La obligación de las autoridades fiscales, al ejercer sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, de informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer tal prerrogativa, prevista en el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, debe interpretarse en concordancia con el artículo 2º, fracción XII, de la ley citada, en el sentido de que se tendrá por informado al contribuyente cuando se le entregue la Carta de los Derechos del Contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. Ello es así, porque ambos preceptos están referidos al ejercicio de las facultades de comprobación de las obligaciones fiscales por parte de las autoridades en la materia, razón por la que la entrega de la mencionada carta en el primer acto que implique el inicio de esas facultades es suficiente para tener por satisfecho el deber de informar al contribuyente sobre el mencionado derecho, siendo innecesario, además, que al momento de notificársele la orden de visita o en el acta parcial de inicio, la autoridad le dé a conocer el mencionado derecho expresamente mediante una redacción específica."

Contradicción de tesis 203/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 25 de febrero de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez.

Tesis de jurisprudencia 23/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto tribunal, en sesión privada del once de marzo de dos mil nueve.

(Énfasis añadido)



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 653 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

155

En el mismo sentido se ha pronunciado la Tercera Sala Regional del Norte Centro II de ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la tesis V-TASR-XXXVII-3242, misma que dispone a la letra lo siguiente:

No. Registro: 51,307. Aislada. Época: Sexta. Instancia: Tercera Sala Regional del Norte Centro II. Fuente: R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. Tesis: V-TASR-XXXVII-3242. Página: 457

"DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE.- SE DEBE DE TENER COMO INFORMADA A LA ACTORA SOBRE SUS DERECHOS, CUANDO SE LE ENTREGUE LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE, Y ASÍ SE ASIENTE EN LA ACTUACIÓN QUE CORRESPONDA. Es infundado el agravio cuando la parte actora alegue en un juicio que es ilegal el acto de autoridad, cuando no se desprenda del texto de la solicitud de información, que se le haya prevenido del derecho que tenía para corregir su situación fiscal, y los beneficios que ello conllevarían; toda vez que si en el caso se desprende de autos que en la notificación de la solicitud de información se le entregó la carta de los derechos de los contribuyentes, atento a lo establecido por el artículo 2º, fracción XII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, debe tenerse por informada sobre sus derechos, cuando se le entregó tal carta, y así se asiente en la actuación correspondiente. (31)"

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1780/07-05-03-2.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de noviembre de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretario: Lic. Mario Rodríguez Juncos.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. p. 457.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. p. 342.

(Énfasis añadido)

No obstante lo anterior, de conformidad con el último párrafo de la fracción 2º, fracción XII, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en un supuesto caso de omisión por parte de la autoridad fiscal de hacer del conocimiento al contribuyente sobre sus derechos y obligaciones de corregir su situación fiscal, esta circunstancia, aún en ese caso (cuestión que no ocurre en el presente asunto) no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero sí dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.

En consecuencia deviene infundado el argumento de mi opositora en el sentido de que no se le dieron a conocer los derechos para corregir su situación fiscal, pues al inicio del procedimiento.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

156

fiscalizador del cual fue objeto, se hizo de su conocimiento tal prerrogativa de conformidad con el artículo 13, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Finalmente, en caso de que esa H. Sala estimare lo contrario, no debe soslayar que el incumplimiento a los requisitos reseñados con antelación, no acarrea violación alguna que amerite anular los actos impugnados.

En efecto, lo anterior es de ese modo, ya que se considera menester tener presente el contenido de la tesis de jurisprudencia VI.3o.A. J/75, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, misma que dispone a la letra lo siguiente:

Registro No. 163165. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Enero de 2011. Página: 2945. Tesis: VI.3o.A. J/75. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa

"DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE INFORMAR A ÉSTE CON EL PRIMER ACTO QUE IMPLIQUE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, LA PRERROGATIVA PREVISTA EN LA LEY FEDERAL RELATIVA DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL Y DE LOS BENEFICIOS QUE ELLO LE ACARREA, NO AFECTA LA VALIDEZ DE LO ACTUADO POR AQUÉLLA NI DEL CRÉDITO DETERMINADO. Los artículos 2o., fracción XII y 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente prevén, el primero, la prerrogativa de éste a ser informado al inicio de las facultades de comprobación sobre los derechos y obligaciones que le asisten en el curso de tales actuaciones o mientras dura el procedimiento de fiscalización, así como que dicho requisito se tendrá por satisfecho cuando la revisora entregue al gobernado la carta de los derechos del contribuyente auditado, y de ello quede constancia y, el segundo, que cuando las autoridades fiscalizadoras ejerzan sus facultades de revisión en términos de las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (orden de visita o revisión de escritorio), deben informar al contribuyente en el primer acto que implique el inicio del citado procedimiento, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal, así como los beneficios que ello le acarrea. Ahora bien, cuando de los autos se advierte que la autoridad administrativa no informó al contribuyente sobre el derecho de corregir su situación fiscal y de los beneficios que ello implica, tal proceder no afecta la validez de lo actuado por aquélla ni del crédito determinado, toda vez que de una interpretación sistemática de los referidos preceptos se colige que ello sólo da lugar a fincar, en todo caso, una responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 133/2008. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte. 2 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Clemente Delgado Salgado.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

157

Amparo directo 331/2008. Alde Puebla, S.A. de C.V. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la Garza.

Revisión fiscal 163/2008. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte. 13 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro de Jesús Baltazar Robles. Secretario: Pedro Hermida Pérez.

Amparo directo 99/2010. Fausto Óscar de la Barrera Velázquez. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro Ramos García.

Amparo directo 312/2010. Roturaciones, Excavaciones y Caminos del Centro, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la Garza.

(Énfasis añadido)

Circunstancia que incluso ha sido criterio compartido por ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tal como se desprende de la tesis VI-TASR-XXX-32, sostenida por la Sala Regional del Norte-Centro I, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

No. Registro: 51,427. Aislada. Época: Sexta. Instancia: Sala Regional del Norte - Centro I. Fuente: R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. Tesis: VI-TASR-XXX-32. Página: 342

"FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- CONSECUENCIAS POR OMITIR INFORMAR AL CONTRIBUYENTE EN SU INICIO, EL DERECHO QUE TIENE PARA CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL Y SUS BENEFICIOS, EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. Los artículos 2 fracción XII y 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, disponen que son derechos de los contribuyentes, entre otros, ser informados, al inicio de las facultades de comprobación, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y que se tendrá por informado al contribuyente, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así, se asiente en la actuación que corresponda; indicando además, que la omisión de lo antes señalado, no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión. Atento a lo anterior, suponiendo que no le hubiera sido entregada al visitado, la carta de los derechos del contribuyente auditado, conjuntamente con la orden de visita domiciliaria o la solicitud de documentación e información, y por ende, no se le hubiera hecho saber del derecho de corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer ese derecho, ello, en nada hubiera afectado el resultado de la revisión, ya que esa omisión por sí misma, no afecta la validez de las actuaciones que posteriormente llevó a cabo la autoridad fiscalizadora, y en todo caso, lo único que podría generar, es que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que hubiera incurrido en la omisión de no informar al contribuyente auditado. (16)"



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-58541
J.N. 12140/15-17-11-5.

158

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1727/08-04-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Pablo Chávez Holguín.- Secretario: Lic. Ernesto Aguero García Rodríguez.

(Énfasis añadido)

En ese orden de ideas, se aprecia con meridiana claridad que, aún y cuando las autoridades fiscales omitan en sus resoluciones o actuaciones, hacer mención de los derechos que asisten a los contribuyentes, o en su caso, omitir entregar a éstos la carta de los derechos del contribuyente, dicha circunstancia per se, no invalida el contenido de la resolución de que se trate, ni mucho menos el crédito o créditos fiscales que se determinen en ellas, por lo que en corolario, se observa que el argumento de la enjuiciante deviene también inoperante, toda vez que en el caso no controvierte los motivos y fundamentos de la resolución impugnada, sino que se limita a realizar manifestaciones gratuitas carentes de sustento jurídico.

Por ello, se estima procedente que esa H. Sala se pronuncie al respecto en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 655 -

Del mismo modo, la demandada a través del **oficio de alegatos número 900 09 05-2016-6739** de fecha **11 de mayo de 2016**, sostuvo lo siguiente

ALEGATOS DE LA AUTORIDAD

E. Mi contraria sí debe considerar el inventario acumulable de su controlada [REDACTED] como parte de la utilidad que se debe reportar en consolidación fiscal.

Av. Hidalgo núm. 77, Módulo III, P.B., Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
Teléfono (55) 58-02-00-00, www.sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

Reg. 8542.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes

Oficio 900 09 05-2016-6739
J.N. 12140/15-17-11-5.

7

En efecto, del Artículo Tercero Transitorio, fracción IV^a del decreto publicado el 1º de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, se desprende que los contribuyentes, para determinar el costo de lo vendido, no podrán deducir las mercancías que tenían al 31 de diciembre de 2004.

Sin embargo, establece como regla de excepción a efecto de poder deducir las mercancías enajenadas relativas al inventario que se tenía al 31 de diciembre de 2004, que los contribuyentes deberán acumular el inventario que tengan a esa fecha, atendiendo al procedimiento que establece la fracción V, del propio Artículo Tercero Transitorio del Decreto publicado el 1 de diciembre de 2004 (opción).

En ese entendido, respecto de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, es importante destacar a esa H. Sala que a partir del ejercicio de 2005, la obligación de los contribuyentes es sujetarse a la regla general que en este caso consiste en que para determinar el costo de lo vendido, no podrán deducir mercancías al momento de adquirirse; sin embargo, si por voluntad propia los contribuyentes deciden ejercer la opción prevista en la disposición transitoria en estudio, consistente en deducir mercancías enajenadas relativas al inventario que tenían al 31 de diciembre de 2004, resulta entonces que tienen la ineludible obligación de cumplir con los requisitos que se establecen a efecto de poder ejercer tal opción.

Bajo estas circunstancias, de la interpretación armónica, sistemática y causal de las disposiciones que integran el sistema de "costo de lo vendido", se desprende con suma claridad que cuando el legislador hizo referencia a "inventario acumulable", ello conllevaba que el inventario que tenía la empresa controlada [REDACTED] al 31 de diciembre de 2004, se adicionara o acumulara al momento de determinar la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, pues sólo así se neutralizaría el efecto de la doble deducción que se autorizó mediante la fracción IV del Artículo Tercero de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005.

Lo anterior, trasladado al régimen de consolidación, quiere decir que el porcentaje que a nivel consolidado debe fluir a la controladora, será influenciado por la opción de acumulación de los inventarios que la sociedad controlada ejerció en su momento; de lo contrario, se estaría reconociendo únicamente la doble deducción (autorizada mediante la fracción IV del Artículo Tercero de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta), pero no se

Los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán optar por acumular los inventarios a que se refiere esta fracción, conforme a lo establecido en la siguiente fracción, en cuyo caso podrán deducir el costo de lo vendido conforme enajenen las mercancías. Cuando los contribuyentes no opten por acumular los inventarios considerarán que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha.

Av. Hidalgo núm. 77, Módulo III, P.B., Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
Teléfono (55) 58-02-00-00, www.sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

Reg. 8542.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes

Oficio 900 09 05-2016-6739
J.N. 12140/15-17-11-5.

8

reconocería el efecto de reversión, es decir, el de acumular la existencia de inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004.

En este sentido, todos aquellos contribuyentes que opten por acogerse a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio, incrementan voluntariamente los conceptos con los que deben determinar su utilidad o pérdida del ejercicio, es decir, además de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, deberán considerar el inventario acumulable a efecto de poder determinar su utilidad o pérdida del ejercicio.

Así las cosas, debe señalarse que para la determinación de la utilidad o pérdida fiscal, se deberán considerar todos aquellos conceptos que la ley señale como acumulables, y no sólo los conceptos que tengan la naturaleza de ingresos.

Por tanto, es claro que contrario a lo que señala la enjuiciante, para la determinación de la pérdida o utilidad fiscal del ejercicio, sí se debe acumular el efecto del inventario previsto por la fracción IV del citado Artículo Tercero Transitorio.

En mérito de lo anterior, independientemente de si dicho concepto tiene o no la naturaleza de ingreso acumulable, la empresa controladora se encuentra obligada a considerar el efecto del inventario acumulable en la determinación del impuesto consolidado del ejercicio, ello, al momento de considerar en la participación consolidable los montos de las utilidades o pérdidas que se reportan en el grupo, entre ellas, las de su controlada.

F. La autoridad no apreció los hechos de manera equivocada al afirmar que sobre el tema de fondo abordado en el apartado precedente ya existe la sentencia firme dictada en el juicio 33900/07-17-05-1, misma que resulta desfavorable a los intereses de la impugnante.

Ciertamente, de la lectura integral a la sentencia aludida, se colige con facilidad que en ninguna parte de su contenido se advierte la afirmación de la actora en el sentido de que para calcular el resultado fiscal consolidado, únicamente se encontraba obligada a sumar las utilidades de sus empresas controladas sin considerar el inventario acumulable.

Por el contrario, se desprende que el inventario acumulable debe ser considerado individualmente por sus controladas como parte de la utilidad fiscal, y posteriormente, dicha utilidad debe ser aplicada en consolidación sin dejar de aplicar el inventario acumulable.

En ese contexto, esa H. Sala, a fin de cumplir con la figura jurídica de la cosa juzgada, debe considerar que la actora, al haber obtenido un fallo desfavorable que se encuentra firme, en el cual medularmente se resolvió que no le asiste la razón al afirmar que para efectos de determinar su resultado fiscal consolidado, no debía considerar el inventario acumulable de sus empresas

Av. Hidalgo núm. 77, Módulo III, P.B., Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
Teléfono (55) 58-02-00-00, www.sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

Reg. 8542.



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes

Oficio 900 09 05-2016-6739
J.N. 12140/15-17-11-5.

9

controladas, es que se encuentra vinculada por virtud de la fuerza de la cosa juzgada a considerar el inventario acumulable de su empresa controlada como parte de utilidad fiscal a determinar en consolidación.

G. Mi colitigante no desvirtúa los fundamentos y motivos que tuvo la autoridad fiscalizadora para desestimar la declaración complementaria que presentó su controlada.

En efecto, subsiste la legalidad de las resoluciones impugnadas al no combatirse los fundamentos y motivos que tuvo la fiscalizadora y posteriormente ésta autoridad, para desestimar la declaración complementaria que fue presentada por la empresa controlada esencialmente porque en el agravio que la actora identificó como décimo séptimo de su escrito de revocación, únicamente alegó una supuesta omisión de los fundamentos y motivos considerados por la autoridad fiscalizadora y que ante la declaración complementaria de su empresa controlada, la actora no tenía obligación de incluir en la utilidad fiscal consolidada de 2006 el inventario acumulable aludido por mi representada, puesto que éste fue disminuido.

Lo anterior, sin que se combata lo aludido por la autoridad fiscalizadora en el sentido de que dicha declaración se efectuó con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por mi opositora en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, ni tampoco que el entero de los pagos provisionales donde sí se considera la doceava parte del multicitado inventario, lo que evidentemente constituye un consentimiento expreso relacionado con la inclusión del inventario acumulable de la empresa controlada.

G.1. La declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por [redacted] no puede surtir efectos en los términos propuestos por la demandante.

Suponiendo sin conceder que esa H. Sala estime lo opuesto a lo argumentado en el punto que antecede, no debe perder de vista que las declaraciones complementarias de las empresas controladas que repercutan en el resultado fiscal consolidado modificando su utilidad o pérdida fiscal individual, no tendrán efectos jurídicos una vez que hayan sido iniciadas las facultades de comprobación a la empresa controladora (siempre y cuando no se ubiquen en los supuestos legales de excepción), pues la intención del legislador con la inclusión del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación fue la de no obstaculizar o limitar el ejercicio de facultades de comprobación de las

* Las declaraciones que presentan los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de tres ocasiones las declaraciones correspondientes, aún cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, en los siguientes casos:
I. Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades.

Av. Hidalgo núm. 77, Módulo III, P.B., Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
Teléfono (55) 58-02-00-00, www.sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

Reg. 8542.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 657 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes

Oficio 900 09 05-2016-6739
J.N. 12140/15-17-11-5.

10

autoridades fiscales, lo cual ocurre en consolidación con la modificación en la declaración de las empresas controladas considerando las particularidades de ese régimen.

El numeral de referencia en atención al principio de autodeterminación de los tributos, establece la posibilidad de que los causantes hasta en tres ocasiones, modifiquen sus declaraciones de impuestos; sin embargo, tales declaraciones no tendrán efectos jurídicos cuando se presenten una vez iniciadas las facultades de comprobación.

Lo anterior se robustece si consideramos que el propio artículo 32, del Código Fiscal de la Federación establece que "...Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda.", lo que se traduce en que ninguna otra declaración complementaria tendrá efectos jurídicos, salvo lo dispuesto en ese mismo numeral.

En tal contexto jurídico, esta autoridad fiscal valoró, en términos del artículo 130, del Código Fiscal de la Federación, la prueba consistente en la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por [REDACTED] y concluyó válidamente que dicha documental fue presentada una vez que la autoridad fiscal inició las facultades de comprobación a la empresa controladora [REDACTED] por el ejercicio fiscal 2006.

II. Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta.

III. Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo.

IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de ley.

Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo se efectuará mediante la presentación de declaración que sustituya a la anterior, debiendo contener todos los datos que requiera la declaración aun cuando sólo se modifique alguno de ellos.

Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda, debiendo pagarse las multas que establece el citado artículo 76.

Se presentará declaración complementaria conforme a lo previsto por el quinto párrafo del artículo 144 de este Código, caso en el cual se pagará la multa que corresponda, calculada sobre la parte consentida de la resolución y disminuida en los términos del séptimo párrafo del artículo 76 de este ordenamiento.

Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que correspondía, los recargos computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 21 de este Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago.

Para los efectos de este artículo, una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando.

Av. Hidalgo núm. 77, Módulo III, P.B., Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
Teléfono (55) 58-02-00-00, www.sat.gob.mx youtube.com/satmx twitter.com/satmx

Reg. 8542.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes

Oficio 900 09 05-2016-6739

J.N. 12140/15-17-11-5.

11

Por lo que siendo que esa declaración tuvo repercusión en el resultado fiscal consolidado al disminuir la utilidad fiscal de la empresa controlada [REDACTED] en cantidad de \$559'028,827, es que no puede tener efecto jurídico acorde a la interpretación efectuada al artículo 32, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el marco jurídico que rige el régimen de consolidación fiscal, en específico el artículo 68, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado.

Lo anterior, especialmente porque la declaración complementaria de [REDACTED] no se ubica en las hipótesis de excepción establecidas en el artículo 32, del Código Fiscal de la Federación, y en consecuencia, no tiene ningún efecto jurídico.

G.2. Esta Administración no mejoró los fundamentos y motivos de la resolución inicialmente recurrida.

Ciertamente, en disenso con lo considerado por la accionante, ésta Administración no mejoró los motivos y fundamentos expuestos en el acto inicialmente recurrido, sino que únicamente valoró la declaración en comentario a fin de dar cumplimiento a su obligación como autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales de respetar y hacer cumplir el derecho fundamental de impartición de justicia completa.

Lo expuesto se refuerza si consideramos que a efecto de impartir justicia completa, debe existir pronunciamiento expreso respecto de todos los puntos controvertidos propuestos por la hoy demandante, puesto que a ningún fin práctico llevaría devolver jurisdicción a la autoridad fiscalizadora.

De lo anterior se desprende que la parte actora esencialmente manifestó lo siguiente:

SEGUNDO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN

En el apartado A, la actora señala que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en términos de los artículos 14 y 16 Constitucional, así como el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con el fin de que no se viole el principio de seguridad jurídica.

Asimismo, en el Apartado B, la accionante señala las causas de porque la demandada le determinó un crédito fiscal al considerar que omitió considerar inventario acumulable de su empresa controlada a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006:

a) Que la actora debía estimar en la determinación de su resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 la utilidad fiscal de ***** **
***** ** ** ***** sin excluir el inventario acumulable, pues ya existía sentencia firme dictada en el juicio fiscal 33900/07-17-05-1 que le resultaba desfavorable respecto al tema consistente en que debía considerar en consolidación fiscal el inventario acumulable de sus representadas.

b) Que en la sentencia dictada en el juicio de amparo 408/2011 no se indicó que la actora tenía la obligación únicamente de considerar las utilidades de sus empresas controladas sin considerar el inventario acumulable para efectos de la determinación del resultado fiscal o pérdida fiscal consolidados.

c) Que en el caso, existe cosa juzgada refleja.

En el Apartado C, la demandante señaló que no existe cosa juzgada ni cosa juzgada refleja respecto a la determinación de la utilidad fiscal consolidada al considerar el inventario acumulable de ***** **
***** toda vez que no existe identidad de objetos, pues el juicio de amparo directo 408/2011 y el juicio fiscal 33900/07-17-05-1, derivaron de una consulta fiscal formulada por la actora durante el ejercicio fiscal de 2006, mientras que la determinación del crédito fiscal impugnado, deriva de una revisión secuencial del ejercicio de 2006, razón por la cual resulta evidente que ambos procedimientos no tienen el mismo objeto.

Que no existe identidad de cosas, pues la sentencia dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, deriva de un asunto en el que se planteó una confirmación de criterio a las autoridades fiscales.

Asimismo, que tampoco existe identidad de personas de los litigantes pues la autoridad que resolvió la consulta presentada y la autoridad que emitió la liquidación por el ejercicio fiscal de 2006, son distintas.

Por otra parte, en el Apartado D la demandante sostuvo que aun si existiera cosa juzgada en cuanto al fondo del asunto derivado del juicio de amparo 408/2011 y el juicio fiscal 33900/07-17-05-1, son ilegales las resoluciones impugnadas contenidas en los oficios números 900 04 05-2015-177797 de fecha 19 de febrero de 2015 y 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013, respectivamente, ya que la cosa juzgada se actualiza en su favor.

Lo anterior, toda vez que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo D.A. 408/2011 el 17 de febrero de 2012, determinó que el inventario acumulable se encuentra incluido en la utilidad que la sociedad controlada le reporta a la controladora, lo que ocurre al momento de enajenación del inventario.

Es decir, que el Colegiado determinó que se debe considerar que el inventario acumulable de las empresas controladas de ***** se transmite a la controladora en vía de utilidad al momento de la enajenación del inventario, sin que ello implique que la actora o sus sociedades controladas deban adicionar a su utilidad fiscal el concepto de inventario acumulable, como ilegalmente lo sostuvieron las autoridades, lo que implica una confesión expresa de éstas.

Del mismo modo, señala que únicamente debía considerar para determinar su resultado fiscal consolidado, las utilidades efectivamente reportadas por sus empresas controladas.

TERCER CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN

En el apartado A, la actora señala que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en términos de los artículos 14 y 16 Constitucional, así como el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con el fin de que no se viole el principio de seguridad jurídica.

Mientras que en el Apartado B, la accionante señala las causas de porque la demandada le determinó un crédito fiscal al omitir considerar el inventario acumulable de su empresa controlada a la utilidad fiscal consolidada del ejercicio fiscal de 2006, siendo las siguientes:

a) La actora debió adicionar al resultado fiscal consolidado el inventario acumulable en cantidad de \$1,558055,993 de su empresa controlada ***** *** ***** **** ** ***** pues independientemente de la naturaleza del inventario (ingreso o no) así lo había dispuesto el legislador.

b) Que al haber optado la empresa ***** *** ***** **** ** en lo individual por la opción contenida en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, su inventario acumulable forma parte de su utilidad fiscal al tratarse de un concepto que busca nulificar el beneficio de una doble deducción en la adquisición de mercancías, por lo que el inventario acumulable debía ser considerado para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado.

En el Apartado C, del tercer concepto de impugnación la demandante señaló que la ilegalidad de las resoluciones impugnadas contenidas en los oficios números 900 04 05-2015-177797 de fecha 19 de febrero de 2015 y 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013, respectivamente, deriva de la incorrecta aplicación del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, en relación con el artículo Tercero Transitorio de dicha Ley, al considerar que el inventario acumulable no constituye un ingreso acumulable para efectos de determinar la utilidad fiscal de una sociedad controlada, sino un concepto acumulable.

Que una sociedad controladora a efecto de determinar su resultado fiscal consolidado, únicamente debe considerar las utilidades o pérdidas fiscales de sus sociedades controladas determinadas en lo

individual, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, disminuyendo de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas.

Asimismo, que ***** aplicó la opción de acumulación de inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004 a que se refieren las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal 2005, por lo tanto, debe determinar el monto del inventario que se acumulará en cada ejercicio hasta agotarlos.

Respecto al Apartado C.1., la actora señaló que el inventario acumulable de ***** no debió ser considerado para efectos de determinar la utilidad fiscal consolidada, al no calificar como un ingreso, pues no resulta de una modificación positiva al haber patrimonial de la actora y al ser un concepto no acumulable.

Del mismo modo, que no obstante ***** ejerció la opción prevista en el artículo Tercero Transitorio, fracciones IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, aun así el inventario acumulable no produjo una modificación en su patrimonio, por lo que la autoridad no debió considerar para determinar su utilidad fiscal consolidada las cantidades correspondientes al inventario acumulable de *****

Además, que se deberá declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, pues las autoridades demandadas efectuaron una incorrecta interpretación y aplicación de los artículos 10 y 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la referida Ley vigente en el ejercicio fiscal de 2005.

En el Apartado C.2., la demandante sostiene que la Ley del Impuesto sobre la Renta, no reconoce como un ingreso acumulable al inventario acumulable para efecto de determinar la utilidad fiscal correspondiente, por lo que las resoluciones impugnadas resultan ilegales al determinar a mi mandante un crédito fiscal derivado de que no consideró las

cantidades correspondientes al inventario acumulable de sus controladas para determinar su resultado fiscal consolidado.

Que el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tampoco contempla un momento en que el valor del inventario acumulable se considere percibido, elemento fundamental para determinar que se trata de un ingreso acumulable para la utilidad fiscal.

Además, que si el legislador hubiera pretendido darle el carácter de ingreso al inventario acumulable, así lo hubiera establecido expresamente en la legislación fiscal, pues dicha situación no se desprende de los artículos 17, 18 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006.

En el Apartado C.3., la demandante señaló que no existe disposición expresa dentro del régimen general de consolidación fiscal que la obligue a acumular a la utilidad fiscal a nivel consolidado el inventario acumulable.

Que el inventario acumulable es un concepto que se adiciona posterior a la determinación de la utilidad fiscal, por lo que el mismo no debe ser considerado al momento de determinar el resultado fiscal consolidado.

Asimismo, que el hecho de que la actora no haya considerado el inventario acumulable de su sociedad controlada ***** *** ***** **** ** ***** al determinar el resultado fiscal consolidado, contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas no contraviene lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, ya que únicamente debió considerar la utilidad fiscal consolidada de ésta.

En el Apartado C.4., la accionante sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que para que un ingreso sea acumulable resulta indispensable que la Ley del Impuesto sobre la Renta de manera expresa señale que se considera objeto del gravamen.

Asimismo, que la ley no prevé de manera expresa que el inventario acumulable sea un ingreso para efectos de la determinación de la utilidad fiscal.

Que es plenamente aplicable por analogía el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que al ser la consolidación fiscal un tipo de estímulo o incentivo fiscal, para que un ingreso sea acumulable, así debe establecerlo expresamente el legislador, lo que no sucede con el inventario acumulable de *****

En el Apartado C.5., la demandante señala que si el legislador hubiera pretendido que el inventario acumulable formara parte de la determinación de la utilidad fiscal, lo hubiera establecido expresamente, y no se establecería que la doceava parte de dicho concepto tuviera que adicionarse a la utilidad fiscal.

CUARTO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN

La parte actora, en el concepto de impugnación de referencia señaló que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en términos de los artículos 14 y 16 Constitucional, así como el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con el fin de que no se viole el principio de seguridad jurídica.

Mientras que en el Apartado B, la accionante señala las causas de por qué las demandadas desestimaron la declaración complementaria presentada por ***** las cuales fueron las siguientes:

a) Que si bien ***** presentó una declaración complementaria en la que disminuyó su utilidad fiscal individual, al eliminar el inventario acumulable de los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, fue con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por la actora en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006.

b) Que la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013, por ***** no puede ser valorada en los términos propuestos por la actora, pues el artículo 32 del Código Fiscal de la

Federación, traído al régimen de consolidación fiscal debe ser interpretado tomando en consideración que la empresa controladora y sus controladas constituyen una unidad económica, y que las declaraciones complementarias de las empresas controladas que repercutan en el resultado fiscal consolidado modificando su utilidad o pérdida fiscal individual, no tendrán efectos jurídicos una vez que hayan sido iniciadas las facultades de comprobación a la empresa controladora, a efecto de no limitar el ejercicio de facultades de comprobación.

En el Apartado C, la demandante señaló que la autoridad demandada no fundamentó ni motivó en ninguna disposición legal su actuar en el sentido de desestimar la declaración complementaria presentada por

***** ** ***** ** ** *

Que no existe precepto legal alguno en el Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cualquier otra disposición fiscal que le permita a una autoridad fiscalizadora desestimar el valor probatorio de una declaración complementaria, por el simple hecho de que haya sido presentada con un objetivo determinado, específicamente el equiparar la utilidad de una empresa controlada a la de su controladora, siendo que estaba en todo su derecho a corregir su situación a través de la presentación de una declaración complementaria.

En el Apartado D, la actora manifestó que la resolución al recurso de revocación contenida en el oficio número 900 04 05-2015-17797, la autoridad resolutora expone los razonamientos por los cuales a su parecer no es dable valorar la prueba consistente en la declaración complementaria presentada por ***** ** ***** ** ** * siendo que el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación debe ser interpretado tomando en consideración que la empresa controladora y sus controladas constituyen una unidad económica, por lo que no tendrán efectos jurídicos una vez iniciada las facultades de comprobación con la empresa controladora.

Al respecto, en el punto (i), la demandante señaló que la demandada fue hasta la resolución al recurso de revocación que expuso las razones por las cuales no era dable valorar la declaración complementaria presentada por ***** ** ***** ** ** * el 14 de mayo de 2013, interpretando el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación en relación al

régimen consolidado, por lo que mejoró la fundamentación del acto primigenio.

En el punto (ii), la actora sostuvo que aun cuando en su calidad de controladora y ***** como controlada conforman una unidad económica, ello es únicamente para efectos del entero del resultado fiscal consolidado, sin que ello implique confusión de sus derechos y obligaciones, pues subsiste cada una con personalidad jurídica propia.

Que la actora no presentó ninguna declaración complementaria en la que disminuyera utilidad alguna, sino que fue ***** la entidad que presentó la declaración complementaria, quien tenía el derecho para hacerlo pues no estaba sujeta al ejercicio de facultades de comprobación, sino de la demandante.

Así como que es ilegal se haya determinado un crédito fiscal en su calidad de sociedad controladora, no obstante se corrigió la utilidad fiscal de la sociedad controlada ***** situación que fue hecha del conocimiento de la autoridad fiscalizadora con anterioridad a la determinación del crédito fiscal.

QUINTO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN

Finalmente, en el concepto de impugnación de referencia, la actora en el Apartado A, señaló que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en términos de los artículos 14 y 16 Constitucional, así como el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con el fin de que no se viole el principio de seguridad jurídica.

Mientras que en el Apartado B, la accionante señala las causas de por qué la demandada le determinó un crédito fiscal al omitir considerar la determinación del resultado fiscal consolidado la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a la sociedad controlada ***** siendo las siguientes:

a) Que derivado de la revisión efectuada a la sociedad controlada ***** ** ***** ***** ** ***** esta modificó su utilidad fiscal presentando una declaración por corrección fiscal del ejercicio 2006.

b) Que de conformidad con el artículo 72, fracción III vigente en 2006; la actora en su calidad de controladora debió presentar una declaración complementaria de consolidación.

c) Que la autoridad liquidadora no omitió informar a la actora de su derecho a corregir su situación fiscal en términos de la Ley de Derechos del Contribuyente, pues ello le fue informado al momento de iniciar las facultades de comprobación a través de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado vigente.

En el Apartado C, la demandante manifestó que son ilegales las resoluciones recurridas al omitir presentar declaración complementaria de consolidación derivado de la corrección efectuada por su empresa controlada ***** ***** ** *****

Que tanto la resolución impugnada como la originalmente recurrida, le causan inseguridad jurídica al no saber con certeza conforme a qué disposición fundan la supuesta omisión de presentar la declaración complementaria.

Asimismo, que la autoridad al señalar que fundó y motivó debidamente su resolución indicó que lo hizo en términos del artículo 72, fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2010, sin embargo, que debió fundar y motivar su actuación en la Ley vigente en 2006, no así en la de 2010, pues dicha ley no se encontraba vigente al momento de la causación.

Además, que hace del conocimiento de la Sala que se encuentra en proceso de la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006, en donde se reconocen los efectos de la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la presentación de la declaración complementaria de la controlada ***** ** ***** ***** ** *****

En el Aparatado D, argumentó que la autoridad fue omisa en informarle el derecho que tenía para corregir su situación fiscal en contravención con el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, lo que es una obligación para la demandada.

Que el hecho de que la autoridad señale que anexó copia de la carta de derechos del contribuyente, no implica que se subsane la omisión de insertar en la propia resolución su derecho para corregir su situación fiscal.

Finalmente, la actora argumenta que resulta ilegal el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, así como el oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012, toda vez que la autoridad omitió informar a la contribuyente en la solicitud de datos y documentos, el derecho que tenía para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho, en contravención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Dicho argumento fue sintetizado en el Apartado C, inciso c.1) del Considerando Tercero del presente fallo, el cual se señaló sería analizado y resuelto en el Considerando que nos ocupa.

Por su parte, la autoridad demandada al momento de contestar la demanda, sostuvo la legalidad y validez tanto de la resolución impugnada, como de la originalmente recurrida.

A juicio de los Magistrados Integrantes de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, los conceptos de impugnación en estudio resultan por una parte **infundados** y por otra **inoperantes**, por las siguientes consideraciones:

Por principio, cabe precisar que el argumento de la parte actora, en el sentido de que no existe cosa juzgada ni cosa juzgada refleja respecto a la determinación de la utilidad fiscal consolidada al considerar el inventario acumulable de ***** *** ***** **** ** ***** tiene como antecedente lo siguiente:

1.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, el día 21 de noviembre de 2007, el C. ***** representante legal de ***** ahora ***** demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 330-SAT-IV-3- 1-5616/07 de fecha 6 de septiembre de 2007, emitida por el Administrador de Consultas y Autorizaciones "3", de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la cual se resuelve no confirmar el criterio presentado el 20 de diciembre de 2006, por la actora ante la autoridad.

Dicho juicio contencioso administrativo fue del conocimiento de la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, bajo el número de expediente 33900/07-17-05-1.

2.- Por sentencia de fecha 1° de octubre de 2008, la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

3.- Inconforme con lo anterior, el C. ***** autorizado de la actora, interpuso demanda de amparo de la cual conoció el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, bajo el D.A. 131/2009, quien mediante ejecutoria de fecha 24 de septiembre de 2009, resolvió amparar y proteger a la quejosa.

4.- En cumplimiento a la ejecutoria precisada en el punto que antecede la Quinta Sala de referencia dictó sentencia el 13 de octubre de 2009, reconociendo la validez de la resolución señalada en el punto número 1.

5.- Inconforme con la citada resolución de fecha 13 de octubre de 2009, el C. ***** representante legal de la actora, interpuso demanda de amparo, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, bajo el D.A. 347/2010, quien a través de la ejecutoria de fecha 20 de enero de 2011, resolvió amparar y proteger a la quejosa.

6.- En cumplimiento a la ejecutoria precisada en el punto que antecede la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, dictó

sentencia definitiva el 1° de marzo de 2011, reconociendo la validez de la resolución señalada en el punto número 1.

7.- Inconforme con lo anterior, el C. ***** representante legal de la actora, interpuso demanda de amparo, de la cual conoció el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el D.A. 408/2011, quien a través de la ejecutoria de fecha 17 de febrero de 2012, resolvió no amparar ni proteger a la quejosa.

Precisado lo anterior, cabe señalar que en el presente juicio a fin de desvirtuar la legalidad de las resoluciones impugnadas; la parte actora ofreció como pruebas la copia certificada de la sentencia dictada el 1° de marzo de 2011, por la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, al resolver el juicio fiscal 33900/07-17-05-1 y la copia certificada de la ejecutoria dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 17 de febrero de 2012, al resolver el juicio de amparo D.A. 408/2011, mismos que obran de la foja 482 a la 539 de autos y que a la letra señalan lo siguiente:

SENTENCIA DE FECHA 1° DE MARZO DE 2011



QUINTA SALA
METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTORA: [REDACTED]

MAGISTRADO INSTRUCTOR: JULIÁN CASARRUBIAS PÉREZ

SECRETARÍA DE ACUERDOS: CECILIA CÁRDENAS SAGREDO



México, Distrito Federal, a primero de marzo de dos mil once.- **VISTOS** los autos del juicio al rubro citado para resolverlo en definitiva, en sesión de esta fecha, los integrantes de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **JULIÁN CASARRUBIAS PÉREZ**, en su carácter de Presidente de la Sala e instructor en el juicio, **JOSÉ CELESTINO HERRERA GUTIÉRREZ** y **ALFREDO URSÑA HEREDIA**, ante la presencia de la Secretaría de Acuerdos, que actúa y da fe, proceden a dictar sentencia, en estricto cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con fecha 20 de enero de 2011, en el juicio de amparo D.A. 347/2010, número interno DA.- 645/2010; y.

RESULTANDO

Primero.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, el día 21 de noviembre de 2007, el C. [REDACTED] representante legal de [REDACTED] demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 330-SAT-IV-3-1-5616/07, de fecha 6 de septiembre de 2007, emitida por el Administrador de Consultas y Autorizaciones "3", de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la cual se resuelve no confirmar el criterio



20066

señalado en el escrito presentado por la hoy parte actora, de fecha 10 de octubre de 2006.

Segundo.- Con sentencia de 1º de octubre de 2008, esta Sala dictó sentencia reconociendo la validez y resolución de la resolución impugnada, en los siguientes términos.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 49, 50, y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora no probó su pretensión, en consecuencia,

II.- Se reconoce la legalidad y validez de la resolución impugnada en el presente juicio, identificada en el resultando primero de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS DEMANDADAS.

Tercero.- Inconforme con dicha resolución el C. [REDACTED] autorizado por la actora, interpuso demanda de amparo, misma que fue remitida al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, de la cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, y con fecha 24 de septiembre de 2009, dictó ejecutoria en el juicio de amparo D.A. 131/2009, amparando y protegiendo a la quejosa.

Cuarto.- En cumplimiento a dicha ejecutoria, esta Quinta Sala dictó sentencia el 13 de octubre de 2009, reconociendo la validez de la resolución impugnada, en los términos siguientes:



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...3.

I.- LA PARTE ACTORA NO PROBÓ SU ACCIÓN en el presente juicio, en consecuencia,

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo.

III.- Mediante atento oficio que, al efecto, se gire al Decimocuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, remítase copia certificada del presente fallo, en debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo D.A. 131/2009.

IV.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA ACTORA POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA.

Quinto.- Inconforme con dicha resolución el C. [REDACTED] representante legal de la actora, interpuso demanda de amparo, misma que fue remitida al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, de la cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, y con fecha 20 de enero de 2011, dictó ejecutoria en el juicio de amparo D.A. 347/2010, en los siguientes términos:

NOVENO.- ...

Ahora bien, en opinión de los magistrados integrantes de este tribunal auxiliar, la sentencia impugnada adolece de fundamentación y motivación por las razones que se exponen a continuación.

En efecto, como se expuso con antelación, la Sala responsable únicamente se concretó a explicar el contenido de los artículos 10 y 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, así



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 671 -



como el tercero transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el primero de diciembre de dos mil cuatro, además de mencionar las consecuencias de las reformas que el Poder Legislativo hizo en el capítulo "Del costo de lo vendido" de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, dicha autoridad no precisó con exactitud los argumentos que permitan dilucidar que el inventario acumulable de la controlada se deba acumular a la unidad fiscal consolidada o, bien, como un concepto adicional a las utilidades y pérdidas fiscales de las controladas que se consideraran en la determinación del resultado fiscal consolidado.

Es decir, no motivó el porqué la disposición que establece la prohibición de disminuir los inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, o la posibilidad de deducirlos mediante el costo de ventas, siempre y cuando sean acumulados, le resulta aplicable a la quejosa.

Si bien es cierto aseveró que de constancias de autos se advertía que la impetrante del amparo ejerció la opción de acumular la existencia de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, lo cierto es que no detalló la forma en que lo hizo, ni expuso la manera en que tal circunstancia se acreditó, así como tampoco explicó el efecto fiscal que ocasiona el que la inconforme hubiera optado por dicha posibilidad, que establece la legislación aplicable.

Por otra parte, es de señalar que la responsable llega a una conclusión sin precisar cuál es el vínculo entre la deducción de inventarios de las empresas controladas en los pagos provisionales y la deducción de los inventarios



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METRO

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...5

pertenecientes a la unidad controladora; es decir, no abundó en el porqué deben acumularse los inventarios tanto en unas como en otras, a efecto de calcular la utilidad o pérdida fiscal consolidada, según sea el caso.

Es decir, la Sala responsable no ahondó en el análisis de la mecánica de tributación para las personas morales que enteran bajo el régimen de consolidación fiscal, como es el caso de la quejosa, tampoco expuso si la aplicación de los numerales que citó era en forma estricta como lo aseveró la impetrante del amparo.

Igualmente, omitió precisar de qué forma se realizaban los pagos provisionales de tales entidades, no obstante lo hizo valer la inconforme en su demanda de nulidad, pues de manera enfática ésta última refirió que la obligación de acumular los inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, para las empresas sociedades o empresas que tributan en el régimen de consolidación fiscal, es única y exclusiva para el cálculo de los pagos provisionales de dichas entidades, planteamiento éste en el que la responsable debió centrar la litis, al constituir dicha mecánica de tributación el origen de la controversia.

De tal suerte, que, a juicio de los suscritos magistrados, para que la resolución en comento se encuentre fundada y motivada la responsable debe expresar, con precisión, el precepto aplicable al caso y, señalar, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al



Nº 20066

caso de que se trate, desentrañando la mecánica y forma de tributar de las entidades sujetas a dicho régimen, de conformidad con los preceptos exactamente aplicables al caso.

Estudio que implica acudir a la exposición de motivos a efectos de dilucidar cuál fue la intención del legislador al establecer la reforma del capítulo correspondiente al costo de lo vendido y su injerencia en las personas que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal.

Lo anterior, ya que este órgano jurisdiccional no puede sustituirse en las facultades reservadas exclusivamente a la sala fiscal responsable, pues, lo contrario, implicaría emprender un estudio con base en cuestiones que no fueron materia de análisis en el juicio de nulidad de origen.

En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia impugnada en el presente juicio de amparo, y tomando en consideración los lineamientos plasmados en la presente ejecutoria, emita otra debidamente fundada y motivada.

Sin que sea óbice a la anterior determinación la existencia de un juicio de amparo primigenio en el que se le concedió a la quejosa la protección constitucional solicitada en contra de una diversa sentencia dictada por la propio Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad que se revisa; toda vez que dicha concesión, como se expuso en el considerando sexto de esta ejecutoria, tuvo el efecto de que la responsable "responda de manera congruente y exhaustiva los conceptos de impugnación planteados por la persona moral quejosa en la demanda de nulidad que dio origen al juicio natural, de manera destacada, en la parte relativa en que se



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...7

argumenta no existe disposición expresa en la ley que establezca que el inventario acumulable de una empresa controladora se daba acumular a la utilidad fiscal consolidada como un concepto adicional a las utilidades y pérdidas fiscales de las controladas que se consideran para la determinación del resultado fiscal consolidado. . . "esto es, el anterior amparo se otorgó por omisión de análisis y en el presente se tiene como efecto el que la responsable fundamente y motive adecuadamente la sentencia impugnada, de tal manera que no le deje en estado de indefensión a la parte quejosa.

Virtud de la conclusión alcanzada, al resultar fundado el argumento antes analizado, y siendo suficiente para conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso, resulta innecesario el estudio de las demás cuestiones planteadas, pues el efecto de la concesión en el presente juicio de garantías motivará un diverso análisis de la controversia planteada.

Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1992, Materia común, Tesis VI. 2º. J/170, página 99, cuyo rubro y texto dice a la letra:

"CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO.- HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMAS.- Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 673 -



hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto de estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción.

Por último, en relación con el escrito de alegatos presentado por la parte quejosa, el cinco de agosto ante el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se determina que no es el caso de entrar al estudio de las manifestaciones ahí vertidas, al no formar dichos alegatos parte de la litis del juicio de amparo directo, en tanto que ésta se integra con la sentencia reclamada, las constancias que forman el expediente en la que se dictó y el informe justificado rendido por la Sala responsable, por que los alegatos no tienen la fuerza procesal que la propia ley de amparo le reconoce a la demanda de amparo y al informe con justificación.

Apoya lo expuesto, por su contenido sustancial, la tesis de jurisprudencia P./J.27194, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época de rubro

"ALEGATOS, NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.- (se transcribe)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a [REDACTED] por conducto de su representante legal, [REDACTED] en contra de la sentencia de [REDACTED]



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...9

trece de octubre de dos mil nueve, dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio 33900/07-17-05-1, en los términos precisados en la presente ejecutoria.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- En atención a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, se procede a cumplimentarla, dejando sin efectos la sentencia emitida por esta Sala el 13 de octubre de 2009, y a emitir un nuevo fallo en los siguientes términos.

SEGUNDO.- Antes de entrar al estudio y resolución de los conceptos de impugnación que vierte la actora, ésta Sala analiza, en primer término, por ser de orden público, la incompetencia que hace valer la parte actora en su cuarto y último conceptos de anulación.

Refiere la enjuiciante que la resolución contenida en el oficio con número de folio 330-SAT-IV-3-1-5616/07, emitida por el Administrador de Consultas y Autorizaciones "3", de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le causa agravio, al encontrarse indebidamente fundada y motivada, en virtud de que fue dictada en contravención a los artículos 5 y 38 del Código Fiscal de la Federación, así como los



Nº 20066

los 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, ya que del contenido de los preceptos legales invocados por la autoridad demandada en el citado acto, no se desprende de forma indubitable la competencia material, ni territorial, de la autoridad emisora, así como tampoco se desprende de tales preceptos su existencia jurídica, lo que se traduce en que tales actuaciones fueron emitidas por autoridad carente de competencia e, incluso, inexistente.

Continúa argumentando la parte actora que un acto de molestia, como lo es en el presente caso la notificación de una resolución determinante de un crédito fiscal, presupone que en las propias constancias de notificación se debió establecer el artículo y fracción del ordenamiento legal que facultaba el ejercicio de la facultad, circunstancia que, en la especie, no sucedió.

Al efecto, la autoridad demandada sostuvo la validez y legalidad de su resolución, en atención a los siguientes argumentos:

1) Señala la autoridad demandada que, en la resolución impugnada, sí se citan por el entonces Administrador de Consultas y Autorizaciones "3" de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, los preceptos legales que fundamentan su competencia material y territorial, para emitir el acto combatido, por lo que en ningún momento se transgredió lo dispuesto por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...11



20066

Ello es así, señala la autoridad demandada, toda vez que en la resolución impugnada se hace referencia a los preceptos legales siguientes, los cuales se encontraban vigentes al momento de la emisión de la resolución impugnada: 19, Apartado A, fracción LIV, y Apartado B, fracción IX, así como 20, Apartado L, fracción II, en relación con el artículo 9, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la federación, de 06 de junio de 2005; así como el artículo segundo, primer párrafo, del Acuerdo por el que se señala en nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas, del Servicio de Administración Tributaria, que contemplan la competencia material y territorio del Administrador de Consultas y Autorizaciones "3", de la Administración Jurídica de Grandes Contribuyentes, que firma la resolución impugnada.

Resulta infundado el presente concepto de impugnación planteado por la actora, en atención a las siguientes consideraciones.

Del análisis que realiza esta juzgadora a la resolución impugnada, que obra a fojas 83 a 95, advierte que ésta, fue emitida con estricto apego a derecho, toda vez que, de su lectura, se desprende que la autoridad que la emitió citó los preceptos legales que le otorgan la competencia



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 675 -



Nº 20066

territorial para resolver la confirmación del criterio por la actora.

Lo anterior es así, ya que, en la foja 12 de la resolución impugnada, se observa la cita de los artículos 17 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 7 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 19, Apartado A, fracción LIV, y Apartado B, fracción IX, así como 20, Apartado L, fracción II, en relación con el artículo 9, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación de 06 de junio de 2005, así como el artículo segundo, primer párrafo, del Acuerdo por el que se señala en nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas, del Servicio de Administración Tributaria.

A efecto de brindar claridad, resulta conveniente transcribir los artículos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que en la parte conducente señalan lo siguiente:

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
Diario Oficial de la Federación, 06 de junio de 2005

"Artículo 9.- Los Administradores Generales y el titular de la Unidad de Plan Estratégico y Mejora Continua, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

(...)
Las unidades de Plan Estratégico y Mejora Continua y de Programas Especiales, las Administraciones Generales y las Administraciones Centrales que de ellas dependan, así como las Coordinaciones y las Administraciones que



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...13

dependan de éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, excepto la Administración Central de Capacitación Fiscal, las Administraciones para el Destino de Bienes, las Administraciones de Servicios y Subadministraciones de los Centros de Servicios Administrativos, así como la Administración Central de Servicios Institucionales, cuyas sedes podrán ubicarse fuera de la Ciudad de México.

Las unidades administrativas regionales tendrán la sede que se establezca en el artículo 37 de este Reglamento y ejercerán su competencia dentro de la circunscripción territorial que al efecto se determine en acuerdo correspondiente, con excepción de la facultad de notificar, la cual podrán ejercer en todo el territorio nacional. Asimismo, dichas unidades podrán solicitar a otras unidades con circunscripción territorial distinta, iniciar, continuar o concluir cualquier procedimiento y, en su caso, realizar los actos jurídicos correspondientes."

"Artículo 19.- Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

A. Competencia:
(...)

LIV.- Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras en las materias de su competencia, así



20066

como las solicitudes respecto a las autorizaciones previstas en dichas disposiciones.

(...)

B. Sujetos y entidades:

IX.- Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado como controladoras, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta."

"Artículo 20.- Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las facultades que a continuación se precisan:

(...)

L. Administraciones de Consultas y Autorizaciones "1", "2", "3" y "4":

(...)

II.- Las señaladas en el apartado A, fracciones XI, XIV, XXXV, XLIV, LIV y LXXXVIII del artículo anterior de este Reglamento.

Las facultades a que se refiere este apartado serán ejercidas cuando se trate de los sujetos señalados en el apartado B, fracciones I a XII del artículo anterior de este Reglamento, así como sus responsables solidarios."

Acuerdo por el que se señala el Nombre, Sede y Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria.

"Artículo Segundo. La Administración General de Grandes Contribuyentes y sus unidades centrales, tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR:

...15

Federal, y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional.
(...)"

No pasa desapercibido para esta juzgadora el argumento de la actora, en relación a la falta de fundamentación de la notificación por medio de la cual se le dio a conocer a la parte actora la resolución contenida en el oficio con número de folio 330-SAT-IV-3-1-5616/07, emitida por el Administrador de Consultas y Autorizaciones "3", de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Este cuerpo colegiado considera infundado e inoperante el anterior argumento, toda vez que la cédula de notificación constituye, únicamente, un acto material de la autoridad, tendiente a hacer conocer al gobernado el acto de la autoridad que, en realidad, le podría deparar perjuicio, como lo es, en la especie, el oficio 330-SAT-IV-3-1-5616/07, antes mencionado.

No obstante lo anterior, dicha cédula de notificación debe de cumplir con los requisitos de estar debidamente circunstanciada; hacer constar que previamente se dejó citatorio al representante legal; que el notificador se cercioró del domicilio; así como de que requirió al representante legal para efectuar la diligencia; y en caso de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 677 -



le encuentre, identificación de la persona con
entendió la diligencia, requisitos que, en la especie,
debidamente cumplidos, como se puede apreciar
de la estructura del acta de notificación que obra en autos a foja

Por lo anteriormente expuesto, esta juzgadora
considera infundado su cuarto y último concepto de
impugnación del escrito de demanda de la actora, por lo que
se reconoce en cuanto a este punto, la validez de la
resolución impugnada.

TERCERO.- En primer término, debe precisarse
que la litis se construye a determinar la legalidad de la
resolución contenida en el oficio número 330-SAT-IV-3-1-
5616/07, de fecha 6 de septiembre de 2007, emitida por el
Administrador de Consultas y Autorizaciones "3", de la
Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes,
del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a través de la cual se resuelve
no confirmar el criterio sostenido en el escrito presentado por
la hoy parte actora, de fecha 20 de diciembre de 2006.

Aduce la parte actora en sus conceptos de
anulación marcados como primero, segundo y tercero, los
cuales se estudian de manera conjunta al estar
estrechamente relacionados, esencialmente, lo siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...17

Que la resolución que se combate resulta ilegal, al
encontrarse indebidamente fundada y motivada, al haberse
apreciado e interpretado de manera errónea las disposiciones
legales efectivamente aplicables.

Señala que lo anterior es así, ya que la resolución
impugnada resulta violatoria de los artículos 68 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, así como el 38 del Código Fiscal de
la Federación, en virtud de que la autoridad demandada se
limitó únicamente a sintetizar lo señalado en los artículos que
establecen el cálculo del resultado fiscal consolidado, el
fundamento legal en el que se establecía el cálculo de los
pagos provisionales, así como la disposición transitoria en
que se prevé la acumulación de inventarios para el cálculo
del impuesto sobre la renta del ejercicio de los pagos
provisionales, por cuanto hace a las empresas que optaron
por acumular dichos inventarios.

Continúa argumentando la actora que el criterio
que solicitó le fuera confirmado por la autoridad, radica,
esencialmente, en que, para efecto del cálculo e integración
de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, en términos de lo
dispuesto por la fracción I, inciso a), del artículo 68 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, únicamente deberá tomarse en
consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las
controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida



Nº 20066

que, para tales efectos, pueda considerarse dentro de los conceptos el inventario -acumulable de las sociedades.

En el mismo sentido, señala la actora que, la autoridad, de manera alguna, analizó de manera exhaustiva la problemática que le fue planteada a través de la confirmación de criterio, puesto que la mecánica a seguir para el cálculo de los pagos provisionales por parte de las empresas que consolidan resulta clara a la luz de las disposiciones fiscales, y la obligación de acumular el inventario al 31 de diciembre de 2004, en términos de las disposiciones transitorias de las modificaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del 2005, que así lo prevén, pero no así para el régimen de la consolidación fiscal y la determinación de la utilidad fiscal o pérdida fiscal.

Adicionalmente dice la actora, que la autoridad pretende que para efectos del cálculo de su resultado fiscal o pérdida fiscal consolidados (según se trate) considere el inventario acumulable así considerado por las empresas controladas para efectos de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, sin considerar que dicha mecánica resulta diversa a la que se debe realizar para efectos de la pérdida o resultado fiscal consolidado, y pasando desapercibido, que las empresas controladas deben de realizar dicho cálculo como si no existiese consolidación, y más aún, que para el resultado o pérdida fiscal en comento, la empresa controladora necesariamente debe acogerse al régimen de consolidación fiscal, concretamente a lo



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...19

establecido en el artículo 68, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde la acumulación de inventarios no se encuentra prevista, con lo que, a su vez, pretende sujetar a la hoy actora a una modalidad dentro del régimen especial de la consolidación fiscal no prevista en las disposiciones legales aplicables creadas por el legislador.

En este sentido, señala la actora, que ella se encuentra sujeta a un régimen especial de tributación, contenido en el Capítulo VI, del Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominado Régimen de Consolidación Fiscal, régimen bajo el cual tributan la empresa actora y sus controladas.

Así, en dicho régimen el legislador da un tratamiento fiscal especial a los contribuyentes que deciden reestructurar corporativamente las operaciones que realizan, mediante la creación de un grupo de empresas en lugar de sólo crear subdivisiones internas en la misma empresa, estableciendo la posibilidad de que las empresas que se encuentran agrupadas en un mismo grupo de intereses económicos, puedan determinar su resultado fiscal en forma conjunta (consolidada), como si se tratara de un solo ente jurídico.

Continúa señalando la actora que para la creación o establecimiento de un régimen particular o

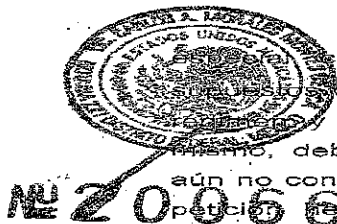


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 679 -



Como es el régimen de consolidación fiscal, los de autorización, las características especiales del del contribuyente que se encontrará afecto al mismo, deben necesariamente contemplarse en ley y mas aún no controvertirla, a fin de que la autoridad, al analizar la petición hecha por el contribuyente, pueda corroborar de manera legal, si los supuestos para la creación o autorización de un régimen particular o especial se configuran y respecto de los contribuyentes a los que se encuentra dirigido dicho régimen.

Adicionalmente señala la actora, que la norma fiscal que se le pretende aplicar no contiene todos los elementos necesarios para definir la obligación tributaria, específicamente, en lo que hace a las condiciones de aplicación de la norma; sin que sea legal, ni constitucionalmente válido, el que la autoridad fiscal introduzca en la mecánica de cálculo antes comentada elementos extranormativos —como lo es la acumulación de inventarios por parte de las empresas controladas realizada para el cálculo de sus pagos provisionales—, pues, de ser así, se estaría generando una determinación en su forma de tributación, la cual no se encontraría comprendida en la norma emitida formalmente por el órgano legislativo.

Por las razones esgrimidas, concluye la actora, que resulta procedente que se declare la nulidad de la resolución impugnada, a efecto de determinar como legal el criterio planteado en su consulta, en los sentidos siguientes:



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...21

1) Para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, en los términos de lo dispuesto por la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente debe de tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que, para tales efectos, pueda considerarse dentro de dichos conceptos el inventario acumulable de las consolidadas;

2) No existe disposición expresa en la ley que establezca que el inventario acumulable de la controlada se deba de acumular a la utilidad fiscal consolidada o, bien, como un concepto adicional a las utilidades y pérdidas fiscales de las controladas que se consideran en la determinación del resultado fiscal consolidado.

A este respecto, la autoridad demandada sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada, con base en los siguientes argumentos:

Señala la autoridad que, en principio, al haber cambiado a partir del 1º de diciembre de 2005, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1º de diciembre de 2004, el sistema de deducción de adquisición de mercancías, sustituyéndose por el sistema de deducción



de lo vendido, la hoy parte actora se encontraría para deducir mediante el nuevo sistema los inventarios existentes al 31 de diciembre del 2004, toda vez que, al momento de ser adquiridos, fueron deducidos mediante el sistema anterior.

Sin embargo, como un supuesto excepcional, el legislador, mediante la fracción IV del artículo tercero transitorio, del decreto de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de diciembre de 2004, otorga a los contribuyentes la posibilidad considerar los inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004, dentro de la determinación del costo de lo vendido para el ejercicio 2005 y siguientes, ello bajo la condición de que el referido inventario se acumule, a efecto de determinar su utilidad o pérdida fiscal.

Concluye la autoridad que respecto de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, hay que destacar que a partir del ejercicio 2005, la obligación de los contribuyentes es, como regla general, determinar el costo de lo vendido, sin poder deducir las mercancías que formaban parte del inventario al 31 de diciembre de 2004.

Empero, si por voluntad propia los contribuyentes deciden ejercer la opción prevista en la referida disposición transitoria, consistente en deducir las mercancías enajenadas relativas al inventario que tenían al 31 de diciembre de 2004, resulta entonces que tienen la ineludible obligación de



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...23

cumplir con los requisitos que se establecen a efecto de poder ejercer tal opción.

Señala la autoridad que ello es así, en virtud de que, en principio, los contribuyentes no se encuentran obligados a ejercer la opción, sin embargo, si, aún conociendo las obligaciones y/o requisitos que son necesarios para ejercerla, deciden por voluntad propia acogerse a ella, entonces tienen que cumplir con tales obligaciones y/o requisitos que, en este caso, consiste en la acumulación de las existencias en inventario al 31 de diciembre de 2004.

En el mismo sentido, señala la autoridad demandada que si la hoy actora, o cualquier otro contribuyente, opta por ejercer la opción contenida en el artículo tercero transitorio, fracción IV, del decreto citado, es por que, en principio, le reporta un beneficio.

De esta forma, las sociedades controladas que refiere la actora, tenían la obligación de acumular las existencias en inventario que tuvieran al 31 de diciembre de 2004, sin embargo, cuando decidieron ejercer la opción prevista en la fracción IV, del artículo tercero transitorio del decreto, ello tiene como consecuencia inmediata que la obligación contenida en tal disposición adquiera relevancia



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 681 -



№ 20066

...era jurídica, no por prescripción imperativa del
...si no porque, sus controladas decidieron, de *mutuo*
...referir la referida opción.

este sentido, al momento en que se determina
el porcentaje que a nivel consolidado debe fluir al régimen de
consolidación, no cabe duda que será afectado por la opción
de acumulación de los inventarios, que las sociedades
controladas de la demandante ejercieron en su momento, ya
que, de lo contrario, se estaría reconociendo únicamente la
doble deducción (autorizada mediante la fracción IV, del
artículo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley del
Impuesto sobre la Renta), pero no se reconocería el efecto
de reversión, es decir, el acumular la existencia en
inventarios que tenían al 31 de diciembre de 2004.

Señala la autoridad demandada que en lo que se
refiere a los artículos 10 y 68 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, no prevén de forma expresa que para la
determinación del impuesto consolidado, la controladora
deba incluir en la base de la consolidación el inventario
acumulable, dicha inclusión deriva de la aplicación voluntaria
que realizan las empresas al optar por deducir sus
inventarios que tenían al 31 de diciembre de 2004, conforme
al nuevo sistema de deducción del costo de lo vendido, en
términos de las fracciones IV y V del artículo tercero
transitorio para 2005.



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...25

Así las cosas, si las empresas que forman parte del
régimen de consolidación (controladas y controladora) optan
por aplicar lo previsto en las fracciones IV y V del artículo
tercero transitorio para 2005, deberán determinar en lo
individual su utilidad o pérdida considerando los efectos del
inventario acumulable y, por ello, al margen de que el artículo
68 prevea o no la inclusión del concepto inventario
acumulable o si dicho concepto tiene o no la naturaleza de
ingreso acumulable, la empresa controladora se encuentra
obligada a considerar el efecto del inventario acumulable en
la determinación del impuesto consolidado del ejercicio, ello
al momento de considerar en la participación consolidable los
montos de las utilidades o pérdidas que se reporten en el
grupo.

Concluye la autoridad que, contrario a lo aducido
por la actora, la resolución impugnada sí se fundamentó y
motivó debidamente, pues la autoridad señaló que, en
términos de lo establecido en la fracción V, del artículo
tercero transitorio antes citado, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la
sociedad controladora, para determinar su resultado fiscal
consolidado o pérdida fiscal consolidada, debe considerar,
entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus
controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en participación
consolidable y restará, entre otros, las pérdidas fiscales del



Nº 20066

de sus controladas y su propia pérdida fiscal, ambas en la proporción señalada.

En atención a los anteriores argumentos, la autoridad demandada concluyó que no resulta procedente confirmar el criterio sostenido por [REDACTED] en el sentido de que, para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, únicamente deberá tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que, para tales efectos, pueda considerarse dentro de dichos conceptos, el inventario acumulable de las consolidadas.

Ello, tomando en consideración lo siguiente:

- 1) En primer lugar, el penúltimo párrafo del artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que "Las sociedades controladoras y las sociedades controladas que consoliden, estarán a lo dispuesto en las demás disposiciones de esta ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en este Capítulo".
- 2) En segundo término, los tres primeros incisos de la fracción I, del artículo 68, señalan, en la parte conducente, el procedimiento conforme al cual las empresas controladoras, que se encuentran sujetas al



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...27

régimen de consolidación fiscal, deben determinar su resultado fiscal:

"Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se



33900



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 683 -



20066

podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso."

En este sentido, la sociedad controladora sumará o restará las utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades controladas, así como la propia, determinadas en términos de lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a las demás disposiciones de la ley que resulten aplicables.

- 4) Siendo así que, las sociedades controladas, así como la controladora, determinarán en lo individual, las utilidades o pérdidas fiscales que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la ley, mismo que señala lo siguiente:

"Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%.

Segundo párrafo (Se deroga).

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título. Al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...29

200029

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.

Las personas morales que realicen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley."

- 5) De esta forma, tanto las sociedades controladas, como la sociedad controladora, determinarán su utilidad o pérdida fiscal, disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas en el respectivo Título II.
- 6) Ahora bien, en la Sección I, del Capítulo II, del Título II, el artículo 29, cuya reforma entró en vigor a partir del 1 de enero de 2005, establece que "Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: II. El costo de ventas", por lo que, tanto las empresas controladas, como la controladora, deberán determinar su utilidad o pérdida fiscal disminuyendo del total de ingresos acumulables en el ejercicio, las deducciones autorizadas conforme al Título II, que en el capítulo respectivo señala, entre otras, el costo de ventas.



20066

En embargo, como ya se ha establecido, al entrar en vigor la reforma al artículo 29, fracción II, se establece en las fracciones IV y V, del artículo tercero transitorio, del decreto de reformas al que ya se ha hecho referencia, un sistema o régimen de transición en el cual se señala que "Los contribuyentes, para determinar el costo de lo vendido, no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004".

- 8) No obstante lo anterior, la propia disposición establece una opción, por virtud de la cual los contribuyentes que tengan existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, los podrán deducir mediante el costo de lo vendido conforme enajenen las mercancías, siempre y cuando acumulen los inventarios a que se refiere dicha fracción, conforme a lo establecido en la fracción V, del propio artículo tercero transitorio.

Conforme a los puntos precisados, esta juzgadora considera que, efectivamente, como lo estableció la autoridad demandada, en la resolución impugnada, resulta aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, de conformidad con los artículos 10, y



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...31

29, fracción I, del Capítulo II, Sección III, del Título II, denominado "Del costo de lo vendido" que comprende los artículos 45-A a 45-I, 64 y 68, así como las fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2005.

Así, este órgano jurisdiccional estima infundados los argumentos que vierte la actora.

La naturaleza jurídica del régimen de consolidación fiscal, como en el caso de la actora, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a determinados grupos de empresas con intereses económicos comunes, que al reunir ciertas características y cumplir con los requisitos establecidos en la ley, son consideradas como una unidad económica, lo que les permite, bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aún cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales. Entre sus principales características se encuentran las de reunir las utilidades y pérdidas de una entidad o unidad económica, integrada por la compañía controladora y sus controladas, como si se tratara de una sola empresa, para que sobre este resultado se pague el impuesto, así como la de permitir que las pérdidas generadas por una sociedad del grupo que consolida sean amortizadas contra las utilidades



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 685 -



Nº 20066

...terceras de otras sociedades del mismo grupo,
...dependientemente de que la controlada que hubiera
...habiendo la pérdida todavía no tuviese la posibilidad de
...plicaría en lo individual.

Sentado lo anterior, del análisis que realizó este
cuerpo colegiado a la resolución impugnada, que obra en
autos a fojas 83 a 95, considera que ésta fue emitida con
estricto apego a derecho.

La presente controversia deriva de la reforma
efectuada, entre otros, al artículo 29, fracción II, y la adición
del Capítulo II, Sección III, del Título II, denominado "Del
costo de lo vendido" que comprende los artículos 45-A a 45-I
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada mediante
decreto en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 1 de
diciembre de 2004, misma que establece el tránsito de un
régimen en el que se permitía a los contribuyentes la
deducción de las adquisiciones de mercancías, así como de
materias primas, productos semiterminados, o terminados, a
un régimen de deducción del costo de lo vendido.

Como consecuencia de dicha reforma se
estableció, mediante disposiciones transitorias, un régimen
de transición para los contribuyentes que, al 31 de diciembre
del 2004, mantuvieran existencias de inventario que, de
conformidad con el nuevo régimen, no podrían ser deducidas,
ya que dicho inventario se habría deducido conforme a las
disposiciones vigentes al 31 de diciembre de 2004, es decir,
al momento de su adquisición.



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...33



2016/05/14

Dicho régimen de transición establece que, como
regla general, los contribuyentes que conserven existencias
de inventario, al 31 de diciembre de 2004, no podrán
deducirlas mediante el sistema de costo de lo vendido; sin
embargo, se prevé la posibilidad de deducir dicho inventario
mediante el costo de ventas conforme se enajenen las
mercancías, con la condición de que se acumule para
determinar el resultado del ejercicio, de conformidad con las
fracciones IV y V, del artículo tercero transitorio, del Decreto
que reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del 1
de enero de 2005.

Para mayor claridad, es conveniente transcribir el
contenido de la disposición transitoria que hemos venido
analizando:

DECRETO por el que se reforman, adicionan,
derogan y establecen diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la
Ley del Impuesto al Activo y establece los
Subsidios para el Empleo y para la Nivelación
del Ingreso.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 1º de diciembre de 2004

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA



ARTÍCULO TERCERO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

...
IV. Los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán optar por acumular los inventarios a que se refiere esta fracción, conforme a lo establecido en la siguiente fracción, en cuyo caso podrán deducir el costo de lo vendido conforme enajenen las mercancías. Cuando los contribuyentes no opten por acumular los inventarios considerarán que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha.

...
TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2005, con excepción de lo dispuesto en los Artículos Quinto y Sexto de este Decreto que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2006.

Cabe agregar, como lo refiere la autoridad, que, al haber cambiado a partir del 1º de enero de 2005, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1º de diciembre de 2004, el sistema de deducción de adquisición de mercancías, sustituyéndose por el sistema de deducción del costo de lo vendido, la hoy actora se encontraría impedida para deducir mediante el nuevo sistema los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, debido a que, al momento de ser adquiridos, fueron deducidos mediante el sistema anterior, de ahí la prohibición de disminuir los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004.

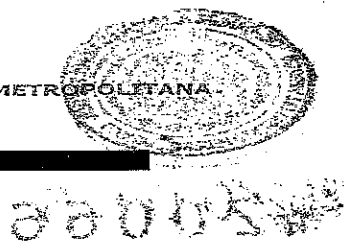


QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...35



Sin embargo, se da la opción a los contribuyentes, como supuesto excepcional, a través de la fracción IV, del artículo tercero transitorio, transcrito, de considerar los inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004, dentro de la determinación del costo de lo vendido para el ejercicio de 2005 y siguientes, bajo la condición de que el referido inventario se acumule, a efecto de determinar su utilidad o pérdida fiscal.

Ahora bien, debemos precisar que la disposición que prohíbe la disminución de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, o la opción de deducir dichos inventarios mediante el costo de ventas, conforme se enajenen las mercancías, siempre que también los acumulen si resulta aplicable a los contribuyentes que tributen conforme al Régimen de Consolidación Fiscal, contenido en el Capítulo VI, del Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, le es aplicable a la quejosa, al tributar conforme al régimen de consolidación fiscal.

De esta forma, resulta igualmente aplicable a la hoy actora lo señalado en el párrafo anterior, toda vez que, al estar sujeta al régimen de consolidación fiscal, y como se ha advertido de las constancias que obran en autos, dichas sociedades (algunas de las controladas) ejercieron la opción de acumular la existencia de inventarios al 31 de diciembre



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 687 -



W/20068

para estar en posibilidad de deducir dicho inventario el costo de lo vendido conforme se enajenen las acciones, reconocimiento tácito que hace la demandada a fojas 3 penúltimo párrafo, del escrito de confirmación de criterio, que obra a fojas 98 a 105 del expediente que nos ocupa, sin que se detalle la forma en que lo realizó.

Lo anterior es así, debido a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el penúltimo párrafo del artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que "Las sociedades controladoras y las sociedades controladas que consoliden, estarán a lo dispuesto en las demás disposiciones de esta Ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en este Capítulo".

En segundo término, los tres primeros incisos de la fracción I, del artículo 68, señalan, en la parte conducente, el procedimiento conforme al cual las empresas controladoras, que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, deben determinar su resultado fiscal:

"Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...37

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso."

En este sentido, la sociedad controladora, para determinar su resultado fiscal consolidado, debe sumar o restar las utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades controladas, así como la propia, determinadas en términos de lo señalado en el penúltimo



Nº 20066

del artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta conforme a las demás disposiciones de la ley que resulten aplicables, en virtud de que la sociedad controladora constituye el sujeto pasivo del impuesto generado sobre el resultado fiscal consolidado.

Lo anterior no obstante que, las sociedades controladas, así como la controladora, determinen en lo individual, las utilidades o pérdidas fiscales que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la ley, mismo que señala lo siguiente:

"Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%.

...
El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título. Al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...39

Las personas morales que realicen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley."

En la inteligencia de que dentro de las relaciones jurídicas derivadas del consentimiento y de la autorización para consolidar está el derecho que tiene la controladora para exigir de las controladas la entrega de un monto igual a los pagos provisionales y al impuesto del ejercicio que hubieran causado, en la proporción en que su utilidad o pérdida fiscal esté consolidada, con la finalidad de proveerle de recursos para cubrir los pagos provisionales y el impuesto generado.

Ahora bien, del precepto transcrito se colige que, tanto las sociedades controladas como la sociedad controladora, determinan su utilidad o pérdida fiscal disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas en el respectivo Título II.

De ahí la obligación de la controladora de tomar en consideración, para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada no sólo las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas, sino también el inventario acumulable de las consolidadas, pues dicha



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 689 -



Se deviene de su consentimiento y de la autorización de la actora para que se le permita exigir de las controladas la entrega de los inventarios acumulables, al igual a los pagos provisionales y al impuesto del IVA que hubieren causado, en la proporción en que su utilidad o pérdida fiscal esté consolidada, en la que se incluye el inventario acumulable de las consolidadas, como un concepto adicional a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas que se consideran en la determinación del resultado fiscal consolidado.

Por tanto, la deducción de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, al ser enajenadas no forman parte de la deducción, mediante el costo de lo vendido, se insiste, porque fueron deducidas al momento de la adquisición de las mercancías, por ende, la enajenación de dicho inventario representará solamente un ingreso acumulable.

De tal suerte que resulta inexacto, como lo pretende la actora, que para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, deban tomarse en cuenta únicamente las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que, para tal efecto, se considere el inventario acumulable de las consolidadas.

Lo anterior se insiste, al haber autorizado la consolidación fiscal, es obvio que debe determinar su utilidad o pérdida fiscal disminuyendo de la totalidad de



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...41

ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas en el respectivo Título II.

Luego entonces, es obvio que el inventario acumulable constituye un ingreso, es decir, una utilidad fiscal, y, en esa virtud, se está obligado a acumular los inventarios, como si fueran ingresos, pues es la única forma en que se puede revertir el efecto de la deducción y así evitar la doble deducción.

De tal suerte que, la sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada, debe considerar, entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, por ende, debe considerar dentro de dichos conceptos, el inventario acumulable de las consolidadas.

Así, de confirmar el criterio de la actora, el efecto fiscal sería que, en los ejercicios 2005 y siguientes, efectúe la deducción bajo el sistema de costo de lo vendido, de los inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004, pero sin cumplir con el requisito establecido (acumular el inventario correspondiente) para poder acceder a la deducción de dichos inventarios.



Nº 20066

Además, la controladora debe incluir en la base de consolidación el inventario acumulable, por la propia aplicación voluntaria que realizó al optar por deducir sus inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004, conforme al nuevo sistema de deducción del costo de lo vendido en términos de las fracciones IV y V, del artículo Tercero Transitorio para 2005.

Ahora bien, en la Sección I, del Capítulo II, del Título II, el artículo 29, cuya reforma entró en vigor a partir del 1 de enero de 2005, establece que "Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: II. El costo de ventas", por lo que, tanto las empresas controladas, como la controladora, deberán determinar su utilidad o pérdida fiscal disminuyendo del total de ingresos acumulables en el ejercicio, las deducciones autorizadas conforme al Título II, que en el capítulo respectivo señala, entre otras, al costo de ventas.

Sin embargo, como ya se ha establecido, al entrar en vigor la reforma al artículo 29, fracción II, se establece en las fracciones IV y V, del artículo tercero transitorio del decreto de reformas al que ya se ha hecho referencia, un sistema o régimen de transición, en el cual se señala que "Los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004", en efecto, dicho numeral señala:



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...43



8800539

Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

...

II. El costo de lo vendido.

ARTÍCULO TERCERO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

...

IV. Los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán optar por acumular los inventarios a que se refiere esta fracción, conforme a lo establecido en la siguiente fracción, en cuyo caso podrán deducir el costo de lo vendido conforme enajenen las mercancías. Cuando los contribuyentes no opten por acumular los inventarios considerarán que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha.

V. Los contribuyentes al 31 de diciembre de 2004, deberán determinar el inventario base considerando el valor de los inventarios que tengan a dicha fecha, utilizando el método de primeras entradas primeras salidas.

...

No obstante lo anterior, la propia disposición establece una opción, por virtud de la cual los contribuyentes que tengan existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, los podrán deducir mediante el



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 691 -



Nº 20066

lo vendido conforme enajenen las mercancías, cuando acumulen los inventarios a que se refiere dicha fracción, conforme a lo establecido en la fracción V, del propio artículo tercero transitorio.

Disposición que, se insiste, la controladora optó por aplicar voluntariamente en su beneficio, por ende, sí está obligada a incluir en la base de la consolidación el inventario acumulable, para poder acceder a la deducción de inventarios.

Conforme a lo antes precisado, se estima por esta juzgadora que, tal y como lo estableció la autoridad demandada en la resolución impugnada, resulta aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, de conformidad con los artículos 10, y 29, fracción I, del Capítulo II, Sección III, del Título II, denominado "Del costo de lo vendido" que comprende los artículos 45-A a 45-I, 64 y 68, así como las fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2005, de ahí que resulte inexacto, como lo refiere el ocurrente, que no exista disposición expresa que establezca que el inventario acumulable de una controlada se deba acumular a la utilidad fiscal consolidada.



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...45



[REDACTED]

De, donde resulta fundada la negativa de confirmar el criterio de la actora en el sentido de que, para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, en los términos del artículo 68, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente deba tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que, para tales efectos, pueda considerarse dentro de dichos conceptos el inventario acumulable de las consolidadas, como ya se indicó con antelación, dicho cálculo no se ajusta a la ley.

No pasa inadvertido para esta juzgadora que si bien no se prevé en forma expresa que para la determinación del impuesto consolidado, la controladora deba incluir en la base de la consolidación el inventario acumulable, dicha inclusión deriva de la aplicación voluntaria que realizó al optar por deducir sus inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004, como ya se mencionó, conforme al nuevo sistema de deducción del costo de lo vendido, en términos de las fracciones IV y V, del artículo Tercero Transitorio para 2005.



NO 20066

No es óbice para lo anterior, el hecho que refiere el sentido de que el procedimiento general a seguir en el caso del cálculo de los pagos provisionales de las empresas controladas en el régimen de consolidación fiscal, se deben calcular de manera individual como si no existiera consolidación, pues no obstante que, como lo reconoce la actora, a fojas 3, penúltimo párrafo, de su escrito de demanda, las controladas reflejaron el inventario acumulable para el cálculo de los pagos provisionales del ejercicio de manera individual, ello no implica que no se deban de tomar en consideración al momento del cálculo del pago o entero anual, pues, como lo reconoce a fojas 35 del escrito de demanda, también los pagos provisionales deben ajustarse al final del ejercicio, cuando se realice el pago definitivo del tributo, ello debido a la propia consolidación fiscal, de ahí que sí se encuentra obligada a considerar los inventarios acumulables por sus controladas para efectos del cálculo de su resultado fiscal o pérdida fiscal consolidados.

Por otro lado, es cierto que las normas fiscales, conforme lo dispone el numeral 5 del Código Fiscal de la Federación, son de aplicación estricta, y que si bien la disposición transitoria que prevé la acumulación de los inventarios para el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio, no hace referencia al régimen de la consolidación fiscal, ello no es óbice para considerar que el inventario acumulable de una controlada no se deba acumular a la utilidad fiscal consolidada, se insiste, por la propia consolidación fiscal.



QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXP.: 33900/07-17-05-1

ACTOR: [REDACTED]

...47

Por lo anteriormente señalado, esta juzgadora considera **infundados** los conceptos de impugnación primero, segundo y tercero, del escrito de demanda de la actora, por lo que se reconoce la validez de la resolución impugnada.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 49, 50, y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora **NO** probó su pretensión, en consecuencia;

II.- Se reconoce la legalidad y validez de la resolución impugnada en el presente juicio, identificada en el resultando primero de este fallo.

III.- Mediante atento oficio que, al efecto, se gire al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remítase copia certificada de la presente sentencia, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo D.A.347/2010, número interno DA.- 645/2010.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 693 -

IV.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA
PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD
DEMANDADA.

Así lo resolvieron y firman los Magistrados que
integran la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, JULIÁN
CASARRUBIAS PÉREZ, en su carácter de Presidente de la
Sala e instructor en el juicio, JOSÉ CELESTINO HERRERA
GUTIÉRREZ y ALFREDO UREÑA HEREDIA, ante la
Secretaría de Acuerdos, con quien se actúa y quien da fe.

CC-13900-07 C-E (2)ISR

LA C. SECRETARÍA DE ACUERDOS ADSCRITA A LA QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 50, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE TRIBUNAL, CERTIFICA
QUE ESTA COPIA ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL
EXPEDIENTE No. 33900-07-17-05-1, RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO POR GRUPO
ELEKTRA, S.A. DE C.V., QUE CONSTA DE 47 FOJAS ÚTILES, DOY FE.
México D.F., a 17 de mayo de 2011
LIC. CECILIA CÁRDENAS SAGREDO

CARLOS ANTONIO MORALES MONTES DE OCA, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO
DOSCIENTOS VEINTISIETE DEL DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO: QUE ESTA COPIA
FOTOSTÁTICA, EN VEINTICINCO HOJAS DE LAS CUALES LAS VEINTICUATRO
PRIMERAS VAN SELLADAS Y RUBRICADAS POR MI, ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y
EXACTA DE SU ORIGINAL, CON EL QUE LA COMPARÉ, SEGÚN CONSTA EN EL
REGISTRO NÚMERO VEINTE MIL SESENTA Y SEIS, ASENTADO CON ESTA FECHA EN EL
LIBRO DE REGISTRO DE COTEJOS NÚMERO ONCE.

DOY FE.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE
DCM/



EJECUTORIA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2012.



D.A.- 408/2011

QUEJOSA:

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. NORMA LUCÍA PIÑA
HERNÁNDEZ.

SECRETARIO PROYECTISTA:
LIC. ABRAHAM PEDRAZA
RODRÍGUEZ.



México, Distrito Federal, acuerdo del
Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a
la sesión del día diecisiete de febrero del año dos
mil doce.

VI STOS; Y
RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el trece
de abril de dos mil once, en la Oficialía de Partes de
las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

a través de su representante legal,
demandó el amparo y
protección de la Justicia Federal, en contra de los
actos y las autoridades que se identifican a
continuación:

2

D.A.- 408/2011



RECLAMADO

Nº 20066

sentencia definitiva dictada en el Juicio de Nulidad
No. 33900/07-17-05-1, de fecha 1º de marzo de 2011,
dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
los que textualmente se estableció lo siguiente:

I.- La parte actora NO probó su pretensión, en
consecuencia;

II.- Se reconoce la legalidad y validez de la resolución
impugnada en el presente juicio, identificada en el
resultando primero de este fallo.

III.- AUTORIDADES RESPONSABLES

...la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes
emitteron la sentencia de fecha 1º de marzo de 2011, en
los autos del juicio No. 33900/07-17-05-1."

SEGUNDO. La solicitante del amparo
señaló como garantías individuales violadas las
contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la
Constitución Federal; expresó los antecedentes del
asunto; identificó como tercero perjudicadas a las
autoridades demandadas en el juicio de origen y
formuló los conceptos de violación que estimó
pertinentes.

TERCERO. La demanda de garantías se
remitió, por conocimiento previo, a este Decimocuarto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 695 -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



A FEDERACIÓN

Lo anterior debido a que en el dictamen de amparo D.A. 347/2010 del Índice de este Decimocuarto Tribunal Colegiado de Justicia Administrativa del Primer Circuito, fallado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en el Distrito Federal, en apoyo del dictado de las resoluciones de este Tribunal, se analizó la sentencia de trece de octubre de dos mil nueve, dictada en el juicio contencioso administrativo número 33900/07-17-05-1 del cual deriva el fallo, ahora reclamado.

CUARTO. En proveído de siete de junio de dos mil once, el entonces Presidente de este Tribunal Colegiado admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada con el juicio de amparo número D.A.- 408/2011; tuvo como tercera perjudicada a la autoridad demandada en el juicio de origen y dio vista con los autos al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento.

QUINTO. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil once, se tuvo por recibido el oficio firmado por el Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5" de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito

D.A.- 408/2011



№ 20066

del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad tercero perjudicada mediante el cual formuló alegatos.

SEXTO. En auto de cinco de julio de dos mil once, se ordenó turnar el asunto a la Magistrada Norma Lucía Piña Hernández, para formular el proyecto de resolución correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Amparo.

SÉPTIMO. Con fecha veinte de enero de dos mil doce, se listó el presente asunto, mismo que fue retirado en sesión de veintiséis de enero del mismo año.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente juicio de amparo directo de conformidad con los artículos 107, fracciones, III, inciso a), y V, de la Constitución Federal, 44, 46 y 155 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado



en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once.

SEGUNDO. La demanda de garantías fue presentada oportunamente. Ello es así, porque la sentencia reclamada se notificó a la solicitante del amparo el **veintidós de marzo de dos mil once** y la demanda de garantías se presentó el **trece de abril de dos mil once**, esto es, dentro del plazo legal que establece el artículo 2º de la Ley de Amparo, sin contar los días inhábiles que mediaron, por ser sábados y domingos.

TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consistente en la sentencia de uno de marzo de dos mil once, por así aparecer en el juicio contencioso administrativo número 33900/07-17-05-1, remitido en vía de informe justificado.

CUARTO. No se transcribe la sentencia reclamada ni los conceptos de violación, por no ser un requisito en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo.



6

D.A.- 408/2011

embargo, para emitir el fallo constitucional, se entregaron copias fotostáticas recabadas en su integridad, de la demanda de garantías y de la sentencia reclamada a los Magistrados de este Tribunal.

Asimismo, se ordena agregar copia certificada de esta última a los presentes autos.

QUINTO. Como antecedentes del asunto, en lo que importa, se narra lo siguiente:

El veinte diciembre de dos mil seis, [REDACTED]

[REDACTED] formuló a la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria una consulta fiscal en el sentido de que confirmara los criterios siguientes:

1. Que para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, en términos de lo dispuesto por la fracción I, inciso a), del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente debería tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladoras, sin considerar el inventario acumulable de las consolidadas; y





TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 697 -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



2. Que no existía en la Ley una disposición expresa que estableciera que el inventario acumulable de una controlada debía acumularse a la utilidad fiscal consolidada o, bien, como un concepto adicional a las utilidades y pérdidas fiscales de las controladoras que debiese considerarse en la determinación del resultado final.

El seis de septiembre de dos mil siete, el Administrador de Consultas y Autorizaciones "3" del Servicio de Administración Tributaria la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria dio respuesta a la consulta formulada y determinó lo siguiente:

"Primero.- No se confirma a [REDACTED] el criterio que para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, en los términos dispuestos por la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente deberá tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o la pérdida fiscal, sin que para tales efectos pueda considerarse dentro de dichos conceptos, el inventario acumulable de las consolidadas.

Segundo.- No se confirma a [REDACTED] que no existe disposición expresa en la ley que establezca que el inventario acumulable de una controladora se deba acumular a la utilidad fiscal consolidada o bien como un concepto adicional a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas que se consideran en la determinación del resultado fiscal consolidado."



8

D.A.- 408/2011

De conformidad con la determinación anterior, la [REDACTED] empresa promovió juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

NO 20066

Substantiado el referido juicio, el uno de octubre de dos mil ocho, la Quinta Sala Metropolitana referido Tribunal dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

La Sala justificó la determinación que adoptó, sobre la base de que como lo había establecido la autoridad demandada, en la resolución impugnada, resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la actora, la acumulación de existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por vía de cada una de las determinaciones de las utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encontraban sujetas al régimen de consolidación fiscal, de conformidad con los artículos 10 y 29, fracción I del Capítulo II, Sección III del Título II denominado "costo de lo vendido" que comprendía los artículos 45-A a 45-I, 64 y 65 así como las fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir del uno de enero de dos mil cinco.





No conforme con la decisión anterior



[REDACTED] promovió demanda de amparo, de la cual tocó conocer a este Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el juicio número D.A. 131/2009, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para dictar la sentencia correspondiente, en auxilio del dictado de resoluciones de este Tribunal Colegiado.

En sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, el citado Tribunal Colegiado Auxiliar dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.

El aludido Tribunal Auxiliar determinó que la sentencia reclamada era ilegal, al considerar que la Sala transgredió en perjuicio de la quejosa los principios de congruencia y exhaustividad contenidos en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que resolvió el asunto de manera cognática, pues fue omisa en explicar las razones y fundamentos en que se basó para concluir que para determinar el resultado fiscal consolidado de la actora, resultaba aplicable la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por vía



10

D.A. - 408/2011

de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encontraban sujetas al régimen de consolidación fiscal.

20066

Sostuvo el Tribunal Colegiado Auxiliar que no bastaba que la Sala adujera que dicha conclusión coincidía con lo señalado por la autoridad demandada en la resolución impugnada, pues ello no la eximía de la obligación de exponer las razones y motivos por las cuales llegó a esa conclusión; además, de que omitió dar respuesta frontal al argumento toral que hizo valer la actora en su concepto de impugnación, respecto a si le asistía razón o no al señalar que en términos de lo dispuesto por la fracción I, Inciso a), del artículo 68 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, únicamente debían tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que para tales efectos pudiera considerarse dentro de dichos conceptos el inventario acumulable de las consolidadas.



PODER JUDICIAL

Así como aquel relativo a que no existía disposición expresa en la ley que estableciera que el inventario acumulable de una controlada se debía acumular a la utilidad fiscal consolidada como un concepto adicional a las utilidades y pérdidas fiscales



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 699 -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



DE LA FEDERACIÓN

de las controladas que se consideraban para la determinación del resultado fiscal consolidado.

En cumplimiento al citado fallo constitucional, el tres de octubre de dos mil nueve, la Sala emitió sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada, al considerar que la actora no acreditó los extremos de su pretensión.

La Sala sostuvo la controversia derivaba de la reforma efectuada, entre otros, al artículo 29, fracción II, y la adición del Capítulo II, Sección III, del Título II, denominado "Del costo de lo vendido" que comprende los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación, con fecha uno de diciembre de dos mil cuatro, misma que establecía el tránsito de un régimen en el que se permitía a los contribuyentes la deducción de las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados, o terminados, a un régimen de deducción del costo de lo vendido.

Que como consecuencia de dicha reforma se estableció, mediante disposiciones transitorias, un régimen de transición para los contribuyentes que, al treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro, mantuvieran existencias de inventario que, de conformidad con el nuevo régimen, no podrían ser



12

D.A. 408/2011

deducido conforme a las disposiciones vigentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, es decir, al momento de su adquisición.

Que dicho régimen de transición establecía que, como regla general, los contribuyentes que conservaran existencias de inventario, al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, no podían deducirlas mediante el sistema de costo de lo vendido; sin embargo se preveía la posibilidad de deducir dicho inventario mediante el costo de ventas conforme se enajenaran las mercancías, con la condición de que se acumularan para determinar el resultado del ejercicio de conformidad con las fracciones IV y V, del artículo tercero transitorio, del Decreto que reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del uno de enero de dos mil cinco.

La Sala transcribió el contenido de la disposición transitoria analizada, esto es, del Decreto que reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del uno de enero de dos mil cinco.

La Sala afirmó que le era aplicable a la quejosa la disposición que prohibía la disminución de los inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro o la opción de deducir dichos



13



inventarios, mediante el costo de ventas, conforme se enajenaran las mercancías, siempre que también los acumularan si resultaba aplicable a los contribuyentes que tributarán conforme al Régimen de Consolidación Fiscal, contenido en el Capítulo VII del Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Indicó la Sala que resultaba igualmente aplicable a la actora lo señalado en el párrafo anterior, toda vez que, al estar sujeta al régimen de consolidación fiscal, y como se había advertido de las constancias que obraban en autos, dichas sociedades ejercieron la opción de acumular la existencia de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, para estar en posibilidad de deducir dicho inventario mediante el costo de lo vendido conforme se enajenaran las mercancías.

Especificó la Sala que lo anterior era así, debido a que en primer lugar, el penúltimo párrafo del artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señalaba que "Las sociedades controladoras y las sociedades controladas que consolidaran, estaban a lo dispuesto en las demás disposiciones de esa Ley, salvo que expresamente se señalara un tratamiento distinto en este Capítulo.

En segundo término, la Sala asentó que los tres primeros incisos de la fracción I del artículo 68



14

D.A.- 408/2011

Nº 20066

señalaban, en la parte conducente, el procedimiento por el cual las empresas controladoras, que se encontraban sujetas al régimen de consolidación fiscal, debían determinar su resultado fiscal, para lo cual transcribió el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y —precisó— lo anterior no obstante que, las sociedades controladas, así como la controladora, determinarían en lo individual, las utilidades o pérdidas fiscales que correspondieran de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la ley, el cual transcribió.

Acotó la Sala que en la inteligencia de que dentro de las relaciones jurídicas emanadas del consentimiento y de la autorización para consolidar estaba el derecho que tenía la controladora para exigir de las controladas la entrega de un monto igual a los pagos provisionales y al impuesto del ejercicio que hubiere causado, en la proporción en que su utilidad o pérdida fiscal estuviese consolidada, con la finalidad de proveerle de recursos para cubrir los pagos provisionales y el impuesto generado.

La juzgadora asentó que la deducción de los inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, al ser enajenadas no formaban parte de la deducción mediante el costo de lo vendido y —insistió— porque fueron deducidas al momento de la adquisición de las mercancías, por





TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 701 -



FEDERACIÓN

ende, la enajenación de dicho inventario representaría solamente un ingreso acumulable.

Así, la Sala sostuvo que resultaba inexacto, como lo pretendía la actora que para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, debían tomarse en cuenta únicamente las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que, para tal efecto, se considerara el inventario acumulable de las consolidadas.

Mencionó la resolutora que en la Sección I, del Capítulo II, del Título II, el artículo 29, cuya reforma entró en vigor a partir del uno de enero de dos mil cinco, establecía que "Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: II. El costo de ventas"; por lo que, tanto las empresas controladas, como la controladora, debían determinar su utilidad o pérdida fiscal disminuyendo del total de los ingresos acumulables en el ejercicio, las deducciones autorizadas conforme al Título II, que en el capítulo respectivo señalaba, entre otras, al costo de ventas; sin embargo —aseveró— como ya se había establecido, al entrar en vigor la reforma al artículo 29, fracción II, se establecía en las fracciones IV y V, del artículo tercero transitorio, un sistema o régimen de transición, en el cual se señalaba que: "Los contribuyentes para determinar el costo de lo



16

D.A.- 408/2011

podrán deducir las existencias en inventario que tengan al 31 de diciembre de 2004".

Nº 20066

Con anterior, la juzgadora estimó que tal y como lo estableció la autoridad demandada en la resolución impugnada, resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la actora, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encontraban sujetas al régimen de consolidación fiscal, de conformidad con los artículos 10, y 29, Fracción I, del Capítulo II, Sección III, del Título II, denominado "Del costo de lo vendido" que comprende los artículos 45-A a 45-1, 64 y 68, así como las fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir del uno de enero de dos mil cinco, de ahí que resultaba inexacto, como lo refería la actora que no existía disposición expresa que establecía que el inventario acumulable de una controlada se debía acumular a la utilidad fiscal consolidada.

Inconforme con la determinación anterior, la reseñada empresa promovió demanda de amparo, la cual tocó conocer, por conocimiento previo, a este Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

17



Administrativa del Primer Circuito basó el asunto número D.A 347/2010, el cual fue enviado al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, para que en auxilio del dictado de resoluciones de este Tribunal Colegiado resolviera el asunto.



OFICIA FEDERAL

En sesión de veinte de enero de dos mil once, el referido Tribunal Colegiado Auxiliar dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

El referido Tribunal Colegiado Auxiliar consideró que la sentencia adolecía de la debida y suficiente fundamentación y motivación contenidas en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues la Sala sólo se había concretado a explicar el contenido de los artículos 10 y 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, así como el Tercero Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta", publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, además de mencionar las consecuencias de las reformas que el Poder Legislativo hizo en el capítulo "Del Costo de lo vendido" de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta; sin embargo —aseveró— no precisó con



18

D.A.- 408/2011

20060

argumentos que permitía dilucidar que el inventario acumulable de la controlada se debían acumular a la utilidad fiscal consolidada o, bien, como un concepto adicional a las utilidades y pérdidas fiscales de las controladas que se consideraban en la determinación del resultado fiscal consolidado.

Consideró el mencionado Tribunal que la Sala no motivó porqué le resultaba aplicable a la quejosa la disposición que establecía la prohibición de disminuir los inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro o la posibilidad de deducirlos mediante el costo de ventas, siempre y cuando fuesen acumulados.

Agregó el citado Tribunal Auxiliar que la Sala no detalló la forma en que lo hizo ni expuso la manera en que tal circunstancia se acreditó, así como tampoco explicó el efecto fiscal que ocasionaba que la inconforme hubiera optado por dicha posibilidad establecido en la legislación aplicable.

Al mismo tiempo, el Tribunal Colegiado estimó que la Sala llegaba a una conclusión sin precisar cuál era el vínculo entre la deducción de inventarios de las empresas controladas en los pagos provisionales y la deducción de los inventarios pertenecientes a la unidad controladora, es decir, no abundó por qué debían acumularse los inventarios



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 703 -

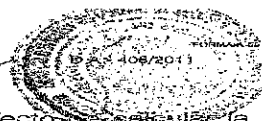


PODERES JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



1 DE LA FEDERACIÓN

19



tanto en unas como en otras, a efecto de ~~la~~ la utilidad o pérdida fiscal consolidada, según fuese el caso, es decir, que la Sala no ahondó en el análisis de la mecánica de tributación para las personas morales que enteraban bajo el régimen de consolidación fiscal; tampoco expuso si la aplicación de los numerales que citó eran en forma estricta como lo aseveraba la actora entonces quejosa.

También, el referido Tribunal Auxiliar determinó que la Sala omitió precisar de qué forma se realizaban los pagos provisionales de tales entidades, no obstante que lo hizo valer la inconforme en su demanda de nulidad, pues de manera enfática refirió que la obligación de acumular los inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, para las empresas sociedades o empresas que tributan en el régimen de consolidación fiscal, era única y exclusiva para el cálculo de los pagos provisionales de dichas entidades, planteamiento éste en el que la responsable debió centrar la litis, al constituir dicha mecánica de tributación el origen de la controversia.

Por lo anterior, el Tribunal Colegiado Auxiliar precisó que la responsable debía expresar, con precisión, el precepto aplicable al caso y, señalar, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hubiesen tenido en consideración para su emisión,

20

D.A.- 408/2011



NE 20088

constituyendo adecuación entre los motivos aducidos y los preceptos aplicables al caso, de que se trate, desentrañando la mecánica y forma de tributar de las entidades sujetas a dicho régimen de conformidad con preceptos exactamente aplicables al caso; estudio que ~~—afirmó—~~ implicaba acudir a la exposición de motivos a efecto de dilucidar cuál fue la intención del legislador al establecer la reforma del capítulo correspondiente al costo de lo vendido y su injerencia en las personas que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal.

En cumplimiento a la determinación que antecede, el uno de marzo de dos mil once, la Sala responsable emitió sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada, al estimar que la actora no acreditó su pretensión.

SEXTO. La solicitante del amparo hace valer diversos conceptos de violación, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, sin que sea el caso transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010 visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:



SECRETARÍA DE JUSTICIA

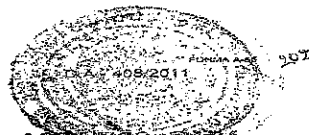


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



LA COMISIÓN

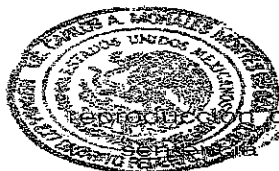
21



"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias" del título primero "Reglas generales" del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

Los conceptos de violación se analizarán en un orden distinto al propuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

En el tercer concepto de violación y parte del primero, la peticionaria del amparo aduce que la sentencia reclamada es ilegal, a causa de que es idéntica a la originalmente controvertida en el juicio de amparo D.A. 347/2010 resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar del Primera Región, con sede en el Distrito Federal, esto es, que es casi una



22

D.A.- 408/2011

NO 20066

repetición de lo expresado en la primera parte de la sentencia impugnada en el aludido juicio de amparo y para demostrar lo anterior realizó un cuadro comparativo entre lo resuelto en aquella sentencia y la que ahora constituye el acto reclamado.

Expresa también que la sentencia que reclama deviene ilegal, toda vez que —asevera— la Sala no atendió a los lineamientos precisados en la ejecutoria dictada por el aludido Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Primera Región, en atención a que, al momento de resolver el asunto, no acudió a la exposición de motivos relativa a la reforma de Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para dos mil cinco, ni analizó la cuestión conforme a lo que había determinado el citado Tribunal Auxiliar.

Son inoperantes los argumentos propuestos por la peticionaria del amparo.

La inoperancia anunciada deriva de que la pretensión de la quejosa, expresada a través de los argumentos sintetizados con antelación, por una parte, está encaminada a demostrar un indebido cumplimiento de la sentencia que pronunció el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Primera Región, al resolver el juicio de amparo D.A. 347/2010 y, por otra, una repetición del acto, cuando, en su



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 705 -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



FEDERACIÓN

caso, ello debe ser materia de los medios de defensa establecidos en la Ley de Amparo.

Corrobora la determinación anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada con el número P./J. 98/97, a página 22, Tomo VI del mes de diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUEL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplenia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo



Nº 20088

En los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplenia de la queja."

En diverso aspecto, en los puntos PRIMERO y SEGUNDO se hace valer como concepto de violación que la sentencia reclamada se emitió en contravención a los principios de exhaustividad y congruencia.

En dichos conceptos la quejosa afirma que el pronunciamiento de la Sala resulta ilegal por ser contrario a las disposiciones que regulan el régimen de consolidación fiscal, de manera concreta, lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo el aspecto modular de que la acumulación de los inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, de las empresas controladas no se encuentra contemplada como conceptos adicionales a la utilidad o pérdida fiscal individuales de las controladas, ni como conceptos adicionales a la propia utilidad fiscal consolidada para determinar la pérdida o resultado fiscal consolidado.



25



Que de la mecánica para el cálculo de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, así como de los pagos provisionales de las empresas controladas, se evidencia que la Sala responsable tergiversó la litis planteada, al imponer como una obligación para la empresa controladora el incorporar el inventario acumulable al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, de sus empresas controladas como un elemento adicional a la utilidad fiscal o pérdida fiscal reportada por cada una de ellas.



LA FEDERACION

Que lo anterior se constata del objeto de la confirmación de criterio planteada ante la autoridad fiscal consistente en:

A. Confirmar que para efectos del cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en los términos del artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente debería tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o la pérdida fiscal, sin que para tales efectos debiese adicionarse a tales conceptos el inventario acumulable de las consolidadas.

B. Confirmar que no existía disposición expresa en la Ley (Ley del Impuesto sobre la Renta) que el inventario acumulable de una controlada se debía acumular a la Utilidad Fiscal consolidada o bien, como un concepto adicional a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas en la determinación del Resultado Fiscal Consolidado.

Y que derivado de lo anterior, la litis a resolver se construyó única y exclusivamente a lo siguiente:

26

D.A.- 408/2011



NO 2/00000

Por cuanto se hace a la materia de confirmación identificada en el inciso A):

En términos del artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para calcular la utilidad o pérdida fiscal consolidada únicamente se debían tomar en consideración las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas.

Por cuanto se hace a la materia de confirmación identificada en el inciso B) esto es, a la existencia o no, de disposición expresa.

1.- ¿Si existía o no disposición expresa en ley que estableciera que el inventario acumulable de las empresas controladas debía de acumularse a la utilidad fiscal consolidada?

2.- ¿Si existía o no disposición expresa en ley que estableciera que el inventario acumulable de las empresas controladas debía acumularse a la utilidad o pérdida fiscal de las propias controladas, para efectos del Resultado Fiscal Consolidado?

Respecto del planteamiento relativo a si existía disposición expresa en el sentido de que se incluyeran los inventarios acumulables de una controlada a la utilidad fiscal consolidada o bien, como un concepto adicional a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas en la determinación del resultado fiscal consolidado (inciso B); la parte quejosa señala que las conclusiones alcanzadas por la Sala fiscal son contradictorias entre sí y contrarias al texto de la ley; ello en virtud de que:

La contradicción de la argumentación en la sentencia reclamada, la quejosa la hace derivar de que la Sala, por una parte, resolvió que era equivocada la afirmación de la contribuyente en el sentido de que no existía disposición expresa que previniera que



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 707 -



PODERE JUDICIAL DE LA FEDERACION



ELA FEDERACIO

los inventarios acumulables de una controlada se debieran acumular a la utilidad fiscal consolidada, sin invocar la disposición legal que sirviera de sustento a tal afirmación, así como que la sociedad controladora debería considerar las utilidades fiscales de sus controladas y su propia utilidad fiscal, por lo tanto, dentro de dichos conceptos, el inventario acumulable de la consolidada.

Diversa contradicción deriva la quejosa de la parte en la que la Sala determinó que si existía disposición fiscal expresa que obligaba a la quejosa a acumular a la utilidad fiscal consolidada el inventario acumulable de las controladas, apoyando sus argumentos en la acumulación de los inventarios a nivel individual de las controladas.

Relacionado con lo anterior, la quejosa refiere que la Sala de manera ilegal estableció tres diversos conceptos en los que deben ser acumulados el inventario acumulable a nivel individual por las empresas controladas, dejando de advertir los momentos de acumulación.

Que de prevalocar el criterio de la Sala en el sentido de que si existe disposición legal de la que deriva la obligación a la empresa controlada a acumular a la utilidad fiscal consolidada los inventarios acumulables, se generaría una doble



28

D.A.- 408/2011

de tales inventarios y por ello, una obligación de pago del impuesto sobre la renta.

Nº 20066

Por lo que, que resulta ilegal la conclusión alcanzada por la Sala fiscal respecto a que los inventarios acumulables de las empresas controladas deben acumularse a la utilidad fiscal consolidada, pues constituye un aspecto el que los inventarios acumulables deban acumularse —por las empresas controladoras— a nivel individual como ingresos una vez que sean enajenados para determinar la utilidad fiscal individual de cada una de ellas y, otro diverso, el que sean acumulados a la utilidad fiscal ya determinada, esto es, que sean acumulados con posterioridad a que se determine la utilidad fiscal consolidada y se adicionen a la misma.

En diverso aspecto, la quejosa aduce que la Sala responsable no resolvió en los términos planteados el punto de litis identificado como: "2 "Si existía o no disposición expresa en ley que estableciera que el inventario acumulable de las empresas controladas debía acumularse a la utilidad o pérdida fiscal de las propias controladas, para efectos del Resultado Fiscal Consolidado".

Precisa, que a fin de resolver tal punto, la Sala debió concluir que la empresa controladora únicamente se encuentra obligada a restar y sumar las pérdidas y utilidades fiscales, respectivamente,



FEDERACIÓN

reportadas por sus controladas, porque evidentemente la acumulación de inventarios enajenados necesariamente estaría reflejada en la utilidad o pérdida fiscal calculada por las controladas y reportada a la controladora.

Aduce, que resulta incongruente e ilegal que la Sala considerara que los inventarios acumulables, se debían adicionar a las utilidades o pérdidas fiscales individuales de las controladas, cuando la propia autoridad fiscal reconoció expresamente al contestar la demanda que los inventarios acumulables no debían adicionarse o acumularse precisamente a las utilidades o pérdidas fiscales individuales.

Además, de que con tal determinación se dejó de analizar la tesis planteada, porque no fue materia de la confirmación de criterio, los otros elementos que debían de considerarse para calcular la utilidad o pérdida fiscal individual de las controladas, así como de los ingresos y las deducciones autorizadas, pues dicha circunstancia dependería, de las obligaciones fiscales que en lo particular tuviese cada controlada.

Relacionado con lo anterior, la quejosa sostiene que para efectos de la utilidad fiscal o pérdida fiscal consolidadas, o del resultado fiscal



Nº 20066

las empresas controladoras, únicamente las empresas controladas, se encuentran obligadas a sumar y restar, respectivamente, las utilidades fiscales o pérdidas fiscales de sus controladas, por lo que cualquier otro elemento que sea considerado para calcular la utilidad o pérdida fiscal —*inventario acumulable*— resultaba intrascendente, para efectos de responder a la interrogante planteada, puesto que el mismo debe entenderse considerado dentro de la utilidad o pérdida fiscal individual de las controladas.

Los argumentos antes sintetizados son ineficaces en la medida de que la quejosa los construye de aspectos que si bien fueron abordados por la Sala no tienen el alcance y la transcendencia que les atribuye en tales planteamientos.

En efecto, la Sala responsable una vez que estableció los puntos sujetos a debate expuestos tanto por la parte actora como por la autoridad demandada, realizó la siguiente consideración:

"Conforme a los puntos precisados, esta juzgadora considera que, efectivamente, como lo estableció la autoridad demandada, en la resolución impugnada, resulta aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, de conformidad con los artículos 10, y 29, fracción I, del Capítulo II, Sección III, del Título II denominado "Del



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

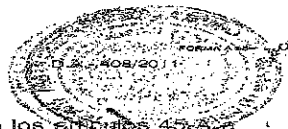
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 709 -



31



costo de lo vendido" que comprende los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 68, así como las fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2005."

Tal consideración la Sala la derivó de los aspectos siguientes:

- La controversia suscitada derivó de las reformas a las disposiciones relativas al tránsito de un régimen en el que se permitía a los contribuyentes la deducción de las adquisiciones de mercancías, a un régimen de deducción de costo de lo vendido; régimen que —afirmó la Sala— resultaba aplicable a los contribuyentes que contribuyeran bajo el régimen de consolidación fiscal y, por ende, a la actora;
- De las constancias de autos, se advertía que algunas de las sociedades controladas ejercieron la opción de acumular la existencia de inventarios al 31 de diciembre de 2004, para estar en posibilidad de deducir dicho inventario mediante el costo de lo vendido; aspecto que la Sala advirtió del reconocimiento tácito contenido en la foja 3, penúltimo párrafo, del escrito de confirmación de criterio;

TERMINADO



32

D.A.- 408/2011

NO 200866

Conforme a los artículos 64, penúltimo párrafo y 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado, debe sumar o restar las utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades controladas, así como la propia, en términos de las disposiciones de la ley;

- Las sociedades controladas, así como la controladora, determinan en lo individual, las utilidades o pérdidas fiscales que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; lo cual será disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas;
- La obligación de la controladora de tomar en consideración, para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, no sólo correspondía a las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas, sino también el inventario acumulable de las consolidadas, derivaba del consentimiento y de la autorización para consolidar en la proporción en que su utilidad o pérdida fiscal esté consolidada, en la que debe incluirse el inventario acumulable de las consolidadas, como un



33



concepto adicional a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas que se consideran en la determinación del resultado fiscal consolidado;

- La enajenación de dicho inventario representaba solamente un ingreso acumulable.

De ahí que la Sala resolviera que resultaba inexacta la pretensión de la actora, porque para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, no deberían tomarse en cuenta únicamente las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que, para tal efecto, se considerara el inventario acumulable de las consolidadas y su propia utilidad fiscal.

Y, derivado de lo anterior, concluyó la Sala que resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la actora, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal.

De las consideraciones que sustentan el fallo reclamado, se obtiene que resulta infundada la

34

D.A.- 408/2011



Nº 20066

confirmación de la quejosa en el sentido de que existió una obligación de litis, bajo la consideración de que la Sala impuso como una obligación para la empresa controladora incorporar el inventario acumulable al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, de sus empresas controladas, como un elemento adicional a la utilidad fiscal o pérdida fiscal reportada por cada una de ellas; con lo cual se dejó de analizar la litis planteada porque no fueron materia de controversia los elementos que debían de considerarse para calcular la utilidad o pérdida fiscal de las controladas.

En principio, cabe destacar que fue materia de la confirmación de criterio planteada ante la autoridad fiscal, lo siguiente:

- En que esa H. Autoridad Fiscal confirme el criterio de que para efectos del cálculo del impuesto anual consolidado en el ejercicio de 2006, mi poderdante deberá considerar únicamente las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas y no así, los conceptos que se le adicionan, tales como el inventario acumulable de las controladas.
- En que esa H. Autoridad Fiscal confirme el criterio que no existe disposición expresa en la Ley que establezca que el inventario acumulable de una controlada se deba acumular a la Utilidad Fiscal Consolidada o bien, como un concepto adicional a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas que se consideran en la determinación del Resultado Fiscal Consolidado.

Como se ve, el criterio que la hoy quejosa solicitó le fuera confirmado, estribó en que para



PODER JUDICIAL



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 711 -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



DE LA FEDERACIÓN

efectos del cálculo e integración de la utilidad fiscal o pérdida fiscal consolidada en términos del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Únicamente se deberían tomar en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladoras, sin que para tales efectos debieran considerarse como conceptos adicionales, el inventario acumulable de las controladas.

Así como que se confirmara que no existía disposición expresa en la ley que estableciera que el inventario de las controladas, como un concepto adicional a las pérdidas o utilidades de las mismas, se consideren en la determinación del resultado fiscal consolidado.

Criterio que fue resuelto en sentido negativo por la autoridad, al considerarse en la resolución impugnada que:

"VI. De acuerdo con lo anterior, toda vez que el ejercicio de la opción contenida en las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transcritas de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005 por parte de las sociedades controladas, como es el caso de las sociedades controladas de [REDACTED] de acuerdo a lo manifestado en su escrito, les obliga a éstas a determinar un inventario acumulable, concepto que deben considerar para la obtención de su utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, en términos de lo establecido en la fracción V del artículo tercero citado, y que como se señala en el punto III anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la sociedad controladora para determinar su resultado fiscal

36

D.A.- 408/2011



NO 2006

consolidado o pérdida fiscal consolidada debe considerar, entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable y restará, entre otros, las pérdidas fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia pérdida fiscal, ambas en la participación señalada, por lo que no procede confirmar a [REDACTED]

el criterio de que para efecto del cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en los términos de lo dispuesto por la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente deberá tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o la pérdida fiscal, sin que para tales efectos pueda considerarse dentro de dichos conceptos, el inventario acumulable de las consolidadas.

Asimismo, tampoco procede confirmar a [REDACTED] que no existe disposición expresa en la ley que establezca que el inventario acumulable de una controlada se deba acumular a la utilidad fiscal consolidada o bien, como un concepto adicional a las utilidades y pérdidas fiscales de las controladas que se consideren en la determinación del resultado fiscal consolidado."

Y a efecto de analizar la legalidad de la resolución impugnada, la Sala atendió a los planteamientos propuestos por las partes y derivado de las previsiones legales que rigen el esquema especial de tributación, consolidación y del régimen de transición de costo de lo vendido, concluyó que la autoridad demandada, en la resolución impugnada, acertadamente resolvió en el sentido que resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la actora, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, bajo la razón total que



37



debería hacerse por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal.

Determinación que la Sala derivó de lo previsto en los artículos 10 y 29, fracción I, del Capítulo II, Sección III, del Título II denominado "Del costo de lo vendido"; fracciones III y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del 1 de enero de 2005.

ILUSTRACIÓN

Y de las previsiones que rigen el esquema de consolidación fiscal al considerar la Sala que: "La naturaleza jurídica del régimen de consolidación fiscal, como en el caso de la actora, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a determinados grupos de empresas con intereses económicos comunes, que al reunir ciertas características y cumplir con los requisitos establecidos en la ley, son consideradas como una unidad económica, lo que les permite, bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales...".

Conforme a lo expuesto, no se actualiza la variación de litis invocada, toda vez que la Sala se pronunció sobre los puntos medulares que constituyeron materia de la consulta y que resultan

38

D.A.- 408/2011



Con lo que se explicita la quejosa, a resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la actora, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, bajo el aspecto de que en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se establecía expresamente ese concepto y que no existía disposición legal que expresamente previniera que el inventario acumulable de las empresas controladas se debería acumular a la utilidad fiscal consolidada.



Así como que se confirmara que no existía disposición expresa en la ley que estableciera que el inventario de las controladas, como un concepto adicional a las pérdidas o utilidades de las mismas, se consideren en la determinación del resultado fiscal consolidado.

Cuestiones que fueron abordadas por la Sala en el sentido de que sí era procedente el considerar que deberían incluirse por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal.

En el relacionado orden de ideas, resulta infundado el argumento de la quejosa cuando refiere que se dejó de analizar la litis planteada, porque no



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 713 -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



FEDERACIÓN

fueron materia de controversia los elementos que debían de considerarse para calcular la utilidad o pérdida fiscal de las controladas.

Lo anterior, en virtud de que debe tenerse en cuenta que uno de los puntos materia de la consulta consistió en que se confirmara que no existía disposición expresa en la ley que estableciera que el inventario de las controladas, como un concepto adicional a las pérdidas o utilidades de las mismas, se considerara en la determinación del resultado fiscal consolidado.

Cuestionamiento que fue abordado por la autoridad demandada en la resolución impugnada, entre otras cuestiones, conforme a lo siguiente:

"De acuerdo con lo anterior, si bien el inventario acumulable determinado en los términos de la fracción V citada no es propiamente un ingreso de los establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, esa naturaleza se la da la disposición transitoria en comento, por lo que el mismo resulta un concepto acumulable que debe considerarse para la obtención de la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, a que se refieren, respectivamente, los artículos 10, fracción I y 61, primer párrafo de la ley mencionada. Lo anterior, a fin de neutralizar el efecto fiscal de la deducción de dicho inventario dentro del costo de lo vendido, toda vez que la deducción correspondiente al mismo inventario se había tomado anticipadamente al momento de efectuar su compra. En ese sentido, tratándose de sociedades controladas que hubieran ejercido la opción prevista en las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, como es el caso de las sociedades controladas de Grupo Elektra,

40

D.A.- 409/2011



№ 20066

V., de acuerdo a lo manifestado en su escrito, las mismas estuvieron obligadas a determinar un inventario acumulable en los términos de la fracción V del precepto citado, concepto que deben considerar para la obtención de su utilidad o pérdida fiscal del ejercicio."

Y derivado de lo anterior, la Sala a fin de resolver el aspecto referente a si existía disposición expresa en la ley que estableciera que el inventario de las controladas, como un concepto adicional a las pérdidas o utilidades de las mismas, se considerara en la determinación del resultado fiscal consolidado, atendió a la naturaleza jurídica del régimen de consolidación fiscal para establecer entre otras cuestiones que las sociedades controladas así como la controladora deberán determinar en lo individual las utilidades o pérdidas fiscales que correspondan de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual se determina disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas, así como el régimen de costo de lo vendido del que derivaba el concepto de inventarios acumulables.

Y al efecto la Sala precisó:

"De ahí la obligación de la controladora de tomar en consideración, para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada no solo las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas, sino también el inventario acumulable de las consolidadas pues dicha obligación deviene de su consentimiento y de la



41



autorización para consolidar y así, en consecuencia, las controladas la entrega de un monto igual a los pagos provisionales y al impuesto del ejercicio que hubieren causado, en la proporción en que su utilidad o pérdida fiscal esté consolidada, en la que evidentemente se incluye el inventario acumulable de las consolidadas, como un concepto adicional a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas que se consideran en la determinación del resultado fiscal consolidado.

Por tanto, la deducción de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, al ser enajenados no forman parte de la deducción mediante el costo de lo vendido, se insiste, porque fueron deducidas al momento de la adquisición de las mercancías, por ende, la enajenación de dicho inventario representará solamente un ingreso acumulable.

De tal suerte que resulta inexacto, como lo pretende la actora, que para efectos del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, deban tomarse en cuenta únicamente las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que, para tal efecto, se considere el inventario acumulable de las consolidadas."



LA FEDERACION

Consideraciones en su conjunto, que llevaron a la Sala a concluir que resultaba inexacta la afirmación de la quejosa en el sentido de que no existía disposición expresa que estableciera que el inventario acumulable de una controlada se debía acumular a la utilidad fiscal.

Por ello, resultan infundados los argumentos de la quejosa bajo la línea argumentativa de que no fueron materia de controversia los elementos que debían de considerarse para calcular la utilidad o pérdida fiscal de las controladas, pues sería tanto como desconocer los aspectos que fueron

42

D.A.- 408/2011



la consulta formulada y a la postre, los hechos en la demanda de nulidad.

Nº 20065

efecto, la consulta elevada a la autoridad la hoy quejosa la sustentó, de acuerdo a los hechos y antecedentes narrados en la misma, del régimen fiscal de consolidación a que se encontraba sujeta como sociedad controladora a fin de obtener el resultado fiscal consolidado; a las obligaciones emanadas del régimen de costo de lo vendido y de manera particular, de las empresas controladas, así como al tratamiento fiscal que correspondía al inventario acumulable de cada una de ésta; elementos a considerar que llevaron a la contribuyente a solicitar que se confirmara, entre otros aspectos, que no existía disposición expresa en la ley que estableciera que el inventario de las controladas, como un concepto adicional a las pérdidas o utilidades de las mismas, se considerara en la determinación del resultado fiscal consolidado.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

De ahí que la Sala a efecto de resolver la litis planteada, justificadamente abordó los elementos que debían de considerarse para calcular la utilidad o pérdida fiscal de las controladas, pues fue uno de los aspectos torales que la llevaron a concluir que la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, sería por vía de cada una de las determinaciones de utilidades



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

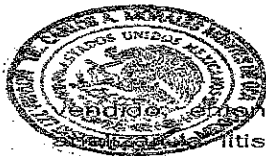
- 715 -



o pérdidas fiscales de las sociedades que se encontraban sujetas al régimen de consolidación fiscal.

En efecto, partiendo de que era el propio artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el que establecía, atendiendo al régimen de consolidación fiscal, la mecánica para obtener la utilidad fiscal consolidada y en función de los hechos y antecedentes narrados que involucraba la obtención de utilidad fiscal de las empresas controladas que habían optado por la deducción de los inventarios acumulados, la Sala arribó a su determinación.

Lo anterior en virtud de que, el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que las controladoras para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada deben considerar, entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable y restará, entre otros, las pérdidas fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia pérdida fiscal, ambas en la participación señalada, y si la consulta derivaba de un antecedente concreto con relación a que en el caso algunas de las sociedades controladas ejercieron la opción de acumular la existencia de inventarios al 31 de diciembre de 2004, para estar en posibilidad de deducir dicho inventario mediante el costo de lo



44

D.A.- 409/2011

Nº 20066

Por lo tanto, en mérito de lo anterior, la Sala tenía que atender la litis planteada atendiendo a la consulta formulada.

Relacionado con lo anterior, se destaca que las premisas de que partió la Sala para establecer que resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la quejosa, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, no obedecieron a que correspondieran a conceptos adicionales a la utilidad o pérdida fiscal individuales de las controladas, ni como conceptos adicionales a la propia utilidad fiscal consolidada, como inexactamente lo afirma la quejosa.

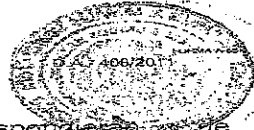
Lo expuesto, en virtud de que la Sala partió de la premisa de que para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, sería por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encontraban sujetas al régimen de consolidación fiscal.

Esto es, entre los aspectos a que atendió la Sala para resolver en ese sentido, obedeció a que las sociedades controladas así como la controladora, determinaban en lo individual, las utilidades o





45



pérdidas fiscales que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la ley; lo cual será disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas, así como que la deducción de los inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, al ser enajenados no formaban parte de la deducción mediante el costo de lo vendido porque fueron deducidos al momento de la adquisición, por lo que la enajenación de dicho inventario representaba solamente un ingreso acumulable.



Lo así resuelto, resulta acorde a las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta que fueron materia de interpretación en la sentencia recurrida, en el sentido de que las reformas vigentes a partir del año de dos mil cinco, fueron emitidas para reglamentar la sustitución del antiguo sistema de deducción de "adquisiciones" por el nuevo de deducción de "costo de lo vendido", para lo cual disponen dos formas que el contribuyente puede emplear para tratar las deducciones del inventario que tuviera hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro.

La primera consiste en que no debe contemplar en el costo de ventas deducible el valor de adquisición de las mercancías existentes en ese



46

D.A. - 408/2011

Nº 20080

que tal valor ya lo habría deducido conforme al anterior sistema -toda vez que de lo contrario se podría duplicar la deducción-, además de que previamente a que considere que enajenó mercancía adquirida a partir de dos mil cinco (en que entró en vigor el nuevo sistema) deberá agotar el inventario en mención.

La segunda, implica que opte por acumular el valor de adquisición de las mercancías que conformen ese inventario, lo que se traduce en revertir la deducción efectuada por ese concepto en el anterior sistema —ya que de lo contrario se podría duplicar la deducción—, con lo que se le permite deducir ese valor conforme vaya enajenando la mercancía a partir de dos mil cinco, siguiendo las reglas que determina la fracción V del propio artículo tercero.



LA FEDERACION

De tal forma, cuando el contribuyente opta por acumular el mencionado valor o inventario acumulable, ese concepto debe sumarse a los ingresos acumulables para ser afectado por el cálculo del impuesto como si fuera un ingreso, aunque no lo sea, pues solamente de esa forma se revierte la deducción que respecto de ese valor ya se había hecho con anterioridad; de lo contrario se desconocería la opción elegida que busca evitar que se duplique la deducción.

aunque no sea ingreso



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 717 -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



LA FEDERACIÓN

Es aplicable al caso, la tesis de la fracción IV del artículo Tercero del Decreto de 2005, por lo que la continuación se transcribe:

"Novena Época
Primera Sala
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, septiembre de 2007
Tesis: 1ª/J. 129/2007
Página: 307

RENTA. LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR QUE LO PRIMERO QUE SE ENAJENA ES LO PRIMERO QUE SE HABÍA ADQUIRIDO CON ANTERIORIDAD A 2005, HASTA AGOTAR LAS EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIÓN IV, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ENTRE OTRAS, APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES QUE NO EJERCIERON LA OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS A QUE SE REFIEREN LA PROPIA FRACCIÓN IV Y LA V DEL MISMO PRECEPTO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). A través de la fracción IV del artículo Tercero del referido decreto se reconoce que el valor de adquisición de las mercancías en existencia al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro no debe contemplarse en el costo de ventas respectivo, en esa medida, no pueden ser consideradas bajo el referido esquema de deducción. Ello es razonable, pues no debe pasarse por alto que se trata de mercancías e insumos cuyo valor de adquisición ya habría sido deducido, conforme al sistema vigente hasta diciembre de dos mil cuatro. Ahora bien, para el caso de causantes que decidan no ejercer la opción a que se refiere la fracción V del citado artículo Tercero, la parte final de la fracción IV de este precepto dispone que considerarán que lo primero que enajenan es lo primero que adquirieron, antes del primero de enero de dos mil cinco, hasta agotar sus existencias al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, lo que no viola la garantía de proporcionalidad tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados



NO 20066

Unidos Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que la fracción IV del artículo Tercero del Decreto de 2005, solamente establece reglas para la identificación unitaria de la mercancía dentro de dos grupos posibles -los adquiridos antes de la reforma legal, por un lado, y los adquiridos después de ésta, por el otro-, cuando apreciarse que el costo de ventas correspondiente al inventario en existencias al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro no debe contemplar el valor de adquisición respectivo, lo que pone de manifiesto que el método por el cual sea valuada no tiene una repercusión en la obligación fiscal sustantiva, pues ese aspecto del costo de ventas será siempre "0" (cero), bajo cualquier mecanismo de asignación de valor. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que, tratándose de valuación de inventarios, cualquiera de las reglas respectivas --en el presente caso, considerar que lo primero que se enajena es lo primero que se adquirió antes del primero de enero de dos mil cinco-- no implica una desautorización de la deducción correspondiente, sino una prescripción para que el valor de la mercancía sea asignado según ciertas premisas, como lo es que, previo a que se considere que se enajena una mercancía adquirida en dos mil cinco, se haya agotado el inventario al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, lo cual obedece al interés de que se agoten las existencias al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro a la brevedad posible, a fin de que el costo de ventas fiscal y el costo de ventas contable sean homologados --desde el punto de vista administrativo-- evitándose la necesidad de llevar un doble registro de sus inventarios, en los siguientes términos: un primer registro, correspondiente al inventario en existencias al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, cuyo costo de ventas no reconocerá el valor de adquisición y, en ese aspecto, no tendrá efectos fiscales; y, simultáneamente, un segundo registro que sí tendrá efectos fiscales plenos, en el que se incluirán mercancías adquiridas antes del primero de enero de dos mil cinco --es decir, que no reconocen el valor de adquisición en el costo de ventas deducible--, así como las adquiridas a partir de dicha fecha, que sí reconocerán dicho valor en el costo de ventas, mismo que podrá ser deducido en el momento que corresponda, conforme a lo señalado por la fracción IV del multicitado artículo Tercero."



PODER JUDICIAL



49



Y si bien es cierto que la Sala hizo la siguiente precisión: "Luego entonces, es obvio que el inventario acumulable constituye un ingreso, es decir, una utilidad fiscal y, en esa virtud, se está obligado a acumular los inventarios, como si fueran ingresos, pues es la única forma en que se puede revertir el efecto de la deducción y así evitar la doble deducción."



Lo anterior, no denota el aspecto de incongruencia que le atribuye la quejosa a la sentencia reclamada, toda vez que, como ya se precisó, acorde a las disposiciones que rigen el sistema de costo de lo vendido valor o inventario acumulable, ese concepto debe sumarse a los ingresos acumulables para ser afectado por el cálculo del impuesto como si fuera un ingreso, y si bien la Sala aludió de manera inmediata al concepto de utilidad fiscal, ese señalamiento por sí sólo no haría ilegal el pronunciamiento de la Sala pues de manera reiterada resolvió que resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la actora, la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, bajo la premisa de que debería hacerse por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal.

50

D.A.- 408/2011



Nº 20066

Derivado de lo anterior, contrario a lo sostenido por la quejosa, la Sala a fin de establecer si existía disposición legal que obligara a acumular los inventarios acumulables a la utilidad fiscal consolidada, en función de la litis planteada, resultaba necesario que analizara las obligaciones que en lo individual le imponía la ley tanto a la controladora como a la controlada, bajo la premisa de que debería hacerse por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal.



unif

En ese orden de ideas, resulta ineficaz que la quejosa argumente que la Sala no advirtió los momentos de acumulación, pues lo trascendente para el caso se centraba en determinar, cuáles eran los elementos que se deberían considerar para obtener el resultado fiscal de las controladas y de la controladora en lo individual, para luego resolver sobre la inclusión de los inventarios acumulables en el resultado fiscal consolidado.

Lo anterior, incluso se encuentra corroborado de algunas de las consideraciones expuestas por la parte quejosa en la demanda de garantías, en donde al establecer cuáles eran los momentos de acumulación, sostuvo, entre otras cuestiones, lo siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 719 -



51

"Si conforme la mecánica de la consolidación fiscal, las empresas controladas tienen la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal para efectos de que una vez sumadas éstas conjuntamente con la utilidad o pérdida fiscal de la controladora en lo individual, se obtenga la utilidad o pérdida fiscal consolidada, resulta evidente que la acumulación de los inventarios, en su caso, y de acuerdo a cada caso específico, se vería reflejada en la utilidad o pérdida fiscal reportada por cada una de las controladas en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable recayendo en éstas la obligación de acumular tales ingresos obtenidos de la enajenación de los inventarios para el cálculo de su utilidad o pérdida fiscal en lo individual si así fuese procedente, más no así en la empresa controladora, quien únicamente se encuentra obligada a recibir y sumar las utilidades o pérdidas fiscales de sus controladas, en términos del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta."

De la transcripción anterior, se obtiene que es la propia quejosa quien admite que en la mecánica de la consolidación fiscal, las empresas controladas tienen la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal para efectos de que una vez sumadas éstas conjuntamente con la utilidad o pérdida fiscal de la controladora en lo individual, se obtiene la utilidad o pérdida fiscal consolidada, y que la acumulación de los inventarios, en su caso, y de acuerdo a cada caso específico, se vería reflejada en la utilidad o pérdida fiscal reportada por cada una de las controladas en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable, recayendo en éstas la obligación de acumular tales ingresos obtenidos de la enajenación de los inventarios para el cálculo de su utilidad o pérdida fiscal en lo individual.

52

D.A.- 408/2011



Nº 2/0066

...cual resulta acorde con lo resuelto por la Sala responsable en el sentido de que resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la actora, la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, bajo la premisa de que debería hacerse por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal.

Y si bien es cierto que en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cálculo del resultado consolidado se conforma de las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas, también lo es, que no podría dejarse de advertir, tal y como se determinó en la sentencia, que acorde a las disposiciones legales que rigen las obligaciones fiscales tanto de la controlada como de la controladora, en lo individual, se previene como tal, la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que incluye la acumulación de los inventarios, en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable, lo cual necesariamente se ve reflejado en la utilidad o pérdida fiscal.

Conforme a lo anterior, es ineficaz el argumento de la quejosa en el sentido de que la Sala

JUDICIAL DE LA



53



sustentó dos posturas que son contradictorias entre sí.

Tal contradicción la quejosa la hace derivar de que, la Sala, por una parte, afirmó que si existía disposición expresa que establecía que el inventario acumulable de una controlada se debía acumular a la utilidad fiscal consolidada; mientras que, en otra parte, aseveró que no se preveía en forma expresa que para la determinación del impuesto consolidado, la controladora debía incluir en la base de la consolidación el inventario acumulable.



REDRACIO

Sin embargo, tales aspectos, la quejosa los sustrae de una parte de los razonamientos que llevaron a la Sala a concluir que acorde a las disposiciones legales que rigen las obligaciones fiscales tanto de la controlada como de la controladora, en lo individual, se previene como tal, la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que, se reitera, no podría dejarse de advertir, pues conforme a las disposiciones legales contenidas en los artículos 10 y 29, fracción I, del Capítulo II, Sección III, del Título II denominado "Del costo de lo vendido"; fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del 1 de enero de 2005, en los que se previene la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que incluye

54

D.A. - 408/2011



Nº 20066

la acumulación de los inventarios, en el momento que la determinación del inventario constituya un ingreso acumulable, lo cual necesariamente se verá reflejado en la utilidad o pérdida fiscal consolidada.

Así es, la consideración de la Sala en el sentido de que resultaba inexacto lo referido por el ocurrente respecto a que no existía disposición expresa que estableciera que el inventario acumulable de una controlada se debía acumular a la utilidad fiscal consolidada, fue la conclusión a la que arribó después de realizar el análisis sistemático de las disposiciones contenidas en los artículos 10 y 29, fracción I, del Capítulo II, Sección III, del Título II denominado "Del costo de lo vendido"; fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del 1 de enero de 2005.



PODER JUDICIAL DE U

Mientras que, la última parte de la foja 45 de la sentencia reclamada, en la que la Sala resolvió: "No pasa inadvertido para esta juzgadora que si bien no se prevé en forma expresa que para la determinación del impuesto consolidado, la controladora deba incluir en la base de la consolidación el inventario acumulable..." se realizó en función de la existencia de una norma específica que estableciera dicha obligación.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 721 -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION



FEDERACION

De ahí que la parte respectiva de la sentencia en la que sostuvo que era inexacto que no existiera una disposición expresa que estableciera tal reflejo no resulta ser contradictoria con aquellas en las que se sostuvo que si bien no se preveía la inclusión de forma expresa ello derivaba de la opción de deducir los inventarios.

Elo se afirma, en tanto que, la primera consideración fue expuesta para justificar la conclusión en la existencia de un ordenamiento legal del que se desprendía la acumulación alegada por la promovente; y, la segunda para precisar que tal descripción legal no se preveía de manera expresa, sino que derivaba de una circunstancia fáctica a raíz de la operabilidad del supuesto normativo regulador de la condición ahí prevista.

De igual forma, se destaca que la parte quejosa parte de la premisa falsa de que de prevalecer el criterio de la Sala se impone como obligación de la empresa controladora a acumular a la utilidad fiscal consolidada los inventarios acumulables de cada una de sus empresas controladas, bajo la línea argumentativa de que con ello se generaría una doble acumulación de los inventarios acumulables, respecto de los cuales habría una duplicidad en el pago del tributo respectivo, pues -aduce- el inventario de las controladas debía acumularse como ingreso al



56

D.A.- 408/2011

enajenarse a la utilidad fiscal de cada una de las controladas y posteriormente volverse a acumular a la utilidad fiscal consolidada.

Nº 20066

En efecto, la parte quejosa aduce que es incorrecta la conclusión de la Sala Fiscal, al determinar que sí existe una disposición expresa que obligue a la empresa controladora a acumular a la utilidad fiscal consolidada los inventarios acumulables de cada una de sus empresas controladas; lo cual -afirma la quejosa- sería tanto, como que el inventario de las controladas debía acumularse como ingreso a la utilidad fiscal de cada una de las controladas y posteriormente volverse a acumular a la utilidad fiscal consolidada. Y para demostrar la ilegalidad de la sentencia reclamada, inserta un cuadro para mostrar la manera incorrecta en que se verían reflejados los inventarios acumulables, que aduce fue determinada por la Sala Fiscal, el cual se inserta a continuación:

Forma incorrecta (determinada por la Sala Fiscal)			
1ª Controlada	2ª Controlada	3ª Controlada	Controladora
Ingresos 100	Ingresos 125	Ingresos 80	Ingresos 150
*I. Acum.Enj 70	I. Acum.Enj 60		I. Acum.Enj 95
-	-	-	-
Deducciones 80	Deducciones 40	Deducciones 90	Deducciones 75
=	=	=	=
Utilidad fiscal	Utilidad fiscal	Pérdida fiscal	Utilidad fiscal
90	145	-10	170
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA=395(90+145-10+179)			
(+)- ADICIÓN DE:			
INVENTARIO CONTROLADAS=225(70+60-95)			
(=) IGUAL			
TOTAL=620(395+225)			
*I.Acum.Enj=Inventario acumulable enajenado			

La ineficacia de lo así considerado radica en que la Sala no estableció, como le exige la quejosa, que el inventario de las controladas debía acumularse como ingreso a la utilidad fiscal de cada una de las controladas y posteriormente volverse a acumular a la utilidad fiscal consolidada, pues, se insiste, la Sala fue determinante en señalar que la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de los mil cuatro, debería hacerse por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, estos, en lo individual, para luego obtener el resultado consolidado.

Lo cual -incluso- coincide con el cuadro que la quejosa califica como la forma correcta para obtener la utilidad fiscal consolidada, que es el siguiente:

Forma correcta	2ª Controlada	3ª Controlada	Controladora
* Controlada	Ingresos 125	Ingresos 80	Ingresos 150
Ingresos 100	I. Acum. Enj 60		I. Acum. Enj 95
* I. Acum. Enj 70			
-		-	-
Deducciones 80	Deducciones 40	Deducciones 90	Deducciones 75
-		-	-
Utilidad fiscal	Utilidad fiscal	Pérdida fiscal	Utilidad fiscal
90	145	-10	170
90			
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA= 395(90+145-10+179)			
* I. Acum. Enj=Inventario acumulable enajenado			

*I.Acum.Enj=Inventario acumulable enajenado

Y en ese sentido carece de sustento que la quejosa afirme que derivado del pronunciamiento de la Sala tendría que reflejar el ingreso de los

D.A.- 408/2011

inventarios, de sus controlados de manera adicional a la entidad fiscal consolidada, pues, se insiste, la conclusión de la Sala no fue en los términos que expone, y que ejemplificada como en la forma incorrecta, y si en cambio, la Sala al determinar que la acumulación de las existencias de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, debería hacerse por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, esto es, en lo individual, para luego obtener el resultado consolidado; lo cual, incluso, se asemeja al ejemplo que expone como correcto.

De ahí que deben desestimarse los argumentos de la quejosa referentes a que:

- En términos del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se establece de manera expresa el que los inventarios acumulables de las empresas controladas se deban adicionar a la utilidad fiscal consolidada;
- No existe disposición expresa dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establezca dicha circunstancia,



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 723 -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



LA FEDERACIÓN

59

D.A.- 408/2011

Lo anterior en virtud de que la quejosa no puede derivar tales premisas de una consideración no expuesta en la sentencia reclamada, como lo es ella, que la Sala responsable partió de la premisa de que el inventario de las controladas debía acumularse como ingreso al momento de enajenarse o a la utilidad fiscal de cada una de las controladas y posteriormente volverse a acumular a la utilidad fiscal consolidada.

/Al margen de que, como se estableció con anterioridad, la respuesta sobre tales cuestiones está en función de la consulta planteada, atendiendo a los antecedentes de los que derivó la misma, esto es, la contribuyente solicitó que atendiendo al régimen fiscal de consolidación a que se encontraba sujeta como sociedad controladora a fin de obtener el resultado fiscal consolidador a las obligaciones emanadas del régimen de costo de lo vendido y de manera particular, de las empresas controladas, así como al tratamiento fiscal que correspondía al inventario acumulable de cada una de ésta; que se confirmara, entre otros aspectos, que no existía disposición expresa en la ley que estableciera que el inventario de las controladas, como un concepto adicional a las pérdidas o utilidades de las mismas, se considerara en la determinación del resultado fiscal consolidado.

60

D.A.- 408/2011



Nº 20066

En otro aspecto, el pronunciamiento que se emitió en la sentencia tampoco toma viable la pretensión de la quejosa en el sentido de que la Sala partió de la premisa de que la quejosa hubiese acumulado sus inventarios siendo que no fue una situación probada ni acreditada en el juicio contencioso administrativo, lo que incluso la quejosa identifica como un aspecto ya abordado en la ejecutoria anterior y por ende, cosa juzgada.

Lo anterior, en virtud de que al margen de que ese aspecto no fue un punto a debate que definiera la litis planteada, como lo pretende la quejosa, lo cierto es que sí fue un aspecto abordado en la sentencia reclamada lo relativo a que de las constancias de autos, se advertía que algunas de las sociedades controladas ejercieron la opción de acumular la existencia de inventarios al 31 de diciembre de 2004, para estar en posibilidad de deducir dicho inventario mediante el costo de lo vendido; aspecto que la Sala advirtió del reconocimiento expreso contenido en la foja 3, penúltimo párrafo, del escrito de confirmación de criterio, y no de documental alguna de la que se advirtiera lo anterior, respecto de la empresa controladora.

Además de que el aspecto relativo a si fue o no probado en el juicio contencioso administrativo la



EN JUSTICIA DE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

circunstancia de que la quejosa hubiese acumulado sus inventarios, no fue definido en la ejecutoria de veinte de enero de dos mil once, pues al respecto se precisó:

"Si bien es cierto aseveró que de constancias de autos se advertía que la imponente del amparo ejerció la opción de acumular la existencia de inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, lo cierto es que no detalló la forma en que lo hizo, ni expuso la manera en que tal circunstancia se acreditó, así como tampoco explicó el efecto fiscal que ocasiona el que la inconforme hubiera optado por dicha posibilidad, que establece la legislación aplicable."



A FEDERACIÓN

Por tanto, resulta infundada la afirmación de la quejosa cuando refiere que tal cuestión debatida constituía cosa juzgada.

No es óbice a lo anterior que la Sala realizara la siguiente precisión:

"No pasa inadvertido para esta juzgadora que si bien no se prevé en forma expresa que, para la determinación del impuesto consolidado, la controladora deba incluir en la base de la consolidación el inventario acumulable, dicha inclusión deriva de la aplicación voluntaria que realizó al optar por deducir sus inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004, como ya se mencionó, conforme al nuevo sistema de deducción del costo de lo vendido, en términos de las fracciones IV y V, del artículo Tercero Transitorio para 2005."

Pronunciamiento que no podría dar lugar a establecer que le asiste la razón a la quejosa en lo referente a que la Sala aludió a un elemento que no

62

D.A.- 408/2011



NO 20086

estaba contenido en autos, como lo sería el que la controladora hubiese ejercido la opción referida, al optar por deducir sus inventarios que tenía al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; pues tal conclusión debe analizarse en el contexto de los razonamientos que llevaron a la Sala a concluir, derivado del esquema de consolidación, que la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, debería hacerse por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, esto es, en lo individual, para luego obtener el resultado consolidado.

Por tanto, no se actualiza la violación alegada por la quejosa.

Y en este sentido, en términos de los conceptos de violación hechos valer no se demostró la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que tratándose de la legalidad de las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su fundamentación y motivación se cumple con el análisis de la pretensión de la parte, así como de los razonamientos que involucran las disposiciones en que se fundó la resolución reclamada.



FISCAL II



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 725 -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



LA FPMJ

Lo anterior de conformidad con la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, página 143, cuyo contenido es el siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está



04

D.J.A.- 408/2011

NO 200866

obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se funda, para que cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los fundamentos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa."

Criterio el cual, fue reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 133/2004, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

En estas condiciones, al resultar ineficaces los argumentos contenidos en los conceptos de violación hechos valer, y sin que en el caso proceda suplir su deficiencia al no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 76 bis de la ley de amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a [REDACTED] en contra de la sentencia de uno de marzo de dos mil once, dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y



PODER JUDICIAL P



65

D.A.- 408/2011

27

Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 33900/07-17-05-1.

Notifíquese: con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido, el cual es susceptible de depuración, conforme a lo que se establece en el Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.



Así lo resolvió el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta y Ponente), Rosa Elena González Tirado y Salvador Mondragón Reyes.

Firma la Magistrada Presidenta y Ponente con la Secretaría de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

El/la licenciado (a)

Erica Beatriz

Galván

Secretaría de Acuerdos del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

DA 408/11

sesenta

y cinco pesos

28-02-12

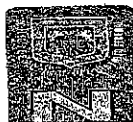
México, Distrito Federal, a seis de mayo de 2012

DOY FE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CARLOS ANTONIO MORALES MONTES DE OCA, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS VEINTISIETE DEL DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTÁTICA, EN TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS HOJAS DE LAS CUALES LAS TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO PRIMERAS VAN SELLADAS Y RUBRICADAS POR MI, ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, CON EL QUE LA COMPARÉ, SEGÚN CONSTA EN EL REGISTRO NÚMERO VEINTE MIL, SESENTA Y SEIS, ASENTADO CON ESTA FECHA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE COTEJOS NÚMERO ONCE.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A SEIS DE MAYO DE 2012



De la digitalización de la sentencia de fecha 1° de marzo de 2011, se desprende esencialmente que la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de fecha 20 de enero de 2011, dictada en el D.A. 347/2010, reconoció la validez de la resolución contenida en el oficio número 330-SAT-IV-3-1-5616/07 de fecha 6 de septiembre de 2007, emitida por el Administrador de Consultas y Autorizaciones "3" de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la cual se resuelve no confirmar el criterio presentado el 20 de diciembre de 2006 por la empresa ***** **
**** (actora en el presente juicio)

Criterio que tenía por objeto se confirmara lo siguiente:

A.- Que para efecto del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, en términos de lo dispuesto por la fracción I, inciso a), del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente deberá tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que para tales efectos pueda considerarse dentro de dichos conceptos el inventario acumulable de las consolidadas.

B.- Que no existía disposición expresa en la Ley (Ley del Impuesto sobre la Renta) que el inventario acumulable de una controlada se debía acumular a la utilidad fiscal consolidada o bien como un concepto adicional a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas en la determinación del Resultado Fiscal Consolidado.

Lo anterior, al considerar la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, que resulta aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal, de conformidad con los artículos 10 y 29, fracción I, del Capítulo II, Sección III, del Título II,

denominado "Del costo de lo vendido" que comprende los artículos 45-A a 45-1, 64 y 68, así como las fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir del 1° de enero de 2005.

Que la controversia, deriva de la reforma efectuada, entre otros, al artículo 29, fracción II, y la adición del Capítulo II, Sección III, del Título II, denominado "Del costo de lo vendido" que comprende los artículos 45-A a 45-1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación el 1° de diciembre de 2004, misma que establece el tránsito de un régimen en el que se permitía a los contribuyentes la deducción de las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados, o terminados, a un régimen de deducción del costo de lo vendido.

Ya que como consecuencia de dicha reforma se estableció, mediante disposiciones transitorias, un régimen de transición para los contribuyentes que al 31 de diciembre del 2004, mantuvieran existencias de inventario que de conformidad con el nuevo régimen, no podrían ser deducidas, ya que dicho inventario se habría deducido conforme a las disposiciones vigentes al 31 de diciembre de 2004, es decir, al momento de su adquisición.

Además que dicho régimen de transición establece que, como regla general, los contribuyentes que conserven existencias de inventario al 31 de diciembre de 2004, no podrán deducirlas mediante el sistema de costo de lo vendido; sin embargo, se prevé la posibilidad de deducir dicho inventario mediante el costo de ventas conforme se enajenen las mercancías, con la condición de que se acumule para determinar el resultado del ejercicio, de conformidad con las fracciones IV y V, del artículo tercero transitorio del Decreto que reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del 1° de enero de 2005.

Asimismo, que al haber cambiado a partir del 1° de enero de 2005, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 2004, el sistema de deducción de adquisición de mercancías, sustituyéndose por el sistema de deducción del costo de lo vendido, la actora en el juicio de nulidad número 33900/07-17-05-1, se encontraría impedida para deducir mediante el nuevo sistema los inventarios existentes al 31 de

diciembre de 2004, debido a que, al momento de ser adquiridos, fueron deducidos mediante el sistema anterior, de ahí la prohibición de disminuir los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004.

Que sin embargo, se da la opción a los contribuyentes como supuesto excepcional, a través de la fracción IV, del artículo tercero transitorio citado, de considerar los inventarios que se tenían al 31 de diciembre de 2004, dentro de la determinación del costo de lo vendido para el ejercicio de 2005 y siguientes, bajo la condición de que el referido inventario se acumule, a efecto de determinar su utilidad o pérdida fiscal.

Del mismo modo, la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, señaló que la disposición prohíbe la disminución de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, o la opción de deducir dichos inventarios mediante el costo de ventas, conforme se enajenen las mercancías, siempre que también los acumulen si resulta aplicable a los contribuyentes que tributen conforme al Régimen de Consolidación Fiscal, contenido en el Capítulo VI, del Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, que le es aplicable a la hoy actora al tributar conforme al régimen de consolidación fiscal, ya que algunas de las controladas de ésta ejercieron la opción de acumular la existencia de inventarios al 31 de diciembre de 2004.

Para lo cual la Sala Regional de referencia señaló que la deducción de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, al ser enajenadas no forman parte de la deducción mediante el costo de lo vendido, porque fueron deducidas al momento de la adquisición de las mercancías, por ende, la enajenación de dicho inventario representará solamente un ingreso acumulable.

Concluyendo que resulta aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal.

Finalmente que si bien no se prevé en forma expresa que para la determinación del impuesto consolidado, la controladora deba incluir en la base de la consolidación el inventario acumulable, dicha inclusión deriva de la aplicación voluntaria que realizó al optar por deducir sus inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004, como ya se mencionó, conforme al nuevo sistema de deducción del costo de lo vendido, en términos de las fracciones IV y V, del artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005.

Por otra parte, de la digitalización de la ejecutoria de fecha 17 de febrero de 2012, se advierte que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo D.A. 408/2011, determinando infundados los argumentos de la quejosa hoy parte actora, toda vez que la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, partió de la premisa de que para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, sería por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encontraban sujetas al régimen de consolidación fiscal.

Asimismo, que la Sala Regional de referencia determinó que las sociedades controladas así como la controladora determinaban en lo individual las utilidades o pérdidas fiscales que correspondieran de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual será disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas, así como que la deducción de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, ya que al ser enajenados no formaban parte de la deducción mediante el costo de lo vendido, porque fueron deducidos al momento de la adquisición, por lo que la enajenación de dicho inventario representaba solamente un ingreso acumulable.

En ese sentido, en Tribunal de Alzada, señaló que lo resuelto por la Sala Regional de referencia, era acorde a las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta que fueron materia de interpretación, en el sentido de que las reformas vigentes a partir del año 2005, fueron emitidas para reglamentar la sustitución del antiguo sistema de deducción de "adquisiciones" por el nuevo de deducción de "costo de lo vendido", para lo cual disponen de dos formas que el contribuyente puede emplear para tratar las deducciones del inventario que tuviera hasta el 31 de diciembre de 2004.

Que la primera consiste en que no debe contemplar en el costo de ventas deducible el valor de adquisición de las mercancías existentes en ese inventario, pues tal valor ya lo había deducido conforme al anterior sistema de deducción, de lo contrario se podría duplicar la deducción.

En la segunda forma, el Tribunal Colegiado señaló que implica que el contribuyente opte por acumular el valor de adquisición de las mercancías que conformen ese inventario, lo que se traduce en revertir la deducción efectuada por ese concepto en el anterior sistema, con lo que se le permite deducir ese valor conforme vaya enajenando la mercancía a partir de 2005.

De tal forma, que el contribuyente opta por acumular el mencionado valor o inventario acumulable, ese concepto debe sumarse a los ingresos acumulables para ser afectado por el cálculo del impuesto como si fuera un ingreso, pues solo de esa forma se revierte la deducción que respecto de ese valor ya se había hecho con anterioridad, de lo contrario se desconocería la opción elegida que busca evitar que se duplique la deducción.

Asimismo, el Tribunal de Alzada señaló que si bien es cierto en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cálculo del resultado consolidado se conforma de las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas, también lo es que no podría dejarse de advertir, tal y como lo determino la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal en la sentencia de fecha 1° de marzo de 2011, que acorde a las disposiciones legales que rigen las obligaciones fiscales de la controladora en lo individual se previene como tal la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que incluye la acumulación de los inventarios, en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable, lo cual necesariamente se ve reflejado en la utilidad o pérdida fiscal.

Del mismo modo, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó en la ejecutoria de referencia, que se desestimaban los argumentos de la quejosa hoy parte

actora referentes a que en términos del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se establece de manera expresa el que los inventarios acumulables de las empresas controladas se deban adicionar a la utilidad fiscal adicionada y que no existe disposición expresa dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establezca dicha circunstancia, ya que la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, señaló que es precisamente de la opción de deducir los inventarios, que se desprende la obligación.

En ese sentido, el Tribunal de Alzada resolvió el D.A. 408/2011, en el sentido de no amparar ni proteger a ***** en contra de la sentencia de fecha 1º de marzo de 2011, dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal en el juicio contencioso administrativo 33900/07-17-05-1.

Atento a lo anterior, esta Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal procede a determinar si en la especie se actualiza la institución de cosa juzgada o cosa juzgada refleja en el presente asunto.

En primer término, es oportuno fijar como premisa que en el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, en términos del artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica.

Asimismo, la referida figura procesal también encuentra fundamento en el artículo 17 tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia contemplada en el citado artículo 17 constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número **P./J.85/2008**, del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 733 -

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el mes de septiembre de 2008, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 168959
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVIII, Septiembre de 2008
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 85/2008
Página: 589

COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.

Acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004. Diputados Integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Procurador General de la República. 25 de septiembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán y Makawi Staines Díaz.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 85/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho.”

De igual forma, cabe señalar que en el orden jurídico mexicano la **cosa juzgada**, está regulada en los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, los cuales disponen lo siguiente:

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

"ARTICULO 354.- La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley."

"ARTICULO 355.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria."

"ARTÍCULO 356.- Causan ejecutoria las siguientes sentencias:

I.- Las que no admitan ningún recurso;

II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y

III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante."

De los preceptos legales que anteceden, se desprende que la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley, y que se actualiza la cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.

Por su parte, la doctrina ha definido a la institución que nos ocupa como tal la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias o resoluciones firmes, salvo cuando éstas puedan ser modificadas por circunstancias supervenientes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número I. 4o. T. 160 L, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el mes de diciembre de 1994, la cual es del tenor siguiente:

"Época: Octava Época
Registro: 209706
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo XIV, Diciembre de 1994
Materia(s): Laboral
Tesis: I. 4o. T. 160 L
Página: 360

COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LA. Frente al principio jurídico de la cosa juzgada, la jurisprudencia que se establezca con posterioridad a aquélla, no puede tener el efecto de destruirla, toda vez que dicha figura jurídica, en cuanto verdad legal, es inmutable.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 895/94. Instituto Mexicano del Seguro Social. 26 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: Miguel César Magallón Trujillo.”

En ese orden de ideas, es de señalarse que la cosa juzgada se encuentra conformada de dos aspectos, uno formal y otro material.

La **cosa juzgada formal** es el efecto de toda resolución judicial, inherente a su firmeza e inimpugnabilidad, esto es, la resolución al causar ejecutoria es irrecurrible.

La **cosa juzgada material**, es el efecto propio de las sentencias firmes sobre el fondo, es decir, el hecho sentenciado es indiscutible.

Entonces, la cosa juzgada consiste, en el imperativo, de que lo decidido; esto es, el pronunciamiento sobre el objeto del proceso, sea observado en otros procesos, vinculando incluso a los demás órganos jurisdiccionales.

Tal criterio fue sustentado por el Poder Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia número I.1o.T. J/28, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de septiembre de 1997, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 197717
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo VI, Septiembre de 1997
Materia(s): Común
Tesis: I.1o.T. J/28
Página: 565

COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 11541/94. Salvador Montes Rico. 2 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García.

Amparo directo 5041/95. Ferrocarriles Nacionales de México. 1o. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García.

Amparo en revisión 551/97. Juan Hernández Muñoz y otros. 26 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García.

Amparo directo 8501/97. Francisco Castro López. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López.

Amparo directo 8781/97. Aca Ropa, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García.”

A su vez, la cosa juzgada material produce un **efecto negativo**, consistente en la imposibilidad jurídica de seguir un proceso con idéntico objeto, o bien de que recaiga una nueva sentencia sobre el fondo, cuando éste ya ha sido examinado y juzgado, de donde las partes no pueden reabrir nuevamente discusión, respecto del hecho ya juzgado.

La cosa juzgada material produce además, el **efecto positivo**: de obligar a los órganos jurisdiccionales de otros procesos, a tener en consideración, lo ya examinado, juzgado y decidido por otros órganos jurisdiccionales, en un proceso previo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número **VII-J-1aS-69**, sustentada por la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, publicada en su Revista en el mes de agosto de 2013, la cual a la letra señala lo siguiente:

“EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. EFECTOS E IDENTIDADES QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU CONFIGURACIÓN. La **cosa juzgada** tiene dos aspectos, uno formal y otro material. El

formal es el efecto de toda resolución judicial, inherente a su firmeza e inimpugnabilidad, esto es, la resolución al causar ejecutoria es irrecurrible. El material es el efecto propio de las sentencias firmes sobre el fondo, es decir, el hecho sentenciado es indiscutible. Por lo tanto el aspecto material de la **cosa juzgada** se divide a su vez un efecto negativo, consistente en la imposibilidad jurídica de seguir un proceso con idéntico objeto, o bien de que recaiga una nueva sentencia sobre el fondo, puesto que este ya ha sido examinado y juzgado, de donde resulta que las partes no pueden reabrir nuevamente discusión respecto del hecho ya juzgado; y en efecto positivo, que obliga a los órganos jurisdiccionales de otros procesos, a tener en consideración lo ya examinado, juzgado y decidido por otros órganos jurisdiccionales, en un proceso previo; es forzoso además, que exista identidad de partes, de objeto y causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, en dos juicios diferentes, existiendo en el primero de ellos un pronunciamiento de derecho que afecte el fondo de la cuestión litigiosa planteada en el segundo.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-20/2013)

Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el dos de julio de dos mil trece.- Firman el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 34"

Bajo ese sentido, resulta pertinente establecer los requisitos que actualizan la institución de la cosa juzgada y, para ello, resulta también ilustrativo lo que se sustenta en la tesis de jurisprudencia número III.T. J/47, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el mes de julio de 1994, la cual es del tenor siguiente:

"Época: Octava Época
Registro: 210950
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Núm. 79, Julio de 1994
Materia(s): Laboral, Común
Tesis: III.T. J/47
Página: 52

COSA JUZGADA, REQUISITOS PARA LA CONFIGURACION DE LA EXCEPCION DE. Para que se origine la excepción de cosa juzgada es menester que además de que exista identidad de personas, acciones y cosas en dos juicios diferentes haya en el primero de ellos un pronunciamiento de derecho que afecte el fondo de la cuestión litigiosa planteada.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 860/87. Carlos Pérez Serrano Michel. 24 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Víctor Jáuregui Quintero.

Amparo directo 799/92. Jorge Armando Navarro Navarro. 3 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores.

Amparo directo 2/94. Gustavo Castelo Osuna. 4 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Angel Regalado Zamora.

Amparo directo 110/94. Sebastián Cámero Aguilar. 4 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Armando Ernesto Pérez Hurtado.

Amparo directo 79/94. Joaquín Aragón Favela. 18 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Angel Regalado Zamora.”

Acorde con el criterio jurisprudencial que antecede, se requiere la existencia de dos juicios en los que exista: identidad de personas, acciones y cosas, y que en el primer juicio exista un pronunciamiento de derecho que afecte el fondo de la cuestión litigiosa planteada en el segundo.

En este orden de ideas, se puede concluir que en el presente asunto nos encontramos en presencia de la figura procesal de cosa juzgada por lo siguiente:

1.- Hay identidad de partes en los juicios: En el juicio **33900/07-17-05-1** que dio lugar a la sentencia del **1º de marzo de 2011** dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México y que fuera confirmada en el amparo **D.A.- 408/2011**, fueron partes: como actora ***** (ahora *****), y como demandada el Administrador de Consultas y Autorizaciones “3” de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria; en tanto que en el presente juicio funge como actora ***** y como demandadas la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “5” y la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, ambas del Servicio de Administración Tributaria.

2.- Hay identidad de cosas: En el juicio **33900/07-17-05-1** que dio lugar a la sentencia de fecha **1º de marzo de 2011** dictada por la

a), del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente deberá tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que para tales efectos pueda considerarse dentro de dichos conceptos el inventario acumulable de las consolidadas.

B.- Que no existía disposición expresa en la Ley (Ley del Impuesto sobre la Renta) que el inventario acumulable de una controlada se debía acumular a la utilidad fiscal consolidada o bien como un concepto adicional a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas en la determinación del Resultado Fiscal Consolidado.

3.- Hay identidad de causa de pedir, en el sentido de que no se consideren los inventarios acumulables de la empresa controlada *****
*** ***** **** ** ***** para efecto de determinar su utilidad fiscal consolidada.

Por lo que es de concluirse que en el presente juicio se actualiza la hipótesis jurídica de "cosa juzgada".

Ahora bien, tal y como se señaló con anterioridad, nuestro sistema jurídico mexicano ha reconocido la existencia jurídica de la figura de "**cosa juzgada refleja**", misma que ha encontrado cabida en la emisión de diversos criterios jurisprudenciales, los cuales resultan de observancia obligatoria para esta Juzgadora, así en la especie resulta aplicable el criterio cuyo contenido se transcribe:

"Época: Novena Época
Registro: 182862
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVIII, Noviembre de 2003
Materia(s): Civil
Tesis: I.6o.C. J/43
Página: 803

COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada refleja, cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de objeto en un contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los litigios; pero que no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sean de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1776/96. Miguel Villegas Castro. 18 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos.

Amparo directo 396/2001. Rafaela Nieto Quintero. 9 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez González.

Amparo directo 4026/2001. Antonio Alejandro Mora Jiménez. 21 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretaria: Lorena Angélica Taboada Pacheco.

Amparo en revisión 996/2003. Martha Elena Guevara Pedroza. 3 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Miguel Ángel Castañeda Niebla.

Amparo directo 5266/2003. Delfino García Caballero, su sucesión. 22 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores."

Criterio que sostiene de manera clara y contundente que **nace a la vida jurídica la cosa juzgada refleja**, cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad en cuanto al objeto, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los litigios; pero que no obstante dicha situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro futuro.

Donde el objetivo primordial de la determinación de cosa juzgada refleja es evitar que se emitan sentencias distintas en asuntos estrechamente vinculados en lo sustancial o dependientes de la misma causa; pues la tendencia se encuentra dirigida a obstaculizar la emisión de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios.

Bajo esta modalidad, **tratándose de la cosa juzgada refleja**, no es indispensable la concurrencia de los requisitos necesarios para configurar la cosa juzgada (lo que si sucedió en la especie), sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; es decir que en ésta se haya tomado

una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes, y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a la causa de pedir; es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones.

Por tanto, si en la ejecutoria de fecha **17 de febrero de 2012** previamente digitalizada, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el **D.A. 408/2011**, consideró confirmar la sentencia dictada en el juicio de nulidad **33900/07-17-05-1**, ya que los argumentos planteados por la parte inconforme no contravirtieron las consideraciones emitidas por la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México; por lo que este Órgano Colegiado arriba a la inequívoca convicción de que la resoluciones que se controvierten en este asunto se encuentran fundadas y motivadas conforme al criterios al que arribo la citada Sala Regional y que confirmó el Tribunal de Alzada de referencia.

Así, no debe perderse de vista que en la sentencia de fecha 1º de marzo de 2011, dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México y que fuera confirmada en el amparo **D.A. 408/2011** por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fue en el sentido de que resulta aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora, la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal.

Por lo que, si bien no se prevé en forma expresa que para la determinación del impuesto consolidado, la controladora deba incluir en la base de la consolidación el inventario acumulable, dicha inclusión deriva de la aplicación voluntaria que realizó al optar por deducir sus inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004, como ya se mencionó, conforme al nuevo sistema

de deducción del costo de lo vendido, en términos de las fracciones IV y V, del Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005.

Cuestiones que evidentemente controvierte la parte actora en el presente juicio contencioso administrativo y que se insiste ya fueron resueltas por la Sala Regional en cita y confirmadas por el Tribunal de Alzada de referencia.

En ese orden de ideas, contrario a las manifestaciones de la accionante, si existe cosa juzgada respecto de la determinación de la utilidad fiscal consolidada al considerar el inventario acumulable de *****
**** ** ***** toda vez que tal y como quedó precisado con anterioridad existe identidad de objetos, pues si bien es cierto, el juicio de amparo directo 408/2011 y el juicio fiscal 33900/07-17-05-1, derivaron de una consulta fiscal formulada por la actora durante el ejercicio fiscal de 2006, mientras que la determinación del crédito fiscal impugnado en el presente juicio, deriva de una revisión secuencial del ejercicio de 2006, también lo es que, en ambos juicios la Litis consiste en determinar si la demandante debe considerar para determinar su utilidad fiscal, los inventarios acumulables que tenía hasta el 31 de diciembre de 2004, lo que influye en el caso concreto.

Toda vez que, la parte actora en el segundo y tercer concepto de impugnación de la demanda del juicio que nos ocupa, esencialmente sostiene que tanto la resolución impugnada como la originalmente recurrida son ilegales, ya que no se debe considerar para efectos de determinar su utilidad los inventarios acumulables y que no existe precepto normativo que la obligue a ello, lo que tiene una estrecha relación con el juicio de nulidad **33900/07-17-05-1**, pues fue la litis de éste y los argumentos del diverso juicio que nos ocupa, son los mismos.

En ese sentido, resulta infundado el argumento de la accionante, en el sentido de que no existe identidad de personas de los litigantes pues la autoridad que resolvió la consulta presentada y la autoridad que emitió la liquidación por el ejercicio fiscal de 2006, son distintas.

Lo anterior es así, toda vez que aun cuando en el juicio **33900/07-17-05-1** que dio lugar a la sentencia de fecha **1º de marzo de 2011** dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con sede en la Ciudad de México y que fuera confirmada en el amparo **D.A.- 408/2011**, fueron partes: como actora ***** (ahora *****), y como demandada el Administrador de Consultas y Autorizaciones "3" de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.

En el presente juicio funge como actora ***** y como demandadas la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5" y la Administradora Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, ambas del Servicio de Administración Tributaria; por lo que, contrario a las aseveraciones de la actora, si existe identidad de partes ya que tanto la autoridad que emitió la respuesta dada a la consulta realizada por escrito de fecha 20 de diciembre de 2006, como las que emitieron la resolución impugnada y la originalmente recurrida son unidades que integran el Servicio de Administración Tributaria.

Máxime que se insiste, la litis del juicio de nulidad **33900/07-17-05-1**, fue precisamente resolver sobre si resultaba o no procedente adicionar los inventarios acumulables de las empresas controladas de la actora, a fin de determinar la utilidad fiscal correspondiente y si existe precepto legal que la obligue a ello, argumentos que hace valer en el juicio contencioso administrativo que nos ocupa.

No obstante lo anterior, en el caso la actora considera que las partes y los actos, de los fallos antes digitalizados no son los mismos; sin embargo, las cuestiones de derecho materia del presente juicio, esto es, si los inventarios acumulables al 31 de diciembre de 2004, deben ser considerados o no para la determinación del resultado fiscal consolidado de la accionante son cuestiones que ya fueron analizadas en el juicio **33900/07-17-05-1**, por lo que aún sino se configura la cosa juzgada, se actualiza la figura procesal de cosa juzgada refleja respecto a los argumentos de la parte actora siguientes:

A.- Que para efecto del cálculo e integración de la utilidad o pérdida fiscal consolidada, en términos de lo dispuesto por la fracción I, inciso a), del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente deberá

tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal, sin que para tales efectos pueda considerarse dentro de dichos conceptos el inventario acumulable de las consolidadas

B.- Que no existía disposición expresa en la Ley (Ley del Impuesto sobre la Renta) que el inventario acumulable de una controlada se debía acumular a la utilidad fiscal consolidada o bien como un concepto adicional a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas en la determinación del Resultado Fiscal Consolidado.

Una vez precisado lo anterior, esta Juzgadora considera necesario tener en cuenta que tal y como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1284/2005, a partir del 2005 se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta para volver al sistema de deducción que estuvo vigente hasta 1986, consistente en deducir el costo de las mercancías el de su adquisición o el de su producción hasta el ejercicio de su enajenación.

Para justificar el regreso al régimen anterior, la exposición de motivos correspondiente a la iniciativa del Ejecutivo, de fecha 13 de septiembre de 2004, establece las siguientes razones:

"Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1583-I, lunes 13 de septiembre de 2004.

INICIATIVA DEL EJECUTIVO, DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA, DEROGA Y ESTABLECE DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, Y QUE ESTABLECE SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO Y PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO México, DF, a 8 de septiembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del C. Presidente de la República, me permito enviar a ustedes iniciativa de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones

fiscales, y que establece subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente.

En ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales, y se Establecen Subsidios para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso.

(...)

La implementación de las medidas mencionadas en atención a las propuestas de la Primera Convención Nacional Hacendaria para simplificar la tarifa de personas físicas, conlleva una implicación recaudatoria, misma que se compensaría con los ingresos adicionales que se obtendrían de las empresas, de aprobarse la modificación para sustituir la deducción de las compras por la deducción del costo de lo vendido.

D. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO Y PARA LA NIVELACIÓN DEL INGRESO

Deducción del costo de lo vendido para personas morales

Hoy día, todas las sociedades mercantiles llevan un sistema de costeo para valuar sus inventarios para efectos contables, sin embargo, para efectos fiscales al deducirse la adquisición de compras provoca una complejidad administrativa a los contribuyentes.

En ese sentido, con el objeto de simplificar la carga administrativa de los contribuyentes y de empatar para efectos fiscales la deducción con la obtención del ingreso, se propone retornar al esquema de deducción de costo de lo vendido.

La deducción de compras se estableció cuando la inflación llegó a 2 dígitos y fue una medida tendiente a que la misma falseara la utilidad de las empresas. Hoy día, con una inflación controlada, se puede regresar a costo de lo vendido.

En ese sentido, se propone adicionar una nueva Sección III al Capítulo I del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la cual se reestablezcan las reglas generales operativas del costo de lo vendido, así como modificar la fracción II del artículo 29 de la Ley de la materia, a efecto de incorporar como concepto deducible el costo de lo vendido.

Entre los principales aspectos que se incorporan en la citada Sección III, destacan los siguientes:

ACTORA:

- 747 -

Se dan las bases para determinar el costo de las mercancías o de los productos enajenados, siguiendo el sistema de valuación de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados, estableciéndose la posibilidad de deducir el costo en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que deriven de la enajenación de los bienes de que se trate.

Se establece que los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y enajenación de mercancías, considerarán únicamente dentro del costo el importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, adicionando los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas.

Igualmente, se propone que los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en el artículo 45-B de la Ley, consideren dentro del costo las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los mismos, efectuados en el ejercicio, las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, relacionados directamente con la producción, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente relacionados con la producción y las inversiones también directamente relacionadas con la producción.

Tratándose de establecimientos permanentes ubicados en México de contribuyentes residentes en el extranjero, se establece que el costo de mercancías se determinará, conforme a lo establecido en la Ley, excepto en lo relativo al costo de las que reciban de la oficina central o de otro establecimiento del contribuyente ubicado en el extranjero. En este caso, se tomará como base para determinar el costo, el que se declare con motivo de la importación de las mercancías.

Por otra parte, se plantea la posibilidad de que los contribuyentes puedan valorar sus inventarios utilizando cualquiera de los siguientes métodos: primeras entradas primeras salidas (PEPS); últimas entradas primeras salidas (UEPS), precisando que cuando se opte por estos métodos no se podrán llevar en forma monetaria; y costo promedio. Cuando vendan mercancías o productos que se puedan identificar por número de serie y su costo exceda de \$50,000.00, sólo podrán utilizar el método de costo identificado, para esas mercancías.

Asimismo, se contempla la posibilidad de establecer en el Reglamento de la Ley de la materia, facilidades para no identificar los porcentajes de deducción del costo respecto de las compras por cada tipo de mercancías y por cada movimiento de manera individual. También, se prevé que una vez elegido el método de valuación, se deberá utilizar el mismo durante un periodo mínimo de cinco ejercicios.

Mediante disposición transitoria se propone a esa Soberanía establecer una opción para los contribuyentes que tengan inventarios al 31 diciembre de 2004 y los cuales al estar sujetos a

un sistema de deducción de gastos fueron deducidos cuando se adquirieron las mercancías.

La citada opción consistiría en que los contribuyentes que tengan inventarios al 31 de diciembre de 2004, acumulen el ingreso por la venta de las mercancías sin deducción del costo de los vendidos, toda vez que al haberse efectuado la deducción como gasto, de no acumularse el ingreso cuando se vendan dichas mercancías, se estaría duplicando la deducción, o bien, la disposición permitiría al contribuyente que acumule los inventarios al 31 de diciembre de 2004, en forma proporcional a lo largo de cinco años, de acuerdo a su rotación de inventarios y, en consecuencia, permitirles la deducción del costo de lo vendido cuando se enajene la mercancía correspondiente a dichos inventarios.

Adicionalmente, a la opción citada se propone permitir que antes de la acumulación de los inventarios, los contribuyentes puedan deducir los saldos pendientes por deducir de los inventarios que tuvieron hasta el año de 1986.

Simplificación de la tarifa de las personas físicas

Acorde con las conclusiones tomadas en la Primera Convención Nacional Hacendaria, se propone que se aplique una tarifa única para el régimen de las personas físicas, estructurada por dos tramos, con lo cual se simplificará la determinación y aplicación del impuesto sobre la renta. Asimismo, se considera adecuada la desgravación general para aquellos contribuyentes que obtengan ingresos de hasta \$76,000.00 anuales, ya que con esto se establece una carga progresiva del gravamen para los que obtienen ingresos superiores a esa cantidad, pues el excedente gravable será mayor en tanto perciba mayores ingresos.

También se propone que al implementar la citada deducción se elimine a su vez, el subsidio y el crédito al salario, ya que con esta medida se simplificará el cálculo del impuesto sobre la renta, de tal manera que podrá cualquier asalariado, profesionista o empresario, calcular su gravamen de manera simple y certera. Asimismo, se verán favorecidos aquellos patrones con poca capacidad administrativa, al no tener que requerir los servicios de un experto para efectuar el cálculo de las retenciones correspondientes a sus trabajadores, en virtud de que él mismo los podrá efectuar.

De igual forma, en la iniciativa se propone la reducción a dos tramos de la tarifa aplicable a las personas físicas, extendiendo el monto de ingresos en cada uno de sus escalones. Esto no inhibe su esfuerzo para poder incrementar sus ingresos a través de trabajo adicional, ya que la carga fiscal por el aumento de sus ingresos se mantiene prácticamente constante.

Con esta nueva estructura de la tarifa, se está simplificando el cálculo de los pagos provisionales para aquellos contribuyentes que obtienen ingresos distintos de salarios, en virtud de que el monto de los ingresos que exceda de \$76,000.00 anuales y hasta \$5'000,000.00 se gravarán con una tasa del 25%, excepto los que excedan de esta cantidad, cuyo excedente se gravará a la misma tasa de sociedades mercantiles.

Asimismo, en el caso de personas físicas asalariadas, se establece que los empleadores les efectúen una exclusión general contra su salario bruto percibido en el año, la cual a elección del trabajador, podrá ser la disminución de \$76,000.00 o el monto de la suma de los ingresos de prestaciones de previsión social exentos en los



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 749 -

términos de las fracciones I, II, III, V, VI, VIII, X y XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que resulte mayor. En este sentido, los trabajadores tendrán la posibilidad de elegir la exclusión general que más les convenga de acuerdo con la composición de sus ingresos.

Cabe comentar, que la citada exclusión general se aplicará contra su salario bruto percibido en el año, lo que deja libre de gravamen del impuesto sobre la renta al 80% de los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Actualmente el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su fracción V, establece que no se pagará dicho gravamen por los ingresos que se obtengan de las prestaciones de seguridad social que otorgan las instituciones públicas, sin embargo, algunos contribuyentes han considerado que se encuentran comprendidas dentro de este supuesto, de manera indebida, algunas prestaciones que no provienen de las leyes de seguridad social, por lo que se propone precisar que dichas prestaciones se encuentran exentas del gravamen cuando las mismas se otorguen de conformidad con las leyes de seguridad social.

La Ley del Impuesto sobre la Renta, señala en su artículo 109, fracción VI, que no se pagará dicho impuesto, respecto de los ingresos percibidos con motivo de actividades culturales y deportivas, sin embargo, con la finalidad de que los contribuyentes no distorsionen el fin de dicha prestación, en la Iniciativa se propone precisar que la exención aplicará únicamente cuando dichas prestaciones se otorguen en servicio o en especie y además se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos colectivos de trabajo.

Asimismo, se considera adecuado que el beneficio de exención, señalado en el párrafo anterior, sea aplicable también a los trabajadores del Estado, referidos en el artículo 123, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es necesario que se establezca como condicionante de la exención que dichas prestaciones de previsión social se otorguen de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo que se expidan en los términos del artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Con esta medida se da el mismo tratamiento fiscal a las prestaciones por actividades culturales y deportivas, a todos los trabajadores del país, sin distinguir si prestan sus servicios en la iniciativa privada o en el sector público.

En relación a las prestaciones de previsión social, se propone establecer de manera específica la exención de las despensas o de los vales de despensa.

Es importante señalar que es una práctica común de las empresas otorgar como prestación a sus trabajadores despensa en especie o a través de vales de despensa, los cuales son destinados principalmente para la adquisición de bienes de primera necesidad como los alimentos. Por ello, dichas despensas y vales de despensa constituyen una ayuda fundamental para mejorar la alimentación de los trabajadores de menores recursos y de sus familias.

En este sentido, se considera conveniente establecer expresamente en el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como un ingreso exento para los trabajadores de menores ingresos, los vales de despensa o despesas en especie que perciban por parte de sus patrones.

Como se ha señalado, la medida tiene por objeto proteger los ingresos de las familias de menores recursos, por lo que la exención que se propone para las despesas que se entreguen en especie o en vales de despensa aplicaría, únicamente respecto de los trabajadores que perciban remuneraciones mensuales totales que no rebasen una cantidad equivalente a diez salarios mínimos generales del área geográfica del trabajador elevados al mes y siempre que el monto mensual de las despesas incluyendo vales no excedan de 350 pesos mensuales.

En la fracción XVII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que no se pagará el impuesto sobre la renta, por las cantidades que entreguen las instituciones de seguros a sus asegurados o beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado, sin embargo, en el cuarto párrafo de dicha fracción se indica que el riesgo amparado se calculará considerando todas las pólizas de seguros que cubran el riesgo de muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad. Ahora bien, dicha exención no limita a que el riesgo amparado se cubra hasta cierto monto, por lo que se propone la eliminación del cuarto párrafo de la fracción XVII del artículo 109 antes invocado, en virtud de que no es necesario que se establezca que para determinar el riesgo amparado se considere el monto que cubran todas las pólizas que tenga el contribuyente."

Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en el dictamen presentado el 27 de octubre de 2004, expresó las siguientes consideraciones:

"COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Octubre 27, 2004

HONORABLE ASAMBLEA.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por conducto de esta H. Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de "Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales y se Establecen Subsidios para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso", misma que fue turnada el día 9 de septiembre de 2004, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el dictamen relativo a la Iniciativa de Decreto antes citada.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 751 -

Por otra parte, esta Comisión consideró necesario analizar de manera independiente las diversas disposiciones fiscales que contempla la iniciativa anteriormente señalada, así como otras iniciativas relacionadas con cada una de las materias que la integran, para lo cual se determinó dictaminar en forma separada cada una de las propuestas que componen la Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2005, razón por la cual se presenta el dictamen al Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se establecen subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso.

Para lo anterior, se llevaron a cabo diversas consultas y reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Colegios e Instituciones Académicas, Organismos y Cámaras Empresariales, Secretarios de Finanzas de diferentes Estados de la República, Presidentes Municipales y diversos sectores interesados en la materia.

Asimismo, es conveniente señalar que las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se proponen a través del presente dictamen, son el resultado del análisis de cada una de las iniciativas que sobre esta materia fueron turnadas a esta Comisión, respecto de las cuáles se recogió, en todo caso, lo relativo a las modificaciones que más adelante se proponen. Las iniciativas relacionadas con la materia objeto de dictamen, se enuncian a continuación:

- 1) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Senador Fernando Gómez Esparza del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 25 de septiembre de 2003
- 2) Iniciativa que deroga el artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Senador Fernando Gómez Esparza del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 30 de septiembre de 2003.
- 3) Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Senadora Verónica Velasco Rodríguez del Grupo Parlamentario del PVEM, de fecha 07 de octubre de 2003.
- 4) Iniciativa que reforma el artículo 114 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Senador José Antonio Aguilar Bodegas del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 25 de noviembre de 2003.
- 5) Iniciativa que reforma el artículo 32, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, reforma y adiciona los artículos 2 y 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Senador José Antonio Aguilar Bodegas del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 25 de noviembre de 2003.
- 6) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 29 y 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Senador José Antonio Aguilar Bodegas del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 25 de noviembre de 2003.

- 7) Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (para apoyar el desarrollo cultural de México), del Diputado Filemón Arcos Suárez Peredo del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 04 de diciembre de 2003.
- 8) Iniciativa que adiciona un inciso c) a la fracción XV del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Diputado José Mario Wong Pérez del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 11 de diciembre de 2003.
- 9) Iniciativa que Reforma los Artículos 40 y 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Senador Adalberto Madero Quiroga del Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 14 de enero de 2004.
- 10) Iniciativa que reforma la fracción XX del artículo 32, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Diputada Irma S. Figueroa Romero del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 23 de marzo de 2004.
- 11) Iniciativa que Adiciona el Artículo 31 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta (para crear incentivos de carácter fiscal a las personas que den empleo a los jóvenes), del Diputado José Manuel Carrillo Rubio del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 06 de abril de 2004.
- 12) Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Comercio Exterior, del Diputado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios del PT, PRI, PRD, PVEM y de Convergencia, de fecha 06 de abril de 2004.
- 13) Iniciativa que reforma la fracción XXVII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 15 de abril de 2004.
- 14) Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (relacionadas con el Régimen Fiscal de Pequeños Contribuyentes), del Diputado Juan Carlos Pérez Góngora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 15 de abril de 2004.
- 15) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Senador Fauzi Hamdan Amad a nombre de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, de fecha 29 de abril de 2004.
- 16) Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de participación de utilidades de las empresas, presentada por el Diputado Juan Carlos Pérez Góngora del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 28 de septiembre de 2004.
- 17) Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de participación

de los trabajadores en las utilidades empresariales, a cargo de la Diputada María del Carmen Mendoza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de fecha 29 de septiembre de 2004.

18) Minuta de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentada por la Senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

19) Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones fiscales, con objeto de impulsar la industria cinematográfica nacional, presentada por el Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, a nombre diversos Grupos Parlamentarios, de fecha 14 de octubre de 2004.

20) Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Diputado Guillermo Huízar Carranza, del Grupo Parlamentario del PRD

Esta Comisión Dictaminadora, con base en las atribuciones antes señaladas, procedió al estudio de la citada Iniciativa, por lo que con base en los resultados de las deliberaciones realizadas por los miembros que integran dicha Comisión se efectuó el siguiente:

(...)

Deducción del costo de lo vendido para personas morales

Actualmente las sociedades mercantiles llevan un sistema de costeo para valuar sus inventarios para efectos contables, sin embargo, para efectos fiscales al deducirse la adquisición de compras provoca una complejidad administrativa a los contribuyentes.

En ese sentido, con el objeto de simplificar la carga administrativa de los contribuyentes y de empatar para efectos fiscales la deducción con la obtención del ingreso, se propone retornar al esquema de deducción de costo de lo vendido.

Por ello, esta Comisión considera adecuada la adición que se propone a efecto de reestablecer las reglas generales operativas del costo de lo vendido, así como modificar la fracción II del artículo 29 de la Ley de la materia, a efecto de incorporar como concepto deducible el costo de lo vendido.

En efecto, en la propuesta se contienen las bases para determinar el costo de las mercancías o de los productos enajenados, siguiendo el sistema de valuación de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados, estableciéndose la posibilidad de deducir el costo en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que deriven de la enajenación de los bienes de que se trate.

Tratándose de enajenaciones a plazo o contratos de arrendamiento financiero, la iniciativa propone que los contribuyentes que hubieran optado por acumular como ingreso del ejercicio, los pagos efectivamente cobrados o la parte del precio exigible durante el mismo, deberán deducir el costo de lo vendido en la misma proporción en la que acumulen el ingreso; sin embargo, en el texto legal propuesto no se establece como determinar la citada proporción, por lo que con el objeto de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes se propone aclarar que la proporción será la que represente el ingreso percibido en el ejercicio, respecto del total del precio pactado en el caso de enajenaciones a plazo o de los pagos pactados en el plazo inicial tratándose de contratos de arrendamiento financiero.

Adicionalmente, y atendiendo a la iniciativa presentada por el Diputado Guillermo Huízar Carranza, en la cual propone incluir un método de costeo adicional al propuesto en la iniciativa del Ejecutivo, esta Comisión Dictaminadora considera necesario establecer la posibilidad de que los contribuyentes que enajenen mercancías en tiendas de autoservicio o departamentales, puedan valorar sus inventarios utilizando el método de detallista, estableciendo en el texto legal la base para determinar el valor de los inventarios y dejando la posibilidad de que en el Reglamento únicamente se establezca el procedimiento para efectuar el cálculo.

Derivado de lo anterior, se propone modificar también el artículo 86, fracción XVIII de la Iniciativa, con el objeto de establecer la obligación de que los contribuyentes que apliquen el método de detallista lleven un registro de los factores utilizados para fijar los márgenes de utilidad bruta aplicados para determinar el costo de lo vendido.

Además de lo anterior, esta dictaminadora considera necesario, que los contribuyentes puedan valorar sus inventarios utilizando el método costo identificado, debiendo subsistir la disposición en el sentido de que si éstos enajenan mercancías, que se puedan identificar por número de serie y su costo exceda de \$50,000.00, únicamente deberán emplear dicho método de costo identificado, lo anterior atendiendo a que, de permitirse el empleo de otros métodos de valuación implicaría que los contribuyentes incrementaran injustificadamente al valor de sus inventarios al mezclar productos de alto y bajo costo.

De igual forma esta Comisión coincide con la iniciativa del Diputado Guillermo Huízar Carranza, en la cual propone reformar la parte relativa a las deducciones autorizadas a que se refiere el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incluir al costo de lo vendido en la fracción II, substituyendo el método de compras que se abandona.

Asimismo, en el artículo 45-I de la iniciativa a estudio hace una referencia al artículo 48-G, cuando lo correcto es que la referencia sea al artículo 45-G del proyecto, por lo que esta Dictaminadora considera adecuado modificar la citada referencia.

En cuanto al esquema de transición propuesto por el Ejecutivo Federal para cambiar de la deducción de compras por el de costo de lo vendido, se considera adecuada la mecánica propuesta en las fracciones V a VII de las Disposiciones Transitorias del Decreto, para que los contribuyentes puedan optar por acumular el ingreso correspondiente en un periodo de cinco ejercicios, dependiendo de la rotación de inventarios que cada contribuyente tenga, pudiendo

deducirse el costo de las mercancías al momento de su enajenación.

Sin embargo, esta comisión dictaminadora propone realizar adecuaciones al texto legal, con el fin de aclarar que en el caso de que se disminuyan del inventario base, las pérdidas pendientes al 31 de diciembre de 2004, éstas no podrán disminuirse en ejercicios posteriores a la acumulación del inventario, a fin de evitar que se duplique la disminución de dichas pérdidas y que se erosione indebidamente la base del impuesto sobre la renta.

De igual forma esta Comisión propone aclarar que en el caso de mercancías de importación, únicamente se deberá acumular la diferencia que resulte de comparar el costo promedio mensual de los inventarios de los últimos cuatro meses de 2004, contra dicho costo de los inventarios de 2003, cuando el primero de los inventarios sea mayor que el segundo.

Asimismo, con el objeto de otorgar certidumbre jurídica a los contribuyentes, esta Comisión Dictaminadora propone establecer en la fracción VI del Artículo Transitorio en comento, la mecánica para determinar el índice de rotación de inventarios.

Además, se propone adicionar una fracción XXII al artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objeto de establecer que en el caso de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, que hubieran perdido su valor, por deterioro o causas no imputables al contribuyente, éstas se deduzcan en el ejercicio en el que ocurra dicha pérdida de valor. De igual forma se establece una disposición transitoria para aclarar que la disposición que se propone aplica respecto de la adquisición de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados que el contribuyente hubiese adquirido a partir del 1 de enero de 2005, toda vez que los adquiridos con anterioridad a dicha fecha y que hubiesen perdido su valor, ya fueron deducidos bajo el esquema de deducción de compras.

Por último, se propone establecer una disposición transitoria con el objeto de que los contribuyentes levanten un inventario físico al 31 de diciembre de 2004, debiendo conservar la información a disposición de las autoridades fiscales durante el plazo a que se refiere el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se establece que los contribuyentes que tengan un inventario físico con una antigüedad de 30 días anteriores al 31 de diciembre de 2004, puedan tomar dicho inventario, siempre que se realicen los ajustes correspondientes por los movimientos que hubieran tenido durante dicho periodo de 30 días y que dicho inventario sirva de base para levantar los subsiguientes inventarios físicos conforme a las disposiciones legales aplicables.

En razón de lo anterior, se propone adicionar fracción XXII el artículo 31, modificar la fracción cuarta del artículo 45-C, reformar el artículo 45-E, 45-F segundo párrafo, 45-G primer y tercer párrafos, 45-I y el artículo tercero transitorio, fracción V, fracción VI párrafo segundo, incisos b) y c), tercer y cuarto párrafos y la tabla; se adiciona un segundo párrafo al artículo 45-A, a los subincisos i), ii), iii), iv) y las fracciones IX y X, para quedar como siguen:

“Artículo 31.- ...

XXII. Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

Los contribuyentes podrán efectuar la deducción a que se refiere el párrafo anterior, siempre que tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud, antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta Ley, dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud de personas, sectores, comunidades o regiones, de escasos recursos, cumpliendo con los requisitos que para tales efectos establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 45-A. El costo de las mercancías que se enajenen, así como el de las que integren el inventario final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate.

En el caso de que el costo se determine aplicando en el sistema de costeo directo con base en costos históricos, se deberán considerar para determinarlo la materia prima consumida, la mano de obra y los gastos de fabricación que varíen en relación con los volúmenes producidos, siempre que se cumpla con lo dispuesto por el reglamento de esta ley.

Artículo 45-C.

IV. La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la Sección II del Título II de esta Ley, siempre que se trate de bienes por los que no se optó por aplicar la deducción a que se refieren los artículos 220 y 221 de dicha Ley.

Artículo 45-E. Los contribuyentes que realicen enajenaciones a plazo o que celebren contratos de arrendamiento financiero y opten por acumular como ingreso del ejercicio, los pagos efectivamente cobrados o la parte del precio exigible durante el mismo, deberán deducir el costo de lo vendido en la proporción que represente el ingreso percibido en dicho ejercicio, respecto del total del precio pactado o de los pagos pactados en el plazo inicial forzoso, según se trate, en lugar de deducir el monto total del costo de lo vendido al momento en el que se enajenen las mercancías.

Artículo 45-F. ...

Segundo Párrafo

En ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido.

Artículo 45-G. Los contribuyentes, podrán optar por cualquiera de los métodos de valuación de inventarios que señalan a continuación:

I. Primeras entradas primeras salidas (PEPS).

II. Últimas entradas primeras salidas (UEPS).

III. Costo identificado.

IV. Costo promedio.

V. Detallista.

Cuando se opte por utilizar alguno de los métodos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se deberá llevar por cada tipo de mercancías de manera individual, sin que se pueda llevar en forma monetaria. En los términos que establezca el Reglamento de esta Ley se podrán establecer facilidades para no identificar los porcentajes de deducción del costo respecto de las compras por cada tipo de mercancías de manera individual.

Los contribuyentes que enajenen mercancías que se puedan identificar por número de serie y su costo exceda de \$50,000.00, únicamente deberán emplear el método de costo identificado.

Tratándose de contribuyentes que opten por emplear el método detallista deberán valorar sus inventarios al precio de venta disminuido con el margen de utilidad bruta que tengan en el ejercicio conforme al procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley. La opción a que se refiere este párrafo no libera a los contribuyentes de la obligación de llevar el sistema de control de inventarios a que se refiere la fracción XVIII del artículo 86 de esta Ley.

...

Artículo 45-I. Cuando los contribuyentes, con motivo de la prestación de servicios proporcionen bienes en los términos establecidos en el artículo 17, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, sólo se podrán deducir en el ejercicio en el que se acumule el ingreso por la prestación del servicio, valuados conforme a cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 45-G de esta Ley.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO.-

V. Los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán optar por acumular los inventarios a que se refiere esta fracción, conforme a lo establecido en la siguiente fracción, en cuyo caso podrán deducir el costo de lo vendido conforme enajenen las mercancías. Cuando los contribuyentes no opten por acumular los inventarios considerarán que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha.

VI. Del inventario base a que se refiere el párrafo anterior, se podrán disminuir los siguientes conceptos:

...

- b) Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2004 de las utilidades fiscales. Las pérdidas fiscales que se disminuyan en los términos de este inciso, ya no se podrán disminuir de la utilidad fiscal en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- c) Tratándose de contribuyentes que tengan en sus inventarios bienes que hayan importado directamente, la diferencia que resulte de comparar la suma del costo promedio mensual de los inventarios de dichos bienes de los últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2004, contra la suma del costo promedio mensual de los inventarios de bienes de importación que tuvieron en los últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2003, siempre que la suma del costo promedio mensual del ejercicio fiscal de 2004 sea mayor a la suma del costo promedio mensual del ejercicio fiscal de 2003. La diferencia que resulte en los términos de este inciso, se acumulará en el ejercicio de 2005.

El inventario acumulable en cada ejercicio se determinará multiplicando el valor del inventario que resulte después de efectuar las disminuciones a que se refieren los incisos a), b) y c) de esta fracción, por el por ciento de acumulación que corresponda al índice promedio de rotación de inventarios calculado por el periodo correspondiente a los años de 2002 a 2004, o de acuerdo al que se determine cuando el contribuyente haya iniciado actividades con posterioridad a 2002, conforme a la siguiente tabla:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Índice promedio de rotación de inventarios	Por ciento en el que se acumulan los inventarios						
De más de 10	33.33%	33.33%	33.34%				
De más de 8 a 10	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%			
De más de 6 a 8	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%		
De más de 4 a 6	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.65%	
De 0 a 4	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.26%

Para determinar el índice promedio de rotación de inventarios del periodo comprendido por los años de 2002 a 2004, o el que corresponda cuando el contribuyente haya iniciado actividades con posterioridad a 2002, se estará a lo siguiente:

- i) Por cada uno de los años de que se trate se restarán de las adquisiciones de mercancías, así como de las materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre los mismos, de conformidad con la fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2004.
- ii) Para determinar el inventario promedio anual de cada uno de los años de que se trate, se dividirá entre dos, la suma del inventario inicial y final de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, que el contribuyente haya utilizado en su actividad empresarial, valuados conforme al método que tenga implantado.
- iii) El índice de rotación de inventarios por cada año será el cociente que resulte de dividir el monto que se obtenga conforme al inciso i), entre el monto calculado de acuerdo al inciso ii).

iv) El índice promedio de rotación de inventarios del periodo de que se trate se determinará sumando el índice de rotación de inventarios para cada uno de los años del periodo citado, entre el número de años que corresponda a dicho periodo.

Los contribuyentes que posteriormente disminuyan el valor de sus inventarios al 31 de diciembre del año de que se trate con respecto al inventario base a que se refiere esta fracción, deberán determinar el monto que deban acumular en el ejercicio de que se trate conforme a lo siguiente:

...

Para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, los contribuyentes deberán acumular a la utilidad fiscal la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago. Además, en el ejercicio de 2005, se acumulará mensualmente la doceava parte de la diferencia que resulte en los términos del inciso c) de esta fracción multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago.

IX. Lo dispuesto en la fracción XXII del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será aplicable a las adquisiciones efectuadas a partir del 1 de enero de 2005.

X. Los contribuyentes deberán levantar un inventario físico de sus mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, al 31 de diciembre de 2004, pudiendo optar por utilizar el inventario físico que hubieran levantado con anterioridad a dicha fecha sin que exceda de un plazo de 30 días, siempre que se consideren los movimientos efectuados durante dicho plazo. El inventario físico se deberá valorar utilizando el método de primeras entradas primeras salidas y la información de dicho inventario se deberá conservar a disposición de las autoridades fiscales durante el plazo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.

De las transcripciones anteriores esencialmente se desprende lo siguiente:

1.- Que la implementación de las medidas mencionadas en atención a las propuestas de la Primera Convención Nacional Hacendaria para simplificar la tarifa de personas físicas, conlleva una implicación recaudatoria, misma que se compensaría con los ingresos adicionales que se obtendrían de las empresas, de aprobarse la modificación para sustituir la deducción de las compras por la deducción del costo de lo vendido;

2.- Además que las sociedades mercantiles llevan un sistema de costeo para valuar sus inventarios para efectos contables y que no obstante, al deducir la adquisición de compras para efectos fiscales, se provoca una complejidad administrativa a los contribuyentes. En consecuencia, con el objeto de simplificar la carga administrativa de los contribuyentes y de empatar para efectos fiscales la deducción con la obtención del ingreso, se propuso retornar al esquema de deducción de costo de lo vendido.

3.- Finalmente, se señala que la deducción de compras se estableció cuando la inflación llegó a dos dígitos y fue una medida tendente a que la misma falseara la utilidad de las empresas. Sin embargo, dado que las condiciones inflacionarias habrían variado, controlándose dicho fenómeno económico, sería factible regresar al costo de lo vendido.

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que en atención a dichas consideraciones, el Ejecutivo Federal propuso modificar la fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como adicionar una nueva sección III al capítulo I del título II de dicho ordenamiento, a través de la cual se reincorporarían las reglas generales operativas del costo de lo vendido.

Asimismo, puede apreciarse que las razones expresadas por el presidente de la República en la exposición de motivos fueron recogidas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, siendo reflejadas en sus términos en el dictamen presentado el 27 de octubre de 2004; precisando que la iniciativa de referencia fue modificada en lo concerniente a ciertas disposiciones del sistema de deducción, sin añadir consideración alguna en lo que respecta a la implantación de dicho esquema general.

Ahora bien, esta Juzgadora considera necesario tener presente el contenido del artículo 68, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada el 1° de enero de 2014, el cual a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso.

d) Sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción.

e) Restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas en el ejercicio por las sociedades controladas y la sociedad controladora, siempre que la adquisición y enajenación de acciones se efectúe dando cumplimiento a los requisitos a que se refiere la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

El monto de las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior, se podrá disminuir, sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la ganancia que por este mismo concepto obtengan en el mismo ejercicio la sociedad controladora y las demás sociedades controladas.

Sumará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas por las sociedades controladas y la sociedad controladora en el ejercicio y en ejercicios anteriores

y que hayan sido restadas conforme al primer párrafo de este inciso en dichos ejercicios, que hubieran deducido en el ejercicio conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se sumarán o se restarán en la participación consolidable.

Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades controladoras, será del 100%. Párrafo reformado DOF 01-12-2004 Para calcular las modificaciones a las utilidades o a las pérdidas fiscales, de las sociedades controladas de ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción, cuando la participación accionaria de la sociedad controladora en el capital social de una sociedad controlada cambie de un ejercicio a otro, se dividirá la participación accionaria que la sociedad controladora tenga en el capital social de la sociedad controlada durante el ejercicio en curso entre la participación correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a cada uno de los ejercicios mencionados; el cociente que se obtenga será el que se aplicará a las utilidades o a las pérdidas fiscales, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción, incluidas en las declaraciones de los ejercicios anteriores, y al impuesto que corresponda a estos ejercicios, en los términos del artículo 75 de esta Ley.

(...)"

Del precepto legal que antecede, se desprende medularmente que la sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

1. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de la Ley.

Que el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de dicha Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

Asimismo, que según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate y que la pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de dicha Ley.

Que las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de la Ley en comento, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en el que comience a consolidar, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso.

Del mismo modo, sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de la fracción que nos ocupa y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la citada fracción I.

Así como que, restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de Ley del Impuesto sobre la Renta, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas en el ejercicio por las sociedades controladas y la sociedad controladora, siempre que la adquisición y enajenación de acciones se efectúe dando cumplimiento a los requisitos a que se refiere la fracción XVII del artículo 32 de la Ley de la materia.

Por su parte el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada el 1° de enero de 2014, señala lo siguiente:

“Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%.

El impuesto que se haya determinado conforme al párrafo anterior, después de aplicar, en su caso, la reducción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley, será el que se acreditará contra el impuesto al activo del mismo ejercicio, y será el causado para determinar la diferencia que se podrá acreditar adicionalmente contra el impuesto al activo, en los términos del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo.

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título. Al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.

Las personas morales que realicen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley.”

Del artículo antes transcrito, se desprende en la parte de interés, que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%.

Así, el resultado fiscal del ejercicio se determinaría como sigue:

Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas.

Al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en términos generales, por ingreso debe entenderse todo aquello que se percibe como aumento al patrimonio, percepción obtenida mediante el esfuerzo, que puede consistir en la inteligente inversión de capitales, en trabajo intelectual o material desarrollado o en la combinación de ambos.

Que desde el punto de vista económico "utilidad" significa el rendimiento que queda en poder del productor, después de que éste haya deducido de los ingresos, el costo de los materiales empleados, los salarios, las rentas, los intereses normales del capital propio o ajeno y una cantidad suficiente para cubrir cualquier riesgo, puesto que toda empresa tiene peligro de una pérdida, especialmente cuando desembolsa de antemano el importe de los costos de producción y corre peligro de no reembolsarlos íntegramente en el precio y en la venta.

En el caso del impuesto sobre la renta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el mismo se genera operación tras operación, en la medida en la que se genera el ingreso, por lo que debe considerarse, adicionalmente, que la determinación del gravamen se justifica si la imposición se efectúa sobre el impacto patrimonial positivo apreciable en el gobernado, mismo que sólo puede evidenciarse en términos reales si se considera, no sólo el ingreso bruto generado aisladamente, sino la utilidad real, obtenida mediante la consideración conjunta del ingreso y de las cantidades erogadas como costo de generación del ingreso.

Que las personas morales dedicadas a otras actividades empresariales, considerarán dentro del costo las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas, efectuadas en el ejercicio, adicionado con las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, relacionados directamente con la

producción de bienes o la prestación de servicios, con los gastos netos de descuentos, devoluciones o bonificaciones, relacionadas directamente con la producción de bienes o la prestación de servicios, así como con la deducción de inversiones directamente relacionadas con la producción de mercancías o la prestación de servicios, en el por ciento máximo de deducción autorizado por la ley, cuando no se hubieran deducido de manera inmediata.

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera necesario tener presente el contenido de las fracciones IV y V del Artículo Tercero del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso, relativo a disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1° de diciembre de 2004, en tanto establece la obligación para todos los contribuyentes que no ejerzan la opción de acumulación de inventarios a la que se refieren la propia fracción IV y la V, de considerar que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1° de enero de 2005, hasta agotar sus existencias a esa fecha, precepto normativo que a la letra señala lo siguiente:

“ARTÍCULO TERCERO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

(...)

IV. Los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán optar por acumular los inventarios a que se refiere esta fracción, conforme a lo establecido en la siguiente fracción, en cuyo caso podrán deducir el costo de lo vendido conforme enajenen las mercancías. Cuando los contribuyentes no opten por acumular los inventarios considerarán que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha.

V. Los contribuyentes al 31 de diciembre de 2004, deberán determinar el inventario base considerando el valor de los inventarios que tengan a dicha fecha, utilizando el método de primeras entradas primeras salidas.

El inventario acumulable se obtendrá disminuyendo del inventario base a que se refiere el párrafo anterior, los conceptos señalados en los incisos a), b) y c) de esta fracción:

a) El saldo pendiente por deducir al 1 de enero de 2005 que en su caso tengan en los términos de las fracciones II y III del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1986, reformado el 31 de diciembre de 1988 y de la regla 106 de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1993.

b) Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2004 de las utilidades fiscales. Las pérdidas fiscales que se disminuyan en los términos de este inciso, ya no se podrán disminuir de la utilidad fiscal en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

c) Tratándose de contribuyentes que tengan en sus inventarios bienes que hayan importado directamente, la diferencia que resulte de comparar la suma del costo promedio mensual de los inventarios de dichos bienes de los últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2004, contra la suma del costo promedio mensual de los inventarios de bienes de importación que tuvieron en los últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2003, siempre que la suma del costo promedio mensual del ejercicio fiscal de 2004 sea mayor a la suma del costo promedio mensual del ejercicio fiscal de 2003. La diferencia que resulte en los términos de este inciso, se acumulará en el ejercicio de 2005.

El inventario acumulable en cada ejercicio se determinará multiplicando el valor del inventario acumulable, por el por ciento de acumulación que corresponda al índice promedio de rotación de inventarios calculado por el periodo correspondiente a los años de 2002 a 2004, o de acuerdo al que se determine cuando el contribuyente haya iniciado actividades con posterioridad a 2002, conforme a la siguiente tabla:

Índice promedio de rotación de inventarios	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
Por ciento en el que se acumulan los inventarios												
Más de 15	2.5	2.5	2.5	2.5								
	0.0	0.0	0.0	0.0								
	0.0	0.0	0.0	0.0								
De más de 10 a 15	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0							
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
De más de 8 a 10	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0						
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
De más de 6 a 8	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
De más de 4 a 6	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8				
	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3				
	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3				
De más	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7			

de 3 a 4	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	8 9			
De más de 2 a 3	1 4 0 0	1 3 0 0	1 2 0 0	1 1 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0	9 0 0 0	8 0 0 0	7 0 0 0	6 0 0 0		
De más de 1 a 2	1 3 0 0	1 2 5 0	1 2 0 0	1 1 0 0	1 0 0 0	9 0 9 0	8 0 0 0	7 0 0 0	6 5 0 0	6 0 0 0	4 9 1 1	
De más de 0 a 1	1 2 0 0	1 1 5 0	1 1 0 0	1 0 0 0	9 0 0 0	8 3 3 3	8 3 3 3	8 0 0 0	7 0 0 0	6 0 0 0	5 0 0 0	3 8 4 4

Para determinar el índice promedio de rotación de inventarios del periodo comprendido por los años de 2002 a 2004, o el que corresponda cuando el contribuyente haya iniciado actividades con posterioridad a 2002, se estará a lo siguiente:

- i) Por cada uno de los años de que se trate se restarán de las adquisiciones de mercancías, así como de las materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre los mismos, de conformidad con la fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2004.
- ii) Para determinar el inventario promedio anual de cada uno de los años de que se trate, se dividirá entre dos, la suma del inventario inicial y final de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, que el contribuyente haya utilizado en su actividad empresarial, valuados conforme al método que tenga implantado.
- iii) El índice de rotación de inventarios por cada año será el cociente que resulte de dividir el monto que se obtenga conforme al inciso i), entre el monto calculado de acuerdo al inciso ii).
- iv) El índice promedio de rotación de inventarios del periodo de que se trate se determinará sumando el índice de rotación de inventarios para cada uno de los años del periodo citado, entre el número de años que corresponda a dicho periodo.

Los contribuyentes que posteriormente disminuyan el valor de sus inventarios al 31 de diciembre del año de que se trate con respecto al inventario base a que se refiere esta fracción, deberán determinar el monto que deban acumular en el ejercicio de que se trate conforme a lo siguiente:

- 1. Para determinar el monto de acumulación de ejercicios posteriores, se calculará la proporción que represente el inventario reducido respecto al inventario base, el por ciento así obtenido se multiplicará por el inventario acumulable y al monto que resulte se le aplicará el por ciento que le corresponda de acuerdo con el índice promedio de rotación de inventarios multiplicado dicho por ciento por el número de años pendientes de acumular de acuerdo con la tabla de acumulación.
- 2. Para determinar la cantidad que se debe acumular en el año en el que se reduzca el inventario, los contribuyentes disminuirán del inventario acumulable, el monto pendiente de acumulación de ejercicios posteriores a la reducción de inventarios determinada

conforme al numeral anterior y las acumulaciones efectuadas en años anteriores a dicha reducción.

3. En los ejercicios posteriores a aquel en el que se reduzca por primera vez el inventario, se estará a lo siguiente:

i. Cuando el monto del inventario reducido del ejercicio de que se trate, sea inferior al monto del inventario reducido por el cual se aplicó por última vez el procedimiento señalado en los numerales 1 y 2, se aplicará lo dispuesto en dichos numerales.

ii. Cuando el monto del inventario reducido del ejercicio de que se trate, sea superior al monto del inventario reducido por el cual se aplicó por última vez el procedimiento señalado en los numerales 1 y 2, para calcular la proporción a que se refiere el numeral 1 se considerará este último inventario y el número de años pendientes de acumular de acuerdo con la tabla de acumulación incluirá el año por el que se efectúe el cálculo. Para determinar la cantidad que se debe acumular en el año en que se reduzca el inventario y en los posteriores, se dividirá la cantidad obtenida en el numeral 1 entre el número de años pendientes de acumular, incluido el año por el que se efectúe el cálculo.

Tratándose de escisión de sociedades, las sociedades escindentes y escindidas acumularán el inventario acumulable pendiente de acumular en la proporción en la que se divida la suma del valor de los inventarios entre ellas y conforme a los por cientos que correspondan a la escidente en los términos de la tabla de acumulación.

En el caso de fusión de sociedades, la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión, continuará acumulando los inventarios correspondientes a las sociedades que se fusionan, en los mismos términos y plazos establecidos en la presente fracción, en los que los venían acumulando las sociedades fusionadas y, en su caso, la sociedad fusionante. En el caso de que la sociedad fusionante tenga pérdidas fiscales pendientes de aplicar al 31 de diciembre de 2004, las sociedades fusionadas deberán acumular en el ejercicio en el que ocurra la fusión, sus inventarios acumulables pendientes de acumular.

Para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, los contribuyentes deberán acumular a la utilidad fiscal la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago. Además, en el ejercicio de 2005, se acumulará mensualmente la doceava parte de la diferencia que resulte en los términos del inciso c) de esta fracción multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago.

(...)"

El artículo antes transcrito, reconoce que el costo de ventas de las mercancías en existencias al 31 de diciembre de 2004, no contemplará el importe de las adquisiciones respectivas; ello es razonable, pues no debe

pasarse por alto que se trata de mercancías e insumos cuyo valor de adquisición ya habría sido deducido, conforme al sistema vigente hasta diciembre de 2004.

Ahora bien, en el caso de causantes que decidan no ejercer la opción a la que se refiere la fracción V del artículo tercero, la parte final de la fracción IV dispone que dichas empresas considerarán que lo primero que enajenan es lo primero que adquirieron antes del 1° de enero de 2005, hasta agotar sus existencias al 31 de diciembre de 2004.

Lo anterior implica que la legislación considerará que la operación tuvo por objeto la venta de mercancía adquirida con anterioridad al cambio de sistema de deducción, en la cual se contempla el valor de adquisición como parte del costo de ventas para efectos contables a pesar de que pudiera tratarse de mercancía adquirida con posterioridad a dicha reforma, que reflejaría dicho concepto dentro del costo de ventas tanto fiscal como contable.

Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el precepto normativo que nos ocupa, puede ser apreciado desde dos ópticas una en sentido positivo y otra en negativo, cada una de ellas con consecuencias diversas.

Por una parte, en sentido positivo, la posibilidad de que se atribuyan efectos de venta de mercancía adquirida antes de 2005, cuando puede tratarse de mercancía adquirida con posterioridad al 1° de enero de 2005; es decir, que para efectos fiscales saldría del almacén un artículo cuyo costo de ventas fiscal no contemplará el valor de adquisición respectivo.

Por la otra, en sentido negativo, la posibilidad de que se le nieguen los efectos de una venta de mercancía adquirida después de 2005, cuando puede tratarse de mercancía efectivamente adquirida con posterioridad al 1° de enero de 2005; es decir, estimar que para efectos fiscales no saldría del almacén un artículo cuyo costo de ventas fiscal pleno, es decir, incluyente del valor de adquisición.

Como puede apreciarse, la fracción IV del referido artículo tercero establece que para la determinación del costo de lo vendido, los contribuyentes no podrán deducir las existencias al 31 de diciembre de 2004, pues el valor de adquisición de los mismos ya habría sido deducido por el

causante, al amparo del régimen de deducción vigente hasta la fecha mencionada.

En tal virtud, dicho precepto señala que el valor de adquisición de la mercancía respectiva no podrá ser considerado como parte del costo de ventas deducible para efectos fiscales, por haber sido adquirida con antelación al cambio de sistema de deducción.

En caso contrario; es decir, de autorizarse una deducción que contemplara el valor de adquisición como parte del costo de ventas fiscal, ello tendría como efecto la duplicación de la deducción en claro perjuicio del erario, pues se permitiría su consideración, frente a la situación fiscal del causante, en dos momentos:

1°. Al adquirirse la mercancía deduciendo el valor de adquisición.

2°. Al llevarse a cabo la enajenación deduciendo dicho valor como parte del costo de ventas.

La consecuencia de lo anterior, es que al no reflejarse el valor de adquisición dentro del costo de ventas fiscal, la totalidad o cuando menos, una gran parte del ingreso producto de la venta repercutiría en la utilidad fiscal, lo cual podría eventualmente tener un impacto económico particular en el corto plazo medido en razón del lapso que pudiera llevar el agotar el inventario en existencias al 31 de diciembre de 2004 y hasta que se unifique la generación del ingreso con la deducción de un costo de ventas "pleno", es decir, incluyente del valor de adquisición.

En razón de lo anterior, en la fracción IV del artículo tercero, relativo a disposiciones transitorias de las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, establece una opción a favor de los contribuyentes, consistente en la posibilidad de reincorporar el valor de adquisición en el costo de ventas fiscal, en lo que concierne a los inventarios al 31 de diciembre de 2004, acumulándolos; es decir, revirtiendo la deducción ya efectuada, el cual podrá ser deducido conforme éstos sean enajenados a partir de enero de

2005, para lo cual, adicionalmente, han de seguirse las reglas que determina la diversa fracción V del propio artículo tercero.

Por lo que resulta evidente que el legislador enunció una prohibición, la relativa a la determinación del costo de lo vendido de una manera tal que reflejara el valor de adquisición, ya deducido, de las existencias a enero de 2005, misma que es consecuencia lógica del propio cambio de régimen de deducciones y que es de cumplimiento obligatorio para todos los causantes.

Sin embargo, previendo un impacto financiero derivado de la modificación legislativa introducida, se estableció la opción de acumular inventarios para aquellos contribuyentes que voluntariamente desearan incrementar el costo de ventas deducible, en la medida del valor de adquisición de mercancía, mismo que ya habría sido restado de los ingresos de un ejercicio diverso.

Como puede apreciarse, se trata de una disposición que, en principio, no es obligatoria para los causantes, sino que se trata de un régimen de carácter optativo, establecido para los contribuyentes que voluntariamente buscaran eludir el impacto financiero que se deriva del cambio legislativo introducido, conforme al sistema de deducción que establecen los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el contribuyente puede deducir de sus ingresos acumulables las cantidades que haya devengado a fin de producir determinado artículo, el precio de la adquisición del artículo que le genera esos ingresos, o bien, los gastos o erogaciones que realiza para la prestación de cierto servicio.

Al efecto, el Artículo Tercero Transitorio, fracciones IV y V del decreto de reformas a la ley mencionada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de diciembre de 2004 (antes transcrito), tal y como lo señaló la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal en el juicio contenciosos administrativo **33900/07-17-05-1**, y lo confirmó el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el **D.A. 408/2011**, al establecer dos posibilidades para que las empresas hagan la transición del sistema de deducción de adquisiciones al de costo de ventas deducible.

La primera consiste en que no deben contemplar en el costo de ventas deducible el valor de adquisición de las mercancías existentes en

sus inventarios, pues éste ya lo dedujeron conforme al sistema anterior, ya que de lo contrario, podría duplicarse la deducción, además de que previamente a que consideren que enajenaron mercancía adquirida a partir de 2005 (en que entró en vigor el nuevo sistema) deberán agotar el inventario referido.

Mientras que la segunda implica que opten por acumular el valor de adquisición de las mercancías que conformen el inventario, lo que se traduce en revertir la deducción efectuada por ese concepto en el anterior sistema ya que de lo contrario podría duplicarse la deducción, con lo que se les permite deducir ese valor conforme se enajene la mercancía a partir de 2005, de acuerdo con las reglas que determina la fracción V del Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2005..

En este sentido, la finalidad de las operaciones comentadas es, precisamente, proporcionar un valor o costo al inventario para poder deducirlo cuando se enajene, pues debe recordarse que, en ese momento, carece de tal costo al haber sido deducido conforme al sistema anterior, es decir, en el momento de su adquisición, porque el sistema opcional también fue implementado por el legislador para evitar una doble deducción, ya que hasta antes de la entrada en vigor de los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los costos de producción se deducían conforme al sistema de adquisiciones.

Así, resultaría contrario sostener que los inventarios no constituyen un ingreso acumulable para determinar la utilidad del ejercicio y, al mismo tiempo, reconocer la posibilidad de deducir para tales efectos el costo de lo vendido, ya que con ello se permitiría deducir un concepto que no impactó en la generación de riqueza del sujeto obligado al pago.

Entonces, aunque no pueda afirmarse que el inventario constituya un ingreso, por sí, pues no está expresamente señalado en la ley, el legislador se valió de una ficción jurídica para estimarlo como un ingreso que debe acumularse a los restantes del ejercicio, para hacer viable la opción de deducción a que se refiere la fracción IV, primer párrafo, del Artículo

Tercero Transitorio y contrarrestar las consecuencias derivadas de una doble deducción sobre un mismo concepto.

Por tanto, como los inventarios acumulables modifican el haber patrimonial de su propietario, constituyen un ingreso acumulable para el cálculo de la utilidad fiscal gravable del impuesto sobre la renta, por lo que deben considerarse para el de la base de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas

Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis número I.9o.A.45 A (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el mes de enero de 2014, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

“Época: Décima Época
Registro: 2005382
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.9o.A.45 A (10a.)
Página: 3075

INVENTARIOS ACUMULABLES. AL CONSTITUIR UN INGRESO ACUMULABLE PARA EL CÁLCULO DE LA UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEBEN CONSIDERARSE PARA EL DE LA BASE DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. En la jurisprudencia P./J. 114/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 7, de rubro: "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. LOS ARTÍCULOS 16 Y 17, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIOLAN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la base gravable a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es la utilidad fiscal a que alude el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual se obtiene por las personas morales al disminuir las deducciones autorizadas por la propia ley del total de sus ingresos acumulables. Por su parte, el artículo 29, fracción II, del ordenamiento citado prevé como deducción el costo de lo vendido, como aquella partida que puede restarse de los ingresos acumulables, con la finalidad de que se determine la base gravable. Además, conforme al sistema de deducción que establecen los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el contribuyente puede deducir de sus ingresos acumulables las cantidades que haya devengado a fin de producir determinado artículo, el precio de la adquisición del artículo que le genera esos

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 775 -

ingresos, o bien, los gastos o erogaciones que realiza para la prestación de cierto servicio. Al efecto, el artículo tercero transitorio, fracciones IV y V, del decreto de reformas a la ley mencionada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, vigente a partir del 1o. de enero del año siguiente, estableció dos posibilidades para que las empresas hagan la transición del sistema de deducción de adquisiciones al de costo de ventas deducible. La primera consiste en que no deben contemplar en el costo de ventas deducible el valor de adquisición de las mercancías existentes en sus inventarios, pues éste ya lo dedujeron conforme al sistema anterior -ya que, de lo contrario, podría duplicarse la deducción-, además de que previamente a que consideren que enajenaron mercancía adquirida a partir de 2005 (en que entró en vigor el nuevo sistema) deberán agotar el inventario referido. La segunda implica que opten por acumular el valor de adquisición de las mercancías que conformen el inventario, lo que se traduce en revertir la deducción efectuada por ese concepto en el anterior sistema -ya que de lo contrario podría duplicarse la deducción-, con lo que se les permite deducir ese valor conforme se enajene la mercancía a partir de 2005, de acuerdo con las reglas que determina la fracción V del propio artículo. En este esquema, la finalidad de las operaciones comentadas es, precisamente, proporcionar un valor o costo al inventario para poder deducirlo cuando se enajene, pues debe recordarse que, en ese momento, carece de tal costo al haber sido deducido conforme al sistema anterior, es decir, en el momento de su adquisición, porque el sistema opcional también fue implementado por el legislador para evitar una doble deducción, ya que hasta antes de la entrada en vigor de los artículos 45-A a 45-I señalados, los costos de producción se deducían conforme al sistema de adquisiciones. Así, resultaría un contrasentido sostener que los inventarios no constituyen un ingreso acumulable para determinar la utilidad del ejercicio y, al mismo tiempo, reconocer la posibilidad de deducir para tales efectos el costo de lo vendido, ya que con ello se permitiría deducir un concepto que no impactó en la generación de riqueza del sujeto obligado al pago. Entonces, aunque no pueda afirmarse que el inventario constituya un ingreso, por sí, pues no está expresamente señalado en la ley, el legislador se valió de una ficción jurídica para estimarlo como un ingreso que debe acumularse a los restantes del ejercicio, para hacer viable la opción de deducción a que se refiere la fracción IV, primer párrafo, del artículo tercero transitorio y contrarrestar las consecuencias derivadas de una doble deducción sobre un mismo concepto. Por tanto, como los inventarios acumulables modifican el haber patrimonial de su propietario, constituyen un ingreso acumulable para el cálculo de la utilidad fiscal gravable del impuesto sobre la renta, por lo que deben considerarse para el de la base de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 101/2013. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de Circuito. Secretaria: Elizabeth Trejo Galán.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de enero de 2014 a las 13:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

En virtud de lo anterior, resulta infundado el argumento de la parte actora en el sentido de que son ilegales las resoluciones impugnadas contenidas en los oficios números 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 y 900 04 05-2015-177797 de fecha 19 de febrero de 2015, ya que aun si existiera cosa juzgada en cuanto al fondo del asunto derivado del juicio de amparo 408/2011 y el juicio fiscal 33900/07-17-05-1, se actualizaría a su favor.

Ello es así, toda vez que por una parte se actualiza la figura procesal de cosa juzgada, la cual no beneficia a la accionante pues tal y como se desprende de la propia ejecutoria de fecha 17 de febrero de 2012, contrario a las aseveraciones de la actora, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo D.A. 408/2011, confirmó el criterio sostenido por la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, en el sentido de que resultaba aplicable para determinar el resultado fiscal consolidado de la hoy actora la acumulación de las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, por vía de cada una de las determinaciones de utilidades o pérdidas fiscales de las sociedades que se encuentran sujetas al régimen de consolidación fiscal.

Además de que, si bien no se prevé en forma expresa que para la determinación del impuesto consolidado, la controladora deba incluir en la base de la consolidación el inventario acumulable, dicha inclusión deriva de la aplicación voluntaria que realizó al optar por deducir sus inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004, como ya se mencionó, conforme al nuevo sistema de deducción del costo de lo vendido, en términos de las fracciones IV y V, del artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en 2005.

Por lo que, del análisis realizado a la ejecutoria de referencia, evidentemente no se advierte que el Tribunal de Alzada haya determinado que no se deban adicionar a la utilidad fiscal consolidada, el concepto de inventario acumulable.

En tanto, que si la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, mediante la sentencia de fecha 1° de marzo de 2011, resolvió que si debían considerarse los inventarios acumulables de las sociedades

controladas, para efectos de la determinación de la utilidad fiscal consolidada y el Tribunal de Alzada, concluyó no amparar ni proteger a la quejosa hoy demandante, en virtud de que la fundamentación y motivación de la sentencia de referencia, cumplió con la pretensión de la hoy actora, así como de los razonamientos que involucran las disposiciones en que se fundó la resolución reclamada (sentencia del 1° de marzo de 2011), de ahí, que no se pueda considerar, como erróneamente lo sostiene la actora, que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, le dio la razón y por ende no debía considerar los multicitados inventarios acumulables, favoreciéndole la cosa juzgada.

Lo anterior, ya que se insiste, la consulta presentada por la actora el 20 de noviembre de 2006 ante la autoridad fiscal y la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo número 33900/07-17-05-1, fueron claras al señalar que la accionante estaba obligada a sumar las cantidades correspondientes a los inventarios acumulables que tuvieran sus controladas, pues al haber optado por tributar en términos del Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2005, tal circunstancia es la condición para que la empresa controladora pueda deducir los inventarios acumulables que tenía al 31 de diciembre de 2004.

Cabe hacer la precisión, de que en el presente juicio, no está en controversia si la empresa controlada de la actora ***** decidió o no tributar en términos del citado Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2005, ya que de la resolución recurrida se desprende que el representante legal de la actora, manifestó en la comparecencia de fecha 16 de julio de 2010, que la controlada de referencia ejerció la opción de acumular sus inventarios al 31 de diciembre de 2004, en los términos de las fracciones IV y V del citado artículo transitorio (páginas 56 y 57 del acto recurrido), a lo cual no se opone la demandante.


Hecha la precisión anterior, se estima necesario, tener presente los términos en que la autoridad demandada determinó que en el resultado fiscal consolidado de la parte actora, no se consideró la totalidad de la utilidad fiscal de su sociedad ***** a saber:

c) Efecto en el resultado fiscal consolidado por no considerar la totalidad de la utilidad fiscal de su sociedad controlada en el ejercicio de 2006


RESULTADO DE LA REVISIÓN:

De la revisión practicada se determina que dicha contribuyente actualmente omitió sumar en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la utilidad fiscal en la participación consolidable correspondiente a su sociedad controlada del mismo ejercicio 2006 de \$1,821'128,230 a \$3,380'157,057, esta última manifestada en declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, e incluye el inventario acumulable en cantidad de \$1,559'028,827, que en participación consolidable es de \$1,558,055,993, infringiendo lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2006, siendo parcial y no total la utilidad fiscal individual fluida a la sociedad controladora.


52 de 96



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



25 JUL 2013



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

143

Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.: [Redacted]

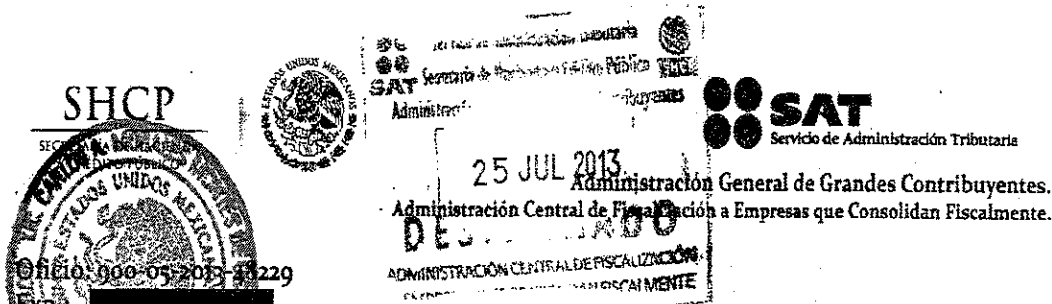
La observación anterior, así como las señaladas en las páginas 15 a la 40 y de la 40 a la 52 del presente oficio, modifican la utilidad fiscal consolidada y el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006 declarado por [Redacted] actualmente [Redacted] incrementándose en cantidad original de \$626'527,831, a la cantidad de \$4,439'475,754, como se señaló en las páginas 9 y 10 del presente oficio.

De la documentación e información que obra en los expedientes administrativos de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, abiertos a nombre de [Redacted] por el ejercicio fiscal comprendido de 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que esa controlada presentó vía internet, la declaración anual del ejercicio en revisión normal y complementaria de fechas 2 de abril de 2007, 12 de agosto de 2010 y 14 de mayo de 2013, respectivamente, mostrando principalmente los datos que a continuación se indican:

CONCEPTO	DECLARACIÓN ANUAL NORMAL DEL EJERCICIO DE 2006 DEL 2 DE ABRIL DE 2007	DECLARACIÓN ANUAL POR CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE 2006 DEL 12 AGOSTO DE 2010	DECLARACIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA DEL EJERCICIO DE 2006 DEL 14 MAYO DE 2013
Total de ingresos acumulables	\$25,926,516,985	\$23,228,624,406	\$21,669,595,579
Total de deducciones autorizadas y deducción inmediata de inversiones	23,355,988,109	19,848,467,349	19,848,467,349
Utilidad fiscal del ejercicio	\$2,570,528,876	\$3,380,157,057	\$1,821,128,030

La diferencia en cantidad de \$1,558'055,993, mostrado en la página siguiente de este oficio deriva de la omisión de considerar la utilidad fiscal manifestada en la declaración complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, por su sociedad controlada en el resultado fiscal consolidado en el ejercicio de 2006; toda vez que la sociedad controladora revisada consideró la utilidad fiscal individual de dicha sociedad controlada, sin sumar el importe del inventario acumulable determinado por ésta en cantidad de \$1,558'055,993, en participación consolidable la cual se integra como sigue:

53 de 96



	IMPORTE % PARTIC. ACCI.	% PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
Resultado Fiscal	(1) \$3,380'157,057	99.9376 %	\$3,378'047
Menos:			
Importe incluido en la determinación del Resultado Fiscal Consolidado por	(2) 1,821'128,230	(2) 99.9376 %	(2) 1,819'991,846
Diferencia por Inventario Acumulable:	\$1,559'028,827	(3) 99.9376 %	(3) \$1,558,055.993

Nota: Para efectos de presentación las cifras se cierran a pesos.

- (1) Importe manifestado en el renglón 11003 "Utilidad fiscal del ejercicio", de la declaración anual por corrección del ejercicio fiscal de 2006, presentada el 12 de agosto de 2010, por la sociedad controlada [REDACTED]
- (2) Según papel de trabajo denominado "RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 IMPUESTO SOBRE LA RENTA", proporcionado por el L.C. [REDACTED] como se señaló en la página 22 del presente oficio.
- (3) El importe de \$1,558'055,993, (\$1,559'028,827 por % de participación consolidable del 99.9376%) corresponde a la participación consolidable del Inventario Acumulable, manifestado en el renglón 116400 de la declaración anual complementaria del ejercicio fiscal de 2006 presentada el 12 de agosto de 2010, por la sociedad controlada [REDACTED]

Del análisis antes detallado, esta Autoridad determina que la diferencia corresponde al inventario acumulable que determinó la sociedad controlada [REDACTED] misma que se apegó a lo dispuesto en el Artículo Tercero, primer párrafo, fracción V de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005; situación que se puede constatar en el dictamen fiscal del ejercicio de 2006, presentado por dicha sociedad controlada en el Anexo "12.- Conciliación entre el Resultado Contable y Fiscal para efectos del Impuesto sobre la Renta", en el apartado de "Ingresos Fiscales no Contables", en el renglón "121080.- Inventario Acumulable", como a continuación se señala:

"[...]"

MÓDULO VISUALIZADOR DEL DICTAMEN 2006		
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
INDICE	CONCEPTO	TOTAL
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL	
	31 DE DICIEMBRE DE 2006	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	

Sigue cuadro...



25 JUL 2013



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

Continúa cuadro

121010	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
121020	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL	
121030	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES	105,019,630
121031	UTILIDAD DE ACTIVIDADES A TRAVES DE UN FIDEICOMISO	2,339,775
121040	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
121050	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS	
121060	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,077,551,040
121070	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
121080	INVENTARIO ACUMULABLE	1,559,028,827
131090	DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004	
121100	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
121200	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	2,833,939,272

[...]"

Énfasis añadido.

*El importe de \$1,559'028,827, por concepto de "inventario acumulable, coincide con el manifestado por la sociedad controlada [REDACTED] en el renglón 116400 de su declaración anual complementaria del ejercicio fiscal de 2006, presentada el 12 de agosto de 2010.

Por lo anterior, la sociedad controladora [REDACTED] ACTUALMENTE [REDACTED] en el ejercicio en revisión omitió adicionar al resultado fiscal consolidado la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio 2006 de \$1,821'128,230 a \$3,380'157,057, en participación consolidable, manifestada en declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, toda vez que la contribuyente revisada, no consideró en la determinación de su resultado fiscal consolidado, el inventario acumulable en cantidad de \$1,558,055,993 en participación consolidable, determinado y acumulado por su sociedad controlada [REDACTED] y en consecuencia omitió un impuesto sobre la renta consolidado.

Lo anterior, se conoció como sigue:

Mediante oficio 900 05-2010-2149 del 01 de julio de 2010, emitido por esta Administración, referido en el inciso a) de la página 2 del presente oficio se citó al C.P. [REDACTED] a fin de llevar a cabo la revisión de papeles de trabajo que formuló, respecto del dictamen que para efectos fiscales, emitió sobre los estados financieros de la contribuyente [REDACTED]

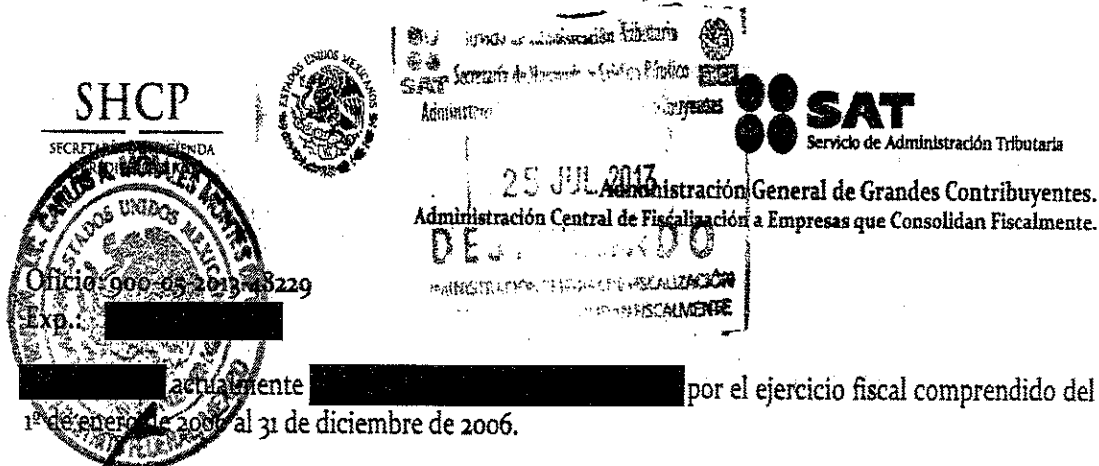


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 781 -



[redacted] actualmente [redacted] por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

Esta revisión se realizó el día 16 de julio de 2010, con el L.C. [redacted] en representación del C.P. [redacted] en la cual se levantó acta de comparecencia a folios CONS3-10-466 a CONS3-10-473, así mismo, se hicieron constar entre otras, las siguientes preguntas y respuestas:

"PREGUNTA N° 14.- En relación a la diferencia que en cantidad de \$1'559,028,827, resulta de comparar el resultado fiscal de la sociedad controlada [redacted] manifestado en el índice 280017, columna 'UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL INDIVIDUAL', del anexo "28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORME EN CONSOLIDACIÓN", del dictamen fiscal de [redacted] en cantidad de \$1,808,197,492, y el importe por \$3,367,226,319, registrado en el índice 120170 'Resultado Fiscal' del anexo '12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA', del dictamen fiscal correspondiente a la sociedad controlada [redacted] obtenido de los sistemas institucionales, indique el motivo de la diferencia, proporcionando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.

RESPUESTA.- Se proporciona archivo electrónico que incluye el resumen del fundamento legal de la compañía para no incluir dentro del resultado fiscal consolidado el inventario acumulable de [redacted] Milenio, S.A. de C.V., por la cantidad de \$1,808'197,492."

Cabe mencionar que a la fecha del levantamiento del acta de comparecencia del 16 de julio de 2010, la sociedad controlada [redacted] y [redacted] actualmente [redacted] no habían presentado declaración anual complementaria, las cuales se presentaron el 12 de agosto de 2010 y el 13 del mismo mes y año, respectivamente.

A continuación se transcribe el fundamento legal por el cual la compañía no incluyó en la determinación del resultado fiscal consolidado el inventario acumulable de su sociedad controlada [redacted] por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, proporcionado en archivo electrónico por el L.C. [redacted] durante la comparecencia referida, como a continuación se transcribe:

[redacted]
Auditoría al 31 de diciembre de 2006
Inventario Acumulable

El fundamento legal utilizado por [redacted] para no considerar el inventario acumulable en la determinación del resultado fiscal consolidado, se basa en lo siguiente:



23 JUL 2013



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Realización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

La controlada [REDACTED] ejerció la opción de acumular sus inventarios al 31 de diciembre de 2004 en los términos de las fracciones IV y V del Artículo (sic) Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para 2005 (Artículo Tercero)

El 1 de diciembre de 2004 el Ejecutivo Federal publica en el diario oficial de la federación, diversas modificaciones a las leyes fiscales que entraron en vigor el 1 de Enero de 2005, entre las cuales se encuentra la sustitución de la deducción de las adquisiciones de mercancías por la deducción del costo de ventas.

Por su parte, la fracción IV del Artículo (sic) Tercero de la LISR para 2005, señala que para determinar el costo de lo vendido del ejercicio no se podrán deducir las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004 sin embargo esta misma disposición establece que el costo de lo vendido de dichas existencias de inventarios al 31 de diciembre podrán ser deducibles en caso que los contribuyentes opten por acumular las mismas.

Con objeto de deducir, a partir de 2005 los inventarios que tenían al 31 de diciembre de 2004 una sociedad controlada de [REDACTED] ejerció la opción de acumularlos conforme a lo establecido en las fracciones IV y V del Artículo Tercero.

La fracción IV del Artículo (sic) Tercero establece que para determinar el costo de lo vendido, los contribuyentes no podrán deducir los inventarios que tenían al 31 de diciembre de 2004. No obstante, ese mismo artículo (sic) establece que podrán optar por acumularlos, en cuyo caso podrán deducirlos conforme los enajenen.

"Las fracciones IV y V del Artículo (sic) Tercero no precisan que el inventario acumulable debe considerarse como un ingreso para fines del ISR.

Este concepto ha sido también definido por nuestra Suprema Corte De Justicia de Nación en la tesis que a continuación se transcribe:

Ingresos en crédito y entradas de efectivo, diferencias para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Todo ingreso, entendido como la modificación positiva registrada en el patrimonio de una persona, susceptible de valoración pecuniaria, produce un derecho de crédito, que coloca a quien lo obtiene como sujeto del impuesto sobre la renta, aun cuando no produzca como consecuencia inmediata una entrada de efectivo.

Este último supuesto no produce una modificación en el patrimonio, aun cuando se produzca al mismo tiempo que la percepción del ingreso. Así, toda enajenación de bienes o prestación de servicios, que se celebra por personas físicas o morales, constituye un acto jurídico que reporta ingerios (sic) en crédito susceptibles de ser gravados por la ley, pues estos derivan de contrato sinalagmáticos en los que las partes se obligan a satisfacerse prestaciones recíprocas, independientemente de que dicho derecho de crédito se satisfaga en el momento mismo en que se entrega la casa o se presta el servicio (operaciones de contado) o se difiera su entrega (operaciones a plazo) (énfasis añadido).

De lo anterior, se desprende que un ingreso se traduce forzosamente en la incorporación de una renta real y disponible para el sujeto pasivo, que incrementa su patrimonio.

Adicionalmente, cabe señalar que cuando el legislador ha querido otorgar esa característica a algún concepto así lo ha señalado expresamente en la LISR, tal y como se puede apreciar en sus artículos 17, 19 y 20.

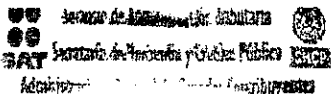


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 783 -



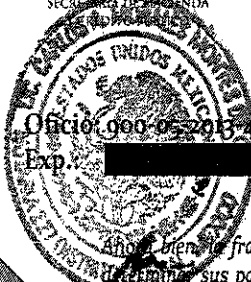
25 JUL 2013



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA



Oficio 900-05-2013-48229

Exp. [REDACTED]

Ahora bien, la fracción II del artículo 76 de la LISR, señala que las sociedades controladas deberán determinar sus pagos provisionales conforme al procedimiento señalado en el artículo 14 de la ley en comento.

A su vez, el artículo 76 de la LISR establece que la utilidad fiscal, para pago provisional, se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad por los ingresos nominales del periodo, considerándose como tales a los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación acumulable.

A este respecto, cabe precisar que la LISR indica los conceptos que deben considerarse como ingresos acumulables para las personas morales, por lo que, al representar un elemento esencial del impuesto, de conformidad con el artículo (sic) 5 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual precisa que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y a las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, los contribuyentes se encuentran obligados a considerar como tales aquellos conceptos a los que la ley les otorga ese carácter.

Lo anterior se ve corroborado con la tesis que a continuación se transcribe:

Las leyes tributarias, su interpretación al tenor de lo dispuesto en el artículo (sic) 5 del código fiscal de la federación. Conforme a lo establecido en el citado numeral, para desentrañar el alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a esta, las respectivas disposiciones deben aplicarse en forma estricta mientras del resto de las disposiciones tributarias podrá realizarse aplicando cualquier otro método de interpretación jurídica.

Ante tal disposición, la Suprema Corte de Justicia considera que la circunstancia de que sean de aplicación estricta determinadas disposiciones de carácter tributario, no impide al interprete acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del creador de las normas, cuando de su análisis literal en virtud de las palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común, se genere incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de la disposición en comento es construir a quien realizara la paliación de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en ella una vez desentrañado su alcance.

Por lo anterior, al no representar el inventario acumulable un ingreso para efectos de la LISR, además de no traducirse en un incremento del patrimonio de la sociedad controlada de [REDACTED] este no debe sumarse a los demás ingresos nominales de dicha compañía para determinar los pagos provisionales correspondientes en términos del referido artículo (sic) 14 de la LISR puesto que, considerar lo contrario, el inventario acumulable tendría que sumarse a estos, en lugar de sumarse a la (sic) utilidad fiscal, como lo establece expresamente el último (sic) párrafo de la fracción V del Artículo (sic) Tercero.

Ahora bien, en materia de consolidación fiscal el segundo párrafo del artículo (sic) 77 de la LISR, señala que la sociedad controladora, en este caso [REDACTED] efectuara pagos provisionales consolidados, aplicando el procedimiento contenido en el artículo (sic) 14 de la LISR, y deberá considerar los ingresos de todas sus sociedades controladas y los suyos. A su vez, el artículo 14 del mismo ordenamiento menciona que el coeficiente de utilidad se determinará con base en los ingresos nominales de sus sociedades controladas y de ella misma y la utilidad fiscal consolidada.



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

25 JUL 2013



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

Así, como resultado de lo anterior, y de una aplicación estricta de las disposiciones fiscales en comento, en los términos del artículo (sic) del CFF, es posible concluir que para efectos de calcular los pagos provisionales consolidados, [REDACTED] deberá considerar exclusivamente los ingresos de sus sociedades controladas y de ella misma, dado que la LISR no contempla al inventario acumulable como un ingreso, [REDACTED] no se encontraría obligada a tomar dicho inventario para calcular sus pagos provisionales consolidados de ISR.

Adicionalmente, si consideramos lo dispuesto por el artículo (sic) 6 del CFF (el cual señala que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran), así como lo dispuesto por el artículo (sic) 77 de la LISR en relación con el artículo 14 de dicha ley, [REDACTED] no debe considerar el inventario acumulable para calcular sus pagos provisionales consolidados del ISR, ya que no es posible considerar a dicho inventario como ingreso para efectos de este ordenamiento.

En materia de consolidación fiscal, la cual representa un régimen especial obligatorio para los contribuyentes que opten por determinar el ISR conforme a dicho régimen, el artículo 68 de LISR indica que para determinar el resultado fiscal o la pérdida fiscal consolidada, la sociedad controladora procederá, en término (sic) generales como sigue:

1. Sumara las utilidades fiscales del ejercicio del que se trate correspondientes a las sociedades controladas.
2. Restara las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas.
3. Según sea el caso, sumara su utilidad fiscal o restara su pérdida (sic) fiscal.
4. Sumara o restara en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdidas fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores.
5. Los conceptos antes señalados se sumaran o restaran a la participación consolidable.
6. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán en su caso las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61 de la LISR.

Como puede apreciarse de una aplicación estricta de lo dispuesto en el artículo (sic) 68 de la LISR, [REDACTED] no debe considerar el inventario acumulable para fines de determinar el resultado fiscal o la pérdida (sic) fiscal consolidada, ya que dicha partida no forma parte de la utilidad fiscal o pérdida fiscal de su sociedad controlada, al no representar, como ya se señaló (sic) con anterioridad un ingreso para fines de la LISR.

Por otra parte es importante mencionar que conforme a lo dispuesto por el inciso c de la fracción XIV del artículo (sic) tercero, en la declaración de consolidación de 2005, se acreditaran los pagos provisionales efectivamente enterados por la sociedad controladora y la (sic) sociedades controladas en la participación consolidable, hasta por el monto del impuesto causado en el ejercicio por cada una de dichas sociedades, en la misma participación.

Por lo anterior, el impuesto que causo la sociedad controlada derivado del inventario acumulable deberá reflejarse en la consolidación, al momento de efectuar el acreditamiento mencionado en los párrafos anteriores.

A partir de 2006 la controlada deberá entregar a la controladora los pagos provisionales y el ISR del ejercicio, disminuido de dichos pagos, que corresponda en la participación consolidable, incluyendo el efecto del inventario acumulable."



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

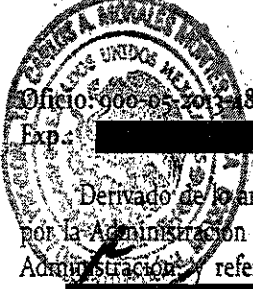
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 785 -

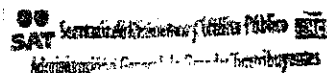
SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



Oficio 900-05-2011-8229

Exp. [REDACTED]



25 JUL 2013



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Derivado de lo anterior, mediante oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1" adscrita a esta Administración, y referido en el inciso b) de las páginas 2 y 3 del presente oficio, se solicitó al C.P. [REDACTED] Contador Público Registrado, que dictaminó los Estados Financieros de la Contribuyente revisada, entre otra, la siguiente información y documentación:

12-0066

"12- Indique razón y fundamento legal, en su caso, de la diferencia en cantidad de \$1'559,028,827, que resulta de comparar el resultado fiscal de la sociedad controlada [REDACTED] manifestado en el índice 280017, columna 'UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL INDIVIDUAL', del anexo '28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORME EN CONSOLIDACIÓN', del dictamen fiscal de [REDACTED] en cantidad de \$1,808,197,492, y el importe por \$3,367,226,319, registrado en el índice 120170 'Resultado Fiscal' del anexo '12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA', del dictamen fiscal correspondiente a la sociedad controlada [REDACTED] adjuntando la documentación comprobatoria que ampare su dicho."

En respuesta a lo anterior, con escrito del 2 de junio de 2011, recibido el mismo día de su fecha de emisión en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, a la que le correspondió el folio de entrada 08281, suscrito por el L.C. [REDACTED] en representación del C.P. [REDACTED] acreditó su personalidad con Escritura Pública No. 56,991, Volúmen 1,454 del 6 de octubre de 2009, pasado ante la fe del Lic. Carlos A. Yfarraguerri y Villarreal, Titular de la Notaría número 28 del Distrito Federal, dicho profesionalista proporcionó entre otros documentos, lo siguiente:

"Con relación al punto 12 del citado oficio se incluye lo siguiente:

La diferencia citada por la autoridad fiscal requirente, deviene de que [REDACTED] en cabal cumplimiento del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente consideró, para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, los conceptos expresamente previstos en el precepto legal antes aludido en el que no se incluye el inventario acumulable."

De lo anterior, se observa que el L.C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal del C.P. [REDACTED] proporcionó la información y documentación en forma parcial, solicitada mediante oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011 antes referido, motivo por el cual no se contaba con la información y documentación suficiente para verificar la situación fiscal de la contribuyente, por lo que para efectos de seguir con el procedimiento de revisión previsto en el artículo 52-A, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, mediante oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, el cual contiene la orden de revisión GSD9400235/11 emitido por esta Administración y referido en el inciso d) de la página 3 del presente oficio, se solicitó directamente a [REDACTED] actualmente [REDACTED] la información y documentación que no fue proporcionada por el contador público mediante el oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011, y a efecto de ejercer



Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Administración General de Grandes Contribuyentes



Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2013

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, como sigue:

"8.- Indique razón y fundamento legal, en su caso, de la diferencia en cantidad de \$1'559,028,827, que resulta de comparar el resultado fiscal de la sociedad controlada [REDACTED] manifestado en el índice 280017, columna "UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL INDIVIDUAL", del anexo '28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORME EN CONSOLIDACIÓN', del dictamen fiscal de [REDACTED] en cantidad de \$1,808,197,492, y el importe por \$3,367,226,319, registrado en el índice 120170 'Resultado Fiscal' del anexo '12.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA', del dictamen fiscal correspondiente a la sociedad controlada [REDACTED] adjuntando la documentación comprobatoria que ampare su dicho."

En relación a lo anterior, mediante escrito del 15 de julio de 2011, recibido el día 18 del mismo mes y año ante la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, y referido en el inciso e) de las páginas 3 y 4 del presente oficio, el L.A.E. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] solicitó ampliación del plazo para presentar la información y documentación requerida a través del oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, antes señalado.

En atención a la solicitud de prórroga antes mencionada, con oficio 900-05-03-2011-13614 del 25 de julio de 2011, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" adscrita a esta Administración y referido en el inciso f) de la página 4 del presente oficio, se le comunicó a dicha contribuyente que se le concedía prórroga por diez días más para dar cumplimiento a la solicitud de la información y documentación contenida en el oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011.

Ahora bien, mediante escrito del 02 de agosto de 2011, recibido el mismo día de su fecha de emisión en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, referido en el inciso g) de la página 4 del presente oficio, suscrito por el L.A.E. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de la contribuyente [REDACTED] antes [REDACTED] la contribuyente dió respuesta al oficio antes mencionado manifestando entre otros, lo siguiente:

"8.- Del punto ocho se manifiesta que la diferencia citada por la autoridad fiscal requirente, deviene de que [REDACTED] en cabal cumplimiento del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente consideró, para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, los conceptos expresamente previstos en el precepto legal antes aludido en el que no se incluye el inventario acumulable."

Por lo anterior, mediante oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" adscrita a esta

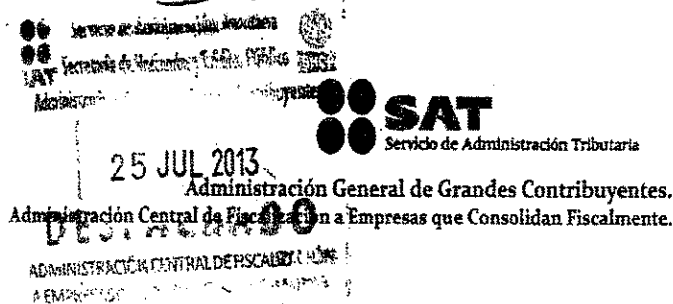
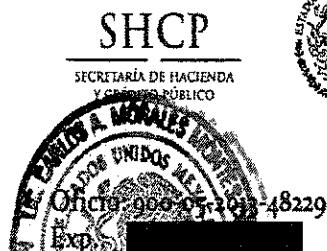


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 787 -



Administración (referido en el inciso j) de la página 5 del presente oficio, se le dieron a conocer a esa contribuyente las observaciones determinadas que entrañaron incumplimiento de las disposiciones fiscales en relación, entre otras, al omitir adicionar al resultado fiscal consolidado la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada Elektra del Milenio A. C. CV del ejercicio 2006 de \$1,821'128,230 a \$3,380'157,057, manifestada en declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, toda vez que la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] no consideró en la determinación de su resultado fiscal consolidado el inventario acumulable en cantidad de \$1,559'028,827 y en consecuencia omitió un impuesto sobre la renta consolidado.

Ahora bien, con escrito del 1º de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013 en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603 firmado por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] quien acreditó su personalidad con fotocopia del Instrumento Público Notarial número 95,889, volumen 1853 de fecha 13 de octubre de 2003, otorgado ante la fe del Lic. Gerardo Correa Etchegaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal, dió respuesta al oficio de observaciones dentro del plazo legal de 20 días previsto en el artículo 48, primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente, manifestando lo siguiente:

REFUTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES

PRIMERO: Observaciones efectuadas por esa H. Administración en relación con la revisión del resultado fiscal consolidado por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 que determinó [REDACTED] antes [REDACTED]

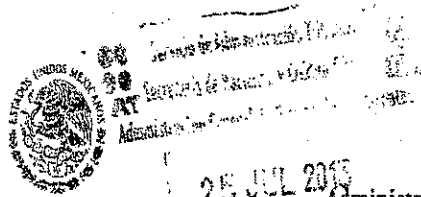
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- DE LAS PERSONAS MORALES SOCIEDADES MERCANTILES CONTROLADAS.

Ejercicio de 1º de enero al 31 de diciembre de 2006

I. Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio en revisión, declaró un resultado fiscal consolidado en cantidad menor, toda vez que la contribuyente en su determinación no consideró lo siguiente:

En relación con la observación vertida por esa H. Administración manifiesto lo siguiente:

[REDACTED] controlada de mi representada ejerció la opción de acumular sus inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004.



25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

Para tales efectos, la fracción IV del artículo Tercero de la Ley del ISR para 2005 señala que para determinar el costo de lo vendido del ejercicio no se podrán deducir las existencias de inventarios al 31 de diciembre de 2004, sin embargo, esta misma disposición establece que el costo de lo vendido de dichas existencias podrían ser deducibles en caso de que el contribuyente optará por acumular las mismas.

Para efectos de determinar el inventario acumulable, se consideró lo siguiente:

Del inventario al 31 de diciembre de 2004 (inventario base), se disminuyeron los siguientes conceptos:

- El saldo de inventarios de la Regla 106 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).
- Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2004 de las utilidades fiscales.
- La diferencia de las mercancías de importación

= Inventario acumulable

Para efectos de determinar el monto del inventario acumulable que corresponde al 2005 y ejercicios posteriores, se consideró lo señalado por el propio Artículo Tercero, el que se establece el procedimiento para calcular el índice promedio de rotación de inventarios, el cual sirvió de indicador para determinar el número de años y el porcentaje en los cuales deberá acumularse el inventario acumulable.

Como se puede observar, las fracciones IV y V del Artículo Tercero de la LISR no precisan que el inventario acumulable debe considerarse como un ingreso acumulable para fines de este impuesto.

De acuerdo con lo definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingreso se puede definir conforme lo siguiente:

"INGRESOS EN CRÉDITO Y ENTRADAS DE EFECTIVO. DIFERENCIAS PARA EFECTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Todo ingreso, entendido como la modificación positiva registrada en el patrimonio de una persona, susceptible de valoración pecuniaria produce un derecho de crédito, que coloca a quien lo obtiene como sujeto del impuesto sobre la renta, aún cuando no produzca como secuencia inmediata una entrada de efectivo. Este último supuesto no produce una modificación en el patrimonio, aun cuando se produzca al mismo tiempo que la percepción del ingreso. Así, toda enajenación de bienes o prestación de servicios, que se celebra por personas físicas o morales, constituye un acto jurídico que reporta ingresos en crédito susceptibles de ser gravados por la ley, pues éstos derivan de contratos sinalagmáticos en los que las partes se obligan a satisfacerse prestaciones recíprocas, independientemente de que dicho derecho de crédito se satisfaga en el momento mismo en que se entrega la cosa o se presta el servicio (operaciones de contado) o se difiera su entrega (operaciones a plazo)" (énfasis añadido)

Luego entonces, tenemos que el inventario acumulable no produce una modificación en el patrimonio.

En suma, podemos señalar que de dicha tesis se desprende que un ingreso se traduce forzosamente en la incorporación de una renta real y disponible para el sujeto pasivo, la cual incrementa su patrimonio.

Ahora bien, debemos precisar que la misma Ley del ISR indica lo que debe considerarse como un ingreso acumulable para las personas morales, por lo que al representar un elemento esencial de la contribución, debemos recurrir a lo establecido en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación (CFF).



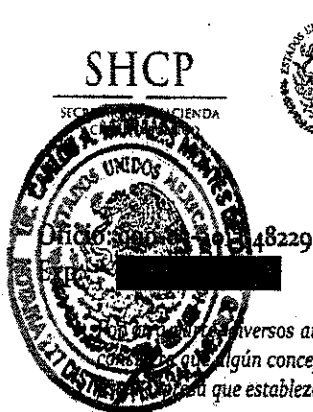
TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 789 -



25 JUL 2014
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DESTRUÍDO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
INSTRUMENTOS DE TRABAJO

En materia de consolidación fiscal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley del ISR, para efectos del cálculo del resultado fiscal se deberá calcular conforme sigue:

De lo anteriormente expuesto, tenemos que el inventario acumulable no representa un ingreso, al no traducirse en un incremento al patrimonio de mi representado, por lo que no deberá acumularse a sus demás ingresos, salvo que éste llegue a ser enajenado, situación que guarda plena concordancia con lo que las disposiciones fiscales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como "ingreso" y el momento de su causación, para efectos del Impuesto sobre la Renta

En materia de consolidación fiscal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley del ISR, para efectos del cálculo del resultado fiscal se deberá calcular conforme sigue:

"Artículo 68 - Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

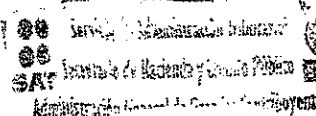
Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso.

d) Sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción.

e) Restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas en el ejercicio por las sociedades controladas y la sociedad controladora, siempre que la adquisición y enajenación de acciones se efectúe dando cumplimiento a los requisitos a que se refiere la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

(...) (énfasis añadido)

De las anteriores disposiciones, podemos observar que no hacen referencia a la acumulación del inventario acumulable para fines de determinar el resultado fiscal o la pérdida consolidada, ni para la determinación de

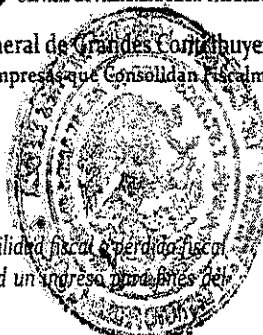


Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DESEMPLEADO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE



Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

los pagos provisionales consolidados, ya que dicha partida no forma parte de la utilidad fiscal o pérdida fiscal de su sociedad controlada, al no representar, como ya se señaló con anterioridad un ingreso para fines del ISR, sino al momento en que dicho inventario es enajenado.

Del estudio a los argumentos manifestados por la contribuyente en su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, en relación a las observaciones dadas a conocer en el oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, respecto a que [REDACTED] antes [REDACTED] en relación a que esa contribuyente omitió sumar en la determinación del resultado fiscal consolidado la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] así como de la revisión a la información proporcionada por esa contribuyente y el contador público dictaminador, en el transcurso de la revisión y la que obra en el expediente administrativo abierto en esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, esta autoridad determina que la observación no fue desvirtuada por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a sus argumentos citados a partir del último párrafo de la hoja 3 al segundo párrafo de la hoja 6 de su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, mismos que ya fueron transcritos anteriormente en las páginas de la 62 a la 65 del presente oficio, y en los que medularmente señala que el inventario acumulable no forma parte de la utilidad o pérdida fiscal de su sociedad controlada, al no representar un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, sino al momento de que dicho inventario es enajenado, por lo que el citado concepto no se deberá considerar para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, se precisa lo siguiente:

I. El artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006, establece:

"Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando el resultado fiscal en el ejercicio la tasa del 28%.

...

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título. Al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, la participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

...

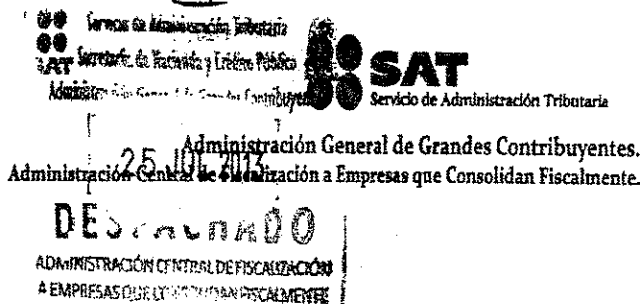
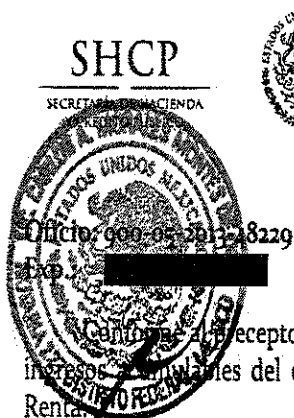


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 791 -



Conforme al precepto transcrito, la utilidad fiscal se obtiene por la diferencia que resulta entre los ingresos y deducciones del ejercicio y las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Nº 20066

Por lo que respecta al régimen de consolidación fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, en su artículo 68 establece:

"La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que trate.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso.

...

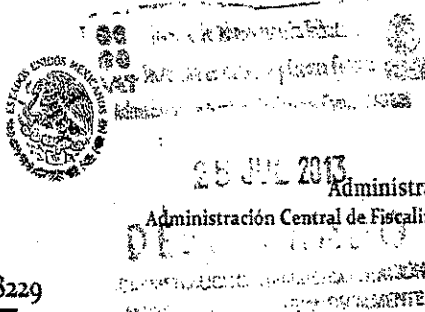
Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se sumarán o se restarán en la participación consolidable.

Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades controladoras, será del 100%.

...

II. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61 de esta Ley.

De acuerdo con el precepto transcrito, la sociedad controladora, para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada sumará, entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio



Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable y restará, entre otros, las pérdidas fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia pérdida fiscal, ambas en la participación señalada.

Por lo que toca a las sociedades controladas, éstas deben determinar su impuesto sobre la renta como si no hubiera consolidación. Lo anterior, se encuentra regulado por el artículo 76, fracciones I y II de la Ley de la materia vigente en 2006, en el cual textualmente se establece:

"Artículo 76. Las sociedades controladas a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la misma, tendrán las siguientes:

I. Presentar su declaración del ejercicio y calcular el impuesto como si no hubiera consolidación. Del impuesto que resulte disminuido de los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio entregarán a la sociedad controladora el que corresponda a la participación consolidable del ejercicio de que se trate. Las sociedades controladas enterarán ante las oficinas autorizadas el impuesto que se obtenga de disminuir al que calcularon, el que entregaron a la sociedad controladora.

II. Las sociedades controladas calcularán sus pagos provisionales como si no hubiera consolidación conforme al procedimiento y reglas establecidas en el artículo 14 de esta Ley. Del impuesto que resulte en cada uno de los pagos provisionales, entregarán a la sociedad controladora el que corresponda a la participación consolidable en el periodo de que se trate. Las sociedades controladas enterarán ante las oficinas autorizadas la cantidad que se obtenga de disminuir al impuesto que resultó en los términos de este párrafo el que entregaron a la sociedad controladora.

...

III. Ahora bien, conforme a las modificaciones que para el ejercicio fiscal de 2005 sufrió la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de dicho ejercicio entró en vigor la deducción denominada Costo de lo Vendido, la cual vino a sustituir el régimen de Deducciones de Compras. Lo anterior, de acuerdo con lo siguiente:

Hasta el 31 de diciembre de 2004, el artículo 29, fracción II de la citada ley establecía:

"Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas inclusive en ejercicios posteriores."

A partir del 1 de enero de 2005, dicha disposición se reformó en los siguientes términos:

"Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

...

II. El costo de lo vendido."

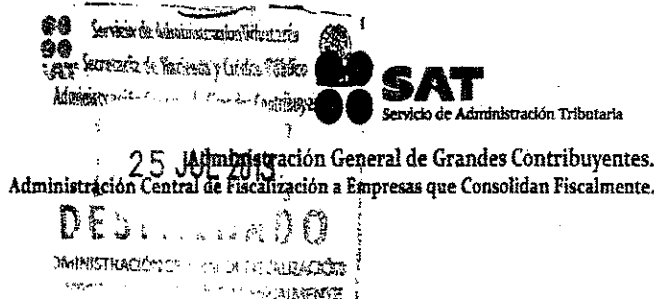
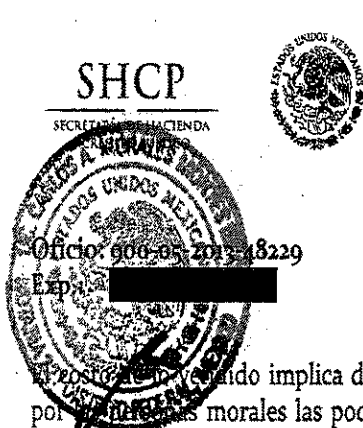


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 793 -



El costo de lo vendido implica de manera general, que las deducciones de las mercancías adquiridas por las empresas morales las podrán deducir hasta el momento en que se acumule el ingreso por la enajenación de sus productos, empatando así el ingreso con la deducción correspondiente.

1220066

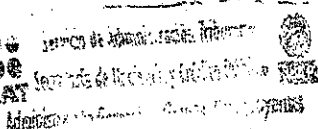
El introducir el régimen de deducción del costo de lo vendido implicó el terminar con la anticipación de la deducción que representaba el régimen de deducción de compras. En efecto, bajo este último régimen, con el solo hecho de haber comprado inventario, ya se tenía una deducción, independientemente de que la empresa no hubiera sufrido ninguna disminución en su patrimonio al cambiar un activo monetario por otro activo como son los inventarios. Asimismo, bajo este esquema la fecha en que se obtuviera el ingreso por la venta de ese inventario (que es cuando verdaderamente se modifica el patrimonio del contribuyente, ya sea porque obtenga una ganancia o una pérdida con motivo de la enajenación de ese inventario), era irrelevante para el momento de tomar la deducción pues se insiste, ésta se tomaba en el momento mismo de que se compraba.

El cambio de régimen vigente a partir del 1 de enero de 2005 del Costo de lo Vendido, en el cual la deducción no se anticipa, sino que se toma hasta que el inventario se enajena, de tal forma que el ingreso y la deducción se empatan, implicó que para los contribuyentes que tuvieran inventario al 31 de diciembre del 2004, el ingreso por su enajenación, que se tendría a partir de 2005, se reconocería sin deducción alguna, pues la deducción correspondiente a ese inventario se había tomado anticipadamente al momento de efectuar su compra. Debe mencionarse que esto último es legítimo, en virtud de que el contribuyente ya había anticipado la deducción de ese inventario.

Sin embargo, debe señalarse que la anterior situación trala la probable consecuencia de que los contribuyentes habrían tenido necesidad de liquidez adicional para poder cubrir el impuesto correspondiente a la venta del inventario, sin deducción alguna y que se produciría como consecuencia del nuevo régimen. Ante esta problemática, y a efecto de que las empresas conservaran su liquidez para aplicarlo en sus operaciones, es que el Legislador estableció un Régimen de Transición, en el Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005.

Dicho régimen, es el contenido en las fracciones IV y V del Artículo Tercero citado, en el cual se establece:

“...
IV. Los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán optar, por acumular los inventarios a que se refiere esta fracción, conforme a lo establecido en la siguiente fracción, en cuyo caso podrán deducir el costo de lo vendido conforme enajenen las mercancías. Cuando los contribuyentes no opten por acumular los inventarios considerarán que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha.”



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

“
V. Los contribuyentes al 31 de diciembre de 2004, deberán determinar el inventario base considerando el valor de los inventarios que tengan a dicha fecha, utilizando el método de primeras entradas primeras salidas.”

El inventario acumulable se obtendrá disminuyendo del inventario base a que se refiere el párrafo anterior, los conceptos señalados en los incisos a), b) y c) de esta fracción:
”

De lo anterior, tenemos lo siguiente:

a) La regla general consistía en que las mercancías adquiridas al 31 de diciembre de 2004, no podrán deducirse conforme al régimen del Costo de lo Vendido.

Lo anterior obedece a que las mercancías adquiridas al 31 de diciembre de 2004, que no hubieran sido vendidas y por lo tanto formaran parte del inventario final a esa fecha, ya habían sido deducidas.

b) Ahora bien, como primera excepción a la regla general antes señalada, se establece la opción para los contribuyentes de deducir sus mercancías que tuvieran al 31 de diciembre de 2004 conforme al régimen del Costo de lo vendido, siempre y cuando acumularan los inventarios de las mismas, conforme las reglas previstas en la ley de que se trata.

El objeto principal de esta opción, es deshacer los efectos de la deducción previamente realizada por los contribuyentes cuando adquirieron las mercancías, respecto de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004. Así, si a la fecha citada se restaron (vía deducción), para devolver la deducción se tuvo que realizar el efecto contrario, esto es, sumarlos, lo cual sucede mediante la acumulación de dichos inventarios. Con esto último se anulaba la deducción y el contribuyente ya se encontraba en la posibilidad de nuevamente tomar la deducción cuando los enajenara, lo cual debía suceder a partir de 2005, y por lo tanto, el contribuyente podía deducir los mismos conforme a las reglas del Costo de lo Vendido.

c) Por último, en caso de no ejercer la anterior opción, los contribuyentes deberán considerar que lo primero en enajenar a partir del 1 de enero de 2005, es lo primero que habían adquirido con anterioridad a dicha fecha, hasta agotar sus existencias.

Con esta última opción, se permite a aquellos contribuyentes que no les resulte conveniente la aplicación de la acumulación de inventarios, darle una presunción legal consistente en que lo primero que enajenan es lo primero que habían adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2005 hasta agotar dichos inventarios, este orden permite no mezclar el inventario con que se contara al 31 de diciembre de 2004 y el adquirido a partir de esa fecha.



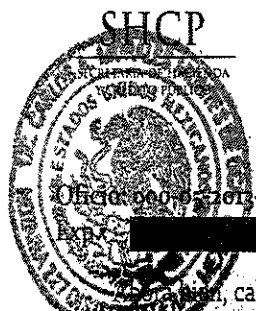
TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

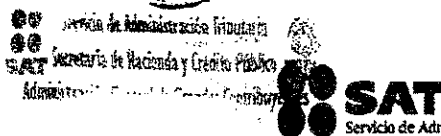
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 795 -



Oficio 000-052013-48229



25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

1270066

...cabe señalar que en el caso de que se hubiera optado por acumular el inventario con que contaba al 31 de diciembre de 2004, esto no se haría en un sólo ejercicio, sino conforme al índice promedio de rotación de inventarios de cada empresa, lo cual podrá ir desde cuatro hasta doce meses, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción V del Artículo Tercero en comento, con lo cual se impacta la liquidez de los contribuyentes para destinarlo al pago de impuestos en lugar de sus operaciones.

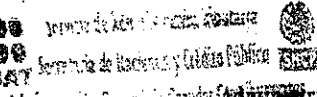
Conforme a lo mencionado, se concluye que en el caso de los contribuyentes que hayan optado por considerar las existencias en inventarios que tuvieran al 31 de diciembre de 2004, como un concepto deducible de conformidad con las reglas del costo de lo vendido, conforme se enajenen las mercancías que integran ese concepto, éstos debieron acumular dichos inventarios en los términos que establece la fracción V del Artículo Tercero de Disposiciones Transitorias a que se hace referencia en el presente punto.

De acuerdo con lo anterior, si bien el inventario acumulable determinado en los términos de la fracción V citada no es propiamente un ingreso de los establecidos en la Ley del Impuesto sobre Renta vigente en 2006, esa naturaleza se la da la disposición transitoria en comento y por la cual optó su sociedad controlada [REDACTED] por lo que el mismo resulta un concepto acumulable que debe considerarse para la obtención de la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, a que se refiere el artículo 10, fracción I de la referida Ley.

En este sentido, las sociedades que hubieran ejercido la opción prevista en las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2005, como es el caso, en la cual la sociedad controlada [REDACTED] de [REDACTED] de acuerdo a lo manifestado en su escrito, la misma estuvo obligada a determinar y acumular un inventario acumulable en los términos de la fracción V del precepto citado, concepto que deben considerar para la obtención de su utilidad o pérdida fiscal del ejercicio de dicha sociedad controlada.

IV. Cabe mencionar que al determinar la utilidad fiscal del ejercicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, uno de los elementos que se deben considerar son los ingresos acumulables, por lo que los contribuyentes que optaron por acumular el inventario deben sumar a dichos ingresos la cantidad correspondiente al inventario acumulable del ejercicio. Lo anterior, en términos de lo establecido en el tercer párrafo de la fracción V de la Disposición Transitoria en comento.

Adicionalmente, en el último párrafo de la multicitada fracción V se señala que para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, los contribuyentes deben acumular a la utilidad fiscal la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago. Además, en el ejercicio de 2005, se



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

23 JUL 2013

DEPT. DE FISCALIZACIÓN

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

acumulará mensualmente la doceava parte de la diferencia que resulte en los términos del inciso c) de esa fracción multicitada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago.

En ese sentido, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 establece que la utilidad fiscal para pagos provisionales se determina multiplicando el coeficiente de utilidad por los ingresos nominales correspondientes al periodo, siendo dicha utilidad fiscal a la cual se adiciona el inventario determinado conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

V. De acuerdo con lo anterior, toda vez que el ejercicio de la opción contenida en las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir de 2005 por parte de las sociedades, como es el caso de la sociedad controlada [REDACTED] de acuerdo a lo manifestado en su escrito, le obliga a ésta a determinar un inventario acumulable, concepto que acumularon para la determinación de su utilidad o pérdida fiscal del ejercicio 2005 y en el caso que nos ocupa 2006, en términos de lo establecido en la fracción V del artículo tercero citado, como se señala además en el punto III anterior.

Por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, la sociedad controladora revisada para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada debió sumar, entre otros conceptos, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable, por lo que no procede confirmar a [REDACTED] actualmente [REDACTED] el criterio de que para efecto del cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en los términos de lo dispuesto por la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión, no puede sumarse de forma parcial las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas con el objeto de determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, es decir no existe disposición alguna que señale que no pueda considerarse dentro de la utilidad fiscal para efectos de determinar el resultado fiscal consolidado, el inventario acumulable determinado por sus sociedades e incluido en su utilidad fiscal individual.

Asimismo, tampoco procede confirmar a [REDACTED] actualmente [REDACTED] que no existe disposición expresa en la ley que establezca que el inventario acumulable de una controlada se deba acumular a la utilidad fiscal consolidada o bien, como un concepto adicional a las utilidades y pérdidas fiscales de las controladas que se consideran en la determinación del resultado fiscal consolidado, toda vez que el inventario acumulable es sumado para determinar la utilidad o en su caso la pérdida fiscal individual y estas se suman a la utilidad o pérdida fiscal de la controladora quien es la que suma o resta para determinar el resultado fiscal consolidado.

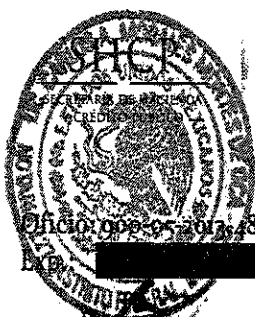


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

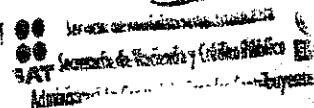
EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 797 -



Oficio: 000-05-2013-48229



SAT
Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DESIGNADO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Por lo antes expuesto, esta Administración enuncia la observación que se conoció con motivo de la revisión practicada a la documentación e información proporcionada, como sigue:

Nº 20066

La contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] para efectos de la determinación de la utilidad fiscal consolidada, omitió sumar para determinar su resultado fiscal consolidado la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio 2006 de \$1,821'128,230 a \$3,380'157,057, manifestada en declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, toda vez, que dicha sociedad considera en la determinación de su resultado fiscal el inventario acumulable en cantidad de \$1,559'028,827, en participación consolidable por \$1,558,055,993 lo anterior, de conformidad con los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión.

Del análisis efectuado a la documentación comprobatoria proporcionada por la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] que amparan la determinación de la utilidad fiscal consolidada, incluidos en los papeles de trabajo antes transcritos y a los argumentos plasmados por la propia contribuyente; se desprende que, el primer párrafo del artículo 68, primer párrafo de la fracción I, inciso a) y tercer párrafo de la fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, señala lo siguiente:

"Artículo 68.- La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

[...]

Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades controladoras, será del 100%.

[...]"

(Énfasis y subrayado añadido.)

Asimismo, es de aclarar, que el artículo 68 anteriormente señalado, obliga a [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su carácter de sociedad controladora, a determinar su resultado fiscal consolidado bajo la mecánica que el propio artículo le establece.

Ahora bien, con escrito sin fecha de emisión, recibido el día 06 de junio de 2013 en la Oficina de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130020045 firmado por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED]



21 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

[REDACTED] actualmente [REDACTED] quien acreditó su personalidad con fotocopia del Instrumento Público Notarial número 95,889, volumen 1853 de fecha 13 de octubre de 2003, otorgado ante la fe del Lic. Gerardo Correa Etchegaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal, en alcance a su escrito de fecha 1º de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013 en la Oficialía de Partes en ventanilla de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603 firmado por el mismo C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] manifestó lo siguiente:

Respecto del pago anual consolidado

En este orden de ideas y a efecto de ubicar debidamente el contexto del presente escrito, es preciso señalar que de acuerdo a lo establecido en el oficio de observaciones anteriormente referido, se desprende que la Autoridad habría advertido la supuesta omisión en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 por un monto de \$1,559,028,827.00 (Un mil quinientos cincuenta y nueve millones veintiocho mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) como resultado de no haber reflejado en el pago consolidado anual, el efecto fiscal de su controlada [REDACTED] por dicho monto.

Bajo esta consideración, se estableció la supuesta omisión, bajo el argumento relativo a que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar, a más tardar dentro del mes siguiente a aquel en que ocurra este hecho, de conformidad con los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) y 72 fracción III, ambos ordenamientos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2006.

Atendiendo el contexto anteriormente referido, es el deseo de mi representada exhibir como prueba supervenientes dentro del proceso de fiscalización que nos ocupa, las documentales de las que se desprende que mi representada no se encontraba obligada a reflejar el efecto fiscal de su controlada [REDACTED] para efectos de la determinación de su resultado fiscal consolidable.

La prueba superveniente que se presenta a fin de que sea valorada y considerada por esa H. Autoridad Fiscalizadora, es la que a continuación se menciona:

- **LA DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en la declaración complementaria a la declaración anual presentada por [REDACTED] el pasado 14 de mayo de 2013, a través del Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria, con número de operación 2DAIC, misma que contiene la cadena original y sello digital que autentifican su presentación y su valor probatorio pleno.

Conviene destacar que a través de dicha declaración, se acredita con toda precisión, que la empresa [REDACTED] ha determinado la base del impuesto consolidado anual, considerando de forma exacta la aportación de los resultados fiscales del ejercicio de sus consolidadas (dentro de las que se encuentra [REDACTED]) a la base del impuesto consolidado, en los términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente durante el ejercicio de 2005, mismo que es del tenor siguiente:

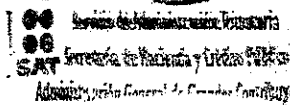
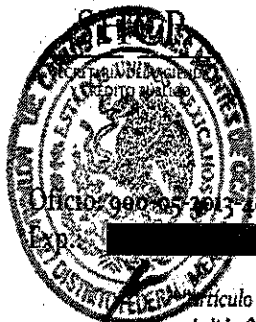


TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 799 -



Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DETERMINADO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

(...)

En este orden de ideas y tal y como podrá apreciar esa H. Autoridad Fiscal del recálculo del resultado fiscal consolidado que se sirva realizar de mi Representada, podrá apreciar con toda claridad que en el presente caso, [REDACTED] ha determinado su resultado fiscal del ejercicio, sumando las utilidades (o pérdidas según sea el caso) fiscales individuales del ejercicio correspondiente dentro de las que se destaca la de [REDACTED] la cual se encuentra reflejada fielmente en la declaración anual de la consolidación.

Con base a lo anteriormente expuesto y en apoyo a la documentación superveniente aportada de la cual se desprende que el resultado fiscal consolidado coincide fielmente con la situación fiscal reflejada por mi representada y por su controladas, es dable concluir que mi Representada no está obligada a considerar ninguna modificación a la declaración anual consolidada (sic) por cuanto hace al ejercicio fiscal de 2006, tal y como se afirmó en el oficio de observaciones.

Del estudio a sus argumentos citados anteriormente por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su escrito sin fecha de emisión recibido el día 06 de junio de 2013 en la Oficialía de Partes en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en alcance a su escrito de fecha 1º de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, se conoció que aún cuando su sociedad controlada [REDACTED] haya presentado con fecha 14 de mayo de 2013, declaración anual complementaria del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, la misma no desvirtúa las observaciones consignadas en el oficio número 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, referido en el inciso j) de la página 5 del presente oficio, por lo que al respecto, se hace de su conocimiento la siguiente determinación:

Cabe señalar que efectivamente [REDACTED] presentó declaración anual complementaria del ejercicio 2006, a través de la cual, disminuye su utilidad fiscal individual,

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



25 JUL 2013
Servicio de Administración Tributaria
SAT
Servicio de Administración Tributaria



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DETERMINADO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

en virtud de que elimina el inventario acumulable de los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por la contribuyente revisada, en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, irregularidad determinada por esta Administración, y dada a conocer a través del oficio de observaciones emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente adscrita a esta Administración mediante oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, señalado en el inciso j) la página 5 de esta resolución, no obstante lo anterior, la irregularidad subsiste, por lo señalado en las páginas 65 a 76 de esta resolución.

Al respecto, resulta importante señalar que mediante escrito sin fecha de emisión, presentado en la oficialía de partes de la Administración General de Grandes de Contribuyentes, al que le correspondió el folio de entrada número 130020045, señalado en las páginas 72 a 74 de esta resolución, la contribuyente revisada, manifestó que había corregido su situación fiscal respecto de sus pagos provisionales consolidados, observación que se le dio a conocer mediante el oficio de observaciones señalado en el párrafo anterior, sumando a la utilidad fiscal consolidada estimada determinada de conformidad con el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago correspondiente, determinado por su sociedad controlada [REDACTED] en los términos de la fracción V del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005.

De lo anterior, se desprende que es la propia controladora revisada que reconoce, con motivo de dicha autocorrección, que el inventario acumulable correspondiente al ejercicio de 2006, determinado por su sociedad controlada [REDACTED] si es un ingreso acumulable de conformidad con lo dispuesto en la citada fracción V del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005, es por ello que esta Administración además de los argumentos vertidos, concluye que la irregularidad persiste y la contribuyente revisada debió sumar la utilidad fiscal individual de la citada sociedad controlada incluyendo el inventario acumulable del ejercicio 2006.

Es por ello que la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] no desvirtuó la omisión respecto a la modificación de la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] al no incluir el inventario acumulable determinado por esa sociedad controlada, en el cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en términos de la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al proporcionar la declaración complementaria del impuesto sobre la renta del ejercicio de 2006 presentada el 14 de mayo de 2013 por la sociedad controlada.

Cabe mencionar que de conformidad con el primer párrafo del artículo 69 en correlación con el artículo 63 ambos preceptos normativos del Código Fiscal de la Federación vigente, de los expedientes



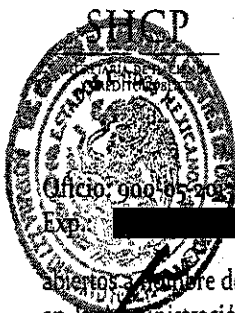
TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

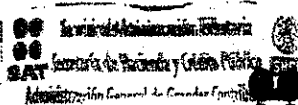
ACTORA:

- 801 -



Oficio: 900/95-2027-48229

Exp:



SAT

Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2013

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización de Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DESPACHADO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

122 0066
abiertos. Se refiere de [REDACTED] actualmente [REDACTED] en la Administración General de Grandes Contribuyentes, se conoció que la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitió sentencia de fecha 01 de octubre de 2010 en la que reconoció la validez de la resolución impugnada de fecha 01 de mayo de 2010, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, misma que ha causado estado por ministerio de Ley, en relación al Juicio de Nulidad 33900/07-17-05-1, promovido por [REDACTED] actualmente [REDACTED] respecto de la solicitud de confirmación de criterio en el que solicitaba que para efecto del cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en términos de la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente deberá tomarse en consideración las utilidades fiscales del ejercicio de las controladas con el objeto de determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, sin considerar el inventario acumulable determinado por las sociedades controladas, la cual actualmente se encuentra firme.

En relación a lo anterior, es evidente que la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] promovió Juicio de Nulidad ante la autoridad Jurisdiccional correspondiente, sin que en dicho medio de defensa haya sido emitida una resolución favorable a esa contribuyente, por lo que la contribuyente en revisión en su carácter de sociedad controladora, debió considerar en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio en revisión la utilidad fiscal del ejercicio de su sociedad controlada [REDACTED] en sus términos sin excluir el inventario acumulable determinado por ésta en el ejercicio en revisión.

De acuerdo a lo antes expuesto, esta Administración Central, determina que la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su carácter de sociedad controladora, omitió sumar en el resultado fiscal consolidado, la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio 2006 de \$1,821'128,230 a \$3,380'157,057, en participación consolidable, manifestada en declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, toda vez, que dicha sociedad controlada considera en la determinación de su resultado fiscal el inventario acumulable en cantidad de \$1,559'028,827, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 y en consecuencia omitió el impuesto sobre la renta consolidado correspondiente.

La determinación anterior, así como las señaladas en las páginas de la 15 a la 40 y de la 40 a la 52, modifican la utilidad fiscal consolidada y el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006 declarado por [REDACTED] actualmente [REDACTED] como se señaló en las páginas 9 y 10 del presente oficio determinativo de crédito fiscal.

De la digitalización que antecede, se advierte medularmente que la autoridad demandada señaló que de la revisión practicada al dictamen fiscal, a la información y documentación proporcionada por la contribuyente revisada hoy parte actora, así como a la que obra en los archivos de la administración revisora, se determina que la contribuyente ***** actualmente ***** en su carácter de sociedad controladora, omitió sumar en la determinación del resultado fiscal en la participación consolidable correspondiente a su sociedad controlada ***** del mismo ejercicio 2006 de \$1,821'128,230.00 a \$3,380'157,057.00, cantidad última manifestada en la declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010 e incluye el inventario acumulable en cantidad de \$1,559'028,827.00 que en participación consolidable es de \$1,558'055,993, infringiendo lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2006, siendo parcial y no total la utilidad fiscal individual fluida a la sociedad controladora.

Que de la declaración anual del ejercicio en revisión normal y complementarias de fechas 2 de abril de 2007, 12 de agosto de 2010 y 14 de mayo de 2013, se advierte que la sociedad controladora hoy demandante consideró la utilidad individual de la sociedad controlada ***** sin sumar el importe del inventario acumulable determinado en cantidad de \$1,558'055,993.00 en participación consolidable.

Que el legislador estableció un Régimen de Transición en el Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, del cual se aprecia lo siguiente:

a) La regla general consistía en que las mercancías adquiridas al 31 de diciembre de 2004, no podrán deducirse conforme al régimen del Costo de lo Vendido.

Lo anterior obedece a que las mercancías adquiridas al 31 de diciembre de 2004, que no hubieran sido vendidas y por lo tanto formarían parte del inventario final a esa fecha, ya habían sido deducidas.

b) Ahora bien, que como primera excepción a la regla general antes señalada, se establece la opción para los contribuyentes de deducir sus mercancías que tuvieran al 31 de diciembre de 2004

conforme al régimen del Costo de lo vendido, siempre y cuando acumularan los inventarios de las mismas, conforme las reglas previstas en la ley de que se trata.

Asimismo, que el objeto principal de esta opción, es deshacer los efectos de la deducción previamente realizada por los contribuyentes cuando adquirieron las mercancías, respecto de los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004; así, sí a la fecha citada se restaron (vía deducción), para devolver la deducción se tuvo que realizar el efecto contrario, esto es, sumarlos, lo cual sucede mediante la acumulación de dichos inventarios, con esto último se anulaba la deducción y el contribuyente ya se encontraba en la posibilidad de nuevamente tomar la deducción cuando los enajenara, lo cual debía suceder a partir de 2005, y por lo tanto, el contribuyente podía deducir los mismos conforme a las reglas del Costo de lo Vendido.

c) Por último, en caso de no ejercer la anterior opción, los contribuyentes deberán considerar que lo primero en enajenar a partir del 1° de enero de 2005, es lo primero que habían adquirido con anterioridad a dicha fecha, hasta agotar sus existencias.

Que, con esta última opción, se permite a aquéllos contribuyentes que no les resulte conveniente la aplicación de la acumulación de inventarios, darle una presunción legal consistente en que lo primero que enajenan es lo primero que habían adquirido con anterioridad al 1° de enero de 2005 hasta agotar dichos inventarios, este orden permite no mezclar el inventario con que se contara al 31 de diciembre de 2004 y el adquirido a partir de esa fecha.

Así, la demandada determinó que la contribuyente *****
***** actualmente ***** en su carácter de
sociedad controladora, omitió sumar en el resultado fiscal consolidado, la
utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada *****
** ***** del ejercicio 2006 de \$1,821'128,230 a \$3,380'157,057, en
participación consolidable, manifestada en declaración anual complementaria

presentada el 12 de agosto de 2010, toda vez, que dicha sociedad controlada considera en la determinación de su resultado fiscal el inventario acumulable en cantidad de \$1,559'028,827, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 y en consecuencia omitió el Impuesto sobre la Renta consolidado correspondiente.

En virtud de lo antes expuesto, es dable concluir lo siguiente:

1.- Existe cosa juzgada en el presente asunto.

2.- La cosa juzgada implica la determinación de la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, quien mediante sentencia de fecha 1° de marzo de 2011, resolvió que al haber optado la controlada ***** **
***** ** ** ***** acumular sus inventarios al 31 de diciembre de 2004, en términos del artículo Tercero Transitorio, fracciones IV t V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2005, la controladora hoy accionante debió considerarlos para determinar su utilidad fiscal consolidada por el ejercicio de 2006.

Ello, tal y como lo reconocieron los peritos de las partes y la tercero en discordia, quienes señalaron en las respuestas dadas a las preguntas números **28, 29 del cuestionario de la demandante**, y a las respuestas correspondientes a las preguntas números **5 y 6 el cuestionario de la enjuiciada**, lo siguiente:

CUESTIONARIO PROPUESTO POR LA ACTORA

PERITO DE LA ACTORA

28. Dirá el perito si la sociedad controlada [REDACTED] reconoció como ingreso para efectos del impuesto sobre la renta el inventario acumulable previsto en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005 al momento de la enajenación de sus inventarios, y al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado.

Del análisis de los documentos, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa controlada, se desprende que la sociedad [REDACTED] reconoció un ingreso por la venta de sus inventarios.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 805 -

29. Con base en la respuesta a la pregunta anterior, así como en la sentencia dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo 408/2011, dirá el perito si [REDACTED] reconoció en su resultado fiscal consolidado el inventario acumulable por vía de la utilidad de su controlada [REDACTED]

Del análisis de los documentos, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa controlada, se desprende que [REDACTED] para efectos del resultado fiscal consolidado, reconoció en la utilidad reportada por [REDACTED] los ingresos que se consideraron por la venta de los inventaros que efectuó la sociedad [REDACTED]

PERITO DE LA AUTORIDAD

28. Dirá el perito si la sociedad controlada [REDACTED] reconoció como ingreso para efectos del impuesto sobre la renta el inventario acumulable previsto en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005 al momento de la enajenación de sus inventarios, y al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado.

Respuesta:

La sociedad controlada [REDACTED] sí reconoció como ingreso para efectos del impuesto sobre la renta el inventario acumulable previsto en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005 al momento de la enajenación de sus inventarios al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado.

29. Con base en la respuesta a la pregunta anterior, así como en la sentencia dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo 408/2011, dirá el perito si [REDACTED] reconoció en su resultado fiscal consolidado el inventario acumulable por vía de la utilidad de su controlada [REDACTED]

Respuesta:

[REDACTED] no reconoció en su resultado fiscal consolidado el inventario acumulable por vía de la utilidad de su controlada [REDACTED]

Lo anterior toda vez que la sociedad controladora [REDACTED] (antes [REDACTED]) omitió sumar en el resultado fiscal consolidado, la utilidad fiscal de la sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio de 2006 de \$1,821,128,230 a \$3,380,157,057, manifestada en la declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, toda vez que la sociedad controlada considera en la determinación de su resultado fiscal el inventario acumulable en cantidad de \$1,559,028,827.

PERITO TERCERO EN DISCORDIA

28.- Dirá el perito si la sociedad controlada [REDACTED] reconoció como ingreso para efectos del Impuesto sobre la Renta el inventario acumulable previsto en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005 al momento de la enajenación de sus inventarios, y al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado.

Respuesta: De la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que la sociedad controlada [REDACTED] manifestó en la declaración anual complementaria del ejercicio 2006 presentada el 12 de agosto 2010 la cantidad de \$1,559,028,827.00 por concepto de Inventario acumulable apegándose a lo dispuesto en el artículo

tercero, primer párrafo, fracción V de las Disposiciones Transitorias de la Ley del impuesto sobre la Renta para el 2005, así mismo en el dictamen fiscal del ejercicio 2006 presentado por la sociedad controlada, en el anexo 12 Conciliación entre el resultado Contable y Fiscal para efectos del Impuesto sobre la Renta, en el apartado de Ingresos Fiscales no Contables manifestó la cantidad de \$1,559,028,827.00 bajo el concepto de Inventario Acumulable.

Derivado de lo anterior se considera que la sociedad controlada [REDACTED] sí reconoció como ingreso para efectos del Impuesto sobre la Renta, el inventario acumulable conforme al artículo tercero Transitorio fracciones IV y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005 al momento de la enajenación de sus inventarios al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado.

29. Con base en la respuesta a la pregunta anterior, así como en la sentencia dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo 408/2011, dirá el perito si [REDACTED] reconoció en su resultado fiscal consolidado el inventario acumulable por vía de la utilidad de su controlada [REDACTED]

Respuesta: De la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que la sociedad controladora [REDACTED] ahora [REDACTED] consideró en la participación consolidable a la sociedad controlada [REDACTED] con un porcentaje de participación consolidable de 99.9376% y un importe de utilidad consolidable de \$1,819,992,323.33.

Derivado de lo anterior se considera que la sociedad controladora [REDACTED] ahora [REDACTED] consideró en la participación consolidable, la utilidad fiscal individual reportada por la sociedad controlada [REDACTED] sin sumar el importe de inventario acumulable determinado por ésta en cantidad de \$1,558,055,993.00 y en consecuencia la sociedad controladora [REDACTED] no reconoció en su resultado fiscal consolidado el inventario acumulable por vía de la utilidad de su controlada [REDACTED]



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 807 -

CUESTIONARIO PROPUESTO POR LA AUTORIDAD

PERITO DE LA ACTORA

5. Dirá el perito, de la revisión y análisis que efectúe a la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011, si en ella se determinó que [REDACTED] (antes [REDACTED]), no debía considerar el inventario acumulable de sus empresas consolidadas como parte de su utilidad fiscal de cada una de estas.

Derivado de la lectura, revisión y análisis que realice a la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011, pude observar que las autoridades correspondientes determinaron que de conformidad con las obligaciones fiscales de la controlada como de la controladora, se previene como tal, la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que incluye la acumulación de los inventarios, en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable, lo cual necesariamente se ve reflejado en la utilidad o pérdida fiscal.

6. Dirá el perito del análisis a la contabilidad, documentación y papeles de trabajo del expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, si [REDACTED] (antes [REDACTED]), acató lo dictado en la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011.

Del análisis de los documentos, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa controlada, se desprende que [REDACTED] para efectos del resultado fiscal consolidado, reconoció en la utilidad reportada por [REDACTED] los ingresos que se consideraron por la venta de los inventarios que efectuó la sociedad [REDACTED]

Asimismo, como se mencionó anteriormente, en la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011, pude observar que las autoridades correspondientes determinaron que de conformidad con las obligaciones fiscales de la controlada como de la controladora, se previene como tal, la obligación de reportar su utilidad o pérdida fiscal, lo que incluye la acumulación de los inventarios, en el momento que la enajenación del inventario constituya un ingreso acumulable, lo cual necesariamente se ve reflejado en la utilidad o pérdida fiscal.

PERITO DE LA AUTORIDAD

5. Dirá el perito, de la revisión y análisis que efectúe a la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011, si en ella se determinó que [REDACTED] (antes [REDACTED]), no debería considerar el inventario acumulable de sus empresas consolidadas como parte de su utilidad fiscal de cada una de éstas.

Respuesta:

Del análisis efectuado a la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011 en ninguna parte de su contenido se advierte que [REDACTED] (antes [REDACTED]), no debería considerar el inventario acumulable de sus empresas controladas como parte de su utilidad fiscal de cada una de éstas.

6. Dirá el perito del análisis a la contabilidad, documentación y papeles de trabajo del expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, si [REDACTED] (antes [REDACTED]), acató lo dictado en la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011.

Respuesta:

De la revisión efectuada a los documentales del expediente del cual deriva la resolución impugnada, que la contribuyente [REDACTED] (antes [REDACTED]), no acató lo dictado en la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011.

Lo anterior toda vez que la sociedad controladora [REDACTED] (antes [REDACTED]) omitió sumar en el resultado fiscal consolidado, la utilidad fiscal de la sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio de 2006 de \$1,821,128,230 a \$3,380,157,057, manifestada en la declaración anual complementaria presentada el 12 de agosto de 2010, toda vez que la sociedad controlada considera en la determinación de su resultado fiscal el inventario acumulable en cantidad de \$1,559,028,827.

PERITO TERCERO EN DISCORDIA

5.- Dirá el perito, de la revisión y análisis que efectúe a la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011, si en ella se determinó que [REDACTED] (antes [REDACTED]), no debía considerar el inventario acumulable de sus empresas consolidadas como parte de su utilidad fiscal de cada una de éstas.

Respuesta: De la lectura a la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011, se conoció que le fue negado el amparo solicitado por [REDACTED] en contra de la sentencia de uno de marzo de 2011 dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se advierte que [REDACTED] (antes [REDACTED]), no debía considerar el inventario acumulable de sus empresas consolidadas como parte de su utilidad fiscal de cada una de éstas.

6.- Dirá el perito del análisis a la contabilidad, documentación y papeles de trabajo del expediente del cual deriva la resolución impugnada, así como a la documentación aportada por la contribuyente en el presente juicio, si

[REDACTED] (antes [REDACTED]), acató lo dictado en la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011.

Respuesta: De la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que la sociedad controlada [REDACTED] manifestó en la declaración anual complementaria del ejercicio 2006 presentada el 12 de agosto 2010 la cantidad de \$1,559,028,827.00 por concepto de inventario acumulable apegándose a lo dispuesto en el artículo tercero, primer párrafo, fracción V de las Disposiciones Transitorias de la Ley del impuesto sobre la Renta para el 2005, así mismo en el dictamen fiscal del ejercicio 2006 presentado por la sociedad controlada, en el anexo 12 Conciliación entre el Resultado Contable y Fiscal para efectos del Impuesto sobre la Renta, en el apartado de Ingresos Fiscales no Contables manifestó la cantidad de \$1,559,028,827.00 bajo el concepto de Inventario Acumulable.

De la lectura al citado oficio se conoció que la sociedad controlada [REDACTED] manifestó en la declaración anual complementaria del ejercicio 2006 presentada el 12 de agosto 2010, un resultado fiscal de \$3,380,157,057.00 mismo que incluye la cantidad de \$1,559,028,827.00 bajo el concepto de Inventario Acumulable:

	Importe	Participación consolidable	Importe
(1) Resultado fiscal [REDACTED]	3,380,157,057.00	99.9376%	3,378,047,839.00
Menos			
(2) Importe incluido en la determinación del Resultado fiscal Consolidado por [REDACTED]	1,821,128,230.00	99.9376%	1,819,991,845.98
Diferencia por inventario acumulable	1,559,028,827.00		1,558,055,993.01

(1) Importe manifestado en declaración anual 2006 por corrección fiscal del 12 de agosto 2010

(2) Según papel de trabajo denominado "Resultado Fiscal Consolidado al 31 de diciembre de 2006 Impuesto sobre la Renta"

Así mismo de la lectura al mencionado oficio se conoció que la sociedad controladora [REDACTED] ahora [REDACTED] consideró en la participación consolidable a la sociedad controlada Elektra del [REDACTED] con un porcentaje de participación consolidable de 99.9376% y un importe de utilidad consolidable de \$1,819,992,323.33.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

***** ** *****

- 809 -

Derivado de lo anterior se considera que la sociedad controladora [REDACTED] ahora [REDACTED] consideró en la participación consolidable, la utilidad fiscal individual reportada por la sociedad controlada [REDACTED] sin sumar el importe de inventario acumulable determinado por ésta en cantidad de \$1,558,055,993.00 y en consecuencia la sociedad controladora [REDACTED] no reconoció en su resultado fiscal consolidado el inventario acumulable por vía de la utilidad de su controlada [REDACTED] por lo que se considera que no acató lo dictado en la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011.

Lo anterior, confirma lo determinado por esta Juzgadora, ya que los peritos coinciden en que la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal ya le había resuelto a la actora que al haber optado por deducir los inventarios acumulables con los que contaba al 31 de diciembre de 2004, debía en principio considéralos como ingresos pues, es esta la condición que establece el Artículo Tercero Transitorio, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por tanto, tal y como lo refieren los peritos de las partes y la tercero en discordia, la accionante no reconoció en su resultado fiscal consolidado el inventario acumulable por vía de la utilidad de su controlada [REDACTED] por lo que se considera que no acató lo dictado en la sentencia emitida el 17 de febrero de 2012 en el juicio de amparo 408/2011.

Cabe señalar que las preguntas 22, 24, 25 y 26 del cuestionario de la actora, van encaminadas a demostrar la interpretación del texto de la Ley, en el caso del contenido del Artículo Tercero Transitorio fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, como se constata de los cuestionamientos de la accionante, las respuestas a los mismos formulados por los peritos de la actora, de la autoridad y de la perito tercero, designado por este Tribunal, cuando esa interpretación sólo puede derivar del texto de la ley y no de la opinión de un contador público.

Ello, se insiste en virtud de que la prueba pericial contable, debe referirse a la técnica que sistemática y estructuralmente produce información cuantitativa expresada en unidades monetarias, sobre las

situaciones económicas identificables y cuantificables que realiza una entidad, lo cual se logra a través de un proceso de captación de las operaciones que midan, clasifiquen, registren y resuman con claridad, tales aseveraciones a fin de producir información.

Mientras que, corresponde al juzgador conocer el derecho y aplicarlo atendiendo al texto e interpretación de la ley y de las normas a la situación concreta del caso; en consecuencia, la prueba pericial en materia contable no constituye el medio probatorio idóneo para acreditar o sustentar el alcance de una norma jurídica, pues esto último no corresponde a las cuestiones técnicas contables y en esa razón las respuestas del perito en materia contable enfocadas a ese fin resultarán inatendibles.

Así, del análisis realizado por esta Juzgadora a los dictámenes antes digitalizados se desprende que, por lo que hace a las respuestas correspondientes a las preguntas números **22, 24, 25 y 26** del cuestionario de la actora, las mismas no se tomaran en cuenta, en virtud de que van encaminadas a interpretar el Artículo Tercero Transitorio fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, lo cual únicamente corresponde a este Órgano Colegiado, por tratarse de cuestiones de derecho y no así de un conocimiento técnico, mismas que señalan:

“22.Dirá el perito, ¿cuáles son los conceptos que las sociedades controladoras se encuentran obligadas a considerar, en términos del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el 2006, para efectos de determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada del ejercicio fiscal?”

“24. Dirá el perito, ¿si de acuerdo a la mecánica de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, es correcto señalar, que las empresas controladoras, para efectos de determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada de que se trate, únicamente se encuentran obligadas a tomar en consideración las utilidades o pérdidas fiscales que de manera individual les sean reportadas por sus empresas controladas?”

“25. En caso de que la respuesta a la pregunta que antecede fuese afirmativa, dirá el perito, ¿si para efectos de la determinación de la utilidad fiscal consolidada o la pérdida fiscal consolidada, según se trate, la empresa actora en el presente juicio contencioso administrativo, se abocó a

considerar únicamente las utilidades o pérdidas fiscales que de manera individual le fueron reportadas por sus empresas controladas y si bajo su consideración, habría dado cumplimiento cabal a lo establecido en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006?"

"26. Dirá el perito, ¿si existe disposición expresa en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, que establezca como una obligación a cargo de las empresas controladoras el considerar como "ingreso" el inventario acumulable de sus empresas controladas, para efectos de determinar la utilidad o la pérdida fiscal consolidada correspondiente?, debiendo señalar y transcribir en su caso, la parte normativa que expresamente así lo establezca."

Atento a lo anterior, resultan inoperantes los argumentos de la accionante, en el sentido de que son ilegales tanto la resolución impugnada como la originalmente recurrida, ya que derivan de una incorrecta aplicación del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, en relación con el artículo Tercero Transitorio de dicha Ley, al considerar que el inventario acumulable no constituye un ingreso acumulable para efectos de determinar la utilidad fiscal de una sociedad controlada, sino un concepto acumulable.

Asimismo, resulta inoperante el argumento de la parte actora por cuanto hace a que una sociedad controladora a efecto de determinar su resultado fiscal consolidado, únicamente debe considerar las utilidades o pérdidas fiscales de sus sociedades controladas determinadas en lo individual, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, disminuyendo de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas.

Así como que, el inventario acumulable de ***** no debió ser considerado para efectos de determinar la utilidad fiscal consolidada, al no calificar como un ingreso, por no resultar en una modificación positiva al haber patrimonial de la actora y al ser un concepto acumulable.

Además, resulta inoperante el argumento de la actora respecto a que no obstante que la sociedad controlada ***** ** ***** ejerció la opción prevista en el artículo Tercero Transitorio, fracciones IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, aun así el inventario acumulable no produjo una modificación en su patrimonio, por lo que la autoridad no debió considerar para determinar su utilidad fiscal consolidada las cantidades correspondientes al inventario acumulable de la citada controlada.

Siguen la misma suerte los argumentos de la actora, en los cuales sostiene que la Ley del Impuesto sobre la Renta, no reconoce como un ingreso acumulable al inventario acumulable para efecto de determinar la utilidad fiscal correspondiente, por lo que las resoluciones impugnadas resultan ilegales al determinarle un crédito fiscal derivado de que no consideró las cantidades correspondientes al inventario acumulable de sus controladas para determinar su resultado fiscal consolidado.

Que el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tampoco contempla un momento en que el valor del inventario acumulable se considere percibido, elemento fundamental para determinar que se trata de un ingreso acumulable para la utilidad fiscal.

Además, que si el legislador hubiera pretendido darle el carácter de ingreso al inventario acumulable, así lo hubiera establecido expresamente en la legislación fiscal, pues dicha situación no se desprende de los artículos 17, 18 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006.

Asimismo, resulta inoperante el argumento de la actora, respecto a que no existe disposición expresa dentro del régimen general de consolidación fiscal que la obligue a acumular a la utilidad fiscal a nivel consolidado el inventario acumulable, por ser un concepto que se adiciona posterior a la determinación de la utilidad fiscal.

Así como, que es inoperante su argumento en relación a que el hecho de que la actora no haya considerado el inventario acumulable de su sociedad controlada ***** ** ***** al determinar el resultado fiscal consolidado, contrario a lo resuelto por las autoridades demandadas no

contraviene lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, ya que únicamente debió considerar la utilidad fiscal consolidada.

Como lo es el argumento en relación a que es plenamente aplicable por analogía el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que al ser la consolidación fiscal un tipo de estímulo o incentivo fiscal, para que un ingreso sea acumulable, así debe establecerlo expresamente el legislador, lo que no sucede con el inventario acumulable de *****

Finalmente, también es inoperante el argumento de la actora, por cuanto hace a que si el legislador hubiera pretendido que el inventario acumulable formara parte de la determinación de la utilidad fiscal, lo hubiera establecido expresamente, y no se establecería que la doceava parte dicho concepto tuviera que adicionarse a la utilidad fiscal.

Los argumentos de la actora antes señalados, resultan inoperantes, pues evidentemente los mismos van encaminados a controvertir esencialmente que para la determinación de la utilidad fiscal de la empresa controladora no deben acumularse los inventarios acumulables de sus controladas, como lo es en el caso que nos ocupa los de *****
** ***** lo que incide directamente en la resolución de los conceptos de impugnación antes señalados.

Pues se reitera, la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, a través de la sentencia de fecha 1° de marzo de 2011, confirmada por la ejecutoria de fecha 17 de febrero de 2012, dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ya se pronunció respecto a los argumentos de mérito, determinando que:

1.- Al haber optado la empresa controlada, acumular sus inventarios al 31 de diciembre de 2004, lo procedente es que la sociedad controladora considere dichos inventarios a fin de determinar su utilidad fiscal consolidada.

2.- Que si bien es cierto, no existe precepto legal que establezca de manera expresa la obligación de las controladoras a sumar los inventarios acumulables de sus controladas, de conformidad con los artículos 10, 29, fracción I del capítulo II, sección III del Título I, denominado "Del costo de lo vendido" que comprende entre otros el artículo 68, así como las fracciones IV y V del artículo tercero transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que entró en vigor el 1° de enero de 2005, al haber optado por acumularlos, resulta obligatoria su consideración en la utilidad fiscal consolidada.

3.- No obstante que un inventario, no se considere ingreso para efectos de determinar la utilidad fiscal de las personas morales en el régimen de desincorporación fiscal, es el caso que los inventarios acumulables que se tenían al 31 de diciembre de 2004, deben considerarse para efectos de determinar la utilidad fiscal consolidada, por ser esta la condición prevista en la norma, en caso de optar por deducirlos al momento de su enajenación, de lo contrario se estaría frente a una duplicidad de deducción, ya que los mismos se dedujeron al momento de su adquisición conforme al sistema anterior a la reforma.

En consecuencia, resultan inoperantes los argumentos de la parte actora, ya que se limitan a reiterar los argumentos que expresó en el juicio 33900/07-17-05-1, donde fueron materia de análisis y resolución por parte de la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Órgano Jurisdiccional, ya que los mismos no pueden ser objeto de estudio al haber adquirido la calidad de cosa juzgada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 354 y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, no pudiendo cuestionarse de nueva cuenta situaciones jurídicas que ya fueron estudiadas y desestimadas en el juicio anterior, porque ya existe una resolución con rango de cosa juzgada.

Sirve de apoyo a lo anterior, el precedente número VII-P-2aS-997, de la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, publicada en su Revista en el mes de julio de 2016, la cual a la letra señala lo siguiente:

"CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE REITERAN ARGUMENTOS DE AGRAVIO QUE YA FUERON MATERIA DE ESTUDIO EN DIVERSO JUICIO CUYA RESOLUCIÓN CONSTITUYE COSA JUZGADA.- Son inoperantes los conceptos de impugnación encaminados a

combatir una resolución emitida en acatamiento a una sentencia firme dictada en un diverso juicio, si la parte actora se limita a reiterar los argumentos de agravio que expresó en ese juicio y que fueron materia de análisis y resolución por parte de este Órgano Jurisdiccional, ya que los mismos no pueden ser objeto de estudio al haber adquirido la calidad de cosa juzgada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 354 y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código Fiscal de la Federación, según lo establece su artículo 197. En tal virtud, debe estarse a lo determinado en el fallo que se cumplimentó, no pudiendo cuestionarse de nueva cuenta situaciones jurídicas que ya fueron estudiadas y desestimadas en el juicio anterior, porque ya existe una resolución con rango de cosa juzgada.

(Tesis aprobada en sesión de 16 de febrero de 2016)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 60. Julio 2016. p. 288"

Por otra parte, a fin de dilucidar si resulta legal que la autoridad demandada haya desestimado la declaración complementaria de la sociedad controlada ***** presentada el 14 de mayo de 2013, si la empresa hoy actora tenía la obligación de presentar declaración complementaria de consolidación derivado de la corrección efectuada por su empresa controlada ***** y si la actora tenía la obligación de considerar la determinación del resultado fiscal consolidado la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a la sociedad controlada ***** esta Juzgadora considera necesario tener presente cual es la naturaleza del régimen de consolidación fiscal.

En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 375/2000, señaló que el régimen de consolidación fiscal, en términos generales, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a grupos de empresas con intereses económicos comunes, que reúnen ciertas características y cumplen con los requisitos establecidos en la ley, de ser consideradas como una unidad económica y, bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales.

Las principales características del régimen de consolidación fiscal, son:

- Reunir las utilidades y pérdidas de una entidad o unidad económica, integrada por la compañía controladora y sus controladas como si se tratara de una sola empresa, para que sobre este resultado se pague el impuesto.

- Permitir que las pérdidas generadas por una sociedad del grupo que consolida sean amortizadas de inmediato contra las utilidades generadas por otras sociedades del mismo grupo, independientemente de que la controlada que las hubiera generado todavía no tuviera la posibilidad de aplicar dichas pérdidas en lo individual.

Las disposiciones jurídicas que regulan este régimen se encuentran previstas en el capítulo IV del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominado "De las sociedades mercantiles controladoras", que entró en vigor el 1° de enero de 1982, el cual estuvo vigente, conforme a su concepción original, hasta diciembre de 1998, ya que si bien durante este periodo hubo ciertas modificaciones como parte del proceso normal de revisión y adecuación anual de las disposiciones de la ley respectiva, en realidad no se realizó ningún cambio trascendental, sino hasta las reformas de 2002.

El antecedente inmediato de la consolidación fiscal se encuentra en el "Decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 1973, mismo que, como su nombre lo indica, tenía por objeto promover la creación de unidades de fomento que se estimaban como promotoras del desarrollo industrial y turístico del país, ya que en esa época, por las condiciones económicas y sociales que imperaban en él, se requería crear un incentivo a grupos de empresas para que coadyuvaran a solucionar diversos problemas de interés nacional, decreto que es del tenor siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 817 -

DIARIO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Director: MARIANO D. URDANIVIA

Registrado como periódico de la clase en el año de 1934 | MEXICO, MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 1973 | TOMO CCCXVIII | No. 37

SUMARIO

PODER LEGISLATIVO

CAMARA DE SENADORES

- Acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 23 de noviembre de 1972 2
- Acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 28 de noviembre de 1972 3
- Acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 30 de noviembre de 1972 4

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

- Decreto por el que se retira del servicio de la Defensa Nacional, una fracción de terreno ubicada al sur del Campo Militar No. 25-A, en Puebla, Pue., y se incorpora en favor de la Dirección de Pensiones Militares, como bien de dominio público 6

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- Decreto por el que se crean como dependencias de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Administración Fiscal Regional y la Dirección General de Administración Fiscal Regional, así como las Administraciones Fiscales Regionales 6
- Decreto por el que se crea la Dirección General de Difusión Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 8
- Decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país 8
- Circular que fija y modifica los precios oficiales sobre la importación de ácido 2-metil-4-clorofenol y otros productos. Lista de precios número 23 13
- Circular número 306-VI-22-53 que determina los valores y cuotas de participación a entidades

- federativas en el Impuesto de Producción de Minerales, Metales y Compuestos Metálicos, en junio de 1973 14
- Convenio de Coordinación para el cobro de las tasas general y especiales en el impuesto sobre ingresos mercantiles del Estado de Michoacán 14

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACION

- Solicitud sobre la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará Ingeniero Emilio López Zamora, presentada por vecinos radicados en El Higo, Municipio de Tempoal, Ver. 16
- Solicitud sobre la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará General Francisco Villa, presentada por vecinos radicados en San Pablo de Rancho Grande, Municipio de Fresnillo, Zac. 17
- Solicitud sobre la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará El Gavilán, presentada por vecinos radicados en el poblado Rancho El Gavilán, Municipio de Gómez, Tam. 18
- Solicitud sobre la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará Buenavista, presentada por vecinos radicados en el poblado El Retiro, Municipio de Oxchuc, Chi. 18
- Solicitud sobre la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará Brasil de Grijalva, presentada por vecinos radicados en el Barrio de San José, Anexo del ejido de Las Maravillas, Municipio de La Concordia, Chis. 19
- Solicitud sobre la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará La Primavera, presentada por vecinos radicados en Lagos de Morenos, Municipio del mismo nombre, Estado de Jalisco 20
- Avisos Judiciales y Generales 21 a 32

(...)

DECRETO que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. — Presidencia de la República.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que otorga al Ejecutivo a mi cargo el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

CONSIDERANDO

Que una estrategia de desarrollo que se funda en la política de pleno empleo requiere fomentar la creación de nuevas unidades productivas y ampliar las existentes, con el objeto de crear empleos y orientarlas hacia actividades que el Ejecutivo Federal considera conveniente se incrementen por formar parte de su programa de gobierno.

Que esa misma estrategia de desarrollo requiere el aumento del Gasto Público Nacional en favor de las clases, regiones y sectores más necesitados.

Que frente a la necesidad de promover, dentro del sistema de economía mixta que nos rige, las unidades productivas mexicanas y ante la imposibilidad de desviar el gasto público de las ingentes necesidades que tiene que satisfacer, se ha formulado un sistema de incentivo que flexibiliza la capacidad operativa y financiera de estas empresas sin producir, en términos generales, sacrificio fiscal o que de producirlo implicaría un simple diferimiento en el pago del impuesto de la unidad productiva.

Que las características estructurales del incentivo obligan a limitarlo a los sectores manufacturero y turístico capacitándolos para operar a economía de escala, sin que esto se aplique a otros sectores; pues se está en presencia de un instrumento que al lado de sus bondades tiene limitaciones, superables y supera das por otras medidas de gobierno.

Que tanto el Código Fiscal de la Federación en su artículo 13, como la Ley del Impuesto sobre la Renta en sus artículos 3o. fracción III y 17, consideran su jeto pasivo de la relación jurídica tributaria a las unidades económicas por lo que, con fundamento en estos ordenamientos así como en lo dispuesto por el artículo 19, fracción VII de la última Ley citada y conforme al principio de neutralidad fiscal, se otorga tratamiento similar a la empresa que se organiza en sucursales y a la que recurre al sistema de sociedades filiales; así como a los contribuyentes que como personas físicas enajenan acciones de las empresas que promueven a través de la Bolsa de Valores, con lo que prefieren organizarse en sociedades para lograr los mismos fines.

Que en ambas hipótesis el principio de neutralidad fiscal no se concibe en forma inerte, elástico, como un simple dejar hacer, sino comprometido con el reto de nuestro tiempo: el desarrollo que busca la participación de todos los sectores en el aumento de la productividad y el reparto al justiciero de sus frutos exigiéndose a las empresas que deseen utilizar incentivos fiscales, cumplan requisitos que garanticen la promoción de dicho desarrollo.

Que conforme a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, se impone el requisito de mexicanidad a las sociedades de fomento y se exige que la inversión extranjera en las empresas promovidas tenga el carácter de complementaria.

Que toda administración de incentivos técnicamente planeada exige el establecimiento de metas claramente cuantificables y el señalamiento de plazos que permitan evaluar sus resultados, para lo que este Decreto contiene un sistema de evaluación por períodos bianuales y obliga al logro de objetivos mensurables en términos de incremento en relación al período anterior, de suerte que se exige un aumento constante a ritmo superior al del crecimiento del sector manufacturero en su conjunto, con lo que a la par que se garantiza la eficaz administración del incentivo, se establece un mecanismo de autocontrol que impide fomentar la ineficacia y nivela las pérdidas de una empresa con las utilidades de otras, de modo de salvaguardar la recaudación proveniente de la unidad económica.

Que para aprovechar los incentivos que este Decreto concede es necesario que las empresas realicen actividades benéficas a la economía nacional, tales como la mexicanización de sociedades con mayoría de inversión extranjera, creación de nuevos empleos, de nuevas empresas industriales y de turismo, desarrollo tecnológico nacional, sustitución de importaciones, inversiones en zonas de menor desarrollo económico relativo y en especial para la industrialización de recursos naturales y colocación de acciones entre el público.

Que por lo menos en cinco de las actividades citadas quienes utilicen los incentivos deben obtener aumentos significativos, debiendo además la unidad de fomento incrementar sus ventas y servicios cuando menos en un tanto por ciento equivalente al compuesto por la suma del índice de crecimiento de la actividad industrial del país, más el 20% de dicho índice.

Que como el sistema resulta atractivo a las economías de escala, se pretende maximizar los beneficios

que ello implica tanto a nivel de competencia con las compañías transnacionales en los mercados internacional y nacional, como en términos de ocupación buscando que las unidades de fomento no desplacen a empresas pequeñas y medianas que estén operando satisfactoriamente, ni ocupen posiciones monopolísticas a efecto de no provocar presiones excesivas sobre el nivel de precios; y coadyuven al logro de los objetivos de la política de desarrollo nacional.

Que una política coherente de incentivos a nivel federal exige su armonización con otras medidas de fomento y su integración dentro del marco de la política fiscal nacional en congruencia con las decisiones tomadas conjuntamente por la Federación y los Estados, tendientes a suprimir las medidas de exenciones, reducciones o subsidios de impuestos estatales de probada ineficacia respecto de las decisiones empresariales de invertir y que representan una sangría considerable a los exiguos recursos de las Entidades Federales.

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO QUE CONCEDE ESTIMULOS A LAS SOCIEDADES Y UNIDADES ECONOMICAS QUE FOMENTAN EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y TURISTICO DEL PAIS.

ARTICULO 1o.—Para los efectos de este Decreto, las unidades de fomento son unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial del país y se forman por una sociedad de fomento y una o más sociedades promovidas, que reúnan los requisitos que establece este Decreto.

Para que la unidad económica pueda utilizar las medidas de estímulo que establece este Decreto, la sociedad de fomento deberá comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el conjunto de sociedades que la forman, incrementan sus ventas y servicios en un tanto por ciento equivalente al compuesto por la suma del índice de crecimiento de la actividad industrial del país y el 20% de dicho índice, así como, que obtienen incrementos significativos, en los términos del artículo 2o., por lo menos en cinco de las siguientes actividades:

I.—Mexicanización de sociedades con mayoría de inversión extranjera;

II.—Creación de nuevos empleos;

III.—Creación de nuevas empresas industriales y de turismo;

IV.—Desarrollo tecnológico nacional;

V.—Aumento en las exportaciones;

VI.—Sustitución de importaciones;

VII.—Inversiones en zonas de menor desarrollo económico relativo;

VIII.—Industrialización de recursos naturales;

IX.—Ampliación de empresas industriales y de turismo, y

X.—Colocación de acciones entre el público.

Para conceder la autorización de unidad de fomento a que se refiere el artículo 8o., la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exigirá la comprobación de que en los últimos cinco años la unidad económica satisfizo los requisitos que señala este artículo. En el caso de industrias nuevas o de industrias existentes pero con nuevos planes de inversión, la propia Secretaría concederá la autorización si a su juicio la impor-



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 819 -

Miércoles 20 de junio de 1973 **DIARIO OFICIAL**

9

Que las características estructurales del incentivo obligan a limitarlo a los sectores manufacturero y turístico capacitándolos para operar a economía de escala, sin que esto se aplique a otros sectores; pues se está en presencia de un instrumento que al lado de sus bondades tiene limitaciones, superables y superadas por otras medidas de gobierno.

Que tanto el Código Fiscal de la Federación en su artículo 13, como la Ley del Impuesto sobre la Renta en sus artículos 3o. fracción III y 17, consideran sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria a las unidades económicas por lo que, con fundamento en estos ordenamientos así como en lo dispuesto por el artículo 19, fracción VII de la última Ley citada y conforme al principio de neutralidad fiscal, se otorga tratamiento similar a la empresa que se organiza en sucursales y a la que recurre al sistema de sociedades filiales; así como a los contribuyentes que como personas físicas enajenan acciones de las empresas que promueven a través de la Bolsa de Valores, con lo que prefieren organizarse en sociedades para lograr los mismos fines.

Que en ambas hipótesis el principio de neutralidad fiscal no se concibe en forma inerte, estático, como un simple dejar hacer, sino comprometido con el reto de nuestro tiempo: el desarrollo que busca la participación de todos los sectores en el aumento de la productividad y el reparto justiciero de sus frutos exigiéndose a las empresas que deseen utilizar incentivos fiscales, cumplan requisitos que garanticen la promoción de dicho desarrollo.

Que conforme a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, se impone el requisito de mexicanidad a las sociedades de fomento y se exige que la inversión extranjera en las empresas promovidas tenga el carácter de complementaria.

Que toda administración de incentivos técnicamente planeada exige el establecimiento de metas claramente cuantificables y el señalamiento de plazos que permitan evaluar sus resultados, para lo que este Decreto contiene un sistema de evaluación por períodos bianuales y obliga al logro de objetivos mensurables en términos de incremento en relación al período anterior, de suerte que se exige un aumento constante a ritmo superior al del crecimiento del sector manufacturero en su conjunto, con lo que a la par que se garantiza la eficaz administración del incentivo, se establece un mecanismo de autocontrol que impide fomentar la ineficacia y nivela las pérdidas de una empresa con las utilidades de otras, de modo de salvaguardar la recaudación proveniente de la unidad económica.

Que para aprovechar los incentivos que este Decreto concede es necesario que las empresas realicen actividades benéficas a la economía nacional, tales como la mexicanización de sociedades con mayoría de inversión extranjera, creación de nuevos empleos, de nuevas empresas industriales y de turismo, desarrollo tecnológico nacional, sustitución de importaciones, inversiones en zonas de menor desarrollo económico relativo y en especial para la industrialización de recursos naturales y colocación de acciones entre el público.

Que por lo menos en cinco de las actividades citadas quienes utilicen los incentivos deben obtener aumentos significativos, debiendo además la unidad de fomento incrementar sus ventas y servicios cuando menos en un tanto por ciento equivalente al compuesto por la suma del índice de crecimiento de la actividad industrial del país, más el 20% de dicho índice.

Que como el sistema resulta atractivo a las economías de escala, se pretende maximizar los beneficios

que ello implica tanto a nivel de competencia con las compañías transnacionales en los mercados internacional y nacional, como en términos de ocupación buscando que las unidades de fomento no desplacen a empresas pequeñas y medianas que estén operando satisfactoriamente, ni ocupen posiciones monopolísticas a efecto de no provocar presiones excesivas sobre el nivel de precios; y coadyuven al logro de los objetivos de la política de desarrollo nacional.

Que una política coherente de incentivos a nivel federal exige su armonización con otras medidas de fomento y su integración dentro del marco de la política fiscal nacional en congruencia con las decisiones tomadas conjuntamente por la Federación y los Estados, tendientes a suprimir las medidas de exenciones, reducciones o subsidios de impuestos estatales de probada ineficacia respecto de las decisiones empresariales de invertir y que representan una sangría considerable a los exiguos recursos de las Entidades Federales.

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO QUE CONCEDE ESTIMULOS A LAS SOCIEDADES Y UNIDADES ECONOMICAS QUE FOMENTAN EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y TURISTICO DEL PAIS.

ARTICULO 1o.—Para los efectos de este Decreto, las unidades de fomento son unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial del país y se forman por una sociedad de fomento y una o más sociedades promovidas, que reúnan los requisitos que establece este Decreto.

Para que la unidad económica pueda utilizar las medidas de estímulo que establece este Decreto, la sociedad de fomento deberá comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el conjunto de sociedades que la forman, incrementan sus ventas y servicios en un tanto por ciento equivalente al compuesto por la suma del índice de crecimiento de la actividad industrial del país y el 20% de dicho índice, así como, que obtienen incrementos significativos, en los términos del artículo 2o., por lo menos en cinco de las siguientes actividades:

I.—Mexicanización de sociedades con mayoría de inversión extranjera;

II.—Creación de nuevos empleos;

III.—Creación de nuevas empresas industriales y de turismo;

IV.—Desarrollo tecnológico nacional;

V.—Aumento en las exportaciones;

VI.—Sustitución de importaciones;

VII.—Inversiones en zonas de menor desarrollo económico relativo;

VIII.—Industrialización de recursos naturales;

IX.—Ampliación de empresas industriales y de turismo, y

X.—Colocación de acciones entre el público.

Para conceder la autorización de unidad de fomento a que se refiere el artículo 8o., la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exigirá la comprobación de que en los últimos cinco años la unidad económica satisfizo los requisitos que señala este artículo. En el caso de industrias nuevas o de industrias existentes pero con nuevos planes de inversión, la propia Secretaría concederá la autorización si a su juicio la impor-

tancia de sus activos y de sus planes de inversión posibilitan la realización de los requisitos señalados.

La sociedad de fomento deberá cada dos años comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la unidad económica que forma junto con las sociedades promovidas llena los requisitos que señala este artículo. Cuando dicha Secretaría lo considere conveniente podrá ampliar ese período hasta cuatro años.

ARTICULO 2o.— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público apreciará el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 1o., conforme a los siguientes criterios:

I.—El incremento deberá medirse en relación a la actividad del conjunto de empresas que forman la unidad de fomento y con respecto al período inmediato anterior;

II.—El incremento deberá igualar o superar al promedio de la actividad industrial del país;

III.—Los incrementos se valorarán conforme a un análisis de conjunto de todas las actividades de promoción, considerando también los siguientes aspectos:

a).—Que no desplacen a empresas pequeñas y medianas que estén operando satisfactoriamente;

b).—Que no ocupen posiciones monopolísticas en el mercado nacional con perjuicio del público en general o de alguna clase social;

c).—Que no provoquen presiones excesivas sobre el nivel de precios, atendiendo a la rama de actividad industrial específica de que se trate;

d).—Que no efectúen gastos considerados como de naturaleza suntuaria;

e).—Que coadyuven al logro de los objetivos de la política de desarrollo nacional, y

f).—Que se ajusten a las Leves del país y en especial a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera;

IV.—Por lo que respecta a la mexicanización de sociedades con mayoría de inversión extranjera no se exigirá incremento alguno respecto del período anterior, pero se atenderá a las siguientes condiciones:

a).—Que se obtenga el número de acciones necesarias por empresa para que la inversión extranjera se ajuste a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera;

b).—Que los títulos estén inscritos en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras por lo menos durante los dos años anteriores a la adquisición de los mismos, salvo que se trate de títulos expedidos con menor antigüedad o que su adquisición se efectúe antes de que el citado Registro cumpla dos años de existencia, y

c).—Que una vez efectuada la adquisición, los títulos permanezcan por lo menos durante dos años en los activos de la sociedad o sociedades adquirentes o dentro de estos dos años sean transmitidos a terceros, conforme a programa de colocación sujeto a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de evitar la especulación y asegurar el cumplimiento a las disposiciones sobre inversión extranjera;

V.—Tratándose de la creación de nuevos empleos, el incremento se calculará tomando en consideración los números máximo y mínimo de trabajadores con-

tratados durante los períodos presente e inmediato anterior, respectivamente;

VI.—No se considerará creación de nuevas empresas industriales o de turismo las que deriven de adquisición, fusión o liquidación de sociedades sin un incremento de activos en proporción importante respecto de los existentes antes de la adquisición, fusión o liquidación;

VII.—El incremento en el desarrollo tecnológico se medirá en relación a los recursos destinados para tal fin, comparado por períodos, salvo que se trate de prestación de servicios de tecnología efectuados en el extranjero caso en el cual no se exigirá incremento alguno sobre el período anterior;

VIII.—Por sustitución de importaciones se entiende la elaboración de productos necesarios para cubrir faltantes del consumo nacional que durante los últimos dos años hayan sido superiores al 20% anual de dicho consumo, con la condición de que los precios de los productos que substituyan los importados sean similares a los vigentes en el mercado interno de los principales países proveedores o del mercado del país en el caso de existir producción nacional, salvo que la Secretaría de Industria y Comercio establezca políticas específicas para tales artículos, supuesto en el cual el requisito se cumple únicamente cuando los precios se ajustan a tales políticas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá asimilar al concepto expresado los productos en relación con los cuales existan razones suficientes para prever un déficit en la producción nacional;

IX.—Respecto a las inversiones en zonas de menor desarrollo económico relativo no se exigirá incremento alguno en relación al período anterior y se atenderá a la delimitación en zonas que señala el Decreto publicado en el "Diario Oficial" el 20 de julio de 1972, considerándose como zonas de menor desarrollo las zonas 2 y 3 a que se refiere dicho Decreto;

X.—Tratándose de industrialización de recursos naturales se exigirá se trate de aquellos que, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no lo estén suficientemente;

XI.—Tratándose de la ampliación de empresas industriales y de turismo se exigirá un incremento respecto del período anterior en la inversión de activos industriales, de turismo o de ambos en un tanto por ciento equivalente al compuesto por la suma del índice de crecimiento de la actividad industrial del país y el 20% de dicho índice;

XII.—Por lo que respecta a la colocación de acciones de una o varias sociedades de la unidad de fomento, ésta se efectuará a través de Bolsa de Valores, dentro del gran público inversionista y conforme a programa de colocación sujeto a la aprobación previa o posterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de evitar la especulación, y

XIII.—En el primer período que se compruebe ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los incrementos se medirán comparando las dos mitades de dicho período. En los subsecuentes se comparará con el período inmediato anterior.

ARTICULO 3o.—En este Decreto se denomina "sociedad de fomento" a la sociedad anónima mexicana legalmente constituida y que satisface los requisitos siguientes:

I.—Tener su capital totalmente suscrito salvo que sea de capital variable;

II.—Que todas sus acciones sean propiedad de mexicanos o de sociedades mexicanas con cláusula de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 821 -

Miércoles 20 de junio de 1973 **DIARIO OFICIAL**

11

exclusión de extranjeros en las que, a su vez las sociedades mexicanas que sean socias tengan la misma cláusula y así sucesivamente, de manera que nunca un extranjero pueda intervenir directa o indirectamente en la sociedad;

III.—Que ninguna de sus acciones sea propiedad de una sociedad en la que la sociedad de fomento sea socia;

IV.—Que su actividad se limite a comprar y vender acciones o partes sociales; a otorgar o garantizar créditos destinados únicamente a las sociedades promovidas y a prestarles servicios o efectuar estudios de promoción, ampliación o restructuración, destinados exclusivamente a las sociedades promovidas existentes o que se desee formar, y

V.—Que invierta por lo menos el 75% de sus activos en acciones de empresas industriales, de turismo o en otorgamientos de crédito a las mismas, sin que en este último caso la inversión exceda del 30%. Los activos restantes podrán ser invertidos en:

- a).—Inmuebles de uso industrial;
- b).—Inversiones transitorias que no tengan carácter especulativo;
- c).—Empresas comerciales que se establezcan en las fajas fronterizas o en la zona libre del país, o que comercialicen primordialmente los productos de alguna o algunas de las sociedades promovidas;
- d).—Empresas de servicio destinadas primordialmente a las sociedades promovidas o a la planeación de nuevas empresas;
- e).—Inversión en activos destinados exclusivamente a la operación de la sociedad, y
- f).—Otros bienes o actividades, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 4o.—Se denomina "sociedad promotora" a la sociedad anónima mexicana legalmente constituida y que satisface los siguientes requisitos:

I.—Que la sociedad de fomento controle directa o indirectamente más del 50% de las acciones comunes de la sociedad;

II.—Que la dirección y administración de la empresa esté a cargo de mexicanos. Cuando la sociedad cuente con un consejo de administración la mayoría de sus integrantes deben ser mexicanos.

Si se utilizan servicios de extranjeros, la empresa debe indicar la forma en que da cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; relativas a la capacitación de trabajadores mexicanos;

III.—Que no sea institución de crédito, de seguros o de fianzas u organización auxiliar de crédito;

IV.—Que invierta por lo menos el 75% de sus recursos en activos industriales o de turismo, salvo los casos a que se refieren los incisos c), d), y e) de la fracción IV del artículo 3o.;

V.—Que no sea propietaria de acciones de una sociedad que controle directa o indirectamente acciones de la sociedad de fomento, ni de una sociedad que controle directa o indirectamente acciones de la propia sociedad;

VI.—Que no esté exenta totalmente del impuesto al ingreso global de las empresas o sujeta a régimen especial de tributación para efectos de este impuesto;

VII.—Que no goce de subsidios ni disfrute de franquicias, exenciones o reducciones a impuestos locales;

VIII.—Que cierre su ejercicio fiscal en la misma fecha que la sociedad de fomento o dentro de los 30 días anteriores, salvo autorización especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IX.—Que presente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la constancia correspondiente del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de los actos, contratos o convenios que conforme a la Ley que crea dicho Registro se deben inscribir en el mismo.

Cuando los pagos al exterior sean por concepto de créditos, los intereses no deberá exceder a los que rijan en el mercado internacional, y

X.—Que tengan como mínimo un 60% de contenido nacional dentro de su costo directo de producción. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar un porcentaje inferior de contenido nacional cuando se requieran materias primas no disponibles en el país o cuando la sociedad se comprometa en un plazo y conforme a un programa que acepte la propia Secretaría, a alcanzar dicho contenido. Este requisito no es exigible a las empresas maquiladoras, conforme a las disposiciones específicas para tales empresas.

ARTICULO 5o.—Las sociedades de fomento podrán solicitar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización a que se refiere la fracción VII del artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando perciban las ganancias por enajenación de acciones en su carácter de accionistas de sociedades anónimas mexicanas que posean una estructura de capital social, conforme a la cual la participación de mexicanos represente como mínimo el 51% y estén inscritas en Bolsa de Valores, colocando de manera importante y por conducto de la propia Bolsa, sus acciones dentro del gran público inversionista. A este efecto la sociedad de fomento presentará ante la Secretaría los programas de colocación de acciones y de inversiones, indicando política de adquisición y selección de valores.

En el caso de que las sociedades de fomento no se acojan al régimen que prevé el artículo 4o., quedan obligadas a cumplir únicamente con los siguientes requisitos:

I.—Garantizar que la propia sociedad de fomento y el conjunto de empresas en que invierta sus recursos constituyen una unidad de fomento industrial, conforme a los lineamientos que contienen los artículos 1o. y 2o. de este Reglamento;

II.—Ajustarse a lo dispuesto en el artículo 3o.;

III.—Acreditar que las sociedades que promueven llenan los requisitos que señalan las fracciones II, III, IV, V, VII y IX del artículo 4o.;

IV.—Solicitar autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en unión de otras sociedades se les considere o deje de considerar como una unidad de fomento;

V.—Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de toda nueva adquisición de acciones o partes sociales de una sociedad indicando el monto de la inversión, la actividad de la sociedad y el porcentaje de participación que tiene el capital social de la misma; asimismo deberá informar a la propia Secretaría del avance de sus programas de colocación de acciones y de la desincorporación de cualquier sociedad a la unidad de fomento, y

VI.—Llenar los libros y registros que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como cumplir los requisitos que le señale en los términos de este Reglamento y proporcionar la información y documentación que le solicite al efecto.

ARTICULO 60.—Las sociedades que paguen dividendos a la sociedad de fomento no retendrán el impuesto a que se contrae la fracción V del artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

ARTICULO 70.—Las sociedades de fomento podrán solicitar autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar el ingreso global gravable de la unidad de fomento y pagar el impuesto correspondiente, conforme a los instructivos que en su caso expida la propia Secretaría. En todo caso se respetarán los principios siguientes:

I.—La sociedad de fomento y las sociedades promovidas presentarán declaración individual determinando y pagando el impuesto que les corresponda, conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta;

II.—Se determinará el impuesto de la unidad de fomento aplicando a su ingreso global gravable, que es la diferencia entre la suma de los ingresos de sustraitos y de las deducciones autorizadas declarados por las sociedades que la forman, la tarifa del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

III.—La sociedad de fomento, en la declaración de la unidad de fomento, determinará la diferencia entre el impuesto global gravable de la unidad de fomento y el impuesto global gravable causado por las sociedades que la forman,

Si la diferencia conforme al párrafo anterior arroja saldo a cargo, la sociedad de fomento lo enterará junto con la declaración de la unidad de fomento. Si el saldo fuera a favor se considerará dicha cantidad a favor de la sociedad de fomento, quien podrá solicitar su devolución o compensarla con los pagos a cargo de la unidad de fomento o, con su consentimiento, con los pagos provisionales o definitivos a cargo de cualquier sociedad promovida.

La devolución o compensación que pudiera resultar de la diferencia entre el impuesto causado por la unidad de fomento y los impuestos causados por las sociedades que la forman no excederán a la suma de los impuestos pagados por las sociedades de fomento y las sociedades promovidas, salvo que el saldo a favor en exceso provenga de franquicias, reducciones o exenciones parciales al mismo impuesto y dicho saldo no exceda al monto de tales franquicias, reducciones o exenciones parciales;

IV.—La sociedad de fomento es responsable por los créditos fiscales a cargo de la unidad de fomento y queda obligada a presentar, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de su ejercicio, la declaración correspondiente;

V.—La amortización de pérdidas de cada una de las sociedades promovidas no tendrá efecto alguno en la determinación del ingreso global gravable de la unidad de fomento, salvo que en años anteriores no haya sido deducida en la declaración correspondiente;

VI.—Se eliminará del ingreso global gravable de la unidad de fomento la ganancia o la pérdida derivada de la enajenación de inmuebles no depreciables realizada entre sociedades que forman parte de dicha unidad de fomento, y

VII.—La unidad de fomento no está obligada a enterar pagos provisionales.

ARTICULO 80.—Se requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que varias sociedades se consideren o se dejen de considerar como una unidad de fomento y para incorporar una nueva sociedad a la unidad de fomento o para desincorporarla de la misma.

ARTICULO 90.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá otorgar las autorizaciones a que se refiere el artículo 80, conforme a las disposiciones siguientes.

I.—Toda sociedad que participe en la determinación del ingreso global gravable de la unidad de fomento deberá continuar participando en el mismo, salvo autorización expresa de la propia Secretaría,

II.—Cuando así lo determine la propia Secretaría, la sociedad cuyas acciones comunes sean propiedad de la unidad de fomento en más del 50% o de la cual la unidad de fomento controle, por conducto de una o varias de las sociedades que la componen, la mayoría de sus acciones comunes, participará en la determinación del ingreso global gravable de la unidad de fomento, estando facultada la misma Secretaría para condicionar la autorización respectiva a que las sociedades reúnan los requisitos que señala el artículo 40, para ser consideradas sociedades promovidas;

III.—Las sociedades que integren la unidad de fomento, deberán informar a la propia Secretaría de cualquier transferencia de acciones que tenga por efecto el control de la mayoría de las acciones de una sociedad o la pérdida de tal control por la unidad de fomento. Esta información deberá ser proporcionada en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que se produzca alguno de los efectos a que alude esta fracción, y

IV.—En los casos en que una sociedad se desincorpore de una unidad de fomento o cuando ésta deje de considerarse como tal la sociedad de fomento deberá determinar en cantidad líquida los beneficios fiscales obtenidos y que hayan sido producidos por la sociedad o, sociedades que se desincorporan o por el conjunto de sociedades promovidas, en su caso.

La sociedad de fomento queda obligada a enterar las cantidades que resulten de la liquidación, sean por concepto de pérdidas que la sociedad que se desincorpora guarde el derecho a amortizar o sean por concepto de utilidades diferidas.

ARTICULO 10.—La sociedad de fomento deberá llevar los libros y registros que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con los requisitos que se señalan en este Decreto y queda obligada a proporcionar toda la información y documentación que le soliciten al respecto.

En todo caso y salvo autorización de la propia Secretaría, la sociedad de fomento estará obligada a:

I.—Presentar dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de su ejercicio fiscal los estados financieros dictaminados por Contador Público, correspondientes a cada una de las sociedades que integran la unidad de fomento; además, acompañará una lista completa de los valores comprendidos en su activo y en el activo de las sociedades en que controle más del 50% del capital, indicando el porcentaje que representan en el capital de las sociedades en las cuales tenga la inversión, y

II.—Presentar los estados financieros dictaminados por Contador Público o los estados financieros proforma dictaminados también por Contador Público, cuando se solicite cualquiera de las autorizaciones que señala el artículo 80.

ARTICULO 11.—El incumplimiento a las disposiciones de este Decreto o a las resoluciones que de él ema-



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 823 -

Miércoles 20 de junio de 1973 - DIARIO OFICIAL

13

nen dará lugar a la cancelación total o parcial de los beneficios otorgados o a la suspensión de los mismos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictará la resolución de cancelación o de suspensión después de escuchar a los interesados y a cudiendo a la gravedad y trascendencia del incumplimiento que la ocasione.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.—El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.—El requisito señalado en el artículo 4o., fracción VII no es exigible tratándose de subsidios, franquicias, exenciones o reducciones de impuestos locales concedidos con anterioridad a la

entrada en vigor de este Decreto, siempre que a partir de esa fecha no se obtengan prórrogas ni beneficios adicionales.

En el caso de franquicias que hayan sido substituidas por subsidios al impuesto sobre ingresos mercantiles, estos no deberán exceder el 1.2% de la tasa general de dicho impuesto ni ser prorrogados en exceso del término que concedía la franquicia antes de ser substituida.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de junio de mil novecientos setenta y tres.—Luis Echeverría Álvarez.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José López Portillo.—Rúbrica.

De la digitalización que antecede y tal y como lo señaló el Pleno del Máximo Tribunal, se desprende que el decreto tiene como fin esencialmente lo siguiente:

Promover la existencia de unidades de fomento, definidas como "... unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial del país y se forman por una sociedad de fomento y una o más sociedades promovidas...". De acuerdo con el artículo 1º la unidad económica debía comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que con la agrupación de las sociedades que la integraban, lograban incrementar sus ventas y servicios: "... en un tanto por ciento equivalente al compuesto por la suma del índice de crecimiento de la actividad industrial del país y el 20% de dicho índice, por lo menos en cinco de las siguientes actividades:

- I. Mexicanización de sociedades con mayoría de inversión extranjera;
- II. Creación de nuevos empleos;
- III. Creación de nuevas empresas industriales y de turismo;
- IV. Desarrollo tecnológico nacional;
- V. Aumento en las exportaciones;
- VI. Sustitución de importaciones;
- VII. Inversiones en zonas de menor desarrollo económico relativo;
- VIII. Industrialización de recursos naturales;
- IX. Ampliación de empresas industriales y de turismo; y

X. Colocación de acciones entre el público.

Se definían, para efectos del decreto, cada una de las actividades arriba citadas y se condicionaba su aplicación a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La sociedad de fomento debía ser una sociedad anónima mexicana legalmente constituida y con cláusula de exclusión de extranjeros, y se debía dedicar exclusivamente a las actividades propias de una sociedad controladora, como son la compraventa de acciones o partes sociales, el otorgamiento o garantía de créditos a las sociedades promovidas y a la prestación de servicios exclusivamente a dichas sociedades.

La sociedad promovida, por su parte, debía ser obviamente mexicana en la constitución de su capital y en su determinación, cuyo control accionario directo o indirecto debía tenerlo la sociedad de fomento en más del 50% de sus acciones comunes, y tenía también perfectamente delimitadas las posibilidades de inversión de sus activos. No podían ser sociedades promovidas las instituciones de crédito, de seguros o de fianzas, ni las organizaciones auxiliares de crédito.

El régimen fiscal de las unidades de fomento previsto en el decreto antes mencionado, que lo hace el antecedente directo del régimen de consolidación fiscal que se reguló en la Ley del Impuesto sobre la Renta, posteriormente como tal, esencialmente consistía en los puntos que a continuación se destacan:

La determinación del ingreso global gravable de la unidad de fomento.

En 1973 la base del impuesto sobre la renta se llamaba ingreso global gravable y se determinaba restando de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas.

Prevía autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la unidad de fomento como tal, podía determinar su ingreso global gravable y pagar el impuesto sobre la renta correspondiente, conforme a las siguientes reglas que establecía el artículo 7 del decreto:

a) La sociedad de fomento y las sociedades promovidas declaraban y pagaban su impuesto de forma individual.

b) Se determinaba el ingreso global gravable de la unidad de fomento sumando al cien por ciento los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas declaradas según el punto anterior, sin eliminación de partidas intercompañías, salvo la ganancia o pérdida en enajenación de inmuebles no depreciables.

c) Al ingreso global gravable de la unidad de fomento se le aplicaba la tarifa del artículo 34 de la ley, determinando así el impuesto a cargo de la unidad de fomento.

d) La sociedad de fomento presentaba una declaración como unidad de fomento determinando la diferencia entre el "impuesto global gravable" según el punto anterior y el total causado por cada una de las sociedades, resultando así un saldo a cargo o a favor de las pérdidas individuales que pudieran existir.

e) El saldo a cargo debía pagarse con la declaración de unidad de fomento; en caso de saldo a favor, éste pasaba a ser saldo a favor de la sociedad de fomento, por el cual se podía pedir devolución o compensar con saldos a cargo de la unidad de fomento o, con el consentimiento de las sociedades promovidas se podría compensar con saldos a cargo de cualquiera de ellas. La devolución o compensación no podría exceder de la suma de los impuestos causados por las sociedades promovidas, que el exceso proviniera de franquicias o reducciones o expidiera el monto de dichas franquicias, reducciones o exenciones parciales.

f) La sociedad de fomento era responsable por créditos fiscales a cargo de la unidad de fomento.

g) La amortización de pérdidas de las sociedades promovidas no tenía efecto en la determinación del ingreso global gravable de la unidad de fomento, salvo que en años anteriores no hubieran sido deducidas.

h) La unidad de fomento no efectuaba pagos provisionales.

i) Otra característica de importancia, que estaba establecida en el artículo 9o. del decreto, era la reversión de los beneficios obtenidos por este régimen, cuando la sociedad de fomento dejara de considerarse como tal o en los casos de desincorporación de alguna sociedad.

Los razonamientos esenciales de los "considerandos" que se establecían en el decreto de mérito, en cuanto a la parte que interesa, son los siguientes:

1. Objetivo general del Estado para establecer el incentivo:

"... las características estructurales de incentivo obligan a limitarlo a los sectores manufacturero y turístico capacitándolos para operar a economía de escala, sin que esto se aplique a otros sectores, pues se está en presencia de un instrumento que al lado de sus bondades tiene limitaciones, superables y superadas por otras medidas de gobierno. ...

"... en ambas hipótesis el principio de neutralidad fiscal no se concibe en forma inerte, estático, como un simple dejar hacer, sino comprometido con el reto de nuestro tiempo: el desarrollo que busca la participación de todos los sectores en el aumento de la productividad y el reparto justiciero de sus frutos exigiéndose a las empresas que deseen utilizar incentivos fiscales, cumplan requisitos que garanticen la promoción de dicho desarrollo. ..."

2. Política económica:

"... una estrategia de desarrollo que se funda en la política de pleno empleo requiere fomentar la creación de nuevas unidades productivas y ampliar las existentes, con el objeto de crear empleos y orientarlas hacia actividades que el Ejecutivo Federal considere conveniente se incrementen por formar parte de su programa de gobierno.

"... esa misma estrategia de desarrollo requiere el aumento del gasto público nacional en favor de las clases, regiones y sectores más necesitados. ..."

3. Política fiscal:

"... frente a la necesidad de promover, dentro del sistema de economía mixta que nos rige, las unidades productivas mexicanas y ante la imposibilidad de desviar el gasto público de las ingentes (sic) necesidades que tiene que satisfacer, se ha formulado un sistema de incentivo que flexibiliza la capacidad operativa y financiera de estas empresas sin producir, en términos generales, sacrificio fiscal o que de producirlo implicaría un simple diferimiento en el pago del impuesto de la unidad productiva. ..."

"... toda administración de incentivos técnicamente planeada exige el establecimiento de metas claramente cuantificables y el señalamiento de plazos que permitan evaluar sus resultados, para lo que este decreto contiene un sistema de evaluación por periodos bianuales y obliga al logro de objetivos medibles en términos de incremento en relación al periodo anterior, de suerte que se exige un aumento constante a ritmo superior al del crecimiento del sector manufacturero en su conjunto, con lo que a la par que se garantiza la eficaz administración del incentivo, se establece un mecanismo de autocontrol que impide fomentar la ineficacia y nivela las pérdidas de una empresa con las utilidades de otras, de modo de salvaguardar la recaudación proveniente de la unidad económica.

"... para aprovechar los incentivos que este decreto concede es necesario que las empresas realicen actividades benéficas a la economía nacional, tales como la mexicanización de sociedades con mayoría de inversión extranjera, creación de nuevos empleos, de nuevas empresas industriales y de turismo, desarrollo tecnológico nacional, sustitución de importaciones, inversiones en zonas de menor desarrollo económico relativo y en especial para la industrialización de recursos naturales y colocación de acciones entre el público. ..."

Tiempo después, el artículo noveno transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta que entró en vigor el 1° de enero de 1981, ratificó la validez del decreto, siempre que se cumplieran las condiciones y requisitos que en el mismo se establecían, mismo que a la letra señala lo siguiente:

TRANSITORIOS

"(...)

ARTICULO NOVENO.- Las sociedades de fomento, las sociedades promovidas y las unidades de fomento a que se refiere el Decreto que Concede Estímulos a las Sociedades y Unidades Económicas que Fomentan el Desarrollo Industrial y Turístico del País, publicado en el "Diario Oficial" de la Federación de 20 de junio de 1973, gozarán de los beneficios y estímulos que establece dicho decreto, siempre que cumplan con las condiciones y requisitos que establece el mismo.

(...)"

Del precepto legal que antecede, se desprende que las sociedades de fomento, las sociedades promovidas y las unidades de fomento a que se refiere el Decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de junio de 1973, gozarán de los beneficios y estímulos que establece dicho decreto, siempre que cumplan con las condiciones y requisitos que establece el mismo.

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 1982, se propuso la supresión del decreto y la introducción en la Ley del Impuesto sobre la Renta del capítulo IV del título II, a saber:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A 1982

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción iv del artículo 74 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presenta, a la consideración de esta Soberanía, el contenido y alcances de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, correspondiente al ejercicio de 1982.

En el documento se exponen las diversas vías que habrán de utilizarse para cubrir las necesidades del programa de gobierno durante el próximo año. Asimismo, se incorporan modificaciones jurídicas que permitirán avanzar en el cumplimiento de los objetivos nacionales y, en particular, de los sistemas financiero y fiscal. En cada propuesta se enuncian los objetivos perseguidos y la función que se asigna a los distintos instrumentos de política

hacendaría, importante núcleo de vertebración de la estrategia económica del Poder Ejecutivo.

Existe un indispensable y delicado equilibrio al armonizar, año con año, el monto y la estructura del gasto nacional con las posibilidades de ingresos, del ahorro interno y del financiamiento foráneo. Esta armonización es imperativa si se desea sostener el impulso alcanzado por nuestra economía y neutralizar los efectos de una coyuntura desfavorable.

Por otra parte, es aconsejable consolidar las reformas iniciadas en los campos tributarios, en las instituciones e instrumentos financieros y aduanales. Ello forma parte principalísima del fortalecimiento económico del Estado mexicano y de su capacidad de impulsar el progreso del país. Así, los instrumentos de la acción financiera podrán servir mejor al esfuerzo de modernización del aparato productivo nacional. Del mismo modo se pretende que el afinamiento de las disposiciones jurídicas facilite el fomento y la protección del ahorro, tanto como la formación de capital.

Las propuestas legislativas también pretenden hacer de la política hacendaría una herramienta eficaz de distribución del ingreso entre sectores sociales y regiones geográficas con miras a conciliar desarrollo con justicia social.

POLÍTICA TRIBUTARIA

La política tributaria, parte orgánica de la estrategia global de desarrollo, se orientará a continuar el proceso de reformas, perfeccionar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y combatir la evasión y elusión en el pago de los impuestos.

En ejercicios anteriores, esta Soberanía se dignó aprobar iniciativas de ley que han transformado radicalmente el sistema tributario nacional, al sancionar reformas a los impuestos directos e indirectos y a las normas que rigen la coordinación fiscal entre la Federación, entidades federativas y municipios.

El conjunto de propuestas, que en esta oportunidad se elevan a la alta consideración del Poder Legislativo, incluye dos iniciativas que mejoran la estructura del régimen vigente: el nuevo Código Fiscal y la Ley Federal de Derechos. El primero de los ordenamientos señalados se encamina a mejorar la administración tributaria, tanto como actualizar conceptos y definiciones jurídicas, en consonancia con las modificaciones sustantivas que se han implantado en un gran número de disposiciones impositivas y en el régimen de los estímulos de fomento a la producción.

También se actualizan los sistemas de fijación de recargos y multas, se simplifican normas y trámites y se perfeccionan los recursos administrativos en beneficio de los contribuyentes.

En cuanto al segundo es preciso hacer notar que el sistema de captación de ingresos no tributarios contiene un conjunto muy variado, profuso y disperso de normas que han crecido con el tiempo y con la ampliación de los servicios estatales. Se justifica, por tanto, integrar un cuerpo único, coherente, de disposiciones

que alcancen la necesaria uniformidad, tanto por los criterios en que se apoya cuanto por los avances que pudieran efectuarse en su generalización en las legislaciones locales. Así lo aconseja el principio de equidad en la distribución de las cargas tributarias, la conveniencia de simplificar las obligaciones de los contribuyentes, la necesidad de reducir costos administrativos y eliminar contraprestaciones exageradamente elevadas en unos casos o demasiado bajas en otros.

La iniciativa se sustenta en el reconocimiento de la creciente complejidad de la economía y de las funciones gubernamentales, que han transformado a los derechos en una fuente significativa y permanente de ingresos de la Federación. Tal hecho debe conducir a un nuevo avance en el sistema democrático de decisiones, al hacer que la fijación de esos ingresos corresponda a actos legislativos y no a criterios exclusivamente administrativos, como viene ocurriendo hasta ahora.

Las entidades federativas que, en acto soberano, decidan sumarse a este nuevo esfuerzo de coordinación tributaria, podrán mantener sus propias reglamentaciones buscando la armonización de criterios y evitando la doble o triple imposición. Cualquier perjuicio que se resintiese en las recaudaciones locales quedaría compensado, con creces, con los aumentos que se añadirían a los Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Las modificaciones al Impuesto sobre la Renta persiguen tres finalidades principales: cuidar la economía de los grupos mayoritarios, buscar generalidad en su aplicación y cerrar brechas legales que dan lugar a elusión o evasión fiscales.

La tarifa del impuesto que grava a las personas físicas habrá de corregirse, a fin de incorporar desgravaciones importantes que, junto con la exención móvil del salario mínimo, signifiquen un nuevo adelanto en el principio de recaudar conforme a la capacidad económica de los causantes y de proteger, por la vía fiscal, la economía de los trabajadores. La existencia de regímenes especiales de tributación tiene antecedentes históricos que los justifican. Sin embargo, constituyen un rompimiento al principio de la equidad en la distribución de las cargas impositivas y son, frecuentemente, fuente de evasión al crear imperfecciones en los sistemas de control.

El Congreso de la Unión aprobó la supresión de las Bases Especiales de Tributación aplicables a la industria de la construcción. La disposición entrará en vigor en enero de 1982. A tal fin, se ha diseñado un conjunto de medidas que facilitará el tránsito de las empresas del ramo al régimen normal del Impuesto sobre la Renta. En cuanto al autotransporte también se pretende eliminar las bases tributarias especiales, en el caso de servicios que se prestan dentro de un mismo grupo de empresas o a compañías ligadas por propiedad accionaria. La medida ampliaría el campo de aplicación del Impuesto sobre la Renta y serviría para evitar precios de transferencia entre negociaciones que reducen, injustificadamente, la recaudación.

Con sentido realista se ha diseñado un régimen de transición a los contribuyentes menores que deban o estén dispuestos a incorporarse en el sistema normal del Impuesto sobre la Renta. Cuando aumenta el volumen de sus negocios, muchos de ellos encaran dificultades administrativas que ahora se intenta resolver. Se propone conceder facilidades administrativas excepcionales, ya que sólo se exigiría un libro de registro de ingresos y gastos y,

otro, de activos y depreciación. Además se permitiría ajustar el valor de sus activos al iniciar los nuevos registros contables.

El sistema propuesto no sólo tendría ventajas para el contribuyente, sino que se ganaría en equidad al reducir uno de los núcleos de singularidad en el tratamiento impositivo. Al respecto conviene tomar en cuenta que el límite máximo de ingresos para quedar incluido en la categoría de contribuyente menor (1.5 millones de pesos anuales) es mucho más amplio del admitido en la mayoría de países, aun los *de* ingreso alto.

Desde otro ángulo se plantea suprimir el Decreto de Estímulos a las Sociedades y Unidades Económicas que Fomentan el Desarrollo Industrial y Turístico del País. Las razones en que se apoya esa recomendación son múltiples. En primer término constituye un incentivo que, por lo estricto de los requisitos, sólo ha estado al alcance de las grandes empresas. Por lo demás, es conveniente suprimir la exención a las ganancias de capital por enajenación de acciones de las sociedades de fomento e incorporar un sistema general y optativo de consolidación de resultados, dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No se intenta dar alicientes de promoción, sino cumplir objetivos fiscales, como reducir movimientos entre compañías del mismo grupo de accionistas, con la finalidad de disminuir las cargas impositivas.

Conviene perfeccionar las disposiciones en que se sustenta la exención otorgada a ingresos asociados a los derechos de autor. A su amparo, en casos que tienden a generalizarse, se vienen justificando pagos exagerados por publicidad al exterior o sobresueldos a funcionarios de empresas, con claro perjuicio fiscal. En cambio, los derechos de propiedad científica o intelectual seguirán gozando de los más amplios privilegios.

Los gastos de las empresas por previsión social vienen acrecentando su participación dentro del total de remuneraciones monetarias al personal de las mismas (del 26 al 37 % entre 1972 y 1980). Aquí se encuentra una fuente importante de elusión que está erosionando la base fiscal. Hay, pues, razones suficientes para limitar la cuantía de este tipo de compensaciones en los estratos de funcionarios y empleados mejor pagados. Los obreros no estarán sujetos a esta disposición mientras sus remuneraciones no excedan de 7 veces el salario mínimo.

Desde otro ángulo se establecen facilidades para la obtención de recursos de largo plazo en el extranjero. En particular, se otorga la exención a los fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros, por cuanto se trata de organizaciones sin fines de lucro que, al estar imposibilitados de cubrir el impuesto, nos negarían el acceso a un mercado privilegiado de dinero de largo plazo".

De lo anterior, se desprende en la parte de interés que se planteó suprimir el decreto de estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país, que las razones en que se apoya esa recomendación son múltiples.

En primer término, constituyen un incentivo que, por lo estricto de sus requisitos, sólo ha estado al alcance de las grandes empresas.

Por lo demás, es conveniente suprimir la exención a las ganancias de capital por enajenación de acciones de las sociedades de fomento e incorporar un sistema general y optativo de consolidación de resultados dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta ya que no se intenta dar alicientes de promoción, sino cumplir objetivos fiscales, como reducir movimientos entre compañías del mismo grupo de accionistas con la finalidad de disminuir las cargas impositivas.

Además el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el 1° de enero de 1982 se incorporó en la Ley del Impuesto sobre la Renta el capítulo IV del título II, denominado "De las sociedades mercantiles controladoras", mediante el cual se dio nacimiento al régimen de consolidación fiscal, además de que en el artículo vigésimo tercero transitorio de las reformas del 31 de diciembre de 1981, se establecía el siguiente régimen de transición:

Que las sociedades controladoras que sean de fomento en los términos del Decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de junio de 1973, podrán optar por consolidar en los términos del capítulo IV del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y para ello necesitan obtener autorización de las autoridades fiscales; cuando la obtengan dejarán de gozar los beneficios y estímulos que establece el decreto a que se refiere este artículo. En ningún caso dichos beneficios y estímulos tendrán aplicación después del 31 de diciembre de 1983.

Que mediante disposiciones de carácter general la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma de aplicar los beneficios fiscales obtenidos durante la vigencia del decreto citado.

De lo anterior, el Pleno del Máximo Tribunal concluyó que el sistema de consolidación de resultados financieros para efectos fiscales, tiene su origen en el propósito de conceder un incentivo fiscal que se creó en un "decreto de estímulos" a favor de ciertas empresas o unidades económicas



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 833 -

denominadas de fomento, que se consideraban como promotoras del desarrollo industrial y turístico del país, cuya participación se consideró que, en ese momento, resultaba benéfica a la economía nacional para satisfacer necesidades de interés general, tales como: la creación tanto de nuevos empleos como de nuevas empresas industriales y de turismo; la promoción del desarrollo tecnológico nacional; la sustitución de importaciones; la inversión en zonas de menor desarrollo económico, entre otras.

Así, el beneficio de carácter económico concedido por el decreto a las empresas o unidades económicas, también tenía como finalidad la satisfacción de necesidades de interés nacional.

Por lo que, como este incentivo se encontraba únicamente al alcance de grandes empresas, desde el año de 1982 se incorporó el régimen previsto en el decreto mencionado a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de extender sobre un número más amplio de contribuyentes que cumplieran con los requisitos que la ley antes citada establecía, el beneficio de carácter económico que de aquél derivaba, consistente en la reducción de movimientos entre compañías del mismo grupo de accionistas y disminución de la carga tributaria, mediante la deducción inmediata de pérdidas fiscales de algunas sociedades mercantiles contra las utilidades de otras que pertenecieran al grupo.

En este tenor, si los beneficios o prerrogativas concedidos en el decreto de estímulos a favor de ciertas empresas o unidades económicas subsistió, e inclusive se incorporó a la Ley del Impuesto sobre la Renta, cabe señalar que obedeció a que en el país prevalecían las condiciones que le dieron origen, consistentes en la necesidad de fomentar la creación de nuevas unidades productivas y ampliar las existentes con el objeto de lograr un paliativo al grave problema de la escasez de empleo, además de elevar el nivel tecnológico e industrial y, por ende, económico y social del país, ya que la solución de estos problemas formaban parte del programa de gobierno.

De acuerdo con lo expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el régimen de consolidación fiscal se

inspiró en un beneficio concedido a cierto grupo de empresas, para lo cual el legislador estableció una serie de modificaciones específicas del sistema tributario general, conformando un régimen diverso o especial para aquellas sociedades mercantiles que decidieran acogerse a él, siempre y cuando cumplieran con determinados requisitos; idea fundamental que aún subsiste, pues aquél no desapareció pese a la reforma de que fue objeto el régimen de consolidación fiscal, vigente a partir del año de 1999.

Sobre el particular, es menester destacar que la conclusión que antecede se corrobora con el hecho de que la prerrogativa que hasta estos momentos se otorga al grupo de empresas que deciden acogerse al régimen de consolidación fiscal, no es un derecho autónomo, es decir, que sea factible de gozar de éste de una manera inmediata por la simple circunstancia de ubicarse dentro de los supuestos normativos que establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que para poder hacerlo efectivo se requiere y es indispensable que se cumplan determinados requisitos y condiciones objetivas (grupo de empresas y solicitud) para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita la autorización correspondiente, resolución particular y concreta expedida a quien lo solicite, toda vez que el fisco debe proteger los intereses sociales que le corresponden estableciendo reglas para tal fin.

En este sentido, el artículo 64, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, establece lo siguiente:

“Artículo 64. Para los efectos de esta Ley, se consideran sociedades controladoras las que reúnan los requisitos siguientes:

(...)

Una vez ejercida la opción de consolidación, la sociedad controladora deberá continuar pagando su impuesto sobre el resultado fiscal consolidado, por un periodo no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer la opción citada, y hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria no le autorice dejar de hacerlo, o bien, cuando la sociedad controladora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, o deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos del artículo 71 de la misma. El plazo anterior no se reinicia con motivo de una reestructuración corporativa.

(...)”

De la transcripción anterior se advierte que para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, una vez ejercida la opción de consolidación, la sociedad controladora deberá continuar pagando su impuesto sobre el resultado fiscal consolidado, por un periodo no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer la opción citada, y hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria no le autorice dejar de hacerlo, o bien, cuando la sociedad controladora deje de cumplir alguno de los requisitos o deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos del artículo 71 de la citada Ley, así como que el plazo anterior no se reinicia con motivo de una reestructuración corporativa.

En este sentido, es importante destacar que lo dispuesto por el artículo 64 de la ley de la materia, en cuanto a que las sociedades controladoras consolidarán sus resultados fiscales hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria no les autorice a dejar de hacerlo, no debe entenderse como una situación que queda única y exclusivamente al arbitrio de la autoridad administrativa, sino que debe tenerse presente que para que se actualice ese supuesto es necesario que las sociedades controladoras previamente soliciten al fisco federal la autorización para dejar de tributar conforme al régimen de consolidación fiscal, pues para ello es necesario que los contribuyentes manifiesten su voluntad, toda vez que de no hacerlo la autoridad se encuentra vinculada por la autorización expresa original que, según lo explicado, de no darse la solicitud para salir del régimen en cada ejercicio, se producirá la autorización tácita de continuar por ese periodo.

En virtud de lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la naturaleza jurídica del régimen de consolidación, de la autorización de inicio de consolidación fiscal y de las reglas fundamentales de cómo opera, tienden a respetar simultánea y concatenadamente lo siguiente:

1.- La voluntad del grupo de empresas que acogen el régimen para efectos del impuesto sobre la renta.

2.- La situación concreta y particular que se crea por virtud de dicha resolución administrativa.

3.- La facultad del Poder Legislativo de establecer las bases de tributación con el fin de satisfacer los gastos públicos.

4.- La prerrogativa del contribuyente de no formular otra solicitud de autorización una vez agotado el periodo obligatorio.

5.- Las atribuciones de la autoridad administrativa para conceder una autorización tácita derivada de la autorización expresa de origen y de la aplicación del artículo 36 bis del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior, dio origen a la Jurisprudencia número P./J. 120/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de octubre de 2001, la cual a la letra señala lo siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 188647
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIV, Octubre de 2001
Materia(s): Administrativa
Tesis: P./J. 120/2001
Página: 11

CONSOLIDACIÓN FISCAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE ESE RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN. El régimen de consolidación fiscal, en términos generales, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a determinados grupos de empresas con intereses económicos comunes, que al reunir ciertas características y cumplir con los requisitos establecidos en la ley, son consideradas como una unidad económica, lo que les permite, bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales. Entre sus principales características se encuentran las de reunir las utilidades y pérdidas de una entidad o unidad económica, integrada por la compañía controladora y sus controladas, como si se tratara de una sola empresa, para que sobre este resultado se pague el impuesto, así como la de permitir que las pérdidas generadas por una sociedad del grupo que consolida sean amortizadas de inmediato contra las utilidades generadas de otras sociedades del mismo grupo, independientemente de que la controlada que hubiera resentido la pérdida todavía no tuviese la posibilidad de aplicarla en lo individual.

Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 837 -

José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.

Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número 120/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil uno."

En virtud de lo anterior, cabe señalar que

es una sociedad controladora que cuenta con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, según el oficio número 361-I-B-3-5334 de fecha 15 de abril de 1985, emitido por la entonces Dirección Técnica de Ingreso, teniendo en el ejercicio revisado entre otras empresas controladas a y a la controlada con una participación consolidable del 99.9676%, cada una.

Ello, tal y como lo reconocen los peritos de las partes y la tercero en discordia, en su respuesta a la pregunta número 23 del cuestionario de la actora, lo cual lo hicieron en los siguientes términos:

PERITO DE LA ACTORA

23. Dirá el perito, ¿si la empresa actora en el juicio contencioso administrativo en el que se actúa, durante el ejercicio fiscal del 2006 tributó bajo el régimen de consolidación fiscal y si la misma tiene la calidad de empresa controladora?, debiendo precisar los motivos y documentales consultadas para emitir su respuesta.

Del análisis de los documentos, libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la empresa actora, me pude cerciorar que durante el ejercicio fiscal del 2006 la empresa actora Sí tributó bajo el régimen de consolidación fiscal y tenía la calidad de empresa controladora.

Lo anterior se puede corroborar, específicamente, del análisis realizado a los dictámenes fiscales de 2006 y 2007, que se acompañan como anexo A.

PERITO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

23. Dirá el perito, ¿si la empresa actora en el juicio contencioso administrativo en el que se actúa, el ejercicio fiscal del 2006 tributó bajo el régimen de consolidación fiscal y si la misma tiene la calidad de empresa controladora?, debiendo precisar los motivos y documentales consultadas para emitir su respuesta.

Respuesta:

De acuerdo al expediente administrativo abierto a nombre de la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] en el que consta el dictamen fiscal de 2006, en el cual se manifiestan datos en los anexo del 24 al 33 correspondientes a la información sobre consolidación, si tributó bajo el régimen de consolidación fiscal, teniendo la calidad de sociedad controladora, en el ejercicio fiscal de 2006.

PERITO TERCERO EN DISCORDIA

23.- Dirá el perito, ¿si la empresa actora en el juicio contencioso administrativo en el que se actúa, el ejercicio fiscal del 2006 tributó bajo el régimen de consolidación fiscal y si la misma tiene la calidad de empresa controladora?, debiendo precisar los motivos y documentales consultadas para emitir su respuesta.

Respuesta: De acuerdo con la documentación revisada en el expediente de la Actora, el dictamen fiscal del ejercicio 2006 presentado el 12 de julio de 2007 señala en el apartado "Datos Generales" que la Contribuyente si consolida Estados Financieros para efecto fiscal y manifiesto que es la sociedad controladora.

De lo anterior, resulta claro que la empresa demandante tributó bajo el régimen de consolidación fiscal, teniendo la calidad de sociedad controladora, en el ejercicio fiscal de 2006.

Una vez precisado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional estima necesario tener presente el contenido tanto de la resolución impugnada, como de la originalmente recurrida en la parte en que la demandada se pronunció respecto a la declaración complementaria presentada por ***** *** ***** ** el 14 de mayo de 2013, las cuales a la letra señalan lo siguiente:

RESOLUCIÓN RECURRIDA

"(...)

Asimismo, es de aclarar, que el artículo 68 anteriormente señalado, obliga a [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su carácter de sociedad controladora, a determinar su resultado fiscal consolidado bajo la mecánica que el propio artículo le establece.

Ahora bien, con escrito sin fecha de emisión, recibido el día 06 de junio de 2013 en la Oficina de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130020045 firmado por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED]



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 839 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

[REDACTED] actualmente [REDACTED] quien acreditó su personalidad con fotocopia del Instrumento Público Notarial número 95,889, volumen 1853 de fecha 13 de octubre de 2003, otorgado ante la fe del Lic. Gerardo Correa Etchegaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal, en alcance a su escrito de fecha 1º de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013 en la Oficialía de Partes en ventanilla de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603 firmado por el mismo C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] manifestó lo siguiente:

“...

Respecto del pago anual consolidado

En este orden de ideas y a efecto de ubicar debidamente el contexto del presente escrito, es preciso señalar que de acuerdo a lo establecido en el oficio de observaciones anteriormente referido, se desprende que la Autoridad habría advertido la supuesta omisión en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2006 por un monto de \$1,559,028,827.00 (Un mil quinientos cincuenta y nueve millones veintiocho mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) como resultado de no haber reflejado en el pago consolidado anual, el efecto fiscal de su controlada [REDACTED] por dicho monto.

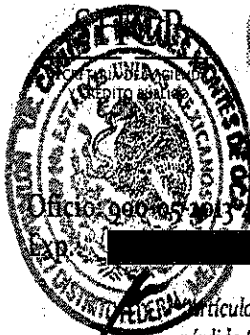
Bajo esta consideración, se estableció la supuesta omisión, bajo el argumento relativo a que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar, a más tardar dentro del mes siguiente a aquel en que ocurra este hecho, de conformidad con los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) y 72 fracción III, ambos ordenamientos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2006.

Atendiendo el contexto anteriormente referido, es el deseo de mi representada exhibir como prueba supervenientes dentro del proceso de fiscalización que nos ocupa, las documentales de las que se desprende que mi representada no se encontraba obligada a reflejar el efecto fiscal de su controlada [REDACTED] para efectos de la determinación de su resultado fiscal consolidable.

La prueba superveniente que se presenta a fin de que sea valorada y considerada por esa H. Autoridad Fiscalizadora, es la que a continuación se menciona:

- **LA DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en la declaración complementaria a la declaración anual presentada por [REDACTED] el pasado 14 de mayo de 2013, a través del Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria, con número de operación 2DAIC, misma que contiene la cadena original y sello digital que autentifican su presentación y su valor probatorio pleno.

Conviene destacar que a través de dicha declaración, se acredita con toda precisión, que la empresa [REDACTED] ha determinado la base el impuesto consolidado anual, considerando de forma exacta la aportación de los resultados fiscales del ejercicio de sus consolidadas (dentro de las que se encuentra [REDACTED]) a la base del impuesto consolidado, en los términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente durante el ejercicio de 2005, mismo que es del tenor siguiente:



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Administración General de Grandes Contribuyentes



25 JUN 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DESRONDO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

№ 20066

Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

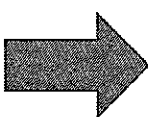
I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

- a) Sumar las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.
- b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate.

(...)

En este orden de ideas y tal y como podrá apreciar esa H. Autoridad Fiscal del recálculo del resultado fiscal consolidado que se sirva realizar de mi Representada, podrá apreciar con toda claridad que en el presente caso, [REDACTED] ha determinado su resultado fiscal del ejercicio, sumando las utilidades (o pérdidas según sea el caso) fiscales individuales del ejercicio correspondiente dentro de las que se destaca la de [REDACTED] la cual se encuentra reflejada fielmente en la declaración anual de la consolidación.



Con base a lo anteriormente expuesto y en apoyo a la documentación superveniente aportada de la cual se desprende que el resultado fiscal consolidado coincide fielmente con la situación fiscal reflejada por mi representada y por su controladas, es dable concluir que mi Representada no esta obligada a considerar ninguna modificación a la declaración anual consolidada (sic) por cuanto hace al ejercicio fiscal de 2006, tal y como se afirmó en el oficio de observaciones.

.."

Del estudio a sus argumentos citados anteriormente por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] en su escrito sin fecha de emisión recibido el día 06 de junio de 2013 en la Oficialía de Partes en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en alcance a su escrito de fecha 1º de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, se conoció que aún cuando su sociedad controlada [REDACTED] haya presentado con fecha 14 de mayo de 2013, declaración anual complementaria del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, la misma no desvirtúa las observaciones consignadas en el oficio número 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, referido en el inciso j) de la página 5 del presente oficio, por lo que al respecto, se hace de su conocimiento la siguiente determinación:

Cabe señalar que efectivamente [REDACTED] presentó declaración anual complementaria del ejercicio 2006, a través de la cual, disminuye su utilidad fiscal individual,



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

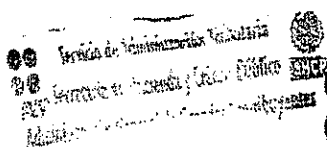
EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 841 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DETERMINADO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
FISCALMENTE

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

en virtud de que elimina el inventario acumulable de los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por la contribuyente revisada, en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, irregularidad determinada por esta Administración, y dada a conocer a través del oficio de observaciones emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente adscrita a esta Administración mediante oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, señalado en el inciso j) la página 5 de esta resolución, no obstante lo anterior, la irregularidad subsiste, por lo señalado en las páginas 65 a 76 de esta resolución.

Al respecto, resulta importante señalar que mediante escrito sin fecha de emisión, presentado en la oficialía de partes de la Administración General de Grandes de Contribuyentes, al que le correspondió el folio de entrada número 130020045, señalado en las páginas 72 a 74 de esta resolución, la contribuyente revisada, manifestó que había corregido su situación fiscal respecto de sus pagos provisionales consolidados, observación que se le dio a conocer mediante el oficio de observaciones señalado en el párrafo anterior, sumando a la utilidad fiscal consolidada estimada determinada de conformidad con el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago correspondiente, determinado por su sociedad controlada [REDACTED] en los términos de la fracción V del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005.

De lo anterior, se desprende que es la propia controladora revisada que reconoce, con motivo de dicha autocorrección, que el inventario acumulable correspondiente al ejercicio de 2006, determinado por su sociedad controlada [REDACTED] si es un ingreso acumulable de conformidad con lo dispuesto en la citada fracción V del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005, es por ello que esta Administración además de los argumentos vertidos, concluye que la irregularidad persiste y la contribuyente revisada debió sumar la utilidad fiscal individual de la citada sociedad controlada incluyendo el inventario acumulable del ejercicio 2006.

Es por ello que la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] no desvirtuó la omisión respecto a la modificación de la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] al no incluir el inventario acumulable determinado por esa sociedad controlada, en el cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en términos de la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al proporcionar la declaración complementaria del impuesto sobre la renta del ejercicio de 2006 presentada el 14 de mayo de 2013 por la sociedad controlada.

(...)"

RESOLUCIÓN IMPUGNADA

"(...)

C. No se desvirtúan los fundamentos y motivos que tuvo la fiscalizadora para desestimar la declaración complementaria que presentó su controlada [REDACTED]

I. No se combaten los fundamentos y motivos que se contienen en el oficio 900-005-2013-48229 del 1 de julio de 2013, [fojas 74 y 75] donde se señala:

"[...]

Cabe señalar que efectivamente [REDACTED] presentó declaración anual complementaria del ejercicio 2006, a través de la cual, disminuye su utilidad fiscal individual, en virtud de que elimina el inventario acumulable de los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por la contribuyente revisada, en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, irregularidad determinada por esta Administración, y dada a conocer a través del oficio de observaciones emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente adscrita a esta Administración mediante oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, señalado en el inciso j) la página 3 de esta resolución, no obstante lo anterior, la irregularidad subsiste, por lo señalado en las páginas 65 a 76 de esta resolución.

Al respecto, resulta importante señalar que mediante escrito sin fecha de emisión, presentado en la oficina de partes de la Administración General de Grandes de Contribuyentes, al que le correspondió el folio de entrada número 130020045, señalado en las páginas 72 a 74 de esta resolución, la contribuyente revisada, manifestó que había corregido su situación fiscal respecto de sus pagos provisionales consolidados, observación que se le dio a conocer mediante el oficio de observaciones señalado en el párrafo anterior, sumando a la utilidad fiscal consolidada estimada determinada de conformidad con el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago correspondiente, determinado por su sociedad controlada [REDACTED] en los términos de la fracción V del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005.

De lo anterior, se desprende que es la propia controladora revisada que reconoce, con motivo de dicha autocorrección, que el inventario acumulable correspondiente al ejercicio de 2006, determinado por su sociedad controlada [REDACTED] si es un ingreso acumulable de conformidad con lo dispuesto en la citada fracción V del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005, es por ello que esta Administración además de los argumentos vertidos, concluye que la irregularidad persiste y la contribuyente revisada debió sumar la utilidad fiscal individual de la citada sociedad controlada incluyendo el inventario acumulable del ejercicio 2006.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 843 -



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 800 04 05-2015-17797

Exp. 29/L3

40066

162

Es por ello que la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] no desvirtuó la omisión respecto a la modificación de la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] al no incluir el inventario acumulable determinado por esa sociedad controlada, en el cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en términos de la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al proporcionar la declaración complementaria del impuesto sobre la renta del ejercicio de 2006 presentada el 14 de mayo de 2013 por la sociedad controlada.

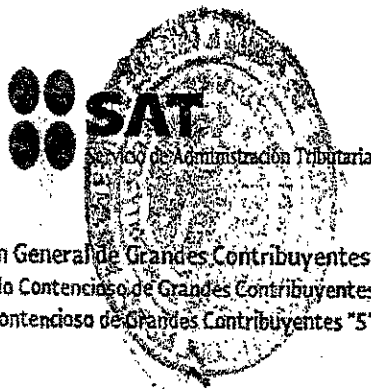
[...]"

De lo anterior se deduce que la fiscalizadora no tuvo por desvirtuadas las observaciones derivadas de la revisión de gabinete de la que fue objeto esa recurrente, por lo siguiente:

- Que la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por [REDACTED] se efectuó con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por esa recurrente, en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, razón por la cual no se le concede valor probatorio.
- Que esa propia recurrente manifestó que había corregido su situación fiscal respecto a sus pagos provisionales consolidados, por lo que sumó a la utilidad fiscal consolidada estimada la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago correspondiente, determinado por su sociedad controlada [REDACTED]

Bajo tal contexto, se desprende en primer lugar que no subsiste una conducta omisiva como lo menciona su mandante en el sentido de que la fiscalizadora no expuso las razones por las cuales no eran desvirtuadas las observaciones encontradas, pues como se ha reseñado en los puntos anteriores, si se indicaron los motivos, razones y circunstancias por las que se llegó a esa conclusión.

Aunado a lo expuesto, esta autoridad observa que subsiste la legalidad de la resolución impugnada al no combatirse los fundamentos y motivos que tuvo la fiscalizadora para desestimar la declaración complementaria que fue presentada por su empresa controlada [REDACTED] esencialmente porque en el agravio que marca como décimo séptimo de su escrito de revocación únicamente alega una supuesta omisión de los fundamentos y motivos considerados por la autoridad y que ante la declaración complementaria de su empresa controlada [REDACTED] esa



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-17797

Exp. 94/13.

163

controladora no tenía obligación de incluir en la utilidad fiscal consolidada de 2006 el inventario acumulable aludido por la autoridad, puesto que éste fue disminuido.

En efecto, esa recurrente a foja 245, de su escrito de revocación señala textualmente:

"[...]

Ante dicho escenario, la negativa de la autoridad recurrida para tener por no desvirtuada la observación apuntada, carece de todo sustento jurídico, ya que si bien tiene por presentada la prueba documental superveniente aportada por mi representada, deja de considerar el valor probatorio pleno que tenía y solo se limita a afirmar de manera lisa y llana que bajo su consideración la presentación de dicha declaración no logra desvirtuar la observación respectiva.

Actitud omisiva que desde luego conlleva la violación flagrante de la garantías de seguridad jurídica, legalidad y debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad, ello, debido a que la autoridad recurrida omite señalar los motivos, circunstancias, situaciones particulares y específicamente los fundamentos legales considerados para no considerar el valor probatorio de la declaración complementaria exhibida.

[...]"

La digitalización que antecede, permite observar que esa recurrente alega una ausencia de fundamentación y motivación por lo que se refiere a la conclusión de la fiscalizadora de no tener por desvirtuados los hechos consistentes en la obligación de esa controladora de determinar el resultado fiscal consolidado considerando el inventario acumulable de su empresa controlada

Lo anterior, sin que se combata lo aludido por la autoridad fiscalizadora, en el sentido de que dicha declaración se efectuó con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por esa recurrente, en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, ni tampoco que el enterero de los pagos provisionales donde sí se considera la doceava parte del multicitado inventario constituye un consentimiento expreso relacionado con la inclusión del inventario acumulable su empresa controlada



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 845 -



Oficio 900 04 05-2015-17797
Exp. 94/13.

Nº 20066

164

Consecuentemente, para esta autoridad subsiste la legalidad de la resolución combatida en términos del artículo 68, del Código Fiscal de la Federación, pues no se combaten los motivos y fundamentos que tuvo la autoridad fiscal para desestimar la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013, por [REDACTED]

II. La declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013, por [REDACTED] no puede surtir efectos en los términos propuestos en el recurso de revocación.

No obstante que lo razonado en el punto anterior para esta autoridad es suficiente para confirmar la legalidad de la resolución impugnada se exponen a continuación los razonamientos por los cuales no es dable valorar la prueba consistente en la declaración complementaria presentada por [REDACTED] en los términos propuestos en la presente instancia.

Por principio de cuentas, resulta oportuno precisar en qué consiste el régimen de consolidación, destacando algunos de sus principales efectos, en correlación con los preceptos legales que regulan dicho sistema:

a.- El objetivo fundamental del esquema de consolidación para fines de pago de impuestos es el de establecer un régimen neutral de gravamen que pudiera aplicarse a los grupos de intereses económicos que por razones comerciales, financieras, laborales o de otra naturaleza, decidieron organizarse a partir de sociedades mercantiles, jurídicamente independientes entre sí, de forma tal, que por su forma de organización no tuvieran efectos favorables ni desfavorables desde el punto de vista de los elementos básicos del impuesto respecto de los grupos organizados, a partir de una sola empresa o de una matriz con sus sucursales.¹

b.- El régimen de consolidación fiscal, en términos generales, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a grupos de empresas con intereses económicos comunes, que reúnen ciertas características y cumplen con los requisitos establecidos en la ley, de ser consideradas como una unidad económica y bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun y cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales.

SHCF
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-17797
Exp. 94/13.

165

Esto es, el objetivo del régimen de consolidación fiscal es el permitir que un grupo de empresas con determinadas características, integre como un ente jurídico distinto de cada una de ellas, su **resultado fiscal consolidado**.

Por ello, fue necesario que el legislador estableciera en la Ley del Impuesto sobre la Renta un esquema bajo el cual la empresa controladora (quien aglutina el interés económico y corporativo de todas las empresas del grupo), sea quien determine el resultado fiscal consolidado (el correspondiente a todo el grupo de consolidación), es decir, la base para el pago del impuesto sobre la renta, correspondiente al conjunto de empresas en consolidación, para lograr que éstas tributen como si fueran un mismo contribuyente.

De esta manera tenemos que nuestros legisladores a través de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reconocen la **existencia de "unidades económicas" formadas por el conjunto de las sociedades individuales que consolidan**, las cuales debido a sus características especiales, deben sujetarse a reglas de tributación específicas contenidas en el llamado régimen de consolidación fiscal.

En tal virtud se advierte que el régimen de consolidación fiscal, evidencia la estrecha vinculación jurídico-económica entre las sociedades controladora y las controladas, en virtud de que el cálculo del impuesto, que de manera consolidada se debe cubrir al fisco, lo que pone de manifiesto que las disposiciones legales dirigidas a la controladora repercuten en la controlada y viceversa, las dirigidas a la controlada repercuten en la controladora, pues corre a cargo de ésta la obligación de determinar el resultado fiscal consolidado, el cual no se lograría sin la participación económica y jurídica, desde el punto de vista tributario, de la controlada.

c.- Con base a lo anterior es necesario revisar el Régimen de Consolidación Fiscal mismo que se encuentra integrado de la siguiente manera:

- ✓ Sociedades que se consideran Controladoras.- las sociedades residentes en México; propietarias de más del 50% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades controladas; y que en ningún caso más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. (Artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-17797
Exp. 204/13.
20066

166

✓ Sociedades que se consideran Controladas.- las sociedades que más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de una sociedad controladora. (artículo 66 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).

El artículo 64, de la Ley del Impuesto sobre la Renta precisa sobre el resultado fiscal consolidado lo siguiente:

"Artículo 64. (...)

La sociedad controladora que opte por considerar su resultado fiscal consolidado, deberá determinarlo conforme a lo previsto en el artículo 68 de esta Ley. Al resultado fiscal consolidado se le aplicará la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley, en su caso, para obtener el impuesto a pagar por la sociedad controladora en el ejercicio.

El impuesto que se haya determinado conforme al segundo párrafo de este artículo, será el que se acreditará contra el impuesto al activo del mismo ejercicio, y será el causado para determinar la diferencia que se podrá acreditar adicionalmente contra el impuesto al activo en los términos del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo.

Una vez ejercida la opción de consolidación, la sociedad controladora deberá continuar pagando su impuesto sobre el resultado fiscal consolidado, por un período no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquél en que se empezó a ejercer la opción citada, y hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria no le autorice dejar de hacerlo, o bien, cuando la sociedad controladora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, o deba desconsolidar en los términos del penúltimo párrafo del artículo 70 de esta Ley y del noveno, antepenúltimo y penúltimo párrafos del artículo 71 de la misma. El plazo anterior no se reinicia con motivo de una reestructuración corporativa.

La sociedad controladora y las sociedades controladas, presentarán su declaración del ejercicio en los términos de los artículos 72 y 76 de esta Ley, y pagarán, en su caso, el impuesto que resulte en los términos del artículo 10 de la misma..."

Derivado de lo anterior, corresponde a la sociedad controladora determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, de acuerdo al artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que literalmente indica:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 900 04 05-2015-17797
Exp. 204/13.

167

"Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

1. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se sumarán o se restarán en la participación consolidable.

Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades controladoras, será del 100%."

En ese tenor, el régimen de consolidación es un régimen con características especiales, en el que la sociedad que ejerce el control del grupo de consolidación (sociedad controladora) en representación de las demás empresas (sociedades controladas) **paga en conjunto los impuestos a cargo del grupo de empresas que lo integran.**

Esto es, la sociedad controladora se obliga a determinar el tributo del grupo de empresas que integra el régimen de consolidación, **por la participación consolidable, siempre y cuando haya ejercido la opción de consolidación** a que se refiere el segundo párrafo, del artículo 64, **ant** transcrito.

Por ello, es que contrario al sistema general de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el cual cada persona moral (contribuyente) en lo individual debe calcular su resultado fiscal del ejercicio,



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 847 -



Oficio 900 04 05-2015-17797
Exp. 144/13

20066

168



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

disminuyendo a sus ingresos acumulables las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores (artículo 10), dentro del régimen de consolidación fiscal el impuesto consolidado (o sea, el que corresponde a la unidad económica formada por el conjunto de sociedades individuales en la parte que consolida) se determina y se paga por la sociedad controladora de conformidad con lo siguiente:

- Acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, determina el resultado fiscal consolidado (utilidad o pérdida fiscal consolidada), sumando o restando, según corresponda, los conceptos siguientes: i) utilidades fiscales, o las pérdidas fiscales sin actualizar, ambas del ejercicio correspondientes a las sociedades controladas; ii) su utilidad fiscal o su pérdida fiscal sin actualizar del ejercicio y iii) las modificaciones a la utilidad o pérdida de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores que tuvieran una sociedad que se incorpore al grupo y pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de las sociedades controladas y iv) las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas, de las que no hayan sido consideradas entre el gran público inversionista.
- A la utilidad fiscal consolidada determinada según el punto anterior, la sociedad controladora puede disminuir las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, con lo cual se determina el "resultado fiscal consolidado" del ejercicio.

En estas circunstancias, en virtud de que el grupo de consolidación es una unidad económica o un todo, por consiguiente, por la parte que consolide fiscalmente se deberá determinar un sólo resultado fiscal consolidado, el cual abarcará los resultados fiscales de la sociedad controladora y de las sociedades controladas en cuanto a la participación consolidable.

Ahora bien, el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación señala textualmente:

"Artículo 32.- Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación."

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de tres ocasiones las declaraciones correspondientes, aún cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, en los siguientes casos:



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-17797
Exp. 144/13.

169

- I. Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades.
 - II. Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta.
 - III. Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo.
 - IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de Ley.
- Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.**

La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo se efectuará mediante la presentación de declaración que sustituya a la anterior, debiendo contener todos los datos que requiera la declaración aun cuando sólo se modifique alguno de ellos.

Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda, debiendo pagarse las multas que establece el citado artículo 76.

Se presentará declaración complementaria conforme a lo previsto por el quinto párrafo del artículo 144 de este Código, caso en el cual se pagará la multa que corresponda, calculada sobre la parte consentida de la resolución y disminuida en los términos del séptimo párrafo del artículo 76 de este ordenamiento.

Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que correspondía, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 21 de este Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago.

N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VEASE TRANSITORIO UNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CODIGO.
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE DICIEMBRE DE 2009)

Para los efectos de este artículo, una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5"

Oficio 800 04 05-2015-17797
Exp. 94.1
NO 20066

170

contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando. [...]

[Énfasis añadido]

El numeral de referencia en atención al principio de autodeterminación de los tributos establece la posibilidad de que los causantes hasta en tres ocasiones modifiquen sus declaraciones de impuestos, sin embargo tales declaraciones no tendrán efectos jurídicos cuando se presenten una vez iniciadas las facultades de comprobación.

Sin embargo, el citado numeral establece una excepción y consiste en que las declaraciones complementarias podrán ser presentadas más de tres veces y aún iniciadas las facultades de comprobación, cuando sólo los causantes **incrementen** sus ingresos o el valor de sus actos o actividades, **disminuyan sus deducciones o pérdidas** o reduzcan las cantidades acreditable o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta, cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo, y cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de Ley.

También se desprende que aquellas declaraciones complementarias que tengan repercusión en el ejercicio revisado por las autoridades fiscales no tendrán efectos jurídicos.

En esa virtud, el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación traído al régimen de consolidación fiscal debe ser interpretado tomando en consideración que la empresa controladora y sus controladas constituyen una unidad económica que tributan bajo un esquema de beneficio que permite amortizar pérdidas fiscales en el mismo ejercicio en que son generadas, ocasionando con ello el diferimiento del impuesto.

En otras palabras, las declaraciones complementarias de las empresas controladas que repercutan en el resultado fiscal consolidado modificando su utilidad o pérdida fiscal individual, no tendrán efectos jurídicos una vez que hayan sido iniciadas las facultades de comprobación a la empresa controladora (siempre y cuando no se ubiquen en los supuestos legales de excepción), pues la intención del legislador con la inclusión de ese precepto legal fue la de no obstaculizar o limitar el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales lo cual ocurre en consolidación



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 849 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "S"

Oficio 900 04 05-2015-17797

Exp. V/13.

171

con la modificación en la declaración de las empresas controladas, considerando las particularidades de ese régimen.

Lo anterior se robustece si consideramos que el propio artículo 32, del Código Fiscal de la Federación establece que "Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda [...]", lo que se traduce en que ninguna otra declaración complementaria tendrá efectos jurídicos, salvo lo dispuesto en ese mismo numeral.

En tal contexto jurídico, esta autoridad fiscal valora en términos del artículo 130, del Código Fiscal de la Federación la prueba consistente en la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por [REDACTED] y concluye que dicha documental fue presentada una vez que la autoridad fiscal inició las facultades de comprobación a la empresa controladora [REDACTED] por el ejercicio fiscal 2006.

Por lo que siendo que esa declaración tuvo repercusión en el resultado fiscal consolidado al disminuir la utilidad fiscal de la empresa controlada [REDACTED] en cantidad de \$1,559'028,827, es que a consideración de esta autoridad no puede tener efecto jurídico acorde a la interpretación efectuada al artículo 32, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el marco jurídico que rige el régimen de consolidación fiscal, en específico el artículo 68, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior, especialmente porque la declaración complementaria de [REDACTED] no se ubica en las hipótesis de excepción establecidas en el artículo 32, del Código Fiscal de la Federación, y en consecuencia, no tiene ningún efecto jurídico.

Adicionalmente, se advierte por el dicho de esa recurrente (foja 246 último párrafo del escrito de revocación) que en la declaración complementaria de 14 de mayo de 2013, [REDACTED] disminuyó el inventario acumulable declarado en cantidad de \$1,559'028,827, porque únicamente consideró en la declaración del ejercicio 2006, los ingresos derivados de la enajenación de dicho inventario, es decir, no se aprecia que se hubiera corregido la situación fiscal de esa recurrente, sino únicamente que se disminuyó el inventario acumulable de la utilidad fiscal de la controlada porque a su parecer no constituía ingreso, lo cual a consideración de esta autoridad es incorrecto por los motivos precisados a lo

largo de la presente resolución y, en específico, donde se da respuesta al agravio sujeto a estudio, prevaleciendo entonces la legalidad del acto combatido en la presente sede administrativa.

En mérito de lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

De la **resolución recurrida** se desprende que la demandada señaló que la actora, mediante escrito recibido el 6 de junio de 2013 en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130020045, entre otras cosas, ofreció como prueba superveniente la declaración anual complementaria del ejercicio 2006, presentada por la sociedad ***** *** ***** **** ** ***** a través de la cual disminuye su utilidad fiscal individual en virtud de que elimina el inventario acumulable de los ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta, con el único fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por la hoy actora, en la determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, irregularidad determinada y dada a conocer a través del oficio de observaciones emitido, por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, mediante oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012.

Que resultaba importante señalar, que mediante escrito sin fecha de emisión, presentado en la oficialía de partes de la Administración General de Grandes de Contribuyentes, al que le correspondió el folio de entrada número 130020045, la contribuyente revisada, manifestó que había corregido su situación fiscal respecto de sus pagos provisionales consolidados, observación que se le dio a conocer mediante el oficio de observaciones señalado en el párrafo anterior, sumando a la utilidad fiscal consolidada estimada determinada de conformidad con el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago correspondiente, determinado por su sociedad controlada ***** *** ***** **** ** ***** en los términos de la fracción V, del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005.

Que es la propia controladora revisada quien reconoce, con motivo de dicha autocorrección, que el inventario acumulable correspondiente al ejercicio de 2006, determinado por su sociedad controlada ***** *** ***** **** ** ***** si es un ingreso acumulable de conformidad con lo dispuesto en la citada fracción V, del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley de 2005, y que es por ello que concluye que la irregularidad persiste, ya que la contribuyente revisada debió sumar la utilidad fiscal individual de la

citada sociedad controlada incluyendo el inventario acumulable del ejercicio 2006.

Además, que es por ello que la contribuyente *****
** ***** actualmente ***** (hoy parte actora), no desvirtuó la omisión respecto a la modificación de la utilidad fiscal de su sociedad controlada ***** al no incluir el inventario acumulable determinado por esa sociedad controlada, en el cálculo e integración de la utilidad o la pérdida fiscal consolidada, en términos de la fracción I, inciso a) del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al proporcionar la declaración complementaria del impuesto sobre la renta del ejercicio de 2006 presentada el 14 de mayo de 2013 por la sociedad controlada.

Mientras que de la **resolución impugnada**, se advierte en la parte de interés que no subsiste una conducta omisiva como lo menciona la actora en el sentido de que la fiscalizadora no expuso las razones por las cuales no eran desvirtuadas las observaciones encontradas, ya que sí se indicaron los motivos, razones y circunstancias por las que se llegó a esa conclusión.

Que la accionante en su décimo séptimo agravio del escrito de revocación, únicamente alega una ausencia de fundamentación y motivación por lo que se refiere a la conclusión de la fiscalizadora de no tener por desvirtuados los hechos consistentes en la obligación de esa controladora de determinar el resultado fiscal consolidado considerando el inventario acumulable de su empresa controlada ***** pues ante la declaración complementaria no tenía la obligación de incluir en la utilidad fiscal consolidada de 2006 el inventario acumulable.

Asimismo, que en virtud de que el grupo de consolidación es una unidad económica o un todo, por consiguiente, por la parte que consolide fiscalmente se deberá determinar un sólo resultado fiscal consolidado, el cual abarcará los resultados fiscales de la sociedad controladora y de las sociedades controladas en cuanto a la participación consolidable.

Que en atención al principio de autodeterminación de los tributos, se establece la posibilidad de que los causantes hasta en tres ocasiones modifiquen sus declaraciones de impuestos, sin embargo tales declaraciones no tendrán efectos jurídicos cuando se presenten una vez iniciadas las facultades de comprobación.

Además, que aquellas declaraciones complementarias que tengan repercusión en el ejercicio revisado por las autoridades fiscales no tendrán efectos jurídicos.

Que el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación traído al régimen de consolidación fiscal debe ser interpretado tomando en consideración que la empresa controladora y sus controladas constituyen una unidad económica que tributan bajo un esquema de beneficio que permite amortizar pérdidas fiscales en el mismo ejercicio en que son generadas, ocasionando con ello el diferimiento del impuesto.

Asimismo, que las declaraciones complementarias de las empresas controladas que repercutan en el resultado fiscal consolidado modificando su utilidad o pérdida fiscal individual, no tendrán efectos jurídicos una vez que hayan sido iniciadas las facultades de comprobación a la empresa controladora (siempre y cuando no se ubiquen en los supuestos legales de excepción), pues la intención del legislador con la inclusión de ese precepto legal fue la de no obstaculizar o limitar el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales lo cual ocurre en consolidación.

Por lo que, la demandada señaló que valoró en términos del artículo 130 del Código Fiscal de la Federación la prueba consistente en la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013 por ***** **
***** ** ** ***** concluyendo que la documental fue presentada una vez que la autoridad fiscal inició las facultades de comprobación a la empresa controladora ***** ***** ** ***** por el ejercicio fiscal 2006.

Además, que siendo que esa declaración tuvo repercusión en el resultado fiscal consolidado al disminuir la utilidad fiscal de la empresa ***** ** ***** en cantidad de \$1,159'028,827, es que a consideración de la autoridad no puede tener el efecto jurídico acorde a la interpretación al artículo 32, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el marco jurídico que rige el régimen de consolidación fiscal, en específico el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que la declaración

complementaria de referencia no se ubica en las hipótesis de excepción y en consecuencia, no tiene ningún efecto jurídico.

Aunado a que la actora señaló que en la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013, por *****
** ***** disminuyó el inventario acumulable declarado en cantidad de \$1,559'028,827, porque únicamente consideró en la declaración del ejercicio 2006 los ingresos derivados de la enajenación de dicho inventario, es decir, que **no se aprecia que se hubiera corregido su situación fiscal, sino que únicamente se disminuyó el inventario acumulable de la utilidad fiscal de la controlada porque a su parecer no constituía ingreso.**

Ahora, si bien es cierto que la autoridad demandada en la resolución recurrida contenida en el oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013, no fundamentó en ninguna disposición legal su actuar en el sentido de desestimar la declaración complementaria presentada por ***** y que fue hasta la resolución contenida en el oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 19 de febrero de 2015, que señaló que en términos del artículo 32 de Ley del Impuesto Sobre la Renta, no procedía considerar la declaración complementaria de mérito, ya que la sociedad controlada la había presentado ya iniciadas las facultades de comprobación, también lo es que ello derivó de la respuesta dada al agravio décimo séptimo de su recurso de revocación.

Lo anterior, toda vez que del análisis realizado por esta Juzgadora al escrito del recurso de revocación que corre agregado de la foja 98 a la 350 del expediente administrativo de la actora, se advierte que ésta manifestó que la autoridad fiscal si bien tuvo por presentada su prueba superveniente (declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013), dejó de darle el valor probatorio pleno que tenía y que solo se limitó a afirmar que la misma no desvirtuaba la observación respectiva.

Además, de que omitió la autoridad fiscal señalar los motivos, circunstancias, situaciones particulares y específicamente los fundamentos

legales considerados para no darle el valor probatorio a la declaración complementaria en comento.

En ese sentido, tal y como quedó precisado en párrafos que anteceden, la autoridad demandada, en respuesta al agravio de la recurrente hoy actora, señaló que procedió a valorar la declaración complementaria presentada por la sociedad controlada el 14 de mayo de 2013, en términos del artículo 130 del Código Fiscal de la Federación, así como que en términos del artículo 32 del mismo ordenamiento, la misma para ser considerada no se ubicó en las hipótesis de excepción y en consecuencia, no tiene ningún efecto jurídico.

Por tanto, si bien es cierto que la autoridad administrativa al dictar la resolución respectiva no puede citar o mejorar la fundamentación, también lo es que en términos del artículo 132 del Código Tributario, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados **y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.**

El artículo 132 del Código Fiscal de la Federación, en comento a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 132. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando se trate de agravios que se refieran al fondo de la cuestión controvertida, a menos que uno de ellos resulte fundado, deberá examinarlos todos antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación de requisitos formales o vicios del procedimiento.

La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución.

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio

contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo.”

(El énfasis es propio de esta Juzgadora)

En relación a lo anterior, si bien, la autoridad demandada, en la resolución recurrida señaló que con la declaración complementaria presentada por la controlada ***** lo único que acreditó fue que no consideró los inventarios acumulables que tenía al 31 de diciembre de 2004, para efectos de determinar su utilidad fiscal consolidada, y en la resolución impugnada señala que en términos del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, la citada declaración no puede ser considerada, al haberse iniciado las facultades de comprobación con la contribuyente actora.

También lo es, que tal situación es insuficiente para declarar la nulidad del acto, como lo pretende la actora, pues en todo caso, la autoridad fiscal al haber valorado la prueba superveniente ofrecida por la demandante (declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013, por *****), concluyó que con la misma se confirma la omisión por la cual se le determinó el crédito fiscal combatido, siendo la de omitir acumular a la utilidad fiscal consolidada a fin de determinar el resultado fiscal consolidado los inventarios acumulables que tuvieran sus empresas controladas.

No obstante lo anterior, resulta conveniente tener presente los artículos 32 del Código Fiscal de la Federación, 2, fracción XIII y 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, los cuales establecen lo siguiente:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

“ARTÍCULO 32.- Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de tres ocasiones las declaraciones correspondientes, aún cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, en los siguientes casos:

I. Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades.

II. Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta.

III. Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo.

IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de Ley.

Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo se efectuará mediante la presentación de declaración que sustituya a la anterior, debiendo contener todos los datos que requiera la declaración aun cuando sólo se modifique alguno de ellos.

Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda, debiendo pagarse las multas que establece el citado artículo 76.

Se presentará declaración complementaria conforme a lo previsto por el quinto párrafo del artículo 144 de este Código, caso en el cual se pagará la multa que corresponda, calculada sobre la parte consentida de la resolución y disminuida en los términos del séptimo párrafo del artículo 76 de este ordenamiento.

Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que correspondía, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 21 de este Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago.

Para los efectos de este artículo, una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando."

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

"ARTÍCULO 2.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

(...)

XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales.

(...)"



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 857 -

“ARTÍCULO 14.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 2o. de la presente Ley, los contribuyentes tendrán derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del momento en el que se dé inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. El ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal.”

Del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas, con la salvedad de que podrán ser modificadas hasta en tres ocasiones, siempre y cuando sea por el propio contribuyente y que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación.

Sin embargo, el segundo párrafo del precepto legal de referencia, establece que aun cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, el contribuyente puede modificar en tres ocasiones las declaraciones correspondientes, únicamente en los siguientes supuestos: 1) cuando incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades; 2) cuando disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables; 3) cuando se ajusten al resultado del dictamen financiero emitido por contador público autorizado; y 4) cuando den cumplimiento a una disposición legal expresa.

No obstante lo anterior, el numeral de referencia no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

Asimismo, establece que las modificaciones contempladas en el artículo en cita, se deberán llevar a cabo mediante la presentación de una declaración, misma que deberá sustituir a la anterior, y deberá contener los datos que requiera la declaración aun cuando sólo se modifique alguno de ellos.

Además, una vez iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración complementaria,

siguiendo las formalidades especiales establecidas en los artículos 46, 48 y 76, según proceda, debiendo pagarse las multas contempladas en el numeral 76 en cita.

La presentación de la declaración complementaria, deberá ser de conformidad con lo previsto en el artículo 144, párrafo quinto del Código Tributario, pagando la multa correspondiente, misma que deberá ser calculada sobre la parte consentida de la resolución y disminuida en los términos del artículo 76, séptimo párrafo de dicho ordenamiento.

En caso de que en la declaración complementaria se determine que el pago efectuado sea menor al correspondiente, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 21 del Código Tributario, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago.

Para los efectos del artículo 32 del Código en cita, una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación **no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando.**

Por lo que respecta al artículo 2, fracción XIII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el mismo establece el derecho general del contribuyente a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación.

Por otra parte, el numeral 14 de la ley en cita, regula el derecho señalado en el párrafo anterior, pues establece que los causante tendrán derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, siguiendo los lineamientos establecidos en el Código Tributario.

Además, establece la temporalidad para que los contribuyentes puedan corregir su situación fiscal, es decir, a partir del momento en el que se inició el ejercicio de las facultades de comprobación, y hasta antes de que le sea notificada la resolución que determine el monto de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 859 -

las contribuciones omitidas. Haciendo la precisión que, el ejercicio de dicho derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número **2a./J. 96/2014** emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su Libro 11, Tomo I, en el mes de octubre de 2014, misma que establece lo siguiente:

“DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. LAS PRESENTADAS UNA VEZ INICIADO EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN SÓLO MODIFICAN LA DECLARACIÓN ORIGINAL (CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2006 Y 2008). Conforme al artículo 32 del Código citado, cuando la autoridad tributaria hubiese iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, los contribuyentes podrán modificar sus declaraciones únicamente cuando: a) incrementen sus ingresos; b) disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables; c) se ajusten al resultado del dictamen financiero emitido por contador público autorizado; y d) den cumplimiento a una disposición legal expresa. Ahora, en virtud de que la materia de la declaración complementaria es limitada, es incuestionable que la original sigue surtiendo efectos en lo no modificado y, por ende, para determinar la situación fiscal del contribuyente la autoridad administrativa debe valorar ambas declaraciones, pues entre ellas existe un vínculo indisoluble que impide analizarlas de manera aislada.

Contradicción de tesis 44/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Primero y Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 13 de agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoní Goslinga.”

Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número **2a./J.97/2014** emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su Libro 11, Tomo I, en el mes de octubre de 2014, misma que establece lo siguiente:

“DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA PRERROGATIVA QUE CONFIERE LA LEY RELATIVA A LOS CAUSANTES, CONSISTENTE EN CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL, AUN CUANDO HUBIESE INICIADO EL EJERCICIO DE LAS

FACULTADES DE COMPROBACIÓN, DEBE EJERCERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006 Y 2008).

El objeto de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente es enunciar los principales derechos de los causantes en sus relaciones con la administración tributaria, dentro de los que se encuentra la posibilidad de corregir su situación fiscal, aun cuando la autoridad hubiese iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación. No obstante, esta posibilidad de corrección debe darse de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, conforme a las cuales, la declaración complementaria sólo podrá modificar la información prevista de manera expresa en dicho precepto, sin que pueda abarcar otra. Esta forma de proceder se justifica no únicamente por la remisión que la ley mencionada hace a este código, sino porque éste contiene la regulación procesal que determina la forma en que los contribuyentes pueden hacer valer sus derechos durante las visitas domiciliarias.

Contradicción de tesis 44/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Primero y Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 13 de agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga.”

Por lo tanto, es de concluirse que, en el caso en que la autoridad haya iniciado sus facultades de comprobación al contribuyente, éste último podrá modificar sus declaraciones, únicamente cuando se encuentre en los supuestos establecidos en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación.

Además, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, tiene como objeto enunciar los derechos esenciales de los causantes, en relación con las autoridades tributarias, y uno de esos derechos es la corrección de su situación fiscal. No obstante ello, para que el contribuyente pueda ejercer dicho derecho, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 32 de referencia, ya que dicha norma contiene la regulación procesal que determina la manera en que los contribuyentes pueden hacer valer sus derechos durante las revisiones de contabilidad; por lo tanto, si bien es cierto que el contribuyente tiene derechos en relación con la administración tributaria, también lo es que, para poder ejercerlo, deberá de cumplir con la normatividad prevista, que en este caso es el numeral 32 del Código Tributario.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 861 -

En el caso, la empresa ***** presentó declaración complementaria el 14 de mayo de 2013, mientras que la autoridad fiscal inició sus facultades de comprobación, el **28 de junio de 2011**, fecha en que se notificó el oficio número 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, el cual ampara la solicitud de información y documentación GSD9400235/11 (fojas 12 a 33 del tomo 1/3 del expediente administrativo exhibido por la autoridad demandada); es decir, con la notificación del primer acto, ello en atención al artículo 42, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual a la letra señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 42...

(...)

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se **inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.**”

(El énfasis es nuestro)

Por lo que es de señalarse que la Declaración Complementaria fue presentada (14 de mayo de 2013) después de iniciadas las facultades de la autoridad fiscal (28 de junio de 2011), siendo que no se actualizó ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación antes transcrito, para que hubiera estado en posibilidad de hacerlo de esa manera.

Ello, toda vez que para que la actora tuviera la oportunidad de presentar declaración complementaria aun cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, debió sólo haber incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades, lo que no sucedió en la especie.

Debió solo disminuir sus deducciones o pérdidas o haber reducido las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta, lo que tampoco sucedió en la especie.

O en su caso, en su caso, corregir la declaración original, cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, a consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo, lo que de ninguna manera aconteció en el presente caso.

Finalmente, cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de Ley, sin embargo, este supuesto tampoco se actualizo.

Por lo que, si bien es cierto que el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, establece que los contribuyentes tendrán derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, **ello debe de hacerse de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación**, tal y como lo señala el citado precepto normativo (transcrito con anterioridad).

En consecuencia, al no haberse ubicado en ninguna de la hipótesis del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, para poder presentar su declaración complementaria después de ejercidas las facultades de comprobación, se tiene que contrario a su aseveraciones, la autoridad no actuó en contravención con los artículos 32 del Código Fiscal de la Federación y 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, al no haberle reconocido los conceptos modificados en su declaración complementaria con fecha de presentación 14 de mayo de 2013, no surte efectos dicha declaración complementaria.

En virtud de lo anterior, esta Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, estima necesario tener a la vista el contenido de la Declaración Complementaria presentada por ***** *** ***** **** ** ***** el 14 de mayo de 2013, correspondiente al ejercicio fiscal 2006, la cual a la letra señala lo siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 863 -

Declaración del Ejercicio Personas Morales
CONTRIBUYENTE :
PERIODO : 1/2006 - 12/2006
FECHA DE PRESENTACION : marías, 14 de mayo de 2013
TIPO DE DECLARACION: Complementaria
A.L.R. LLAVE DE LA DECLARACION: 19080-22201815

540

PAGIN	CLAVE	DESCRIPCION	VALOR
1	1	Rfc del contribuyente	
2	2	Tipo de contribuyente	MORAL
3	3	Entidad receptora	19080-Internet SAT 19080
4	4	Llave detalle	22201815
5	5	Llave movimiento	19080-22201815
6	6	Número de operación	55781879
7	7	Materia	21-Declaración del ejercicio
8	8	Medio de recepción	3-Internet
9	9	Fecha de presentación	14/05/2013
10	10	Hora de presentación	13:52
11	11	Fecha de recaudación	14/05/2013
12	12	Fecha de registro	14/05/2013 01:59:00 p.m.
13	13	Periodo	35-Enero-Diciembre - Del Ejercicio
14	14	Ejercicio	2006
15	15	Tipo de pago	2-Complementaria
16	206005	RFC imputado	
17	206011	Denominación o razón social	
18	205002	Tipo de declaración	\$ 2.00
19	205004	Fecha de presentación de la declaración inmediata anterior	
20	900000	Cantidad a pagar	\$
21	111001	Total de ingresos acumulables	\$ 21,669,595,679.00
22	111002	Total de deducciones autorizadas y deducción inmediata de inversiones	\$ 19,848,467,349.00
23	111003	Utilidad fiscal del ejercicio	\$ 1,821,128,230.00
24	111004	Pérdida fiscal del ejercicio	
25	111005	Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio	
26	111006	Resultado fiscal	\$ 1,821,128,230.00
27	111009	Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio	\$ 528,127,187.00
28	111010	Reducciones del ISR	
29	111012	Impuesto del ejercicio	\$ 528,127,187.00
30	111860	Estímulo por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico, real	
31	111013	Pagos provisionales efectuados	
32	111016	Impuesto retenido al contribuyente	\$ 2,952,146.00
33	111015	Impuesto acreditable pagado en el extranjero	\$ 1,343,262.00
34	111017	Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos	
35	111011	Impuesto a cargo correspondiente a la consolidación fiscal	\$ 527,797,619.00
36	111018	Diferencia a cargo	\$
37	111019	Diferencia a favor	\$ 14,251,272.00
38	901730	Impuesto a la venta de bienes y servicios sujeta a crédito	
39	111058	Impuesto por inversiones en territorios con regímenes fiscales prefer	
40	111023	ISR pagado en exceso aplicado contra el impac	
41	111021	Impuesto a cargo del ejercicio	
42	111024	Saldo a favor del ejercicio	
43	121026	Si opta por aplicar el artículo 5-a de la LIMPAC, indique el ejercicio al q	\$ 2,004.00
44	121001	Promedio de activos financieros	\$ 149,204,613,003.00
45	121002	Promedio de inventarios	\$ 3,701,012,897.00
46	121003	Promedio de terrenos	\$ 1,293,357.00
47	121004	Promedio de activos fijos y diferidos	\$ 1,475,307,487.00
48	121006	Promedio de las deudas	
49	121007	Valor del activo en el ejercicio	\$ 9,383,814,454.00
50	121008	Impuesto determinado	\$ 168,908,660.00
51	121009	Impuesto determinado actualizado	\$ 181,830,173.00
52	121010	Reducciones del impac	

SE - SEAN INSTITUCION

115	136004	Enajenaciones de activos fijos, gastos y cargos diferidos - exentos	
116	136006	Dividendos - grabados	
117	136007	Dividendos - exentos	
118	136009	Enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pendientes	
119	136010	Enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pendientes	
120	136012	Enajenaciones de moneda nacional y extranjera, piezas de oro o de pl	
121	136013	Enajenaciones de moneda nacional y extranjera, piezas de oro o de pl	
122	136015	Intereses y ganancia cambiaria - grabados	
123	136016	Intereses y ganancia cambiaria - exentos	
124	136018	Exportaciones de bienes tangibles y servicios de maquila de exportaci	
125	136021	Enajenaciones a través de arrendamiento financiero - grabados	
126	136022	Enajenaciones a través de arrendamiento financiero - exentos	
127	136024	Enajenación de bienes adquiridos por dación en pago o adjudicación -	
128	136025	Enajenación de bienes adquiridos por dación en pago o adjudicación -	
129	136027	Operaciones financieras derivadas - grabados	
130	136028	Operaciones financieras derivadas	
131	201001	PTU generada durante el ejercicio al que corresponde esta declaraci	
132	201002	PTU no cobrada en el ejercicio anterior	
133	118222	Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar actu	\$ -
134	118820	Saldo promedio anual de los créditos	\$ 40,272,461,917.00
135	118821	Saldo promedio anual de las deudas	\$ 34,381,362,768.00
136	118211	Coefficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente parte entera	\$ -
137	118212	Coefficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente parte decim	\$ 1,449.00
138	118566	Porcentaje de participación consolidable parte entera	\$ -
139	118567	Porcentaje de participación consolidable parte decimal	\$ 9,994.00
140	118224	ISR causado en exceso del impac en los 3 ejercicios anteriores, pendi	
141	118220	Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta	\$ 3,866,407,544.00
142	118219	Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal reinvertida	
143	118221	Saldo actualizado de la cuenta de de capital de aportación	\$ 3,968,781,772.00
144	118216	En caso de ser controlada indique el RFC de la controladora	
145	111704	Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta (cufin)	
146	111703	Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida (cufinre)	
147	111705	No provenientes de la cufin ni cufinre	
148	206000	Datos del representante legal - registro federal de contribuyentes	
149	206001	Datos del representante legal - apellido paterno, materno y nombre(s)	
150	113023	Efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito	\$ 699,467,103.00
151	113025	Inversiones en valores (excepto acciones)	\$ 5,858,069,114.00
152	113027	Cuentas y documentos por cobrar	\$ 14,513,326,701.00
153	113029	Contribuciones a favor	\$ 33,637,409.00
154	113033	Inventarios	\$ 3,257,577,546.00
155	113035	Otros activos circulantes	\$ 2,502,395,223.00
156	113036	Inversiones en acciones	\$ 704,054,956.00
157	113038	Terrenos	\$ 1,480,675.00
158	113039	Construcciones	\$ 838,670.00
159	113040	Maquinaria y equipo	
160	113041	Mobiliario y equipo de oficina	
161	113042	Equipo de transporte	\$ 382,288.00
162	113043	Otros activos fijos	\$ 959,747,954.00
163	113044	Depreciación acumulada	\$ 260,683,901.00
164	113045	Cargos y gastos diferidos	\$ 18,960,344.00
165	113046	Amortización acumulada	
166	113047	Suma activo	\$ 29,826,595,684.00
167	114001	Cuentas y documentos por pagar	\$ 8,227,020,444.00
168	114005	Contribuciones por pagar	\$ 16,612,987.00
169	114006	Otros pasivos	\$ 1,798,568,524.00
170	114007	Suma pasivo	\$ 16,782,467,268.00
171	115001	Capital social proveniente de aportaciones	\$ 535,009,000.00
172	115002	Capital social proveniente de capitalización	
173	115003	Reservas	\$ 56,229,653.00
174	115004	Otras cuentas de capital	\$ 3,785,748,327.00
175	115005	Aportaciones para futuros aumentos de capital	
176	115006	Utilidades acumuladas	\$ 7,581,135,650.00



EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

- 865 -

239	118007	Otras operaciones financieras	
240	117041	Costo integral de financiamiento	\$ 197,533,080.00
241	116019	Ingresos por partidas discontinuas y extraordinarias	
242	117042	Gastos por partidas discontinuas y extraordinarias	\$ 199,852,203.00
243	118009	Utilidad o perdida antes de impuestos	\$ 3,194,168,992.00
244	117043	ISR, impac y PTU	\$ 1,222,772,274.00
245	118010	Utilidad o perdida en participacion subsidiaria	\$ 93,130,125.00
246	118011	Efectos de reexpresion excepto resultado por posicision monetaria	\$ 42,463,082.00
247	118012	Utilidad o perdida neta	\$ 2,106,989,925.00
248	119112	Utilidad o perdida neta	\$ 2,106,989,925.00
249	119111	Efectos de reexpresion	\$ 42,463,082.00
250	119106	Resultado por posicision monetaria	\$ 349,405,297.00
251	118013	Utilidad o perdida neta historica	\$ 2,413,932,140.00
252	116020	Ingresos fiscales no contables	\$ 1,287,841,182.00
253	116021	Ajuste anual por inflacion acumulable	
254	116023	Anticipos de clientes	\$ 1,077,551,040.00
255	116022	Intereses moratorios efectivamente cobrados	
256	116024	Ganancia en la enajenacion de acciones o por reembolso de capital	\$ 207,950,357.00
257	116025	Ganancia en la enajenacion de terrenos y activo fijo	
258	116027	Otros ingresos fiscales no contables	\$ 2,339,775.00
259	117044	Deducciones contables no fiscales	\$ 15,985,983,998.00
260	119033	Costo de ventas	\$ 11,197,989,926.00
261	117045	Depreciacion y amortizacion contable	\$ 62,762,842.00
262	117047	Gastos que no rezen requisitos fiscales	\$ 3,306,116.00
263	119043	ISR, impac y PTU	\$ 976,230,911.00
264	117048	Pirida contable en enajenacion de acciones	
265	117049	Pirida contable en enajenacion de activo fijo	\$ 269,445.00
266	117050	Pirida en participacion subsidiaria	
267	119039	Intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratorios	
268	117051	Otras deducciones contables no fiscales	\$ 3,745,424,758.00
269	117052	Deducciones fiscales no contables	\$ 16,423,028,386.00
270	117053	Ajuste anual por inflacion deducible	\$ 238,589,516.00
271	117055	Adquisiciones netas de mercenomas, materias primas, productos semi	
272	117056	Mano de obra directa	
273	119175	Maquilas	
274	117057	Gastos indirectos de fabricacion	
275	117058	Deducion de inversiones	\$ 5,537,204.00
276	119021	Estimulo fiscal por deducion inmediata de inversiones	\$ -
277	117060	Pirida fiscal en enajenacion de acciones	
278	117061	Pirida fiscal en enajenacion de terrenos y activo fijo	
279	117054	Intereses moratorios efectivamente pagados	
280	117062	Otras deducciones fiscales no contables	\$ 4,980,911,740.00
281	116028	Ingresos contables no fiscales	\$ 1,443,600,704.00
282	119117	Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no	
283	117059	Anticipos de clientes de ejercicios anteriores	\$ 797,105,351.00
284	116029	Saldo a favor de impuestos y su actualizacion	
285	116030	Utilidad contable en enajenacion de activo fijo	
286	116031	Utilidad contable en enajenacion de acciones	
287	116032	Utilidad en participacion subsidiaria	\$ 93,130,125.00
288	116033	Otros ingresos contables no fiscales	\$ 553,365,228.00
289	118014	Utilidad o Perida Fiscal	\$ 1,821,128,230.00
290	207000	A. Datos de Identificacion - Clave Unica de Registro de Poblacion del	
291	206197	A. Datos de Identificacion - Indique si opta por Dictaminar sus Estados	\$ -
292	206198	A. Datos de Identificacion - Indique si se Trata de la Ultima Declaracion	\$ 2.00
293	113875	Deducion en el Ejercicio - Maquinaria y Equipo para la Generacion de	
294	113877	Deducion en el Ejercicio - Adaptacion a Instalaciones para Personas	
295	113879	Deducion en el Ejercicio - Terrenos (Costo de Adquisicion)	
296	113876	Adquisiciones Durante el Ejercicio - Maquinaria y Equipo para la Gene	
297	113878	Adquisiciones Durante el Ejercicio - Adaptacion a Instalaciones para P	
298	117290	F. Estado de Resultados - Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones	
299	117291	F. Estado de Resultados - Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones	
300	117292	F. Estado de Resultados - Compras Netas Nacionales	

541 5/16

363	119907	Pérdida Bruta (Total)	
364	119910	Gastos de operacion (Partes no Relacionadas)	\$ 6,238,125,249.00
365	119911	Gastos de operacion (Total)	\$ 6,238,125,249.00
366	119914	Pérdida de operacion (Total)	
367	119917	Intereses Devengados a Favor Nacionales (Partes no Relacionadas)	\$ 1,038,763,242.00
368	119918	Intereses Devengados a Favor Nacionales (Total)	\$ 1,038,763,242.00
369	119919	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Partes Relacionadas)	
370	119920	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Partes no Relacionadas)	
371	119921	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Total)	\$ -
372	119922	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Partes Relacionadas)	
373	119923	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Partes no Relacionadas)	
374	119924	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Total)	\$ -
375	119925	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Partes Relacionadas)	
376	119926	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Partes no Relacionadas)	
377	119927	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Total)	\$ -
378	209067	Ganancia Cambiaria (Partes Relacionadas)	
379	209068	Ganancia Cambiaria (Partes no Relacionadas)	
380	119928	Ganancia Cambiaria (Total)	\$ -
381	119931	Intereses Devengados a Cargo Nacionales (Partes no Relacionadas)	\$ 380,983,390.00
382	119932	Intereses Devengados a Cargo Nacionales (Total)	\$ 380,983,390.00
383	119933	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Partes Relacionadas)	
384	119934	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Partes no Relacionadas)	\$ 18,170,940.00
385	119935	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Total)	\$ 18,170,940.00
386	119936	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Partes Relacionadas)	
387	119937	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Partes no Relacionadas)	
388	119938	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Total)	\$ -
389	119939	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Partes Relacionadas)	
390	119940	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Partes no Relacionadas)	
391	119941	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Total)	\$ -
392	119942	Pérdida Cambiaria (Partes Relacionadas)	
393	209031	Pérdida Cambiaria (Partes no Relacionadas)	\$ 92,670,535.00
394	209032	Pérdida Cambiaria (Total)	\$ 92,670,535.00
395	119945	Resultado por Posicion Monetaria Favorable (Partes no Relacionadas)	
396	119946	Resultado por Posicion Monetaria Favorable (Total)	
397	119947	Resultado por Posicion Monetaria Desfavorable (Partes Relacionadas)	
398	119948	Resultado por Posicion Monetaria Desfavorable (Partes no Relacionadas)	\$ 349,405,297.00
399	119949	Resultado por Posicion Monetaria Desfavorable (Total)	\$ 349,405,297.00
400	119950	Otras operaciones Financieras Nacionales (Partes no Relacionadas)	
401	119951	Otras operaciones Financieras Nacionales (Total)	\$ -
402	119981	Otras operaciones Financieras Extranjeras (Partes Relacionadas)	
403	119982	Otras operaciones Financieras Extranjeras (Partes no Relacionadas)	
404	119984	Otras operaciones Financieras Extranjeras (Total)	\$ -
405	119929	Otras operaciones Financieras (Total)	\$ -
406	119954	Otros Gastos Nacionales (Total)	\$ 60,848,444.00
407	119930	Otros Gastos Extranjeros (Total)	
408	119943	Otros Gastos (Total)	\$ 60,848,444.00
409	119957	Otros Productos Nacionales	\$ 112,403,894.00
410	119944	Otros Productos Extranjeros	
411	119995	Otros Productos (Total)	\$ 112,403,894.00
412	119966	Pérdida Antes de Impuestos	
413	209033	IETU	
414	119969	IMPAC	
415	119970	PTU	
416	119971	Pérdida en Participacion subsidiaria	
417	119972	Efectos de Reexpresion Desfavorables Excepto Resultado por Posicio	
418	119973	Pérdida Neta	
419	209056	Pérdida por operaciones Financieras Derivadas	
420	119974	Efectivo en Caja y Depositos en Instituciones de Credito del Extranjero	
421	119975	Inversiones en Valores con Instituciones Extranjeras (Excepto Accione	
422	119976	Cuentas y Documentos por Cobrar Nacionales (Partes no Relacionadas)	\$ 1,311,925,643.00
423	119977	Cuentas y Documentos por Cobrar Nacionales (Total)	\$ 15,825,252,344.00
424	119978	Cuentas y Documentos por Cobrar del Extranjero (Partes Relacionadas)	



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 867 -

542

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración Anual

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2006

R.F.C.:

Nombre, Denominación o Razón Social:

Tipo de Presentación:

Complementaria

Fecha de Presentación:

14/05/2013

Hora de Presentación:

13:52

Número de Operación:

2DA1C

Folio de Recepción:

55781879

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:

110001=20001=19080|20002=55781879|40002=20130514|40003=13:52|10006=10023=20100812|10033=MOAJ5410298Y1|10034=10042=5C39B|10105=0|10106=2|10107=1|60004=M
OAJ541029HDFRGS01|800101=0|800201=40272461917|800301=34381362768|800401=0|800501=1449|800601=0|800701=9994|801
101=3866407544|801301=3968781772|801401=1000101=36171|1000201=2997922|1300601=4144448248|1300801
=3257577546|1302301=199862203|1302501=1222772274|1302601=93130125|1302701=42463082|1303601=0|1303801=0|1304001
=0|1304201=20581057840|1304401=10311119224|1304601=0|1304801=0|1305001=0|1305201=0|1305501=6238125249|1305801=1
1038763242|1306101=0|1306401=0|1306701=0|1307401=0|1307601=380983390|1307901=18170940|1308201=0|1308501=0|1308
901=92670535|1309301=349405297|1309501=0|1309801=0|1309901=0|1310001=60848444|1310201=60848444|1310501=1124038
1400701=1077551040|1400901=207950357|1401101=2339775|1401401=62762842|1401501=3306116|1401601=976230911|140
1801=269445|1402101=3745424753|1402401=238589518|1403401=4980911740|1403701=797105351|1404201=553365228|140510
1=1119798928|1500801=56103430|1501501=19025936|1501701=23914670|1502001=8227320|1600101=699457103|1600201=585
8069114|1600301=14513326701|1600401=33637409|1600501=3257577546|1600601=2502395223|1600701=704054956|1600801=1
480675|1600901=838670|1601201=382288|1601301=959747954|1601401=260683901|1601501=18960344|1601801=8227020444|
1601901=16612987|1602001=1798568524|1602201=535009000|1602401=56229653|1602501=3785748327|1602701=7581135650|1
602801=2106989925|1602901=981245188|1603201=5788694604|1603801=15825252344|1604101=0|1604301=704054956|160470
1=13672485757|1605001=1294860000|3100301=2166595579|3100401=19848467349|3104301=1821128230|3104501=528127187|
3104701=528127187|3105401=2952148|3105501=1343252|3106101=527797619|3110901=8000000|3200201=2004|3200301=14920
4613003|3200401=3701012897|3200501=1293357|3200601=1475307487|3200901=9383814454|3201101=168908660|3201201=181
830173|3201401=181830173|3201601=181830173|3204101=144998412290|4100101=0|4100401=0|4101201=0|4101301=0|410140
1=0|4200201=0|30003=000001000007000112188|

Sello Digital:

11MyIyOWhP+4E1NuckVwCQDxCwC2FjqDXs1F1/VTiedJayTsystd/dZYmijxMIVz7ES6rioUaU0yV58FVljxVQgZjhwfABLaGfRk
PnlYicb7JU5wvBnASta6lItuWslLl7q3nzAkOcOFH6RsYI/1t5V6HpWB5PjMNlsc=

Fecha y hora de emisión de este acuse: 14/05/2013 13:54:32

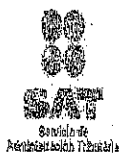
NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación señalados.

Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

SE DOCUMENTA PROHIBIDA LA COPIA DE ESTE DOCUMENTO SIN FOLIO DE EMISIÓN.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL		
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL		
EJERCICIO		2006
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS		SI
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012		NO
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012		NO
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS		<Sin Selección>
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN		NO
DECLARACIÓN	Complementaria	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA		12/08/2010
NÚMERO DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA		5C39B
INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CORREGIR EL EJERCICIO		NO

543



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 869 -



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS			0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS			40272461917
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS			34381362768
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE			0 . 1449
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE			0 . 9994
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR			
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA			3866407544
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA			
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN			3968781772
EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA			GBL911213682

544



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE)	
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO	
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES	
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE	
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA CUFINRE	



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

	DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO	DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO		ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES	36171			
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS	2503111			
MAQUINARIA Y EQUIPO	2997922			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
EQUIPO DE CÓMPUTO				
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES				
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS				
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS				
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS				
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA (FUENTES RENOVABLES)				
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)				
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES				
TOTAL	5537204		0	0

545



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

ESTADOS DE RESULTADOS	
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	20581057840
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (TOTAL)	20581057840
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS)	
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS)	
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (TOTAL)	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (TOTAL)	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (TOTAL)	0
INGRESOS NETOS (PARTES RELACIONADAS)	0
INGRESOS NETOS (PARTES NO RELACIONADAS)	20581057840
INGRESOS NETOS (TOTAL)	20581057840
INVENTARIO INICIAL (TOTAL)	41444468248
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	10311119224
COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL)	10311119224
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (TOTAL)	0
INVENTARIO FINAL (TOTAL)	3257577546
COSTO DE LAS MERCANCIAS (TOTAL)	11197989926
MANO DE OBRA (PARTES RELACIONADAS)	
MANO DE OBRA (PARTES NO RELACIONADAS)	
MANO DE OBRA (TOTAL)	0
MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)	
MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS)	
MAQUILAS (TOTAL)	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (TOTAL)	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS (TOTAL)	11197989926
UTILIDAD BRUTA (TOTAL)	9383067914
PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 871 -



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

ESTADOS DE OPERACIÓN	
ESTADOS DE OPERACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	6238125249
GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL)	6238125249
UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL)	3144942665
PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	1038763242
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	1038763242
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL)	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	380983390
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	380983390
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	18170940
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	18170940
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

ESTADO DE RESULTADOS	
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	92670535
PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL)	92670535
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (TOTAL)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS)	349405297
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (TOTAL)	349405297
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (TOTAL)	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES NO RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (TOTAL)	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (TOTAL)	0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (TOTAL)	197533080
OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL)	60848444
OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL)	
OTROS GASTOS (TOTAL)	60848444
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	112403894
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS (TOTAL)	112403894
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	199862203
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3194168992
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	1222772274
IETU	
IMPAC	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	93130125
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	42463082
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	2106989925
PÉRDIDA NETA	



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 873 -



Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

DATOS DEL INVENTARIO BASE	
INDIQUE EL MÉTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL INVENTARIO BASE:	<Sin Selección>
DATOS INFORMATIVOS	
MONTO DEL INVENTARIO INICIAL	
MONTO DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES	
OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS	
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN DEL INVENTARIO BASE	<Sin Selección>
INVENTARIO BASE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	
SALDO PENDIENTE POR DEDUCIR AL 1° DE ENERO DE 2005	
PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	
DIFERENCIA DE LA COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE IMPORTACIÓN	
VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO QUE DECLARA	
PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN	
INVENTARIO ACUMULABLE	
INVENTARIO REDUCIDO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	
COSTO DE LO VENDIDO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCÍAS ENAJENADAS A PLAZO	
SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN	
INDIQUE LA OPCIÓN PARA DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO	<Sin Selección>
INDIQUE LA BASE DE COSTOS UTILIZADA	<Sin Selección>
MÉTODOS DE VALUACIÓN	
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN UTILIZADO	<Sin Selección>
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN	
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O DE REPOSICIÓN	
TIPO DE PRECIO CONSIDERADO	<Sin Selección>

De la digitalización anterior, se desprende en la parte de interés, que mediante la **Declaración Complementaria presentada el 14 de mayo de 2013**, la sociedad controlada ***** declaró lo siguiente:

INGRESOS ACUMULABLES en cantidad de **\$21,669'595,579.00.**

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES en cantidad de **\$1,287'841,182.00.**

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 2006, en cantidad de **\$1,821'128,230.00.**

Del anexo 12 "CONSOLIDACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", se desprende que en el renglón 121080 que el concepto de **INVENTARIO ACUMULABLE** corresponde a la cantidad de **\$1,559'028.827.00.**

En relación a lo anterior, cabe señalar que la sociedad controlada de referencia presentó una declaración complementaria anterior el día 12 de agosto de 2010, la cual fue presentada con los siguientes datos:

Declaración del Ejercicio Personas Morales
CONTRIBUYENTE : XXXXXXXXXX
PERIODO : 1/2006 - 12/2006
FECHA DE PRESENTACIÓN : jueves, 12 de agosto de 2010
TIPO DE DECLARACIÓN: Complementaria
A.L.R. LLAVE DE LA DECLARACIÓN: 19080-23238697

538
9/16

PAGIN	CLAVE	DESCRIPCION	VALOR
1	1	Rfc del contribuyente	XXXXXXXXXX
2	2	Tipo de contribuyente	MORAL
3	3	Entidad receptora	19080-Internet SAT 19080
4	4	Llave detalle	23238697
5	5	Llave movimiento	19080-23238697
6	6	Numero de operacion	43279037
7	7	Mataria	21-Declaracion del ejercicio
8	8	Medio de recepcion	13-Internet
9	9	Fecha de presentacion	12/08/2010
10	10	Hora de presentacion	20:00
11	11	Fecha de recaudacion	12/08/2010
12	12	Fecha de registro	12/08/2010 08:13:00 p.m.
13	13	Periodo	35-Enero-Diciembre - Del Ejercicio
14	14	Ejercicio	2006
15	15	Tipo de pago	2-Complementaria
16	205005	RFC imputado	
17	205011	Denominacion o razon social	XXXXXXXXXX
18	205002	Tipo de declaracion	\$ 2.00
19	205004	Fecha de presentacion de la declaracion inmediata anterior	
20	900000	Cantidad a pagar	\$
21	111001	Total de ingresos acumulables	\$ 23,228,624,406.00
22	111002	Total de deducciones autorizadas y deducciones inmediatas de inversiones	\$ 19,848,467,349.00
23	111003	Utilidad fiscal del ejercicio	\$ 3,380,157,057.00
24	111004	Pérdida fiscal del ejercicio	
25	111005	Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio	
26	111006	Resultado fiscal	\$ 3,380,157,057.00
27	111009	Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio	\$ 980,245,547.00
28	111010	Reducciones del ISR	
29	111012	Impuesto del ejercicio	\$ 980,245,547.00
30	111880	Estímulo por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico, real	
31	111013	Pagos provisionales efectuados	
32	111016	Impuesto retenido al contribuyente	\$ 2,952,146.00
33	111015	Impuesto acreditable pagado en el extranjero	\$ 1,343,252.00
34	111017	Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos	
35	111011	Impuesto a cargo correspondiente a la consolidación fiscal	\$ 979,833,844.00
36	111018	Diferencia a cargo	\$
37	111019	Diferencia a favor	\$ 13,969,137.00
38	901730	Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios acreditable	
39	111058	Impuesto por inversiones en territorios con regímenes fiscales prefer	
40	111023	ISR pagado en exceso aplicado contra el impac	
41	111021	Impuesto a cargo del ejercicio	
42	111024	Saldo a favor del ejercicio	
43	121026	Si opta por aplicar el artículo 5-a de la LIMPAC, indique el ejercicio al q	\$ 2,004.00
44	121001	Promedio de activos financieros	\$ 149,204,613,003.00
45	121002	Promedio de inventarios	\$ 3,701,012,897.00
46	121003	Promedio de terrenos	\$ 1,293,357.00
47	121004	Promedio de activos fijos y diferidos	\$ 1,475,307,487.00
48	121006	Promedio de las deudas	
49	121007	Valor del activo en el ejercicio	\$ 9,383,814,454.00
50	121008	Impuesto determinado	\$ 168,968,660.00
51	121009	Impuesto determinado actualizado	\$ 181,830,173.00
52	121010	Reducciones del impac	

NO 3,380,157,057
X. 999376
3'378,047,639
3
3/3

DE: SERVICIOS INTERNET SA DE CV



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 875 -

115	136004	Enajenaciones de activos fijos, gastos y cargos diferidos - exentos	
116	136006	Dividendos - grabados	
117	136007	Dividendos - exentos	
118	136009	Enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pendientes	
119	136010	Enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pendientes	
120	136012	Enajenaciones de moneda nacional y extranjera, piezas de oro o de pl	
121	136013	Enajenaciones de moneda nacional y extranjera, piezas de oro o de pl	
122	136015	Intereses y ganancia cambiaria - grabados	
123	136016	Intereses y ganancia cambiaria - exentos	
124	136018	Exportaciones de bienes tangibles y servicios de maquila de exportaci	
125	136021	Enajenaciones a travs de arrendamiento financiero - grabados	
126	136022	Enajenaciones a travs de arrendamiento financiero - exentos	
127	136024	Enajenacin de bienes adquiridos por dacin en pago o adjudicacin	
128	136025	Enajenacin de bienes adquiridos por dacin en pago o adjudicacin	
129	136027	Operaciones financieras derivadas - grabados	
130	136028	Operaciones financieras derivadas	
131	201001	PTU generada durante el ejercicio al que corresponde esta declaracis	
132	201002	PTU no cobrada en el ejercicio anterior	
133	118222	Pirdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar actu	\$ -
134	118820	Saldo promedio anual de los crditos	\$ 40,272,461,917.00
135	118821	Saldo promedio anual de las deudas	\$ 34,381,362,768.00
136	118211	Coficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente parte entera	\$ -
137	118212	Coficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente parte decima	\$ 1,449.00
138	118566	Porcentaje de participacin consolidable parte entera	\$ -
139	118567	Porcentaje de participacin consolidable parte decimal	\$ 9,994.00
140	118224	ISR causado en exceso del impac en los 3 ejercicios anteriores, pendi	
141	118220	Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta	\$ 3,866,407,544.00
142	118219	Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal reinvertida	
143	118221	Saldo actualizado de la cuenta de de capital de aportacin	\$ 3,968,781,772.00
144	118216	En caso de ser controlada indique el RFC de la controladora	
145	111704	Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta (cufin)	
146	111703	Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida (cufinre)	
147	111705	No provenientes de la cufin ni cufinre	
148	206000	Datos del representante legal - registro federal de contribuyentes	
149	206001	Datos del representante legal - apellido paterno, materno y nombre(s)	
150	113023	Efectivo en caja y depssitos en instituciones de crdito	\$ 699,467,103.00
151	113025	Inversiones en valores (excepto acciones)	\$ 5,858,069,114.00
152	113027	Cuentas y documentos por cobrar	\$ 14,513,326,701.00
153	113029	Contribuciones a favor	\$ 33,637,409.00
154	113033	Inventarios	\$ 3,257,577,546.00
155	113035	Otros activos circulantes	\$ 2,502,395,223.00
156	113036	Inversiones en acciones	\$ 704,054,956.00
157	113038	Terrenos	\$ 1,480,675.00
158	113039	Construcciones	\$ 838,670.00
159	113040	Maquinaria y equipo	
160	113041	Mobiliario y equipo de oficina	
161	113042	Equipo de transporte	\$ 382,288.00
162	113043	Otros activos fijos	\$ 959,747,954.00
163	113044	Depreciacin acumulada	\$ -260,683,901.00
164	113045	Cargos y gastos diferidos	\$ - 18,960,344.00
165	113046	Amortizacin acumulada	
166	113047	Suma activo	\$ 29,826,595,664.00
167	114001	Cuentas y documentos por pagar	\$ 8,227,020,444.00
168	114005	Contribuciones por pagar	\$ 16,612,987.00
169	114006	Otros pasivos	\$ 1,798,568,524.00
170	114007	Suma pasivo	\$ 16,782,467,268.00
171	115001	Capital social proveniente de aportaciones	\$ 535,009,000.00
172	115002	Capital social proveniente de capitalizacin	
173	115003	Reservas	\$ 56,229,653.00
174	115004	Otras cuentas de capital	\$ 3,785,748,327.00
175	115005	Aportaciones para futuros aumentos de capital	
176	115006	Utilidades acumuladas	\$ 7,581,135,650.00

520

239	118007: Otras operaciones financieras	
240	117041: Costo integral de financiamiento	\$ 197,533,080.00
241	118019: Ingresos por partidas discontinuas y extraordinarias	
242	117042: Gastos por partidas discontinuas y extraordinarias	\$ 199,862,203.00
243	118009: Utilidad o perdida antes de impuestos	\$ 3,194,168,992.00
244	117043: ISR, impac y PTU	\$ 1,222,772,274.00
245	118010: Utilidad o perdida en participacion subsidiaria	\$ 93,130,125.00
246	118011: Efectos de reexpresion excepto resultado por posicisn monetaria	\$ 42,463,082.00
247	118012: Utilidad o perdida neta	\$ 2,106,989,925.00
248	119112: Utilidad o perdida neta	\$ 2,106,989,925.00
249	119111: Efectos de reexpresisn	\$ 42,463,082.00
250	119106: Resultado por posicisn monetaria	\$ 349,405,297.00
251	118013: Utilidad o perdida neta historica	\$ 2,413,932,140.00
252	116020: Ingresos fiscales no contables	\$ 2,846,870,009.00
253	116021: Ajuste anual por inflacisn acumulable	
254	116023: Anticipos de clientes	\$ 1,077,551,040.00
255	118022: Intereses moratorios efectivamente cobrados	
256	116024: Ganancia en la enajenacisn de acciones o por reembolso de capital	\$ 207,950,367.00
257	116025: Ganancia en la enajenacisn de terrenos y activo fijo	
258	118027: Otros ingresos fiscales no contables	\$ 2,339,775.00
259	117044: Deducciones contables no fiscales	\$ 15,985,983,998.00
260	119033: Costo de ventas	\$ 11,197,989,926.00
261	117045: Depreciacisn y amortizacisn contable	\$ 52,762,842.00
262	117047: Gastos que no rezenen requisitos fiscales	\$ 3,306,116.00
263	119043: ISR, impac y PTU	\$ 976,230,911.00
264	117048: Perdida contable en enajenacisn de acciones	
265	117049: Perdida contable en enajenacisn de activo fijo	\$ 269,445.00
266	117050: Perdida en participacion subsidiaria	
267	119039: Intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratorios	
268	117051: Otras deducciones contables no fiscales	\$ 3,745,424,758.00
269	117052: Deducciones fiscales no contables	\$ 16,423,023,386.00
270	117053: Ajuste anual por inflacisn deducible	\$ 238,589,516.00
271	117055: Adquisiciones netas de mercancías, materias primas, productos sem	
272	117056: Mano de obra directa	
273	119175: Maquilas	
274	117057: Gastos indirectos de fabricacisn	
275	117058: Deduccisn de inversiones	\$ 5,537,204.00
276	119021: Estimulo fiscal por deduccisn inmediata de inversiones	\$
277	117060: Perdida fiscal en enajenacisn de acciones	
278	117061: Perdida fiscal en enajenacisn de terrenos y activo fijo	
279	117054: Intereses moratorios efectivamente pagados	
280	117062: Otras deducciones fiscales no contables	\$ 4,980,911,740.00
281	116028: Ingresos contables no fiscales	\$ 1,443,600,704.00
282	119117: Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no	
283	117059: Anticipos de clientes de ejercicios anteriores	\$ 797,105,351.00
284	116029: Saldos a favor de impuestos y su actualizacisn	
285	116030: Utilidad contable en enajenacisn de activo fijo	
286	116031: Utilidad contable en enajenacisn de acciones	
287	116032: Utilidad en participacion subsidiaria	\$ 93,130,125.00
288	116033: Otros ingresos contables no fiscales	\$ 553,365,228.00
289	118014: Utilidad o Perdida Fiscal	\$ 3,380,157,057.00
290	207000: A. Datos de Identificación - Clave Unica de Registro de Poblacion del	
291	206197: A. Datos de Identificación - Indique si opta por Dictaminar sus Estados	\$
292	206198: A. Datos de Identificación - Indique si se Trata de la Ultima Declaraci	\$ 2.00
293	113875: Deduccion en el Ejercicio - Maquinaria y Equipo para la Generacion de	
294	113877: Deduccion en el Ejercicio - Adaptacion a Instalaciones para Personas	
295	113879: Deduccion en el Ejercicio - Terrenos (Costo de Adquisicion)	
296	113876: Adquisiciones Durante el Ejercicio - Maquinaria y Equipo para la Gene	
297	113878: Adquisiciones Durante el Ejercicio - Adaptacion a Instalaciones para P	
298	117290: F. Estado de Resultados - Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones	
299	117291: F. Estado de Resultados - Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones	
300	117292: F. Estado de Resultados - Compras Netas Nacionales	



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 877 -

363	119907	Perdida Bruta (Total)	
364	119910	Gastos de operacion (Partes no Relacionadas)	\$ 6,238,125,249.00
365	119911	Gastos de operacion (Total)	\$ 6,238,125,249.00
366	119914	Perdida de operacion (Total)	
367	119917	Intereses Devengados a Favor Nacionales (Partes no Relacionadas)	\$ 1,038,763,242.00
368	119918	Intereses Devengados a Favor Nacionales (Total)	\$ 1,038,763,242.00
369	119919	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Partes Relacionadas)	
370	119920	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Partes no Relacionadas)	
371	119921	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Total)	\$ -
372	119922	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Partes Relacionadas)	
373	119923	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Partes no Relacionadas)	
374	119924	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Total)	\$ -
375	119925	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Partes Relacionadas)	
376	119926	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Partes no Relacionadas)	
377	119927	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Total)	\$ -
378	209067	Ganancia Cambiaria (Partes Relacionadas)	
379	209068	Ganancia Cambiaria (Partes no Relacionadas)	
380	119928	Ganancia Cambiaria (Total)	\$ -
381	119931	Intereses Devengados a Cargo Nacionales (Partes no Relacionadas)	\$ 380,983,390.00
382	119932	Intereses Devengados a Cargo Nacionales (Total)	\$ 380,983,390.00
383	119933	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Partes Relacionadas)	
384	119934	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Partes no Relacionadas)	\$ 18,170,940.00
385	119935	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Total)	\$ 18,170,940.00
386	119936	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Partes Relacionadas)	
387	119937	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Partes no Relacionadas)	
388	119938	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Total)	\$ -
389	119939	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Partes Relacionadas)	
390	119940	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Partes no Relacionadas)	
391	119941	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Total)	\$ -
392	119942	Perdida Cambiaria (Partes Relacionadas)	
393	209031	Perdida Cambiaria (Partes no Relacionadas)	\$ 92,670,535.00
394	209032	Perdida Cambiaria (Total)	\$ 92,670,535.00
395	119945	Resultado por Posicion Monetaria Favorable (Partes no Relacionadas)	
396	119946	Resultado por Posicion Monetaria Favorable (Total)	
397	119947	Resultado por Posicion Monetaria Desfavorable (Partes Relacionadas)	
398	119948	Resultado por Posicion Monetaria Desfavorable (Partes no Relacionadas)	\$ 349,405,297.00
399	119949	Resultado por Posicion Monetaria Desfavorable (Total)	\$ 349,405,297.00
400	119950	Otras operaciones Financieras Nacionales (Partes no Relacionadas)	
401	119951	Otras operaciones Financieras Nacionales (Total)	\$ -
402	119981	Otras operaciones Financieras Extranjeras (Partes Relacionadas)	
403	119982	Otras operaciones Financieras Extranjeras (Partes no Relacionadas)	
404	119984	Otras operaciones Financieras Extranjeras (Total)	\$ -
405	119929	Otras operaciones Financieras (Total)	\$ -
406	119954	Otros Gastos Nacionales (Total)	\$ 60,848,444.00
407	119930	Otros Gastos Extranjeros (Total)	
408	119943	Otros Gastos (Total)	\$ 60,848,444.00
409	119957	Otros Productos Nacionales	\$ 112,403,894.00
410	119944	Otros Productos Extranjeros	
411	119995	Otros Productos (Total)	\$ 112,403,894.00
412	119966	Perdida Antes de Impuestos	
413	209033	IETU	
414	119969	IMPAC	
415	119970	PTU	
416	119971	Perdida en Participacion subsidiaria	
417	119972	Efectos de Reexpresion Desfavorables Excepto Resultado por Posicion	
418	119973	Perdida Neta	
419	209056	Perdida por operaciones Financieras Derivadas	
420	119974	Efectivo en Caja y Depositos en Instituciones de Credito del Extranjero	
421	119975	Inversiones en Valores con Instituciones Extranjeras (Excepto Acciones)	
422	119976	Cuentas y Documentos por Cobrar Nacionales (Partes no Relacionadas)	\$ 1,311,925,643.00
423	119977	Cuentas y Documentos por Cobrar Nacionales (Total)	\$ 15,825,252,344.00
424	119978	Cuentas y Documentos por Cobrar del Extranjero (Partes Relacionadas)	

De la digitalización que antecede, se desprende en la parte de interés, que mediante la **Declaración Complementaria presentada el 12 de agosto de 2010**, la sociedad controlada ***** *** ***** **** ** ***** declaró lo siguiente:

INGRESOS ACUMULABLES en cantidad de **\$23,228'624,406.00.**

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES en cantidad de **\$2,846'870,009.00.**

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO (2006), en cantidad de **\$3,380'157,057.00.**

Por lo que, del análisis realizado a las declaraciones complementarias que nos ocupan, las cuales obran dentro del expediente administrativo exhibido por la autoridad demandada y ofrecido como prueba número III del capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda por la parte actora, esta Juzgadora concluye que la hoy demandante, a través de la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013, modificó su utilidad fiscal al haber disminuido la cantidad de **\$1,559'028.827.00**, por concepto de **INVENTARIO ACUMULABLE**, a saber.

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA EL <u>12 DE</u> <u>AGOSTO DE 2010</u>	DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA EL <u>14 DE</u> <u>MAYO DE 2013</u>
(ingresos acumulables) \$23,228'624,406.00 Menos (-) (inventario acumulable) \$1,559'028.827.00 <hr/> (total) \$21,669'595,579.00	(ingresos acumulables) <u>\$21,669'595,579.00.</u>
(ingresos fiscales no contables) \$1,287'841,182.00. Mas (+) (inventario acumulable) \$1,559'028.827.00 <hr/> (total) \$2,846'870,009.00	(ingresos fiscales no contables) <u>\$2,846'870,009.00</u>



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 879 -

(utilidad fiscal del ejercicio 2006) <u>\$3,380'157,057.00.</u>	
Menos (-)	(utilidad fiscal del ejercicio 2006)
(inventario acumulable) \$1,559'028.827.00	<u>\$1,821'128,230.00</u>
<hr/> (total) <u>\$1,821'128,230.00</u>	

En este sentido, la autoridad demandada al determinar la **utilidad fiscal de la sociedad ******* aplicó el porcentaje de la participación consolidable correspondiente, es decir el 99.9376%, dando un total de **\$1,558'055,993.00.**

En virtud de lo anterior, no le asiste la razón a la parte actora en cuanto a que no existe precepto legal alguno en el Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cualquier otra disposición fiscal que le permita a una autoridad fiscalizadora desestimar el valor probatorio de una declaración complementaria, por el simple hecho de que haya sido presentada con un objetivo determinado, específicamente el equiparar la utilidad de una empresa controlada a la de su controladora, siendo que estaba en todo su derecho a corregir su situación a través de la presentación de una declaración complementaria.

Lo anterior, en atención a que tal y como quedó precisado con anterioridad el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, establece de manera puntual que una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando.

Por lo que, la declaración complementaria evidentemente no se está desestimando por haber sido presentada con un objetivo específico, sino porque con la misma la empresa ***** modifica su utilidad fiscal al disminuir el inventario acumulable, lo que estaba impedida

a realizar, ya que al haber cambiado a partir del 1° de enero de 2005, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 2004, el sistema de deducción de adquisición de mercancías, sustituyéndose por el sistema de deducción del costo de lo vendido, no podía deducir mediante el nuevo sistema los inventarios existentes al 31 de diciembre de 2004, debido a que al momento de ser adquiridos, fueron deducidos mediante el sistema anterior.

Pues al haber optado por deducir dichos inventarios mediante el costo de ventas, conforme se enajenen las mercancías, debió en principio acumularlos conforme al Régimen de Consolidación Fiscal, contenido en el Capítulo VI, del Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, ejerció la opción de acumular la existencia de inventarios al 31 de diciembre de 2004.

Además, la demandante no puede argumentar que está ejerciendo su derecho a corregir su situación a través de la presentación de la declaración complementaria, ya que dicho derecho está limitado entre otras a que no tenga alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando, menos aún que tal corrección se realice sobre cuestiones que no le resultan aplicables al caso que nos ocupa, como lo es que no haya considerado los inventarios acumulables de ***** ** ***** ** ** ***** como sucedió en la especie.

Pues, en principio se insiste la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, mediante sentencia de fecha 1° de marzo de 2011, confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo D.A. 408/2011, ya le había resuelto a la accionante que al optar por acumular el inventario acumulable, ese concepto debe sumarse a los ingresos acumulables para ser afectado por el cálculo del impuesto como si fuera un ingreso, pues solo de esa forma se revierte la deducción que respecto de ese valor ya se había hecho con anterioridad, de lo contrario se desconocería la opción elegida que busca evitar que se duplique la deducción.

De ahí que no pueda alegar que ejerció su derecho de corregir su situación fiscal, a sabiendas de que no precedía que la sociedad controlada ***** ** ***** ** ** ***** disminuyera la cantidad de \$1,559'028.827.00



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 881 -

por concepto de inventario acumulable sin haberse sumado antes, ya que de lo contrario implica la existencia de una duplicidad de deducciones.

Ahora bien, resultan infundados los argumentos de la accionante, en cuanto a que aun cuando en su calidad de controladora y ***** como controlada conforman una unidad económica, ello es únicamente para efectos del entero del resultado fiscal consolidado, sin que ello implique confusión de sus derechos y obligaciones, pues subsiste cada una con personalidad jurídica propia.

Así como que la actora no presentó ninguna declaración complementaria en la que disminuyera utilidad alguna, sino que fue ***** la entidad que presentó la declaración complementaria, quien tenía el derecho para hacerlo pues no estaba sujeta al ejercicio de facultades de comprobación.

Lo que antecede es así, toda vez que al no haberse sumado a la utilidad fiscal la cantidad de \$1,559'028.827, por concepto de inventarios acumulables evidentemente incide en la determinación de la utilidad fiscal de la sociedad controladora (hoy parte actora), como unidad económica dentro del Régimen de situación fiscal, como lo afirma la autoridad demandada.

Ya que, al ser menor la utilidad fiscal de la multicitada empresa controlada ***** por no considerarse los inventarios acumulables, al momento de que la demandante determinó su utilidad fiscal consolidada, consideró una utilidad menor por dicha controlada, lo que en términos del artículo 68, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada el 1° de enero de 2014, implica que la sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada entre otros sumando las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

Por lo que, si la hoy actora al sumar la utilidad fiscal de ***** no consideró la cantidad de \$1,559'028.827,

correspondiente a los inventarios acumulables, tal y como se desprendió del análisis realizado a las declaraciones complementarias presentadas el 12 de agosto de 2010 y el 14 de mayo de 2013, es claro que la utilidad fiscal consolidada de la parte actora fue determinada de manera errónea.

En consecuencia, aun cuando las facultades de comprobación, se ejercieron sobre ***** y fue ***** quien presentó la declaración complementaria de referencia, la misma tuvo repercusión en el ejercicio fiscal revisado, pues de modificó el ingreso acumulable al haber disminuido la cantidad de \$1,559'028.827, correspondiente al concepto de inventario acumulable, lo que se insiste no es correcto, ya que en el caso la sociedad controlada al haber optado por acumular los inventarios que tenía al 31 de diciembre de 2004, la hoy parte actora, los debió considerar para determinar la utilidad fiscal consolidada.

Al efecto los peritos de las partes y la tercero en discordia señalaron en la respuesta dada a las pregunta número **27 del cuestionario de la demandante**, lo siguiente

ACTORA

27. Dirá el perito, ¿si por lo que respecta al ejercicio fiscal de 2006 y en términos de última declaración anual presentada por la empresa controlada denominada [REDACTED] esta última, reportó a la empresa hoy actora en el juicio contencioso que nos ocupa, inventario acumulable dentro de los ingresos considerados para efectos de la determinación de su utilidad fiscal individual?, debiendo señalar los documentos consultados y motivos en los que se sustentaría su respuesta.

Del análisis de los documentos, libros, registros y demás documentación que integra la contabilidad, específicamente de la última declaración anual presentada por la empresa controlada denominada [REDACTED] se desprende que ésta efectuó la acumulación de ingresos al momento de la enajenación de inventarios.

AUTORIDAD DEMANDADA

27. Dirá el perito, ¿si por lo respecta el ejercicio fiscal de 2006 y en términos de última declaración anual presentada por la empresa controlada denominada [REDACTED] esta última, reportó a la empresa hoy actora en el juicio contencioso que nos ocupa, inventario acumulable dentro de los ingresos considerados para efectos de la determinación de su utilidad fiscal individual?, debiendo señalar los documentos consultados y motivos en los que se sustentaría su respuesta.

Respuesta

De conformidad con la última declaración complementaria presentada por [REDACTED] correspondiente al ejercicio de 2006, en fecha 14 de mayo de 2013, se advierte dicha contribuyente indebidamente omitió considerar el inventario acumulable para determinar su utilidad fiscal.

Atento a lo anterior no fue reportado a [REDACTED] a fin de equiparar la utilidad fiscal sumada por dicha contribuyente para la determinación de su resultado fiscal consolidado.

PERITO TERCERO

27.- Dirá el perito, ¿si por lo que respecta el ejercicio fiscal de 2006 y en términos de la última declaración anual presentada por la empresa controlada denominada [REDACTED] esta última, reportó a la empresa hoy actora en el juicio contencioso que nos ocupa, Inventario acumulable dentro de los ingresos considerados para efectos de la determinación de su utilidad fiscal individual?, debiendo señalar los documentos consultados y motivos en los que se sustentaría su respuesta.

Respuesta: De la lectura al oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013 emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se conoció que la sociedad controlada [REDACTED] manifestó en la declaración anual complementaria del ejercicio 2006 presentada el 12 de agosto 2010 la cantidad de \$1,559,028,827.00 por concepto de Inventario acumulable apegándose a lo dispuesto en el artículo tercero, primer párrafo, fracción V de las Disposiciones Transitorias de la Ley del impuesto sobre la Renta para el 2005, así mismo en el dictamen fiscal del

ejercicio 2006 presentado por la sociedad controlada, en el anexo 12 Conciliación entre el resultado Contable y Fiscal para efectos del Impuesto sobre la Renta, en el apartado de Ingresos Fiscales no Contables manifestó la cantidad de \$1,559,028,827.00 bajo el concepto de Inventario Acumulable.

De la lectura al citado oficio se conoció que la sociedad controlada [REDACTED] manifestó en la declaración anual complementaria del ejercicio 2006 presentada el 12 de agosto 2010, un resultado fiscal de \$3,380,157,057.00 mismo que incluye la cantidad de \$1,559,028,827.00 bajo el concepto de Inventario Acumulable:

	Importe	Participación consolidable	Importe
(1) Resultado fiscal [REDACTED]	3,380,157,057.00	99.9376%	3,378,047,839.00
Menos			
(2) Importe incluido en la determinación del Resultado fiscal Consolidado por [REDACTED]	1,821,128,230.00	99.9376%	1,819,991,845.98
Diferencia por inventario acumulable	1,559,028,827.00		1,558,055,993.01

(1) Importe manifestado en declaración anual 2006 por corrección fiscal del 12 de agosto 2010

(2) Según papel de trabajo denominado "Resultado Fiscal Consolidado al 31 de diciembre de 2006 Impuesto sobre la Renta"

Derivado de lo anterior se considera que la sociedad controladora [REDACTED] ahora [REDACTED] consideró en la participación consolidable, la utilidad fiscal individual reportada por la sociedad controlada [REDACTED] sin sumar el importe de inventario acumulable determinado por ésta en cantidad de \$1,558,055,993.00.

De lo anterior, se desprende que si bien la perito de la actora señaló que la demandante efectuó la acumulación de ingresos al momento de la enajenación de inventarios, la perito de la autoridad y la tercero en discordia señalaron contrario a su respuesta que la accionante consideró en la participación consolidable, la utilidad fiscal individual reportada por la sociedad controlada ***** *** ***** **** ** ***** sin sumar el importe de inventario acumulable determinado por ésta en cantidad de \$1,558,055,993.00, de conformidad con la declaración complementaria presentada el 14 de mayo de 2013; es decir, fue omisa en considerar el inventario acumulable para determinar su utilidad fiscal.

Además, es la propia accionante quien manifiesta que efectivamente no consideró los inventarios acumulables de la empresa *****
*** ***** **** ** ***** para efectos de determinar su utilidad fiscal consolidada, pues a su consideración no estaba obligada a ello, de ahí que la declaración complementaria a la que hace referencia no le beneficie.

Por otra parte, tampoco le asiste la razón a la demandante, en el sentido de que manifestó que son ilegales las resoluciones impugnadas al omitir presentar declaración complementaria de consolidación derivado de la corrección efectuada por su empresa controlada ***** ** *****
***** **** ** *****

Para dilucidar lo anterior, esta Juzgadora estima conveniente tener presente el contenido del artículo 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, el cual señala lo siguiente:

“Artículo 72. La sociedad controladora que ejerza la opción de consolidar a que se refiere el artículo 64 de esta Ley, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la misma, tendrá las siguientes:

(...)

III. En el caso de que alguna o algunas de las sociedades controladas presenten declaración complementaria con el fin de subsanar errores u omisiones, así como cuando en el ejercicio de sus facultades las autoridades fiscales modifiquen la utilidad o la pérdida fiscal de una o más sociedades controladas y con ello se modifique el resultado fiscal consolidado, la pérdida fiscal consolidada o el impuesto acreditado manifestados, y se derive un impuesto a cargo, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que ocurra este hecho, la sociedad controladora presentará declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar. Cuando no se derive impuesto a cargo, la declaración complementaria de consolidación se



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 885 -

presentará a más tardar dentro de los dos meses siguientes a aquél en que ocurra la primera modificación. Si en la declaración complementaria de consolidación resulta diferencia a cargo, la sociedad controladora deberá enterarla.

Cuando se trate de declaraciones complementarias de las sociedades controladas, originadas por el dictamen a sus estados financieros, la sociedad controladora podrá presentar una sola declaración complementaria a más tardar en la fecha de presentación del dictamen relativo a la sociedad controladora.

(...)"

Del artículo que antecede, se desprende que la sociedad controladora que ejerza la opción de consolidar a que se refiere el artículo 64 de dicha Ley (régimen de consolidación fiscal), además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la misma, deberá **en el caso de que alguna o algunas de las sociedades controladas presenten declaración complementaria con el fin de subsanar errores u omisiones, así como cuando en el ejercicio de sus facultades las autoridades fiscales modifiquen la utilidad o la pérdida fiscal de una o más sociedades controladas y con ello se modifique el resultado fiscal consolidado, la pérdida fiscal consolidada o el impuesto acreditado manifestados, y se derive un impuesto a cargo, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que ocurra este hecho, la sociedad controladora presentará declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar.**

Que cuando no se derive impuesto a cargo, la declaración complementaria de consolidación se presentará a más tardar dentro de los dos meses siguientes a aquél en que ocurra la primera modificación. Si en la declaración complementaria de consolidación resulta diferencia a cargo, la sociedad controladora deberá enterarla.

Y que cuando se trate de declaraciones complementarias de las sociedades controladas, originadas por el dictamen a sus estados financieros, la sociedad controladora podrá presentar una sola declaración complementaria a más tardar en la fecha de presentación del dictamen relativo a la sociedad controladora.

Por su parte el artículo 68, primer y tercer párrafo de la fracción I, inciso a) señala lo siguiente:

“Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

(...)

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

(...)

Sumará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas por las sociedades controladas y la sociedad controladora en el ejercicio y en ejercicios anteriores y que hayan sido restadas conforme al primer párrafo de este inciso en dichos ejercicios, que hubieran deducido en el ejercicio conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley.

(...)”

Del precepto legal que antecede se desprende que la sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada entre otros sumando las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

Además, sumando el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de dicha Ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas por las sociedades controladas y la sociedad controladora en el ejercicio y en ejercicios anteriores y que hayan sido restadas conforme al primer párrafo de este inciso en dichos ejercicios, que hubieran deducido en el ejercicio conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 32 de la citada Ley.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 887 -

Al respecto, la resolución contenida en el oficio número 900-05-2013-48229 de fecha 25 de julio de 2013, en la parte de interés se señala lo siguiente:

"(...)

- b) Efecto en el resultado fiscal consolidado derivado de la presentación de la declaración anual por corrección del ejercicio fiscal del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006 de su sociedad controlada modificando su utilidad fiscal.

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

De la revisión practicada al dictamen fiscal, a la información y documentación proporcionada por la contribuyente revisada, así como a la que obra en los archivos de esta administración, se determina que la contribuyente actualmente en su carácter de sociedad controladora a la fecha del presente oficio, omitió

40 de 96

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



15 JUL 2013
SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.:

adicionar en el resultado fiscal consolidado como consecuencia de la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada correspondiente al ejercicio 2006 de \$163'473,885 a \$167'323,432, manifestada en declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010, como resultado de las facultades de comprobación efectuadas por esta Administración, y consecuentemente omitió un impuesto sobre la renta consolidado de conformidad a lo señalado en los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión y 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, ordenamiento jurídico vigente en el año en que se modificó la utilidad fiscal de su sociedad controlada y en el cual nace la obligación de esa sociedad controladora de modificar el resultado fiscal consolidado.

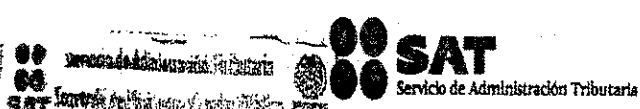
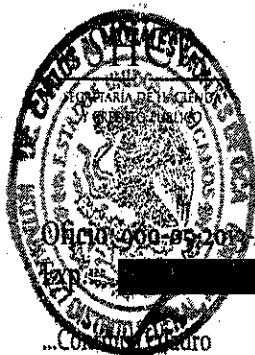
La determinación anterior, así como las señaladas en las páginas de la 15 a la 40 y de la 52 a la 76 de la presente resolución, modifican la utilidad fiscal consolidada y el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006 declarado por actualmente como se señaló en las páginas 9 y 10 del presente oficio determinativo de crédito fiscal.

El resultado fiscal consolidado se determina como sigue:

NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) FISCAL DECLARADA AL 100% (*)	OBSERVACIÓN DETERMINADA POR ESTA AUTORIDAD	UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL OBSERVADA	% DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE (*)	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO DETERMINADO POR ESTA AUTORIDAD (*)
CONTROLADORA	\$619,519,244		\$619,519,244	100.0000%	\$619,519,244.37
UTILIDADES DE CONTROLADAS	\$1,771,701		\$1,771,701	100.0000%	\$1,771,701.00
	11,132,414		11,132,414	100.0000%	11,132,414.00
	796,114		796,114	100.0000%	796,114.00
	8,418,730		8,418,730	100.0000%	8,418,730.00
	1,821,128,230	1,559,028,827	3,380,257,057	99.9376%	3,378,047,838.99

sigue cuadro...

41 de 96



Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

25 JUL 2013

DESARROLLO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Oficio 900-85-2013-48229

...CONTRATO...

NO

8,879,438	8,879,438	100.0000%	8,879,438.00
858,860	858,860	100.0000%	858,860.00
4,027,111	4,027,111	99.9999%	4,027,106.84
300,609	300,609	100.0000%	300,609.00
13,707,511	13,707,511	100.0000%	13,707,511.00
12,975,200	12,975,200	100.0000%	12,975,200.00
4,718,890	4,718,890	100.0000%	4,718,890.00
1,561,431	1,561,431	100.0000%	1,561,431.00
5,598,308	5,598,308	100.0000%	5,598,307.30
0	0	100.0000%	0.00
169,890,124	169,890,124	100.0000%	169,890,124.00
0	0	99.9999%	0.00
242,834	242,834	100.0000%	242,834.00
48,337	48,337	100.0000%	48,337.00
13,359,350	13,359,350	99.9999%	13,359,332.93
1,203	1,203	100.0000%	1,203.25
3,516,819	3,516,819	100.0000%	3,516,819.00
55,879,212	55,879,212	100.0000%	55,879,208.47
36,064,060	36,064,060	100.0000%	36,064,058.13
106,033,087	106,033,087	99.9988%	106,031,764.26
3,344,896	3,344,896	100.0000%	3,344,896.00
46,572,773	46,572,773	100.0000%	46,572,773.00
1,081,414	1,081,414	98.0000%	1,059,785.72

Sigue cuadro...



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

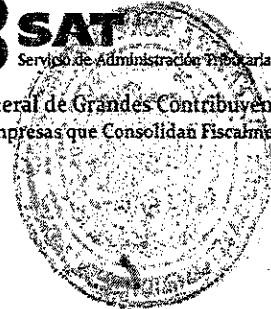
- 889 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

SAT
Servicio de Administración Tributaria

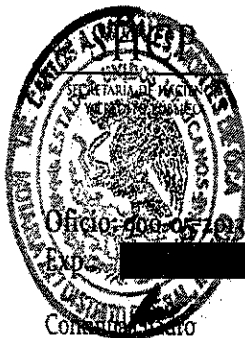


Oficio: 900-05-2013-48229
Exp.: [REDACTED]

...Continúa cuadro

	2,060,455		2,060,455	100.0000%	2,060,455.00
	0		0	99.6002%	0.40
	18,220		18,220	99.9980%	18,219.64
	5,518		5,518	99.9988%	5,517.93
	5,498,773		5,498,773	99.9999%	5,498,766.14
	298,525		298,525	100.0000%	298,525.00
	299,997		299,997	100.0000%	299,997.00
	163,473,885	3,849,547	167,323,432	99.9376%	167,219,022.18
	390,367,148		390,367,148	100.0000%	390,367,148.00
	760,216,956		760,216,956	99.9376%	759,742,781.66
		1,562,878,374	5,217,026,307		5,214,315,719.44
	(1,114,240)			100.0000%	1,114,239.83
	(3,161,604)			100.0000%	3,161,604.00
	(154,983)			100.0000%	154,983.00
	(152,515)			100.0000%	152,515.00
	(21,800,308)			100.0000%	21,800,308.00
	(4,649,214)			98.2980%	4,579,083.54
	(793,359)			99.8000%	792,772.28
	(3,552,932)			100.0000%	3,552,932.00
	(147,518,206)			100.0000%	147,518,205.98
	(371,967,597)			100.0000%	371,967,597.00

...sigue cuadro...



Servicio de Administraciones Tributarias
SAT
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Administración General de Grandes Contribuyentes



Servicio de Administración Tributaria

25 JUL 2013

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DESIGNADO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

Oficio: 406-05703-48229

Constitución

	(1,811,604,802)			100.0000%	1,811,604,801.49
	(20,073)			99.9999%	20,072.97
					2,366,409,115.09
	298,525			100.0000%	298,525.00
	299,997			100.0000%	299,997.00
	163,473,885			99.9376%	163,371,920.53
	390,367,148			100.0000%	390,367,148.00
	760,216,956			99.9376%	724,657,810.00
TOTAL DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONSOLIDACIÓN DE CONTROLADAS					1,278,095,400.53
UTILIDAD O (PÉRDIDA) FISCAL CONSOLIDADA					2,188,430,448.19
DESINCORPORACIÓN DE CONTROLADAS.- PÉRDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	0	2,251,044,786.00			\$2,251,044,786.00
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO					\$4,439,475,234.19

(*) Importes manifestados en el papel de trabajo denominado "RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 IMPUESTO SOBRE LA RENTA", señalado en la página 22 del presente oficio

(**) Se observa una diferencia por redondeo en cantidad de \$520.00, en el importe manifestado en el Resultado Fiscal Consolidado y el señalado en el cuadro que antecede, como sigue:

RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO SEGÚN CUADRO

\$4,439'475,234.00 (i)

DIFERENCIA POR REDONDEO:

520.00

RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO DETERMINADO

\$4,439'475,754.00

(i) La diferencia de \$520.00, corresponde al redondeo de cifras entre los diferentes resultados fiscales de las sociedades que integran el grupo, determinado en el papel de trabajo denominado "RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 IMPUESTO SOBRE LA RENTA", señalado en la página 22 del presente oficio, determinados por la contribuyente, así como la inclusión de la observación determinada por esta autoridad en cantidades de \$1,559'028,827 y \$3'849,547, señaladas en el cuadro que antecede.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

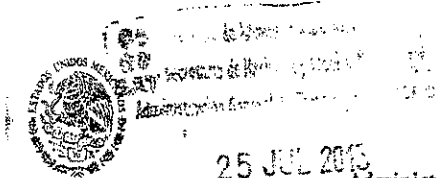
EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 891 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

25 JUL 2013
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
A EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

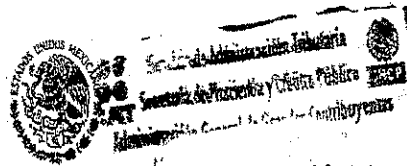
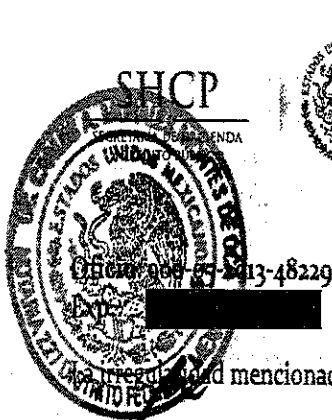
EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN A SU SOCIEDAD CONTROLADA

Mediante oficio 900 05-2010-2298 del 19 de octubre de 2010, emitido por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, firmado por ausencia en suplencia por el Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" notificado legalmente el 22 de octubre de 2010, a la C. [REDACTED] en su carácter de tercero de [REDACTED] quien señaló que se encontraba en el lugar en virtud de que "esta cumpliendo con su jornada de trabajo", previo citatorio al Representante Legal, se comunicó la conclusión de la revisión por autocorrección, por el ejercicio fiscal de 2006, como resultado de la revisión efectuada a su sociedad controlada [REDACTED] por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, en virtud de que con escrito de fecha 16 de julio de 2010, recibido el 27 de julio de 2010 a través de la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 12202, dicha controlada, anexó fotocopia de la declaración del ejercicio por corrección fiscal, presentada a través de medios electrónicos en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria el 14 de julio de 2010 con número de operación 194BE y con folio de recepción 43113360, en la que manifestó una disminución de la subcuenta de Fletes, incluida en el concepto de Varios de la cuenta de Gastos Generales, la cantidad de \$3'849,547, la cual se refleja en el renglón de deducciones autorizadas, disminuidas de \$351'309,183 a \$347'459,636 en la declaración complementaria antes citada, lo anterior como a continuación se indica:

CONCEPTO	Declaración Normal presentada el 23/03/2007	Declaración Complementaria por Corrección Fiscal presentada el 14/07/2010	DIFERENCIA	% DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE (1)	DIFERENCIA EN PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE
Total de Ingresos acumulables	\$ 514,783,068	\$ 514,783,068	\$ 0	99.9376 %	\$0
Total de Deducciones autorizadas	351,309,183	347,459,636	3'849,547	99.9376 %	3'847,144
Utilidad fiscal del ejercicio	163,473,885	167,323,432	\$3'849,547	99.9376 %	\$3'847,144

(1) % de Participación consolidable manifestada por la contribuyente en el papel de trabajo denominado "RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007", como se señaló en la página 22 del presente oficio.

De lo anterior se concluye, que la sociedad controladora [REDACTED] antes [REDACTED] omitió reflejar en el resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED]



25 JUL 2010
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

DESOLUCIONADO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE

la pregunta mencionada, se conoció como sigue:

Mediante oficio 900-05-2010-2149 del 01 de julio de 2010, emitido por esta Administración, referido en el inciso a) de la página 2 del presente oficio, se citó al C.P. [REDACTED] a fin de llevar a cabo la revisión de papeles de trabajo que formuló respecto del dictamen que para efectos fiscales, emitió sobre los estados financieros de la contribuyente [REDACTED] actualmente [REDACTED] por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

Dicha revisión se realizó el día 16 de julio de 2010, con el L.C. [REDACTED] en representación del C.P. [REDACTED] quien acreditó su representación legal mediante Escritura Pública número cincuenta y seis mil novecientos noventa y uno, volumen mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, de fecha 6 de octubre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Carlos A. Yfarraguerri y Villarreal, Titular de la Notaría Pública número veintiocho del Distrito Federal, en la cual se levantó acta de comparecencia a folios CONS3-10-466 a CONS3-10-473, así mismo, se hicieron constar entre otras, las siguientes preguntas y respuestas:

...
PREGUNTA N° 7.- Diga si fueron presentadas las declaraciones de consolidación del ejercicio, normal y en su caso complementarias, así como los pagos provisionales (individuales y consolidados) y del ejercicio en revisión, exhiba fotocopias de las mismas, proporcione vaciado de pagos provisionales.

...
RESPUESTA.- Proporciono mediante archivo electrónico declaración anual normal presentada el 30 de abril de 2007, respecto a la declaración anual complementaria presentada el 7 de septiembre de 2007 será solicitada a la empresa y se proporcionará con posterioridad. ...

Derivado de lo anterior, con oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1" adscrita a esta Administración, referido en el inciso b) de las páginas 2 y 3 del presente oficio, se solicitó al C.P. [REDACTED] entre otra, la siguiente información y documentación:

"8.- Fotocopia legible de la declaración anual del impuesto sobre la renta consolidado, complementaria del ejercicio en revisión, en la que se observe que [REDACTED] como sociedad controladora, haya reconocido el efecto en la consolidación, de la modificación a la utilidad fiscal de sus sociedades controladas ... y [REDACTED] con motivo de que dichas sociedades controladas presentaron con fechas ... y 14 de julio del mismo año, respectivamente, declaración anual complementaria, en la que modifican su utilidad fiscal, lo anterior, conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción III, del artículo 72, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006."



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

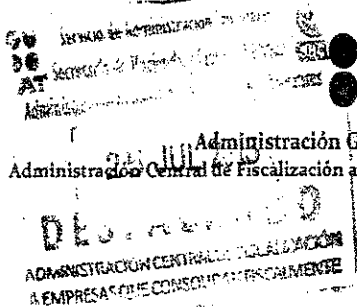
EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 893 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

Con escrito del 2 de junio de 2011, recibido el mismo día de su fecha de emisión en la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 08281, suscrito por el L.C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal del C.P. [REDACTED] acreditó su personalidad con Escritura Pública No. 56,991, Volúmen 1,454 del 6 de octubre de 2009, pasado ante la fe del Lic. Carlos A. Yarraguerri y Villarreal, Titular de la Notaría número 28 del Distrito Federal, proporcionó lo siguiente:

"Con relación al punto 18 del citado oficio se incluye lo siguiente:

a.- Se proporciona copia legible de la declaración anual del impuesto sobre la renta consolidado complementaria presentada el 18 de agosto de 2010 por la modificación en la utilidad fiscal de la sociedad controlada [REDACTED] la cual se proporciona en el punto 1.

b.- El contribuyente no ha presentado la declaración complementaria del ejercicio en revisión, en el que se reconozca el efecto en la consolidación fiscal, por la modificación en la utilidad fiscal de la sociedad controlada [REDACTED]

c.- Las sociedades [REDACTED] y [REDACTED] no han sido desincorporadas.

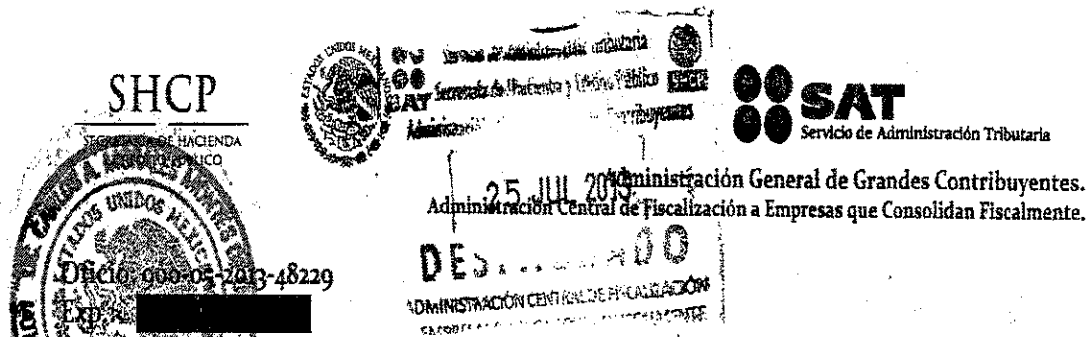
...

De lo anterior, se observa que el L.C. [REDACTED] en representación del C.P. [REDACTED] proporcionó la información y documentación solicitada mediante oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011 de forma parcial, motivo por el cual no se contaba con la información y documentación suficiente para verificar la situación fiscal de la contribuyente, por lo que para efectos de seguir con el procedimiento de revisión previsto en el artículo 52-A, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, mediante oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, el cual contiene la orden de revisión GSD9400235/11 emitido por esta Administración y referido en el inciso d) de la página 3 del presente oficio, se solicitó directamente a [REDACTED] actualmente [REDACTED] la información y documentación que no fue proporcionada por el contador público mediante el citado oficio 900-05-01-2011-10323 del 03 de mayo de 2011, y a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, como sigue:

...

13.- Fotocopia legible de la declaración anual del impuesto sobre la renta consolidado, complementaria del ejercicio en revisión, en la que se observe que [REDACTED] como sociedad controladora, haya reconocido el efecto en la consolidación, de la modificación a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] con motivo de que dicha sociedad controlada presentó con fecha 14 de julio de 2010 declaración anual complementaria, en la que modificó su utilidad fiscal, lo anterior, conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción III, del artículo 72, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2006.

...



Mediante escrito con fecha de emisión del 15 de julio de 2011, recibido el 18 del mismo mes y año en la Oficina de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, referido en el inciso f) de las páginas 3 y 4 del presente oficio, con folio de recepción 10539, el L.A.E. [REDACTED]

en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] solicitó ampliación del plazo para presentar la información y documentación requerida a través del oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, antes señalado.

En atención a la solicitud de prórroga antes mencionada, mediante oficio 900 05-03-2011-13614 del 25 de julio de 2011, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" adscrita a esta Administración y referido en el inciso f) de la página 4 del presente oficio, se le comunicó a dicha contribuyente que se le concedía una prórroga por diez días más, para dar cumplimiento a la solicitud de información y documentación contenida en el oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011.

Con escrito de fecha 02 de agosto de 2011, recibido el 03 del mismo mes y año, en la Oficina de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, referido en el inciso g) de la página 4 del presente oficio, la contribuyente dio respuesta al oficio antes mencionado, manifestando entre otros, lo siguiente:

"13.- En relación al punto trece, mi representada manifiesta que a la fecha no ha presentado la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006 de [REDACTED] (SIC) en donde reconozca los efectos en la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal de la sociedad controlada [REDACTED] (SIC), con motivo de la presentación de la declaración complementaria presentada con fecha 14 de julio de 2010, al respecto se manifiesta que dicha declaración será presentada en cuanto se conozcan los resultados de la revisión a que está siendo sujeta mi representada."

(Énfasis y subrayado añadido.)

Derivado de lo anterior, mediante oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, emitido por la Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "3" adscrita a esta Administración y referido en el inciso j) de la página 5 del presente oficio, se le dieron a conocer a la contribuyente revisada las observaciones determinadas que entrañaron incumplimiento de las disposiciones fiscales relacionadas, entre otras, con la obligación que tiene la sociedad controladora [REDACTED] antes [REDACTED] de presentar declaración complementaria de consolidación derivada de la modificación efectuada a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [REDACTED] por la presentación de la declaración anual por corrección del ejercicio fiscal del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, efectuada por dicha controlada.

Ahora bien, con escrito de fecha de emisión 1º de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013 en la Oficina de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con



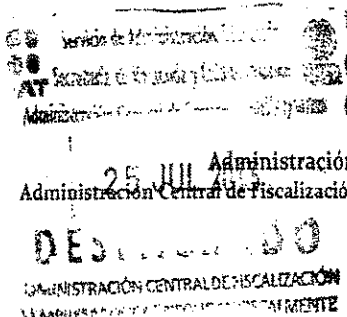
TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 895 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

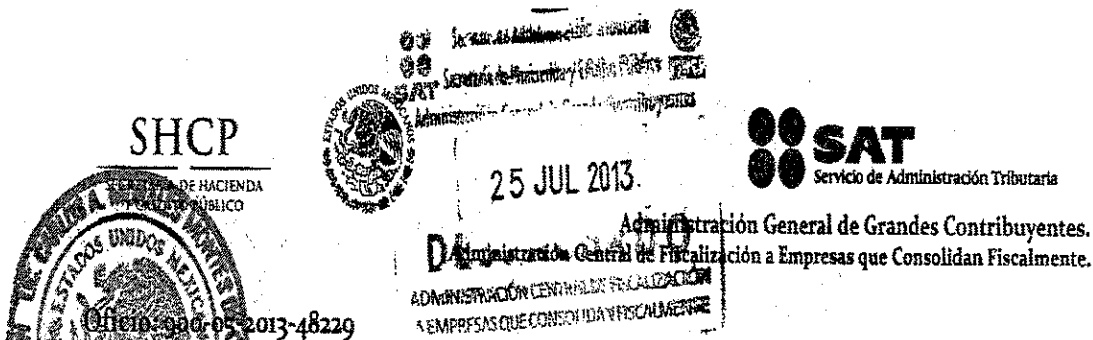
folio de recepción 130003603 firmado por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal de [REDACTED] actualmente [REDACTED] quien acreditó su personalidad mediante copia del Instrumento Público Notarial número 95,889, volumen 1853 de fecha 13 de octubre de 2003, otorgado ante la fe del Lic. Gerardo Correa Etchegaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal, dió respuesta al oficio de observaciones dentro del plazo legal de 20 días previsto en el artículo 48, primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente, manifestando, en la parte que interesa, lo siguiente:

...
b) Omitió en la determinación del resultado fiscal consolidado la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio 2006 de \$163,473,885, a \$167,323,432, manifestada en declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010 toda vez que dicha sociedad disminuyó sus deducciones autorizadas.- gastos generales, en cantidad de \$3,849,547, lo anterior considerando que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que ocurra este hecho, de conformidad con los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) y artículo 72, fracción III, ambos ordenamientos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2006.

En relación con lo anterior, manifiesto que mi representada se encuentra en proceso de la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006, en donde se reconozca los efectos de la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la presentación de la declaración complementaria de la controlada [REDACTED] (énfasis y subrayado añadido)
...

Del estudio a los argumentos manifestados por la contribuyente en su escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, en relación a las observaciones dadas a conocer en el oficio 900-05-03-2012-69836 del 17 de diciembre de 2012, respecto a que [REDACTED] antes [REDACTED] se conoció que omitió reconocer en el resultado fiscal consolidado la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio de 2006 y como consecuencia omitió un impuesto sobre la renta consolidado; por lo que de la revisión a la información proporcionada por esa contribuyente y por el Contador Público Dictaminador, en el transcurso de la revisión y la que obra en el expediente administrativo abierto en esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a nombre de esa contribuyente, y que se hace referencia en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad determina que la observación no fue desvirtuada por la contribuyente, por las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a su argumento citado en la hoja 2 del mencionado escrito del 1 de febrero (sic) de 2013, recibido el día 31 de enero de 2013, a través de la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 130003603, mismos que



ya fueron transcritos anteriormente en la página 49 del presente oficio, y en los que medularmente se reconoce el L.A.E. [redacted] en su carácter de Representante Legal de la contribuyente [redacted] antes [redacted] la falta de la presentación de la declaración anual complementaria del impuesto sobre la renta consolidada del ejercicio en revisión, en la que reconozca en su resultado fiscal consolidado, la modificación a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [redacted] en la participación consolidable, y que en su respuesta al oficio de observaciones antes citado, señala que dicha declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio en revisión "... se encuentra en proceso de la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006, en donde reconozca los efectos de la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la presentación de la declaración complementaria de la controlada [redacted] lo cierto es que [redacted] antes [redacted] a la fecha del presente oficio, no ha presentado la citada declaración.

Ahora bien, en virtud a todo lo anterior, como resultado de la revisión efectuada, esta administración determina que [redacted] actualmente [redacted] en su carácter de sociedad controladora, omitió reconocer en el resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [redacted] del ejercicio 2006 de \$163'473,88 a \$167'323,432, manifestada en la declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010, toda vez que dicha sociedad disminuyó el monto manifestado en el renglón de la misma, denominado deducciones autorizadas.- gastos generales, en cantidad de \$3'849,547.

Lo anterior, considerando que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria del Impuesto sobre la Renta Consolidado, reconociendo el efecto en la consolidación por la determinación y modificación efectuada por esta autoridad a la utilidad fiscal de su sociedad controlada [redacted] como resultado al inicio de facultades de comprobación, modificando la utilidad fiscal consolidada del ejercicio, y en consecuencia omitió un impuesto sobre la renta consolidado para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a), tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 y 72, primer párrafo, fracción III de la Ley en comento vigente en 2010, mismos que disponen, lo siguiente:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

"Artículo 68.- La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

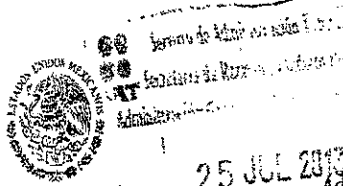
EXPEDIENTE No.

12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 897 -

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente.

Oficio: 900-05-2013-48229

Exp.: [REDACTED]

a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

[...]

Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades controladoras, será del 100%.

[...]"

(Énfasis y subrayado añadido.)

"Artículo 72. La sociedad controladora que ejerza la opción de consolidar a que se refiere el artículo 64 de esta Ley, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la misma, tendrá las siguientes:

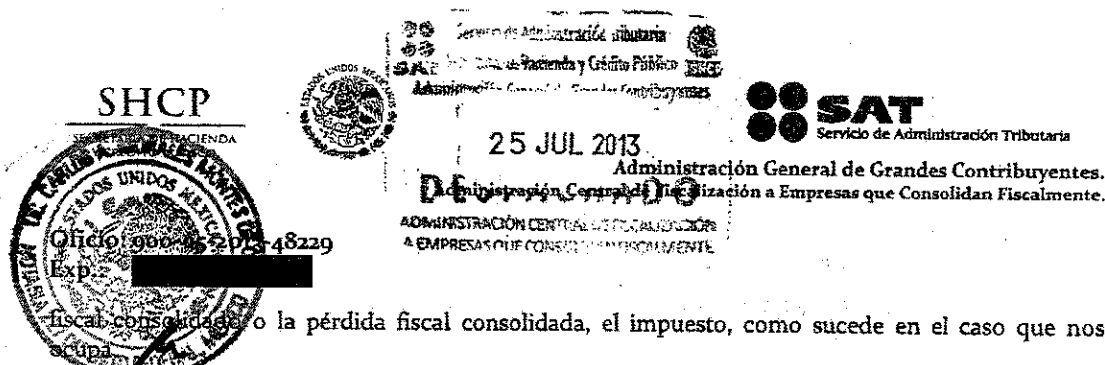
III. En el caso de que alguna o algunas de las sociedades controladas presenten declaración complementaria con el fin de subsanar errores u omisiones, así como cuando en el ejercicio de sus facultades las autoridades fiscales modifiquen la utilidad o la pérdida fiscal de una o más sociedades controladas y con ello se modifique el resultado fiscal consolidado, la pérdida fiscal consolidada o el impuesto acreditado manifestados, y se derive un impuesto a cargo, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que ocurra este hecho, la sociedad controladora presentará declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar. Cuando no se derive impuesto a cargo, la declaración complementaria de consolidación se presentará a más tardar dentro de los dos meses siguientes a aquél en que ocurra la primera modificación.

Si en la declaración complementaria de consolidación resulta diferencia a cargo, la sociedad controladora deberá enterarla."

(Énfasis y subrayado añadido.)

Como se observa, el artículo 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) y párrafo tercero de la mencionada fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio que se revisa, dispone que la sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada, sumará las utilidades fiscales del ejercicio de las sociedades controladas en la participación consolidable.

Asimismo, se puede apreciar la obligación a que se encuentra constreñida esa sociedad controladora, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72, primer párrafo, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente tanto en 2006 como en 2010, de presentar declaración anual complementaria para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado, cuando alguna de sus sociedades controladas presenten una declaración complementaria a fin de subsanar errores u omisiones, así como cuando en el ejercicio de sus facultades las Autoridades Fiscales modifiquen la utilidad o la pérdida fiscal de una o varias sociedades controladas y con ello modifiquen el resultado



Por lo antes expuesto, esta Administración determina una diferencia en cantidad de \$3'849,547.14, derivada de que [REDACTED] actualmente [REDACTED] omitió en la determinación del resultado fiscal consolidado incluir la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada [REDACTED] del ejercicio 2006 de \$163'473,885, a \$167'323,432, manifestada en declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010, toda vez que dicha sociedad disminuyó en el renglón deducciones autorizadas.- gastos generales, en cantidad de \$3'849,547, lo anterior, considerando que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que ocurra este hecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión y 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, ordenamiento jurídico vigente en el año en que se modificó la utilidad fiscal de su sociedad controlada y en el cual nace la obligación de esa sociedad controladora de modificar el resultado fiscal consolidado.

Por lo anterior, la observación anterior así como las señaladas en las páginas de la 15 a la 40 y de la 52 a la 76, modifican la utilidad fiscal consolidada y el resultado fiscal consolidado del ejercicio fiscal de 2006 declarado por [REDACTED] actualmente [REDACTED] como se señaló en las páginas 9 y 10 del presente oficio determinativo de crédito fiscal.

(...)"

De la digitalización que antecede se desprende esencialmente que la autoridad fiscal señaló que de la revisión practicada al dictamen fiscal, a la información y documentación proporcionada por la contribuyente revisada, así como a la que obra en los archivos de la administración demandada, la contribuyente ***** actualmente ***** hoy actora, en su carácter de sociedad controladora a la fecha del presente oficio, omitió adicionar en el resultado fiscal consolidado como consecuencia de la modificación a la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada ***** correspondiente al ejercicio 2006 de \$163'473,885.00 a \$167'323,432.00, manifestada en declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010, por lo que omitió un impuesto sobre la renta consolidado de conformidad a lo señalado en los artículos 68, primer párrafo, fracción I inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión y 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, ordenamiento jurídico vigente en el año en que se modificó la utilidad fiscal de su sociedad controlada y en el cual nace la obligación de esa sociedad controladora de modificar el resultado fiscal consolidado.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 899 -

Asimismo, que derivado del ejercicio de facultades de comprobación a la sociedad controlada ***** por el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, mediante escrito de fecha 16 de julio de 2010, recibido el 27 de julio de 2010 a través de la Oficialía de Partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 12202, dicha controlada, anexó fotocopia de la declaración del ejercicio por corrección fiscal, presentada a través de medios electrónicos en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria el 14 de julio de 2010 con número de operación 194BE y con folio de recepción 43113360, en la que manifestó una disminución de la subcuenta de Fletes, incluida en el concepto de Varios de la cuenta de Gastos Generales, la cantidad de \$3'849,547.00, la cual se refleja en el renglón de deducciones autorizadas, disminuidas de \$351'309,183.00 a \$347'459,636.00 en la declaración complementaria antes citada.

Por lo que concluye la autoridad administrativa que la sociedad controladora ***** omitió reflejar en el resultado fiscal consolidado del ejercicio 2006, la modificación de la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada ***** pues consideró que la sociedad controladora tiene la obligación de presentar declaración complementaria de consolidación, agrupando las modificaciones a que haya lugar, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que ocurra este hecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión y 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, ordenamiento jurídico vigente en el año en que se modificó la utilidad fiscal de su sociedad controlada y en el cual nace la obligación de esa sociedad controladora de modificar el resultado fiscal consolidado.

En ese sentido, resulta infundado el argumento de la actora, respecto a que la resolución recurrida, le causa inseguridad jurídica al no saber con certeza conforme a qué disposición fundan la supuesta omisión de presentar la declaración complementaria, ya que contrario a sus afirmaciones, la autoridad demandada citó los artículos 68, primer párrafo, fracción I, inciso

a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión y 72, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, para sustentar su determinación, tal y como se advierte de la digitalización que antecede.

Ahora, el hecho de que la autoridad haya señalado que fundó y motivó la resolución recurrida en términos del artículo 72, fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2010, y no así en la vigente en 2006, no debe perderse de vista que las normas de procedimiento son disposiciones jurídicas a través de las cuales se hace efectivo el ejercicio de los derechos y de las facultades, así como el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las partes dentro del procedimiento administrativo que norman las diversas relaciones jurídicas que pueden existir entre ellas.

Así, las normas de procedimiento constituyen reglas de actuación o series de operaciones y trámites que deben seguirse para obtener el reconocimiento de un derecho o el cumplimiento de una obligación, o en el caso de las autoridades, reglas que norman el ejercicio de sus facultades, es decir, son preceptos de carácter instrumental que tienen por objeto garantizar la eficacia de las normas sustantivas.

Siendo, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° del Código Fiscal de la Federación las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares son de aplicación estricta, y las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, por tanto, si la obligación de presentar declaración por la empresa ***** ** ***** ***** **** ** ***** se causó el 14 de julio de 2010, y el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prevé el procedimiento de cómo y en qué tiempo debe llevarse a cabo la presentación de la declaración complementaria correspondiente, por tanto, es evidente que le aplica la norma vigente en 2010, por ser la disposición jurídica a través de la cual se hace efectivo el cumplimiento de las obligaciones.

Acorde a lo antes señalado, resulta claro que la parte actora, tal y como lo sostiene la autoridad demandada, omitió adicionar en el resultado fiscal consolidado como consecuencia de la modificación a la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada ***** ** ***** ***** **** ** ***** correspondiente al ejercicio 2006 de \$163'473,885.00 a \$167'323,432.00,



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 901 -

manifestada en declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010, en la cual se declaró la siguiente información:

Declaración del Ejercicio Personas Morales
CONTRIBUYENTE :
PERIODO : 1/2006 - 12/2006
FECHA DE PRESENTACION : miércoles, 14 de julio de 2010
TIPO DE DECLARACION : Corrección fiscal
A.L. LLAVE DE LA DECLARACION : 19080-20283045

16
0981

PAG CLAVE	DESCRIPCION	VALOR
1	1 Rfc del contribuyente	
2	2 Tipo de contribuyente	MORAL
3	3 Entidad receptora	19080-Internet SAT 19080
4	4 Llave detalle	20283045
5	5 Llave movimiento	19080-20283045
6	6 Numero de operacion	43113360
7	7 Materia	21-Declaracion del ejercicio
8	8 Medio de recepcion	3-Internet
9	9 Fecha de presentacion	14/07/2010
10	10 Hora de presentacion	19:25
11	11 Fecha de recaudacion	14/07/2010
12	12 Fecha de registro	14/07/2010 07:43:00 p.m.
13	13 Periodo	35-Enero-Diciembre - Del Ejercicio
14	14 Ejercicio	2006
15	15 Tipo de pago	3-Correccion fiscal
16	206005 RFC Imputado	
17	206011 Denominacion o razon social	
18	205002 Tipo de declaracion	\$ 3.00
19	205004 Fecha de presentacion de la declaracion inmediata anterior	
20	900000 Cantidad a pagar	\$ -
21	111001 Total de Ingresos acumulables	\$ 514,783,068.00
22	111002 Total de deducciones autorizadas y deducción inmediata de inversión	\$ 347,459,636.00
23	111003 Pérdidas fiscales del ejercicio	\$ 167,323,432.00
24	111004 Pérdida fiscal del ejercicio	\$ -
25	111005 Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio	\$ -
26	111006 Resultado fiscal	\$ -
27	111009 Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio	\$ -
28	111010 Reducciones del ISR	\$ -
29	111012 Impuesto del ejercicio	\$ -
30	111860 Estimulo por proyectos en investigacion y desarrollo tecnologico, re	
31	111013 Pagos provisionales efectuados	\$ 26,007.00
32	111016 Impuesto retenido al contribuyente	
33	111015 Impuesto acreditable pagado en el extranjero	
34	111017 Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos	
35	111011 Impuesto a cargo correspondiente a la consolidacion fiscal	
36	111018 Diferencia a cargo	\$ -
37	111019 Diferencia a favor	\$ 26,007.00
38	901730 Impuesto a la venta de bienes y servicios sujeta a crédito	
39	111058 Impuesto por inversiones en territorios con regimenes fiscales prefe	
40	111023 ISR pagado en exceso aplicado contra el impac	\$ 2.00
41	111021 Impuesto a cargo del ejercicio	
42	111024 Saldo a favor del ejercicio	
43	121026 Si opta por aplicar el articulo 5-a de la Lmpac, indique el ejercicio al	\$ 2,004.00
44	121001 Promedio de activos financieros	\$ 136,640.00
45	121002 Promedio de inventarios	
46	121003 Promedio de terrenos	
47	121004 Promedio de activos fijos y diferidos	\$ 38,926.00
48	121006 Promedio de las deudas	
49	121007 Valor del activo en el ejercicio	\$ 175,586.00
50	121008 Impuesto determinado	
51	121009 Impuesto determinado actualizado	\$ 3,402.00
52	121010 Reducciones del impac	
53	121012 Impuesto causado del ejercicio	\$ 3,402.00
54	121013 ISR acreditado del ejercicio	
55	121014 ISR acreditado de ejercicios anteriores	
56	121015 Otros acreditamientos	
57	121860 Estimulo por proyectos en investigacion y desarrollo tecnologico, re	

167,323,432
123,473,085 7/10
3,849,347 (A)
7.00-C 2/6
3-1-1

(A) Este importe representa el
importe que debe de pagar
cada año en su resultado
Fiscal Consolidado, con base en
la presentacion de la declaracion
anual de su actividad.

58	121017	Pagos provisionales efectivamente pagados sin acreditamiento del IS	
59	121011	Impuesto correspondiente a la consolidación fiscal a cargo	\$ 3,400.00
60	121098	Impuesto correspondiente a la consolidación fiscal a favor	
61	121016	Diferencia a cargo	\$ 2.00
62	121019	Saldo a favor del ejercicio	
63	111923	ISR pagado en exceso aplicado contra el impac	\$ 2.00
64	901731	Impuesto a la venta de bienes y servicios suuntuarios acreditable	\$ -
65	121021	Impuesto a cargo del ejercicio	\$ -
66	131051	Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 15%	
67	131052	Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 10%	
68	131053	Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% exportación	
69	131054	Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros	
70	131056	Valor de los actos o actividades por los que no se esta obligado al pa	
71	131058	Impuesto al valor agregado del ejercicio	
72	131059	Devoluciones de saldos a favor solicitadas en el ejercicio	
73	131019	Devolución inmediata del ejercicio obtenida	
74	131020	Compensaciones de saldos a favor del ejercicio	
75	131060	Suma 1	
76	131064	Impuesto acreditable del ejercicio	
77	131065	Pagos provisionales efectuados	
78	131077	Pagos en aduanas	
79	131078	Pago efectuado con motivo del ajuste del impuesto correspondiente	
80	131086	Impuesto retenido al contribuyente	
81	131087	Saldo a favor del ejercicio anterior por el que no se solictis devolucisi	
82	131088	Suma 2	
83	131069	Diferencia a cargo	
84	131070	Saldo a favor del ejercicio	
85	901732	Impuesto a la venta de bienes y servicios suuntuarios acreditable	
86	131081	Impuesto a cargo del ejercicio	
87	131093	IVA trasladado al contribuyente efectivamente pagado	
88	131084	IVA efectivamente pagado por el contribuyente en la importación de	
89	131085	IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO EFECTI	
90	131086	Suma	
91	131087	IVA pagado en adquisiciones, identificado con enajenaciones y prest	
92	131088	IVA pagado en adquisiciones, identificado con enajenaciones y prest	
93	131089	IVA identificado con la exportación	
94	131090	IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO EFECTIVAMENTE PAGADO (Q	
95	131091	Total de IVA identificado	
96	131092	IVA no identificado	
97	131093	Factor de prorrateo anual parte entera	
98	131094	Factor de prorrateo anual parte decimal	
99	131095	IVA acreditable obtenido de aplicar el factor de prorrateo	
100	131096	Total de IVA acreditable del ejercicio	
101	178001	Total de erogaciones realizadas por la prestación de un servicio pers	
102	178002	Impuesto sustitutivo del crédito al salario del ejercicio	
103	178003	Pagos provisionales efectuados	
104	178004	Impuesto a cargo del ejercicio	
105	178005	Saldo a favor del ejercicio	
106	177001	Valor de los actos o actividades gravados	
107	177006	Valor de los actos o actividades por los que no se esta obligado al pa	
108	177002	Impuesto a la venta de bienes y servicios suuntuarios del ejercicio	
109	177003	Pagos provisionales efectuados	
110	177004	Impuesto a cargo del ejercicio	
111	177005	Saldo a favor del ejercicio	
112	136000	Importaciones de bienes o servicios - grabados	
113	136001	Importaciones de bienes o servicios - exentos	
114	136003	Enajenaciones de activos fijos, gastos y cargos diferidos - grabados	
115	136004	Enajenaciones de activos fijos, gastos y cargos diferidos - exentos	
116	136006	Dividendos - grabados	
117	136007	Dividendos - exentos	
118	136009	Enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pendiente	
119	136010	Enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pendiente	
120	136012	Enajenaciones de moneda nacional y extranjera, piezas de oro o de	
121	136013	Enajenaciones de moneda nacional y extranjera, piezas de oro o de	
122	136015	Intereses y ganancia cambiaria - grabados	
123	136016	Intereses y ganancia cambiaria - exentos	
124	136018	Exportaciones de bienes tangibles y servicios de maquila de exportar	

0982



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 903 -

3/6

0983

125	136021	Enajenaciones a través de arrendamiento financiero - grabados	
126	136022	Enajenaciones a través de arrendamiento financiero - exentos	
127	136024	Enajenación de bienes adquiridos por adquisición en pago o adjudicación	
128	136025	Enajenación de bienes adquiridos por adquisición en pago o adjudicación	
129	136027	Operaciones financieras derivadas - grabados	
130	136028	Operaciones financieras derivadas	
131	201001	PTU generada durante el ejercicio al que corresponde esta declaración	
132	261002	PTU no cobrada en el ejercicio anterior	
133	118222	Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar	\$ 200,213,719.00
134	118820	Saldo promedio anual de los créditos	\$ 93,586,240.00
135	118821	Saldo promedio anual de las deudas	\$ 25,776,434.00
136	118211	Coefficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente parte entera	\$ -
137	118212	Coefficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente parte decimal	\$ 3,175.00
138	118566	Porcentaje de participación consolidable parte entera	\$ -
139	118567	Porcentaje de participación consolidable parte decimal	\$ 9,994.00
140	118224	ISR causado en exceso del impacto en los 3 ejercicios anteriores, pendiente de amortizar	\$ -
141	118220	Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta	\$ -
142	118219	Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal reinvertida	
143	118221	Saldo actualizado de la cuenta de capital de aportación	\$ 603,810,943.00
144	118216	En caso de ser controlada indique el RFC de la controladora	
145	111704	Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta (cufin)	
146	111703	Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida (cufinre)	
147	111705	No provenientes de la cufin ni cufinre	
148	206000	Datos del representante legal - registro federal de contribuyentes	
149	206001	Datos del representante legal - apellido paterno, materno y nombres	
150	113023	Efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito	\$ 15,909,411.00
151	113025	Inversiones en valores (excepto acciones)	\$ 3,480,742.00
152	113027	Cuentas y documentos por cobrar	\$ 317,782,150.00
153	113029	Contribuciones a favor	\$ 42,502.00
154	113033	Inventarios	
155	113035	Otros activos circulantes	
156	113036	Inversiones en acciones	
157	113038	Terrenos	
158	113039	Construcciones	
159	113040	Maquinaria y equipo	
160	113041	Mobiliario y equipo de oficina	\$ 503,588.00
161	113042	Equipo de transporte	\$ 19,638,862.00
162	113043	Otros activos fijos	\$ 1,200,298.00
163	113044	Depreciación acumulada	\$ 4,062,090.00
164	113045	Cargos y gastos diferidos	\$ 48,550,521.00
165	113046	Amortización acumulada	\$ 391.00
166	113047	Suma activo	\$ 403,055,593.00
167	114001	Cuentas y documentos por pagar	
168	114005	Contribuciones por pagar	\$ 24,846,885.00
169	114006	Otros pasivos	\$ 244,814,044.00
170	114007	Suma pasivo	\$ 273,608,536.00
171	115001	Capital social proveniente de aportaciones	\$ 503,845.00
172	115002	Capital social proveniente de capitalización	
173	115003	Reservas	
174	115004	Otras cuentas de capital	
175	115005	Aportaciones para futuros aumentos de capital	
176	115006	Utilidades acumuladas	\$ 147,598,267.00
177	118001	Utilidad del ejercicio	\$ 83,181,547.00
178	115007	Pérdidas acumuladas	\$ 103,583,857.00
179	118002	Pérdida del ejercicio	
180	115008	Insuficiencia o exceso en la actualización del capital	
181	115009	Actualización del capital contable	\$ 1,895,255.00
182	115010	Suma capital contable	\$ 129,447,057.00
183	118003	Suma pasivo más capital contable	\$ 403,055,593.00
184	117001	Sueldos y salarios	
185	117067	Honorarios pagados a personas físicas	\$ 15,289,524.00
186	117075	Regalías y asistencia técnica	
187	117070	Donativos otorgados	
188	117069	Uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas	
189	117074	Fletes y acarreos pagados a personas físicas	
190	117073	Contribuciones pagadas, excepto ISR, impacto e IVA	
191	117071	Seguros y fianzas	\$ 1,254,339.00

9/6
0984

192	117072	Pérdida por créditos incobrables	
193	117076	Viáticos y gastos de viaje	
194	117285	Combustible y lubricantes	
195	117286	Credito al salario no disminuido de contribuciones	
196	117287	Impuesto sustitutivo del credito al salario, efectivamente pagado	
197	117065	Aportaciones SAR, infonavit y jubilaciones por vejez	
198	117066	Cuotas al imss	
199	113001	Construcciones - deducción en el ejercicio	
200	113002	Construcciones - deducción inmediata en el ejercicio	
201	113003	Construcciones - adquisiciones durante el ejercicio	
202	113004	Maquinaria y equipo - deducción en el ejercicio	
203	113005	Maquinaria y equipo - deducción inmediata en el ejercicio	
204	113006	Maquinaria y equipo - adquisiciones durante el ejercicio	
205	113007	Mobiliario y equipo de oficina - deducción en el ejercicio	\$ 39,575.00
206	113008	Mobiliario y equipo de oficina - deducción inmediata en el ejercicio	
207	113009	Mobiliario y equipo de oficina - adquisiciones durante el ejercicio	\$ 217,171.00
208	113010	Equipo de transporte automotrices - deducción en el ejercicio	\$ 168,778.00
209	113011	Equipo de transporte automotrices - adquisiciones durante el ejercicio	\$ 1,194,551.00
210	113012	Equipo de transporte otros - deducción en el ejercicio	\$ 3,642,375.00
211	113013	Equipo de transporte otros - deducción inmediata en el ejercicio	
212	113014	Equipo de transporte otros - adquisiciones durante el ejercicio	\$ 7,093,853.00
213	113015	Otras inversiones en activos fijos - deducción en el ejercicio	\$ 312,320.00
214	113016	Otras inversiones en activos fijos - deducción inmediata en el ejercicio	
215	113017	Otras inversiones en activos fijos - adquisiciones durante el ejercicio	\$ 275,169.00
216	113018	Gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos - d	\$ 96.00
217	113019	Gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos - a	\$ 476,633.00
218	113020	Total - deducción en el ejercicio	\$ 4,163,144.00
219	113021	Total - deducción inmediata en el ejercicio	\$ -
220	113022	Total - adquisiciones durante el ejercicio	\$ 9,257,377.00
221	116008	Ventas y/o servicios nacionales	
222	116011	Ventas y/o servicios extranjeros	
223	117014	Devoluciones, descuentos y bonificaciones	
224	116014	Ingresos netos	\$ -
225	117015	Inventario inicial	
226	117018	Compras netas	
227	117025	Inventario final	
228	117026	Costo de mercancías	\$ -
229	117029	Mano de obra	
230	117175	Maquilas	
231	117032	Gastos indirectos de fabricación	
232	117033	Costo de ventas y/o servicios	\$ -
233	118004	Utilidad o pérdida bruta	\$ 431,101,097.00
234	117036	Gastos de operación	
235	118005	Utilidad o pérdida de operación	\$ 81,158,345.00
236	116017	Intereses devengados a favor y ganancia cambiaria	
237	117039	Intereses devengados a cargo y pérdida cambiaria	
238	118006	Resultado por posición monetaria	
239	118007	Otras operaciones financieras	
240	117041	Costo integral de financiamiento	\$ 1,579,299.00
241	116019	Ingresos por partidas discontinuas y extraordinarias	
242	117042	Gastos por partidas discontinuas y extraordinarias	
243	118009	Utilidad o pérdida antes de impuestos	\$ 82,737,644.00
244	117043	ISR, impac y PTU	
245	118010	Utilidad o pérdida en participación subsidiaria	
246	118011	Efectos de reexpresión excepto resultado por posición monetaria	\$ 443,903.00
247	118012	Utilidad o pérdida neta	\$ 83,181,547.00
248	119112	Utilidad o pérdida neta	\$ 83,181,547.00
249	119111	Efectos de reexpresión	\$ 443,903.00
250	119108	Resultado por posición monetaria	\$ 1,575,410.00
251	118013	Utilidad o pérdida neta histórica	\$ 84,313,054.00
252	116020	Ingresos fiscales no contables	\$ 244,517,124.00
253	116021	Ajuste anual por inflación acumulable	
254	116023	Anticipos de clientes	\$ 244,504,512.00
255	116022	Intereses moratorios efectivamente cobrados	
256	116024	Ganancia en la enajenación de acciones o por reembolso de capital	
257	116025	Ganancia en la enajenación de terrenos y activo fijo	\$ 12,612.00
258	116027	Otros ingresos fiscales no contables	



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 905 -

259	117044	Deducciones contables no fiscales	\$	9,806,131.00
260	115033	Costo de ventas	\$	-
261	117045	Depreciación y amortización contable	\$	4,180,620.00
262	117047	Gastos que no reúnen requisitos fiscales	\$	3,867,384.00
263	119043	ISR, Impac y PTU		
264	117048	Pérdida contable en enajenación de acciones		
265	117049	Pérdida contable en enajenación de activo fijo	\$	1,778,127.00
266	117050	Pérdida en participación subsidiaria		
267	119039	Intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratoria		
268	117051	Otras deducciones contables no fiscales		
269	117052	Deducciones fiscales no contables	\$	7,322,648.00
270	117053	Ajuste anual por inflación deducible	\$	2,746,298.00
271	117055	Adquisiciones netas de mercancías, materias primas, productos sem		
272	117056	Mano de obra directa		
273	119175	Maquillas		
274	117057	Gastos indirectos de fabricación		
275	117058	Deducción de inversiones	\$	4,163,144.00
276	119021	Estímulo fiscal por deducción inmediata de inversiones	\$	-
277	117060	Pérdida fiscal en enajenación de acciones		
278	117061	Pérdida fiscal en enajenación de terrenos y activo fijo	\$	413,206.00
279	117054	Intereses moratorios efectivamente pagados		
280	117062	Otras deducciones fiscales no contables		
281	116028	Ingresos contables no fiscales	\$	163,990,229.00
282	119117	Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no		
283	117059	Anticipos de clientes de ejercicios anteriores	\$	163,000,000.00
284	116029	Salidos a favor de impuestos y su actualización		
285	116030	Utilidad contable en enajenación de activo fijo	\$	990,220.00
286	116031	Utilidad contable en enajenación de acciones		
287	116032	Utilidad en participación subsidiaria		
288	116033	Otros ingresos contables no fiscales	\$	9.00
289	118014	Utilidad o Pérdida Fiscal	\$	167,323,432.00
290	207000	A. Datos de Identificación - Clave Única de Registro de Población de		
291	206197	A. Datos de Identificación - Indique si opta por Dictaminar sus Estados	\$	-
292	206196	A. Datos de Identificación - Indique si se Trata de la Última Declaraci	\$	2.00
293	113875	Deducción en el Ejercicio - Maquinaria y Equipo para la Generación		
294	113877	Deducción en el Ejercicio - Adaptación a Instalaciones para Personal		
295	113879	Deducción en el Ejercicio - Terrenos (Costo de Adquisición)		
296	113876	Adquisiciones Durante el Ejercicio - Maquinaria y Equipo para la Gen		
297	113878	Adquisiciones Durante el Ejercicio - Adaptación a Instalaciones para		
298	117290	F. Estado de Resultados - Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones		
299	117291	F. Estado de Resultados - Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones		
300	117292	F. Estado de Resultados - Compras Netas Nacionales		
301	117293	F. Estado de Resultados - Compras Netas de Importación		
302	117920	Datos del Inventario Base - Indique el Método para Determinar el Val	\$	-
303	117921	Datos Informativos - Monto del Inventario Inicial		
304	117922	Datos Informativos - Monto de la Mano de Obra y los Gastos Indirect		
305	117923	Opción de Acumulación de Inventarios - Indique el Método de Valuac	\$	-
306	117924	Opción de Acumulación de Inventarios - Inventario Base al 31 de Dic		
307	117925	Opción de Acumulación de Inventarios - Saldo Pendiente por Deduci		
308	117926	Opción de Acumulación de Inventarios - Pérdidas Fiscales Pendiente		
309	117927	Opción de Acumulación de Inventarios - Diferencia de la Comparaci		
310	117928	Opción de Acumulación de Inventarios - Valor del Inventario Acumul		
311	117929	Opción de Acumulación de Inventarios - Porcentaje de Acumulación		
312	117930	Opción de Acumulación de Inventarios - Inventario Acumulable del E		
313	117931	Sistemas y Bases de Valuación - Indique la Opción para Determinar	\$	-
314	117932	Sistemas y Bases de Valuación - Indique la Base de Costos Utilizada	\$	-
315	117933	Métodos de Valuación - Indique el Método de Valuación Utilizado	\$	-
316	116400	Ingresos Fiscales no Contables - Inventario Acumulable		
317	116401	Deducciones Fiscales no Contables - Costo de lo Vendido Fiscal		
318	117288	I. Datos de Algunas Deducciones Autorizadas - Aportaciones para Fe		
319	117289	I. Datos de Algunas Deducciones Autorizadas - Consumo en Restau		
320	111098	K. Determinación del Impuesto Sobre la Renta - Utilidad o Pérdida Fi	\$	167,323,432.00
321	111099	K. Determinación del Impuesto Sobre la Renta - Ptu Pagada en el Ej		
322	111890	K. Determinación del Impuesto Sobre la Renta - Impuesto Sobre Ingi		
323	121050	L. Determinación del Impuesto al Activo - Promedio de las Deudas C		
324	121051	L. Determinación del Impuesto al Activo - Promedio de las Deudas C		
325	121052	L. Determinación del Impuesto al Activo - Promedio de las Deudas C		

9/16

0985

326	206199	Datos de Identificación - Indique si esta obligado a dictaminar sus est	\$	1.00
327	117979	Datos Informativos del Costo de Venta Fiscal - Inventario Reducido		
328	117980	Datos Informativos del costo de venta fiscal (para 2005 y po) - Costo		
329	117981	Costo Superior al Precio de Mercado o al de Reposición - Costo Sup		
330	117982	Costo Superior al Precio de Mercado o al de Reposición - Tipo de Pr	\$	-
331	111995	Determinación del Impuesto Sobre la Renta - Otros Estímulos		
332	209051	Numero de operacion de la Declaracion Inmediata Anterior en caso c		
333	209052	No Provenientes de la CUFIN ni CUFINRE en Acciones		
334	209053	Montio del Impuesto Pagado que no Proviene de la CUFIN ni CUFIN		
335	209054	Montio del Impuesto Pagado de las Utilidades Provenientes de la CU		
336	119275	Deducción en el Ejercicio - Equipo de Computo		
337	119276	Deducciones en el Ejercicio - Terrenos (Costo de Adquisición)		
338	119278	Deducción Inmediata en el Ejercicio - Equipo de Computo		
339	119277	Adquisiciones Durante el Ejercicio - Equipo de Computo		
340	209055	Adquisiciones Durante el Ejercicio - Terrenos (Costo de Adquisición)		
341	209064	Total del estímulo por Proyectos en Investigación y Desarrollo Tecno		
342	209065	Total del estímulo por Proyectos de Inversión en la Producción Ciner		
343	119278	Ventas y/o servicios Nacionales (Partes no Relacionadas)	\$	431,101,097.00
344	119279	Ventas y/o servicios Nacionales (Total)	\$	431,101,097.00
345	119280	Ventas y/o servicios Extranjeros (Partes no Relacionadas)		
346	119281	Ventas y/o servicios Extranjeros (Total)	\$	-
347	119282	Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones sobre Ventas Nacionales		
348	119283	Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones sobre Ventas Nacionales	\$	-
349	119284	Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones sobre Ventas al Extranje		
350	119285	Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones sobre Ventas al Extranje	\$	-
351	119286	Ingresos Netos (Partes no Relacionadas)	\$	431,101,097.00
352	119287	Ingresos Netos (Total)	\$	431,101,097.00
353	119290	Compras Netas Nacionales (Partes no Relacionadas)		
354	119291	Compras Netas Nacionales (Total)	\$	-
355	119292	Compras Netas de Importación (Partes no Relacionadas)		
356	119293	Compras Netas de Importación (Total)	\$	-
357	119298	Mano de obra (Partes no Relacionadas)		
358	119299	Mano de obra (Total)	\$	-
359	119300	Maquilas (Partes no Relacionadas)		
360	119301	Maquilas (Total)	\$	-
361	119901	Gastos Indirectos de Fabricación (Partes no Relacionadas)		
362	119902	Gastos Indirectos de Fabricación (Total)	\$	-
363	119907	Pérdida Bruta (Total)		
364	119910	Gastos de operación (Partes no Relacionadas)	\$	349,942,752.00
365	119911	Gastos de operación (Total)	\$	349,942,752.00
366	119914	Pérdida de operación (Total)		
367	119917	Intereses Devengados a Favor Nacionales (Partes no Relacionadas)	\$	3,155,076.00
368	119918	Intereses Devengados a Favor Nacionales (Total)	\$	3,155,076.00
369	119919	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Partes Relacionadas)		
370	119920	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Partes no Relacionad		
371	119921	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Total)	\$	-
372	119922	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Partes Relacionadas)		
373	119923	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Partes no Relacionadas)		
374	119924	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Total)	\$	-
375	119925	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Partes Relacionadas)		
376	119926	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Partes no Relacionadas)		
377	119927	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Total)	\$	-
378	209067	Ganancia Cambiaria (Partes Relacionadas)		
379	209068	Ganancia Cambiaria (Partes no Relacionadas)		
380	119928	Ganancia Cambiaria (Total)	\$	-
381	119931	Intereses Devengados a Cargo Nacionales (Partes no Relacionadas)	\$	367.00
382	119932	Intereses Devengados a Cargo Nacionales (Total)	\$	367.00
383	119933	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Partes Relacionadas)		
384	119934	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Partes no Relacionad		
385	119935	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Total)	\$	-
386	119936	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Partes Relacionadas)		
387	119937	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Partes no Relacionadas)		
388	119938	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Total)	\$	-
389	119939	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Partes Relacionadas)		
390	119940	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Partes no Relacionadas)		
391	119941	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Total)	\$	-
392	119942	Pérdida Cambiaria (Partes Relacionadas)		

9/16
0986



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 907 -

393	209031	Perdida Cambiaria (Partes no Relacionadas)	
394	209032	Perdida Cambiaria (Total)	\$ -
395	119945	Resultado por Posicion Monetaria Favorable (Partes no Relacionadas)	
396	119946	Resultado por Posicion Monetaria Favorable (Total)	
397	119947	Resultado por Posicion Monetaria Desfavorable (Partes Relacionadas)	
398	119948	Resultado por Posicion Monetaria Desfavorable (Partes no Relacionadas)	\$ 1,575,410.00
399	119949	Resultado por Posicion Monetaria Desfavorable (Total)	\$ 1,575,410.00
400	119950	Otras operaciones Financieras Nacionales (Partes no Relacionadas)	
401	119951	Otras operaciones Financieras Nacionales (Total)	\$ -
402	119981	Otras operaciones Financieras Extranjeras (Partes Relacionadas)	
403	119982	Otras operaciones Financieras Extranjeras (Partes no Relacionadas)	
404	119984	Otras operaciones Financieras Extranjeras (Total)	\$ -
405	119929	Otras operaciones Financieras (Total)	\$ -
406	119954	Otros Gastos Nacionales (Total)	
407	119930	Otros Gastos Extranjeros (Total)	
408	119943	Otros Gastos (Total)	\$ -
409	119957	Otros Productos Nacionales	
410	119944	Otros Productos Extranjeros	
411	119995	Otros Productos (Total)	\$ -
412	119966	Perdida Antes de Impuestos	
413	209033	IETU	
414	119969	IMPAC	
415	119970	PTU	
416	119971	Perdida en Participacion subsidiaria	
417	119972	Efectos de Reexpresion Desfavorables Excepto Resultado por Posicion Monetaria	
418	119973	Perdida Neta	
419	209056	Perdida por operaciones Financieras Derivadas	
420	119974	Efectivo en Caja y Depositos en Instituciones de Credito del Extranjero	
421	119975	Inversiones en Valores con Instituciones Extranjeras (Excepto Acciones)	
422	119976	Cuentas y Documentos por Cobrar Nacionales (Partes no Relacionadas)	
423	119977	Cuentas y Documentos por Cobrar Nacionales (Total)	\$ 317,782,150.00
424	119978	Cuentas y Documentos por Cobrar del Extranjero (Partes Relacionadas)	
425	119979	Cuentas y Documentos por Cobrar del Extranjero (Partes no Relacionadas)	
426	119980	Cuentas y Documentos por Cobrar del Extranjero (Total)	\$ -
427	119983	Inversiones en Acciones del Extranjero	
428	119985	Inversiones en Acciones (Total)	\$ -

3/16
0987

De lo anterior se advierte en la parte de interés que, mediante la **Declaración por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010**, la sociedad controlada ***** ** ***** ***** **** ** ***** declaró lo siguiente:

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES, por la cantidad de **\$514'783,068.00**

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIÓN, la cantidad de **\$347'459,636.00.**

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO (2006), en cantidad de **\$167'323,432.00.**

En relación a lo anterior, cabe señalar que la sociedad controlada de referencia presentó se declaración anual normal el 23 de marzo de 2007, con la información siguiente:

Declaracion del Ejercicio Personas Morales

CONTRIBUYENTE :

PERIODO : 1/2006 - 12/2006

FECHA DE PRESENTACION : viernes, 23 de marzo de 2007

TIPO DE DECLARACION: Normal

A.L LLAVE DE LA DECLARACION: 19080-3961456

8/16

0988

PAI CLAVE	DESCRIPCION	VALOR
1	1 Rfo del contribuyente	
2	2 Tipo de contribuyente	MORAL
3	3 Entidad receptora	19080-Internet SAT 19080
4	4 Llave detalle	3961456
5	5 Llave movimiento	19080-3961456
6	6 N°mero de operacion	6339778
7	7 Materia	21-Declaracion del ejercicio
8	8 Medio de recepcion	3-Internet
9	9 Fecha de presentacion	23/03/2007
10	10 Hora de presentacion	13:21
11	11 Fecha de recaudacion	23/03/2007
12	12 Fecha de registro	23/03/2007 01:38:00 p.m.
13	13 Periodo	35-Enero-Diciembre - Del Ejercicio
14	14 Ejercicio	2006
15	15 Tipo de pago	1-Normal
16	206005 RFC Imputado	
17	206011 Denominacion o razon social	
18	205002 Tipo de declaracion	\$ 1.00
19	205004 Fecha de presentacion de la declaracion inmediata anterior	
20	900000 Cantidad a pagar	\$ -
21	111001 Total de ingresos acumulables	\$ 514,783,088.00
22	111002 Total de deducciones autorizadas y deduccin inmediata de ir	\$ 351,309,183.00
23	111003 Perdida fiscal del ejercicio	\$ 163,473,885.00
24	111004 Perdida fiscal del ejercicio	\$ 163,473,885.00
25	111005 Perdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el	\$ 163,473,885.00
26	111006 Resultado fiscal	\$ -
27	111009 Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio	\$ -
28	111010 Reducciones del ISR	\$ -
29	111012 Impuesto del ejercicio	\$ -
30	111860 Estimulo por proyectos en investigacion y desarrollo tecnol	
31	111013 Pagos provisionales efectuados	\$ 26,007.00
32	111016 Impuesto retenido al contribuyente	
33	111015 Impuesto acreditable pagado en el extranjero	
34	111017 Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos	
35	111011 Impuesto a cargo correspondiente a la consolidacion fiscal	
36	111018 Diferencia a cargo	
37	111019 Diferencia a favor	\$ 26,007.00
38	901730 Impuesto a la venta de bienes y servicios suñtarios acredit	
39	111058 Impuesto por inversiones en territorios con regimenes fiscal	
40	111023 ISR pagado en exceso aplicado contra el impac	\$ 2.00
41	111021 Impuesto a cargo del ejercicio	\$ -
42	111024 Saldo a favor del ejercicio	\$ 26,005.00
43	121026 Si opta por aplicar el articulo 5-a de la impac, indique el ejer	\$ 2,004.00
44	121001 Promedio de activos financieros	\$ 136,640.00
45	121002 Promedio de inventarios	
46	121003 Promedio de terrenos	
47	121004 Promedio de activos fijos y diferidos	\$ 38,928.00
48	121006 Promedio de las deudas	
49	121007 Valor del activo en el ejercicio	\$ 175,566.00
50	121008 Impuesto determinado	
51	121009 Impuesto determinado actualizado	\$ 3,402.00
52	121010 Reducciones del impac	
53	121012 Impuesto causado del ejercicio	\$ 3,402.00
54	121013 ISR acreditado del ejercicio	
55	121014 ISR acreditado de ejercicios anteriores	
56	121015 Otros acreditamientos	
57	121860 Estimulo por proyectos en investigacion y desarrollo tecnol	



ACTORA:

TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

58	121017	Pagos provisionales efectivamente pagados sin acreditamien	
59	121011	Impuesto correspondiente a la consolidación fiscal a cargo	\$ 3,400.00
60	121098	Impuesto correspondiente a la consolidación fiscal a favor	
61	121016	Diferencia a cargo	\$ 2.00
62	121019	Saldo a favor del ejercicio	
63	111923	ISR pagado en exceso aplicado contra el impac	\$ 2.00
64	901731	Impuesto a la venta de bienes y servicios suñuarios acreditat	\$ -
65	121021	Impuesto a cargo del ejercicio	\$ -
66	131051	Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 15%	
67	131052	Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 10%	
68	131053	Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% ex	
69	131054	Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otr	
70	131056	Valor de los actos o actividades por los que no se esta obligat	
71	131058	Impuesto al valor agregado del ejercicio	
72	131059	Devoluciones de saldos a favor solicitadas en el ejercicio	
73	131019	Devolucion inmediata del ejercicio obtenida	
74	131020	Compensaciones de saldos a favor del ejercicio	
75	131060	Suma 1	
76	131084	Impuesto acreditable del ejercicio	
77	131065	Pagos provisionales efectuados	
78	131077	Pagos en aduanas	
79	131078	Pago efectuado con motivo del ajuste del impuesto correspon	
80	131066	Impuesto retenido al contribuyente	
81	131067	Saldo a favor del ejercicio anterior por el que no se solictis de	
82	131068	Suma 2	
83	131069	Diferencia a cargo	
84	131070	Saldo a favor del ejercicio	
85	901732	Impuesto a la venta de bienes y servicios suñuarios acreditat	
86	131081	Impuesto a cargo del ejercicio	
87	131083	IVA trasladado al contribuyente efectivamente pagado	
88	131084	IVA efectivamente pagado por el contribuyente en la importac	
89	131085	IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO	
90	131086	Suma	
91	131087	IVA pagado en adquisiciones, identificado con enajenaciones	
92	131088	IVA pagado en adquisiciones, identificado con enajenaciones	
93	131089	IVA identificado con la exportación	
94	131090	IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO EFECTIVAMENTE PAGA	
95	131091	Total de IVA identificado	
96	131092	IVA no identificado	
97	131093	Factor de prorrateo anual parte entera	
98	131094	Factor de prorrateo anual parte decimal	
99	131095	IVA acreditable obtenido de aplicar el factor de prorrateo	
##	131096	Total de IVA acreditable del ejercicio	
##	178001	Total de erogaciones realizadas por la prestación de un servic	
##	178002	Impuesto sustitutivo del crédito al salario del ejercicio	
##	178003	Pagos provisionales efectuados	
##	178004	Impuesto a cargo del ejercicio	
##	178005	Saldo a favor del ejercicio	
##	177001	Valor de los actos o actividades gravados	
##	177006	Valor de los actos o actividades por los que no se esta obligat	
##	177002	Impuesto a la venta de bienes y servicios suñuarios del ejerc	
##	177003	Pagos provisionales efectuados	
##	177004	Impuesto a cargo del ejercicio	
##	177005	Saldo a favor del ejercicio	
##	136000	Importaciones de bienes o servicios - grabados	
##	136001	Importaciones de bienes o servicios - exentos	
##	136003	Enajenaciones de activos fijos, gastos y cargos diferidos - gra	
##	136004	Enajenaciones de activos fijos, gastos y cargos diferidos - ex	
##	136006	Dividendos - grabados	
##	136007	Dividendos - exentos	
##	136009	Enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pe	
##	136010	Enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pe	
##	136012	Enajenaciones de moneda nacional y extranjera, piezas de or	
##	136013	Enajenaciones de moneda nacional y extranjera, piezas de or	
##	136015	Intereses y ganancia cambiaria - grabados	
##	136016	Intereses y ganancia cambiaria - exentos	
##	136018	Exportaciones de bienes tangibles y servicios de maquila de e	

9/16
0989

10/16
9999

##	136021	Enajenaciones a travs de arrendamiento financiero - grabados	
##	136022	Enajenaciones a travs de arrendamiento financiero - exentos	
##	136024	Enajenacin de bienes adquiridos por dacin en pago o adjud	
##	136025	Enajenacin de bienes adquiridos por dacin en pago o adjud	
##	136027	Operaciones financieras derivadas - grabados	
##	136028	Operaciones financieras derivadas	
##	201001	PTU generada durante el ejercicio al que corresponde esta de	
##	201002	PTU no cobrada en el ejercicio anterior	
##	118222	Prdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amorti	\$ 204,063,266.00
##	118820	Saldo promedio anual de los crditos	\$ 93,586,240.00
##	118821	Saldo promedio anual de las deudas	\$ 25,776,434.00
##	118211	Coefficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente par	\$ -
##	118212	Coefficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente par	\$ 3,175.00
##	118566	Porcentaje de participacin consolidable parte entera	\$ -
##	118567	Porcentaje de participacin consolidable parte decimal	\$ 9,994.00
##	118224	ISR causado en exceso del impac en los 3 ejercicios anteriores	\$ -
##	118220	Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta	\$ -
##	118219	Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal reinvertida	
##	118221	Saldo actualizado de la cuenta de de capital de aportacin	\$ 603,810,943.00
##	118216	En caso de ser controlada indique el RFC de la controladora	
##	111704	Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta (cufin)	
##	111703	Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida (c	
##	111705	No provenientes de la cufin ni cufinre	
##	206000	Datos del representante legal - registro federal de contribuyen	
##	206001	Datos del representante legal - apellido paterno, materno y no	
##	113023	Efectivo en caja y depssitos en instituciones de crdito	\$ 15,909,411.00
##	113025	Inversiones en valores (excepto acciones)	\$ 3,480,742.00
##	113027	Cuentas y documentos por cobrar	\$ 317,782,150.00
##	113029	Contribuciones a favor	\$ 42,502.00
##	113033	Inventarios	
##	113035	Otros activos circulantes	
##	113036	Inversiones en acciones	
##	113038	Terrenos	
##	113039	Construcciones	
##	113040	Maquinaria y equipo	
##	113041	Mobiliario y equipo de oficina	\$ 503,588.00
##	113042	Equipo de transporte	\$ 19,638,862.00
##	113043	Otros activos fijos	\$ 1,200,298.00
##	113044	Depreciacin acumulada	\$ 4,052,090.00
##	113045	Cargos y gastos diferidos	\$ 48,550,521.00
##	113046	Amortizacin acumulada	\$ 391.00
##	113047	Suma activo	\$ 403,055,593.00
##	114001	Cuentas y documentos por pagar	\$ 3,947,627.00
##	114005	Contribuciones por pagar	\$ 24,846,865.00
##	114006	Otros pasivos	\$ 244,814,044.00
##	114007	Suma pasivo	\$ 273,608,536.00
##	115001	Capital social proveniente de aportaciones	\$ 503,845.00
##	115002	Capital social proveniente de capitalizacin	
##	115003	Reservas	
##	115004	Otras cuentas de capital	
##	115005	Aportaciones para futuros aumentos de capital	
##	115006	Utilidades acumuladas	\$ 147,598,267.00
##	118001	Utilidad del ejercicio	\$ 83,181,547.00
##	115007	Prdidas acumuladas	\$ 103,563,857.00
##	118002	Prdida del ejercicio	
##	115008	Insuficiencia o exceso en la actualizacin del capital	\$ 78,000.00
##	115009	Actualizacin del capital contable	\$ 1,805,255.00
##	115010	Suma capital contable	\$ 129,447,057.00
##	118003	Suma pasivo mas capital contable	\$ 403,055,593.00
##	117001	Sueldos y salarios	
##	117087	Honorarios pagados a personas fsicas	\$ 15,289,524.00
##	117075	Regalms y asistencia tcnica	
##	117070	Donativos otorgados	
##	117089	Uso o goce temporal de bienes pagados a personas fsicas	
##	117074	Fletes y acarreos pagados a personas fsicas	
##	117073	Contribuciones pagadas, excepto ISR, impac e IVA	
##	117071	Seguros y fianzas	\$ 1,254,339.00



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 911 -

##	117072	Pérdida por créditos incobrables	
##	117076	Viajeros y gastos de viaje	
##	117285	Combustible y lubricantes	
##	117286	Crédito al salario no disminuido de contribuciones	
##	117287	Impuesto sustitutivo del crédito al salario, efectivamente pagado	
##	117065	Aportaciones SAR, Infonavit y jubilaciones por vejez	
##	117066	Cuotas al Imss	
##	113001	Construcciones - deducción en el ejercicio	
##	113002	Construcciones - deducción inmediata en el ejercicio	
##	113003	Construcciones - adquisiciones durante el ejercicio	
##	113004	Maquinaria y equipo - deducción en el ejercicio	
##	113005	Maquinaria y equipo - deducción inmediata en el ejercicio	
##	113006	Maquinaria y equipo - adquisiciones durante el ejercicio	
##	113007	Mobiliario y equipo de oficina - deducción en el ejercicio	\$ 39,575.00
##	113008	Mobiliario y equipo de oficina - deducción inmediata en el ejercicio	
##	113009	Mobiliario y equipo de oficina - adquisiciones durante el ejercicio	\$ 217,171.00
##	113010	Equipo de transporte automotrices - deducción en el ejercicio	\$ 168,778.00
##	113011	Equipo de transporte automotrices - adquisiciones durante el ejercicio	\$ 1,194,551.00
##	113012	Equipo de transporte otros - deducción en el ejercicio	\$ 3,642,375.00
##	113013	Equipo de transporte otros - deducción inmediata en el ejercicio	
##	113014	Equipo de transporte otros - adquisiciones durante el ejercicio	\$ 7,093,853.00
##	113015	Otras inversiones en activos fijos - deducción en el ejercicio	\$ 312,320.00
##	113016	Otras inversiones en activos fijos - deducción inmediata en el ejercicio	
##	113017	Otras inversiones en activos fijos - adquisiciones durante el ejercicio	\$ 275,169.00
##	113018	Gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos	\$ 96.00
##	113019	Gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos	\$ 476,633.00
##	113020	Total - deducción en el ejercicio	\$ 4,163,144.00
##	113021	Total - deducción inmediata en el ejercicio	\$ -
##	113022	Total - adquisiciones durante el ejercicio	\$ 9,257,377.00
##	116008	Ventas y/o servicios nacionales	\$ 431,101,097.00
##	116011	Ventas y/o servicios extranjeros	
##	117014	Devoluciones, descuentos y bonificaciones	
##	116014	Ingresos netos	\$ 431,101,097.00
##	117015	Inventario inicial	
##	117018	Compras netas	
##	117025	Inventario final	
##	117026	Costo de mercancías	\$ -
##	117029	Mano de obra	
##	117175	Maquilas	
##	117032	Gastos indirectos de fabricación	
##	117033	Costo de ventas y/o servicios	\$ -
##	118004	Utilidad o pérdida bruta	\$ 431,101,097.00
##	117036	Gastos de operación	\$ 349,942,752.00
##	118005	Utilidad o pérdida de operación	\$ 81,158,345.00
##	116017	Intereses devengados a favor y ganancia cambiaria	\$ 3,155,076.00
##	117039	Intereses devengados a cargo y pérdida cambiaria	\$ 367.00
##	118006	Resultado por posición monetaria	\$ 1,575,410.00
##	118007	Otras operaciones financieras	
##	117041	Costo integral de financiamiento	\$ 1,579,299.00
##	116019	Ingresos por partidas discontinuas y extraordinarias	
##	117042	Gastos por partidas discontinuas y extraordinarias	
##	118009	Utilidad o pérdida antes de impuestos	\$ 82,737,644.00
##	117043	ISR, Impac y PTU	
##	118010	Utilidad o pérdida en participación subsidiaria	
##	118011	Efectos de reexpresión excepto resultado por posición monetaria	\$ 443,903.00
##	118012	Utilidad o pérdida neta	\$ 83,181,547.00
##	119112	Utilidad o pérdida neta	\$ 83,181,547.00
##	119111	Efectos de reexpresión	\$ 443,903.00
##	119106	Resultado por posición monetaria	\$ 1,575,410.00
##	118013	Utilidad o pérdida neta histórica	\$ 84,313,054.00
##	116020	Ingresos fiscales no contables	\$ 244,517,124.00
##	116021	Ajuste anual por inflación acumulable	
##	116023	Anticipos de clientes	\$ 244,504,512.00
##	116022	Intereses moratorios efectivamente cobrados	
##	116024	Ganancia en la enajenación de acciones o por reembolso de	
##	116025	Ganancia en la enajenación de terrenos y activo fijo	\$ 12,612.00
##	116027	Otros ingresos fiscales no contables	

1/6
9991

##	117044	Deducciones contables no fiscales	\$	5,956,584.00
##	119033	Costo de ventas	\$	-
##	117045	Depreciación y amortización contable	\$	4,160,620.00
##	117047	Gastos que no reúnen requisitos fiscales	\$	17,837.00
##	119043	ISR, Impac y PTU		
##	117048	Pérdida contable en enajenación de acciones		
##	117049	Pérdida contable en enajenación de activo fijo	\$	1,778,127.00
##	117050	Pérdida en participación subsidiaria		
##	119039	Intereses devengados que exceden del valor de mercado y m		
##	117051	Otras deducciones contables no fiscales		
##	117052	Deducciones fiscales no contables	\$	7,322,648.00
##	117053	Ajuste anual por inflación deducible	\$	2,746,298.00
##	117055	Adquisiciones netas de mercancías, materias primas, produ		
##	117056	Mano de obra directa		
##	119175	Maquilas		
##	117057	Gastos indirectos de fabricación		
##	117058	Deducción de inversiones	\$	4,163,144.00
##	119021	Estímulo fiscal por deducción inmediata de inversiones	\$	-
##	117060	Pérdida fiscal en enajenación de acciones		
##	117061	Pérdida fiscal en enajenación de terrenos y activo fijo	\$	413,206.00
##	117054	Intereses moratorios efectivamente pagados		
##	117062	Otras deducciones fiscales no contables		
##	116028	Ingresos contables no fiscales	\$	163,990,229.00
##	119117	Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no		
##	117059	Anticipos de clientes de ejercicios anteriores	\$	163,000,000.00
##	116029	Saldos a favor de impuestos y su actualización		
##	116030	Utilidad contable en enajenación de activo fijo	\$	990,220.00
##	116031	Utilidad contable en enajenación de acciones		
##	116032	Utilidad en participación subsidiaria		
##	116033	Otros ingresos contables no fiscales	\$	9.00
##	116014	Utilidad o Pérdida Fiscal	\$	163,473,885.00
##	207000	A. Datos de Identificación - Clave Única de Registro de Población		
##	208197	A. Datos de Identificación - Indique si opta por Dictaminar sus	\$	-
##	208196	A. Datos de Identificación - Indique si se Trata de la Última De	\$	2.00
##	113876	Deducción en el Ejercicio - Maquinaria y Equipo para la Gene		
##	113877	Deducción en el Ejercicio - Adaptación a Instalaciones para Pl		
##	113879	Deducción en el Ejercicio - Terrenos (Costo de Adquisición)		
##	113876	Adquisiciones Durante el Ejercicio - Maquinaria y Equipo para		
##	113878	Adquisiciones Durante el Ejercicio - Adaptación a Instalacione		
##	117290	F. Estado de Resultados - Devoluciones, Descuentos y Bonifi		
##	117291	F. Estado de Resultados - Devoluciones, Descuentos y Bonifi		
##	117292	F. Estado de Resultados - Compras Netas Nacionales		
##	117293	F. Estado de Resultados - Compras Netas de Importación		
##	117920	Datos del Inventario Base - Indique el Método para Determina	\$	-
##	117921	Datos Informativos - Monto del Inventario Inicial		
##	117922	Datos Informativos - Monto de la Mano de Obra y los Gastos		
##	117923	Opción de Acumulación de Inventarios - Indique el Método de	\$	-
##	117924	Opción de Acumulación de Inventarios - Inventario Base al 31		
##	117925	Opción de Acumulación de Inventarios - Saldo Pendiente por		
##	117926	Opción de Acumulación de Inventarios - Pérdidas Fiscales Pe		
##	117927	Opción de Acumulación de Inventarios - Diferencia de la Com		
##	117928	Opción de Acumulación de Inventarios - Valor del Inventario A		
##	117929	Opción de Acumulación de Inventarios - Porcentaje de Acumi		
##	117930	Opción de Acumulación de Inventarios - Inventario Acumulabl		
##	117931	Sistemas y Bases de Valuación - Indique la Opción para Dete	\$	-
##	117932	Sistemas y Bases de Valuación - Indique la Base de Costos U	\$	-
##	117933	Métodos de Valuación - Indique el Método de Valuación Utiliz	\$	-
##	116400	Ingresos Fiscales no Contables - Inventario Acumulable	\$	-
##	116401	Deducciones Fiscales no Contables - Costo de lo Vendido Fis		
##	117288	I. Datos de Algunas Deducciones Autorizadas - Aportaciones		
##	117289	I. Datos de Algunas Deducciones Autorizadas - Consumo en		
##	111098	K. Determinación del Impuesto Sobre la Renta - Utilidad o Pe	\$	163,473,885.00
##	111099	K. Determinación del Impuesto Sobre la Renta - Ptu Pagada e		
##	111890	K. Determinación del Impuesto Sobre la Renta - Impuesto So		
##	121050	L. Determinación del Impuesto al Activo - Promedio de las De		
##	121051	L. Determinación del Impuesto al Activo - Promedio de las De		
##	121052	L. Determinación del Impuesto al Activo - Promedio de las De		

12/16
0992



ACTORA:

TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

##	206199	Datos de identificación - Indique si esta obligado a dictaminar	\$	1.00
##	117979	Datos Informativos del Costo de Venta Fiscal - Inventario Red		
##	117980	Datos Informativos del costo de venta fiscal (para 2005 y po)		
##	117981	Costo Superior al Precio de Mercado o al de Reposición - Cos		
##	117982	Costo Superior al Precio de Mercado o al de Reposición - Tipi	\$	
##	111995	Determinación del Impuesto Sobre la Renta - Otros Estimulos		
##	209051	Numero de operacion de la Declaración Inmediata Anterior en		
##	209052	No Provenientes de la CUFIN ni CUFINRE en Acciones		
##	209053	Monto del Impuesto Pagado que no Proviene de la CUFIN ni		
##	209054	Monto del Impuesto Pagado de las Utilidades Provenientes de		
##	119275	Deducción en el Ejercicio - Equipo de Computo		
##	113879	Deducciones en el Ejercicio - Terrenos (Costo de Adquisición)		
##	119276	Deducción Inmediata en el Ejercicio - Equipo de Computo		
##	119277	Adquisiciones Durante el Ejercicio - Equipo de Computo		
##	209055	Adquisiciones Durante el Ejercicio - Terrenos (Costo de Adqui		
##	209064	Total del estímulo por Proyectos en Investigación y Desarrollo		
##	209065	Total del estímulo por Proyectos de Inversión en la Producción		
##	119278	Ventas y/o servicios Nacionales (Partes no Relacionadas)		
##	119279	Ventas y/o servicios Nacionales (Total)		
##	119280	Ventas y/o servicios Extranjeros (Partes no Relacionadas)		
##	119281	Ventas y/o servicios Extranjeros (Total)		
##	119282	Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones sobre Ventas Nac		
##	119283	Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones sobre Ventas Nac		
##	119284	Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones sobre Ventas al E		
##	119285	Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones sobre Ventas al E		
##	119286	Ingresos Netos (Partes no Relacionadas)		
##	119287	Ingresos Netos (Total)		
##	119290	Compras Netas Nacionales (Partes no Relacionadas)		
##	119291	Compras Netas Nacionales (Total)		
##	119292	Compras Netas de Importación (Partes no Relacionadas)		
##	119293	Compras Netas de Importación (Total)		
##	119298	Mano de obra (Partes no Relacionadas)		
##	119299	Mano de obra (Total)		
##	119300	Maquilas (Partes no Relacionadas)		
##	119301	Maquilas (Total)		
##	119901	Gastos Indirectos de Fabricación (Partes no Relacionadas)		
##	119902	Gastos Indirectos de Fabricación (Total)		
##	119907	Pérdida Bruta (Total)		
##	119910	Gastos de operación (Partes no Relacionadas)		
##	119911	Gastos de operación (Total)		
##	119914	Pérdida de operación (Total)		
##	119917	Intereses Devengados a Favor Nacionales (Partes no Relacio		
##	119918	Intereses Devengados a Favor Nacionales (Total)		
##	119919	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Partes Relacio		
##	119920	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Partes no Relac		
##	119921	Intereses Devengados a Favor del Extranjero (Total)		
##	119922	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Partes Relacionada		
##	119923	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Partes no Relaciona		
##	119924	Intereses Moratorios a Favor Nacionales (Total)		
##	119925	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Partes Relaciona		
##	119926	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Partes no Relaci		
##	119927	Intereses Moratorios a Favor del Extranjero (Total)		
##	209067	Ganancia Cambiaria (Partes Relacionadas)		
##	209068	Ganancia Cambiaria (Partes no Relacionadas)		
##	119928	Ganancia Cambiaria (Total)		
##	119931	Intereses Devengados a Cargo Nacionales (Partes no Relaci		
##	119932	Intereses Devengados a Cargo Nacionales (Total)		
##	119933	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Partes Relacio		
##	119934	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Partes no Relac		
##	119935	Intereses Devengados a Cargo del Extranjero (Total)		
##	119936	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Partes Relacionada		
##	119937	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Partes no Relaciona		
##	119938	Intereses Moratorios a Cargo Nacionales (Total)		
##	119939	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Partes Relaciona		
##	119940	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Partes no Relaci		
##	119941	Intereses Moratorios a Cargo del Extranjero (Total)		
##	119942	Pérdida Cambiaria (Partes Relacionadas)		

0993 5/16

995 8/10

##	195143	Erogaciones por Adquisición de Bienes
##	195144	Erogaciones por servicios Independientes
##	195145	Erogaciones por uso o Goce Temporal de Bienes
##	195146	Deducción de Inversiones (Activo Fijo)
##	195147	Contribuciones a Cargo
##	195148	Erogaciones por Aprovechamientos
##	195149	Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones, Depósitos o Antic
##	195150	Indemnizaciones por Daños y Perjuicios y Penas convenciona
##	195151	Reservas Vinculadas con los seguros de Vida o de Pensiones
##	209066	Creación o Incremento de Reservas de Riesgos Catastróficas
##	195152	Pago de Instituciones de seguros y Fianzas
##	195153	Premios Pagados en Efectivo
##	195154	Donativos
##	195155	Perdidas por Créditos Incobrables (Sistema Financiero)
##	195156	Quitas, condonaciones, Bonificaciones y Descuentos sobre C
##	195157	Monto de las Reservas Preventivas Globales
##	195158	Perdidas por Créditos Incobrables y caso Fortuito o Fuerza M
##	195159	Deducción Adicional por Inversiones
##	195160	Deducción por Cuentas y Documentos por Pagar
##	195161	Otras Deducciones Autorizadas
##	195162	Total de Deducciones Autorizadas
##	195163	Deducciones - Base Gravable
##	195164	Deducciones que Exceden a los Ingresos
##	195085	Determinación del IETU - Base Gravable
##	195086	Impuesto Causado
##	195087	Crédito Fiscal por Deducciones Mayores a los Ingresos
##	195088	Acreditamiento por sueldos y Salarios Gravados
##	195089	Acreditamiento por Aportaciones de seguridad Social
##	195090	Crédito Fiscal por Inversiones (Adquiridas de 1998 a 2007)
##	195091	Crédito Fiscal de Inventarios
##	195092	Crédito Fiscal de Deducción Inmediata (Perdidas Fiscales)
##	195094	Crédito Fiscal por Enajenaciones a Plazos
##	195167	Impuesto a Cargo (1a Diferencia)
##	195095	ISR Propio Efectivamente Pagado del Ejercicio
##	195096	ISR Propio Entregado a la Sociedad controladora
##	195168	ISR Propio por Acreditar por Distribución de Dividendos o Util
##	195097	Acreditamiento del ISR Retenido
##	195098	Acreditamiento del ISR Propio Pagado en el Extranjero
##	195169	Impuesto a Cargo (2a Diferencia)
##	195103	Acreditamiento para Empresas Maquiladoras
##	195104	Pagos Provisionales de IETU Efectivamente Pagados
##	195100	Otras Cantidades a Cargo
##	195101	Otras Cantidades a Favor
##	195102	Impuesto a Cargo del Ejercicio
##	195170	Impuesto a Favor del Ejercicio
##	195106	Total de Saldos Pendientes por Deducir Actualizado de las In
##	195107	Monto Total de Deducción Adicional por Inversiones Adquirida
##	195108	Base Determinada para Identificar el Crédito Fiscal de Inven
##	195109	Base para Identificar el Crédito Fiscal de Perdidas Fiscales po
##	195111	Parte Proporcional del IETU por las Actividades de Maquila
##	195112	Parte Proporcional del ISR Propio
##	195113	Deducción de Inversiones
##	195114	Contraprestaciones que Efectivamente se Cobren en el Perio
##	195115	Parte Proporcional del ISR Acreditable contra IETU
##	195116	Utilidad Fiscal para Pagos Provisionales en las Actividades de
##	195117	Datos Informativos de Operaciones de Maquila - IETU del Ejé
##	195118	Datos Informativos de Operaciones de Maquila - Ingresos Gra
##	195119	Datos Informativos de Operaciones de Maquila - Deducciones
##	195120	Datos Informativos de Operaciones de Maquila - ISR Propio d
##	195121	Ingreso Acumulable del Ejercicio para ISR
##	195122	Datos Informativos de Operaciones de Maquila - Deducciones
##	195123	Datos Informativos de Operaciones de Maquila - Valor del Act
##	195124	Datos Informativos de Operaciones de Maquila - Monto de los
##	195125	Utilidad Fiscal de operaciones de Maquila con Partes Relacio
##	195126	Datos Informativos de Operaciones Distintas de Maquila - iETU
##	195127	Datos Informativos de Operaciones Distintas de Maquila - Ingi
##	195128	Datos Informativos de Operaciones Distintas de Maquila - Dec

#	195129	Datos Informativos de Operaciones Distintas de Maquila - ISR
#	195130	Ingreso Acumulable del Ejercicio de ISR
#	195131	Datos Informativos de Operaciones Distintas de Maquila - De
#	195132	Datos Informativos de Operaciones Distintas de Maquila - Val
#	195133	Datos Informativos de Operaciones Distintas de Maquila - Mo
#	195134	Utilidad Fiscal de operaciones de Maquila de operaciones con
#	195189	Proporcion del IETU Correspondiente a las Actividades de Mé
#	195190	IETU del Ejercicio a Cargo
#	195191	Proporcion del IETU a Cargo por Actividades de Maquila
#	195192	Proporcion del ISR Propio del Ejercicio Correspondiente a la
#	195193	Impuesto sobre la Renta Propio del Ejercicio
#	195194	Proporcion del ISR Propio por Actividades de Maquila
#	195195	Suma del IETU a Cargo y del ISR Propio Proporcionales a las
#	195196	Utilidad Fiscal Determinada conforme al Artículo 216-Bis de la
#	195197	Utilidad Fiscal Determinada conforme al Artículo 216-Bis de la

996

De la digitalización que antecede, se desprende en la parte de interés que mediante la **Declaración normal el 23 de marzo de 2007**, la sociedad controlada ***** ** ***** ***** **** ** ***** declaró lo siguiente:

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES, por la cantidad de **\$514'783,068.00**

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIÓN, la cantidad de **\$351'309,183.00.**

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO (2006), en cantidad de **\$163'473,885.00.**

De lo anterior, se desprende que la sociedad de referencia disminuyó la cantidad correspondiente a las deducciones autorizadas, a saber:

DECLARACIÓN NORMAL PRESENTADA EL 23 DE MARZO DE 2007	DECLARACIÓN POR CORRECCIÓN FISCAL PRESENTADA EL 14 DE JULIO DE 2010
(Deducciones autorizadas) \$351'309,183.00.	(Deducciones autorizadas) <u>\$347'459,636.00.</u>

(Deducciones autorizadas declaración 2007) \$351'309,183.00.
Menos (-)
(Deducciones autorizadas declaración 2010) \$347'459,636.00.
----- (diferencia) \$3'849,547.00

(utilidad fiscal declaración 2010) \$167'323,432.00.
Menos (-)
(utilidad fiscal declaración 2007) \$163'473,885.00
----- (diferencia) \$3'849,547.00

En virtud de lo anterior, es indudable que la empresa
***** ** ***** ***** ***** controlada de la hoy demandante,
corrigió su situación fiscal, para lo cual disminuyó la cantidad de
\$3'849,547.00, por concepto de deducciones autorizadas; por tanto su utilidad
fiscal se incrementó en cantidad igual a la disminuida dando un total de
\$167'323,432.00, para el ejercicio 2006, como lo manifestó en la declaración
presentada el 14 de julio de 2010 antes digitalizada.

Por tanto, la empresa actora, omitió adicionar la cantidad de
\$3'849,547.00, por concepto de devoluciones autorizadas que disminuyó la
controlada, lo que sin lugar a dudas tuvo efectos en cuanto a la determinación
de la utilidad fiscal consolidada.

Lo anterior, sin que pase desapercibido para esta Juzgadora la
manifestación de la parte actora, en relación a que se hace del conocimiento
de este órgano Jurisdiccional que se encuentra en proceso de la presentación
de la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del
ejercicio fiscal de 2006, en donde se reconocen los efectos de la consolidación
por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la
presentación de la declaración complementaria de la controlada ***** **

***** ***** ***** ** *****

Sin embargo, del análisis realizado a los autos que integran el presente juicio contencioso administrativo, así como a los expedientes administrativos exhibidos por la demandada al haber sido ofrecidos como prueba por la demandante, no se advierte que la empresa accionante haya presentado la declaración complementaria que refiere, ante la autoridad administrativa o ante este Órgano Jurisdiccional.

Por tanto, toda vez que el argumento de la actora en relación a que está en proceso de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta complementaria del ejercicio fiscal de 2006, en donde se reconocen los efectos de la consolidación por la modificación a la utilidad fiscal consolidada con motivo de la presentación de la declaración complementaria de la controlada ***** resultan ser meras manifestaciones verbales que no satisfacen el requisito de idoneidad para demostrar los hechos que pretende, pues las mismas no se administran con otros elementos de convicción que permitan tener plena certeza de que la demandante presentó la declaración correspondiente a la sociedad controlada.

Siendo que, de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios fiscales por disposición del artículo 5 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, a la parte actora corresponde probar los hechos constitutivos de su acción y al reo (demandado) los de sus excepciones.

Por tanto, cuando en el juicio fiscal exista necesidad de aportar alguna prueba para dilucidar un punto de hecho, tocará a la parte interesada en demostrarlo gestionar la preparación y desahogo de tal medio de convicción, pues en ella recae la carga procesal, lo que no sucedió en la especie.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia Número VI.3o.A. J/38, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de septiembre de 2004, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 180515
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XX, Septiembre de 2004
Materia(s): Administrativa
Tesis: VI.3o.A. J/38
Página: 1666

PRUEBA, CARGA DE LA, EN EL JUICIO FISCAL. De conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios fiscales por disposición del artículo 5o., segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al actor corresponde probar los hechos constitutivos de su acción y al reo (demandado) los de sus excepciones. Por tanto, cuando en el juicio fiscal exista necesidad de aportar alguna prueba para dilucidar un punto de hecho, tocará a la parte interesada en demostrarlo gestionar la preparación y desahogo de tal medio de convicción, pues en ella recae la carga procesal, y no arrojarla al tribunal con el pretexto de que tiene facultades para allegarse de los datos que estime pertinentes para conocer la verdad. De otra forma, se rompería el principio de equilibrio procesal que debe observarse en todo litigio.

Revisión fiscal 101/2004. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretaria: Mercedes Ortiz Xilotl.”

(El énfasis es nuestro)

Por lo que, la parte interesada para demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su preparación y desahogo, pues en ella recae tal carga procesal, sin que sea óbice a lo anterior que el último párrafo del derogado artículo 230 del Código Fiscal de la Federación y el numeral 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevean que el Magistrado Instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento relacionado con los hechos controvertidos u ordenar la práctica de cualquier diligencia, pues la facultad de practicar diligencias para mejor proveer contenida en los citados preceptos legales, debe entenderse como la potestad del Magistrado para ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y desahogadas durante la instrucción, cuando considere que existen situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en dichas probanzas, por lo que tales ampliaciones resulten indispensables para el conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio.

De ahí que la facultad de ordenar la práctica de las referidas diligencias no entraña una obligación, sino una potestad de la que el Magistrado puede hacer uso libremente, sin llegar al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues ello contravendría los principios de equilibrio procesal e igualdad de las partes que deben observarse en todo

litigio, ya que no debe perderse de vista que en el juicio contencioso administrativo prevalece el principio de estricto derecho.

Además, si bien es cierto que conforme a los numerales indicados el Magistrado Instructor tiene la potestad de acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos o de ordenar la práctica de cualquier diligencia para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, también lo es que esa facultad no puede entenderse en el sentido de eximir a la parte actora de su obligación de exhibir las pruebas documentales que ofrezca a fin de demostrar su acción, ni de perfeccionar las aportadas deficientemente para ese mismo efecto, sino que tal facultad se refiere a que puede solicitar la exhibición de cualquier prueba considerada necesaria para la correcta resolución de la cuestión planteada.

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia Número 2a./J. 29/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de marzo de 2010, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 164989
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Marzo de 2010
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 29/2010
Página: 1035

MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE APORTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE EVENTUALMENTE AQUEL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN DEDUCIDAS. De los artículos 14, fracciones IV y V, 15, 20, fracciones II a VII, 21, fracciones I y V, 40 y 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como de los derogados numerales 209, fracciones III y VII, 214, fracción VI y 230 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que en los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado sus excepciones; esto es, la parte interesada en demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su preparación y desahogo, pues en ella recae tal carga procesal, sin que sea óbice a lo anterior que el último párrafo del derogado artículo 230 del Código Fiscal de la Federación y el

numeral 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevean que el Magistrado Instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento relacionado con los hechos controvertidos u ordenar la práctica de cualquier diligencia, pues la facultad de practicar diligencias para mejor proveer contenida en los citados preceptos legales, debe entenderse como la potestad del Magistrado para ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y desahogadas durante la instrucción, cuando considere que existen situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en dichas probanzas, por lo que tales ampliaciones resulten indispensables para el conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio. De ahí que la facultad de ordenar la práctica de las referidas diligencias no entraña una obligación, sino una potestad de la que el Magistrado puede hacer uso libremente, sin llegar al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues ello contravendría los principios de equilibrio procesal e igualdad de las partes que deben observarse en todo litigio, ya que no debe perderse de vista que en el juicio contencioso administrativo prevalece el principio de estricto derecho. Además, **si bien es cierto que conforme a los numerales indicados el Magistrado Instructor tiene la potestad de acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos o de ordenar la práctica de cualquier diligencia para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, también lo es que esa facultad no puede entenderse en el sentido de eximir a la parte actora de su obligación de exhibir las pruebas documentales que ofrezca a fin de demostrar su acción, ni de perfeccionar las aportadas deficientemente para ese mismo efecto, sino que tal facultad se refiere a que puede solicitar la exhibición de cualquier prueba considerada necesaria para la correcta resolución de la cuestión planteada.**

Tesis de jurisprudencia 29/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de febrero de dos mil diez."

(El énfasis es propio de esta Juzgadora)

En consecuencia, es de concluirse que la parte actora no demuestra con prueba fehaciente que efectivamente haya presentado la declaración complementaria que refiere, por lo que, prevalece la legalidad y validez de la resolución impugnada en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como del artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución Federal.

Aunado a lo anterior, del análisis realizado al papel de trabajo denominado "RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 IMPUESTO SOBRE LA RENTA", proporcionado por el representante legal del Contador Público de la actora, se desprende que *****

** ***** a fin de determinar su utilidad fiscal consolidable consideró respecto a las empresas ***** ** ***** y *****

** ***** las cantidades de \$1,819'992,323.00 (cantidad en la que no se considera el ingreso por concepto de inventario acumulable por



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 921 -

\$1,558'055,993.00.) y \$163'371,920.53 (cantidad en la que no se considera la disminución de las deducciones autorizadas por \$3'849,547.00), ello aplicando la proporción consolidable correspondiente.

Así en el caso, la parte actora declaró una utilidad fiscal de controladas en la última declaración presentada el 13 de agosto de 2010, la cantidad de cantidad de \$3,652'413,102.00 (cantidad que no contempla el ingreso por concepto de inventario acumulable por \$1,558'055,993.00, así como la cantidad de \$3'849,547.00, por concepto de las deducciones autorizadas, a saber:

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE DECLARACIONES DEL EJERCICIO

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2006

0442

R.F.C.:

Nombre o Denominación o Razón Social:

Tipo de Presentación: Complementaria

Fecha de Presentación: 13/08/2010

Hora de Presentación: 19:17

Número de Operación: 180D5

Folio de Recepción: 43284051

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:

|10001=|20001=19080|20002=43284051|40002=20100813|40003=1
9:17/10006
CV|10023=20070907|10033=|10034=

|60004=|800402=0|800502=0172|801102=1064140518|
900102=30
9809167|1300202=448804098|1301702=222439273|1301802=498068355|1302202=
1236391817
|1302302=598272508|1302502=3669072|1302602=3325900339|1302702=14689788
|1303002=4
48804098|1303202=0|1303402=0|1303602=0|1303802=448804098|1304002=0|130
4202=0|130
4402=0|1304602=0|1304802=0|1305102=71581398|1305402=392190972|1305702=
0|1306002=
0|1306302=0|1306602=1432458307|1307202=699399293|1307502=0|1307802=0|1
308102=0|1
308402=1353017516|1308602=396353343|1309102=-
24202735|1309402=0|1309502=-2420273
5|1309802=0|1310102=0|1400602=387753096|1401102=715122375|1401402=2944
05086|1401
502=163229|1402102=470659599|1402902=200450934|1403402=435949662|14042
02=1375555
288|1405002=0|1600202=1412027675|1600302=2738101926|1600402=101950297|
1600802=13
5672409|1600902=189223765|1601002=183061216|1601102=358911466|1601202=
201460756|
1601302=730798335|1601402=-
1071850369|1601502=23600169730|1601802=17530311920|16
01902=1405230479|1602002=404893524|1602202=137109778|1602402=30456928|
1602502=26
8113110|1602702=9344668969|1602802=4496646142|1603202=5964030883|16038
02=2960131
649|1604102=3107118532|1604302=0|1604702=17910031171|1605002=0|3100302
=323716537
7|3100402=2613977060|3101402=3652413102|3101502=2366409115|3101602=127
8995401|31
03902=626527831|3104302=626527831|3104402=181693071|3105302=315534889|

3106502=0|
3106602=133841818|3106902=4772854|3107602=0|3200102=141110906328|32002
02=2002|32
00702=130751688260|3200902=10359218068|3201102=186465925|3201402=18646
5925|32016
02=177945496|3202302=8520429|3202802=8520429|3203302=4790140559|320340
2=47901405
59|3203502=0|3203602=136320765768|3203702=125961547706|3203802=1035921
8068|41001
02=0|4100402=0|4101202=0|4101302=0|4101402=0|4102002=0|4200202=0|79006
02=0|30003
=000001000007000112188||

0443

Sello Digital:

||LDTI/AKBIKFOyeqmyhD6G5W0i63JVLHKj7buJNBWgt2Uo7+wpYjmc/LiMbrK2xSZtFP
vHzSUcvd/q
OEZmW6mzbLgQk3nllFmstBncLnlrZfl7ae3cq9R6rNwig4lzdWZxsJCgwnt0dEtvJrXMlo
M/reECNs1R
LwqA3/j46gv0I=||

Fecha y hora de emisión de este acuse: 13/08/2010 07:17:PM

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación señalados.

Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

¡Utiliza ya tu Firma Electrónica Avanzada, Tu Firm@!

Le recordamos que Ud. ya cuenta con una Firma Electrónica Avanzada que le puede facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la cual invariablemente deberá utilizar para intercambiar en forma segura información con el Servicio de Administración Tributaria.

En caso de requerir asistencia o información adicional, puede utilizar los nuevos servicios disponibles en el portal del SAT (<http://www.sat.gob.mx>), donde podrá realizar consultas o aclaraciones y también podrá actualizar sus actividades, obligaciones fiscales y régimen de tributación utilizando su Clave de Identificación Electrónica Confidencial actualizada (CIEC).

También puede llamar sin costo al 01 800 INFOSAT (46-36-728), de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas.

0444

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre la confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 923 -

33
33
SAT
Servicio de
Asesoría y
Fiscalización

Declaración del ejercicio
Personas Morales Consolidación

A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO		2015
DATOS DE LA CONTROLADORA	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	2237165377
	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	2617646132
		619519245
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU		
PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE (EJERCICIOS 2004 Y ANTERIORES)		
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		
DATOS DE LA CONTROLADORA UTILIDAD FISCAL		619519245
DATOS DE LA CONTROLADORA PÉRDIDA FISCAL		
UTILIDAD FISCAL DE CONTROLADAS		2652413192
PÉRDIDA FISCAL DE CONTROLADAS		2366409215
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONSOLIDACIÓN	CONTROLADAS	1278995401
	CONTROLADORA	
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN	SUMAN	
	RESTAN	
	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN	SUMAN
		RESTAN
POR MODIFICACIÓN EN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DE CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUMAN
		RESTAN
	PÉRDIDAS QUE PROVENGÁN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	SUMAN
		RESTAN
	DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE, SUMAN	
PÉRDIDAS QUE PROVENGÁN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	SUMAN	
	RESTAN	
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		626527831
PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADA		
	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN	SUMAN
		RESTAN
	PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CONTROLADAS Y CONTROLADORAS, SUMAN	
DESINCORPORACIÓN DE CONTROLADAS O DESCONSOLIDACIÓN	COMPARACIÓN DE CUFINES	
	COMPARACIÓN DE CUFINES REINVERTIDAS	
	COMPARACIÓN DE REGISTROS DE UFIN	
	COMPARACIÓN DE REGISTROS DE UFIN REINVERTIDA	
	DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE	
	PÉRDIDAS QUE PROVENGÁN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS	
PÉRDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO		
PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO		626527831
IMPUESTO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO		12906896
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS		
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS		
OTRAS REDUCCIONES		
ISR POR MODIFICACIÓN EN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	SUMA	
	RESTA	
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL		
OTROS ESTÍMULOS		
TOTAL DE ESTÍMULOS		
PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS	CONTROLADAS	
	CONTROLADORA	
	CONSOLIDADOS	315534885
	RETENIDO A:	CONTROLADAS
		CONTROLADORA
IMPUESTO ACREDITABLE	PAGADO EN EL EXTRANJERO	CONTROLADAS
		CONTROLADORA
	POR DIVIDENDOS O UTILIDADES	
	OTROS	
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS		
OTRAS CANTIDADES A CARGO		
OTRAS CANTIDADES A FAVOR		
DIFERENCIA A CARGO		
DIFERENCIA A FAVOR		133841811
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO		
ISR A CARGO DEL EJERCICIO		
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC		477285
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IETU		
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO		12906896
ISR PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO		
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES DE LA CONTROLADORA		
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES DE LA CONTROLADORA		

0448

Por tanto, resulta evidente que contrario a las manifestaciones de la actora, tal y como lo sostuvo la autoridad, omitió considerar los inventarios acumulables de la empresa ***** así como presentar declaración complementaria en virtud de la corrección fiscal presentada por la sociedad ***** ello a fin de que la demandante determinara correctamente la utilidad fiscal consolidable correspondiente.

Infringiendo con ello, lo señalado en los artículos 68, primer párrafo, fracción I inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en revisión y 72, fracción II y III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, ordenamiento jurídico vigente en el año en que se modificó la utilidad fiscal de su sociedad controlada.

Por otro lado, resultan infundados los argumentos de la parte actora en el sentido de que la autoridad fue omisa en informarle el derecho que tenía para corregir su situación fiscal en contravención con el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y que el hecho de que la autoridad señale que anexó copia de la carta de derechos del contribuyente, no implica que se subsane la omisión de insertar en la propia resolución su derecho para corregir su situación fiscal.

Asimismo, resulta infundado el argumento precisado en el inciso c.1) en el sentido de que resulta ilegal el oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, así como el oficio número 900 05-03-2012-54438 de 13 de septiembre de 2012; toda vez que la autoridad omitió informar a la contribuyente en la solicitud de datos y documentos, el derecho que tenía para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer dicho derecho, en contravención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

En relación con lo anterior, la autoridad demandada en su contestación de demanda, sostiene la legalidad de la orden de visita controvertida, en razón de que sí se informó a la actora el derecho que tenía para corregir su situación fiscal.

Esta Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, estima pertinente transcribir los artículos 2 fracción XII, y 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, mismos que a la letra señalan:

“Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

(...)

XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.

Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.

La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.”

“Artículo 13.- Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado.”

Del artículo 2 fracción XII en relación con el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se advierte que son derechos generales de los contribuyentes, a ser informados, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones ya que éstas se desarrollan en los plazos previstos en las leyes fiscales, en ese sentido, cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado.

Asimismo, se advierte que se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda, también se desprende que la omisión de informar al contribuyente sobre sus

derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones, no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal.

El propio artículo 2, fracción XII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, establece claramente que se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda; en ese sentido, la entrega de la mencionada carta de los derechos del contribuyente en el primer acto que implique el inicio de esas facultades es suficiente para tener por satisfecho el deber de informar al contribuyente sobre el mencionado derecho, siendo innecesario, además, que al momento de notificársele el oficio del requerimiento de información, la autoridad le dé a conocer el mencionado derecho expresamente mediante una redacción específica.

A lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 23/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIX, del mes de marzo de 2009, misma que a la letra señala:

“

La obligación de las autoridades fiscales, al ejercer sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, de informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer tal prerrogativa, prevista en el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, debe interpretarse en concordancia con el artículo 2o., fracción XII, de la ley citada, en el sentido de que se tendrá por informado al contribuyente cuando se le entregue la Carta de los Derechos del Contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. Ello es así, porque ambos preceptos están referidos al ejercicio de las facultades de comprobación de las obligaciones fiscales por parte de las autoridades en la materia, razón por la que la entrega de la mencionada carta en el primer acto que implique el inicio de esas facultades es suficiente para tener por satisfecho el deber de informar al contribuyente sobre el mencionado derecho, siendo innecesario, además, que al momento de notificársele la orden de visita o en el acta parcial de inicio, la autoridad le dé a conocer el mencionado derecho expresamente mediante una redacción específica.

Contradicción de tesis 203/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 25 de febrero de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez.

Tesis de jurisprudencia 23/2009. Aprobada por la Segunda Sala de



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 927 -

este Alto tribunal, en sesión privada del once de marzo de dos mil nueve.

Ahora, del análisis realizado a las constancias de notificación del oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, a través del cual se solicitaron diversos informes, datos y documentos a la actora, se desprende, se observa lo siguiente:



Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.



DATOS GENERALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO	
2011, Año del Turismo en México	
R.F.C.:	
CONTRIBUYENTE:	
DOMICILIO FISCAL:	
COLONIA:	
LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA:	
OFICIO: 900-05-2011-385	DE FECHA: 21 DE JUNIO DE 2011.
ACTA DE NOTIFICACIÓN	
Siendo las <u>11:00</u> horas del <u>21</u> de junio de 2011, el C. Mario Salinas Pérez, Notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, D.F., de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, lo cual se acredita con constancia de identificación contenida en el oficio 900-05-2011-50 del 11 de febrero de 2011, con vigencia del 11 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, emitida por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en: <u>[REDACTED]</u> entre las calles de: <u>[REDACTED]</u> inmueble que cuenta con las siguientes características: <u>[REDACTED]</u> y cerciorándose que este fuese el domicilio fiscal del contribuyente a notificar, por coincidir con el señalado en el oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011 y con el Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, que contiene los datos de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, y por haberse preguntado a la persona con la que se atiende la diligencia, quien dijo llamarse <u>[REDACTED]</u> misma que se identifica con: <u>CARDENAL PARA VOTAR EXPEDIDO POR EL IFE Falta</u> que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en: <u>[REDACTED]</u> y haber contestado esta última, que el domicilio es el correcto, se requirió la presencia del C. REPRESENTANTE LEGAL DE <u>[REDACTED]</u> y preguntado si éste se encontraba presente, (el) o (la) C. <u>[REDACTED]</u> contestó de manera expresa que el C. Representante Legal de <u>[REDACTED]</u> no se encontraba presente, por lo tanto no podía atender esta diligencia y al no haber atendido el citatorio del <u>27 DE JUNIO DE 2011</u> que se le dejó con (el) o (la) C. <u>[REDACTED]</u> y ante su ausencia, en esta fecha se notifica a (el) o (la) C. <u>[REDACTED]</u> en su carácter de tercero, con cargo de <u>TERCERO</u> (el) o (la) cual se identificó con: <u>CARDENAL PARA VOTAR EXPEDIDO POR EL IFE Falta</u> quien se encontraba en el interior del domicilio y que tiene relación con el Contribuyente de <u>TERCERA</u> cuya media filiación es: estatura aprox. <u>[REDACTED]</u> complexión <u>[REDACTED]</u> tez color <u>[REDACTED]</u> cabello <u>[REDACTED]</u> ojos <u>[REDACTED]</u> edad aprox. <u>[REDACTED]</u> señalando además que se encontraba en el lugar en virtud de que <u>ESTA CUMPLE CON SU HORARIO DE TRABAJO</u> el oficio 900-05-2011-385 del 21 de junio de 2011, firmado por el Lic. Edgar López Hicks, Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, mediante el que se le requiere que presente la información y documentación que se indica, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.	
Continúa en hoja 2...	



Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

0077 0032

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FISCALÍA FEDERAL

SHCP

0033

Hoja 2.

Con fundamento en los artículos 134, primer párrafo, fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación vigente; 1, 2, 3, 4 y 7, primer párrafo, fracciones VII, XII y XVIII, 8, primer párrafo, fracción III y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1º de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracciones XXXVII, LII y penúltimo párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracción IX, Apartado B, fracción II; quinto párrafo en la parte que establece: "La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que adelante se señalan." y sexto párrafo, numeral 5, correspondiente al "Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente", y 21, primer párrafo, Apartado E, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, cuya vigencia inició el 23 de diciembre de 2007, conforme al Artículo Primero Transitorio del mismo Decreto, modificado por Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2010, en vigor a partir del 30 de abril de 2010, según lo dispone el Artículo Primero Transitorio; y conforme a lo dispuesto por el artículo 135 del mencionado Código, se le entrega el original con firma autógrafa del oficio antes mencionado, así como copia de la presente acta y en cumplimiento al artículo 2, primer párrafo, fracción XII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente vigente, en este mismo acto se le entrega un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado vigente, la cual contiene sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley antes citada.

NOTIFICADO

Previo lectura del presente documento y enterado de su contenido, asiento de puño y letra, mi nombre y firma a los 28 días del mes de junio de 2011

(NOMBRE Y FIRMA)

R.F.C.: [REDACTED]

NOTIFICADOR

C. Mario Samiás Pérez.

R.F.C.: SAPM670213

De lo anterior, se observa que la autoridad demandada en cumplimiento al artículo 2, primer párrafo, fracción XII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente Auditado vigente entregó un ejemplar de la Carta de Derechos del Contribuyente, señalando que la misma contiene sus derechos y obligaciones establecidos en la citada Ley.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 929 -

De ahí, que la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, efectivamente fue entregada a la demandante, tal y como lo circunstanció el notificador en el acta de notificación antes digitalizada.

Hecho que la C. ***** en su calidad de tercero de la contribuyente actora, asentó en el oficio que se notificó, señalando que "previa lectura e identificación del notificador, recibí original del presente oficio, asimismo un ejemplar de la carta de derechos del contribuyente auditado vigente, en mi carácter de tercero *****

***** 28/junio/2011. Rubrica", a saber:



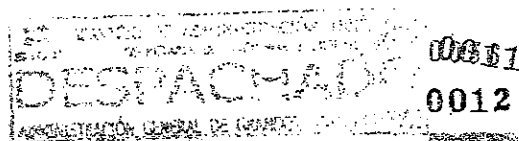
Administración General de Grandes Contribuyentes.
Administración Central de Fiscalización a Empresas
que Consolidan Fiscalmente.

ENTREGA PERSONAL

900-05-2011-385

GSD9400235/11

ASUNTO: Se solicitan los informes, datos y documentos que se indican.



0011
0012



Previo lectura e identificación
del notificador, recibí original
del presente oficio, así como
un ejemplar de la carta de
los derechos del contribuyente
auditado vigente en mi carácter
de tercero *****
28/junio/2011

México, D.F., 21 de junio de 2011.

"2011, Año del Turismo en México".

Esta Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, adscrita a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, autoridad competente para emitir la presente en virtud de que la contribuyente es una sociedad controladora que cuenta con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, según oficio número 361-I-B-3-5334 de fecha 15 de abril de 1985, en términos de lo dispuesto por el artículo 57-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada el 30 de diciembre de 1980, en vigor a partir del 1 de enero de 1981, vigente en 1985 y en relación con los artículos 64 y Segundo Transitorio, fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, publicada el 1 de enero de 2002, vigente a partir del mismo día de su publicación, efectuó la revisión del dictamen fiscal que le fue formulado por el Contador Público ***** con número de registro ***** respecto a sus Estados Financieros por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, en términos de lo dispuesto por los artículos 42, primer párrafo, fracción IV y 52-A, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación, mediante oficio citatorio número 900 05-2010-2149 de fecha 1 de julio de 2010 y del oficio de solicitud de información y documentación al citado profesionista con número 900-05-01-2011-10323 de fecha 3 de mayo de 2011 y con relación a las contribuciones federales de las que es sujeto directo, en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Activo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, primer párrafo, fracciones VII, XII y XVIII, 8, primer párrafo, fracción III y Tercero Transitorio, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009, vigentes a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso e) y tercer párrafo, 9, primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, 20, primer párrafo, Apartado A, fracciones IX y X, y

Página 1 de 19

En ese orden de ideas, toda vez que en el caso que nos ocupa se tiene que la autoridad demandada cumplió con su obligación de informarle a la contribuyente el derecho que le asiste para corregir su situación fiscal y los beneficios derivados de su ejercicio, a través de la constancia de notificación correspondiente al oficio número 900-05-2011-385 de fecha 21 de junio de 2011, tal y como quedó precisado en líneas anteriores, resulta innecesario que dicha cuestión se haya tenido que señalar en el diverso oficio número 900 05-03-2012-54438 del 13 de septiembre de 2012, como lo pretende lo actora.

Por tanto, al momento de notificarle el oficio de requerimiento de información de fecha 21 de junio de 2011, resulta inconcuso que la autoridad demandada sí le dio a conocer la carta de derechos que contiene sus derechos y obligaciones, de ahí que se cumplieron con los artículos 2 fracción XII y 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, por ende, resulta **infundado** su argumento, pues se insiste, la obligación de las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación, respecto a los derechos del contribuyente, de informar el derecho que le asiste a aquél de corregir su situación fiscal y los beneficios derivados de su ejercicio, a que alude el artículo 13 de la ley federal relativa, se cumple cuando se le entrega la carta de los derechos del contribuyente y así se asienta en la actuación correspondiente para desvirtuar la legalidad de los actos controvertidos, sin que sea necesario que la autoridad le dé a conocer el mencionado derecho expresamente mediante una redacción específica.

En consecuencia, a juicio de esta Juzgadora, prevalece la legalidad de la resolución impugnada en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al estar debidamente fundadas y motivadas de conformidad con los artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y le de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es de señalarse que de la adminiculación que realiza esta Juzgadora de las manifestaciones de las partes, las pruebas ofrecidas por las partes y los dictámenes periciales, se concluye lo siguiente:

1.- Derivado de la fusión de las empresas *****

***** ** ***** ** y ***** ** ***** ***** ** ***** a la



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 931 -

diversa controlada ***** el 18 de octubre de 2007, se actualiza la figura de desincorporación en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007.

2.- En virtud de la desincorporación de las sociedades fusionadas ***** y ***** procede la adición de las pérdidas fiscales de las citadas empresas, de ejercicios anteriores a que tenga derecho al momento de la desincorporación, para efecto de que la controladora determine el resultado fiscal consolidado.

3.- Existe cosa Juzgada, respecto al argumento de la parte actora, en cuanto a que procede adicionar a su utilidad fiscal los inventarios acumulables con los que contaba hasta el 31 de diciembre de 2004, como consecuencia de la sentencia dictada el 1° de marzo de 2011, en el el juicio fiscal 33900/07-17-05-1 y confirmada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 17 de febrero de 2012, al resolver el juicio de amparo D.A. 408/2011.

4.- En términos del Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, el inventario acumulable de la sociedad ***** forma parte de su utilidad fiscal, al tratarse de un concepto que busca nulificar el beneficio de una doble deducción en la adquisición de mercancías, por lo que dicho inventario acumulable debe ser considerado para efectos de la determinación del resultado fiscal consolidado.

5.- Con la declaración complementaria presentada por ***** el 14 de mayo de 2013, la propia actora reconoce que no tomó en consideración el inventario acumulable en cantidad de \$1,559'028,827.00, para efecto de determinar su utilidad fiscal consolidada, siendo que ya se había resuelto mediante sentencia de fecha 1° de marzo de 2011 por la Quinta Sala Regional Metropolitana, de este Tribunal, que al haber optado por disminuirlos primero tenía que sumarlos, al ser ésta la condición prevista en la Ley de la materia.

6.- La sociedad controladora hoy demandante, no acredita que haya presentado la declaración correspondiente, a través de la cual, haya adicionado en el resultado fiscal consolidado la cantidad de \$3'849,547.00, como consecuencia de la modificación a la utilidad fiscal correspondiente a su sociedad controlada ***** ** ***** correspondiente al ejercicio 2006 de \$163'473,885.00 a \$167'323,432.00, manifestada en declaración anual por corrección fiscal presentada el 14 de julio de 2010.

7.- Sí se informó a la demandante el derecho que tenía para corregir su situación fiscal conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2º y 48, fracción I, inciso a), 49, 50, 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los numerales 14, fracción I y XII, así como el diverso 23, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- La parte actora **no acreditó** su pretensión, en consecuencia.

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, así como de la originalmente recurrida, descritas en el Resultando 1º del presente fallo, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), en sesión de 6 de octubre de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor de los Magistrados Carlos Chaurand Arzate, Juan Manuel Jiménez Illescas, Julián Alfonso Olivas Ugalde, Rafael Anzures Uribe y Nora Elizabeth Urby Genel.

Fue ponente en este asunto el Magistrado Rafael Anzures Uribe, cuya ponencia se aprobó.



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE No.
12140/15-17-11-5/1361/16-S1-04-04.

ACTORA:

- 933 -

Se elaboró el presente engrose el 10 de octubre de 2016, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III y 48 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007; en términos de lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2016; así como el sexto párrafo del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016, firma la Magistrada Doctora Nora Elizabeth Urby Genel, Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, ante la C. Lic. María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos quien da fe.

RAU/JAAC/mhj*aahc*cmg

MAGISTRADA DRA. NORA ELIZABETH URBY GENEL.
Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (antes Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa).

LICENCIADA MARÍA DEL CONSUELO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ.
Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (antes
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa).

“La Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Trigésimo Octavo, fracciones I y II y Cuadragésimo de los

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia, nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes y número de expediente en el que se visualiza el número de registro federal de contribuyentes de la parte actora; nombre de una persona moral; nombre, registro federal de contribuyentes, número de credencial para votar y firma del representante legal de la demandante; nombre, número de credencial para votar, número de folio, domicilio, media filiación, registro federal de contribuyentes, número de licencia para conducir y firma de una persona física con carácter de tercero de parte de la contribuyente; nombre de presidente y de secretario que constituyen la sociedad con la parte actora; nombre y registro de un contador público registrado; nombre, número de folio de credencia para votar, clave de elector, año de registro y firma del representante del contador público registrado; nombre y registro federal de contribuyentes de sociedades controladas; nombre y número de credencial para votar y número de folio de un representante legal de una las personas morales; nombre y firma del perito de la demandante; nombre, número de cédula profesional y firma de los peritos de la autoridad demandada, información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente."